



INSTITUTA DE LA JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

Es una ley de la inteligencia humana que desde el momento en que se obtiene un gran número de verdades, el principio de clasificación se presenta a ordenarlas.

Hugh Miller.

POR EL

DR. J. J. HALL

(AROGADO)

Comprende los tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 3ª Serie de la Jurisprudencia Civil
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 4ª Serie de la misma

	BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
TOMO	N.º PRIMERA ORDEN	20.134
	UBICACIÓN	556

BUENOS AIRES

IMPRENTA EUROPEA, MORENO Y DEFENSA

1895





A

Abandono—Véase: *Divorcio*, número 10.

1. **Abogado**—Sus honorarios se prescriben á los dos años de terminado el juicio, y el término corre aún cuando con posterioridad haya patrocinado á la misma persona en otros asuntos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Ser. 3^a.

2. **Abogado**—Patrocinante, puede ser fiador del arraigo del juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 4^a.

3. **Abogado**—Y procurador, carecen de personería para apelar personalmente de la regulación de honorarios contenida en una sentencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 377, Ser. 4^a.

4. **Abogado**—Siendo la suspensión del ejercicio duran-

1—El art. 4032 del Cód. Civ. en su inc. 1^o, dice que la prescripción empieza á correr desde que feneció *el pleito*, lo que demuestra el espíritu de la ley que quiere que la prescripción se opere en cada caso particular, sin involucrar los servicios prestados en otros juicios.

2—Es facultad exclusiva del Juez apreciar la calidad de la fianza que se ofrece para juzgar del grado de responsabilidad del fiador propuesto —art. 454 del Cód. de Proc.

3—Por que no les afecta dicha regulación, por no ser parte en el juicio. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto, como puede verse en el tom. 4^o de la Inst.

4—El delito cometido por el abogado consistió en haber enmendado fechas y firmado escritos ya presentados sin firma de letrado. Estos actos los consumó mientras tuvo en su poder los autos para alegar



te un término dado, la más grave de las correcciones que pueden aplicarse al abogado, solo puede serlo por circunstancias muy graves.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 326, Ser. 4ª.

5. **Abogado**—El derecho de recusación es personal del litigante: no puede hacerse extensivo al abogado patrocinante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4ª.

6. **Abogado**—La condenación en costas impuesta al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Ser. 4ª.

7. **Abogado**—Tiene derecho para cobrar los servicios extrajudiciales que hubiese prestado en el ejercicio de su profesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

8. **Abogado**—Los honorarios de abogado devengados

de bien probado. La Cámara consideró que estos delitos no eran graves, y que por consiguiente la pena de suspensión era muy severa, reformándola y aplicando la multa de 100 nacionales. Es muy benigna la Cámara con los abogados que no saben sostener su dignidad, pero es dura é injusta con los letrados que ejercen con altura, su profesión y que no se doblegan ante la autoridad suprema de su voluntad que no es la ley. La pena de suspensión es la más grave, porque está en el último grado establecido por el art. 53 del Cód. de Proc. Si en algún caso debió imponerse la pena de suspensión es en este.

5—La causal de la recusación fué la enemistad con el abogado patrocinante. No se hizo lugar á la recusación: 1º porque al formularla, no se ofreció prueba para su comprobación; y 2º porque el derecho de recusar no alcanza al abogado. El art. 368, en su inc. 11, resuelve el caso con toda precisión. Está de acuerdo con la jurisprudencia establecida.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Recusación*, núm. 2.

6—La condenación en costas no crea á favor del abogado vencedor, ningún derecho contra el vencido: su derecho se circunscribe á cobrar de su patrocinado el honorario devengado. La sentencia solo crea relaciones de derecho entre las partes litigantes.

7—De acuerdo con lo que establece el art. 1627 del Cód. Civ., determine los servicios determinarse por árbitros.

8—Véase nota precedente.



extrajudicialmente deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4^a.

9. **Abogado**—La imposibilidad de concurrir á la absolución de posiciones el abogado director, es causal para fijar nuevo día para su presentación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 230, Ser. 4^a.

10. **Abogado**—Defensor de los que se consideran con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios haciéndolos efectivos en la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

11. **Abogado**—El abogado del peticionante de la herencia cuya acción ha sido rechazada, carece de derecho para cobrar honorarios á la testamentaria.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 84, Ser. 4^a.

12. **Abogado**—La enemistad del Juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4^a.

13. **Abogado**—La amistad con el abogado, no es causa

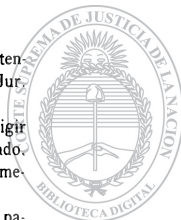
9—La parte que debió absolver las posiciones pidió se diera por decaído el derecho de presentarlas, á lo que el Juez proveyó de conformidad por no considerar como causal justa la alegada: la Cámara revocó la resolución, fundándose en el art. 128, inc. 2º. por considerar causal bastante la espresada en el sumario.

10—La cuestión versó sobre mejor derecho á una capellanía, habiendo el abogado que pretendió cobrar sus honorarios, patrocinado á la parte vencida. El abogado no puede pretender que el vencedor pague sus honorarios, y mucho menos que la finca sea responsable de ellos.

11—Porque si el peticionante es vencido es por carecer de derecho á los bienes hereditarios, no pudiendo exigir el abogado que se pague sus honorarios con bienes que no son de su cliente. El sumario está de acuerdo con otras resoluciones, cómo puede verse en el tom. 2º, página 241, y tom. 8º, págs. 486 y 238 de la 1ª Ser. de la Jur. Civ.

12—Véase el núm. 5.

13—Véase el número precedente --No siendo procedente la recusa-



de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4ª.

14. **Abogado**—Patrocinante, tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente á su patrocinado, con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4ª.

15. **Abogado**—Y procurador, carecen de personería para reclamar el pago de sus honorarios en caso de condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 4ª.

Abogado—Véase: *Enemistar*, núm. 1—*Escusación*, número 2—*Honorarios*, núms. 15 y 18—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 14—*Amistad*, núm. 1.

1. **Abogados**—Instrucciones en la matrícula durante el mes de Marzo de 1890—Jur. Civ., tom. 5, pág. 258, Ser. 3ª; Junio de 1890—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 3ª;

ción y fundándose la nulidad de la sentencia en esta causal, la nulidad no existe.

14.—Un abogado se presentó cobrando honorarios devengados: el patrocinado dijo que no tenía por qué abonarlos, pues el honorario fué devengado en actuaciones ejecutadas en beneficio de tercero, y que era éste quien debía abonarlos, debiendo tenerse presente que los servicios profesionales no fueron requeridos por él. La acción que nace de estos actos es directa contra el patrocinado, y si con ellos se beneficia á un tercero, es cuestión á resolverse entre el patrocinado y el tercero, pero en manera alguna entre éste y el patrocinante. Se dijo además que cuando el escrito fué firmado por el interesado, no llevaba firma de abogado. Este no es argumento, porque es práctica constar te que el abogado firme el escrito después de la parte ó antes. Ninguna influencia puede tener respecto del derecho á cobrar los honorarios el hecho de firmar primero el abogado y después la parte ó viceversa. El intermediario que ha buscado el abogado, nada tiene que ver en este caso con los honorarios devengados.

15.—Es jurisprudencia constante establecida por la Cámara.—Véase: *Inst.*, tom. 4º, verb. *Honorarios*, núm. 7; tom. 1º, verb. *Abogado*, número 5.



Junio de 1891—Jur. Civ., tom. 4, pág. 267, Ser. 4^a; Setiembre de 1891—Jur. Civ., tom. 7, pág. 80, Ser. 4^a; Noviembre de 1891—Jur. Civ., tom. 9, pág. 47; Enero de 1892—Jur. Civ., tom. 9, pág. 152; Febrero de 1892—Jur. Civ., tom. 9, pág. 275; Marzo de 1892—Jur. Civ., tom. 10, pág. 122, Ser. 4^a.

2. Abogados—Acuerdo fijando la fórmula del juramento que deben prestar ante la Excma. Cámara de lo Civil.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 265, Ser. 4^a.

1^a. Absolución—Del acusado en el juicio criminal, hace responsable al acusador, por los daños y perjuicios que le hubiese irrogado la querella.—Jur. Civ., tom. 6, página 269, Ser. 3^a.

Absolución—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12—*Acción civil*, núm. 1.

Absolución de posiciones—Véase: *Domicilio*, núm. 2—*Alegato*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 32, 34 y 35—*Audiencia*, núm. 2.

Absolución del acusado—Véase: *Daños y perjuicios*, número 12 y 17—*Acto ilícito*, núms. 8 y 10.

Absolución del demandado—Véase: *Pruebas del actor*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 45—*Falsedad*, núm. 7—*Costas*, núm. 49.

Absolvente—Véase: *Posiciones*, núms. 7 y 38—*Confesión*, núm. 3—*Domicilio*, núm. 12—*Rebeldía*, núm. 19—*Audiencia*, núm. 1.

1^b. Abuela—La tutela de los menores corresponde a

2—La fórmula dice: «¿Jurais por Dios y por la Patria desempeñar lealmente la profesión de abogado guardando la Constitución y las Leyes de la Nación?—Si así no lo hicieréis, Dios y la Patria os lo demanden.»

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 39.

1^b—Art. 391 del Cód. Civ.

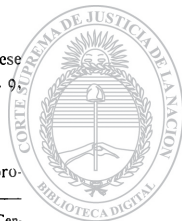
éstá, y solo por causas graves puede ser privada de ese derecho, á juicio de los Tribunales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Abuelos—Véase: *Hijo natural*, núm. 3.

Accesorio—Véase: *Depósito de muebles*, núm. 1.

1. **Accidente**—La responsabilidad de la empresa pro-

1—El actor había tomado pasaje para Córdoba en la Estación Central de esta Capital. El tren en que tomó pasaje fué el del Rosario, debiendo seguir viage desde aquella ciudad hasta Córdoba en el Ferrocarril Central Argentino en combinación. Al llegar el tren á la Estación del Rosario tuvo lugar un choque con un vagón del Ferrocarril Central Argentino del que resultó el actor con heridas graves. Este imputaba la culpa á la empresa del Ferrocarril del Rosario, habiéndose producido por culpa ó negligencia de sus empleados, pues la vía debió estar completamente libre para el paso del tren. La responsabilidad de la empresa procede de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1070, 1108, 1109 y 1113 del Cód. Civ. y 53 de la Ley Nac. de ferrocarriles. La empresa dijo que era efectivamente cierto el accidente que motivaba la demanda, pero que él tuvo lugar en la línea del Ferrocarril Central Argentino en su Estación del Rosario por hechos en que la empresa demandada nada tiene que ver ni ha tenido participación de ninguna clase: Que la vía en que tuvo lugar el accidente depende exclusivamente del Central Argentino, y que aunque se tratara de una vía de tráfico común, la ley, doctrina y jurisprudencia han resuelto que desde que un tren está colocado en ella, queda bajo la responsabilidad única de la empresa que deba remolcarlo ó descargarlo. Se ve que toda la defensa de la empresa demandada se hace consistir en que el hecho tuvo lugar en la vía del F. C. C. Arg. en la estación de esta empresa en el Rosario, afirmando que la vía, el convoy y todos los conductores dependían exclusivamente de ésta. Tal extremo no se comprobó por quien lo alegaba. La presunción legal está en contra: porque si el damnificado tomó en la Estación Central pasaje hasta Córdoba en el Ferrocarril del Rosario en combinación con el C. Arg., las obligaciones del primero para con el pasajero no cesan hasta que éste llegue al Rosario y desciera del tren para tomar el siguiente de combinación. Constaba de autos que el actor fué herido en un coche del ferrocarril que tomó en esta Capital, siendo dirigido el convoy por maquinistas y vigilado por guardas y empleados de la misma empresa. Si ese tren





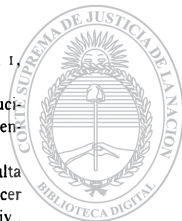
pietaria del tren que sufre el accidente es directa hacia el damnificado, sin perjuicio de su derecho á repetir contra la empresa culpable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61. Ser. 4^a.

Accidente—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 46, 100, 101, 103, 105 y 107—*Víctima*, núm. 2—*Acto ilícito*, número 6—*Arto de administración*, núm. 1.

1. **Acción**—Cuando el demandante no justifica su ac-

al llegar al Rosario ocupaba una vía de otro ferrocarril y por obstáculos en ella encontrados se produjo el hecho, no por eso cesa su responsabilidad. No debió entrar en esa vía sin tomar las precauciones que requería la seguridad de la vida de los pasajeros que conducía: cualesquiera que sean los arreglos entre esas empresas, la responsabilidad es de aquella que contrató con el pasajero, y mucho más cuando el pasajero se encontraba en el mismo coche de la empresa. El mismo demandado lo reconoció así en su contestación cuando dijo que «desde el momento en que un tren ó vehículo está colocado en la vía, aunque sea común, quedará bajo la responsabilidad única de la empresa que debe remolcarlo ó descargarlo.» En el caso que nos ocupa el tren estaba en movimiento por cuenta del ferrocarril al Rosario, remolcado por sus máquinas, dirigido y vigilado por sus empleados; de donde resulta que es esa empresa la única responsable para con el damnificado. Puede que haya habido omisión ó descuido asimismo de parte del Central, pero eso puede originar cuestiones entre ambas empresas, lo que en nada perjudica ni obsta al derecho del lesionado, que persigue del culpable inmediato las indemnizaciones que la ley le acuerda.

1.—Art. 216 del Cód. de Proc.; Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a, y 8, tit. 22, de la misma Part. La Ley 1^a dice así: «E naturalmente pertenece la prueba al demandador, quando la otra parte negare la demanda. Ca si non lo prouasse, *deuen dar por quito al demandado*, de aquella cosa que non fue prouada conrra el: e non es tenuta la parte de prouar lo que niega, etc.» La ley 8^a citada más arriba, dice: «E por ende dezimos, que los que en esta manera fazen demandas, ó se defienden contra otro, non auiendo derecha razon por que lo deuen fazer, que non tan solamente deue el luagador dar por vencido en su pleyto en el juyzio de la demanda, al que lo fiziere, mas aun lo deue condenar en las costas.»



ción, el demandado debe ser absuelto—Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 3ª.

2. **Acción**—Si demandante y demandado la han deducido igual ante distintos jueces, debe conocer el que entendió primero.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 30, Ser. 4ª.

3. **Acción**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4ª.

Acción—Véase: *Costas*, núms. 7, 24 y 39—*Mandato*, núm. 1—*Albacea*, núm. 2—*Costas*, núm. 8 y 16—*Cláusulas*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 14, 40, 42, 52 y 58—*Error de hecho*, núm. 2—*Fiador*, núm. 1—*Funcionarios públicos*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 7—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Prueba preconstituida*, núm. 1—*Carta de crédito*, núm. 2—*Poseción*, núm. 5—*Uso regular*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 6 y 22—*Derecho de petición*, núm. 2—*Escepción de falta de personería*, núms. 2, 14 y 15—*Divorcio*, núms. 4 y 5—*Arbitros*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núm. 2—*Demandante*, núm. 1—*Obligación de hacer*, número 7—*Posiciones*, núms. 1 y 2—*Acusación calumniosa*, núm. 1—*Plazo*, núm. 4—*Sentencia*, núm. 7—*Cuestiones*, núm. 2—*Testamento*, núm. 5—*Contrato de compraventa*,

3—Abonada una multa por una de las partes, solicita reintegración de lo que ha pagado por la otra. Aun dado el caso de que la suma que se quiere repetir no fuese de la competencia del Juzgado, éste, no obstante, tiene jurisdicción para entender en la acción, porque en primer lugar los jueces para exigir el pago de toda la multa jamás se fijan en esta circunstancia, y no sería justo que la parte diligente en el pago esté en peor condición que la parte remisa; y en segundo lugar, la acción es un incidente de lo principal, pues se trata de cobrar del otro litigante la suma que le corresponde abonar por una infracción en la confección de un documento que es base ó causa del litigio.



núm. 18—*Nulidad de la sentencia*, núm. 13—*Muebles embargados*, núm. 1—*Prescripción interrumpida*, núm. 3.—*Abogado*, núms. 11, 14 y 15—*Escritura de compromiso*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 17.

1^a. **Acción civil**—La falta de condenación en costas, en la acusación criminal, y de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absoluta.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3^a.

Acción civil—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 35—*Acción criminal*, núm. 1.

1^b. **Acción criminal**—Debe ser resuelta antes que la civil por daños y perjuicios, si antes fué iniciada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3^a.

Acción deducida—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 5.

Acción de filiación natural—Véase: *Filiación natural*, números 6 y 12.

Acción de jactancia—Véase: *Jactancia*, núms. 2 y 3.

Acción de los menores—Véase: *Rendición de cuentas*, número 7.

Acción de nulidad—Véase: *Nulidad*, núms. 1 y 10—*Escritura*, núm. 2—*Acto jurídico*, núms. 1 y 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núms. 4, 5 y 6.

1^c. **Acción determinada**—La iniciación de un juicio sin

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 37.

1^b—Se trataba de la indemnización del daño causado por un delito, en cuyo caso si la acción criminal precede á la acción civil, no puede haber condenación en el juicio civil antes de la condenación en el juicio criminal—art. 1101, Cód. Civ.

1^c—Las actuaciones anteriores no constituyeron ni una acción real ni personal, no pudiendo el escrito de iniciación considerarse como una verdadera demanda, ni por su forma, ni por las peticiones en él contenidas. La interrupción de la prescripción, no puede operarse en estas condiciones, desde que la ley exige para ello que la interpelación



deducir acción determinada, no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción.—Jur. Civ., tom 9, pág. 180, Ser. 4^a.

Acción directa—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 2.

1^a. **Acción ejecutiva**—No procede contra el administrador de la testamentaria sin previo juicio de rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 3^a.

2. **Acción ejecutiva**—No procede sin la presentación del título en que se funda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 324, Ser. 4^a.

3. **Acción ejecutiva**—Solo puede iniciarla el que justifica su derecho á exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 4^a.

Acción ejecutiva— Véase: *Excepción de falta de persona*, núm. 12.

Acción en forma—Véase: *Seña*, núm. 6.

Acción judicial—Véase: *Nulidad del desistimiento*, número 1.

1^b. **Acción pauliana**—Para que el acreedor tenga dere-

revista los caracteres de una demanda, aunque sea llevada ante Juez incompetente, y aunque sea nula por defectos de forma ó por incapacidad del demandante—art. 3186, Cód. Civ.

1^a—No habiendo precedido la rendición de cuentas, se ignora á cuánto ascienden los fondos adeudados, y no habiendo cantidad líquida no puede procederse ejecutivamente—art. 464 del Cód. de Proc.

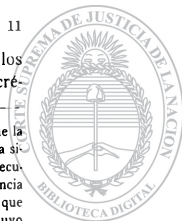
2.—El art. 471 del Cód de Proc. prescribe al Juez la obligación de examinar cuidadosamente el documento con que se deduce la acción. No es posible cumplir con esta prescripción si no se acompaña el título.

3—Para exigir el cumplimiento de una obligación es necesario que se compruebe el vínculo de derecho que une á actor y ejecutado, pues de otro modo carecería de acción para iniciar la ejecución.

1^b—Este caso fué resuelto por mayoría de tres votos contra dos, y ha dado una solución, en cuanto á la simulación se refiere, manifiestamente equivocada. Deducida una tercera, el ejecutante opuso al título

cho de deducir la acción pauliana ó la de simulación de los actos del deudor, es requisito indispensable que su cre-

en que fundaba su dominio el tercerista, estas dos defensas: 1ª que la escritura exhibida por el tercerista era simulada; 2ª además de la simulación, y subsidiariamente, la nulidad del acto por haber sido ejecutado en fraude de los acreedores. La sentencia de primera instancia declaró simulada la venta hecha por el ejecutado al tercerista en que éste fundaba su dominio. Apelada la sentencia, el tercerista sostuvo que el ejecutante carecía de acción para demandar la nulidad de la escritura por no haber sido acreedor del ejecutado en la época del otorgamiento de la misma. El razonamiento de la mayoría es el siguiente: la simulación de un acto jurídico no es reprobada por la ley cuando á nadie perjudica ni tiene un fin ilícito—Cód. Civ., art. 957;—el art. 1047 del mismo Código dispone que pueden alegar la nulidad todos los que tengan interés en hacerlo, y, en concepto de la ley, ese interés han debido tenerlo en el momento de celebrarse el acto que se dice simulado; que el Código exige entre otros requisitos para la procedencia de la acción pauliana, que el crédito en virtud del cual se intenta debe ser de fecha anterior al acto del deudor; que el acreedor toma por decirlo así, á su deudor en el estado de su responsabilidad actual, no en sus responsabilidades precedentes; lo toma con su solvencia y su patrimonio en el momento de la constitución del acto, no con su patrimonio ó su solvencia de antes. Invoca en su apoyo y como precedente, un fallo de de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial (Causa DXLII). Hemos dicho que esta doctrina es manifestamente equivocada, y así lo demostró el voto de la minoría, que expondremos en seguida. Antes de hacerlo haremos notar brevemente que el error fundamental de la sentencia de que nos ocupamos, consiste en confundir la acción pauliana con la de simulación, incurriendo en un defecto de interpretación que el mismo codificador quiso evitar, repitiendo en la nota al art. 962 estas palabras de Aubry y Rau: «todas las dificultades que se exponen, nacen de confundir la acción pauliana con la acción de simulación. Ateniéndonos en primer lugar á la interpretación literal, observamos que la materia de la simulación y la del fraude en los actos jurídicos, está tratada en capítulos separados; que el requisito de que el crédito en virtud del cual se intenta la acción debe ser de fecha anterior al acto del deudor, está exigido por el art. 962, exclusivamente con referencia á la acción de fraude ó perjuicio, y no es una disposición general ó común á las dos acciones; que en el capítulo de la simulación no hay dis-



dito sea de fecha anterior al acto que se pretende anular—Jur. Civ., tom. 4, pág. 285, Ser. 4^a.

posición alguna que autorice una restricción semejante, y que las restricciones para el ejercicio de una acción, son como todas las limitaciones, de interpretación estricta y no pueden extenderse arbitrariamente á otras acciones á que la ley no ha puesto tales límites. Racionalmente, se concibe también como no sería jamás ni justo ni justificable, que el acreedor no pudiera decir de simulación del acto del deudor anterior á la existencia del crédito. Es indiscutido el principio de que todo el patrimonio del deudor responde de sus deudas. Cuando una persona ha simulado la enajenación de un bien cualquiera, ¿puede decirse seriamente que ese bien ha salido de su patrimonio? Habrá creado una mera *apariencia* de enajenación, pero la verdad, la realidad será siempre que aquel bien continúa en el patrimonio del deudor; está, en consecuencia, sometido á aquel principio, y la acción del acreedor no tiene sino á destruir aquella apariencia. En el fraude ó el perjuicio que dan lugar á la acción pauliana, no hay ó puede no haber *simulación* alguna; el acto de enajenación es verdadero; el bien sobre que versó el acto ha salido del patrimonio del deudor, entrado en el de un tercero, y se trata de obtener la *revocación* del acto, mientras que en la simulación se trata de establecer su *inexistencia*. Se invoca la disposición del art. 957 del Cód. Civ. que cubre la simulación cuando á nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. ¿Ha podido con esto la ley autorizar la preparación de todo perjuicio posible ó futuro para los acreedores? Cuando el autor de la simulación intenta hacerla valer crea, con el uso de la misma, el perjuicio que autoriza el ejercicio de la acción, y la ley lo reprueba de la misma manera que reprueba no solo la falsedad sino el uso de lo falso. La minoría de la Cámara insistió suficientemente en que se confundía la acción pauliana con la acción de simulación; invocó la opinión de los más ilustrados tratadistas, y concluyó diciendo: «no puede ser otra la conclusión, á poco que se considere que la acción pauliana es revocatoria y se propone destruir los efectos de un acto hecho en fraude de los derechos del acreedor; la simulación, que puede ser absoluta ó relativa, revistiendo el primer carácter, cuando se celebra un acto jurídico que tiene nada de real—Código Civil, art. 953—anula el acto—art. 954—y en tal caso vuelven las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado—art. 1050—de modo que debiendo reputarse que los bienes no han salido nunca del dominio del deudor, el acreedor está siempre en tiempo de ejercerla.





1. **Acción personal**—El demandante por acción personal puede renunciar al fuero federal, ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7.º pág. 113, Ser. 3ª.

2. **Acción personal**—Carece el Juzgado de competencia sobre el demandado por acción personal, que no reside en su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 7.º pág. 128, Ser. 3ª.

3. **Acción personal**—La deducida á nombre personal, no puede ser transferida á un tercero sin aquiescencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 9.º pág. 266, Ser. 4ª.

Y si se quiere agregar á esto un argumento de estricto derecho, lo tenemos en el art. 1196 del Código que autoriza á los acreedores para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. Supuesta una simulación lícita, que no tuviera el propósito de perjudicar á tercero, estarían por lo mismo habilitados los acreedores para reincorporar al patrimonio de su deudor los bienes de que éste se hubiera despojado para garantizarse con ellos de sus créditos. La acción acordada al deudor que hubiera simulado el acto jurídico para recuperar lo suyo que en realidad nunca saliera de sus bienes, es la misma que sus acreedores pueden ejercitar siempre sin dependencia de fechas.»

1—Un vecino de una provincia demanda al de otra ante la jurisdicción común; el demandado opone excepción de incompetencia, la que es rechazada porque el fuero federal ha sido establecido en beneficio del extranjero ó del vecino de distinta provincia, pudiendo renunciar al privilegio. Es evidente su derecho á recurrir al tribunal local del fuero del demandado—art. 4 del Cód. de Proc.

2—Siempre que no se encuentre allí aunque sea accidentalmente—artículo 4 del Cód. de Proc.

3—Entablada una demanda á nombre personal, quiso después una sociedad tomar intervención alegando que la demanda había sido instaurada por ella, pues ella era la dueña del pleito. El actor estuvo conforme, pero no así el demandado. No se hizo lugar á la transferencia porque hasta cierto punto se autorizarla el desistimiento de la acción contra la voluntad del demandado, y sin las ventajas que ello reportaría para éste, pues en vez de terminar el pleito tendría que seguirlo con el nuevo litigante. Por lo demás, la cesión de las acciones litigiosas puede hacerse, pues está autorizada por la ley, siempre que se obser-

4. **Acción personal**—No puede considerarse incidente de la testamentaria, la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4ª.

Acción personal—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 8.

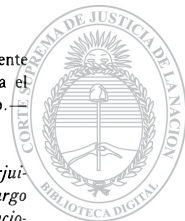
Acción por daños y perjuicios—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1, 2, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 26 y 27—*Embargo indebido*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 4—*Funcionarios públicos*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 3—*Locatario*, núm. 3.

1. **Acción reivindicatoria**—Para que sea procedente es

ven las formas por ella prescritas—arts. 1446 y 1455 del Cód. Civ.—sin perjuicio de la responsabilidad de cedente y cesionario si la parte no consintiese en la cesión.

4—El contrato se celebró por el esposo de la causante y á nombre de ella, pero fué suscripta por el esposo á nombre propio. La demanda se inició contra éste: de acuerdo con lo establecido en el art. 634 del Cód. de Proc. y 3284 del Cód. Civ., dicha acción no pasa al Juez de la sucesión.

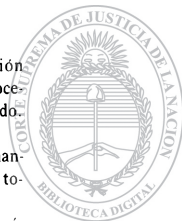
1—El art. 27º8 del Cód. Civ. establece, que la acción reivindicatoria nace del *dominio* que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario *que ha perdido la posesión* la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella. De esta definición resulta, que para promover esta acción no basta tan sólo invocar el título de propiedad; es de todo punto necesario comprobar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva y real.—Los arts. 577, 2609 y 3265 corroboran esta teoría. Así el primero dice: «Antes de la tradición de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real»; el 2609 establece que «se pierde igualmente el dominio por enajenación de la cosa, cuando otro adquiere el dominio de ella por la tradición en las cosas muebles, y en las inmuebles después de firmado el instrumento público de enajenación *seguido de la tradición*. El art. 3265 exige asimismo la tradición para la transmisión de los derechos que pasan de una persona á otra en virtud de contrato. Estos artículos de nuestra ley civil, y sus concordantes dejan establecido que no basta la escritura pública de enajenación para transmitir el dominio; es necesario que se haga la tradición de la cosa, y mientras esta no se



necesario justificar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva: no basta la presentación del título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 346. Ser. 3ª.

verifique, la relación jurídica entre enajenante y adquirente es la que surge de una obligación de hacer. *Traditionibus dominia rerum non multis pactis transferentur*, decía el principio romano, el que pasó á formar parte de nuestra legislación civil. De manera que el que tiene un título de propiedad no tiene el dominio si la tradición no le ha sido hecha. El no puede tomar posesión de la cosa de su propia autoridad y debe exigir la entrega. Freitas dice que el derecho real debe manifestarse *por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos caracteres y esos signos sean tan visibles y tan públicos cuanto sea posible*. Nuestra ley ha sido tan exigente en materia de tradición que ha ido más lejos aún que la ley romana y que las leyes de Part. Así es que no basta para producir la tradición la sola declaración del tradente de darse por desposeído ó de dar al adquirente la posesión de la cosa: esa posesión, tratándose de inmuebles, sólo puede adquirirse por la tradición hecha por actos materiales del que entrega la cosa con asentimiento del que recibe, ó por actos materiales del que recibe con asentimiento del que los entrega, ó desistiendo el poseedor de la posesión que tenía y ejerciendo el adquirente actos posesorios en el inmueble, en presencia de él y sin oposición alguna—arts. 2378, 2379 y 2380 del Cód. Civ.; Freitas, art. 3819; *Molitor, Posesión*, núm. 45. En el caso que nos ocupa, el reivindicante no comprobó que hubiese tenido ó perdido la posesión de la cosa que quería rcivindicar. Del título que presentó no resultaba justificado que hubiese tomado posesión de la cosa: de él no resultaba que el vendedor le hubiese hecho la tradición de la cosa, y por el contrario, contenía la formal promesa de dar al comprador «la posesión real de lo vendido, libre de toda otra tenencia y sin contradictor que se oponga», lo que importaba establecer que esa posesión no se la daba en el acto de suscribirse la escritura de enajenación, ni que se la hubiese dado antes. Si nunca se ha tenido la posesión, no puede ejercitarse la acción reivindicatoria que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas, y por la cual el que *ha perdido* la posesión la reclama y la reivindica del que actualmente la tiene—artículo 2758.—En el presente caso nada puede suplir al hecho material para que la tradición se opere según la opinión de la Cámara de lo Civil, mientras que la de lo Comercial ha establecido un principio contrario—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Tradición*, núm. 1.





2. **Acción reivindicatoria**.—La excepción de prescripción opuesta por el demandado de reivindicación, hace procedente la exoneración de las costas al demandante vencido. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

3. **Acción reivindicatoria**.—Es improcedente si el demandante no justifica haber tenido la posesión. —Jur. Civ., tomo 9, pág. 415, Ser. 4ª.

Acción reivindicatoria.—Véase: *Embargo preventivo*, número 2—*Evicción*, núm. 1—*Prescripción treintenaria*—*Reivindicación*, núm. 10.

Acciones.—Véase: *Jactancia*, núm. 1—*Posiciones*, número 4—*Heredero*, núm. 7—*Venta en remate*, núm. 1—*Herederos*, núm. 7—*Locación*, núm. 8.

1. **Acciones civiles**.—El damnificado por una resolución del Consejo Nacional de Higiene, puede entablar las que crea convenir á su derecho, sin ocurrir al jurado que pres-

2.—De acuerdo con la jurisprudencia establecida, y fundada en que en este caso no hay ni temeridad ni malicia, pudiendo el Juez hacer uso de la facultad que le acuerda el art. 221 del Cód. de Proc.—Véase: *Inst.*, tomo 1º, verb. *Costas*, núm. 649: en la nota se consigna el voto de un camarista en contra del principio sentado en el sumario.

3.—Véase el núm. 1.

1.—El art. 48 de la Ley de 18 de Julio de 1877, establece que si el interesado se considera agraviado por una resolución, debe apelar de ella para ante un jurado presidido por el Juez del Crimen. La Ley de 31 de Diciembre de 1880, organiza y determina las atribuciones del Consejo Nacional de Higiene, y establece en su art. 4º, inc. 6º, que se encuentra facultado para vigilar el ejercicio legal de la medicina, de la farmacia y de las demás ramas del arte de curar, con arreglo á las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto el Congreso dicte la ley que rija esta materia en la Capital, de donde se deduce la vigencia de la ley de la Provincia. Si el damnificado no hace uso del derecho que le acuerda la ley para apelar ante el jurado de la resolución del Consejo, esto no importa renunciar á las acciones civiles de que pueda hacer uso contra quien ordenó la medida que causó el perjuicio.



cribe la ley especial sobre ejercicio indebido de la medicina.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

1^a. **Acciones criminales**—Justificada la confabulación entre el tercerista y el ejecutado, la sentencia que los condena en las costas y detención dejando á salvo á favor del ejecutado las acciones criminales que viere convenirle, debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 108, Ser. 3^a.

1^b. **Acciones personales**—El Juez de la sucesión, es incompetente para conocer en las acciones personales que se dirijan contra los herederos.—Jur. Civ., tom. 1, página 370, Ser. 3^a.

Acciones reales—Véase *Evicción*, núm. 1.

Accionar—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 1.

Aceptación—Véase: *Cesión*, núm. 3—*Desistimiento*, número 2—*Locación de servicios*, núm. 1—*Servicios profesionales*, núm. 1.

Aclaraciones—Véase: *Contrato*, núm. 6.

Acreedor—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1—*Pago por consignación*, núm. 3—*Fiador*, núm. 1—*Cesión*, número 3—*Depósito particular*, núm. 1—*Cesión de bienes*, núm. 1—*Acción pauliana*, núm. 1—*Obligación á plazo*, núm. 2—*Tacha*, núm. 2—*Escepción de defecto legal*, nú-

1^a—Es la sanción contenida en el art. 534 del Cód. de Proc. Si la Cámara encuentra bien aplicado por el Juez de 1^a Instancia dicho artículo, debe confirmarse la resolución del Superior.

1^b—Es principio general que el Juez competente para entender en las acciones personales lo es el del domicilio del demandado—art. 4 del Cód. de Proc.—salvo los casos establecidos tanto en este artículo como en el 634 del Cód. de Proc., que reglamenta el 3284 del Cód. Civ. para los juicios testamentarios. La escepción á la regla general establecida para los casos de juicio universal de testamentaria que atrae á sí á todos los demás, tiene aplicación cuando la persona demandada es la sucesión, pero no cuando es un heredero, porque la primera es una persona distinta de la segunda.

mero 17—*Honorarios*, núm. 26—*Costas*, núm. 58—*Pena*, núm. 3—*Prelación*, núm. 1.

1. **Acreedor hipotecario** — Formado concurso civil, el acreedor hipotecario carece de personería para oponerse á la venta en remate público de los bienes afectados con hipoteca.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 57, Serie 4ª.

2. **Acreedor hipotecario**—El de segunda hipoteca, tiene

1—El art. 735 del Cód. de Proc. dispone que se proceda inmediatamente á la enajenación de los bienes del concurso, si la mayoría de los acreedores no acordase lo contrario: este artículo no hace distinción alguna entre los bienes libres de gravamen y los afectados con hipoteca. Los arts. 761 y 763 del mismo Código, establecen en su letra, y se desprende de su espíritu que en la venta de los bienes del concurso están comprendidos los bienes hipotecados, pues el primero de ellos establece que su producto se distribuirá á prorrata entre los acreedores, á no ser que haya causa legítima de preferencias en virtud de privilegios ó hipotecas; y el segundo ordena que el sobrante de la venta, después de satisfecho el acreedor hipotecario, ingrese á la masa, debiendo éste concurrir á prorrata con los acreedores personales en caso de no ser cubierto el crédito con el producto del bien hipotecado. El Código Civil no contiene disposición alguna que prohíba la venta. No puede objetarse tampoco, diciendo que la venta con una base inferior al importe de la hipoteca sea perjudicial para el acreedor hipotecario, pues en primer lugar ellos mismos proceden de diario á la venta con una base inferior á la hipoteca; y en segundo lugar, el acreedor hipotecario puede concurrir al remate y hacer posturas hasta donde considere conducente á su derecho. El Juez de 1ª Instancia decía que el acreedor hipotecario carecía de personería para oponerse á la venta, porque sólo corresponde al síndico gestionar y dirigir todo lo relativo á la liquidación del concurso: la Cámara confirmó «por sus fundamentos el auto apelado».

2—El art. 3196 establece, que la hipoteca se extingue desde el momento en que el comprador consigna el precio, siempre que se hiciere con citación de los acreedores hipotecarios: esa citación tiene por objeto dar la intervención que les corresponda en el juicio en salvaguardia de sus derechos. Si con la apelación de la regulación puede conseguir que algo se adjudique á la segunda hipoteca, el derecho que consagra el sumario es evidente.





derecho para apelar de las regulaciones de honorarios recaídas en la sentencia de la ejecución de la primera hipoteca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4^a.

3. **Acreedor hipotecario**—La falta de aceptación por parte de éste, de la transferencia del bien hipotecado, solo puede lesionar los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 348, Ser. 4^a.

1. **Acreedor privilegiado**—La falta de intervención de éste, en el juicio de graduación de créditos, no enerva el carácter ejecutivo de la sentencia, que adquiere hacia él la fuerza de la cosa juzgada desde la fecha en que se justifica haber llegado á su conocimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4^a.

1^a. **Acreedores**—Carecen de personería para intervenir en el concurso civil: sus derechos están representados por el síndico.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 112, Ser. 4^a.

Acreedores—Véase: *Herederos*, núm. 4—*Simulación*, núm. 14—*Recusación*, núm. 6—*Concurso civil*, núm. 4—*Acto simulado*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 6.

1. **Acreedores del viudo**—No están obligados á esperar

3—Un deudor hipotecario transfirió á otro la hipoteca constituida á favor del Banco Hipotecario de la Provincia. No se gestionó la aceptación de esa transferencia por el acreedor común. Esa falta de aceptación no puede nunca afectar al segundo deudor hipotecario, pues que su situación en vez de ser más gravosa es menos onerosa, porque el Banco podrá ejercitar su acción contra el deudor primitivo dejando libre al segundo adquirente. Resulta, pues, que sólo los derechos del cedente hipotecario pueden ser lesionados por la falta de aceptación de la transferencia de la hipoteca.

1^a—La ley da al síndico, como representante del acreedor; lo que por otra parte es ajustado al procedimiento del juicio de concurso, pues la intervención de los acreedores traería la confusión en la marcha regular del concurso. Los acreedores no pueden intervenir salvo los casos espresamente determinados.

1—La acción contra el esposo no puede ser enervada por la testa-

la liquidación de la testamentaria de la esposa para la ejecución de sus créditos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 12, Serie 4ª.

2. **Acreeedores del viudo**—Los acreeedores del marido no lo son de la sucesión de la esposa.—Jur. Civ., tom. 3, página 63, Ser. 4ª.

Acta matrimonial—Véase: *Esposos*, núm. 1.

Acto—Véase: *Escritura pública*, núm. 10—*Interdicto*, núms. 2 y 3—*Bautismo*, núm. 1—*Día*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 12—*Mandante*, núm. 3—*Documentos públicos*, núm. 2—*Mandato*, núm. 13—*Escritura de venta*, número 1.

Acto anulado—Véase: *Nulidad*, núm. 4.

Acto condicional—Véase: *Condiciones impuestas*, número 1.

1. **Acto de administración**—La contestación á una demanda de daños y perjuicios procedentes de un accidente ó cuasi-delito ocurrido con motivo de una construcción, es acto de administración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79, Serie 4ª.

mentaría de la esposa, porque ésta nada tiene que ver con aquella. Los derechos y obligaciones existentes entre esposos por el hecho del matrimonio se resuelven entre ellos y sus herederos, salvo el caso de concurso. Han contratado con una persona determinada y solo contra ella deben seguir sus gestiones tendentes al cumplimiento del contrato.

2—La acción era dirigida contra el marido, no contra la sucesión de la esposa.—Véase nota precedente.

1—Una demanda se dedujo contra el constructor de obra en su carácter de director de una sociedad anónima, por ser el único que atendía á todos los servicios, pagos y demás actos de la administración como principal. Por consiguiente el director estaba obligado á entender en la demanda que reconocía como causa eficiente un accidente acaecido en las construcciones que él dirigiese, y que siendo un acto de administración lo debe atender el que administra.





Acto del remate— Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

1. **Acto ilícito**—La calificación de prófugo hecha al rebelde, no importa la comisión de un acto ilícito que pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 312, Ser. 3^a.

2. **Acto ilícito**—La demanda por daños y perjuicios es improcedente, mientras no se justifique la existencia del acto ilícito punible y el dolo, culpa ó negligencia del agente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 55, Ser. 3^a.

3. **Acto ilícito**—El propietario tiene derecho de desalojar como intruso al que ocupa su propiedad sin su consentimiento, sin que este acto importe un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3^a.

4. **Acto ilícito**—La omisión, por parte de una empresa de transporte, de medidas tendentes á prevenir el daño á terceros en sus vías, es un acto ilícito por el cual es responsable civilmente de los daños y perjuicios que haya causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 36, Ser. 3^a.

1—La demanda tuvo por fundamento el hecho de haber un Juez de Corrales calificado de prófugo á un rebelde; la Cámara dijo que la palabra prófugo podrá no ser adecuada, pero no se puede exigir que los conocimientos de un Juez lego, vayan hasta más allá de lo que quiere la ley, y que ese epíteto ninguna sombra puede traer sobre su reputación.

2—Art. 1067 del Cód. Civ.

3—Art. 1071 del Cód. Civ.

4—El juicio fué motivado por un choque habido entre una locomotora y un carro, ocurrido en una de las calles de Barracas. De ese choque resultó destrozado el carro, y su conductor gravemente herido. El actor justificó que la calle donde ocurrió la catástrofe se hallaba casi obstruida por una hilera de wagones de carga, dejando para el tránsito público el espacio que ocupa un wagón y que como no sintiera movimiento alguno, ni avisara nadie de la proximidad, se determinó á cruzar, pero en ese momento una locomotora que no había dado aviso por medio del silbato, como es de práctica hacerlo á distancia conveniente; chocó con el carro haciéndolo pedazos é hiriendo gravemente



5. **Acto ilícito**— Los actos llevados á cabo por un Comisario de Policía, estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede funda una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

6. **Acto ilícito**—La construcción sin permiso municipal, importa un acto ilícito, y arroja sobre el propietario al conductor. La empresa fué condenada á pagar los perjuicios ocasionados, fundándose en que el siniestro fué causado por culpa del conductor que no dió aviso de su aproximación, y que no fué avisado por nadie de la existencia del peligro. La cuestión se reduce á saber si el choque se produjo por un hecho imputable á la empresa, y si ésta es en consecuencia responsable de los perjuicios causados. La obstrucción indebida de la calle por los wagones que estaban allí estacionados, la ausencia de un guardavía encargado de vigilar y avisar á los transeúntes el movimiento de las máquinas para evitar los peligros, y la circunstancia de que el silbato no se hizo oír, decidieron por la culpabilidad de la empresa, pues la falta de todo aviso ó señal era una garantía de hallarse espedita la vía. La ley de ferrocarriles nacionales prescribe entre otros deberes de las empresas, el de establecer guardavías y poner barreras en todos los puntos en que cruzaren los caminos á nivel, estableciendo igualmente que estas barreras deben cerrarse á la aproximación de cada tren y abrirse después que haya pasado, para dejar espedito el tráfico—art. 2.—Si el guarda por lo menos, hubiese estado en su lugar, la catástrofe no se habría producido. La omisión de la empresa, es, pues, evidente y la misma omisión por parte del conductor al dejar de avisar por el silbato su proximidad. Siendo imputable á la empresa el accidente, su responsabilidad es inevitable y evidente en derecho. Esta doctrina está de acuerdo con la jurisprudencia establecida.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Acto ilícito*, núm. 3; *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

5—Arts. 1109 y 1112 del Cód. Civ.

6—El demandado contrariando disposiciones municipales vigentes y las órdenes recibidas del inspector municipal, hizo cavar un pozo, en el patio de la casa de su propiedad, destinado á recibir los desagües de la misma. El Inspector ordenó la suspensión de la obra, aplicando una multa y mandando cegar el pozo; y no obstante ésto la construcción se hizo hasta terminarla, produciéndose más tarde el hundimiento de la tapa que lo cubría. Dicho hundimiento tuvo lugar en circuns-



la responsabilidad de cualquier accidente que por defecto de construcción pudiera ocasionarse á terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4^a.

7. **Acto ilícito**—La acción de simulación de un acto público entre las partes que lo llevan á cabo, es improcedente siempre que se reconozca la existencia de un acto ilícito en perjuicio de tercero.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 220, Ser. 4^a.

tancias que se encontraban sentadas en el patio la esposa del actor y una hija, estando allí de visita: la niña cayó dentro del pozo pereciendo en él no obstante los auxilios prestados. Ahora bien, el hecho del hundimiento ó desmoronamiento del pozo donde cayó y pereció la niña ¿es imputable al demandado? ¿Es éste responsable por las consecuencias legales de ese hecho? El pozo fué hecho sin permiso de la autoridad municipal, en contravención á la ordenanza reglamentaria de construcción de fecha 21 de Junio de 1887. El pozo se hizo pues en contravención de las ordenanzas municipales. Si se hubiese solicitado el permiso, el pozo no se habría hecho en las condiciones que se construyó. Si se hubiese construido con el permiso correspondiente, la responsabilidad habría desaparecido. La construcción en esas condiciones, es un hecho ilícito, porque es contra la ordenanza citada.—artículo 1066, Cód. Civ.—Los hechos ilícitos se denominan delitos cuando han sido ejecutados á sabiendas y con intención de dañar la persona y los derechos de otro—art. 1072.—El hecho ilícito, no fué seguramente ejecutado con intención de dañar, en este caso, y por consiguiente no constituye un delito. Todo acto ilícito hecho sin intención de dañar, como el que nos ocupa, es un cuasi-delito ó simplemente un acto ilícito que responsabiliza por sus consecuencias al autor—arts. 1107 y siguientes.—La responsabilidad que nace de un delito, es diferente de la que nace de un hecho simplemente ilícito. El principio general es que hay daño causado por un delito siempre que resulte de esto algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria—arts. 1068 y 1069.—La responsabilidad procedente de un delito es más estensa, como puede verse en los arts. 1073 y siguientes. De acuerdo con lo establecido en el art. 1109 y concordantes citados del Cód. Civ., resulta que el sumario consagra los principios sentados por la ley.

7—Art. 959 del Cód. Civ.



8. **Acto ilícito**.—La absolución del procesado ante la jurisdicción criminal, no basta para eximirlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 97, Ser. 4ª.

9. **Acto ilícito**.—La suma dentro de la cual el damnificado por un acto ilícito ó cuasi-delito, debe prestar el juramento estimatorio, debe ser fijada según el prudente arbitrio del Juez, teniendo en cuenta las constancias de autos.—Jur. Civ. tom. 6, pág. 103, Ser. 4ª.

10. **Acto ilícito**.—La absolución del reo ante el Juez del Crimen no forma prueba sobre su culpa ó negligencia en el juicio civil por indemnización de los daños y perjuicios emergentes del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4ª.

8—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos en el sentido del sumario, el que por otra parte está de acuerdo con la jurisprudencia sentada.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.—La minoría dijo, que la resolución de la cuestión en el juicio criminal hace cosa juzgada para el civil, pues en derecho no existen dos culpas, y por lo tanto cuando existe absolución del acusado en el juicio criminal, no puede promoverse acción civil proveniente del mismo hecho que motiva aquella absolución, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 1103 del Cód. Civ.

9—Arts. 519jy 1083 del Cód. Civ.

10—Del estudio comparado de los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil, así como de la nota explicativa del codificador, resulta que en el juicio civil no puede invocarse la resolución del juicio criminal. Un hecho puede ser imputable á determinada persona, sin que ésta sea un delincuente ó un criminal. La misión de los Tribunales del Crimen es establecer si el hecho atribuido al acusado existe: si el inculpado es el autor, y si ese hecho le es imputable según la ley penal como delito del derecho criminal. Los Tribunales del crimen, á no ser que la persona perjudicada se haya presentado en el juicio, no tienen que decidir si el hecho constituye ó nó un delito del derecho civil ó un cuasi-delito. Cuando se sobresee en una causa por homicidio, no es porque el hecho



11. **Acto ilícito**—La fijación del monto de la indemnización que el autor de un acto ilícito debe al damnificado, debe ser hecha por los Tribunales con arreglo á los antecedentes que suministre el litigio. —Jur. Civ., tom. 10, página 337, Ser. 4^a.

Acto ilícito—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 7, 8, 55 y 71.

1. **Acto jurídico**—La acción de nulidad de un acto jurídico, no exime á las partes de ser compelidas al cumplimiento, bajo la responsabilidad del que lo solicita.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 90, Ser. 3^a.

2. **Acto jurídico**—Se prescribe á los años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico, por error; y el término corre para los firmantes, desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

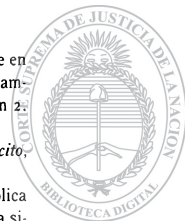
Acto jurídico—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, números 2 y 3—*Daños y perjuicios*, núm. 42—*Mandato*, núm. 13—*Simulación*, núm. 13—*Escritura*, núm. 4.

de la muerte no exista, sino porque ella no es imputable á la parte. Pero si el hecho de la muerte fué producido, el hecho generador de la obligación existe. Se resuelve que según la ley penal el hecho no le es imputable á la parte; en el juicio civil debe resolverse si según la ley civil le es imputable ese mismo hecho. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia sentada en casos análogos. Véase, Inst., tom. 1^o, verb. *Cosa juzgada*. Por otra parte, el sobreseimiento provisorio tampoco hace cosa juzgada, aun para el juicio criminal, como lo tiene resuelto la Excm. Cámara. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Sumario*, núm. 2, y *Cosa juzgada*, núm. 1.

11—Véase el núm. 9.

1—La Cámara no resolvió lo que espresa el sumario, solo dijo que mientras no se pronuncie sobre si efectivamente existe ó nó nulidad, deben garantizarse los intereses de los litigantes cuando éstos lo pidan y en su consecuencia procede el embargo preventivo á los efectos indicados. No es por consiguiente exacto que las partes puedan exigir el cumplimiento del acto jurídico atacado de nulidad.

2—Art. 4030 del Cód. Civ.



1^a. **Acto lícito**—La ignorancia del derecho, no puede en ningún caso fundar la nulidad de un acto lícito, pero tampoco puede dar validez á un acto nulo.—Jur. Civ., tom 2: pág. 160, Ser. 3^a.

Acto público—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Acto ilícito*, núm. 7.

1^b. **Acto simulado**—La confesión por escritura pública de que el acto que consta por instrumento público era simulado, vuelve las cosas al mismo é igual estado que tenían antes, pero sus declaraciones sobre derechos anteriores al acto simulado carecen de valor legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

Acto simulado—Véase: *Simulación*, núm. 6.

1^c. **Actos**—El Ministerio de Menores está obligado á reconocer y considerar como válidos los actos llevados á cabo con su intervención cualquiera que sea la persona que desempeñe el puesto. —Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Serie 3^a.

1^a—La ignorancia de las leyes ó el error de derecho jamás puede servir de excusa para impedir los efectos legales de los actos lícitos, ni para evadir la responsabilidad de los ilícitos. Cuando se habla de actos lícitos se les supone válidos porque éstos son los únicos que pueden producir efectos legales, como se explica en la nota al art. 923 en la cual se dice: «El sentido de la máxima *error juris nocet*, es bien claro: perjudica al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico regular y válido. Si por ignorancia ó error se omite la forma esencial de un acto jurídico, no por eso los agentes resultarían obligados; por el contrario, siendo nulo el acto, no puede producir efecto alguno, ni originar obligaciones, según el principio *quo de jure nullum est nullum sortitur effectum*».

1^b—Art. 1050 del Cód. Civ.

1^c—El art. 1048 del Cód. Civ. establece que la nulidad relativa no puede ser declarada sino á petición de aquellos en cuyo beneficio lo han establecido las leyes, ni puede ser pedida por el que ejecutó el acto sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esta prescrip-



2. **Actos**.—Los llevados a cabo por un Comisario de Policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 370, Ser. 3^a.

Actos.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 14.—*Instrumento privado*, núm. 1.—*Revocación*, núm. 1.

1^a. **Actos comerciales**.—El conocimiento del juicio sobre actos comerciales de una sociedad anónima, corresponde a la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 19, Ser. 4^a.

Actos de propietario.—Véase: *Venta*, núm. 4.

Actos de sevicia.—Véase: *Divorcio*, núm. 8.

Actos del deudor.—Véase: *Acción pauliana*, núm. 1.

Actos del mandatario.—Véase: *Instrumento privado*, número 1.

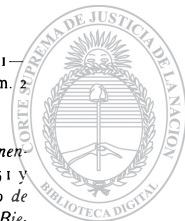
1^b. **Actos judiciales**.—El apoderado ó procurador judicial puede representar ó acompañar á su poderdante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, página 127, Ser. 3^a.

ción legal es aplicable al Ministerio de Menores cuando interviene y acepta un convenio celebrado, aunque él haya sido celebrado por otra persona ó funcionario á cargo ántes de las mismas funciones, pues el Ministerio Público es indivisible en el sentido de que los actos pasados en autoridad de cosa juzgada con intervención de uno de los funcionarios que lo desempeñan, obligan respecto de ese acto á todos los que suceden en el cargo. Lo contrario lejos de beneficiar á los menores, heriría de muerte sus intereses; separándolos por completo del comercio, pues que nadie contrataría sobre intereses de menores: las transacciones no reposarían sobre una base seria, si hubieran de ser susceptibles de tantas transformaciones cuantas fueran las renovaciones del personal del Ministerio Público en el largo trascurso del tiempo necesario para que un menor llegue á la mayor edad.

2.—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 5.

1^a.—Arts. 7 y 8, inc. 6^o del Cód. de Com.

1^b.—Es un derecho acordado por la ley á los litigantes.



Actos jurídicos— Véase: *Escritura pública*, núm. 1—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Transacción*, núm. 2.

Actos personales— Véase: *Contradocumento*, núm. 3.

Actor— Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1—*Documentos*, núm. 2—*Costas*, núms. 8, 9, 10, 11, 23, 46, 49, 51 y 52—*Alimentos*, núm. 5—*Incapaz*, núm. 1—*Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 11—*Bienes determinados*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 17.

Actuaciones— Véase: *Domicilio*, núm. 13.

Actuario— Véase: *Ratificación*, núm. 3—*Notificación*, núm. 10.

1ª. **Acusación calumniosa**— No procede la acción de daños y perjuicios fundada en una acusación calumniosa, si el demandado se limita a la denuncia del delito ante la Policía, sin designar la persona que lo hubiere cometido ni hacerse parte en el juicio criminal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 107, Ser. 4ª.

Acusación criminal— Véase: *Absolución*, núm. 1—*Acción civil*, núm. 1.

1ª. **Acusaciones**— El Poder Judicial tiene derecho y está obligado a entender en las acusaciones, sean civiles ó criminales, que se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que esto importe obstaculizar la acción de otros Poderes, ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Acusado— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

1ª— De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 9.

1ª— Véase: verb. *Empleados públicos*, núm. 1.



Adjudicaciones.—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Herederos mayores*, núm. 1—*Herederos forzosos*, núm. 1—*Petición de herencia*, núm. 3—*Bienes testamentarios*, núm. 1.

Ad-mensuran.—Véase: *Venta ad-corporis*, núm. 1.

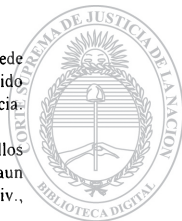
1°. **Administración**—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7. pág. 220, Ser. 3ª.

Administración—Véase: *Herencia en efectivo*, núm. 1—*Albacea*, núm. 3—*Mandatario*, núm. 9—*Rendición de cuentas*, núm. 9—*Curador*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 7—*Condominio*, núm. 1—*Tutor*, núm. 12.

1°. **Administrador**—La ley supone que los fondos suplidos al administrador lo han sido para uso del establecimiento: el tercero no debe justificar ese extremo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

1ª.—Esto no lo resolvió la Cámara: dijo todo lo contrario, que como principio general no admita duda de que la prueba pericial es la que ofrece mayores garantías de exactitud y de acierto, pero que en el caso resuelto no podía imperar ese principio: 1.º Porque el dictamen de los peritos no era uniforme, condición requerida por el art. 178 del Cód. de Proc. para que constituya prueba legal, y 2.º Porque para la apreciación de la tierra no hay peritos especiales designados por la ley. La Dirección de Rentas informó y ese informe fué corroborado por un escribano público que dió el precio de venta de los terrenos próximos, según constancias de sus libros de protocolos. En tales casos nada más lógico que acordar mayor fuerza probatoria á los informes.

1º.—El administrador es un mandatario y está autorizado para contraer deudas en el ejercicio de esa administración y dentro de los límites generales. En el caso presente estaba espresamente autorizado al efecto por su principal, siendo desde luego aplicable la disposición del art. 1946 del Cód. Civ.



2. **Administrador**—De la herencia, el albacea no puede oponerse al nombramiento de un heredero reconocido aunque no declarado, como administrador de la herencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Ser. 4^a.

3. **Administrador**—No debe tomar posesión de aquellos bienes que un heredero alegue tener á nombre propio, aun cuando sean de los incluidos en el testamento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 4^a.

4. **Administrador**—La separación voluntaria de los cónyuges no altera las facultades de administrador de los bienes propios de la esposa, con las que la ley ha investido al marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 49, Ser. 4^a.

2—No entra en sus atribuciones, pues las del albacea se limitan á las indispensables para dar cumplimiento á las disposiciones del testador, adoptadas con arreglo á los preceptos de la ley, principalmente en lo que se refiere á la institución de legados—art. 3851, Cód. Civ.—Y solo por escepción está facultado á intervenir en las contestaciones relativas á la validez del testamento ó sobre la ejecución de las disposiciones que éste contenga—art. 3862, ibid.

3—El art. 643 del Cód. de Proc. al establecer el nombramiento de un administrador, se refiere á los bienes que forman el caudal hereditario—art. 642.—El testamento no es por sí solo título bastante para que un bien haya de conceptuarse comprendido en el caudal hereditario, y mucho menos cuando existe oposición de parte interesada que sostiene su derecho excluyente. El art. 660 tiene resuelto que para los casos de inclusión ó exclusión de algunos bienes debe seguirse juicio contradictorio en pieza separada. Mientras no termine ese juicio, nada autoriza á innovar en los derechos de dominio y posesión que cualquiera pueda tener sobre dichos bienes por más solemne que sea la manifestación hecha en el testamento.

4—El Cód. Civ., tanto en el título «del matrimonio»—hoy regido por la ley de Matrimonio Civil—como en el de «la sociedad conyugal», ha acordado al marido, entre otras numerosas facultades, la de administrar todos los bienes del matrimonio desde que éste principia hasta que se disuelve, espresando los casos en que esa administración cesa ó pasa á la mujer casada. La interpretación de los artículos 64 y 66 de la Ley de Matrimonio Civil, establece que para que la separación judi-



Administrador—Véase: *Mandatario*, núm. 1 — *Acción ejecutiva*, núm. 1 — *Rendición de cuentas*, núm. 1 — *Divorcio*, núm. 7.

1. **Administrador judicial**—La viuda del causante, nombrada judicialmente administradora de los bienes, tiene derecho á cobrar honorarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21, Ser. 4^a.

2. **Administrador judicial**—El embargo de alquileres hace procedente el nombramiento de administrador judicial. Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 4^a.

3. **Administrador judicial**—Reconocida la existencia de una sociedad verbal, procede el nombramiento de administrador judicial, si no existe acuerdo entre los socios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 4^a.

cial de los esposos surta sus efectos legales, es indispensable que ella sea decretada por sentencia de juez competente dictada en el juicio respectivo de divorcio, llegando hasta prohibir que éste tenga lugar por mutuo consentimiento de los esposos. Si la separación voluntaria es ilegal y nula, fluye lógicamente que ella no puede alterar los vínculos y relaciones jurídicas que competen á marido y mujer, ni limitar la órbita de sus facultades y atribuciones conferidas por el art. 1276 del Código Civil.

1—El art. 683 del Cód. de Proc. le acuerda este derecho, de una manera expresa y terminante.

2 —La Cámara dijo que siendo procedente el nombramiento de un depositario judicial dado el embargo decretado sobre los alquileres, debía confirmarse el auto en que se nombraba administrador. Son dos cosas bien distintas, el nombramiento de administrador y el de depositario: las facultades de uno y otro son bien diversas. No vemos la necesidad del nombramiento de depositario para los alquileres embargados, pues basta que el inquilino los deposite en el banco á la orden del Juzgado.

3—Reconocida la existencia de la sociedad, y no habiendo socio administrador nombrado, son todos ellos considerados como administradores—art. 1676 del Cód. Civ.—Pero si no hay acuerdo, puede aplicarse, por analogía, el art. 1684.

Adopción—Véase: *Filiación legítima*, núm. 2.

Adquirente—Véase: *Indivisión*, núm. 1.

1. Adoquinado—El pago del importe del adoquinado no

1.—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos revocando la sentencia de 1.^a Instancia, aduciéndose de ambas partes razones poderosas y que hace necesaria otra resolución en el mismo sentido á fin de sentar jurisprudencia. La cuestión á resolver es esta: la obligación que con arreglo á la ley de Noviembre de 1888, pesa sobre las empresas de tramways, de contribuir al pago del adoquinado en la proporción que determina el art. 1.^o de esa ley, ¿es ó no un impuesto? La mayoría de la Cámara dijo que sí, fundándose en que son impuestos los recursos que un Gobierno ó una Municipalidad exige de los particulares en su calidad de mandatario Nacional, Provincial ó Municipal según el caso, para atender con ellos los servicios públicos de que están encargados. Son, como dice Colmeiro, —tom. 2.^o, pág. 173, *Derecho Administrativo*—la primera deuda de la propiedad, y su conjunto forma la renta de un estado. El Gobierno no puede ni debe ser productor á semejanza de los particulares; y por eso, para subvenir á las cargas públicas, pide al individuo una parte alicuota de su fortuna, que cada miembro de la sociedad cede por el bien general. Se ve, pues, que es esencial á todo impuesto que su producido, percibido directa ó indirectamente por el Estado ingrese á sus arcas para ser distribuido según lo exijan las necesidades de la Administración, ó para ser aplicado á los fines que espresamente determine la ley. En nuestro régimen institucional, y concretando la cuestión de acuerdo con las leyes que rigen el sistema municipal, todo impuesto supone una sanción previa del Consejo Deliberante, que lo incorpora al cálculo de recursos que anualmente se sanciona. Y bien ¿reune aquellos caracteres la obligación que la ley del Congreso impone á las empresas de tramways de pagar la cuarta parte del adoquinado? Indudablemente nó. La Municipalidad no percibe suma alguna con motivo de la construcción de adoquinado, por el contrario, de acuerdo con las leyes de 1.^o de Octubre y 12 de Noviembre de 1888, contribuye con una parte á retribuir ese servicio, y por consiguiente, tampoco figura ninguna cantidad de semejante origen, en las partidas destinadas á subvenir los gastos que su administración reclama. Esa obligación de pagar el adoquinado, que la ley proporcionalmente distribuye entre el propietario y el empresario de tramways, tiene entonces su razón de ser en el beneficio que directamente reciben, y es una de tantas cargas que pesan sobre los propietarios, por mejoras que aunque aprovechan también á la comunidad,—por cu-





puede calificarse de impuesto, y en consecuencia, no se en-

yo motivo la Municipalidad concurre con una cuota—interesan más directamente á aquellos, sin que en ningún caso determinen un ingreso á las arcas municipales. Se alega que esta última circunstancia concurre en la cuota de afirmados: que es un impuesto cuyo producido recoge la Municipalidad, y para el efecto hace el siguiente raciocinio: «El producido del impuesto de alumbrado en definitiva, va á las cajas de las empresas que prestan ese servicio público ¿y deja por eso de ser un impuesto? El impuesto de aguas corrientes, cloacas y desagües, es cobrado directamente por la Empresa arrendataria de las Obras de Salubridad, y no por eso deja de ser impuesto, aunque su producido no ingresa directamente en las arcas fiscales». Es bien deleznable semejante argumentación. A ella se contesta con lo ya dicho. El pretendido impuesto no figura en parte alguna del cálculo de recursos de la Municipalidad; esta corporación, lejos de percibir con motivo de la construcción de adoquinados, contribuye proporcionalmente á satisfacer ese servicio: desembolsa en vez de cobrar. No sucede lo mismo con el impuesto de alumbrado: él figura en el cálculo de recursos de la Municipalidad, lo percibe directamente del vecindario en la proporción que la ordenanza establece, para pagar el servicio á la empresa que lo presta. Ni es aplicable tampoco lo que acontece con el impuesto de aguas corrientes, arrendado en crecidas sumas que han ingresado al Tesoro Nacional. Además que cuando se dictó la ley de 1876, que invocaba á su favor el ejecutado, no se tuvo en cuenta la construcción de afirmados como el que ha dado margen á este litigio, y que al referirse á exoneración de impuestos provinciales ó municipales, entendía que era á aquellas contribuciones que entonces ingresaban al tesoro, ó á otras análogas que más tarde también se percibieran. Por consiguiente, el fundamento de que me he ocupado, no es suficiente á determinar la prosperidad de la excepción. Se sostiene que el título en que se funda la ejecución sería también inhábil porque las leyes de 1.^o de Octubre y 13 de Noviembre de 1888 hacen obligatorio el pago del adoquinado que se mande efectuar por la Municipalidad, según la primera, ó se mande construir según los términos que emplea la segunda de esas leyes; y según el certificado el contrato del ejecutante con la Municipalidad para la construcción del adoquinado que se cobra, se celebró el 9 de Abril de 1888, es decir, mucho antes de sancionarse esas leyes, las que solo disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. Tampoco estamos de acuerdo con esta conclusión, pues entendemos, que la ley de Noviembre de 1888 es apli-



cuenta comprendido en la escepción que sobre pago de

cable á todos los tramways que atraviesan calles que en las fechas de la promulgación no estuvieran adoquinadas; y es exacto lo alegado por empresarios de afirmados que las que cruza el tramway Rural no lo estaban en esa época, pues de lo contrario el ejecutado hubiera hecho mérito de tal circunstancia y, sin embargo, no la ha invocado, resultando, por lo demás, una presunción favorable para el primero, de las constancias que arroja la misma cuenta en que la ejecución se funda. Para que la citada ley de Noviembre alterase derechos ya adquiridos por el ejecutado, hubiera sido menester comprobar la construcción de los adoquinados con anterioridad á esa fecha, y entre tanto, de autos resultaba que aquél únicamente se había preocupado de establecer, con el certificado espedido, que el contrato para la ejecución de ese trabajo se celebró antes de la promulgación de la ley. También alegaba el ejecutado que no está en la obligación de pagar la cuota que se le reclama, por cuanto el art. 2º de la ley de 1º de Octubre de 1888 impone esa carga tan solo á los propietarios de casas y terrenos que paguen Contribución Directa, y él, en virtud de los preceptos de la ley provincial de 1876, está exonerado de ese impuesto. Es insostenible semejante pretensión, pues la ley de Octubre no ha podido referirse sino á los propietarios de casas y terrenos, pero en manera alguna á los empresarios de tramways, que ningún derecho de propiedad pueden alegar sobre los terrenos que son cruzados por sus vías á lo largo de las calles. Por lo demás, fácil es fijar la verdadera inteligencia de la ley de Octubre, si se tienen presentes los casos de exoneración del pago de impuesto de Contribución Directa establecidos en la ley de la materia,—que comprende á los templos consagrados á los cultos religiosos, los conventos, los edificios públicos destinados á escuelas gratuitas.—La minoría decía: Ya se denomine aquella carga á los propietarios y á las empresas de tranways para costear los gastos del adoquinado, gravamen, impuesto ó contribución, su exoneración está comprendida en los términos de la ley recordada, y que esta interpretación el principio aceptado por la legislación civil de que los contratos obligan no solo á lo que está formalmente expresado en ellos, sino también á todos las consecuencias que pueden considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos—art. 1198, Cód. Civ.—La naturaleza de la concesión y la forma y condiciones en que fué solicitada y acordada por el Gobierno, son antecedentes que lo demuestran y que deben por lo mismo tenerse presentes. Estudiando esa ley sobre tramways, ya recordada, se llega fácilmente á comprender que ella fué inspirada con



impuestos se ha concedido á diversas obras de utilidad pú-

el propósito de favorecer su construcción en grandes distancias, fuera de los centros de población, y es teniéndose en cuenta los beneficios que debía producir, que se ha tratado de facilitar su realización por medio de concesiones que, á la vez de atraer los capitales que se necesitaban para llevarlos á cabo, les ofrecía una compensación por las ventajas que debían producir para el público en general y para el progreso de la provincia directamente. Se esplica así que además de la exoneración de todo impuesto fiscal ó municipal por el término de veinte años, se haya acordado también á la empresa demandada hasta una garantía del cinco por ciento sobre el costo de la construcción de la línea desde el día y á medida que se hubieran librado al servicio público las diversas secciones, tomando por maximum el valor de cinco mil pesos fuertes por cada kilómetro—art. 5º de contrato.—Ahora bien, si además de la exoneración de todo impuesto y si además también de otras ventajas y concesiones que espresa el contrato referido, el Gobierno ha garantido á esta empresa en la forma espresada, se deduce que no pudo ser su mente reservarse la facultad de gravarla posteriormente con otros impuestos ó contribuciones de ningún género, haciendo de esta manera ilusorias las garantías y beneficios acordados para su realización, y es entonces lógico decir que cualquier impuesto ó contribución creados por leyes posteriores, aun aquellas que tengan un carácter transitorio, han sido virtualmente comprendidos en la misma concesión, conforme á lo dispuesto por la ley civil, al tratar de los efectos de los contratos. Pero se ha hecho además cuestión de lo que debe considerarse bajo la denominación de *impuesto*, sosteniendo que no deben llamarse tales las obligaciones emanadas de leyes sancionadas posteriormente con respecto á la forma y condiciones en que debe hacerse el pago de los adoquinados que se construyen por la Municipalidad en las calles públicas de este municipio, aunque lo espuesto demuestra con claridad la falta de consistencia de ésta observación, débese sin embargo, agregar que esta obligación es también una contribución ó impuesto público, que pesa directamente sobre el propietario en la proporción determinada por la ley, como son también impuestos todas las demás cargas ó contribuciones que el Estado ó los Poderes públicos que lo forman, imponen para costear los gastos de la Administración, como una condición de su existencia. Sin detenerse en la averiguación del origen de los impuestos, y cuyo sistema, por demás complicado, es materia de largos estudios, como lo enseña Laferriere en su *Tratado de Derecho Público y Administrativo*, nos basta saber que esa palabra, en

blica llevadas á cabo por empresas particulares.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 260, Ser. 4ª.

su acepción legal, significa toda contribución, carga ó tributo exigido por el Estado para atender á sus necesidades. La misma acepción le dan los economistas, comprendiendo en aquella denominación tanto las cargas de carácter permanente como las puramente transitorias ó periódicas, dentro de la división de impuestos directos é indirectos. Lo enseña así el mismo Laferriere en su obra *Derecho Público y Administrativo* citado—tom. 2º, caps. 1º y 2º.—El doctor Ferreyra, en sus *Estudios sobre el derecho administrativo de la República*, al tratar de las contribuciones que pueden imponerse por los Poderes públicos de la Nación ó los Estados en particular—cap. XI,—así como Menier en su opúsculo *El impuesto sobre el capital*; Linguet-Squiron en su notable obra sobre impuestos; Proudhon en su teoría sobre la misma materia, y tantos otros. Lo consagra, por otra parte, la legislación misma en general. En Francia, tanto en el antiguo sistema que abrazaba las tres ramas de contribuciones conocidas en el derecho moderno, como durante el período de la revolución, que cambió ese sistema, y posteriormente hasta nuestros días, aparece empleándose siempre la misma palabra impuestos á todas las contribuciones ó cargas que gravitan sobre la propiedad ó las personas con destino á costear los gastos de la Administración y cualquier servicio ú obra pública. La legislación financiera de la República no ha sido menos uniforme desde sus primeros tiempos. Basta consultar las Leyes de Presupuestos Nacionales, como de Provincia, así como las especiales sobre las diversas ramas de impuestos que aquellas enumeran como fuentes de recursos para cubrir los gastos de la Administración. Lo mismo puede decirse con respecto á los impuestos de carácter municipal establecidos por sus ordenanzas en los diversos ramos que son de su competencia. Son así impuestos fiscales las contribuciones, gravámenes ó derechos que se cobran sobre la importación ó la exportación, sobre el almacenaje, el Papel sellado, las Patentes, Contribución Directa, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles y tantos otros creados sobre diversas materias por las leyes de la Nación; como son impuestos municipales los establecidos por sus ordenanzas sobre los ramos de su competencia y que esa repartición de la Administración pública retribuye al contribuyente en los servicios á que se destinan. Toda contribución es, pues, un impuesto que grava la propiedad ó el capital, ya lleve la forma de una Contribución Directa, como la que gravita sobre la propiedad territorial, ó indirecta, como es la de aduana, la de piso, peage, pontazgo, estafetas, limpieza pública, alum-





2. Adoquinado—El pago del importe del adoquinado no

brado, patentes de rodado, etc. En esta denominación se encuentra la que se lia creado para costear los gastos de adoquinados que se construyan por la Municipalidad, y como se han creado por los Poderes públicos que deben considerarse una continuación de los que contrataron con el demandado, acordándole los beneficios que éste invoca, tiene entonces derecho a considerarse exonerado del pago que se le exige y a oponer, como opuso, una excepción que la ley lo autoriza y procede en justicia. Poco importa, por lo mismo, saber si ese impuesto es percibido directamente por la Municipalidad, si entra en sus arcas a formar parte de su tesoro, ó si, por el contrario, lo recibe el empresario que tome á su cargo la construcción del adoquinado. No es esto esencial, por cuanto esta circunstancia no le quita las condiciones de una carga pública, impuesto ó contribución, llámese como se quiera, que solo ha podido imponerse por medio de una sanción emanada de los Poderes públicos, que ya habían acordado su exoneración espresamente al demandado. En autos se encontraban los antecedentes emanados de la Municipalidad de esta Capital y de la Dirección General de Rentas, de que se había hecho mérito por el ejecutado en justificación de la excepción que opuso. El primero de esos antecedentes es una sanción del Concejo Deliberante, que lleva la fecha de 26 de Abril de 1889, por la que se declara que el impuesto de 6 por ciento creado por la ley de Noviembre de 1888, no afecta el producido del tramway Rural, en conformidad á la ley de 4 de Noviembre de 1876 citada, sobre la que se basa la concesión; y el segundo, es una resolución de la Dirección de Rentas, en que se declara que los terrenos que corresponden á la empresa del espresado tramway, ocupados por la via, estaciones y talleres, se encuentran exonerados del pago del impuesto de la Contribución Directa, establecido por la ley de la Nación, de conformidad con la ley de la Provincia, que lo esceptuaba del pago de todo impuesto por el término de 20 años. Estos antecedentes de autoridad irrefutable, concurren á demostrar no sólo la vigencia de la sanción legal que el demandado invocó en su favor, sino también la interpretación y alcance que se le ha dado por la misma Municipalidad al declarar que una ley de impuesto sancionada con posterioridad, no afecta á la empresa del tramway demandada, en virtud de la exención que le había sido acordada anteriormente.

2—Esta cuestión es en un todo semejante á la anterior. La Cámara, invocando los fundamentos de esa sentencia, la resolvió en el sentido del sumario por unanimidad de voto. Debe tenerse presente que tanto



puede calificarse de impuesto. y en consecuencia no se encuentra comprendido en la excepción que sobre pago de impuestos se ha concedido á diversas obras de utilidad pública llevadas á cabo por empresas particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 152, Ser. 4ª.

3. Adoquinado—Facultando la ley el pago por cuotas, los empresarios de adoquinado, no pueden ejecutar por el total de la deuda, ni aun por las cuotas, mientras no se

esta resolución como la anterior fué resuelta por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorios.

3.—El art. 4º de la ley de 1º de Octubre de 1888 dispone, que el pago del afirmado se hará por los propietarios en doce mensualidades por partes iguales y á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 % sobre su importe, á cuyo efecto tendrán carácter ejecutivo las cuentas visadas por la Intendencia. La fecha para que principien á correr las doce mensualidades no puede ser la de la presentación de las cuentas á la Municipalidad para su visación, puesto que la deuda solo es exigible á los propietarios mediante la visación de la Intendencia: tampoco puede principiar á correr el término desde el día en que la visación se haga, porque si así fuera, los empresarios podrían despojar á los propietarios del derecho que les acuerda la ley de pagar la cuenta al contado y á su presentación con el descuento del 8 %. Bastaría que el empresario, una vez obtenida la visación, guardara silencio durante doce meses sin dar aviso á los propietarios ni exigirles el pago para que éstos no pudiesen disfrutar del beneficio del descuento, ni de la ventaja de poder satisfacer la cuenta en cuotas mensuales que la ley ha establecido especialmente á su favor. Al disponer la ley que el pago se haga en doce mensualidades, ha tenido por objeto beneficiar á los propietarios facilitándoles el medio de efectuarlo; y siendo ese el espíritu de la ley, quedaría burlado con menoscabo del derecho de los propietarios. Para que principien á cobrar las doce mensualidades, es necesario que los empresarios hayan hecho saber á los deudores que sus cuentas están visadas por la Intendencia, ó sería necesario que los hubiesen interpelado judicial ó extrajudicialmente, pues solo desde entonces puede correr el término para el pago, constituyendo á los deudores en mora á su vencimiento—art. 509 del Código Civ.—Como los empresarios no contratan directamente con los propietarios; como no son ellos los que tienen que ver si las obras se efec-



fije y se haga saber la fecha desde la que deben los propietarios empezar á pagarlas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305 Ser. 4^a.

4. Adoquinado— Los reclamos de los propietarios, contra los constructores de adoquinado solo pueden fundarse en errores de hecho, pero sin que puedan discutir ni interpretar la forma en que se ha cumplido el contrato con la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 241, Ser. 4^a.

Adquisición—Véase: *Bienes*, núms. 4 y 5.

Adulterino—Véase: *Hijo natural*, núm 1.

Adulterio—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 11.

túan ó nó con arreglo al contrato; como esto solo incumbe á la Municipalidad; para que sepan que la obra se ha hecho debidamente, que ha sido recibida y que están obligados á pagar su importe en la forma establecida por la ley, esto es en doce mensualidades, es claro que los empresarios deben hacerlo saber á los propietarios exhibiéndoles las cuentas debidamente visadas.

4—Y estos reclamos solo pueden hacerse en juicio ordinario, á no ser que pudiese formularse como escepciones en el juicio ejecutivo—artículo 481 del Cód. de Proc.—Se dijo que en las cuentas que fueron materia del juicio ejecutivo se habían cobrado sumas que no se tenía derecho á cobrar, por haberse incluido la superficie ocupaba por la vía. No se puede decir que la visación que la Municipalidad verifica en las cuentas presentadas por los empresarios, se oponga á que este reclamo se haga en juicio ordinario, pues ese acto ó requisito no tiene más efecto que dar fuerza ejecutiva al documento; pero si las cuentas están erradas ó equivocadas, nada obsta para que se compruebe el error y se demande la devolución de lo indebidamente pagado. No se puede decir que la iniciación de una demanda tendente á salvar ese error implique un reclamo contra el procedimiento administrativo de la Municipalidad: es simplemente un reclamo para salvar un error de hecho en que ha incurrido la Municipalidad al visar las cuentas. Si se dijera que el adoquinado no fué construido de acuerdo con el contrato sería otra cosa; pues esa Corporación, procediendo administrativamente, es la única que puede resolver la cuestión, sin que los empresarios estén obligados á cuestionar con cada uno de los propietarios obligados al pago.



Afirmaciones—Véase: *Peritos*, núm. 5.

1. **Afirmados**—Las empresas de tramways se encuentran comprendidas en la escepción de la ley que obliga á los constructores de afirmados á descontar un tanto por ciento cuando los propietarios verifican el pago al contado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 156, Ser. 4^a.

2. **Afirmados**—Los propietarios pueden reclamar de los contratistas constructores de afirmados, en juicio ordinario, lo que indebidamente les hubiesen hecho pagar en juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 241, Ser. 4^a.

1.—Por disposición del art. 4º de la ley de 1º de Octubre de 1888, el pago de los afirmados debía hacerse por los propietarios en doce mensualidades por partes iguales y á la presentación de la cuenta con el descuento del 8 %/o. El art. 2º de dicha ley establecía que los propietarios de casas y terrenos estaban obligados á abonar la tercera parte del total del afirmado, debiendo la Municipalidad abonar las otras dos terceras partes. Por estas disposiciones no estaban comprendidas las empresas de tramways, que tienen sus líneas en las vías públicas. Después se dictó la ley de 13 de Nov. de 1888, la que en su art. 1º estableció la forma en que debía hacerse el pago, á saber: «En las calles donde hayan establecidas líneas de tramways, las empresas respectivas pagarán la cuarta parte del costo del afirmado, los propietarios de ambas aceras dos cuartas partes y la Municipalidad la otra cuarta parte.» De esta manera las empresas de tramways vinieron á ser gravadas con una carga que no establecía la ley de Octubre de 1888. Como se vé, la ley posterior no reformó la forma en que debía hacerse el pago, quedando por consiguiente subsistente la establecida por el art. 4º de la ley anterior; y como aquella determinaba la forma, resulta que la cuarta parte que las empresas estaban obligadas á pagar gozaba de las liberalidades de aquella disposición. La ley no distinguía las personas sujetas al pago, y consiguientemente tampoco los interesados pueden distinguir. Por otra parte, es más justo, es más equitativo que las empresas están equiparadas á los particulares que á la Municipalidad, pues los primeros se encuentran en igualdad de condiciones: ellos no intervienen en los contratos que se celebran ni establecen las condiciones del pago.

2.—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 525 del Cód. de Proc. Véase: verb. *Adoquinado*, núm. 4.



3. **Afirmados**—Las cuentas por afirmados aunque visadas por la Intendencia Municipal, solo tienen fuerza ejecutiva cuando para su expedición se han llenado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 383, Ser. 4^a.

1^a. **Agente Fiscal**—No es recusable por intervenir como parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 228. Serie 4^a.

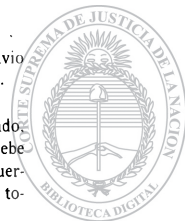
Agentes fiscales—Véase: *Fiadores*, núm. 1.

1^b. **Agravio**—La declaración de que quedan á salvo los

3—La cuenta que servía de base á la ejecución, estaba visada por la Municipalidad y procedía de trabajos hechos efectivamente, pero la forma y las condiciones en que se quería hacer efectivo el pago no se ajustaba á la disposición de la ley de afirmados. No se cobraba la tercera parte del costo sino la mitad: ni el cobro se hacía por cuotas sino que se pedía el pago íntegro. Además se comprobó que el empedrado había sido hecho sin licitación previa, siendo así que la ley exigía que este trámite administrativo se llenara, y solo las cuentas presentadas por esos trabajos y en las condiciones determinadas podían traer aparejada ejecución. Si los trabajos se hacen sin licitación previa, no se acuerda á los propietarios la garantía que la ley ha querido establecer á su favor á fin de que no se les obligase á pagar más de lo que justamente valen esos trabajos. El empresario que contrata sin ajustarse á las prescripciones de la ley, violándola, no puede invocarla á su favor, porque voluntariamente se ha colocado fuera del amparo de sus prescripciones. Al imponer la ley, á los propietarios, la obligación de pagar los trabajos de afirmados, sin que pudiesen intervenir en la formación de los contratos que al efecto debían celebrarse con los empresarios, no dejó librado al arbitrio del Poder Administrativo Municipal la forma en que esos contratos debieron celebrarse. De manera que cualquier contrato celebrado fuera de esas condiciones impuestas por la ley no tenía para los propietarios fuerza ejecutiva, siendo por consiguiente inhábil el título en que se fundaba la ejecución. Así se declaró por el Juez y fué confirmado por la Cámara.

1^a—Los representantes del Ministerio Público, no son recusables, pero deben manifestar cuando tienen algún impedimento legítimo á fin de que el Juez de la causa pueda darlos por separados—art. 390, Código de Proc.

1^b—Porque esa salvedad no entraña condenación alguna.



derechos de una parte contra un tercero, no causa agravio á la contraria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 124, Ser. 4^a.

Agravio—Véase: *Sentencia*, núm. 6.

1^a. **Agravio moral**—Justificada la culpa del demandado, nace la obligación de indemnizar el daño, y como tal debe ser tenido el agravio moral que sufre el padre por la muerte de su hijo, cualquiera que fuese su edad.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 154, Ser. 4^a.

2. **Agravio moral**—Debe ser confirmada la suma fijada como indemnización por el agravio moral, si el Tribunal la juzga equitativa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 149, Ser. 4^a.

Agravio moral—Véase: *Indemnización*, núm. 8.

Agregación—Véase: *Documentos*, núms. 5 y 6—*Testimonios*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 33—*Diligencias de prueba*, núm. 28—*Espediente*, núm. 5—*Prueba*, número 12.

Agregación de expedientes—Véase: *Testimonios*, núm. 1.

Agregación de firmas—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1^b. **Agrimensor**—Los honorarios del Agrimensor nombrado particularmente deben ser fijados por peritos: la disposición del Cód. de Proc. que ordena su regulación por el Dep. de Ingenieros, solo es aplicable cuando su nom-

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Cámara en el caso de Tapella. Puede verse asimismo el tom. 1^o, pág. 253, Serie 4^a de la Jur. Civ.

2—El art. 1084 del Cód. Civ. establece que el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla deben ser fijados con arreglo al criterio de los jueces. En esta designación están comprendidos todos los miembros del Poder Judicial: de manera que si el Juez de 1^a Inst. fija ese monto, y la Cámara cree que el Inferior ha ejercitado prudentemente el arbitrio judicial, la fijación debe confirmarse por la Cámara.

1^b—Arts. 1627 del Cód. Civ. y 625 del Cód. de Proc. Este último artículo legisla para los honorarios devengados en los juicios de mensura á que se refiere el tit. 20 del mismo Código.



bramiento ha sido judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 58, Ser. 4^a.

Agrimensor—Véase: *Honorarios*, núms. 5 y 27.

1. **Albacea**—No puede prescribir á su favor mientras no justifique haber cambiado la posesión para sí; la ley supone que ha continuado poseyendo para el causante ó sus herederos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3^a.

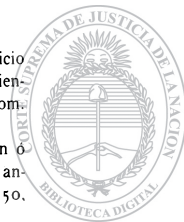
2. **Albacea**—Carece de personería para entablar demandas contra terceros á nombre de la testamentaria, cualquier que haya sido el origen de la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 312, Ser. 3^a.

3. **Albacea**—Está obligado á rendir cuenta de su admi-

1—Los interesados en una sucesión se presentaron diciendo que ésta tenía una finca en esta ciudad, de la que si bien no tenían título, existían en su poder las pruebas necesarias para formarlos. Acompañaron piezas de cuyo análisis resultaba que una señora hipotecó la propiedad de que se trataba en 1843 á favor del causante de la testamentaria, y que en el mismo año otorgó testamento nombrando albacea al acreedor hipotecario. Agregaban que fallecida la testadora, el albacea y acreedor hizo todos los gastos, pagó todos los legados, y como la testamentaria le quedara debiendo una suma de dinero al albacea, y no existiera sucesión, *aquel se la cobró quedándose con el terreno*, desde cuya época entró en quieta y pacífica posesión. Basta esta sola confesión para dejar establecido que esa posesión no pudo jamás dar por resultado el conferir el dominio al poseedor porque es elemental en derecho que para adquirir el dominio por prescripción, se requiere que la posesión sea *animo domini*—art. 2351, Cód. Civ.—esta calidad de la posesión se requiere aun en la continua de treinta años, la que por otra parte no requiere, ni buena fe ni justo título—art. 4015.—Además el art. 2353 establece que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. «El que ha comenzado á poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se prueba lo contrario».

2—Art. 3862 del Cód. Civ.

3—Debe rendir cuenta porque el art. 3868 del Cód. Civ. así lo preceptúa. En cuanto á la segunda parte, la Cámara dijo que las costas debían abonarlas el albacea porque no había contestado á la demanda ni



nistración y debe ser condenado en las costas del juicio si por su actitud en él hace necesario un pronunciamiento del Juzgado obligándolo á rendirlas. Jur. Civ., tom. 3, página 200, Ser. 3ª.

4. Albacea.—Contra quien se compruebe distracción ó mal manejo de fondos, debe ser destituido, pasando los antecedentes al Juez del Crimen—Jur. Civ., tom. 7, pág. 50, Ser. 3ª.

5. Albacea.—Carece de personería para entablar demandas á nombre de la sucesión, y debe ser condenado personalmente al pago de las costas de las que promueva.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Ser. 3ª.

6. Albacea.—Debe depositar el saldo que reconozca adeudar en la rendición de cuentas, sea ó no ésta aprobada—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4ª.

7. Albacea.—Carece de personería para representar á

tomó participación alguna en la tramitación del juicio hasta la sentencia, haciendo necesario el pronunciamiento de ésta y las diligencias que la habían precedido. Es evidente que si á un albacea se le exige rendición de cuentas y él se presta á ella, no hay porque condenársele en las costas, por el contrario las costas de esa rendición son de cuenta del que las pide.

4—Arts. 457, inc. 3º, y 3864 del Cód. Civ.

5—Art. 3862. La condenación en costas es personal á los albaceas porque no tienen personería para promover ningún juicio: carecen de acción y de facultad para iniciar juicio á nombre de la sucesión. Si las costas deben imponerse, no es justo que las pague la sucesión que no ha estado debidamente representada, y á nadie se le puede imputar mejor que á aquel que promovió el juicio sin derecho y contra la disposición terminante de la ley que se lo prohíbe.

7—El art. 3862 del Cód. Civ., establece que los albaceas no pueden intervenir en los pleitos que promueven los acreedores de la sucesión: y solo son parte los herederos ó legatarios. El albacea no representa á la sucesión, y por consiguiente el mandamiento no puede diligenciarse con él, teniendo presente la disposición del art. 471 del Cód. de Proc. Si bien es cierto que no es indispensable para la validez del



los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testamentaria: el mandamiento de pago debe librarse contra éstos, y la omisión de este trámite hace procedente la nulidad del juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

Albacea—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 7—*Administrador*, núm. 2—*Indivisión*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 17.

1^a. **Alegar**—El término para alegar, solo empieza á correr desde la fecha en que se puedan extraer los autos de la secretaría.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 242, Ser. 3^a.

2. **Alegar**—Cuando la demora en el diligenciamiento de la prueba no es imputable á la parte, debe suspenderse el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 392, Ser. 4^a.

Alegar—Véase: *Término para alegar*, núm. 2.

1^b. **Alegato**—El pedido de absolución de posiciones, no

juicio ejecutivo que el mandamiento de embargo se formalice personalmente con el deudor, también lo es que el mandamiento de ejecución debe dirigirse contra él á fin de que se le requiera el pago, por que solo en defecto de éste puede hacerse efectivo el embargo y proseguirse la tramitación del juicio, lo que basta para demostrar que la falta de esa formalidad anula el juicio porque es un trámite sustancial. Así opinan también los prácticos, como puede verse entre otros á Manresa y Reus, en su comentario á la Ley de Enj. Española, tom. 4^o, art. 971.

1^a—El retardo no pudo imputarse á la parte, por haber tenido que permanecer los autos en secretaría á causa de posiciones pedidas.

2—Art. 118 del Cód. de Proc.

1^b—Es jurisprudencia constante en los Tribunales. Sin embargo, debe distinguirse, si las posiciones se pidieron dentro del término de prueba y en tiempo hábil para producirse dentro de dicho término, en cuyo caso el término para alegar debe suspenderse porque no hay razón para hacer una escepción con este medio probatorio. Si las demás diligencias pedidas autorizan á que se suspenda el alegato hasta que se produzcan—art. 118, Cód. de Proc.—no hay razón para que se esceptúe de esa regla general la prueba de posiciones. Pero si ellas han



suspende el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 5, página 193, Ser. 3ª.

2. **Alegato**—El auto por el cual se declara decaído el derecho de presentar el alegato, es inapelable.—Jur. Civ. tom. 5, pág. 76, Ser. 4ª.

3. **Alegato**—Siempre que resulte comprobada la presentación del alegato á un escribano público antes del vencimiento del término, debe agregarse al expediente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 4ª.

4. **Alegato**—La absolución de posiciones, no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 4ª.

Alegatos—Véase: *Diligencias de prueba*, núm 2—*Prueba*, núms. 9 y 10—*Excepción de prescripción*, núm. 4.

1. **Alhajas**—Estas y los objetos de poco valor que el causante no haya determinado espresamente, correspon-

do pedidas después de vencido el término de prueba, es evidente que el término para alegar no puede suspenderse. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, núm. 12.

2.—Porque no causa gravamen irreparable, dice la Cámara. Es fuera de duda que causa un gravamen que no puede repararse. Si se devuelve el alegato, ¿cuándo llegará la oportunidad de repararse el agravio causado? El sumario consagra la jurisprudencia establecida por la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Alegato*, núm. 1. Se ha resuelto también que el auto que suspende el término para alegar no es apelable.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Alegar*, núm. 135.

4.—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en numerosos casos. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, núm. 12. Es necesario hacer la distinción que contiene la nota nº 1; —tom. 2º, verb. *Término*, número 15, y *Alegar*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Término*, núm. 2581.

1.—El legado se hizo de los muebles y ropas de uso. En mérito de esta cláusula se reclamaron también alhajas, las que se mandaron entregar porque la intención del testador fué la de legar todas las cosas muebles que dejaba, y que estaban comprendidas en la designación hecha por él mismo bajo las palabras «muebles y ropas de uso». El testador hizo una enumeración de todos sus bienes muebles y demás,



den al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4^a.

Alimentario—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1.

1. **Alimentos**—Deben ser proporcionados á los bienes del alimentario, de tal manera que la suma fijada no pueda en ningún caso sobrepasar á sus facultades.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 63, Ser. 3^a.

2. **Alimentos**—Las obligaciones del padre, respecto de los alimentos de los menores, no pueden ser exigidas de la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 424, Ser. 3^a.

sin enumerar las alhajas reclamadas habiéndose constituido el legado sobre los demás bienes no enumerados, era evidente la intención del testador de que lo reclamado quedara comprendido en el legado.

1—La alimentación que se acuerde á los hijos no ha de ser tal que pueda poner al alimentario en el caso de no poder cumplir con las obligaciones que impone la naturaleza y que tienen su fundamento en los dos instintos más poderosos de todo ser, cuales son, el de la reproducción y el de conservación.

2—Un padre se obligó á prestar alimentos á sus hijos, y no habiéndolos satisfecho se dirigió acción contra la testamentaria de la madre de los menores, esposa del alimentario. Se fundaba la acción en que aun cuando la obligación en que se fundaba sea personal contra el padre, puede la acción dirigirse contra la testamentaria de la esposa, por cuanto siendo éste cónyuge y heredero de la esposa, la acción contra el intestado es pertinente contra la testamentaria, máxime si se tiene presente que al esposo no se le conocen otros bienes que los que puede heredar en la testamentaria. En esta argumentación hay una confusión de derechos: una cosa es la obligación de responder á los reclamos por actos personales, y otra cosa es la garantía de los bienes en que el resultado de dichos reclamos tengan que hacerse efectivos. Y así en el caso presente, el acreedor puede, si cree convenirle, deducir su demanda contra el padre, y si ella prospera, hacer efectivas las responsabilidades á que éste sea condenado en los bienes que puedan corresponderle en la testamentaria de su esposa ó en otros cualesquiera, á elección del reclamante: cosa muy distinta la una de la otra por cierto.



3. **Alimentos**—La pensión; por alimentos á menores, debe pasarse desde la fecha en que el cuidador los tenga en su poder, aun cuando la sentencia que fija la obligación no lo haya declarado esplicitamente.—Jur. Civ., tom. 5, página 131, Ser. 3ª.

4. **Alimentos**—Si bien la ley permite que los alimentos puedan exigirse en juicio sumario, procede su petición en demanda ordinaria, en la que debe justificarse el título en cuya virtud se exigen.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 319, Serie 3ª.

5. **Alimentos**—Para que proceda la demanda de alimen-

3—La sentencia estableció que los alimentos debían pesar proporcionalmente sobre ambos padres, sin establecer la fecha desde cuando debieron prestarse los alimentos. Es indudable que esa fecha debe contarse desde que uno de los cónyuges se hace cargo de los hijos, pues no sería equitativo que se obligara á uno solo al pago de los gastos ocasionados durante la época transcurrida entre la demanda de alimentos y su fijación definitiva. El art. 604 del Cód. de Proc. establece que los alimentos se deben por mensualidades adelantadas.

4—Para exigir alimentos debe comprobarse el derecho en virtud del cual se piden, y esa justificación puede hacerse conjuntamente con la demanda de alimentos, sin que sea necesaria la justificación previa del parentesco, pues no sólo no existe disposición alguna de la ley que así lo prescriba, sino que no habría razón alguna para exigirse esa justificación previa. La paternidad ó el parentesco aducido como fundamento de la demanda, es un hecho que debe establecerse en el curso de ella, como que es la base de la acción. Cuando la ley autoriza al demandante para deducir la acción sumaria á que se refiere el tit. X del Código de Proc., ella no ha querido privarle del derecho á deducir la acción por la vía ordinaria, si cree convenirle. El fundamento del juicio brevísimo de alimentos está en la necesidad de satisfacer las más impetuosas necesidades de la vida. El juicio sumario de alimentos no implica supresión del juicio ordinario: es un privilegio que la ley acuerda y que como tal puede renunciarse. El juicio sumario ha sido instituido para los alimentos *provisorios* y el juicio ordinario para los *definitivos*. El que tiene derecho á ser alimentado, puede elegir cualquiera de las dos vías, como mejor le conviniere.

5—El sumario no espresa el caso resuelto. Una señora se presentó



tos. el actor debe justificar el título que invoca.—Jur. Civil, tom. 6, pág. 181, Ser. 3ª.

6. **Alimentos**—El Ministerio Fiscal solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes de alimentos y litispensas.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

7. **Alimentos**—La sentencia de alimentos hace procedente el embargo de bienes suficientes para responder á su pago.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 4ª.

8. **Alimentos**—Las diligencias pedidas por el alimentario, no suspenden la tramitación del juicio de alimentos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 394, Ser. 4ª.

9. **Alimentos**—Antes de la partición, los herederos tienen derecho á una cuota alimenticia imputable á su haber

entablado demanda contra la sucesión de un causante, fundándose en que éste le había entregado un niño recién nacido para que lo cuidara: lo tuvo durante 7 años sin que se le abonasen los alimentos. Decía que existía un contrato y que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1627 pedía el pago de sus servicios. La parte no comprobó ninguno de los extremos. No comprobó el carácter de hijo que invocaba á nombre del niño, ni comprobó la existencia del contrato. La demanda no pudo prosperar y fué rechazada.

6—La intervención que se le da al Fiscal en el juicio de divorcio, se funda en la necesidad de velar por la observancia de las leyes de orden público, en cuanto concierne al matrimonio. En las cuestiones de alimentos y litis espensas, el ministerio público no está interesado, y por consiguiente, no hay razón para que intervenga el Fiscal.

7—La parte obtiene una sentencia favorable y puede, de acuerdo con el art. 448 del Cód. de Proc., pedir un embargo preventivo.

8—El alimentario quiso paralizar el juicio de alimentos provisorios, solicitando medidas probatorias propias del juicio de alimentos definitivos, á lo que la Cámara no hizo lugar, fundándose en el art. 607 del Código de Proc.

9—Se tuvo en cuenta las circunstancias especiales en que se encontraba la parte que solicitaba los alimentos.



en la oportunidad debida.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 399, Ser. 4^a.

10. **Alimentos**—En el juicio sumario de alimentos, todas las excepciones son improcedentes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 152, Ser. 4^a.

11. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley prescribe, procede la fijación de alimentos á los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

12. **Alimentos**—Dictada sentencia de alimentos, debe decretarse embargo aunque no se encuentre consentido. Jur. Civ., tom. 9, pág. 17, Ser. 4^a.

13. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley exige, la prestación de alimentos es ineludible.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 222, Ser. 4^a.

14. **Alimentos**—El marido, además de los alimentos, debe pagar los muebles que la esposa necesita para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

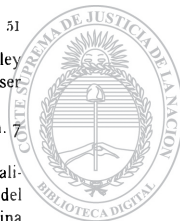
10—El art. 607 del Cód. de Proc. prohíbe toda discusión sobre el derecho á percibir los alimentos ó sobre su entidad. Es en la demanda ordinaria donde deben ventilarse esas cuestiones y no pueden involucrarse en el juicio sumario sin desnaturalizarlo, haciendo frustránea la intención del legislador.

11—Art. 331, Cód. Civ., y 602 del Cód. de Proc.

12—Porque se ha obtenido una sentencia favorable. Véase el número 7. Y porque en el juicio de alimentos, la sentencia que se dicta no necesita quedar consentida, pues solo es apelable en efecto de devolutivo—art. 605 del Cód. de Proc.

13—Art. 604 del Cód. de Proc.

14—El marido está obligado á prestar á la esposa todos los recursos que le fueren necesarios, pudiendo ésta, en el caso de que aquél falte á esa obligación, pedir judicialmente que le pase los alimentos y las expensas necesarias en los juicios. Entre los recursos que el marido debe prestar á la mujer, deben comprenderse los muebles necesarios para su uso, atendida su condición social, pues tanto estos como la ropa necesaria para vestir, son elementos indispensables para la vida.



15. **Alimentos**—Justificados los extremos que la ley exige, la sentencia que obliga á pasar alimentos debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 123, Ser. 4^a.

Alimentos—Véase: *Costas*, núm. 29—*Embargo*, núm. 7.
—*Pensión alimenticia*, núm. 1.

1^a. **Alimentos provisorios**—La sentencia que fija para alimentos provisorios una suma proporcionada al caudal del alimentario, no causa agravio.—Jur. Civ., tom. 1, página 89, Ser. 4^a.

2. **Alimentos provisorios**—Reconocidos los hijos naturales y probado el caudal del padre, la sentencia que lo condena al pago de alimentos no causa agravios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 311, Ser. 4^a.

3. **Alimentos provisorios**—La cuota fijada y consentida para alimentos provisorios, en juicio sumario, solo puede ser modificada en juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 173, Ser. 4^a.

4. **Alimentos provisorios**—Justificados los extremos de la ley, es procedente la fijación de alimentos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 49, Ser. 4^a.

Alimentos provisorios—Véase: *Juicio sumario*, núm. 1.

Almoneda—Véase: *Personería*, núm. 1.

1^b. **Alquiler**—Para que exista mora en el pago de alquiler

15—Art. 664, Cód. de Proc.

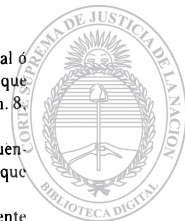
1^a—No causa agravio porque una resolución así fundada es justa. La sentencia que fija los alimentos provisorios, es apelable en el solo efecto devolutivo—art. 603, Cód. de Proc.

2—No causa agravio, pero es apelable en el efecto devolutivo—artículo 603, Cód. de Proc.

3—Cualquiera reclamación que las partes quieran hacer respecto á la entidad y al derecho de los alimentos provisorios, debe ventilarse en la forma ordinaria—art. 607, Cód. de Proc.

4—Arts. 602 y 604 del Cód. de Proc.

1^b—El art. 1579 del Cód. Civ., faculta al locador para pedir la resc.



leres, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial o extrajudicial hecho en el domicilio del deudor, siempre que no exista lugar designado para el pago.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 349, Ser. 4^a.

2^a. **Alquiler**—La prueba de que la suma recibida á cuenta era como arras y no como alquiler, corresponde al que lo afirma.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4^a.

3. **Alquiler**—El embargo del alquiler hace procedente el nombramiento de administrador judicial.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 51, Ser. 4^a.

Alquiler—Véase: *Locación*, núm. 6—*Daños y perjuicios*, núm. 90—*Acto ilícito*, núm. 10.

1. **Alquileres**—Reconocido el carácter de locatario y el precio de la locación, el pago de los alquileres es ineludible.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 3^a.

2^b. **Alquileres**—Su cobro en juicio ejecutivo solo proce-

sión del contrato cuando el locatario ha dejado de abonar dos mensualidades consecutivas: para que este artículo sea aplicable, se requiere que el deudor hubiese incurrido en mora, la que no se opera por el solo transcurso del tiempo. Es necesario que el locador exija del locatario el pago de la locación, y recién después de ese requerimiento sin resultado, el locatario incurre en mora. En el contrato no se estableció lugar para el pago, en cuyo caso éste debe hacerse en el domicilio del deudor—art. 747, Cód. Civ.—á menos que fuese alguno de los casos especificados en el art. 509 del mismo Cód. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Mora*, núm. 1; tom. 2, mismo verb.; tom. 1, verb. *Alquiler*, número 158.

2^a—El recibo no expresaba el carácter en que se hacía la entrega: esta es una cuestión de hecho cuya prueba incumbiere producir al que afirma ese carácter especial que le quiere dar.

3—El Juez dijo que en atención á que la propiedad embargada estaba abandonada, procedía el nombramiento de un depositario judicial.

1—Art. 1556 del Cód. Civ.

2^b—El art. 466 del Cód. de Proc. lo expresa terminantemente cuando requiere para preparar la vía ejecutiva que el demandado manifieste



de mientras el locatario ocupa el predio arrendado.—Jurisprudencia Civ., tom. 3, pág. 15, Ser. 4^a.

3. Alquileres.—Aun justificada la locación, no procede la inhibición general para garantizar los alquileres.—Jurisprudencia Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4^a.

Alquileres.—Véase: *Fianza*, núm. 2.

1. Aluvión.—Para que el terreno acrecentado por alu-

previamente si es *locatario*. Véase Inst., tom. 3, verb. *Acción*, núm. 2; tom. 1, verb. *Alquileres*, núm. 162; Jur. Civ., tom. 5, pág. 450, Ser. 1^a. La acción ejecutiva se acuerda al que es *inquilino actual*.

3.—Tendría solo derecho para solicitar el embargo preventivo de las cosas afectadas á su privilegio de locador, acordado por el Cód. Civ.; y dado el caso de que no se le conociese bienes procedería la inhibición, decía el Juez. Habiéndose confirmado por sus fundamentos la resolución, resulta que la inhibición puede pedirse cuando no se le conocen bienes al locatario.

1.—Se solicitó por un propietario ribereño el deslinde judicial de su propiedad, cuyos títulos aunque indicaban la extensión de que ella constaba, le señalaban también límites determinados, lindando por uno de sus costados con el río. Decretado y practicado el deslinde, resultó que la superficie contenida dentro de estos límites era mucho mayor que la designada en los títulos, excediéndola en cinco hectáreas. El terreno se hallaba situado muy próximo á Buenos Aires, en sus alrededores, siendo de mucho valor. La Municipalidad entabló acción reivindicatoria, la que fué desechada. Esta corporación sostuvo que el exceso del terreno debía reputarse público, ya que se le considere terreno no repartido, ó que se suponga formado posteriormente por aluvión, por ser adyacente á la margen de un río navegable. La parte contraria dijo: que suponiendo que todas las enagenaciones ó traspasos del terreno se habían verificado *ad-corpus* sin otro límite en uno de sus rumbos que el río, pretendía que le habría correspondido el derecho de aluvión, en virtud de que le pertenecía el aumento natural que aquel hubiese tenido: que aun cuando no fuese así, habiendo tenido título para poseer todo el terreno comprendido dentro de los límites asignados por la escritura, y habiéndolo poseído efectivamente hasta el mismo río, él y sus causantes lo habrían prescrito en virtud de la posesión durante el tiempo requerido por la ley: y que encontrándose en legítima posesión del terreno disputado, si la Municipalidad afirma ser suyo, le incumbe el acreditar-



vión sea del dominio público, debe justificarse plenamente que su formación es posterior á la promulgación del Cód.

lo, mucho más cuanto que constando haber salido el terreno del dominio público, no habría podido volver á caer en él sino mediante un título especial de nueva adquisición. La Municipalidad por su parte sostuvo que no existe en favor de los particulares el derecho de aluvión en la costa de los ríos navegables; que no pudo haber prescripción porque ésta requeriría cuarenta años de posesión que aun no se habían cumplido: y por último que habiendo sucedido esta Corporación en los derechos del Estado que por su soberanía es dueño de todo lo que no se halle sujeto á propiedad particular, no reivindica en las condiciones de los demás bastándole á justificar su demanda, el que resulte que él poseedor carece de títulos legítimos. El poseedor comprobó por medio de testigos, y planos topográficos con carácter público, haber sido poseedor, él y sus causahabientes en propiedad, del terreno hasta el río. Se declaró que el exceso del terreno pertenecía al poseedor en virtud de la prescripción que se había operado. Las leyes 14 y 21, tít. 12, lib. 4º, Rec. de Indias, reconocen y admiten, en términos espresos, la prescripción de tierras realengas, pero no se hallaba determinado del mismo modo el tiempo que ella requería. Pero es sabido que estaba resuelto, que los bienes raíces pertenecientes á las ciudades ó á los cabildos, no se prescribían por menos de cuarenta años; de donde resulta que las tierras fiscales tampoco podían prescribirse en menos tiempo. Esta fué la opinión general y fué la doctrina que prevaleció, de acuerdo con la legislación romana que exigía también cuarenta años en la prescripción de bienes vacantes aun no incorporados al patrimonio del Fisco.—Zolórzano, Polit. Indiana, tom. 2º, lib. 6º, cap. 12, núm. 10; Escala Gazof, lib. 1º, cap. 25, núm. 57.—Estos principios fueron consagrados espresamente por nuestra legislación provincial de 1867. Debe tenerse presente la declaración hecha por el Cód. Civ. en su art. 4051, por el cual se establece que aunque las prescripciones comenzadas antes de su vigencia deben regirse por las leyes anteriores, si por ellas se requiere mayor tiempo que el que el Código exige, se consideran completas desde que haya transcurrido el plazo que ésta determina, contando desde que se puso en vigencia dicha ley. Se quiso establecer en términos absolutos, que siendo del dominio público las costas de los ríos navegables, lo son también los nuevos terrenos que lleguen á formarse paulatina y sucesivamente, por aluvión. Así sucede con arreglo á las prescripciones del Cód. Civ. que hoy nos rige. Pero es necesario averiguar si lo propio sucedía con arreglo á la antigua



go Civil, pues por las antiguas leyes correspondía al propietario ribereño.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 63, Ser. 3ª.

doctrina vigente según las leyes españolas, las que estaban calçadas en las del derecho romano. Por el derecho romano solamente el uso de las costas de los ríos navegables era público, pero su propiedad correspondía a los ribereños, los que sin embargo sufrían una servidumbre legal, que les impedía hacer cosa alguna que importase un obstáculo a la navegación, ó prohibir a los navegantes que se sirviesen de aquellas en lo que fuese preciso. Aun la propiedad al álveo, en cuanto no fuese ocupado por las aguas, se entendía ser de los dueños de las heredades confinantes con los ríos, por cuya causa les correspondía también las islas que en ellas aparecían, y el suelo que quedase seco si mudasen su curso; lo que la fuerza de la corriente, arrebatando de una parte, trasportase a otra, y en fin, el terreno que se formase en la costa paulatina y sucesivamente, que es lo que se llama aluvión. Esta doctrina está espuesta en las Instituciones, lib. 2º, tit. 1º, §§ 4, 20, 21 y 22, en términos que no dejan lugar a duda de ningún género, y la dilucidan los comentadores entre otros Pothier, Voet y Vinnio. Debe tenerse muy presente que ese derecho no se acuerda a las poseedores de predios concedidos por medida, sino tan solo a los que no tienen más límite que el río, por cuya razón se les llama *arcifinios*. Las Partidas adoptaron la misma doctrina y las incorporaron a sus disposiciones.—Leyes 6, 7, 26, 27 y 31, tit. 28, Part. 3ª.—De éstas la más pertinente al caso que nos ocupa es la Ley 26, la que dice: «E por ende dezimos que todo quanto los ríos tuellen a los omes poco a poco, de manera que no puedan entender la quantia dello porque no lo llenan ayuntadamente, que lo ganan los señores de aquellas heredades a quien lo ayuntan e los otros a quien lo tuellen non han en ello que ver.» Ahora bien, si aplicamos esta doctrina al caso que nos ocupa, en que se trata de un terreno cuyos títulos, haciendo constar varias enagenaciones *ad corpus* señalan por límite un río navegable, y remontan al tiempo en que regía la Ley de Partida que se acaba de transcribir, tendríamos averiguado que a los causahabientes del actual poseedor, le correspondía el derecho de aluvión en lo que hubiese acrecido a dicho terreno. Es cierto que el Cód. Civ., ha cambiado por completo el sistema de legislación en esta materia; porque como ella prescribe que debe dejarse a la costa de los ríos navegables una calle de treinta y cinco metros de ancho, desde entonces los particulares, no lindando ya con los ríos, no pueden continuar gozando los derechos enunciados de accesión natural, y todos ellos se han transferido al público.—Véanse los articu

2. **Aluvión**.—Aun después de la promulgación del Código Civil, para que los terrenos formados por aluvión correspondan en propiedad á la Municipalidad, debe existir perfectamente deslindada la extensión de ribera que

los 2346, 2572, 2575 y 2639 del Cód. Civ.—Pero para que este cambio de legislación pueda aprovechar á la Municipalidad, es necesaria la concurrencia de dos circunstancias: 1ª, que la Corporación demuestre que el terreno cuestionado se hubiese formado por aluvión en los últimos años, es decir, con posterioridad á la vigencia del Cód. Civ., cuyas disposiciones debieron por consiguiente regir en el caso; 2ª, que la calle de treinta y cinco metros prescripta por la ley hubiese sido trazada efectivamente, y determinándose según correspondía hacerse, pues como puede observarse por los términos en que se encuentra redactado el art. 2639 del Cód. Civ., ello no importa declarar espropiada *ipso jure*, todas las costas de los ríos navegables en el ancho que designa, sino que impone simplemente la obligación á los propietarios limitrofes con los ríos, que sirven á la comunicación por agua, de dejar dicha calle de la extensión espresada, obligación cuyo cumplimiento incumbe á no dudarlo, á la misma Municipalidad. Antes de esto, el propietario no pierde su dominio, pues según los principios mismos del Código, aquél no se transmite por la sola obligación, como erróneamente lo establece la legislación francesa, sino mediante la tradición, y sin que á los ribereños pueda siquiera considerárseles constituidos en mora antes de haber sido requeridos para verificarlo—art. 306 y 572.—También sería imposible, sin este requisito, deslindar ó definir los respectivos derechos de los ribereños y de la Municipalidad en la materia de que se trata. Y así suponiendo en el caso que nos ocupa, que el aluvión empezó á formarse desde muchos años atrás, y continuó aumentando en el último tiempo después de la publicación y vigencia del Código. ¿Cómo se determinaría ahora, en dónde viene á quedar la calle que se mandaba dejar, para averiguar lo que en el terreno nuevamente formado pertenciese al propietario limitrofe, y lo que correspondería á la Municipalidad? No habría ciertamente manera de establecerlo, y no puede adoptarse otra resolución más equitativa que el reconocer que el terreno debe suministrar los treinta y cinco metros para calle siempre que esa extensión fuese necesaria por carecer de ella la Municipalidad—art. 2773.

2 Véase nota precedente.





aqué! fija á los ríos navegables.—Jur. Civ., tom. 2, página 263, Ser. 3^a.

3. **Aluvión**—Si por efecto de éste, existe terreno bastante para dejar los cuarenta metros que fija la ley, el propietario ribereño queda exonerado, de la obligación que aquélla le impone.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

1^a. **Allanamiento**.—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

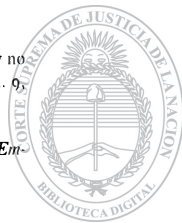
Allegados—Véase: *Condominio*, núms. 4 y 5.

1. **Amistad**—La del Juez con el abogado, no es causa

3—Véase el núm. 1.

1^a—Un Comisario de Policía, penetró en el club Sud-América violando el domicilio de la persona jurídica, pues estaba legalmente autorizada por el Gobierno, procedió á la prisión del presidente y de todos los socios. La acción deducida es la que procede de un delito del derecho criminal—arts. 1077, 1078 y 1096.—Para todo club que reviste legalmente el carácter de persona jurídica, la inviolabilidad de su domicilio está amparada por el art. 18 de la Const. Nac. y el Comisario al penetrar en él sin el competente permiso ó sin la autorización necesaria, incurre en el delito previsto por el art. 165 del Cód. Pen. El carácter de Comisario no autoriza para allanar el domicilio sin orden escrita de Juez competente. Ni siquiera bastaría la orden verbal del Jefe de Policía para eximirse de responsabilidad. Para salvar su responsabilidad sería necesario que la orden en virtud de la cual procede á entrar en el local, esté legalmente espresada en la faz del documento.—Calvo, Decisiones Constitucionales, núm. 2588.

1 —El abogado fué nombrado Síndico de un concurso civil por el Juez de la causa. No se hizo lugar á la recusación porque según la Cámara, el Síndico reviste el carácter de representante de los acreedores, no siendo por consiguiente el caso previsto en el art. 368, inc. 10. La Cámara padece error cuando dice que el Síndico representa á los acreedores. Según opiniones autorizadas el Síndico tiene una triple representación, pues representa no solo á los acreedores sino también al deudor y á la ley. Así lo tiene resuelto la Cámara de



de escusación en cuanto éste representa á terceros y no tenga interés personal en el juicio. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 44, Serie 4ª.

Amistad—Véase: *Abogado*, núms. 12 y 13.

Ampliación—Véase: *Compulsa de libros*, num. 1—*Embargo*, núm. 18—*Informes*, núm. 3.

Animal—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 38.

Antecedentes—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11.

Anticipos—Véase: *Habilitado*, núm. 1.

1. **Apelable**—El auto que rechaza al apoderado ó procurador nombrado, es apelable.—Jur. Civ., tom. 3, página 92, Ser. 4ª.

2. **Apelable**—La sentencia que no hace lugar á las excepciones opuestas á la ejecución de una sentencia, es apelable aun cuando no se haya producido prueba. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4ª.

Apelable—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 9—*Diligencias judiciales*, núm. 3.

lo Com.—Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Acreedores*, núm. 3 y su nota.—Si el Síndico tiene esta triple representación, es evidente que la recusación no procede en el caso del sumario, porque la parcialidad del Juez debe temerse que se ejerza en favor de uno solo de los litigantes, pero si aquí todos concurren en una sola persona que los representa, no puede existir ese temor; porque si el Síndico puede ejercitar su influencia para con el Juez, ella concurrirá con igual fuerza á favor de todos y cada uno de sus representados conjuntamente.

1.—Trae gravámen irreparable, y afecta los derechos de la parte privándola de la facultad de elegir libremente quien la represente en juicio.

2.—No se produjo prueba porque el ejecutante se opuso á la admisión de las excepciones por considerarlas improcedentes é inadmisibles en cuyo caso es apelable la resolución que se dicte—art. 491 del Código de Proc. Lo propio sucede en las excepciones que constituyen cuestiones de puro derecho, en las que no se producen prueba, y á pesar de ello la resolución que recaiga es siempre apelable.



1^a. **Apelables**—En el juicio ejecutivo solo son apelables los autos que la ley espresamente declara tales.—Jur. Civ. vil., tom. 1.º, pág. 28, Ser. 3^a.

Apelables—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1.

1. **Apelación**—En espedientes contenciosos, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3^a.

2. **Apelación**—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 4^a.

Apelación—Véase: *Acreeedor hipotecario*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 10 y 45—*Diligencias judiciales*, núm. 3—*Recurso de apelación*, núm. 1—*Concurso civil*, núm. 2—*Recurso de reposición*, número 2.

1^b. **Apelación de hecho**—El escrito interponiendo el recurso de apelación de hecho, no puede ser fundado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 24, Ser. 4^a.

1^a—Art. 305 del Cód. de Proc.—El ejecutado apeló de una providencia que no era apelable según el artículo citado. Debe tenerse presente que la inapelabilidad de los autos en el juicio ejecutivo solo ha sido establecida por el ejecutado, pudiendo el ejecutante apelar de todas aquellas providencias que decidan algún artículo ó traigan gravámen irreparable, como si se tratara de un juicio ordinario.

2—El recurso de apelación una vez concedido solo puede aprovechar al que lo interpuso, pudiendo renunciar á ese beneficio que acuerda la ley á todo litigante, cuyas pretensiones hubiesen sido rechazadas. El desistimiento no puede nunca perjudicar á la parte contraria, y por consiguiente no tiene derecho á oponerse.

1^b—Con motivo del recurso de hecho el apelante infringió el artículo 269 del Cód. de Proc., pues «entró en consideraciones tendentes á demostrar los agravios que le infería el auto apelado. No se puede fundar la apelación espresando los agravios que la resolución apelada causa, pero sí puede fundarse el recurso á fin de dejar establecida la procedencia de la apelación indebidamente denegada.



2. **Apelación de hecho**—El recurso directo ante la Cámara, en los asuntos contencioso-administrativos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

1. **Apellido**—Justificada la identidad de la persona por instrumentos públicos, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 4^a.

Apellido— Véase: *Filiación natural*, núm. 3—*Menores*, núm. 2.

1^a. **Apercibimiento**—Para qué surta efecto, debe especificar lo que sucederá al apercibido; la cláusula de «en

2—El art. 52 de la Ley Org. de la Municipalidad, dispone que los particulares que se consideren damnificados por las resoluciones municipales deberán ejercitar su derecho en juicio contencioso-administrativo, con apelación para ante el Tribunal que el Cód. de Proc. designa. La ley de Nov. de 1886 prescribe á su vez que la Cámara conocerá de los recursos contra las resoluciones de la Municipalidad en asuntos de carácter contencioso-administrativo. La jurisprudencia ha fijado el alcance de estas disposiciones, estableciendo que á falta de un procedimiento especial y mientras no se dicte la ley de Proc. en lo contencioso-administrativo, debe aplicarse por analogía el ordinario ó común. De manera que el damnificado por las resoluciones municipales debe interponer el recurso de apelación ante la misma Municipalidad en el tiempo y forma que prescribe el Cód. de Proc. Así la Cámara no puede conocer por un recurso directo sino después que la apelación hubiese sido denegada por la misma Municipalidad. Debe tenerse presente que las resoluciones de la Municipalidad son las únicas que pueden llevarse ante la Cámara, pues las de la Intendencia solo son apelables para ante el Consejo. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia establecida en otros casos entre los cuales pueden citarse los que se registran en el tom. 8^o, pág. 599, Ser. 1^a; y tom. 1^o, págs. 103 y 110, 1^a Ser. de la Jur. Civ.

1^o— La citación fué para absolver posiciones, la que debe hacerse de acuerdo con lo que dispone el art. 127 del Cód. de Proc. que espresamente preceptúa que sea «bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso».



cuanto ha lugar por derecho», no basta para dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 368, Ser. 3ª.

2ª. **Apercibimiento**—Procede si el Juzgado conceptúa irrespetuosos los términos de un escrito.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 3, página 56, Ser. 3ª.

Apercibimiento—Véase: *Jactancia*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 15—*Remate judicial*, núm. 19.

1ª. **Apoderado**—Sus honorarios se prescriben á los dos años de liquidados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 163, Serie 3ª.

2ª. **Apoderado**—La renuncia de éste, no suspende la tramitación. La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario debe hacerse por edictos si no se conoce el domicilio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 3ª.

3. **Apoderado**—O procurador judicial, puede representar ó acompañar á su poderante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 127, Ser. 3ª.

4. **Apoderado**—Este á nombre de su mandante, puede pedir la nulidad de lo actuado con su intervención, si carecía de facultad para representarlo en juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3ª.

5. **Apoderado**—La ratificación de la persona capaz reválida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados perso-

2ª.—La Cámara consideró ofensivos al decoro del Juzgado los términos en que estaba concebido el escrito y confirmó la resolución del Inferior.

1ª.—Art. 4032 del Cód. Civ.

2ª.—Art. 20 del Cód. de Proc.

3.—Véase: verb. *Actos judiciales*, núm. 1.

5.—Art. 1059 y siguientes del Cód. Civ.



nalmente ó por medio de apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Ser. 4^a.

6. **Apoderado**—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios, directamente á su patrocinado con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

Apoderado—Véase: *Posiciones*, núms. 1, 3 y 4—*Domicilio*, núm. 1—*Fallecimiento*, núm. 6—*Mandatario*, número 15—*Transacciones*, núm. 11—*Obligación de hacer*, núm. 15.

1. **Apoderado único**—Los interesados que gestionen iguales derechos, deben nombrar un solo apoderado que intervenga en el juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 348. Serie 3^a.

2. **Apoderado único**—Deben nombrarlo, si existen varios

6—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.

1—Para obligar á las partes que gestionan el mismo derecho en virtud de un interés común, á nombrar un apoderado único, es necesario proceder con muchas reticencias, porque la medida está muy restringida por la ley á ciertos y determinados casos que la práctica ha querido ampliar, con grave perjuicio de los litigantes. En el caso presente eran dos los interesados, los que estuvieron conformes en que cualquier de los dos fuese el representante único. Una vez nombrado uno de ellos, el otro apeló y la Cámara confirmó el nombramiento fundándose en ese consentimiento y en la falta de oposición.

2—Esta resolución tiene su fundamento en varias disposiciones de las leyes españolas, las que no todas están de acuerdo en sus términos; la primera disposición que se dictó á este respecto fué la Ley 3^a, tit. 2^a, lib. 2^a del F. Juzgo, al establecer «que si los que se querellan fueren muchos, deben escojer uno ó dos de sí, que traygan el pleyto», dice: «Si de alguna de las partes son muchos querellosos, e de la otra pocos, el juez deve mandar, que escoian entre sí quales traian el pleyto, ca non lo deven todos razonar de so uno; mas aquellos solamiente que fueran puestos dambas las partes, que ninguna de las partes non sea destorvada por grandes voces ni por grandes vueltas.» La ley 15, tit. 10, lib. 1^a, dice: «Si muchos han un pleyto de so una, quier en demandar,



demandantes ó demandados. — Jur. Civ., tom. 5, pág. 217, Ser. 3^a.

3. **Apoderado único**—Aun cuando el procurador pueda individualizar la defensa, si son varios demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3^a.

quier en responder, den todos un personero, ca no es razon que un pleyto se raze por muchos.» La ley 5^a, tit. 1^o, lib. 2^o de F. R. también se refiere á esta clase de representación única, pues la que legisla con especialidad el caso, es la ley 6^a siguiente la que dice: «Si sobre una demanda fueren muchos homes, de la una parte, y pocos, ó muchos de la otra, el alcalde mande, que cada una de las partes dei quien raze por si; y no li deben todos razonar: mas aquellos que fueren dados amas las partes razonen, porque el pleyto no sea destorvado por voces de muchos.» Se da asimismo por nuestros jueces como fundamento del sumario la ley 18, tit. 5^o, Part. 3^a, pero esta ley no es aplicable al caso porque en ella se habla de aquel en que un mismo litigante constituye varios apoderados para el mismo pleito, y siempre que todos ellos quisieren defender el mismo derecho, la ley dice: «que aquel que primeramente lo comenzare es tenuto de lo seguir, fasta que que sea acabado e los otros non se deuen ende trabajar. Pero si todos los personeros vinieren en uno al pleyto, e la otra parte de agraviare en razonar con todos, deuen dar uno dellos que raze. E si non se acordaren, tome el Juez qual dellos entendiese que lo fara mejor.» Esta ley trata del caso inverso al del sumario, allí se trata de un pleito en que hay varias partes que desempeñan el mismo rol de actores ó demandados, mientras que en esta ley se trata de un litigante que constituye varios apoderados para el mismo pleito, lo que ya no se estila entre nosotros. Se cita asimismo como que resuelve el caso la ley 6^a, tit. 10, Part. 3^a, pero ella no tiene relación con el caso del sumario. De lo espuesto resulta que los jueces no están habilitados á nombrar ó á obligar á las partes á nombrar un solo apoderado sino en casos muy limitados, como lo hemos dicho en el número 1^o. Nuestros Tribunales hacen lo contrario, amplian la disposición á casos que no entran en el espíritu ni en la letra de la ley. No debe olvidarse que cuando nuestro Cód. de Proc. quiere que se nombre un representante único, porque la uniformidad del juicio así lo exige, lo establece espresamente—artículos 633 y 722.—Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Apoderado*, núm. 1.

3—Véase el número precedente.



4. **Apoderado único**—Procede el nombramiento de oficio de un apoderado común que represente los derechos de los herederos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 97, Ser. 4^a.

5. **Apoderado único**—La unidad de la representación que exige el nombramiento de un solo apoderado, no procede si entre los demandados existe oposición de intereses que haga inevitable la diversidad de la defensa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4^a.

6. **Apoderado único**—Cuando la ley obliga á los demandantes al nombramiento de un solo apoderado, no es procedente la contrademanda en la misma forma siempre que el demandado reconozca que su derecho y como consecuencia la obligación de los demandantes tiene distinto origen y puede dar lugar á defensas completamente opuestas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

Aprobación—Véase: *Contador*, núm. 1—*Costas*, núm. 2 1—*Transacción*, núm. 4 y 5—*Posesión cuarentenaria*, número 1—*Apellido*, núm. 1.

Arancel—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.

1. **Arbitro**—La parte tiene derecho de proponerlo en reemplazo del que no acepta, cualquier que sea el número de los renunciantes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 371, Ser. 4^a.

4—El Juez ordenó que constituyeran un solo apoderado dentro de un término que se designó: no habiéndose cumplido con lo ordenado, el Juez haciendo efectivo el apercibimiento decretado lo nombró de oficio. El nombramiento recayó en un extraño, lo que no se ajusta á la ley, pues ella establece que el nombramiento debe hacerse eligiendo uno de los litigantes conjuntos. La ley dice testualmente así: «E si non se acordaren, tome el Juez *qual dellos* entendiase que lo fára mejor.»—Ley 18, tit. 5^o, Part. 3^o.

5—Para unificar la representación es necesario que exista el mismo vínculo de derecho.

1—Es decir, aunque los nuevamente nombrados vayan renunciando sucesivamente, siempre tendrá derecho la parte para proponer otro que deba reemplazarle.



1. **Árbitros**—Si deben entender en las cuestiones sobre interpretación de un contrato, no procede su nombramiento, si la acción es por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 140, Ser. 3^a.

2. **Árbitros**—El demandado para la formación del Tribunal arbitral, debe contestar la demanda sin que previamente se establezcan las cuestiones que deben someterse á los árbitros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 44, Ser. 4^a.

3. **Árbitros**—Si el precio debe fijarse por árbitros, no existe defecto legal en el modo de proponer la demanda aun cuando no se fije cantidad.—Jur. Civ., tom. 9, página 261, Ser. 4^a.

Árbitros—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 74.

Áreas fiscales—Véase: *Empedrados*, núm. 3.

Archivo General de los Tribunales—Véase: *Espedientes*, núm. 1.

Area - Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 17.

1—El contrato decía que se dirimiría por árbitros-arbitradores cualquiera cuestión á que diere lugar su inteligencia; la cuestión promovida no versó sobre la inteligencia ó interpretación de las cláusulas del contrato, sino sobre cobro de pesos proveniente de él. Aun en caso de duda es deber de los jueces hacer que las cuestiones se ventilen por la vía ordinaria, desde que no esté claramente establecido que todas las cuestiones se resuelvan por medio de arbitradores.

2—El nombramiento no puede tener lugar sin que las partes se pongan de acuerdo á cerca de los hechos que deben ser sometidos á su decisión. Cuando el compromiso no se hubiese establecido ante Escribano Público, debe serlo ante el Juez de la causa y secretario—art. 770 del Cód. de Proc.—en este caso la contestación á la demanda tiene por objeto que el demandado niegue ó confiese los hechos que le sirven de fundamento.

3—No existe oscuridad en la demanda, ni defecto legal en el modo de proponerla. La parte en estos casos pide que se le condene al pago de la suma que estimen los árbitros. Sin embargo hay conveniencia en fijar el monto á fin de establecer la competencia del Juzgado. Es por esto que generalmente se espresa la suma en que estima el actor ó la que determinen los árbitros.

Área determinada—Véase: *Contrato de compraventa*, números 16 y 17.

Argentino—Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 2.

Artículo de incontestación—Véase: *Escepción perentoria*, núm. 1.

Artículo prévio—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 7—*Rebel-día*, núm. 18.

1. Arraigo—Consentido el auto que fija la suma de la fianza, no puede ser aceptada la personal. —Jur. Civ., tomo 1, pág. 145, Ser. 4^a.

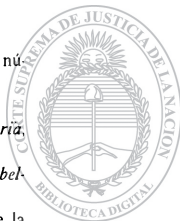
2. Arraigo—Reconocida que la residencia del demandante es fuera de la jurisdicción del Juzgado, procede el arraigo del juicio. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 14, Ser. 4^a.

3. Arraigo—La información de pobreza con objeto de evitar el arraigo del juicio, debe deducirse ante el Juez en turno. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 94, Ser. 4^a.

1—En el caso presente se dice en la sentencia, que la parte manifestó su intención de arraigar pecuniariamente, y que el monto de la fianza quedó consentido. Esto no es exacto, pues la parte pidió simplemente que se fijara el monto de la fianza, pero no manifestó su intención de afianzar pecuniariamente. Solicitó que se fijara la cuota, con la intención de que una vez establecida, ofrecería la persona que afianzaría por esa suma, pues es siempre muy difícil conseguir un fiador por cantidad indeterminada. La Cámara con su ligereza acostumbrada no se fijó en ello y confirmó el auto. El art. 85 del Cód. de Proc. preceptúa que el arraigo del juicio no debe hacerse consistir necesariamente en fianza pecuniaria; por el contrario, admite la personal. A nadie se le puede ocurrir que por el mero hecho de pedir que se fije el monto de la fianza, se renuncia á ofrecer una garantía personal. Se fija el monto para luego hacerla efectiva en dinero ó personalmente.

2—Art. 85 del Cód. de Proc.—La Cámara declaró además que la suma de mil pesos era bastante y que esa suma podía ser garantida, con cualquiera de las fianzas que autoriza el derecho. Esta última parte, viene á cohonestar lo que sostenemos en la nota precedente.

3—Opuesta la escepción de arraigo, el actor pidió: 1^o que no le corriera término para oponerse á la escepción de arraigo, y 2^o que se hi-





4. Arraigo—Del juicio, aun consentida la orden de arraigar, el demandante no tiene término perentorio para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

Arraigo—Véase: *Excepción de arraigo*, núms. 1 y 2.

1^a. Arras—La prueba de que la suma recibida á cuenta lo fué en carácter de arras y no como alquiler, corresponde al que lo afirma.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4^a.

1^b. Arrendamiento—El contrato que verse sobre un inmueble puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, página 285, Ser. 3^a.

ciese la declaratoria de pobreza, admitiéndole la información del caso. No se hizo lugar á ninguna de las dos peticiones. En cuanto á la necesidad de presentarse al Juez de turno, el art. 593 del Cód. de Proc., lo preceptúa terminantemente.

4—Esta resolución fué revocatoria de otra de 1^a Inst., en la que se dijo que es principio general que los jueces pueden dictar providencias compeliendo á los litigantes para que las cumplan por medio de apercibimientos y que por consiguiente pueden asimismo fijar un término dentro del cual debe darse cumplimiento al auto que manda arraigar bajo apercibimiento de tener al actor por desistido de su demanda, siendo esto equitativo y arreglado á derecho, pues no sería justo tener indefinidamente á un litigante bajo el peso de la amenaza de una demanda para cuando se le ocurra cumplir la orden de arraigo: que en el caso presente puede aplicarse por analogía el art. 460 del Cód. de Proc. La Cámara revocó esta providencia, diciendo, que la excepción de arraigo no puede surtir otro efecto que demorar el ingreso al juicio en los mismos términos que las demás excepciones dilatorias enumeradas en la ley.

1^a—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 3.

1^b—El Juez de 1^a Instancia dijo que el contrato debió ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad, de acuerdo con lo que dispone el art. 1184, inc. 1^o del Cód. Civ., el que establece: «los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó usufructo, ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos». La Cámara dijo que «el Inferior partiendo de la base errada de que para el



2. **Arrendamiento**—El término para éste, solo empieza a correr desde la fecha en que el locador pone en posesión al locatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 146, Ser. 4ª.

3. **Arrendamiento**—La prueba de la conformidad de un condómino, con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino, la testimonial no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Serie 4ª.

arrendamiento de un inmueble sea necesario escritura pública, cuando el art. 1184 en que él se funda, solo se refiere a los contratos de transmisión de inmuebles ó que versan sobre constitución de gravámenes sobre los mismos, ha incurrido también en error, etc.» Como se vé, para la Cámara poco importa suprimir una palabra ó un concepto con tal de amoldar la disposición de la ley á la resolución que quiera dictar. Así aquí se suprime la parte del artículo que hace referencia á alguna obligación, como si en el concepto genérico de obligación no estuviese comprendido el del contrato. La ley ha exigido la forma de escritura pública para las *obligaciones* que versen sobre inmuebles y por consiguiente los contratos que tengan este objeto deben ser hechos en esa forma, y si fuesen hechos en forma privada, solo tendrán la fuerza que les asigna los arts. 1185 y siguientes.

2—Arts. 510 y 1514 del Cód. Civ.

3—El copropietario de una cosa indivisa, no puede arrendarla, ni aun en la parte que le pertenece, sin el consentimiento de los demás partícipes—arts. 1512 y 2682 del Cód. Civ.—Cuando la cosa materia del contrato de locación excede de 200 pesos, la prueba de ese consentimiento solo puede establecerse por escrito—arts. 1193 del Código Civil, y 180 del de Proc.—Si se ha requerido la prueba escrita para la comprobación del contrato, no hay razón para no exigirla cuando se trata de comprobar el consentimiento de uno de los condóminos en virtud del principio jurídico de que *ubi eadem est ratio eadem esse debet juris dispositio*. Si se quisiese decir que el condómino ha ratificado el contrato celebrado, sería necesario que esa ratificación se hiciese de acuerdo con lo establecido en el art. 1062 del Cód. Civ., según el cual la forma del instrumento de confirmación, debe ser la misma y con las mismas solemnidades que están exclusivamente establecidas para el acto que se confirma. La Cámara aceptaba la prueba de testigos, pero mediante



Arrendamiento—Véase: *Contrato de locacion*, núm. 17
—*Jurisdicción*, núm. 1.

Arrendatario—Véase: *Compraventa*, núm. 4.

A ruego— Véase: *Autenticidad*, núm. 1 — *Documento privado*, núm. 5 — *Documento*, núm. 4.

Asesor de menores—Véase: *Demencia*, núm. 1.

1. **Asistencia médica**— Para que su pago sea obligatorio por un tercero, debe justificarse no solo la prestación, sino que fué por su orden.—Jur. Civ., tom. 8, página 426, Ser. 4^a.

2. **Asistencia médica**—Los facultativos que la prestan tienen derecho á cobrarla, aunque no comprueben el número de visitas y curaciones con tal de que comprueben que efectivamente la prestaron.—Jur. Civ., tom. 8, página 426, Ser. 4^a.

un principio de prueba por escrito: no concurriendo en el caso, ni uno ni otro extremo. Nosotros consideramos que la prueba escrita no puede suplirse aquí, ni aun con el documento privado, porque el art. 1184 exige en su inc. 1^o la escritura pública para «los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó usufructo, ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos.» La Cámara ha considerado en otro caso ya resuelto que la escritura pública no es necesaria para el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles.—Véase el núm. 1.

1—Para exigir el pago de los servicios profesionales á una persona determinada, se requiere no solo que se compruebe la asistencia médica y que se establezca la obligación de abonarla. El art. 1627 del Código Civ. dice, que el que hiciere algún trabajo á otro, tendrá derecho á exigir de él el pago de dicho trabajo, pero no consagra el derecho de exigir el pago de ese servicio de un tercero.

2—En este caso el Consejo Nacional de Higiene puede justipreciar esos trabajos teniendo en cuenta el tiempo que pudo durar la asistencia, y la naturaleza de la enfermedad. Esta repartición tiene á su cargo la apreciación técnica de los servicios, tomando en consideración todos los antecedentes del caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 1627 citado. Este sumario ha sido omitido en la publicación oficial.



Asistencia médica—Véase: *Honorarios*, núm. 16—*Memorias*, núm. 2.

Asistencia personal—Véase: *Notificación*, núm. 6.

1^a. **Asuntos judiciales**—La revocación del mandato en estos asuntos debe ser espresa, la simple presentación personal del mandante no basta para dar por revocado el poder.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4^a.

Atestación—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 2.

Atribuciones—Véase: *Funcionario público*, núms. 4 y 5—*Contradocumento*, núm. 2.

1^b. **Audiencia**—Solo pueden darse por absueltas en rebeldía las posiciones, si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 98, Serie 4^a.

2. **Audiencia**—Para resolver si procede la absolución de

1^a—El art. 1972 del Cód. Civ. establece que interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato si él espresamente no manifiesta que su intención no es revocarlo; pero como el art. 1870, inc. 6º del mismo Código establece que las disposiciones del título *del mandato* rigen respecto de las procuraciones judiciales siempre que no se opongan a los del Cód. de Proc., el que en su art. 18 dice que los apoderados ó procuradores no cesan en su mandato sino por revocación espresa del poder, luego que sea admitida judicialmente.

1^b—Se sostiene por la Cámara que la apertura de la audiencia es necesaria para formular las peticiones que las partes vieren convenir a sus derechos. Este requisito establecido por la Cámara es una corruptela que se quiere introducir en procedimiento, pues la ley no exige el requisito de la apertura de la audiencia. Cuando el art. 128 dice que en la audiencia señalada el interesado manifestará las posiciones, se refiere al caso en que comparezca el absolvente al acto. Pero para tenerlas por absueltas, el artículo citado, no requiere otra cosa sino la citación sea personal y bajo apercibimiento, y que deje de comparecer sin justa causa: en ninguna parte exige la apertura de la audiencia. Estamos convencidos de la injusticia y sin razón de este requisito. La Cámara de lo Com. jamás lo ha exigido.

2—Véase nota precedente.

posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 303, Ser. 4^a.

Audiencia—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 1—*Testigos*, núm. 7—*Interdicto*, núms. 8 y 9—*Término*, números 3 y 4—*Obras*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 33—*Interrogatorio*, núm. 1.

Audiencia del poseedor—Véase: *Interdicto de retener*, número 3.

Audiencia del demandado —Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 4.

Aumento—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1—*Locación*, núm. 10.

Ausencia—Véase: *Fallecimiento*, núm. 3—*Posiciones*, núm. 34—*Edictos*, núm. 1.

Ausencia involuntaria—Véase: *Posiciones*, núm. 14.

Ausente—Véase: *Posiciones*, núm. 19—*Rebeldía*, número 14—*Citación*, núm. 2.

Autenticación—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7—*Firmas*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 29—*Certificado médico*, núm. 1.

1. Autenticidad—Los testigos firmantes de un documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulta obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3^a.

1.—La prueba rendida fué únicamente la de testigos, la que debe ser juzgada con arreglo á lo prescripto en el art. 204 del Cód. de Proc., y de acuerdo á los principios de la sana crítica. La parte contraria produjo prueba concluyente respecto á la inverosimilitud de la obligación contenida en el documento privado firmado á ruego, y es por esto que el Juzgado dijo que: «los testimonios de dichos testigos por sí solos y sin ninguna presunción que los contrariase, podrían quizá tomarse como decisivos para constatar el hecho sobre que versan: pero cuando repe-





2. **Autenticidad**—Negada la del documento privado en que se funda la acción, corresponde al demandante en primer término justificarla, y solo subsidiariamente procede la prueba sobre el contrato que de él resultaría.—Jur. Civil, tom. 4, pág. 317, Ser. 4ª.

3. **Autenticidad**—El reconocimiento de la autenticidad del contrato, no implica el del cumplimiento de aquellas estipulaciones que den origen á una obligación.—Jur. Civil, tom. 8, pág. 87, Ser. 4ª.

Autenticidad—Véase: *Documento de depósito*, núm. 1—*Obligación*, núm. 1—*Documento privado*, núms. 1, 3, 4, 5 y 7—*Peritos calígrafos*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 7—*Certificado médico*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 29 y 30—*Obligación de hacer*, núm. 12—*Transacción*, núm. 7—*Ratificación*, núm. 3—*Mandato*, núm. 12.

Auto—Véase: *Rebeldía*, núm. 7—*Juicios voluntarios*, núm. 1—*Curadora*, núm. 1—*Concurso civil*, núm. 4—*Tutor*, núm. 6—*Caución*, núm. 1—*Recurso de reposición*, núm. 3—*Liquidación*, núm. 5.

tidos indicios desautorizan su veracidad, no es posible admitirlos como prueba plena y completa.» Los testigos del acto habían, por otra parte, incurrido en graves contradicciones. Todo esto hace que el sumario se interprete en un sentido restrictivo y que el principio allí sentado sea tan solo exacto en cuanto se relacione con el caso resuelto, pero no puede admitirse como precedente para otros.

2—Este sumario no fué materia de resolución ni en primera ni en segunda instancia, y solo se dijo que el actor no había justificado su demanda en manera alguna, «pues no es tal el mismo documento que espresa el contrato arguido de falso por los demandados.» Es evidente que conviene probar la autenticidad de la firma, pero esta omisión no implica que la prueba del contrato no tenga eficacia si no se comprueba la firma. Puede establecerse en el curso del juicio la existencia del contrato por medio de la confesión, en cuyo caso la falta de autenticidad de la firma, no obstaría al progreso de la acción.



Auto apelable—Véase: *Concurso civil*, núm. 2—*Diligencias judiciales*, núm. 1.

Auto consentido—Véase: *Excepciones*, núm. 7—*Mandatorio*, núm. 15.

Auto de prueba—Véase: *Notificación*, núm. 13.

1^a. **Auto inapelable**—El auto que ordena medidas para mejor proveer es inapelable. Jur. Civ., tom. 9, págs. 81 y 143, Ser. 4^a.

2. **Auto inapelable**—El que ordena el levantamiento de la inhibición por haberse presentado bienes á embargo es inapelable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 4^a.

Auto inapelable—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1—*Inapelable*, núms. 1 y 2.

1^b. **Auto judicial**—No procede el interdicto de despojo de

1^a—La Cámara dijo, que es facultativo del Juez dictar, con carácter de para mejor proveer, todas aquellas medidas que juzgue conducentes á ilustrar su juicio, fundándose en la disposición del art. 215 del Código de Proc. que parece autorizar esta inteligencia. Pero no debe olvidarse que cuando este artículo dice que si se ordenara alguna diligencia para mejor proveer etc., lo hace refiriéndose al art. 57 que enumera de una manera taxativa los autos que pueden dictarse con carácter de para mejor proveer.—Véase: *Inst.*, tom. 4^o, verb. *Mejor proveer*, núm. 1.—De aquí resulta, que si la providencia es de las que los jueces pueden dictar de acuerdo con el art. 57, no será apelable, pero si lo será cuando se ordenen medidas que no están allí comprendidas. Así se ha resuelto que no pueden ordenar declaraciones de testigos.—Véase: *Inst.*, tom. 2^o, verb. *Declaraciones*, núm. 7.—Y si lo ordenaran ese auto sería apelable.

2.—Según la Cámara, es inapelable porque el art. 454 del Cód. de Proc. faculta al Juez para calificar por sí solo la caución ofrecida, tendente á obtener el levantamiento de un embargo preventivo, y además porque la inhibición general cualesquier que sean los motivos que la funden, debe dejarse sin efecto cuando pueda tener lugar un embargo de bienes determinados suficientes para hacer efectiva la garantía del acreedor—art. 457.—Esta es la jurisprudencia de la Cámara, la que hemos impugnado.—Véase: *Inst.*, tom. verb. núm.

1^b—Según lo dispone el art. 581 en su inc. 2^o, Cód. de Proc., para que



la posesión si se ha perdido en virtud de un auto judicial—Jur. Civ., tom. 9, pág. 285, Ser. 4^a.

Auto judicial— Véase: *Interdicto de retener*, núms. 1 y 3.

Autos—Véase: *Apelables*, núm. 1—*Prescripción en segunda instancia*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 5.

Autos apelables—Véase: *Apelables*, núm. 1.

1^a. **Autos inapelables**—Solo lo son para el ejecutado en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 3^a.

Autos para sentencia—Véase: *Sentencia*, núm. 9.

Autos testamentarios—Véase: *Posesión*, núm. 7.

Autor—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 61 y 113—*Acto ilícito*, núm. 11.

1^b. **Autoridad**—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

tenga lugar la acción de despojo es indispensable que el que lo intente haya sido despojado con violencia ó clandestinamente su posesión: si esa posesión se toma en virtud de un mandato judicial, faltan los elementos esenciales requeridos para la acción de despojo, pues esta no existe sino en el caso de que alguien haya tomado la cosa de su propia autoridad. La ley 10, tit. 10, Part. 3^a, define esta acción así: «Entrando ó tomando alguno por fuerza por sí mismo, sin mandato del Juzgado, cosa ajena».... Esta es la interpretación que dan los tratadistas á la acción de despojo.—Caravantes, tom. 3^o, núm. 1045; Llerena, Concordancias y comentarios del Cód. Civ.—Además, según terminante disposición del art. 2492 del Cód. Civ., la acción de despojo no compete al poseedor de inmuebles que perdiera la posesión de ellos por otros medios que no sean despojo. En este sentido tiene resuelto la Cámara algunos casos.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Auto judicial*, núm. 1.

1^a—Esta es la jurisprudencia de nuestros Tribunales.—Véase Inst., tom. 3^o, verb. *Juicio Ejecutivo*, núm. 1, el que en parte está equivocado según lo espresa la nota que lleva al pie; tom. 1^o, verb. *Apelaciones*, núm. 183; tom. 4, verb. *Inapelables*.

1^b—Véase: verb. *Allanamiento*, núm. 1.



2. **Autoridad**—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños y perjuicios que la prisión fundada en ese delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3^a.

Autoridad—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 40—*Jurisdicción ordinaria*, núm. 1.

Autoridad legal—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

Autorización judicial—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 3—*Mandante*, núm. 3.

1. **Avaluación**—Para la de terrenos, no se requiere título pericial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 3^a.

Avalúo—Véase: *Consejo de higiene*, núm. 1.

2.—El actor fundó su demanda en los arts. 1078 y 1083 del Código Civil. El demandado dijo que haciendo uso del derecho que le acuerda el Reg. de Policía y llenando una obligación inherente á su cargo, había constituido en arresto al actor, remitiéndolo en seguida con los antecedentes al Jefe de Policía y que con eso cesó su intervención. Al fundar su acción el demandante, en el art. 1078 del Cód. Civ., implícitamente sostiene que los procedimientos usados con él constituían un delito del derecho criminal. Para que se considere existente esta clase de delitos, y que pueda dar nacimiento á la acción de daños y perjuicios, es necesario establecer en juicio la infracción definida y castigada por la ley. Admitiendo que la acción se quiera fundar en la comisión de un acto ilícito, debe comprobarse que el agente obró con dolo, culpa ó negligencia como lo exige el art. 1068. El hecho enunciado en el sumario, no puede constituir un acto ilícito porque según el artículo 1071, el ejercicio de un acto legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

1.—El Juez dijo, que no estando matriculadas las personas que habían sido propuestas no podían ser nombradas. La Cámara dijo simplemente que, para la tasación de terrenos no se requiere título profesional. ¿Por qué? Ella lo sabrá y basta: no se considera obligada á dar la razón de su resolución, considerando que es suficiente fundamento la suficiencia de su propia autoridad. Además de que es Tribunal Superior, y nadie le puede obligar á cumplir con su deber.

1. **Avisos**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución aun después de aprobada la venta, hecha la oblación del precio y dada la posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

1.—La ejecución se fundaba en la regulación de honorarios de un agrimensor por trabajos practicados en unos autos testamentarios, sin que esa regulación hubiese sido notificada á una de las partes. Es evidente que el juicio tiene que ser nulo para esa parte, pues es sustancial en todo juicio la necesidad de oír al demandado, siendo así que la petición de regulación constituye una verdadera demanda: y si como consecuencia de esa regulación se sigue el juicio contra todos los deudores conjuntos, vendiéndose la cosa común, esos actos, ese procedimiento ejecutivo nulo, porque nadie puede ser condenado sin ser oído. En cuanto á la falta de publicación de los avisos, debe tenerse presente lo que la Cámara resolvió en otro caso.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Errores*, núm. 1; tom. 4º, verb. *Remate judicial*, núm. 3.—Arts. 986 del Código Civ., y 513 del de Proc.





Balance—Véase: *Cuenta corriente*, núm. 1.

Banco—Véase: *Remate judicial*, núm. 20.

Banco Nacional—Véase: *Depositario judicial*, núm. 2.

Bases—Véase: *Cláusulas*, núm. 1.

1. **Bautismo**—La prueba supletoria para justificarlo, es procedente siempre que no existe la partida en el lugar en que se tenga seguridad haberse celebrado el acto.—Jurisprudencia Civil, tom. 5, pág. 236, Ser. 3^a.

1—Esta resolución se dictó con motivo de uno de los innumerables casos resueltos por el juez Méndez Paz, quien opinó que es necesario acreditar en forma la imposibilidad de presentar la partida, siendo así que la circunstancia de haber tenido lugar el acto en un local determinado, no es bastante demostración de que allí se haya celebrado efectivamente el acto, pues bien pudo haberse verificado en otro punto, no siendo consiguiente nente el caso de proceder á la prueba supletoria. La Cámara revocó el auto fundándose en que no es posible obligar á ningún interesado á producir prueba negativa, siendo bastante, á los efectos del art. 83 del Cód. Civ., el resultado negativo del informe expedido por el Oficial público. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4^o, verbo *Información supletoria*, núm. 1; tom. 3, verb. *Informe*, núm. 2, y *Fallecimiento*, núm. 1; tom. 1^o, verb. *Partidas parroquiales*, núm. 1965.—Con toda esta jurisprudencia, el mencionado juez continúa impertérrito resolviendo las cuestiones en sentido contrario, produciendo así graves perjuicios en los intereses de los que se ven obligados á impetrar justicia ante él.



Bien rematado—Véase: *Remate judicial*, núm. 23.

1. **Bienes**—Corresponden á la sucesión del esposo los bienes que le fueron adjudicados en virtud de la cuenta de partición debidamente aprobada en la testamentaria de la esposa, aun cuando fuesen propios de ésta y siempre que á sus herederos se les hubiese adjudicado bienes que representen igual valor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 90, Ser. 3^a.

2. **Bienes**—La solidaridad no se presume; el simple fiador no está obligado al pago mientras no se haga escusión en los bienes del deudor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 175, Serie 3^a.

3. **Bienes**—Si los dados á embargo corresponden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jurisprudencia Civil, tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

4. **Bienes**—Pertenecen exclusivamente á la esposa los

1—El marido adquirió los bienes de la esposa en virtud de adjudicación que se le hizo en pago de su haber. Esa adjudicación se hizo por el importe de la tasación, dejando de pertenecer á la sucesión de la esposa. Y no puede ser de otra manera, porque si bien el terreno pudo ser considerado como un bien del patrimonio de la esposa, y por su muerte pertenecer á sus hijos, dejó de serlo por haber sido apreciado en la cuenta particionaria de su testamentaria, separado como un capital de la misma por el valor de su tasación y adjudicado ese valor á sus hijos, recibiendo así éstos todo lo que podían pretender.

2—La solidaridad no se presume—arts. 701 y 2003 del Cód. Civ.—En cuanto á la necesidad de la escusión, tenemos el art. 705 que la exige para hacer efectiva la fianza.

3—De la tasación verificada resultó que los bienes dados á embargo garantían acabadamente la suma ejecutada, en cuyo caso procede el levantamiento de la inhibición—art. 461 del Cód. de Proc.

4—Fallecido el marido, la esposa dedujo demanda contra la sucesión de aquél á fin de que se declarase que algunas propiedades adquiridas durante su matrimonio le pertenecían exclusivamente por haber sido compradas con bienes provenientes de la herencia recibida de su padre. El esposo declaró que los bienes los había comprado con la dote de su mujer y para ella. Ante una declaración de esta naturaleza, el hecho no



bienes comprados con anterioridad á la vigencia del Código Civil, con dinero propio, aun cuando la declaración no conste en la escritura de adquisición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3ª.

5. **Bienes**—Los adquiridos durante la sociedad conyugal se suponen gananciales aun cuando hayan sido comprados á nombre de uno de los esposos, mientras no se justifique plenamente que la adquisición se hizo con fondos particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 378, Ser. 3ª.

6. **Bienes**—El fiador de un curador sólo responde por

admite duda para los hijos, pues como esa declaración fué muy anterior al fallecimiento del causante, no existe ni siquiera la duda de que ella hubiese sido hecha con la intención de defraudar á sus hijos en sus legítimos bienes. Pero aun en el caso de que esto no fuera así, la declaración del recibo de la dote prueba que efectivamente la esposa la introdujo—art. 1228, Cód. Civ.—De aquí resulta que si la esposa introdujo dote al matrimonio, y si esa dote se empleó en la adquisición de inmuebles, éstos pertenecen exclusivamente á la esposa—Leyes 3, título 9, lib. 5 Recop.; 11, tit. 4, lib. 3, F. R.; y 49, tit. 5, Part. 5ª.—Esta última ley, después de sentar el principio de que la adquisición hecha por una persona con dinero ajeno, es de la que hace la compra, agrega: «Fuera ende si los dineros fuesen de la dote de alguna mujer, é su marido con voluntad de ella ficiese la compra. Ca en tales casos magüer el comprador compre la cosa en su nome, gana el señorío della aquel cuyos eran los dineros que fueron pagados por el precio della». Esta ley no exige, como se ve, que en la escritura se espresé que la compra se hace con el dinero de la esposa, sino que lo sea con bienes de ella y con su aquiescencia. La actora comprobó asimismo, por medio de documentos fehacientes, que introdujo al matrimonio un capital muy superior al que representaba en el momento de las adquisiciones de los bienes el precio pagado por éstos. El consentimiento de la esposa puede manifestarse aun después de otorgada la escritura de adquisición, pues la ley no exige que sea en el acto mismo.

5—Art. 1271 del Cód. Civ.; Leyes 1 y 4, tit. 3, lib. 3, F. R.; 1 y 2, tit. 9, lib. 5, Rec. Cast., 203 del Estilo; 4, tit. 9, lib. 10, Nov. Rec.

6—El contrato de fianza es siempre por su naturaleza un contrato accesorio; de manera que para que exista, es indispensable que se considere existente válidamente la obligación principal, cuyo cumplimiento

los bienes pertenecientes á los menores: probado el indebidó nombramiento por no haber menores, falta la causa de la fianza.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

7. Bienes—Debe declararse inoficiosa la donación si el donante carecía de bienes el día de su fallecimiento.—Jurisprudencia Civil, tom. 6, pág. 74, Ser. 3^a.

garante subsidiariamente—art. 1994 del Cód. Civ.—Uno de los requisitos necesarios en toda obligación, para que ella tenga eficacia legal, es que reconozca una causa, y si falta la causa espresada, por lo menos que se funde en otra verdadera—arts. 499 y 501 *ibid.*—Si la persona sometida á una curatela lo está indebidamente, la fianza carece de causa, porque ella tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de las funciones de curador, y no habiendo curador, no existe aquel cargo. Si se garanten las funciones de curador y la curatela no existe, la obligación accesoria desaparece por inexistencia de la principal. Si una persona administra bienes en el carácter de curador de personas perfectamente capaces, ese ejercicio se convierte en mera administración y sus actos son considerados como tal, pero no como los de un curador, y sólo debe rendir cuenta como simple administrador, no como curador.

7—Se trata de saber si para que una donación pueda considerarse inoficiosa, debe atenderse únicamente á la época en que se hizo. La opinión contraria prevaleció en la Cámara. La ley reputa inoficiosa una donación cuando ella excede la parte que el donante podía disponer. La ley 4, tit. 4, Part. 5^a, dice así: «E quando la donación es fecha simplemente por carta, o por palabra, mas non es aun entregada á aquel á quien la faze tenuto es de la cumplir aquel que la faze ó sus herederos. Pero esto se debe entender desta guisa: que si aquel que la donacion ha de cumplir, fuese tan rico que deja, de lo que le fincare, tanto de lo suyo que pueda bien venir de guisa que non aya de demandar lo ageno, entonce es tenuto de la dar cumplidamente, mas si por ende no se fincare de que pudiera vivir si lo cumpliese, entonce non seria tenuto de cumplir la donación». El Código francés dispone, en su art. 920: que las donaciones, sea entre vivos ó por causa de muerte, que excedan de la parte disponible, serán reducidas á ésta á la apertura de la sucesión. En el mismo sentido se espresan los arts. 838 del Cód. napoleónico y el 760 del de Holanda, siendo de advertir que todos ellos han sido citados por el Códificador en la nota al art. 1830 de nuestro Cód., implicando esta circunstancia que ellos han sido incorporados á nuestra legislación como su mejor ilustración. El art. 1831 siguiente, corrobora esta inteligencia de la ley, cuando es-





Bienes— Véase: *Embargo*, núms. 3, 5, 14, 16, 18 y 19—*Partición extrajudicial*, núm. 3—*Impuesto*, núm. 3—*Man datario*, núm. 11—*Inhibición*, núm. 16—*Juez competente*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 22—*Gananciales*, núm. 1—*Comprador*, núm. 4—*Tutor*, núm. 1—*Inhibición general*, núm. 13—*Dominio público*, núm. 1—*Administrador*, núm. 3—*Hijuela*, núm. 1—*Herederos*, núm. 7—*Estatutos sociales*, núm. 1—*Personería*, núm. 3—*Administrador judicial*, núm. 1—*Posesión*, núms. 10, 11 y 17—*Caso for tuito*, núm. 1—*Inscripción*, núm. 1—*Contrato de compra venta*, núm. 5—*Petición de herencia*, núm. 1—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Honorarios*, núm. 29—*Herencia*, número 4—*Divorcio*, núm. 7—*Curador*, núm. 1—*Legado*, núm. 4.

Bienes á embargo—Véase: *Auto inapelable*, núm. 2.

Bienes adjudicados —Véase: *Esposo*, núm. 2.

Bienes comprados—Véase: *Desistimiento*, núm. 6.

1. Bienes de menores —Cualesquiera que hubiesen sido

tablece, que si por el inventario de los bienes del donante fallecido, se conociese que las donaciones que ha hecho fuesen inoficiosas, sus herederos necesarios podrán demandar su reducción hasta que queden cubiertas sus legítimas. Lo contrario importaría una desheredación, y lo que es más, una desheredación inconsciente, porque ni siquiera podía imaginar el donante. Bien pudo tener suficientes bienes al tiempo de hacer la donación, y que lo propio no sucediera al tiempo de su muerte. Se dirá que el donatario puede no exigir durante la vida del donante el cumplimiento de la donación, teniendo en cuenta consideraciones personales; pero esto poco vale como argumento, porque en todo caso debe imputarse á sí mismo el no haberla exigido cuando pudo ser debidamente satisfecha. El doctor Llerena, comentando el art. 1831 del Código Civil, se expresa en el mismo sentido que queda espuesto.

1—Se trata de la venta de bienes de menores: para saber si ella es válida, basta averiguar tan solo las razones que motivaron la enagenación de la propiedad y si al celebrar el acto se han observado las formalidades prescriptas por el derecho, dándose al menor la debida re-



las omisiones en que hubiese incurrido el tutor; el menor solo tiene acción contra él, pero no contra terceros adquirentes de los bienes con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 33, Ser. 3ª.

2. Bienes de menores—Solo pueden ser vendidos privadamente por un precio mayor que el de la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 78, Ser. 4ª.

3. Bienes de menores—La autorización para la venta particular de bienes de menores, es facultativa de los jueces.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 4ª.

4. Bienes de menores—La venta estrajudicial de estos

presentación por medio de un tutor, y la intervención que le corresponde al Ministerio de Menores—arts. 39 y 491 á 494 del Cód. Civ.—En el otorgamiento de la escritura se llenaron todas las formalidades con la autorización del Juez de la tutela. Si el tutor falta á sus deberes incurriendo en omisiones; si el pupilo sufre perjuicios en sus intereses, y si con este motivo el tutor contrae responsabilidades, esa es cuestión que debe ventilarse en otro juicio, tratando de hacer efectivas las responsabilidades personales del tutor, pero jamás daría ello acción á decir de nulidad de la enagenación. Una solución contraria afectaría intereses de orden público, entronizando la inseguridad en la propiedad adquirida con buena fe, justo título y bajo las garantías de la autoridad judicial. Llevaría la estafa al último de los extremos, puesto que las autoridades judiciales serían coautoras de ella.

2—Art. 442º del Cód. Civ.

3—La Cámara dijo, que no encontrando el Juzgado ninguna ventaja en la venta, no procedía la autorización para verificarla. El Juez dió como fundamento la circunstancia de que el bien que se quería enagenar privadamente estaba en condominio, lo que impedía conocer si la venta era ó no conveniente. Este es un fundamento demasiado pueril para ser tenido en consideración. El condominio no puede jamás ser un obstáculo para la venta, por el contrario, es un deber el proceder á la venta de los bienes que se encuentren en estas condiciones como lo preceptúa el art. 436 del Cód. Civ.

4—De acuerdo con la jurisprudencia.—Véase el núm. 2—y con la ley—art. 442, Cód. Civ.



bienes, solo puede autorizarse por mayor precio que el de tasación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Ser. 4^a.

5. Bienes de menores—Deben ser vendidos en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 231, Ser. 4^a.

6. Bienes de menores—El padre usufruario de los bienes de aquéllos, no puede cargarles los gastos de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4.

Bienes de menores—Véase: *Venta privada*, núm. 1—*Menores*, núm. 1.

Bienes del alimentario—Véase: *Alimentos*, núm. 1.

1^a. Bienes del concurso—El Juez del concurso es el único competente para entender en la venta de ellos.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 410, Ser. 4^a.

Bienes del deudor—Véase: *Fianza*, núm. 1—*Prenda*, número 1.

Bienes del donante—Véase: *Donación*, núm. 1.

1^b. Bienes del esposo—Justificada la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom 6, pág. 366, Ser. 3^a.

1^c. Bienes del heredero—El administrador no debe tomar posesión de aquellos bienes que un heredero alegue tener á su nombre propio aun cuando sean de los incluidos en el testamento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 4^a.

Bienes del pupilo—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 8.

Bienes del viudo—Véase: *Sociedad conyugal*, núm. 1.

5—Art. 139 del Cód. Civ. —Salvo los casos de escepción establecidos por el art. 442.

6—Arts. 291 y 2894, Cód. Civ.

1^a—En virtud del carácter de universal que tiene este juicio, que atrae á sí á todos los demás.

1^b—Art. 3575 del Cód. Civ.

1^c—Véase: verb. *Administrador*, núm. 3.



1ª. Bienes de la esposa—Cuando la representación de la esposa que la ley confiere personalmente al marido, ha sido delegada en un tercero, la esposa puede, con causa justificada pedir su remoción, y los jueces deben conocer de su procedencia ó improcedencia.—Jur. Civ., tom. 6, página 49, Ser. 4ª.

1ª. Bienes de la sociedad—Presentados éstos á embargo, bastantes á responder al crédito, debe levantarse la inhibición personal de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4ª.

Bienes de la sociedad—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

1ª. Bienes de la sucesión—Los padres pueden comprarlos, en tanto no se haya verificado la partición y adjudicación á los menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Serie 4ª.

1ª—Se dijo que el apoderado nombrado por el esposo había sido condenado en otro tiempo á tres años de penitenciaría por estafa, lo que constaba en uno de los fallos de la Cámara respectiva que corren publicado. El Superior no pudo resolver el punto por cuanto esa circunstancia no hacía al fondo de la cuestión que se ventilaba en el juicio, y la demanda no tenía por objeto provocar á ese respecto una resolución, sino que pedía se le concediera venia para administrar sus bienes en atención á la avanzada edad del esposo. Pero la Cámara dijo «que el Juez de la causa deberá adoptar los procedimientos que correspondan para salvaguardar los intereses de la esposa con motivo de la denuncia hecha.»

1ª—El art. 443 del Cód. de Com. preceptúa que los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la formación de la sociedad, no pueden ser ejecutados para el pago de la deuda social sino después de ejecutados todos los bienes de la sociedad.

1ª—Parece que los arts. 297 y 1361, inc. 1º del Cód. Civ. se opusiesen á esta resolución, pues los bienes en condominio pertenecen á una entidad distinta de la de cada uno de los copropietarios, como lo demuestra el hecho de que cualquiera de ellos puede adquirir la cosa por licitación, de lo contrario aparecería el condómino comprando lo propio.—Véase: verb. *Bienes testamentarios*, núm. 2.



2. Bienes de la sucesión.—El cónyuge supérstite puede comprar en remate judicial, bienes de la sucesión en tanto no exista partición ni hayan sido adjudicados á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 3^a.

3. Bienes de la sucesión.—El legatario de parte alicuota tiene un derecho proporcional en los frutos y rentas de

2.—Véase nota precedente.—Aquí se resolvió que el Juez podía conferir una representación especial á los menores á fin de que no se perjudicasen en la compraventa celebrada.

3.—El cesionario de parte alicuota tiene derecho á una parte en la sucesión, en la que tiene un interés directo y legítimo constituyendo una verdadera comunidad con los herederos en todos los bienes ó cosas, que constituyen la universalidad del caudal hereditario. Así el artículo 3263 dice: «Sucesor universal es aquel á quien pasa el todo ó una parte alicuota del patrimonio de una persona, y no sería posible en presencia de este precepto negarle al legatario alicuota el carácter de heredero, pues aun cuando el sucesor universal por excelencia es indudablemente el heredero, suponiendo el Codificador la existencia de otros herederos universales, éstos no pueden ser sino los legatarios de una parte alicuota de la herencia. Parece que el art. 3417 del Cód. Civ. se opusiera á lo establecido en el sumario. Dicho artículo dispone efectivamente que los frutos y productos de la herencia corresponden al heredero que ha entrado en posesión de ella; pero este principio no es incompatible con los derechos del legatario, ya sea que se ejercite respecto de la universalidad de la herencia ó respecto de cosas determinadas de ella, pues siendo su razón filosófica la de que los efectos de la posesión se retrotraen á la época de la muerte del causante, este beneficio de la ley alcanza, como lo observa el doctor Llerena—tomo 6^o, pág. 205,—al legatario que adquiere también los frutos desde la misma época. La legislación francesa está en contra de la nuestra, pues en el art. 1005 del Código Napoleón establece que el goce no empieza sino desde el día de la demanda. Nuestra ley tiene más amplitud, y el pensamiento del legislador aparece claro en la nota al artículo 3766 cuando hablando de su oposición á las ideas de Troplong establece, que el heredero no hace suyos los frutos de la cosa legada, ni es poseedor de buena fe en los casos en que el legatario no hubiese demandado su entrega. Es por esto que según la mente de nuestra ley, los legados producen en general sus efectos, desde el día de la muerte del testador.—Véase las notas á los arts. 3766 y 3769.—Aubry



los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

4. Bienes de la sucesión—El legatario de porte alicuota puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

1^a. Bienes determinados—La acción de jactancia solo procede si el reo se atribuye derechos á los bienes determinados de propiedad del actor.—Jur. Civ., tom. 10, páginas 114 y 295, Ser. 4^a.

Bienes determinados—Véase: *Herencia*, núm. 2—*Poseción judicial*, núm. 12.

1^b. Bienes dotales—La información para justificar la y Rau dicen, que el legatario á título universal, en lo que concierne al goce de los frutos y legados, debe ser asimilado al legatario universal que se encuentra en concurrencia con los herederos, y que si bien no representa la personería del difunto y no goza de la posesión, tiene empero desde la muerte del testador un derecho de copropiedad sobre los bienes dejados por éste: y más adelante agregan, que Zachariæ incurre en error al sostener que dichos legatarios, si bien propietarios de la cuota, parte ideal en que son instituidos, no tienen sin embargo antes de la partición, ningún derecho de propiedad, ó copropiedad sobre los objetos individualmente determinados que componen la herencia, precisamente porque haciéndose dichos legatarios desde la apertura de la sucesión, copropietarios de la herencia, se hacen también desde ese momento copropietarios de todos y cada uno de los objetos que la constituyen—§ 720 y 721.

4—Es un derecho que surge de la nota precedente.

1^a—Art. 425 del Cód. de Proc.

1^b—La confesión, hecha por el marido, de los bienes dotales, no perjudica á los acreedores si no consta de las convenciones matrimoniales ó de otros actos jurídicos revestidos de igual fuerza, como lo prescribe el art. 1229 del Cód. Civ. Los acreedores pueden siempre atacar estos instrumentos por cualesquiera de las causas determinadas en el art. 959. Es inútil pretender garantir los bienes de la esposa por medio de una información, pues ellos están garantidos por la ley: los



existencia de bienes dotales no reconocidos por contrato es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 4^a.

1. **Bienes embargados**—Solo debe venderse una parte de los bienes embargados bastante á cubrir el crédito si existe conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 182, Ser. 4^a.

2. **Bienes embargados**—Si no se encuentran en posesión arts. 1258 y 1259 del Cód. Civ., establecen los derechos y obligaciones de la mujer para el caso que fuese concursado el marido ó la sociedad conyugal, y entonces sería llegado el caso de hacer la declaración y no antes como medida preventiva. Aun dado el caso de que hubiese de aprobarse la información, ella carecería de valor, porque no podría oponerse á terceros ni á los acreedores futuros del esposo: los actos jurídicos no pueden oponerse á la libertad de las acciones ni á los derechos de terceros—art. 953.

1—Existiendo conformidad, no hay porque oponerse á ello, puesto que el interés de las partes es la medida de las acciones en juicio.

2—El embargo se trabó en bienes muebles que se encontraban en una casa distinta de aquella en que vivía el demandado, comprobándose al mismo tiempo por el opositor y por medio de documentos públicos que los bienes eran de su propiedad. En este caso no hay necesidad de deducir tercería. El art. 478 del Cód. de Proc. establece, que el embargo se trabará en los bienes que el acreedor designe si estuviesen en poder de ellos el deudor. Cuando los bienes estuviesen en poder de un tercero, es necesario así establecerlo y hacérselo saber—artículo 473.—Esta medida de levantar el embargo trabado sin deducirse tercería ha sido introducida por la Cámara entre ese cúmulo crecido de medidas inventadas y que no son otra cosa que corruptelas sin fundamento legal, y que contribuyen á hacer más indecisos los derechos en litigio. La Cámara de lo Com. ha sentado el mismo principio.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Tercería*, núm. 3.—Pero últimamente ha reformado esta jurisprudencia, como puede verse en el caso de Bennini con Rocchi sobre ejecución de sentencia, Juzgado del doctor Peyret Sec. de Balado. Puede verse asimismo de acuerdo con el sumario el tom. 4^o de la Inst., verb. *Tercería*, núm. 1; y tom. 2^o, mismo verbo, núm. 2, y *Oposición*, núm. 1; tom. 1^o, verb. *Tercería*, núm. 2552. La Cámara de lo Comercial en el tom. 2^o, pág. 36, Ser. 1^a, estableció que «la propiedad de los bienes embargados judicialmente debe probarse en juicio contradictorio.» Esta es la sana doctrina.



del deudor procede al levantamiento por simple oposición.

—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

Bienes embargados—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

—*Depositario judicial*, núm. 1—*Venta en remate*, núm. 1.

Bienes entregados—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

1^a. Bienes fiscales—La propiedad de los que por herencia vacante son declarados fiscales, corresponden al Consejo Nacional de Educación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3^a.

Bienes fuera de la República—Véase: *Impuesto*, núm. 3.

Bienes hereditarios—Véase: *Litispendencia*, núm. 1—*Herederero*, núm. 7—*Tasación*, núm. 3—*Indivisión*, núm. 2.

1^b. Bienes hipotecados—La falta de aceptación por el acreedor hipotecario de la transferencia del bien hipotecado, solo puede lesionar los derechos del vendedor.—Jurisprudencia Civil, tom. 10, pág. 348, Ser. 4^a.

Bienes hipotecados—Véase: *Costas*, núm. 58.

Bienes inmuebles—Véase: *Contrato privado*, núm. 2.

—*Comisión*, núm. 5—*Posesión judicial*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 27.

Bienes muebles—Véase: *Comisión*, núm. 4—*Venta*, número 6.

1^c. Bienes municipales—El Concejo Deliberante carece de facultad para enagenar bienes municipales sin llenar la condición esencial de licitación que requiere la Ley Orgánica de la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Serie 4^a.

1^a.—Art. 44, inc. 10, de la Ley de Educación, de 8 de Julio de 1884.

1^b.—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 3.

1^c.—El art. 44, inc. 2º, de la Ley Org. de la Municipalidad, establece que el Concejo Deliberante podrá acordar con dos tercios de votos de los miembros que lo componen, la enagenación por medio de licitación de las propiedades que no sean de uso público.



Bienes particulares—Véase: *Embargo*, núms. 7 y 10
---*Bienes de la sociedad*, núm. 1—*Venia*, núm. 4.

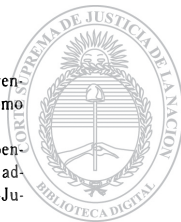
Bienes poseídos—Véase: *Prescripción*, núm. 3.

1. Bienes propios—El importe de los del viudo, no debe ser incluido en el haber de la testamentaria de la esposa, sino en la parte que ellos hayan sido objeto de mejoras durante la sociedad conyugal.—Jurisprudencia Civil, tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

2. Bienes propios—Los herederos no pueden reclamar de terceros los bienes propios enajenados por los padres durante su menor edad, si hubiesen aceptado la herencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 56, Ser. 4ª.

1—En el caso presente, hubo conformidad de partes en que las mejoras debían ser consideradas como gananciales. De lo contrario, este sumario estaría en contra de la disposición del art. 1266 del Cód. Civ., en su última parte, que atribuye la propiedad al cónyuge á quien corresponde la especie principal. Sin embargo, debe hacerse presente que el sumario está de acuerdo con el inc. 6 del art. 1272. El sumario, pues, debe tomarse bajo el sentido especial que la Cámara le dió. En algunos casos las mejoras son gananciales, en otros no; todo depende de si ellas fueron hechas por la sociedad ó por un tercero: en el primer caso, pertenecen á la sociedad conyugal; en el segundo, son propios del dueño de lo principal.

2—Este caso fué resuelto bajo el imperio de las antiguas leyes, las que prohibían á los padres enajenar los bienes propios de sus hijos, quedando en su caso obligados los suyos y con la facultad reservada al heredero para perseguirlos si hubiesen pasado á manos de terceros. Pero este principio, contenido en la Ley 24, tit. 13, Part. 5ª, no acordaba al heredero un derecho absoluto; hay en la misma un límite á su ejercicio: «E esto se entiende, dice, quando non quisieren heredar, ni aver parte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar en ellos, entonces non podrían demandar los sus bienes propios á aquellos á quienes los ouisise el padre enajenado, segund que es dicho: porque todos los pleitos derechos que el padre ouisise fecho, serían tenudos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuesen herederos». Si el causante no podía alzarse contra la enajenación, estando, por el contrario, obligado á su cumplimiento, es fuera de duda que sus sucesos.



Bienes propios—Véase: *Administrador*, núm. 4.

1^a. **Bienes raíces**—La comisión del martillero en la venta de bienes raíces es de dos por ciento.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 105, Ser. 4^a.

2. **Bienes raíces**—La escritura pública no es indispensable para justificar la propiedad de bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de las antiguas leyes.—Jurisprudencia Civil, tom. 10, pág. 262, Ser. 4^a.

Bienes recibidos—Véase: *Cuenta particionaria*, número 5.

1^b. **Bienes testamentarios**—El padre puede comprar los bienes testamentarios, en tanto no exista adjudicación, ó si fuesen en condominio con los herederos menores.—Jurisprudencia Civil, tom. 4, pág. 230, Ser. 4^a.

res también carecen de derecho para accionar. *Quod ipsis, qui contraxerunt obstat, et sucesoribus eorum obstat*. El heredero sucede á su autor en todos sus derechos y obligaciones, siendo jurídicamente considerado como una sola persona.—Ley 13, tit. 9, Part. 6^a.—La S. C. N. ha sentido la misma jurisprudencia.—Véase: tom. 8^o, pág. 492, Ser. 1^o; tomo 13, pág. 267, Ser. 2^o.

1^a.—Véase. verb. *Comisión*, número último.

2—Así lo tiene declarado la Cámara en la causa de Oliver con el Ferrocarril del Norte fallada en 9 de Junio de 1891, fijando el verdadero alcance de las leyes 56 y 114, tit. 18, Part. 3^a, con el texto expreso de la ley 6, tit. 15, Part. 5^a, que autoriza la venta de bienes raíces sin la formalidad de la escritura pública, cuando establece que el contrato puede hacerse de dos maneras: con carta y sin ella; é invocando la autoridad de Caravantes, de Antonio Gómez, de Gutiérrez Fernández, y la jurisprudencia de la S. C. P.—Véase la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 12.

1^b.—El inmueble pertenecía al padre y á los hijos como herederos de la madre. Ordenada la venta pública, lo adquirió para sí y para algunos de sus hijos; de manera que no es el caso del art. 1361, inc. 1^o, puesto que en vez de comprar bienes de los hijos que están bajo su patria potestad, compró con ellos un bien común, haciendo cesar la indivisión que tenía con otros hijos.



2. Bienes testamentarios—El inventario de éstos debe hacerse en el local en que existan los muebles.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 360, Ser. 4^a.

3. Bienes testamentarios—Carece de valor legal con respecto á los legatarios, la tasación de dichos bienes verificada sin su intervención; y en consecuencia el mayor ó menor valor fijado, no enerva su derecho á exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

Bienes testamentarios—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 11—*Indivisión*, núm. 1—*Condominio*, núm. 3.

Bigamia—Véase: *Separación de bienes*, núm. 3.

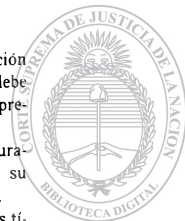
Blancos—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1. Boleto de compraventa—No puede en ningún caso

2—Esa operación por su naturaleza debe practicarse en la forma establecida en el sumario.

3—La facción del inventario debe tener lugar con citación de los legatarios—arts. 637 del Cód. de Proc. y 3857 del Cód. Civ.—Si por cualquiera causa no se hace la citación á los legatarios, esa omisión no puede perjudicarlos, ni puede invocarse contra ellos el inventario practicado por ser para ellos *res inter alios acta*.

1—Un boleto de compraventa, en ningún caso, ni por voluntad de partes, puede importar por sí solo un contrato perfecto de compraventa, de modo que las arras no pueden en este caso darse como prueba de un contrato perfeccionado. El art. 1184, en su inc. 8, establece que deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad, las transacciones sobre bienes inmuebles; pero el 1185 faculta á las partes á hacer estos contratos en instrumento privado, pero en este caso no quedan concluidos como escritura pública, mientras ésta no se halle firmada. Esta obligación será juzgada como una obligación de hacer, y la parte que se negare á su cumplimiento puede ser demandada por los daños y perjuicios—art. 1187 *ibid.*—De aquí resulta, que á pesar de que en el boleto se diga que la entrega de una suma se hace como seña ó parte de precio, eso no implica que el comprador no pueda arrepentirse del contrato y devolver la suma con otro tanto, quedando libertado de hacer la escritura pública. Nuestro Cód., en materia de arras, ha innovado la antigua legislación, y se ha apartado también de



considerarse contrato perfecto, y como simple obligación de hacer el vendedor que se niegue al cumplimiento debe devolver doblada la suma recibida aún como parte del precio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 124, Ser. 3ª.

2. **Boleto de compraventa**—Sin plazo para la escritura, no puede declararse rescindido: debe exigirse su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Ser. 3ª.

3. **Boleto de compraventa**—La conformidad con los títulos, estipulada en el boleto, obliga al comprador á justificar que la prestó en oportunidad, sin que pueda exigir

la legislación francesa, cortando las cuestiones á que dieran lugar las leyes españolas sobre la importancia de las arras, cuando se entregaban para asegurar la celebración del contrato, ó cuando su objeto era garantizar el cumplimiento del contrato ya perfecto, estableciendo que en uno y otro caso, el que las recibió puede arrepentirse y no celebrar el contrato, y no cumplirlo si está ya perfecto, devolviendo las arras con otro tanto de su valor. La letra del art. 1202 es bien clara y esplicita, así como la nota explicativa puesta por el codificador, sin que se oponga á ello el art. 1204, que es la regla general, de la cual es una excepción el 1202, ni menos los arts. 655 y 1189, desde que por el principio establecido en dicho art. 1202, la constitución de una seña ó arras, importa ante la doctrina de nuestro Cód., la reserva explícita del artículo 658. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos.—Véase: Inst., tom. 2º, verb *Arras*, núms. 1 y 2.

2—El actor se presentó con un boleto simple de compraventa, alegando que la otra parte no había cumplido las obligaciones que le incumbían, pretendiendo que se declarase rescindido. No se le hizo lugar porque los arts. 1201 y 1204 se oponen á ello.

3—El boleto decía: «Cuando el Escribano haya revisado, y que se acepten los títulos, y cuando el comprador esté satisfecho de estos, depositaré la suma indicada á la orden del vendedor, siendo estos buenos (los títulos) y libres de todo gravámen, las escrituras se harán en seguida». Correspondía por consiguiente, al actor comprobar los siguientes extremos: conformidad del comprador, con los títulos, despues del examen de estos por el Escribano; depósito de la seña en caso de regular las escrituras buenas y libre de todo gravámen el inmueble. El actor no comprobó ninguno de estos hechos, mientras que el deman-



la subsanación por el vendedor, ni tampoco los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

4. **Boleto de compraventa**—El vendedor cuyo título consiste en un simple boleto, no puede obligar al comprador al cumplimiento del contrato, siempre que le haya vendido como cosa propia perteneciendo el inmueble á un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 3ª.

5. **Boleto de compraventa**—Para que éste importe una cesión de derechos y acciones, debe existir la transmisión hecha al tercero del boleto otorgado por el propietario que promete vender.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3ª.

dado comprobó que la compra se había hecho á satisfacción del comprador y que el Escribano designado por éste no encontró que los títulos eran deficientes. No habiendo cumplido el comprador, que era el actor, con las obligaciones que le incumbían, no podía prosperar su acción.

4.—El actor había firmado al demandado boleto de compraventa de un terreno sobre el que á su vez había obtenido promesa de venta, hecha por un tercero. Llamado el segundo comprador á la escrituración, se opuso por deficiencia de los títulos del primer comprador, que solo tenía á su favor un boleto simple de compraventa, y no las escrituras necesarias, ni tampoco la posesión de lo vendido. Con este motivo y habiendo el primer vendedor rescindido el contrato con pérdida de la seña dada por el primer comprador, éste deduce demanda por daños y perjuicios por la seña perdida y por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Para que el segundo comprador pueda ser condenado á pagar los daños y perjuicios consiguientes á la falta de cumplimiento de su obligación de escriturar y que impone el artículo 511 del Cód. Civ. al deudor de la obligación que por culpa propia deja de cumplirla, era necesario, de acuerdo con el art 1201, que se hubiera demostrado que el actor se hallaba en estado de cumplir su obligación, exigirle el cumplimiento de su contrato. Era necesario que demostrase ser propietario con exhibición de sus títulos de dominio y demás recaudos necesarios para otorgar escritura de venta. Sin embargo, cuando se entabló la demanda, al actor no era dueño de la cosa y mal podía exigir que se le permitiera vender lo ajeno.

5.—De lo contrario hay compraventa,



6. **Boleto de compraventa**—El boleto otorgando promesa de venta, se juzga por las disposiciones del contrato de compraventa, aun cuando el vendedor no sea propietario del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3ª.

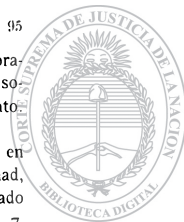
7. **Boleto de compraventa**—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compraventa el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

8. **Boleto de compraventa**—Puede exigirse la conver-

6—Porque el art. 1177 del Cód. Civ. establece que las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos, apesar de que el art. 1329 dice que las cosas ajenas no pueden venderse.

7—Con quien se celebre el contrato ese debe ser tenido como comprador. El boleto decía que la venta se hacía al comprador ó á la persona que éste designara. Como no se contrató con el tercero que debió designarse, nada tiene éste que ver en el contrato por ser para esa persona indeterminada una *res inter alias acta*. Si el boleto concede al comprador la facultad de designar esa tercera persona, mientras no la designe, le corresponde asumir el rol de comprador con todas las solemnidades inherentes á tal carácter.

8—Porque cuando se exige la escrituración del boleto, no se pide el cumplimiento del contrato de compraventa. Las disposiciones legales relativas á la compraventa no son aplicables en este caso y por consiguiente, el art. 1201 del Cód. Civ. no tiene aplicación. Cuando se contrata sobre bienes raíces por medio de un boleto privado, ese boleto no importa un contrato de compraventa, el adquirente solo tiene derecho para obligar á la otra parte á hacer escritura pública. El que demanda no ejecuta una acción del contrato perfecto: no pide la efectividad de la venta, no pretende hacer producir sus efectos propios. Se trata simplemente de obtener la escrituración que le es debida en virtud del boleto. El derecho correlativo de la obligación de escriturar consiste en firmar á su vez la escritura pública del boleto, la que implícitamente *se ofrece cumplir* desde que se gestiona el cumplimiento de la escrituración. Una vez elevado á escritura pública el boleto, y exi-



sión á escritura pública de un boleto privado de compraventa, sin manifestar la voluntad de cumplirlo, la que solo es obligatoria al expir el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 57, Ser. 3ª.

9. **Boleto de compraventa**.—Privado, el plazo fijado en él para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3ª.

10. **Boleto de compraventa**.—La convención contenida en un boleto de compraventa, no puede ser materia de decisión judicial, mientras no se convierta el instrumento privado en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 4ª.

gido el otorgamiento de la escritura de enajenación del inmueble, será el caso de ofrecer cumplir la obligación de pagar el precio que le corresponde. Esta doble escrituración de un boleto privado, de compraventa, es una medida sugerida por la Cámara contra la cual está la opinión de los tratadistas. Es una práctica que debe suprimirse, como lo sostenemos en otro lugar.—Véase el núm. 11.

9.—No es justo por cierto pretender que un acto puramente privado tenga la eficacia y produzca los efectos exclusivamente reservados á los instrumentos públicos.—Véase la nota al verb. *Escritura pública*, número 7.

10.—El autor fundó su acción en los arts. 1411, 1412 y 1413 del Cód. Civ., los que no pueden aplicarse, pues ellos se refieren á las obligaciones del vendedor cuando se trata de un contrato de compraventa, debidamente concluido con la escritura pública que la ley exige bajo pena de nulidad en las ventas de inmuebles que no se verifican en pública subasta; pero cuando esas convenciones se celebran por escritura privada, no crean más derechos que los acordados por los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ., los que facultan á exigir la escritura pública como obligación de hacer y que no cumplida podría recién dar margen á demandar daños y perjuicios. Esta es la jurisprudencia establecida por la Cámara, la misma que hemos combatido siempre.—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7 y su nota.



11. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 402, Ser. 4^a.

12. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto de compraventa, debe procederse al otorgamiento de la escritura pública: los daños y perjuicios, solo proceden por la negativa á otorgarla dentro del término que fija la sentencia ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 4, página 183, Ser. 4^a.

13. **Boleto de compraventa**—La cláusula inserta en el boleto de compraventa, de ser la operación verificada para un tercero, y el reconocimiento del vendedor de la personería de éste, desobliga á los firmantes del boleto de toda obligación personal entre ellos, siempre que el mandante hubiese aprobado y ratificado el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 4^a.

11—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Cámara, según puede verse en el número precedente. El doctor González del Solar votó en disidencia diciendo: «He sostenido en otras ocasiones análogas á la presente, que cuando un contrato de compraventa de un bien raíz fuere celebrado en otra de la que determina el Cód. Civ. en su art. 1184, inc. 1º, es decir, por instrumento privado ó verbalmente, cualquiera de las partes puede demandar á la otra el otorgamiento de la escritura pública correspondiente á dicho contrato bajo la pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses como lo disponen los arts. 1183 á 1188. Consecuente con esta opinión que he fundado estensamente en otras causas, entre ellas en la LVII de la Serie 4ª, considero que la demanda es perfectamente ajustada á derecho en cuanto pide el otorgamiento de la escritura pública del terreno vendido y á que se refiere el boleto.» Esta opinión está de perfecto acuerdo con nuestro modo de pensar, como puede verse en la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 7.

12—En el mismo caso del anterior se ordenó la escrituración del boleto á fin de otorgarse después la escrituración del terreno. También hubo el mismo voto en disidencia.

13—Arts. 1161, 1162 y 1163 del Cód. Civ.



14. Boleto de compraventa.—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe reducirse á escritura pública antes de exigir el cumplimiento del contrato que el contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 260, Ser. 4^a.

15. Boleto de compraventa.—Privado, reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su conversión á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 5, página 318, Ser. 4^a.

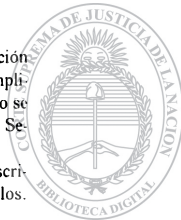
16. Boleto de compraventa.—Procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa cuya autenticidad se ha reconocido por las partes, pero no el de la convención en él estipulada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 298, Ser. 4^a.

17. Boleto de compraventa.—Reconocida la autenticidad

14.—Véase los números precedentes.

16.—Tratándose de la compraventa de inmuebles el contrato debe ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inciso 1º, Cód. Civ.—pero cuando, como en el caso que nos ocupa, el contrato se ha hecho por instrumento particular firmado por las partes en que éstas se han obligado á reducirlo á escritura pública no queda concluido como tal contrato de compraventa mientras la escritura no se halle firmada, pero queda concluido como contrato en que las partes se han obligado á reducir á escritura pública—art. 1185.—Cuando la escritura pública se firma, es decir, cuando el boleto es reducido á escritura pública, recién entonces será llegada la oportunidad para exigir el cumplimiento del contrato, pudiendo el vendedor demandar el pago del precio y el recibo de la cosa con las demás obligaciones accesorias del contrato si las hubiese. Aquí se ven las consecuencias lógicas de la mala teoría sentada por la mayoría de la Cámara, obligando á las partes á deducir dos demandas cuando todas las cuestiones pueden quedar solucionadas en un solo juicio. La Cámara lo que hace con esta interpretación de la ley es multiplicar los pleitos, siendo así que el objeto primordial de la legislación es disminuir su número en lo posible.

17.—Véase nota precedente. Para el cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública, no es un obstáculo la defensa que pueda oponerse al fondo de la demanda, pues en la escrituración del boleto



del boleto privado de compraventa, procede su reducción á escritura pública: las escepciones que obsten al cumplimiento del contrato, solo pueden ser juzgadas cuando se exija su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 320, Serie 4^a.

18. Boleto de compraventa—Para su reducción á escritura pública, no es necesaria la presentación de los títulos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 423, Ser. 4^a.

19. Boleto de compraventa—Reconocida su autenticidad debe reducirse á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 336, Ser. 4^a.

20. Boleto de compraventa—Reconocida por las partes su autenticidad debe convertirse en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 346, Ser. 4^a.

21. Boleto de compraventa—Reconocida la autenticidad del de compraventa, procede su reducción á escritura pública, pero no la del contrato que le da origen.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 221, Ser. 4^a.

22. Boleto de compraventa—El término estipulado en el

no se lleva otro objeto que dar vida legal al contrato en la forma marcada por la ley para hacerlo exigible en todas sus partes.

18—Con el boleto privado se tiene todo lo necesario para su cumplimiento. La escritura de propiedad será necesaria cuando se trate de escriturar el inmueble según la teoría de la Cámara.

19—Véase el núm. 11, como asimismo el 10.

21—Existe el perfecto derecho de exigir la escrituración del boleto, pero no la escrituración del inmueble, porque mientras aquella no esté firmada, no existe el contrato de compraventa del inmueble, y por consiguiente los contratantes no pueden hacer uso de las acciones que emanan de la compraventa; y así el comprador no puede exigir la entrega de la cosa, ni el vendedor la del precio.

22—En el boleto se estipuló que el comprador escrituraria dentro de treinta días contados desde que el vendedor subsanara el error contenido en el título de compra en el que aparecía cambiado el apellido, bajo condición de que si no escrituraba en el término fijado, per-



de compraventa con pacto comisorio solo debe contarse desde la notificación judicial en que se haga saber que ha empezado á correr.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 346. Ser. 4^a.

23. **Boleto de compraventa**—No procede la rescisión del contrato de compraventa constante en instrumento simple mientras no sea reducido á escritura pública el documento privado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 320, Ser. 4^a.

24. **Boleto de compraventa**—Demandada la conversión á escritura pública del boleto simple de compraventa, los Tribunales deben fijar un término para que el demandado lo verifique sin que sea necesaria la presentación de los títulos que solo es obligatoria cuando se exige el cumplimiento de la convención.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 193. Ser. 4^a.

dería el derecho á una suma entregada en el acto de firmarse el boleto quedando dicho compromiso sin valor ni efecto. Las diligencias para subsanar el error se practicaron. Habiéndose acordado treinta días al comprador para escriturar después de subsanado el error, es incuestionable que es necesario ante todo buscar el punto de partida para el cómputo del término. De la prueba que se produjo no pudo deducirse con exactitud la fecha en que el vendedor estuvo en disposición de otorgar escritura haciéndoselo saber al comprador. Si no se puede comprobar el conocimiento extrajudicial, solo debe tenerse en cuenta la interpelación judicial, sin que ésta sea necesaria sino cuando aquella no pueda constatarse. La Cámara no dijo que la notificación judicial fuese necesaria.

23—Porque mientras el boleto no se eleve á escritura pública, no existe el contrato de compraventa, puesto que la trasmisión de bienes inmuebles, debe ser hecha en escritura pública, bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 1^o, Cód. Civ.—Si no se ha otorgado la escritura pública que acredite en forma la existencia del contrato de compraventa el comprador no puede pedir la rescisión, sino la reducción á escritura pública de los documentos simples en los términos de los arts. 1185 y 1187. Los arts. 1331 y 1413 no son aplicables, porque estos artículos presuponen la existencia legal del contrato perfectamente terminado.

24—Véase el núm. 18.



Boleto de compraventa

25. Boleto de compraventa.—Para la reducción a escritura pública del boleto de compraventa, no es obligatoria la presentación de títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 36. Ser. 4^a.

26. Boleto de compraventa.—Para que proceda el cumplimiento del contrato de compraventa, el boleto simple debe ser reducido a escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

27. Boleto de compraventa.—Importa una obligación de otorgar en instrumento público la promesa de venta que él contenga, pero no la definitiva que la ley exige para la transmisión del dominio sobre bienes raíces.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

28. Boleto de compraventa.—La sentencia que lo manda reducir a escritura pública, solo importa su protocolización en un Registro Público.—Jur. Civ., tom. 9, página 229, Ser. 4^a.

29. Boleto de compraventa.—Declarada la autenticidad del boleto privado, procede su conversión en escritura pública dentro del término que el Juez señale.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 222, Ser. 4^a.

30. Boleto de compraventa.—La falta de cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública, hace procedente la rescisión del contrato de compraventa constante

25.—Véase el número precedente y el 18.

26.—Véase los núms 15, 16, 17 y 21.

29.—Generalmente se acuerda el término de diez días.

30.—Condenado un litigante a otorgar escritura pública, dentro de 15 días, de un boleto de compraventa que contenía el pacto comisorio, solicitó así se declarara de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1203 del Cód. Civ. Como el comprador dejara vencer el término, se pidió se declarara rescindido el contrato, lo que así se declaró, de acuerdo con el artículo citado.



de un boleto privado —Jur. Civ., tom. 7, pág. 252, Serie 4^a.

31. **Boleto de compraventa**—Reconocida su autenticidad, procede su elevación á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3^a.

32. **Boleto de compraventa**—Debidamente reconocido, debe ser reducido á escritura pública: las escepciones que el vendedor alegue para justificar la imposibilidad de entregar la cosa vendida, solo pueden ser consideradas y juzgadas en el juicio sobre cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 46, Ser. 4^a.

33. **Boleto de compraventa**—Si en las diligencias previas del remate ó en el acto de firmarse el boleto de venta, el martillero no hace constar que obra á nombre de un tercero, el comprador tiene acción directa contra el para el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 82, Ser. 4^a.

34. **Boleto de compraventa**—Para que pueda considerarse como obligación de hacer escritura, debe primero ser reducido á escritura pública el contrato privado que de él resulte—Jur. Civ., tom. 2, pág. 251, Ser. 4^a.

Boleto de compraventa—Véase: *Mandatario*, núm. 2—*Cosa ajena*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 3, 4, 15, 18.

32—Véase los núms. 12 y 17.

33—Es el mismo caso resuelto anteriormente, de Juan Recalt con Godoy, y en el cual se estableció que habiendo el martillero suscrito el boleto en su nombre propio, había contraído una obligación directa y personal, y que no figurando en él el nombre del mandante ni habiéndose probado que éste fuera realmente propietario, la responsabilidad del martillero era incuestionable. Las relaciones entre el martillero y su principal están regidas por las leyes del mandato: la obligación legal de éste es siempre insalvable, cuando obra á nombre propio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1929 y 1930 del Cód. Civ.

34—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Cámara.

25, 26, 27 y 28—*Obligación de hacer*, núm. 9 y 12—*Compraventa*, núm. 2—*Simulación*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 98.

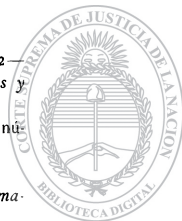
Boleto impreso de remate—Véase: *Pacto comisorio*, número 2.

Bolsa—Véase: *Moneda de oro*, núm. 1.

Bonificación—Véase: *Desistimiento*, núm. 2—*Información supletoria*, núm. 2.

Bóveda—Véase: *Compraventa*, núm. 4—*Condominio*, núm. 4.

Buena fe—Véase: *Excepción de prescripción*, núm. 1—*Prescripción de diez años*, núm. 1—*Remate judicial*, número 12—*Posesión treintenaria*, núm. 2.





Cálculo de recursos—Véase: *Empedrados*. núm. 3.—*Impuesto*, núm. 1.

1. **Caligraños**—Inscripciones en la matrícula durante el mes de Junio de 1890, Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 3^a; durante el mes de Julio de 1891, Jur. Civ., tom. 5, página 125, Ser. 4^a; durante el mes de Setiembre del mismo año, Jur. Civ., tom. 7, pág. 80, Ser. 4^a.

1^a. **Calumnia**—La falta de intención criminal y la exis-

1^a—La falta de intención criminal, ni la buena fe en la existencia del delito, son suficientes para eximir al reo de la indemnización civil de daños y perjuicios, por que tal defensa podría muy bien emplearse si se tratara de un juicio criminal por acusación calumniosa, mas no cuando se prosigue lisa y llanamente una acción civil por daños y perjuicios. Laurent, ocupándose de estudiar los delitos y los cuasi-delitos, dice así: «Es necesario no confundir el delito civil con el delito criminal. El delito criminal consiste en la infracción de la ley penal; lo que le caracteriza, es que una pena se impone al culpable en interés de la sociedad; tratándose del delito civil el interés social no es el primer motivo. La parte perjudicada se propone obtener la reparación del daño que el delito le ha causado; *en el interés privado, no hay un culpable propiamente dicho, hay un deudor y un acreedor*. El delito criminal puede ser al propio tiempo un delito civil cuando de él ha resultado un perjuicio ocasionado deliberadamente. Pero si no ha existido el propósito de perjudicar, y no obstante ha resultado daño, *el delito criminal habrá engendrado un cuasi delito, ó sea la obligación de indemnizar un perjuicio*».—tom. 20, § 385, Principios del Derecho Civil.



tencia de hechos que pudieron inducir en error, solo debe tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, pero carecen de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 26. Ser. 3ª.

2. Calumnia.—La acción civil de daños y perjuicios por calumnia, es improcedente si el demandado justifica en el juicio civil la verdad de los hechos en que fundó la querrela y estos se encuentran calificados como delitos por el derecho penal.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294. Ser. 4ª.

Calle—Véase: *Remate judicial*, núms. 2 y 3.

1ª. Calles.—La falta de nombre de las calles en que están ubicados los terrenos de los suburbios, no importa una deficiencia del título.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 333. Ser. 3ª.

1ª. Cámara.—Ella solo puede conocer y resolver las

2—Art. 1089 del Cód. Civ. Véase además la nota precedente.

1ª—El título decía que el terreno estaba ubicado en la esquina formada por dos calles que se designaban por sus nombres con los linderos bien demarcados. En una segunda enajenación no se designaron las calles, pero se dieron los mismos linderos. Es pues, de poco monto la falta de designación de las calles en esta segunda adquisición, cuando en la primera ya habían sido espesadas. Además, el terreno vendido en la segunda operación era un lote que formaba parte integrante del primero, y éste se componía de dos cuerdas de frente por dos de fondo. Más tarde se abrieron las calles: no era de extrañarse que no tuviesen nombre las nuevas calles, pues éstas no existían cuando el terreno estaba en su integridad.

1ª—A no ser que al alegar de bien probado se oponga la escepción de prescripción. Las cuestiones para ser resueltas por el Superior deben ser propuestas y resueltas ante el Inferior, de no ser así vendría á alterarse el orden establecido para toda contienda judicial por el Código de Proc. y por la Ley Org. de los Tribs. de la Cap., los que prescriben el orden de proceder y las facultades conferidas á la Cámara para conocer en última instancia de los recursos que se interponen contra las resoluciones de 1ª Inst. y en los demás casos que la última ley de 1886, establece en su art. 80.



cuestiones que ha resuelto el Inferior, sin que deba tomar en consideración las suscitadas en la espresión de agravios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 3ª.

2. Cámara.—Solo puede resolver puntos que hayan sido de materia de resolución en 1ª Instancia. Jur. Civ., tomo 7, pág. 49, Ser. 4ª.

Cámara.—Véase: *Recurso de reposición*, núm. 2 — *Informe in voce*, núm. 1 — *Apelación de hecho*, núm. 2.

Camarista.—Véase: *Recusación*, núm. 12.

Cambio legal.—Véase: *Poder*, núm. 2.

Campo.—Véase: *Tasación*, núm. 2.

1ª. Cantidad.—Para la fijación de la cantidad á suplir por litisespensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

Cantidad.—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 64, 66, 69, 72, 73 y 74 — *Arbitros*, núm. 3.

Cantidad determinada.—Véase: *Embargo preventivo*, número 31.

Cantidad excedente.—Véase: *Comisión*, núm. 3.

Cantidad indeterminada.—Véase: *Sellos*, núm. 2.

Cantidad líquida.—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 19, 25 y 26 — *Inhibición*, núm. 9.

Capaz.—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1. Capellanía.—Su fundación debe subordinarse á lo dispuesto por el propietario fundador. las modificaciones

2 —Si así no fuese, la Cámara dictaría un fallo en única instancia, cuando la ley solo la autoriza á dictar fallos en grado de apelación. Véase el número precedente.

1ª—El art. 608 del Cód. de Proc. establece que la reclamación de litisespensas se sustanciará por los mismos trámites el juicio de alimentos. El art. 602, inc. 2ª, exige la justificación del caudal del alimentario.



que pretendan los usufructuarios ó patrones no pueden ser aprobadas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 422, Ser. 3ª.

2. **Capellanía**—El reclamante sobre mejor derecho al patronato de una capellanía, debe justificar su derecho esclusivo con arreglo á las condiciones impuestas por el fundador. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 71, Ser. 3ª.

3. **Capellanía**—La fundada en moneda de pesos plata.

2—Al que alega mejor derecho le incumbía la prueba porque él era el actor y esa la base de la demanda.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

3—Este sumario está equivocado: no espresa lo que la Cámara resolvió. La cuestión consiste en averiguar si una capellanía de 4000 pesos plata, fundada en 1866, con la renta de 200 \$, puede ser redimida abonándose el capital mitad en efectivo y mitad en papel moneda corriente por su valor nominal; ó si por el contrario, el capital debe ser satisfecho íntegramente en efectivo. Esta cuestión fué resuelta por el Juez *a quo* y por la Cámara, en un sentido completamente contrario al del sumario, pues se dijo que el capital capellánico fué sustituido en pesos plata pero no habia tenido lugar la designación de determinada especie ó calidad de moneda para que se hiciera aplicable el art. 619 del Cód. Civ., ordenándose en consecuencia que el pago se hiciese depositando en el Banco una cantidad tal de billetes de banco ó en títulos de los autorizados por la ley, que al interés de 6 % anual dé una cantidad igual á 206 pesos con 66 cts. $\frac{2}{3}$ que es el equivalente de 200 pesos que al año devenga la capellanía. Como lo dispone el art. 1º de la Ley de 10 de Junio de 1858 y convenian en ello todos los interesados, para redimir una capellanía debe depositarse á interés en el Banco una suma en moneda corriente que al seis por ciento al año produzca una renta igual á la que daba el capital al tiempo de su redención, ó en fondos públicos del crédito interior del Estado en iguales condiciones. En ausencia de estipulación espresa los intereses deben pagarse en la misma moneda que la obligación principal como que son accesorios de ella. La ley de 30 de Abril de 1828 no tiene en su aplicación á este litigio la importancia que quiere dársele, como que solo preceptúa respecto de las obligaciones anteriores y posteriores al 9 de Enero de 1826. Otro tanto ocurre con la de 1839 en que se apoyaba el demandante, como que ella presupone forzosamente censos constituidos con anterioridad y se ocupa solo del modo de pagarse los intereses sin derogar las leyes generales ni la misma de 1828. Leyendo el Diario de Sesiones de la

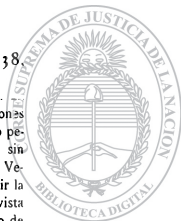
puede ser reducida en moneda especial por su valor equi-

época, se adquiere el convencimiento de que no solo esa ley fué dictada transitoriamente bajo la presión de las circunstancias difíciles por que atravesaba el país, y que en el sentir de muchos de nuestros legisladores, por la ley de 1828 los intereses capellánicos que daban comprendidos en la disposición del art. 12, es decir, que debían pagarse íntegros á metálico, sino que también mediando la consideración de que no existía la obligación de pagar el capital á censo y de que siendo esa obligación solo aplicable á los intereses, á ese solo y único efecto del pago de éstos fué introducida la modificación, ó si se quiere, la aclaración de la ley de 1828 sin derogar ésta en lo demás, y por consiguiente en ninguna de las disposiciones que debía regir las obligaciones de fecha posterior á la misma, como la que motivaba esta sentencia. Tampoco hacen presión en el ánimo de un Juez de derecho que se encuentra en presencia de un texto claro de la ley y que debe aplicarla sin juzgar de su mérito intrínseco, las opiniones vertidas en el debate de los legisladores, mucho más cuando resultaba de la discusión á que se refería el demandante, que solo incidentalmente se hizo presente que los intereses de los censos se pagaban mitad plata y mitad papel, pero sin entrar á juzgar si en casos especiales ese pago podía hacerse en otra forma. Siendo la mayor parte de las capellanías anteriores á la que se quiere redimir, nada de particular tenía que en la discusión se tuviera en cuenta la generalidad de los casos, en que el interés se pagaba mitad plata y mitad papel. Con mejor derecho podría decirse que la misma respetable opinión del Dr. Velez Sarsfield en que se apoyaba una de las partes, servía para sostener la tesis de la otra parte, desde que si la ley de 1858 tenía por objeto reparar la injusticia que cometiera la ley de 1828 esceptuando á los censos de la forma de pago allí establecida, es prueba de que se refería á las obligaciones que debían juzgarse bajo el imperio de esa ley y nó á los censos. También valiéndose de esas mismas discusiones, se podría recordar que la ley de 1828 tuvo por objeto crear un medio arbitrario pero equitativo, de facilitar las transacciones entre el acreedor que no quería sino metálico y el deudor que quería pagar puramente en papel enormemente depreciado por la quiebra del Banco á causa de los sucesos de la guerra del Brasil, y que esa situación especial, producida por sucesos extraordinarios, que no pudieron prever los contratantes, no siendo aplicable á las obligaciones posteriores en que ya la depreciación del papel era conocida, no han podido dar lugar á leyes análogas á esas de 1828 y 1839, ó lo que es lo mismo, que no se puede argumentar



valente en pesos fuertes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 138.
Ser. 3ª.

con estas leyes especiales para aplicar el espíritu de sus disposiciones á una obligación como la de que se trata, en la que si se estipuló pesos plata con tanta posterioridad á aquellos acontecimientos, fué sin duda para no dar lugar á equívocos. En menos palabras, si el Dr. Velaz y sus colegas quisieron efectivamente con la ley de 1858 corregir la injusticia de la ley de 1828, es indudable que han tenido solo en vista las obligaciones anteriores á esa época, puesto que solo respecto de ellas podía ser injusta esa ley al exonerar á los capitales capellánicos. Si se hubieran referido á los posteriores, habrían cometido una injusticia mayor, pues al par que otras obligaciones se podían constituir á moneda determinada para que los pagos tuvieran lugar en ella;—artículo 8º—los censos capellánicos mirados con tanto favor, se habrían podido redimir con puro papel depreciado hasta el extremo de quedar reducido á la proporción de veinte y cinco por uno.—Ley de Octubre de 1864.—El art. 11 como el art. 12 de la ley de 1828 declaran exceptuadas de la disposición del art. 3º anterior, entre otras obligaciones, los capitales á censo; pero ¿puede de aquí inferirse lógicamente que la ley no haya podido ocuparse de esos mismos capitales á otro efecto? Por lo mismo que el legislador exceptuara del pago con papel depreciado, los capitales capellánicos amparándolos con ese beneficio, ¿cabe ante el buen sentido, que si el art. 8º introducía también escepción para las obligaciones posteriores, no quedaran comprendidas en ellas las capellánicas? El Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés en una luminosa vista sostuvo que la renta capellánica debía abonarse en pesos fuertes ó su equivalente en pesos moneda nacional de curso legal, según su valor corriente el día en que se verifique la redención, fundándose en que la cuestión que se debatía en esa causa consistía en averiguar si una capellanía de 4000 pesos plata, fundada en 1866, con la renta de 200, puede ser redimida, abonándose el capital, la mitad en efectivo y la otra mitad en papel moneda corriente por su valor nominal; ó si, por el contrario, el capital debe ser satisfecho íntegramente en efectivo. Habiendo suspendido el Banco la conversión de sus billetes en 9 de Enero de 1826, y depreciándose aquellos consiguientemente sobremanera, surgieron como era natural, dificultades sobre la manera de satisfacer las obligaciones contraídas antes de ese acontecimiento. La ley de 30 de Abril de 1828, resolvió que esas obligaciones se cancelasen, abonándose la mitad del capital en efectivo y la otra mitad con papel moneda; exceptuándose sin embargo, de esa disposición, los capitales impuestos á





4. Capellanía—La prescripción del derecho al patronato

censo y los destinados á objetos piadosos. Esta ley se refiere únicamente en su resolución á las obligaciones contraídas con anterioridad á la inconvención, pues para lo futuro permitía espresamente pactar con entera libertad la clase de moneda en que deberían cancelarse y ordenaba además, que en este caso, se observase fielmente lo estipulado. Sobre el sentido de esta ley se suscitó duda, y á consulta del Ejecutivo, se declaró posteriormente por la ley 13 de Julio de 1839 que solo tuvo carácter de interina ó provisoria, que debían considerarse definitivamente canceladas las pensiones de los censos pagadas mitad plata y mitad moneda corriente, sin perjuicio de que en oportunidad la Legislatura volvería á ocuparse de este negocio, lo que sin embargo no sucedió. Al espresarse esta ley en los términos indicados, se refería únicamente, como la de 1828, en explicación de la cual era dada, á los censos establecidos antes del 9 de Enero de 1826; y al declarar que se considerasen legalmente satisfechas las pensiones por mitad á papel y en efectivo, prometiendo al mismo tiempo otra resolución, parece que aun respecto de los indicados censos anteriores al 9 de Enero de 1826, solo se contraía á los pagos que se hubiesen verificado hasta su fecha, prohibiendo suscitar cuestión sobre su legalidad, pero sin establecer esto mismo para lo sucesivo, ni aun con relación á los censos de la época indicada. Pero si eso pudiera ser dudoso, no lo es de modo alguno que no trató de establecerlo para los fundados con posterioridad á la época de la inconvención á moneda metálica, pues habiéndolo sido con perfecta legalidad, por hallarse permitido determinar la moneda en todo género de obligaciones, y estando ordenado que en ese caso se guardase fielmente lo convenido, no podía destruir los derechos adquiridos con permitir que aun en las obligaciones de censos posteriores al 9 de Enero de 1826, y contraídas con determinación de la moneda á metálico, se pudiese abonar las pensiones en efectivo y con papel por mitad. Cuando se admitiese, pues, en el caso más favorable á los deudores de censos, el que la ley de 13 de Julio de 1839 equiparase absolutamente á los demás los capitales de aquéllos, lo que resultaría sería que podrían cancelarse mitad metálico y mitad papel, cuando hubiesen sido debidos con anterioridad á la inconvención; ó con solo papel por su valor nominal, si siendo posteriores no se hubiese determinado la moneda en que se debía hacer el pago. Interpretar las leyes de 30 de Abril de 1828 y 13 de Julio de 1839 en diverso sentido de lo espuesto,

(Sigue en la página siguiente.)

4—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Capellanía*, núms. 1 y 2.



to de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha

sería ponerlas en contradicción con los más claros principios de la jurisprudencia, y hacerlas incidir en el absurdo, porque lo sería en efecto, declarar lícita y válida una condición de los contratos y permitir al mismo tiempo su violación; autorizar el que se pudiese determinar en aquéllos la moneda de pago, ordenando que se respetase fielmente lo estipulado, y resolver sinembargo que fuese legal el pago de un censo verificado por mitad en papel y en efectivo, á pesar de haberse estipulado espresamente ese pago en moneda metálica. Demostrado que las indicadas leyes en cuanto establecían sobre la manera de cancelarse las obligaciones de los censos, solo se referían á los creados antes de la inconvención; en todo caso, á los anteriores á su fecha, permitiendo para lo sucesivo pactar libremente sobre la moneda en toda especie de obligaciones, se deduce claramente que solo en esta parte y de ningún modo en las disposiciones especiales que hizo necesaria la inconvención, serían aplicables á la capellanía de que se trata, la cual no solo es posterior á dichas leyes, sino que fué constituida espresamente en moneda metálica, condición que según ellas mismas, debía ser respetada en todo contrato y cumplida fielmente. Por más que en épocas posteriores el desarrollo de las idess económicas hiciese comprender lo dañoso de los censos y capellanías constituidas sobre bienes raíces, á los cuales inmovilizaban ó amortizaban impidiendo la libre circulación indispensable al progreso, no se ha intentado sinembargo, suprimirlos arbitraria y violentamente. Se empezó como era natural por prohibir la fundación de nuevos censos ó capellanías que hubiesen de constituirse sobre fincas, y buscándose después la manera de conciliar los intereses del poseedor y de los futuros patronos con lo que exigía la conveniencia pública, se procuró facilitar la extinción ó redención de dichos censos bajo bases equitativas. Si se hubiera querido acabar inmediatamente con los censos atropellándose por todo, y sin respetarse los derechos adquiridos, habría bastado exonerar al poseedor del deber de satisfacer las pensiones, ó bien permitirle pactar con el futuro patrono sobre la manera de dividirse el capital; pero como se ha observado, no se trataba de proceder de esa manera; se conservaba la institución aunque modificada, y si bien se deseaba extinguir los censos ya establecidos sobre bienes raíces, facilitando su redención, se respetaban en todo los principios de justicia que reglan la propiedad. Tal fué el objeto de la ley de 10 de Junio de 1858, ella no se ocupa sino incidentalmente de la clase de moneda en que deba hacerse la redención de los censos, refiriéndose á lo que se hallase pactado é es-

de la fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

tablecido al respecto en el documento, aunque permitía verificar también aquella con fondos públicos del Estado, se contrae principalmente á determinar la suma que ha de entregarse por el poseedor, exigiendo que sea tal que al 6 por ciento de interés anual, produzca igual renta á la que daba el censo ó la capellanía al tiempo de la redención. Inútilmente se aduce, pues, esta ley para demostrar que apesar de haberse constituido la pensión de un censo ó de una capellanía en metálico y esto con posterioridad á la fecha de la inconvención, 9 de Enero de 1826, y con posterioridad también á las mencionadas disposiciones de 30 de Abril de 1828 y 13 de Julio de 1839, pueda sin embargo, redimirse en todo ó en parte, á papel por su valor escrito; porque, lejos de encontrarse en dicha ley cláusula alguna que preste el más leve apoyo á semejante pretensión, se hallará por el contrario, que distingue también en cuanto á la redención, si la pensión es á papel ó en efectivo. Se pretende probar que la ley de 10 de Junio de 1838 permite redimir todos los censos y capellanías, cualquiera que haya sido la época de su fundación, y cualquiera que fuese también la clase de moneda determinada en el contrato, abonándose el capital, la mitad en efectivo y la otra mitad en papel, por ciertas palabras del Dr. Velez al discutirse esa ley, por las cuales manifestó que en su concepto, en la del año 28 se había cometido una injusticia, al eximirse del pago en la indicada forma á los capitales capellánicos ó de fundaciones piadosas. Pero como la ley del año 28 solo reglaba el pago de las obligaciones contraídas antes del 9 de Enero de 1826, y la indicada escepción respecto á los censos y capellanías se refería también por consiguiente á las fundadas antes de la espresada fecha, es respecto de ellos únicamente, que el Dr. Velez encontraba injusta la resolución de que su capital se pagase íntegramente en metálico. No podía ser en manera alguna, que hablase también de los establecidos con posterioridad á la fecha recordada, porque habiendo permitido tanto la ley del año 28, cuanto las demás que se dieron al respecto, estipularse libremente en todo género de obligaciones la moneda en que se habían de satisfacer, prescribiendo además el que si se estipulasen á metálico, se observase fielmente lo pactado, el facultarse apesar de esto, solamente á los deudores de censos ó capellanías, para que no obstante haberse establecido de un modo espreso á metálico, las redimiesen sin embargo, á papel por su valor nominal, habria sido ciertamente otra injusticia igual á la que criticaba el mismo Dr. Velez en el privilegio acordado en dicha ley del año 28 en favor de los censos y capella





5. **Capellanía**—El abogado defensor de los que se consideren con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios de la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4ª.

6. **Capellanía**—Al patrono corresponde la posesión de la finca capellánica aun cuando no se haya fundado la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4ª.

7. **Capellanía**—Solo el patrono tiene derecho á intervenir en las diligencias necesarias para fundar la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4ª.

Capellanía—Véase: *Censo capellánico*, núm. 1.

Capital—Véase: *Memoria pía*, núm. 1—*Intereses*, número 2—*Censo capellánico*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 26—*Cantidad*, núm. 1—*Contrato escrito*, núm. 1.

Capital capellánico—Véase: *Patrono*, núm. 1.

Capital determinado—Véase: *Intereses*, núm. 3.

Capitalización—Véase: *Intereses*, núm. 6.

Cargo—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1. **Carta**—Dirigida á un tercero ordenándole un pago,

nías de fecha anterior á la inconvención, por cuanto los eximía de la regla común y quebrantaba el principio de igualdad. Es evidente que el Dr. Cortés interpretaba correctamente el alcance de las leyes citadas, mientras que la sentencia de 1ª Instancia que fué confirmada por la Cámara no guarda analogía con los antecedentes de la cuestión. La resolución de la Cámara está en contra de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de la Nación, la que ha sentado el principio contrario.

5—Véase, *Abogado*, núm. 10.

6—El patrono tiene derecho indiscutible de poseer la finca capellánica á fin de ejercer el patronato con que fué investido. Además la finca debe estar poseída por alguien y nadie puede tener mejor derecho que el patrono.

7—Porque es el único que tiene interés en ello.

1—El art. 1036 del Cód. Civ., establece que las cartas dirigidas á terceros no serán admitidas en juicio aunque en ellas se mencione al



no es carta misiva sino carta orden, y en consecuencia, autenticada es prueba de la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4^a.

2. **Carta**—Reconociendo espresamente la obligación y ordenando el pago por un tercero, no se encuentra comprendida entre aquellas que la ley rechaza por tener solo referencias incidentales.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Serie 4^a.

3. **Carta**—De pobreza, solo procede su otorgamiento al que justifique carencia de recursos y la imposibilidad de adquirirlos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 29, Ser. 4^a.

1. **Carta de crédito**—Contra la deuda proveniente de una carta de crédito, solo procede la prescripción de diez ó de veinte años, la excepción fundada en menor término debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3^a.

guna obligación: Escribela define diciendo: que es el papel que uno escribe y dirige, regularmente cerrado, á otro manifestándole sus pensamientos sobre alguna cosa. En la carta en cuestión no se hacían manifestaciones íntimas, sino que se ordenaba el pago de una cantidad de dinero, siendo este su esclusivo objeto. Debía considerarse como carta orden, pues en ella se decía quiere usted pagar la suma de. . . al Dr. . . . No es, por consiguiente, un documento confidencial, es una carta orden.

2—Véase la nota anterior.

3—Art. 595 del Cód. de Proc.

1—La excepción de prescripción se fundaba en el art. 1003, inc. 3^o, del Cód. de Com. ant., el que dice: «Se prescribe por cuatro años las deudas justificadas por cuentas corrientes entregadas y aceptadas, ó por cuentas de ventas liquidadas ó que se presumen liquidadas». El caso del sumario no puede comprenderse en ninguno de los enumerados en este inciso. La obligación en virtud de la cual el tomador de una carta de crédito debe abonar al dador su importe, es una obligación comercial sometida al precepto del art. 1002, que establece el término de veinte años, cuando no se intenta acción alguna durante dicho lapso de tiempo. Si se aplicara el Cód. Civ., la prescripción sería de diez ó veinte años—art. 4023—como acción personal que es.



2. **Carta de crédito**—El dador de una carta de crédito es el único que tiene acción contra el tomador ó cobrador que haya hecho uso de ella; el pagador solo tiene relación de derecho contra el primero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

Carta de crédito—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.

1ª. **Carta misiva**—En ella no hay obligación de expresar las medidas de acuerdo con el sistema métrico decimal, y por consiguiente, no puede aplicarse multa por esta causa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4ª.

Carta misiva—Véase: *Carta*, núm. 1.

1ª. **Cartas privadas**—Aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están sujetas al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 353, Ser. 4ª.

Casa de comercio—Véase: *Prescripción de una marca de fábrica*, núm. 1.

1ª. **Caso fortuito**—Las frecuentes lluvias fuera de la es-

2—El art. 627 del Cód. de Com. ant., es terminante al respecto cuando dice que el dador de una carta de crédito queda obligado hacia la persona á cuyo cargo la dió, por la cantidad que hubiese pagado en virtud de ella, no excediendo de la que se fijó en la misma carta. Y el 630 establece que el portador debe reembolsar al dador la cantidad que hubiere percibido en virtud de ella; y si no lo hiciere, podrá el dador exigir el pago de la cantidad y demás accesorios.

1ª—Las cartas misivas no están comprendidas en la disposición del art. 14, inc. 4º, de la ley de Julio de 1887, que regía el caso, por cuanto ellas se referían á declaraciones testimoniales producidas en forma de cartas y tendientes á establecer en juicio hechos ya consumados.

1ª—Siendo una carta de carácter privado, no estaba sujeta á lo dispuesto en el art. 2 de la Ley de 1891.

1ª—El contratista se comprometió á construir una obra en el término de 40 días, salvo fuerza mayor—art. 514, Cód. Civ.—El plazo debió empezar á correr desde el 25 de Octubre, es decir, cuando comenzaba la estación de verano, época en que las lluvias no son frecuentes. El informe de la Oficina Meteorológica demostró que ese verano fué extraordinariamente lluvioso, al extremo de haber caído una cantidad de



tación natural, importan el caso fortuito ó fuerza mayor previsto en el contrato de construcción.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 300, Ser. 4^a.

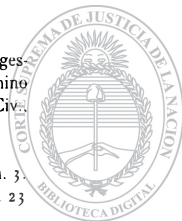
2. **Caso fortuito**—El embargo de los bienes, de uno de los contratantes, que le impida el cumplimiento del contrato, aun declarado indebido, no puede ser considerado como caso fortuito.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

1. **Caucción**—Siendo de competencia privativa del juzgado fijar el monto de la caucción, el auto en que se fija es inapelable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 4^a.

agua igual ó mayor á la que cae comunmente en varios años en igual periodo de tiempo. Esa circunstancia era por sí sola suficiente para justificar el caso fortuito y era tanto más atendible, si se tenía en cuenta que la construcción debía levantarse en un terreno sumamente bajo y sujeto á continuas inundaciones.

2.—Porque ese embargo que ha sido trabado es justo ó es injusto. En el primer caso, el acreedor debe soportar sus consecuencias porque ha sido trabado por su culpa, y ha sido un hecho que ha podido preverse, no siendo en estas condiciones un caso fortuito—art. 512, Cód. Civ.—En el segundo caso tampoco puede constituir tal hecho un caso fortuito; porque las violencias y los abusos de los particulares no pueden contarse como caso fortuito, por estar sujetos á otros principios que obligan á la reparación del mal que causan, como lo espresa la doctrina espuesta por el codificador en la nota al art. 514.

1.—Esta resolución se fundó por la Cámara en el art. 454 del Cód. de Proc., el que declara que el Juez la calificara por sí solo. De manera que la atribución concedida exclusivamente al Juez no es sobre el monto sino sobre la clase de fianza ofrecida. En cuanto á su monto, el mismo art. dice: y encontrándolo bastante mandará otorgar la escritura correspondiente. De esto resulta que es atribución privativa del Juez, calificar la fianza ofrecida; esto es, si debe ella ser personal ó pecuniaria; pero una vez resuelta la clase de fianza que el Juez quiere admitir viene la fijación del monto, el que solo puede resolverlo en grado de apelación el Superior. Así lo ha entendido esta misma Cámara que hoy piensa en la forma sentada en el sumario, pues en el tom. 8^o, pág. 313, Ser. 2^a, Jud. Civ. corre publicada una resolución en la que se fijó en 3.000 nacionales una fianza determinada en 10.000 por el Juez de 1^a Instancia. Véase Inst., tom. 3^o, verb. *Fianza*, núm. 2.



2^a. **Caución**—De *rato et grato*, procede para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un término para la presentación del mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

Caudal—Véase: *Alimentos provisorios*, núm. 2.

Caudal hereditario—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 3.

Causa justificada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 23 —*Padrastro*, núm. 1.

Causas graves—Véase: *Abuela*, núm. 1.

1. **Causante**—Existiendo en autos suficientes datos para identificar al causante de la testamentaria, no debe producirse información para subsanar un error de la partida de matrimonio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 190, Ser. 3^a.

2^b. **Causante**—Si resulta que falleció en jurisdicción de la Provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3^a.

Causante—Véase: *Posesión*, núm. 7—*Testamentaria*, número 2—*Hijuela*, núm. 1—*Heredero*, núm. 7—*Administrador judicial*, núm. 1—*Acción personal*, núm. 4—*Alhajas*, núm. 1.

Cedente—Véase: *Posiciones*, núm. 30—*Evicción*, número 3.

1^a. **Cédula**—El traslado de las excepciones no debe

2^a—Ley 21, tit. 5^o, Part. 3^a.

2^b—Art. 3284 del Cód. Civ. y 634 del de Proc.

1^a—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Instancia en la que se dijo que asumiendo el demandado el rol de demandante al oponer una excepción, el término para evacuar el traslado solo puede empezar á correr desde que la providencia que lo confiere le es notificada personalmente ó en la forma que establece el art. 77 del Cód. de Proc. La Cámara dijo que no estando la providencia comprendida en lo dispuesto en el art. 33 del Cód. de Proc., basta que ella sea notificada por nota.



ser notificado por cédula.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 111. Ser. 3ª.

2. Cédula.—Para testigos, solo pueden hacerse en papel simple, si existe papel sellado para reponerla en el acto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 241. Ser. 4ª.

Cédula—Véase: *Traslado*, núm. 1.—*Posiciones*, núm. 15.—*Modificaciones*, núm. 4.

1. Censo capellánico—No procede su cancelación, mientras no se compruebe plenamente el derecho de los que

2.—Dijo el Juzgado que si bien por la práctica constante de nuestros tribunales se ha establecido que las cédulas a los testigos se dejen impresas en papel simple, dada su extensión y con el fin de facilitar el diligenciamiento de las notificaciones, ello no faculta a los secretarios para efectuarlas sin que se les entregue el papel sellado correspondiente con el fin de reponer la foja *ipso facto*, por cuanto el art. 41 de la Ley de papel Sellado solo autoriza a los Jueces y funcionarios públicos de la Nación para actuar en papel común con cargo de reposición. Este argumento falla por su base, pues la ley de papel sellado se infringe desde el momento en que se permite a los secretarios copiar las cédulas en papel común, aunque ella tenga que reponerse *ipso facto*, como dice el fallo. El término más o menos largo que media entre el diligenciamiento de la notificación y la reposición de la cédula poco importa a los efectos de la ley. Lo cierto es que se les prohíbe actuar en papel común y sin embargo es práctica constante, diaria que esas cédulas se hacen todas en papel común, cuando esto lo prohíbe espresamente la Ley La Cámara y los Jueces, escusan esto, fundándose en el recargo de trabajo. Este argumento sería bueno cuando se tratara de reformar la ley, pero no al tratarse de su aplicación. Con el hecho de agregar una cédula escrita en papel común se viola la ley ¿qué inconveniente hay en que esa cédula se reponga un poco más tarde? La razón de la resolución está en otra parte; tanto los Jueces como la Cámara tratan de salvar a sus subalternos de los muchos cargos que diariamente formulan los litigantes contra ellos, por su desidia y por la lentitud del procedimiento, y encuentran un pretexto, una excusa, en el sumario. Esta jurisprudencia tiene que modificarse, ya sea en el sentido de no permitir que se agreguen las cédulas impresas o ya sea permitiendo que se repongan después de las diligenciadas: lo primero sería lo más arreglado a derecho.



prestan su conformidad como patrones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 76. Ser. 3^a.

Certificado—Véase: *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1^a. **Certificado médico**—No siendo negada su autenticidad, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 78. Ser. 4^a.

1^b. **Cesión**.—El cedente ó sus herederos deben devolver el precio y sus intereses, siempre que se justifique que no existía la cosa, cuando tuvo lugar la cesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 197. Ser. 3^a.

2. **Cesión**.—Hecha por un socio, de una parte de las utilidades que pueda proporcionarle un negocio determinado, no basta para conceder al tercero cesionario los derechos de socio que aquel tenía: el cedente es el único deudor responsable para con el tercero.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 350. Ser. 3^a.

3. **Cesión**—La prueba de la de una obligación de hacer,

1^a.—Porque el certificado justifica la imposibilidad de concurrir á la audiencia, causal bastante para señalar nuevo día. Puede suceder que no se niegue la autenticidad de la firma, pero sí la exactitud de su contenido. El hecho aseverado en él puede no ser cierto, en este caso debe abrirse á prueba el incidente.

1^b.—La cesión versaba sobre acciones y derechos á unos lotes de tierras, la que está sujeta á las disposiciones relativas á la compraventa, en cuanto no fuesen modificadas en la forma del artículo 1435 del Cód. Civ. Cuando la cesión se verificó, los derechos habían ya caducado, siendo de estricta aplicación el artículo 1476, á no ser que la cesión hubiese sido hecha como que el derecho cedido tuviese el carácter de dudoso.

2.—Porque los contratos no obligan á terceros—art. 1199, Cód. Civil.—Es aplicable con especialidad al caso del sumario el art. 1671.

3.—Otorgado un boleto de compraventa de un inmueble, se exigió la escrituración por el vendedor: el comprador dijo que el boleto lo había cedido á un tercero y que esa cesión fué notificada al vendedor.



como asimismo la de su aceptación por el acreedor es á cargo exclusivo del deudor que la invoca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 392, Ser. 3ª.

Cesión.—Véase: *Cesionario*, núm. 1.—*Contrato rescindido*, núm. 1.—*Contrato de arrendamiento*, núm. 18.—*Obligación de hacer*, núm. 7.—*Interdicto de recobrar*, número 10.

1ª. Cesión de bienes.—Para que el acreedor pueda compeler al deudor á hacer cesión de bienes, su crédito debe ser incontestado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 420, Ser. 4ª.

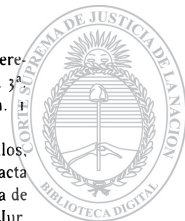
Cesión de bienes.—Véase: *Poder*, núm. 3.

1ª. Cesión de créditos.—Las disposiciones referentes á la

Abierta la causa á prueba nada comprobó el demandado á quien en el caso correspondía la prueba, en virtud del principio de que al que aduce un hecho nuevo en juicio le corresponde la prueba. La cesión hecha por el comprador es para el vendedor una *res inter alios acta* con la que nada tiene que ver el vendedor. En el caso del sumario el demandado confesó el fundamento de la demanda, pero opuso defensas, las que son á su cargo, como lo establece la ley 8, tit. 3, Part. 3ª, cuando dice: «Conocen á las vegadas los demandados, lo que les demandan en juyzio. Pero ponen luego defensiones ante si, que han pagado ó fecho aquello que les demandan. E por ende dezimos, que en tales razones como estas, ó en otras semejantes dellas, que deue el juzgador dar plazo al demandado, á que prueue la defension que ouiere puesta ante si. E si al plazo que fuere puesto, non pudiera prouar la defension, deuel dar por vencido de la demanda.»

1ª.—El título fué tachado de nulo por varias razones, no reuniendo entonces las condiciones requeridas por el art. 719 del Cód. de Proc. que exige que el acreedor sea legítimo. Además el documento era privado. Esta disposición de la ley civil, está en consonancia con la ley mercantil, la que también exige que el acreedor sea legítimo—art. 1392 del Cód. de Com.

1ª.—El título «De la cesión de Créditos» del Cód. Civil—arts 1439 y 1470—legisla las relaciones de derecho entre cedente y cesionario y el deudor cedido, entre sí y respecto de terceros, pero en la cesión de derechos hereditarios que motivó este juicio, se trataba de la cuestión surjida entre dos cesionarios, el cedente no intervenía para nada. En



cesión de créditos, no son aplicables a la cesión de derechos hereditarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Ser. 3ª.

Cesión de créditos Véase: *Crédito hipotecario*, núm. 4.
—*Escritura pública*, núm. 13.

1. Cesión de derechos —Hereditarios, tratándose de ellos, no es requisito indispensable su determinación exacta para la validez de la escritura de cesión, ni es causa de nulidad la falta de posesión de los bienes cedidos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3ª.

2. Cesión de derechos—Para que el boleto de compraventa importe una cesión de derechos y acciones, debe existir el endoso al tercero, del boleto otorgado por el propietario.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3ª.

la cesión de créditos la notificación al deudor cedido y la aceptación hecha por éste creó relaciones directas entre el cesionario y el deudor, y por consiguiente esa notificación y aceptación es el hecho principal para obligar a este último que es extraño al acto de la cesión: de aquí resulta, que el primero que ha notificado la cesión al deudor, ó ha obtenido su aceptación auténtica tenga preferencia sobre otra cesión de fecha anterior, pero posterior a la notificación al deudor. En la cesión de créditos para que la cesión surta todos sus efectos legales, es necesario que concurren cedente, cesionario y deudor cedido. No sucede lo propio en la cesión de derechos hereditarios.—Véase: *Derechos Hereditarios*, núm. 6.

1—El vendedor no transfiere sino lo que le corresponde, y debe entenderse que la cesión se limita a lo que le corresponde al cedente y al ejercicio de sus acciones. No es posible determinar con precisión los bienes que se enajenan en una cesión de derechos hereditarios, pues la herencia es el conjunto de los bienes que constituyen el patrimonio de una persona. Como conjunto ideal é indeterminado que es en cierto modo, no puede designarse con precisión las cosas individuales vendidas. Los bienes aun indeterminados pueden ser materia del contrato de compraventa. Los arts. 2160 al 2163 del Cód. Civ. lo autorizan. Aunque no se supiese que la herencia existiese positivamente, la cesión podría siempre hacerse porque la autoriza el art. 1446 del mismo Cód.

2—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.



3. *Cesión de derechos*—Justificada por la confesión ficta y por la cesión de derechos la existencia del contrato los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3ª.

4. *Cesión de derechos*—Debe acompañarse y agregarse al expediente, testimonio de toda cesión de derechos hereditarios hecha en escritura pública.—Jur. Civil, tomo 1, pág. 64, Ser. 4ª.

5. *Cesión de derechos*—Hereditarios, no puede ser rescindida aun cuando una parte resulte de menor valor que el que le fué reconocido en el contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4ª.

Cesión de derechos—Véase: *Mandatario*, núm. 11—*Contrato*, núm. 12—*Cesión de créditos*, núm. 1—*Evicción*, núm. 3—*Derechos hereditarios*, núm. 5.

1. *Cesionario*—El cesionario de un contrato, que debía recibir un tanto por ciento del total de las obras en pago de la cesión, tiene derecho á la parte proporcional de

3—Se dió por contestada la demanda en rebeldía; se abrió á prueba y el demandado no produjo ninguna: dictada sentencia se apeló y no se negó la existencia del boleto cuando el demandado intervino: todos estos antecedentes hacen presumir la exactitud de los hechos alegados y de la existencia del boleto. La minoría que la compuso un voto dijo que la incontestación á la demanda no producía la confesión ficta de los hechos que la instruyen, ni exime al demandante del peso de la prueba.

4—Se ordenó á fin de acreditar la personería de los interesados.

5—Arts. 1328, 1435, 1476 y 1477 del Cód. Civ. Habría lugar á la evicción—art. 2089.

1—La suma percibida representa la utilidad que se deja de obtener por el contratista por la falta de cumplimiento del contrato—art. 519 del Cód. Civ.—El contrato de cesión, como todo contrato, obliga no solo á lo que está formalmente expresado, sino también á todas las consecuencias que puedan considerarse virtualmente comprendidas en el —art. 1198, *ibid*.



la suma percibida por su rescisión.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 400, Ser. 3^a.

Cesionario—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 1. *Posesión*, núm. 5. *Jurisdicción*, núm. 1. *Contrato de arrendamiento*, núm. 18.

Cesionarios—Véase: *Socios*, núm. 1.

Ciencia propia—Véase: *Contradocumento*, núm. 2.

Circulación—Véase: *Moneda especial*, núm. 1.

1^a. **Citación**—Procede la recepción á prueba del incidente sobre nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4^a.

Citación—Véase: *Título de propiedad*, núm. 1—*Nulidad de la citación*, núm. 1—*Interdicto*, núms. 3, 6 y 7—*Testigos*, núms. 9 y 10—*Hijo natural*, núm. 10—*Posección judicial*, núm. 12—*Posiciones*, núm. 41—*Escritura pública*, núms. 7 y 16.

Citación de evicción—Véase: *Evicción*, núms. 1 y 4.

Citación por edictos—Véase: *Domicilio*, núm. 13.

Ciudadano argentino—Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 5—*Jurisdicción federal*, núm. 3.

Clandestinidad—Véase: *Interdicto de recobrar*, núms. 1, 2 y 3—*Edificación*, núm. 1.

Cláusula—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 15 y 18.

1^b. **Cláusula penal**—Si el vendedor opta por el cumplimiento del contrato, no puede exigir la aplicación de la cláusula penal estipulada para la falta de cumplimiento dentro del término señalado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 4^a.

1^a. A fin de apreciar debidamente los efectos legales de dichas citaciones.

1.—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 20.



1. **Cláusulas**—El reconocimiento de la existencia de un contrato verbal, no importa el reconocimiento de las bases, y corresponde al demandante la prueba de las cláusulas cuya existencia afirma al deducir su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3^a.

Cláusulas—Véase: *Escrituras*, núm. 1—*Locatario*, número 2—*Mandatario*, núm. 3—*Contrato verbal*, número 6—*Boleto de compraventa*, núm. 13—*Escritura de venta*, núm. 1.

Clausura—Véase: *Consejo Nacional de Higiene*, número 1.

Cliente—Véase: *Honorarios*, núm. 23.

Coadyuvante—Véase: *Posiciones*, núm. 2.

Co-autor—Véase: *Indemnización*, núm. 9.

Cobrador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1—El actor dijo que se había celebrado un contrato verbal de arrendamiento, por el término de tres años: el demandado dijo que el contrato se había celebrado efectivamente pero solo por un año y bajo la condición de que se le daría un fiador abonado, es evidente que no habiendo cumplido con la condición, el contrato debía considerarse como no perfecto, aunque si bien es cierto que el demandado confesó que hubo un convenio para el arrendamiento, no por eso debe darse por probado el contrato en la forma y condiciones espuestas por la parte, porque á este respecto no existe conformidad en los hechos alegados: y como en esta clase de contratos, las condiciones varían al infinito, corresponde la prueba de que el contrato quedó definitivamente concluido, al que alegó su existencia. Ley 1^a, tit. 14, Part. 3.^a Se dijo que el demandado había negado el término del contrato así como el destino de la cosa, y que por consiguiente esa negativa importa destruir una presunción e incumbe la prueba á quien la niega. Esto no es así, pues desde que se reconoce que sobre los puntos enunciados solo se han producido negativas por parte del demandado. No sucedería lo propio si se hubiese traído á tela de juicio algunos hechos nuevos, pues entonces su prueba incumbiría al que los aduce. Pero aquí no se formulan hechos nuevos, puesto que se trata de un contrato que forma un solo conjunto en todas sus cláusulas.



Cobrar—Véase: *Excepción de falta de personería*, número 8.

Cobro—Véase: *Mandatario*, núms. 13 y 14.

Cobedereros—Véase: *Heredero*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núms. 1 y 3—*Demandas ordinaria*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 5.

1^a. **Colación**—Ella solo es aplicable á los herederos ó legatarios: las deudas del padre no pueden afectar los derechos hereditarios de los hijos en la herencia materna.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

Colación—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 5.

Comerciante—Véase: *Libros de comercio*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 5—*Jurisdicción civil*, núm. 1.

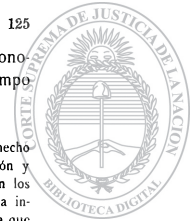
1^b. **Comisario**—Los actos llevados á cabo por un Comisario de policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pag. 201, Ser. 3^a.

2. **Comisario**—De policía, es responsable de las órdenes

1^a.—Arts. 3477 y 3478 del Cód. Civ.

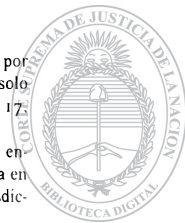
1^b.—Véase *Acto ilícito* núm. 5.

2.—El art. 1012 del Cód. Civ. determina con precisión las responsabilidades de los funcionarios públicos por sus hechos y omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones, las que quedan comprendidas bajo el título «De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos». Entablada demanda contra un comisario con motivo de haber dado una orden arbitraria cuyo resultado fué la clausura de la casa de comercio del damnificado, impidiéndole extraer sus mercaderías y obligándole á cerrar su negocio con menoscabo de su crédito. El demandado negó los hechos generadores de la acción, reconociendo solo que el auxiliar de la Comisaría se prestó, ante exigencias de un acreedor del demandante, á averiguar el nuevo domicilio de éste en caso de mudarse y se dió orden al vigilante de facción en ese sentido. Es principio sentado en nuestra legislación civil que «las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos».



de sus subalternos las que habiendo llegado á su conocimiento no hayan merecido su desaprobación en tiempo oportuno.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396. Ser. 4^a.

«Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido preverlas. Así lo estatuyen los arts. 903 y 904 de nuestro Cód. Civ. Claro es por demás, que si la intervención policial en este asunto solo hubiera revestido la forma que afirmaba el demandado, el pleito no se habría producido; pero cuando se sostiene que no es así y que acaso á virtud de la misma orden á que el señor comisario se refiere, los vigilantes se estralimitaron, la responsabilidad que aquella trae aparejada en fuerza de los preceptos legales que quedan transcritos es de aplicación estricta, si el actor prueba los hechos en que funda su demanda. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos, dice con mucha oportunidad nuestro Código en su art. 902. Si, pues, la Comisaría dió órdenes para funciones que no le corresponden, y esas órdenes mal interpretadas han producido perjuicios, suya es la responsabilidad. Desde entonces todo el debate se reduce á inquirir si la acción de la Policía se ha contenido en los términos que sostiene el demandado, ó bien si se ha estralimitado hasta donde lo denuncia el actor. La prueba del demandante convencia de la estralimitación de los agentes de la Comisaría. Ahora, para dar á esta prueba toda su importancia, con arreglo á los preceptos de la sana crítica, ocurre preguntar: ¿es verosímil que los hechos en que el actor se funda sean forjados por su imaginación? ¿Se concibe confabulación de testigos para una demanda contra la policía, para reclamar indemnización á un comisario? ¿Es común entre nosotros que se preste el vecindario á perseguir á un empleado público inocente, y más cuando éste dispone de la fuerza pública instituida para el bien y la seguridad común? ¿No es más hacedero que el comisario haya dado una orden y sus agentes la hayan cumplido mal? Y si no, ¿por qué es que el mismo demandado en sus repreguntas trató de probar que la orden superior que invocaban los agentes no emanaba de él? Ahora, si lo que hay es una estralimitación de los subalternos, de buena ó de mala fe, sería demasiada insistencia volver á repetir porque la responsabilidad recae siempre sobre el demandado. Queda, pues, en toda su fuerza la prescripción del art. 1109 del Código: «Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia



1. **Comisión**—La del corredor deberá ser abonada por comprador y vendedor, aun cuando directamente uno solo haya requerido los servicios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17. Ser. 3ª.

2. **Comisión**—De venta de un inmueble, la demanda entre corredores, por parte de dicha comisión, y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 245, Ser. 3ª.

3. **Comisión**—Estipulada como comisión del corredor el excedente del precio fijado, las fluctuaciones que sufra la especie en que se verificó la venta; son á cargo del corredor y no del vendedor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201. Ser. 3ª.

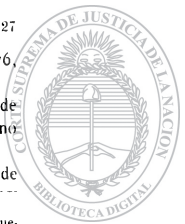
4. **Comisión**—De venta en remate judicial es de cuatro

cia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio. Si no ha existido culpa en el demandado por no haber dictado la orden que ha causado el daño, cuando menos habría de su parte *negligencia* por no haberla revocado al tener conocimiento de ella, y le sería siempre aplicable la misma disposición de la ley.

1—En cuanto á la comisión, así lo establece el art. 112 del Código de Comercio. Debe abonarse la comisión por ambos, porque desde el momento en que se acepta la intervención de los que como corredores se presentan proponiendo un negocio, se contrae la obligación de remunerar sus trabajos. Se trataba de la comisión de venta de un inmueble.

2—Si se tratara de la división de una sociedad formada exclusivamente para la compra y venta de bienes raíces, percibiendo una comisión, esa sociedad sería de carácter civil; pero como la sociedad se constituyó para comisiones en general, ella no puede tener otro carácter que el de mercantil; y como en el caso del sumario se trataba de dilucidar cuestiones entre esa clase de socios, con arreglo al art. 7 del Cód. de Com., la cuestión es mercantil. No debe olvidarse que los corredores son agentes auxiliares del comercio, y como tales, sujetos á la jurisdicción mercantil—art. 88, inc. 1ª, del Cód. de Com.

4—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Jur. Civil, tom. 5º, pág. 568, Ser. 1ª; S. C. P., tom. 6, pág. 378, Ser. 2ª. Véase la nota siguiente y verb. *Remate judicial*, núm. 34.



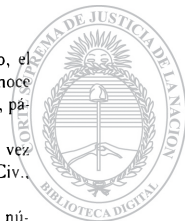
por ciento en los muebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 176. Ser. 4^a.

5. **Comisión**—De dos por ciento es la que corresponde en remate judicial de bienes inmuebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 177. Ser. 4^a.

6. **Comisión**—Estipulada como comisión de venta de

5—Véase nota precedente.

6—Se convino en que el comisionado trataría de vender un inmueble en la suma de 30.000 nacionales, estableciéndose como comisión el excedente que pudiese obtenerse sobre el precio fijado: la venta se verificó en 40.000 pesos que fueron después reducidos á 30.000 al firmarse la escritura pública correspondiente. El mandatario demandó el pago de la diferencia, es decir, de 10.000 nacionales, considerando terminada la operación para él desde el momento en que el comprador aceptó el precio, á lo que se opuso el mandante, alegando que el precio por el que se realizó en definitiva la venta, dadas las dificultades que opuso el comprado, fué reducido á la suma de 30.000 nacionales, y diciendo además que esa rebaja en el precio primitivo de la venta se hizo con conocimiento y consejo del mismo comisionista ó mandatario. Si esto es exacto, resulta que no tiene derecho al cobro de la comisión estipulada. No puede decirse que la operación quedó concluida por el simple hecho de firmarse el boleto, considerándose desde ese momento el mandatario con derecho á cobrarse la comisión estipulada como en el caso de una simple operación de corretaje, que termina para el corredor cuando el vendedor y comprador se ponen de acuerdo en las condiciones de la venta. Se trata de un contrato de compraventa que la ley establece que debe hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inciso 1º, del Cód. Civ.—De donde resulta que la operación no puede considerarse concluida mientras no se lleve á cabo el contrato contenido en el boleto privado otorgándose la escritura en forma. Pero resulta que la operación no pudo concluirse en los términos convenidos, y que para ello fué necesario una rebaja de precio, que la propuso el mismo mandatario, interviniendo directamente para que se llevara á cabo la venta con la rebaja de 10.000 nacionales. Así se comprobó en el curso del pleito, y por consiguiente falta la base del derecho para pedir el pago de una comisión dando por terminada una operación por una suma determinada, cuando resulta que no es esa la efectiva sino otra. Al aceptar el mandatario esta rebaja daba á entender que renunciaba tácitamente á la comisión que le correspondía según los términos de la au-



un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición.—Jur. Civ., tom. 9, página 90, Ser. 4^a.

7. **Comisión**—Equitativa, el Juez debe fijarla, una vez suspendido el remate sin culpa del martillero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4^a.

Comisión—Véase: *Compraventa*, núm. 1—*Tutor*, número 8—*Curador*, núm. 1—*Bienes raíces*, núm. 1.

1^o. **Comisionista**—Reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista a quien correspondía la demasía, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de suma alguna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 201, Ser. 3^a.

Comisionista—Véase: *Mandatario*, núm. 5—*Obligación de hacer*, núm. 8.

1^b. **Como se pide**—Esta providencia importa la conce-
torización. Además, tratándose de una obligación condicional, es necesario para que la condición se cumpla, como dice Pothier, que se verifique el hecho del modo que probablemente han querido las partes ó, como lo dice el art. 533 del Cód. Civ., que se cumpla de la manera que verosíblemente quisieron y entendieron que había de cumplirse. Aquí aparecía con toda claridad espresada la condición de pagar como comisión el excedente del precio fijado para la venta, y si esa condición no se realizó en los términos convenidos, no puede decirse que exista obligación por parte del mandante, ni que el mandatario tenga derecho á exigir el pago de la comisión tal como lo pedía.

7—Hay que distinguir si el remate se suspende sin culpa del martillero y sin culpa del mandante, pues en este caso no hay derecho á comisión. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Remate*, núm. 2. Si el remate se suspende sin culpa del martillero, pero por voluntad del mandante, la comisión proporcional es debida. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Remate*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Comisión*, núm. 3.

1—Habiéndose señalado día para que dos testigos concurrieran á prestar declaración, la parte contraria pidió que declararan ambos en



sión del pedido en su fondo y en su forma.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 60, Ser. 4^a.

Cómoda división— Véase: *Tasación*, núm. 3.

1^a. *Compensación*—Reconocido el hecho de haberse recibido un depósito irregular, el deudor está obligado á su devolución sin que pueda invocar la compensación con saldos de créditos que no revisten igual origen.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 257, Ser. 3^a.

Compensación—Véase: *Mandatario*, núm. 8 —*Excepción de compensación*, núm. 1.

1^b. *Competencia* —Carece el Juzgado de competencia sobre el demandado por acción personal, siempre que no resida en su jurisdicción. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 128, Serie 3^a.

la misma audiencia; el juzgado proveyó de conformidad: llegado el día de la audiencia concurrió un solo testigo, y la parte contraria se opuso á su examen; el Juez dijo que los arts. 189 y 194 del Cód. de Proc., que habían sido invocados en la audiencia por la parte opositora, se refieren á los testigos que son examinados en la misma audiencia, y que no hay disposición alguna legal que autorice á una de las partes para exigir que los testigos de la contraria sean examinados en el mismo acto: Que siempre en los tribunales se ha observado la práctica indiscutible de que se tome declaración á los testigos que asisten, señalándose nueva audiencia para los inasistentes: Que el juzgado no ha podido resolver en contra de estos principios legales y que al dictar la providencia en que se fundaba la parte opositora, sólo se ha limitado á señalar una audiencia para que declaren los dos testigos, y en consecuencia, no hizo lugar á lo solicitado, ordenando se recibiera la declaración al testigo que había concurrido. Apelada esta resolución, la Cámara la revocó, por cuanto la providencia en que se había proveído de conformidad con lo solicitado en el escrito en que se pedía la declaración conjunta, había quedado consentida.

1^a—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 2223 del Cód. Civ.

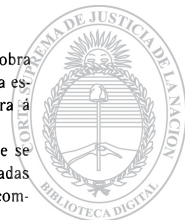
1^b—Siempre que no se encuentre, aunque sea de una manera accidental, en el lugar en que se le demanda ó en el que se celebró el contrato materia del pleito.—Arts. 3 y 4, inc. 6^o, del Cód. de Proc.

2. **Competencia**.—Del Juez, en un interdicto de obra nueva, se rige por el precio asignado al inmueble en la escritura pública de compraventa y no por el de la obra a construir.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 4.^a.

3. **Competencia**.—El conocimiento de juicios en que se discute la aplicación de las leyes del Congreso, dictadas en su carácter de Legislatura de la Capital, no es de com-

2.—El art. 11 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. de 1886, establece la competencia de los Juzgados de Paz, hasta 2000 nacionales: el art. 14 prescribía el juramento para el caso en que la cosa demandada no sea dinero, el actor manifieste su valor bajo juramento al entablar su demanda. Si esta manifestación no se hace, es porque implícitamente se acepta el asignado en la escritura. Se debe resolver la competencia teniendo en cuenta el valor del terreno y no el del edificio, porque el litigio versa sobre la posesión de aquél, y éste sólo se tiene en cuenta como la causa de esa perturbación. No se cuestiona la posesión de la obra sino la del terreno.

3.—Se dijo de incompetencia fundándose en que la obligación cuyo cumplimiento se demandaba—cobro de afirmados—emana de una Ley nacional, de 24 Setiembre de 1888, y que estando regido el juicio por una ley nacional, correspondía su conocimiento y resolución á los Jueces Federales, según disposición del art. 2.^o de la ley de 14 de Setiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Trib. Nac. Pero es el caso que esa jurisdicción y competencia en la Cap. de la Rep. no están regidas por la Ley de 1863, ni pueden estarlo desde que deben su origen á leyes posteriores, motivadas por la federalización de este municipio, una vez constituida la Capital. La Ley Org. de los Trib. de la Cap., de Noviembre de 1886, al crear los Jueces Federales locales, determinó su competencia y jurisdicción en el art. 111, disponiendo en el inc. 1.^o que les corresponde conocer de los casos que sean regidos especialmente por la Const. Nac., los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancione el Congreso, con escepción de las que se refieren al Gobierno y Administración de la Cap. La ley que motivaba la cuestión de incompetencia versaba sobre pavimentación de las calles de la Cap.; se refiere únicamente á esta localidad, y por consiguiente, es de las especialmente exceptuadas al final del inciso 1.^o ya citado. El conocimiento de estos juicios corresponde, en consecuencia, á los tribunales ordinarios—art. 70 de la ley citada.





potencia de los Tribunales Federales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 4^a.

4. Competencia.—Se rige por la suma demandada aun cuando por ser á oro, correspondería á distinta jurisdicción después de su conversión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4^a.

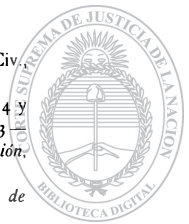
5. Competencia.—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4^a.

6. Competencia.—Consentida la competencia en lo prin-

4—Una deuda á oro, fué abonada en su equivalente á papel, otorgándose el recibo á papel; después se gestiona la devolución de su importe; se dice de incompetencia por cuanto la obligación á oro no alcanzaba á la competencia de 1^a Inst.: se declaró que esta era la jurisdicción competente porque el recibo de la deuda originaria estipulada á oro fué satisfecha en moneda de curso legal, cuyo monto excede en mucho á la suma que la ley fija como límite para la jurisdicción de la justicia de Paz. Tratándose de una obligación de dos sumas de dinero cumplida en la forma autorizada por el art. 619 del Cód. Civ., la competencia surge por la opción hecha de la forma de pago modificando la obligación. Este es un caso especialísimo que debe tenerse en cuenta con un alcance muy limitado, y observarse la jurisprudencia establecida en otros casos. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Jurisdicción*, núm. 1, y tom. 3, mismo verb., núm. 7. Puede verse asimismo el tomo 4^o, verb. *Jurisdicción*, núm. 8, de la Inst.

5—Si para exigir el pago de la multa no se tiene nunca en cuenta su importe, del mismo modo para exigir la reintegración de lo pagado por esa causa no debe tampoco tenerse en cuenta su monto. Tanto en uno como en otro caso, el cobro iniciado es un incidente de lo principal; porque tiene por base y causa documentos que son fundamento del pleito: lo contrario sería perjudicar al litigante que siendo más diligente se adelanta al pago de la multa, dificultándose el reintegro de lo pagado por la otra parte.

6—Es principio general que el único juez competente para entender en los incidentes es el de lo principal.



cial, no puede declinarse en los incidentes.—Jur. Civ. tom. 10, pág. 306, Ser. 4^a.

Competencia—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 14 y 15—*Funcionarios públicos*, núm. 1—*Posesión*, núm. 3—*Comisión*, núms. 1 y 2—*Juez de Feria*, núm. 1—*Acción*, núm. 2—*Escepción dilatoria*, núm. 4.

Competente—Véase: *Demanda*, núm. 1—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Declaratoria de herederos*, núm. 5.

Complicidad—Véase: *Revocación*, núm. 1.

Compra—Véase: *Contrato de compraventa*, número 7—*Desistimiento*, núm. 1—*Dinero propio*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 13 y 15—*Bienes de la sucesión*, número 1.

1. **Comprador**—Cumplida por el vendedor la condición á que estaba subordinada la entrega del precio, el comprador está obligado al pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 3^a.

2. **Comprador**—Que en el acto de la venta conocía la existencia de los títulos en poder de un tercero, no puede retardar el cumplimiento del contrato siempre que aquel

1—Art. 1197 del Cód. Civ.

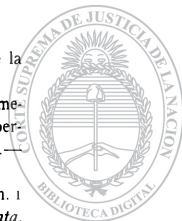
2—El inmueble vendido reconocía una hipoteca á favor del Banco Hipotecario Nacional, según lo espresaba el mismo boleto de compraventa, pudiendo por consiguiente el comprador examinar los títulos de propiedad, cuando él quisiera, en aquel establecimiento. El demandado alegó que no podía escriturar sin que previamente tuviese los títulos en su poder, á fin de llevárselos á su abogado para que los examinara. Tal pretensión era inesplicable, pues los títulos pudieron ser examinados en el establecimiento, de donde no salen hasta que el préstamo se cancele totalmente, como lo ordenan sus estatutos. La obligación del vendedor, en estos casos, consiste en entregar la libreta del Banco para examinar los títulos: no se le puede imponer la obligación de entregar los títulos ó una copia de ellos. No puede retardarse el cumplimiento del contrato por falta de examen ó entrega de los títulos cuando ellos están á disposición del interesado.



los tenga á su disposición.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166 Ser. 4^a.

3. Comprador—Puede invocar á su favor los derechos

3—Siempre que los derechos le hubiesen sido trasmitidos por el vendedor. El caso es el siguiente: El comprador de un inmueble se presenta con su título de propiedad demandando á un tercero para que le entregue la cosa de que está en posesión. El comprador al mismo tiempo de comprar el inmueble adquirió la facultad de practicar cuantas diligencias fueran necesarias á fin de obtener la posesión de ese inmueble reivindicándolo de los que lo disfrutaban sin título alguno. La Cámara resolvió por mayoría, que el comprador, apesar de no tener la posesión y de no haberla tenido antes, podía reivindicar. La minoría sostuvo que el comprador carece del dominio, y por consiguiente, no puede ejercitar ninguna de las acciones reales que nacen del derecho de propiedad, entre las que se cuenta la de reivindicación—Arts. 2756 y 2758, Cód. Civ.—La escritura pública de adquisición solo confiere al comprador un derecho á la cosa comprada, mas no el dominio pleno sobre ella, desde que aun no ha entrado en posesión, la cual no pudo darle el vendedor, porque no la tenía. Pero de los antecedentes espuestos surge esta cuestión: ¿Puede el comprador ejercitar por su causante las acciones y derechos que tenga para reivindicar el inmueble poseído por un tercero, usando al efecto de las facultades que le confiere la cláusula transcrita? La afirmativa se impone. Si el vendedor tenía derecho y acción para reivindicar por sí mismo la propiedad, ha podido también conferir esos derechos al comprador para que los ejercite, promoviendo la demanda que ellos pudieron iniciar directamente. Nada se opone á esta solución, ni, hay error que pueda resultar del carácter que por ellos se atribuye el comprador. De aquí resulta que independientemente de las acciones que pueden resultar del contrato de compraventa entre vendedor y comprador sobre entrega de la cosa y de su precio, el último puede invocar los derechos que corresponden al primero para exigir de un tercero la entrega de la cosa vendida, ejercitando las mismas acciones que aquel tuviese. En este caso el tercero y actual poseedor, puede á su vez oponer al comprador las mismas defensas que podía deducir contra el vendedor. Por lo demás, concurre á robustecer la solución dada, el art. 2786 del Cód. Civ., que acuerda el derecho de reivindicar á todo aquel que tenga sobre la cosa un derecho real perfecto ó imperfecto. Resulta, pues, que no es necesario para la procedencia de la acción reivindicatoria que los ex-



del vendedor para exigir de un tercero la entrega de la cosa vendida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 298, Ser. 4ª.

4. **Comprador**—El que acepta un bien con los gravámenes que sobre él pesan, es el único responsable de los perjuicios que la falta de servicio de intereses le irroga.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 348, Ser. 4ª.

Comprador—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 1 —*Pacto comisorio*, núms. 2 y 8—*Boleto de compraventa*, núms. 7 y 33—*Compraventa*, núm. 4—*Título de propiedad*, núms. 2 y 15—*Comisión*, núm. 1—*Desistimiento*, núms. 1, 2, 4 y 6—*Posesión*, núm. 5—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 20 y 32—*Reivindicación*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 23 y 56—*Recusación*, números 1 y 3—*Contrato de compraventa*, núms. 10, 13, 15 y 22—*Información supletoria*, núm. 2—*Contrato bilateral*, núm. 5—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Precio*, núm. 1—*Seña*, núm. 5—*Simulación*, núm. 7—*Condominio*, núm. 7—*Inhibición*, núm. 9—*Socios*, núm. 1—*Depósito judicial*, núm. 1—*Evicción*, núm. 1

temos enumerados en el art. 2758 se cumplan en la persona misma del reivindicante, pues basta que lo hayan sido en sus causantes, de cuyos derechos puede hacer uso el sucesor. Puede consultarse en el sentido indicado, la fuente de donde han sido tomados los arts. 2789 y 2790. Pothier, tom. 8, núm. 324, publicación Dupin; Aubry Rau; Llerena, tom. 4, pág. 426; Laurent, tom. 6, núm. 170. La Cámara tiene sentada esta misma doctrina en el caso de Vázquez con Barros y en el de J. Marin con Pascuala Santana.

4—El comprador se reservó una suma de dinero para hacer frente al crédito hipotecario, «del que se hace cargo en un todo bajo los mismos plazos, cláusulas y condiciones con que fué constituido». Ante esta cláusula, bien explícita por cierto, es fuera de duda que quien debía atender el servicio de la deuda hipotecaria era el comprador, desde que el vendedor al desprenderse del dominio, en uso del derecho que le acuerda el art. 3157 del Cód. Civ., transfiere también al comprador el gravamen que afectaba á la finca.

— *Venta*, núm. 5 — *Posesión al comprador*, núm. 1 — *Avisos*, núm. 1 — *Escrituración*, núm. 5 — *Intereses*, núm. 8.

Comprador condicional.— Véase: *Incidente*, núm. 2.

1. Comprador judicial.— Debe verificar la oblación antes del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio de su derecho á oponerse que se disponga del depósito.— Jur. Civ., tom. 1, pág. 360. Ser. 3^a.

2. Comprador judicial.— El derecho del que conceptúa defectuosos los títulos de la compra hecha en remate judicial, está limitado al desistimiento si los vendedores se niegan á practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.— Jur. Civ., tom. 6, pág. 93. Ser. 3^a.

1.— La venta se había verificado mitad al contado y mitad á 90 días de plazo; el precio al contado debía oblar, pudiendo oponerse á que se disponga del depósito hasta tanto no se escriture el inmueble, siempre que el comprador no tuviese la posesión de la cosa, pues en este caso la falta de escrituración no obsta á que se pueda disponer del precio de compra de la cosa. Con la posesión de la cosa adquirida que se le da al comprador, el contrato queda perfecto. La venta de bienes raíces debe hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad, con escepción de las que se hacen en subasta pública. En este caso, una vez aprobado el remate y puesto en posesión el comprador, adquiere éste el dominio de la cosa sin necesidad de escrituración, pues esta no es sino una mera formalidad que nada tiene que ver con la trasmisión del dominio: si el comprador tiene el uso y goce de la cosa, no hay razón para que el vendedor no tenga el uso y goce del precio. Perfeccionado el contrato de compraventa, no hay razón para privar al vendedor de la disposición del precio.

2.— El defecto de los títulos no era subsanable en breve tiempo, quedando en este caso perfectamente deslindado el derecho del comprador, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 522 del Cód. de Proc. El caso éste está de acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase Inst., tom. 4, verb. *Títulos*, núm. 3; tom. 2, verb. *Desistimiento*, núm. 4, y *Títulos*, núm. 11.





3. **Comprador judicial**—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial. después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 4^a.

1. **Compraventa**—Aun cuando ésta no se lleve á término, los corredores tienen derecho al cobro de la comisión, siempre que la rescisión no les sea imputable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 3^a.

2. **Compraventa**—La promesa estipulada en documento privado no concede derechos á un tercero, si la cesión

3—Formuladas las observaciones contra los títulos que en concepto del comprador constituyan los vicios ó defectos, es necesario esperar la resolución judicial, á fin de aplicar la disposición del art. 522 del Cód. de Proc., porque no basta el criterio individual de las partes para establecer si existen ó no tales vicios, ó si ellos son subsanables en breve tiempo, pues solo en este caso está el comprador obligado á esperar á que se subsanen las deficiencias, sin que esté autorizado á desistir de la compra.

1—Abonándose la comisión en razón de la compra ó de la venta desde el momento en que la operación queda ajustada, los servicios del corredor desaparecen, quedando perfecto su derecho para exigir el cobro de su trabajo, sin que los hechos posteriores ó las convenciones que se celebren entre comprador y vendedor puedan perjudicarle ni tengan nada que ver con él, porque las consecuencias de esos hechos y los efectos de los contratos no alcanzan á terceros—Art. 1199 del Cód. Civil.

2—El boleto de compraventa contiene obligaciones recíprocas, de una parte la de escriturar y de la otra la de pagar el precio; luego no se trata de la cesión de un crédito establecido en favor de una de las partes, pues hay obligaciones mutuas. Si la cesión fuese hecha en estos casos contra la voluntad del vendedor, tendríamos que los compradores podrían eludir á voluntad el cumplimiento del contrato con solo transmitirlo á un tercero sin responsabilidad, burlando así la buena fe del vendedor. En las obligaciones bilaterales, una de las partes no puede cambiar la relación jurídica que los une, sin el consentimiento de la otra.—Art. 1459, Cód. Civ.



del boleto ha tenido lugar sin el consentimiento de los firmantes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 184, Ser. 4ª.

3. **Compraventa**—La cláusula inserta en el boleto de compraventa, de ser la operación verificada para un tercero, y el reconocimiento del vendedor, de la personería de aquél, desobliga á los firmantes del boleto de la obligación personal, siempre que el mandante hubiese aprobado y ratificado el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 4ª.

4. **Compraventa**—La compra á perpetuidad, del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en venta particular y como heredero del anterior arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3ª.

Compraventa—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 1 y siguientes—*Contrato de compraventa*, núm. 1 y siguientes—*Cosa ajena*, núm. 1—*Escritura*, núm. 1—*Confesión*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 3—*Inhibición*, número 1—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Renuncia tácita*, núm. 1—

3—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 13.

4—Una sepultura fué adquirida por 20 años, edificando el adquirente una bóveda: fallecido éste fué inhumado allí. Uno de sus hijos, invocando su carácter de tal, adquirió á perpetuidad el terreno: el otro le entabló demanda á fin de que se declarase el condominio, pues deseaba conservar aquel lugar para el sagrado donde reposaban los restos de sus antepasados. Se hizo lugar á la demanda, debiendo pagar al comprador la parte correspondiente y proporcional del precio de compra. Uno de los hijos no ha podido proceder á realizar la compra sin consultar previamente con el otro su voluntad, pues no era de suponerse que quisiera dejarlo abandonado. Como el comprador invocó su carácter de hijo al hacer la adquisición, la Municipalidad no publicó los avisos que estila, llamando á los deudos de los sepultados, de manera que no pudo el hermano tener conocimiento de la adquisición que se iba á hacer, conservando en consecuencia íntegro su derecho.



Escritura pública, núms. 12, 13, 15, 18 y 28—*Vendedor*, núm. 1—*Contrato verbal*, núms. 3, 5 y 8—*Jurisdicción por la cantidad*, núm. 1—*Nulidad de la venta*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núms. 6, 8 y 12—*Pacto comisorio*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núm. 19—*Daos y perjuicios*, núm. 101 y 104.

1ª. *Compulsa de libros*—Después de vencido el término de prueba, no procede la ampliación de una compulsa de libros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 63, Ser. 3ª.

2. *Compulsa de libros*—La diligencia aclaratoria de una compulsa de libros, debe practicarse dentro del término de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 4ª.

Compulsa—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 43.

Común apoderado—Véase: *Apoderado único*, núm. 1 y siguientes.

Comunidad—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 6.

Comunidad de intereses—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1.

Comunidad legal—Véase: *Separación de bienes*, núm. 3.

Concepción—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1—*Filiación natural*, núms. 1 y 2.

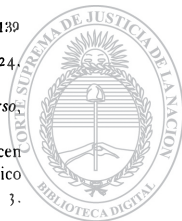
Concesión—Véase: *Término extraordinario*, núm. 5.

Concesión especial—Véase: *Empedrados*, núm. 3.

1. *Concubinato*—Es una fuerte presunción de que los hijos de la concubina, habidos durante la vida común, son

1ª—La prueba debe ser pedida, ordenada y producida dentro del término probatoria—Art. 118 del Cód. de Proc.

2—De conformidad con la jurisprudencia establecida y con los preceptos legales que rigen el caso. Véase el número precedente. En el caso presente, el auto haciéndose saber la agregación de la diligencia de compulsas, se hallaba consentido, y la diligencia se había practicado con el asentimiento del interesado en ella, sin que la observara.



hijos naturales del querido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 24, Ser. 3ª.

Concurso—Véase: *Poder*, núm. 3—*Bienes del concurso*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 26—*Venta*, núm. 6.

1ª. **Concurso civil**—Los acreedores hipotecarios carecen de personería para oponerse á la venta en remate público de los bienes afectados con hipoteca.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 57, Ser. 4ª.

2. **Concurso civil**—Del auto en que se declara el concurso civil procede el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 363, Ser. 4ª.

3. **Concurso civil**—El Ministerio Fiscal solo debe intervenir en los casos espresamente determinados por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120, Ser. 4ª.

4. **Concurso civil**—Solo procede el levantamiento del auto de concurso con la conformidad de todos los acreedores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 47, Ser. 4ª.

5. **Concurso civil**—Los acreedores carecen de personería para intervenir en el concurso civil: sus derechos están representados por el Sindico.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 102, Ser. 4ª.

1ª. **Condenación en costas**—No es obligatoria si los tri-

1ª—Véase *Acreedores hipotecarios*, núm. 1.

2—Art. 724, inc. 5ª, Cód. de Proc.

3—Art. 760 del Cód. de Proc.

4—Por el hecho de declararse el concurso, la masa de los bienes pasa á servir de garantía común á los acreedores del concursado; constituyendo una garantía, ella no puede suprimirse ni quedar sin efecto contra la voluntad de los acreedores beneficiados con esa garantía.

5—Véase *Acreedores*, núm. 1.

1ª—Véase la nota al verb. *Costas*, núm. 1. Salvo en el juicio ejecutivo en el que su imposición es de precepto legal—Art. 507, Cód. de Proc. O en otros casos especialmente establecidos por la ley—Art. 578, *ibid*.

bunales no encuentran suficiente mérito para decretarla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 111, Ser. 4^a.

Condenación en costas—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Costas*, núm. 1 y siguientes.

Condenación expresa—Véase: *Intereses*, núm. 7.

1. **Condición**—No llenada á su debido tiempo, no puede exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3^a.

2. **Condición**—Justificado que se ha llenado la condición de cuyo cumplimiento dependía la obligación de dar, el deudor debe ser condenado al pago.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 50, Ser. 3^a.

3. **Condición**—Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta las condiciones de fortuna del condenado á satisfacerlos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4^a.

1.—El vendedor de un inmueble se presentó demandando al comprador por escrituración. El boleto decía: «Cuando el Escribano haya revisado, y que se acepten los títulos, y cuando el comprador esté satisfecho de éstos, depositará la suma indicada, á la orden del vendedor, siendo éstos buenos, y libres de todo gravamen las escrituras se harán en seguida». El cumplimiento de las condiciones á que el boleto está subordinado debe justificarse por el que lo invoca. El vendedor remitió inmediatamente los títulos á un Escribano indicado por el comprador, contestando éste que los títulos eran deficientes, según se comprobó en autos. Si la venta era condicional y si esa condición dependía del comprador, es evidente que no podía pretender éste que el vendedor fuese condenado á escriturar sin comprobar haber cumplido con las condiciones impuestas. En los contratos bilaterales, una de las partes no puede demandar el cumplimiento del contrato sino comprobando que él lo cumplió por su parte ú ofreciendo cumplirlo.

2.—Arts. 533, 536 y 543 del Cód. Civ.

3.—Como asimismo el género de necesidades que la indemnización debe llenar, la naturaleza de los perjuicios y un cúmulo de circunstancias y de hechos que varían al infinito. Véase Inst., tom. 3, verb. *Daño*, núm. 1.



Condición.—Véase: *Obligación condicional*, núm. 1—*Capellanía*, núm. 2—*Comisión*, núm. 6—*Seña*, núm. 7—*Jactancia*, núm. 3.

Condición esencial.—Véase: *Bienes municipales*, núm. 1.

1. Condición resolutoria.—La fijación de un término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deje sin efecto el contrato, sino un plazo suspensivo dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

1.—El boleto decía: «Los vendedores se obligan á otorgar escritura pública dentro del término de cincuenta días». Esto quiere decir que durante ese término, el comprador no puede exigir que se le otorgue la escritura, ni el vendedor puede exigir que el comprador la acepte. Si ninguno de los demandantes podían demandarse dentro de ese término, que se considera común de acuerdo con el art. 570 del Cód. Civ., el cumplimiento de la obligación de hacer, es porque dicho plazo era suspensivo, suspendía el ejercicio del derecho del acreedor. Si ese plazo hubiese de considerarse resolutorio, resultaría que pendiente el plazo, el cumplimiento de la obligación no habría podido ser legalmente demandado, y que á su vencimiento ésta quedaría resuelta, quedando así librado á la voluntad de los contratantes el cumplimiento de sus obligaciones. Si se tuviese en cuenta la naturaleza del negocio, tampoco resultaría el carácter resolutorio del plazo. Un boleto de compraventa con la obligación de escriturar dentro de cierto plazo, es muy general, y ordinariamente nada puede determinar á creer que la intención de los contratantes hubiese sido hacer la escritura dentro del plazo, de tal manera que este fuese la razón determinante de la voluntad de los contratantes y que debieron considerarse desligados de todo vínculo vencido el plazo. La obligación contraída en boletos concebidos en los términos transcritos, es una obligación con plazo meramente suspensivo, y vencido él es exigible su cumplimiento. No hay que averiguar quién es el culpable para la no escrituración dentro del plazo estipulado porque lo mismo tiene como consecuencia legal. No mediando pacto expreso que autorice á una de las partes á disolver el contrato si la otra no lo cumple, dice el art. 1204, el contrato no podía disolverse y solo puede exigirse su cumplimiento.



Condición resolutoria—Véase: *Contrato verbal*, núm. 3—*Obligación condicional*, núm. 2.

Condición social—Véase: *Alimentos*, núm. 14.

1^a. **Condición suspensiva**—La fijación de un término para escriturar importa una condición suspensiva y no resolutoria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 327, Ser. 4^a.

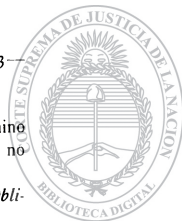
Condiciones—Véase: *Contrato privado*, núm. 2—*Obligación*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 6.

1^b. **Condiciones impuestas**—Si el donante no se reserva el derecho de obligar al cumplimiento de las condiciones impuestas para perfeccionar la donación, se considera que el acto es condicional y no de modo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

2. **Condiciones impuestas**—Cumplidas por el donatario

1^a—Véase *Condición resolutoria*, núm. 1.

1^b—Para decidir si las cargas puestas á una donación importan una condición ó una carga ó modo, según la terminología de los tratadistas, es necesario tener en cuenta, más que los términos ó locuciones empleados, la intención presunta, y sobre todo la naturaleza de la prestación ó del hecho sobre que recae. Por otra parte, las donaciones hechas con cargo se diferencian de las hechas bajo condición suspensiva: primero, en que el donatario puede, al menos cuando se trata de prestaciones apreciables en dinero, ser compelido al cumplimiento de las cargas impuestas á la donación, mientras que él es siempre dueño de cumplir ó no las condiciones potestativas de su parte á las cuales ésta se encuentra subordinada; y segundo, en que el cargo no suspende, ni la apertura ni aun la ejecución de la disposición, mientras que la condición suspende su apertura—Aubry y Rau, párrafo 701.—Así lo ha entendido nuestro Código cuando en la nota al art. 588, establece la diferencia entre el modo y la condición, espresándose así: La distinción entre el modo y la condición puede reducirse á lo siguiente: la condición es suspensiva pero no coercitiva. El modo es coercitivo pero no suspensivo. Así el modo no impide la adquisición del derecho y no espone al peligro de una pérdida total. No debe olvidarse que si el donatario se constituye en mora, procede la revocación de la donación—Arts. 1845 y 1850, Cód. Civ.





las condiciones impuestas en la escritura de donación, el acto queda perfeccionado é irrevocable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

Condiciones requeridas—Véase: *Nombramiento*, núm. 2.

1. **Condominio**—Reconocido por un condómino el hecho de la administración, debe rendir cuenta á los otros condóminos aun cuando no haya existido mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3^a.

2. **Condominio**—Para justificar la existencia de un condominio sobre inmuebles, solo es admisible la prueba resultante de un instrumento público.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3^a.

3. **Condominio**—Siendo forzosa la venta del bien, para la división del condominio, la existencia de un contrato de locación, no puede modificar la regla.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 250, Ser. 3^a.

1—Arts. 1909 y 2701 del Cód. Civ.

2—Se dijo que los bienes habían sido adquiridos en sociedad, debiendo en este caso el contrato hacerse en escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 3^o, Cód. Civ.—No se comprobaron los extremos de los arts. 1191 y 1192 para hacer admisible otra clase de prueba. Aquí uno de los litigantes dijo que los terrenos habían sido adquiridos en sociedad. La Cámara no dijo que la escritura sea necesaria para comprobar el condominio, solo dijo que: «No se ha exhibido la escritura pública de sociedad, ni puede aceptarse para probar la existencia del contrato invocado, la aplicabilidad al caso de lo establecido en los arts. 1191 y 1192 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc.»—El sumario pues, está equivocado, puesto que la escritura pública no es esencial para comprobar el condominio, pues la ley admite excepciones.

3—El copropietario tiene la facultad de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692, Cód. Civ.—Ese derecho no puede considerarse limitado por la existencia de un contrato de locación que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular—arts. 1498 y 3266—El art. 2715 es una excepción á la regla general.



4. **Condominio**—Existe sobre un sepulcro siempre que se permite la inscripción á nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado á nombre de uno solo de los condóminos.—Jur. Civil, tom. 6, pág. 5, Ser. 3ª.

5. **Condominio**—La compra á perpetuidad del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en adquisición particular y como heredero del arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición éstos solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3ª.

6. **Condominio**—El reconocimiento de un condominio

4—La posesión en común databa desde antes de la vigencia del Cód. Civ., cuando no era requerida la escritura pública para la constitución de derechos reales sobre inmuebles—Ley 4, tit. 4. Part. 5ª—El condominio quedó evidenciado por una serie de hechos ilevantables, con documentos privados autenticados en forma, declaraciones de testigos, confesión de parte, inscripción sobre la portada de los nombres de los condóminos: uso común que habían hecho para la inhumación de los miembros de su familia sin previo consentimiento recíproco, refacción y cuidado de la bóveda.

5—Véase: verb. *Compraventa*, núm. 4.

6—Aquí viene á establecerse el principio sustentado por nosotros, de que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, como la compraventa de inmuebles, fuesen hechos en documentos privados, puede pedirse la escrituración del inmueble sin pedir previamente la escrituración del boleto. El condominio, según el art. 1184 del Cód. Civ. debe hacerse en escritura pública—inc. 1ª—bajo pena de nulidad. Ahora bien, el documento privado que reconocía el condominio, debió primeramente elevarse á escritura pública, para después pedir la escrituración del inmueble en condominio; pero en el caso que nos ocupa, la Cámara olvidó el principio por ella sentado y ordenó que el condominio declarado en un documento privado fuese escriturado. El Juez de 1ª Instancia decia: «Quedando subsistente la obligación contraída en el recordado ins-



en instrumento privado, importa el reconocimiento de hacer escritura pública.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4^a.

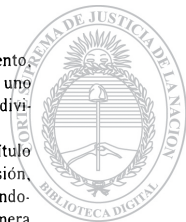
7. Condominio—Su existencia importa un defecto del título que permite el desistimiento del comprador en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 4^a.

8. Condominio—Reconocido éste, el condómino está

trumento privado, falta solo resolver sobre los efectos legales de esa obligación.» Habiéndose obligado por él á otorgarse en cualquier momento que se pida escritura en forma, reconociendo el condominio en la cosa, *la obligación es hacer*, y debe ser juzgada de acuerdo con lo que disponen los arts. 625 y 1187 del Cód. Civ., según los cuales, la persona obligada debe ejecutar de hecho en un tiempo propio y del modo que fué la intención de las partes que el hecho se ejecutara, y pudiendo la parte que se resistiese á hacer la escritura pública, ser demandado por la otra para que la otorgue, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. Por esto fallo, condenando á que se otorgue la escritura pública del condominio á que se obligó, bajo apercibimiento de derecho. La Cámara confirmó esta sentencia diciendo: «No encuentro en la expresión de agravios un solo argumento que destruya los sólidos fundamentos de la sentencia apelada. Se trata del cumplimiento de una obligación de otorgar la escritura de condominio de una finca. Reconocida la autenticidad de la firma ha quedado reconocido el cuerpo de él—art. 1028, Cód. Civ.—En estas y otras consideraciones se funda para confirmar la sentencia. Se ve pues, que en el caso que nos ocupa no se exigió que se elevara á escritura pública el boleto para luego escriturar el inmueble. Esta es la verdadera doctrina, y la misma Cámara de vez en cuando no puede dejar de consagrarla, como para dejar aquí y allá esparcidas algunas resoluciones que no den la esperanza de volver sobre su jurisprudencia tan reñida con la letra y el espíritu de las leyes que rigen el caso. Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7.

7—Es un defecto que no puede subsanarse en breve tiempo á causa de las múltiples diligencias y trámites que hay que llenar para dividir el condominio.

8—Este caso es la repetición del núm. 6. El Juez resolvió que debía otorgarse la escritura correspondiente de un lote de terreno, bajo pena de resolverse la obligación en pérdidas é intereses. La Cámara confirmó



obligado a otorgar escritura pública de ese reconocimiento, pero no de la parte que debería corresponder á cada uno de los condóminos como si se hubiese verificado la división.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 31, Ser. 4ª.

9. Condominio—La demanda sobre propiedad á título de heredero reconociendo en el contrario la posesión, hace prueba plena para rechazar la división de un condominio que no se invocó por el causante en la primera acción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4ª.

10. Condominio—La existencia de un condominio sobre el terreno locado, no puede fundar la resistencia del locador al cumplimiento del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4ª.

Condominio — Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 1—*Indivisión*, núm. 1—*Heredero*, núm. 7—*Arrendamiento*, núm. 3.

1. Condómino—La venta hecha por éste, de una parte

la sentencia, pero exigiendo la escrituración previa del condominio, porque, «siendo jurisprudencia de la Cámara, fundada en los artículos 1183, 1184, 1175 y 1191 del Cód. Civ., que cuando como al presente, se ejecutan derechos que emanan del dominio de un inmueble, es necesario que ellos tengan su apoyo en escritura pública, de manera que solo debe otorgarse escritura pública en que conste el condominio del inmueble». Se ve que la Cámara vuelve otra vez á su antigua teoría, la que tanto combatimos.

9.—Una persona entabla acción reivindicatoria, es vencida y muere: sus herederos inician nueva acción fundados en nuevos recaudos, pidiendo al mismo tiempo la división del condominio. Se dice que los herederos no pueden deducir esta acción de división porque el causante no lo hizo.

10.—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 26.

1.—El caso fué juzgado de acuerdo con las prescripciones de las antiguas leyes. La ley 53, tit. 5, Part. 5ª establece que: «dos o mas, á mas, á menos, de uno, decimos que cualquier de ellos puede vender la su parte, máguier la cosa non sea partida». Esta premisa se refiere á la venta de la parte indivisa de la cosa, según se



determinada de la cosa, sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.— Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 3ª.

2. Condómino.—La prueba de su conformidad con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino: la testimonial no es procedente.— Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Ser. 4ª.

3. Condómino.—Las cantidades adjudicadas sobre un

desprende de la glosa 303 puesta al final. Esta es la inteligencia que corrientemente le dan los espositores, y nuestro propio Codificador, ilustrando con su cita el art. 2677, que espresamente concede á los condóminos el derecho de enajenar su parte indivisa. De esta facultad acordada al comunero para disponer de su parte ideal, no se desprende que la tenga para disponer de una parte físicamente determinada de la cosa, porque estos conceptos son sustancialmente distintos, y de ahí que en un mismo cuerpo de leyes pueda, sin que en ello haya implicancia, permitirse lo primero y prohibirse lo segundo, como sucede en nuestro Cód.—Arts. 2677 y 2680.—Alcubilla, comentando la ley de Partida que dejamos citada dice en su Diccionario de Administración, verb. *Condomini*, que esa ley solo autoriza á los condueños á vender su parte, la que sea y como le pertenezca, no una parte fija y determinada que el vendedor señale á su arbitrio, tal vez en perjuicio de los condóminos. Si en estado de indivisión cualquier de los condueños pudiese á su arbitrio y sin sanción para sus actos, disponer de una porción determinada de la cosa común, los beneficios del juicio divisorio desaparecerían, primando sobre ellos el provecho é interés individuales contrariamente á la regla *non debet alteri per alterum iniqua exultatio inferri*. Nuestra legislación ha incorporado á sus disposiciones el mismo principio—art. 2680, citado.

2 —Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 27.

3 —Se convino que «la ejecución de estos pagos se encomienda al cónyuge, siendo entendido que satisfechas las deudas y libre de toda responsabilidad la sucesión, quedará á beneficio del espresado cónyuge la parte de los bienes que se asigna para la cancelación de estas deudas en la cuenta particionaria». Era inútil pretender que la división se hiciese en otra forma, cuando el convenio la estableció tan claramente, debiendo éste cumplirse—art. 1197, Cód. Civ.



bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas aumentan el haber del heredero encargado de ese pago, y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender que se dividan las rentas por partes iguales, sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

4. Condómino—Carece de derecho para reivindicar el tercero detentador, una parte materialmente determinada de la cosa común sin el consentimiento de sus condóminos ó sin haberse verificado antes la división.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 210, Ser. 4^a.

Condómino—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1.

1^a. Confabulación —Justificada la confabulación entre tercerista y ejecutado, la sentencia que los condena en las costas y detención dejando á salvo á favor del ejecutante las acciones criminales que viere convenirle, debe ser confirmada.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 108, Ser. 3^a.

Conferencias — Véase: *Regulación de honorarios*, número 4.

1^b. Confesión—La del demandado, de la existencia del contrato verbal de compraventa, hace inútil la resolución de si procede ó no la prueba testimonial. —Jur. Civ., tomo 3, pág. 334, Ser. 3^a.

2. Confesión—El reconocimiento de una deuda en el

4—Arts. 1331, 2679 y 2758 del Cód. Civ.

1^a—Art. 534 del Cód. de Proc.

1^b—La confesión de parte releva á la contraria de toda prueba: es la *probatio probatissima* de la Ley de Part.

2—El art. 3788 del Cód. Civ., preceptúa que el reconocimiento de una deuda hecha en un testamento, es reputado como un legado mientras no se pruebe lo contrario. Si el legado ó el reconocimiento excede de 200 nacionales, se requiere principio de prueba por escrito para hacer procedente la testimonial—art. 1193 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc.—El art. 1192 del Cód. Civ., dice que cualquier documento público ó privado que emane del adversario, ó de su causante y



testamento, importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 330, Ser. 4^a.

3. Confesión—La confesión por medio de las posiciones es indivisible, de manera que no puede admitirse lo favorable sino con las mismas restricciones que el absolvente haya hecho valer.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4^a.

Confesión—Véase: *Contrato verbal*, núms. 1, 2, 3 y 6—*Posiciones*, núms. 7 y 8—*Prueba testimonial*, núm. 8—*Contrato de locación*, núms. 2 y 4—*Inhibición*, núm. 12—*Acto simulado*, núm. 1.

Confesión contradictoria—Véase: *Prueba*, núm. 14.

que haga verosímil el hecho, se considera principio de prueba. Tratándose del reconocimiento expreso de la deuda hecho por el único interesado directo, es fuera de duda que es suficiente principio de prueba. Esta es la opinión de Troplong, quien comentando el art. 2061 del Cód. de Napoleón dice: «los antiguos autores han debatido la cuestión de saber si la confesión de una deuda contenida en un testamento revocado puede por lo menos servir de principio de prueba por escrito; ellos se han decidido por la afirmativa—tom. 3^o.—Toullier y Merlin también se deciden en este sentido. Si debe considerarse principio de prueba la cláusula de un testamento revocado, con más razón debe considerarse la de un testamento en vigor.

3.—La Cámara dijo: que según doctrina uniforme consagrada también por la jurisprudencia, la confesión prestada en un acto y de una sola vez por uno de los litigantes á solicitud del adversario se reputa *indivisa*; de modo que no se puede admitir en una parte y desechar en otra, porque la confesión no se constituye sino de todas sus partes, las cuales son mutuamente condición unas de otras: *Confesio dividi non debet*—Escriche, verb. *Confesión judicial*.—Con arreglo á esta doctrina no puede prescindirse de las modalidades de la confesión, dividiéndolas y aislándolas de su parte principal. Esta es la opinión de la Cámara, la que se guarda bien de citar la jurisprudencia, precisamente porque ella es contraria á lo resuelto por ese tribunal. Véase Inst., tom. 4^o, verb. *Confesión indivisible*, núm. 1; tom. 3, verb. *Confesión*, núm. 3.



Confesión del demandado—Véase: *Cartas*, núm. 16.

Confesión espresa—Véase: *Confesión ficta*, núm. 2.

Confesión estrajudicial—Véase: *Filiación natural*, número 17.

1ª. Confesión ficta—Justificada por ésta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado a los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 408, Ser. 3ª.

2. Confesión ficta—O espresa, que hace procedente el embargo preventivo, debe resultar del mismo expediente en que se dicte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 100, Ser. 4ª.

Confesión ficta—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 2.

Conformidad—Véase: *Cuenta corriente*, núm. 2—*Espediente*, núm. 1—*Cuenta*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 13—*Concurso civil*, núm. 4—*Cuenta corriente*, núm. 1—*Arrendamiento*, número 3.

Conformidad de partes—Véase: *Divorcio*, núm. 5—*Locación de servicios*, núm. 2.

1. Conocimiento—Basta la afirmación del Escribano sobre conocimiento de las partes, para no exigir testigos: la afirmación de una de aquellas, de no conocerlo, no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3ª.

1ª—Véase: *Contrato*, núm. 12.

2—El art. 448 del Cód. de Proc. se refiere a la confesión que resulte del mismo expediente, dice la Cámara. No sabemos en qué puede este tribunal fundarse para resolver así esta cuestión. La ley no exige sino que durante un juicio ordinario, resulten probados hechos, por confesión espresa ó ficta, que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado. El requisito apuntado es una limitación a la ley impuesta por la Cámara.



Conocimiento personal—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 19—*Contrato por escritura pública*, núm. 1.

Conocimientos especiales—Véase: *Perito*, núm. 3.

Consejo de Educación—Véase: *Bienes fiscales*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 2.

1. Consejo de Higiene—La falta de prueba sobre la importancia de los servicios médicos prestados, no permite su avalúo por el Consejo de Higiene, pero debe condenarse al pago de lo que el demandado reconozca adeudar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3^a.

2. Consejo de Higiene—El damnificado por una resolución del Consejo de Higiene puede entablar las acciones civiles que crea convenir á su derecho, sin ocurrir al Jurado que prescribe la ley especial sobre ejercicio indebido de la medicina.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4.

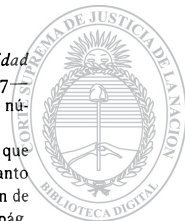
Consejo de Higiene—Véase: *Honorarios*, núm. 16.

Consejo Deliberante — Véase: *Bienes municipales*, número 1.

Consentimiento—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 19—*Condómino*, núm. 1—*Pose-*

1—El actor justificó haber prestado servicios profesionales, pero no comprobó su monto, habiendo el demandado manifestádose conforme en abonarle 200 nacionales; la Cámara mandó pagar esta suma, pues no se hallaba en aptitud de justipreciarla por falta completa de una base.

2. El art. 48 de la Ley Prov. de 18 de Julio de 1877 vigente en la Cap. federal en virtud de ley de 31 de Diciembre de 1880, establece que las resoluciones del Consejo Nacional de Higiene son apelables para ante el Jurado, cuya presidencia la ejerce el Juez del Crimen, y si el interesado no hace uso de ese derecho eso no importa renunciar á las acciones civiles de que pueda hacer uso contra quien ordenó la ejecución de un acto fuera de sus atribuciones. El ejercicio del derecho de apelación está prescripto para las resoluciones tomadas por la autoridad competente, pero para aquellas estralimitaciones de facultades de los funcionarios públicos está la disposición del art. 1112 del Cód. Civ.



sión judicial, núm. 9—*Emancipación*, núm. 1—*Nulidad de una venta*, núm. 2—*Obligación de hacer*, núm. 7—*Contrato por escritura pública*, núm. 1—*Inhibición*, número. 16.

1^a. *Consignación*—El cumplimiento del contrato que motiva la consignación, no puede llevarse á cabo en tanto no se declare aquella procedente, rechazando la acción de rescisión sometida á juicio. --- Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 3^a.

Construcción—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 19, 24 y 25—*Acto ilícito*, núm. 6—*Perito*, núm. 3—*Contrato de locación*, núm. 4.

1^b. *Construcciones*—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios, si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el Reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 100, Ser. 4^a.

2. *Construcciones*—La falta de convención espresa so-

1^a—Habiéndose oblado el precio de un inmueble adquirido en compra, se solicitó la escrituración en el acto de acompañar el recibo del depósito. Antes de esto el vendedor había iniciado demanda sobre rescisión del contrato. Es evidente que antes que esta última demanda no sea resuelta, no puede ordenarse la escrituración. La procedencia y alcance de la consignación no podría apreciarse rectamente sino después de fallado en definitiva el juicio sobre rescisión. Si el contrato se declara rescindido, la escrituración no procede.

1^b—Se mandaron devolver los planos presentados porque no reunían las condiciones requeridas. Para que la demora del despacho fuese la causa de los perjuicios, habría sido necesario que los planos resultaran en forma: si no lo estaban, ningún cargo podía hacerse al Intendente, pues estando aun en forma y despachados en el día, podrían dar el resultado de habilitar la edificación. El edificio proyectado excedía de la altura acordada por el Reglamento, siendo aplicable el art. 1111 del Cód. Civ.

2—Art. 1636 del Cód. Civ.



bre la forma del pago de una construcción, permite al deudor verificarlo después de terminada la obra.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 258, Ser. 4^a.

Constructor—Véase: *Materiales*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 96 y 99—*Contrato de locación*, núm. 4—*Adoquinado*, núm. 4—*Afirmado*, núm. 2.

Contacto carnal—Véase: *Filiación natural*, núms. 1 y 2.

1. Contador—Aun después de aprobada la cuenta particionaria no puede negarse á concurrir al juicio verbal de-

1—Esta es una de las resoluciones confirmadas «por sus fundamentos» por la Cámara. Cuando este tribunal dicta un auto de esta naturaleza es porque se encuentra fatigado de resolver cuestiones, y se saca de encima sin trabajo alguno y cómodamente un fardo que le molesta. Se trata aquí de una cuenta particionaria aprobada y consentida por todas las partes. Después de algún tiempo se presenta uno de los adjudicatarios diciendo que la cuenta contiene graves irregularidades: el Juez llama á juicio verbal, á lo que el Contador se opone diciendo que su misión ha terminado con la presentación y aprobación de la cuenta. El Juzgado dice que si bien es cierto que la cuenta ha sido aprobada, esto no es un motivo para privar á las partes interesadas de hacer las observaciones ó reclamos que consideren justos cuando se apercibieren de cualquiera omisión ó error numérico tan susceptible de cometerse en esta clase de operaciones, con tanta más razón cuanto que las cuentas particionarias se aprueban, como lo fué la que motivó este incidente, en cuanto ha lugar por derecho. Aquí se confunden dos distintas clases de relaciones: una que tiene lugar entre los diversos adjudicatarios, y otra entre éstos y el contador. Las relaciones entre contador y adjudicatarios terminan con la aprobación de la cuenta, siempre que esté consentida, y los errores de la cuenta pueden los coherederos subsanarlos ellos mismos ó nombrando algún otro contador. Los errores son susceptibles de rectificarse por los mismos coherederos; pero no es posible estar molestando al contador á cada momento y siempre que á cualquier adjudicatario se le antoje decir que la cuenta está equivocada. Esto sería para nunca concluir. Si los adjudicatarios estuviesen facultados para molestar al contador aun después de aprobada la cuenta, el auto aprobatorio del Juzgado no tendría ningún objeto práctico. Si á pesar de ese auto, se puede volver constantemente sobre lo aprobado, se habría dictado una providencia completamente inútil, lo que no es



cretado para subsanar los errores que contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 191, Ser. 3ª.

2. Contador—Público, la liquidación como consecuencia de una sentencia, debe ser practicada por aquél. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 115, Ser. 4ª.

Contadores—Inscriptos en la matrícula durante el mes de Julio de 1891, Jur. Civ., tom. 5, pág. 125; durante el mes de Agosto del mismo año, Jur. Civ., tom. 5, pág. 425, de la misma Ser.; durante el mes de Octubre de 1891, Jur. Civ., tom. 8, pág. 72, Ser. 4ª; durante el mes de Noviembre de 1891, Jur. Civ., tom. 9, pág. 48; durante el mes de Diciembre del mismo año, Jur. Civ., tom. 9, pág. 89, Ser. 4ª; durante el mes de Enero de 1892, Jur. Civ., tom. 9, pág. 152, Ser. 4ª; durante el mes de Febrero del mismo año, Jur. Civ., tom. 9, pág. 275, Ser. 4ª; durante el mes de Abril del mismo año, Jur. Civ., tom. 10, pág. 336, Ser. 4ª.

Contadores—Véase: *Inscripciones*, núm. 1.

Contencioso—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

1ª. Contenciosos—En expedientes que tengan este carácter, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

1ª. Contencioso-administrativo—El conocimiento y decisión de las cuestiones sobre falta de cumplimiento de un contrato, por parte de la Municipalidad, en su carácter de posible admitir. El contador concluye su mandato con la aprobación de la cuenta presentada, como el martillero con la aprobación del remate. Sin embargo la Cámara, con el desparpajo y poseída del desprecio que la inspiran los intereses públicos, confirmó la resolución «por sus fundamentos».

2.—La liquidación cuando se trata de cuestiones complicadas debe ser hecha por árbitros ó por contador público—art. 557 del Cód. de Proc.

1ª—Véase verb. *Apelación*, núm. 2.

1ª—Véase verb. *Contrato*, núm. 19.



persona jurídica, corresponde á la jurisdicción de los tribunales ordinarios: solo puede conceptuarse contencioso-administrativa la resolución dictada en su carácter de poder administrador. — Jur. Civ., tomo 6, pág. 115 Ser. 4^a.

2^a. Contencioso-administrativo—El recurso directo ante la Cámara, en estos asuntos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

Contencioso-administrativo—Véase: *Demolición*, núm. 1.

Contestación á la demanda.—Véase: *Sentencia*, núm. 8—*Documentos*, núm. 1—*Prueba del actor*, núm. 2—*Posiciones*, núms. 7 y 8—*Excepciones*, núms. 2 y 3—*Excepción dilatoria*, núm. 2—*Rebeldía*, núms. 8 y 9—*Inapela-ble*, núm. 1.

Contrademanda—Véase: *Poder especial*, núm. 4—*Apo-derado único*, núm. 6.

1. *Contradocumento*—Es improcedente la prueba testi-monial para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato, en tanto no exista contradoc-umento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

2^b. *Contradocumento*—La simulación de las atestaciones de una escritura pública puede justificarse por contradoc-umento, en tanto se relacione con actos personales de los que han intervenido, de los cuales el oficial público solo afirma que se hizo manifestación, pero que no da fe de su existencia por ciencia propia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4^a.

2^a—Véase *Apelación de hecho*, núm. 2.

1—De acuerdo con la jurisprudencia recibida en nuestros tribunales. Véase: *Inst.*, tom. 4, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1; tom. 3, verb. *Si-mulación*, núm. 2; tom. 2, mismo verb. núms. 1, 7 y 11.

2^b—Art. 960 del Cód. Civ.

3. **Contradocumento**—Para probar la falsedad de un pago, el contradocumento prueba contra el tercero que intervino por medio de mandatario en la formación de la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4^a.

Contradocumento—Véase: *Prueba de presunciones*, núm. 1.

1.—*Simulación*, núm. 9.

Contratista—Véase: *Afirmados*, núm. 2.

1. **Contrato**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en

3.—El tercero que ha intervenido por medio de apoderado en la formación de la escritura, deja de ser tal, y se convierte en parte.

1.—Unos empresarios contrataron con la Municipalidad la estracción de la arena del río, y pendiente ese contrato el P. E. creó oficinas especiales para el percibo de esos derechos, haciendo caso omiso del contrato celebrado. Aquellos pidieron indemnización á la Municipalidad y no habiéndoseles acordado, recurrieron á la Cámara de lo Civil, impiéndole al juicio el carácter de contencioso-administrativo. El doctor Cortés, en su carácter de Fiscal, produjo un notable dictamen con el que demostró que de acuerdo con nuestra organización constitucional, no puede existir entre nosotros lo que se llama juicio contencioso-administrativo. La Cámara no tomó en consideración las ideas allí desarrolladas, porque no consideró llegado el caso de resolver ese punto de derecho, pues ella estaba de acuerdo con las ideas allí emitidas en cuanto tenía relación con el caso ocurrente. Es indudable que aun admitida la existencia de lo contencioso-administrativo, nadie dudó jamás que no todos los actos de la Municipalidad dan lugar á su promoción, siendo esto aceptado generalmente: cuando la Municipalidad firma una letra ó un pagaré, la ejecución de sus compromisos queda librada á la justicia ordinaria. Nadie ha negado que esa corporación obra en numerosos casos, no como autoridad sino como persona jurídica. Solo en este carácter puede contratar, y solo así ha podido la Municipalidad contratar en el caso que nos ocupa. La estracción de arena es una fuente de la renta de la Municipalidad que ella ha hecho efectiva por medio de contratos. En esto no hay nada que afecte al orden público, ni á la seguridad, ni á las buenas costumbres, ni á la higiene pública: ni nada de lo que está delegado á la Municipalidad como parte de la autoridad pública; se trata tan solo de ajustar los actos de la persona jurídica á la práctica de las personas naturales. Se trata de un contrato que puede celebrar





su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen a un juicio contencioso-administrativo. — Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3ª.

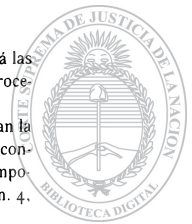
2. **Contrato**—El conocimiento del juicio sobre falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad, a un contrato celebrado con particulares, corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3ª.

3. **Contrato**—Para que proceda la prueba testimonial sobre modificaciones a un proyecto de contrato, el princi-

todo persona jurídica, porque como lo establece el art. 31 del Cód. Civ., las personas de existencia ideal pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. La Municipalidad es una de esas personas de existencia ideal—art. 33.—Ahora bien, el art. 42 establece que las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y que puede hacerse ejecución en sus bienes, no admite duda alguna que cuando se demanda a una persona jurídica por un contrato que celebra y no cumple con razón ó sin ella, corresponde proceder como contra cualquiera persona de existencia real, instaurando demanda en forma ante los tribunales comunes. Bien pueden los interesados admitir que su contienda sea dirimida por la Municipalidad, pero siendo las jurisdicciones, de orden público, nunca pueden traerse a la Cámara, las contiendas, por la vía contencioso-administrativo, lo que debe ser materia de un recurso de sentencia dictada con formalidades bien distintas por un Juez ordinario de la capital. Los interesados debieron gestionar sus derechos en juicio ordinario ante el Juzgado Civil en turno, pero jamás pudieron llevar el asunto en apelación ante el Superior con la sola resolución municipal. El recurso de apelación supone una sentencia válida, y ésta a su vez supone jurisdicción contenciosa que solo puede competir a los tribunales.

2—Véase nota precedente.

3—La cuestión versó sobre prórroga de un contrato celebrado por cinco años. El contrato era de mayor cuantía, en cuyo caso no procede la prueba de testigos—art. 1193 del Cód. Civ.—fuera de los casos de excepción del art. 1191. La parte que sostuvo la prórroga del contrato presentó como prueba un borrador que no estaba firmado por la otra parte: esa falta de firma en el documento de prórroga favorece a esta última, pues el contrato que se pretendía prorrogado estaba firmado por



pio de prueba escrita debe referirse terminantemente á las modificaciones; no basta el proyecto para hacerla procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Ser. 3ª.

4. **Contrato**—Justificados los hechos que importaban la voluntad tácita de los contratantes de rescindir el contrato, debe ser rechazada toda gestión en la que estemporáneamente se exija su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3ª.

5. **Contrato**—La falta de cumplimiento del contrato permite á aquel á cuyo favor se estipule la pena, á demandar su entrega sin justificar perjuicio alguno.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3ª.

6. **Contrato**—Las aclaraciones ó modificaciones hechas al mandato por el mandante después de firmado el contrato, no son aplicables ni obligan al tercero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3ª.

7. **Contrato**—No llenada la condición á su debido tiem-

las partes, y no sería lógico suponer que las ellas tuvieron más confianza al celebrar la ampliación que al celebrar el contrato primitivo.

4—En el caso presente hubieron hechos de ambas partes respectivamente que autorizaron la inexecución de las obligaciones de cada uno é infracción recíproca de las prescripciones legales que marcaban á cada litigante el camino legal á seguir cumpliendo por sí el contrato para que su contrario lo cumpliera y no darlo por disuelto sin pacto espreso para que autorizara su disolución, y que por consiguiente no daba lugar á ella sino sólo á exigir el cumplimiento de lo pactado.

5—En el contrato se pactó una multa para cualquiera de las partes que no cumpliese lo convenido. Esa multa constituye una cláusula penal —art. 652, Cód. Civ.—siendo aplicable el precepto legal en virtud del cual el deudor que no cumple su obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo, incurre en la pena estipulada—art. 654—sin serle necesario al acreedor probar que ha sufrido perjuicios, y sin que el deudor pueda eximirse aun probando que el acreedor no los ha sufrido —art. 656.

7—Véase verb. *Condición*, núm. 1.



po, no puede exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

8. **Contrato**—Para exigir el cumplimiento del contrato al que se dice mandante, es indispensable la justificación de la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Ser. 3ª.

9. **Contrato**—La modificación á una oferta importa la proposición de un nuevo contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3ª.

10. **Contrato**—El cumplimiento del contrato que motiva la consignación, no puede llevarse á cabo en tanto no se declare aquella procedente rechazando la acción de rescisión sometida á juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 3ª.

11. **Contrato**—Aun cuando no se requiera que el principio de prueba por escrito, se refiera directamente al contrato, es necesario que de sus términos resulte verosímil su existencia para que proceda la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3ª.

8—La demanda en este caso tiene por fundamento la existencia del mandato, y es un principio de procedimiento que la prueba de un hecho corresponde al que afirma su existencia—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

9—Art. 1152, Cód. Civ.

10—Véase verb. *Consignación*, núm. 1.

11—Se trata de una convención de compraventa que tenía por objeto un inmueble cuyo valor fué asignado en 16.000 pesos nacionales, afirmándose que el contrato fué concluido verbalmente, cuya forma prevé y autoriza la ley. Negada su existencia por el demandado, el actor produjo unas cartas que no hacían la más mínima referencia al contrato, no autorizando por consiguiente la prueba de testigos, pues para que ésta sea procedente se requiere que las enunciaciones que contenga sean de tal naturaleza que haga presumible la existencia del hecho principal alegado. Está es la doctrina aceptada por nuestra ley, fundada en el común sentir de los tratadistas, quienes enseñan que la apreciación de esa circunstancia queda librada exclusivamente al criterio judicial. Véase



12. **Contrato**—Justificada por la confesión ficta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se haya agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3^a.

13. **Contrato**—Siempre que se justifique que el contrato tuvo un principio de ejecución, no procede la nulidad del contrato bilateral por haberse omitido el número de ejemplares que la ley exige para su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

14. **Contrato**—No existiendo pacto comisorio espreso, no puede dejarse sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188, Ser. 3^a.

15. **Contrato**—Si el mandatario estiende el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irroge al tercero, aun cuando se justifique que éste conocía su carácter de mandatario.—Jur. Civ., tom. 7, página 33, Ser. 3^a.

16. **Contrato**—Si los árbitros deben entender en las Duranton, tom. 3, § 344; Zachariae, tom. 3, § 598, nota 8; Dalloz, Codes anotés, sobre el art. 1347 § 245.

12—Véase verb. *Cesión de derechos*, núm. 3.

13—Aun cuando con arreglo al art. 1021 del Cód. Civ. en los contratos sinalagmáticos, el ejemplar único no es prueba eficaz del acto, la falta del doble ejemplar no anula la convención si por otras pruebas se demuestra que quedó definitivamente concluido—art. 1023.—Puede verse el tom. 4, pág. 293, Ser. 2^a, que contiene una resolución análoga á la presente. Véase Inst., tom. 3, verb. *Disposición*, núm. 1.

14—Art. 1204, Cód. Civ.

15—Surge de la disposición de los arts. 1929, 1930 y 1946 del Cód. Civ. Pothier, tom. 5, pág. 207; Troplong, *Mandat*, § 509; F. S. C., tom. 13, pág. 319, Ser. 2^a.

16—Véase ver. *Árbitros*, núm. 1.



cuestiones sobre interpretación del contrato, no procede su nombramiento cuando la acción es por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 140, Ser. 3ª.

17. **Contrato**—Cuando por él solo una de las partes se obliga, basta la redacción y forma de un solo ejemplar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4ª.

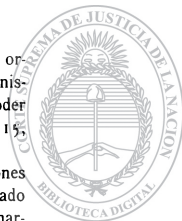
18. **Contrato**—La falta de firma del fiador estipulado en el contrato, inhabilita á la parte que se impuso esa obligación para exigir su cumplimiento y por consiguiente su rescisión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 300, Ser. 4ª.

19. **Contrato**—El conocimiento y decisión de las cuestiones sobre falta de cumplimiento de un contrato por parte de la Municipalidad en su carácter de persona jurí-

17—Arts. 1012, 1020 y siguientes del Cód. Civ.

18—El demandante había ofrecido una fianza personal á los efectos del fiel cumplimiento del contrato cuya ejecución pedía. Se trataba de un contrato bilateral, y de acuerdo con los arts. 510 y 1201, no podía pedir su cumplimiento sin cumplirlo él en todas sus partes ú ofreciese cumplir. Como el fiador no había suscrito el contrato, el que ofreció la fianza no podía invocar sus cláusulas á los efectos de su cumplimiento ó de su rescisión, pues al faltar á este compromiso perdió todo derecho que de él pudiese nacer.

19—El recurso fué llevado á conocimiento de la Cámara en virtud de lo dispuesto en el art. 80, inc. 3º de la Ley Org. de los Trib. La Cámara declaró improcedente el recurso como «lo hizo en los casos de Unzué con la Municipalidad y en el de Gerard y Gómez Molina también contra la Municipalidad». Allí se estudió detenidamente, si atendido nuestro régimen institucional que divide el Gobierno en tres ramas independientes y con funciones propias perfectamente determinadas, era posible admitir ese procedimiento que constituye al Poder Municipal en Juez y parte en sus propios asuntos resolviéndolos en 1ª Instancia, es ó no una anomalía y un privilegio inconciliable con ese sistema de Gobierno y con el espíritu de la Constitución que nos rige. Ese juicio no procede toda vez que la Municipalidad obra en su carácter de persona jurídica, en cuya categoría está colocada por nuestra ley civil—arts. 33 y 34.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Contratos*, núm. 1; *Obligaciones*, núm. 2, y *Contencioso-administrativo*, núm. 2.



dica, corresponde á la jurisdicción de los tribunales ordinarios: solo puede considerarse contencioso-administrativa la resolución dictada en su carácter de poder administrador.—Jurisprudencia Civil, tom. 6, pág. 115, Ser. 4^a.

20. **Contrato**—Las modificaciones ó interpretaciones que pretenda hacer la Municipalidad á un contrato llevado á cabo en su carácter de persona jurídica, debe gestionarlas ante los tribunales en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 314, Ser. 4^a.

21. **Contrato**—No puede conceptuarse incidente testamenario, la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4^a.

Contrato—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 2, 3, 4 y 8—*Seña*, núms. 1, 5 y 7—*Prueba testimonial*, núms. 4 y 8—*Remate judicial*, núms. 3 y 11—*Lesión enorme*, núm. 1—*Locatario*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 11 y 29, 81 y 104—*Depósitos de inmuebles*, núm. 1—*Fianza*, núm. 2—*Contradocumento*, núm. 1—*Escritura pública*, núms. 2 y 15—*Locación deservicios*, núm. 1—*Fuerza mayor*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núms. 9 y 12—*Simulación*, núm. 7—*Escrituración*, núm. 4—*Obras*, núm. 1—*Mandato*, núm. 12—*Boleto de compraventa*, núms. 14 y 17—*Excepción de incompetencia*, núm. 6—*Materiales*, número 1—

20.—Como se ha visto en el caso precedente, cuando la Municipalidad obra como persona jurídica, contrae obligaciones y adquiere derechos como los particulares, pero no puede en manera alguna alterar los contratos por sí sola, y debe recurrir para la resolución de toda cuestión á las autoridades judiciales ordinarias. Véase la nota precedente.

21.—Véase *Acción personal*, núm. 4.



Rendición de cuentas, núm. 19—*Sindicato* núm. 1—*Documento*, núm. 3—*Corredor*, núm. 1—*Posesión al comprador*, núm. 1—*Carta*, núm. 1—*Cesión de derechos*, núm. 5—*Evicción*, núm. 3—*Obligación*, número 3.

1. Contrato bilateral—Carece de valor legal el documen-

1—El documento presentado consistió en un contrato de sociedad celebrado entre dos personas; una de estas traspasa sus derechos á un tercero, según anotación puesta al pié, pero sin la firma del cedente y solo con la del cesionario. Ahora bien, la firma de las partes en todo documento privado, es una condición esencial, y no puede ser reemplazada, ni por signos, ni por las iniciales de los nombres y apellidos—art. 1012, Cód. Civ.—El Dr. Velez Sarsfield en la nota al art. 916, citando á Savigny, dice: «desde la edad media la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio debajo de un acto escrito, y la firma expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma.» El acto no valdría por el derecho moderno aunque estuviere escrito por la parte si no estuviere también firmado. Bonnier, en su Tratado sobre las Pruebas, tom. 2, pág. 232, edición de 1869, sostiene el mismo principio. El Dr. Goyena, en su Proyecto de Cód. Civ. para España, al comentar el art. 1204 dice: «Sin el requisito de la firma, importa poco que sean escritos enteramente de manos de aquel contra quien se presentan». La doctrina sentada por nuestro Código está de acuerdo con la opinión de los autores, y puede decirse que tiene su fundamento en el tit. de contratos y obligaciones convencionales, en la opinión de Bigot de Promeneau, emitida al discutirse el Cód. Nap.—Curso de Leg., tom. 2, pág. 279, edic. de 1841. Si para una obligación contraída por acto público la ley exige la firma de las partes ¿con cuánta más razón no debe exigirse en los contratos celebrados bajo firma privada? El contenido del segundo concepto del sumario no fué materia de una resolución, habiéndose dicho tan solo al respecto que: «aun suponiendo que el acto se hubiese extendido en varios ejemplares y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1013 del Cód. Civ., bastase que dichos ejemplares no estuviesen firmados por todas las partes sinó por aquella que en dicho contrato se obliga para con aquel que posee el ejemplar, en el caso *sub-judice* ocurre lo contrario, pues la cesión con la que el actor pretende hacer valer su derecho, está firmada por el que lo posee y lo presenta». El contenido del sumario está de perfecto acuerdo con lo que dispone la ley—art. 1013, citado.



to privado sin las firmas de las partes que celebran un contrato bilateral: para que la firma de una sola de ellas haga suponer que existe otro ejemplar, el presentado debe tener la firma del contrario.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 402 Ser. 3ª.

2. **Contrato bilateral**—No puede exigirse el cumplimiento de un contrato bilateral celebrado por instrumento privado, si no se justifica la existencia del doble ejemplar que exige la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3ª.

3. **Contrato bilateral**—No procede la acción por daños y perjuicios por la falta de cumplimiento de un contrato bilateral, si en oportunidad no se demanda su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3ª.

4. **Contrato bilateral**—La falta de doble ejemplar de un contrato bilateral, no anula la convención siempre que por otros medios quede justificada la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3ª.

5. **Contrato bilateral**—La preferencia para la compra por un precio determinado, establecido en favor del comprador, sin obligación de comprar por parte de éste, no importa un contrato bilateral.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3ª.

2—Art. 1021, Cód. Civ. Este punto no fué resuelto por la Cámara; solo fué uno de los considerandos en que se basaba la sentencia del Juez de 1ª Instancia; sentencia que fué confirmada por el Superior. El sumario está en contra de la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos. Véase Inst., tom. 4º, verb. *Contrato bilateral*, núm. 1; tomo 3, verb. *Disposición*, núm. 1.

3—Art. 1204, Cód. Civ.

4—Véase el núm. 2.

5—La preferencia por el mismo precio á favor de determinada persona para el caso de venta, no implica obligación de comprar, siendo únicamente el vendedor el que se obliga á darle la preferencia á aquél.



6. Contrato bilateral—Para exigir su rescisión, debe el actor justificar que ha cumplido con las obligaciones que él le imponía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 300, Ser. 4^a.

Contrato bilateral—Véase: *Contrato*, núm. 13—*Inhibición*, núm. 5.

1^a. Contrato con pacto comisorio—Siendo principio fundamental de nuestro derecho civil, que los contratos se forman para cumplirse, la resolución solo es procedente si existe pacto comisorio espresamente estipulado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 3^a.

1^b. Contrato consensual—La parte que exija judicialmente el cumplimiento de un contrato consensual constante de instrumento privado, debe justificar que cumplió en la debida oportunidad y dentro del término fijado, las obligaciones que le incumbían.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3^a.

1^c. Contrato de arrendamiento—Para que se declare rescindido, el locador debe justificar que existe mora en el pago.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 3^a.

2. Contrato de arrendamiento—Siendo forzosa la venta

6—Si según los arts. 510, 1201 y 1204 del Cód. Civ., la parte que no ha cumplido con las obligaciones que el contrato le impone, no puede exigir su cumplimiento, menos puede exigir su rescisión.

1^a—Es doctrina definitivamente consagrada en nuestra jurisprudencia, que cuando una de las partes no cumple con su obligación la otra no puede exigir la rescisión y si solo su ejecución. Las disposiciones de nuestro Cód. Civ. son claras al respecto—arts. 1204 y 1432.

1^b—El art. 1201 del Cód. Civ., establece que en los contratos bilaterales una de las partes no podrá exigir el cumplimiento del contrato si no probase haberlo cumplido u ofreciese cumplirlo.

1^c—Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Mora*; tom. 1^o, verb. *Alquiler*, núm. 158.

2—Cada copropietario tiene el derecho de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692 del Cód. Civ.—Este derecho no



del bien para la división del condominio, la existencia de un contrato de locación no puede modificar la regla.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 250, Ser. 3ª.

3. **Contrato de arrendamiento**—Se reputa simulado el contrato de locación de los bienes de la esposa, celebrado por el esposo después de iniciada la demanda de separación de bienes, y debe declararse su nulidad —Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3ª.

4. **Contrato de arrendamiento**—Los preliminares necesarios para este contrato, y aun la entrega de la llave del predio, no bastan para dar por establecida la existencia del contrato, si no se justifica su terminación de común acuerdo de partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3ª.

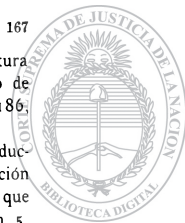
5. **Contrato de arrendamiento**—No procede la escepción

puede considerarse limitado por la existencia de un contrato de locación, que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad vendedora, según lo disponen los arts. 1498 y 3266 del Cód. citado.

3—El art. 1297 del Cód. Civ., establece terminantemente el principio sentado en el sumario. La presunción de simulación establecida en este artículo, es susceptible de prueba en contrario, pero ella no fué rendida, demostrándose por el contrario que existían elementos de prueba que robustecían la presunción legal.

4—El locador, que fué el demandado, confesó que habían mediado propuestas, que hubo ajuste de precio, que se indicaron fiadores, y que se hizo entrega de la llave para que el interesado viera la casa, pero afirmando siempre el propietario que no se consumó el contrato. Estos hechos inducen á creer que el contrato no se llevó á efecto, y no prueban otra cosa que la existencia de preliminares que no importan la perfección del contrato de locación. Si para el locador es una condición principal la presentación de fiador y si el interesado no comprueba que uno de los fiadores propuestos hubiese sido aceptado, es evidente que el contrato no puede considerarse como perfecto, hasta tanto esa condición no hubiese sido cumplida.

5—El juicio por desalojo se seguía ante un Juzgado, mientras que la demanda de escrituración seguía su tramitación ante el Juez de 1ª Instancia. Este magistrado dijo que la escepción no procedía porque am-



de litispendencia, en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3^a.

6. **Contrato de arrendamiento**—El juicio sobre su reducción á escritura pública, corresponde á la jurisdicción que resulte competente para entender en la suma que arrojen de todas las mensualidades.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3^a.

7. **Contrato de arrendamiento**—Los daños y perjuicios fundados en la falta de cumplimiento de un contrato de locación, requieren indispensablemente la justificación de que existió el contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3^a.

8. **Contrato de arrendamiento**—Sobre inmuebles, puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3^a.

9. **Contrato de arrendamiento**—El sublocatario no puede por su voluntad cambiar la forma del contrato convirtién-

bos juicios eran de distinta índole, de diferente carácter y que en ambos se perseguía diverso fin. El Fiscal dijo que tampoco era procedente la excepción, porque uno de los juicios era ordinario y el otro sumario. Ambos fundamentos fueron aceptados por la Cámara.

6—No se trata de la prestación ó del pago de una mensualidad, sino del cumplimiento del contrato que comprende todas las mensualidades.

7—Desde el momento en que la demanda tiene por base la existencia del contrato, que en este caso se decía no haber respetado el demandado, era evidente que no existiendo la causa no existía el efecto. La demanda parte de la base de la existencia del contrato; no demostrándose su existencia, no procede ninguna indemnización, porque no hay obligación de cumplir un contrato que no existe.

8 —Véase *Arrendamiento*, núm. 1.

dose en locatario directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3ª.

10. **Contrato de arrendamiento**—La falta de presentación del poder dentro del plazo estipulado, deja sin efecto el contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 6, página 285, Ser. 3ª.

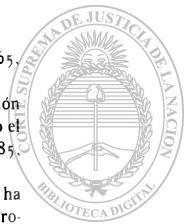
11. **Contrato de arrendamiento**—El locatario que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de Propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe por acciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 122, Ser. 3ª.

12. **Contrato de arrendamiento**—No existiendo término estipulado para la locación, el locador tiene derecho á rescindir el contrato en cualquier tiempo, sin que ese hecho pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 315, Ser. 3ª.

10—El art. 1201 del Cód. Civ., establece que «en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase ella haberlo cumplido ú ofreciese cumplirlo.» La parte no había cumplido, ni podía ofrecer cumplirlo porque ya el término había vencido para ofrecer la garantía estipulada.

11—El adquirente de una propiedad que reconoce un contrato de locación, es un tercero con relación al contrato. El art. 239 de la Ley Org. de los Tribs. de 1886, establece que los actos ó contratos á que se refiere la presente ley, solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro. El art. 225, enumera entre los contratos que deben inscribirse, los contratos de arrendamiento de bienes raíces por tiempo determinado que exceda de un año—inc. 5º.

12—Porque según el art. 1509 del Cód. Civ., cuando el arrendamiento es por tiempo indeterminado, el arrendador puede desalojar al inquilino cuando viere convenirle, siempre que se trate de fincas urbanas. Demandando el desalojo en este caso, se usa de un derecho acordado por la ley, y como el ejercicio de un derecho propio á el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir en ilícito ningún acto, tampoco existe responsabilidad cuando se pide el desalojo—art.





13. **Contrato de arrendamiento**—La estipulación en el contrato de que el locatario no podrá hacer innovaciones en el edificio, importa que tampoco puede hacerle agregaciones que puedan afectar su solidez y seguridad, aun cuando resulte intacto el existente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 168, Ser. 3ª.

14. **Contrato de arrendamiento**—La sentencia recaída en 1071 del Cód. Civ.—Esta disposición está fundada en el aforismo de derecho *nom videtur dolo facere qui jure suo utitur*.

13—La cláusula pertinente del contrato decía: «El inquilino no podrá innovar el orden actual de los edificios, y deberá cuidar de su conservación, haciendo de su cuenta las reparaciones consiguientes, pero podrá, si le conviniese, levantar dentro del terreno otros edificios, siendo entendido que todas las mejoras, de cualquiera clase que sean, quedarán á beneficio del propietario.» Esta cláusula es una regla á la cual debían someterse los contratantes, como á la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.—El locatario está obligado al *uso y goce estipulados* de la cosa arrendada, dice el art. 1554; es decir que, el locatario solo podía hacer mejoras, entre las cuales no estaban comprendidas las obras que confesó haber hecho, consistentes en cubrir patios, abrir claraboyas en los techos, sustituir ventanas por puertas, abrir y arreglar albañales de desagües, y poner vía ferrea para la conducción de cajones. Todo esto se hizo en beneficio exclusivo del locatario y con perjuicio de la solidez del edificio. Es notorio que el hecho de cerrar patios perjudica la ventilación de los edificios, y en consecuencia tiene derecho á hacer cesar las causas del perjuicio—art. 1559.

14—La naturaleza y objeto de ambos juicios son bien distintos, circunstancias que bastan para hacer improcedente la cosa juzgada. En el juicio ordinario generalmente no se trata de resolver si la sentencia recaída en el juicio especial de desalojo era ó no procedente; sino que se trata de saber si se pudo pedir el desalojo sin faltar á las obligaciones contraídas en el contrato de locación, lo que pudo resolverse por el Juez que entiende en el desalojo por la naturaleza especial de este juicio. El cumplimiento ó ejecución de una sentencia puede dar lugar á una acción de daños y perjuicios, especialmente cuando se trata de sentencias que han sido dictadas en juicios sumarios en los que no se pueden discutir los derechos de las partes, emergentes de un contrato cuyo alcance debe ventilarse en juicio ordinario. Es por esto que en el juicio ejecutivo no se discuten ciertos derechos, sino que quedan relegados



el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que por daños y perjuicios por falta de cumplimiento del contrato deduzca el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3^a.

15. Contrato de arrendamiento—La cláusula que permite la prórroga de un contrato de locación, se presume puesta en favor del locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3^a.

16. Contrato de arrendamiento—El locador que exige

para el juicio ordinario: y es por esto también que el Juez al dictar sentencia de desalojo dijo: «siendo el juicio de desalojo sumarisimo no es posible sustanciar y resolver en este juicio el derecho que se alega corresponder por la ya mencionada cláusula del contrato.»

15—Si se considerara que la cláusula es en beneficio de ambas partes, llegaríamos a la conclusión de su inutilidad, puesto que con ó sin ella podrían renovar ó prorrogar el contrato. Se debe buscar entonces una interpretación racional de dicha cláusula, de manera que se armonice con la voluntad presunta de las partes. El art. 1198 del Cód. Civ. establece, que los contratos obligan no solo á lo que está formalmente expresado en ellos, sino á todas las consecuencias que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos. ¿Cuáles son estas? Los tratadistas que el codificador cita en la nota al art. 1198 enseñan, que son las que se desprenden de la equidad, del uso ó costumbres, y de la ley. Así en el caso presente la casa fué alquilada para negocio, y teniendo presente que estos son más productivos cuanto más clientela tienen, la que aumenta á medida que transcurre mayor tiempo; y que para la instalación de los negocios hay que hacer gastos y mejoras que deben generalmente quedar en beneficio del locador, es evidente que la prórroga es más ventajosa para el locatario que para el locador, porque como dicen Aubry y Rau, los términos susceptibles de dos interpretaciones deben ser tomados en el que más convenga al objeto del contrato—§ 347.

16—Establecido que la prórroga fué estipulada en favor del locatario como en el caso precedente, y como que el locador está en la obligación de mantener al locatario en el uso y goce de la cosa locada, inclusive la prórroga—art. 1515, Cód. Civ.—la falta de cumplimiento de esa obligación lo constituye responsable de los daños é intereses—arts. 511 y 512—en la forma que disponen los arts. 518 y siguientes.



judicialmente el desalojo faltando á lo estipulado en el contrato sobre prórroga es responsable de los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

17. **Contrato de arrendamiento**—En que se estipula que las mejoras quedan á favor del locador, debe estenderse en el sello que la ley fija para el valor de las mejoras y no por el precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 67, Ser. 4ª.

18. **Contrato de arrendamiento**—Estipulado el derecho del locatario á prorrogar el contrato, cualquier cesionario que le subrogue, tiene derecho á exigir el otorgamiento del

17—El art. 3º de la Ley de Papel Sellado, de 1891, dispone que los contratos sujetos á prestaciones periódicas deben estenderse en el sello correspondiente á la mitad del valor total de aquellas: pero esta disposición no es aplicable cuando el valor de las mejoras exceden al de las prestaciones periódicas, pues la otra prestación viene á ser lo principal del contrato, que consiste en la adquisición de lo edificado, por parte del dueño del terreno á la terminación del contrato. La circunstancia de que en un contrato se estipulen prestaciones periódicas no implica que no se tenga en cuenta cualquiera otra prestación que crea derecho y beneficio para los contratantes. Los contratos por los cuales trasmite el dueño de un terreno su uso á un tercero, obligándose éste además de pagar periódicamente una suma de dinero, á levantar un edificio á veces de gran valor, conviniéndose en que esas construcciones queden á beneficio del dueño á la terminación del contrato, ¿puede decirse que la importancia del contrato queda determinada, por la prestación periódica, aunque ésta sea insignificante? Evidentemente que no, pues en los cálculos del que da el uso del terreno y del que lo toma, entra de una manera positiva el desembolso que para el uno importa la edificación, y el lucro que para el otro representa el edificio cuando llega el momento de tomar posesión de él. No puede considerarse que el contrato no tiene más importancia de lo que determinan las prestaciones periódicas: la importancia real y verdadera del acto la constituyen la totalidad de las prestaciones.

18—Art. 1583 del Cód. Civ.



nuevo contrato, si no existió cláusula prohibiendo la cesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 4^a.

19. **Contrato de arrendamiento**—Por tiempo indeterminado á favor del locatario. solo es rescindible á la espiración del máximo que fija la ley. —Jur. Civ., tom. 2, página 116, Ser. 4^a.

20. **Contrato de arrendamiento**—El locatario que abandona el predio arrendado antes del vencimiento del término estipulado en el contrato, está obligado á indemnizar al locador los daños y perjuicios que cause su falta de cumplimiento al contrato.—Jur. Civ., tom 6, pág. 260, Ser. 4^a.

21. **Contrato de arrendamiento**—Obliga por el término estipulado, tanto al locador como al locatario, salvo convenio expreso que faculte su resolución antes del vencimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4^a.

19—El contrato es la regla á la cual deben las partes someterse como á la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.—No se trata en el caso del sumario, en realidad de verdad, de un contrato por tiempo indeterminado, sino que se ha enunciado el término implícitamente, por suponerse que el locador ha renunciado tácitamente á la facultad de resolverlo ó darlo por terminado cuando él lo quisiese, siendo así que en el contrato se obligaba á no pedir la casa mientras el locatario la ocupara. Es así cómo el término del contrato puede durar hasta que el locatario quiera, término que se encuentra establecido á su favor, y podía continuar hasta tanto fenezca el término máximo establecido por la ley—art. 1505.

20—Los contratos bilaterales como el de locación, crean obligaciones reciprocas que obligan á los contratantes á su cumplimiento, y ninguno puede argüir que él se celebró en su beneficio esclusivo. El término de la locación obliga á ambas partes; al locador á conceder el uso y goce de la cosa locada, y al locatario á pagar el precio de la locación. Esto resulta con toda claridad de los términos en que están concebidos los arts. 1493, 1515, 1556 y 1604, inc. 1^o del Cód. Civ. Si la obligación subsiste durante todo el término del contrato, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios surge de la disposición de los arts. 511 y 1579 del Cód. Civ.

21—Véase nota precedente.



22. **Contrato de arrendamiento**—Procede la resolución del contrato, si el locatario infringió prohibiciones expresamente estipuladas por el locador. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

23. **Contrato de arrendamiento**—La falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas en él, hace procedente su rescisión, si tal pena estaba terminantemente estipulada en el contrato. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 84, Ser. 4^a.

24. **Contrato de arrendamiento**—La menor extensión del

22—De acuerdo con el principio general establecido en el art. 1197 del Cód. Civ. El contrato contenía la cláusula de que el locatario no podía hacer construcciones de madera y si las hiciese, podía pedirse la rescisión del contrato. No puede pues argumentarse diciendo, con el art. 1565, que solo puede impedir la ejecución de las obras; y si estuviesen ejecutadas, demandar su demolición, ó exigir al finalizar el contrato, que el locatario restituya la cosa en el estado que se encontraba al tiempo que la recibió: la rescisión en el contrato que motivó la sentencia, fué espresamente estipulada.

23—Véase nota precedente.—Se pidió la rescisión del contrato por falta de pago de dos mensualidades—art. 1579, Cód. Civ.

24—La demanda se basó en la disminución del terreno locado, á causa del ensanche de una calle antes de la fecha en que se celebró el contrato de arrendamiento, de lo que tenía conocimiento el locador, quien negó á su vez la exactitud de la imputación que se le hacía. La cuestión á resolver se basa en conocer la buena ó mala fe con que procedió el locador, incumbiendo su prueba al que alega la mala fe. No basta consignar un hecho para ser amparado de un derecho, sino que es necesario comprobar su existencia. El art. 1525 del Cód. Civ., establece que el locador responde de los vicios ó defectos graves de la cosa arrendada que impidieren el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido, ó hubiesen sobrevenido en el curso de la locación; y el locatario puede pedir la disminución del precio ó la rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los defectos ó vicios de la cosa. Nuestro Código llama vicios redhibitorios en su artículo 2164, á los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio ó uso se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino si de tal modo disminuyen el uso de ella, que á haberlos conocido el adquirente no habría adquirido ó habría

predio arrendado, no puede fundar la rescisión del contrato de locación en tanto que no se justifique que resulta inhábil para el objeto que se propuso el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4ª.

25. Contrato de arrendamiento—No es procedente la re-

dado menos por ella, formando una escepción á esta regla el art. 1525, según el cual pueden considerarse tales todos los sobrevenidos después de la adquisición. Si la disminución en el área existe, ella no constituye un defecto oculto de la cosa: y siendo éste un elemento esencial del vicio redhibitorio resulta que él no existe. La segunda condición, es que la cosa sea impropia para el uso que se le destina: la disminución del área en el caso era insignificante en relación al total que puede considerarse dudoso que el locatario hubiese por esta causa desistido del contrato en caso de haberla conocido. Aun aceptada la existencia del vicio, el art. 2168 dispone, que incumbe al adquirente comprobar que ese vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo se presume que sobrevino después. Y como el espíritu de la última parte de este artículo es el de libertar al enagenante de toda responsabilidad por los vicios sobrevinientes á la fecha de la celebración del contrato, según se desprende de los términos en que está concebida la nota del Codificador al art. 1525, es indudable que al comprador incumbe probar que el vicio existía antes ó sobrevino después de la fecha en que se extendió el contrato de locación, so pena de tenerlo por no existente y declarar que el locador, como consecuencia, está exento de toda responsabilidad. El mismo art. 1525 niega al locatario el derecho para pedir la disminución del precio ó la rescisión del contrato cuando hubiese conocido los vicios ó defectos de la cosa. Si estos son visibles y aparentes de manera que de ellos hubiesen podido tener conocimiento el locatario al entrar en posesión de lo arrendado, es improcedente que por esta causa se declare rescindido el contrato, pues el art. 1604, inciso 5º, se opone terminantemente á ello.

25.—Para que exista mora no basta acreditar la falta de pago de dos periodos consecutivos de alquiler, es necesario comprobar que hubo interpelación judicial ó extrajudicial, á menos que concurra alguna de las causas de escepción espresadas en el art. 509 del Cód. Civ. Esta interpelación debe ser hecha en el domicilio del deudor, que es el lugar donde debe hacerse el pago—art. 747.—Esta ha sido la jurisprudencia constante en nuestros Tribunales. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Contrato de locación*, núm. 7; tom. 1º, verb. *Alquiler*, núm. 158.





solución del contrato cualquiera que sea el número de mensualidades vencidas, en tanto no se justifique que existe mora por parte del locatario.—Jur. Civ., tom. 8, página 349, Ser. 4^a.

26. **Contrato de arrendamiento**—La existencia de un condominio sobre el terreno locado, no puede fundar la resistencia del locador al cumplimiento del contrato.—Jur. Civil, tom. 8, págs. 385, Ser. 4^a.

27. **Contrato de arrendamiento**—La prueba de la conformidad de un condómino con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino: la prueba de testigos no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, página 281, Ser. 4^a.

28. **Contrato de arrendamiento**—Una sociedad sucesora de otra en los negocios de su giro, puede exigir la escrituración de la prórroga de un contrato de locación celebrado con la anterior, siempre que el locador hubiese consentido los pagos que ésta hubiese hecho de los alquileres devengados.—Jur. Civ., tom. 1, págs. 266, Ser. 4^a.

29. **Contrato de arrendamiento**—Para que proceda la rescisión de este contrato por medio del desalojo por falta de pago del precio de locación, el locador debe justificar

26—No se comprobó que el arrendatario hubiese tenido conocimiento de la existencia del condominio, en cuyo caso el locador no puede oponerse al contrato de acuerdo con los principios sentados en los artículos 1047, 1512 y 2682 del Cód. Civ.

27—Véase: verb. *Condómino*, núm. 2.

28—Porque se presume que consiente en la cesión dice el fallo. Pero debe tenerse presente que aquí no hubo cesión sino subrogación tácita.

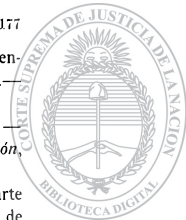
29—Para que el locatario incurra en mora es necesario que haya habido interpelación—art. 509, Cód. Civ.—Jur. Civ., tom. 2, página 340, Ser. 1^a; tom. 4, págs. 490, Ser. 2^a. Véase el núm. 25.

que exigió estrajudicialmente el pago en la debida oportunidad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 267. Ser. 4^a.

30. Contrato de arrendamiento—La pena por la rescisión

30.—La cláusula pertinente del contrato decía: «El locador podrá vender la cosa arrendada cuando quiera, pero si lo hiciese antes de cuatro meses de la fecha, pagará á los inquilinos la cantidad de 1000 nacionales por indemnización, y si lo verificara después de los cuatro meses dará 2000 pesos, quedando en ambos casos rescindido el contrato.» Es necesario averiguar cuál ha sido la intención de los contratantes al estipular esta cláusula. Si la sola venta de la cosa acarrea la rescisión del contrato naciendo la obligación de pagar las indemnizaciones estipuladas, ó si solo autoriza al locador á resolverlo en caso de venta, determinando desde luego la indemnización que debía satisfacer. ¿La cláusula de la indemnización importa una pena para el caso de venta? Esto último no es aceptable. Porque el locatario no tiene derecho por ley, ni lo tenía por contrato, para impedir la enagenación de la cosa materia de la concesión, y por consiguiente el locador no está en la obligación de abstenerse de la venta. El único interés de un locatario es que se le respete en su contrato, y es evidente que la sola venta de la cosa, no va contra ese interés. De aquí resulta que la cláusula no puede ser una pena para el locador. La cantidad á abonarse en caso de venta es por vía de indemnización quedando rescindido el contrato. Ahora bien, esa rescisión ¿se opera *ipso facto* por la venta que de la cosa arrendada haga el locador? Estudiando la cuestión á la luz de la ley y de la razón, resulta una contestación negativa. Para ello habria sido necesario que la persona del locador hubiese sido una causa determinante del contrato, y nada induce á presumir este extremo. Para exigir el pago de la pena, sería previa la rescisión del contrato, y nada induce á creer que el locatario tiene otro interés que no sea el que se le respeten sus derechos al uso ó goce de la cosa arrendada por todo el tiempo de la locación. Ningún perjuicio se le sigue al locatario porque el locador sea Juan ó Pedro, y por consiguiente ninguna indemnización podría demandar por el solo hecho de que el locador dejara de ser propietario de la cosa arrendada. De donde resulta, que esa cláusula debe entenderse razonablemente como que importa una facultad acordada al locador para que pueda resolver el contrato en caso de venta, debiendo entonces abonar al locatario las cantidades que se estipulen por vía de indemnización de las pérdidas é intereses que le ocasionase la rescisión. Esa cláusula es necesaria en todo contrato de locación constante de escritura pública,





de un contrato en caso de enajenación solo puede entenderse aplicable si la venta deja sin efecto la locación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 423, Ser. 4^a.

Contrato de arrendamiento—Véase: *Locatario*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 6—*Desalojo*, núm. 4—*Locación*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 89.

1. Contrato de compraventa—El conocimiento por parte del comprador, antes de la adquisición, de los vicios de que adolece el contrato, importa una renuncia tácita á la evicción fundada en los mismos.—Jur. Civ., tom. 2, página 21, Ser. 3^a.

2. Contrato de compraventa—El vendedor está obligado á subsanar los defectos del título para el otorgamiento de la escritura: la resolución del contrato no puede declararse sin la conformidad del comprador.—Jur. Civ., tom. 2, página 193, Ser. 3^a.

3. Contrato de compraventa—El vendedor está obligado á subsanar aquellos defectos del título, cuya existencia reconoció al estipular la venta: su desidia no puede fundar la rescisión de la venta.—Jur. Civ., tom. 2, página 226, Ser. 3^a.

4. Contrato de compraventa—El error de hecho sobre la ubicación del terreno materia del contrato, anula el acto,

por cuanto una vez inscripto, como tiene que ser en el Registro de la Propiedad, tiene que respetarse necesariamente en caso de venta del inmueble.

1—Art. 2106 del Cód. Civ.; Troplong, comentario al art. 1626 del Cód. Francés, núm. 418.

2—En cuanto á la primera parte del sumario debe entenderse que solo está obligado cuando los defectos fuesen de fácil subsanación—artículo 522 del Cód. de Proc.—En cuanto á la segunda parte, véase el art. 1204 del Cód. Civ.

3—Véase nota precedente.

4—Art. 927, Cód. Civ.



mientras no se justifique la existencia de dolo.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 367, Ser. 3ª.

5. **Contrato de compraventa**—De bienes, celebrado entre madre é hijo, es válido mientras no se justifique que tuvo por objeto defraudar los bienes de la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

6. **Contrato de compraventa**—El vendedor que no lo cumple, solo está obligado á devolver la seña recibida, en tanto no se haya estipulado otra pena.—Jur. Civ., tom. 4º, pág. 103, Ser. 3ª.

7. **Contrato de compraventa**—Ejecutado el comprador en remate judicial por el precio de la compra, no procede la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom 4, pág. 325, Ser. 3ª.

8. **Contrato de compraventa**—Justificada la imposibilidad de cumplir el contrato de compraventa, el vendedor está obligado á la devolución del precio con sus intereses á estilo de banco.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 318, Ser. 3ª.

5—Un esposo, durante la sociedad conyugal, vendió á su madre un inmueble: los hijos de los cónyuges dijeron de nulidad de esa venta, habiendo sido rechazadas sus pretensiones, porque no es posible hacer cuestión de si el hijo puede ó no vender válidamente los bienes de la sociedad conyugal durante la existencia de ésta, salvo los derechos de la esposa cuando la venta fuese hecha en fraude de ella. La circunstancia de tratarse de un contrato celebrado entre madre é hijo, no es por sí sola una prueba de fraude ó de simulación, para declarar en su mérito nulo ó simulado el acto. El art. 1357 del Cód. Civ. establece quiénes son los que pueden comprar y vender: los artículos siguientes enumeran taxativamente quiénes no pueden celebrar ese contrato, y entre las personas enumeradas no se encuentran comprendidos el hijo y la madre. Siendo esto así, el contrato es perfectamente válido.

6—Art. 1189 del Cód. Civ.

7—Porque la ejecución iniciada implica exigir el cumplimiento del contrato, y no es posible pedir conjuntamente la rescisión y el cumplimiento de los contratos—art. 1204, Cód. Civ.

8—Art. 1413 del Cód. Civ.



9. **Contrato de compraventa**—El boleto otorgando promesa de venta se juzga por las disposiciones del contrato de compraventa, aun cuando el vendedor no sea propietario del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 325, Ser. 3ª.

10. **Contrato de compraventa**—Justificada la mora del comprador en cumplir el contrato de compraventa constante de documento privado, procede se declare su rescisión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3ª.

11. **Contrato de compraventa**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa constante en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188, Ser. 3ª.

12. **Contrato de compraventa**—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante en instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

13. **Contrato de compraventa**—Justificada la imposibili-

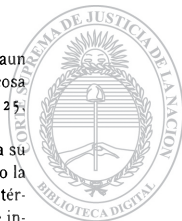
9—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 6.

10—Préviamente había solicitado la parte el otorgamiento de la escritura dentro de diez días: fué notificado, y vencido el término acordado, se presentó la misma parte pidiendo se declarara rescindido el contrato. Así se declaró por mayoría de votos: la minoría formada de un vocal dijo, que el demandado no había acompañado el boleto, ni menos comprobado que él contuviese cláusula alguna resolutoria. No habiendo insinuado siquiera la existencia del pacto comisorio, el vendedor no pudo útilmente gestionar la resolución sino el cumplimiento de la venta, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1204 y 1432 del Cód. Civ.

11—Arts. 1185 á 1187, 1204 y 1432 del Cód. Civ. Véase verbo *Escritura pública*, núm. 4.

12—Véase *Escritura pública*, núm. 3.

13—El contrato constaba de un documento privado, en cuyo caso aunque se haga la tradición de la cosa, la venta no queda perfecta por que el dominio se adquiere por escritura pública de adquisición segunda de la tradición. Si no hay escritura pública, falta uno de los elemen-



dad de cumplirse, procede la devolución del precio, aun cuando el comprador hubiese tomado posesión de la cosa ó materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, página 325, Ser. 3^a.

14. **Contrato de compraventa**—Al vendedor que alega su rescisión, corresponde la prueba de la escepción; si no la justifica, debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 371, Ser. 3^a.

15. **Contrato de compraventa**—La pérdida de la seña permite al comprador dejar sin efecto este contrato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 228, Ser. 4^a.

16. **Contrato de compraventa**—El de una área determinada por un precio único, solo puede quedar sin efecto por diferencia del vigésimo en el total.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4^a.

17. **Contrato de compraventa**—El vigésimo que la ley fija para permitir la rescisión del contrato, es sobre el total del área, no sobre la dimensión de la parcial de uno de sus costados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4^a.

18. **Contrato de compraventa**—No procede la acción sobre cumplimiento del contrato de compraventa de un inmueble, en tanto no se haya estendido la escritura pública

tos esenciales de la compraventa y por consiguiente no puede ser considerada como perfecta. Si su cumplimiento no es posible, el vendedor puede exigir que inmediatamente se le devuelva el precio—art. 1413, Cód. Civ.

14—Se acordó 15 días para escriturar, bajo el apercibimiento del artículo 1187 del Cód. Civ.

15—Art. 1202, Cód. Civ.

16—Arts. 1341, inc. 5º, 1346 y 1347, Cód. Civ.

17—Así lo dice espresamente el art. 1346 del Cód. Civ.

18—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la mayoría de la Cámara. Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7.



que la ley declara indispensable para reconocer su existencia y validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 4ª.

19. **Contrato de compraventa**—El comprador que en el acto de la compra conoció la existencia de los títulos en poder de un tercero, no puede retardar el cumplimiento del contrato siempre que aquél los tenga á su disposición.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 166, Ser. 4ª.

20. **Contrato de compraventa**—Si el vendedor opta por el cumplimiento del contrato, no puede exigir la aplicación de la cláusula penal estipulada por la falta de cumplimiento dentro del término señalado.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 166, Ser. 4ª.

21. **Contrato de compraventa**—La modificación del contrato de compraventa con pacto de retroventa, permitiendo que el vendedor lleve á cabo actos de propietario después del vencimiento del término, transforma el contrato y permite al deudor hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 55, Ser. 4ª.

19—Véase verb. *Comprador*, núm. 2.

20—Véase *Cláusula penal*, núm. 1.

21—El vendedor comprobó que el término de la retroventa había sido prorrogado de común acuerdo de partes, quedando las estipulaciones contenidas en la escritura de venta con pacto de retroventa sustancialmente modificadas. Se presentó un documento del que resultaba que las partes convinieron en fijar un plazo prorrogando el término de la retroventa: en la misma forma se estableció que una nueva convención había sustituido á la primera, mediante la cual se crearon nuevas relaciones de derecho, autorizándose al comprador á vender en público remate y á nombre del vendedor primitivo, la propiedad materia del contrato, facultándolo asimismo para cobrarse lo que se le adeudaba y cancelar un gravamen que reconocía el inmueble á favor del Banco Hipotecario. Este documento privado fué reconocido por el comprador, teniendo en consecuencia la misma fuerza que el documento público—art. 1026, Cód. Civ.—por él se estableció una nueva forma de pago de lo adeudado por el vendedor.



22. **Contrato de compraventa**—Si el comprador persiste en la compra hecha en remate judicial aun reconocida la imposibilidad de la escritura en breve término, no procede la resolución del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, página 414, Ser. 4^a.

23. **Contrato de compraventa**—No procede la rescisión de un contrato de compraventa de inmuebles por instrumento privado, si no existe pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

22—Comprado un terreno se pidió quedaran en suspenso las obligaciones del adquirente y la aprobación del remate por resultar que la propiedad se encontraba en litigio. Se proveyó de conformidad en virtud de lo prescrito en el art. 1425 del Cód. Civ., y sin perjuicio de llevar adelante la percepción del precio con afianzamiento. Posteriormente el vendedor pidió se dejara sin efecto el remate para no dejar indefinidamente postergada la venta, pero el comprador se opuso amparándose en el art. 1204. Desde luego debe tenerse presente que el art. 522 del Cód. de Proc. no es aplicable al caso, porque aquí no se trata de vicios opuestos á los títulos; y además porque esa disposición tiene por objeto eviatar que terceros adquirentes de bienes vendidos en juicio ejecutivo impidan que el acreedor se haga pago á la brevedad posible de su crédito, objeto principal del juicio ejecutivo. Aquí no dependía del comprador el que los vendedores no se encontrasen en aptitud de escriturar, y más bien es imputable al vendedor, quienes no habían tratado de hacer desaparecer los obstáculos que se oponían á su escrituración. El caso está resuelto por los arts. 1204 y 1425. El primero no da derecho á los vendedores á dejar sin efecto el contrato desde que no existe pacto comisorio, mientras que el segundo autoriza al comprador á no entregar el precio estipulado hasta tanto no desaparezca el temor de ser molestado por acción reivindicatoria. Aquí no se trataba del perfeccionamiento del contrato á cuya realización no se oponían el comprador que aceptó el auto suspendiendo los efectos de la compra, sino de la retención del precio que compete al comprador en las ventas perfectas de acuerdo con el art. 1425. El auto que mandaba suspender la aprobación del remate y las obligaciones del comprador estaba consentido y no era posible volver sobre lo mismo, por esto no se hizo lugar á lo nuevamente pedido en contra de esa resolución.

23—Art. 1204, Cód. Civ.



24. Contrato de compraventa—Para que proceda el cumplimiento de este contrato, el boleto simple debe ser convertido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

25. Contrato de compraventa—Justificada la existencia de este contrato por instrumento privado, procede su conversión en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, página 337, Ser. 4^a.

Contrato de compraventa—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 19—*Desistimiento*, núm. 2—*Renta*, núm. 4—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y siguientes—*Autenticidad*, número 3—*Escritura pública*, núms. 26, 27 y 28.

Contrato de construcción—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1.

1. Contrato de locación—De servicios, debe justificarse plenamente la existencia de este contrato, para que proceda el pago de los trabajos ejecutados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4^a.

2. Contrato de locación—De servicios, justificada por confesión del demandado la existencia de este contrato, pro-

24—Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7.

25—Véase nota precedente.

1—En virtud del principio general de que la prueba corresponde al actor.—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

2—En el contrato de locación de servicios casi siempre hay hechos realizados, de manera que la prueba de esos hechos puede ser rendida por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 1190. La disposición que prohíbe la prueba de testigos en los contratos que exceden de 200 pesos no es aplicable porque el art. 1191 establece, en su última parte, que son admitidos todos los medios probatorios «cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase á cumplirla.» De aquí resulta que la prueba de testigos sería siempre procedente, cuando han habido servicios prestados, ya sea que el deudor hubiese confesado parte de esos servicios ó que no hubiese confesado nada. Esa prueba sería procedente no solo respecto de lo accesorio sino que también con relación á lo principal.



cede la prueba de testigos sobre sus detalles, aun cuando no exista principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 383, Ser. 4^a.

3. Contrato de locación—De servicios, para aquellos que se requiere título profesional, reconocida su existencia, debe ordenarse su pago, aun cuando se justifique que otro fué el que desempeñó la parte mecánica de la operación.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 400, Ser. 4^a.

4. Contrato de locación—De servicios, reconocida su existencia, el constructor está obligado a pagar al propie-

3—Contratada la mensura y delineación de un centro agrícola, el agrimensor encomendó, el trabajo material de medir, a otro del gremio pero sin título. Hecha la medición el titulado completó la operación, firmó la diligencia y la presentó al Departamento de Ingenieros obteniéndose su aprobación. Viene a cobrar sus honorarios el primero y se opone la parte al pago, porque dice que la medición no la hizo él sino otro agrimensor y que por consiguiente no tenía derecho a reclamo alguno. El agrimensor titulado dijo que el otro había hecho la mensura, pero como «operador material, en calidad de ayudante, debiendo someterse a las instrucciones que él le diera, como lo hizo», habiendo formado el primero los demás planos. El trabajo de una mensura no lo constituye solo la medición material que un agrimensor puede confiar a su ayudante que obra bajo la responsabilidad de su firma. La elaboración de una mensura se forma con sumandos de un orden superior; con el estudio de títulos; con las instrucciones que deben recibirse del Departamento, la inteligencia con los linderos, las instrucciones al operador para la dirección de sus líneas, puntos de arranque, orientación y tantos otros datos y antecedentes de detalle. Si por el hecho material de la medición se puede decir que el agrimensor que hace esta operación es el que hace la mensura en todos sus detalles y que tendría derecho a cobrar esos honorarios, sucedería que un dependiente de un estudio de abogado que hace un escrito bajo la dirección del letrado, y que éste lo firma, tendría derecho ese dependiente a cobrar el honorario de su principal, lo que sería un absurdo. Del propio modo el ayudante que hace la medición material del terreno, tendrá derecho a cobrar ese trabajo, pero no como agrimensor sino como ayudante, mientras los honorarios de la mensura corresponderán al agrimensor.

4—Arts. 1623, 1630, 1631 y 1647 del Cód. Civ.



tario los daños ocasionados por mala construcción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 415, Ser. 4ª.

5. Contrato de locación—De servicios, es reputado civil cuando los servicios son prestados á un comerciante en otro carácter que el de dependiente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 4ª.

Contrato de locación—Véase: *Sentencia*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 28, 90, 93, 95 y 96—*Honorarios*, números 25 y 27—*Locación*, núms. 8 y 9—*Interdicto de recobrar*, núm. 10.

Contrato de matrimonio—Véase: *Separación de bienes*, núms. 2 y 3.

Contrato de mayor cuantía—Véase: *Prueba escrita*, número 3.

1. Contrato de mutuo—Al que alega la simulación de la

5—Es regla general que la jurisdicción se determina atendiendo á la naturaleza de la causa que motiva la acción, sirviendo la calidad de las personas tan solo para establecer una presunción *juris tantum*, que cede á la prueba en caso de duda: de aquí resulta que contratando un comerciante con quien no tiene esa calidad y siendo el acto ejecutado de naturaleza civil, el comerciante puede ser traído, por razón de ese acto á la jurisdicción civil. En el caso presente se trataba de obligaciones emergentes de un contrato de locación de servicios prestados de otra manera que aquellos de los dependientes ó empleados del comerciante á quien benefician, siendo entonces un contrato puramente civil y sujeto á esta jurisdicción.

1—Todo aquel que aduce un hecho nuevo en juicio, está obligado á comprobarlo. La ley 8, tit. 3, Part. 3ª, dice: Conocen á las veces los demandados, lo que les demandan en juicio. Pero ponen luego defensiones antesí. E por ende dezimos que en tales razones como estas, ó en otras semejantes dellas, que deve el Judgador dar plazo al demandado, a que prueue la defension que ouiere puesto ante sí. El reo en la escepcion se hace actor, y es sabido que á este último incumbe la prueba—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—Además la escritura pública tiene á su favor la presunción de verdad que le acuerda la ley—arts. 993 y 995 del Cód. Civ.—Al que trata de destruir esa presunción legal le incumbe la prueba.



venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

1. **Contrato de sociedad**—Aun cuando llegue á crear una comunidad de intereses, no basta para calificarlo como constitución de sociedad, y en consecuencia es improcedente la acción de resolución.—Jur. Civ., tom. 5, página 343, Ser. 3^a.

2. **Contrato de sociedad**—La demanda por parte de comisión de venta de un inmueble, entre corredores, y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, página 245, Ser. 3^a.

3. **Contrato de sociedad**—Reconocida la existencia de participación en las utilidades de un negocio determinado, el que lo llevó á cabo debe rendir cuenta de la negociación, aun cuando no exista contrato social.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 240, Ser. 3^a.

Contrato de sociedad—Véase: *Daños y perjuicios*, número 26.

1—Al celebrarse el contrato, las partes no tuvieron por fin inmediato obtener una utilidad apreciable en dinero para dividirse entre ellos, como lo requiere el art. 1648 del Cód. Civ. El objeto propuesto fué el de constituir un condominio sobre un inmueble en la proporción de un tanto por ciento de cada parte. Este contrato no es un verdadero contrato de sociedad, y no basta para que produzca los efectos peculiares que la ley atribuye á los de su naturaleza, como lo enseña el codificador en la nota al art. 1748. No existiendo sociedad, la acción instaurada sobre disolución fundada en el art. 1773 del Cód. Civ. es improcedente.

2—Véase verb. *Comisión*, núm. 2.

3—Arts. 2701 y 1909 del Cód. Civ.; Castro, *Práctica Forense*, párrafo 488; Leyes 26, 27 y 31, tit. 12, Part. 5^a; Ley 18, tit. 5, y Ley 5, tit. 14, Lib. 9, R. C.



Contrato directo—Véase: *Desalojo*, núm. 4.

1^a. Contrato escrito—Cualquiera que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital excede del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, página 172, Ser. 4^a.

Contrato escrito—Véase: *Ratificación*, núm. 2.

Contrato nupcial—Véase: *Bienes dotales*, núm. 1.

Contrato perfecto—Véase: *Boleto de compraventa*, número 1.

1^b. Contrato por escritura pública—El consentimiento de las partes, exigido en un contrato por escritura pública, debe revestir la primera forma: el tácito por el conocimiento personal que tuvo de la infracción, no importa la renuncia de su derecho á exigir la rescisión estipulada como pena.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

2. Contrato por escritura pública—La prueba de modifi-

1^a—El sumario está en abierta oposición con el precepto del artículo 1663 del Cód. Civ., y está asimismo en contra de lo resuelto por la Cámara. Como principio general es insubsistente el sumario, sin embargo de que para el caso que nos ocupa podría aceptarse limitándolo para cuando se trata de obtener que se cumpla un contrato celebrado pero que no ha recibido ejecución, no siendo aceptable para cuando se trata de contratos realizados en los que ha habido operaciones, entregas y ganancias, etc.—Arts. 976, 1184, inc. 3, 1185, 1188, 1193 y 1665 del Cód. Civ.

1^b—Por una de las cláusulas de un contrato de arrendamiento se estipuló que el locatario no podía hacer construcción alguna sin previo consentimiento escrito del locador. Las construcciones se hicieron á vista y paciencia del locador, y una vez hechas pidió la rescisión del contrato. El locatario alegó que el consentimiento tácito suplía al consentimiento expreso. Es claro que aquel no puede suplir á éste, porque la estipulación es clara y terminante, y es ley para las partes—art. 1197, Cód. Civ.

2—Art. 1184, inc. 10 del Cód. Civ.



caciones a un contrato así constituido, debe revestir igual forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 4^a.

1. **Contrato privado**—Puede exigirse la conversión a instrumento público del boleto privado de compraventa, sin manifestar la voluntad de cumplirlo, lo que solo es obligatorio al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 57, Ser. 3^a.

2. **Contrato privado**—Cualesquiera que sean las condiciones que hayan estipulado las partes en un contrato privado, solo pueden hacerse efectivas después de reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

3. **Contrato privado**—La fijación de un término para el cumplimiento de obligaciones contraídas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deje sin efecto el contrato, sino un plazo suspensivo dentro del cual no puede exigirse judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

4. **Contrato privado**—Cuya existencia reconoce el de-

1—Véase *Boleto de compraventa*, núm. 8.

2—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara.—Véase verb. *Boleto de compraventa*, núms. 10, 14, 16, 17, 32, y especialmente el verb. *Escritura pública*, núm. 7.

3—Véase *Condición resolutoria*, núm. 1.

4—De acuerdo con otro caso resuelto. Véase *Cesión de derechos*, núm. 3. En tesis general, el que demanda debe acompañar á la acción instaurada todos los documentos que la justifiquen; pero esta disposición como casi todas trae aparejada su escepción, la que en el caso presente consiste en que esa obligación general de acompañar con la demanda todos los recaudos, no puede exigirse cuando ella se ha hecho innecesaria por la prueba rendida en el curso del juicio, como por confesión por ejemplo, porque uno de los principios más elementales del procedimiento es que la confesión de parte releva de prueba. Si la parte confiesa la existencia de un documento, no se puede argüir con la falta de presentación del documento para que la acción no prospere. Argüir así im-



mandado, debe tenerse por válido aun cuando no se encuentre agregado á los autos.—Jur. Civ., tom. 2, página 46, Ser. 4^a.

Contrato privado—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 34—*Condición resolutoria*, núm. 1.

1^a. Contrato rescindido—El cesionario de un contrato que debía recibir en pago de la cesión un tanto por ciento sobre el total de las obras, tiene derecho á la parte proporcional de la suma percibida por su rescisión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 3^a.

2. Contrato rescindido—La suma acordada por la rescisión de un contrato, debe conceptuarse la utilidad que su cumplimiento debía reportar, en tanto no se justifique plenamente que debe imputarse á los daños y perjuicios resultantes de su inejecución.—Jur. Civ., tom. 5, página 400, Ser. 3^a.

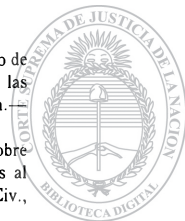
Contrato unilateral—Véase: *Escritura pública*, núm. 22.

1^b. Contrato verbal—El reconocimiento de la existencia

portaría violentar los principios más reconocidos de justicia, rendir un culto al formulismo de la ley contra las nociones claras de la misma, que dominan á ese formulismo, como que las leyes de forma no están establecidas sino como medio de asegurar á los litigantes en sus intereses, lo que es el fin de todo juicio: esclarecer la verdad y hacer justicia. Esto importaría obligar al Juez á fallar por medio de verdaderas sutilezas quebrantando una de las leyes de forma, la más fundamental que enseña, que el Juez busque esa verdad como único objeto del juicio sin ceñirse á las sutilezas del derecho. «Seyendo hallada y probada la verdad del fecho... los jueces determinen y juzguen los pleitos, según la verdad que hallaren probada», dice la Ley 10, tit. 17, lib. 4^o, R. C. Los jueces, por consiguiente, deben prescindir de si el documento ha sido agregado ó no, con tal de que ese documento esté reemplazado con otros medios de prueba que obren en autos, y si todos estos elementos de prueba reunidos son suficientes para formar la conciencia judicial respecto de la existencia de la obligación.

1^a—Véase verb. *Cesionario*, núm. 1.

1^b—Véase verb. *Cláusulas*, núm. 1.



de un contrato verbal, no importa el reconocimiento de las bases, y corresponde al demandante la prueba de las cláusulas cuya existencia afirma al deducir su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

2. **Contrato verbal**—La confesión del demandado sobre la existencia del contrato verbal, exime de las costas al demandante aun cuando se rechace la acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

3. **Contrato verbal**—Reconocida la existencia del contrato verbal de compraventa bajo condición resolutoria, corresponde al que afirma la existencia de la condición, justificar que el hecho condicional tuvo lugar en tiempo oportuno para producir la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, página 334, Ser. 3ª.

4. **Contrato verbal**—La prueba testimonial es improcedente para justificar la existencia de una promesa de contrato verbal por mayor valor del que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3ª.

5. **Contrato verbal**—Negada su existencia, no procede para justificarla la prueba testimonial, si no existe principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3ª.

6. **Contrato verbal**—Justificada su existencia por confesión de partes, los Tribunales deben juzgar si por sus cláusulas es susceptible de cumplimiento sin que puedan obligarlas á aceptar alteración alguna.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 92, Ser. 4ª.

2—Porque eso comprueba la falta de temeridad y malicia por parte del litigante.

3—Véase *Confesión*, núm. 1.

4—Art. 1193 del Cód. Civ., y 180 del Cód. de Proc. Salvo los casos de escepción establecidos en los arts. 1191 y 1192 del Cód. Civil.

5—Arts. 1193 del Cód. Civ., y 180 del de Proc.



7. **Contrato verbal**—Justificada su existencia, las partes están obligadas á hacer escritura pública del convenio, pe-

7—El contrato versaba sobre el condominio de un inmueble. Reconocida su existencia por medio de un contrato verbal, no procede la escrituración del condominio, sino la promesa de otorgarlo, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la mayoría de la Cámara. Véase verb. *Escritura pública*, núm. 7. La minoría dijo, que el Cód. Civ. consagra el principio de que los contratos que tengan por objeto la transmisión de bienes raíces en propiedad ó en usufructo, así como la constitución de cualquier gravamen sobre ellos, deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, con escepción de los que se celebren en pública subasta. Pero declara en seguida, que cuando fuesen hechos en instrumento particular firmado por las partes, con obligación de llenarse aquella formalidad, ó verbalmente, si bien no quedan concluidos como tales, deberán sinembargo considerarse como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública, pudiendo en consecuencia demandarse recíprocamente para el otorgamiento de esa escritura, bajo la pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. Tales son las prescripciones contenidas en los arts. 1184, inc. 1º, á 1188. Entendemos que la obligación de hacer escritura pública de que habla la ley, tiene su aplicación al mismo contrato de compraventa, es decir, es relativa á la formalidad que debe tener para su validez, según lo prescribe en el art. 1184, mas no con referencia al boleto, por cuanto aparte de que en este caso resultarían dos escrituras públicas, además también de las dificultades que esto podría ofrecer en la mayor parte de los casos y de los gravámenes que causarían á los interesados, importaría hacer depender la validez ó existencia legal del contrato, de una formalidad previa que la ley no consagra en términos espresos. La compraventa es un contrato consensual, considerado así desde el derecho romano, y si bien cuando tiene por objeto la transmisión de bienes inmuebles ó cualquier gravamen sobre ellos, debe concurrir aquella formalidad como esencial para su validez, no puede por esto entenderse que la legislación vigente le haya cambiado su naturaleza. Por el contrario, debe considerarse entre aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento, pero no concluidos mientras no se haya otorgado la escritura pública respectiva que podrían exigirse mutuamente las partes. Lo prueba así también, la prescripción penal de las pérdidas é intereses que el mismo Código impone al que deje de otorgar la escritura pública de ese contrato aunque no se haya dado ninguna señal para asegurar su cumplimiento, al contrario de lo que sucedía

ro no de lo que constituya el objeto del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Ser. 4ª.

por el Derecho Romano, según una prescripción de la Instituta—Libro 3º, tit. 23.—No sucede lo mismo con respecto á nuestra actual legislación civil, distinta también en esta parte de la de las partidas y de la del derecho civil francés. El art. 1185 dispone: que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, no quedan concluidos como tales mientras la escritura pública no se haya firmado, pero quedarán concluidos como contratos, dice, en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. Más adelante, en el art. 1187 dispone también, que lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, será juzgado como una obligación de hacer y que la parte que lo resistiese, podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses. ¿A qué contrato ú obligación se refiere la ley? Debe entenderse que á la de la escritura del mismo contrato de compraventa exigida en nuestro caso por el art. 1184, pues, es esa escritura el objeto de la obligación de vender ó comprar de que pueda arrepentirse ó no poder cumplir una ú otra de las partes, explicándose así el que venga á resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses, al contrario de lo que sucedía con el derecho romano en el que el comprador como el vendedor podían arrepentirse sin incurrir en pena alguna. Resulta, pues, que si bien el legislador ha prescripto la escritura como una solemnidad sustancial de este género de contratos, cuando las partes lo celebran bajo una forma privada ó verbalmente, como en el caso del art. 1188, lo único que puede exigirse es el otorgamiento de la escritura correspondiente al mismo contrato, bajo la pena de daños y perjuicios ó de las responsabilidades establecidas en el art. 1202 en el caso que se hubiera dado una señal para asegurar el cumplimiento del contrato, y entendemos que estando á los términos de la demanda y su contestación, lo que única mente corresponde resolver es la escrituración del contrato de compraventa en condominio, del inmueble cuestionado en la parte que corresponde al actor. No se encuentra por lo tanto la razón legal que justifique la modificación de la sentencia en el concepto de que la escritura, que se condena otorgar al demandado, no es la del condominio de que se ha tratado únicamente en el juicio como lo sostiene la mayoría de la Cámara. No debe olvidarse tampoco que existe jurisprudencia contraria, pues, en algunos casos resueltos antes de ahora se ha mandado otorgar la escritura pública del contrato celebrado en forma privada, sin espresarse que debía hacerse aquella salvedad.





8. **Contrato verbal**—La prueba testimonial es impropia para justificar un contrato verbal de compraventa por mayor valor del que la ley fija, si no existe principio de prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4^a.

Contrato verbal—Véase: *Confesión*, núm. 1 —*Prueba testimonial*, núm. 5 —*Daños y perjuicios*, núm. 67.

1. **Contratos**—Los que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos verbalmente, quedan concluidos á efecto de que las partes puedan demandar su escrituración, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 334, Ser. 3^a.

2. **Contratos**—Obligan no solo á lo formalmente enunciado sino también á sus consecuencias.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 293, Ser. 4^a.

3. **Contratos**—Siendo principio espreso en derecho que los contratos se forman para cumplirlos, no procede la demanda de resolución sino la de cumplimiento de la convención salvo la existencia de un pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

4. **Contratos**—La Municipalidad de la Capital, no puede ser obligada al cumplimiento de contratos violatorios de su Ley Orgánica.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 4^a.

Contratos—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 1.

Contribución directa—Véase: *Títulos de propiedad*, número 20—*Bienes de menores*, núm. 6.

Convención—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 4—*Con-*

8—Véase los núms. 4 y 5.

1—Arts. 1187 y 1188 del Cód. Civ.

2—Art. 1198, Cód. Civ.

3—Arts. 1201 y 1204 del Cód. Civ.

4—Cuando son contrarias á la ley, carecen de todo valor legal.

trato privado, núm. 2 — *Simulación*, núm. 7 — *Boleto de compraventa*, núm. 10 y 24.

Convención espresa—Véase: *Intereses*, núm. 6 — *Obligación de hacer*, núm. 5 — *Construcciones*, núm. 2.

1°. **Convenio**—Terminado por convenio entre ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, este debe ser levantado declarándose procedente la tercera de dominio á que hubiese dado lugar.—Jur. Civ., tom. 9, página 198, Ser. 4^a.

Convenio—Véase: *Contrato verbal*, núm. 7—*Nulidad de un desistimiento*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, número 16—*Daños y perjuicios*, núm. 90 —*Documento*, número 3.

Convenio espreso—Véase: *Mora*, núm. 1—*Sociedad*, número 2—*Locación*, núm. 5.

1°. **Convenio privado**—Reconocida su existencia, no pue-

1^a—En un juicio sobre alimentos se obtuvo el embargo de una propiedad; deducida tercera por el propietario, el embargante dijo de nulidad y simulación de la escritura otorgada por el esposo confesando en el curso del juicio que había arreglado con el marido la cuestión que sostenía, y que la cosa materia de la tercera no le había pertenecido por ningún título, habiendo la esposa dejado de exigir la pensión alimenticia. Si el litigio sobre alimentos había desaparecido, y si la base de la tercera, y consiguientemente de la acción de nulidad ó simulación había desaparecido, es evidente que no hay interés alguno legítimo en obtener la revocación de la venta atacada de simulación. Aun en el supuesto de que esa nulidad hubiese existido, el Juzgado no podría revocar ese acto en interés de uno de los litigantes, puesto que él ni tiene ya interés en la revocación, ni siquiera es acreedor del otro en virtud del convenio celebrado. No pudiendo declararse la nulidad ó simulación, tampoco puede subsistir el embargo que tiene por base el derecho y el interés de uno de los litigantes cuando ese interés ha desaparecido.

1^b—Una vez creada una convención no está en manos de uno de los interesados establecer un pacto comisorio para dejar sin efecto por sí y ante sí lo convenido.





de darse por disuelta la convención mientras no se pruebe también la existencia de un pacto comisorio establecido de común consentimiento de partes.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 416, Ser. 4^a.

Conversión—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núms. 24 y 25—*Moneda de oro*, núm. 1.

1^a. *Cónyuge superstite*—Puede comprar en remate judicial bienes de la sucesión en tanto no exista partición, ni hayan sido adjudicados á los mismos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 4^a.

1^b. *Cónyuges*—Justificada la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 366, Ser. 3^a.

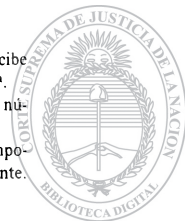
Cónyuges—Véase: *Administrador*, núm. 4—*Divorcio*, núm. 12.

1^c. *Copia* — La falta de firma de la copia, no basta para

1^a—Véase *Bienes de la sucesión*, núm. 1.

1^b—Véase, *Bienes del esposo*, núm. 1.

1^c—Esta resolución se funda en la jurisprudencia sentada por la Cámara, cuando dice que la falta de copias de un escrito, no puede producir el efecto de tenerlo por no presentado siempre que el secretario lo recibe sin observación y le pone cargo. Si la falta de esas copias, no trae perjuicio al que presenta el escrito, menos puede traerle la falta de firma de las mismas. Esta jurisprudencia no interpreta con fidelidad la ley de Proc. en su art. 21, el que establece que si las copias no se exhiben al secretario, no recibirá el escrito produciendo el efecto de no presentado. Pero se alega que si el secretario *lo recibe* no es ya el caso del art. 21, pues que este legisla para el caso de que *no lo recibiera*. La ley dice que el secretario *no recibirá* el escrito: si en contra de esta disposición terminante de la ley el secretario recibe el escrito poniéndole cargo, ese acto irregular, esa falta de cumplimiento á una prescripción categórica de la ley ¿puede mejorar el derecho del litigante? ¿No es esto autorizar la violación de la ley por el mismo y único funcionario encargado de cumplirla? ¿No es esto entronizar el favoritismo en el procedimiento mejorando la situación legal de los amigos del secreta-



dar por no presentado el escrito, si el secretario lo recibe sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 136, Ser. 4^a.

Copias.—Véase: *Rebeldía*, núm. 1.—*Comprador*, número 13.—*Escrito*, núms. 3, 4 y 5.

1^a. Correcciones disciplinarias.—El Juzgado debe imponerlas aun cuando la falta sea directa contra el litigante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 4^a.

Correcciones.—Véase: *Abogado*, núm. 4.

1^b. Corredor.—Estipulada como comisión de éste, la cantidad excedente del precio fijado, las fluctuaciones que sufra la especie en que se verificó la venta, son á cargo del corredor y no del vendedor.—Jur. Civ., tom. 7, página 201, Ser. 3^a.

2. Corredor.—El corredor en materia civil, puede con-

rio? Parece imposible que el Tribunal Superior de la Cap. de la República autorice y sancione una jurisprudencia como ésta que va contra la letra clara de la ley. Estas son las corruptelas que desprestigian nuestra administración de justicia, corruptelas introducidas, sancionadas y amparadas por la Cámara. Es necesario volver sobre esta jurisprudencia malsana y violatoria de la ley. El escrito presentado sin los requisitos exigidos por el art. 21, producirá el efecto de no presentado, háyase ó no recibido por el secretario. Así lo tiene resuelto la Cámara en lo Comercial.

1^a—El art. 52 del Cód. de Proc. establece que los jueces tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios; y el art. 75 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. los faculta para imponer correcciones disciplinarias cuando se cometen faltas contra su autoridad y decoro en las audiencias y en los escritos. Estos artículos no espresan con claridad que esa facultad la puedan usar para el caso en que los conceptos vertidos sean contra el litigante, pero de su espíritu resulta que también en este caso tienen esa facultad á fin de mantener el decoro en el debate y el orden en la discusión. No se necesita rudeza en el lenguaje para dar mayor eficacia al argumento jurídico.

1^b—Véase *Comisión*, núm. 3.

2—Se trata de la comisión devengada en la venta de un terreno. Siendo esta operación un negocio civil, no está sujeto á las disposicio-



tratar con las partes una participación en las utilidades de la operación que le ha sido encomendada.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 187, Ser. 4^a.

Corredor.—Véase: *Comisión*, núm. 1.

1^a. Corredores.—Aun cuando la compraventa no se lleve á término, los corredores tienen derecho al cobro de la comisión siempre que no les sea imputable la rescisión.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 17, Ser. 3^a.

1^b. Cosa ajena.—El comprador de cosa ajena no tiene derecho á exigir daños e intereses devengados por la falta de cumplimiento del contrato, si tenía conocimiento del hecho al firmar el boleto de compraventa.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 386, Ser. 3^a.

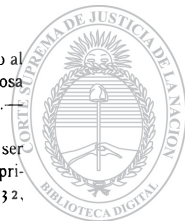
Cosa cierta.—Véase: *Obligación de dar*, núm. 1.

Cosa común.—Véase: *División en especie*, núm. 1.

nes del Cód. de Com. sino á las del Cód. Civ. Por otra parte, aun dado el caso de que fuera comercial, la persona que ofrece la retribución en esa forma, no tendría derecho á decir de nulidad de ella, porque el art. 1047 del Cód. Civ. se lo prohíbe cuando dice que no pueden alegar la nulidad del acto los que lo han ejecutado sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

1^a—Véase verb. *Compraventa*, núm. 1.

1^b—De los términos del boleto resultaba que tanto el comprador como el vendedor sabían que la cosa era ajena. El sumario está fundado en el art. 1327 del Cód. Civ., que consagra el mismo principio sentado por la ley 19, tit. 5^a, Part. 5^a; ley 6^a, tit. 10, lib. 5^a, F. R.; art. 1599, Cód. francés. Troplong en su comentario á este artículo, después de establecer que la venta es nula en todos los casos, sea que tuviese ó no conocimiento que el vendedor no era el verdadero propietario, refiriéndose al comprador dice, que si ha sabido que la cosa no era del vendedor, ó si el vicio ha sido enunciado, no tiene ningún derecho para suscitar cuestiones porque él ha sido común y ha sido de mala fe, lo mismo que el vendedor, y agrega estas palabras sobre la ley 27 del Digesto: *Mala fidei emptor est, dit Cujas, qui scit rem quam emit non esse vendentis*—tomo 1^o; de la venta núm. 231, pág. 315. Edición de París de 1837.



1. Cosa juzgada—La sentencia que obliga al esposo al cumplimiento del contrato, declarado nulo, no hace cosa juzgada para la esposa que no fué parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3ª.

2. Cosa juzgada—Deducida declinatoria, no puede ser iniciada la vía inhibitoria: la resolución recaída en la primera hace cosa juzgada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Ser. 3ª.

3. Cosa juzgada—La falta de condenación en costas en la acusación criminal y de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absolutoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3ª.

4. Cosa juzgada—Aun cuando la información supleto-

1—No concurren los extremos exigidos por la ley para que haya cosa juzgada: identidad de causa, de cosa, de personas y de condiciones.

2—El art. 412 del Cód. de Proc. consagra el principio sentado en el sumario. Esta disposición legal tiene por objeto impedir la concurrencia de dos sentencias contradictorias sobre el mismo punto. De donde se deduce que la prohibición de usar sucesivamente la vía inhibitoria y la declinatoria no es absoluta, pues mientras no puedan concurrir las dos resoluciones sobre el mismo punto, ambas vías pueden usarse. Así, si en el juicio ejecutivo, se opone la excepción de incompetencia por la vía declinatoria y esa excepción es desechada por estar opuesta fuera de término, ella puede usarse por la vía inhibitoria porque no pueden concurrir las dos sentencias contradictorias.

3—Véase *Acción civil*, núm. 1.

4—Habiéndose presentado un interesado ofreciendo información supletoria para acreditar el dominio de un inmueble, acompañó el interrogatorio para los testigos, confiriéndose vista al Agente Fiscal y traslado á la Municipalidad: evacuándolo ésta se opuso á la producción del juicio informativo mientras no se ampliase los interrogatorios, con datos sobre la extensión y linderos del terreno, requisitos que consideraba indispensables para que los testigos pudieran darse cuenta cabal de los hechos sobre que tenían que declarar. Ampliados los interrogatorios con los antecedentes exigidos por el representante de la Municipalidad, comparecieron á declarar los testigos en dos audiencias señaladas al



ria se califique de juicio voluntario, es contencioso para los que en ella intervengan con intereses opuestos, y por lo tanto la sentencia aprobatoria de la información hace efecto, sin que en nada fueran observadas las declaraciones prestadas, pues el procurador municipal no concurrió á ninguna de aquellas audiencias. Después de declarar siete de los testigos ofrecidos, solicitó la parte la aprobación de la información y conferido traslado de esta petición al Procurador Municipal, solicitó una prórroga para esperarse en ese traslado, pues necesitaba para ello algunos antecedentes que había pedido á la Intendencia. Concediósele la prórroga y vencida esta, en su rebeldía y previa conformidad del Agente Fiscal, se dictó resolución aprobando la información producida, á efecto de comprobar la posesión de cuarenta años ejercida en el terreno deslindado en los interrogatorios á cuyo tenor se habían prestado uniformemente las declaraciones. Notificada esta resolución al Procurador Municipal, interpuso el recurso de apelación para ante la Ex^{ma}. Cámara que, previo acuerdo, dictó sentencia confirmandola en todas sus partes por encontrar que los testigos que habían declarado, todos ellos de edad avanzada, habían podido conocer por ciencia propia los hechos sobre los cuales fueron interrogados, que habían dado razón satisfactoria de su dicho, que ninguno de ellos fué tachado, abundando todos en datos prolijos sobre las personas que poseyeron numerosos años la posesión, extensión del terreno, linderos, etc., etc., y finalmente porque la Municipalidad no había contestado el traslado que de la prueba se la confirió, ni había hecho repregunta alguna durante su elaboración y lo que es más, porque no demostró los agravios que la sentencia le infería. Estos son los antecedentes que el expediente informativo suministra, bien importantes por cierto y demostrativos por sí solos de la falta de razón que á la Municipalidad asistía para pretender, como lo pretendía, que el juicio informativo no puede perjudicarla, por cuanto la prueba que de él resulta no se ha rendido en un juicio contencioso, sino en uno meramente voluntario, y porque esa información se aprobó solamente en cuanto ha lugar por derecho. Basta reparar en los antecedentes que arroja ese expediente, para convencerse que las sentencias en él dictadas tienen para la Municipalidad el sello de la cosa juzgada, en cuanto ellas declaran contra la formal oposición que entonces dedujo, circunstancia que aleja toda idea de juicio de voluntaria jurisdicción, comprobando la posesión en favor de los demandados del terreno que se pretendía reivindicar. En ese expediente, desde su iniciación, intervino el representante de aquella corporación, antes de recibirse



cosa juzgada para ellos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Serie 4ª.

5. Cosa juzgada—La resolución que rechaza la eseección de incompetencia opuesta como dilatoria, hace cosa juzgada é inhabilita al demandante para oponerla como perentoria —Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4ª.

6. Cosa juzgada—La sentencia dictada en el juicio sulla información pidió mayor término para espeditse y no obstante haberle sido acordado, dejó que ella se aprobase en su rebeldía; y apelada la resolución de primera instancia, la Excm. Cámara la confirmó en todas sus partes, en mérito de fundamentos tan concluyentes como los que antes hemos recordado. Por consiguiente, aun cuando haya sido dictada en cuanto ha lugar por derecho, obliga á la Municipalidad que en presencia de la activa intervención que en el juicio informativo ha tenido su representante, no puede pretender que es para ella, *res inter alios acta*, único caso en que no la obligaría. Es en ese juicio que debió presentar los antecedentes que fuera de la oportunidad que previene el artículo 72 del Cód. de Proc. ha traído al presepte en vez de promover una demanda reivindicatoria para que como muy bien lo observó el Inferior, los terceros adquirentes de buena fe sean víctimas de la incuria del Procurador Municipal, dado caso que su representado hubiera tenido derechos que hacer valer en la oportunidad debida.

5—El Juzgado se declaró incompetente, siendo el auto revocado por la Cámara estableciéndose la competencia del Tribunal. Es evidente pues que una vez declarada la competencia del Juzgado en virtud de resolución consentida, ésta pasó á la categoría de cosa juzgada y no podía volverse sobre el mismo punto.

6—Los juicios sumarios de interdicto no causan estado ni en cuanto al derecho de poseer ni en cuanto al derecho de dominio: sus decisiones tienen un alcance limitado, la protección momentánea de la posesión contra los actos de terceros cualquiera que sea el origen y los caracteres de aquélla. Es solo el hecho de la posesión lo que ampara la ley porque es solo este hecho y su turbación material lo que puede válidamente discutirse; y de este punto de mira sería contraria á los principios más fundamentales del derecho que las fórmulas estrechas de este debate y en sus procedimientos brevísimos hubieran de quedar aclarados ó definidos derechos permanentes y duraderos. No son estas las inspiraciones de la ley cuando espresamente salva al vencido en la querella sumaria sus acciones de posesión y de dominio y cuando en los



mario de interdicto, no hace cosa juzgada para el petito-

misimos términos espresos prescribe, que el ejercicio de las acciones posesorias no menoscaba el ejercicio ulterior de la acción real. El fin primordial del interdicto es garantizar al poseedor contra la violencia ó ataques de hecho de un tercero, y como este fin queda cumplido con el amparo efectivo que le presta el magistrado, la ejecutoria tiene en ese mismo amparo su límite, y solo desnaturalizándola podría suponerse que por ella se reconocen ó pudieran quedar reconocidos derechos preconstituidos á la posesión ó á la propiedad de la cosa demandada. El alcance jurídico de las resoluciones en el posesorio lo establece La Serna en los términos siguientes, notables por su exactitud y claridad: las sentencias, dice, que en estos juicios se pronuncian— aunque definitivas, tienen un carácter especial, porque si bien condenan ó absuelven de la demanda intentada,— y no puede por lo tanto reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no impiden que se vuelva á tratar del mismo negocio en más amplio juicio, con más solemnes formas, con declaraciones que lleven, no el carácter interino y provisional del interdicto, sino estabilidad, permanencia, perpetuidad en los derechos que en el juicio se ventilen. Vienen por lo tanto á ser los interdictos unos juicios sumarísimos y preliminares de otros, en que con más prendas de acierto se aleguen, acciones posesorias; pero si usase de las acciones posesorias, podrá usar después la acción real. Esta reserva final no tiene limitación sustancial en cuanto al fondo del derecho, previniéndose únicamente que el petitorio no podrá tener lugar antes que la instancia posesoria haya terminado y después de haber satisfecho plenamente el demandado las condenaciones pronunciadas contra él—arts. 2484 y 2486.—Molitor, en su comentario al art. 26 del Código de Proc. Francés, que contiene disposiciones análogas á la citada del art. 2482, observa que ha sido justamente criticada en razón de que la pérdida de un derecho no debe presumirse, aunque pudiera, empero, contestarse en defensa del precepto, que intentar una acción petitoria, una reivindicación, presentarse como demandante, tomar sobre sí la carga de la prueba, es reconocer tácitamente que el adversario constituido de esta manera en reo, es el verdadero poseedor de la cosa. —Véase á Boitard sobre el art. 26 citado. Explicando Vinnio— Cuestiones selectas, tom. 2º—los motivos legales que obstan á la acumulación del juicio de interdicto con el juicio petitorio, dice, que del mismo modo que la posesión no tiene nada de común con la propiedad y que estas cosas son del todo diversas, siendo la posesión de hecho y el dominio de derecho, así también producen acciones no solo distintas sino



rio ni aun respecto de la posesión que en el primero se haya discutido. — Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser 4^a.

7. Cosa juzgada —El rechazo de la escepción de prescripción opuesta como artículo de previo pronunciamiento. y

insociables: el dominio, la reivindicación y la posesión son una acción personal, ó el interdicto y por consiguiente debe también tratarse de ellas en juicios distintos. En sus estudios concordantes de nuestro Código, Llerena, después de recorrer la doctrina de los espositores, se pregunta, qué efecto produce la sentencia en el juicio posesorio respecto al petitorio, opinando que en general ninguna, pues como decía una Corte francesa, las decisiones en el juicio posesorio no forman ni título ni cosa juzgada. No tratándose en aquel, agrega, de la propiedad sino de la posesión, la resolución sobre el primer punto en dicho juicio no puede servir de fundamento para rechazar después la acción de reivindicación, alegando cosa juzgada, aunque en dicha sentencia se reconociera algún derecho al demandante ó demandado. La misma doctrina ha sido declarada por la Corte Suprema Nacional en la causa XCV que se registra en la segunda serie de sus fallos. Suponiendo la acción reivindicatoria, que ha habido una violación del derecho de dominio y el consiguiente menoscabo del derecho de poseer la cosa, y siendo estas cuestiones extrañas al proceso sumario provocado por violencias materiales, no podría en manera alguna prejuzgarse sobre ellas en este último juicio sin manifiesta transgresión de los principios que se han enumerado y muy principalmente el que prohíbe acumular ó confundir el petitorio con el posesorio.

7—En el presente caso se resolvió la escepción de prescripción treintenaria opuesta en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento. Resuelta la articulación, se opuso después la escepción contra el derecho á ejecutar la sentencia recaída, por haberse dejado transcurrir el tiempo requerido por ley sin pedir la ejecución de la sentencia recaída en el juicio. Son dos escepciones bien distintas: la una es la de treinta años y la otra es la *actio judicati*, que surgió de la sentencia anteriormente dictada. Es evidente que si en la acción primitiva se opuso la escepción de prescripción treintenaria, al pedirse la ejecución de la sentencia puede oponerse la escepción de prescripción también de treinta años, puesto que la ley de Partida decía que se podía demandar aquella cosa que la sentencia mandaba cumplir, *fasta treynta años*, y que nuestro Código acuerda hasta veinte en virtud de la acción personal que nace de toda sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada.



discutida como cuestión de puro derecho. no hace cosa juzgada ni inhibe á la parte de oponerla en cualquier estado del juicio después de contestada la demanda. siempre que la prueba de su procedencia resulte justificada en autos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4ª.

8. Cosa juzgada.—Importando la cosa juzgada una novación del derecho que motivó la sentencia, la demanda sobre cumplimiento es una acción personal prescriptible en el término de treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, página 203, Ser. 4ª.

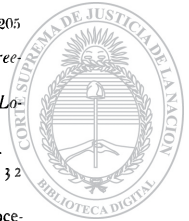
8—El caso fué juzgado con arreglo á las antiguas leyes. La 63 de Toro, que es la Ley 6ª, tit. 15, lib. 4º de Rec., señala el término de veinte años, como puede verse del comentario hecho por Llamas, tomo 2º, pág. 387. La Ley 19, tit. 22, Part. 3ª, se espresa en su parte final diciendo: «E aun dezimos que del juyzio que diesse *nasce demanda* a aquel por quien lo dieron de manera que pueda demandar aquella cosa fasta treynta años, a aquellos contra quienes fuesse dado el juyzio». En cuanto á que una sentencia importa una novación de los derechos en litigio, es doctrina sustentada por todos los tratadistas, y así puede consultarse á Alland, *Chose jugée*; Troplong, *Droit Romain*, tom. 6º; Duranton, tom. 13; Dalloz, *Chose jugée*. El ejercicio del *actio judicati* que sustituye á la acción primitiva estinguida por el pronunciamiento, es un derecho que nada tiene de común con aquel que motivó la resolución ó sentencia. Toda sentencia condenatoria, dicen Aubry y Rau, engendra una acción especial que tiene por objeto la ejecución de la condenación—tom. 8º, § 769.—Esta acción sólo se prescribe á los treinta años á contar desde la fecha de la sentencia, aun en el caso en que se trate de condenaciones pronunciadas en virtud de un crédito sometido á una prescripción más corta. Pero la prescripción treintenaria, una vez cumplida, estingue el pronunciamiento en todas sus partes, sin que haya lugar á distinguir entre las disposiciones susceptibles de ejecución y aquellas que no lo exigen. La naturaleza de la condenación judicial y de la acción que surge de ella, es siempre la misma, cualesquiera que sean los caracteres y la causa de la obligación en virtud de la cual la condenación ha sido pronunciada. *Non originem judicii spectandam, sed ipsum judicati velut obligationem*. El art. 4019 del Cód. Civ establece que todas las acciones son prescriptibles con las escepciones allí establecidas.

9. Cosa juzgada — El sobreseimiento provisional, no hace cosa juzgada y en consecuencia no basta para fundar una acción por daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querrela. Jur. Civ., tom. 9. pág. 294. Ser. 4^a.

Cosa juzgada Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 30 y 31 — *Excepción de cosa juzgada*, núm. 1 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 14 — *Excepción de nulidad*, núm. 1

9.—El art. 1003 del Cód. Civ. establece, que después de la absolución del acusado en el juicio criminal, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución. Pero la sentencia de la Cámara no fué propiamente tal, porque al dictarse no se estableció que no existía el delito imputado al querrellado, y ni siquiera ella importaba un sobreseimiento definitivo, pues en él no se hacía la declaración de que la formación de la causa no perjudicaba al buen nombre y honor del procesado como terminantemente lo dispone el art. 437 del Cód. de Proc. en lo Crim. El auto de sobreseimiento decía así: «de acuerdo con lo establecido en el artículo 435, inc. 1º del Cód. de Proc., sobreseése en la presente causa y devuélvase á sus efectos al Juzgado de su procedencia.» Esto quiere decir que ello no importa una sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada sino un simple auto de sobreseimiento. Este auto no importa declarar que el delito imputado no existió, ó que los hechos aducidos como fundamento de la querrela no constituyen un delito, porque si así fuese el sobreseimiento sería definitivo como lo dispone el art. 434 del Código de Proc., y contendría la declaración que prescribe el art. 437. Cuando el sobreseimiento se funda en el inc. 1º del art. 435, quiere decir que es meramente provisional porque los medios de justificación hasta entonces acumulados en el proceso, no eran suficientes para comprobar la perpetración del delito. Pero es manifiesto que si el querrellado se cree inocente, no debe conformarse con un auto provisional que no salva su buen nombre, pues ese auto no implica su absolución, ni que pueda interpretarse como que la querrela es calumniosa. Esta cuestión debe resultar de la prueba á producirse en el juicio civil, sin que pueda la parte considerarse exenta de la obligación de probarla, porque el sobreseimiento fué tan solo provisional, no causando instancia, y quedando el proceso siempre pendiente de ser continuado en cuanto se puedan allegar mejores pruebas.





— *Escrituración*, núm. 5—*Sentencia*, núm. 10—*Acreedor privilegiado*, núm. 1—*Liquidación*, núm. 5.

Cosa locada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18—*Locatario*, núm. 7—*Posesión*, núm. 14.

Cosa propia—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

Cosa vendida—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 3 2—*Comprador*, núm. 3.

1. Costas—La falta de prueba del actor, hace procedente su condenación en las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 299, Ser 3ª.

2. Costas—Cuando la revocación de una providencia

1—El actor debe comprobar su demanda—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—Y si no la comprueba, debe pagar las costas, pues como dice la ley 8, tit. 22, Part. 3ª: Los que maliciosamente, sabiendo que non han derecho en la cosa que demandan, mueven á sus contendores pleytos sobre ella, trayendolos en juyzio, e faziendolos fazer grandes costas, e misiones, es guisado, que non sean sin pena, porque los otros se recelen de lo fazer. E porende dezimos, que los que en estas maneras fazen demanda, ó se defiendan contra otro, non auiedo derecha razon por lo que deuen fazer, que non tan solamente deue el Judgador dar por vencido en su pleyto en el juyzio de la demanda, al que lo fiziere, *mas aun lo deue condenar en las costas que hizo la otra parte por razon del pleyto.*» Y más adelante agrega: «Empero, si el Juez entendiere, que el vencido se mouiera por alguna derecha razon, para demandar ó defender su pleyto, non ha porque mandar quel pechen las costas.» Es evidente que si hay ausencia completa de prueba de parte de un litigante, no puede jamás creerse que hubo derecha razon para demandar ó defender su pleyto.» Esto es lo que sucedía en el caso del sumario.

2—El Juez reconoció que el auto fue dictado por error, y haciendo uso de la facultad que le acuerda la ley 2, tit. 22, Part. 3ª, lo revocó por contrario imperio, no procediendo la condenación en costas, pues si el Juzgado pudo equivocarse al resolver erróneamente una cuestión, razón es esta para creer que no hubo ni malicia ni temeridad de parte del litigante. Si en el caso presente, la parte hubiese sido condenada en costas, se habría cometido una de las más grandes injusticias, pues se trataba de una ejecución iniciada por cobro de afirmados, habiéndola el Juez despachado favorablemente y luego volviendo sobre sus pasos

se hace de oficio, no procede la condenación en costas al peticionante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 16, Ser. 3ª.

3. Costas—La discusión de un punto de derecho, no

la revocó por contrario imperio, fundándose en el art. 4º de la ley de 26 de Octubre de 1881. La Cámara dió como fundamento para la no condenación en costas, la circunstancia de «haberse repuesto el juicio al estado de demanda.» Razón de pié de banco es ésta como muchas de las dictadas por la Cámara de lo Civil, la que de lo que menos se ocupa es de estudiar las cuestiones que se someten á su decisión. Hemos dicho que si se le hubiese condenado en costas al actor, se habría cometido la más grande de las injusticias, porque el auto revocado que declaraba la procedencia del juicio ejecutivo en estos casos, estaba perfectamente ajustado á la ley, mientras que la providencia revocándolo estaba en contra no solo de la ley, sino de la jurisprudencia sentada por la misma Cámara. Este último punto no pudo tratarse ante el Superior por cuanto la providencia de 1ª Instancia habría quedado consentida en lo principal, apelándose tan solo por las costas.

3—La Cámara dijo: «Se ha ventilado una cuestión de puro derecho con acopio de doctrina por una y otra parte, y aun suponiendo que fuera errónea la que instrúa el reclamo, no debe olvidarse que ella tenía su fundamento en disposiciones espresas de nuestro Código, las que si no amparaban directamente su acción, se prestaban no obstante á interpretaciones más ó menos serias. La mala fe no ha existido. Tampoco podrá objetarse que la cuestión presentaba una solución fácil y sencilla, pues lo contrario resulta de la naturaleza misma de dicha cuestión, y sin duda que así debió comprenderlo la misma defensa, dados los esfuerzos de argumentación que acusan sus exposiciones. Resulta que los vencidos han tenido razón probable para litigar ó los ha movido alguna derecha razón—Ley 8, tit. 22, Part. 3ª—Conceptos son estos que escluyen la temeridad y malicia, y consiguientemente no procede la imposición de las costas». Nos parece que esto es el verdadero criterio bajo cuyo imperio deben resolverse las cuestiones que se susciten sobre condenación en costas. Sus conceptos encuadran perfectamente dentro de las ideas emitidas por nosotros al estudiar otro caso resuelto por la Cámara de lo Comercial. Véase: verb. *Costas*, número 14, tom. 3 de la Inst. y su nota. Por tener relación con el punto resuelto en el sumario puede verse además verb. *Costas*, núms. 3 y 13, tom. 3, Inst.; verb. *Costas*, núm. 10, tom. 2 de la misma que está de acuerdo con el sumario que anotamos.





implica temeridad, y el vencido no debe ser condenado en las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 93, Ser. 3^a.

4. **Costas**—La condenación en costas, no es procedente contra el padre vencido en el juicio sobre privación de la patria potestad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 109, Ser. 3^a.

5. **Costas**—Su imposición no procede contra los herederos á los cuales no puede constar personalmente las obligaciones del causante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3^a.

6. **Costas**—La condenación en costas es procedente contra el tutor, siempre que deba exigírsele judicialmente la rendición de cuentas y éstas no sean aprobadas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 305, Ser. 3^a.

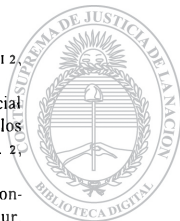
7. **Costas**—No justificada la acción, procede la conde-

4—El Juez de 1^a Inst. dijo que no encontraba mérito para la imposición de las costas, y la Cámara tuvo en consideración además la *calidad de los litigantes*. ¿A qué calidad se refiere la Cámara? Ella no lo dice, pero se supone.

5—La Cámara no resolvió este punto, solo dijo que debía exonerarse de las costas á la parte vencida, teniendo en cuenta las vacilaciones en asunto tan difícil, debiendo recordar que el heredero pudo negar la existencia de hechos que no le eran propios y que pudo poner en duda la autenticidad de documentos no otorgados por ella. Debe tenerse presente que el principio sentado en el sumario está de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara, la que se ha llevado á los extremos más deplorables, porque basta que el demandado sea un heredero para que se le exonere en las costas, aunque sea el litigante más temerario que jamás haya traspuesto las puertas de la justicia. Si el sucesor ignora los hechos sobre que versa la demanda, no puede imponérsele las costas, pero si se le prueba que tenía cabal conocimiento de ello, no hay razón alguna que autorice una exoneración de las costas. Puede consultarse sobre el punto resuelto en el sumario el tom. 3^o de la Instituta, verb. *Costas*, núm. 10.

6—El tutor fué forzado á la rendición de cuentas, produciéndose un voluminoso expediente, y si á esto se agrega que la rendición de cuentas no fué aprobada, se verá con toda claridad la justicia del sumario.

* 7— Véase el núm. 1.



nación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3^a.

8. **Costas**—La acción debe ser rechazada con especial condenación en costas, cuando el actor no justifique los hechos negados por el demandado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 91, Ser. 3^a.

9. **Costas**—Es procedente la condenación en costas contra el actor cuando el interdicto ha sido rechazado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 117, Ser. 3^a.

10. **Costas**—Procede la condenación en costas cuando resulta plenamente justificada la temeridad y malicia del demandante.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 294, Ser. 3^a.

11. **Costas**—Si el actor no justifica los extremos de su demanda, debe absolverse al demandado con especial condenación en costas al primero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 307, Ser. 3^a.

12. **Costas**—Su imposición no es procedente cuando el

8—Ley 1^a, tit. 14, Par. 3^o; y Ley 8^a, tit. 22 de la misma Part. Véase el núm. 1.

9—La imposición de las costas es de precepto legal en los juicios posesorios—arts. 578 y 583 del Cód. de Proc.

10—O del demandado.—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de nuestros Tribunales. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Costas*, núms. 3 y 10; tom. 3^o, núms. 15, 16 y 20; tom. 2^o, núms. 4 y 8; y tom. 1^o, números 626 y 652. Solo no procede la imposición de las costas aun habiendo temeridad o malicia cuando el contrario no lo solicita. Véase, mismo verb., tom. 4^o, núm. 11.

11—El actor no produjo prueba alguna durante el término, debiendo aplicarse la disposición del art. 221 del Cód. de Proc., y la Ley 1^a, título 14, Par. 3^o. Véase el núm. 1.

12—La demanda versó sobre cobro de daños y perjuicios procedentes de la inexecución de un contrato, estimados en 6800 nacionales. El demandado negó que hubiesen existido daños y perjuicios, rechazando los cálculos hechos por el actor, y no estando conforme, en todo caso, con la suma cobrada. La sentencia fijó los daños y perjuicios en



actor ha pedido más de los que á su derecho corresponde.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 379, Ser. 3ª.

13. Costas—El albacea está obligado á rendir cuenta de su administración y debe ser condenado en las costas del juicio si hubiese necesidad de exigírsele judicialmente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Serie 3ª.

14. Costas—Aun cuando el mandatario reconozca su obligación de rendir cuentas, debe ser condenado en las costas del juicio, si no lo verifica inmediatamente de serle exigido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

15. Costas—El pedido de diligencias en beneficio pro-

3800 nacionales, sin costas. Para exonerar de éstas al vencido, en contra de lo dispuesto en el art. 221 del Cód. de Proc. dijo, que la diferencia entre lo cobrado por el actor y la suma en que el Juez fijó el monto de la indemnización, es causal bastante para demostrar que el vencido tuvo razón derecha para litigar. Es el caso de escepción de la Ley 8ª, tit. 22, Part. 3ª que dice: «Empero, si el Juez entendiera que el vencido se moviera por alguna derecha razón para demandar ó defender su pleyto, non ha porque mandar quel pechen las costas». Es por esto que en la demanda por daños y perjuicios debe establecerse el monto de lo que se pide, ó el que el Juzgado en su criterio juzgue equitativo con arreglo á lo que resulte de autos. Así es como se ve de diario que los jueces condenan al vencido á una suma inferior de lo pedido, imponiéndole las costas al mismo, porque el actor se guarda bien de dejar la fijación del monto al recto criterio del magistrado. Puede verse el tom. 4º, Inst., verb. *Costas*, núm. 7.

13—Véase verb. *Albacea*, núm. 3.

14—El demandado dijo que las cuentas habían sido ya rendidas privadamente; que el juicio debía versar sobre ratificación de cuentas y que el plazo para la rendición era insuficiente. En esta defensa se pasaron ocho años. La Cámara fundada en estas circunstancias, le impuso las costas.

15—El comprador de un inmueble, después de habérsele otorgado la correspondiente escritura de transferencia, se presentó diciendo que había llegado á su conocimiento que el vendedor usaba un nombre distinto de aquel con que le había vendido la propiedad, y considerando



pio, hace procedente la condenación al pago de las costas y gastos en que hayan tenido que incurrir las demás partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 3ª.

16. **Costas**—La confesión del demandado sobre la existencia de un contrato verbal, exime de las costas al demandante aun cuando se rechace su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 322, Ser. 3ª.

17. **Costas**—La imposición de las costas es procedente contra el vencido siempre que su temeridad aparezca evidente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 103, Ser. 3ª.

18. **Costas**—No procede la condenación en costas cuando la jurisdicción depende de la exclusiva voluntad del que opuso la excepción.—Jur. Civ., tom. 3, página 48, Ser. 3ª.

prudente averiguar con certeza si los dos nombres correspondían á la misma persona, solicitó un comparendo verbal, el que se celebró efectivamente. Como se ve, no se dedujo acción alguna, no se atacó de falso el documento, y solo se quiso disipar una duda. A este efecto tuvo la otra parte que concurrir á los tribunales, asesorarse, y aun hacerse acompañar al juicio con un letrado. El Juez ordenó que se archivara el expediente, debiendo las costas ser á cargo del que promovió las actuaciones. Esta resolución es perfectamente arreglada á derecho, porque es regla general admitida por todos los autores, que todas las costas que se causaren en cualquiera diligencia que se ejecuta son á cargo y por cuenta de las persona que la piden. Lo contrario sería autorizar peticiones improcedentes de una parte en perjuicio de la otra: sería abrir la puerta á los abusos que bajo cualquier pretexto darían por resultado molestar arbitrariamente á quien se le diera la gana.

16—Porque con esto se demuestra que no se procedió con temeridad, siendo aplicable el precepto de la Ley 8ª, tit. 22, Part. 3ª, en la parte que establece la excepción á la regla general.

17—Véase el núm. 10.

18—Se opuso la excepción de incompetencia fundada en el carácter de extranjero del demandado y en el de argentino del actor—inc. 4º, art. 2º, de la Ley de 1863.—El principio es exacto tratándose de un juicio ordinario, más no lo es cuando se trata de un ejecutivo, la regla sufre una modificación. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Costas*, núm. 12.



19. **Costas**—La exageración de la suma demandada como indemnización, justifica la resistencia del demandado, y en consecuencia la exoneración del pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3ª.

20. **Costas**—Rechazada la ejecución, las costas son a cargo del ejecutante, aun cuando se hayan declarado improcedentes algunas de las excepciones opuestas por el ejecutado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 74, Ser. 3ª.

21. **Costas**—El mandante ó sus sucesores legales, no pueden ser condenados en el juicio seguido contra el mandatario sobre rendición de cuentas, aun cuando éstas sean aprobadas, mientras no se justifique que habían sido rendidas y aprobadas con anterioridad al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 124, Ser. 3ª.

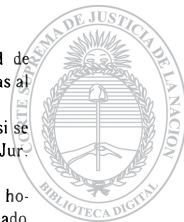
22. **Costas**—El Juez no está facultado para eximir de las costas al vencido en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Ser. 3ª.

19—Los daños y perjuicios fueron estimados por el actor en 31000 nacionales, habiendo el Juzgado fijado el término de 2000 para que aquel prestara juramento. La diferencia notable entre una y otra suma justificaba la resistencia del demandado. Además, esta resolución está de acuerdo con el núm. 12.

20—El art. 507 del Cód. de Proc. no admite término medio y declara que las costas son a cargo del que resulte vencido en último grado, con excepción de las correspondientes a cualquiera petición de la otra parte que haya sido desestimada. La sentencia de remate solo puede resolver una de dos cosas: llevar la ejecución adelante ó hacer lugar a la ejecución—art. 498.—En el primer caso las costas son a cargo del ejecutante, en el segundo del ejecutado.

21—No puede decirse: que haya, ni temeridad, ni malicia de parte del litigante.

22—Este sumario ha sido omitido en el índice de los fallos. El Juez no hizo lugar a la ejecución, exonerando de las costas al actor. La Cámara dijo, que el art. 507 se oponía a que el Juez hiciera uso de la facultad conferida por el art. 221 del Cód. de Proc. Véase el número 20.



23. **Costas**—Si el demandante justifica la verdad de los hechos alegados, procede la condenación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3ª.

24. **Costas**—Procede su exoneración al vencido, si se comprueba que no hubo temeridad de su parte.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 3ª.

25. **Costas**—La parte está obligada al pago de los honorarios, sin perjuicio de su derecho contra el condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 3ª.

26. **Costas**—No procede la condenación en costas, si la excepción es potestativa del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 137, Ser. 3ª.

27. **Costas**—Los albaceas carecen de personería para establecer demandas á nombre de la testamentaria, y deben ser condenados personalmente al pago de las costas de las que promuevan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Ser. 3ª.

23—De acuerdo con lo establecido en el art. 221 del Cód. de Proc.

24—Véase la nota del núm. 1. Esta resolución se dictó por mayoría de votos, estableciendo la misma el principio de que solo atendiendo motivos muy especiales puede eximirse al vencido en un juicio, de la responsabilidad que le impone el art. 221 del Cód. de Proc., y que la lectura de los autos hacía en su opinión evidente que el vencido no solo no habría tenido razón probable para litigar, sino que había procedido temerariamente. Sin embargo, la mayoría opinó de distinta manera y el vencido quedó exonerado de las costas.

25—Porque el contrato de locación de servicios crea relaciones directas entre locador y locatario, contrato que es para el vencido *res inter alios acta*. La sentencia fija las relaciones de derecho entre las partes litigantes, y el mandatario ó abogado que ha devengado honorarios en el pleito no son parte por derecho propio, sino que aquel lo es por representación. Véase: verb. *Abogado*, núm. 6; Inst., tom. 4, verb. *Honorarios*, núm. 7; y tom. 1º, verb. *Abogado*, núm. 5.

26—Véase el núm. 18; Inst., tom. 4, verb. *Costas*, núm. 12 y su nota donde consta la jurisprudencia uniforme observada por nuestros tribunales; puede verse además el núm. 21.

27—Véase: verb. *Albacea*, núm. 5.



28. *Costas*.—La excepción de prescripción opuesta por el demandado por acción reivindicatoria, hace procedente la exoneración de las costas al demandante vencido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

29. *Costas*.—La petición judicial de alimentos, importa temeridad en el obligado á pasarlos y en consecuencia procede su condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 89, Ser. 4ª.

30. *Costas*.—La condenación en costas, no es procedente contra el reivindicante vencido por prescripción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 396, Ser. 4ª.

31. *Costas*.—El escepcionante que no justifica la excepción, debe ser condenado en las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 420, Ser. 4ª.

32. *Costas*.—Reconocido por el demandado el derecho

28—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Costas*, núm. 649, y *Excepción de prescripción*, núm. 1072.

29—Si el padre no niega el carácter de tal, no debe esperar á que se le exija judicialmente el cumplimiento de su deber. Ocasiona gastos y debe pagar, con tanta más razón cuanto que la ley le obliga á suministrarlos bajo la denominación de litisexpensas.

30—La naturaleza de esta articulación previa, obsta al debate amplio del derecho en que la parte vencida funda sus peticiones, é impide toda recta apreciación sobre la legitimidad del derecho que no sea la excepción, sobre su extensión, su fuerza y sobre los recaudos probatorios que deberían de instruirla. No hay por consiguiente, una base segura de criterio para los Jueces, en el sentido de juzgar las razones probables que al vencido en la excepción podría asistirle para litigar en lo principal. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase el núm. 28.

31—La defensa alegada «no fué ni remotamente comprobada» dijo la Cámara, Ley 8, tit. 3, Part. 3ª; Véase: verb. *Costas*, núm. 1, tom. 4. Instituta.

32—El demandado negó en un principio los hechos alegados por el actor, pero después se celebró un juicio verbal en el que se convino que el Juzgado decretara una inspección ocular para verificar si eran ó no exactos los hechos, pues se trataba de construcciones peligrosas á



del demandante, las costas deben ser á su cargo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 426, Ser. 4^a.

33. Costas—Al demandante corresponde la prueba de la acción, si no la justifica debe ser condenado al pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 4^a

34. Costas—No procede la condenación en costas del poseedor con título vencido por resultar procedente la reivindicación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

35. Costas—El monto exagerado de la indemnización pedida, no basta para exonerar al demandado de las costas que forman parte del daño causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

36. Costas—El reivindicante que ha intervenido en la

la solidez del edificio contiguo, aseverado en la demanda, debiendo en el primer caso, ordenar que el demandado se colocara en las condiciones exigidas por la ley, y absolver al demandado en caso contrario: el Juez condenó á éste á ponerse en condiciones legales y le impuso las costas. La Cámara dijo que «si el derecho del actor es tan evidente que en ella ha convenido el mismo demandado, ¿á virtud de qué consideración se le podría exonerar de la condenación en costas, con los que por regla general debe cargar el vencido?»

33—Es principio general sentado por el art. 221 del Cód. de Proc., que solo sufre escepciones cuando hay fundados motivos para ello. Véase el núm. 1.

34—Véase los núms. 28 y 30. El vencido se encontraba en posesión de la cosa dada judicialmente, versando la discusión sobre cuál era el mejor título; de donde resulta que el vencido tuvo razón derecha para litigar sin que se le pudiese imputar ni temeridad ni malicia.

35—En contra de lo resuelto en los núms. 12 y 19: Inst., tom. 4, verb. Costas, núm. 7.

36—La Municipalidad fué vencida en un juicio reivindicatorio iniciado después de aprobada con su intervención una información sumaria ofrecida. La Cámara resolvió por mayoría de un voto, que la imposición de las costas era procedente: 1^o Porque es principio general establecido por el art. 221 del Cód. de Proc.; 2^o Porque la temeridad de la Municipalidad era manifiesta. La minoría dijo que el art. 221 del Cód. de Proc. autoriza á los magistrados á apreciar los casos en que



formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las costas del juicio por su evidente temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4ª.

37. **Costas**—Reconocido por el demandante la falta de personería alegada por el demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 4ª.

38. **Costas**—El reivindicante que no justifica los hechos invocados como base de su acción, debe ser condenado en las costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 290, Ser. 4ª.

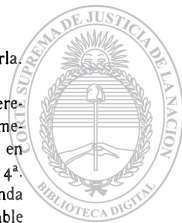
39. **Costas**—Si bien es regla general la condenación en costas al vencido, la ley faculta a los jueces para exonerarlo cuando no obstante la verdad de los hechos en

deben imponer las costas al vencido, que usando de esa facultad debía exonerársele en el caso presente por no podersele imputar temeridad al querer recuperar una cosa que consideraba pertenecerla, y porque la información producida había sido aprobada en cuanto ha lugar por derecho, cláusula que daba razón probable al vencido para litigar.

37—Se pidió el cumplimiento de un contrato de compraventa constante de un boleto, demandado el martillero, éste hizo presente que él había vendido por cuenta y orden de un tercero, según resultaba del boleto; entonces se presentó el actor diciendo que inmediatamente de conocida esta persona, no tenía objeto de seguir un juicio con quien carecía de personería, lo que revela según el criterio judicial «todo falta de temeridad ó malicia al promover la acción.» Hay una completa confusión de ideas aquí. No se trata de otra cosa sino de un desistimiento fundado en la falta de acción contra la persona demandada. El desistimiento trae aparejada la condenación en costas, de acuerdo con la ley, es por consiguiente equivocada la resolución de la Cámara. De acuerdo con otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Desistimiento*, núm. 1; en contra Inst., tom. 2, verb. *Costas*, núm. 11, *Desistimiento*, núm. 3.

38—Como todo litigante a quien se le pueda aplicar el art. 221 del Cód. de Proc. Véase el núm. 1.

39—La demanda fué rechazada por carecer de derecho el actor, y el Juzgado haciendo uso de la facultad que le acuerda el art. 221 del Cód. de Proc., lo exoneró de las costas, conceptuando que no había procedido con temeridad ni malicia, y por el contrario había tenido razón plausible para litigar—Véase la doctrina sentada en el núm. 1.



que se funda la acción, carece de derecho para ejercerla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 116, Ser. 4^a.

40. Costas—El desconocimiento, hecho por los herederos, de la obligación del causante, no importa la temeridad que la ley exige para imponer la condenación en costas al vencido.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 89, Ser. 4^a.

41. Costas—El demandado que al contestar la demanda se conforma con lo pedido por el actor, no es responsable de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 104, Ser. 4^a.

42. Costas—El vencido en el juicio ejecutivo debe ser condenado en las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 4^a.

40—Se trataba de la escrituración de un boleto firmado por el causante. Se ordenó la escrituración sin imposición de costas, las que no podían imponerse por que no se trataba para el vencido de hechos que le sean personales, lo que le faculta á exigir la comprobación de los hechos generadores del juicio, y en el caso especial resuelto, en atención á lo que el art. 1032 del Cód. Civ. dispone. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia establecida en casos análogos. Véase el número 5.

41—Conforme el demandado en cumplir con lo pedido en la demanda, desiste el actor, y pide se le condene en costas al primero. Aquí no procede esa condenación, en primer lugar porque él desistió de su demanda. Si hubiese dejado que se dictara sentencia quizá habría sido más viable su pretensión, pero no cuando hay desistimiento de su parte. El art. 221 del Cód. de Proc. parece que presupone una sentencia, y donde ella no existe no proceden las costas. Esta resolución está en contra de lo establecido en el núm. 32.

42—Véase el núm. 22. Se inició ejecución por la suma de 240,000 pesos nacionales: el ejecutado dijo que solo era deudor de 80,000 \$, y opuso excepciones de compensación, falta de personería en el actor y nulidad de la ejecución. Se declaró procedente la compensación, condenándose al ejecutado al pago de 70,000 nacionales, y no se hizo lugar á las otras dos excepciones. El Juez eximió al vencido de las costas y la Cámara se las impuso. «Ya se aplique la regla del art. 221 del Cód. de Proc., ya la disposición del art. 507, ya el principio consagrado en la ley 43, tit. 2, Part. 3^a, ya se ocurra á los antecedentes ilustrativos de la



43. *Costas*.—El vencido debe ser condenado al pago de las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 202, Ser. 4^a.

44. *Costas*.—Procede su imposición cuando resulte evidente la falta de razón que ha tenido el vencido para promover el juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 64, Ser. 4^a.

45. *Costas*.—No existiendo condenación en costas en la sentencia que condena al demandado al pago de daños y perjuicios, los honorarios y gastos del juicio no deben ser tenidos en consideración al fijar la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4^a.

46. *Costas*.—Tratándose de trabajos que deben ser jus-

jurisprudencia del Tribunal—Causa LXXII, tom. 2, Ser. 1^a—es siempre evidente que ha debido imponerse al demandante las costas.» Aquí el vencido en última instancia, como dice el art. 507, fué el ejecutante que exigió una suma mucho mayor de la que se le adeudaba.

43.—Véase el núm. 1. En el presente caso el actor desistió de su demanda, siendo evidente la obligación de pagar las costas. Véase el número 37.

44.—Véase el núm. 1.

45.—Dice la Cámara que los daños y perjuicios no se hallan comprendidos en el resarcimiento de pérdidas é intereses. Tienen una sanción especial, y no puede responsabilizarse por ellos al litigante sino en los casos de condenación decretada en el mismo pleito en que se han producido.—Está de acuerdo con un caso resuelto por la Cámara de lo Comercial. Véase Inst., tom. 3, verb. *Costas*, núm. 8. Puede verse en contra tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 18; aquí se permitió la inclusión de las costas causadas en otro juicio, á pesar de no haber habido en él condenación en costas.

46.—Presentado un litigante demandando una suma de dinero por servicios profesionales, el demandado dijo que la suma adeudada era inferior á la pedida y que estaba dispuesto á abonar lo adeudado. El actor dijo que no tenía inconveniente en aceptarla á fin de evitarse las protestas y los gastos de un pleito. El Juez sentenció mandando pagar la suma reconocida sin costas. La Cámara dijo que si el demandado no ha reconocido el hecho fundamental de la acción, si no ha tenido la oportu-

tipreciados por terceros, la conformidad del demandante con el precio reconocido por el demandado, no importa un desistimiento de la acción, que pueda hacerlo pasible de la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134. Ser. 4ª.

47. Costas.—La falta de justificación de los daños y perjuicios reclamados hace procedente el rechazo de la demanda con especial condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 147. Ser. 4ª.

48. Costas.—Las distintas rebeldías en que incurra el demandado después de contestada la demanda, no lo hacen pasible de la condenación en costas que la ley fulmina contra el declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 6, página 201, Ser. 4ª.

tunidad ni los medios legales para establecer la *plus petitio*, la condenación en costas no procede: esto decía la mayoría. La minoría fué de opinión que la actitud del demandante importaba un verdadero desistimiento de la demanda que fué promovida por una suma mucho mayor, y en tal caso, corresponde imponerle las costas de acuerdo con la jurisprudencia de los Tribunales—tom. 8, pág. 315, Ser. 1ª, Jur. Civ.

47—Procede el rechazo de la demanda, pues al actor le incumbe la prueba—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—y no comprobada su acción debe ser rechazada: en cuanto á las costas, su imposición procede de acuerdo con lo dispuesto en el art. 221 del Cód. de Proc.—Ley 39, tit. 2, Part. 3ª. Véase el núm. 1.

48—Los pronunciamientos de los jueces son diversos en ambos casos, ambas son situaciones previstas del derecho procesal, pero incuestionablemente distintas en la manera de producirse y en las sanciones positivas que aparejan. Cuando un demandado ha sido citado en forma y no comparece, ó abandona el juicio después de comparecer, es declarado rebelde para todo el pleito—art. 433, Cód. de Proc.—si la rebeldía es total y procede la aplicación del art. 434 en su última parte que declara á cargo del rebelde las costas del juicio. Si la rebeldía es parcial, como si no concurre á la citación para absolver posiciones, su consecuencia es muy distinta y no tiene más resultado que el de perder el derecho de que podía hacer uso el citado. Puede compararse los arts. 43, 127, 213, 433 y 434 del Cód. de Proc.





49. Costas.—La ignorancia del derecho, no excusa la temeridad que importa la falta de prueba, y corresponde la absolución del demandado con costas al actor.—Jur. Civ. tom. 6, pág. 315, Ser. 4ª.

50. Costas.—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidas en una sentencia inapelable son inapelables también.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 419, Ser. 4ª.

49.—El vencido quiso eludir el pago de las costas, diciendo que ignoraba el derecho, pues era almacenero; pero contra este argumento está el art. 923 del Cód. Civ.

50.—Es jurisprudencia de esta Cámara: sin embargo es un principio altamente injusto y peligroso, porque pone a los litigantes a merced de la conciencia ancha de jueces poco escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes. Una prueba evidente del peligro que entraña este principio la tenemos en el art. 1567 del Cód. de Com. que establece la inapelabilidad de las regulaciones que hacen de los honorarios del síndico; fué tal el efecto desastroso de este artículo que el clamor de los esquilados llegó hasta el Congreso, y este alto cuerpo se vió en la necesidad de dictar una ley especial, estableciendo la apelabilidad de las regulaciones. Si esto ha tenido que hacerse para contrarrestar los efectos desastrosos de la ley espesa ¿qué fundamento legalmente atendible puede aducir la Cámara para establecerlo en los casos que la ley no lo autoriza? No! esta es una jurisprudencia que no puede subsistir: su reforma se impone: lo reclaman los intereses en litigio; lo exige la moral, y lo impone una administración recta y honrada de la justicia. Es una heregia judicial: y lo extraño es que haya una Cámara que la sancione con su voto. Puede verse en el sentido del sumario, Inst., núm. 4, verb. *Honorarios*, núms. 5 y 6. Sin embargo esta misma Cámara ha entendido en apelaciones de esta misma naturaleza; así, por ante el Juzgado del Dr. Garay, Secretaria del Dr. Alcorta, en el juicio seguido por José M. Gonzalez contra Da. Gertrudis Teresa Cámaras sobre cobro ejecutivo de pesos, se dictó sentencia de transe y remate: interpuesta apelación por el fondo y por las costas, no se hizo lugar á lo primero por no haberse opuesto excepciones, y se concedió el recurso en cuanto á las costas. La Cámara entendió en el recurso y no se le ocurrió decir que la sentencia era inapelable en cuanto á la regulación. Puede ser que este sea el principio de la reforma de tan monstruosa jurisprudencia. Puede verse los argumentos aducidos en el tom. 3 de la Inst., verb. *Regulación de honorarios*, núm. 1.



51. **Costas**—Reconocida por el actor la procedencia de las escepciones opuestas, corresponde su condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 4^a.

52. **Costas**—No debe condenarse en costas al vencido, si la parte no lo solicita en la demanda.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 254, Ser. 4^a.

53. **Costas**—No procede la condenación si ninguna de las partes consigue lo que respectivamente pretendía.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 280, Ser. 4^a.

54. **Costas**—Procede la exoneración del vencido, si de autos no resulta que existió temeridad.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 292, Ser. 4^a.

55. **Costas**—No existiendo condenación, los honorarios de los peritos nombrados de oficio deben ser satisfechos proporcionalmente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 46, Ser. 4^a.

56. **Costas**—Siendo una carga impuesta al vencido, la

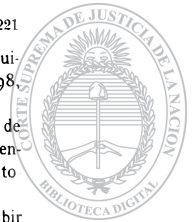
51—Alegó el actor que un error de derecho le indujo á deducir su acción ante autoridad incompetente, y que por consiguiente no había ni temeridad ni malicia para que hiciese procedente la imposición de las costas. No se hizo lugar á la exoneración por las mismas razones aducidas en el núm. 49.

52—La Cámara no dijo lo que expresa el sumario, solo resolvió no imponer las costas porque para que ella sea procedente es necesario que se solicite como lo dice claramente el art. 221 del Cód. de Procedimientos. No pidiéndose, no procede su imposición. Pueden consultarse los demás casos resueltos.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Costas*, número 11; tom. 3^o, mismo verbo, núms. 9 y 21.

53—El art. 221 impone las costas á la parte vencida: cuando ninguno de los litigantes consigue lo que demanda, no hay parte vencida.

54—Véase el núm. 1.

56—El punto principal y sobre lo que puede decirse versan las cuestiones de daños y perjuicios, es la responsabilidad atribuida al que los causa, lo que generalmente es negado por este: ahora bien, si se declara que el hecho es imputable al demandado, es de aplicación la regla de que al vencido le corresponde pagar las costas—art. 221, Cód.



exageración en la suma demandada por daños y perjuicios, no basta para eximirlo. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4^a.

57. Costas—Aun declarada procedente la escepción de falta de personería, no debe condenarse en costas al vencido, si no resulta evidente su temeridad. —Jur. Civ., tomo 8, pág. 301, Ser. 4^a.

58. Costas—El acreedor que ha dado fianza al recibir en pago el bien hipotecado, está obligado á la devolución en efectivo de lo que fué imputado á su deuda, pero no de los que se le adjudicó por costas y gastos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4^a.

59. Costas—Al actor corresponde la prueba de los hechos alegados; su omisión hace procedente la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 74, Ser. 4^a.

60. Costas—La condenación en costas contenida en

digo de Proc.—Además, las costas del juicio deben considerarse, en causas de esta naturaleza, como una consecuencia de los mismos hechos, y como parte del daño causado cuya obligación de reparar impone espresamente la ley, sin que pueda hacerse caudal de argumentación de la circunstancia de haber obtenido una indemnización menor de la reclamada por el vencedor, desde que en este caso corresponde al arbitrio judicial establecer su monto—art. 1083, Cód. Civ.—De acuerdo con el sumario véase el núm. 35; en contra los núms. 12 y 19. Véase además, Inst., tom. 4^o, verb. *Costas*, núm. 7.

57—La escepción fué originada por la interpretación variable que ha recibido el art. 1003 del Cód. Civ. hasta hoy; esta circunstancia aleja toda idea de temeridad ó malicia de parte del vencido.

58—El acreedor debe devolver lo que ha recibido, pero como los honorarios no los recibió, sino que con ellos pagó los gastos causidícos que son privilegiados, debiendo además tenerse presente que esos gastos los habría tenido que hacer el mismo acreedor de preferente derecho á quien se devuelve el dinero: de manera que vendría éste á quedar beneficiado con fondos de otro acreedor, lo que no sería equitativo.

59—Véase el núm. 1.

60—Véase el núm. 50.



una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civil, tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

61. **Costas**—La condenación en costas al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte.—Jur. Civil, tom. 9, pág. 125, Serie 4^a.

62. **Costas**—No procede la condenación en costas, si la sentencia no hace lugar á las pretensiones de demandante y demandado.—Jur. Civil, tom. 9, pág. 365, Serie 4^a.

63. **Costas**—El que desiste del recurso de revocatoria, debe pagar las costas.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 62, Serie 4^a.

64. **Costas**—Cuando el actor no deduce las acciones estrictamente legales que le corresponden, no procede la imposición de las costas.—Jur. Civil, tom. 4, pág. 31, Serie 4^a.

Costas—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Litispendencia*, número 1—*Peritos*, núm. 1—*Acción civil*, núm. 1—*Acciones criminales*, núm. 1—*Prueba*, núm. 14—*Daños y perjuicios*, núm. 9—*Honorarios*, núm. 14—*Escepción*

61—El Dr. Mendez Paz debió pagar las costas, las que eran á su cargo en carácter de Juez: la resolución que declara las costas á cargo de otro que no sea el patrocinado del abogado, nada tiene que ver con éste. Se encuentra en las mismas condiciones este caso que el número 25.

62—No hay parte vencedora ni vencida siendo inaplicable el principio general sentado en la primera parte del art. 221 del Cód. de Proc. Véase el núm. 53.

63—El incidente en este caso reconoce como única causal la culpa del desistente. Es principio constante que las costas son á cargo del que desiste.

64—Este sumario no está en la compilación, pero resulta del voto de la Cámara. Las acciones deben deducirse según resulte del estado actual de las relaciones de derecho con el demandado.



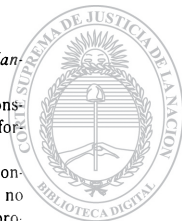
de pago, núms. 3 y 4—*Pago por consignación*, núm. 3
—*Rendición de cuentas*, núm. 17—*Abogado*, núm. 15—
Traslado para mejor proveer, núm. 1.

1. Cotejo—El informe de peritos calígrafos no forma prueba plena: el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desechar el dictamen pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Cotejo—Véase: *Perito*, núm. 4.

Crédito—Véase: *Testamentaria*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núms. 18 y 20—*Bienes de la sociedad*, núm. 1—

1—Esta resolución está en abierta oposición con el precepto claro é imperativo del art. 178 del Cód. de Proc. Allí se dice: «Siempre que los peritos tuviesen título y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas tendrán fuerza de prueba legal. En los demás casos, podrá el Juez separarse del dictamen pericial toda vez que tenga convicción contraria.» De manera, que en ese caso especialmente determinado su convicción contraria no lo autoriza á separarse del dictamen de los peritos. Pero la Cámara fundada en la opinión Tejedor, Escriche y Bonnier, se separa de la ley espresa, y acepta como base de su resolución la opinión de dichos prácticos. Esta argumentación sería conducente cuando se tratara de reformar la ley por la rama del Poder Público encargada de su reforma, pero no puede admitirse, cuando como ella, su rol se limita á aplicar las leyes. Si nuestros legisladores se han apartado de la opinión de estos tratadistas, deben haber tenido razones poderosas para ello, pero la Cámara no puede tomar en cuenta otro fundamento para sus resoluciones sino la ley, y solo á falta de ésta puede fundarse en la opinión de los prácticos. Es así como los derechos más inconcusos se convierten en dudosos y un litigante que se presenta ante nuestros tribunales amparado por la ley, se ve burlado en su derecho por resoluciones arbitrarias y atentatorias que convierten los pleitos en verdaderas loterías clandestinas. La Cámara se funda además para resolver la cuestión en el sentido del sumario en el art. 130 y en las demás disposiciones del capítulo III. Pero este artículo solo legisla respecto á la forma cómo debe procederse al cotejo, mas no legisla en manera alguna respecto á la fuerza probatoria del dictamen ó del resultado del cotejo. En el tom. 3^o de la Inst. se estudia detenidamente esta cuestión; véase verb. *Informe*, núm. 1.



Embargo, núms. 9 y 18—*Cesión de bienes*, núm. 1—*Man datario*, núm. 14—*Prelación*, núm. 1.

1ª. Crédito hipotecario—La cesión de este crédito cons tituido en escritura pública, debe hacerse en la misma for ma.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 4ª.

1. Crédito líquido—Cuando la ejecución se dirige con tra la testamentaria por crédito líquido, el ejecutante no está obligado a ejecutar á cada heredero por la parte pro porcional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4ª.

Crédito líquido—Véase: *Inhibición*, núm. 5—*Derecho de retención*, núm. 2.

Quasi delito—Véase: *Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 35, 92 y 113—*Acto administrativo*, núm. 1—*Acto ilícito*, núm. 9.

1ª. Cuenta—La recepción de una cuenta sin observarla dentro del término de un mes, implica conformidad por parte del deudor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 3ª.

2. Cuenta—Procede la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, si no se detalla la cuenta demandada. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 321, Ser. 4ª,

Cuenta—Véase: *Peritos*, núm. 1—*Cuenta presentada*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 6—*Afirmados*, núm. 3.

1ª. Cuenta corriente—La conformidad puesta al pié de

1ª—Art. 1184, inc. 9º, Cód. Civ.

1ª—Art. 86 del Cód. de Com.

2—Art. 71, inc. 3º del Cód. de Proc. Véase: *Detalle*

1ª—Sirvió de fundamento para esta resolución una vista fiscal del doc tor Rodríguez Bustamante, quien dijo: que así como no hay obligación sin conformidad prestada con arreglo á la ley, no hay contrato ni obli gación válida hecha por escrito cuando falta la firma del obligado ó contratante. La Ley de Papel Sellado, es muy general en sus térmi nos, gravando por el art. 1º con el impuesto de sellos á todo *acto, con trato, documento ú obligación*, sin que ella exceptúe del impuesto, á los balances ni á las cuentas corrientes entre particulares; en cuanto á las

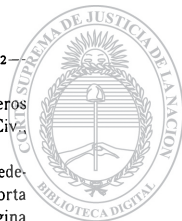


una cuenta corriente ó balance entre particulares está sujeta al impuesto de papel sellado, siempre que importe una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 12, Ser. 4^a.

2. **Cuenta corriente**—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 38, Ser. 4^a.

cuentas corrientes y balances bancarios hace escepción en el art. 26—Ley de 1889—y esta misma escepción confirma la regla general. A los efectos de la ley, la firma puesta por una persona al pié de una cuenta ó de un balance, significa que dicha persona reconoce un crédito en su contra y por consiguiente reconoce una obligación, debiendo por lo tanto ser gravada por el impuesto correspondiente.

2—Esta resolución está en abierta oposición con lo resuelto en número precedente. En ambos casos las sentencias se fundaron en la opinión del Fiscal de las Cámaras. En ambos casos los Fiscales y Jueces inferiores resolvieron que las cuentas estaban sujetas al pago del impuesto. La resolución de este sumario lleva la fecha de 26 de Noviembre de 1891, y aquélla la de 1^o de Oct. del mismo año: dos resoluciones contradictorias con dos meses de intervalo. El Dr. Cortés decía al fundar su opinión, la que sirvió de base á la resolución de este sumario, que según el art. 26 de la Ley de sellos de 1991, las cuentas corrientes de los bancos están sujetas al impuesto de uno por mil. En el movimiento de esas cuentas también se las grava con otro impuesto, pues los cheques deben llevar una estampilla. Si se agrega á estos impuestos un medio por ciento trimestral sobre el saldo que esas cuentas arrojen, obedeciendo al precepto del art. 793 del Cód. de Com., sería recargar de una manera considerable esta clase de operaciones comerciales, y recargarlas por un acto interpretatorio de la ley, pues no se encuentran categóricamente comprendidas en el art. 1^o de la Ley de Papel sellado. Las cuentas corrientes pasadas trimestralmente son accesorias del contrato de cuenta corriente estipulado entre el particular y el banco, y estando grávada la operación principal, debe quedar exenta la accesoria, mucho más cuanto esta no está gravada con un impuesto de una manera clara y espresa. Es por otra parte necesario interpretar restrictivamente los impuestos y mayormente los actos mercantiles de esta naturaleza que son los que dan vida al comercio.



Cuenta corriente—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 2—*Prescripción liberatoria*, núm. 1.

1. **Cuenta particionaria**—Aprobada ésta, los herederos tienen derecho á retirar su parte de herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 3ª.

2. **Cuenta particionaria**—Su aprobación por los herederos y legatarios, sin reserva alguna de derechos, importa la de cada una de sus partidas.—Jur. Civ., tom. 4, página 145, Ser. 3ª.

3. **Cuenta particionaria**—Siempre que existan intereses encontrados entre el padre y los hijos, debe nombrarse tutor especial para la revisión de la cuenta particionaria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 179, Ser. 4ª.

4. **Cuenta particionaria**—La sentencia que no hace lugar á su aprobación, debe ser fundada con arreglo á la ley: si no se llena ese requisito es nula.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 262, Ser. 4ª.

5. **Cuenta particionaria**—El derecho de los coherederos

3—Art. 397, inc. 1º, Cód. Civ. Esta facultad deben ejercitar los jueces con suma prudencia y solo en caso de ser evidente la oposición entre los intereses del padre y del hijo. Véase: *Inst.*, tom. 2º, verbo *Tutor especial*, núms. 1 y 2.

4—Siendo definitiva sobre el incidente que la motiva, debe contener los fundamentos en cuyo mérito se deniega la aprobación.

5—El caso cae bajo el imperio de la antigua legislación. El punto de partida fué una sentencia que ordenó «se procediera á levantar la cuenta particionaria de los bienes mortuorios, por los contadores que nombrasen las partes, trayéndose á colación las sumas que hubiesen recibido los herederos á cuenta de su herencia y consten de autos ó se hiciese constar en bastante forma.» Después de este fallo no se provocó por los herederos las medidas legales tendentes á su cumplimiento y ejecución, dejando pasar más de 40 años: de manera que la prescripción se había operado, á menos que los derechos de ella emergentes fuesen imprescriptibles, lo que no se admite en derecho, como puede verse en el verbo *Cosa juzgada*, núm. 8.



para exigir su formación colacionando los bienes recibidos por partición estrajudicial se prescribe por la inacción durante treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

6. Cuenta particionaria—Aprobada ésta, los herederos aun menores, solo podrán disponer de la parte adjudicada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 66, Ser. 4^a.

Cuenta particionaria —Véase: *Contador*, núm. 1 —*Indivisión*, núm. 2.

1^a. Cuenta presentada.—Por el actor, si bien justifica la verdad de los hechos y la fecha en que tuvieron lugar, no prueba su inacción, y en consecuencia no puede tenerse como el documento auténtico del cual resulta probada al escepción de prescripción.—Jur. Civ., tom. 1, página 245, Ser. 3^a.

Cuentas.—Véase: *Empédrados*, núms. 1, 2 y 3—*Intereses*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 13.

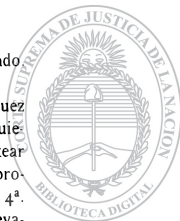
Cuerpo general de bienes—Véase: *Herencia*, núm. 4.

1^b. Cuestiones—Las que no han sido planteadas en la

6—Hecha la cuenta particionaria y aprobada, el representante de un menor pidió que de los fondos que quedaron como comunes de la sucesión se estrajese una parte para hacer las cloacas en una propiedad adjudicada á su pupilo: no se hizo lugar porque se consideró que no había razón para que se emplearan fondos comunes cuando los tenía propios el menor, máxime cuando esos fondos iban á ser empleados en beneficio esclusivo de éste.

1^a—El documento presentado por el actor y en el cual el demandado fundaba su escepción, era una planilla en la que se consignaba el número de unas mensualidades que se reclamaban, la que sin duda no se presentó con otro objeto que el de precisar la cantidad que dichas mensualidades importaban. Es evidente que de ellas no puede resultar, ni el silencio, ni la inacción del acreedor por el tiempo que la ley exige para que la prescripción se opere.

1^b—Las cuestiones deben ser traídas oportunamente al debate, ya sea al entablar la demanda ó al contestarla, á fin de quedar trabado el cua-



litiscontestación, no deben ser resueltas por el Juzgado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 194, Ser. 4^a.

2. **Cuestiones**—Discutidas varias cuestiones, el Juez debe resolverlas separadamente, aun cuando por cualquiera de ellas resultase el rechazo de la acción, debe plantear y resolver las demás para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre ellas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 23, Ser. 4^a.

3. **Cuestiones**—De puro derecho, el término para evacuar el traslado en estas cuestiones, solo empieza á correr desde que el espediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4^a.

Cuestiones—Véase: *Arbitros*, nums. 1 y 2—*Sentencia*, núm. 9—*Contrato*, núm. 19.

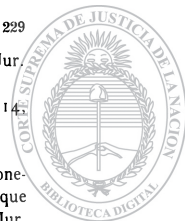
Culpa—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2, 8 y 10—*Daños y perjuicios*, núms. 46, 51, 71, 77, 95, 99, 101, 111 y 113—*Seña*, núm. 5—*Indemnización*, núm. 9—*Agravio moral*, núm. 1.

1. **Culpa ó negligencia**—La omisión por parte de los empleados subalternos de una empresa de trasportes, de precauciones establecidas por disposiciones vigentes, importa culpa ó negligencia, y hace recaer sobre ella la res-

si-contrato de litiscontestación. El art. 216 del Cód. de Proc. dice, que la sentencia definitiva debe contener decisión expresa y positiva, *con arreglo á las acciones deducidas en juicio*.

2—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc. — La jurisprudencia establecida sobre este punto no es uniforme. Véase: Inst., tom. 3^o, verbo *Cuestiones*, núm. 2. Es necesario distinguir si las cuestiones son principales ó de detalle, pues en este último caso, su omisión no causaría nulidad de la sentencia. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Sentencia*, número 6.

1—Arts. 1066, 1067, 1069, 1076, 1109 y 1113 del Cód. Civ.—El sumario est.: de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Ferrocarril*, núm. 2; *Ferrocarriles*, núm. 1, y *Daños y perjuicios*, núm. 21; tom. 2^o, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.



ponsabilidad del daño que sufran los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 4^a.

Culpabilidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10, 14, 15 y 16.

Culpable—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 67.

1^a. Cuota alimenticia—La madre natural tiene personería para gestionar y percibir la cuota alimenticia sin que sea necesario el nombramiento de tutor especial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

Cuota alimenticia—Véase: *Personería*, núm. 8—*Alimentos provisionarios*, núm. 3.

Cuotas—Véase: *Empedrado*, núms. 1 y 2—*Adoquinado*, núm. 3—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 13.

Curaciones—Véase: *Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

1^b. Curador—Tiene derecho á cobrar comisión por la administración de sus bienes, aun cuando sea heredero y pariente del causante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 123, Serie 4^a.

1^a—La madre ejerce sobre sus hijos menores de edad la patria potestad—art. 328 del Cód. Civ.—En este carácter puede recibir las sumas necesarias para vestir y alimentar á sus hijos, lo que verdaderamente no constituiría un acto de administración sino el cumplimiento de sus deberes impuestos por la naturaleza á su carácter de madre. Si la ley le impone el deber de alimentar á sus hijos cuando tiene medios de hacerlo, con el mismo derecho debe recibir los fondos cuando ella no pueda suministrarlos.

1^b—El art. 475 del Cód. Civ. establece que son aplicables á la curatela los principios que rigen para la tutela, y el art. 451 dice, que los tutores tendrán una comisión por la administración de los bienes de sus pupilos, sin hacer distinción alguna cuando ejercen la tutela los hermanos ó el abuelo del menor. Es de notarse además que á los mismos padres que ejercen la patria potestad y que son los administradores de los bienes de sus hijos menores, la ley les acuerda el usufructo como una compensación á sus cuidados y trabajos. No hay razón pues para privar al curador, por el hecho de ser pariente, del derecho que la ley le acuerda á la comisión devengada en el desempeño del cargo.



2. Curador—El nombramiento del curador de un insano, solo puede recaer en un extraño, cuando existen causas graves que inhabilitan á los parientes llamados por la ley para ejercer el cargo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 173, Ser. 4^a.

3. Curador—La presentación de herederos, aunque no declarados, hace cesar la intervención del curador de la herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 379, Ser. 4^a.

4. Curador—Especial, si existe oposición de intereses entre el esposo y la esposa insana, procede el nombramiento de curador especial hasta la solución del conflicto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 221, Ser. 4^a.

5. Curador—De la herencia, carece de facultad para reconocer deudas contra la testamentaria, mientras no se encuentren plenamente justificadas.—Jur. Civ., tom. 3, página 417, Ser. 4^a.

2—Arts. 391, 397 y 475 del Cód. Civ.

3—El art. 688 del Cód. de Proc. dice, que cuando ningún pretendiente se presentase, la sucesión se reputará vacante, y el art. 689 ordena que en este caso se nombre un curador á la herencia. Debe tenerse presente asimismo lo que dispone el art. 692.

4—Todo esto sin perjuicio del derecho que más tarde puede ejercer el marido respecto de la curatela definitiva. El peligro que corrían los bienes de la esposa si se nombraba curador de ella al esposo, era evidente á los ojos del Tribunal: la oposición de intereses era notoria, siendo consiguientemente aplicables las facultades concedidas por la ley á los jueces. El art. 475 declara que son aplicables á la curatela los principios que rigen para la tutela. El art. 391 establece que el Juez no conferirá la tutela sino al que por sus bienes ó buena reputación fuese idóneo para ejercerla, quedando esta calificación al arbitrio del Juez. El art. 1293 es aplicable al caso por analogía, como asimismo el art. 397, cuyo inc. 1^o faculta al Juez á nombrar tutor especial cuando los intereses de los menores están en oposición con los de su padre, bajo cuyo poder se encuentran. Parece que esta resolución estuviese en contra de lo que se registra en el tom. 2^o de la Inst. verb. *Insania*, núm. 1; pero allí no había como en el caso del sumario oposición de intereses.



Curador—Véase: *Bienes*, núm. 6—*Rendición de cuentas*, núm. 7—*Insano*, núm. 1.

1^a. Curadora—La madre á quien se ha nombrado y discernido judicialmente el cargo de curadora de todos sus hijos, tiene legalmente la representación de éstos aun cuando no hubiesen sido incluidos en el auto de declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13. Serie 4^a.

Curia eclesiástica—Véase: *Información ad perpetuam*, núm. 1.

1^b. Chancelación —No procede la de un censo capellánico, mientras no se justifique plenamente el derecho de los que prestan su conformidad como patrones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 76, Ser. 3^a.

2. Chancelación—De cuentas, sin salvedad, importa que ella fué total y no parcial, y que comprendió todos los derechos anteriores á su fecha.—Jur. Civ., tom. 7, página 358, Ser. 3^a.

1^a—El nombramiento tuvo lugar antes de la vigencia de nuestro Código Civil, y fué hecho comprendiendo tanto á los hijos declarados como á los no declarados herederos: luego tiene la representación de todos ellos.

1^b—Véase *Censo capellánico*, núm. 1.

2—Una liquidación de negocios debe presumirse general cuando del mismo acto no resulta ser meramente parcial. Si se pretende que ella fué parcial, la prueba incumbe al que va contra la presunción natural, es decir, al que alega que no fué sino parcial.



Dador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1^a. Damnificado—Por la violación de domicilio, tiene personería para gestionar la indemnización aun cuando él no sea el propietario ó su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

Damnificado—Véase: *Acto ilícito*, núm. 9.

Daño—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1 — *Costas*, núm. 35.

1^b. Daños y perjuicios—La acción de daños y perjuicios fundada en un embargo indebido, es improcedente, si el demandado como responsable no lo solicitó, y si llevado

1^a—Un socio de un club que fué allanado sin orden de autoridad competente, demandó á un comisario, por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados á él personalmente con motivo de la violación de domicilio, daños y perjuicios que le fueron ocasionados en su persona é intereses, tomándolo y deteniéndolo después del allanamiento. Es evidente que á pesar de que la casa del Club no le pertenece á él solo, tiene los derechos que le confiere su carácter de socio y consiguientemente es de aplicarse el art. 1079 del Cód. Civ.

1^a—El que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un perjuicio á otro está obligado á su reparación. El que no solicitó un embargo que ha sido trabado, no puede consiguientemente ser responsabilizado por sus consecuencias—arts. 1109 y 1111 del Cód. Civil.—Fundada en estas disposiciones del Código, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 3^o, verbo *Daños y perjuicios*, núm. 9; tom. 2^o, mismo verbo, núm. 20.



á efecto no se opuso á su levantamiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 187, Ser. 3^a.

2. **Daños y perjuicios**—Esta acción fundada en un embargo preventivo indebido, es improcedente contra el Juez, mientras no se pruebe la irresponsabilidad del que lo obtuvo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3^a.

3. **Daños y perjuicios**—La falta de prueba sobre el valor de éstos, permite á los jueces la fijación de la suma dentro de la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

4. **Daños y perjuicios**—El embargo indebido hace responsable, al que lo pidió, de los daños y perjuicios causados ya sea á un tercero, ya al mismo ejecutado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

5. **Daños y perjuicios**—La responsabilidad del padre por los que causen sus hijos menores, procede aun respecto de aquellos que no habitan con él, siempre que no se en-

2—La Cámara solo dijo que «el embargo decretado á solicitud y bajo la responsabilidad de la parte, no autoriza una demanda directamente contra el Juez que lo dictó, que en último caso solo podría ser responsable subsidiariamente.» Esta opinión está en contra de los principios sentados por nuestro Código, pues en estos casos quedan obligados en los términos del art. 1109 del Cód. Civ., según el cual es aplicable á los hechos ilícitos que no son delitos el art. 1081 que establece la solidaridad para los casos á que se refiere contra todos los que han producido ó cooperado al delito. Véase, Aubry y Rau, núm. 446, párrafo 4^o.

3—Siempre que la existencia de los daños y perjuicios estuviese legalmente comprobada, aunque no su monto, como lo establece el artículo 220 del Cód. de Proc. y es jurisprudencia constante.

4—Art. 1109 del Cód. Civ.—Aubry y Rau, cuyas opiniones sigue el Codificador, dicen que un hecho aun cuando sea perjudicial á otro é imputable á su autor, no constituye un *cuasi-delito*, hecho ilícito que no es delito, sino en cuanto ha existido de parte del último, ó una falta positiva, ó por lo menos negligencia ó imprudencia—párrafo 446, tomo 4^o.

5—Arts. 1114 y 1115 del Cód. Civ.



cuentren bajo la vigilancia y á cargo de otra persona.—
Jur. Civ., tom. 2, pág. 29, Ser. 3ª.

6. Daños y perjuicios—Aun cuando se declare proce-

6—El art. 478 del Cód. de Proc. faculta al acreedor para solicitar el embargo de bienes siempre que se hallen en poder del deudor. Este hecho constituye el ejercicio de un derecho legítimo y por consiguiente no puede dar lugar á una demanda de daños y perjuicios, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1071 del Cód. Civ. No comprobándose los extremos de los arts. 1067 y 1109, la indemnización no procede. Este fué el fundamento del voto de la mayoría, formada por los doctores Gimenez y Sauze, siendo el primero quien fundó su voto y el segundo se adhirió á él. Los fundamentos del voto del Dr. Gimenez fueron en cuanto á los hechos enunciados, tergiversando por completo las constancias de autos y suprimiendo hechos de gran trascendencia para la resolución de la cuestión. Ese fallo no es el fruto de un criterio recto é imparcial. Es por esto que la minoría calificó el voto del doctor Gimenez como «el colmo de lo absurdo en derecho y en justicia», lo que es todo lo que puede decir del fallo de un Tribunal de la Capital de la República. Este Camarista declaró que el embargante no era responsable por haber embargado valores por la suma de 150.000 pesos oro sellado para responder á un crédito que no pasaba de 2.000 pesos moneda nacional de curso legal. ¡Qué justicia la de nuestro país! Esto es como decía otro Camarista al fundar su voto en otro caso, «conculcar los principios más sagrados de la justicia, y desconocer los axiomas más elementales del derecho.» Para darse una exacta cuenta de la injusticia del voto del Dr. Gimenez, será necesario esponer los antecedentes de la cuestión para después deducir el derecho que de ellos surge. Las antiguas y sabias leyes de Partida contienen una disposición, consagrada por la jurisprudencia universal y encerrada en aquel principio de estricta justicia de *sua culpa culpa nocet*. La Ley 6ª, título 15, Part. 5ª, prescribe la obligación de reparar el daño por aquel que lo ha causado, aunque no lo hubiere causado á sabiendas, con estas testuales palabras: «tenudo es de fazer emienda; como quier que él non fizo a sabiendas el daño al otro, pero acaesció, por su culpa.» Esta prescripción basada en los principios de derecho Romano, ha sido incorporada á nuestra actual legislación civil; se contiene también en el Código que redactó para España el doctor Goyena y está en armonía con la de varios otros códigos extranjeros, como el Francés, cuyos arts. 1382 y 1383 concuerdan con el primero. Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está



dente la tercería, el ejecutante no es pasible de los daños

obligado á la reparación del perjuicio, dice el art. 1109 del Código Civil, concordando en esta disposición con la Ley de Partida y la de los artículos del Código Francés citado. No hay para que entrar en la demostración de la filosofía que encierra este artículo. Basta saber que, según sus propios términos, aunque el hecho que ha causado el daño no pueda elevarse á la categoría de un delito de derecho criminal y sea tan solo el resultado de una simple negligencia, existe por parte de su autor la obligación de repararlo. Esto es de estricta equidad y justicia, por aquel principio de que la culpa ó negligencia no debe perjudicar sino á su autor, en que se basa la ley. Se trata del caso siguiente: se demandó ejecutivamente por cobro de mil setecientos ochenta y dos pesos con quince centavos. No pudiendo conseguir su pago del deudor, se dirigió la acción contra el fiador del mismo, haciendo embargar, como de su propiedad, un establecimiento de campo, embargándose también las haciendas vacunas, lanares y yeguarizas que en él se encontraban en cantidad de dos mil las primeras, dos mil las segundas y ciento nueve las terceras, entre mulas, caballos y yeguas. Así constaba de la diligencia del embargo respectivo, como constaba también que ese embargo fué ordenado por el Juzgado de 1.^a Instancia de esta Capital á cargo entonces del señor Vocal doctor Sauze, á solicitud del ejecutante. Es de advertirse que al denunciarse el embargo por el actor, del establecimiento mencionado, manifestó que no sabía ciertamente—fueron sus palabras—si ese establecimiento era del ejecutante, en condominio con otro, ó si estaba exclusivamente á su nombre y que el campo tenía un área poco más ó menos de mil cuadradas. Este embargo fué levantado posteriormente por haber depositado el ejecutado los fondos necesarios para el pago del crédito de que era deudor como fiador, y es el que motivó la demanda interpuesta contra el ejecutante, pidiendo se le condenara al pago de daños y perjuicios que decía haberle causado impidiendo la venta de aquel establecimiento que tenía en trato. El que embarga una cosa ajena como de su deudor, es responsable de los daños que este hecho pueda irrogar y esta responsabilidad no puede escusarla, ni menos justificarla, la circunstancia de que la cosa era ajena, mucho más cuando como en el caso del sumario el ejecutante tenía motivos para saber á quién pertenecía la propiedad denunciada á embargo, y cuando aparecía de su propia manifestación que abrigaba duda, es decir, que no sabía ciertamente si estaba en condominio ó éste era esclusivo. Lo contrario importaría dejar establecido que cualquiera puede entablar la más insignificante ejecución y denunciar como bienes de su deudor, va-

y perjuicios si los bienes embargados se encontraban a cargo del ejecutado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 3ª

liosos intereses, hacerlos embargar, sacarlos de la administración que ellos tengan, causando de esta manera inmensos daños y librarse después de toda responsabilidad con solo decir, que había ignorado que pertenecieran á un tercero y que no había procedido con dolo, lo que sería el colmo de lo absurdo en derecho y en justicia. No es necesario que proceda con dolo el que tal daño causa, para responsabilizarlo. En este caso se habría cometido un verdadero delito, ejecutando, á sabiendas y con intención de dañar un acto reprobado que tiene una sanción penal distinta. Basta que haya negligencia en el que ejecuta un hecho que ocasiona un daño, para que esté obligado á la reparación del perjuicio, dice la ley, sin que sea necesario que aparezca su intención dolosa; y en el caso presente, no solo ha habido negligencia, sino que hasta puede decirse, que se ha procedido con temeridad al pedir el embargo de todo un establecimiento valioso, arrancando, por medio de la acción judicial, la posesión que tenían sus dueños, para garantir un crédito de mil setecientos ochenta y dos pesos. Esto es tan evidente, que hace innecesaria toda demostración en presencia de la relación de los bienes embargados, que espresaba la diligencia ya citada, y el importe del crédito cuyo pago perseguía el ejecutante. Este debió tener presente, que para asegurarse el pago de su crédito, era suficiente denunciar una parte de los bienes que consideraba pertenecer á su deudor; debía tener presente también el orden establecido por el Cód. de Proc. para el embargo; debió considerar, en fin, que era de su deber averiguar antes si esos bienes le pertenecían, para evitar un daño y exonerarse de la responsabilidad en que podría incurrir. Ha habido entonces negligencia, cuando menos, en la ejecución del hecho que se discute, y si ese hecho ha causado el daño que se demanda, debe repararlo el que lo ha ocasionado. Las pruebas producidas por el actor acreditaban que el demandado tenía pleno conocimiento de que la propiedad que denunció y que fué embargada, no pertenecía al ejecutado sino á un tercero. A lo espuesto debemos agregar la jurisprudencia invocada por el actor y que encontramos de aplicación. La Suprema Corte de Justicia Nacional en la causa citada, en la que se trató como en ésta de la responsabilidad del daño causado por un embargo de bienes que no correspondían al deudor, al confirmar la sentencia del Inferior por los fundamentos, dejó sentado «que es un principio universal de derecho y sanción de nuestras leyes, que todo aquel que por su hecho y sin derecho, causa daño á otro, aunque no haya procedido con temeri





7. Daños y perjuicios—Esta demanda es improcedente mientras no se justifique la existencia del acto ilícito punible y la del dolo, culpa ó negligencia del agente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 55, Ser. 3ª.

8. Daños y perjuicios—Declarada por sentencia ejecutoriada la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, basta á los efectos de la ley, la justificación de los sufridos por parte del damnificado como consecuencia del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 81, Ser. 3ª.

9. Daños y perjuicios—Reconocida por el obligado la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, aunque se alegue imposibilidad material, debe ser condenado á cumplirla, ó en su defecto, al pago de los daños é intereses y las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 142, Serie 3ª.

10. Daños y perjuicios—Corresponde al damnificado la

dad y malicia, está obligado á repararlo y que esta obligación pesa sobre el que pide un embargo que se lleva á cabo, bajo su responsabilidad, fuera de los límites en que estuvo autorizado á pedirlo.»

7—Véase: *Acto ilícito*.

8—Se trataba de ejecutar una sentencia que había declarado el derecho que tenía el propietario limitrofe para demoler la pared divisoria haciendo responsable á la parte que se opuso, por los daños y perjuicios ocasionados. La obligación de reparar éstos á los que se refiere el art. 1109 del Cód. Civ., fué resuelta en 1ª Instancia, reservándose la fijación para otro juicio, que es del que se trata—art. 219, Cód. de Proc.—Esos perjuicios comprenden todos los determinados en el artículo 1069 del Cód. Civ.

9—El propietario de un inmueble firmó boleto privado de compraventa á uno, y escrituró el mismo terreno á otro. La Cámara dijo que esa circunstancia no constituía una imposibilidad material, puesto que podría readquirirlo para entregarlo después al primer comprador. En cuanto al derecho de exigir los daños y perjuicios, se funda en el artículo 1187 del Cód. Civ.

10—Una mujer en momentos de atravesar la calle fué atropellada por un coche que venía á todo trote por la avenida Alvear. A esa hora los



prueba de la culpa ó negligencia del demandado, para que

dueños de carruages corren carreras al trote á fin de exhibir la superioridad de los troncos que los conducen. El cruzar aquella avenida se hace imposible á esa hora. Dicha mujer pretendió cruzarla y uno de los coches la llevó por delante. Se trataba de un hecho ilícito que no es delito: en este caso es necesario, para que el agente sea pasible de daños y perjuicios, que se le pueda imputar culpa ó negligencia, y si esto no se comprueba desaparece la responsabilidad por las consecuencias del hecho. Es principio general, que la prueba incumbe al actor—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª—En el caso presente sucedía lo propio, pues la demandada imputaba la culpa ó negligencia al demandado, á lo que éste contestó que si existió culpa ó imprudencia, ella debía imputarse á la actora por su temeridad al atravesar la calle en momentos que estaba llena de carruages en movimiento. Negados los hechos correspondía su justificación al actor, pues el dolo, la culpa y la negligencia no se presumen, ni su imputación al agente del hecho aparea la obligación de su parte de establecer una prueba negativa. Para que aquella presunción existiera, sería necesario que se hubiese violado una ordenanza municipal ó policial de parte del demandado, circunstancia que no se alegó ni justificó, y por consiguiente en ausencia de tales condiciones, la prueba del hecho corresponde exclusivamente á quien lo afirma. Y aún dado el caso de que la prueba incumbiera al demandado, aquí la imprudencia y la temeridad de la víctima quedaban comprobadas. Debe tenerse presente que el hecho acaeció en momentos en que los innumerables carruages que se retiraban de Palermo llenaban la calle, cruzándola á todo trote, así se comprende que solo una grave imprudencia pudo inducir á la víctima á atravesar la calle en esos momentos. Es principio de derecho que el hecho que no cause daño á la persona que lo sufre sino por una falta imputable á ella no impone responsabilidad alguna—art. 1111.—Por otra parte, para que haya acto ilícito punible, es necesario que al agente se le pueda imputar, como se ha dicho ya, dolo, culpa ó negligencia. Puede verse además, á Laurent, párrafo 547, pág. 585, tom. 20. «Para que «haya delito ó cuasi delito», dice este autor, «es necesario que el demandante haya sufrido un daño por culpa del demandado.» No bastaba establecer el hecho material del daño causado, era necesario probar que habría habido culpa, negligencia ó imprudencia. Tal es el derecho común: cuando la obligación resulta de un delito ó de un cuasi delito, el demandante debe probar que existe delito ó cuasi delito; debe probar por consiguiente que hay culpa. Dalloz en la palabra «Responsabilidad» art. 5º prueba del cuasi delito, núm. 214, enseña: «que aquel que alegue un



pueda prosperar la acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 128. Ser. 3^a.

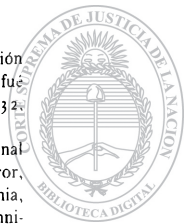
11. **Daños y perjuicios**—Es ineludible la justificación de la existencia del contrato para que proceda la acción por daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167. Ser. 3^a.

12. **Daños y perjuicios**—La absolución del acusado, por

hecho cualquiera, tiene el deber de probarlo, y que es al que reclama la reparación de un daño á quien incumbe la prueba de la culpa, pues la culpa es el hecho del cual nace la obligación reclamada.» Y la Cámara en un caso análogo al presente, ha declarado que los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito, solo son procedentes si se justifica que hubo culpa ó negligencia por parte del que los causó; tom. 6, Ser. 1^a, pág. 37. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 1; tom. 1, mismo verb., núms. 727 y 736; tom. 3, verb. *Daño*, núms. 2, 11 y 19.

11—No existiendo contrato no hay vínculo de derecho; y es sabido que la responsabilidad solo empieza cuando concluye el derecho—art. 1071, Cód. Civ.

12—El actor entabló demanda por daños y perjuicios, afirmando que la parte contraria le había demandado criminalmente, y diciendo que á pesar de haber sido absuelto fué privado de su libertad, correspondiendo en consecuencia la aplicación del art. 142 del Cód. Pen., que impone la obligación de indemnizar los daños causados. El demandado se defendió alegando que la causa se había seguido de oficio y que el procesado no había sido absuelto de culpa y cargo, resultando exactos estos dos extremos. La acción para hacer efectivas las penas correspondientes fué declarada prescripta y la sentencia en última Instancia declaró, que habiéndose absuelto simplemente al procesado, no había lugar á *concluir que hubo malicia ó temeridad de parte del que denunció el delito*. Esta sola declaración basta para que la acción por daños y perjuicios no pueda prosperar, pues ella debe tener necesariamente la condición de ser temeraria una acusación para que proceda la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Esta misma Cámara ha declarado en una causa que corre publicada en el tom. 7, pág. 443, Ser. 1^a, que los datos suministrados á la justicia no dan lugar á la acción de daños y perjuicios cuando no se puede imputar malicia al denunciante—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 9—La S. C. N. ha declarado en otro fallo publicado en el tom. 12, pág. 613, Ser. 1^a, que no existiendo acusa-



hallarse prescripto el delito, no puede fundar una acción de daños y perjuicios contra el demandante que no fue parte actora en el juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 232, Ser. 3^a.

13. **Daños y perjuicios**—La falta de intención criminal y la existencia de hechos que pudieran inducir un error, solo deben tenerse en cuenta en el juicio por calumnia, pero carecen de valor legal en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 3, página 26, Ser. 3^a.

14. **Daños y perjuicios**—Los jueces no son demandables

ción dolosa no puede existir el delito de calumnia, y el acusador en causa propia solo comete este delito y responde de los daños y perjuicios causados al acusado cuando su acusación es evidentemente calumniosa. En consecuencia el art. 1067 del Cód. Civ. no es aplicable al caso.

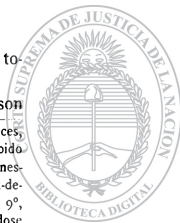
13—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 1.

14—Esta cuestión fué iniciada en el año 1875, y tenía por objeto hacer efectiva la responsabilidad en que según el actor, había incurrido un magistrado, con arreglo á la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por los daños y perjuicios causados en un pleito. La sentencia de 1^a Instancia fué dictada cuando la ciudad de Buenos Aires no había sido aún federalizada. La demanda se basaba en el derecho acordado por el art. 46 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en 1873, artículo que autorizaba al que hubiese sufrido los efectos de toda orden que violase ó menoscabase los derechos, libertades y garantías establecidas en la misma Constitución, el ejercicio de una acción civil contra el empleado ó funcionario que hubiera ejecutado ó autorizados aquellos actos, por los perjuicios que con tal motivo se hubieran causado. En la demanda no se estableció, ni el curso del juicio se comprobó, cuál de los derechos y garantías constitucionales fueron violados, faltando en tal virtud el fundamento de la acción ejercitada, la improcedencia de la demanda era evidente. Por otra parte, los arts. 190 y 192 de la Constitución de la Provincia entonces vigente disponían, que los Jueces podían ser acusados por cualquiera del pueblo por delitos y faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un Jury calificado, compuesto de siete Diputados y cinco Senadores profesores en derecho, los que después de admitida la acusación



por daños y perjuicios ante los tribunales ordinarios, si la acción tiene por fundamento actos llevados á efecto en su

debían pronunciar un veredicto declarando al Juez acusado culpable ó no culpable de los hechos imputados. El art. 194 establecía con precisión cuáles eran los delitos y faltas acusables, estableciendo al mismo tiempo las condiciones para que la acusación fuese admitida. Es principio general, que de todo delito nacen dos acciones: la pública y la privada, y aunque ellas son independientes, las condiciones para el ejercicio de la una influyen muchas veces sobre las condiciones para el ejercicio de la otra. Tratándose de delitos ó faltas cometidos por los Jueces en el desempeño de sus funciones, la Constitución había establecido ante quién debía ser perseguida la acción pública, pero como todos los motivos que existen para haber separado de la jurisdicción ordinaria la instrucción de los procesos por dichas faltas ó delitos, la declaración de su existencia y apreciación de su naturaleza, cuando se trata de la acción pública, existen igualmente cuando se trata de la acción privada: se deduce con toda evidencia, que en este caso la acción pública tiene que ser siempre prejudicial á la acción privada. Para que la acción por daños y perjuicios proceda, es necesario que exista el hecho generador, esto es, la falta ó delito que se imputa al Juez, pero si es solo al Jurado de doce miembros de la Legislatura, ó profesores en derecho á quienes corresponde declarar que la falta ó delito existe, no puede sostenerse que los Tribunales ordinarios sean también competentes para hacer igual declaración. No habiendo sido dictada la ley reglamentaria á que se refiere el art. 194 y no sabiéndose por lo tanto, cuáles sean las faltas ó delitos acusables, ni el procedimiento que debe seguirse ante el Jury, no pueden aplicarse las disposiciones que al respecto contiene la Constitución, y es preciso entonces ocurrir á los principios del derecho y á las demás leyes generales que estatuyen sobre la materia para la solución del presente caso. La Ley 19, tit. 1º, libro 2º, F. J. dice: «El Juez non debe haber ninguna pena jurando que non judgo tuerto, por amor, ni por cobdicia, ni por ruego sinon por ignorancia.» La Ley 2ª, tit. 2º, lib. 2º, F. R. dice: «si el alcalde judgó tuerto ó mando tomar alguna cosa por negligencia que lo no entiende, jure que lo no fizo por ruego, por amor, ni por precio é non haya ninguna pena. La Ley 24, tit. 22, Part. 3ª, después de señalar las penas de los Jueces que jurguen á «sabiendas contra derecho» dice: «que si juzgase por necesidad se debe salvar de la pena jurando que aquel juicio non lo dió maliciosamente más por yerro ó por su disentendimiento ó por non saber escoyer el derecho». Estas leyes demuestran con evi-



carácter de funcionarios del poder judicial.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 345, Ser 3ª.

15. Daños y perjuicios—Los Tribunales ordinarios son dencia que solo puede hacerse personalmente responsable á los Jueces, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, cuando ha habido de su parte dolo ó fraude ó cuando ha procedido con ignorancia inexcusable ó con gran negligencia, que se asimilan al dolo, «quasi ex-delicto» pero no se puede en esta materia invocar los arts. 3º y 6º, tít. 9º, Sec. 2ª, lib. 2º del Cód. Civ., porque como dice Duvergier refiriéndose al art. 1382 del Cód. Civ. de Francia que contiene una disposición análoga, «esto sería hacer responsables á los Jueces de toda especie de faltas, lo que nadie puede sostener razonablemente.»—Toulliez Duvergier, tom. 6º, pág. 163, nota.—Responsabilizar á los Jueces por error en sus apreciaciones, sería contra todo principio de equidad, atenta la debilidad del criterio humano y la facilidad de penetrar en las sendas del error, en una ciencia tan vasta y complicada como la del derecho y sobre todo en su aplicación á los casos prácticos, pues por más sabias y previsoras que sean las leyes, la mayor parte está librada á la especulación y pueden calificarse de raros los casos en que la ley se aplica de una manera directa y terminante, con relación á los que es preciso ocurrir á la deducción. Y es justamente para salvar á los litigantes de los errores en que pueden haber incurrido los Jueces, que se ha instituido el remedio de la apelación. Concediendo la ley el recurso de apelación y siendo un principio de derecho y de orden público que la cosa juzgada sea tenida por verdad, sería una verdadera inconsecuencia dar á los litigantes el derecho de demandar á los Jueces por perjuicios causados por una interpretación errónea de la ley, porque ó la sentencia en que así se interpretó la ley fué apelada y el error quedó enmendado, pasando la última sentencia en autoridad de cosa juzgada, ó bien fué consentido el error y en este caso debe imputarse á sí mismo el litigante los perjuicios que le causa el no haber empleado los remedios legales. Las consecuencias legales que surjen de estas últimas consideraciones han venido á ser modificadas con motivo de la disposición terminante del artículo 245 del Cód. Penal, el que establece en su inc. 1º, que comete prevaricato el Juez que espida sentencia si fuese contraria á la ley espresa invocada en autos.

15.—La demanda fué entablada contra el Intendente Municipal sobre indemnización de daños y perjuicios causados demorando sobremana el despacho de una solicitud en que se pedía línea para edificar. El demandante, procediendo bajo la base de que por nuestro sistema



competentes para entender en una acción por daños y perjuicios instaurada contra un funcionario público, sin que

de gobierno, todos los funcionarios públicos son responsables por los delitos ó faltas que cometan en desempeño de sus cargos, sostenía que debe serlo igualmente el Intendente Municipal, cuando por una conducta arbitraria agravie á los particulares en sus derechos, siendo los Jueces ordinarios los que han de hacer efectiva esa responsabilidad. Dijose encontrarse reglamentada la materia en los arts. 1109 y 1112 del Cód. Civ., que declara á todos, incluso los empleados públicos, obligados á reparar el daño que ocasionan á cualquiera por su culpa ó negligencia, no llenando sus deberes ó no cumpliéndolos más que de una manera irregular. Respecto al Intendente y demás empleados de la Municipalidad, cita el art. 70 de la Ley Org., fecha 23 de Octubre de 1882, según el cual responde ante los Tribunales ordinarios por los daños y perjuicios que ocasiona al público ó á los particulares con actos que importan transgresión ú omisión en sus deberes. El demandado opuso la escepción de incompetencia fundándose en que se pretendía imponer responsabilidad al Intendente Municipal por un acto administrativo ejecutado en ejercicio de sus funciones, y que en ese caso no es competente para declarar la jurisdicción ordinaria, pues aun cuando aquél deba responder por sus faltas ú omisiones, es necesario con todo que éstas sean previamente reconocidas y calificadas por el Consejo Deliberante, sin lo cual la administración se haría imposible, siendo turbada y trabada á cada paso. Se pregunta, ¿es exacto que los Tribunales ordinarios, en regla general, sean incompetentes para juzgar los actos administrativos en que se pretende haber existido abuso, con agravio del derecho de los particulares, sin que antes los haya calificado el Superior, de quien dependa el funcionario que los haya producido? De ninguna suerte, porque el admitirlo sería aceptar un principio, el menos liberal, el menos favorable á las garantías individuales. Aunque en Francia y en otras naciones monárquicas que la han seguido se haya establecido así efectivamente ese sistema pernicioso que á cada paso viene á encarar á los particulares con los ministros, dificultando sobremanera las reclamaciones por abusos de los funcionarios públicos, ha sido desechado de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos donde la responsabilidad de aquéllos es directa ante los Tribunales.—Lieber: La libertad Civil, tom. 1º, cap. 10, núm. 11, pág. 119. Tocqueville: La Democracia en América, lib. 1º, cap. 6º, párrafo 2º, pág. 75. Paul Odent: nota art. 951, de Story.—Habiendo adoptado nosotros por modelo la Constitución Norte-Americana, halla-



sea necesario que los Superiores del demandado se pronuncien sobre su culpabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, página 89, Ser. 3ª.

mos en nuestras instituciones consignada la misma doctrina que derivan de los principios fundamentales de aquélla—Ley Nacional de Set. de 1863, art. 2º—sin que por tanto para responsabilizar á un funcionario, sea indispensable llevar la queja gradualmente hasta el Superior antes de ocurrir á los Tribunales en demanda de justicia por cualquier abuso. Los Tribunales ordinarios juzgan ciertamente sobre actos administrativos, pero examinándolos exclusivamente bajo una fas sola, la del abuso que pueda haber agravado al particular en sus derechos perfectos, y no por eso debe recluirse el que dificulte ó trabe la administración, pues no es de temerse seguramente en manera alguna el que sin fundamentos de justicia se multipliquen reclamaciones bien difíciles de suyo. Aun cuando el Intendente Municipal, pudiendo ser removido por su mala conducta, se encuentra sujeto á un procedimiento administrativo ante el Concejo Deliberante, semejante al juicio político, no es sin embargo inmune ni de consiguiente se encuentra á cubierto de demandas ante los Tribunales ordinarios por la necesidad de que preceda dicho juicio y de que en él recaiga condenación que lo remueva de su puesto. No hay en esto incompatibilidad alguna, y en Estados Unidos, aunque todo funcionario público puede ser acusado en juicio político, esta circunstancia no excluye de modo alguno, respecto de los inferiores, su responsabilidad directa delante de los Tribunales, antes ó después del indicado juicio que solo tiene por objeto su remoción y que á veces no procedería por no ser falta sumamente grave —Reus, Jurisprudencia Constitucional, Sec. 4ª, pág. 122. —Es una teoría rara é inadmisibles la que sostiene que las disposiciones del tit. 9º, Sec. 2º, lib. 2º del Cód. Civ., en cuanto conciernen á la responsabilidad de los funcionarios municipales se han hecho para ser aplicadas únicamente por el Concejo Deliberante, quedando reducido el papel de los Tribunales á ejecutar las resoluciones y liquidar el valor de los perjuicios por abusos que aquél reconozca; en tal caso el Concejo sería, pues, el verdadero juez, siendo que por los principios de nuestra Constitución—art. 95—las funciones ejecutivas ó administrativas son absolutamente incompatibles con las judiciales. Puesto que el Concejo Deliberante tiene facultades para remover ó reconvenir al Intendente, bien ha podido en el caso presente el Intendente llevar á su conocimiento lo que sucedía, y aun quejarse de la conducta morosa de aquel funcionario, sin que esto importara reconocerlo por Juez competente en el asunto, una vez



16. Daños y perjuicios—No procede el pago si el hecho tuvo origen por culpa ó imprudencia del damnificado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 128, Ser. 3^a.

17. Daños y perjuicios—Procede la acción civil contra el acusador si se produce la absolución del acusado en el proceso criminal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 26, Ser. 3^a.

18. Daños y perjuicios—Para que proceda esta acción deducida por el propietario contra el locatario por los deterioros, debe justificarse que son mayores de los que impone el uso regular de la cosa locada, é intencionales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 3^a.

19. Daños y perjuicios—Justificado el consentimiento del locatario para la construcción de las obras ordenadas por el locador, procede el rechazo de la acción de daños

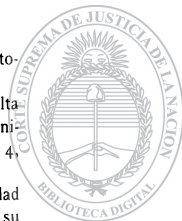
que tomara el carácter de contencioso, ni radicar allí el juicio, en términos que se haya producido *litispendencia*. No procedería en verdad, equivocada ó irregularmente quien se quejase de un Comisario al Jefe de Policía, más esa queja no importaría por cierto un juicio contencioso que inhibiese al interesado para entablar acusación ante los Tribunales ordinarios, porque obsten la *litispendencia*, no pudiendo confundirse jamás un procedimiento puramente administrativo con el juicio ordinario y contradictorio ante Juez competente. Podría alguien quejarse del Jefe de Policía al señor Ministro del Interior por excesos ó desmanes que supusiera haber cometido; el señor Ministro haría entonces ó no lugar á la reclamación, pero su negativa jamás impediría al agraviado ocurrir á la justicia ordinaria ni sería tampoco indispensable esperar su resolución si esta demorara indefinidamente, para que la acusación en forma fuese procedente ante los Tribunales.

16—Para que el autor de un acto que causa perjuicio á otro, sea responsable de sus resultados, se requiere que sea causado por culpa ó imprudencia de aquél.—art. 1109, Cód. Civ.

17—Arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ.

18—Arts. 1553, 1559, 1561, 1562, 1563, 1567, 1568, 1569 y 1570.

19—El art. 1524 del Cód. Civ. exige que las construcciones se hagan contra la voluntad del locatario para que éste tenga derecho á ser indemnizado.



y perjuicios, fundada en ese solo hecho.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 208, Ser. 3ª.

20. **Daños y perjuicios**—No procede esta acción por falta de cumplimiento de un contrato bilateral, si en oportunidad no se demanda su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 3ª.

21. **Daños y perjuicios**—Declarada la responsabilidad por los daños y perjuicios, es indispensable justificar su existencia é importancia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3ª.

22. **Daños y perjuicios**—La omisión, por parte de una empresa de transporte, de medidas tendentes á prevenir el daño de terceros en sus vías, es un acto ilícito por el cual es responsable civilmente de los daños y perjuicios que haya causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 36, Ser. 3ª.

23. **Daños y perjuicios**—El comprador en remate judicial, que no lleva á efecto la escrituración, se hace responsable de la diferencia de precio, daños y perjuicios y gastos del nuevo remate, si el desistimiento ha sido sin causa justificada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3ª.

24. **Daños y perjuicios**—El propietario de un terreno

20—Véase: verb. *Contrato bilateral*, núm. 3.

21—En toda demanda de daños y perjuicios hay dos cuestiones á resolver: 1ª Si el que los causa está obligado á resarcirlos: 2ª Si hay efectivamente daño causado. La importancia no es cuestión indispensable porque puede el Juez fijar un límite dentro del cual deba la parte prestar el juramento de acuerdo con lo dispuesto en el art. 220 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3.

22—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 4.

23—Art. 519 del Cód. de Proc.

24—El propietario tiene el derecho de poseer la cosa, de disponer ó de servirse de ella, de usarla ó gozarla según su voluntad, pudiendo desnaturalizarla, degradarla ó destruirla, (art. 2513 del Cód. Civ.)—sin que el ejercicio de estas facultades pueda serle restringido porque tuviera por resultado privar á un tercero de alguna ventaja, comodidad ó placer,



puede hacer en él las obras que crea necesarias, y los propietarios de los fundos adyacentes carecen de derecho para

ó traer algunos inconvenientes, con tal que no ataque su derecho de propiedad. Ocupándose el Código de las restricciones y límites del dominio, prescribe que las obras y trabajos hechos por un propietario en su fundo, que sin causar á los vecinos un perjuicio positivo ó un ataque á su derecho de propiedad, tuviese simplemente por resultado privarle de ventajas de que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemnización de daños y perjuicios—art. 2620.—Si de la ley pasamos á la razón filosófica que le ha servido de fundamento, encontramos que la prescripción de este art. 2620 es la que debe resolver la cuestión presente. La propiedad del suelo se extiende á toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares,—art. 2518,—ya sea que cave ó que edifique, el propietario no hace más que usar de ella, dentro de los límites, sin intentar contra la propiedad vecina, y sin enviarle nada de nocivo y perjudicial. Puede entonces cavar tan abajo y edificar tan alto como le plazca, sin que el vecino pueda querellarse, aun cuando la utilidad ó el valor de su propiedad aminorasen notablemente. Este principio era formalmente enseñado por los jurisconsultos romanos, quienes lo fundaban en que no parece que cause daño el que priva á otro de aquello que disfrutaba por causa lucrativa, pues es muy diferente que uno cause daño á otro ó que le prive de aquello de que se utiliza—Ley 26, tit. 2º, lib. 39, Dig.—Tal era también la doctrina de los antiguos jurisconsultos franceses. Cavar un pozo en mi propiedad, aunque el pozo del vecino se agotase, no deja de ser un hecho permitido, es puramente un caso fortuito, y propiamente hablando, el vecino sufre menos un daño efectivo que la cesación de un provecho casual, accidental, provisorio, con el cual no debía contar.—Demolombe, tit. 12, párrafo 647; Toullier, tom. 2, párrafo 328; Zachariæ, tom. 2, párrafo 57; Marcadé, sobre el art. 774 del Cód. francés; Aubry y Rau, párrafo 194.—Desarrollando la misma doctrina, Demolombe se expresa en estos términos: «De dos propietarios vecinos, si el primero usa de su derecho de propiedad sin duda que no puede atentar á la propiedad vecina, respecto á su forma de explotación actual ó aun solamente á su destino natural; pero también es necesario reconocer que puede por su obra nueva, hacer más costoso para el vecino una nueva forma de explotación ó de construcción que éste quisiese establecer en segunda... Es, pues, cierto que la preocupación respecto del ejercicio de los derechos de propiedad, puede dar á uno de los propietarios una ventaja sobre el otro, en el sentido que todo propietario debe



reclamar daños y perjuicios por el menor precio que ellas hayan causado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

25. **Daños y perjuicios**—El derecho á cobrar daños y perjuicios que la ley concede al propietario limitrofe, solo puede resultar de los causados en obras existentes y en manera alguna sobre las hipotéticas que pensaba construir.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

26. **Daños y perjuicios**—Es improcedente esta acción fundada en la falta de cumplimiento de un contrato de sociedad civil, si no existe escritura pública, siendo por un

emplear á sus espensas los medios necesarios para que cualquiera obra que él establezca no dañe á la propiedad vecina, en el estado en que ella se encuentre entonces.» Párrafo 659. Si un propietario es positivamente perjudicado por los trabajos hechos por otro en el terreno de su propiedad y dentro de los límites que á su dominio le atribuye la ley, no puede querellarse porque esos trabajos hagan desmerecer el valor de sus terrenos, cuando el demandado ni ha atentado contra las propiedades de los demandantes, ni las ha dañado en el estado en que se encontraban cuando efectuó dichos trabajos. Y debe tenerse también en cuenta, que según resultaba del escrito de demanda, las excavaciones practicadas habían tenido por objeto extraer la arena, de que se compone el suelo, para venderla. Siendo ello así, es indudable que los demandantes para edificar, tendrían forzosa necesidad de llevar los cimientos de las paredes hasta la tosca ó tierra firme, porque es sabido que no puede edificarse sólidamente sobre la arena, y en tal concepto, las excavaciones hechas por un colindante y rellenadas después, no pueden afectar la solidez del suelo ni obligar á los demandantes en caso de edificar, á hacer más trabajos de cimentación que los que necesariamente habrían hecho aunque no se hubiera extraído la arena por medio de las excavaciones espresadas.

25—Véase el número precedente.

26—El art. 1184 en su inc. 3º prescribe la forma de escritura pública para los contratos de sociedad que excedan de esta suma, ó cuando alguno de los contrayentes aportase bienes inmuebles: esta forma no puede ser suplida, y careciendo de ella, no vale—art. 1147, *ibid.*—No existiendo contrato, la acción que se deduce por daños y perjuicios es improcedente, porque esta sería la consecuencia de aquel, y es sabido que no hay efecto sin causa.



capital de más de mil pesos moneda nacional.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3^a.

27. **Daños y perjuicios**—Siempre que ha precedido la acción criminal, la civil por daños y perjuicios solo puede resultar después de la terminación de la primera.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3^a.

28. **Daños y perjuicios**—Fundados en la falta de cumplimiento de un contrato de locación, requieren indispensablemente la justificación de que existió el contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 387, Ser. 3^a.

29. **Daños y perjuicios**—La suma acordada por la rescisión de un contrato debe conceptuarse la utilidad que su cumplimiento debía reportar en tanto no se justifique plenamente que debe imputarse á los daños y perjuicios resultantes de la inejecución.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 3^a.

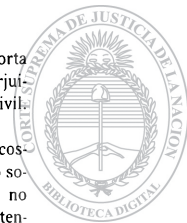
30. **Daños y perjuicios**—La absolución ó declaración de

27—Art. 1101 del Cód. Civ.

28—Véase: *Contrato de locación*, núm. 7.

29—Véase: *Contrato rescindido*, núm. 2.

30—En el juicio criminal se dejó completamente á salvo al damnificado su derecho para ejercitar la acción civil emergente del hecho. El juicio civil, tiene por objeto una acción completamente distinta de la criminal. El primero se promueve con el objeto de saber si el hecho generador del proceso entraña un delito previsto en la ley penal y del que pudiera responsabilizarse á su autor. En el juicio civil el actor se propone obtener del causante del daño las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados. El caso no se encuentra comprendido en el art. 1103 del Cód. Civ., que impide alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución en el juicio criminal, porque ambos juicios, como se ha dicho, tienen un fin distinto.—Véase Segovia, Cód. Civ., tom. 1, pág. 301; y Llerena, concordancias al Cód. Civ. —Este último, comentando el recordado artículo dice: «Otro tanto sucede tratándose de hechos que el Juez del Crimen ha juzgado como no pasibles de pena, como sería el caso de un delito puramente civil. El demandante no podría en tal caso probar en



inculpabilidad hecha en el juicio criminal, no importa enervar el derecho del damnificado por los daños y perjuicios procedentes del cuasi-delito que legisla la acción civil.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3ª.

31. **Daños y perjuicios**—La falta de condenación en costas en la acusación criminal, y la de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios solicitados por el acusado, no hace cosa juzgada en la acción civil, fundada en la sentencia absolutoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3ª.

32. **Daños y perjuicios**—La falta de derecho para reivindicar, hace inadmisibles la acción de daños y perjuicios que

juicio civil que el delito acusado y del que el demandado ha sido absuelto, es imputable ó es punible por el derecho penal. En cambio puede probar que si bien el demandado ha sido absuelto, el hecho constituye á los ojos de la ley civil un delito que obliga al que lo cometió á indemnizar el daño causado.» Esta ha sido asimismo la jurisprudencia establecida por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.

31.—El Juez de lo Criminal, no puede entrar en la apreciación de los daños que son materia de un juicio extraño á su jurisdicción. La indemnización del daño causado por un delito solo puede ser materia de una acción civil, independiente de la acción criminal—art. 1006, Cód. Civ.—y es por esto que la sentencia del juicio criminal solo puede limitarse á condenar ó absolver al reo.

32.—La acción de daños y perjuicios de que se trata, es la que compete al propietario de un terreno contra el que lo enagenó á un tercero y que acuerda el art. 2779 del Cód. Civ., como subsidiario en vez de dirigir la acción contra el actual poseedor. El demandado dijo que la acción reivindicatoria deducida y la subsidiaria de daños y perjuicios debían ser rechazadas porque el actor jamás había tenido la posesión ni se le había hecho tradición del inmueble. La acción subsidiaria de daños y perjuicios solo es procedente siéndolo la de reivindicación: resuelta la procedencia ó improcedencia de la acción reivindicatoria, se resuelve también la de daños y perjuicios. El art. 2758 dice que la acción de reivindicación nace del dominio que uno tiene de las cosas particulares, por la cual, el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en poder de ella. No

la ley concede como subsidiario.—Jur. Civ., tom. 6, página 346, Ser. 3ª.

33. Daños y perjuicios—La responsabilidad por ellos.

probada la posesión anterior del reivindicante, no procede la acción reivindicatoria, y por consiguiente tampoco procede la acción por daños y perjuicios emergentes de la enagenación de la cosa que se pretende reivindicar.

33—El art. 1124 del Cód. Civ. establece la responsabilidad del dueño de un animal doméstico ó feroz, del daño causado. Pero esa responsabilidad está fundada en la presunción de culpa de parte del propietario del animal; y por consiguiente, si no existe culpa la responsabilidad desaparece. El propietario tiene en su contra esa presunción, pero ella no es *juris et de jure*, es tan solo *juris tantum*. El rigor de la ley no es incondicional, y por consiguiente cuando la inculpabilidad está declarada en el juicio criminal constando de una manera auténtica con anterioridad al juicio civil, no puede ella ser desconocida por la sola presunción de la ley que cede ante la prueba de la contraria, y esa prueba se presenta con todos los caracteres constitutivos de la que es plena. El art. 1128 establece que cuando el daño causado proviene de culpa imputable al que lo ha sufrido, cesa la responsabilidad del dueño: en buena lógica tiene que reconocerse que la responsabilidad está fundada en la presunción de culpa. La ley ha tenido que preocuparse forzosamente de la situación jurídica creada por el daño de un ser inconsciente entre el propietario ó poseedor del mismo y el que es dañado. Ha partido de la base muy justa de que en la generalidad de los casos hay presunción de falta en el dueño ó poseedor, sea porque siendo él quien goza de los beneficios que el animal le produce, debe estar á las pérdidas ocasionadas por él mismo, sea porque él ha podido tomar las precauciones necesarias para evitar el perjuicio. Es por esto, que la ley presume la responsabilidad del dueño, y es por eso que cuando media fuerza mayor ó culpabilidad en el que recibe el daño, cesa aquella responsabilidad—art. 1129—Concurriendo ambos resultados á la conclusión de que la responsabilidad es solo á consecuencia de la culpabilidad presunta del dueño en el hecho del animal. De dos inculpables debe reparar el daño aquel que ha tenido más facilidades para evitarlo, ó que puede ser tachado de omiso ó negligente. A medida que el dueño del animal aumenta el peligro; á medida que de la necesidad de servirse de las bestias para las necesidades de la vida los convierte en instrumentos de placer, la responsabilidad aumenta hasta hacerse efectiva aunque no fuese posible evitar el daño—art. 1129—Esta es la doctrina admitida





que la ley impone al dueño de un animal, solo cede ante la prueba plena de que el hecho es imputable á la víctima.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3ª.

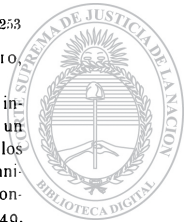
34. Daños y perjuicios—La absolución del acusado en el juicio criminal, hace responsable al acusador de los daños y perjuicios que haya irrogado la querella.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 269, Ser. 3ª.

35. Daños y perjuicios— Para fijar la suma dentro de la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio, los jueces deben tener presente además de la pérdida justifi-

por los autores, y así Sourdout en su obra sobre responsabilidad, observa que el daño causado por animales, es ordinariamente una consecuencia de la falta de aquellos á quienes pertenecen, que debían haberlos vigilado y servidose de ellos de manera que no perjudiquen á los demás —Edición de 1875, pág. 504—Sirey, registra en el volumen de sentencias de 1867, una, en que la Corte de Montpellier declara terminantemente que la responsabilidad impuesta en el art. 1385 del Cód. Nap., *está fundada en una presunción de falta personal*—tom. 2, pág. 220—y ese artículo contiene la misma disposición del 1124 de nuestro Código, y nuestro codificador lo cita en la nota. Aubry y Rau, que sostienen la responsabilidad en todos los casos, sin admitirse al propietario la prueba de no haber incurrido en falta, han tenido que admitir en la nota 10 al § 448, que la responsabilidad está fundada en la presunción de falta. Al discutirse el artículo del Código francés igual al nuestro, decía un orador: «Pafa que el daño esté sujeto á reparación, debe ser efecto de una falta ó imprudencia de parte de alguno: si no puede ser atribuida á esa causa, no es sino obra de la suerte y cada uno debe soportar las eventualidades.» Es sobre este principio que descanza la responsabilidad del propietario con relación á los daños causados por animales, de donde se concluye sin esfuerzo que si hay presunción, la ley no escluye la prueba contraria. En el mismo sentido puede verse una sentencia de la Corte de Bruselas de 3 de Enero de 1863, como en las de los tribunales de Gaud y París de 1861, 1862 y 1863; Laurent, Principios de Derecho Civil, tom. 20, § 620.

34 Véase el aúm. 17.

35 —El *damnum emergens* y el *lucrum cessans* de que nos habla el artículo 519 del Cód. Civ. Véase verb. *Condición*, núm. 3.



cada, la ganancia dejada de percibir.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 228, Ser. 4^a.

36. Daños y perjuicios.—Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta: a) La naturaleza de los perjuicios; b) El género de necesidades que la indemnización debe llenar; c) Las condiciones de fortuna del condenado á satisfacerlas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4^a.

37. Daños y perjuicios.—Reconocido el derecho á la retención, la acción de daños y perjuicios fundada en ese derecho, debe declararse improcedente.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 357, Ser. 4^a.

38. Daños y perjuicios.—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa, debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención, y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

39. Daños y perjuicios.—La calificación de prófugo hecha al rebelde, no importa la comisión de un acto ilícito

36—Véase nota precedente.

37—Porque la detención en este caso se hace en ejercicio de un derecho, lo que no puede constituir en ilícito ningún acto—art. 1071 del Cód. Civ.—No habiendo acto ilícito, no procede el derecho á pedir una indemnización.

38—El art. 3939 del Cód. Civ. acuerda el derecho de retención al tenedor de una cosa ajena hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa. Cuando ese tenedor inicia un juicio á fin de hacer efectivo este derecho acordado por la ley, es allí donde deben resolverse las cuestiones que tienen atinencia directa é inmediata con ese derecho. Ocurrir á otro juicio, sería ir contra el orden regular de proceder en los litigios. Es allí donde debe resolverse si se ha usado ó abusado del derecho invocado para deducir en consecuencia las acciones que pueden surgir del abuso cometido.

39—Véase *Acto ilícito*, núm. 1.



que pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

40. Daños y perjuicios—La retención de mercaderías por orden de autoridad competente, no puede fundar una acción por daños y perjuicios procedentes de la falta de entrega.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 3ª.

41. Daños y perjuicios—Si el mandatario estiene el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irroque al tercero, aun cuando se justifique que este conocía su carácter de mandatario.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 33, Ser. 3ª.

42. Daños y perjuicios—Es bastante, el poder conferido con el objeto de pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo pleito los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3ª.

43. Daños y perjuicios—Si no existe prueba plena sobre el precio del terreno que motivó la obligación de hacer convertida en la de indemnización de daños y per-

40—Podría esa falta de entrega dar lugar á una acción contra quien solicitó y subsidiariamente contra quien ordenó indebidamente el embargo; pero no contra el que retuviese las mercaderías, pues no puede decirse que él hubiese procedido ilegalmente y que fuese consiguientemente responsable de los daños y perjuicios, desde que procede en virtud de una orden emanada de autoridad competente—art. 1071 del Cód. Civ.

41—Arts. 1929, 1930 y 1946 del Cód. Civ.; Troplong, *Mandat* § 509; Pothier, tom. V, pág. 207; F. S. C. N., tom. 13, pág. 319, Serie 2ª; tom. 6º, pág. 284, Ser. 1ª, Jur. Civ.

42—La Cámara consideró que dadas las designaciones contenidas en el poder, estaba suficientemente individualizado el acto á que se refería el incidente. Por otra parte, el mandante había ratificado la acción que se decía instaurada sin poder bastante.

43—Las reglas de equidad son de indiscutible aplicación cuando el criterio judicial tenga que aplicarse como base de apreciación.



juicios, los jueces deben fijarla equitativamente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220. Ser. 3ª.

44. **Daños y perjuicios**—La inhibición indebida responsabiliza al que la solicitó, por los daños y perjuicios que se causen al inhibido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280. Ser. 3ª.

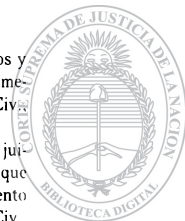
45. **Daños y perjuicios**—El demandante por daños y perjuicios procedentes de una inhibición indebida, está obligado á justificarlos; la falta de prueba hace procedente la absolución del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, página 280, Ser. 3ª.

46. **Daños y perjuicios**—La culpa de la víctima no exi-

44—Si el que solicita una inhibición no ajusta su proceder á las exigencias de la ley, al proceder así se hace culpable y negligente, y consiguientemente pasible de los daños y perjuicios—art. 1109, Código Civ.

45—En virtud del principio general establecido en la Ley 1ª, tit. 14, Part 3ª. En toda acción de daños y perjuicios, hay dos extremos que deben comprobarse: 1º, que el daño realmente existió; 2º, que el reclamante tiene derecho á ser indemnizado. La falta de cualquiera de estos dos elementos es bastante para que la acción no pueda prosperar.

46—Los arts. 1109, 1113 y 1122 del Cód. Civ., disponen que el que ejecuta un hecho que por su culpa ó negligencia ocasiona un daño, está obligado á la reparación del perjuicio. Para determinar el alcance de esa responsabilidad, es necesario tener en cuenta varias circunstancias, como ser cuando la víctima también tiene su parte de culpa ó imprudencia. Laurent dice, comentando el art. 1382 del Cód. Nap., concordante con el 1109 del nuestro, al ocuparse del conflicto de culpas que resulta comunmente de los accidentes ocasionados por vehículos: «Nosotros no admitimos la irresponsabilidad sino en el caso que la imprudencia de la víctima haya sido la sola causa del accidente. Es necesario no olvidar que el rigor de la ley en los casos de cuasi-delitos tiene por objeto salvaguardar la vida de los hombres. La consecuencia más natural de la culpa, es no declarar libre de toda responsabilidad al autor de un hecho perjudicial, sino que debe ésta ser disminuida de tal manera que los daños é intereses á indemnizar deben estar en



me á la empresa de la responsabilidad por los daños y perjuicios en que incurren por la omisión de aquellas medidas que pudieran haber evitado el accidente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 289, Ser. 3ª.

47. **Daños y perjuicios**—La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios por la falta de cumplimiento del contrato de locación deduzca el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

48. **Daños y perjuicios**—El locador que exige judicialmente el desalojo faltando á lo estipulado en el contrato de locación sobre prórroga, es responsable por los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

49. **Daños y perjuicios**—Si el demandante á pesar de tener derecho á ser indemnizado de los daños y perjuicios, no justifica su existencia, debe absolverse al demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

50. **Daños y perjuicios**—No existiendo término estipulado para la locación, el locador tiene derecho á rescindir el contrato en cualquier tiempo, sin que ese hecho pueda fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 315, Ser. 3ª.

51. **Daños y perjuicios**—La omisión, por parte de la vicporporción al grado de la culpa, y ésta disminuye cuando el daño es imputable en parte á la falta de quien lo experimenta.—Principios de derecho civil francés, tom. 20, pág. 522.

47—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.

48—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 16.

49—Véase los núms. 3, 8, 21 y 45.

50—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 12.

51—Esta sentencia fué dictada por la Cámara por mayoría de un voto. Los antecedentes de la causa comprobaron que una persona de 20 años de edad pretendió subir al coche de un tranvía por la plataforma



tima, de aquellas medidas precaucionales que pudieron evitar el accidente, arrojan sobre ella la culpa, y exime de

delantera cuando éste iba al galope de los caballos, cayendo debajo del carruaje donde murió destrozado por las ruedas. Como se ve, hubo concurrencia de faltas, siendo aplicable el principio sentado por esta misma Cámara en el núm. 46. La Cámara como siempre haciendo caso omiso de los principios sustentados por ella en otros casos resolvió el presente en contra de aquél. El señor Camarista Dr. Gimenez en cuyo voto se fundó la mayoría para resolver la cuestión dijo, que de los antecedentes de la causa no había encontrado nada que fuese suficiente á constituir los elementos que la ley exige para responsabilizar á la empresa por las consecuencias originadas por el accidente, ni culpa, ni negligencia que pueda imputársele al cochero: que por el contrario todas las constancias de autos demostraban que el daño sufrido solo era imputable á la víctima, y que por consiguiente el art. 1111 eximía de responsabilidad á la empresa. Resultaba comprobado el hecho de que la víctima pretendió subir al coche por la plataforma delantera mientras iba éste á gran velocidad, aunque se le hizo seña al cochero á fin de que se parase. Pretender subir al coche en tales condiciones, no solo importa una grave falta, una imprudencia, sino también una flagrante infracción á las ordenanzas Municipales, que prohíben á los pasajeros subir ó bajar cuando los coches están en movimiento. Se dijo que la víctima en su carácter de empleado de la empresa no podía subir sino por la plataforma de adelante porque así lo mandaba la empresa á sus empleados; y que si perdía ese tranvía llegaría tarde á su empleo, siendo despedido: la empresa contestó diciendo que ella no obliga á sus empleados á viajar en sus coches y que si á ello se vió precisada la víctima para llegar con puntualidad á su empleo, no debió en ningún caso subir esponiéndose á los peligros fáciles de presumir por la marcha veloz del coche, y si con todo lo hizo, deben serle imputables las consecuencias inmediatas de un hecho ejecutado con libre albedrío, tanto más cuanto que las condiciones en que el coche marchaba le obligaban á proceder con mayor prudencia. En el caso que nos ocupa no se comprobó la obligación impuesta á sus empleados por la empresa de subir por la plataforma delantera. Se adujo finalmente como argumento que la doctrina sostenida por los autores respecto al conflicto de culpas que resulta comunmente en los accidentes ocasionados por vehículos, no puede aplicarse á este caso en el que ninguna prueba se produjo para demostrar la culpa ó negligencia de la empresa, porque en lo que respecto á la velocidad con que el coche marchaba, tal circunstancia colocaba á la víctima en



responsabilidad á la empresa por los daños y perjuicios demandados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 3^a.

52. Daños y perjuicios—Los actos llevados á cabo por un Comisario de Policía estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

53. Daños y perjuicios—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños y perjuicios que la prisión fundada en este

el deber de proceder con mayor prudencia, y cuando más, podía haber dado lugar á la aplicación de una multa por infracción á las ordenanzas. La misma dijo, que era un hecho comprobado en autos que los caballos que conducían el coche iban al galope en el momento en que sucedió el accidente. Si hubo imprudencia por parte de la víctima la hubo por parte del conductor, porque las ordenanzas que reglamentan la marcha de los tranvías, con el objeto de evitar accidentes, previenen que los coches deberán marchar al trote corto de los caballos y al pasar las bocacalles al paso—art. 6º del Reglamento de 1872—Ambos por consiguiente, violaron el precepto municipal, la víctima por preteuder subir á un coche en movimiento, y el cochero por llevar el vehículo con una velocidad prohibida: ambos ejecutaron actos ilícitos. Decir que si se comparan las faltas, resulta mayor la de la víctima, y partiendo de esta base, establecer que la rapidez de la marcha no fué ni pudo ser por sí sola la causa de la muerte del menor, y por consiguiente exclusivamente de éste la culpa del accidente, es afirmar un error. 1º Porque el accidente no se produjo por culpa exclusiva de la víctima. 2º Porque el principio consagrado en el art. 1111 del Cód. Civ., supone siempre la falta completa de culpa ó negligencia en el autor del hecho, lo que no sucede en el presente caso. 3º Porque es doctrina aceptada que cuando se produce conflicto de faltas, es decir, cuando hay falta, tanto de parte del agente como de parte de la víctima, aunque esta última sea mayor en gravedad, no queda exento por ello el primero, de la obligación legal de reparar el daño, debiendo solo en tal emergencia disminuirse equitativamente la responsabilidad al arbitrio del Juez.—Aubry y Rau, § 446; Dalloz, Códigos anotados, art. 1383.

52—Véase, *Acto ilícito*, núm. 5.

53—Véase *Autoridad*, núm. 2.



delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

54. **Daños y perjuicios**—El demandante por daños y perjuicios debe justificar plenamente la obligación del demandado y el título en virtud del cual tiene derecho á su cobro.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 402, Ser. 3ª.

55. **Daños y perjuicios**—El propietario, como autor de un acto ilícito, es responsable de los daños y perjuicios causados á las víctimas por un accidente ocurrido en su propiedad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4ª.

56. **Daños y perjuicios**—El comprador que desiste de la compra en remate judicial, debe responsabilizarse por los daños é intereses, y además por la diferencia de precio, no obstante la pérdida de la seña.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 39, Ser. 4ª.

57. **Daños y perjuicios**—Los que se ocasionen por falta

54—Véase los núms. 3, 8, 21, 45 y 49.

55—Véase, *Acto ilícito*. núm. 6.

56—La seña que se entrega en las ventas judiciales es tan solo como parte de precio, pero no como arras. Si los daños y perjuicios ascienden á mayor suma de la entregada á cuenta en el acto del remate, el comprador pierde ésta más lo que se necesite para completar los daños y perjuicios que debe abonar si el comprador resolviese sacar nuevamente la cosa vendida á remate—art. 519, Cód. de Proc.

57—Se trata de una demanda por escrituración habiéndose solicitado por la parte actora que al demandado «se le condenase en oportunidad al cumplimiento de la obligación, más los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento le ocasiona.» Esta última parte no es procedente, por que el contrato que versa sobre bienes raíces debe ser hecho en escritura pública, y si lo fuese en instrumento privado, puede el que lo otorga ser demandado por la otra parte para que haga escritura pública, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses—arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.—De aquí resulta que el comprador no debe daños y perjuicios sino después de otorgada la escritura pública ó después de resistirse á su otorgamiento, porque recién entonces quedaría constituido en mora.



de cumplimiento de una obligación de hacer provenientes de la mora, solo proceden después de haberse pedido judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, página 83, Ser. 4^a.

58. Daños y perjuicios—La acción pidiendo el cumplimiento de una obligación de hacer, no puede ser sustanciada y resuelta conjuntamente con los daños y perjuicios que su falta de cumplimiento ocasiona.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 83, Ser. 4^a.

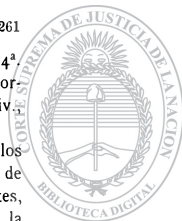
59. Daños y perjuicios—Corresponde á la jurisdicción comercial, la ejecución por daños y perjuicios contra los recomendantes de una obligación comercial.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 184, Ser. 4^a.

60. Daños y perjuicios—El rechazo de la acción reivindicación declarada improcedente por haberse operado la prescripción, no puede fundar una reserva por

58—Cuando se trata de contratos que en primer lugar deben ser elevados á escritura pública, antes de exigirse su cumplimiento—artículos 1185 y 1187 del Cód. Civ.—Véase nota precedente.

59—El Banco de la Provincia inició juicio contra personas que recomendaron á un tercero en virtud de lo cual el establecimiento le abrió un crédito, siendo responsables siempre que hubiese procedido de mala fe—art. 632 del Cód. de Com. ant.—El acto es comercial—arts. 6 y 7, inc. 2º del mismo Cód., iguales al 7 y 8, inc. 3º del vigente.

60—Los daños y perjuicios fuera de los casos de inexecución de los contratos ó de agravios resultantes de delitos ó cuasi-delitos, pueden resultar de actos ó de hechos de un orden diverso cuya multiplicidad ha debido escapar á las previsiones del legislador. Su reparación no es arbitraria cuando no lo consagra la ley ó el contrato, y necesariamente debe tener un antecedente de hecho ó de derecho que los justifique. Así en la acción reivindicatoria no se discute el fondo del derecho y si se declara procedente es en mérito de defensas extrañas á la gestión principal mirada bajo el punto de vista jurídico. Ni puede decirse que procedan los daños y perjuicios por el embargo trabado, porque la ley lo autoriza espresamente—art. 447 del Cód. de Proc.—Además en estos casos, no hay acto alguno que haga presumir la intención dolosa,



los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 390, Ser. 4^a.

61. Daños y perjuicios—Reconocida su existencia, corresponde al autor justificar su inculpabilidad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 4^a.

62. Daños y perjuicios—La omisión, por parte de los empleados subalternos de una empresa de transportes, de las precauciones establecidas por disposiciones vigentes, importa culpa ó negligencia, y hace recaer sobre ella la responsabilidad de los daños que sufran los pasajeros.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 193, Ser. 4^a.

63. Daños y perjuicios—Las empresas de tranways son responsables de los daños y perjuicios causados por sus dependientes, siempre que no justifiquen que ellos llenaron las prescripciones legales.—Jur. Civ., tom. 2, página 39, Ser. 4^a.

64. Daños y perjuicios—Probada su existencia pero no su monto, procede el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

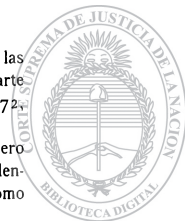
y la pena de daños y perjuicios, no procede en principio como resultantes de controversias judiciales, siendo de notarse que en la prescripción no se presenta la oportunidad de juzgar si son ó no legítimos los motivos de la controversia.

61—El demandado reconoció la existencia del hecho, pero alegó que no era culpable: debió comprobar este aserto, en virtud del principio general de que la prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio. En el caso que nos ocupa, el actor comprobó plenamente la culpa del demandado, quedando así subsistente la prueba rendida por el demandante. Véase el núm. 10.

62—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 8; tom. 3^o, mismo verbo, núm. 21; *Ferrocarril*, núm. 2, y *Ferrocarriles*, núm. 1; tomo 2^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 25. El sumario consagra la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales. Véase verb. *Culpa ó negligencia*, núm. 1, de este tomo.

63—Véase, nota precedente, y *Acto ilícito*, núm. 4.

64—Véase los núms. 3 y 21.



65. **Daños y perjuicios**—Su pago solo procede en las obligaciones de hacer cuando hubiera resistencia de parte de alguno de los obligados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 72, Ser. 4^a.

66. **Daños y perjuicios**—Justificada su existencia, pero no el *quantum*, corresponde el juramento estimatorio dentro de la cantidad que fije el Juzgado.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 39, Ser. 4^a.

67. **Daños y perjuicios**—Emergentes de un principio de ejecución de un contrato verbal cuyo cumplimiento resulta imposible, son á cargo de la parte culpable de la inexecución.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 92, Ser. 4^a.

68. **Daños y perjuicios**—No procede esta acción, fundada en una acusación calumniosa, si el demandado se limita á la denuncia del delito ante la Policía, sin designar la persona que lo hubiese cometido y sin hacerse parte en el juicio criminal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 107, Ser. 4^a.

69. **Daños y perjuicios**—Declarada procedente esta ac-

65—Art. 1187 del Cód. Civ.

66—Véase los núms. 3, 21 y 64.

67—Celebrado verbalmente un contrato de locación y antes de estenderse la escritura pública correspondiente, á que se obligaron las partes, empezóse la demolición de una casa que formaba el objeto de la convención, debiendo aquélla ser reedificada. Antes de estenderse la escritura pública del contrato, los locatarios alegaron conocimiento de que la casa no pertenecía al locador sino en parte, pues la tenía en condominio con sus hijos menores, habiendo sido el inmueble adquirido durante la sociedad conyugal y sin que la testamentaria de la esposa hubiese sido liquidada. El cumplimiento del contrato se hizo imposible porque á ello se opone el art. 2682 del Cód. Civ. La inexecución total del contrato fué imputable tan solo al locador, siendo pasible de los daños y perjuicios emergentes de dicha inexecución.

68—Véase, verb. *Acusación calumniosa*, núm. 1.

69—Esta sentencia fué dictada por mayoría de votos. Tres Camar-



ción, pero no justificada la suma perdida es improcedente el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 116, Ser. 4^a.

70. Daños y perjuicios—Las empresas de ferrocarriles son responsables de los daños y perjuicios que resulten contra terceros por las omisiones de sus empleados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

71. Daños y perjuicios—La omisión de medidas precau-

tas en el sentido del sumario y dos en contra. La mayoría resuelve esta cuestión en un sentido completamente contrario á la ley y á la jurisprudencia. Se dijo que «la demanda estima los perjuicios en la suma de 20.000 nacionales, pero no ha justificado la existencia de los perjuicios que reclama, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 520 y 1069 del Cód. Civ., ni el monto siquiera aproximado de los mismos para hacer aplicable al caso el juramento estimatorio del art. 220 del Código de Proc.» Es de advertirse que esta mayoría admitía la existencia de los daños y perjuicios, pero como no se había establecido suma alguna en la prueba, declaró que el rechazo de la demanda se imponía. La minoría dijo: «que la existencia de los perjuicios ha sido establecida, según resulta de las declaraciones de los testigos: que no habiéndose comprobado el monto á que aquéllos ascienden, es de aplicación lo dispuesto en el art. 220 del Cód. de Proc. que libra al prudente arbitrio del Juez la fijación de la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio, siempre que la existencia de los perjuicios se encuentre legalmente acreditada, y no resultase justificado su importe: fijación que en el presente caso puede hacerse equitativamente atendiendo á las circunstancias que la misma causa suministra.» El sumario consagra una arbitrariedad, pues va contra la letra y contra la inteligencia del art. 220 citado, el que ha sido siempre interpretado en el sentido del voto de la minoría. El art. 220 es claro y terminante. No se comprende cómo una Cámara puede resolver cuestiones tan trilladas, que pueden decirse axiomáticas, en el sentido que lo hace en el presente caso la mayoría. Consuela sin embargo no ver aparecer esa abrumadora unanimidad de la Cámara. La minoría salvó el principio legal, pero no fué bastante para salvar de la iniquidad al sujeto del derecho.

70—Véase los núms. 62 y 63.

71—Véase *Acto ilícito*, núm. 4.



cionales importa la culpa ó negligencia que la ley exige para responsabilizar por los daños y perjuicios al autor de un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

72. Daños y perjuicios—Para que el juramento estimatorio sea procedente, debe justificarse al menos que ellos existieron, aun cuando no pueda fijarse su monto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4^a.

73. Daños y perjuicios—Resuelto por sentencia ejecutoriada que el Inferior debe fijar el monto de la indemnización por daños y perjuicios, no procede la recepción de pruebas para fijarlos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 314, Ser. 4^a.

74. Daños y perjuicios—Reconocida la existencia de

72—Este sumario aplica correctamente el art. 220 del Cód. de Procedimientos. En contra, véase el núm. 69. Esta es una de las frecuentes contradicciones en que incurre la Cámara de lo Civil. Aquí hay dos sentencias abiertamente opuestas la una á la otra. La sentencia consignada en el sumario fué dictada por el voto unánime de la Cámara, y lo que es más extraño aceptada en silencio sin que los tres Camaristas que resolvieron la misma cuestión en el núm. 69, hubiesen fundado la razón de su distinto modo de pensar en la presente. Y para que aparezca más evidente, la inconsciencia de la mayoría de la Cámara debe tenerse presente que la sentencia contenida en el núm. 69 fué dictada el día 14 de Abril de 1891, y la de este sumario el 16 del mismo mes y año. Con dos días de intervalo, dos sentencias contradictorias dictadas por la misma Cámara compuesta de los mismos Camaristas y ambas confirmatorias de las de 1^a Inst. Esta es la justicia de la Cámara, convertida en una verdadera eventualidad.

73—Porque se trata de ejecutar lo resuelto por el Superior, el que habiendo ordenado la prestación del juramento dentro de un límite que debió fijarse en 1^a Inst., no era posible volver sobre la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

74—Siempre que el Juez pueda establecer el límite dentro del cual debe prestarse el juramento estimatorio, debe aplicarse la disposición del art. 220 del Cód. de Proc.: y si no existe, puede ordenarse las medidas necesarias, para fijar ese límite, con carácter de para mejor proveer. No siendo esto posible, puede aceptarse el nombramiento de árbitros.



daños y perjuicios y el derecho á su indemnización procede el juramento estimatorio, y no la fijación por árbitros, dentro de la cantidad que fije el Juzgado, si el damnificado no ha producido prueba de los que se le han causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

75. **Daños y perjuicios**—La contestación á la demanda por daños y perjuicios procedentes de un accidente ó cuasi-delito ocasionado con motivo de una construcción, es acto de administración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79, Ser. 4^a.

76. **Daños y perjuicios**—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, página 100, Ser. 4^a.

77. **Daños y perjuicios**—La disolución de una sociedad por culpa esclusiva de uno de los socios, hace pasible á éste de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 172, Ser. 4^a.

78. **Daños y perjuicios**—La demolición regular de una pared medianera, previo aviso al propietario y locatario de la finca contigua, no puede fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 156, Ser. 4^a.

79. **Daños y perjuicios**—Esta acción es improcedente si el hecho se produjo por negligencia de la víctima ó de

75—Véase *Acto de administración*, núm. 1.

76—Véase verb. *Construcciones*, núm. 1.

77—Arts. 1109 y 1725 del Cód. Civ.

78—Arts. 1519, 1520 y 1526 del Cód. Civ.

79—Art. 1111 del Cód. Civ. Pero si hay concurrencia de culpa en el agente y en la víctima, siempre aquél responde de los daños y perjuicios aunque en una forma linitada. Véase el núm. 51.



sus guardadores.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 4^a.

80. Daños y perjuicios—La absolución del procesado ante la jurisdicción criminal, no basta para eximirlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 97, Ser. 4^a.

81. Daños y perjuicios—La falta de cumplimiento de un contrato obliga al culpable por los daños y perjuicios que ocasione.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

82. Daños y perjuicios—No procede el embargo preventivo fundado en daños y perjuicios no justificados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 239, Ser. 4^a.

83. Daños y perjuicios—Justificado el derecho á cobrarlos y su existencia, procede el juramento estimatorio si no se justifica su monto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 144, Ser. 4^a.

84. Daños y perjuicios—Justificada la culpa del demandado, nace la obligación de indemnizar el daño, y como tal debe ser tenido el agravio moral que sufre el padre por la muerte de su hijo, cualquiera que sea su edad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4^a.

85. Daños y perjuicios—El mandatario está obligado á

80—Véase *Acto ilícito*, núm. 8.

81—La obligación de pagar daños y perjuicios es el resultado de una convención accesoria tácitamente estipulada entre deudor y acreedor: es uno de los efectos que surgen de la convención misma—arts. 505, incs. 520 y 1198, del Cód. Civ.

82—El pleito no versaba sobre daños y perjuicios, sino sobre rendición de cuentas. Además el que solicitó el embargo carecía de personería.

83—Véase el núm. 72.

84—Véase verb. *Agravio moral*, núm. 1.

85—El recibo de documentos para verificar su cobro importa un verdadero mandato—art. 1869 del Cód. Civ.—Si el mandatario no pue-



rendir cuentas al mandante, de los papeles de créditos entregados para su cobro, en caso de no verificarlo deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados pero no su valor íntegro, en tanto no justifique que recibió su importe.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Ser. 4ª.

86. Daños y perjuicios—No existiendo condenación en costas en la sentencia que condena al demandado al pago de los daños y perjuicios, los honorarios y gastos del juicio no deben ser tenidos en consideración al fijar la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4ª.

87. Daños y perjuicios—La falta de justificación de los reclamados, hace procedente la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 147, Ser. 4ª.

88. Daños y perjuicios—La absolución del reo ante el Juez del Crimen, no forma prueba sobre su culpa ó negligencia imputada en el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios emergentes del acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 154, Ser. 4ª.

89. Daños y perjuicios—El locatario que abandona el de verificar su cobro, está obligado á entregar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, comprendiéndose en dicha obligación la de entregar los títulos, documentos y papeles que el mandante le hubiese confiado—arts. 1909 y 1911, *ibid.*—En el juicio de rendición de cuentas, el mandante debe comprobar que el mandatario recibió el importe y de lo contrario solo responde de los daños y perjuicios que le ocasiona la falta de devolución de los papeles. Así, si el firmante del pagaré es insolvente, la indemnización será nula ó insignificante: siendo además posible que el deudor, en caso de no carecer de fondos, pague al acreedor sin necesidad de la presentación del documento, en cuyo caso no se habría ocasionado perjuicio alguno.

86—Véase verb. *Costas*, núm. 45.

87—Véase verb. *Costas*, núm. 47.

88—Véase verb. *Acto ilícito*, núm. 10.

89—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 20.



predio arrendado, antes del vencimiento del término estipulado en el contrato, está obligado á indemnizar al locador los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Serie 4ª.

90. **Daños y perjuicios**—Los daños y perjuicios en caso de faltar al contrato de locación, deben ser fijados por el precio estipulado como alquiler ó la diferencia en caso de nueva locación por menor suma.—Jur. Civ., tom. 6, página 260, Ser. 4ª.

91. **Daños y perjuicios**—La resolución no haciendo lugar á la indemnización de daños y perjuicios, hace procedente la escusación del Juez para fijarla en caso de ser revocada la sentencia por el Superior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 85, Ser. 4ª.

92. **Daños y perjuicios**—Reconocido el derecho á la in-

91—La sentencia no hizo lugar á la indemnización porque el Inferior consideró que el hecho imputado no había causado un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria: la Cámara resolvió lo contrario, estableciendo que el agravio moral es susceptible de ser apreciado en dinero. El Juez se escusó alegando que su sentencia establecía un perjuicio. El art. 368, en su inc. 8º, del Cód. de Proc., reconoce como causa legal de recusación, el haber emitido opinión acerca del pleito antes ó después de comenzado. Si se tiene en cuenta el motivo que ha tenido el legislador para establecer este principio, se comprenderá la razón del sumario. Los prácticos dan como razón del derecho de escusación, la ausencia de parcialidad y lo difícil que es vencer los impulsos del amor propio que induce al hombre á sostener su opinión. Así cuando, como en el presente caso, un Juez ha dicho que ciertos hechos no son susceptibles de apreciación pecuniaria, y el Superior dice que lo son, ordenándole que fije el monto, es evidente que los estimará en muy poca suma porque él cree que no valen nada: de aquí la razón de ser de la resolución.

92—Se trataba del perjuicio ocasionado por una lesión á un ojo. Es necesario abrir á prueba la causa para justificar tantas circunstancias que intervienen como elemento de criterio al fijar la suma. Dentro de un



demnización de daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito, corresponde la recepción de prueba sobre su monto, y adolece de nulidad la sentencia que sin más trámite fija la suma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 301, Ser. 4^a.

93. Daños y perjuicios—Reconocida la existencia del contrato de locación de servicios, el constructor está obligado a pagar al propietario los daños ocasionados por mala construcción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 415, Serie 4^a.

94. Daños y perjuicios—El poder para promover un pleito por daños y perjuicios por indebida retención, es bastante para iniciar demanda para el cobro de la suma en que se aprecian los objetos retenidos.—Jur. Civ., tomo 7, página 73, Ser. 4^a.

95. Daños y perjuicios—Aun pedida la rescisión del contrato, el locatario está obligado al pago del precio de la locación: si por su falta se dictara la resolución, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4^a.

mismo hecho caben innumerables modalidades, como ser los sufrimientos de la víctima, la edad, la posición social, el carácter de la herida, su gravedad, qué tiempo necesitó para su curación, qué gastos ocasionó, si existe deformación, etc. Es necesario que estos extremos se comprueben, porque si bien es cierto que el Juez aprecia soberanamente el monto, debe tener sus antecedentes y sus puntos de apoyo esa apreciación. Además debe tenerse en cuenta que las resoluciones judiciales deben encuadrarse dentro de lo alegado y probado.

93—Véase *Contrato de locación*, núm. 4.

94—Por que el objeto de la demanda es obtener la reparación del daño causado, entrando la acción en los límites del mandato.

95—Se debe el precio porque el contrato subsiste mientras no se declare rescindido. Subsistiendo el contrato continúan las obligaciones que él genera, entre las que se encuentra la obligación, de parte del inquilino, de pagar el precio de la locación.



96. **Daños y perjuicios**—Tratándose de la rescisión de un contrato de locación en el que el locatario está obligado á dejar las construcciones á favor del propietario, los daños y perjuicios aunque no hubiesen sido comprobados deberán ser fijados por peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 4^a.

97. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento de un contrato, por parte de la Municipalidad, no puede fundar una acción por daños y perjuicios si el hecho tuvo lugar por fuerza mayor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 186, Serie 4^a.

98. **Daños y perjuicios**—Solo proceden por falta de cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública del boleto de compraventa, la mora en su cumplimiento, que obliga al acreedor á demandarlo judicialmente no basta para hacer procedente la acción.—Jur. Civ., tom. 7, página 227, Ser. 4^a.

99. **Daños y perjuicios**—La suspensión de una obra por culpa imputable única y exclusivamente al constructor, lo hace pasible de los daños y perjuicios que el locador de servicios justifique.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 258, Serie 4^a.

100. **Daños y perjuicios**—La falta de adopción de medi-

96—No se produjo prueba suficiente para fijar el monto dentro del cual debía prestarse el juramento estimatorio—art. 220 del Cód. de Procedimientos.

97—Art. 513 del Cód. Civ.

98—Véase los núms. 9 y 65.

99—Arts. 903, 904 y 1109 del Cód. Civ.

100—Un niño empleado en el ferrocarril del Sud fué mandado por su superior á limpiar una máquina que se hallaba fuera de los talleres, debiendo tenerse presente que esta operación se hacía siempre dentro de ellos con el objeto de evitar accidentes. Mientras hacía la limpieza otra máquina vino sobre ella, moviéndola con el choque: en el movi-



das tendentes á evitar un accidente obliga al pago de los daños y perjuicios que esa omisión haya ocasionado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 276, Ser. 4ª.

101. Daños y perjuicios—La omisión de medidas que tiendan á garantir la seguridad de terceros, importa la culpa y negligencia del constructor de una obra y lo hace pasible de la indemnización de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 320, Ser. 4ª.

102. Daños y perjuicios—Siendo la condenación en costas una carga impuesta al vencido, la exageración en la suma demandada por daños y perjuicios no basta para eximirlo de su imposición,—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4ª.

miento apretó al niño, causándole una muerte instantánea. Se resolvió que la empresa era culpable porque al mandar hacer esa operación fuera del taller, incurrió en culpa, pues esta práctica se adopta precisamente para evitar accidentes y que al infringirla hubo culpa de parte de la empresa. En materia de cuasi-delitos es doctrina corriente que la falta, por más ligera que sea, basta para engendrar la responsabilidad de aquel que causa un daño á otro y por su hecho, cuando por negligencia no se adoptan aquellas medidas que la prudencia indicaría para prevenir un accidente. Véase, Laurent, tom. 20, núms. 466 y 472, donde estudia el art. 1382 del Cód. Nap., igual al 1109 del nuestro. Aquí la imprudencia es indudable, pues la culpa del que dió la orden de limpiar la máquina en un lugar donde no estaba exento de peligros y donde el accidente era posible, es evidente, siendo de aplicación los artículos 1109 y 1113 del Cód. Civ.

101—La acción se dedujo contra una empresa constructora de cloacas por los daños causados por un derrumbe que ocasionó la muerte de una persona, accidente producido por culpa ó negligencia imputable á la empresa. La culpa ó negligencia fué comprobada, siendo una consecuencia necesaria de ella la responsabilidad del agente de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. La empresa hizo escavaciones contra el muro ó pared medianera en contravención á lo dispuesto en el art. 2624 del Cód. Civ.

102—Véase: verb. *Costas*, núm. 56.



103. **Daños y perjuicios**—Las empresas de ferrocarriles son responsables por los daños y perjuicios que resulten de la omisión de medidas tendentes á prevenir accidentes en sus vías.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 4^a.

104. **Daños y perjuicios**—Para la fijación de los causados por falta de cumplimiento de un contrato de compra-venta, debe tenerse en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el que tenía en la fecha en que se entabló la demanda. — Jur. Civ., tom. 8, pág. 137, Ser. 4^a.

105. **Daños y perjuicios**—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable civilmente del daño, aun cuando el hecho que motivó el accidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

106. **Daños y perjuicios**—El rechazo de una acción de daños y perjuicios, no importa un prejuzgamiento para la fijación del monto en caso de ser revocada la sentencia por el Superior.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 41, Ser. 4^a.

107. **Daños y perjuicios**—Las empresas de trasportes son responsables de los daños y perjuicios que por accidentes se ocasionen á los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4^a.

108. **Daños y perjuicios**—El propietario causante de la

103—Véase los núms. 62, 63, 70, 71, 100, y *Acto ilícito*, núm. 4.

105—Arts. 1083, 1109 y 1113 del Cód. Civ. De acuerdo con otro caso resuelto en el tom. 1, pág. 253, Ser. 4^a de la Jur. Civ.

106—Cuando se rechaza una acción de daños y perjuicios teniendo en cuenta la falta de derecho, nada tiene esto que ver con el monto del perjuicio sufrido, dijo la Cámara en este caso. Puede verse en contra el núm. 91, donde se interpreta correctamente la cuestión. Allí hemos emitido nuestra opinión en un sentido contrario al sustentado en el presente sumario.

107—Véase los núms. 62, 63, 70, 71, 100 y 103.

108—Arts. 1197 y 1198 del Cód. Civ.—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 16; *Daños y perjuicios*, núms. 81 y 90.



rescisión del contrato de locación no inscripto, es responsable de los daños y perjuicios que tal hecho ocasione al locatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104, Ser. 4^a.

109. **Daños y perjuicios**—La acción civil de daños y perjuicios por calumnia, es improcedente si el demandado justifica en el juicio civil la verdad de los hechos en que fundó la querella, y éstos se encuentran calificados como delitos por el derecho penal.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

110. **Daños y perjuicios**—El sobreseimiento provisional no hace cosa juzgada, y en consecuencia no basta para fundar una acción de daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querella.—Jur. Civ., t. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

111. **Daños y perjuicios**—Justificada la culpa ó negligencia del propietario de la obra ó sus representantes, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios que el derrumbe haya causado á los vecinos linderos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4^a.

112. **Daños y perjuicios**—Reconocida su existencia y el derecho á cobrarlos, pero no justificado su monto, procede su fijación por juramento estimatorio dentro de la suma que determine el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4^a.

113. **Daños y perjuicios**—No procede la acción de daños

109—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 2.

110—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 9.

111—Véase: *Acto ilícito*, núm. 6. La omisión de medidas precaucionales importa la culpa ó negligencia que la ley exige para responsabilizar por los daños y perjuicios al autor de un acto ilícito, como lo establece la ley y lo consagra la jurisprudencia. Véase: *Acto ilícito*, número 4. Puede verse el núm. 101 del verb. *Daños y perjuicios* que resuelve un caso análogo al del sumario que nos ocupa.

112—Véase los núms. 3, 66, 69, 72, 74 y 83. A este respecto hay jurisprudencia constante, fundada en el art. 220 del Cód. de Proc.

113—En la nota al núm. 6, se desarrollan estensamente los principios



y perjuicios merjentes de un cuasi-delito si no se justifica la culpa ó negligencia imputable al autor del hecho.

Jur. Civ., tom. 10, pág. 203, Ser. 4ª.

Daños y perjuicios—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1—*Cosa ajena*, núm. 1—*Juramento estimatorio*, núm. 6—*Boleto de compraventa*, núm. 12.

Datos—Véase: *Causante*, núm. 1.

Declaración—Véase: *Mandatario*, núm. 4—*Documento privado*, núms. 4 y 5—*Btenes*, núm. 4—*Dinero propio*, núm. 2—*Nulidad de una sentencia*, núm. 3—*Testigos*, núms. 8, 12, 16 y 17—*Divorcio*, núm. 9—*Testigo*, números 3, 4 y 5—*Agravio*, núm. 1—*Instrumento público*, núm. 4.

Declaración de insanía—Véase: *Insanía*, núm. 1.

Declaración de quiebra—Véase: *Quiebra*, núm. 1.

Declaración espresa—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

Declaraciones—Véase: *Prescripción adquisitiva*, núm. 1—*Herencia*, núm. 2—*Testigos*, núms. 19 y 20—*Informes*, núm. 2—*Acto simulado*, núm. 1.

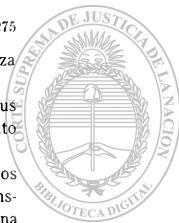
1. **Declaraciones**—De los testigos del testamento, contrarias á lo que de su contenido resulta, no forman prueba mientras no justifiquen haber procedido inducidos por dolo ó violencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

2. **Declaraciones**—De testigos en las que no se hubiesen

que rigen el caso. La culpa no es necesario que exista para que nazca la obligación de resarcir el daño causado. Sinembargo la jurisprudencia de la Cámara se inclina en el sentido del sumario. Véase núms. 10, 16 y 20.

1—Art. 992, Cód. Civ.

2—Los vicios consistían en algunas declaraciones, en no haber sido el testigo examinado por las generales de la ley, y á otros no se preguntó por su edad, estado, profesión y domicilio—art. 191, inc. 1º—siendo por consiguiente nulas las declaraciones—art. 203.



observado las prescripciones de la ley, carecen de fuerza probatoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3ª.

3. **Declaraciones**—De testigos que no dan razón de sus dichos, no forman la prueba que se exige como fundamento de una sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3ª

4. **Declaraciones**—Las del oficial público sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público, forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado, aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 347, Ser. 4ª.

5. **Declaraciones**—Aun ordenadas éstas, si los testigos no son citados por negligencia de la parte, no pueden declarar después de vencido el término de prueba—Jur. Civil, tom. 3, pág. 405, Ser. 4ª.

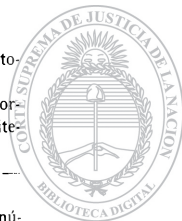
6. **Declaraciones**—De testigos, que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas

3—Ley 28, tit. 16, Part. 3ª.

4—Véase, *Instrumento público*, núm. 4.

5—Porque según disposición del art. 118 del Cód. de Proc., á la parte incumbe urgir la producción de la prueba. La parte, en el caso que nos ocupa, no había suministrado el papel sellado necesario para la citación del testigo con la anticipación requerida por el art. 182 del Código de Proc. En otro caso últimamente se ha suscitado lo contrario, estableciéndose que el hecho de no suministrar el papel sellado necesario, no implica negligencia de la parte, porque el art. 182 citado no exige que la citación sea hecha en papel sellado sino que espresamente determina que se hará en papel simple. Como siempre para esta Cámara los artículos claros de la ley son susceptibles de interpretaciones contradictorias.

6—Art. 118 del Cód. de Proc. De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de los Trib. Véase: Inst., tom. 4ª, verb. *Declaraciones*, núm. 2; *Diligencias de prueba*, núms. 3 y 4; tom. 3ª, mismo verbo, núms. 1, 4, 10, 13 y 15. En el caso del sumario la negligencia de la parte provenía de no haber suministrado el papel sellado necesario para la citación.



después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 86, Ser. 4ª.

7. *Declaraciones*—Si después del libramiento del exhorto, el testigo cambia de domicilio, el oficio debe reiterarse.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Ser. 4ª.

Declaratoria de demencia—Véase: *Demencia*, núm. 1—*Insanía*, núm. 1.

Declaratoria de filiación—Véase: *Filiación natural*, números 4 y 5.

1. *Declaratoria de herederos*—El comprador de bienes testamentarios carece de personería para objetar la declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 331, Serie 3ª.

2. *Declaratoria de herederos*—El reconocimiento de los coherederos basta para dictar la declaratoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 151, Ser. 4ª.

3. *Declaratoria de herederos*—La de herederos legiti-

7—El auto estaba consentido, no pudiendo impugnarse una vez ejecutoriado. Además el Juzgado consideró que debía reiterarse el exhorto porque la causal que motivaba esa reiteración no le era imputable a la parte.

1—La declaratoria de herederos una vez ejecutoriada cubre cualquiera diferencia que contengan las partidas. En el caso ocurrente esas diferencias eran de poco monto, bastando con las demás constancias de autos para hacerse válidamente dicha declaratoria. Esto decía el Juez Dr. Giménez cuando desempeñaba el Juzgado de 1ª Inst., auto que fué confirmado por la Cámara por sus fundamentos.

2—Es jurisprudencia constante.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Heredero*, núm. 6 y 7; *Herederos*, núm. 11. Sin embargo debe tenerse presente que cuando hay coherederos menores, no basta el reconocimiento hecho por los mayores. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Declaratoria de herederos*, núm. 2.

3—El matrimonio es un requisito esencial para que el hijo sea legítimo, y mientras ese requisito no se llene, la declaratoria no puede dictarse.



mos solo puede dictarse previa justificación del matrimonio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 41, Ser. 4ª.

4. Declaratoria de herederos—Justificada por información la filiación legítima y reconocidos por los coherederos ese carácter, el Juzgado debe dictar la declaratoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 59, Ser. 4ª.

5. Declaratoria de herederos—El Juez del domicilio es el único competente para conocer en el juicio testamentario; la declaratoria de heredero dictada por otro Juez no prueba ante él.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 174, Ser. 4ª.

6. Declaratoria de herederos—Para esto debe justificarse el carácter hereditario de los que la soliciten.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 48, Ser. 4ª.

7. Declaratoria de herederos—Es procedente aun cuando exista testamento, si alguno de los instituidos hubiese fallecido antes que el testador.—Jur. Civ., tom. 9, página 264, Ser. 4ª.

Declaratoria de herederos—Véase: *Herederos*, núms. 1 y 6—*Matrimonio*, núm. 6—*Curadora*, núm. 1.

Declaratoria de rebeldía—Véase: *Rebeldía*, núm. 13.

Declinatoria—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

1. Declinatoria de jurisdicción—En el embargo preven-

4—Véase el núm. 2.

5—El art. 1284 del Cód. Civ. establece, que la jurisdicción sobre la sucesión corresponde al Juez del último domicilio.

6—El que solicita cualquiera medida judicial, debe justificar el fundamento de su petición.

7—Una vez muerto el heredero instituido, su coheredero solo lo es por la parte que le acuerda el testamento: si la otra parte también le corresponde por haber muerto su co-instituido, debe justificar este último extremo, obteniendo la correspondiente declaratoria á su favor por la parte que el testamento no le acuerda.

1—La incompetencia de jurisdicción solo puede deducirse en la instancia oportuna del juicio, siendo además de tenerse en cuenta la disposición del art. 463 del Cód. de Proc., donde se establece que el em-



tivo, como diligencia preparatoria del juicio, no procede la declinatoria de jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 9, página 141, Ser. 4^a.

Decreto—Véase: *Término vencido*, núm. 2.

1^a. Defecto legal—En el modo de proponer la demanda, no existe, cuando el precio debe fijarse por árbitros aun cuando no se determine cantidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Ser. 4^a.

Defecto legal—Véase: *Excepción de defecto legal*, números 1, 2 y siguientes.

Defectos de procedimiento—Véase: *Notificación*, números 9 y 12.

Defectos de títulos—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 1, 2 y 3—*Comprador judicial*, núm. 2—*Escritura*, núm. 1—*Remate judicial*, núms. 16, 19, 23 y 24—*Escrituración*, núms. 1 y 5—*Término para la subsanación*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núms. 16 y 20—*Condominio*, núm. 7.

Defensas opuestas—Véase: *Apoderado único*, núm. 5—*Sentencia*, núm. 8.

Defensor—Véase: *Abogado*, núm. 10.

Defensor de ausentes—Véase: *Rebeldía*, núm. 14.

Deficiencia—Véase: *Desistimiento*, núm. 1.

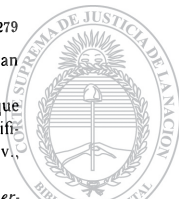
Defraudación—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5.

*1^b. Delito—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado, por los daños

bargo decretado por Juez incompetente es válido, siempre que se hubiese dictado con arreglo á las disposiciones del Tit. XIII, sin que ello importe prórroga de jurisdicción para entender en el juicio que debe iniciarse.

1^a—Véase: verb. *Árbitros*, núm. 3.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 53.



y perjuicios que la prisión fundada en un delito le hayan causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

2ª. Delito—Para que proceda la indemnización civil que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificarse previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

Delito—Véase: *Indemnización*, núm. 14—*Daños y perjuicios*, núms. 12, 13, 17, 68, 77, 105 y 113—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 2—*Condición*, núm. 3.

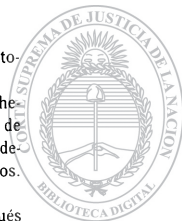
1ª. Demanda—La de la testamentaria contra terceros, corresponde al Juez en turno.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 249, Ser. 3ª.

2ª. Demanda—No debe repetirse en ella los datos que

2ª—La demanda se fundaba en los arts. 107 y 1083 del Cód. Civ., afirmando la existencia del delito del derecho criminal. Al que afirma la existencia de un hecho le incumbe la prueba, lo que vale decir que el actor debe probar el hecho fundamental de su acción.

1—Aunque el juicio sucesorio es universal, esto no quiere decir que todas las cuestiones deban ventilarse ante el Juez de la sucesión. Así por ejemplo, si se trata de cuestiones sobre bienes raíces, éstas deben ventilarse ante el Juez que según los principios generales del derecho sea competente. El juicio universal atrae a sí todos los juicios en que la sucesión sea *demandada*, pero no aquellos en que sea parte como *actora*.

2ª—En una demanda sobre filiación natural no se espresó el lugar en que el niño había nacido, pero se acompañó la partida de bautismo: la Cámara dijo que con la presentación de la partida habían quedado constatados los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc. Parece algo dudosa la resolución de la Cámara porque el hecho de bautizarse una persona en un punto, no quiere decir que el nacimiento hubiese tenido lugar allí; pues es frecuente el caso en que se bautizan los niños lejos del lugar en que han nacido. El lugar del nacimiento y el de aquel en que las relaciones ilícitas tuvieron lugar, son hechos de capital importancia en las demandas de filiación, y por consiguiente debe su omisión ser tenida como un defecto legal de la demanda.



resulten de los documentos acompañados.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 141, Ser. 3ª.

3. *Demanda*—El silencio del demandado sobre los hechos invocados por el demandante limitándose á la falta de derecho del actor, hace procedente se tengan por verdaderos sin necesidad de que se produzca prueba sobre ellos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 285, Ser. 4ª.

4. *Demanda*—La suspensión del procedimiento después de notificada la demanda, solo puede decretarse de conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 67, Ser. 4ª.

5. *Demanda*—La que tiene por objeto el cumplimiento de una ordenanza municipal, corresponde á la jurisdicción de 1ª Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 305, Ser. 4ª.

Demanda— Véase: *Agravio moral*, núm. 1—*Albacea*, núm. 5—*Alimentos*, núm. 5—*Comisión*, núm. 2—*Confesión*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 4—*Cosa juzgada*, núms. 7 y 8—*Contrato de compraventa*, núm. 8—*Costas*, núms. 16, 37, 43 y 52—*Domicilio*, núms.

3—En virtud de lo dispuesto en el art. 100 del Cód. de Proc.

4—Si bien es cierto que antes de ser contestada una demanda ella puede ser modificada, ampliada y hasta puede desistirse de ella, no es menos cierto que una vez contestada no es posible proceder del propio modo sin la conformidad de demandante y demandado, porque de lo contrario sería obligar al demandado á que éste tuviese sobre sí la amenaza de un pleito cuya continuación quedaría indefinidamente á la voluntad ó al capricho del actor con grave perjuicio para su adversario, lo que no sería ni justo ni equitativo. El demandante fué quien solicitó la suspensión del procedimiento.

5—Se dijo que el conocimiento de la causa correspondía á la Justicia de Paz porque el valor de lo cuestionado no pasaba de 500 pesos. La Cámara opinó que debía de entender el Juez de 1ª Inst., porque al mismo tiempo se pedía se declarara que la empresa de gas debía ser obligada á cumplir la ordenanza municipal que prohibía cobrar el consumo del gas con arreglo á las tarifas arbitrarias que la empresa confeccionaba.



7, 8 y 11—*Daños y perjuicios*, núms. 9, 14, 15 y 94—*Detalle*, núm. 1—*Documentos*, núms. 3, 8, 9 y 11—*Embargo preventivo*, núms. 4, 5, 6, 36 y 41—*Escrito*, núms. 1 y 6—*Mora*, núm. 3—*Excepción de defecto legal*, núms. 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 11—*Excepción de falta de personería*, número 2—*Excepciones*, núms. 2, 6 y 8—*Incapaz*, núm. 1—*Excepciones dilatorias*, núm. 2—*Notificación*, núms. 3 y 14—*Instrumento privado*, núm. 6—*Nulidad*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núms. 4 y 5—*Petición de herencia*, núm. 2—*Poder especial*, núm. 1 y 2—*Posiciones*, núm. 7—*Poseción*, núm. 12—*Precio*, núm. 2—*Rebeldía*, núm. 7, 8 y 18—*Prescripción*, núm. 13—*Prescripción interrumpida*, núm. 4—*Prueba escrita*, núm. 3—*Reivindicación*, núm. 16—*Prueba del actor*, núm. 2—*Prueba preventiva*, núm. 1—*Recusación*, núms. 4, 5 y 7—*Sentencia*, núm. 3—*Sentencia nula*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núm. 19.

Demanda de jactancia—Véase: *Jactancia*, núm. 2.

Demanda de nulidad—Véase: *Nulidad*, núm. 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 1.

Demanda de petición de herencia—Véase: *Petición de herencia*, núm. 2.

1. Demanda ordinaria—Los reclamos que pretendan deducir los coherederos entre sí, deben sustanciarse como demandas ordinarias por cuerda separada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 39, Ser. 4^a.

Demanda por daños y perjuicios—Véase: *Prescripción*, núm. 4.

Demanda á terceros—Véase: *Poder especial*, núm. 7.

Demandado—Véase: *Bienes determinados*, núm. 1—*Acción*, núm. 1—*Agravio moral*, núm. 1—*Apoderado*



único, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 1, 45, 49, 51 y 54—*Excepción de falta de personería*, núm. 9—*Excepción de incompetencia*, núm. 6—*Jactancia*, núm. 2—*Juez competente*, núm. 2—*Arbitros*, núm. 2—*Prueba del actor*, núm. 1—*Falsedad*, núm. 7—*Apoderado*, núm. 2—*Domícilio*, núms. 7, 8, 11 y 13—*Excepciones perentorias*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, número 5—*Rebeldía*, núm. 18—*Notificación*, núm. 14—*Posiciones*, núms. 1, 2 y 12—*Calumnia*, núm. 3—*Recusación*, número 4—*Reivindicación*, núms. 13 y 14—*Acción personal*, núms. 1, 2 y 3—*Acción reivindicatoria*, número 2—*Costas*, núms. 26, 28, 37, 45 y 62—*Juez competente*, núm. 2—*Prueba preparatoria*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 13—*Título de propiedad*, número 16.

1^a. Demandados—Aun cuando el procurador puede individualizar las defensas, si son varios los demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom 7, pág. 121, Ser. 3^a.

1^b. Demandante—Corresponde á éste la justificación de los hechos aseverados al deducir su acción y que fueron categóricamente denegados por el demandado.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 210, Ser. 3^a.

Demandante.—Véase: *Acción*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núms. 2 y 3—*Arraigo*, núm. 4—*Interdicto de recobrar*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núm. 4—*Prueba de la acción*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 45, 49 y 54—*Acción personal*, núms. 1 y 2—*Costas*, núm. 62—*Excepción de falta de personería*, núm. 9—*Excepción de incompetencia*, núms. 3 y 4—

1^a—Véase, *Apoderado único*, núm. 3.

1^b—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a.



Excepción de prescripción, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núms. 3 y 4—*Domicilio*, núms. 13 y 14.

1ª. Demencia—El pedido de declaratoria de demencia por el Asesor de menores, es causa de escusación si la misma persona desempeña el juzgado en que se ha pedido la insanía.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 4ª.

Demencia—Véase: *Acusación calumniosa*, núm. 1.

1ª. Demolición—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre expropiación de un terreno ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3ª.

Demolición—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

Demora—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 38—*Alegar*, núm. 2—*Construcciones*, núm. 1.

1ª. Denuncias—Los jueces de lo civil son incompetentes

1ª.—El Asesor de menores había dictaminado, que debía declararse el estado de demencia calificada de imbecilidad. En el expediente se discutía si el sujeto era ó no loco y no podía negarse que el Asesor que vino á ser Juez después, había comprometido opinión en uno de los sentidos en que debía recaer resolución definitiva.

1ª.—Véase la nota al art. 43, Cód. Civ.

1ª.—Un acreedor seguía contra una testamentaria juicio sobre cobro de pesos, el que se tramitaba por cuerda separada. Después de llamado autos para definitiva, se presentó diciendo que la firma del testamento en virtud del cual había entrado en posesión de la herencia el heredero, era falsa, y solicitó se agregara el escrito con un dictamen pericial al incidente sobre cobro de honorarios, á fin de que dándose vista al agente fiscal, iniciara éste las acciones del caso. El Juez no hizo lugar, porque el art. 215 se oponía á que ese escrito fuese recibido. Consentida esta resolución, la misma parte se presentó en el expediente testamentario á lo que tampoco se hizo lugar por no ser parte el postulante. Cuando en un expediente se descubre una falsificación, los que son parte en él tienen derecho á denunciar la falsificación y pueden solicitar las medidas necesarias para comprobarla á los efectos civiles: debe hacerse uso de este derecho en el tiempo que acuerdan las leyes de procedi-

para conocer, y no están obligados á dar curso á las denuncias sobre falsedad de documentos agregados á un expediente por el que no sea parte en el juicio.— Jur. Civ. tom. 5, pág. 400, Ser. 4^a.

Denunciante—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1. De oficio—El desconocimiento del carácter heredi-

mientos. Sería anormal admitir que el hecho de tener pleito una persona con otra, facultase á cada uno de los litigantes á intervenir en los demás pleitos de la contraria. Los asuntos judiciales no deben complicarse con puntos que están fuera de discusión. El orden público no lo justificaria desde que hay otros medios de satisfacer sus exigencias. Si se trata de la represión del delito de falsificación, el Juez Civil nada tiene que ver, es el de lo Criminal el único competente: es allí donde debe presentarse, y si para la instrucción del proceso necesita datos, puede pedirlos al Juez Civil. Si la legislación civil ha tomado en cuenta los delitos, es al solo efecto de la indemnización de los daños y perjuicios inferidos á sujetos pasivos del hecho delictuoso.

1.—Un hijo nació á los dos meses de muerto el padre y éste murió un mes después de contraer matrimonio con la madre de aquél. El Dr. Mendez Paz, de oficio no hizo lugar á la declaratoria de herederos, fundándose en que el nacimiento tuvo lugar fuera del término menor que establece la ley para que los hijos sean considerados como legítimos. El Dr. Cortés en su carácter de fiscal de las Cámaras calificó esa resolución de *estraviada, irregular é insubsistente*. La Cámara la calificó del mismo modo, y revocó la resolución fundándose en que cuando el marido supo al casarse el embarazo de su esposa, lo cual debía suponerse en el caso presente desde que en esa época la esposa estaba en el séptimo mes de su embarazo, nadie sino el mismo marido puede desconocer la legitimidad del hijo que dió á luz su mujer antes de los seis meses de casada. Si no lo supo ó falleció todavía en tiempo de reclamar, ese derecho pasa exclusivamente á sus herederos, ya sean éstos, la viuda, los padres ó hermanos, etc. del causante. No es posible sospechar siquiera dentro del orden natural de las cosas que el causante ignorase la preñez de su prometida en el acto de contraer matrimonio, cuando en la época en que esa unión se realizaba había ella entrado en el séptimo mes del embarazo. Goyena al glosar un artículo de su Proyecto, igual al 283 de nuestro Cód. Civ., dice «porque se presume *juris et de jure*, en este caso, que el padre contrajo el matrimonio para reparar la debilidad ó falta anterior, y que no habría consentido en él sin estar persuadido





tario del hijo póstumo, por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio: solo los herederos del esposo tienen personería para solicitarlo. — Jur. Civ., tom. 6, pág. 397, Ser. 3ª.

2. De oficio.—La legitimidad del hijo no desconocida por el esposo no puede ser discutida ni invocada por terceros y los jueces deben de oficio evitar los juicios que con ese objeto se produzcan. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 4ª.

3.—De oficio.—Los jueces no pueden de oficio descono-

de que la mujer llevaba en su vientre el fruto de sus amores recíprocos»; y más adelante agrega. «Si el marido murió antes del nacimiento, ¿quién podrá descorrer el velo de un misterio sabido únicamente por él y por su mujer?» El desconocimiento del carácter hereditario, no puede ejercitarse de oficio por los jueces, porque en esa declaratoria no aparece comprometida ninguna ley de orden público, no es caso de los que por expresa disposición de la ley se hallan facultados para proceder prescindiendo de la voluntad de las partes.

2.—Sin embargo en el número precedente el juez Mendez Paz de oficio quiso promover cuestión sobre este punto de derecho. Cuan distinto es el criterio de este Juez al del común de los hombres. La Cámara dice que *deben evitarse* de oficio estas cuestiones, mientras el Juez piensa que *deben suscitarse* de oficio. Véase: verb. *ilegitimidad*, núm. 2.

3.—Esta resolución fué revocatoria de una providencia del Juez Mendez Paz, quien «por razones incomprensibles ó de ningún momento» como decía el Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés, resolvió de oficio no hacer lugar á la declaratoria de herederos solicitada. Los antecedentes son los siguientes: Fallecida una mujer casada en el año 1879, su esposo y sus hijos se presentaron por medio de un apoderado único iniciando el juicio testamentario del caso, y solicitando que previos los trámites legales se les declarara herederos. Llenados los trámites y cuando se esperaba que se hiciese la declaratoria, el Juez de oficio no hizo lugar porque uno de los hijos que pedía ser declarado heredero había nacido un mes después de contraer matrimonio sue padres. Esta negativa fué tanto más injusta y estraña cuanto que todos los interesados, el esposo y los demás hijos indisputablemente legítimos estaban

cer la legitimidad de los hijos nacidos después del matri-

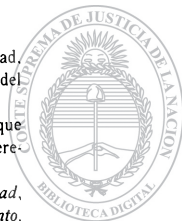
conformes y se hallaban de acuerdo en reconocer como coheredero al hermano nacido en las circunstancias espuestas. El sumario consagra el verdadero principio que rige al caso. Con efecto, la ley procediendo con mucha prudencia y gran sabiduría, ha querido resguardar la armonía en los matrimonios, la tranquilidad del hogar y el sagrado de la familia impidiendo el que cualquiera pudiese turbarla é introducir en ella la confusión suscitando temerariamente cuestiones delicadas sobre la legitimidad de los miembros que la componen, las que á su vez vendrían á manchar también la memoria de las personas ya fallecidas. En el caso propuesto del nacimiento anticipado ha ido todavía más adelante en la realización de sus propósitos haciendo al marido árbitro exclusivo y absoluto para reconocer ó reclamar sobre la legitimidad del hijo que dió á luz su esposa; porque dependiendo aquélla de que éste sea también suyo ó no, lo que él solo puede saber, la resolución de consiguiente, debía quedar, y en efecto ha quedado librada al dictado de su conciencia. El Código no determina espresamente en qué tiempo el marido debe en tal caso deducir su acción de desconocimiento de la paternidad, pues al señalar el plazo perentorio de dos meses, se refiere á los hijos concebidos durante el matrimonio; pero como la razón porque se ha fijado un plazo tan breve, á saber, la de no dejar de un modo indefinido, incierto, el estado del niño, es igualmente aplicable por analogía al del que nace en el matrimonio, aunque hubiese sido concebido antes, debe suponerse que respecto de éste, rige también el mismo término—Cód. Civ., art. 254.—En los demás casos de desconocimiento de la paternidad, si el marido falleciese dentro del espresado plazo, sin haber deducido su acción, pueden intentarla sus herederos, gozando al efecto íntegro del indicado término, según lo declara espresamente el art. 258, por cuanto lo representan en todo y por todo como sucesores universales, continuando su misma personalidad. Mas en el caso que nos ocupa y tratándose de un niño nacido dentro de los seis meses siguientes á la celebración del matrimonio, los herederos por disposición terminante de la ley no pueden desconocerlo, si el marido no lo hiciese, aun cuando hubiese fallecido antes de vencer los dos meses de haber tenido conocimiento del parto de su mujer—inc. 1º del citado artículo.—La razón es, que en este caso, en que el marido conociendo el alumbramiento anticipado de su esposa, no reclamó sinembargo, respecto á su paternidad, se ahipara absolutamente á aquel en que se le justificase haber tenido al casarse conocimiento del embarazo de su esposa, en el cual le niega toda acción, pues cuando no hubiese tenido ese





monio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 3^a.

conocimiento el parto de aquélla en dichas condiciones, habría venido á revelárselo—Cód. Civ., art. 243.—Hé aquí cómo se espresa al respecto el Dr. Cortés en el Senado Nacional, con motivo de la corrección que se hizo al precitado art. 253, cambiándose el adverbio *antes* por *dentro*. Hay una disposición en que se prescribe: que si el marido antes del matrimonio hubiera sabido el embarazo de su mujer, no podría contradecir la legitimidad del niño que ésta dé á luz, aunque nazca antes de seis meses; pero sería difícil quizás comprobar el marido, si quisiera desconocer á un hijo suyo, que sabía al casarse el embarazo de la novia. No podría, empero, de ningún modo, el marido pretender haber ignorado el hecho, cuando habiendo nacido un hijo de su mujer, antes de cumplirse seis meses de la celebración del matrimonio, constara que él hubiese tenido noticia del embarazo, pues este suceso vendría á poner de manifiesto aquella circunstancia, desde que ese niño no habría podido ser concebido en el matrimonio. Aceptada, pues, la corrección propuesta, su sentido equivale á declarar: que aunque no se pruebe al marido que conoció el embarazo de su novia, si hubiese sabido después que su mujer libró, antes de cumplidos seis meses del casamiento y no reclamó, esto equivale á haber conocido al casarse el embarazo y de consiguiente no podía ya desconocer al hijo—Correcciones y fe de erratas al Cód. Civ., pág. 251.—La opinión del esponente bien poco valdría por cierto de por sí, pero como ella fué aceptada por el Honorable Congreso, fundándose en las consideraciones indicadas, la corrección que se sancionó y se introdujo en el precitado art. 253, es por esto que se la ha mencionado, á fin de ilustrar el punto que examina con relación á la causa que debe resolverse. Dedúcese de aquí que no habiéndose en el caso presente reclamado por el esposo en más de treinta años contra el desembarazo que no niega haber sabido, en que dió á luz, antes de un mes de celebrado el matrimonio, lo tiene reconocido tácitamente por suyo, no podría ya rechazarlo de modo alguno y éste debe considerarse legítimo—art. 319.—Tanto menos el padre podría cuestionar la filiación ni la legitimidad de aquél, por haber nacido en las condiciones espuestas, cuanto que prohibiéndolo absolutamente la ley, siempre que el marido de cualquier modo hubiese por suyo al hijo de su mujer. El padre no solo lo había verificado tácitamente, sino también criándolo á su lado, tratándolo y considerando como hijo suyo á la par de los demás. A esto se agrega todavía, que el hecho mismo de otorgar en común su poder público,



4. De oficio— Siempre que existan indicios de falsedad, deben pasarse de oficio los antecedentes al Juzgado del Crimen.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

5. De oficio—El Juzgado no puede de oficio exigir que la parte presente los recaudos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 316, Ser. 4ª.

De oficio—Véase: *Costas*, núms. 2 y 55—*Ilegitimidad*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núm. 2—*Nómbreamiento*, núm. 2—*Peritos*, núm. 6—*Nulidad de la sentencia*, números 3 y 18—*Apoderado único*, núm. 4—*Nulidad absoluta*, núm. 1.

1. Dependientes—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento: la ley fulmina esa pena para el caso en que los firmantes como testigos sean dependientes autorizados para autorizarlas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4ª.

Dependientes—Véase: *Divorcio*, núm. 9.

Depositorio Véase: *Documento de depósito*, núm. 1.

como lo hizo junto con el padre con sus demás hijos, para reclamar la herencia de su finada esposa, y el haberla reclamado efectivamente por medio de un procurador en la forma indicada, importaría un acto manifiesto de reconocimiento, después del cual, ni al Juez ni á nadie le era lícito poner en duda la filiación legítima de aquél.

4—Art. 160 del Cód. de Proc.

5—La Cámara dijo que «la no presentación de los documentos con que se instruye la demanda, no da lugar á repeler un escrito de demanda por defecto legal en el modo de promoverla, como lo tiene resuelto la jurisprudencia del Tribunal.» En el caso que nos ocupa, el Juez de oficio rechazó el escrito de demanda, fundado en el art. 75 del Cód. de Proc. Pero es de advertirse que si el Juez tiene el derecho de repeler de oficio las demandas es cuando ellas no se ajusten á las prescripciones del art. 71, entre cuyos requisitos no está la falta de documentos que sirven de fundamento á la acción.

1—Véase *Escritura pública*, núm. 29.



1ª. Departamento Nacional de Higiene.—Puede penar con multa el ejercicio indebido de la medicina ó la venta de específicos no aprobados ó permitidos, pero carece de facultad para clausurar los establecimientos en que se verifique la expedición.—Jur. Civ., tom. 2. pág. 317, Ser. 4ª.

Dependiente.—Véase: *Contrato de locación de servicios*, núm. 5.

Depositantes.—Véase: *Embargo*, núm. 20.

Depositario.—Véase: *Esposa*, núm. 5.

1. Depositario judicial.—Los títulos de propiedades indivisas deben estar en poder del depositario de los papeles nombrado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 19, Ser. 4ª.

2. Depositario judicial.—Procede la ejecución contra éste, aun cuando sea el establecimiento fijado por la ley al efecto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 108, Ser. 4ª.

1ª.—La ley de 31 de Diciembre de 1880 que organiza y determina las atribuciones de este Departamento, establece en el art. 4, inc. 6º, que se encuentra facultado para vigilar el ejercicio legal de la medicina, de la farmacia y de las demás ramas del arte de curar, con arreglo á las disposiciones vigentes de la Provincia de Buenos Aires hasta tanto el Congreso dicte la ley respectiva: de aquí se deduce que la ley vigente es la de la Provincia. Una industria que elabore sustancias medicinales, que tan importantes y delicadas funciones desempeña en las familias, debe estar sometida á reglas fijas, y debe reunir las condiciones especiales que la ley exige, sin que baste para establecerla una patente industrial, para que las autoridades encargadas de velar por la salud pública toleren su permanencia, y por el contrario deben aplicar las penas establecidas para evitarlo: pero esas penas tienen su límite en la ley misma y en manera alguna pueden ultrapasarse. Y así la recordada ley en el cap. VII enunciando las penas en que incurren los contraventores, no consigna en ninguna de ellas para ordenar la clausura de un establecimiento y si solo para imponer multas en la forma y previos los trámites que determina.

2.—Se trataba del Banco Nacional que no entregaba un depósito hecho en sus arcas. Se ordenó la entrega en virtud de lo dispuesto en el art. 459 del Cód. de Proc.



3. **Depositorio judicial**—El embargado puede ser depositario judicial de los bienes con la responsabilidad que la ley le impone en ese carácter.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 370, Ser. 4^a.

1^a. **Depósito**—Para que haya violación del depósito es necesario que la modificación haya tenido lugar en el objeto embargado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 44, Ser. 4^a.

Depósito—Véase: *Comprador judicial*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 1.

1^b. **Depósito de muebles**—Si tiene lugar, como accesorio de otro contrato, se considera gratuito.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 424, Ser. 3^a.

1^c. **Depósito gratuito**—El documento en que conste este

3—De autos resultaba la responsabilidad del deudor como propietario de un inmueble confesado por el acreedor embargante.

1^a—Se decía que el depósito había sido violado, porque se cambió un portón. Pero como solo había sido materia de la diligencia de embargo un galpón y el techo de zinc, se declaró que no había habido violación, pues el portón no estaba comprendido entre los bienes materia del embargo.

1^b—Celebrado un contrato entre el padre de unos menores y otra persona que se comprometió á su guarda mediante una mensualidad, ésta pretendió cobrar depósito por los muebles pertenecientes á los menores y que fueron llevados juntamente con ellos. No se hizo lugar á lo pedido porque los muebles, como se ha dicho, pertenecían á los menores y en tal carácter pasaron á poder de la guardadora, habiéndose estipulado así, y no en calidad de depósito como se pretendía. Es principio elemental aceptado en derecho, que para que un acto tome el carácter de depósito, es preciso que se tenga por fin principal la guarda de la misma, y cuando este objeto es solo secundario, cuando no es sino la consecuencia de un contrato, el depósito en nada cambia la naturaleza de aquél.

1^c—La ley de la materia dice que *todo acto* ó contrato, debe estenderse, cuando se hace por escrito, en el sello proporcional al valor del acto ó contrato. La ley no hace diferencia entre un acto ó contrato de carácter lucrativo y los que no lo tienen, haciendo pesar indistintamente el impuesto sobre unos y otros. Así con los testamentos y donaciones que no puede decirse se hagan con el fin de lucrar, sin embargo están su-



depósito, está sujeto al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 385, Ser. 4^a.

1^a. Depósito judicial—Sin la conformidad del comprador en remate judicial, no se puede disponer del precio cobrado, antes de la escrituración: los fondos extraídos in debidamente deben ser reintegrados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 384, Ser. 4^a.

Depósito judicial—Véase: *Fondos*, núm. 1.

1^b. Depósito irregular—Reconocida la recepción de un depósito irregular, el deudor está obligado a su devolución, sin que pueda invocar la compensación con saldos de créditos que no revisten igual origen.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 257, Ser. 3^a.

1^c. Depósito particular—A la orden del acreedor, no puede en ningún caso tener los efectos del pago por consignación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Ser. 3^a.

jetos al impuesto del papel sellado, del propio modo, el acto que acredita un depósito gratuito está sujeto a las prescripciones de dicha ley. Siempre que el depositante quisiese munirse de una constancia escrita tendría que pagar el impuesto.

1^a—La Cámara dijo: «que ni la testamentaria ni los acreedores pueden disponer para sus pagos de fondos que aun no le pertenecen; pues que han sido depositados en garantía de una compra aun no escriturada.» Cuando la posesión no ha sido dada al comprador, la aplicación de esta resolución es correcta, pero si la posesión ha sido dada, el comprador no puede oponerse, porque el contrato de compraventa queda perfecto con la aprobación del remate, siendo la posesión dada la consumación del contrato. El comprador no puede poseer la cosa y el precio pagado por ella. La compraventa, para que sea considerada como perfecta no requiere la escrituración cuando la venta se hace en subasta pública—artículo 1184 del Cód. Civ.—Por la aprobación del remate y la posesión dada judicialmente pasa el inmueble al dominio del adquirente, y consiguientemente queda éste obligado a abonar el precio. No puede oponerse a su extracción cuando estuviese depositado en el Banco.

1^b.—Véase: verb. *Compensación*, núm. 1

1^c.—El art. 756 del Cód. Civ. establece que el pago por consignación tiene lugar cuando el depósito es judicial.



1^a. Depósitos judiciales—Acuerdo ordenando que estos se hagan en la Caja de Conversión ó en Banco Nacional, en custodia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 123, Ser. 4^a.

Derecho—Véase: *Mandatario*, núm. 8—*Jactancia*, número 2.

Derecho acordado—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^b. Derecho á la herencia—Los que lo pretendan, deben antes de intervenir en el juicio testamentario, justificar por cuerda separada los derechos que invocan.—Jur. Civil, tom. 1, pág. 26, Ser. 3^a.

Derecho á poseer—Véase: *Poseción*, núm. 1.

Derecho común—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^c. Derecho de petición—El heredero de grado más pró-

1^a—La ley de 5 de Nov. de 1872, en su art. 23 disponía, que los depósitos judiciales se hiciesen en el Banco Nacional; esta disposición implicaba siempre que el Banco estuviese en condiciones de devolverlos, pero después fué un hecho de pública notoriedad que el Banco se encontraba imposibilitado de dar cumplimiento á la devolución de los depósitos vencidos, de acuerdo con el precepto legal. Ante esa situación anormal de dicho establecimiento, la Cámara consideró que debía tomar las medidas del caso tendentes á salvaguardar los intereses confiados á su custodia, resolvió hacer saber á los jueces, que los depósitos debían hacerse en la Caja de Conversión ó en Banco Nacional, entendiéndose en este último caso que en el carácter de Tesorería Nacional que le confiere la ley de 12 de Oct. de 1872 en su art. 9, y que los fondos que se depositaran debían conceptuarse como colocados en idénticas condiciones á los pertenecientes al Fisco Nacional.

1^b—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 1^a, verb. *Heredero*, núm. 1297.

1^c—El uso de ese derecho importa el ejercicio del derecho de propietario de la herencia y su aceptación pura y simple, y como consecuencia la renuncia irrevocable de la facultad de repudiarla ó de aceptarla bajo beneficio de inventario, remontando su efecto al día de la apertura de la sucesión—arts. 3323, 3329 y 3341 del Cód. Civ.—No habiendo *lanción* por parte de los herederos más próximos en grado, los más remotos carecen de todo derecho á esa herencia.



ximo que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

Derecho de representación—Véase: *Hijo natural*, núm. 3

—**Filiación natural**, núm. 12.

1. **Derecho de retención**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencia ejecutoriada reconocido el derecho de retención por las mejoras hechas en la casa.—Jur. Civ., tom. 10, página 140, Ser. 4ª.

2. **Derecho de retención**—Puede ser ejercido por el tenedor de la cosa aun cuando no exista crédito líquido, ni convenio sobre el monto de lo adeudado por razón de la misma.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 357, Ser. 4ª.

3. **Derecho de retención**—Reconocido este derecho, la acción de daños y perjuicios fundada en este hecho, debe declararse improcedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4ª.

1—Arts. 2466, 3939 y 3944 del Cód. Civ.

2—El derecho de retención se acuerda como medida precaucional para asegurar al acreedor—art. 3939, Cód. Civ.—De este derecho se puede hacer uso sin hacerlo depender previamente de un pleito sobre el monto de su acreencia, pues la secuela del juicio daría lugar casi siempre á la desaparición de los objetos á asegurar con el derecho de retención. Este derecho no está subordinado á la condición de que el crédito sea líquido, reconocido por el deudor ó por ejecutoria judicial. Lo contrario se deduce de su propia naturaleza y basta para fardarlo, que la deuda tenga por origen el contrato reconocido por el mismo propietario, y como causa los servicios prestados con ocasión de la cosa misma que se retiene—art. 3940.

3—Porque la retención es un derecho acordado por la ley, y el ejercicio de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto—artículo



4. **Derecho de retención**—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Derecho de retención—Véase: *Escribano*, núm. 1.

Derecho de retrotraer—Véase: *Propiedad*, núm. 2.

1. **Derecho en expectativa**—El estado civil de las personas, no puede conceptuarse un derecho en expectativa, y las leyes posteriores al nacimiento no pueden modificar el derecho adquirido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4^a.

Derecho excluyente—Véase: *Edictos*, núm. 4.

Derecho penal—Véase: *Calumnia*, núm. 2.

Derecho proporcional—Véase: *Bienes de la sucesión*, número 3.

Derechos—Véase: *Herencia*, núm. 2—*Agravio*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 6—*Comprador*, núm. 3.

Derechos adquiridos—Véase: *Efecto retroactivo*, núm. 1—*Mensura*, núm. 1.

Derechos anteriores—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.

Derechos contradictorios—Véase: *Información sumaria*, núm. 2.

Derechos de socio—Véase: *Cesión*, núm. 2.

Derechos del vendedor—Véase: *Posesión*, núm. 7.

1071 del Cód. Civ.—y por consiguiente el que lo ejecuta no es pasible de los daños y perjuicios—art. 1067 *ibid*.

4—Tratándose de asuntos que corresponden a distinta jurisdicción, no puede discutirse en el pleito sobre daños y perjuicios lo que ha de ser materia de resolución en otro preexistente. La acción de daños y perjuicios presupone la falta de derecho para usar de la facultad de retener debido a la exageración en el cobro, y es esa exageración la que debe establecerse en el juicio sobre su cobro.

1—Art. 3° del Cód. Civ.



1. **Derechos hereditarios**—El cesionario de derechos hereditarios, carece de derecho para oponerse al pago de deudas de la sucesión, fundándose en la disminución del haber, pues se le conceptúa como que ha adquirido los que corresponderían a su cedente después de liquidada la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 3^a.

2. **Derechos hereditarios**—Las disposiciones relativas a la cesión de derechos, no son aplicables a la cesión de derechos hereditarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Serie 3^a.

3. **Derechos hereditarios**—La fecha de la escritura es la fuente del derecho cuando el total de los derechos hereditarios ha sido cedido a diversas personas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Ser. 3^a.

1—Es principio recibido en derecho, que no hay herencia sino después de pagados todos los créditos pasivos de la sucesión. Además, la cesión no tiene más efecto que transferir al tercero los derechos que correspondían al heredero; y si éste no puede oponerse legítimamente al pago de las deudas de la sucesión, tampoco puede hacerlo el cesionario, porque nadie puede transmitir más derechos que los que él tiene. El cesionario continúa la persona del cedente, y si éste no puede oponerse, tampoco puede aquél.

2—Así lo demuestra la nota puesta al art. 1484 del Cód. Civ., cuando dice, «regularmente los Códigos y los escritores tratan en este Título de la cesión de las herencias, método que juzgamos impropio, y reservamos esta materia para el Libro IV, en que se tratará de las sucesiones.

3—Por las razones espresadas en el número precedente. Los artículos 1439 y 1470 son inaplicables cuando se trata de la cesión de acciones y derechos hereditarios, pues aquéllos se refieren a la cesión de créditos, la que es distinta de la cesión de acciones hereditarias. Con efecto, el título «De la cesión de créditos» del Cód. Civ., legisla para las relaciones de derecho entre cedente y cesionario y el deudor cedido, entre sí y respecto de terceros, pero en el caso del sumario no se trata de ningún crédito que el cedente tenga contra otra persona que sea su deudora. En la cesión de créditos, la notificación al deudor cedido y la aceptación hecha por éste, crea relaciones directas entre el



4. **Derechos hereditarios**—El derecho que la ley concede al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser ejercido si el último aceptando la herencia, hizo uso de ese derecho.—Jur. Civ. vil, tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

3. **Derechos hereditarios**—Si la cosa comprendida en la

cesionario y el deudor, y por consiguiente esa notificación y aceptación es el hecho principal para obligar á este último que es extraño al acto de la cesión. De ahí nace que el cesionario que primero ha notificado la cesión al deudor ó ha obtenido su aceptación auténtica, tenga preferencia sobre otro cesionario de fecha anterior, pero posterior en la notificación al deudor. En la cesión de créditos, para que pueda producir todos sus efectos legales, es necesaria la concurrencia del cedente y del cesionario y la del deudor cedido, ya sea por medio de su notificación de la cesión ó ya por medio de su aceptación formal. En la cesión de derechos hereditarios, basta la concurrencia del cedente y del cesionario, pues no hay deudor alguno al que deba notificarse, ni que deba aceptar la cesión. Y, que la cesión de las herencias ó derechos hereditarios no está legislada en el título de la cesión de créditos, lo demuestra con toda evidencia la nota puesta por el Codificador al artículo 1484. La cesión de derechos hereditarios es un contrato consensual que queda perfeccionado por el acuerdo de voluntades de los contratantes, y la que invocaba el demandante estaba revestida de la forma establecida en el art. 1184, inc. 6º del Cód. Civ. Las escrituras de cesión de fecha posterior carecen de valor, pues el cedente, cuando otorga una escritura posterior, ya se ha desprendido de sus derechos hereditarios, y mal puede ceder lo que no le pertenece.

4—Porque este acto del pariente más próximo, importa el ejercicio de propietario de la herencia, y su aceptación pura y simple, y como consecuencia la renuncia irrevocable de la facultad de repudiarla ó de aceptarla bajo beneficio de inventario, remontando su efecto al día de la apertura de la sucesión—arts. 3323, 3329 y 3341 del Código Civ.—En este caso no hay inacción por parte de los parientes más próximos en grado para recoger la herencia, y mal puede pretenderse por los parientes más remotos, derechos á esa herencia aceptada por aquéllos.

5—Véase *Cesión de Derechos*, núm. 5.



cesión de derechos resulta de menor valor, el cesionario puede pedir la evicción pero no la resolución del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4ª.

Derechos hereditarios—Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 2—*Colación*, núm. 1—*Cesión de derechos*, núms. 4 y 5—*Escritura pública*, núm. 13—*Mandato*, núm. 11.

Derechos litigiosos—Véase: *Transacción*, núm. 6.

Derechos no litigiosos—Véase *Transacción*, núm. 1.

Derechos preferentes—Véase: *Capellanía*, núm. 2.

Derechos reales—Véase: *Obligación de dar*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 12—*Inscripción*, núm. 1.

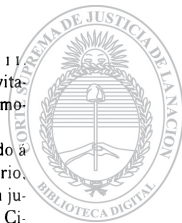
Derechos reconocidos—Véase: *Embargo preventivo*, número 34.

1ª. **Derechos y acciones**—El condómino mayor de edad puede válidamente ceder á un tercero los derechos y acciones que le correspondan sobre la universalidad de los bienes de la herencia, aun cuando alguno de los condóminos sea menor de edad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3ª.

1. **Derechos y acciones**—Véase: *Escritura de venta*, número 1—*Contrato de compraventa*, núm. 21.

Derechos y obligaciones—Véase: *Memoria pía*, núm. 1—*Escritura de venta*, núm. 1.

1—Nuestro Código Civil permite la cesión de derechos hereditarios—arts. 2160 y siguientes—además el art. 1446 establece, que los créditos condicionales ó eventuales son cedibles. No puede ser nula la cesión de derechos en el caso del sumario porque ese acto implique transferir á un tercero el condominio, pues antes de la cesión ese estado ya existía; siendo así que la cesión solo hace pasar los derechos de una persona mayor de edad á otra de igual estado que se sustituye al cedente, y este acto no está prohibido por disposición alguna del Código. El cedente solo transfiere la parte que le corresponde sin perjudicar los derechos del menor.



Derrumbamiento—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 111.

1^a. **Desacato**—Importa un desacato al Juez la invitación para que se escuse de entender en el juicio por motivos personales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 81, Ser. 4^a.

2^a. **Desacato**—La agregación de la firma del letrado a un escrito presentado sin ella, según cargo del secretario, importa un desacato y se encuentra comprendida en la jurisdicción disciplinaria conferida á los Jueces.—Jur. Civil, tom. 5, pág. 326, Ser. 4^a.

3. **Desacato**—El reo de desacato á la autoridad, no puede hacer responsable al funcionario desacatado por los daños y perjuicios que la prisión fundada en ese delito le haya causado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3^a.

Desacato—Véase: *Recusación*, núm. 18.

1^b. **Desalojo**—El propietario tiene derecho de desalojar como intruso, sin que ello importe un acto ilícito, al ocupante sin su consentimiento.—Jur. Civ., tom. 3, página 167, Ser. 3^a.

2^b. **Desalojo**—No procede la escepción de litispendencia, en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3^a.

1^a—Esa circunstancia implica falta de respeto y consideración al magistrado á quien se dirige.

2^a—Nos hemos ocupado de este caso en el verb. *Abogado*, núm. 4.

3.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 53.

1^b—Véase, verb. *Acto ilícito*, núm. 1.

2^b—Ambos juicios no son ni de la misma índole ni del mismo carácter: en uno como en otro caso se persigue diverso fin, aun cuando son las mismas partes las que intervienen y la cuestión versa sobre la misma cosa. Por otra parte, el juicio de desalojo se sigue por trámites especiales establecidos en el Cód. de Proc., y en el caso que nos ocupa, correspondía á la justicia de Paz, mientras que el juicio sobre escrituración correspondía á la jurisdicción ordinaria de primera instancia teniendo en cuenta el valor de la cosa, siguiéndose el juicio por la vía ordinaria.



3. Desalojo—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario, solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo contrato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 165, Ser. 3ª.

4. Desalojo—El locador que exige judicialmente el desalojo faltando a lo estipulado en el contrato de locación sobre prórroga, es responsable de los daños y perjuicios que con su conducta ilícita cause al locatario.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

5. Desalojo—La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios deduzca el locatario por falta de cumplimiento del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3ª.

Desalojo—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 9—*Contrato de arrendamiento*, núm. 29—*Violencia*, núm. 1.

Desaparición—Véase: *Sociedad*, núm. 2.

3—El sublocatario no puede cambiar por su sola voluntad el carácter de tal por el de locatario directo de la propietaria, tanto menos si se considera que el sublocador tiene derecho para exigir del sublocatario la devolución de la cosa sublocada, a la terminación del contrato—art. 1615, Cód. Civ.—a fin de hacer valer los derechos que le correspondan contra el propietario en razón de las mejoras efectuadas, como lo establecía el contrato celebrado. El sublocatario ha debido usar del derecho que le acuerda el art. 1591 del Cód. Civ., en el caso de que el propietario pretendiese eximirse del cumplimiento de las obligaciones que tiene contraídas con el locatario, y en todo caso demandar al sublocador para que cumpla con las obligaciones que le imponen los arts. 1526 y 1527, pero no puede legalmente prescindir de él dando por rescindido el contrato que le afecta directamente, ni tampoco celebrar con el propietario un contrato directo de locación incompatible con el que éste tenía con el locatario primitivo y en virtud del cual era él mismo sublocatario.

4—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 16.

5—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.



Descargo—Véase: *Estampilla*, núm. 2.

Desconocimiento—Véase: *De oficio*, núm. 1.

Descuento—Véase: *Obligación a plazo*, núm. 2—*Man datario*, núm. 14.

Desembargo—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2.

1. Desistimiento—Reconocida la deficiencia de los títulos, procede el desistimiento del comprador dentro del término que fija la ley. Jur. Civ., tom. 4, pág. 229, Ser. 3ª.

2. Desistimiento—El comprador en remate judicial, no puede exigir la bonificación de los títulos: su derecho se circunscribe a optar por su aceptación o por el desistimiento de la compra.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 247, Serie 3ª.

3. Desistimiento—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 3ª.

4. Desistimiento—Si el comprador opta por el desistimiento dentro del término que la ley fija, debe dejarse sin efecto la venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 130, Ser. 4ª.

5. Desistimiento—La existencia de un condominio que debe separarse judicialmente, importa un defecto del título

1—Siempre que el vicio no fuese subsanable en breve tiempo—artículo 522 del Cód. de Proc.

2—El comprador fué el Dr. Mendez Paz, quien manifestó estar conforme con los títulos de propiedad, pero exigió que se practicaran previamente a la oblación ciertas diligencias que el Juez consideró *inútiles e ilegales*, por cuya causa no se le hizo lugar a lo pedido, ordenándose la oblación de acuerdo con lo establecido en el art. 522 del Cód. de Procedimientos.

3—Véase: *Apelación*, núm. 2.

4—Si el desistimiento tiene lugar por defectos del título—art. 522 del Cód. de Proc.

5—Véase verb. *Condominio*, núm. 7.



que permite el desistimiento al comprador en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 4^a.

6. **Desistimiento**—El retardo en la escrituración de un bien comprado en remate judicial, no puede fundar el desistimiento si la mora es imputable al comprador —Jur. Civ., tom. 8, pág. 377, Ser. 4^a.

7. **Desistimiento**—El que desiste de su demanda debe ser condenado en las costas causadas.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 37, Ser. 4^a.

Desistimiento—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 16, 17, 19 y 33—*Seña*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 23—*Testigos*, núm. 10—*Comprador judicial*, núms. 2 y 3—*Nulidad del desistimiento*, núm. 1—*Venta*, núm. 5—*Transacción*, núm. 9—*Costas*, núm. 63.

1^a. **Despojo**—Procede el interdicto de recobrar siempre que se justifique la posesión y el despojo violento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3^a.

Despojo—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Interdicto de obra nueva*, núm. 3.

Destierro—Véase: *Hijos menores*, núm. 2.

1^b. **Detalle**—Si no se acompaña el detalle de los trabajos, la excepción de defecto legal en el modo de proponer

6—El art. 522 del Cód. de Proc. autoriza el desistimiento solamente cuando los títulos adolecen de vicios que no pueden subsanarse en breve tiempo. Según disposición del art. 1204 del Cód. Civ., la resolución de un contrato procede cuando hay pacto expreso que la autorice. La causal espuesta en el sumario, no es bastante para operar la rescisión del contrato.

7—Véase verb. *Costas*, núm. 37 y su nota.

1^a—Art. 581 del Cód. de Proc.

1^b—El art. 71 del Cód. de Proc. exige entre otros requisitos para entablar una demanda, que la cosa demandada esté determinada con toda exactitud. Si los trabajos hechos se engloban en una sola partida,



la demanda por locación de servicios, es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4ª.

Detalle—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 22.

Detentador—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 2.

Detención—Véase: *Acciones criminales*, núm. 1—*Confabulación*, núm. 1.

Deterioros—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18.

1. **Deuda** —El reconocimiento de una deuda en el testamento importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión. —Jur. Civ., tom. 9, página 330, Ser. 4ª.

Deuda—Véase: *Adoquinado*, núm. 3—*Carta de crédito*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 38—*Colación*, núm. 1—*Curador*, núm. 5—*Excepción de compensación*, núm. 1—*Donación*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 4—*Efecto retroactivo*, núm. 1—*Costas*, núm. 58—*Herederos*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 13—*Prescripción de una deuda*, núm. 1—*Derecho de retención*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 14 y 43—*Excepción de remisión*, núm. 1.

Deudas—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 1—*Heredero*, núm. 4—*Legado*, núm. 4—*Sociedad*, núm. 5.

Deudor—Véase: *Alquileres*, núm. 1—*Mandamiento*, número 1—*Cuenta*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 33 y 45—*Cesión*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, número 21—*Fiador*, núm. 1—*Propiedad*, núm. 2—*Condición*, núm. 2—*Precio*, núm. 1—*Bienes embargados*, número 2—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Martillero*, núm.

no es posible determinar con exactitud en qué consisten dichos trabajos, en cuyo caso la litiscontestación no puede trabarse sobre bases seguras y bien determinadas.

1—Véase: verb. *Confesión*, núm. 2.



mero 3—*Cesión de bienes*, núms. 1—*Fianza*, núm. 4—*Nulidad de la ejecución*, núm. 3—*Compensación*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 8.

Devolución—Véase: *Escrito*, núms. 1 y 2—*Compensación*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núms. 8 y 13—*Seña*, núm. 7—*Depósitos judiciales*, núm. 1—*Mandatorio*, núm. 14—*Costas*, núm. 58—*Seña*, núm. 7.

1º. *Día*—Para la fijación del día en que debe tener lugar un acto, el Juzgado no obstante el recargo, debe tener presente la urgencia del caso.—Jur. Civ., tom. 5, página 370, Ser. 4º.

Día—Véase: *Notificación*, núm. 3—*Posiciones*, números 26 y 35—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Diligencias judiciales*, núm. 3.

Día señalado—Véase: *Testigos*, núms. 8, 10 y 21—*Posiciones*, núm. 4.

Días determinados—Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 2.

1º. *Diarios*—Es potestativo del Juzgado, la fijación de

1º—La Cámara dijo, que en atención á la naturaleza de la causa el Inferior debía señalar una audiencia inmediata.

1º—La Cámara dijo, que ésta es una facultad privativa de los jueces, sin perjuicio de que si se encuentra algúntotro diario de circulación que pueda hacer las publicaciones en condiciones menos onerosas para los interesados, así lo ordene. La ley no dice que esta sea una facultad discrecional ni potestativa, es la Cámara la que ha consagrado esa jurisprudencia perjudicial en alto grado para los interesados y que compromete en alto grado la moralidad judicial. El art. 639 del Cód. de Proc., solo establece la necesidad de llamar por edictos durante 30 días. El 687 dice, que se anunciará por edictos la muerte del interesado; el 513 del propio modo dice: «el remate se anunciará fijándose edictos y publicándolos en dos diarios.» Ninguno de estos artículos confiere al Juez la facultad privativa de designar el diario. Que no es facultad privativa se demuestra fácilmente. El auto mandando publicar edictos y determinando los diarios, será apelable ó inapelable según que cause gravamen irreparable ó no. Causará gravamen irreparable, si designado un diario de menos circulación que otros, aquél pide por la pública-

los diarios para publicar edictos, sin perjuicio de tener en cuenta que sean los menos onerosos para el interesado.

—Jur. Civ., tom. 7 pág. 130, Ser. 3ª.

1. Dictámen pericial—El Juez es el único que según su

ción un precio superior ó igual que éste. Si cobra 100 por un edicto que otro diario de mayor ó igual circulación cobra 50. En este caso hay gravamen irreparable porque no puede repararse una vez cumplido el auto: si es apelable el auto y no habiendo la ley conferido una facultad omnimoda, es evidente que la designación no corresponde única y exclusivamente al Inferior, sino que debe ser determinado en última instancia por el Superior. Así lo exige la equidad, pues de otra manera no se consultan los verdaderos intereses de la justicia. Ese aditamento que le hace la Cámara de que la facultad potestativa del Juez es sin perjuicio de que si encuentra otro diario de mayor circulación que pueda hacer la publicación en condiciones menos onerosas, así lo ordena», es *pour la gallerie*, algo que está demás, porque la práctica nos comprueba que esto jamás se consulta por los jueces inferiores, los que más bien parecen empresarios de los diarios designados por ellos, que representantes imparciales de la ley, cuyo único interés debe ser abaratar la justicia siempre que no redunde en perjuicio de los litigantes. Hay un caso típico que nos da la importancia de ese aditamento puesto á la facultad discrecional de los jueces. Por el Juzgado á cargo del Dr. Peyret se ordenó la publicación de unos estatutos, designándose á «Tribuna». Este diario pidió 1800 pesos moneda nacional por la publicación: no hubo forma de hacerlo por menos,—constaba con la orden del Juez la que es soberana.—«La Prensa» pedía 1000 y «La Nación» lo mismo. «El Diario» 800. Con todos estos datos se presentó el interesado al Sr. Juez pidiendo designara otro, por ser de mayor circulación cualquiera de los nombrados, y por ser más barato. El Juez no hizo lugar fundado en su facultad soberana. Apelada la resolución, la Cámara dijo que no era apelable el auto, y que el Juez era el único con facultad para designar el diario en que debía hacerse la publicación. A estos estremos que desacreditan la administración de justicia nos condena la arbitraria jurisprudencia que sienta el sumario.

1.—En el presente caso los calígrafos no estuvieron de acuerdo acerca de la autenticidad de la firma, habiendo habido opiniones contradictorias. El Camarista que fundó su voto al que se adhirió el resto de la Cámara como lo hace siempre indudablemente por no estudiar las causas, decía: «No es discutible por nuestras leyes que es el Juez quien por sí mismo





criterio puede declarar la autenticidad de documentos alegados de falsos, aun contra el dictamen de peritos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3ª.

Dictamen pericial—Véase: *Peritos calígrafos*, núm. 1—*Cotejo*, núm. 1.

Diferencia—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 104—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Obligación á plazo*, núm. 2.

Dilatoria—Véase: *Escepción dilatoria*, núm. 1—*Falta de personería*, núm. 2—*Escepción de falta de personería*, núms. 3, 4 y 5—*Cosa juzgada*, núm. 5.

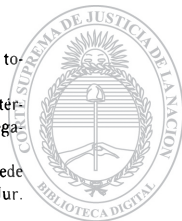
Diligencia aclaratoria—Véase: *Compulsa de libros*, número 2.

Diligencias—Véase: *Notificación*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 3—*Término para la subsanación*, núm. 1—*Capellania*, núm. 7.

1. Diligencias de prueba.—Pedidas después de vencido el

debe hacer el cotejo ó comparación de letras, sirviéndose solo de los calígrafos como peritos para ilustrar su juicio y no para encadenar su conciencia. Tampoco es cierto que el arte caligráfico haya llegado á tal grado de perfeccionamiento, que permita conclusiones terminantemente asertivas en todos los casos.» Estos fundamentos podrían considerarse como aceptables aplicados al caso resuelto, pero no como principio general. Si la ley ha querido *atar la conciencia* del Juez, cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo, las conveniencias legales en que ella se funda no puede ser materia de discusión desde la silla del magistrado; que vaya á los bancos del Congreso á discutir su bondad y á iniciar su reforma, pero que no venga á discutirla aquel que no tiene derecho, y cuya única misión es aplicar esa ley dictada por otros. La ley ha dicho que cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo y éstos tienen título, su dictamen tiene fuerza de prueba legal. Hay varios casos resueltos en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Peritos*, núm. 1; tom. 3, verb. *Informe*, núm. 1. En contra verb. *Prueba plena*, núm. 3, del tom. 4 de la Inst.

1—El art. 118 del Cód. de Proc. establece que la prueba debe *pedirse*, ordenarse y practicarse dentro del término.



término de prueba, deben ser rechazadas.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 19, Ser. 3ª.

2. Diligencias de prueba.—No practicadas dentro del término sin culpa de la parte, deben serlo antes de los alegatos.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 355, Ser. 3ª.

3. Diligencias de prueba.—Pedidas en tiempo, no puede imputarse negligencia á la parte que las solicitó.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 83, Ser. 3ª.

4. Diligencias de prueba.—Deben ser practicadas dentro del término.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 47, Ser. 3ª.

5. Diligencias de prueba.—No practicadas dentro del término por omisión de la parte, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 44, Ser. 3ª.

6. Diligencias de prueba.—No procede la reiteración de diligencias cuyo cumplimiento no ha urgido el interesado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 240, Ser. 3ª.

7. Diligencias de prueba.—La parte puede pedir las dili-

2—Pero si no lo fueren, dice el art. 118 del Cód. de Proc., por omisión de las autoridades encargadas de diligenciarlas podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos.

3—La parte no solo solicitó la prueba en tiempo, sino que el día designado solicitó el señalamiento de nuevo día, alegando causales que el Juzgado consideró suficientes. Es evidente que aquí no hay negligencia.

4—Abierta la causa á prueba, en el mismo día se solicitaron algunas medidas probatorias, á las que el Juzgado no proveyó, porque en el escrito no se constituyó domicilio legal con arreglo á la nueva numeración cuando ésta fué cambiada en la ciudad. El interesado dejó pasar ocho meses sin que hubiese hecho diligencia alguna para su despacho. El art. 118 del Cód. de Proc. impone al interesado la obligación de urgir la producción de la prueba, la que debe serlo dentro del término.

5—Véase nota precedente.

6—La reiteración se pidió después de consentido el auto que ordenaba la agregación de la prueba y después de estar ésta agregada, siendo evidente en este caso que el interesado no urgjó su producción en los términos del art. 118 del Cód. de Proc.

7—Se solicitó que se sacase una copia fotográfica de un pagaré cuya



gencias que crea necesarias para autenticar un documento tachado de falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3ª.

8. Diligencias de prueba—Es deber de la parte urgir el cumplimiento de las diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 143, Ser. 3ª.

9. Diligencias de prueba—En el juicio sumario de interdicto, son apelables los autos que denieguen diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

10. Diligencias de prueba—Las pedidas y ordenadas dentro del término, pero no practicadas sin culpa de la parte, deben ser agregadas aun después de vencido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4ª.

11. Diligencias de prueba—No practicadas durante el

firma fué tachada de falsa, y se solicitó también que se sacaran copias de documentos que debían servir para el cotejo. La Cámara ordenó la producción de esa prueba, fundándose en que en la ley no existe disposición alguna que limite los medios de prueba para el esclarecimiento de sus derechos, debiendo ampliarse en lo favorable sus omisiones.

8—Es jurisprudencia constante de la Cámara fundada en el art. 118 del Cód. de Proc.

9—En 1ª Instancia se dijo por el juez, que la naturaleza sumaria del juicio de interdicto no permite ni el recurso de reposición ni el de apelación, siendo procedente este último tan solo en los casos expresamente establecidos por la ley. La Cámara pensó de otra manera, diciendo que todo auto denegando una diligencia de prueba trae gravamen irreparable, y por consiguiente es apelable. La disposición del art. 571 del Cód. de Proc. no importa privar á las partes del derecho de solicitar en el comparendo á que se refiere, medidas probatorias que no se tuvieran á disposición de las partes, como ser documentos públicos archivados en las oficinas, con el fin de instruir con ellos el derecho que les acuerda la ley: tampoco el citado artículo puede obstar á que las partes soliciten la citación de los testigos que no quieran concurrir voluntariamente.

10—Véase el núm. 2.

11—Presentado como prueba un documento fué argüido de falso. Convocadas las partes á juicio verbal de acuerdo con lo preceptuado



término sin culpa de la parte, pueden serlo después de vencido sin que se pueda abrir al efecto un término especial.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 351, Ser. 4^a.

12. **Diligencias de prueba**—Vencido el término de prueba, no pueden decretarse diligencias que apesar de haber sido pedidas en tiempo no se cumplieron por negligencia de la parte.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 400. Ser. 4^a.

13. **Diligencias de prueba**—A la parte corresponde urgir el cumplimiento, dentro del término de prueba, de las

en el art. 153 del Cód. de Proc., se fijó un día dentro del término de prueba. La audiencia no tuvo lugar por inasistencia justificada de una de ellas. Convocadas nuevamente se fijó un día fuera del término de prueba. Una de las partes se opuso á que el reconocimiento caligráfico tuviese lugar porque el término ordinario de prueba estaba vencido, no pudiendo producirse ninguna diligencia probatoria sino dentro del término, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc. Se resolvió por la mayoría de la Cámara que la producción de la prueba era procedente, fundándose en que la producción en este caso, dentro del término no era imputable á la parte, pues las diligencias fueron solicitadas 20 días antes del vencimiento del término, y si las demás diligencias prescriptas por el Cód. de Proc. en el art. 155 y siguientes no se llevaron á cabo dentro del término probatorio fué debido á la naturaleza misma de esta clase de prueba. Que si bien es cierto que de acuerdo con lo preceptuado por el art. 112 del Cód. de Proc. el término ordinario no puede ser ampliado, es indiscutible el derecho que asiste á la parte, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 118; y que en caso de duda, es de buena Administración de Justicia estar por la amplitud de la defensa facilitando la averiguación de la verdad, fin primordial de los juicios.

12.—Se decretó la citación de un testigo cuando ya estaba vencido el término de prueba, habiendo resultado que no vivía en el domicilio denunciado: después de haber dejado pasar nueve días sin pedir señalamiento de nueva audiencia, recién se presentó la parte solicitándola. En este caso es de estricta aplicación la disposición del art. 118 del Cód. de Procedimientos.

13.—La parte presentó su lista de testigos dentro del término probatorio sin hacer durante el diligencia alguna para su producción, y después de vencido se presentó pidiendo su cumplimiento. Es



diligencias probatorias solicitadas.—Jur. Civ., tom. 3, pág 83, Ser. 4ª.

14. **Diligencias de prueba** --Deben cumplirse aun después de vencido el término si la demora no es imputable a la parte.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 210, Ser. 4ª.

15. **Diligencias de prueba** --Los jueces deben practicarlas dentro del término probatorio siempre que les fuese posible.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 4ª.

16. **Diligencias de prueba** --Deben practicarse aun después de vencido el término si la demora no es imputable a la parte.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 4ª.

evidente la desidia en este caso y por consiguiente su falta de derecho para pedir su producción.

14—Los testigos fueron presentados cinco días antes de vencerse el término de prueba, siendo citados algunos y otros no, por que no vivían en el domicilio indicado. La prueba no se tomó por ausencia del Juez, y entonces se presentó la parte alegando esa circunstancia, pidiendo nuevo día y denunciando los nuevos domicilios de los testigos. Parece injusta esta resolución en lo que respecta a los testigos que no fueron citados por no ser su domicilio el denunciado, pues es deber de la parte que los presenta conocer el domicilio actual, en la época de la presentación del escrito y no en el que tuvo o en uno falso. Además si la parte no hubiese esperado los últimos días para presentar sus testigos habría tenido siempre tiempo de dar el nuevo domicilio dentro del término de prueba. Es evidente que la prueba no se produjo dentro del término por causa imputable a la parte, en cuyo caso el art. 118 del Cód. de Proc. ordena que esa prueba no se produzca. Si la declaración de los testigos cuyos domicilios estaban equivocados, no se tomó, fué debido al error en el domicilio indicado; la circunstancia accidental de no haber concurrido el Juez no pudo mejorar la situación legal de la parte, porque aun dado el caso de que el Juez hubiese concurrido a la audiencia, los testigos no habrían declarado por falta de citación, siendo esta falta de citación imputable a la parte.

15 --Este es el espíritu del art. 118 del Cód. de Proc.

16—De acuerdo con la jurisprudencia constante basada en la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.



17. Diligencias de prueba—Las no practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden serlo después de su vencimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 80, Ser. 4^a.

18. Diligencias de prueba—La procedencia ó improcedencia de la prueba solo puede declararse al dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 392, Ser. 4^a.

19. Diligencias de prueba—No practicadas dentro del término por omisión de la autoridad, pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 394, Ser. 4^a.

20. Diligencias de prueba—Pedidas fuera del término probatorio no pueden concederse.—Jur. Civ., tom. 7, página 29, Ser. 4^a.

21. Diligencias de prueba—Deben practicarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 58, Ser. 4^a.

22. Diligencias de prueba—A los interesados corresponde urgir para que sean practicadas dentro del término probatorio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 64, Ser. 4^a.

17—Se habian señalado varias audiencias sucesivas que no se celebraron por causas no imputables al Juzgado encargado de su diligenciamiento.

18—En el caso que nos ocupa, la Cámara dijo que la *validez ó pertinencia* de la prueba que las partes ofrecen, solo puede ser apreciada al pronunciar sentencia. El sumario habla de *procedencia* de la prueba, mientras que la Cámara habla de *validez ó pertinencia*, que son cosas distintas. Véase: tom. 4, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 10; y *Término extraordinario*, núm. 2, tom. 3, mismo verb. núm. 14, y *Prueba*, núm. 10.

20—Art. 118 del Cód. de Proc.

21—Ofrecida la prueba en término, la parte no urgjó su producción, ni constaba que hubiese habido omisión por parte de las autoridades encargadas de diligenciarlas, habiendo además quedado consentido el auto en que se hacía saber el certificado del actuario espresando no haberse producido prueba alguna.

22—Solicitada la prueba se dejó transcurrir un año sin pedir su producción dejando paralizado el expediente.



23. Diligencias de prueba. Es obligación de la parte ur-
gir para que las diligencias sean evacuadas dentro del tér-
mino. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 31, Ser. 4^a.

24. Diligencias de prueba.—No practicadas dentro del
término por negligencia de la parte, no pueden ser am-
pliadas después del vencimiento. —Jur. Civ., tom. 8, pá-
gina 38, Ser. 4^a.

25. Diligencias de prueba.—Las no practicadas por ocu-
paciones del Juzgado deben cumplirse aun después de ven-
cido el término. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 129, Ser. 4^a.

26. Diligencias de prueba. El término extraordinario
para evacuar diligencias en el extranjero es potestativo de
las partes. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 96, Ser. 4^a.

27. Diligencias de prueba.—No procede la modificación

23—Además de la desidia de la parte se había dejado consentir el auto
cu que se mandaba agregar las pruebas producidas. Esta última causal
no tiene trascendencia alguna, puesto que según disposición del art. 118
del Cód. de Proc., la parte puede pedir que las diligencias se practiquen
antes de los alegatos, cuando ellas no se han producido dentro del tér-
mino por omisión de las autoridades.

26—Las partes pueden considerarlas practicables dentro del término
ordinario, en cuyo caso no hay necesidad de solicitar el término extraor-
dinario, puesto que de no producirlas dentro del término ordinario, la
única parte perjudicada sería la interesada en su producción. Esta re-
solución está en abierta contradicción con un caso resuelto por la Cáma-
ra de lo Comercial. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Diligencias de prueba*,
núm. 9. El principio sentado en el sumario consagra la buena doctri-
na, de acuerdo con la opinión que habíamos emitido al estudiar el caso
anterior al que nos ocupa.

27—Cada parte tiene derecho a solicitar medidas probatorias ten-
dentes a contrarrestar las de su adversario. Una medida probatoria mo-
dificada importa la petición de una nueva prueba, y si se admitiera la
producción de ésta tendría que admitirse a la parte contraria la prueba
necesaria para contrarrestarla. El principio consagrado en el art. 118
del Cód. de Proc. se basa no solo en la necesidad de establecer el orden
de los juicios, sino también tiene como fundamento la perfecta igualdad
en que para la defensa deben ser colocados los litigantes. Si se admi-

de diligencias de prueba pedidas, cuando no existe término hábil para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 79, Ser. 4^a.

28. **Diligencias de prueba**—Producidas después de vencido el término sin culpa de la parte, deben ser agregadas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

29. **Diligencias de prueba**—Si no se provee el papel sellado necesario para la citación de los testigos, hay negligencia de parte del que los presenta y consiguientemente no puede pedirse su examen después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

Diligencias de prueba—Véase: *Papel sellado*, núm. 4—*Alegar*, núm. 2—*Alimentos*, núm. 8.

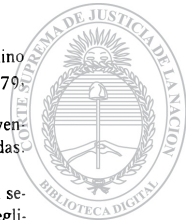
1. **Diligencias judiciales**—Su pedido en beneficio propio, hace procedente la condenación al pago de las costas y gastos que hayan debido verificar las demás partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Ser. 3^a.

tiera fuera de término la modificación de una medida probatoria, no se respetarían estos principios.

28—Con fecha 22 de Agosto se libró un oficio al cónsul de España, oficio que fué devuelto el 21 de Setiembre cuando ya había vencido con exceso el término de prueba; la Cámara dijo que procedía la agregación por haber sido la autoridad encargada de evacuar la diligencia pedida en tiempo, quien demoró su expedición.

29—No vemos el fundamento legal de esta resolución, puesto que para la citación de testigos no se requiere papel sellado. El art. 182 del Cód. de Proc. establece terminantemente que los testigos serán citados por cédula en papel común. ¿Qué necesidad hay de proveer de papel sellado para la citación de testigos? La razón de la resolución es otra que la Cámara no se atreve á confesar. Generalmente los secretarios no se ocupan de los asuntos que tramitan por su secretaria, dejan librada la citación de testigos á los empleados inferiores, quienes se olvidan de hacer las citaciones, y los jueces por salvar á éstos, pretestan la falta de papel para no notificar.

1—Véase: verb. *Costas*, núm. 15.





2. Diligencias judiciales.—El apoderado ó procurador judicial puede representar y acompañar á su poderdante en todos los actos y diligencias judiciales.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 127, Ser. 3^a.

3. Diligencias judiciales.—El auto que señala ~~da~~ para una diligencia judicial es apelable.—Jur. Civ., tom. 5, página 370, Ser. 4^a.

Diligencias judiciales -- Véase: *Firma*, núm. 1.

Diligencias nulas -- Véase: *Nulidad del procedimiento*, núm. 2.

1^a. Diligencias para mejor proveer—No pueden ser resistidas por las partes.— Jur. Civ., tom. 1, pág. 116, Ser. 4^a.

Diligencias previas—Véase: *Boleto de compraventa*, número 33—*Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1—*Nulidad del juicio*, núm. 2.

1^b. Dimensión —Ante dos títulos que tienen por origen

2—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 3.

3—Porque trae gravamen irreparable.

1^a.—La diligencia decretada para mejor proveer se refería á una operación de mensura. La Cámara dijo, que «tratándose de una diligencia ordenada con carácter de para mejor proveer, es facultativo del Juez dictarla.» Esta resolución de la Cámara es arbitraria y no tiene más fundamento que la propia suficiencia,—bien dudosa por cierto—de su afirmación. El art. 57 del Cód. de Proc. que enumera los casos en que puede un Juez dictar medidas para mejor proveer, lo hace en una forma taxativa. A esto se refiere el artículo 215 cuando habla de su producción. Así lo hemos sostenido siempre. Véase: Inst., tomo 4^o, verb. *Mejor proveer*, núms. 1 y 2; tom. 2^o, verb. *Declaraciones*, número 7 y su nota. La Cámara tiene declarado que los jueces no pueden dictar con carácter de para mejor proveer otras diligencias fuera de las enumeradas en el art. 57. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Diligencias para mejor proveer*, núm. 879.

1^b.—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de un votos, estando ésta completamente equivocada. No esponemos los antecedentes por que la cuestión es larga y cumplida, es mejor ver el texto de la sentencia.



un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior si en él se espresa que no le queda más terreno y se señala linderos, aun cuando se haya fijado la dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 404, Ser. 4^a.

Dimensión—Véase: *Precio*, núm. 2.

Dimensión parcial—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

Dinero—Véase: *Dominio*, núm. 1.

1^a. **Dinero propio**—En las compras hechas por la esposa con dinero propio, basta consignar el hecho y la procedencia, sin que sea necesaria la comprobación de la verdad para la transferencia del dominio á un tercero.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

2. **Dinero propio**—La declaración de que la compra fué hecha con dinero propio de la esposa, no tenía por las leyes de Partida, tiempo ni forma determinada, siendo válida aun cuando tuviese fecha posterior al acto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3^a.

Dinero propio—Véase: *Bienes*, núms. 1 y 5.

Director general—Véase: *Personería*, núm. 10.

1^b. **Disenso**—La resolución del Juez de 1^a Inst. en los

1^a—Los arts. 1246 y 1247 establecen terminantemente que solo se debe *designar ó expresar*, cómo el dinero pertenece á la mujer, y no exigen la comprobación de dichas enunciaciones.

2—Las leyes que se aplicaron para la resolución de este caso fueron las vigentes antes del Código Civil, porque la adquisición se hizo con anterioridad y porque el esposo que tal declaración hizo, falleció también antes de regir dicho Código.—art. 4044—La Ley 49, tit. 5^o, Partida 5^a, cuando dice que las compras que con dinero ajeno hace una persona á su nombre son del que hizo la compra, agrega: fueras ende si tales dineros fuesen los dineros de la dote de alguna mujer, e su marido con voluntad della fiziese la compra. Ca en tales casos magüer el comprador compre la cosa en su nome, gana el señorío della aquel cuyos eran los dineros.

1^b—De acuerdo con lo dispuesto por el art. 173 del Cód. Civ. que



casos de disenso, es inapelable.—Jur. Civ., tom. 4, página 248, Ser. 4^a.

Disolución—Véase: *Sociedad*, núm. 2—*Contrato*, número 10—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Contrato de comisión*, núm. 1.

Disparidad de caracteres—Véase: *Divorcio*, núm. 8.

Disposiciones contrarias—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.

Disposiciones pertinentes—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 23.

Disposiciones vigentes—Véase: *Culpa ó negligencia*, número 1.

División—Véase: *Condominio*, núms. 8 y 9—*Poder especial*, núm. 2—*Condómino*, núm. 4—*Herederos mayores*, núm. 2.

División del juicio—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 12.

1. División en especie—Para que esta proceda debe practicarse la medición y tasación de la cosa común.—Jur. Civ., tom. 9, pag. 9, Ser. 4^a.

2. División en especie—No procede la venta de la cosa común, si admite cómoda división en especie, y no existe la conformidad de los herederos.—Jur. Civ., tom. 10, página 189, Ser. 4^a.

no ha sido modificado por el art. 11 de la Ley de Matrimonio Civil. Véase: Inst., tom. 2^o, verb *Juicios de disenso*, núm. 1, el que está de acuerdo con la presente resolución.

1—Debe practicarse la medición á fin de conocer con exactitud la estensión total de lo que va á repartirse. La tasación es asimismo necesaria porque como la cosa puede variar de valor según su ubicación, pues cuando se trata de campos, cada palmo de tierra varía de valor, conviene conocer el valor para compensar á cada adjudicatario la menor estensión con el mayor valor de lo que se le adjudica, ó viceversa. Es como decía la Cámara, la mejor manera de garantizar los intereses de los condóminos.

2—Eran dos herederos, uno debía recibir dos quintos de la herencia,

División proporcional— Véase: *Indemnización*, núm. 9.

1. Divorcio—Decretado éste, el Juez puede entregar

otro tres quintos: las propiedades á dividirse eran dos, una tasada en 29.000 pesos y otra en 45.000. Se resolvió no hacer lugar á la venta de las propiedades, fundándose en que según lo dispone el art. 2692 del Cód. Civ., cada copropietario está autorizado á pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentra sometida á una indivisión forzosa. Por otra parte, nadie puede ser obligado á vender sino cuando se encuentra sometido á una necesidad jurídica, lo que tiene lugar cuando la cosa fuere indivisible y perteneciese á varios individuos y alguno de ellos exigiese la licitación ó remate—art. 1324, inc. 3º.—Si bien es cierto que en este caso cada copropietario está facultado para pedir la división, también lo es que cualquiera de ellos puede oponerse á la venta si las cosas admiten cómoda división. En presencia de las disposiciones legales citadas, surge esta cuestión. ¿Pueden dividirse las propiedades más arriba mencionadas? Uno de los condóminos decía que no, fundándose en que dichas fincas tenían distintos valores, que los haberes de los herederos no eran iguales y que en vista de la actitud intransigente de la otra parte, nunca podían ponerse de acuerdo. A esto se contesta diciendo, que la ley no se ha puesto en el caso de que pueda dividirse materialmente la cosa, de manera que, si la extensión del fundo donde esos edificios se levantan es tal, que tirada una línea por el medio, queden dos partes sin afectar en nada á los dos edificios existentes. La diferencia de valor de las construcciones como asimismo la de los haberes de los herederos, no es un inconveniente que obste á que la división material de la cosa común se realice, porque al hacerse la partición de la herencia, el heredero á quien se le adjudique la casa de mayor valor, puede integrar lo que le falte al otro, pudiendo salvarse las dificultades de la elección de esas fincas por medio del sorteo ú otro cualquier recurso, sino prefiriesen los interesados arreglarse amistosamente. Debe no olvidarse, que en el caso presente se adujo como fundamento para no vender los inmuebles, la circunstancia de que uno de los herederos dedujo demanda contra el otro sobre ocultación de bienes, y que pendiente ese juicio no era posible proceder á la división en los términos de los arts. 666 y 667 del Cód. de Proc. por cuanto el resultado final de ese juicio podía traer una alteración en la parte que viniese corresponder á cada heredero en las dos fincas comunes.

1.—Siempre que ellos no sean menores de cinco años—arts. 213 y 271 del Cód. Civ.





los hijos al cónyuge que justifique mayor idoneidad.—

—Jur. Civ., tom. 1, pág. 68, Ser. 3ª.

2. Divorcio—Corresponde á los jueces proveer sobre la tenencia provisoria de los hijos, durante el juicio de divorcio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 65, Ser. 3ª.

3. Divorcio—Si con arreglo á las disposiciones de la Ley Argentina, el divorcio no disuelve el vínculo, la ma-

2—Arts. 73 y 81 de la Ley de Matrimonio Civil. Esta resolución está de acuerdo con otros casos resueltos. Véase, verb. *Divorcio*, números 2 y 3 del tom. 3º de la Inst.

3—Son estrañas á una sucesión aquellas personas que son llamadas á ella, no por disposición de la ley, sino únicamente por la voluntad del testador. Un parentesco consanguíneo, pero lejano, existente entre el autor y el heredero instituido, no quita á éste su carácter de extraño en la acepción legal de la palabra. Ciertos lazos de familia y las vinculaciones por afinidad entre diversos miembros, si bien no les permite en sus reciprocas relaciones considerarse como estraños, lo son sin embargo para el derecho, que no estiende hasta ellos las presunciones de cariño y afecto que, aparte de otras razones, son la base sobre que reposa el orden establecido para las sucesiones. Escriche, verb. *Heredero*, § II, dice: La calidad de heredero no puede tener otro origen que la voluntad del hombre ó la disposición de la ley; y de aquí viene la división general de herederos *testamentarios* y *legítimos*. Los herederos testamentarios se subdividen en *forzosos* ó *necesarios* y *voluntarios* ó *estraños*.» El mismo autor definiendo lo que debe entenderse por heredero extraño ó voluntario, agrega: § I. Como el testador solo está obligado á instituir como herederos á sus descendientes y en defecto de ellos á sus ascendientes, es claro que todos los herederos que no se encuentren en ninguna de estas dos líneas ó clases, serán herederos estraños ó voluntarios. Tales son por lo tanto así los parientes colaterales del testador como los que ninguna relación de parentesco tuvieren con él: dase á unos y otros la denominación de estraños, porque el testador no tiene obligación de nombrar los herederos. En el mismo sentido puede verse á Falcón, «Exposición doctrinal del Derecho Civil Español», tom. 2º, pág. 179, § 4º, núm. 3; Febrero, tom. 1º, pag. 376, Sec. XIV, núm. 1190, edic. 1852 y la Ley 21, tít. 3º, Part. 6ª. Es sabido que por nuestra legislación el divorcio no disuelve el vínculo matrimonial dando por solo resultado la separación de cuerpo. El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos, dice el



drastra, existiendo la madre, es un extraño para el causante de la sucesión, cualesquiera que fueren las leyes que

art. 219, y el 220 siguiente, agrega: «El matrimonio que puede disolverse según las leyes del país en que se hubiese celebrado, no se disolverá en la República sino en conformidad al artículo anterior.» Ya antes había estatuido el art. 165: «El matrimonio disuelto en país extranjero, de conformidad á las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes de la República Argentina, no habilita para casarse á ninguno de los cónyuges. Es necesario no confundir la capacidad de hecho con la de derecho, y hecha la distinción, los artículos anteriores resuelven la cuestión en contra del extraño. Es en ese sentido de la capacidad de hecho, que el art. 7.º de nuestro Código declara que la capacidad é incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados ó de bienes existentes en la República. Una cosa es que la madrastra del causante sea hábil para recibir por testamento como cualquier extraño, no oponiéndole nuestras leyes otros impedimentos que los que pudiera tener en su país, mejorando todavía el extranjero en algunos casos como cuando es menor allí y menor aquí—art. 138—y otra, que el divorcio habido en otro país haya de producir entre nosotros sus efectos propios hasta el extremo de que el que no podría casarse entre nosotros nuevamente, aparezca en nuestro país en sus relaciones de estado con nuevos vínculos de parentesco aun para efectos tan locales como el pago de impuestos. A tal extremo se opondrían preceptos claros de nuestra legislación como los art. 1207, 953 y el 14, que niega aplicación á las leyes extranjeras cuando se opongan á la moral y buenas costumbres, ó cuando su aplicación fuera incompatible con el espíritu de la legislación del Código; y es innegable que tal sucedería con la doctrina que acordara todos sus efectos entre nosotros al divorcio, *quo ad vinculum*, puesto que precisamente él no ha sido aceptado por nuestro Codificador consultando las buenas costumbres, y cuando menos, es de toda evidencia que aquella contrariaría el espíritu de nuestra legislación. Así lo impone el buen sentido que no podría permitir que no pudiendo volver á casarse en el país aquel cuyo matrimonio se ha disuelto en país extranjero, si no lo ha sido con arreglo á las leyes de la República, autorizara no obstante en el país con todos sus efectos el celebrado fuera de él en segundas nupcias. Hay más, y es que el art. 165 declara inhábil para volver á casarse á aquel cuyo matrimonio no es disuelto en el extranjero, de conformidad con nuestras



hubiesen autorizado el doble matrimonio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 3^a.

4. Divorcio—Para decretarse, no basta la conformidad de los esposos: debe justificarse plenamente la existencia de los hechos en que se funda la acción.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 134, Ser. 3^a.

leyes. Se arguye con la nota que trae en realidad alguna confusión al texto claro del artículo. Pero aun cuando las dudas quedaran con ella autorizadas, en lo que respecta á la habilidad para volver á casarse en país extranjero, se hace imposibles en orden á la procedencia de efectos civiles que quedan completamente interdictos en la nota como ya lo estaban en el texto de varios artículos. El art. 7º de nuestra actual Ley de Matrimonio, aunque inaplicable al presente, pone de relieve estos principios de nuestras leyes, cuando establece que la disolución, en país extranjero, de un matrimonio celebrado en la República, si no fuera de conformidad á las leyes de nuestro Código, no habilita á ninguno de los contrayentes para casarse. ¿Cómo podría la disolución pronunciada por otros jueces en contravención á nuestras leyes, dar efectos civiles en el país al nuevo matrimonio allí celebrado, cuando aquí tal matrimonio no podría concertarse entre los esposos divorciados? ¿Podrían ser mejoradas las leyes y juicios extranjeros en comparación con los propios? El estado mismo de las personas puede sufrir perturbaciones relacionado con el derecho de adquirir. Imponer el que pueda resultar de otras legislaciones con régimen de matrimonio distinto, bien podría causar ofensa á nuestras leyes y costumbres, si hubiéramos de considerar como legítimo al hijo que por nuestro Código fuera adulterino, incestuoso ó sacrilego, y aun al mismo hijo natural. Entretanto, el derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía á su muerte, sean los sucesores nacionales ó extranjeros; la madrastra fué llamada á la sucesión sin consideración alguna á su relación de familia. Finalmente, no está demás hacer presente que toda suposición desaparece ante la realidad. Si por nuestras leyes, la madrastra debiera ser equiparada á la madre para sustraerla del pago de un impuesto, cuando la madre existe y goza del favor de la ley, está por demás decir que la madrastra queda escluida, so pena de darse dos madres á una misma persona.

4—El art. 71 de la Ley de Matrimonio Civil, establece que no hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos y que ellos no serán tenidos por divorciados sin sentencia de Juez competente.—Art. 76 de la Ley de Matrimonio Civil del 1889, y art. 213, Código Civ.



5. **Divorcio**—Decretado éste, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el Juez cuál de los dos cónyuges debe tener á los mayores sin que ninguno de los esposos pueda alegar preferencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

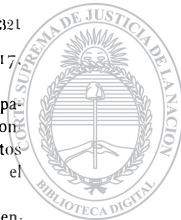
6. **Divorcio**—El Ministerio Fiscal solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes sobre alimentos y litisexpensas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

7. **Divorcio**—El juicio de divorcio basta para justificar la suspensión del marido en su carácter de administrador

5—Art. 76 de la Ley de Matrimonio Civil.—Es principio de procedimiento que la prueba incumbe la que afirma un hecho y que ella está á cargo del actor—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—Si en un juicio de divorcio se comprueba que las relaciones entre los esposos no son tan cordiales como debieran serlo, no basta para autorizar la separación de los esposos, desde que ellos no revisten la gravedad que la ley exige para permitir el divorcio que nunca puede decretarse por mútuo consentimiento de partes—art. 67 de la Ley de Matrimonio Civil.—La justicia debe esforzarse en conservar la integridad del matrimonio, pues ésta no existe, según la expresión de un eminente jurisconsulto, únicamente para los esposos sino también para los hijos y para la sociedad; intereses permanentes aconsejan mantener la firmeza de los vínculos formados por él.

6—La intervención fiscal es al solo efecto de velar por las leyes de orden público en cuanto concierne al matrimonio. La cuestión de alimentos y litisexpensas en manera alguna afecta el interés público.

7—La Cámara daba como fundamento, que existiendo entablada la demanda de divorcio y llevados á ese extremo las disenciones en el hogar, son de temer actos del marido perjudiciales á los intereses de la mujer, que imponen como medida precaucional dejar en suspenso la representación que ordinariamente corresponde al marido para estar en juicio por su esposa. Esta resolución no consulta los principios legales que rijan el caso, porque el art. 54 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889 establece, que la mujer no puede estar en juicio sin la autorización del marido, la que puede ser suplida por los jueces cuando éste se hallase ausente ó impedido para darla y en los demás casos especia-



de los bienes de la esposa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Ser. 4^a.

8. **Divorcio**—La prueba de la causa que la ley exige para hacer procedente el divorcio, debe resultar clara y convincente: la disparidad de caracteres y aun algunos actos aislados de sevicia no bastan para declarar disuelto el vínculo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 332, Ser. 4^a.

9. **Divorcio**—La declaración de los parientes, dependientes y domésticos de los esposos, es admisible en los juicios de divorcio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

10. **Divorcio**—Las injurias graves y el abandono debidamente justificados, hacen procedente el divorcio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

les que allí se determina—art. 60.—Siendo el marido el administrador legítimo de los bienes de la mujer—art. 52—mientras no sea privado de esa administración, ella no puede ser concedida á la mujer.

9.—El art. 70 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889, establece que toda clase de prueba es admitida en este juicio con excepción del juramento de los cónyuges. Esto no quiere decir simplemente que las causas alegadas para el divorcio puedan probarse por los medios comunes y ordinarios que sirven para comprobar los actos jurídicos, sino que en estos juicios se ha de ensanchar el criterio de apreciación de la prueba en lo que se comprende la exclusión de ciertas incapacidades de los testigos según prudente arbitrio y regla de sana crítica. Darle este alcance sería una variedad legislativa. El legislador ha tenido en cuenta que de la vida íntima de los esposos solo pueden tener conocimiento sus allegados, parientes ó domésticos. Se ha admitido constantemente el testimonio de estas personas en los juicios de divorcio. Los prácticos también sostienen la misma teoría. Véase Walter, Manual de Derecho Eclesiástico Universal; Bonnier, Tratado de las Pruebas, núm. 284; Aubry y Rau, § 491—Laurent, Principios de Derecho Civil, tom. 3, § 234.

10.—Art. 67, incs. 5 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil de 1889. El marido que se ausenta sin dejar recursos á su esposa, ni persona alguna encargada de suministrarlos por él, se alza contra sus deberes y abandona voluntariamente á su esposa.

11. **Divorcio** —La acción fundada en el adulterio del esposo, debe ser rechazada en tanto no se justifique plenamente; las enfermedades venereas no bastan para justificarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 781, Ser. 4^a.

Divorcio— Véase: *Embargo preventivo*, núm. 12.

1^a. **Doble ejemplar** —No puede exigirse el cumplimiento de un contrato bilateral constante de instrumento privado, si no se justifica la existencia del doble ejemplar que prescribe la ley.— Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3^a.

Eoble ejemplar —Véase: *Contrato*, núm. 13.

Doble matrimonio—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

Doble traslado—Véase: *Sentencia*, núm. 9.

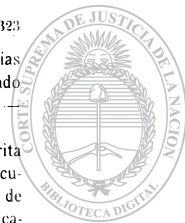
1^a. **Documento** —El haber sido escrita la fecha en época distinta de la del cuerpo del documento, no invalida su contenido, siempre que no se justifique la existencia de otra fecha anterior. Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3^a.

11—Legrand du Saulle en su tratado de medicina legal se espresa: «En procesos sobre separación de cuerpos, dice uno de ellos, mis esfuerzos se dirigen á que á la instancia se apoye sobre cualquier otro motivo que no sea enfermedad venerea; en primer lugar porque este motivo no siempre ha sido aceptado, y también porque es casi imposible establecer á cuál de los esposos debe imputarse la prioridad de la infección. Existen, observa el otro, casos singularmente difíciles y embarazosos en los que la buena fe del médico puede ser sorprendida si de antemano no ha establecido como regla absoluta rehusar estas declaraciones vagas, estos certificados mas ó menos complacientes de los cuales es fácil abusar. La cuestión en efecto, no consiste en reconocer la existencia de la sífilis en uno de los cónyuges, sino, necesario es decirlo, en determinar su origen y referirlo á uno ú otro con el triste vínculo del contagio.»

1^a—Véase: verb. *Contrato bilateral*, núm. 2.

1^b—Se trataba de una cuenta á la que se le puso el conforme algún tiempo después de haber sido ella escrita. La firma parecia haber sido puesta cuando se puso el conforme. El informe que se produjo estableció que la fecha había sido puesta después de escrito el cuerpo del documento, pero no se decía que lo hubiese sido después de puesto el





2. Documento—La parte puede pedir las diligencias que crea necesarias para autenticar el documento tachado de falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3ª.

3. Documento—Para que el principio de prueba escrita haga procedente la testimonial, es necesario que el documento exhibido arroje por sí solo fuertes presunciones de la verdad de la acción instaurada ó que contenga indicaciones precisas sobre el objeto de la convención.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4ª.

4. Documento—Procede el reconocimiento por la esposa, de un documento firmado por ella á ruego del esposo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 79, Ser. 4ª.

5. Documento—No pudiendo comprobarse la fecha cierta de la recepción por el secretario, debe estarse á la del documento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4ª.

conforme y la firma, los que trazados por letra distinta constaban al pie del documento. En el caso que nos ocupa, la parte que alega el hecho debe comprobar plenamente su aseveración. Todo el documento comprobaba que la fecha estaba bien puesta, porque no había enmendaduras ni raspaduras, ni el documento tenía más fecha que la argüida de falsa.

2—Se pidió que un fotógrafo tomara copia fotográfica de un pagaré y de los documentos que debían servir de base para el cotejo. La Cámara dijo que no habiendo disposición alguna que limite los medios de prueba para el esclarecimiento de la verdad, debiendo en este caso ampliarse sus omisiones, procedía su producción.

3—Arts. 1192 del Cód. Civ. y 180 del de Proc. Laurent, tom. 19, págs. 538 á 545; Aubry y Rau, tom. 8, pág. 331; y Marcadé, tom. 5, pág. 133.

4—El art. 186 del Cód. de Proc. no es aplicable en este caso sino el 140.

5—Se trataba de un oficio rogatorio dirigido por un juez á otro: el actuario no le puso cargo al recibirlo: la Cámara consideró que lo justo era suponer que fué presentado en la fecha que llevaba el oficio; fundándose para así resolver, en que en caso de duda debe estarse á aquello que beneficie la amplitud de la defensa.



6. Documento—De todo documento acompañado debe correrse traslado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 130, Ser. 4^a.

Documento—Véase: *Falsedad*, núm. 6—*Depósito gratuito*, núm. 1—*Estampilla*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 14—*Excepción de compensación*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 6—*Obligación por instrumento privado*, núm. 1.

Documento auténtico—Véase: *Cuenta presentada*, número 1.

1. Documento de depósito—Reconocida la autenticidad de un documento de depósito de ganados, el depositario ó sus herederos deben ser obligados á rendir cuenta del depósito y sus procreos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 3^a.

1^a. Documento privado—La prueba tendente á desvir-

6—Se dice que la disposición del art. 102 del Cód. de Proc., es general. Parece que la Cámara se equivoca cuando establece la generalidad de la disposición citada. Todo lo contrario, esta disposición se limita al caso en que al contestar la demanda ó al oponer reconvencción se acompañan documentos; así lo dice espresamente sin establecer que esa disposición pueda ampliarse á los demás casos. Así cuando se acompañan documentos en estado de prueba, no hay necesidad de darse traslado, porque la parte tiene la más amplia libertad de impugnarlo sin necesidad del traslado, mientras que si se acompañan al evacuar el traslado de la demanda ó al deducir reconvencción, se hace necesario el traslado á fin de que el cuasi-contrato de litiscontestación quede trabado en forma. La razón del precepto del art. 102 está, como dice Reus, «en que no sería justo tratar de sorprender al demandado con una petición que solo estuviese apoyada en el dicho de la parte, sea actor ó demandado, para reservarse después hacer uso de esos documentos en un tiempo en que su contrario no podría ya proporcionarse armas para combatirlos.» Véase el comentario al art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento española, tom. 1, pág. 369. Tenemos entendido que así lo ha resuelto la Cámara en un caso que fué llevado por apelación ante ella, declarando que este art. solo se refiere á los documentos acompañados con la demanda ó contestación.

1^a—La parte que dijo de falsedad de los documentos trató de desvirtuar la prueba pericial, por medio de testigos, lo que es abiertamente



tuar el contenido de documentos privados argüidos de falsedad, es improcedente si con las formalidades de la ley se declara su autenticidad.—Jur. Civ., tom. 1, página 133, Ser. 3ª.

2. Documento privado —Carece de valor legal el documento privado sin las firmas de las partes que realizan un contrato bilateral: para que la firma de una sola haga suponer que existe otro ejemplar, el presentado debe tener la firma del contrario.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 402, Ser. 3ª.

3. Documento privado —Autenticada la firma por fallecimiento del firmante, se considera autenticado el contenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3ª.

4. Documento privado —Los testigos firmantes de un documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulta obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

5. Documento privado —Para la declaración, después del improcedente, pues cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo, tiene fuerza de prueba legal. La prueba de testigos no puede contrarrestar la prueba pericial.

2.—Véase, verb. *Contrato bilateral*, núm. 1.

3.—Se dijo que la deuda que establecía el documento estaba prescripta: para establecer la prescripción se adujo como fundamento el hecho de que la fecha había sido puesta con posterioridad al otorgamiento del documento. La firma fué reconocida como auténtica en virtud del dictamen terminantemente asertivo de peritos.—art. 178 del Cód. de Proc.—Reconocido como auténtica la firma, queda reconocido el contenido del documento.—art. 1028 del Cód. Civ.—Correspondía al que aducía el hecho nuevo en juicio, desvirtuar el contenido del documento una vez reconocida la autenticidad de la firma.

4.—Este caso debe tomarse con las limitaciones establecidas en la sentencia dictada. Véase, verb. *Autenticidad*, núm. 1.

5.—Este sumario no fué materia de resolución. Con efecto, examinando el fallo resulta que el Juez dijo en su sentencia: «Que desde luego deben notarse que los testigos que suscriben el documento son,



fallecimiento del obligado, de la autenticidad de un documento privado firmado á ruego, debe producirse prueba plena sobre la existencia de las obligaciones que él contenga.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

6. Documento privado.—Las condiciones escritas en el documento privado, por el que lo presenta, no forman prueba si el ejemplar presentado por la contraparte no contiene igual anotación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 385, Ser. 4ª.

7. Documento privado.—Presentado en juicio, y cuya autenticidad ha sido reconocida por las partes, es indivisible, y sus constancias forman prueba plena en contra de la parte que lo presentó.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 40, Ser. 4ª.

con excepción de uno, los mismos que han declarado sobre la autenticidad del documento. El único testigo que no ha firmado el documento aparece interesado en el contrato, y cede ese interés en él; no puede, como es de consiguiente, merecer igual crédito que el que merecerían los testimonios de otras personas que se hallaran desligadas del acto cuya prueba se pretende. Los testimonios de las citadas personas por sí solos y sin ninguna presunción que los contrariase, podrían quizá tomarse como decisivos para constatar el hecho sobre que versan: pero cuando repetidos indicios desautorizan su veracidad, no es posible admitirlas como prueba plena y concluyente.» Se ve, pues, que lejos de exigir el Juez las condiciones establecidas en el sumario, de lo espuesto resulta todo lo contrario, pues si los testimonios no estuviesen contrarrestados por presunciones graves, valdrían como prueba plena y concluyente. La Cámara dijo: «Para que la demanda pudiera prosperar era necesario acreditar la autenticidad del documento en que aquélla se funda, puesto que ella ha sido absoluta y categóricamente desconocida por la parte demandada. La forma de autenticar el documento en este caso no puede ser otra sino por medio de las mismas personas que en su otorgamiento han intervenido. El sumario, pues, está equivocado.

6— De acuerdo con el principio sentado en el art. 1030 del Código Civil.

7—Art. 1029 del Cód. Civ.



Documento privado --Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 23, 24 y 25 -- *Autenticidad*, núm. 2 -- *Obligación de hacer*, núm. 12 -- *Compraventa*, núm. 2 -- *Escepción de pago*, núm. 2 -- *Embargo preventivo*, núm. 39.

1. Documentos-- Los presentados durante el término de prueba, deben ser tenidos en consideración por el Juzgado al dictar sentencia, aun cuando no hubiesen sido mencionados en la contestación a la demanda, siempre que la parte contra quien se presentan, reconociéndolos no se hubiese opuesto a su agregación. --Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

2. Documentos-- Los que se mencionan en la demanda como existentes en poder del actor, no pueden ser agre-

1--El Juez de 1ª Ins. dijo, que los documentos agregados no podían ser tomados en consideración, por no haberse mencionado en la contestación a la demanda--Art. 100, inc. 4º, Cód. de Proc.--La Cámara dijo, que reconocido el documento al absolver posiciones, sin oponer formalmente reparos legales a su agregación a los autos, pues no puede considerarse tal la reserva de sus derechos para discutir más tarde la oportunidad de su agregación, no puede el Juzgado dejar de tomarlo en consideración. Si la resistencia se hubiese ejercitado en el tiempo y forma establecidos por la ley, si se hubiese hecho uso del derecho para oponerse a la agregación esa resistencia sería legítima, pero es a todas luces incorrecto, como lo hacía el Juez, ya porque el reconocimiento voluntario del actor lo incorporó válidamente a la apreciación judicial, ya porque no es oficio de los jueces suplir los vacíos de la defensa, en tanto ellos se refieran a los hechos o a los medios de presentarlos en juicio. En la hipótesis de que fuese arreglado a derecho el fundamento de la sentencia, el reconocimiento del demandante valdría siempre como confesión sin ningún menoscabo de su fuerza legal, en razón de las solemnidades y tiempo en que ha sido presentado. art. 125 del Cód. de Proc.

2--De la disposición de los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. resulta, que el legislador ha querido que el actor haga conocer del demandado todos los documentos en que funda su derecho, a fin de que éste pueda aceptar ó negar los hechos alegados por aquél. En el caso presente no se dió cumplimiento a la prescripción legal, porque ni siquiera se prestó el juramento de la ley al presentarlos en juicio. Cuando un liti-



gados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3^a.

3. **Documentos**—La obligación de presentarlos con la demanda ó contestación, solo comprende aquellos en que la parte funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 250, Ser. 3^a.

4. **Documentos**—Acompañados, la demanda no está obligada á repetir los datos que resulten de los documentos acompañados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 3^a.

5. **Documentos**—Los de fecha anterior á la demanda, pueden ser agregados durante la prueba bajo el juramento de ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4^a.

6. **Documentos**—Los reconocidos al absolver posiciones, y consentida la agregación en aquel acto, no deben ser desglosados por oposición ulterior—Jur. Civ., tom. 3, pág. 96, Ser. 4^a.

gante desea valerse de documentos que tiene en su poder pero que no puede presentarlos en la oportunidad legal, debe espresar lo que de ellos resulte, y hacer presente que no los acompaña en la demanda, debido á una imposibilidad, como por ejemplo, el hecho de haberse traspapelado y no serle posible encontrar.

3—Arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 2^o, verbo *Documentos*, núm. 3 y su nota.

4—Véase *Demanda*, núm. 2.

5—El Juez de 1^a Inst., fundado en los arts. 73 y 100, inc. 4^o del Cód. de Proc., mandó devolver los documentos; la Cámara, fundándose en la disposición del art. 73, segunda parte, mandólos agregar. Los documentos de fecha anterior á la demanda ó á la contestación, que no pueden agregarse ni bajo juramento, son aquellos que sirven de fundamento al derecho alegado. Véanse los núms. 2 y 3; Inst., tom. 3^o, verb. *Documentos*, núm. 2.

6—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 1^o, verb. *Documentos*, núm. 3. Puede verse además el tom. 2^o, verbo *Absolución de posiciones*, núm. 1, y tom. 1^o, verb. *Documentos*, núm. 904, que parecen estar en contra del sumario, pero no es así, por que ellos resuelven casos en que la agregación no había quedado consentida.



7. **Documentos**—Los que no justifican hechos alegados en la demanda, pueden ser agregados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 389, Ser. 4ª.

8. **Documentos**—No pueden agregarse los de fecha anterior á la demanda sin el juramento de ley. Jur. Civ., tom. 8, pág. 41, Ser. 4ª.

9. **Documentos**—Los mencionados en la demanda, no pueden ser agregados como prueba si su presentación dependía del que los mencionó.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Ser. 4ª.

7—Véase: los núms. 3 y 5.

8—Los documentos se presentaron sin el juramento prescrito por el art. 73 del Cód. de Proc., ordenándose por haberse omitido el juramento su devolución. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Juramento*, núm. 1.

9—La parte, al promover la cuestión hizo referencia en su escrito, á la existencia de las escrituras y documentos que se encontraban en el Dep. de Ingenieros, creyendo así dejar cumplido el precepto legal del art. 72 del Cód. de Proc., prescripción que responde al propósito de establecer igualdad de condiciones en la defensa, para contrarrestar la fuerza probatoria de los documentos aducidos como fundamento de la acción. El artículo citado dice, que bastará mencionar el archivo ú oficina pública en que se encuentre, *cuando no las tuviese á su disposición*, lo que no se concreta al caso en que *no las tuviese en su poder*, sino que es preciso además que no se encuentren á su disposición, es decir, que no basten sus diligencias particulares para conseguir desde luego lo que necesita. Los documentos que buenamente pueda adquirir la parte antes de demandar ó contestar á la demanda, aun cuando no los tenga en su poder, debe presentarlos y si no lo hiciera no le serán después admitidos aun cuando se hubiese designado el punto donde se encuentran. Esta disposición solo es aplicable al caso en que como dice la Ley Recopilada *«no las pudo haber»*, esto es, no le fué posible adquirir por impedírselo una causa ajena á su voluntad.* Reus, comentando el art. 304 de la Ley de Enj. de España, en la que la nuestra se ha inspirado, resuelve la cuestión en este sentido. Véase, tom. 1º, página 369, donde se cita asimismo la opinión de Manresa y Reus. Es de advertirse que la disposición que estudiamos no exige que se acompañen los documentos originales sino que bastan las copias correspondientes, que son siempre fáciles de obtener.



10. Documentos—Si no pueden ser presentado basta individualizarlos, indicando la oficina donde se encuentran.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4ª.

11. Documentos—La falta de presentación de los que fundan la demanda, no puede dar lugar á la escepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 294, Ser. 4ª.

12. Documentos—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado sobre los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 296, Ser. 4ª.

Documentos—Véase: *Dictamen pericial*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 11—*Prueba de documentos*, número 1—*Escepción dilatoria*, núm. 3—*Escepción de defecto legal*, núm. 16.

1. Documentos de descargo—Los reconocidos por el acreedor en cualquier estado del juicio forman prueba, aun en el caso de que no pudieran ser agregados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

10.—No se acompañaron los documentos, pero se designó la oficina pública donde se encontraban, espresando lo que de ellos resultaban. Véase nota precedente.

11.—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Documentos*, núms. 4, 5 y 6; tom. 2º, verb: *Acción*, núm. 5; tom. 1º, verb. *Defecto legal*, núms. 759, 760, 761 y 762: *Documentos*, núm. 910: Caravantes, tom. 2º, pág. 89, núm. 607.

12.—De acuerdo con lo preceptuado por el art. 102 del Cód. de Proc. se confirió traslado de los documentos acompañados al contestar la demanda: la parte no se limitó á examinar esos documentos sino que se extendió en consideraciones, lo que no es causal bastante para ordenar la devolución del escrito, pues no existe disposición legal alguna que imponga un límite á ese traslado, lo que por otra parte coartaría el derecho de defensa. Además, si el escrito contiene consideraciones que no hacen á la cuestión, en nada perjudicará esa circunstancia por cuanto no se tomarían en consideración al dictar sentencia.

1.—Véase, verb. *Documentos*, núm. 1, la última parte de la nota.



1ª. Documentos públicos— Los mencionados en la demanda pueden ser agregados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 19, Ser. 3ª.

2. Documentos públicos— En el acto del juicio verbal del interdicto, las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan á su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

Dolo— Véase: *Acto ilícito*, núm. 2— *Contrato de compraventa*, núm. 4— *Declaraciones*, núm. 1— *Escritura*, número 2— *Nulidad de un acto jurídico*, núms. 2 y 7— *Prueba del dolo*, núm. 1.

Domésticos— Véase: *Divorcio*, núm. 9.

1ª. Domicilio— Ignorándose el del que debe absolver posiciones, no puede ser citado por edictos, debe fijarse un

1ª— Art. 72 del Cód. de Proc. El Juez dijo, que no se trataba de documentos que sirvieran de base á la demanda, sino de simples informes.

2ª— Véase *Diligencias de prueba*, núm. 9.

1— Este punto no fué materia de resolución en 1ª Inst., solo la Cámara lo estableció en la apelación. No fué materia de discusión si el apoderado estaba ó no obligado á denunciar el domicilio, sino si debía el absolvente ser citado por edicto. Se resolvió que no, porque el art. 80 del Cód. de Proc. legisla para los casos de citación ó emplazamiento á fin de que el demandado comparezca á estar á derecho, como se desprende no solo de la colocación que ese artículo tiene en la ley, sino también del contexto de todo él. La citación por edictos, no puede hacerse al que debe absolver posiciones, porque el Código establece que debe hacerse por cédula— art. 127.— La Cámara dijo, que «si bien no es procedente la citación por edictos para la comparecencia del que debe absolver posiciones, no puede privarse á las partes del derecho que le acuerda el art. 125 del Cód. de Proc. para que la contraria absuelva posiciones: que tampoco puede obligársele á que acepte como absolvente al apoderado —art. 136.» Fundada en esto, la Cámara declaró que debía fijársele al apoderado un término prudencial para que manifestara el lugar en que se encontraba, á fin de librar el oficio necesario. Los fundamentos de esta resolución, no pueden ser más deslesnables. Con efecto, el art. 136 del Cód. de Pro-



término prudencial para que el apoderado manifieste el lugar donde reside.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 344. Serie 3ª.

2. Domicilio—Las posiciones deben ser absueltas en el domicilio del absolvente, aun cuando el cambio de dicho domicilio se haya verificado después de trabado el litigio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 235, Ser. 3ª.

3. Domicilio—El cambio de domicilio de un testigo, no hace perder el derecho de presentarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3ª.

cedimientos en que la Cámara se funda para obligar al apoderado á designar el lugar en que se encuentra su principal, precisamente es bastante para fundar una resolución contraria, pues autoriza al que pide las posiciones á exigir que las absuelva el apoderado. La absolución hecha por éste, estando facultado al efecto, surte todos los efectos legales, como si lo fuese por la misma parte dueña del pleito. No se le priva pues de ningún derecho al litigante. Por otra parte, esta resolución está en abierta oposición con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Posiciones*, núm. 3, y tom. 1º, mismo verbo, núm. 2071. Se dice en la resolución de la Cámara que el apoderado debe dar el domicilio *bajo apercibimiento*, ¿de qué? preguntamos nosotros. ¿Cuál es el apercibimiento que corresponde hacer efectivo en este caso? Ninguno: no puede ser el de dar por absueltas las posiciones en rebeldía, porque, como tiene resuelto la Cámara, «cuando de autos resulta la ausencia del que debe absolver las posiciones, es inútil la citación bajo apercibimiento». Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, número 4. Esta resolución de la Cámara, no puede ser tenida en cuenta como precedente, porque ella no consulta la ley, ni fué materia de resolución en 1ª Inst., y además está en contra de la jurisprudencia sentada.

2—El art. 136 del Cód. de Proc. establece terminantemente que la absolución debe diligenciarse en el lugar donde se encuentre el absolvente. Ni siquiera exige que tenga allí su domicilio.

3—El testigo estuvo domiciliado en el domicilio indicado en el escrito de presentación hasta dos días antes de presentado dicho escrito, según se comprobó en la diligencia de citación, lo que aleja la idea de un falso domicilio, pues en tan corto intervalo bien pudo ignorar la parte el cambio verificado, en cuyo caso no se quebrantaría lo dispuesto en el art. 181 del Cód. de Proc.



4. Domicilio—El demandante por acción personal puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 3ª.

5. Domicilio—El damnificado por violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

6. Domicilio—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce al domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

7. Domicilio—Las notificaciones practicadas en un domicilio que no es del demandado, producen la nulidad de lo actuado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 10, Ser. 4ª.

8. Domicilio—El conocimiento de las demandas de la sucesión contra terceros, corresponde al Juez del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 353, Ser. 4ª.

9. Domicilio—De los testigos, solo puede resultar falso

4—Véase: verb. *Acción personal*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Damnificado*, núm. 1.

6—Véase: *Allanamiento*, núm. 1.

7—Arts. 37 y 77 del Cód. de Proc.

8—El juicio sucesorio atrae á sí á todos los demás, en virtud de la universalidad de su carácter, pero no pueden promoverse ante el Juez de la sucesión otras demandas que las enumeradas en el art. 634 del Cód. de Proc. Como el heredero entra á continuar la persona del causante, según disposición del art. 1417 del Cód. Civ., en consecuencia, es indudable que tiene los mismos derechos y obligaciones que á éste incumbían. Cuando una sucesión demanda, debe deducir su acción con sujeción á los principios generales de jurisdicción.

9 - El que presentó los testigos, indicó el domicilio que fué alegado de falso por la parte contraria, antes de hacerse la notificación en el domicilio denunciado: esa falsedad alegada no puede ser tomada en consideración hasta tanto no resulte de la misma notificación.

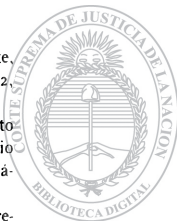
del acto de la notificación, las indicaciones de la parte, no pueden ser atendidas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 432, Ser. 4^a.

10. Domicilio.—Si después del libramiento del exhorto el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para que preste su declaración.—Jur. Civ., tom. 10, página 327, Ser. 4^a.

11. Domicilio.—Debe declararse nula la sentencia re-

10.—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 7.

11.—Esta resolución fué resuelta por mayoría de votos, tres contra dos. Entablada una demanda fué notificado el emplazamiento en un domicilio que no era el del demandado: el apoderado de éste se presentó denunciando el nuevo domicilio y pidió que allí fuese notificado su representado: el Juez de 1^a Inst. hizo caso omiso de esta manifestación, declarando rebelde al demandado: este auto como todos los demás que debían notificarse por cédula lo fueron en el nuevo domicilio denunciado. La mayoría dijo: que la sentencia era nula, porque las notificaciones no fueron hechas de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 45 y 433 del Cód. de Proc. La diligencia de notificación del traslado de la demanda es nula, carece de todo valor legal, como asimismo la rebeldía que se declaró y en consecuencia todo lo actuado es nulo, dado lo dispuesto por el art. 77 del Cód. de Proc. Los demandados no han sido oídos y si bien fueron notificados personalmente de la sentencia que los absolvía de la demanda, esta circunstancia no puede escusar la declaración de una nulidad en la forma establecida por el Cód. de Procedimientos cuyas prescripciones son de orden público y como tales deben ser estrictamente observadas en todos los juicios. La minoría dijo, que si bien el emplazamiento fué notificado en un domicilio que después se alegó no ser verdadero, debía tenerse presente que la providencia declarando decaído el derecho para contestar el traslado de la demanda fué notificado en el nuevo domicilio denunciado, quedando dicha providencia consentida. Si el demandado fué notificado legalmente de esta providencia y de las demás sucesivas, y las consintió, es culpa del interesado no haber hecho uso de su derecho durante toda la secuela del litigio, no obstante haber sido notificado de las providencias dictadas. Si algún defecto hubiese habido en el procedimiento él quedaría subsanado por no haberse reclamado la nulidad en la misma instancia que se produjo—art. 240 del Cód. de Proc.—Uno de los Ca-





caída si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en un domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante, que no era verdadero aun cuando ese pronunciamiento le fuese favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4^a.

12. Domicilio—Las posiciones deben ser absueltas ante el Juez del domicilio del absolvente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4^a.

13. Domicilio—Es nula la citación por edictos y todas

maristas dijo, que no solo la sentencia era nula y todo lo obrado también, sino que era de opinión que las costas debían ser á cargo de la parte que produjo la nulidad. Ese voto solo, sin haber recibido la adhesión de ninguno de los demás, fué bastante para declarar que las costas eran á cargo de éste. De manera que las costas, con toda injusticia, las tuvo que pagar el actor y por el voto de uno contra cuatro. Así es la justicia que administra esta Cámara cuyo criterio está reñido con lo justo y con la ley espresa. Si dos Camaristas consideraron que la sentencia era «válida y que la nulidad deducida por una de las partes era improcedente, ella jamás debió condenar en las costas á la parte cuya buena fe había sido tan ampliamente reconocida. Es que parece que en esta época el secretario, en las sentencias definitivas era el que imponía las costas ó exoneraba de ellas con solo agregarle el aditamento «con costas» ó «sin costas» al acuerdo de la Cámara. Es evidente la injusticia de esta declaratoria de nulidad. El art. 240 del Cód. de Proc. es terminante cuando dice que la nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada si no se reclama en la misma instancia en que se hayan cometido. Por otra parte, la falta de notificación quedará subsanada y el vicio desaparecerá, siempre que resulte de autos haber tenido la parte noticia de la providencia. En este caso, la notificación surtirá sus efectos como si estuviese legítimamente hecha, dice el art. 40 del Cód. de Proc. En el caso que nos ocupa es más notoria y resaltante la injusticia, si se tiene en cuenta que el mismo apoderado, que denunció el domicilio efectivo del demandado, fué el que dedujo el recurso de nulidad. Esta es una de aquellas sentencias que en cualquier país celoso de sus derechos provocaría la más legítima de las reprobaciones.

12—Art. 136 del Cód. de Proc.

13—Entablada la demanda fué notificado el traslado en el domicilio denunciado, donde se le manifestó al notificador que hacia algún tiempo



las actuaciones que en ella se piden, si el demandante conocía ó tenía los medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Ser. 4^a.

Domicilio—Véase: *Fiador*, núm. 1—*Juez competente*, núm. 2—*Testamentaria*, núm. 2—*Testigo*, núms. 2 y 4—*Apoderado*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 28—*Declaratoria de herederos*, núm. 5—*Alquiler*, núm. 1—*Esección de arraigo*, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6—*Menores*, núm. 2—*Jurisdicción*—*Esposa*, núm. 5.

Domicilio constituido—Véase: *Notificación*, núm. 6.

Domicilio del deudor—Véase: *Mora*, núm. 1.

1. Dominio—Transferido por la esposa el dominio á un tercero, los sucesivos adquirentes carecen de derecho para exigir la comprobación del origen del dinero: la nulidad ó validez solo puede discutirse por aquellos cuyos derechos creditarios pueden ser afectados por tal acto. Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

no vivía allí. Entonces se pidió la citación por edictos, y vencido el término de éstos se le dió la intervención correspondiente al Defensor de Ausentes quien se espidió diciendo que estando comprobados los trabajos debían abonarse previa regulación. En este estado se presenta el demandado, pide se le de traslado de la demanda y dice de nulidad todo lo obrado, alegando que el domicilio denunciado no era el verdadero, y que antes de entablarse la demanda, el actor escribió al demandado diciéndole que tenía conocimiento del viage que éste había emprendido á su estancia. El art. 8º del Cód. de Proc. permite la citación por edictos de las personas cuyo domicilio se ignore. Esa ignorancia no puede presumirse como existente, si se tiene en cuenta que por la naturaleza de las relaciones entre actor y demandado debían necesariamente ser frecuentes y susceptibles de proporcionar, tanto á uno como á otro, el medio de conocer sus respectivos domicilios, como efectivamente lo comprobó el demandado en una forma concluyente.

1—Nadie tiene el derecho de exigir la comprobación del origen del dinero, pues la ley solo exige que se *designe* ó *esprese* cómo el dinero pertenece á la mujer—arts. 1246 y 1247 del Cód. Civ.



Domínio—Véase: *Información sumaria*, núm. 2—*Dinero propio*, núm. 1—*Posesión*, núms. 3 y 4—*Reivindicación*, núms. 10, 12, 17, 20 y 23—*Obligación de hacer*, núm. 6—*Posesión judicial*, núm. 5—*Jactancia*, núm. 3—*Muebles embargados*, núm. 1.

Domínio municipal—Véase: *Domínio público*, núm. 1.

1^a. Domínio público—Reconocido el hecho de haber salido el bien del dominio público, la Municipalidad carece de acción para oponerse á los derechos que terceros invoquen sobre él en tanto no presente nuevo título que lo haya revertido al dominio público.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 263, Ser. 3^a.

Domínio público—Véase: *Aluvión*, núms. 1 y 2—*Municipalidad*, núm. 2.

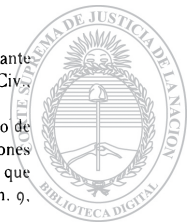
1^b. Donación—Para su validez aunque comprenda todos los bienes del donante, basta justificar que retuvo el usufructo, sin que sea requisito indispensable que esa prueba resulte de la escritura de donación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3^a.

2. Donación—La remisión de una deuda hecha antes de la ley de correcciones al Cód. Civ., no importaba una donación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Posesión*, núm. 10; y tom. 2, verb. *Municipalidad*, núm. 3.

1^b—La escritura decía: «No careciendo tampoco de los medios para subvenir á sus necesidades durante su vida de una manera conveniente.» En el curso de la demanda se comprobó que la donante tenía el usufructo y también una mensualidad que le pasaba la donataria, independientemente de satisfacerle los gastos que hacía para su decencia personal.

2—Así lo establece el art. 3^o, inc. 3^o del tit. «De la Donaciones» del Cód. Civ., edición de 1870; art. 1791 del vigente, habiendo sido reformado aquel artículo.



3. Donación—Debe declararse inoficiosa si el donante carecía de bienes el día de su fallecimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 74, Ser. 3ª.

4. Donación—Si el donante no se reserva el derecho de obligar al donatario al cumplimiento de las condiciones impuestas para perfeccionar la donación, se considera que el acto es condicional y no de modo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Ser. 4ª.

5. Donación—Cumplidas por el donatario las condiciones impuestas en la escritura de donación, el acto queda perfeccionado é irrevocable.—Jur. Civ., tom. 9, página 49, Ser. 4ª.

Donación—Véase: *Incapacidad*, núm. 2 — *Escritura de donación*, núm. 1

3—La ley reputa inoficiosa una donación cuando exceda de la parte de que el donante podía disponer—art. 1830, Cód. Civ.

4—Véase: verb. *Condiciones impuestas*, núm. 1.

5—Y sus efectos se retrotraen al día en que se contrajo la obligación, —art. 543 del Cód. Civ.—Pueden verse asimismo los arts. 533, 1197, 1198, 1849 y 1850.



Edad.—Véase: *Agravio moral*, núms. 1 y 2.

1°. Edictos—Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción del fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3ª.

2. Edictos — La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario, debe hacerse por edictos si no se conoce su domicilio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 3ª.

3. Edictos—Es potestativo del Juzgado la designación

1ª—Art. 115 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 2.

3—La Cámara dijo, que esa facultad era «sin perjuicio de que el Inferior si encuentra algún otro de circulación, que pueda hacer la publicación en condiciones menos onerosas para los interesados, así lo ordene.» Esta facultad discrecional dejada á los jueces, constituye una verdadera amenaza á los intereses de las partes litigantes. Si los jueces cumplieran lo prevenido por la Cámara, de que si otro diario de circulación quisiese hacer la publicación en condiciones menos onerosas, ordenen que se haga en éste, la amenaza no existiría; pero algunos jueces se obstinan en que la publicación se haga en diarios de su predilección, y una vez que uno ha sido designado, el precio que pidan es abusivo, como que saben que es una facultad potestativa concedida por la Cámara que todo lo puede. Conocemos un caso del señor juez Dr.

de los diarios para los edictos, sin perjuicio de tener en cuenta que sean los menos onerosos para los interesados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 130, Ser. 3ª.

4. Edictos—Si no existe persona determinada que tenga la posesión de la cosa, debe citarse por edictos á los que se consideren con derecho escluyente.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 70, Ser. 4ª.

5. Edictos—La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justi-

Peyret en el que ordenó que la publicación de unos estatutos se hiciera en «Tribuna»; la parte pidió que se designara otro órgano de publicidad entre los cuales estaba «El Diario» que pedía la *tercera* parte de lo exigido por «Tribuna». No hizo lugar el Dr. Peyret, y la Cámara confirmó la resolución fundada en esa facultad *potestativa* puesta por ella en manos de jueces que no saben en ciertos casos lo que es una recta administración de justicia. Véase el caso resuelto de «La Prevenida», Juzgado del Dr. Peyret, Secretaría de Cárlos N. Gonzalez. Conferir esta facultad discrecional á ciertos jueces de 1ª Instancia, es hacer lo mismo que se hizo con el tirano Juan Manuel de Rozas, invistiéndolo con las extraordinarias. Es necesario reaccionar contra esta jurisprudencia que carece de todo fundamento racional. Véase: verb. *Diarios*, núm. 1.

4—Arts. 564 y 568 del Cód. de Proc.

5—La publicación se había hecho en «El Boletín Judicial» por todo el término de ley, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 323 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital de 1886, que señala ese órgano de publicidad para insertar los edictos judiciales bajo pena de nulidad. A pesar de no haberse publicado por todo el tiempo que establece la ley, en el otro diario designado por el Juez, se publicaron en otros dos diarios de mucha circulación, circunstancia suficiente para llenar el objeto que se propuso el legislador al exigir que los edictos de los remates se publicaran en dos diarios como lo exige el art. 513 del Cód. de Proc. De aquí resulta que cuando los edictos se publican en diarios de igual ó mayor circulación de los designados por el juez y por igual ó mayor tiempo, el defecto queda salvado porque se cumple el objeto de la ley.





fique que la publicación se ha hecho por un término mayor aunque en otros diarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4ª.

6. **Edictos**—Es nula la citación por edictos y todas las actuaciones que en ella se funden, si el demandante conocía ó tenía medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Ser. 4ª.

Edictos—Véase: *Domicilio*, núm. 1—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Prueba*, núm. 5—*Venia*, núm. 3.

Edictos policiales—Véase: *Poderes locales*, núm. 1.

1. **Edificación**—Sobre el terreno del que está en posesión el que se pretende propietario, excluye la clandestinidad del acto por el cual el reivindicante perdió la posesión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4ª.

Edificación—Véase: *Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núm. 3.

Edificio—Véase: *Demolición*, núm. 1—*Administración*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 13.

Educación común—Véase: *Herencias transversales*, números 1, 2 y 3.

Efectivo—Véase: *Costas*, núm. 58.

6—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 13.

1—La edificación tiene necesariamente que levantarse á la luz del día, lo que constituye por esa misma causa una de las formas más salientes de los actos posesorios—art. 2384 del Cód. Civ.—No debe olvidarse que la edificación aunque sea por cuenta del poseedor precario, como cuando se trata de un inquilino, no puede darle derecho de posesión, porque entonces es difícil establecer el cambio de la causa de la posesión sin la especificación de hechos materiales que pudieran importar la pérdida de la posesión, para creer que el que tenía motivos fundados que su posesión continuaba por medio de otro, ha dejado de continuar en la misma forma: el propietario en este caso tiene derecho á creer que el inquilino continúa poseyendo para el propietario—art. 2446 del Cód. Civ.



1^a. Efecto retroactivo.—La remisión de una deuda es un derecho adquirido desde la fecha en que tuvo lugar, y en consecuencia, las leyes que pueden modificar ese hecho no tienen efecto retroactivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

Efectos legales.—Véase: *Fallecimiento*, núm. 4.

Ejecución.—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1.—*Costas*, núm. 20.—*Crédito líquido*, núm. 1.—*Remate judicial*, núm. 14.—*Honorarios*, núm. 25.—*Acción ejecutiva*, núm. 1.—*Inhabilidad de título*, núms. 6 y 7.—*Venta en remate*, núm. 1.—*Albacea*, núm. 7.—*Prenda*, núm. 1.—*Escepciones*, núm. 4 y 7.—*Embargo*, núm. 1.—*Escepción de inhabilidad de título*, núms. 2 y 5.—*Avisos*, núm. 1.—*Escepción de pago*, núm. 4.—*Nulidad de la ejecución*, número 1 y siguientes.—*Obligación condicional*, núm. 4.—*Jurisdicción civil*, núm. 1.—*Depositario judicial*, núm. 2.—*Mandamiento*, núms. 1 y 2.

1^b. Ejecución de sentencia.—En ella procede la escepción de inhabilidad de título siempre que no conste hallarse consentida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 227, Serie 4^a.

Ejecución de sentencia.—Véase: *Escepción de nulidad*, núm. 1.—*Escepción de pago*, núm. 6.

Ejecución del Fisco.—Véase: *Título de propiedad*, número 20.

1^a—Porque como lo dice el art. 3^o del Cód. Civ., las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. El art. 4^o es una escepción á este principio general.

1^b—Porque el art. 535 del Cód. de Proc. exige como condición para que una sentencia sea ejecutable que «esté consentida ó ejecutoriada.» Y es en este concepto que no admite la escepción de inhabilidad de título cuando se ejecuta una sentencia consentida.



1. **Ejecución hipotecaria**—Es procedente la excepción de inhabilidad de título, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del Escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3^a.

Ejecución hipotecaria—Véase: *Excepción de espera*, número 1—*Excepción de pago*, núm. 2.

Ejecución por honorarios—Véase: *Excepción de pago*, número 1—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, núm. 7.

Ejecutado—Véase: *Autos inapelables*, núm. 1—*Costas*, núm. 20—*Convenio*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 3.

Ejecutante—Véase: *Costas*, núm. 20—*Convenio*, número 1.

Ejecutivo—Véase: *Empedrados*, núm. 2—*Liquidación*, núm. 4.

1. **Ejecutoria**—Las resoluciones no causan ejecutoria

1—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos constituida la Cámara en Tribunal de Interlecciones. El ejecutante decía que el certificado es un título que trae aparejada ejecución—art. 465, inc. 1º del Cód. de Proc.—que atribuye ese carácter á los documentos públicos presentados en forma, y que dicho certificado se encuentra enumerado entre los del art. 979 del Cód. Civ. Pero aunque ese certificado hace referencia circunstanciada á una escritura pública, no es lo mismo que una escritura pública, ni tampoco una copia sacada de los libros de protocolo en la forma que prescribe la ley—art. 1006 del Cód. Civil—de manera que no está comprendido en la designación del inc. 1º del recordado art. 979 del Cód. Civ. El ejecutante daba como razón para no acompañar la escritura pública hipotecaria á la que el certificado se refería, la circunstancia de que dicho testimonio pertenece al ejecutado; pero esto es inaceptable puesto que conteniendo la escritura de venta un pacto hipotecario, el acreedor tiene derecho á exigir del Escribano una copia autorizada—arts. 1006 y 1007 del Cód. Civ.

1—El art. 222 del Cód. de Proc. dice, que una vez pronunciada y notificada la sentencia concluye la jurisdicción del Juez, y el 236 dice,



hasta tanto los interesados hayan sido notificados y las hayan consentido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 30, Ser. 4^a.

Ejecutoria—Véase: *Fuerza ejecutiva*, núm. 1.

1^a. **Ejemplar**—Justificado por la confesión ficta y por la cesión de derechos, la existencia del contrato, los Tribunales no pueden ponerlo en duda, aun cuando no se hubiese agregado á los autos el único ejemplar existente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 3^a.

Ejemplar doble—Véase: *Contrato bilateral*, núms. 1 y 4.—*Contrato*, núms. 12 y 13.—*Documento privado*, núm. 6.

Ejército—Véase: *Proveedor*, núm. 1.

1^b. **Emancipación**—El matrimonio, solo emancipa á los

que transcurridos los términos sin interponerse apelación, quedarán consentidas las sentencias.

1^a.—Véase: *Cesión de derechos*, núm. 3.

1^b.—Este fué un punto muy bien tratado tanto por el Juez de 1^a Instancia, el Fiscal Dr. Cortés, como por la Cámara. Esta resolvió la cuestión revocando el auto de 1^a Inst., y contra la opinión del Fiscal. El sumario se funda en que el art. 131 del Cód. Civ., preceptúa que la emancipación de los menores, sin distinción de sexo, solo tendrá lugar en el caso de matrimonio de éstos, sin depender tampoco de formalidad alguna, cualquiera que fuese la edad en que se hubieren casado, con tal que el matrimonio se hubiere celebrado, con la autorización necesaria, conforme á lo dispuesto en el Código. Y el art. 169 del mismo Código determina que el hijo legítimo de familia y el natural reconocido, que no hubieren cumplido veintidos años, necesitan para contraer cualquier clase de matrimonio el consentimiento paterno. Es incuestionable que la autorización á que se refiere el art. 131 es la del 169 ó sea la de los padres. No hay duda que la emancipación queda subordinada en todos sus efectos á la existencia del consentimiento paterno, puesto que es condición legal que está impuesta. La expresión *con tal que*, gramatical y jurídicamente, envuelve el concepto de condición, siendo indiferente usar una ú otra expresión para determinar su existencia. La condición produce el efecto de subordinar á un acontecimiento futuro é incierto la adquisición de un derecho ó la resolución de un derecho adquirido. Siendo la emancipación una creación de la ley civil, no puede entenderse producida sino mediante el cumplimiento

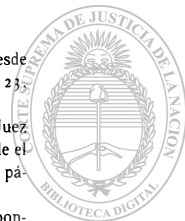


menores de edad cuando se ha verificado con el consentimiento de los padres.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 97, Serie 3ª.

2. **Emancipación**—El padre adeuda intereses por los

de las formalidades con que la ley haya entendido prestar tal favor, y así sucede, sobre todo, cuando se considera que se trata de una excepción, la de que un menor de edad mejore de condición, en cuya condición el beneficio solo puede acordarse al caso que se presenta rodeado de los requisitos exigidos. Del hecho de que la ley pene el casamiento sin el consenso paterno, con pérdidas de ciertos derechos relacionados con el gobierno de los bienes, no se sigue que ese sea el único efecto de esa falta de consentimiento, y por el contrario, fácil es retorcer el argumento, observando que también el art. 193 del Cód. demuestra la inexistencia de la emancipación en cuanto al gobierno de la persona, de modo que sería de preguntar, qué es lo que queda como efecto de la emancipación, cuando no hay administración de bienes, ni intervención del marido en un acto tan serio como el de estar en juicio. Freitas, de cuyo proyecto nuestro Codificador ha tomado la doctrina sobre el punto, en el art. 70 de su proyecto y en la nota del mismo, establece categóricamente, que casándose los menores sin las autorizaciones necesarias, se reputan incapaces como si no se hubiesen casado. Constituyendo la emancipación uno de los modos de extinguirse la patria potestad y estando fundada la que deriva del matrimonio de los menores en el consentimiento tácito, según doctrina común de los autores, porque tal matrimonio supone la existencia del consentimiento paterno para realizarlo, sería absurdo que hubiera de presumirse que tal consentimiento existe, cuando consta espresamente que para evitarlo se ha disimulado la edad. Por lo mismo que se sostiene que la ausencia del consentimiento no anula el matrimonio de los menores en nuestra legislación, habría verdadera inconsecuencia en que la emancipación tuviera como base el consentimiento presunto, y es por el contrario perfectamente congruente nuestra ley, cuando determina como condición de la emancipación por el hecho solo del matrimonio, el consentimiento paterno. De todo esto fluye la conclusión de que los menores que se casan sin el consentimiento de sus padres no quedan emancipados y continúan bajo la patria potestad.

2—Y sin necesidad de interpolación de parte de los hijos, dice el fallo que resolvió el punto. No son aplicables los artículos 308 y 309 del Cód. Civ., porque la obligación del padre no proviene de una obliga-



fondos de los hijos desde la mayor edad de éstos ó desde la fecha de su emancipación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 23, Ser. 4^a.

1. **Embargo**—La tercería debe ser deducida ante el Juez de la ejecución donde existen los fondos; no procede el embargo pedido ante otro Juez.—Jur. Civ., tom. 3, página 99, Ser. 3^a.

2. **Embargo**—Si los bienes dados á embargo responden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

3. **Embargo**—Debe levantarse la inhibición si se presentan bienes suficientes á embargo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 3^a.

4. **Embargo**—Ejecutoriada la inhibición general, es procedente el embargo de los fondos del deudor, depositados en poder de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 125, Ser. 4^a.

5. **Embargo**—La sentencia de alimentos hace proce-

ción de dar ó de hacer, sino de fondos que por ministerio de la ley ha recibido para administrar—estinguida dicha administración y como consecuencia el usufructo que de los bienes de los hijos tiene el padre—está obligado á abonarlos desde el día en que se le reclama. Si así no fuese, tendríamos que el derecho de usufructo no se extinguiría á pesar de llegar los hijos á la mayor edad ó de emanciparse, si hubiese de subordinarse previamente á lo que éstos tuviesen que hacer para entrar en posesión de lo que legítimamente les corresponde.

1—Porque es ante el Juez á cuya orden estén los fondos, donde debe discutirse el mejor derecho que puedan tener los que pretendan preferencia á los mismos.

2—El Juez ordenó la tasación del inmueble dado á embargo, y de ella resultó que el valor de la cosa excedía de la cantidad á afianzarse.

3—Arts. 455 y 461, en su última parte.

4—Desde el momento en que hay ejecutoria, toda discusión sobre su procedencia es impertinente y fuera de lugar.

5—Art. 448 del Cód. de Proc. en su última parte.



dente el embargo de bienes suficientes para responder á su pago.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 4^a.

6. **Embargo**—Solo puede trabarse en bienes de los que esté en posesión el deudor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 93, Ser. 4^a.

7. **Embargo**—Solo puede embargarse bienes al alimentario por las mensualidades vencidas, aun cuando enajene el único bien que constituye su responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 52, Ser. 4^a.

8. **Embargo**—Subsistente el embargo, procede el informe del Registro de la Propiedad sobre las condiciones del dominio de los bienes embargados.—Jur. Civ., tom. 3, página 76, Ser. 4^a.

9. **Embargo**—No procede, si el crédito que lo funda se encuentra pendiente del fallo del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 28, Ser. 4^a.

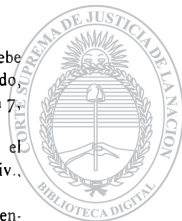
10. **Embargo**—Presentados á embargo bienes de la sociedad suficientes á responder al crédito, debe levantarse la inhibición personal de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4^a.

6—No debe tomarse como principio general el sentado en el sumario, pues el art. 473 establece con toda claridad que el embargo puede recaer sobre bienes que estén en poder de un tercero. El art. 478 parece favorecer lo resuelto en el sumario, cuando dice, que si el acreedor señala los bienes á embargarse, deberá proveerse de conformidad, «si estuviere en posesión de ellos el deudor.»

7—Porque esas mensualidades son las únicas que constituyen deuda exigible.

8—Hay evidente conveniencia en saber si los bienes embargados pertenecen ó han dejado de pertenecer al embargado con el fin de conocer la eficacia del embargo, pues podría resultar que ellos hubiesen pasado á otras personas y en tal caso sería el embargo completamente ilusorio.

10—Véase: *Bienes de la sociedad*, núm. 1.



11. **Embargo**—La oposición deducida por el que debe pagar los fondos cuyo embargo se ha pedido y decretado, debe sustanciarse en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom 7, pág. 66, Ser. 4^a.

12. **Embargo**—De los alquileres, hace procedente el nombramiento de un administrador judicial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 4^a.

13. **Embargo**—Debe decretarse una vez dictada sentencia de alimentos aun cuando no se encuentre consentida.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 17, Ser. 4^a.

14. **Embargo**—Solo procede la inhibición preventiva cuando no se conocen bienes en que trabar el embargo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 24, Ser. 4^a.

15. **Embargo**—Trabado sin oposición, no procede su levantamiento sin que se deduzca la correspondiente tercera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 42, Ser. 4^a.

16. **Embargo**—Es facultativo del Juzgado apreciar el valor de los bienes presentados á embargo para el levantamiento de la inhibición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 4^a.

11—Porque esa oposición no tiene marcado un trámite especial en nuestro Cód. de Proc., en cuyo caso debe ventilarse en la forma ordinaria—art. 66.

13—No es necesario que el demandado consienta la sentencia de alimentos provisórios, dada la naturaleza especial del juicio de alimentos en el cual la apelación solo procede en el efecto devolutivo. El artículo 536, no puede aplicarse á esta clase de sentencias porque en ellas no se trata de hacer efectivo el cobro de un crédito, sino de una prestación alimenticia que se fija, teniendo en cuenta el importe del caudal del alimentario y la condición social del alimentado. Esta resolución está de acuerdo con el núm. 5.

14—Art. 461 del Cód. de Proc.

15—Art. 529 del Cód. de Proc.

16—El art. 454 del Cód. de Proc. faculta al Juez para calificar por sí solo la caución ofrecida. Esta cuestión ha sido resuelta contradictoriamente por la Cámara. Véase: verb. *Caución*, núm. 1 y su nota.



17. **Embargo**—Terminado por convenio entre ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, éste debe levantarse declarándose procedente la tercería de dominio á que hubiese dado lugar—Jur. Civ., tom. 9, página 198, Ser. 4^a.

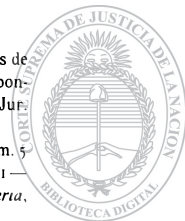
18. **Embargo**—El ejecutante que ha conseguido ampliación del embargo, carece de derecho para mantener el segundo embargo si los bienes que fueron objeto del primero bastan para cubrir el importe de su crédito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

19. **Embargo**—Trabado sobre otros bienes que no sean los ordenados, debe quedar sin efecto.—Jur. Civ., tomo 10, página 57, Ser. 4^a.

17—El embargo tiene por objeto garantizar al acreedor con los bienes de su deudor y solo debe estenderse hasta la concurrencia de su crédito—art. 471 del Cód. de Proc.—y si el crédito á que respondía el embargo desaparece, también el embargo debe levantarse, porque no hay ya ningún crédito que garantizar. La tercería será declarada procedente, si el ejecutado no se opone al derecho invocado por el tercerista.

18—El ejecutante obtuvo el embargo de algunos bienes para responder á su ejecución. Se dedujo tercería sobre esos bienes: entonces pidió y obtuvo la ampliación del embargo. El dueño de los bienes sobre los cuales recayó este segundo embargo, dedujo tercería: pendiente ésta, se falló la primera tercería rechazándola. La segunda tercería no puede subsistir porque ella tenía su fundamento en la existencia de la primera; si ésta desaparece no hay razón para mantener el segundo embargo, porque la primera tercería fué causa del segundo embargo: desaparecida la causa desaparece el efecto. *Sublata causa tollitur effectum*. Con el rechazo de la primera tercería, queda el crédito suficientemente garantido con los bienes primeramente embargados, y es sabido que el embargo debe limitarse á los bienes suficientes para pagar el crédito que se ejecuta—art. 471 del Cód. de Proc.

19—Dirigido un exhorto á las autoridades judiciales de San Juan, se embargaron bienes que no eran los designados en el oficio rogatorio. Se ordenó el levantamiento de dicho embargo, porque el artículo



20. **Embargo**—Los fondos depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 311, Ser. 4^a.

Embargo—Véase: *Tercería*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 5—*Caso fortuito*, núm. 2—*Depositario judicial*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 3—*Depósito*, núm. 1—*Tercera*, núm. 6.

1^a. **Embargo indebido**—Hace responsable al que lo pidió, de los daños y perjuicios causados, ya sea á un tercero, ya al mismo ejecutado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

2^a. **Embargo indebido**—La acción por daños y perjuicios, fundada en un embargo indebido, es improcedente, si el demandado como responsable no lo solicitó, y si llevado á efecto no se opuso á su levantamiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 187, Ser. 3^a.

1^b. **Embargo preventivo**—La declaración de incompetencia del Juzgado, hace procedente el levantamiento del embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 370, Ser. 3^a.

2^b. **Embargo preventivo**—Para que proceda en virtud de

478 del Cód. de Proc. establece que se embargarán los bienes que el acreedor señale.

1^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 4.

2^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 1.

1^b—El dueño de los bienes embargados tiene derecho á exigir que la acción se entable dentro del término de ocho días, debiendo en caso de no hacerlo el actor, alzarse el embargo. La demanda se dedujo ante juez incompetente, declarándose así, siendo procedente el levantamiento del embargo. Es por esto que la Cámara ha dicho que el juez que se considere incompetente debe de oficio escusarse de decretar un embargo preventivo. Véase: Inst., tom. 4, verb. *Embargo preventivo*, núm. 10.

2^b—La Cámara dió como único fundamento la circunstancia de «no acompañarse recaudo alguno suficiente para determinar la aplicación del art. 447 del Cód. de Proc.» Parece que esta resolución no consulta debidamente el derecho de los litigantes. La ley dice que procede el



una acción reivindicatoria deducida, debe acompañarse recaudos suficientes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 354, Ser. 3ª.

3. **Embargo preventivo**—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 3ª.

4. **Embargo preventivo**—La acción de daños y perjuicios fundada en un embargo preventivo indebido, es improcedente contra el juez, mientras no se demuestre la irresponsabilidad del que lo obtuvo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 312, Ser. 3ª.

5. **Embargo preventivo**—La deducción de la demanda en forma dentro del término de ocho días después de trabado el embargo preventivo, no es procedente si ésta es la consecuencia de la acción deducida.—Jur. Civ., tom. 1, página 334, Ser. 3ª.

6. **Embargo preventivo**—El rechazo de la demanda por

embargo preventivo, siempre que se deduce acción reivindicatoria. Nada más exige. Las condiciones impuestas por la Cámara en este caso no están fundadas ni en la ley ni en la equidad.

3—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara, con la que no estamos conformes, según puede verse en el tom. 2 de la Inst., verb. *Embargo preventivo*, núm. 20 y su nota. Puede verse además otras resoluciones de acuerdo con el sumario. Inst., tom. 4, verb. *Embargo preventivo*, núms. 3 y 4; tom. 3, mismo verb. núms. 3, 4, 5, 6, 10 y 12; *Obligación de hacer*, núms. 1, 2 y 5; tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, números 19, 20, 22 y 25; *Obligación de hacer*, núms. 2 y 3; tom. 1, verb. *Mandamiento de embargo preventivo*, núm. 1703.

4—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 2.

5—El art. 460 del Cód. de Proc., solo tiene aplicación tratándose de una demanda á iniciarse, pues no se puede referir ni se refiere á una demanda ya instaurada.

6—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, núm. 2. El fundamento aducido por la Cámara es que «no se puede pedir embargo porque no existe crédito siempre que la sentencia hubiese sido apelada.» Este argumento nada prueba. Ningún crédito, reconocido en una sentencia, existe mientras ella no



sentencia definitiva, aún con especial condenación en costas. no basta para decretar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 18, Ser. 3^a.

7. **Embargo preventivo**—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer, no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 22, Ser. 3^a.

8. **Embargo preventivo**—La retractación de la fianza

hubiese pasado en autoridad de cosa juzgada. De manera que jamás podría aplicarse la disposición del art. 448 en su última parte. El embargo preventivo no se dá cuando el derecho ó crédito es incontrovertible, todo lo contrario, cuando el derecho es tan solo verosímil, la ley acuerda el embargo preventivo al que favorece la sentencia, que el derecho para garantizarse en los resultados posibles del juicio. Si la sentencia pasase en autoridad de cosa juzgada, si ya no fuese apelable, si el crédito existiera de una manera real é incontrovertida, el litigante no pediría un embargo *preventivo* sino uno *definitivo*. La Cámara quiere hacer distinciones que la ley no ha tenido en cuenta: la Cámara es peor que el más caviloso de los litigantes; trata de introducir el caos en la jurisprudencia para tener siempre en apoyo de sus resoluciones, precedentes contradictorios y así poder resolver cualquiera cuestión en la forma que mejor le parezca, pudiendo siempre aducir como fundamento un precedente por ella establecido. El art. 448 del Cód. de Proc. es terminante cuando dice: «durante un juicio ordinario, podrá pedirse un embargo preventivo, siempre que el que lo solicita hubiese obtenido una sentencia favorable.» Esa sentencia favorable de que nos habla la ley, no quiere decir que si ella es apelada no pueda pedirse el embargo preventivo. La Cámara ha dictado en otro caso una resolución por la que dijo, que no estando regulados los honorarios no procede el embargo preventivo, lo que hace creer que regulados los honorarios, la orden dada es perfectamente procedente. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Embargo preventivo*, núm. 7. El principio establecido en el sumario es á todas luces insubsistente y es seguro que será reformado.

7—Véase el núm. 3.

8—Decretado un embargo preventivo previa fianza que el solicitante deberá prestar, fué un tercero ofrecido como fiador y aceptado, otorgándose la respectiva escritura. Después se presenta el fiador diciendo que tiene que ausentarse para Europa, y que como su fianza es de



aceptada de conformidad de partes, debe admitirse sin que el Juzgado esté obligado á resolver si existe ó no trabado el embargo preventivo para el cual fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 190, Ser. 3^a.

9. Embargo preventivo—Las cuentas por empedrados debidamente visadas por la Municipalidad, son título bastante para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 231, Ser. 3^a.

10. Embargo preventivo —La concesión del recurso de apelación del incidente sobre embargo preventivo, no suspende la jurisdicción del Juzgado sobre lo principal.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 371, Ser. 4^a.

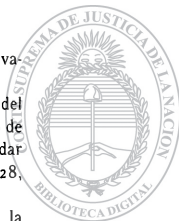
11. Embargo preventivo—El inmueble objeto de una

obligación futura por no existir aún obligación principal, se encuentra en el caso del art. 1990 del Cód. Civ., y pide que se le permita retractar la fianza. El Juzgado ordenó la cancelación de la fianza por la conformidad prestada por las partes y porque el embargo no se había trabado aun. Una de las partes dijo que el embargo había sido trabado, lo que fué negado por el otro litigante. Esta cuestión de si estaba ó no trabado el embargo, nada tenía que ver con la fianza, desde el momento en que todos estaban conformes con la retractación de la fianza prestada. La razón de esa conformidad nada tenía que ver con este caso.

9—El título trae aparejada ejecución, de acuerdo con lo establecido en los arts. 465 y 471 del Cód. de Proc., y leyes de 26 de Octubre de 1881, y 29 de Setiembre de 1882.

10—Cuando el incidente corre por cuerda separada, pues de lo contrario no es posible continuar entendiendo en lo principal cuando con motivo de la apelación se elevan al Superior los autos. Desde el momento en que el expediente se eleva por cualquiera causa, se suspende el juicio, de manera que al ser devuelto al Inferior, continúa en el mismo estado en que se encontraba en el momento de ser elevado. Cuando el incidente corre por cuerda separada, como en el caso que nos ocupa, la jurisdicción del juez no se suspende, porque el procedimiento seguido entonces es independiente de lo principal, regido por trámites completamente distintos.

11—Art. 447 del Cód. de Proc.



demanda reivindicatoria, puede ser embargado preventivamente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 182, Ser. 4^a.

12. Embargo preventivo—Procede el de los bienes del esposo ó de la sociedad conyugal, si iniciado el juicio de divorcio existe peligro de que aquél pretenda defraudar los intereses de la esposa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 128, Ser. 4^a.

13. Embargo preventivo—La falta de contestación á la demanda, no hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 149, Ser. 4^a.

14. Embargo preventivo—El reconocimiento parcial de

12—Se decretó el embargo preventivo con la sola manifestación de la parte, en la que aseveraba que sus bienes corrían peligro. El art. 74 de la Ley de Matrimonio solo establece que los bienes se pongan á cargo de otro administrador bajo inventario, cuando durante el juicio de divorcio, la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas ó disipación de los bienes del matrimonio. Pero como el solo hecho de poner los bienes bajo otra *administración* no le impediría al esposo la *enajenación* de los bienes, la jurisprudencia ha establecido á favor del cónyuge la facultad de pedir el embargo preventivo de los bienes. Por varios conceptos este artículo no llena los fines que se tuvieron en vista al dictarlo. Así la ley solo autoriza á poner bajo otra administración los *bienes de la sociedad*, y los de la esposa que el marido administra por ministerio de la ley?

13—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. La rebeldía puede ser total ó parcial, la primera se opera cuando se declara rebelde á un litigante y se le sigue el juicio en rebeldía; lo segundo sucede cuando se dá por evacuado en rebeldía un traslado conferido. Solo la rebeldía total autoriza el embargo preventivo—art. 437 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Rebeldía*, núm. 7.

14—Una persona demandada por asistencia médica, reconoció al contestar la demanda parte de esa asistencia. El Juez fijó prudencialmente la suma por la cual debía librarse mandamiento de embargo preventivo, fundándose especialmente en el art. 448 del Cód. de Proc. Ese reconocimiento hace presumir verosíblemente el derecho del actor respecto á la parte que reconoce el demandado adeudar. La circunstancia de que un reconocimiento sea condicional, nada arguye contra la apli-



la deuda al contestar la demanda, hace procedente el embargo preventivo—Jur. Civ., tom. 1, pág. 160, Ser. 4^a.

15. Embargo preventivo—Es improcedente cuando el crédito no resulta exigible sin juicio previo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 147, Ser. 4^a.

16. Embargo preventivo—No procede tratándose de una obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 372, Ser. 4^a.

17. Embargo preventivo—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para decretar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, página 134, Ser. 4^a.

18. Embargo preventivo—Es procedente siempre que el crédito conste de instrumento público.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 4^a.

19. Embargo preventivo—Siempre que del instrumento público resulte crédito líquido, procede el embargo preventivo ó la inhibición.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 138, Serie 4^a.

cabilidad del art. 448 citado, porque esta disposición no exige un reconocimiento simple, expreso ó categórico, bastando una confesión ficta y aun verosímil.

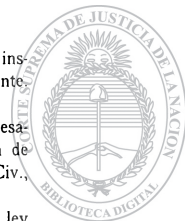
15—El documento en virtud del cual se pidió el embargo preventivo, no acreditaba la existencia de la obligación, y por consiguiente no procedía el embargo preventivo. Tampoco el documento estaba comprendido entre los legislados en el art. 620 del Cód. Civ.

16—Véase, el núm. 3.

17—Véase, nota precedente.

18—Art. 443, inc. 2º del Cód. de Proc.

19—Se trataba de un contrato bilateral, en el que concurrían las condiciones requeridas por el art. 443 en su inc. 3º, para los embargos preventivos, á saber: 1º que la acción se funde en un contrato bilateral; 2º que el crédito esté debidamente comprobado; 3º que se justifique sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor ó que éste ofrezca cumplirlo.



20. **Embargo preventivo**—Justificado el crédito por instrumento público, el embargo preventivo es procedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 119, Ser. 4^a.

21. **Embargo preventivo**—Para que proceda, es necesario que el instrumento público contenga obligación de pagar cantidad líquida en plazo determinado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 150, Ser. 4^a.

22. **Embargo preventivo**—El término que fija la ley para deducir acción en caso de embargo preventivo, es improrrogable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 372, Ser. 4^a.

23. **Embargo preventivo**—Para que éste se conceda, no basta que sea procedente, debe fundarse el pedido en las disposiciones pertinentes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 38, Serie. 4^a.

20—Art. 443, inc. 3° del Cód. de Proc.

21—De los antecedentes que suministra el fallo publicado no se puede saber si se pedía mandamiento de ejecución y embargo en un juicio ejecutivo ó si solamente se pedía embargo preventivo como medida de garantía de un juicio ordinario. Para lo primero el auto sería correcto, pues el art. 464 del Cód. de Proc. establece el principio sentado en el sumario. No sucede lo propio, tratándose de un embargo preventivo, porque las exigencias del sumario no las establece el art. 443 en ninguno de sus incisos: por el contrario, espresamente establece su procedencia aunque la deuda esté sujeta á condición, suspensión ó *pendiente de plazo*. Tampoco es necesario que la deuda sea líquida, pues cuando no reúne esta condición puede el Juez fijar prudencialmente su monto para podersa librar el mandamiento por cantidad líquida, como puede verse en el núm. 14.

22—Así resulta de la disposición del art. 460 del Cód. de Proc., cuando dice, «si el dueño de los bienes embargados lo exigiera, la demanda deberá ser deducida en el *preciso término* de ocho días.» Véase el núm. 28.

23—El sumario se refiere á los fundamentos de hecho que se debe aducir en apoyo de su pedido, como cuando el deudor trata de enajenar ó trasportar sus bienes—art. 443, inc. 5°.—No se hizo lugar al embargo sin perjuicio del derecho de solicitarlo nuevamente una vez llenados esos requisitos



24. Embargo preventivo.—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 363, Ser. 4^a.

25. Embargo preventivo.—Solo procede por cantidad líquida.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 53, Ser. 4^a.

26. Embargo preventivo.—El mandamiento solo puede

24—Véase el núm. 3.

25—La existencia de la obligación no se estableció ni por instrumento público ni privado, como lo exige el art. 443 del Cód. de Proc. en su inc. 2º: solo se presentaron algunas cartas que á lo más podían servir como elementos de prueba; pero en manera alguna para llenar las exigencias de la ley. Por esto, no se hizo lugar al embargo preventivo, y teniendo por último en consideración que la jurisprudencia de la Cámara siempre ha exigido para librarse el embargo preventivo que haya cantidad líquida. Pero debe tenerse presente que si esta última condición no concurre *á priori*, puede el Juez establecerla prudencialmente. Véase el núm. 21.

26—En un juicio ordinario sobre cobro de honorarios, se había obtenido una sentencia favorable. Fundándose en el art. 448 se solicitó un embargo preventivo, á lo que no se hizo lugar, porque la sentencia no contenía la obligación de pagar cantidad líquida, y que tampoco se podría estimar prudencialmente porque ese acto importaría un prejuzgamiento. Que por otra parte, cuando el art. 443 del Cód. de Procedimientos acuerda el embargo preventivo tratándose de obligaciones de dar, exige que concurren las demás circunstancias que la ley enumera, entre las que se encuentra la de que el mandamiento se libre por cantidad líquida: que el derecho acordado por el art. 448 del Cód. de Proc. está subordinado á los requisitos de los arts. 451 y 455, los cuales establecen: el 1º que se observe lo dispuesto en el art. 471, y el 2º que se trabé el embargo en la forma y orden prescripto para el juicio ejecutivo. Uno solo de estos argumentos no resiste una réplica razonada. Ante todo, esta resolución está en contra de lo establecido en el núm. 14. Ambas resoluciones, que sientan principios tan diametralmente opuestos fueron confirmadas por sus fundamentos. Esto prueba cómo se preocupa la Cámara en el estudio que se somete á su decisión. El Inferior la convence con suma facilidad y confirma su resolución aunque consagre la mayor de las injusticias. Véase: Inst., tomo 3º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 3; y tom. 2º, mismo verbo, números 25 y 26.

librarse por cantidad líquida, tratándose de obligaciones de dar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 389, Ser. 4ª.

27. Embargo preventivo—El embargado á las resultas de un juicio, puede exigir la fijación judicial del plazo dentro del cual debe deducirse la acción.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 362, Ser. 4ª.

28. Embargo preventivo—El error en la acción no al-

27.—El embargado no puede esperar indefinidamente que se deduzca la acción, pues esa demora puede traerle graves perjuicios por tener sus bienes embargados. Se fijó el término de diez días. Enablada una demanda para que se otorgara un mandato á favor del actor y obtenida en 1ª Inst. una sentencia favorable, se pidió y obtuvo un embargo preventivo. La sentencia fué confirmada por el Superior: el vencido no otorgó el poder. Como se trataba de una obligación de hacer, en caso de no cumplirse, tenía que resolverse en indemnización de daños y perjuicios, en caso de incjecución. Los que habían obtenido una sentencia favorable quedaron inactivos, y entonces el vencido pidió que se le fijara un término dentro del cual debía iniciar la acción correspondiente, bajo apercibimiento de levantarse el embargo. Se proveyó de conformidad.

28.—Obtenido un embargo preventivo, el embargado pidió que se iniciara el juicio correspondiente dentro del término de ocho días que acuerda el art. 460 del Cód. de Proc.. El actor dejó pasar los primeros siete días y al octavo presentó escrito pidiendo el reconocimiento de la firma que servía de base á la acción, á lo que no se hizo lugar. Este escrito fué considerado como que no interrumpía el término, por que su presentación dió margen á un error, pretendiéndose preparar la vía ejecutiva que fué declarada improcedente por el Inferior y confirmada la resolución por el Superior. Resulta entonces que la acción no fué enablada en forma, porque debió haberse iniciado el juicio ordinario en forma, lo que no se efectuó, pues solo se pidió el reconocimiento como medida preparatoria del juicio ejecutivo, á lo que no se hizo lugar, como se ha visto más arriba. Quizá habría procedido como medida preparatoria del juicio ordinario, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 67 del Cód. de Proc., pero ni aun este trámite habría sido bastante para considerar deducida en forma la acción. De aquí resulta que ha habido error por parte del actor, error de derecho que en ningún caso excusa los efectos legales de los actos lícitos—art. 923 del





tera el término que la ley fija para deducirla, y el embargo debe ser levantado, acusada que sea la correspondiente rebeldía.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 372, Ser. 4^a.

29. **Embargo preventivo**—Para que proceda en la petición de herencia, deben acompañarse los recaudos necesarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 220, Ser. 4^a.

30. **Embargo preventivo**—Esta medida procede cuando se obtiene una sentencia favorable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4^a.

31. **Embargo preventivo**—Fundado en sentencia favorable, solo procede si se condena al pago de cantidad determinada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 4^a.

32. **Embargo preventivo**—No procede fundado en daños y perjuicios no justificados.—Jur. Civ., tom. 4, página 239, Ser. 4^a.

Cód. Civ.—Ese error no puede hacer renacer un término fengido, no puede considerarse como existente para eludir una disposición legal que crea obligación, ó declara el vencimiento de un término.—Nota del Dr. Velez al artículo citado.—El escrito presentado después de denegada la medida preparatoria solicitada, y después de vencido el término aunque sea ya en forma, no puede partir los efectos legales ni considerarse presentado en la forma prescripta por el art. 460 citado.

29—El Juez de 1^a Inst. dijo, que no procedía la medida solicitada porque ella no estaba autorizada por ninguna disposición legal. La Cámara confirmó el auto por «no acompañarse á la demanda los recaudos necesarios para que sea procedente la medida de seguridad solicitada.

30—Art. 448 del Cód. de Proc.

31—Se trataba de una sentencia que condenaba á hacer escritura pública, en cuyo caso no procede el embargo preventivo, según la jurisprudencia constante de la Cámara.

32—Los daños y perjuicios se hacían consistir en los causados por el curador de un insano; no se hizo lugar á la medida preventiva por que su existencia no estaba acreditada en forma alguna, y además por que el juicio no versaba sobre ellos sino sobre remoción del curador.

33. Embargo preventivo—El hecho de no conocerse los bienes al deudor, hace procedente la inhibición en los casos que la ley acuerda el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4^a.

34. Embargo preventivo—Esta medida solo procede para garantizar los derechos reconocidos, no debiendo ampliarse si éstos están suficientemente garantidos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 430, Ser. 4^a.

35. Embargo preventivo—La absolución de las posiciones en rebeldía, no basta para decretarlo.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 325, Ser. 4^a.

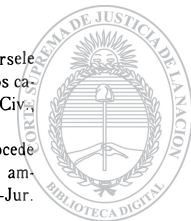
36. Embargo preventivo—Para que la demanda de rei-

33—Art. 461 del Cód. de Proc.

34—Los embargos preventivos por su carácter precaucional y conservatorio, no deben exceder del justo límite que señala el derecho mismo que se trata de garantizar, so pena de convertirse en odiosa y arbitraria una medida introducida en la ley con fines esencialmente saludables. El art. 471 del Cód. de Proc. consagra esta doctrina cuando dice: «se procederá á embargar *bienes suficientes* para cubrir la cantidad demandada, sus intereses y costas.»

35—Se había dado por contestada la demanda, y la parte no había comparecido al acto de las posiciones el día señalado. Es sabido que el hecho de darse por evacuado el traslado de la demanda en rebeldía, no autoriza el embargo preventivo porque esto solo importa una rebeldía parcial, siendo así que el art. 437 del Cód. de Proc. exige una rebeldía total. En cuanto á las posiciones mandadas agregar, no pueden tampoco autorizar el embargo preventivo, porque la ley solo autoriza al Juez á darlas por absueltas al dictar sentencia—art. 133 del Cód. de Proc.—De aquí resulta que no se puede decretar un embargo preventivo en virtud de las posiciones mandadas agregar cuando no concurre el absolvente á la audiencia, porque el Juez no tiene elementos en que fundar su resolución, ni puede decirse que existan en autos indicios ó presunciones que hagan verosímil el hecho litigioso, como dice el artículo 448 del Cód. de Proc.

36—La Cámara revocó el auto del Inferior que concedía el embargo: ella dijo que «hallándose desprovista de todo recaudo que haga verosímil el derecho alegado y de acuerdo con la jurisprudencia estable-





vindicación haga procedente el embargo preventivo, debe ser acompañada de recaudos suficientes.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 393, Ser. 4^a.

37. Embargo preventivo—No procede fundado en un contrato bilateral, si la parte no justifica sumariamente haberlo cumplido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 4^a.

38. Embargo preventivo—No procede aun después de iniciada la separación de bienes, mientras no se justifique el peligro de la demora.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 28, Serie 4^a.

39. Embargo preventivo—La demanda de reivindicación de muebles, aun fundada en un documento privado, hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 7, página 51, Ser. 4^a.

40. Embargo preventivo—Cualquier Juez puede cumplir

cida en casos análogos, no procede la medida solicitada.» Hemos buscado inútilmente esta jurisprudencia invocada por la Cámara sin que nos haya sido posible encontrarla en ninguno de sus fallos. En los varios casos resueltos, jamás se ha exigido la justificación previa por medio de recaudos que acrediten el derecho invocado. No se ha exigido ese requisito en ninguno de los siguientes casos: Inst., tom. 4^o, verb. *Embargo preventivo*, núm. 7; tom. 3^o, mismo verbo, núm. 1; tomo 1^o, verb. *Petición de herencia*, núm. 20-8. El embargo debe limitarse á la parte alicuota que puede corresponder al heredero. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Embargo preventivo*, núm. 3.

37—Art. 443, inc. 3^o del Cód. de Proc.

38—El art. 1295 del Cód. Civ. exige que haya peligro en la demora para que sea procedente el embargo preventivo.

39—Art. 447 del Cód. de Proc. El documento privado hace verosímil el derecho alegado.

40—Un exhorto dirigido á los Tribunales de esta Capital por un Juez de 1^a Inst. extraño á esta jurisdicción, solicitando un embargo preventivo por una suma inferior á la competencia de los Jueces de 1^a Instancia, se ordenó su cumplimiento por este Tribunal. Se dijo, que tratándose de un asunto de menor cuantía no competía su diligenciamiento al Juez de 1^a Inst. Se resolvió dar cumplimiento al exhorto,

un exhorto del extranjero pidiendo un embargo preventivo, aun cuando no se halle debidamente dirigido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 68, Ser. 4^a.

41. Embargo preventivo—El término que la ley fija, al

teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de los Tribunales no es aplicable en este caso por cuanto se trata de una simple comisión á cumplir que le encomienda otro Juez de igual jurisdicción á la del Juzgado exhortado. Se tuvo en cuenta asimismo, que la comisión se refería á un embargo preventivo cuyo diligenciamiento no debía demorarse, cumpliéndose al mismo tiempo con la cordialidad y reciprocidad que las leyes encomiendan á los Jueces guardar entre sí. Por otra parte, debe tenerse presente que los Jueces de países ó territorios distantes, cumplen con dirigirse á un Juez de igual categoría, pues pueden ignorar las leyes de forma vigentes en el país á donde se dirigen.

41—El último día antes de haber espirado el término de ocho días que acuerda el art. 460 del Cód. de Proc., solicitóse el reconocimiento de una firma para preparar la vía ejecutiva, petición que fué rechazada. Se resolvió que dicha petición no podía producir el efecto de suspender el término, porque el art. 460 del Cód. de Proc. habla de demanda, y en tal concepto debe deducirse una acción que revista los caracteres de tal, dentro del plazo que es improrrogable á estar al texto explícito del artículo. Siendo improrrogable el plazo, no puede ampliarse ni prorrogarse por mayor término que el señalado, ni reabrirse después de vencido: este es el efecto propio de los términos perentorios ó fatales. Estudiando la razón del artículo parece incuestionable que la sanción que él contiene, una vez que el deudor ha formalizado sus exigencias de conformidad á lo prevenido en el mismo, no podría evitarse con peticiones cuya impertinencia ha sido constatada en juicio, sino mediante la presentación de demanda en forma y dentro del término fijado para ello, entre otros motivos, porque sería contrario á la equidad que el dueño de los bienes embargados hubiera de quedar sujeto por tiempo indefinido á las consecuencias enojosas que aparea a aquella medida autorizada para casos extraordinarios. La disposición de nuestro Código ha sido tomada de la Ley de Enjuic. Civil de España, cuyo art. 940 contiene una disposición análoga. Los comentadores de dicha ley sostienen que el término allí establecido para accionar y para lo que se supone debía estar dispuesto el que solicitó el embargo, es improrrogable por equivar á este concepto la calidad de *preciso* con que lo designa la ley. Del mismo modo que el plazo para apelar ó para oponer escepciones no





que ha conseguido un embargo preventivo para deducir demanda, es fatal sin que por ningún incidente se considere interrumpido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 108, Ser. 4^a.

42. Embargo preventivo—No procede si la obligación es de hacer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 31, Ser. 4^a.

43. Embargo preventivo—Procede si de los libros de comercio llevados en forma consta la deuda que se reclama.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 138 y 235, Ser. 4^a.

44. Embargo preventivo—Si es como diligencia preparatoria del juicio, no procede la declinatoria de jurisdicción—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4^a.

45. Embargo preventivo—Aun cuando no se haya hecho saber al deudor el embargo preventivo, el término para apelar corre desde que la parte haya tenido conocimiento de él.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 58, Ser. 4^a.

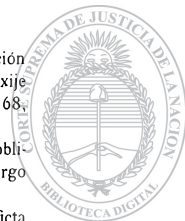
se ha considerado jamás que se interrumpiera por la presentación de escritos que no importasen la interposición de un recurso ó la promoción de un artículo. Estos fueron los fundamentos aducidos por la mayoría de los Camaristas, habiendo la minoría aducido razones de peso en contra de esta resolución. El sumario está de acuerdo con el caso resuelto en el núm. 28.

42—De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara.

43—Art. 443, inc. 4º del Cód. de Proc.

44—Véase: verb. *Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1.

45—Después de decretado un embargo preventivo, se confirió traslado de la demanda entregándose al demandado las respectivas copias al practicarse la notificación: en ésta constaba el embargo preventivo trabado, pero como no se había dado cumplimiento al art. 452 del Código de Proc., que ordena se haga saber al embargado el embargo trabado dentro de tercero día, se presentó éste después de once días pidiendo revocatoria del auto y apelación en subsidio. No se hizo lugar á la revocatoria porque este recurso no procede según disposición del artículo 453 del Cód. de Proc., que sólo admite el recurso de apelación, y por que el convencimiento que tuvo del embargo trabado por medio de la cédula surtía los efectos de la notificación en forma sin necesidad de hacersele saber especialmente en la forma prescripta por el art. 453 citado.



46. Embargo preventivo—Solo procede la inhibición preventiva si concurren los requisitos que la ley exige para el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 68, Ser. 4^a.

47. Embargo preventivo—El reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 83, Ser. 4^a.

48. Embargo preventivo—La confesión espresa ó ficta que hace procedente el embargo preventivo, debe resultar del mismo expediente en que se dicte.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 100, Ser. 4^a.

49. Embargo preventivo—Procede si existe justificada la obligación de dar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 310, Ser. 4^a.

Embargo preventivo—Véase: *Obligación de hacer*, número 13—*Rebeldía*, núm. 9—*Alimentos*, núm. 12—*Embargo*, núm. 9—*Inhibición*, núm. 14.

1. Empedrados—Visadas por la Municipalidad las cuentas por empedrados y fijadas las cuotas á pagar en mensualidades, la escepción de inhabilidad de título fundada

46—Art. 461 del Cód. de Proc.

47—Porque ese reconocimiento importa una confesión espresa, la que según disposición del art. 448 del Cód. de Proc., hace procedente el embargo preventivo.

48—El art. 448 del Cód. de Proc. requiere que la confesión espresa ó ficta resulte de los autos en que tiene jurisdicción el mismo Juez, decía la Cámara. Pero si examinamos detenidamente la disposición legal citada, se ve que esta interpretación es completamente arbitraria. No hay una sola palabra que nos conduzca á interpretar este artículo en el sentido del sumario.

49—Art. 443 del Cód. de Proc.

1—Visadas por la Municipalidad las cuentas correspondientes á la totalidad de las deudas, que es en lo que se funda la ejecución, y disponiendo el art. 4º de ley de Oct. 1º de 1888 que aquella debe fijarse por mensualidades, existen términos hábiles para constatar la legitimidad y exigibilidad del crédito reclamado, sin necesidad de planillas par-



en la falta de visación á cada una de las mensualidades vencidas, es imprecendente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Serie 3ª.

2. **Empedrados**—Las cuentas por empedrados, no son ejecutivas mientras no se hayan fijado las cuotas que la ley estatuye para hacer obligatorio su pago. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4ª.

3. **Empedrados**—Siendo requisito indispensable del impuesto su entrada en las arcas fiscales y su inclusión en los cálculos de recursos, el pago del importe de empedrados no llena aquellos requisitos y en consecuencia debe ser abonado aun por las empresas que por concesión especial están exoneradas del pago de impuestos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4ª.

4. **Empedrados**—La escepción de inhabilidad de título procede contra las cuentas por empedrados, aunque estén visadas por la Municipalidad, mientras no se haya fijado al propietario la fecha desde la cual debe efectuarse el pago por cuotas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4ª.

Empedrados— Véase: *Escepción de pago parcial*, número 1.

1. **Empleado**—La calificación de jugador de garito, hecha de una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleado y una ofensa ciales. Conocido el total de la deuda y los plazos legales para el pago, es conocido de antemano el importe de cada mensualidad. Si la totalidad de la cuenta está visada, ¿qué necesidad hay de visar cada mensualidad?

2—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Empedrados*, núms. 2 y 4.

3—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos. Véase: Inst., verb. *Aloquinado*, núms. 1 y 2.

4—Véase el núm. 2, y verb. *Adoquinado*, núm. 3.

1—Véase: *Acto falsedad*, núm. 3.

ilícita al ciudadano, la que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Serie 3ª.

Empleado—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 63 y 70.

1ª. **Empleados públicos**—El Poder Judicial tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya sean civiles ó criminales, que se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes, ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Empleados subalternos—Véase: *Culpa ó negligencia*, número 1.

1ª. **Empresa propietaria**—La responsabilidad de la empresa del tren que sufre el accidente, es directa hacia el damnificado, sin perjuicio de su derecho á repetir contra la empresa culpable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4ª.

Empresas—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 46, 51 y 103—*Acto ilícito*, núm. 4—*Culpa ó negligencia*, núm. 1—*Personería*, núm. 10—*Adoquinado*, núms. 1 y 2—*Afirmado*, núm. 1—*Empedrados*, núm. 3.

1ª. **Empresas de transportes**—Son responsables de los daños y perjuicios que por cualquier accidente se ocasionen á los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 4ª.

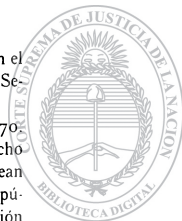
Empresarios—Véase: *Excepción de pago parcial*, núm. 1—*Adoquinado*, núm. 3.

Enajenación—Véase: *Contrato de arrendamiento*, número 30.

1ª—Véase: *Poder judicial*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Accidente*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 107.





Endoso—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.

1. Enemistad—Si bien la enemistad con el abogado no es causa de recusación, procede si éste desempeña la tutela de menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3^a.

Enemistad—Véase: *Abogado*, núm. 12.

Enfermedades venéreas—Véase: *Divorcio*, núm. 11.

1.—Habiéndose escusado el Juez Mendez Paz de continuar conociendo en un juicio testamentario por resentimiento con el Dr. Bunge que intervenía en ellos, se ordenó se pasaran los autos al Dr. Pizarro quien rehusó admitirlos por considerar insuficiente el indicado motivo. El abogado era al mismo tiempo tutor, con cuya personalidad se identifica completándola y viniendo así a ser parte en el juicio. Tal como se reconoce que el derecho de recusación debe interpretarse con cierta latitud, lo mismo debe admitirse respecto a las causales de escusación, toda vez que no resulte que el Juez al escusarse se proponga solo esquivar el trabajo ó sustraerse a las responsabilidades propias de su ejercicio, como sucede casi siempre con las escusaciones del Dr. Mendez Paz. Este Juez tiene su Juzgado convertido en un desierto, y son contados los litigantes que consienten que ese Juez les resuelva sus asuntos, los que pasan a otros jueces por recusación ó por escusación. El Mendez Paz ha erigido la escusación en sistema, y es tan notorio el poco apego que tiene al trabajo que el Dr. Pizarro cuya laboriosidad y competencia son notorias en el foro de la Capital, ha tenido que presentarse a la Cámara pidiendo que le cambiaran de turno, porque como le seguía a aquél, resultaba un doble recargo por la gran cantidad de expedientes que pasaban del Juzgado del Dr. Mendez Paz: tenemos entendido que la Cámara consideró justo el reclamo y cambió el turno. Si a jueces como éste se les da la facultad de ampliar las causales de escusación, con ello se fomentaría lo anormal, recargando a los jueces buenos y laboriosos con el trabajo que debiera corresponder a los que no reúnen estas condiciones. Por lo demás, la ley prescribe que el Juez que se encuentra en algún caso de impedimento se inhiba, mas no resuelve que para escusarse deba existir precisamente alguno de los motivos de recusación sin serle lícito separarse del asunto por causales de delicadeza ó de decoro consultando su reputación: y a este respecto debe haber cierta latitud. La Cámara de lo Com. y Crim. resolvió en este sentido un incidente suscitado con motivo del asesinato del general Lopez Jordan. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Escusación*, núm. 3.



Error—Véase: *Nulidad*, núm. 4—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 7—*Causante*, núm. 1—*Contador*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 1—*Escritura*, núm. 2—*Declaraciones*, núm. 1—*Acto jurídico*, núm. 2—*Apellido*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 28—*Remate judicial*, núm. 23.

Error de derecho—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 8.

1^a. **Error de hecho**—Sobre la ubicación del terreno materia del contrato, anula el acto mientras no se justifique la existencia de dolo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 367, Serie 3^a.

2^a. **Error de hecho**—La inexistencia del error de hecho que se invoca como fundamento de la acción, hace procedente el rechazo de la demanda.—Jur. Civ., tom. 3, página 281, Ser. 3^a.

Error de hecho—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 8.

Error invencible—Véase: *Nulidad*, núm. 4.

Error en un asiento—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1^b. **Escepción**—Importando el pedido de suspensión del juicio, una escepción, debe ser rechazada si se opone fuera de la estación oportuna.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 41, Serie 4^a.

2^b. **Escepción**—La afirmación del propietario en que re-

1^a—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 4.

2^a—Siendo el error de hecho la base de la demanda, ésta no puede prosperar cuando falla por su base ese fundamento.

1^b—Contestada la demanda y abierta la causa á prueba la parte pidió que se suspendiera el juicio á lo que no se hizo lugar, porque después de contestada la demanda no se pueden oponer escepciones de ninguna clase á no ser la de prescripción.

2^b—El constructor de una obra demandó al propietario del terreno donde se edificó una casa. Este alegó que él no había contratado con el constructor, sino con un tercero quien indudablemente á su vez con-



conociendo la verdad de las obras que alega haberlas contratado con un tercero, importa una escepción cuya prueba le corresponde.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 356, Ser. 4^a.

Escepción—Véase: *Hijo natural*, núm. 1—*Precio*, número 1—*Servicios*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, núm. 14.

1. **Escepción de arraigo**—Es procedente siempre que el demandado tenga su domicilio fuera de la capital.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 43, Ser. 4^a.

2. **Escepción de arraigo**—La residencia en distinta jurisdicción hace procedente la escepción de arraigo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 142, Ser. 4^a.

3. **Escepción de arraigo**—Procede si el demandado tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Escepción de arraigo**—Procede, si el actor al iniciar el juicio, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 4^a.

trató con los obreros. La Cámara dijo que el dueño del terreno debía pagar las construcciones porque al defenderse del cobro de una suma echando sobre un tercero la obligación de pagarla importa indudablemente escepcionarse, y el que se escepciona debe probar la defensa, de acuerdo con la conocida regla *reus in excipiendo fit actor*. Además al alegar que el dueño del terreno trató con un tercero la construcción de la obra, se alega un hecho nuevo en juicio, y es sabido que su prueba incumbe al que la aduce.

1—Art. 85 del Cód. de Proc. Esta escepción fué resuelta con costas tanto en 1^a como en 2^a Instancia, lo que es de extrañarse, pues rara vez se resuelve así.

2—Véase nota precedente. Aquí el Juez de 1^a Instancia no impuso las costas, y apelada la resolución, fué confirmada con costas.

3—También fué este caso resuelto sin las costas de 1^a Instancia y confirmado con costas.

4—Aquí se resolvió la escepción eximiendo al actor de las costas en 1^a y 2^a Instancia.



5. **Excepción de arraigo**—Procede si el demandante se encuentra domiciliado fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 233; Ser. 4^a.

6. **Excepción de arraigo**—La residencia del demandante en distinta jurisdicción de la del Juzgado, hace procedente esta excepción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

7. **Excepción de arraigo**—Procede esta excepción una vez justificada la residencia del demandante fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Serie 4^a.

1^a. **Excepción de compensacion**—Para que sea admitida y recibida á prueba, debe acompañarse al oponerla el documento en que conste la obligación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 4^a.

1^b. **Excepción de cosa juzgada**—No procede la excepción

5—En el caso del sumario se opuso esta excepción con otras más que fueron declaradas procedentes, menos una de ellas, imponiéndose las costas al actor en 1^a y 2^a Instancia. Esta resolución es tanto más injusta cuanto que se declaró improcedente una de ellas: nada más arreglado á la justicia que exonerar de las costas al vencido cuando el vencedor no ha conseguido que se declarasen procedentes todas las excepciones.

6—No se impusieron las costas ni en 1^a ni en 2^a Instancia.

7—Tampoco se impusieron las costas en 1^a Instancia, pero fué confirmada la resolución con costas. Puede verse con las resoluciones precedentes que la Cámara no tiene criterio para imponer las costas: ella siempre confirma lo que el inferior resuelve, ya sea que las imponga ó no. Todo es cuestión de suerte allí, no de derecho.

1^a—Así lo exige el art. 488 en su inc. 8^o, cuando dice que el crédito debe resultar de documento que traiga aparejada ejecución.

1^b—Para que haya cosa juzgada se requiere que concurren tres elementos indispensables á saber: identidad de objeto ó cosa demandada, identidad de personas á sus calidades, é identidad de causa: de tal manera que faltando una de ellas sería improcedente la excepción.—Leyes 19 y 20, tit. 22, Part. 3^a—En el caso del sumario no concurre la identidad de personas, y por consiguiente, la excepción no podía prosperar.



de cosa juzgada, si el litigio en el cual recayó la sentencia en que se funda, se siguió entre distintas personas, aun que uno mismo haya sido el objeto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3^a.

2^a. Excepción de cosa juzgada—Fundada en un laudo arbitral y cuya ejecución se sigue judicialmente procede siempre que la acción tenga por base la misma cosa que dió origen al arbitraje, y entre las mismas personas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 318, Ser. 4^a.

1. Excepción de defecto legal—En el modo de proponer la demanda, no puede fundarla la omisión de algún hecho en que la acción se funda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 3^a.

2^b. Excepción de defecto legal—Procede si no se individualiza el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 223, Ser. 3^a.

3. Excepción de defecto legal—No procede si se individualiza el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 239, Ser. 3^a.

2^a—Porque concurren los requisitos exigidos por la ley para que sea procedente la excepción. Véase nota precedente.

1.—Si el demandante deja de alegar algún hecho que sirve de fundamento á la acción, en nada perjudica al demandado, porque la prueba producida acerca de ese hecho omitido y no articulado, no le aprovechará. El art. 108 del Cód. de Proc. establece terminantemente que no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos; y las que se refieren á hechos no articulados, serán irremisiblemente desechadas al pronunciar sentencia definitiva.

2^b—En una demanda sobre escrituración se designó la ubicación del inmueble, diciéndose que estaba limitada por tres calles sin nombres. Se dijo que á fin de determinar con mayor precisión la cosa materia de la acción debió además manifestarse los linderos del inmueble.

3—Porque en este caso se llenan cumplidamente los requisitos exigidos por el inc. 3^o del art. 71 del Cód. de Proc.



4. **Excepción de defecto legal**—No procede si se indica el objeto de la demanda, aun cuando no se cite disposición legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

5. **Excepción de defecto legal**—La falta de cita de una disposición expresa, no puede fundar esta excepción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 3ª.

6. **Excepción de defecto legal**—No procede si la demanda fija los hechos é invoca el derecho que de ellos surge.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 138, Ser. 3ª.

7. **Excepción de defecto legal**—Si el mandatario no acompaña, al rendir cuentas, los justificativos que invoca, esta

4—Aun cuando no se cita la disposición legal en que la demanda se apoya, no puede decirse que esto constituya un defecto legal en el modo de proponerla en el sentido del art. 71 del Cód. de Proc., siempre que en ella se diga como se decía en el caso presente, que la demanda es por cobro de pesos, por saldo de mercaderías, en cuyo caso la acción es la que corresponde al vendedor contra el comprador que no ha pagado la cosa comprada. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara en varios casos que tiene resueltos. Acerca de esta cuestión de procedimiento se han dictado resoluciones contradictorias. De acuerdo con el sumario puede verse: Inst., tom. 3, verb. *Defecto legal*, núm. 4; en contra, tom. 4, verb. *Excepción de defecto legal*, núm. 9; y tom. 3, verb. *Excepción de defecto legal*, núms. 2 y 4, y *Defecto legal*, núm. 3.

5—Si bien es cierto que la ley exige que el demandante esponga con la demanda suscintamente el derecho en que la funda, evitando repeticiones inútiles, también lo es que no le impone la obligación de fundarla en el texto espreso y determinado de la ley. Véase la nota precedente.

6—Art. 71 del Cód. de Proc.

7—Los arts. 1009 y 1911 imponen al mandatario la obligación de dar cuenta de sus operaciones entregando al mandante todo lo que le confió ó recibió de terceros y de que no hubiese dispuesto por su orden; todos los documentos, dineros, títulos y papeles que le fueron entregados. Cuando estos comprobantes no se acompañan, no se puede obligar al demandado á que conteste la demanda, puesto que le faltan los comprobantes que debe tener en su poder el mandatario para impugnarlos ó aceptarlos.



excepción es procedente. — Jur. Civ., tom. 1, pág. 144, Ser. 4^a.

8. **Excepción de defecto legal**—Es procedente cuando no se fija claramente el derecho que nace de los hechos relacionados en la demanda.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 233, Serie 4^a.

9. **Excepción de defecto legal**—Tratándose del cobro de servicios profesionales, esta excepción es procedente si dichos servicios no han sido individualizados en el escrito de demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 424, Ser. 4^a.

10.—**Excepción de defecto legal**—Basta esponder los hechos y el derecho que de estos surge para rechazar la excepción de defecto legal, sin que sea necesario citar de

8—La acción versaba sobre filiación natural; el demandante no adujo fundamento alguno de derecho, y al evacuar el traslado que se le confirió de la excepción de defecto legal, dijo que era improcedente, porque tratándose de una materia tan trivial y tan común como es la filiación natural, basta invocar el derecho procedente de la filiación sin que sea forzoso señalar atildadamente la ley que asigna a los hijos naturales la parte que ella les acuerda en los bienes de sus padres. El Juez dijo que no se habían llenado los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc., pues no se había espuesto el derecho, como lo exige el inc. 5º, ni se había citado disposición alguna legal, lo que hacía palpable el defecto de que adolecía la demanda. Como puede verse, esta resolución está en contra de los núms. 4 y 5.

9—Véase: *Servicios profesionales*, núm. 1.

10—El fallo decía que según se ha declarado uniformemente por la Cámara, no es necesario que se cite una disposición expresa de la ley, que los Jueces están obligados a conocer, bastando que el derecho surja de la petición que se formula. Según se ve, reina un verdadero caos en esta cuestión, y con las resoluciones contradictorias que dejamos anotadas, se podría formar un verdadero mosaico. La Cámara resuelve hoy esta cuestión en un sentido para reformarla mañana, la que a su vez es reformada al día siguiente. La ley es terminante y ella se dicta para ser cumplida. El art. 71 en su inc. 5º, exige que el derecho sea espuesto sucintamente. Toda demanda que no llene este requisito es defectuosa.



terminadamente el artículo de la ley.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4^a.

11. Excepción de defecto legal—Espuestos claramente los hechos y el derecho que de ellos surge, es improcedente esta excepción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 90, Ser. 4^a.

12. Excepción de defecto legal—Si la reivindicación se dirige contra el poseedor y vendedor, esta excepción es improcedente, pues la unidad de acción no permite la división del juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4^a.

13. Excepción de defecto legal—Si los hechos han sido claramente espuestos, é invocado el derecho que de ellos surge, esta excepción es improcedente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4^a.

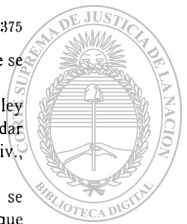
14. Excepción de defecto legal—No procede si se funda en la falta de cita de la ley que ampara el derecho invocado, siempre que resulte de los hechos.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 32, Ser. 4^a.

15. Excepción de defecto legal—Esta excepción debe ser rechazada si resulta claramente espresado el objeto de la demanda.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 67, Ser. 4^a.

16. Excepción de defecto legal—Es improcedente si se

14—Los fundamentos de esta resolución fueron los siguientes: «Si bien es cierto que en la demanda no se invoca disposición legal alguna para fundarla, en ella se cobra cantidad de pesos, especificándose detalladamente en la cuenta que se adjunta el origen y naturaleza de los diversos créditos, cuyo pago se persigue, lo que basta para determinar la naturaleza de las diversas acciones que se deducen: quedando así caracterizadas las acciones entabladas, el demandado está habilitado para contestarlas y el Juzgado para resolverlas en su oportunidad, sin que sea necesario más exposición de derecho ni tampoco la cita de las disposiciones legales que rigen el caso.»

16—La excepción de defecto legal solo es procedente cuando se infringen las reglas establecidas en el art. 71 del Cód. de Proc. Cuando el actor no presenta con su demanda los documentos y escrituras en que funda sus derechos, como lo previene el art. 72, la pena por in-



funda en la falta de presentación de los documentos que se invocan.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 15, Ser. 4ª.

17. **Escepción de defecto legal**—La falta de cita de la ley que ampara el derecho del demandante, no puede fundar la escepción si se invoca el título de acreedor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 35, Ser. 4ª.

18. **Escepción de defecto legal**—Es procedente si no se expresa la fecha en que tuvieron lugar los hechos en que se funda la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 44, Ser. 4ª.

19. **Escepción de defecto legal**—Si de los hechos surge el derecho, esta escepción es improcedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 132, Ser. 4ª.

20. **Escepción de defecto legal**—Es improcedente si la demanda llena todos los requisitos de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 4ª.

21. **Escepción de defecto legal**—Si no se acompaña el detalle de los trabajos, en la demanda por locación de servicios, esta escepción es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4ª.

22. **Escepción de defecto legal**—Procede si no se detalla fringir ese precepto es la que señala el art. 73, esto es, que no se admitan otros documentos que no sean de fecha posterior. Manresa y Reus tratan este punto en el tom. 2, pág. 115 de su obra sobre la Ley de Enjuiciamiento Española. Esta ha sido la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: verb. *Documentos*, núm. 11.

17—Parece que la jurisprudencia se inclina en el sentido del sumario. Véase núm. 14.

18—Esa fecha debe conocerla el demandado a fin de que pueda hacer uso del derecho que le acuerda la ley respecto de la prescripción de la acción. El juez en el caso que nos ocupa dijo que la demanda era también defectuosa porque no se había aducido los fundamentos de derecho.

19—La Cámara dijo que surgiendo claramente de los hechos enunciados en la demanda el derecho de la misma, el requisito determinado en el art. 71, inc. 5º del Cód. de Proc. no puede dar lugar a esta escepción.

21—Véase: verb. *Detalle*, núm. 1.

22—Véase nota precedente.

la cuenta demandada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 321, Serie 4ª.

23. Excepción de defecto legal—Esta excepción no es procedente si la demanda expresa claramente su objeto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 324, Ser. 4ª.

24. Excepción de defecto legal—La falta de presentación de los documentos en que se funda la demanda no puede dar lugar á esta excepción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 294, Ser. 4ª.

1ª. Excepción de espera—La ley de moratorias solo es aplicable á las obligaciones comerciales sin que ella pueda fundar la excepción de espera contra la ejecución de una hipoteca.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 96, Ser. 4ª.

Excepción de espera.—Véase: *Excepción*, núm. 1.

1ª. Excepción de falsedad—Es procedente en el juicio ejecutivo cuando se refiere al título con que se ejecuta, pero no á la obligación que de él emana.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 409, Ser. 4ª.

23—Se dijo que la demanda era defectuosa porque no se había designado el nombre técnico que correspondía á la acción ejercitada. No se hizo lugar á esta excepción porque la falta de dicho requisito no afecta sustancialmente á la demanda. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto por esta misma Cámara y que corre publicado en el tom. 4, pág. 491, Ser. 1ª.

24—Véase: verb. *Documentos*, núm. 11.

1ª—La excepción se fundó en la Ley de Moratorias de 19 de Junio de 1891, la que fué dada en beneficio del comercio; y no siendo mercantil la obligación hipotecaria no puede dicha ley ampararla.

1ª—El ejecutado al oponer la excepción no desconoció la autenticidad de la escritura en que la ejecución se basaba; dijo de falsedad de la deuda que en ella se reconocía que no es la falsedad del título con que se pide la ejecución, decía la Cámara. Ya tenemos manifestada nuestra opinión acerca de este punto, pues consideramos que la excepción de inhabilidad como la de falsedad del título, puede deducirse aún tratándose de la causa de la obligación.—Véase, verb. *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 12.





2^a. **Excepción de falsedad**—De la ejecutoria, la escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral; siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera; la excepción de falsedad es procedente aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, página 160, Ser. 4^a.

1. **Excepción de falta de personería**—Es improcedente si el poder individualiza el objeto del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 229, Ser. 3^a.

2^b. **Excepción de falta de personería**—Por carecer del poder necesario para deducir la acción, puede ser opuesta contestando á la demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68, Ser. 3^a.

2^a—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1—Se dijo que el apoderado no tenía facultad para iniciar un pleito sobre daños y perjuicios, teniendo en cuenta que las palabras empleadas en el poder «asegurar la indemnización que fuere debida», acordaban tan solo una facultad que dada su abstracción no autorizaba al mandatario para estar en juicio. A esto se contestó diciendo, que tratándose de definir la responsabilidad de un hecho originario de un daño, la demanda judicial es el medio indicado p. ra obtener el resultado que se persigue, cual es la constatación del fundamento en que descansa el derecho que se reclama. De los términos del poder se desprendía que éste se había dado á fin de que se intentara la acción deducida, pues decía testualmente, «con facultad de tratar con quien corresponda» y más adelante se refería al cobro de honorarios. El art. 1884 del Código Civ. no es aplicable por cuanto el derecho de reclamar indemnizaciones, supone como consecuencia indispensable la necesidad de recurrir á los jueces para hacerlas efectivas. La autoridad conferida en el poder para reclamar dichas indemnizaciones, no podía ponerse en duda, pues aparecía de los términos espesos del poder y de la naturaleza del negocio que determina la estensión de los poderes para conseguir el objeto del mandato—art. 1905, Cód. Civ.

2^b—Cuando no se oponen las excepciones dilatorias en forma de articulo de previo y especial pronunciamiento, no por eso pierde el demandado el derecho á deducirlas al contestar la demanda—art. 86, Cód. de Proc.



3. **Excepción de falta de personería**—Cuando afecta el derecho del actor, no procede como dilatoria.—Jur. Civ. tom. 1, pág. 50, Ser. 4^a.

4. **Excepción de falta de personería**—Por carecer el actor del derecho que invoca, no puede ser resuelta como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 375, Ser. 4^a.

5. **Excepción de falta de personería**—Por carecer de acción, es improcedente si se opone como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 378, Ser. 4^a.

6. **Excepción de falta de personería**—Que se funda en la falta de derecho del actor, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 253, Ser. 4^a.

7. **Excepción de falta de personería**—Resuelto por sentencia ejecutoriada el carácter de socio de una sociedad, aquella excepción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 253, Ser. 4^a.

8. **Excepción de falta de personería**—El poder para cobrar al deudor, no importa la de demandarlo judicialmente y en consecuencia procede esta excepción.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 398, Ser. 4^a.

9. **Excepción de falta de personería**—Es improcedente la excepción de falta de personería, ya sea en el demandante

3—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 1.

4—Véase nota precedente.

7—No puede volverse sobre la misma cuestión pasada en autoridad de cosa juzgada.

8—El poder invocado no autorizaba para demandar ni para ocurrir á los Tribunales en nombre de su comitente, sino simplemente para cobrar, dando los recibos del caso y practicando á ese efecto las diligencias necesarias. Un mandato así concebido no comprende más que los actos de administración, de acuerdo con lo prescripto en el art. 1880 del Cód. Civ.: el poder para cobrar deudas no comprende el de demandar á los deudores, como lo establece el art. 1888.

9—Véase: verb. *Excepción dilatoria*, núm. 1.



ó en el demandado si se funda en la falta de derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4^a.

10. Escepción de falta de personería—Si hace al derecho del actor, solo procede como perentoria.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 364, Ser. 4^a.

11. Escepción de falta de personería—Esta escepción debe ser rechazada si se funda en la falta de derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4^a.

12. Escepción de falta de personería—Es improcedente si se opone á la acción ejecutiva de una letra de cambio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 235, Ser. 4^a.

13. Escepción de falta de personería—Contra la ejecución de una sentencia, son inadmisibles las escepciones de falta de personería, inhabilidad de título y litispendencia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4^a.

14. Escepción de falta de personería—Es improcedente si haciendo al fondo de la acción se opone como dilatoria.—Jur. Civ., tom 8, pág. 42, Ser. 4^a.

15. Escepción de falta de personería—Es improcedente opuesta como dilatoria si se funda en la falta de acción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 59, Ser. 4^a.

16. Escepción de falta de personería—Aun declarada procedente, no debe condenarse en costas al vencido si no

10—Las defensas que hacen al fondo del litigio no se encuentran comprendidas entre las enumeradas en el art. 84 del Cód. de Proc. Las únicas escepciones perentorias que pueden deducirse en forma de artículo previo son las tres enumeradas en el art. 95 del Cód. de Proc., todas las demás deben deducirse al contestar la demanda.

12—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 1, Inst., tom. 4^o.

13—Porque no están comprendidas entre las únicas escepciones consideradas como legítimas por el art. 539 del Cód. de Proc.

14—Véase: *Escepción dilatoria*, núm. 1.

15—Véase nota precedente.

16—Véase: verb. *Costas*, núm. 57.

resulta evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 8, página 301, Ser. 4^a.

17. Excepción de falta de personería —Esta excepción solo puede fundarse de la incapacidad civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4^a.

18. Excepción de falta de personería —Fundada en la falta de derecho, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 27, Ser. 4^a.

19. Excepción de falta de personería —Es improcedente si se funda en la falta de derecho.—Jur. Civ., tom. 10, página 328, Ser. 4^a.

Excepción de falta de personería —Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 1.

1. Excepción de incompetencia —Por razón de menor cuantía, es improcedente si se ejecuta una sentencia ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4^a.

2. Excepción de incompetencia —La resolución que rechaza esta excepción opuesta como dilatoria, hace cosa juzgada é inhabilita al demandado para oponerla como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4^a.

3. Excepción de incompetencia —Si ella es potestativa

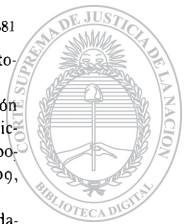
17—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 5.

1—Se trataba de ejecutar una resolución dictada por el Juzgado y confirmada por la Cámara. La ejecución por otra parte, era un incidente de otro juicio seguido anteriormente: en este caso es competente para entender en el incidente el mismo Juez que ha entendido en lo principal. Se trataba de obtener la devolución de unos fondos indebidamente estraidos y pertenecientes á una sucesión.

2—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 5.

3—Un extranjero inició un pleito contra un argentino ante la justicia ordinaria: éste declino de jurisdicción, siendo la excepción rechazada con costas de 1^a y 2^a Inst. El inc. 2^o del art. 2^o de la Ley sobre jurisdicción y competencia de los Trin. Nacionales, atribuye á éstos el conocimiento de las causas civiles en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero; pero del estudio general de esta Ley resulta





del demandante, no procede la escepción.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 73, Ser. 4^a.

4. Escepción de incompetencia—Opuesta esta escepción por corresponder el conocimiento de la causa á la jurisdicción federal, es improcedente si la jurisdicción es potestativa del demandante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4^a.

5. Escepción de incompetencia—Esta escepción fundada en la distinta nacionalidad de la de las partes, es improcedente si ha sido opuesta por el ciudadano argentino.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 231, Ser. 4^a.

6. Escepción de incompetencia—Es improcedente si se

que la jurisdicción en este caso, ha sido establecida en beneficio exclusivo de los extranjeros, y que siendo un privilegio ó un beneficio pueden renunciarlo. El art. 12 en su inc. 4^o corrobora esta interpretación de la ley.

4—La escepción se fundaba en que el demandante era vecino de la provincia de Buenos Aires y el demandado residía en esta Capital. Las disposiciones legales que rigen el caso son dictadas en beneficio del vecino de la otra provincia distinta de aquella en que se se inicia el juicio, y como una escepción establecida en su favor, á la que no puede nunca ampararse el demandado, que como litigante está sometido á la jurisdicción de los jueces ordinarios de su domicilio que son sus jueces naturales—art. 2^o, inc. 2^o de la Ley de 14 de Set. de 1863, y art. 111 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.—La jurisdicción de los Tribunales Federales es privativa y excluyente de la de provincia, pero con las escepciones que establece para varios casos—art. 12, inc. 4^o de la citada Ley de 1863—entre los cuales se encuentra el caso que nos ocupa. Las leyes de escepción solo pueden ser invocadas por aquellos en cuyo beneficio son establecidas. Esta escepción fué rechazada con costas en 1^a Inst. y confirmada en la misma forma por el Superior.

5—De acuerdo con las resoluciones precedentes. También en el caso presente se rechazó la escepción con costas en 1^a y 2^a Inst.

6—Se pedía el cumplimiento de un contrato de compraventa, de un inmueble, constante de un boleto. La acción es personal, y por consiguiente cae bajo la sanción del art. 4^o del Cód. de Proc.. Como el Juez de 1^a Inst. no condenó en costas al escepcionante vencido, la Cá-

pide el cumplimiento de un contrato en el domicilio del demandado, aun cuando el bien que le dió origen esté situado en otra jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 386, Ser. 4^a.

7. **Escepción de incompetencia**—No puede ser sustanciada si se opone fuera de término.—Jur. Civ., tom. 10, página 319, Ser. 4^a.

8. **Escepción de incompetencia**—Debe resolverse por el Juez de cuya jurisdicción se declina, aun cuando se haya deducido inhibitoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 256, Serie 4^a.

Escepción de incompetencia—Véase: *Jurisdicción*, número 2.

1. **Escepción de inhabilidad de título**—Visadas por la Municipalidad las cuentas por empedrados y fijadas las cuotas á pagar por mensualidades, la escepción de inha-

mara confirmó la resolución declarando que no había razón para imponer las costas. Si el Inferior hubiese impuesto las costas al vencido seguramente que la Cámara hubiese confirmado con costas. Lo que ella quiere es confirmar las resoluciones del Inferior por más injustas que sean, así se evita el trabajo de estudiar las cuestiones y se ocupa tan solo de dar palo de ciego á los pobres litigantes sin que para ello se tenga en cuenta el derecho que es para este Tribunal letra muerta.

7—La escepción de incompetencia es dilatoria—art. 84, inc. 1º del Cód. de Proc.—El art. 83 dice, que las escepciones deben deducirse dentro de los nueve días en que debe ser contestada la demanda. Y el art. 46 declara perentorio el término para oponer escepciones dilatorias.

8—Habiéndose deducido cuestión de competencia por la vía inhibitoria, se presentó la misma parte ante el Juez que no consideraba competente, pidiéndole que no continuara entendiendo en el asunto porque había deducido inhibitoria ante el que juzgaba competente. No le hizo lugar y continuó entendiendo porque dicho Juez no había recibido el oficio de que habla el art. 410 del Cód. de Proc. Las escepciones deben ser resueltas por el mismo Juez ante quien se opusieron.

1—Véase: verb. *Empedrados*, núm. 1.





bilidad de título fundada en la falta de visación de cada una de las mensuralidades vencidas es improcedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 3ª.

2. Excepción de inhabilidad de título—No comprobándose esta excepción, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 144, Ser. 3ª.

3. Excepción de inhabilidad de título—Es improcedente si se funda en la falsedad ó vicios de los hechos que le dieron origen, pero que no constan del título mismo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 150, Ser. 3ª.

5. Excepción de inhabilidad de título—Es improcedente si la ejecución se funda en un instrumento público.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 323, Ser. 3ª.

7. Excepción de inhabilidad de título—Es procedente

2—Art. 498 del Cód. de Proc.

3—La Cámara de lo Civil tiene resuelto que esta excepción solo es procedente cuando se funda en defectos del título mismo capaces de destruir su fuerza ejecutiva, ó en no estar comprendido entre los que la ley considera como tales. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Excepción de inhabilidad de título*, núms. 1 y 9; tom. 2º, verb. *Inhabilidad de título*, números 4 y 7. Esta resolución es correcta si se trata de letras de cambio ú otros papeles que la están equiparadas, porque, no está enumerada entre las únicas admisibles en la ejecución de una letra de cambio —art. 852 del Cód. de Com. ant., y 676 del vigente.—Como estos artículos están en oposición con el art. 488 del Cód. de Proc., en cuyo caso debe estarse á lo que dispone el Cód. de Com.—art. 813 del Código de Proc.—Son las disposiciones del Cód. de Com. las que deben aplicarse. Pero si se trata de la ejecución de una obligación que no sea una letra de cambio ú otro papel que le esté equiparado, el sumario no es exacto, ni consulta los principios legales que rigen la materia. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4 y su nota, donde combatimos aquel principio legal.

5—Porque estos títulos traen aparejada ejecución —art. 465, inc. 1º. Cód. de Proc.

7—La ejecución se inició fundándola en un certificado expedido por el escribano que autorizó la escritura de venta y la garantía hi-



si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Sér. 3ª.

6. Excepción de inhabilidad de título—Es procedente siempre que la deuda no sea exigible en juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 1.º, pág. 409, Sér. 4ª.

7. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á una liquidación no aprobada, es procedente.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 381, Sér. 4ª.

8. Excepción de inhabilidad de título—Es procedente contra los instrumentos públicos emanados de oficinas municipales, si en su expedición no se han observado los requisitos que le impone la ley que les dió origen.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Sér. 4ª.

9. Excepción de inhabilidad de título—Esta excepción potecaría que se constituyó por la deuda contraída. Se dijo que el título era inhábil porque ese certificado no es lo mismo que una escritura pública, ni tampoco una copia sacada de los libros de protocolo en la forma que prescribe la ley—art. 1006 del Cód. Civ—de manera que no puede estar comprendido en la designación del art. 979 citado. El acreedor alegaba como razón para no presentar el testimonio de la escritura pública de venta á que el certificado se refería, diciendo que dicho testimonio pertenecía al ejecutado, lo es inaceptable, puesto que conteniendo la escritura de venta un pacto hipotecario, el acreedor tiene derecho á exigir del Escribano una copia autorizada—art. 1006—No estando el documento comprendido entre los que según el art. 465 del Cód. de Proc. traen aparejada ejecución, el título es inhábil. Esta resolución fué dictada por mayoría de votos, habiendo la minoría aducido argumentos de verdadero mérito jurídico.

6 - Art. 464, del Cód. de Proc. Cuando se inició la acción, el plazo de la obligación aún no había vencido.

7—Así lo requiere el art. 465, inc. 4.º del Cód. de Proc.

8—La inhabilidad se dijo que consistía en que no se habían fijado las cuotas mensuales en que debía abonarse el afirmado, en contra de la ley que preceptuaba esta forma de pago. Esta excepción, está estudiada en el verb. *Adoquinado*, núm. 3.

9—Veáse nota precedente, y verb. *Empedrados*, núm. 3.

procede contra las cuentas por empedrados, aun vistas por la Municipalidad, mientras no se haya fijado al propietario la fecha desde la cual debe efectuarse el pago por cuotas.—Jur. Civ., tom. 6. pág. 5, Ser. 4ª.

12. **Excepción de inhabilidad de título**—Esta excepción

12.—Esta excepción se opuso fundándola entre otras razones en que la ordenanza poniendo en vigencia los impuestos establecidos aparecía dictada sin la concurrencia de los mayores contribuyentes que determina la ley; para dictarse ésta, solo concurrieron siete, siendo así que debieron ser nueve porque este fué el número de Concejales presentes á la sesión; de esta circunstancia y de lo preceptuado en al art. 44 de la Ley Orgánica Municipal deducía el escepccionante que la ordenanza había sido ilegalmente sancionada, siendo de consiguiente nulo é inhabil el título de la ejecución. Se declaró improcedente la excepción fundándose en que el art. 64 de la ley citada establece que el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales, se hará efectivo por la vía de apremio judicial, sirviendo de título suficiente para la ejecución la boleta respectiva con el visto bueno del Intendente Municipal. La ejecución versaba sobre el cobro de la patente del «Frontón Buenos Aires». El artículo subsiguiente declara impuestos y rentas municipales, entre otros, las patentes sobre teatros, cafés, etc. y demás establecimientos de diversión y recreo. Finalmente la ordenanza vigente en aquel año gravaba á los Frontones de 1ª categoría con un impuesto de 250 \$ por cada función en día de trabajo. El título era la boleta correspondiente extendida de conformidad con las disposiciones que quedan relacionadas. Entretanto esta Cámara tiene sentada la jurisprudencia, á nuestro modo de ver equivocada, que la excepción de inhabilidad debe referirse á defectos del título mismo ó á omisiones sustanciales que le quiten su fuerza ejecutiva. Es la presencia de estos vicios la que debe constatar el ejecutado, ó en su caso, que el título no trae aparejada ejecución, por no hallarse comprendido entre los que la ley enumera como tales. El escepccionante debatiendo cuestiones de fondo atacaba la validez del impuesto por haber trasgredido, el Concejo Deliberante, las prescripciones de su ley y por no ser conforme la ordenanza al espíritu y á la letra de la Constitución. Basta enunciar este antecedente, decía la Cámara, para persuadirse que la defensa opuesta es de todo punto extraña á la índole y á los trámites del juicio ejecutivo. En sus actuaciones rápidas no caben discusiones fundamentales, por cuanto se desvirtuarían si hubieran de estimarse como pertinentes, procedimien-



cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de esta pero no á su nulidad ó validez. --Jur. Civ., tom. 6, página 215, Ser. 4^a.

tos establecidos en beneficio exclusivo del acreedor, subvirtiendo además reglas tan sustanciales á los juicios como son las que imponen formas amplias y solemnes para declarar la existencia de derechos dudosos ó contravertidos. Consecuencia de la naturaleza de este juicio, dice Caravantes en el tomo 3^o, pág. 267, es que se cierre la puerta todo lo posible á la oposición de la parte contraria dirigiéndose rápidamente á dar cumplido efecto al derecho que se reclama sin dar lugar á controversias propias solo de un juicio declarativo. De aquí el haber algunos, juzgado impropia de este procedimiento, la denominación de juicio hasta el punto de haberse limitado la ley de enjuiciamiento á llamarle procedimiento ejecutivo. Manresa y Reus, critican la denominación de la ley de Enj. Civ. Española de 1855, pues en vez de «ejecuciones» debiera decirse, por ser más propio «juicio ejecutivo, y sustituirse este epígrafe por el de procedimiento ejecutivo.» El Cód. de 1881, adoptó este sistema. Tomando como antecedente los procedimientos sumarios del juicio ejecutivo, todas las prácticas divulgan sin reservas la doctrina enunciada. Así el Dr. Esteves Sagui dice: Se conoce por este nombre el procedimiento destinado á pedir y obtener el cumplimiento ó solución de obligaciones que son constantes y claras de suyo sin que requieran para instrucción del Juez, discusión ni dilaciones. La Suprema Corte Nacional ha dicho también, que las graves cuestiones sobre la nulidad de una ley, son de lato conocimiento, no pudiendo por su trascendencia discutirse y resolverse bajo los trámites sumarios y premiosos del juicio ejecutivo--tom. 16, pág. 357, Ser. 2^a.—Cuando un documento está comprendido entre los que la ley declara como de carácter ejecutivo, y hallándose revestido de todos los requisitos que la misma establece para su eficacia, no puede oponérsele la excepción de inhabilidad. Por último el art. 500 del Cód. de Proc. demuestra á las claras que esta excepción solo puede referirse á los recaudos que le den ó no aparejada ejecución. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara, la que siempre hemos combatido con argumentos de peso, pero que aquel tribunal no ha querido tomar en consideración: Véase verbo *Inhabilidad de Título*, núm. 4, tom. 2^o, Instituta. El argumento principal que se hace es que esas cuestiones de gran importancia requieren una discusión amplia lo que no es posible encerrándola en los términos





13. **Escepción de inhabilidad de título**—Opuesta esta escepción por no estar vencidas todas las cuotas de una deuda, deben ser rechazadas, pues las vencidas tienen igual carácter que el conjunto de la obligación.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 231, Ser. 4^a.

14. **Escepción de inhabilidad de título**—Procede contra la regulación de sumarios, si la ejecución se sigue con breves y angustiosos del juicio sumario, como es el ejecutivo. A esto se contestó diciendo que si el demandado se aviene á discutir con premura y precipitación dichas cuestiones, el juez no tiene porque oponerse á ello. Si el litigante no puede dar á su defensa la amplitud necesaria para triunfar suya será la culpa de haber querido discutir en esta forma. Los interesados no sufren nada porque los términos legales corren lo mismo para una como para otra escepción.

13—En las obligaciones contraídas para ser pagadas por cuotas, cada una de ellas en un término fijo, puede hacerse su cobro por separado ó conjuntamente, según lo estimase prudente el acreedor. Siendo esto así, y vencida una de las cuotas sin efectuarse su pago, el acreedor está facultado para exigirlo en la forma que corresponda, siendo asimismo procedente la vía ejecutiva, y si la totalidad de la deuda estuviese garantida con hipoteca, podría exigirse la ejecución por cada cuota desde el momento en que una de ellas está garantida con la hipoteca constituido sobre la totalidad del inmueble—art. 3112 del Cód. Civ.—El contrato es la ley para las partes, y no siendo indispensable que en él conste la facultad de exigir el pago al vencimiento de cada cuota, desde que por otra parte, no se impuso para su exigibilidad, el cumplimiento de todas las cuotas, el derecho del acreedor nace desde que vence la primera, puesto que son prestaciones independientes los unos de los otros, y pudiendo además el acreedor ampliar la ejecución á medida que vayan venciendo.

14—Una persona que pretendió una herencia se presentó reclamándola, siendo rechazada su acción por carecer de derecho. El abogado y procurador que patrocinaron á la parte vencida se presentaron ejecutando al vencedor por sus honorarios, la ejecución fué rechazada porque ninguna relación de derecho existía entre ellos y la sucesión vencedora. Los actores tenían derecho á ir contra sus clientes, pero jamás contra la parte que había ganado el pleito. Lo mejor del caso es que la parte patrocinada por el abogado y procurador que ejecutaban honorarios, había perdido el pleito con costas.



tra los que no tienen vínculo alguno de derecho con el abogado y procurador ejecutantes. --Jur. Civ., tom. 5, pág. 292, Serie 4ª.

15. **Excepción de inhabilidad de título.** -- Contra la ejecución de una sentencia, son inadmisibles las excepciones de falta de personería, inhabilidad de título y litispendencia --Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4ª.

16. **Excepción de inhabilidad de título.** Por ser la obligación personal del esposo, no procede si se ejecuta á la sociedad conyugal --Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4ª.

Excepción de inhabilidad de título. -- Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 5 y 6.

1. **Excepción de litispendencia.** No procede en el juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, fundada en el juicio de desalojo del mismo predio. --Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 3ª.

2. **Excepción de litispendencia.** -- Fundada en un jui-

15--Contra la ejecución de sentencias solo son admisibles las excepciones establecidas en el art. 339 del Cód. de Proc. entre las cuales no están comprendidas las enumeradas en el sumario.

16--Se trataba de la ejecución de un pagaré á la orden, iniciado contra la sucesión de la esposa, pagaré firmado por ésta y por el esposo. La obligación así contraída es solidaria y por consiguiente ejecutable contra cualquiera de los esposos coobligados. Si en realidad la deuda es de uno solo de ellos, esa es cuestión á debatirse particularmente entre los coobligados y completamente extraña al ejecutante.

1-- Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3.

2- Para que esta excepción sea procedente, se requiere que además de la identidad de personas y cosa demandada concorra la circunstancia de que ambos juicios sean de la misma naturaleza y deban por consiguiente sustanciarse por los mismos trámites: esto es claro, porque una vez producida la litispendencia viene la acumulación de los autos, ó lo que es lo mismo, la refundición de los dos juicios en uno solo, lo que no puede hacerse cuando los trámites marcados por la ley para ambos juicios son distintos. Este sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase; Inst. tom. 3, verb. *Excepción de litis-*



cio ejecutivo, no es procedente si se opone á una demanda ordinaria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 351, Ser. 4^a.

3. **Excepción de litispendencia** — Esta excepción fundada en un juicio ordinario es improcedente si se opone en el ejecutivo. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Excepción de litispendencia** —Fundada en la identidad de causa y objeto, es improcedente si no existe también identidad de personas — Jur. Civ., tom. 6, pág. 187, Ser. 4^a.

5. **Excepción de litispendencia** —Es improcedente si se funda en un juicio seguido ante distinta jurisdicción territorial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 330, Ser. 4^a.

6. **Excepción de litispendencia**—Contra la ejecución de una sentencia son inadmisibles las excepciones de falta de personería, inhabilidad de título y litispendencia. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 305, Ser. 4^a.

7. **Excepción de litispendencia** —El espediente en que *pendencia*, núm. 2; tom. 2, verb. *Litispendencia*, núms. 3, 4, 5 y 6, y tomo 1º mismo verb. núm. 1677.

3— Véase nota precedente.

4—Para que haya litispendencia se requiere que resuelto uno de los litigios produzca cosa juzgada para el otro: de donde se deduce, que para que haya litispendencia, se requiere la concurrencia de los mismos elementos que para la cosa juzgada. Fallo Suprema Corte Nacional, tomo 17, pág. 340, Ser. 2^a; Jur. Civ., tom. 2^a, pág. 393, Ser. 2^a.

5—No solo se tramitaban los juicios ante distintas jurisdicciones sino que ni se comprobó que el litigio hubiera sido entre las mismas partes ni sobre idéntico objeto de manera á poder dar lugar á fallos que pudieran resultar contradictorios.

6 —Porque el art. 339 del Cód. de Proc. no las incluye entre las únicas admisibles.

7—El espediente en que esta excepción se fundaba, lejos de justificarla ponía de manifiesto que resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada habían declarado la incompetencia del otro Juez y había ordenado que la parte debía ocurrir donde correspondía. La excepción solo es procedente cuando existe ante un juzgado competente pleito pendiente para obtener lo mismo que sea objeto del que se inicia.



se ha declarado la incompetencia no puede fundarla.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 27, Ser. 4^a.

8. **Excepción de litispendencia**—Opuesta en juicio ejecutivo, es improcedente si se funda en un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 188, Ser. 4^a.

• **Excepción de litispendencia**—Véase: *Acción*, núm. 2—*Ejecución de sentencia*, núm. 1.

1. **Excepción de nulidad**—Opuesta á la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es improcedente, cualesquiera que sean los vicios de que adolezca el procedimiento que le dió origen.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 167, Ser. 4^a.

2. **Excepción de nulidad**—Por defectos de procedimientos, no importa, ni excepción, ni recurso, y en con-

8— Véase el núm. 2.

1—No está comprendido entre las únicas declaradas admisibles por el art. 539 del Cód. de Proc.

2—Este sumario no expresa en manera alguna lo resuelto por la Cámara. El caso es el siguiente: Iniciado un juicio ejecutivo contra una insano, se entendieron todas las diligencias con una persona que había sido curadora, pero que había dejado de serlo. Después de dictada sentencia de trance y remate se viene á dar con el curador verdadero del insano, y pide se le notifique las providencias: así se hace, y entonces se presenta diciendo de nulidad de todo lo obrado, deduciendo la excepción de nulidad que correspondía, á lo que no se hizo lugar porque cualesquier que sean los defectos del procedimiento seguido, ellos quedan cubiertos por la espiración del término acordado por la ley para decir de nulidad del juicio, y que en todo caso podía hacer uso de su derecho en el competente juicio ordinario. La Cámara revocando la sentencia declaró la nulidad porque se le habían notificado al nuevo curador todas las diligencias incluso la de remate, y como el artículo 489 dice que el ejecutado puede decir de nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ello establece la ley, se dijo que las providencias habían sido ya notificadas, y que solo importaba la notificación al nuevo curador el hacerle saber el estado de la ejecución. Pero esas providencias habían sido notificadas antes á quien no era parte en el juicio y por consiguiente es como si no se hubiese notificado á nadie. La



secuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4ª.

1. **Excepción de pago**—Al que la alega contra la ejecución por honorarios, corresponde presentar los justificativos de haberlo verificado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 165, Ser. 3ª.

2. **Excepción de pago**—O transacción, opuestas á una ejecución hipotecaria, son improcedentes si no resultan de escritura pública ó documento privado reconocido judicialmente por el acreedor, la prueba testimonial es improcedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 284, Ser. 4ª.

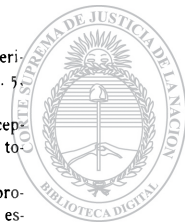
3. **Excepción de pago**—La procedencia de esta excep-

nidad como recurso tal como se encuentra legislada en el Cód. de Proc. presupone que intervienen en el asunto las partes que tienen interés en él y que han tenido ó podido tener oportunidad de reclamar en tiempo y forma la violación de la ley que enjendra la nulidad: pero cuando esa intervención no ha existido, cuando no ha habido oportunidad para usar del recurso la nulidad puede deducirse y pronunciarse en cualquiera oportunidad.

1—En la ejecución seguida en virtud de una regulación ejecutoriada de honorarios, se opuso la excepción de pago fundada en varias entregas hechas á cuenta según detalle que constaba en una cuenta corriente acompañada. No se demostró ni la efectividad de las entregas, ni la autenticidad del documento, siendo la excepción rechazada de acuerdo con lo preceptuado en la ley 8, tit. 3, part. 3ª.

2—El reo en la excepción se hace actor: *reus in excipiendo fit actor*.—Ley 8, tit. 3, part. 3ª.—A esta corresponde la prueba, la que no puede consistir en testigos cuando el valor de la obligación exceda de 200 pesos—art. 180 del Cód. de Proc.—En cuanto á la transacción puede verse, los artículos 832 y 833 del Cód. Civ. La prueba puede también resultar de la confesión de las partes.

3—La Municipalidad entabló demanda contra un frontón por pago ejecutivo de pesos que se le adeudaban, procedentes del impuesto de una patente anual y por las funciones en días de trabajo, establecidas por sus ordenanzas, como asimismo por las multas en que había incurrido por no haberse verificado su pago oportunamente. El Juez de 1ª Instancia declaró procedente la excepción de pago porque la Municipalidad



ción no exonera de las costas al ejecutado, si la verificó después de trabado el embargo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200. Ser. 4^a.

4. Excepción de pago—No justificándose esta excepción, debe llevarse adelante la ejecución. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 240. Ser. 4^a.

5. Excepción de pago—Para que esta excepción sea procedente, los recibos en que se funda deben referirse especial y determinadamente á la obligación que se ejecuta; existiendo otra anterior, deben imputarse á la primera.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 272. Ser. 4^a.

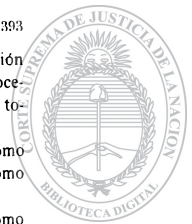
6. Excepción de pago—Para que sea procedente la excepción de pago opuesta á la ejecución de una sentencia, debe acompañarse el documento en que se funda.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 49. Ser. 4^a.

recibió el importe del impuesto quedando estinguida la obligación—art. 724 del Cód. Civ.—La Cámara confirmó la sentencia. Pero como al mismo tiempo se habían opuesto otras excepciones que se declararon improcedentes mandándose llevar adelante la ejecución, se le condenó en costas al ejecutado. Esta resolución está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 307 del Cód. de Proc., el que establece que las costas serán á cargo del que fuere vencido en última instancia. Como la sentencia de remate solo puede dar por resultado una de dos: ó que se lleve la ejecución adelante, ó que no se lleve: en el primer caso es el ejecutado el vencido y en el segundo el ejecutante, siendo á cargo de uno ú otro las costas del juicio, según le sea favorable ó desfavorable la sentencia. Así cuando como en el caso que nos ocupa, una de las excepciones prospera, aunque las demás sean declaradas improcedentes, la ejecución no se lleva adelante y las costas son á cargo del ejecutado, por que es él el vencido en última instancia. De acuerdo con la jurisprudencia sentada, puede verse el verbo *Costas*, núm. 42, y especialmente el núm. 20.

4 Véase los números precedentes.

5 —El Juez no dijo que era necesario que los recibos se refiriesen especialmente á la obligación ejecutada, sino que rechazó la excepción de pago porque los recibos se referían especialmente á obligaciones anteriores.

6—El art. 539 del Cód. de Proc. lo preceptúa espresa y terminantemente en su última parte.



1^a. Escepción de pago parcial— Fundada en la retención del anterior empedrado por el empresario, es improcedente si la Municipalidad hizo uso de él.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 5, Ser. 3^a.

1^b. Escepción perentoria —No puede ser opuesta como artículo de incontestación á la demanda.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 86, Ser. 3^a.

2. Escepción perentoria —Solo puede resolverse como tal, la escepción de falta de personería por carecer de derecho el actor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 3^a.

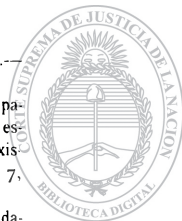
3. Escepción perentoria— Opuesta esta escepción como

1^a—El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación—art. 725 del Cód. Civ.— No se puede decir que el dueño de una propiedad pague parte del empedrado nuevo con la piedra vieja que se saca de la calle, porque esa piedra vieja que se estrae no puede ser el objeto de la prestación de parte del deudor. Por otra parte, si no es el empresario el que lleva la piedra sino la Municipalidad, con menos razón se puede alegar el pago, porque la prestación, si es que la hay, no la recibe la persona que debe recibirla—art. 731 del Cód. Civ.

1^b—Salvo las especificadas en el art. 95 del Cód. de Proc., las que á pesar de ser perentorias pueden oponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento.

2—La escepción de falta de personería solo es dilatoria cuando se funda en la incapacidad del actor para estar en juicio. La escepción de falta de personería por carecer de derecho, no puede oponerse como dilatoria, porque declarada procedente, ella terminaría el pleito, siendo así que la escepción dilatoria solo produce el efecto de diferir la entrada al juicio, pero una vez sustanciado y resuelto, el pleito sigue su curso.

3—Entablada una acción reivindicatoria, el demandado opuso la escepción de prescripción treintenaria: sustanciada la escepción, el Juez la rechazó declarando procedente la acción reivindicatoria, lo que implica resolver sobre el fondo de la demanda. Las escepciones dilatorias, cuando se oponen en forma de artículo previo y son declaradas procedentes termina el pleito, pero siendo rechazadas queda la demanda en estado de ser contestada directamente y seguirse por los trá-



dilatoria, no puede fallarse sobre el fondo de la causa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 416, Ser. 3ª.

1. **Excepción de prescripción**—La posesión quieta y pacífica por mayor término de 30 años, hace procedente esta excepción, sin que el demandado [deba justificar la existencia de buena fe ni de justo título.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

2. **Excepción de prescripción**—Opuesta por el demandado por acción reivindicatoria, hace procedente la exoneración de las costas al actor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

3. **Excepción de prescripción**—La prueba de esta excep-

tes ordinarios. En el presente caso la excepción perentoria fué rechazada, declarándose procedente la reivindicación: esta última parte vicia de nulidad la sentencia, porque la resolución debió tan solo limitarse al rechazo de la excepción, mandando que se contestara directamente la demanda.

1—Debe además ser continua, no interrumpida y á título de propietario. En el caso que nos ocupa, se presentaron títulos que acreditaban el dominio; el que presenta títulos tiene á su favor la presunción de su posesión desde la fecha de su título—art. 4003, Cód. Civ.—y puede unir su posesión á la de su antecesor. La posesión de largo tiempo, tanto por la antigua como por la moderna legislación, deja al poseedor al abrigo de toda gestión sobre su dominio, y en aptitud de defenderse con el hecho solo de la posesión sin necesidad de título ni de buena fe. Cuando se alega que la posesión ha sido interrumpida, esta circunstancia debe ser comprobada por el que la alega. En cuanto á la adquisición por prescripción treintenaria sin necesidad de buena fe ni de justo título, espresamente lo establecen los arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ.

2—Véase, verb. *Costas*, núm. 28.

3—Los demandados exhibieron título y en este caso su derecho está amparado por la disposición del art. 4003 del Cód. Civ., que establece á favor del que presenta un título la presunción de que la posesión data desde la fecha del título. Pero en el caso que nos ocupa, se comprobó que la posesión había sido interrumpida, prueba que constaba de documentos públicos exhibidos en autos. El mismo poseedor al contestar una pregunta del pliego de posiciones dijo, que no le constaba

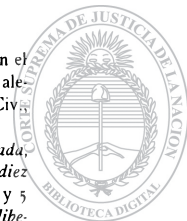


ción corresponde al escepionante. pero la de que la posesión ha sido interrumpida, ó á nombre de otra, corresponde al que deduce la reivindicación.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 342, Ser. 4.^a

4. Excepción de prescripción—La falta de pronuncia

que el absolvente y el reivindicante hubiesen poseído en común hasta poco tiempo antes de la demanda, el terreno materia de ella. Esa contestación demuestra que él no estuvo en posesión del inmueble, pues que si hubiese estado, no habría contestado diciendo que lo ignoraba. En mérito de ésto, el Juez de 1.^a Inst. rechazó la excepción de prescripción. La mayoría de la Cámara, compuesta de los Dres. Bustos y Molina Arrotea, fué de opinión que la sentencia debía revocarse; y la minoría que la formaba el Dr. Gonzalez del Solar, votó por su confirmación. Aquella se fundaba en que el título presentado por el escepionante establecía la presunción de que lo posesión databa desde la fecha del título; que si el demandado no se encontraba en la época de la demanda en posesión de la cosa, y si esa posesión empezó desde la fecha del título, correspondía averiguar si esa presunción había sido destruida por la prueba contraria. Analiza esa prueba con el criterio propio del abogado que hace un alegato en favor de su parte, y termina diciendo que la interrupción de la posesión no ha sido comprobada. Este es uno de los fallos más injustos de los que hemos anotado: es una verdadera injusticia y para convencerse de ello, bastará estudiar no solo los fundamentos de la sentencia de 1.^a Inst. que fué revocada, sino también los del Camarista Dr. Gonzalez del Solar quien entre otras cosas, después de aducir algunos fundamentos, dijo: «Bastaria con lo espuesto para el rechazo de la prescripción invocada por los demandados» y más adelante agrega: «De todos los antecedentes resulta plenamente evidenciado, que el demandado no ha poseído exclusivamente los terrenos cuestionados, á títulos de único dueño sino que esa posesión ha sido común.» Así continúa el Camarista, tratando con su voto, de evitar que se consumase una de las más grandes injusticias que registran los fallos, pero todo fué inútil, la mayoría indudablemente ya estaba hecha en el sentido de consumarla. Debe leerse este fallo para ver de lo que es capaz la Cámara. Esta sentencia clama al cielo por una reparación de la justicia escarnecida por la inconsciencia de los que la dictaron.

4—La parte demandada que salió vencedora, opuso al alegar de bien probado y como para mayor abundamiento la excepción de prescrip-



miento del Juzgado, sobre esta excepción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte contra quien fué opuesta. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Excepción de prescripción — Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1 — *Carta de crédito*, núm. 1 — *Prescripción de diez años*, núm. 1 — *Prescripción de treinta años*, núms. 4 y 5 — *Prescripción como excepción*, núm. 1 — *Prescripción liberatoria*, núm. 1.

1^a. **Excepción de remisión** — Es improcedente si al tiempo en que tuvo lugar el acto que le sirve de base no existía deuda. — Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 4^a.

1^b. **Excepción dilatoria** — La falta de personería, si se refiere a la causa que el Interior no la tomó en consideración. El Juez *a quo* al estudiar la causa encontró elementos suficientes para rechazarla, y por consiguiente ha podido dejar de dictar la excepción de prescripción como innecesaria. El Juez tiene facultad para estudiar tan solo aquellos argumentos que considere bastantes para fundar su sentencia, y por esto dijo al final de uno de sus considerandos que conceptuaba innecesario estudiar las demás. No se puede decir que si la Cámara en contraria insuficientes los fundamentos del Juez *a quo*, se vería en el caso de fallar en única instancia respecto de dicha excepción, con violación de lo dispuesto en el art. 267 del Cód. de Proc., desde que autorizando el art. 3962 del Cód. Civ. que la prescripción pueda oponerse en cualquiera instancia y en cualquier estado del juicio hasta la sentencia que lo determine definitivamente, la disposición general del art. 267 es inaplicable a la prescripción. Pero aun dado el caso de que esta circunstancia fuese una causal de nulidad, lo sería tan solo siendo alegada por la parte a quien esa omisión hubiese perjudicado, pero en manera alguna para la contraparte, a quien ningún agravio le irroga.

1^a. — La remisión supone necesariamente la existencia de la deuda remitida y la voluntad del acreedor manifestada espresamente, de perdonarla.

1^b. — Entablada una demanda sobre escrituración, el demandado opuso la excepción dilatoria de falta de personería, diciendo que el terreno motivo del pleito no era de propiedad del actor. Las disposiciones de nuestra ley y la jurisprudencia constante de los Tribunales, han estable-



fiere al derecho del actor, no puede ser resuelta como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 3ª.

2. **Excepción dilatoria**—Las excepciones dilatorias solo pueden oponerse en el mismo escrito, ó después al contestar la demanda.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 365, Ser. 4ª.

3. **Excepción dilatoria**—La falta de presentación de los documentos no puede fundarla.—Jur. Civ., tom. 7, página 32, Ser. 4ª.

4. **Excepción dilatoria**—Resuelta la competencia como excepción dilatoria, no puede ser materia de decisión al

cido que la excepción dilatoria de la falta de personería, se dá contra aquel que se presenta en juicio gestionando los derechos de un tercero sin acreditar su legítima representación, ó contra aquel que se presenta en juicio sin estar en el pleno goce de sus derechos civiles. En el caso que nos ocupa, el actor demandaba por derecho propio, y no se le negó su capacidad para estar en juicio. La excepción dilatoria que se le opuso tendía á negarle acción para promover el pleito, lo que no puede hacerse sino contestando la demanda. Las excepciones dilatorias solo tienen por objeto dilatar el ingreso al juicio, pero no destruyen por completo la acción. Si los jueces se pronunciaran sobre el derecho del actor para instaurar su demanda, vendrían á resolver el juicio en definitiva en la forma y con los trámites de una excepción dilatoria, lo que sería á todas luces improcedente.

2—El art. 86 del Cód. de Proc. establece que á un tiempo y en un mismo escrito alegará el demandado todas las excepciones, y no haciéndolo así solo podrá usar de las que no alegase contestando la demanda.

3—Véase, verb. *Excepción de defecto legal*, núm. 16.

4—La ley que permitiera dos oportunidades distintas para deducir una declinatoria de jurisdicción, carecería de plan y de desarrollo lógico. No es posible discutir la competencia de los jueces, por primera vez, antes de contestar la demanda y otra al recibir la causa á prueba. La disposición del art. 87 del Cód. de Proc. debe entenderse en el sentido de que la competencia que se refiere es, ó un pronunciamiento sobre la excepción deducida en la oportunidad que determina el art. 86, ó una declaración del Juzgado tendente á evitar que en adelante pueda de oficio desprenderse del conocimiento del asunto. Cuando se rechaza la excepción de incompetencia opuesta como dilatoria, se declara así implícitamente que el Juzgado es competente para conocer en la



recibirse la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 24, Ser. 4^a.

5. **Escepción dilatoria**—La de falta de personería solo puede fundarse en la incapacidad civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 4^a.

6. **Escepción dilatoria**—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter de hijo natural, no puede fundar una escepción dilatoria.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 33, Ser. 4^a.

Escepción dilatoria—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. — *Recusación*, núm. 7.

1^a. **Escepción potestativa**—En esta escepción cuando es potestativa del demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 137, Ser. 3^a.

Escepción potestativa—Véase: *Costas*, núm. 18—*Cosa juzgada*, núm. 7—*Prescripción de treinta años*, núm. 1 y siguientes.

1^b. **Escepciones**—Rechazada la ejecución, las costas son á cargo del ejecutante, aun cuando se hayan declarado improcedentes algunas de las escepciones opuestas por el ejecutado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 74, Ser. 3^a.

demanda que se ordena contestar derechamente. No debe olvidarse por otra parte, que la resolución en este caso causa ejecutoria y pasa en autoridad de cosa juzgada.

5—O en la insuficiencia ó carencia de facultades en el apoderado. Véase el núm. 1.

6—Se opuso la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, fundándola en que el actor no había acompañado la partida de nacimiento para comprobar el estado de hija natural en que fundaba su acción. Si la demanda reúne todos los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc., la falta de presentación de la partida, la de cualquier otro documento ó escritura en que se funde la demanda, no constituye un defecto legal de ella, porque esa omisión tiene su sanción legal en el art. 73. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara.

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 26, como asimismo el núm. 22.

1^b—Véase: *Costas*, núm. 20.



2. **Escepciones**—En el término de la prórroga concedida para contestar la demanda, no pueden oponerse escepciones sin contestarla. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Serie 4ª.

3. **Escepciones**—El escrito en que se opone escepciones, no puede considerarse como contestación al traslado de la demanda, aun cuando no se haga constar esplicitamente. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 4ª.

4. **Escepciones**—Improbadas las escepciones procede su rechazo llevándose la ejecución adelante. —Jur. Civ., tomo 6, pág. 353, Ser. 4ª.

5. **Escepciones**—Reconocida por el actor la procedencia de las escepciones opuestas, corresponde su condenación en costas. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 4ª.

6. **Escepciones**—Todo escrito en que no se conteste derechamente la demanda, importa oponer escepciones, aun cuando claramente no se determinen. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 42, Ser. 4ª.

7. **Escepciones**—Aun cuando el título de la ejecución

2—Una escepción previa fué opuesta fuera del término legal que asigna el art. 83, término declarado perentorio por el art. 46. Perdido ese derecho siempre puede oponer las escepciones contestando a la demanda—art. 86, última parte.—De modo que si se declara decaído el derecho para oponer escepciones con carácter de previo pronunciamiento, eso no inhibe al interesado para oponerlas contestando la demanda.

3—La Cámara había declarado que la petición importaba una escepción ó incidencia de la demanda.—Véase el núm. 6.

4—El demandado en la escepción se hace actor y le incumbe la prueba.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª; y Ley 8ª, tit. 3º, Part. 3ª; art. 498 del Cód. de Proc.

5—Véase: *Costas*, núm. 51.

6—La ley no ha impuesto una forma sacramental para hacer presente que las escepciones se oponen como artículo de incontestación.

7—Vendida una propiedad en remate judicial se le intimó al com-

sea un auto consentido, procede la recepción á prueba de las escepciones opuestas. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Serie 4ª.

8. **Escepciones** —La omisión del segundo traslado antes de resolverse las escepciones, no es causa de nulidad de la sentencia. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4ª.

9. **Escepciones** —Corresponde se dicte sentencia de reproductor oblara dentro del tercero día el precio de compra. Consentido el auto se pidió mandamiento: librado éste no fué pagado, oponiendo el ejecutado escepción de inhabilidad de título una vez citado de remate: el Juzgado declaró improcedente la escepción, porque ésta se fundaba en la ley de moratorias, la que no era aplicable al caso por no tratarse de obligaciones comerciales; y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 465, inc. 1º, y en el 498, ordenó se llevara adelante la ejecución. Se dijo de nulidad de la sentencia deduciéndose el recurso correspondiente. La Cámara declaró nula la sentencia fundándose en que ante los términos y alcance del auto que mandaba hacer la oblación, no podía sustentarse válidamente que no se trata de un juicio ejecutivo perfectamente bien caracterizado, teniendo en cuenta el procedimiento que se le había impreso: hecha la citación de remate, y opuesta las escepciones, lo correcto era abrir á prueba antes de dictarse sentencia si es que ellas son admisibles, pues de lo contrario el juicio adolece de nulidad por violación de las formas sustanciales del procedimiento. Así se declaró en el caso del sumario, porque el inferior debió proceder de acuerdo con el art. 490 en su última parte. Omitiéndose ese trámite la sentencia es nula —art. 237—Cualquier que sea el recaudo con que se instruye la demanda y que le sirve de base no modifica su esencia ni las desaloja de las disposiciones que le son privativas. En tal concepto sus trámites ó modalidades deben ajustarse á las reglas que especialmente la regian y no á otras. Aunque sea manifiesta su analogía, porque los procedimientos son de orden público.

8—El art. 91 del Cód. de Proc. dice, que el juez *podrá* para mejor proveer correr un nuevo traslado por su orden, lo que implica que deja ese trámite librado al criterio del Juzgado, quien puede ó no hacer uso de ese derecho.

9—Un martillero cuya cuenta de comisión y gastos fué aprobada, pidió que el ejecutante le abonara dicha cuenta, fundándose en que el inmueble había sido adjudicado al acreedor por falta de postores. Citado de remate, el acreedor se presentó diciendo que se notificara al marti-





mate, si las observaciones no revisten el carácter de escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 12, Ser. 4^a.

10. **Escepciones**—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate son inapelables si no se hubiese opuesto escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

11. **Escepciones**—Consentida la sentencia de trance y remate, solo proceden contra ella las escepciones que la ley determina, las que se refieren al derecho que ella resuelve son improcedentes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 4^a.

12. **Escepciones**—La sentencia que no hace lugar á las escepciones opuestas á la ejecución de una sentencia es

llero ejecutante que debía ocurrir á cobrar sus honorarios al deudor primitivamente ejecutado, y que se rebajara la mitad de la cuenta del martillero por no haberse realizado la venta. Como se ve, estas peticiones no implican escepciones, pues no se determinaron con precisión de acuerdo con lo que establece el art. 487 del Cód. de Proc. Por otra parte, las defensas alegadas no podían incluirse entre ninguna de las escepciones establecidas como admisibles por el art. 488. En cuanto á la comisión cuya rebaja se pedía no era posible tomarla en consideración por cuanto la cuenta había sido ya aprobada, no siendo posible volver sobre la cosa juzgada.

10.—La Cámara dijo que no siendo recurrible en lo principal la resolución, de conformidad con lo prevenido en el art. 501 del Cód. de Proc., tampoco puede serlo sobre la condenación en costas, que es accesoria, como lo tiene resuelto la Cámara en diversos casos. En su mérito se declaró bien denegado el recurso. Esta resolución no consulta los verdaderos principios que rigen la condenación en costas, la que está legislada en el Apéndice del Cód. de Proc. Hemos combatido constantemente la doctrina sentada en el sumario y felizmente á pesar de la jurisprudencia uniforme de la Cámara de lo Civil, esta ha vuelto sobre sus pasos en estos últimos tiempos, declarando la apelabilidad de los autos en los casos como los consignados en el sumario. De acuerdo con esto puede verse verb. *Costas*, núm. 50, donde se estudia el punto: como asimismo el núm. 60.

11.—No es posible cuestionar el derecho que la sentencia resuelve por cuanto ese punto pasa en autoridad de cosa juzgada en virtud de la sentencia.

apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

Escepciones—Véase: *Cédula*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 17 y 32—*Alimentos*, núm. 10—*Notificación*, núm. 7.

1^a. **Escepciones perentorias**—El demandado puede, al contestar la demanda, oponer simplemente escepciones perentorias sin entrar al fondo, y los jueces están obligados á resolverlas al mismo tiempo que lo principal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 371, Ser. 4^a.

1^b. **Escribano público**—Tiene derecho de retención de los títulos hasta tanto se le paguen los honorarios de la escritura otorgada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 10, Ser. 4^a.

2. **Escribano público**—La afirmación del Escribano au-

1^a—De acuerdo con los fundamentos aducidos en la nota del verb. *Escepción dilatoria*, núm. 2.

1^b—Los Escribanos de Registro tienen la obligación de estender los actos y contratos que las partes les piden siempre que no sean contrarios á las leyes, sin que puedan escusarse de esta obligación bajo pena de responder por los daños y perjuicios que causen—art. 174 de la Ley Orgánica—Compelidos á trabajar para toda clase de clientela y para todo el que quiera ocuparlos, no se les puede escluir del derecho que acuerda el art. 3939 del Cód. Civ. á los tenedores de cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le sea debido por razón de la misma cosa. Las condiciones requeridas por el art. 3940 concurren en el caso presente, y por consiguiente el derecho de retención procede.

2—El nombre de la persona era uno de aquellos sumamente comunes; se llamaba Gertrudis Correa. El oficial público autorizante da fe de la identidad de las personas que intervienen en el otorgamiento de una escritura, y esa atestación es de aquellas que por mandato de la ley hacen plena fe en juicio—art. 99; del Cód. Civ.—La prueba está siempre á cargo del que impugna un documento público, y ella no puede consistir, en el caso que nos ocupa, en la presentación de una partida que puede referirse á otra persona que llevara el mismo nombre y apellido, sino que esa prueba debe robustecerse con la identidad de una y otra persona, de aquella á que se refiere la partida de defunción y de aquella á que se refiere la atestación hecha por el Escribano. Debe tenerse





torizante de una escritura pública, sobre la existencia e identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder á un homónimo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4ª.

Escribano—Véase: *Testamento*, núm. 3.—*Conocimiento*, núm. 1.—*Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1. **Escribanos**—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Enero y Febrero de 1890.—Jur. Civ., tom. 1, págs. 33 y 380; durante el mes de Marzo del mismo año, tom. 3, pág. 102; durante el mes de Abril, tom. 4, página 253; Mayo del mismo año, tom. 5, pág. 258, todo de la Jur. Civ., Ser. 3ª; durante el mes de Junio de 1890, tomo 7, pág. 164, Ser. 3ª; durante el mes de Junio de 1891, tomo 4, pág. 267, Ser. 4ª; durante Julio del mismo año, tom. 5, pág. 125, Ser. 4ª; durante Agosto, tom. 5, página 425; durante Set., tom. 7, pág. 80; durante Octubre, tom. 8, pág. 72; durante Nov., tom. 9, pág. 48; durante Dic., tom. 9, pág. 89, todos del mismo año 1891 y de la misma Ser. 4ª; durante Enero de 1892, tom. 9, pág. 152, Ser. 4ª, Feb., tom. 9, pág. 275; Marzo, tom. 10, página 122, Abril, tom. 10, pág. 336, todos del año 1892 y de la misma Ser. 4ª.

2. **Escribanos**—De registro, pueden sacar de las secretarías bajo constancia, los expedientes en que deban otorgar escritura.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 253, Ser. 3ª.

3. **Escribanos**—De Registro, los informes de las ofi-

presente además, que la persona de quien se trataba habia intervenido con posterioridad á la fecha del fallecimiento, según la partida de defunción, en actos judiciales llevados á cabo por la presunta muerta.

2.—El término por el cual se entregarán los expedientes, en este caso, no excederá de quince días. Si vencido el término el Escribano no devuelve el expediente, dará cuenta de ello el actuario al Juzgado, el cual intimará su inmediata devolución bajo los apercibimientos de derecho.

3.—Véase, verb. *Administración*, núm. 1.



nas públicas ya sean de la administración, ó ya de las escribanías de Registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, página 220, Ser. 3ª.

1. **Escrito**—Aun cuando se haya admitido y proveído el escrito de contestación á la demanda, debe ordenarse su devolución si fué presentado fuera del término y existía rebeldía acusada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Serie 3ª.

2. **Escrito**—Acusada rebeldía, procede la devolución del escrito presentado después del vencimiento del término que la ley concede para evacuar el traslado.—Jur. Civil, tom. 3, pág. 97, Ser. 3ª.

3. **Escrito**—Aun cuando no se hayan acompañado las copias, si el escrito fuese recibido por el Secretario, no puede tenerse por no presentado.—Jur. Civ., tom. 5, página 376, Ser. 4ª.

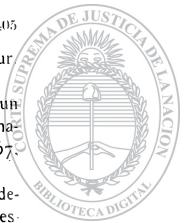
4. **Escrito**—El secretario no debe recibir escritos sin las copias respectivas y en caso de que aquéllos se pre-

1—Puede verse, de acuerdo con la resolución, el tom. 3º de la Instituta, verb. *Rebeldía*, núms. 4 y 5. En contra, véanse los núms. 1 y 8.

2—Véase el número precedente.

3—El art. 21 del Cód. de Proc. en su segundo aparte dice, que si no se exhibiesen las copias, el secretario no recibirá el escrito produciendo el efecto de no presentado: de donde resulta que recibíendose el escrito aunque no se acompañen las copias, debe tenerse por presentado. Esta jurisprudencia debe reformarse porque no interpreta correctamente el art. 21 citado; la hemos combatido constantemente como puede verse en el tom. 4º, Inst., verb. *Copias*, núm. 1.

4—Estamos conformes en cuanto á la primera parte del sumario, pero no así en cuanto á la segunda. El art. 21 del Cód. de Proc. es imperativo en su mandato, y la Cámara no tiene la facultad de autorizar á los secretarios que violen ese precepto claro y terminante de la ley, como lo hemos sostenido en el número precedente.



senten sin éstas debe hacerlo constar en el cargo.—Jur. Civ., tom 5, pág. 376, Ser. 4^a.

5. **Eserito**—No puede tenerse por no presentado un escrito recibido por el secretario, aun cuando no se hayan acompañado las copias.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 367, Ser. 4^a.

6. **Eserito**—Vencido el término para contestar la demanda, procede la devolución del escrito presentado después de acusada la rebeldía. Jur. Civ., tom. 5, pág. 95, Ser. 4^a.

7. **Eserito**—La interrupción del término permite la presentación del escrito desde que aquélla cese, aun cuando no se hubiese concedido la prórroga solicitada.—Jur. Civil, tom. 7, pág. 47, Ser. 4^a.

8. **Eserito**—La falta de firma de la copia, no basta para dar por no presentado el escrito si el secretario lo recibe sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 136, Ser. 4^a.

9. **Eserito**—La recusación con causa debe presentarse en cada uno de los litigios, no basta un escrito para todos

5—Véanse los números precedentes.

6—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 45 del Cód. de Proc.

7—Solicitada la prórroga de un término no se hizo lugar, pero se declaró que la parte tenía derecho a presentar el escrito dentro del término que aun faltaba, para completar el acordado por la ley. De manera que, si un litigante pide a los seis días de conferido el traslado de la demanda, una prórroga de nueve días más para evacuar el traslado, y si esa prórroga no se le concede, siempre tiene derecho a contestar la demanda dentro de los tres días que le faltan para completar los nueve que la ley acuerda, debiendo empezar a contarse nuevamente el término después que el incidente sobre prórroga quede terminado.

8—Véase: verb. *Copia*, núm. 1.

9—Teniendo en cuenta la diversa naturaleza de los juicios, pueden ser también distintas las resoluciones del Tribunal en cada uno de ellos, debiendo por consiguiente deducirse la recusación separadamente para que en cada caso recaiga la respectiva resolución.



los que existen pendientes del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 133, Ser. 4^a.

10. **Escrito**—No pudiendo comprobarse la fecha cierta de su recepción por el secretario, debe estarse á la del documento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4^a.

11. **Escrito**—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado de los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 296, Ser. 4^a.

12. **Escrito**—Presentado después de acusada rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 330, Ser. 4^a.

13. **Escrito**—Los secretarios no deben dar curso á los escritos que tengan claros.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 80, Ser. 4^a.

Escrito— Véase: *Apercibimiento*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 24—*Testamento*, núm. 3—*Desacato*, núm. 2—*Excepciones*, núms. 3 y 6—*Término perentorio*, núm. 1—*Término suspendido*, núm. 1—*Notificación*, núm. 9—*Apelación de hecho*, núm. 1—*Rebeldía*, núms. 5, 6, 7 y 15—*Recusación*, núms. 1 y 18.

1. **Eseritura**—La cláusula de otorgarse ésta si los títulos no tuviesen defecto alguno, solo puede entenderse en favor del comprador.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 3^a.

10—Se trataba de un oficio recibido en una Secretaría sin poderse saber en qué fecha: se resolvió, que debía considerarse como presentado en la fecha que llevaba el oficio. Al resolver así, se tuvo en cuenta la amplitud de la defensa á la que debe estarse en caso de duda.

11—Véase: verb. *Documentos*, núm. 12.

12—Véase el núm. 6.

1—Porque dicha condición á nadie favorece sino al comprador, y su aceptación depende de su voluntad: ella constituye el hecho futuro é incierto determinante de la condición. La mala calidad de los títulos autoriza al comprador á desistir de la compra, pero no autoriza á pro-



2. **Escritura** —La prueba del error, dolo, ó fraude, á fin de declarar la nulidad de la escritura, corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 4. pág. 296, Ser. 3^a.

3. **Escritura**—Debe entender en el juicio sobre otorgamiento de la escritura, el Juez que conoció en el espediente en que fué ordenado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 384, Ser. 4^a.

4. **Escritura** —El reconocimiento judicial de que la es-

ceder del mismo modo al vendedor, lo que prueba evidentemente que la condición está establecida por la ley á favor del comprador, como se desprende de la disposición del art. 522 del Cód. de Proc.

2.—Esta prueba corresponde no solo en virtud del principio general de que la prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a—sino en virtud de que una escritura pública tiene á su favor la presunción de verdad de sus cláusulas hasta que sea argüida de falsedad.

3—Porque el segundo juicio no importa promover uno nuevo ajeno á la tramitación del primero desde que solo se persigue el cumplimiento de éste.

4—El actor se presentó diciendo que la manifestación que había hecho en la testamentaria de su señor padre declarando que una casa que estaba á su nombre debía de estar á nombre de éste, era un error de su parte por ser contraria á la verdad, pues dicha propiedad era del compareciente, pagada con su dinero ganado con su trabajo personal, por lo que pedía se le diese por desistido de la primera declaración. A esto se opusieron los demás herederos. La petición formulada por el actor solicitando se le diese por desistido de la manifestación hecha por él, importaba una nulidad de ese acto jurídico, fundada en el error que decía haber incurrido. El reconocimiento hecho es un acto bilateral perfectamente concluido, pues había sido aceptado por los demás coherederos. Ese acto jurídico creó derechos y obligaciones que no podían dejarse sin efecto por la sola voluntad de una de las partes que han concurrido á realizarlo. Los coherederos tienen derecho para emplear los medios legales á fin de que el deudor cumpla con lo que se obligó—art. 505, Cód. Civ.—Ese reconocimiento reúne los requisitos exigidos por los arts. 718 y siguientes, y produce todos los efectos legales mientras no se declare su insubsistencia ó nulidad. Por otra parte, el actor al decir que el reconocimiento había hecho por error,

critura de propiedad de una finca era simulada, solo puede ser revocada por la existencia de los vicios que la ley estatuye para la revocación de los actos jurídicos.

Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4ª.

Escriura—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 7—*Derechos hereditarios*, núm. 3—*Comprador judicial*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 10—*Escribanos*, núm. 2—*Poseción judicial*, núm. 2.

Escriura de adquisición—Véase: *Bienes*, núm. 4.

Escriura de cesión—Véase: *Cesión de derechos hereditarios*, núm. 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2.

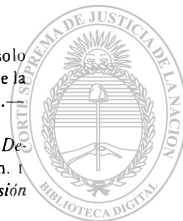
1ª. **Escriura de compromiso**—Forma parte integrante del laudo arbitral, y siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la escepción de falsedad de la ejecutoria es procedente aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 160, Ser. 4ª.

1ª. **Escriura de donación**—Para la validez de la donación, aunque comprenda todos los bienes del donante, basta justificar que retuvo el usufructo, sin que sea requi-

no manifestó en qué consistía éste, ni si era de hecho ó de derecho. La naturaleza del asunto hace imposible el error invocado, pues se trata de un acto jurídico por el que se reconoce que la propiedad de una casa cuyo título está á nombre del declarante pertenece á la sucesión del padre. Si el error fuese de derecho no podría ser invocado por él para impedir los efectos legales del acto—art. 923, Cód. Civ.—y tampoco si el error fuese de hecho, porque en tal caso su ignorancia, respecto del verdadero estado de las cosas, provendría de una negligencia culpable. art. 929 del Cód. Civ.—El actor no provó ni siquiera trató de probar el error alegado, como era de su deber.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

1ª—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Donación*, núm. 1.





sito indispensable que esa prueba resulte de la escritura de donación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3^a.

Escritura de donación—Véase: *Incapacidad*, núm. 1—*Condiciones impuestas*, núms. 1 y 2—*Donación*, núm. 5.

1^a. **Escritura de préstamo**—Es procedente la escepción de inhabilidad, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3^a.

1^b. **Escritura de venta**—Para la validez del acto no es requisito esencial que la escritura de venta de derechos y acciones á un inmueble determinado, contenga todas las cláusulas que la ley fija para la venta directa del mismo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Ser. 4^a.

Escritura de venta—Véase: *Mandatario*, núm. 12—*Pacto de retroventa*, núm. 2—*Inscripción*, núm. 1.

1^a. **Escritura pública**—Cuando la ley requiere para de terminados actos la solemnidad de la escritura pública, surte los mismos efectos y tiene igual fuerza la presentación de la transacción al juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

2. **Escritura pública**—Para que exista la obligación

1^a—Véase: verb. *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1^b—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en casos análogos. Véase: verb. *Cesión de derechos*, núm. 1.

1^c—Se trataba de la renuncia de derechos hereditarios que excedían de mil nacionales y que el Cód. Civ. exige sea hecha por escritura pública bajo pena de nulidad—art. 1184, inc. 6^a—El Dr. Llerena al ocuparse del inc. 8 del mismo artículo, trae consideraciones que son aplicables al inc. 6^a, por ser una misma la razón de las dos disposiciones, y sostiene que si la transacción versa sobre derechos litigiosos que se relacionan con un inmueble, presentándose la transacción firmada por las partes, el acto queda perfectamente válido sin necesidad de escritura pública—Concordancias al Cód. Civ., tom. 2, pág. 212.

2—Se trataba de un contrato de locación celebrado, según el actor, por correspondencia epistolar. Se resolvió que hubo contrato por cuanto



de elevar á escritura pública el contrato, es indispensable justificar que hubo acuerdo de voluntades.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3ª.

3. **Escritura pública** El vendedor debe otorgar la del contrato de compraventa constante de instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

4. **Escritura pública**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública. —Jur. Civ., tom. 6, página 188, Ser. 3ª.

5. **Escritura pública** —La existencia del mandato para

las partes no se pusieron de acuerdo en el precio, requisito indispensable para que este contrato exista—art. 1493, Cód. Civ.—No puede obligarse á que se eleve á escritura pública un contrato que no existe.

3—Arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.

4—Art. 1185 del Cód. Civ. Se pidió la escrituración del inmueble cuya venta se había concertado en un boleto privado de compraventa. El juez falló condenando al demandado á que «otorgue escritura de venta del terreno á que se refiere el boleto, bajo apercibimiento de resolver la obligación en pérdidas é intereses.» La Cámara confirmó esta sentencia en contra de la jurisprudencia constantemente sentada por ella misma en la que sostiene que un boleto privado de compraventa no puede fundar una demanda de escrituración del inmueble, sino que debe pedirse primeramente la escrituración del boleto para después exigir la escrituración del inmueble. El principio establecido en el sumario es el correcto. Véase en contra, el núm. 7 y su nota, donde combatimos la doctrina contraria al sumario, que es la que hoy sostiene la Cámara.

5—Esta resolución está de acuerdo con otra dictada por esta misma Cámara. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Mandato*, núm. 1. El art. 1184 establece en su inc. 7ª que los poderes generales ó especiales deben ser hechos en escritura pública, cuando tengan que presentarse en juicio, así como los poderes que se otorgan para administrar bienes y cualesquiera otros que tengan por objeto un acto redactado ó que deba redactarse en escritura pública. Freitas, explicando el art. 2892 de su Proyecto, dice: «Este Código exige procuración por instrumento público siempre que el objeto del mandato fuere cualquier de los actos para



la compra de inmuebles, solo puede justificarse presentando la escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 199, Ser. 3ª.

6. **Escritura pública**—El contrato sobre arrendamientos de inmuebles, puede ser hecho por instrumento privado, no siendo requisito esencial para su existencia y validez su otorgamiento por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3ª.

7. **Escritura pública**—Cualesquiera que sean las condiciones en las cuales la ley decreta exclusivamente ó bajo pena de nulidad la forma de la escritura pública». El Dr. Llerena, en sus Comentarios á nuestro Código, estudiando el art. 1184 sienta el principio de que la prueba de la existencia del mandato está sujeta á las reglas establecidas para la prueba de los contratos en general. El art. 1184 concuerda con el 1191 y puede decirse que éste es el complemento de aquel.

6.—El art. 1184 del Cód. Civ., que exige escritura pública bajo pena de nulidad, solo se refiere—inc. 7ª—á los contratos de transmisión de inmuebles ó que versan sobre gravámenes que se constituyen sobre los mismos. Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 1.

7.—Este sumario está en contra del núm. 4. Allí se ordenó *la escritura del inmueble* materia del contrato contenido en documento privado, mientras que aquí se niega el derecho de la parte para exigir la misma cosa, y se obliga en primer término á *reducir á escritura pública el boleto*, para después pedir la escrituración del inmueble. Es una doctrina novedosa la sentada por la Cámara en este sumario. El caso es el siguiente: Se demandó la escrituración de una casa adquirida en virtud de un boleto privado que decía testualmente: «Recibi del señor N. la suma de 5000 ₡ al contado, en pago del precio de un chalet de mi propiedad, que se lo he vendido en esa suma, reservándome el derecho de retrotraer la finca en el plazo de dos meses á contar desde el 15 de Octubre, debiendo escriturar la propiedad en el término de seis días perentorios, y si no lo hiciera espontáneamente queda autorizado el comprador para hacerla firmar judicialmente y sin forma ninguna de juicio, pues con su sola presentación bastará para consumir esta escrituración por el Registro del Escribano Roverano. Para no hacer lugar á la escrituración del inmueble, la Cámara dijo, que demandándose como se demanda la escrituración definitiva del inmueble, es indubitable que el acreedor atribuye al documento el alcance y efectos jurídicos de una



diciones que hubiesen estipulado las partes en el con-

venta con pacto de retroventa, con la sola reserva de que la espiración del plazo estipulado no la convertiría en venta definitiva sino mediante la formalidad consignada al final del boleto. Ahora bien, es de precepto estricto que los contratos que tuvieren por objeto la trasmisión de inmuebles en propiedad ó usufructo ó alguna obligación ó gravamen sobre los mismos, deberán ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, como también que en el caso en que la forma del instrumento público fuese exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba, siendo igualmente nulo el acto - arts. 976 y 1184 del Cód. Civ. - Es, pues, fuera de discusión, que el instrumento transcrito no sustituye la escritura pública exigida como condición sustancial para la existencia y eficacia del acto jurídico, en cuya situación no puede juzgarse concluida válidamente la retroventa con los efectos pretendidos por la demanda. Ese instrumento solo acredita la existencia de una convención cuyas consecuencias han sido previstas y determinadas por la ley. Los contratos que debiendo ser hechos por escritura pública, dice el art. 1185, fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen á reducirlo á escritura pública, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. De ninguna manera podría, pues, atribuirse á la obligación contenida en el documento de la referencia, otro carácter del que le atribuye el artículo recordado; el contrato de retroventa no ha quedado perfecto, no ha sido definitivamente concluido, no ha tenido en resumen existencia legal, porque le han faltado las formas externas, la solemnidad de la escritura pública. Ha quedado solo concluido como contrato en que las partes se obligan á hacer escritura pública, y de este punto de mira es perfectamente arreglado lo que se observaba por la parte demandada, de que lo único que podía pedir el demandante era la escrituración del contrato de venta con pacto de retroventa. No es justo por cierto pretender que un acto puramente privado tenga la eficacia y produzca los efectos exclusivamente reservados á los instrumentos públicos. Hasta aquí la argumentación de la Cámara. Podemos afirmar sin temor de equivocarnos, que en presencia de los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ., la parte que firma un boleto privado de compraventa, tiene el derecho evidente de exigir que ese contrato se cumpla haciéndose la escritura pública de transferencia del inmueble, materia del contrato; y que su derecho no está limitado á exigir la escrituración del boleto. La comprobación de este principio



trato privado, solo pueden hacerse efectivas después de

es tan sencilla como la de todas las verdades. El contrato de compraventa no se constituye, jurídicamente, por otros elementos que los expresados en la definición del art. 1323: obligación de una parte de transferir á otra la propiedad de una cosa, y de la otra parte la de recibirla y pagar por ella un precio cierto en dinero, ó según la fórmula concisa y antiquísima: cosa, precio, consentimiento. Pero una cosa es el contrato y otra la prueba del contrato. La primera idea es de orden esencialmente jurídico: la segunda corresponde al orden político, en el amplio sentido de esta palabra, de organización social. Es conveniente á una buena organización, evitar la incertidumbre y la disputa sobre la existencia de los actos de que nacen derechos y obligaciones, y todos los actos serían sometidos á la prueba auténtica si las demoras de esta formalidad no constituyeran un verdadero entorpecimiento en la actividad social. De aquí que sea muy limitado el número de casos en que la ley lo exige terminantemente, bajo pena de nulidad. Cuando se celebra la compraventa de un inmueble, sin que intervenga la escritura pública, el contrato queda concluido en su esencia jurídica: una de las partes se obliga á transferir á otra la propiedad de una cosa, y la otra á recibirla y á pagar el precio. Nada impide que se principie á cumplir ó que se cumplan estas obligaciones con la tradición real de la cosa y con el pago del precio. Pero interviene la exigencia de la ley: se requiere para la conclusión de este contrato la escritura pública que lo pruebe. ¿Nada valdrá entre tanto, aquel consentimiento sobre la cosa y sobre el precio, que puede haber llegado hasta la ejecución misma de las obligaciones del contrato? ¿El requisito formal será tan absoluto que impida entre los contratantes la formación de todo vínculo jurídico? ¡No! El sentimiento de la justicia interviene para reconocer que la prueba del acto, aunque sea requerida esencialmente para su validez, no es de la esencia jurídica del contrato, que la libertad civil de comprar y vender no está restringida á tal punto que sean palabras absolutamente vanas, todo lo que se haya dicho sobre el contrato antes de la escritura pública. Ninguno de los contratantes puede decir al otro: esto que hemos contratado nada vale, y yo no lo cumplo, cualquiera que sea el perjuicio que tú recibas. La ley reconoce que cuando las partes han concluido el contrato en su esencia jurídica, se han comprometido implícitamente á darle la forma requerida por la ley; que mientras no esté cumplida la forma no podría exigirse el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, pero podría requerirse el cumplimiento de la forma. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de tal obligación? Es indis-



reducido á escritura pública, si la convención se refiere á bienes inmuebles.— Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3ª.

8. **Escritura pública**—El plazo estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3ª.

9. **Escritura pública**—Reconocida la autenticidad del boleto promesa de venta, procede su conversión á escritura pública.— Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 3ª.

10. **Escritura pública**—Los blancos que pueden existir tíblemente una obligación de hacer; debe pues, hacerse la escritura pública de la compraventa. El sentimiento de lo justo queda satisfecho con esto: el que contrató privadamente la compraventa del inmueble no sufrirá perjuicio alguno si el contrato no se cumple. Esto es lo que consagran esplicitamente los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ. Cuando el primero dice: «los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos por instrumento particular» la ley no les desconoce el carácter de contratos, y de contratos ya hechos. Cuando agrega que «no quedan concluidos como tales mientras la escritura pública no se halle firmada» la ley no les niega toda existencia, sino que aplaza su perfección hasta que esté firmada la escritura. Cuando termina que «quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública,» hubiera sido siempre superfluo decir qué escritura pública era la que tenía que hacerse, porque según nuestra opinión jamás pudo ocurrírsele al más sutil de los legisladores creer que se dudara que con sus palabras se refería á otra escritura pública que á la que faltaba para que el contrato quedara perfecto. Véase: verb. *Condominio*, núm. 6, donde la Cámara sienta una teoría de acuerdo con la que sostenemos en este caso.

8—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

9—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 30.

10—La ley 111, tit. 18, Part. 3ª, enumera las causas por las cuales los jueces pueden desear ó tener por nulas las escrituras que se presenten ante ellos: la una es, dice, «si la carta fuere atal que non se pueda leer, nin tomar verdadero entendimiento della.» La otra es, «si fuese raida ó ouiesse letra cambiada ó desmentida en el nome de aquel que manda fazer la carta, o que la da, o del que la recibe o en el tiempo

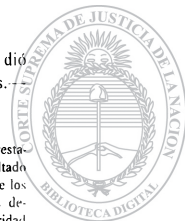


en una escritura pública en partes no esenciales sobre el acto. no afectan su validez, pues la ley deja al criterio de los jueces, si ellas pueden dar lugar á la declaración

del plazo, o en la quantia de los maraved s, o en la cosa sobre que es fecha la carta, o en el día, o en el mes, o en la era, o en los nomes de los testigos o del Escriuano, o en el nome del lugar do fué fecha....» De donde resulta que aun cuando las omisiones que contuviere una escritura constituyesen en realidad un defecto ó acusaran una informalidad no afectando sinembargo la sustancia del acto, en manera alguna la viciarían de nulidad. Los comentadores de la ley citada previenen que no son nulas las escrituras cuando los espresados vicios recayeran en alguna parte no esencial de ellas, no alterasen el sentido en lo sustancial del acto, en la data del mismo, en los nombres de los otorgantes, ni en los de los testigos ó del Escribano; y este comentario tiene como fundamento primordial pasajes de la misma ley, que hacen manifiesto su espíritu aunque varíe en el texto de sus divulgadores. La ley 7 de la misma Part. 3ª, y 13, tit. 25, lib. 4ª, R. C., que corresponde á la ley 1ª, tit. 23, lib. 10, Novísima Ree, no se oponen al principio sentado en el sumario. Manda la primera que «los escribanos de la corte, de las ciudades y villas deben escribir cumplidamente sus escritos y no por abreviaturas por guardar que non venga yer nin contienda en sus escritos.» La inteligencia de esta disposición la esplican los mismos ejemplos del testo... «que non ponga una letra por nombre de ome o de mujer—assi como A. por Alfonso, nin en los nombres de los lugares nin en cuenta de auer o de otra cosa assi con C. por ciento.» La escritura cuya validez estaba en tela de juicio tenia blancos, pero no se referían ni á los nombres de los contratan es, ni al lugar del otorgamiento, ni al precio de la cosa, ni á ninguna otra formalidad sustancial, sino á una enunciación que no comprometia la eficacia ni la seriedad del acto; estando claramente determinada la cosa en cuanto á la ubicación, rumbo, linderos, etc. En cuanto á la ley de Rec. citada, ella enumera el conjunto de las solemnidades que deben revestir los instrumentos públicos, y aunque más minuciosa y exigente que la de Partida, á la cual complementa, tampoco va más allá de las exigencias de aquella en cuanto á requisitos necesarios para la validez jurídica del acto. Del texto de las leyes citadas, de su comentario y de su razón filosófica, resulta que no todas las omisiones ni todos los defectos irritan los instrumentos espedidos por oficiales públicos á cuyo resultado no podría llegarse sino cuando tales defectos ú omisiones comprometieran ó alte-

de nulidad del título, pero no á la del acto que le dio origen y que puede ser probado por otros medios.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Sér. 4ª.

raran el objeto del acto jurídico, la calidad ó naturaleza de sus prestaciones, la voluntad de las partes ó cuando fuesen finalmente el resultado de la comisión de un dolo ó de un fraude derivado de cualquiera de los otorgantes, del escribano, ó de un tercero. Y son únicamente los defectos sustanciales los que de pleno derecho pueden afectar la integridad del instrumento, quitarle su fuerza, viciarlo, destruirlo, anularlo en su esencia y en sus efectos jurídicos. Hay un interés positivo de conservación social en mantener á las convenciones humanas su durabilidad y su firmeza. El Código Argentino ha incorporado sin vacilaciones estos principios á la letra de sus preceptos, siendo su fórmula más saliente la del art. 989, con la particularidad que la ley actual es más rigurosa que la antigua ley en cuanto á las ritualidades que deben rodear los actos por instrumento público. Son anulables, dice el artículo, los instrumentos públicos cuando..... tuviesen enmiendas, palabras entrelíneas, borraduras ó alteraciones en partes esenciales, como la fecha, nombre, cantidades, cosas, etc., no salvadas al fin. Nuestro legislador ha dejado, como se ve, al arbitrio ó prudencia de los jueces la sana apreciación de estos vicios, arbitrio que tiene su límite espresamente determinado—en parte esencial del instrumento—y aunque la disposición parece inspirada por el art. 702 del proyecto de Freitas para quien los defectos deben recaer además en lugar sospechoso, es fuera de duda—véase la nota ilustrativa—que no ha sido extraño á su espíritu el siguiente pasaje de la ley 111 á que hemos hecho referencia..... pero si la roedura ó la letra fue hecha ó canmiada ó dexada por yerro del escriuano, ó fuere en otro lugar de la carta que non se canmie y por la razón que non deua dubdar en ella el judgador ó otro ome sano fuese fecho á mala parte..... degimos que non deue ser desecheda por ende. Entre los autores franceses que sostienen la doctrina que es universal; —Aubry y Ran dicen... que la ley quiere que las escrituras sean escritas en un solo y mismo contexto, que sean legibles, sin abreviaturas, blancos, lagunas, ni intervalos y sin enmiendas, interlíneas ni adición en el cuerpo del acto; pero la inobservancia de estas prescripciones solo provoca una multa contra el notario, careciendo en general de influencia sobre su validez. Bonnier que es sin disputa el que más ha profundizado la materia, enseña que el mero hecho de dejar blancos en una escritura autorizada por notario, no lleva consigo nulidad—tom. 2, pág. 47.





11. **Escritura pública**—La cesión de un crédito hipotecario constituido en escritura pública, debe hacerse en la misma forma—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 4ª.

12. **Escritura pública**—Para la validez de la transmisión

11—Véase: *Crédito hipotecario*, núm. 1.

12—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase, verb. *Bienes raíces*, núm. 2. Nuestras antiguas leyes prescribían en determinados pasajes, que los contratos inmuebles debían ser reducidos á escritura pública, pero con ninguna de sus disposiciones podría hacerse argumento contra la subsistencia del acto, á virtud de que aquella solemnidad no era exigida, como lo es en el derecho contemporáneo, como condición esencial á la validez de la transmisión. La Ley de Partida no apareja nulidades, ni en su inteligencia, ni en su letra, ni en la glosa de sus intérpretes. Caravantes opina que no se considera que ella tenga por objeto dar validez al contrato ni á su perfección y consumación, sino que se entiende como refiriéndose á los efectos del mismo, á saber, que debiendo tomarse razón de esta escritura en la Contaduría de Hipotecas, en el plazo señalado por las leyes administrativas, se evitan los fraudes de los que venden lo que no pueden, y se consigue que se asegure el pago de los tributos que pesan sobre la traslación de la propiedad inmueble—nota á Bonnier, tom. 1º, pág. 168.—El mismo Código de Partidas autoriza las ventas de bienes raíces sin la formalidad de la escritura pública, cuando establece que el contrato puede hacerse de dos maneras: con carta y sin ella—Ley 6ª, tit. 5ª, Part. 5ª.—De la disposición general de esta ley se deduce, según sus comentadores —edición de 1843—que los bienes raíces pueden venderse de palabra y por correspondencia como las cosas muebles, disposición que se halla reproducida en la Ley 23 del mismo título y aunque obsta al parecer la ley 56, tit. 18, Part. 3ª donde se lee, «ventas fazen los omes entre sí: e porque aquello que pusieren sea firme; fazen ende carta»; estas palabras pueden naturalmente tomarse como dirigidas á indicar, no una circunstancia esencial, sino un medio de impedir la inejecución del contrato por falta de prueba. Obsérvase en el mismo pasaje, que como en las leyes sobre alcabalas se parte siempre del supuesto que el acto se ha verificado por escritura pública, podría inferirse con algún fundamento que se miró como ley la general costumbre de aquella formalidad ó que se quiso que se ejecutase así en lo sucesivo; obra no obstante en contrario la autoridad de Antonio Gomez, el cual á pesar de escribir posteriormente á las citadas leyes, dice que la escritura no es

de derechos reales, antes de la vigencia del Código Civil no era requisito esencial la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 56, Ser. 4ª.

13. **Escritura pública**—Es requisito indispensable para la validez de toda cesión ó venta de derechos hereditarios

de la esencia del contrato de compraventa. En cuanto á las leyes de Recopilación no imponen la solemnidad de la escritura como ineludible á la validez del acto. Sus disposiciones preceptivas tienen como fin primordial, según su propio texto y la jurisprudencia de los tribunales españoles, asegurar el pago de los impuestos fiscales é impedir el fraude ó daño que resultaría para el estado con la ocultación de la venta de bienes raíces. Refiriéndose á estas dos leyes, las de Partida y las Recopiladas, el conocido espositor español Gutierrez Fernandez dice—tit. 4º, pág. 275—sin desconocer la conveniencia de la escritura de la adquisición de cosas inmuebles, se pregunta de qué manera debe intervenir este requisito, si como prueba ó como solemnidad, espresando que la cuestión es sencilla y que el legislador no ha podido exigir la escritura como solemnidad sustancial de este género de contratos, arrancando al consentimiento no contradicho de las partes el poder que le corresponde. Esta doctrina ha sido antes de ahora declarada por la Corte Suprema de la Provincia, siendo opinión del Tribunal, que destinadas especialmente aquellas disposiciones á regir la forma de las escrituras y las solemnidades de ciertos actos no podían suponerse, tuvieran por objeto derogar las que en el mismo Código rigen el contrato de compraventa, ni menos entre ellas, la Ley 6ª, tit. 5º, Part. 5ª, que estatúa la manera de «faser la vendita e la compra, con carta ó sin ella». Y debe tenerse en cuenta, que estas disposiciones legislan espresamente sobre la compraventa y que el impuesto de alcabala cuya recaudación se buscaba garantizar con la escritura, solo gravaba los contratos de esta naturaleza y que si es exacto del punto de vista de la doctrina, que las transmisiones de derechos reales deben estar sometidas á iguales solemnidades, es indudable que en el supuesto mismo en que éstas hubieran sido requeridas en la forma de escritura pública, no podían aplicarse en todo rigo; al caso presente, pues no se controvierte una compraventa ni se ventila en juicio un acto á virtud del cual se haya constituido sobre una cosa determinada un derecho absoluto y permanente del dominio.

13—Arts. 1184, 1454 y 1455 del Cód. Civ.





que tenga un valor mayor de mil pesos nacionales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 411, Ser 4^a.

14. **Escriutura pública**—Reconocido el condominio, el condómino está obligado á otorgar escritura pública de ese reconocimiento, pero no de la parte que debería corresponderá cada uno de los condóminos como si se hubiese verificado la división.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 31, Ser. 4^a..

15. **Escriutura pública**—La obligación de hacer escritura

14—Véase, verb. *Condominio*, núm. 8.

15—Aquí se renovó la cuestión que el Dr. Gonzalez del Solar promueve constantemente contra la opinión de los demás miembros de la Cámara, opinando el primero que el boleto privado de compraventa da derecho á pedir la escrituración de la cosa materia del contrato, sin necesidad de elevar el documento á escritura pública para después exigir la escrituración del inmueble. La Cámara es de opinión que un boleto privado solo da derecho á la parte para pedir que se escribire ese boleto elevándolo á escritura pública, y una vez hecho esto, es recién llegado el caso de pedir la escrituración del inmueble. Pero en el caso que nos ocupa, ha sucedido la más grande de las confusiones. «El actor se presenta pidiendo que en virtud de un boleto privado que exhibe se condene al demandado por *escrituración del terreno* vendido según el documento que se adjunta». El Juez de 1^a Inst. resuelve ordenando que se cumpla el contrato de compraventa de que instruye el documento, debiendo en consecuencia *escribir la tierra* que se determina en el referido documento. El Camarista Dr. Bustos dice que «los antecedentes que deja espuestos demuestran suficientemente la justicia de la demanda de *escrituración del documento*» y que en ese sentido vota por la confirmación de la sentencia. El Dr. Gonzalez del Solar dice que procede la confirmación de la sentencia porque lo que *debe escribirse es la tierra y no el boleto*. Los Dres. Molina Arrotea, Gimenez y Sauze se adhieren á estos dos votos. Y termina la Cámara confirmando la sentencia de 1^a Inst., debiendo *reducirse á escritura pública el documento* bajo apercibimiento del art. 1187 del Cód. Civ. No es posible darse un cúmulo mayor de consideraciones contradictorias. El actor pide la escrituración del *terreno*, el Juez de 1^a Inst. así lo ordena. Un Camarista opina que lo que debe escribirse no es la tierra sino el boleto; otro Camarista dice que no es el boleto lo que debe escribirse sino el

pública del boleto de compraventa, no importa la obligación de escriturar el inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 131, Ser. 4^a.

16. *Escritura pública*—El testimonio judicial de una es-

terreno: los tres Camaristas restantes se adhieren á los dos votos contradictorios y de todo esto resulta un producto híbrido, visto por primera vez en los anales judiciales; que se confirma una sentencia que ordena una cosa distinta de la que en definitiva resuelve la Cámara. ¿Y qué diremos de los Sres. Camaristas que se adhieren á los dos votos contradictorios? Diremos simplemente que no solo no leyeron el expediente, sino que ni siquiera leyeron los votos á los cuales se habían adherido. Si el Juez de 1^a Inst. condena al demandado á escriturar el terreno, de acuerdo con lo pedido en la demanda, y si la Cámara resuelve que lo que debe escriturarse es el boleto y no el terreno, lo lógico era revocar la sentencia, pero la Cámara entiende la lógica al revés. En cuanto al principio sentado en el sumario, está de acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase *Boleto de compraventa*, núm. 1; y *Escritura pública*, núm. 7.

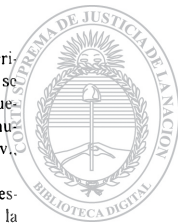
16—El auto de 1^a Instancia decía: «Cítese por edictos por quince veces en los diarios de esta ciudad.» La Cámara dijo: «Por los fundamentos del auto se confirma». Si en algún caso el *cliché* de la Cámara, venía en su aplicación al presente, como pedrada en ojo de boticario, es en éste: ¿qué fundamentos contenía el auto de 1^a Inst.? Ninguno; pero es tan socorrido este estribillo y les ahorra tanto tiempo y trabajo, que no tienen inconveniente en emplearlo en cualquier caso. El artículo 1008 del Cód. Civ. establece el principio sentado en el sumario. El 1007 dice que siempre que se pidieren nuevas copias, el escribano debe darlas; pero si en la escritura, alguna de las partes se hubiese obligado á dar ó á hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización expresa del Juez. En esto último, el art. 1008 establece las solemnidades que deben guardarse antes de expedirse las copias. El escribano puede expedir segundas ó terceras copias en los casos de la Ley 10, tit. 19, Part. 3^a, la que debe observarse en la expedición de segunda ó terceras copias, según disposición de Ley 5^a, tit. 23, lib. 10 de la Nov. Rec., que dice: «Ligeramente podría acaecer que pues que el ome tuuiesse en su poder la carta fecha por mano del Escriuano público, que la perdería o le sería furtada; e tornaría al Escriuano que la auia fecho, que gela fiziesse otra vez. E por que algunos y ha, que la piden maliciosamente; Nos, por guardar los Escriuanos de yerro, que-





critura pública, debe expedirse con citación del otorgante.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 4.^a.

remoslos mostrar en esta ley cierta manera, como sepan guardar. E dezimos, que si la carta que dizen que es perdida, es de compra, o de vendida, o de cambio, o de testamento, o de personeria, o de otras cosas semejantes destas; que fuesen tales, que maguer pareciesen dobladas, non puede venir daño por ellas a la otra parte; que el Escriuano por si puede, e deve fazer esta carta; sacandola de su registro, e faciendola, bien assi como fue fecha la primera que dizen que es perdida, e darla a aquel a quien pertenesce. Mas si la carta que pidiessen al Escriuano que la refiziesse otra vez, por que la primera era perdida, fuesse de debda que alguno deuiesse a otro, quier fuesse de dineros, o de otra cosa, por la cual pudiesse demandar tantas veces la debda quantas pareciesse la carta; tal como esta non la deve el Escribano refazer nin dar por si: por que podria ser, que la demandaria engañosamente, despues que fuesse pagada debda, o la uiesse quitada; e vendria della gran daño a la otra parte. Mas dezimos, que aquel que la demanda deve yr adelante del Juez, e fazer emplazar su debdor contra quien fuere fecha la carta.» Esta Ley de Part. tiene su fundamento en la Ordenanza de Alcalá. Resulta de ella que el escribano puede dar el segundo testimonio sin necesidad de mandato judicial y sin consentimiento de la otorgante cuando la escritura aunque apareciese duplicada, no perjudicase á esta parte, como en los casos de compra-venta, mandato, etc. como espresamente lo dice la ley por vía de ejemplo. La Ley 5.^a, tit. 23, lib. 10, reproduce estos mismos principios cuando dice: «Mandamos que cada y quando que algún Escribano hiciere alguna escritura, que pertenezca y deba ser dada a ambas partes, que la haya de dar y dé á la parte que se la pidiere, aunque la otra parte no la pida: empero que en las escrituras que alguna parte se obliga á la otra de hacer ó dar alguna cosa, mandamos que despues que el Escribano diere una vez la tal escritura signada a la parte a quien pertenciere, que no se dé otra vez, aunque alegue causa ó razón para ello, salvo por mandamiento de la Justicia, llamada la parte, segun se contiene en la ley decena y oncená del tit. 19, Part. 3.^a» Concuerdan estas leyes con la ley 17, tit. 25, lib. 4.^o, R.; y con la ley 2.^a, título 8.^o, lib. 1.^o, F. R. García Goyena, estudiando el art. 1216 de su Proyecto, en el tom. 3.^o, pág. 223, dice: «Hay escrituras de que el escribano mismo que las autorizó, no puede sin mandamiento del Juez dar más que una copia á la parte interesada: tales son todas aquellas en cuya virtud se puede pedir la deuda tantas veces quantas parezca la pri-



17. **Escritura pública**—Las attestaciones de una escritura pública, forman prueba plena de los actos que se dicen pasados ante el oficial público, y no procede la prueba de las partes que en ella intervinieron sobre simulación del pago que se haya hecho constar.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4ª.

18. **Escritura pública**—Solo procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa, pero no la del contrato que de él resulte.—Jur. Civ., tom. 6, página 91, Ser. 4ª.

19. **Escritura pública**—No procede la acción sobre cum-

mera copia, como acontece en las obligaciones de hacer, dar ó pagar, etc.» En el caso del sumario, la copia que se pedía no era de aquellas que requieren la intervención judicial, ni la de la otra parte, pero esto de examinar las leyes que rijen la materia compulsando libros, no entra en la norma de conducta que se ha trazado la Cámara. Cuando alguna cuestión requiere estudio y ésta va en apelación en virtud de una providencia interlocutoria, confirma el auto recurrido «por sus fundamentos.» Es triste ver esto, cuando en un país como el nuestro lo que cada magistrado debe tratar de hacer, es estudiar bien las cuestiones para que sus resoluciones sean respetadas, de manera á impedir lo que hoy sucede. Cuando se dice que la Cámara ha resuelto una cuestión en cierto sentido, los litigantes en seguida citan casos resueltos en sentido contrario. Esta no es la forma de proceder para crearse un cuerpo de jurisprudencia serio y digno de respeto. No se diga que este defecto sea debido á insuficiencia de nuestro Poder Judicial, es debido al poco respeto que le merece la ley: no tienen inconveniente alguno en ir contra ella en los casos necesarios. Hay sentencias que son verdaderos prevaricatos, y que en otros países no se habrían tolerado un segundo. Pero aquí todo pasa, hasta lo monstruosamente inícuo, y hay magistrados que harían perfectamente el papel de Bacón ante una acusación formal de la Cámara de Diputados: por cierto que no nos referimos á aquellos que han preocupado tanto la atención pública en estos últimos tiempos.

17—Véase, verb. *Contradocumento*, núm. 2.

18—Véase, verb. *Escritura pública*, núm. 7.

19—Véase, verb. *Contrato de compraventa*, núm. 18.



plimiento del contrato de compraventa de un inmueble en tanto no se haya estendido la escritura pública que la ley declara indispensable para reconocer su existencia y validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 4ª.

20. **Escritura pública.**—Procede la reducción á escritura pública del boleto de compraventa cuya autenticidad se ha reconocido por las partes pero no el de la convención en él estipulada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 208, Ser. 4ª.

21. **Escritura pública.**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su reducción á escritura pública; las escepciones que obsten al cumplimiento del contrato, solo pueden ser juzgadas cuando se exija su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 320, Serie 4ª.

22. **Escritura pública.**—Es improcedente la nulidad de

20—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 16.

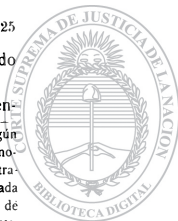
21—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 17.

22—En virtud de una sentencia ejecutoriada que condenaba á una parte á elevar á escritura pública un boleto privado de promesa de venta, se otorgó la escritura pública firmada por la parte vencida, sin intervención del vencedor. Se dijo de nulidad de esa escritura, y así se declaró por el Juez de 1ª Inst., fundándose en que es condición esencial para la validez de las escrituras públicas, que en su otorgamiento intervengan las partes interesadas y que la suscriban, como terminantemente los disponen los arts. 988, 1001 y 1004 del Cód. Civ., sin hacer distinción alguna entre las escrituras públicas de contratos unilaterales ó bilaterales; que aun tratándose de contratos unilaterales, en que una sola de las partes contratantes queda obligada, siempre es necesario que concurren las partes interesadas, que son los contratantes, en el otorgamiento de la escritura, puesto que ésta tiene por objeto hacer constar de una manera fehaciente y con las formalidades que la ley prescribe, la celebración del respectivo contrato. Que las convenciones unilaterales como todos los contratos, solo existen cuando los contratantes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada á reglar sus derechos.—art. 1187.—Una promesa no aceptada carece por



la escritura pública fundada en la falta de firma de una

completo de importancia jurídica, y el que la hace puede retractarse ó modificarla—arts. 1144 y 1149 á 1154.—Que por consiguiente, la escritura pública mandada otorgar por las mencionada sentencia, debe ser aceptada por aquel en cuyo favor se otorga, á fin de que la concurrencia de ambas partes produzca el acuerdo de voluntades que forma el contrato. La Cámara dijo: la sentencia definitiva pronunciada en el juicio sobre escrituración, establecía que la promesa hecha por el promitente al prometido, de referencia en el juicio, no era un contrato bilateral, desde que el segundo no contraía obligación de comprar, siendo únicamente aquél el que se obligaba á dar la preferencia á éste; de manera que el instrumento privado era perfectamente válido aunque estuviera redactado en un solo ejemplar y aunque no hubiere sido suscrito por éste. La sentencia del Superior sobre este particular, confirmó estas declaraciones estableciendo de consuno, que ese documento no contenía una convención bilateral. El carácter del contrato en cuestión viene á quedar de esta manera claramente determinado por ejecutoria judicial. El Inferior juzgó, empero, con el argumento del art. 988 y demás disposiciones que cita del Cód. Civ., que en toda escritura es condición esencial á su validez, que intervengan en su otorgamiento las partes interesadas y sea suscrito por todas ellas. El artículo ordena efectivamente que el instrumento sea firmado por todos los interesados que aparezcan como parte en él, pero es indudable que el precepto reza con las convenciones sinalagmáticas, esto es, cuando las partes se obligan reciprocamente la una hacia la otra. Si de acuerdo, entre tanto, con la inteligencia que se ha dado al acto ya mencionado, solo el promitente era el obligado sin que hubiere obligación recíproca del demandante, se hace evidente que su intervención no ha debido ser reclamada por el oficial público como se pretende. Comentando el artículo citado, dice Segovia, que las firmas exigidas como esenciales, son las de las partes que se obligan y que así en los contratos unilaterales, como el depósito, bastará la firma del deudor. Esta es también la doctrina de los espositores franceses á la que no es ciertamente extraño nuestro Código. El Dr. Velez, entre otras opiniones ilustrativas de distintos pasajes de su libro, recuerda sobre el art. 988, la de Marcadé, que se ocupa estensamente de la materia. Según este autor, en las convenciones sinalagmáticas en las cuales cada una de las partes ha contraído obligaciones, la firma de todas ellas es indispensable; pero cuando se trata de un contrato unilateral, es claro agrega, será suficiente que tenga la firma del deudor. Según Bonnier, el acto que consigna un contrato unilateral no

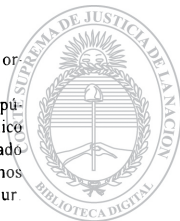


de las partes, si el contrato es unilateral y está firmado por el obligado—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Ser. 4^a.

23. Escritura pública—Para el cumplimiento de la sen-

requiere que sea firmado por acreedor y deudor. Se trata aquí, según dice Boiceau, de la *subscrito facta per debitorem*. Si la ley sobre el notariado habla de todas las partes, es porque tiene á la vista los contratos sinaligmáticos, para cuya prueba conviene que haya firmado cada una de las partes, puesto que los empeños de ambos son causa uno de otro. De acuerdo con los principios enunciados y con la interpretación que se dió en el juicio al contrato, es muy exacto que la persona á cuyo favor se ha hecho la promesa, no puede pretender que su firma aparezca en la escritura ni decir de nulidad por haberse prescindido de su comparecencia, á virtud de no ser parte por no haber contraído obligación. Nuestro antiguo derecho no prescribía tampoco en los actos de carácter unilateral la formalidad que la sentencia tiene por ineludible, y podría como antecedente de que aquella exigencia no estaba en el espíritu de sus disposiciones, recordarse el auto acordado, del estinguido Tribunal de justicia, de Enero de 1866, mandando que en toda escritura pública de contrato bilateral se requiere la firma de ambos contratantes y cuyo auto tuvo por objeto primordial cortar la «práctica irregular introducida en las escrituras de compraventa, por la cual no se exigía sino la firma del vendedor, y la del comprador solamente en casos determinados.» Es oportuno observar que no se discute al presente la índole jurídica de la promesa de compraventa, pues este punto no se halla en tela de juicio, sino únicamente si el documento firmado constante en los autos agregados, con la inteligencia que se le ha atribuido por ejecutoria, requería ó no para su validez, al ser elevado á escritura pública, la concurrencia y la firma del demandante.

23—El vendedor de un inmueble fué condenado á escriturar á favor del comprador, previo perfeccionamiento de los títulos dentro del término de noventa días que le acordó la sentencia de la Cámara. Esta primera demanda, fué instaurada por el vendedor á fin de que el comprador le entregara el resto del precio que le adeudaba y que se negaba á pagar alegando defectos de los títulos ó renunciara al derecho adquirido por el boleto, ó para que en caso negativo se declarara la rescisión del contrato. Para cumplir la sentencia, el condenado pidió una mensura y otras diligencias, y luego que éstas fueron practicadas y aprobadas, pidió se diesen por cumplidas las formalidades que obstaban á la escrituración y se le intimara al comprador designara escribano para la autorización de la escritura. Se proveyó de conformidad y el



tencia que la manda otorgar, no procede nuevo juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 359, Ser. 4^a.

24. **Escritura pública** La confesión por escritura pública de que el acto que consta por instrumento público era simulado, vuelve las cosas al mismo é igual estado que tenían antes; pero sus declaraciones sobre derechos anteriores al acto simulado, carecen de valor legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

25. **Escritura pública**—La sentencia que manda reducir el comprador propuso escribano. Posteriormente denuncia éste que el escribano designado objetaba los títulos diciendo que la propiedad reconoce una hipoteca que no sabía si se había levantado ó no. El vendedor sostuvo que la escrituración debía llevarse adelante no siendo la circunstancia anotada un obstáculo, porque constaba que ella fué levantada, y por otras razones más. A esto contestó el vendedor que no podía ser obligado á escriturar, pues el valor del inmueble había variado enormemente, no habiéndose cumplido la negociación por culpa del comprador. En consecuencia, contrademanda por rescisión del contrato con devolución de la suma pagada á cuenta. Esta cuestión no pudo nunca ser materia de expediente distinto, porque lo que en él se pide es el cumplimiento de la sentencia que obliga al comprador á escriturar después de perfeccionar él sus títulos sobre defectos determinados. Esta conducta del vendedor no tiene explicación cuando se trata de dejar sin efecto el contrato que una sentencia anterior ha ordenado se cumpla, en virtud de una demanda interpuesta por esta misma parte. Aquí hay cosa juzgada, y la única vía procedente, una vez descartados los defectos, era y es la del apremio judicial para hacer respetar la sentencia consentida y ejecutoriada. Los defectos de los títulos fueron la materia de la litiscontestación en el juicio fenecido, y es evidente que un pleito sobre escrituración no acabaría jamás, si el comprador ó el vendedor se considera cada uno con derecho de objetar uno á uno y en juicio distinto los defectos de los títulos. Especialmente en el caso del sumario, el comprador no pudo observar por segunda vez los títulos, pues que el auto en que se daban por subsanadas las deficiencias había quedado consentido por él con el hecho de haber propuesto escribano en virtud del mandato del Juez de la causa.

24—Véase: verb. *Acto simulado*, núm. 1.

25—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 28.



cir á escritura pública el boleto de compraventa, solo importa ordenar su protocolización en un registro público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 4^a.

26. **Escritura pública**—Para que proceda el cumplimiento del contrato de compraventa, el boleto simple debe ser convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

27. **Escritura pública**—La pena estipulada para el caso de mora en el cumplimiento del contrato, solo puede ser exigida por el acreedor después de reducido á escritura pública el boleto simple de compraventa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

28. **Escritura pública**—Justificada la existencia del contrato de compraventa por documento privado, procede su conversión á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, página 337, Ser. 4^a.

29. **Escritura pública**—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento; la ley fulmina esa pena si los firmantes como testigos son dependientes autorizados para otorgarlas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 189, Ser. 4^a.

30. **Escritura pública**—Declarada la autenticidad del boleto privado de compraventa, procede su conversión á escritura pública dentro del término que el Juez señale.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 222, Ser. 4^a.

31. **Escritura pública**—No es indispensable para justificar la propiedad de bienes inmuebles adquiridos durante

26— Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 24.

28 —Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 25.

29—Véase: *Dependientes*, núm. 1.

30—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 29.

31—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.

la vigencia de las antiguas leyes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 262, Ser. 4.^a

32. **Escritura pública**—El Ministerio Fiscal no es parte en los juicios civiles sobre falsedad, simulación ó fraude

32.—El Juez de 1.^a Inst. Dr. Mendez Paz, ordenó que se diera intervención al Agente Fiscal que lo era el Dr. Rod. Bustamante, quien se opuso, y la Cámara resolvió la cuestión por los fundamentos aducidos por éste. El Juez de 1.^a Inst. decía, que: «estando prescripto en el artículo 117 de la Ley Org. de 12 de Noviembre de 1886 citada en el auto de fs. 283 vta., según lo reconoce el Agente Fiscal en su anterior dictamen, que el Ministerio Público es parte y le corresponde *intervenir en todos los negocios concernientes al orden público*—inc. 6.^o—la intervención que se le ha dado en estos autos es procedente. Que si es verdad que por el art. 119 que se invoca, el Agente Fiscal de lo Civil debe intervenir en los asuntos allí determinados ó enumerados, debe tenerse presente que esta disposición establece los casos especiales en que la intervención corresponde *sin perjuicio* de lo que anteriormente está establecido para *los casos en general*, según la disposición del art. 117 recordado y formando el Agente Fiscal *parte integrante* del Ministerio, es lógico que le comprende lo dispuesto en dicho art. 117». El Fiscal dijo: «Que se trata en este expediente de una demanda civil sobre nulidad de una escritura de cesión de derechos autorizada por un escribano del partido 9 de Julio de la provincia de Buenos Aires. El Juez pretende que debe intervenir el Agente Fiscal, fundándose en el inc. 6.^o, art. 117 de la Ley Org. de los Tribunales de la Capital, según el cual corresponde al Ministerio Público intervenir en todos los negocios concernientes al orden público. ¿Qué es un negocio concerniente al orden público? El que afecta á la sociedad en su organización política y privada, el que tiene en mira la seguridad individual y colectiva, el que se relaciona con la capacidad é incapacidad de las personas y con el régimen de las familias. Orden público, según Laurent, quiere decir arreglos de la persona en la sociedad. Las cuestiones relativas á los bienes, raras veces interesan al orden público aunque aparezca comprometido, pero mientras esto no se declare y establezca, la acción del Ministerio Público es improcedente. No es, en consecuencia, sostenible que por que se tache de nulidad ó falsedad una escritura pública referente á bienes privados, el orden público se encuentre comprometido. Si declarada la falsedad aparece un delito, recién entonces será llegado el caso de que ejercite sus funciones el Ministerio Público y no sería





de una escritura pública.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 307, Ser. 4^a.

33. **Escritura pública**—La afirmación del escribano autorizante de una escritura pública, sobre la existencia é identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder á un homónimo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Escritura pública—Véase: *Boleto de compraventa*, número 1 y siguientes—*Contrato de compraventa*, núm. 1 y siguientes—*Contrato*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núms. 5, 6 y 7—*Contrato verbal*, núm. 7—*Cesión de derechos*, núm. 4—*Condominio*, núm. 6—*Contradocumento*, núm. 2—*Contrato por escritura pública*, núm.—*Daños y perjuicios*, núms. 26 y 98—*Desistimiento*, núm. 6—*Desalojo*, núm. 2—*Escribano*, número 1—*Escepción de pago*, núm. 2—*Falsedad de pago*, núm. 3—*Hipoteca*, núm. 1—*Herederos mayores*, núm. 1—*Incapacidad*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núm. 4—*Inscripción*, núm. 1—*Jurisdicción por cantidad*, número 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2—*Nulidad de un testamento*, núms. 2 y 3—*Obligación de hacer*, núms. 6 y 12—*Posesión*, núm. 3 y 4—*Posesión judicial*, núm. 2 y 5—*Prueba testimonial*, núm. 4—*Pena*, núm. 3—*Reivindicación*, núm. 17—*Remate judicial*, número 12—*Simulación*, núms. 4 y 14—*Terceria*, núm. 2—*Título habilitante*, núm. 1.

ciertamente el Ministerio Público de la Capital el llamado á poner en juego la acción pública en el litigio de que se trata, sino el Ministerio Público de la Provincia, porque en ella sería donde se había cometido el delito.

33—Véase, verb. *Escribano*, núm. 2.



1. **Escriutación**—El defecto de los títulos de propiedad suspende el plazo estipulado para la escriutación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 61, Ser. 1ª.

2. **Escriutación**—El comprador en remate judicial que no lleve á efecto la escriutación, se hace responsable de la diferencia de precio, daños y perjuicios y gastos del nuevo remate, si el desistimiento ha sido sin causa justificada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Sér. 3ª.

3. **Escriutación**—Un boleto de compraventa basta para fundar el pedido de escriutación, pero no el de la entrega de la cosa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 403, Ser. 4ª.

4. **Escriutación**—El término fijado para la escriutación en el boleto de compraventa, no importa un pacto comisorio, sino un término dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 109, Ser. 4ª.

5. **Escriutación**—Subsanados los defectos de los títulos reconocidos por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, el comprador no puede alegar nuevos defectos para retardar la escriutación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 359, Ser. 4ª.

Escriutación — Véase: *Boleto de compraventa*, números 1 y 2 — *Pacto comisorio*, núm. 2 — *Depósito judicial*,

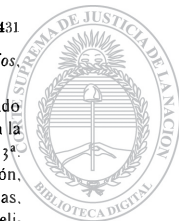
1—Art. 522 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 23.

3—El boleto lo constituía un documento privado el que no autorizaba intentar otra acción que la designada en los arts. 1183 y 1187 del Cód. Civ.; pero en manera alguna puede autorizar la petición de la entrega de la cosa vendida, pues esto supone necesariamente la existencia de un contrato concluido y redactado en escritura pública. Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 7.

4—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verb. *Condición resolutoria*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 23.



núm. 1 — *Hijo natural*, núm. 9 — *Daños y perjuicios*,
núm. 23 — *Recusación*, núm. 3.

1. **Escusación**—Si bien la enemistad con el abogado no es causa de escusación, procede si éste desempeña la tutela de menores. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3ª.

2. **Escusación**—Aun cuando las causas de escusación, no se encuentren entre las espresamente enumeradas, deben admitirse siempre que ellas pueden afectar la delicadeza ó el decoro del juez. — Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 3ª.

3. **Escusación**—La resolución no haciendo lugar á la indemnización de daños y perjuicios, hace procedente la escusación del juez para fijarla, en caso de ser revocada aquella por el Superior. — Jur. Civ., tom. 5, pág. 85, Ser. 4ª.

4. **Escusación**—El pedido de declaratoria de demencia por el Asesor de Menores, es causa de escusación, si la misma persona desempeña después el Juzgado en que se solicita la insanía. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 4ª.

5. **Escusación**—Importa un desacato al juez la invitación á que se escuse de entender en el juicio por motivos personales. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 81, Ser. 4ª.

6. **Escusación**—La amistad del juez con el abogado no es causa de escusación en tanto éste represente á terceros y no tenga interés personal en el juicio. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 44, Ser. 4ª.

1—Véase: *Enemistad*, núm. 1.

2—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en varios casos. Véase: verb. *Enemistad*, núm. 1; y tom. 4º, verb. *Escusación*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 91.

4—Véase: *Demencia*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Desacato*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Amistad*, núm. 1.



Escusación—Véase: *Bienes*, núm. 2—*Fianza*, núm. 4—*Fiador*, núm. 1.

1. **Espediente**—No pueden ser entregado á las partes, aun cuando exista conformidad entre ellas, fuera de los casos determinados por la ley.—Jur. Civ., tom. 1, página 365, Ser. 3^a.

2. **Espediente**—Para que el tenedor de un expediente pueda ser condenado á su entrega, debe justificarse que ha pertenecido ó que corresponde á los Tribunales de la Capital.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 301, Ser. 3^a.

3. **Espediente**—Los Escribanos de Registro pueden sacar de las Secretarías, bajo constancia, los expedientes en que deban otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 253, Ser. 3^a.

4. **Espediente**—El juez en turno debe recibirlo aun cuando por error haya sido pasado y admitido por otro Juzgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 45, Ser. 4^a.

5. **Espediente**—La negativa á la agregación de un expediente, no basta para fundar la petición testimonio de sus piezas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4^a.

6. **Espediente**—Los honorarios devengados en expedientes, deben ser regulados por el juez que en ellos tenga jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 318, Ser. 4^a.

1—El art. 26 del Cód. de Proc. lo prohíbe terminantemente.

2—Véase: verb. *Escribanos*, núm. 2.

4—La fecha del auto que se dicta mandando pasar los autos al juez de lo Civil determina cuál es el que debe recibirlos: y si por error pasa á otro juez que lo recibe, ese error no puede perjudicarlo.

5—Solicitada la agregación de un expediente, no se hizo lugar sin perjuicio de pedir los testimonios ó certificados que viere convenir al peticionante. Consentido el auto, solicitó los testimonios después de vencido el término probatorio. El art. 118 es aplicable, pues la negligencia de parte del interesado era evidente.



Espediente—Véase: *Litispendencia*, núm. 1—*Cuestiones*, núm. 3—*Prueba testimonial*, núm. 8—*Confesión*, núm. 2—*Escritura*, núm. 3—*Alegato*, núm. 3—*Notificación*, núm. 8—*Denuncias*, núm. 1—*Prueba*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 12—*Incompetencia*, núm. 3.

1^a. **Espedientes**—Los que se encuentren en poder de particulares deben ser entregados al archivo general de los Tribunales.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 3^a.

2. **Espedientes**—Reglamentación para la entrega de los que tramitaban ante los Jueces de Paz letrados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 85, Ser. 4^a.

3. **Espedientes**—Distribución de los de la Justicia de Paz.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 148, Ser. 4^a.

4. **Espedientes**—Acuerdo sobre términos judiciales en los expedientes de la Justicia de Paz.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 271, Ser. 4^a.

5. **Espedientes**—Los pedidos *ad effectum videndi*, deben ser devueltos siempre que el Juzgado los conceptúe innecesarios al objeto para que fueron traídos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 148, Ser. 4^a.

6. **Espedientes**—Los secretarios no pueden entregar los expedientes á las partes.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 229, Ser. 4^a.

Espedientes contenciosos—Véase: *Apelación*, núm. 1.

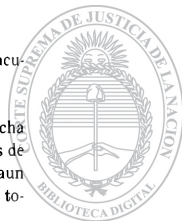
1^b. **Espedientes informativos**—Sobre propiedad de un te-

1^a—Art. 298 de la ley Orgánica de los Tribunales.

5—Se dijo que el Juzgado no podía retenerlos porque pertenecían á otro, y mucho menos cuando el que los había enviado los reclamaba.

6—Art. 26 del Cód. de Proc.

1^b—De esta manera se puede dilucidar mejor y con más acierto acerca de la posesión de cada uno de los que pretenden haberla tenido, controlándose recíprocamente en la producción de la información posesoria. Conviene asimismo á la continencia de la causa.



renno, aunque iniciados por diferentes personas deben acumularse.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 101, Ser. 4ª.

Espedientes terminados—Véase: *Testimonio*, núm. 1.

1. **Esposa**—La declaración de que la compra fué hecha con dinero propio de la esposa, no tenía por las leyes de Partida tiempo ni forma determinada; siendo válida aun cuando tuviese fecha posterior al acto. Jur. Civ., tomo 4, pág. 363, Ser. 3ª.

2. **Esposa**—Pertenecen exclusivamente á la esposa, los bienes comprados con anterioridad á la vigencia del Cód. Civ. con dinero propio, aun cuando la declaración no conste en la escritura de adquisición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3ª.

3. **Esposa**—Aun después de muerto el marido, es responsable de las costas á que haya sido condenada en el juicio sobre separación de bienes, iniciado temerariamente en vida de aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 401, Ser. 3ª.

4. **Esposa**—Durante la menor edad de ésta, para que el marido pueda extraer los fondos pertenecientes á ella, debe justificarse plenamente su necesidad ó conveniencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 349, Ser. 4ª.

5. **Esposa**—Depositada judicialmente, debe habitar en el domicilio del depositario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 35, Ser. 4ª.

Esposa—Véase: *Dinero propio*, núm. 1.—*Bienes*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Dinero propio*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Bienes*, núm. 4.

4—El Asesor de Menores manifestóse conforme con la extracción. El juez no hizo lugar por no encontrarse en las condiciones requeridas por el art. 1250 del Cód. Civ., siendo confirmada la resolución por la Cámara.

5—Se había nombrado un depositario á la esposa, y aquél designó una tercera persona en cuya compañía debía vivir; la Cámara resolvió que la esposa «debe habitar con la depositaria.»



meros 1, 4 y 5—*Dominio*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 7—*Gananciales*, núm. 1—*Herencia*, núm. 2—*Ilegitimidad*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 2—*Prescripción a nombre propio*, núm. 2—*Contrato de locación*, núm. 3—*Padrastro*, núm. 1—*Bienes del esposo*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 12—*Hijos menores*, núm. 2—*Revocación*, núm. 1—*Venia*, núms. 2 y 3—*Acreedores del viudo*, núm. 1 y 2—*Documento*, núm. 4—*Nulidad de la ejecución*, núms. 6 y 7—*Separación de bienes*, núm. 1 y siguientes—*Recusación*, núm. 16—*Alimentos*, núm. 14.

1. **Esposo**—El vendedor de cosa ajena, no es responsable por los daños y perjuicios ocasionados por falta de cumplimiento del contrato, si el comprador conocía ese hecho; la regla no se modifica por ser el vendedor esposo ó pariente cercano del propietario.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 386, Ser. 3ª.

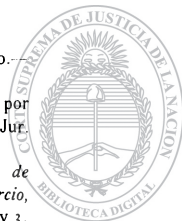
2. **Esposo**—Corresponden á la sucesión del esposo, los bienes que le fueron adjudicados en virtud de la cuenta de partición debidamente aprobada en la testamentaria de la esposa, aun cuando fuesen propios de ésta y siempre que á sus herederos se les hubiese adjudicado bienes que representen igual valor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 90, Serie 3ª.

3. **Esposo**—Para la fijación de la cantidad á suplir por

1—Véase: verb. *Cosa ajena*, núm. 1. Podría considerarse á la esposa como un tercero en el contrato, y entonces la venta se consideraría como cuando se promete el hecho de un tercero, sujeto á la ratificación de parte del verdadero dueño que es la esposa ó un pariente próximo, en cuyo caso correspondería aplicar la disposición del art. 627 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Bienes*, núm. 1.

3—Debe justificarlo aproximadamente cuando menos, como lo establece el art. 602, inc. 2 del Cód. de Proc.



litisespensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

4. **Esposo**—Para la fijación de la cantidad á suplir por litisespensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

Esposo—Véase: *Gananciales*, núm. 1 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 3 — *Cosa juzgada*, núm. 1 — *Divorcio*, núm. 11 — *Ilegitimidad*, núm. 2 — *De oficio*, núms. 2 y 3.

1. **Esposos** —La firma de éstos en el acta matrimonial, no basta para justificar su ingreso á la secta, siempre que por otros medios se compruebe que pertenecen á otra.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 160, Ser. 3^a.

2. **Esposos** —Para decretarse el divorcio, no basta la conformidad de los esposos: debe justificarse plenamente la existencia de los hechos en que se funda la acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3^a.

4—Véase: *Cantidad*, núm.

1—Las prescripciones terminantes del Cód. Civ., niegan á un Pastor protestante la facultad de casar á todos los disidentes, aun cuando sean de diversa comunión. Su poder se circunscribe á sus feligreses. Tratándose de religiones positivas que se encuentran constituidas en iglesia, tienen un símbolo ó doctrina que las caracteriza, distinguiéndolas de las demás; usan un culto especial, sus miembros se reconocen entre sí, y emplean ciertas ceremonias para la incorporación á su seno, de nuevos neófitos, además de la profesión de fe, y á ninguno se ingresa con solo firmar el acta del matrimonio que celebra. Así un judío que ocultando su religión, se presentara á la iglesia católica á contraer matrimonio y firmara el acta matrimonial, por ese hecho solo no ingresaría á la comunidad católica.

2—El esposo pidió el divorcio fundado en el art. 72, inc. 1 de la Ley de Matrimonio Civil del 12 de Noviembre de 1888—Ley núm. 2393—igual al art. 67, inc. 1^o de la ley vigente. La esposa negó el adulterio, pero estuvo conforme en que se declarase el divorcio. La prueba producida por el actor fué insuficiente, no haciéndose lugar al divorcio apesar del mutuo consentimiento de los cónyuges, porque el art. 66 de la ley de Matrimonio vigente, no admite el divorcio en esta forma, sino por las causales expresadas en el art. 67.



3. **Esposos**—Decretado el divorcio, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el juez, cuál de los cónyuges debe tener los mayores, sin que ninguno de los dos esposos pueda alegar preferencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

Esposos—Véase: *Separación de hecho*, núm. 1—*Administrador*, núm. 4—*Bienes de la esposa*, núms. 1, 4 y 5—*Venia*, núm. 4—*Divorcio*, núms. 9 y 10—*Pensión alimenticia*, núm. 5.

Expresión de agravios—Véase: *Cámara*, núm. 1.

1^a. **Espropiación**—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones municipales sobre espropiación de terreno ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3^a.

Espropiación—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 6.

Establecimiento—Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, núm. 1.

Establecimiento bancario—Véase: *Remate judicial*, número 20.

1^b. **Estado Civil**—De las personas, no puede conceptuarse un derecho en expectativa; las leyes posteriores al nacimiento, no pueden modificar el derecho adquirido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

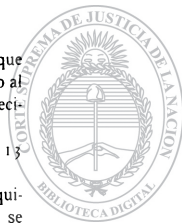
Estado Civil—Véase: *Partidas*, núm. 1.

1. **Estampilla**—Mientras no se justifique plenamente lo contrario, la ley presume puesta la estampilla en la fecha en que aparece inutilizada.—Jur. Civ., tom. 4, página 238, Ser. 4^a.

3—Véase: verb. *Divorcio*, núm. 12.

1^a—Véase: verb. *Demolición*, núm. 1.

1^b—Véase: *Derecho en expectativa*, núm. 1.



2. **Estampilla**—El recibo de descargo cualquiera que sea el valor y los documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 70, Ser. 4^a.

Estampilla—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 13—*Autenticidad*, núm. 3.

1^a. **Estatutos sociales**—Para que el interdicto de adquirir los bienes de una sociedad, deducido por los que se dicen sus mandatarios, sea procedente, deben justificar que el mandato ha sido conferido por quien tiene autoridad legal, en la forma y con las solemnidades que los estatutos sociales requieren.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 341, Ser. 4^a.

Estatutos sociales—Véase: *Personería*, núm. 9, *Sociedad anónima*, núm. 2.

Extensión—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 24—*Reivindicación*, núm. 18.

Estimación—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 2.

2—Los documentos de descargo no son documentos de obligación, y por consiguiente debía aplicarse el art. 41 de la Ley de sellos vigente en aquella época—año 1891.

1^a—Según el Reglamento de la sociedad de que se trataba, la Asamblea era el supremo poder, como asimismo sus deliberaciones, y de consiguiente la ley suprema de los asociados. Ante este principio esencial para la conservación y marcha regular de toda institución, es punto de importancia capital averiguar si el que invoca su representación ha sido legítimamente investido con su poder y si el que lo confiere tiene facultad al efecto. Es necesario averiguar si la Asamblea que dió nacimiento a las autoridades que representan a la sociedad fué celebrada conforme a los preceptos reglamentarios. Si estos extremos se llenan y si se justifica que se han cumplido, el interdicto podrá prosperar por cuanto la persona que lo deduce tendrá facultad bastante. Ante todo es necesario averiguar si la persona que se presenta a nombre de otra acredita en forma su representación, y si el que otorga el poder tenía facultad para conferirle.



Estranjero—Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 2 y 3—*Embargo preventivo*, núm. 40.

Estraño—Véase: *Divorcio*, núm. 3—*Curador*, núm. 2—*Menores*, núm. 2—*Patria potestad*, núm. 4.

Examen facultativo—Véase: *Insania*, núm. 1.

Exhibición general—Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

1^a. **Exhorto**—No diligenciado por falta de presentación al Juez exhortado, no puede ser reiterado.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 251, Ser. 4^a.

2^a. **Exhorto**—Si después de librado el exhorto, el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para la declaración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Ser. 4^a.

Exhorto—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 40—*Prueba*, núm. 8—*Testigos*, núm. 25.

1. **Evicción**—Debe intervenir conjuntamente en el juicio de reivindicación comprador y vendedor, si ambos son demandados aun cuando el segundo intervenga también en virtud de la citación de evicción solicitada por el primero.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Ser. 4^a.

2. **Evicción**—La citación de evicción solo procede cuando se deducen acciones reales.—Jur. Civ., tom. 5, página 397, Ser. 4^a.

3. **Evicción**—El cedente no está obligado á la evicción de los derechos transferidos en su totalidad, sino cuando ella comprenda la mayor parte de los que fueron materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 4^a.

1^a—Siempre que el término de prueba esté vencido ó que sea evidente la imposibilidad de diligenciarlo dentro del término. En el caso del sumario la negligencia de la parte es evidente, debiendo aplicársele lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Proc.

2^a—Véase, verb. *Declaraciones*, núm. 7.

3—Arts. 2089 y siguientes del Cód. Civ. Véase, verb. *Derechos hereditarios*, núm. 1.

4. Evicción.—No procede la citación de evicción en el juicio de mensura.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 106, Ser. 3ª

Evicción.—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

4—No es aplicable el art. 2108 del Cód. Civ., porque no afecta ni al derecho de propiedad ni al de posesión.





Facción de planos—Véase: *Remuneración profesional*, núm. 1.

Facultad—Véase: *Posiciones*, núm. 3—*Mandatario*, números 3 y 11—*Poder*, núm. 3—*Fiador*, núm. 3—*Tutor*, núm. 11.

Facultad de firmar—Véase: *Transacciones*, núm. 11.

Facultad discrecional—Véase: *Pensión alimenticia*, número 2.

Facultad exclusiva—Véase: *Fianza*, núm. 6.

Facultad especial—Véase: *Mandatario*, núm. 6—*Here-
deros*, núm. 2.

1. **Facultades** La calificación de jugador de garito hecha á una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa extralimitación de facultades del empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

2. **Facultades** El poder judicial tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya civiles ó criminales que se inicien contra empleados públicos, aún por actos que hayan merecido la aprobación de sus supe-

1—Véase, verb. *Empleado*, núm. 1.

2—Véase, verb. *Acusaciones*, núm. 1.



riores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Facultades—Véase: *Funcionarios públicos*, núms. 4 y 5.—*Bienes municipales*, núm. 1.

Facultades del mandatario—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1.

1. **Facultades legales**—Los actos llevados á cabo por un comisario de policía, estralimitando sus facultades legales, importan un acto ilícito que puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

2. **Facultades legales**—La aprobación del Superior y aun la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Facultativos—Véase: *Asistencia médica*, núm. 2.

Falsa causa—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, número 7.

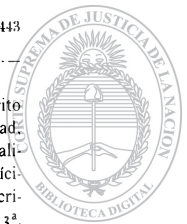
1ª. **Falsedad**—La escepción del inhabilidad de título, es improcedente si se funda en la falsedad ó vicios de los hechos que le dieron orijen, ajenos al título mismo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 150, Ser. 3ª.

2. **Falsedad**—La parte puede pedir las diligencias que crea necesarias para autenticar el documento tachado de

2—Véase, verb. *Actos ilícitos*, núm. 5.—Para salvar la responsabilidad de un empleado ejecutivo, es necesario que el mandato bajo el cual procede el empleado que realiza el acto—arrestar á una persona, secuestrar bienes, entrar por fuerza en una casa habitada—esté legalmente expresada en la fás del documento. Decisiones constitucionales de Calvo. Decisión 2588.

1ª—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 6.

2—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7.



falso, sin perjuicio de las que practiquen los peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 153, Ser. 3^a.

3. Falsedad—La calificación de jugador dada de garito á una persona que además de comprobar su honorabilidad, justifica la falsedad del hecho imputado, importa estricta limitación de facultades en el empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, las que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

4. Falsedad—De pago, el contradocumento otorgado, para probar la falsedad de un pago, prueba contra el tercero que intervino por medio de mandatario en la formación de la escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 179, Ser. 4^a.

5. Falsedad—De documentos, los Jueces de lo Civil son incompetentes para conocer, ni aún están obligados á dar curso á las denuncias sobre falsedad de documentos agregados á un espediente, por el que no sea parte en dicho juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 400, Ser. 4^a.

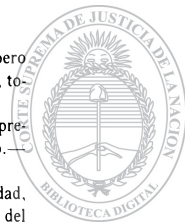
6. Falsedad—El heredero aún cuando desconozca la validez del documento en que se funda la obligación,

3—Véase: *Empleado*, núm. 1.

4—Véase, verb. *Contradocumento*, núm. 3.

5—Véase, verb. *Denuncias*, núm. 1.

6—Es de espreso derecho que no existe obligación sin causa y que ésta consiste hoy como consistía en la legislación romana, en lo dado ó en lo hecho para que otro diese ó hiciese: *Datio vel factum, certa lege*. Desconocida la causa de la obligación y siendo de espreso derecho que aun cuando la causa no aparezca en ella se presume su existencia mientras el deudor no pruebe lo contrario—art. 500 del Cód. Civ.—Resultado que á éste corresponde la prueba de la escepción, no solamente en virtud de lo dispuesto en este artículo, de la reconocida máxima: *reus in excipiendo fit actor*, sino también de acuerdo con la doctrina sostenida por la generalidad de los autores, pues probándose la falsedad de la causa espresada en la obligación resultará ésta insanablemente nula. Laurent y Demolombe; Duranton, tit. 10, núm. 349, y Llerena, tom. 1^o, pág. 326.



puede invocar la falsedad de la causa que él espresa, pero como escepcionante carga con la prueba.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

7. **Falsedad**—Probada la falsedad de la causa que espresa la obligación, procede la absolución del demandado.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

8. **Falsedad**—Siempre que existan indicios de falsedad, deben pasarse los antecedentes, de oficio, al juzgado del Crimen.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Falsedad—Véase: *Documento privado*, núm. 1—*Herederos*, núm. 6—*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 32—*Escepción de falta de personería*, núm. 1—*Notificaciones*, núm. 2—*Domicilio*, núm. 9.

Falsedad de hecho—Véase: *Instrumento público*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Escritura pública*, número 32.

Falta de acción—Véase: *Escepción de falta de personería*, núms. 14, 15, 18 y 19.

Falta de cumplimiento—Véase: *Contrato de arrendato*, núm. 7—*Cláusula penal*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 18.

Falta de derecho—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 32—*Demanda*, núm. 3.

Falta de intervención—Véase: *Avisos*, núm. 1—*Testamentaria*, núm. 6.

Falta de llamado—Véase: *Servicios*, núm. 8.

1. **Falta de personería**—Si ella se refiere al derecho del actor, no puede ser resuelta como escepción dilatoria.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 244, Ser. 3^a.

7—Véase el número precedente.

8—Véase, verb. *De oficio*, núm. 4.

1—Véase, *Escepción dilatoria*, núm. 1.



2. Falta de personería— Por carecer de derecho el actor solo puede resolverse como escepción perentoria.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 3^a.

3. Falta de personería—Reconocida por el demandante la falta de personería alegada por el demandado, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, página 54, Ser. 4^a.

Falta de personería—Véase: *Costas*, núm. 57—*Escepción de falta de personería*, núm. 1 y siguientes.

Falta de presentación—Véase: *Documentos*, núm. 11.

Faltas—Véase: *Correcciones disciplinarias*, núm. 1.

1. Fallecimiento—Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción de fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3^a.

2. Fallecimiento—Mientras no conste judicialmente el fallecimiento, la parte no está obligada á suspender el procedimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 166, Ser. 4^a.

3. Fallecimiento—Para que proceda la presunción de fallecimiento, debe justificarse que no han dado resultado las diligencias practicadas para obtener noticias del ausente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Ser. 4^a.

4. Fallecimiento—Puede probarse por información, la

2—Véase *Escepción perentoria*, núm. 2.

3—Véase, verb. *Costas*, núm. 7.

1—Véase, verb. *Edictos*, núm. 1.

2—El Juez de 1^a Inst. en virtud de denuncia hecha por el abogado, de que su patrocinado había fallecido, mandó suspender el procedimiento. La Cámara lo revocó fundándose en que el fallecimiento no constaba en debida forma, y teniendo en cuenta además el carácter de la medida solicitada que era meramente conservativa.

3—Art. 114 del Cód. Civ.

4—Aprobada una información, el mismo Juez la revocó por contrario



que aprobada surte pleno efecto legal.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 24, Ser. 4ª.

5. Fallecimiento.—El denunciante de un fallecimiento que suministra datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con el objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 21, Ser. 4ª.

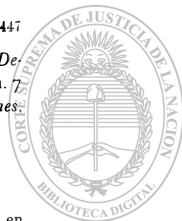
6. Fallecimiento. Al apoderado corresponde justificar el fallecimiento de su mandante si no negase el hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 4ª.

Fallecimiento — Véase: *Autenticidad*, núm. 1 — *Donación*.

imperio fundándose en que ella no era bastante para acreditar en *debida forma* la verdad y exactitud del fallecimiento, considerándola deficiente, porque los testigos no dieron razón satisfactoria de sus dichos. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que el fallecimiento se hallaba acreditado con el testimonio intachable de dos personas que daban acabada razón de sus dichos.

5—El dictámen del Fiscal de la Cámara, que sirvió de fundamento a la resolución contenida en el sumario decía, que los testigos de los actos del Registro Civil, no pueden ser admitidos a corregirlos ó adicionarlos, pues se comprende sin esfuerzo que si en algún caso puede inspirarles una recta intención, en otro pueden proceder maliciosamente y ocasionar grandes trastornos en el orden de las familias. Sin embargo, cuando un testigo se apercibe de un error en que ha incurrido al hacer las manifestaciones que debe contener un asiento, puede y debe manifestarlo a la autoridad competente, pero debe también oírse a la persona realmente interesada en la perfección del acto, y con su audiencia y las pruebas evidentes del caso podrá decretarse la rectificación.

6—Al apoderado que denuncia el fallecimiento de su mandante, le corresponde en su calidad de mandatario hacer las averiguaciones del caso para dejar establecida la verdad del hecho denunciado: es el apoderado quien tiene interés directo en constatarlo, teniendo en cuenta las responsabilidades legales que podrían surgir si continuase interviniendo en la causa después de denunciada formalmente la muerte de su mandante. El Juez debe fijar un término prudencial para la constatación del hecho.



ción, núm. 3—*Documento privado*, núms. 3, 4 y 5—*Declaratoria de herederos*, núm. 7—*Testamentaria*, núm. 7—*Causante*, núm. 2—*Bienes del esposo*, núm. 1—*Bienes*, núm. 7.

Fallo -- Véase: *Excepciones perentorias*, núm. 3.

Fama pública -- Véase: *Testigos*, núm. 5.

Familia -- Véase: *Menores*, núm. 2.

1. Fecha -- El hecho de haber sido escrita la fecha en época distinta de la del cuerpo del documento, no modifica su validez, siempre que no se justifique la existencia de otra fecha anterior. -- Jur. Civ., tom. 3, pág. 193. Serie 3ª.

2. Fecha -- De la escritura, es la fuente del derecho cuando el total de los derechos hereditarios ha sido cedido á diversas personas. -- Jur. Civ., tom. 6, pág. 102, Serie 3ª.

Fecha -- Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1 -- *Daños y perjuicios*, núm. 104 -- *Excepción de defecto legal*, número 18 -- *Capellanía*, núm. 4 -- *Posesión*, núm. 19 -- *Prescripción de obligaciones*, núm. 2 -- *Dimensión*, núm. 1 -- *Alimentos*, núm. 3 -- *Alegar*, núm. 1 -- *Estampilla*, número 1 -- *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3.

Fecha anterior -- Véase: *Prueba preconstituída*, núm. 1 -- *Documentos*, núm. 5.

Fecha cierta -- Véase: *Documentos*, núm. 5 -- *Escrito*, número 10.

Fecha posterior -- Véase: *Mandante*, núm. 3 -- *Dinero propio*, núm. 2.

Fecundación -- Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

Ferrocarriles -- Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 62, 70

1 -- Véase, verb. *Documento*, núm. 1.

2 -- Véase, verb. *Derechos hereditarios*, núm. 3.



y 103—*Municipalidad*, núm. 11—*Poderes locales*, número 1.

1^a. Fiador—El acreedor puede ejercer su acción contra el fiador, sin hacer escusión en los bienes del deudor, siempre que éste se hubiese ausentado de su domicilio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 148, Ser. 3^a.

2. Fiador—La solidaridad no se presume; el simple fiador no está obligado mientras no se haga escusión en los bienes del deudor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 175, Serie 3^a.

3. Fiador—Es facultivo del Juzgado apreciar la responsabilidad propuesta.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 62, Ser. 4^a.

4. Fiador—La falta de presentación del fiador dentro del plazo estipulado, en un contrato de locación, lo deja sin efecto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 3^a.

Fiador—Véase: *Bienes*, núms. 2 y 6—*Fianza*, núms. 3, 4 y 6—*Abogado*, núm. 2.

1^b. Fiadores—Los Agentes Fiscales pueden ser fiado-

1^a—Art. 2013, inc. 5º del Cód. Civ.

2—Véase, verb. *Bienes*, núm. 2.

3—El Juez de 1ª Instancia no consideró suficiente la fianza propuesta, y la Cámara confirmó la resolución diciendo, que es facultativo del Juez apreciar la calidad de la fianza ofrecida. De acuerdo con este caso, véase: verb. *Fianza*, núm. 6.

4—Véase, verb. *Contrato de locación*, núm. 10.

1^b—No existe prohibición alguna legal para que los miembros del Poder Judicial puedan dar fianza siempre que no tenga lugar en causa que más tarde hubiese de intervenir el fiador. La Ley 2ª, tit. 12, Part. 5ª, no se relaciona con los Agentes Fiscales. En el derecho español no se encuentra una prohibición semejante, como puede verse en Alvarez «Instituciones de derecho legal», y en Sala «Ilustración al mismo», pues estos autores al exponer y enumerar los que no pueden ser fiadores, no los comprende, como tampoco los comprenden las leyes de Indias. Y aún dado el caso de que esa prohibición hubiese existido, no habría podido subsistir después de la vigencia del Cód. Civ. En



res en causas que no sean de su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 351, Ser. 3ª.

1. Fianza.—De conformidad de partes, debe permitirse la retractación de la fianza, sin que el Juzgado esté obligado á resolver si existe ó nó trabado el embargo preventivo para el que fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 2, página 190, Ser. 3ª.

2. Fianza.—Limitada á los alquileres por un tiempo

las disposiciones en que hace mención á los funcionarios públicos y en que establecen los contratos que le son prohibidos tampoco los consigna y aun cuando va hasta establecer las condiciones que debe tener la fianza judicial. La Ley Orgánica, ni ninguna otra ley lo prohíbe, á no ser como se ha dicho, cuando esa fianza tuviese por resultado impedir las funciones del magistrado judicial.

1.—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 8.

2.—El actor había celebrado un contrato de arrendamiento de un museo anatómico por el término de seis meses, mediante el pago adelantado de 200 pesos mensuales. El demandado se había constituido fiador por el cumplimiento del contrato. El inquilino pagó dos mensualidades, y no queriendo abonar las siguientes, se presentó á un Juzgado de Paz pidiendo la devolución del museo, que estaba completamente abandonado, y la rescisión del contrato. En ese Juzgado se levantó un inventario de los objetos depositándolos en mérito de las denuncias de hallarse abandonado el negocio y ordenándose el desalojo, y por último, se ordenó la entrega del museo á su dueño, quien se negó á recibirlo por el mal estado de algunos cajones que contenían objetos del museo. En este estado el locador demanda al fiador por los daños y perjuicios que le ocasionó el inquilino. Esta acción no es procedente porque las responsabilidades del fiador en este caso solo se limitan á aquello á que se obligó el fiador, pues el art. 2582 del Cód. Civ., sin embargo de establecer que las fianzas de la locación obligan á los que las prestan, no solo al pago de los alquileres, sino á las demás obligaciones del contrato, al mismo tiempo exceptúa el caso en que la fianza se hubiese limitado espresamente al pago de los alquileres, estando consignada espresamente esa cláusula en el contrato materia de la cuestión. La fianza termina por la extinción de la obligación principal—art. 2042, Código Civil—y desde entonces, si el arrendamiento queda concluido y si el fiador no lo es por las demás obligaciones del contrato, claro es que



determinado, no obliga al fiador por las demás obligaciones del contrato, ni tampoco por los alquileres que se devenguen hasta que el locador recupere el uso y goce de la cosa—Jur. Civ., tom. 3, pág. 148, Ser. 3ª.

3. Fianza—El fiador de un curador solo responde por los bienes pertenecientes a los menores; probado el indolido nombramiento por no ser menores, falta la causa de la fianza.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

4. Fianza—El término para la prescripción de la fianza

su responsabilidad no puede ser llevada más allá para hacerlo pasible de las obligaciones en que haya incurrido el inquilino. Hecho por tiempo determinado el contrato de arrendamiento, vence cuando se acaba ese tiempo—art. 1604, Cód. Civ.—Y es sabido que, aun cuando el locatario permanece en el goce de la cosa arrendada con asentimiento tácito ó expreso del locador, no se produce la tácita reconducción de que nos habla el Cód. Civ. Francés; lo que vale decir, que si en ese caso no subsisten las obligaciones del fiador, menos pueden subsistir hasta que el locador recupere el uso y goce de la cosa.

3—Véase, verb. *Bienes*, núm. 6.

4—Esta resolución la dictó la Cámara tomando como base la sentencia del Juez de 1ª Inst., que lo era el Dr. Gimenez, quien dijo que con arreglo al primitivo derecho romano—Ley 5ª del Cód. de «Fidejussoribus» la fianza reposaba en la responsabilidad solidaria y directa de la tercera persona que la daba: y el acreedor tenía el derecho de exigir su crédito al fiador ó al deudor, según eligiere. Pero las «Novelas» alteraron esta doctrina y establecieron que la responsabilidad debía ser «subsidiaria ó indirecta», de manera que el fiador vino á tener el beneficio de orden, por el cual el acreedor debía discutir la deuda, primero con el deudor, y perseguirlo para que pagase—Lopez, Derecho Romano.—Esta última doctrina es la que ha sido adoptada por la legislación de las Partidas y por nuestro Cód. Civ.—Ley 9ª, tit. 12, Partida 5ª y art. 2012, Cód. Civ.—Ella sin embargo, reconoce sus escepciones, pudiendo citarse entre otros casos los siguientes: cuando el fiador renuncia el beneficio de orden ó de escusión, ó cuando es notoria su insolvencia. Respecto al primer caso de escepción, si bien la escritura no contenía la renuncia que hacía el fiador del beneficio de orden ó escusión, parecía desprenderse de sus términos, pues se constituía en liso y llano pagador, y manifestaba su voluntad para el caso de faltar al



empieza desde que sea notoria la insolvencia del deudor, aun cuando el fiador no haya renunciado al beneficio de escusión.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

5. Fianza.—La prescripción de una fianza constituida antes de la vigencia del Código Civil, se rige única y exclusivamente por las antiguas leyes —Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

6. Fianza.—Es facultad exclusiva del Juez apreciar su

cumplimiento de la obligación, de hacer suya la deuda ajena, queriendo que todas las diligencias y demás concernientes á este respecto se entendieran directamente con él. En cuanto al segundo caso de escepción, es indudable que el concurso del deudor induce necesariamente á su insolvencia, pues ese estado presupone la carencia de recursos para hacer frente á los compromisos contraídos—Gutiérrez, Códigos Fundamentales, tom. 5^o, pág. 51.—Producida la insolvencia del deudor que da origen al concurso, desaparece por tal causa el beneficio de orden ó escusión, y los acreedores pueden ejercitar desde entonces sus acciones y derechos directamente contra el fiador. Véase el art. 2072 del Código Civil.

5.—Las leyes no tienen efecto retroactivo—art. 3^o, tit. Preliminar del Cód. Civ.—Si bien es doctrina corriente admitir que las nuevas leyes se aplican á los simples derechos en expectativa, en el caso que motivó el sumario, no podía decirse que los derechos del acreedor contra el deudor pertenecieran á esa categoría, pues las relaciones entre deudor y acreedor, garantizadas por fiador, estaban ya establecidas irrevocablemente desde 20 años antes de la demanda.

6.—El Juez aceptó como fiador al abogado patrocinante de una de las partes y mandó se otorgara la respectiva escritura en la escribanía que designó. Apelada la resolución, la Cámara la confirmó diciendo precisamente lo que espresa el sumario. La resolución de la Cámara en sí misma importa una contradicción porque si es facultad exclusiva del Juez apreciar la fianza en su calidad y en su grado de responsabilidad, el auto que la aceptase ó denegase no sería apelable; pero como la Cámara entró á entender en el fondo del asunto, resulta que el Juez de 1^a Instancia no es soberano en la apreciación, porque si lo fuera, el auto no sería apelable y por consiguiente la Cámara habría declarado mal concedido el recurso. Puede verse de acuerdo con el sumario, verb. *Fianza*, núm. 3, Inst., tom. 2^o. En cuanto á la inapelabilidad del auto puede verse el mismo verb. núm. 4 del tomo citado. La Cámara de lo Comercial



calidad y el grado de responsabilidad del fiador propuesto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 4^a.

Fianza.—Véase: *Costas*, núm. 58—*Bienes*, núms. 2, 3 y 6—*Embargo*, núm. 2.

Fianza personal.—Véase: *Arraigo*, núm. 1.

Fijación.—Véase: *Condición resolutoria*, núm. 1—*Inpedimento dirimente*, núm. 1.

1. Filiación legítima.—Para que el adulterio sirva de prueba al desconocimiento de la filiación legítima, debe justificarse que tuvo lugar al tiempo de la concepción: los hechos anteriores a esa época no son pertinentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3^a.

2. Filiación legítima.—El testamento del padre es prueba bastante de la filiación en la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 214, Ser. 3^a.

ha declarado que el auto que no acepta una fianza es apelable y que el Juez no es soberano en la apreciación de la calidad y grado de responsabilidad del fiador propuesto, en el caso de Alvez de Araujo contra el Banco de Londres y Río de la Plata. El Juez de 1^a Inst. no aceptó la fianza del abogado patrocinante y la Cámara revocó la resolución.

1.—El art. 252 del Cód. Civ., establece que el marido que comprueba el adulterio y la ocultación del parto tiene derecho a contestar la legitimidad de su hijo. Igual disposición consigna la Ley 39, tit. 2, Part. 3^a, Mercadé, ocupándose de los arts. 312 y 313 del Cód. Nap., del cual han sido tomados los del nuestro, dice que esta acción puede tener lugar en tres casos diferentes: 1^o Demostrando la absoluta imposibilidad para haber tenido acceso con la esposa, *por la época en que debió hacerse embarazada*, sobre lo que está obligado a producir prueba completa. El fundamento de la ilegitimidad no lo puede constituir el adulterio de la esposa tan solo, sino que es necesario que ese adulterio haya dado por resultado el embarazo de la esposa y el nacimiento del hijo cuya legitimidad se desconoce. Es necesario que la época del adulterio concuerde con la del embarazo.

2.—El Juez de 1^a Inst. dijo, que tales declaraciones solo pueden servir como antecedente, pero no como comprobación bastante para fundar la declaratoria, pues ésta solo puede dictarse en presencia de las respectivas partidas, con escepción de los casos en que es procedente la prueba supletoria. La Cámara revocó esta providencia fundándose en que el testamento es prueba bastante de la filiación.



3. Filiación legítima.—A la madre que niega la filiación corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada, y que la posesión de estado de hija legítima debidamente justificada, solo respondía á un propósito caritativo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 79, Ser. 3ª.

Filiación legítima Véase: *Declaratoria de herederos*, núms. 3 y 4:

1. Filiación natural.—Justificada la vida licenciosa y el contacto carnal con varios hombres en la época de la concepción, la demanda sobre filiación natural debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 84, Ser. 3ª.

2. Filiación natural.—Para la prueba de la filiación na-

3.—La causal alegada importa una verdadera excepción, y es sabido que el demandado en la excepción se hace actor, incurriéndole su prueba.

1.—Durante la vida de los padres, para la manifestación de la paternidad ó maternidad, se admite todos los medios de prueba procedentes para comprobar los hechos y que concurren á demostrar la filiación—arts. 311, 324 y 325 del Cód. Civ. —Los hechos demostrativos de la filiación natural respecto del padre, los constituyen aquellos que justifiquen las relaciones ilícitas entre éste y la madre, cuando esas relaciones coinciden con la época de la concepción del hijo natural y cuando hayan sido mantenidas exclusivamente con el hombre á quien se atribuye la paternidad. Por consiguiente, se requiere la concurrencia de dos condiciones en las relaciones del pretendido padre con la madre para que el hijo pueda ser declarado como de aquel que le niega la paternidad, á saber: 1º que esas relaciones coincidan con la época legal de la concepción, puesto que sin establecer esta coincidencia no habría razón ni motivo alguno para establecer la relación necesaria que debe existir entre la causa y el efecto; 2º que esas relaciones hayan existido durante esa época con un solo hombre, pues de lo contrario sería imposible conocer cuál fué el autor de la fecundación.

2.—En cuanto á la primera parte del sumario, puede verse la nota precedente. En cuanto á la necesidad de justificar la honestidad debe observarse que en el caso que nos ocupa, el demandado á quien se atribuía la paternidad, la negó por completo, alegando que si había tenido contacto carnal con la madre fué en un prostíbulo, y que obtuvo



tural durante la vida del padre, no basta justificar el contacto, debe justificarse que tuvo lugar en la época precisa de la concepción, y que la honestidad de la madre haga imposible la duda de que otro hombre pueda ser el autor de la fecundación.—Jur. Civ., tom. 1, página 224, Ser. 3ª.

3. Filiación natural—No basta que el que se dice hijo

sus favores como tantos otros pagando un precio por ellos. Todo esto lo comprobó acabadamente. De aquí se deduce que si en el sumario se establece el requisito de la prueba de la honestidad indubitable de la madre, es por que esa honestidad fué puesta en duda por afirmaciones categóricas del pretendido padre, afirmaciones que fueron plenamente comprobadas. Resulta asimismo que la Cámara no ha querido imponer á la madre la carga de la prueba de su honestidad cuando ésta no ha sido puesta en duda ni objetada. Con tanta más razón no puede imponerse al hijo la prueba de este extremo, cuando es él quien deduce la acción y no la madre. Es principio general en procedimiento, que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.

3—Se trata de la comprobación de la filiación después de muerto el padre, la que solo puede establecerse por medio de la posesión de estado. Los hechos constitutivos de la posesión de estado son tres: *nomen, tractatus, fama*. En cuanto al *nomen*, es necesario que el hijo haya llevado el apellido del padre natural, porque este hecho constata no solamente el reconocimiento del padre, sino que autoriza á la familia de éste como á la sociedad para suponer la existencia de la filiación natural: pero ese apellido debe entenderse llevado con consentimiento del padre, es decir, que el mismo padre lo ha autorizado, y que no sea consecuencia de otro género que le hayan dado origen. En el caso que nos ocupa, el apellido lo llevaba porque el hijo fué arrojado á un zaguán de la casa de la familia á la que pertenecía el presunto padre, pero éste no era el jefe de la casa. En estas circunstancias es fácil explicar cómo llevaba esa persona el apellido de su pretendido padre, pues es costumbre entre nosotros que los huérfanos y aún los sirvientes que carecen de apellido, lleven el de los dueños de la casa donde son recogidos ó prestan sus servicios. Para un hijo natural su posesión de estado consistirá en que si bien el padre no hubiese reconocido por documento su paternidad, tampoco la negase, pero confesando quizá privadamente y conduciéndose con aquél, en todas ocasiones, como padre, según suelen hacerlo los demás en igual caso, prove-



natural, lleve el apellido del pretendido padre para que este hecho acredite la filiación, es necesario que el mismo padre sea quien haya autorizado ese uso.—Jur. Civ. tom. 3, pág. 358, Ser. 3ª.

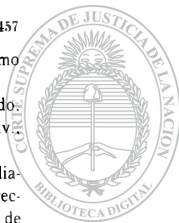
4. Filiación natural -- Al que demanda la declaratoria

yendo á sus necesidades y procurando su bienestar; todo lo que puede demostrarse por una serie de hechos bien caracterizados que escluyen toda duda. Cuando el autor del Cód. Civ. exigía en la nota al artículo 325, la presentación del hijo á su familia, que el padre hubiese tenido en su casa á la concubina manteniéndola públicamente, reconociendo su paternidad ante innumerables personas, no hace el legislador otra cosa sino presentar un caso de posesión de estado, el más notorio: la misma rareza del caso hace comprender que es un ejemplo puesto allí, no como condiciones requeridas para la existencia de la posesión de estado. El Dr. Velez quería con eso criticar el sistema francés que solo admite la prueba por documento auténtico, demostrando con los hechos enumerados, que la posesión de estado que esos hechos crean, puede en muchos casos tener mayor eficacia que el documento auténtico exigido por la ley francesa. Véase Demolombe, tom. 5, páginas 485, 496 y 498. Entre los medios por los que puede establecerse la posesión de estado se encuentra el *nomen*, que siempre que fuese usado con asentimiento del padre sería una prueba poderosa.

4.—Se argumenta en contra de este principio diciendo que si la ley, para calificar á una persona como hijo natural, requiere que sus padres al tiempo de la concepción, pudieran casarse entre sí aunque fuese con dispensa, para ser declarado tal hijo natural de un individuo, no le bastará el acreditar que éste en realidad es su padre, si no prueba además que al tiempo en que fué concebido aquél, podía haberse casado con la madre. Ahora bien, es evidente que esto no podría saberse ni hacerse constar sin que aparezca quiénes son los dos padres; porque si solo fuese conocido uno de ellos, aunque éste siendo soltero ó viudo, bien pudiera casarse, quizá no podría hacerlo con el otro por resultar respecto de él algún impedimento dirimente no dispensable, cual sería por ejemplo, el que estuviese ya casado. Si la ley, distinguiendo primero los hijos legítimos de los ilegítimos, divide después á éstos en naturales y espúreos, y reconoce en aquéllos ciertos derechos que niega á los segundos, no puede permitirse á éstos hacerse pasar por naturales respecto de una persona que digan ser su padre, con ocultar el nombre de la madre, como sucedería muchas veces



de esta filiación, solo corresponde probar el carácter que se atribuye con relación á la persona de quien se pretenda hijo; no está obligado á declarar el nombre del padre si fuese lícito reclamar la filiación respecto de uno solo de los padres, callando el nombre del otro sea quien sea. Todo esto es cierto, pero no alcanza á demostrar la verdad de las tesis en cuya comprobación se aduce, es decir, que no sea permitido reclamar la filiación natural respecto de uno solo de los padres, sin demandar al mismo tiempo y sin determinar el otro, lo cual solo se encuentra prevenido respecto de la filiación legítima—art. 260 del Cód. de Proc.—Podría ser que solo se conociese á uno de ellos. ¿Por qué la ley le había de quitar ese único autor conocido de sus días? Puede suceder que estuviese constatado de una manera cierta y positiva cuál es la madre, ignorándose absolutamente quién sea el padre: ¿En qué calidad había de ser tenido el hijo, como natural ó como espúreo? Esta última condición supondría un caso de escepción, y es doctrina aceptada que los casos de escepción no deben admitirse sino en una forma muy restringida y cuando sean comprobados: debe estarse siempre al principio general. La regla general es que á cualquiera le es dado casarse, y en caso de duda, lo razonable es suponer lo que sucede con más frecuencia. El incesto, adulterio ó sacrilegio, por otra parte, supondría un delito cometido por los padres; pero como el delito jamás se presume, ni debe admitirse mientras no se pruebe, resulta que constando la filiación de una persona respecto de otra, y apareciendo ser ilegítima, debe considerarse natural y no espúrea, á menos que quien sostenga lo contrario lo demuestre. Cuando una madre después de tener un hijo natural se casa con otro que no es el padre de su hijo, ese hijo no perdería su derecho de filiación respecto del padre; al reclamar su filiación no debiera exigirse el nombre de la madre, porque respecto de ella, la indagación de la maternidad está prohibida por la ley—art. 326, Cód. Civ.—La ley no impone al hijo natural, cuando solicita ser declarado tal, que dirija su acción conjuntamente contra padre y madre, solo exige esto al que solicita ser declarado hijo legítimo—art. 260.—Por el contrario, resuelve que puede hacerlo respecto de uno de ellos, desde que da lugar al reconocimiento que uno solo de ellos haga de su paternidad. Que esto es así, se deduce claramente de la disposición que prohíbe á cualquiera, al reconocer á un hijo natural, declarar en quién lo hubo, á menos que esa persona lo tuviese ya reconocido también—art. 334.—Resulta de lo espuesto que en la demanda para el reconocimiento de la filiación natural contra uno de los padres, no es esencial designar el otro, y



ó madre que no es parte en el juicio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 358, Ser. 3ª.

5. Filiación natural—Justificada la posesión de estado, procede la declaración de la filiación natural.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 136, Ser. 3ª.

6. Filiación natural—La prueba, para justificar la filiación natural durante la vida del padre, debe recaer directamente sobre la paternidad, puesto que la posesión de estado haría innecesaria la acción.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 150, Ser. 3ª.

7. Filiación natural—Justificado el reconocimiento que el padre hacía de la paternidad, procede la declaración de la filiación natural.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 24, Ser. 3ª.

8. Filiación natural—Justificados los hechos que hacen

que si bien es cierto que apareciendo haber existido entre ambos un impedimento dirimente no dispensable, tal demanda caducaría, esa prueba en todo caso sería á cargo del demandado, el cual alegaría un hecho escepcional; no del demandante, que esta parte negando simplemente tendría además en su favor la presunción que esa duda induce á admitir las más de las veces; y sobre todo á rechazar la existencia de un delito no justificado.

5—Art. 325 del Cód. Civ.

6—La posesión de estado es uno de los medios, el más eficaz de los establecidos por la ley, y puede servir de prueba no solo después del fallecimiento del padre, sino también durante su vida, á fin de dejar constancia en una forma solemne de la filiación invocada. No es pues, exacto lo que dice el sumario de que la posesión de estado hace innecesaria la declaración de filiación, pues aquella puede ser impugnada por cualquiera que tenga interés en hacerlo, mientras que la sentencia que declara la filiación una vez pasada en autoridad de cosa juzgada se tiene como una expresión fiel de la verdad sin que se admita prueba en contrario.

7—Porque ese reconocimiento importa la posesión de estado, y en este caso la filiación natural debe ser declarada. Véase el núm. 5.

8—No se requiere para comprobar la filiación natural la justificación del hecho material de la unión carnal de la madre con el hombre á quien se atribuye la paternidad, sino de los hechos que concurren á demos-



presumir las relaciones carnales en la época de la concepción, debe conceptuarse probada la filiación natural en tanto no se justifique la mala conducta de la madre,

tarla, como lo dice el art. 325 del Cód. Civ., por la dificultad inherente á la misma naturaleza de los hechos, pues como dice el Dr. Velez al anotar este artículo, las leyes, no pudiendo llegar á una perfección absoluta, se han guiado en la constitución de las pruebas por lo que regularmente sucede, por meras presunciones de hombre. En el caso del sumario se comprobó que el hombre había visitado á la concubina á altas horas de la noche, que había pasado toda la noche con ella retirándose recién al día siguiente; y si en caso el individuo llamado á explicar razonablemente su conducta no lo hace, debe presumirse que mantiene con esa muger relaciones ilícitas porque es lo que regularmente sucede en casos semejantes. Y si esas relaciones ilícitas concuerdan con la época en que esa mujer ha concebido, debe presumirse que ellas han dado origen á la concepción, puesto que existe entre éstas y aquéllas la relación indestructible que entre el efecto y la causa, á no ser que se pruebe que tuvo otra causa que pudo producir el mismo efecto. Para resolver cuestiones de esta naturaleza bajo el imperio de nuestro Cód. Civ. no debe olvidarse la favorable doctrina que éste sigue con relación á los hijos naturales, y que informan no solo sus disposiciones expresas respecto á los derechos que les acuerda, sino también las notas explicativas que sobre el particular creyó oportuno agregar el legislador, como un medio de poner de relieve su pensamiento sobre un punto tan principal en el derecho de las personas. La conducta de la madre anterior ó posterior á la concepción del hijo no puede influir en el derecho de éste para atribuir su filiación al hombre con quien aquella mantuvo exclusivas relaciones ilícitas en la época en que fué engendrado. Mucho se ha declamado contra las mujeres fáciles que conciben fuera del matrimonio, y contra los peligros de atribuir equivocadamente la paternidad de su hijo, olvidando que esos hijos deben el ser á la irregularidad de la vida de sus padres, puesto que forzosa, necesariamente, deben tenerlo y que, en todo caso, los resultados de una equivocación semejante, solo daña á los que voluntariamente se han puesto en condición de sufrirla pasivamente. El estado, la sociedad, el hijo, tienen derecho á descubrir y conocer cuál es el padre, para compelerlo á cumplir el deber más sagrado de los que la naturaleza impone, mientras que el padre no tiene derecho á sustraerse al cumplimiento de los deberes que la paternidad irroga. Debe entonces favorecerse la prueba de la filiación natural, puesto que en ello, si alguna injusticia pudiera haber en



cuya prueba corresponde al que la alegue.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 31, Ser. 3ª.

9. Filiación natural—En vida del padre, puede justificarse por todos los medios que la ley permite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 319, Ser. 3ª.

10. Filiación natural—Si ésta ha sido reconocida por el padre en instrumentos públicos, no se requiere igual declaración para intervenir en los autos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 434, Ser. 3ª.

11. Filiación natural—Justificada la posesión de estado,

casos excepcionales, siempre sería insignificante comparada con la gran injusticia que resultaría de restringirla cuando se trata de hechos en que el interesado, el hijo, no fué parte, ni está en sus manos procurarse otros elementos de convicción que los que la suerte le ofrece, á pesar de las precauciones que oportuna y meditamente pudo tomar el padre. Estos fueron los fundamentos de la sentencia de 1ª Instancia dictada por el Dr. Pizarro, los que fueron reproducidos por el Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés; agregando que la filiación natural debiera declararse porque, por una parte el tiempo que duraron las relaciones coincidía con la época del embarazo; y por otra parte, no se había justificado que aquella mantuviese durante la misma época con otros individuos iguales relaciones.

9—Art. 325 del Cód. Civ. De acuerdo con la jurisprudencia establecida por los Tribunales. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Filiación natural*, núms. 1 y 6; tom. 1, mismo verb., núm. 1218.

10—El art. 325 del Cód. Civ. dice: «Los hijos naturales tienen acción para pedir ser reconocidos por el padre *cuando éste negase* que son hijos suyos.» No negando el padre durante su vida la paternidad, no es precedente la acción. Este fué el argumento del juez de 1ª Instancia, pero la sentencia en su parte dispositiva declaró al postulante hijo natural del demandado. El Fiscal Dr. Cortés dijo, que como la filiación constaba en documentos auténticos y fehacientes, como lo son las actuaciones judiciales y la partida de bautismo sacada de los libros parroquiales, en su concepto el pleito no tenía razón de ser, pues no es necesaria la declaración del Juez cuando existe el reconocimiento expreso del padre. La Cámara confirmó la sentencia declarando la filiación natural en la forma solicitada.

11—Art. 325 del Cód. Civ.



procede la declaración de filiación natural.— Jur. Civ. tom. 7, pág. 229, Ser. 3^a.

12. Filiación natural.—Procede el rechazo de la acción de filiación natural ejercida por la nieta en virtud del derecho de representación, en tanto no justifique el reconocimiento hecho en vida por la madre natural.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 3^a.

13. Filiación natural.—Justificada la posesión de estado, la declaración de la filiación natural es ineludible.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 195, Ser. 4^a.

14. Filiación natural.—Tratándose de probar la pose-

12—La hija legítima de un causante se presentó reclamando derechos hereditarios en la sucesión de la madre natural de su padre legítimo; la sentencia rechazó la demanda fundándose en que no se comprobó suficientemente la filiación natural del padre de la actora. Si no se comprueba la filiación natural del padre, la demanda no puede prosperar, porque este hecho es el fundamento de la acción deducida.

13—Art. 325 del Cód. Civ.

14—Esta sentencia se dictó por mayoría de un voto en la Cámara. El Juez de 1^a Instancia dijo que los hechos probados eran más que suficientes para establecer la posesión de estado invocada por los hijos naturales, y que por nuestra antigua legislación bastaba para probar la filiación natural, el hecho de nacer el hijo en casa del hombre que tenía en la madre su concubina, cuando los padres podían casarse. Bastaba esta circunstancia para considerar probada la filiación; lo propio sucede en la legislación vigente. Pero cuando la concubina tiene un hijo y el concubinato continúa, debe presumirse que el hombre que la tiene en su casa reconoce por suyo el hijo que nace del concubinato. El sostener á los hijos de la concubina nacidos durante el concubinato, el tratarlos como hijos, presentarlos como tales á sus relaciones y á sus parientes, ya no deja duda alguna del reconocimiento que de la filiación hace el padre. ¿Qué mejor prueba podría exigirseles á los hijos? Esto preguntaba el Juez Dr. Pizarro al dictar esta luminosa sentencia. Resolución que fué dada de acuerdo con la opinión del Agente Fiscal. Apelada la sentencia, el Fiscal de las Cámaras Dr. Marengo pidió su confirmación. La Cámara la revocó por mayoría de un voto, fundándose ésta en que la falta de detalles en la declaración de los testigos era tan



sión de estado para declarar la filiación natural, no basta que los testigos declaren el reconocimiento hecho en su presencia, se requiere que determinen los hechos en virtud de los cuales se produjo, las personas presentes y todos los detalles ó circunstancias que puedan demostrar al

absoluta y que bastaba por sí sola para que se considerara completamente ineficaz la prueba testimonial. Aun bajo el sistema preceptivo, decía la mayoría, establecido en las leyes de Partidas, para la apreciación de esta prueba, se recomendaba muy especialmente á los Jueces, que al interrogar á los testigos cuiden de averiguar por sus respuestas, si saben lo que deponen por haber visto el hecho ó la cosa en disputa, con espresión de las fechas, lugar y de las personas que estaban presentes, enunciando en una palabra todas las circunstancias que pueden contribuir á demostrar la sinceridad del testigo y el conocimiento completo de los hechos acerca de los cuales depone. Y tales exigencias ó formalidades son aun más de rigor, ahora que la ley libra á la sana crítica del magistrado la apreciación del valor probatorio de la testimonial, teniendo muy en cuenta la razón de ciencia que los testigos hubieren dado, formalidades y exigencias que se hacen aun más necesarias en las causas de filiación, en las que de las esplicaciones que los testigos suministren deberá ó no resultar el conjunto de hechos que establezcan la prueba compleja de la posesión de estado, de hechos que demuestren un reconocimiento continuo y perseverante de muchos y variados actos. Para que las declaraciones puedan apreciarse conforme á las reglas de la sana crítica, es necesario que los testimonios espresen los hechos en que las fundan, pues de otra suerte, no manifestándose en qué consisten los actos de reconocimiento del padre, que dicen haber presenciado, serían los testigos y no el Juez, quienes en definitiva vendrían á juzgar si esos actos son ó no suficientemente demostrativos de la paternidad, lo que es inadmisibile. La minoría dijo todo lo contrario y manifestó que era tal el convencimiento que se apoderaba de su espíritu después del estudio de las pruebas producidas que no trepidaba un solo momento en votar por la confirmación de la sentencia, y se preguntaba: ¿Qué pruebas deben producirse en los casos de filiación natural? ¿Podría decirse escluidas algunas de las que se admiten por derecho para comprobar los hechos en general? La ley y la jurisprudencia contestan que nó. Los testimonios producidos, son concordantes todos ellos y procedentes de personas mayores de toda escepción, son sin duda suficientes para producir la prueba legal, conforme al principio consagrado por la ley 32,



Juzgado la ciencia y conciencia de la declaración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4^a.

15. **Filiación natural**—La prueba plena de los impedimentos dirimentes no dispensables que cambiarían el carácter de la filiación y obligarían á los Jueces á rechazar la demanda, corresponde al que invoque su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4^a.

16. **Filiación natural**—En vida del demandado, puede probarse por todos los medios que la ley admite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4^a.

17. **Filiación natural**—La prueba de la posesión de es-

tit. 16, Part. 3^a, sino también el convencimiento más completo de la filiación natural por la posesión de estado de que gozaron los menores en vida de sus padres. Esta clase de prueba debe tomarse en su conjunto; cada testigo no puede presentar la corrección irreproachable de un documento público, y basta que no estén convencidos de falsedad, ni haya sospecha de que lo sean, para llevar al ánimo del Juez la prueba de la verdad de sus declaraciones. Los testigos habían contestado á cada una de las preguntas que se les hizo, afirmando los hechos por el conocimiento personal que de ellos tenían; es decir, eran testigos de ciencia propia, no de oídas, y si no abundaron en otros detalles, no puede decirse por esto que carezcan de valor sus declaraciones, bastando saber que sobre esos detalles ó circunstancias en que podrían haber abundado no fueron preguntados. La demanda sobre filiación natural, fué rechazada por el voto de tres camaristas contra dos, habiendo tenido éstos en su favor las opiniones del Juez de 1^a Instancia, del Agente Fiscal y la del Fiscal de las Cámaras; total: cinco magistrados contra tres habiendo salido triunfante la opinión de éstos últimos que no consulta los verdaderos principios de la justicia, según puede verse por la exposición que queda hecha.

15—Véase: *Impedimentos dirimentes*, núm. 1.

16—Véase el núm. 9.

17—El padre había manifestado á algunas de sus relaciones, en un carácter íntimo y confidencial, que tenía una hija: esto no constituye la posesión de estado, ni siquiera puede tener el efecto de una prueba del reconocimiento de la filiación por ser regla admitida que las manifestaciones fuera de juicio solo revisten el carácter de confesión cuando se hacen con el propósito indudable de reconocer una obligación, y no

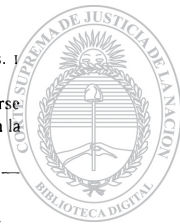


tado para declarar la filiación natural, después de la muerte del padre, debe ser clara y concluyente; no basta la sola confesión estrajudicial del causante si fué hecha incidentalmente y sin propósito determinado. — Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4^a.

18. Filiación natural—Justificada la posesión de estado, debe declararse la filiación, aun cuando el padre haya omitido hacer tal reconocimiento en el testamento. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 347 Ser. 4^a.

como referencia incidental de un hecho ó acontecimiento al que no se le dá el alcance de expresión jurídica de la voluntad—Ley 7, tit. 13, Part. 3^a—Por liberal que sea nuestra legislación y por amplias las facultades conferidas á los Jueces para apreciar los hechos constitutivos de la posesión de estado, es necesario que la prueba producida sea aquella que se ve, que habla, que se palpa, esa prueba en cuya presencia el Juez puede dar su fallo con ánimo tranquilo. Se ha repetido con insistencia que la prueba de la posesión de estado por su índole propia no puede ser librada á la apreciación de los testigos y que si en algún caso éstos deben limitarse á deponer sobre los hechos, deduciendo el Juez sus consecuencias sin sujeciones estrañas, nunca debe observarse con más escrupulosidad el principio, que cuando se trata de la prueba de la filiación natural, por el mismo misterio de que la ley ha rodeado á los fenómenos de la generación y por la misma facilidad de ser inducidos los testigos en error. La amistad, la sociedad, la generalidad del dicho, no son razones concretas con las que pueda encadenarse las conciencias de los Jueces. Se ha dicho que la prueba de la posesión de estado debe ser pública, y si esa publicidad no ha de ser siempre absoluta, tampoco los hechos demostrativos de la posesión de estado pueden ser de tal carácter que hayan debido escapar al conocimiento de los testigos. No puede considerarse como un reconocimiento cuando no aparece ni el concubinato, ni los cuidados prestados á la madre y al hijo en los primeros momentos del alumbramiento de aquella, ni más tarde los vínculos del cariño manifestado por el alimento, el vestido, la educación, el trato, el nombre y en general esos hechos con los que la sociedad sabe distinguir los lazos del parentesco.

18—Y aun cuando hubiese afirmado no tener sucesión natural.— Art. 121, Cód. Civ.



Filiación natural—Véase: *Partida de bautismo*, núms. 1 y 2—*Hijo natural*, núm. 1.

1°. **Finca**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero á quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3ª.

Finca—Véase: *Escritura*, núm. 4—*Incidente*, núm. 2—*Venta*, núm. 10.

Finca contigua—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

Finca gravada—Véase: *Abogado*, núm. 10.

1°. **Firma**—Reconocida la que suscribe una diligencia judicial, queda reconocido todo su contenido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 3ª.

2. **Firma**—Autenticada la firma de un documento privado, por fallecimiento del firmante, se considera autenticado su contenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Serie 3ª.

3. **Firma**—Solo puede exigirse al firmante el reconocimiento de la firma de una obligación.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 81, Ser. 4ª.

4. **Firma**—La negativa á ratificarse en la de una tran-

1ª—El desglose del documento debe hacerse en la forma ordenada por la Cámara. Véase: *Inst.*, tom. 3ª, verb. *Desglose*, núm. 9.

1ª—Art. 469 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Documento privado*, núm. 3.

3—Porque solo en este caso puede aplicarse la sanción contenida en el art. 1031 del Cód. Civ., ni hacerse efectivo el apercibimiento establecido en el art. 142 del Cód. de Proc.

4—Presentada en autos una transacción, una de las partes fundándose en que su contrario se había rehusado á firmar un escrito aclaratorio de la misma, manifestó el hecho al Juzgado pidiendo negara su aprobación al convenio celebrado, á lo que se proveyó de conformidad. La Cámara revocó el auto fundándose en que la ley no exige para la validez de las transacciones la observancia de formalidades extrínsecas, imponiendo solo, cuando versare sobre derechos litigiosos, que sea presentada al Juez de causa y firmada por los interesados —ar-



sacción, no impide su aprobación.—Jur. Civ., tom. 9, página 82, Ser. 4^a.

5. Firma.—La falta de firma de la copia, no basta para dar por no presentado el escrito, si el secretario lo recibió sin observación.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 136, Ser. 4^a.

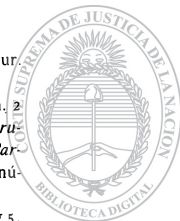
6. Firma.—A objeto de autenticarlas los firmantes, pueden comparecer sin las formalidades que la ley establece para los testigos.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 10, Serie 4^a.

7. Firma.—No procede el reconocimiento de la firma artículos 837 y 838 del Cód. Civ.—Estas mismas disposiciones autorizan únicamente el desistimiento de los interesados antes que la transacción sea presentada a la autoridad judicial, quedando definitivamente concluida, según el argumento del último artículo, después de aquella presentación ó después de haberse acompañado la escritura en que ella conste. La diligencia de ratificación no es un requisito necesario para la subsistencia jurídica del acto que ha quedado perfecto por su presentación al Juez, teniendo además para las partes la autoridad de la cosa juzgada. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Firmas*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Escrito*, núm. 8.

6—El Juez de 1^a Inst. no hizo lugar á que los firmantes de ciertos recibos, que fueron presentados con menos de tres días de anticipación al vencimiento del término de prueba, concurrieran á ratificarse en sus firmas, fundándose en que ellos no eran parte en el juicio, y en que además ni aún como testigos podían ser admitidos por cuanto cuando fueron presentados, faltaba menos de tres días para vencerse el término probatorio, de manera que no había sido posible dar cumplimiento á la disposición imperativa del art. 184 del Cód. de Proc. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que solo se trataba de acreditar la autenticidad de los documentos agregados, no siendo indispensable que la comparecencia al juicio para el reconocimiento se produzca en la forma establecida en el auto de 1^a Inst. En el caso del sumario no se trata de la prueba de testigos sino de la prueba instrumental, estando esta diligencia regida por el art. 139 y siguientes del Código de Proc.

7—Porque esta medida está autorizada por el inc. 2^o del art. 435 del Cód. de Proc. con el objeto de preparar la vía ejecutiva. Si aún reconocida la firma, la ejecución no queda preparada, esa medida no pue-



de una obligación sin plazo, por no ser ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 3^a.

Firma—Véase: *Desacato*, núm. 2.—*Mandatario*, núm. 2.—*Esposos*, núm. 1.—*Escritura pública*, núm. 22.—*Instrumento privado*, núm. 4.—*Prueba de peritos*, núm. 1.—*Partida de bautismo*, núm. 2.—*Nulidad de un testamento*, número 2.

Firma á ruego—Véase: *Documento privado*, núms. 4 y 5.

Firma del fiador—Véase: *Contrato*, núm. 18.

Firmantes—Véase: *Autenticidad*, núm. 1.—*Documento privado*, núms. 3 y 4.—*Prescripción de la obligación*, número 1.—*Testamento*, núm. 3.—*Escritura pública*, número 29.—*Acción*, núm. 3.—*Acto jurídico*, núm. 2.—*Compra-venta*, núm. 2.—*Boleto de compraventa*, núm. 13.

Fisoo—Véase: *Título de propiedad*, núm. 20.

1. Fondos—La madre, en ejercicio de la patria potestad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, página 232, Ser. 4^a.

de ordenarse porque no tendría objeto, por cuanto no tiene plazo, y por consiguiente carece de uno de los recaudos indispensables para hacer procedente la vía ejecutiva. Con efecto, el art. 618 del Cód. Civil preceptúa que si no estuviere determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el Juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Tampoco procedería el reconocimiento en el juicio ejecutivo, pues como medida de prueba que es, debe solicitarse en la estación oportuna del juicio.

1.—A falta del padre ejerce la madre la patria potestad sobre sus hijos menores—art. 305, Cód. Civ.—Y siendo la patria potestad el conjunto de los derechos que las leyes acuerdan á los padres sobre la persona y bienes de sus hijos, no pueden ser privados de ella sin causa legal justificada. Entre esos derechos se encuentra el que determina el art. 393, que los faculta para administrar los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad: no hay disposición alguna legal que obligue á los padres á tener depositados los dineros de sus hijos menores,



2°. Fondos—Depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 311, Ser. 4ª.

Fondos—Véase: *Intereses*, núm. 1—*Embargo*, núms. 1 y 4—*Emancipación*, núm. 2—*Esposa*, núm. 4.

Fondos extraídos—Véase: *Depósito judicial*, núm. 1.

Fondos particulares—Véase: *Bienes*, núm. 5.

Fondos públicos—Véase: *Administrador*, núm. 1.

Fondos testamentarios—Véase: *Heredero*, núm. 4—*Herederos*, núm. 6.

1. Forma—El consentimiento de las partes exigido en un contrato por escritura pública, debe revestir la misma forma: el tácito que resulte del conocimiento personal que tuvo de la infracción, no importa la renuncia de su derecho para exigir la rescisión estipulada como pena.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4ª.

2ª. Forma—La prueba de las modificaciones á un contrato por escritura pública, debe revestir igual forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 4ª.

Forma auténtica—Véase: *Hijo natural*, núm. 9.

Forma de pago—Véase: *Construcciones*, núm. 2.

Forma determinada—Véase: *Dinero propio*, núm. 2—*Bienes*, núm. 4.

Forma intrínseca—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 5.

Forma tácita—Véase: *Ratificación*, núm. 2.

Formas esternas—Véase: *Instrumento público*, núm. 3.

Formalidades—Véase: *Nulidad de sentencia*, núms. 14 y 19—*Firma*, núm. 6—*Notificaciones*, núm. 5.

2ª.—Véase: verb. *Embargo*, núm. 20.

1.—Véase: verb. *Contrato por escritura pública*, núm. 1.

2ª.—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 4º, verb. *Contrato de mayor cuantía*, núms. 1 y 2.



Fórmula—Véase: *Abogados*, núm. 2.

Fraude—Véase: *Escritura pública*, núm. 32—*Escritura*, núm. 2—*Nulidad de un acto jurídico*, núms. 2 y 3—*Revocación*, núm. 1.

1^a. Frutos—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó renta de los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4^a.

Frutos—Véase: *Heredero poseedor*, núm. 1.

1^b. Fuero federal—El demandante por acción personal, puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 113, Ser. 3^a.

1^c. Fuerza ejecutiva—Para que el testimonio de una sentencia tenga fuerza ejecutiva, debe contener constancia expresa de que está ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 2, página 229, Ser. 4^a.

Fuerza ejecutiva—Véase: *Afirmados*, núm. 3—*Obligación á plazo*, núm. 1.

Fuerza legal—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1^d. Fuerza mayor—Los hechos que previstos y tomados en consideración al formar el contrato, se suceden fuera de las condiciones naturales, importan la fuerza mayor que permite faltar á su cumplimiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 301, Ser. 4^a.

2. Fuerza mayor—Se conceptúa tal, la orden de una administración nacional que amparada por la fuerza pública

1^a—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Acción personal*, núm. 1.

1^c—Art. 535 del Cód. de Proc. «Consentida ó ejecutoriada la sentencia», dice el artículo citado.

1^d—Véase: verb. *Caso fortuito*, núm. 1.



deja sin efecto órdenes municipales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 186, Ser. 4^a.

Fuerza mayor—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 97.

1^a. Fuerza probatoria—Carecen de ella las declaraciones de testigos en que no se hubiesen observado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3^a.

Fuerza pública—Véase: *Fuerza mayor*, núm. 2.

Funcionario—Véase: *Acto jurídico*, núm. 2.

1^b. Funcionarios públicos—Los Tribunales ordinarios son competentes para entender en una acción por daños y perjuicios contra funcionarios públicos, sin que sea necesario que los superiores del demandado se pronuncien sobre su culpabilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 89, Ser. 3^a.

2. Funcionarios públicos—Los jueces no son demandables por daños y perjuicios ante los Tribunales ordinarios si la acción tiene por fundamento actos llevados á efecto en su carácter de funcionarios del Poder Judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 345, Ser. 3^a.

3. Funcionarios públicos—La aprobación del superior y aún la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

4. Funcionarios públicos—Que estralimitando las atribuciones que la ley les confiere, irrogan perjuicios, son responsables civilmente de su indemnización.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

5. Funcionarios públicos—Que estralimitando sus facul-

1^a—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 15.

2—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 14.

3—Véase: verb. *Facultades legales*, núm. 2.

4—Art. 1112, Cód. Civ.

5—Véase el número precedente.

tades causan un daño, son responsables de los perjuicios que ocasionen.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

Fundación—Véase: *Capellanía*, núms. 4 y 5.

Fundador—Véase: *Capellanía*, núms. 1 y 2.

Fondos adyacentes—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 24.





Ganancia—Véase: *Juramento estimatorio*, núm. 9.

1^a. **Gananciales**—Solo puede oponerse á la inclusión de bienes en los gananciales, el esposo que se considere con derecho esclusivo á ellos.—Jur. Civ., tom. 1, página 328, Ser. 3^a.

Gananciales—Véase: *Bienes*, núms. 1 y 5.

Garantía—Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

1^b. **Gastos**—El padre debe proveer de la suma necesaria para gastos de instalación de los menores además de la pensión alimenticia fijada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 419, Ser. 4^a.

1^a—El inmueble fué adquirido durante la sociedad conyugal, debiendo considerarse como ganancial—art. 1272, inc. 2^o, Cód. Civ.—Cualquiera de los cónyuges que pretenda derechos propios esclusivos, debe comprobar que el inmueble es de su esclusiva propiedad. La ley presume que el bien es ganancial, salvo prueba en contrario.

1^b—Se había fijado una suma que el padre debía abonar como pensión alimenticia para sus hijos menores. Después se pidió además una suma para instalar á los hijos, proveyéndoles de muebles. El Juez dijo que en la primera suma fijada no estaban comprendidos esos gastos, los que indiscutiblemente debían ser abonados por el padre. El art. 372 del Cód. Civ. establece que la petición de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario, correspondientes á la condición social del que lo recibe y al caudal del alimentario, y que por consiguiente procedía la fijación de una suma para instalar á los hijos.



2°. Gastos—El padre, usufructuario de los bienes de los menores, no puede cargar á éstos los gastos de contracción directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

3. Gastos—El acreedor que ha dado fianza al recibir en pago el bien hipotecado, está obligado á la devolución en efectivo de lo que fué imputado á la deuda, pero nó de lo que se le adjudicó por costas y gastos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 394, Ser. 4ª.

Gastos—Véase: *Costas*, núms. 15 y 45—*Daños y perjuicios*, núm. 23.

Gastos generales—Véase: *Litisespensas*, núm. 1.

Gastos urgentes—Véase: *Tutor*, núm. 1.

Gastos verificados—Véase: *Tutor*, núm. 5.

Gefe—Véase: *Proveedor*, núm. 1.

Gestión—Véase: *Contrato*, núm. 4—*Caución*, núm. 2.

1. Grado—El heredero de grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

2°. Grado—El derecho que la ley confiere al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios, por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser usado, si el último aceptando la herencia ejercitó ese derecho.—Jur. Civ., tom. 6, página 250, Ser. 3ª.

Grado inferior—Véase: *Prelación*, núm. 1.

2ª—Véase: *Bienes de menores*, núm. 6.

3—Véase: verb. *Costas*, núm. 58.

1—Véase: verb. *Derecho de petición*, núm. 2.

2ª—Véase: *Derechos hereditarios*, núm. 4.



1. Graduación de créditos —El término para deducir oposición al estado de graduación de créditos, vence el día fijado en los editos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 3^a.

Graduación de créditos—Véase: *Honorarios*, núm. 26—*Acreedor hipotecario*, núm. 1.

Gratuidad—Véase: *Depósito de muebles*, núm 1—*Servicios*, núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12.

Gravamen—Véase: *Comprador*, núm. 4.

Guardadores—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 79.

1—El art. 758 del Cód. de Proc. previene que el estado de graduación de créditos quedará depositado en la oficina del actuario por el término de quince días para que puedan inspeccionarlo los acreedores, y agrega, que se anunciará en los periódicos que el Juez designe el depósito del estado y el término por el que estará á disposición de los acreedores. Ese término empezará á correr desde la fecha de la inserción del aviso en los diarios.



Haber hereditario—Véase: *Alimentos*, núm. 9—*Padre*, núms. 3 y 4.

Haber líquido—Véase: *Tutor*, núm. 8.

Habilitado—Acuerdo prohibiendo al habilitado de los Tribunales hacer anticipos de sueldos á los empleados y percibir remuneración aunque sea voluntaria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 266, Ser. 4^a.

Hecho—Véase: *Prescripción de la indemnización*, número 1—*Costas*, núm. 23—*Divorcio*, núm. 4—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6.

Hecho condicional—Véase: *Contrato verbal*, núm. 3.

Hechos—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1—*Demandante*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núms. 6, 8 y 18—*Prueba en segunda Instancia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 113—*Hijo natural*, núm. 7.

Hechos confesados—Véase: *Instrumento público*, núm. 4.

Hechos contradictorios—Véase: *Prueba*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 7.

Hechos graves—Véase: *Patria potestad*, núm. 2—*Demanda*, núm. 3—*Calumnia*, núm. 2—*Costas*, núm. 59—*Escepción de defecto legal*, núm. 19.

Hechos inmorales—Véase: *Patria potestad*, núm. 1.

1. **Heredero**—El reconocimiento del carácter heredita-



rio hecho por los coherederos, es prueba suficiente, siempre que no afecte intereses de terceros.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 357, Ser. 3^a.

2. **Heredero**—El carácter de locatario que importa herencia á nombre de otro, no puede modificarse por la sola voluntad, y por tanto se conserva aun en el caso de que por hechos sobrevinientes pudiera ser cambiado por el de heredero, mientras judicialmente no fuere reconocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 4^a.

3. **Heredero**—De grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3^a.

4. **Heredero**—El heredero que paga deudas de la sucesión reconocidas como auténticas por los demás coherederos, se subroga á los acreedores y tiene derecho á exigir su reembolso de los fondos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117, Ser. 4^a.

5. **Heredero**—El más próximo debe obtener la posesión

1—Véase: verb. *Terceros*, núm. 1.

2—Arts. 2352 y 2354 del Cód. Civ.

3—Véase: verb. *Derecho de petición*, núm. 2.

4—Se trataba de una deuda que los herederos debían pagar con preferencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 3495 del Cód. Civ. Si un heredero abona esas cuentas la subrogación se opera en virtud de lo establecido en el art. 792, inc. 3; y 771, inc. 1^o del Cód. Civil.

5—Esta resolución se dictó tomando como fundamento la vista del Fiscal Dr. Marenco, quien decía: «Cuando pretenden una herencia personas que figuran en distinto grado sucesible y surge controversia sobre el título hereditario que invocan, solamente la carencia completa de elementos probatorios puede dar lugar á que se reconozcan como herederos á los que serían escludidos si otros justificaran el parentesco en el cual fundan su título. De otro modo obtendrían el carácter hereditario

de la herencia con preferencia al más lejano.—Jur. Civ. tom. 3, pág. 24, Ser. 4^a.

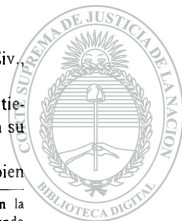
6. **Heredero**—Antes de la partición, los herederos tienen derecho á pedir una cuota alimenticia imputable á su haber.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 399, Ser. 4^a.

7. **Heredero**—El que recibe como de su causante el bien

y la posesión de la herencia los que más actividad desplegaran en la comprobación del parentesco. Así veríamos á los colaterales escluyendo á herederos directos, y entre aquellos escluyendo los más remotos á los más próximos. En el caso actual aspiran al título hereditario personas que se dicen hijas del causante y otra que se dice hermana. Los primeros tienen en su favor una partida de bautismo y ofrecen comprobar el matrimonio. La segunda ha comprobado su parentesco y por el simple hecho de desconocer el carácter de hijos legítimos, que los primeros invocan, pretende que se la declare heredera y se obligue á los que se dicen hijos á justificar en juicio contradictorio el carácter de tales. Esto es contrario á toda razón y justicia, y por consiguiente opino que V. E. debe confirmar el auto apelado que manda admitir una información sumaria para comprobar el matrimonio del causante con la madre de los pretendidos hijos, á consecuencia de la falta de asientos en los libros parroquiales que lo acredite en debida forma.»

6—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 9.

7—Varios hermanos heredaron conjuntamente de su padre un inmueble, adjudicándose por la partición de dicha herencia á cada uno de los coherederos una parte en dinero sobre la mencionada finca: es decir, que la propiedad fué tasada en una suma determinada y en ese precio se adjudicó á cada heredero su parte, de manera que no hubo división material, sino simplemente ideal. Posteriormente, mucho tiempo después, por muerte de uno de los coherederos primitivos, la finca fué adjudicada en su totalidad á los sucesores de uno solo de los coherederos, con olvido y prescindencia del coheredero que tenía en ella una parte. Con estos antecedentes, el señor Juez de 1^a Instancia dijo que «basta dejar así planteada la cuestión para resolverla, á no ser que fuese efectivo que realmente la indivisión no existió desde su origen. Decía además el Dr. Mendez Paz, en esta bien meditada sentencia, la que fué injustamente revocada por la Cámara, que es insostenible pretender que la indivisión á que se ha hecho referencia ha dejado de existir, dados los hechos espuestos, pues la adjudicación en dinero sobre la finca, si dividía la herencia, no dividía la propiedad, que seguramente quedaba in-





hereditario, se supone que posee para sí, y los que se con-

divisa entre los condóminos adjudicatarios. Y habiendo quedado indivisa, hay que averiguar si los que oponían la prescripción han poseído ó han podido poseer legalmente la finca que pretendían ser de ellos, en virtud del único título que la posesión por el trascurso legal les puede acordar. Los coherederos primitivos, sin haber mediado otra causa, no han podido cambiar por sí la de su posesión y por lo tanto, cada uno de aquellos coherederos primitivos poseyó en común la cosa con los otros, según lo enseñan los principios más elementales del derecho—Ley 5, tit. 15, Lib. 4º, R. C.—y trasmitió á sus herederos y sucesores la mencionada propiedad en las mismas condiciones en que la tenía—art. 2353 y concordantes del Cód. Civ.—Por consiguiente, poseyendo los sucesores de los primitivos herederos, la propiedad litigada en las mismas condiciones que su causante, ella puede ser reivindicada por los que se consièren comuneros, á no mediar otras razones que puedan influir en las ulteriores de esa posesión, porque estando indivisa la propiedad, la acción que les acuerda los arts. 2679 y 2761 del Cód. Civ. es imprescriptible como lo ha sido siempre por la legislación anterior al Código. Se alegó asimismo haberse operado la retroversión del título: pero este argumento es inaceptable porque esa doctrina, sin ningún género de duda, es contraria á nuestra legislación antigua y vigente, y para demostrarlo basta citar los arts. 2447 y 2449 del Cód. Civ. La retroversión no existe ni puede existir entre nosotros, porque la posesión subsiste aún cuando el que poseía á nombre del poseedor *manifestase la voluntad de poseer á nombre suyo*—art. 2447—Y es esto precisamente lo que hizo uno de los coherederos primitivos y los sucesores de éste, porque cuando *aquel por medio del cual se tiene la posesión muere, la posesión se continúa por medio del heredero, aunque éste creyese que la propiedad y posesión pertenecían á su autor*. Luego, aunque por las cuentas particionarias de uno de los coherederos primitivos y de su esposa, los sucesores de estos hayan creído que la propiedad y la posesión pertenecían á sus causantes; ellos, los sucesores y herederos continuaban poseyendo con sus condóminos. Además, aún en el supuesto de que la retroversión del título estuviese admitida por nuestra legislación, ella, según la doctrina francesa, nunca procede sino cuando existen actos materiales que en el caso del sumario no han existido, y el mismo art. 2458, que se decía consagraba la doctrina de la retroversión, no solo no la consagra, sino que él se refiere, como lo enseña la Ley 13, tit. 3º, Part. 3ª en que se apoya el codificador, al caso en que hubiese una pérdida material de la posesión por actos de esa naturaleza *detrajendo*

sideren con derecho por un condominio anterior, deben

realiter possessionem et non per actos fictos—que no eran los que en el caso que nos ocupa habían existido. La excepción de prescripción no podía prosperar porque, no habiendo existido actos legales por los cuales puede pretenderse un cambio en la posesión, ni aquellos hechos *reales y efectivos* en virtud de los cuales se puede por derecho desapoderar á otro de la posesión que antes tenía, dicha posesión había continuado por medio de los mismos sucesores de los coherederos primitivos á favor de los otros; pues no pueden revestir ese carácter—*detradendo realiter possessionem*—la simple voluntad de cambiar la posesión, que otra cosa no importa «que el que poseía á nombre de otro, como los coherederos primitivos hayan arreglado sus sucesiones testamentarias como si las cosas les perteneciere en su integridad completa,» cómo decía el escepccionante. Aun en la hipótesis de que el art. 2458 del Cód. Civ. consagrara la doctrina de la retroversión del título, ella no se habría realizado porque no se habrían cumplido las condiciones exigidas por la ley que sirven de fundamento á este artículo—Ley 13, tit. 30, Part. 3ª citada—á saber, actos exteriores que tengan la capacidad legal de producir el efecto de la pérdida de la posesión. Esta bien meditada sentencia fué revocada por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias, fundándose en que, si bien es cierto que las adjudicaciones no se hicieron en fracciones determinadas de terreno, sino en cantidades de dinero, según el valor respectivo de los mismos, debe tenerse en cuenta, en lo que respecta á la articulación promovida, que según manifestaciones espresas de los actores y resultante de la causa, ocurrido en 1847 el fallecimiento de uno de los coherederos primitivo y causante de los poseedores actuales, el predio cuestionado figuró entre sus bienes fincados, siendo inventariado en ese carácter, y adjudicado en su totalidad á una de estas últimas según división practicada el mismo año del deceso de uno de los primeros : que habiendo fallecido más tarde y promovido el juicio respectivo de testamentaria, la referida propiedad fué adjudicada por fracciones á sus hijos que son los que la ocupan actualmente y contra los cuales se ha deducido la presente demanda reivindicatoria. Que dados estos antecedentes y cualquiera que sea el alcance ó inteligencia que se atribuya á la partición originaria de 1816, es incuestionable, que la cosa ha sido poseída *animo domini* por uno de los sucesores una vez que le fué adjudicada en su carácter de heredero, en su totalidad y con prescindencia absoluta de los primitivos coherederos. Que es evidente que si esta adjudicación, por la forma en que se llevó á cabo, lesionaba los derechos de los otros coherederos, debieron éstos ejercitar sus





ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir

acciones en el modo y en el tiempo que las leyes entonces vigentes les acordaban, que la propia demanda ha puesto entre tanto de manifiesto la inacción ó negligencia, tanto de la causante como de sus sucesores universales, á contar desde la época remota en que se verificó á favor de uno de ellos, la adjudicación de la finca hasta la fecha de la demanda, es decir, durante cuarenta años próximamente. Que en esta situación y en conformidad á nuestras antiguas leyes, bajo cuyos preceptos cae el caso *sub-judice*, es indiscutible la procedencia de la articulación opuesta por los sucesores de los primitivos coherederos. Según las leyes 63 de Toro, y 6ª, tít. 15, lib. 4ª, R. C., las obligaciones inistas de personal y real se prescribían á los treinta años. La Ley 7ª, título 14, Part. 6ª, establecía á su vez que: «si aquel que ha derecho en la heredad, non la demanda á los tenedores della fasta los treinta años sabiendolo y pudiendolo fazer, pierde por su negligencia aquel derecho que en ella auia e ganala por este tiempo el otro que la touo.» Estos principios son hoy doctrina general; han sido incorporados á las disposiciones del Código Civil—arts. 3949 y 4017—y es oportuno recordar que según las fuentes que han inspirado estas disposiciones, la prescripción propiamente dicha, no requiere en general otra condición que la inacción ó negligencia de aquel contra quien se invoca. Que en cuanto á los hechos, los demandados han justificado con haber ocupado pública y pacíficamente y sin interrupción el inmueble, por más de cuarenta años, sin que de su parte los otros coherederos ó sus causantes hayan ejercitado sobre el acto posesorio alguno. Que de otro lado no se ha intentado siquiera demostrar por los mandantes, que durante este largo lapso de tiempo hayan hecho valer los derechos que al presente gestionan, ni reclamado judicial ó extrajudicialmente contra los poseedores del predio por razón de la adjudicación de 1847. Con la prueba de confesión solo se ha tratado de establecer que la actora había vivido en la quinta hasta el año de 1868, lo que no se niega por la defensa, aunque se afirma que fué como simple locataria y además que los demandados creyeron constantemente que el predio en cuestión les correspondía en condominio, lo que ha sido categóricamente contestado. Las buenas relaciones de amistad entre los antecesores del demandante y demandado, relaciones que persistieron hasta el fallecimiento de los primeros, no es un extremo que conduce al artículo ni que favorece el derecho de los reivindicantes, siendo en verdad inexplicable esa frecuencia de tratos con personas que habían inferido serios agravios á sus derechos, y más inexplicable aún durante largos años. Esta sentencia de la Cá-

la prescripción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 111, Ser. 4.^a

mar no resista la más sencilla de las réplicas. Estudiando sus fundamentos se ve que no es la justicia la que campea en este fallo sino el más evidente y palmario de los errores jurídicos que pueden cometerse. Puede decirse que el fallo dictado por el Dr. Mendez Paz, es la más clara protesta contra este avance violatorio de la legislación, llevado a cabo por la Cámara. Se cita la ley 7.^a, tit. 14, Part. 6.^a, para fundar el derecho que tenían los sucesores de uno de los coherederos primitivos para prescribir por la mera inacción de sus condóminos. Pero si esta ley rige para los casos en que no existe indivisión, no puede regir para cuando esa indivisión existe. La cita hecha por la Cámara adolece de la más evidente mala fe. Es una cita verdaderamente falsa. Dicha disposición legisla para el caso en que no sea el coheredero ó el condómino el que posea los bienes de la herencia, sino cuando el poseedor sea un extraño ó un tercero respecto del verdadero heredero. Así, uno de los ejemplos, dice: «La primera es, quando aquel que la tiene, cuida auer derecho en ella por alguna razon e non lo ha. E esto sería, si la ouisse comprado de alguno que non ouisse derecho en ella, cuidando que era suya; ó si alguno fuesse establecido por heredero en alguno testamento, que después fuese reuocado, non lo sabiendo él. E en tal caso dezimos, que si aquel que dize que ha derecho en tales bienes como éstos non lo demandare en juyzio fasta diez año, á aquel que assi lo tiene, scyendo en la tierra ó fasta veinte seyendo en otra parte, que perdería despues su derecho; e gana la herencia aquel que fuesse asi tenedor de ella.» Como se ve en el caso citado por la Ley de Partida, no hay estado de indivisión, no hay condominio, sino que toda la herencia pasa por testamento á una persona que á no existir éste, no tendría derecho á la herencia, sino que correspondería al heredero legítimo. Cuando existe condominio, esa prescripción no procede aun que pasen mil años; porque esa posesión es viciosa y nadie pueda cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. Sinembargo el fallo de la Cámara viene á suprimir con un solo rasgo de pluma esta disposición legal que ha sido establecida como una de las más preciosas garantías contra la usurpación de la propiedad. Pero el inmueble era muy valioso y los demandados muy poderosos. Como se ha visto en el curso de esta nota: la división en vez de hacerse sobre el terreno, se había hecho sobre su valor, adjudicándose á cada heredero una suma determinada de dinero sobre una parte indeterminada del inmueble, ó mejor dicho, sobre todo él. La indivisión, pues, continuaba, porque como dice Demolombe: «La división





8. **Heredero**—No procede la venta de la cosa común si admite cómoda división en especie y si no existe la conformidad de los herederos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 4ª.

9. **Heredero**—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas, aumentan el haber del heredero encargado de ese pago, y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender se dividan las rentas por partes iguales, sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

10. **Heredero**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero a quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3ª.

Heredero—Véase: *De oficio*, núm. 6—*Falsedad*, núm. 6—*Administrador*, núm. 3—*Condominio*, núm. 9—*Poder especial*, núm. 6—*Rendición de cuentas*, núm. 25.

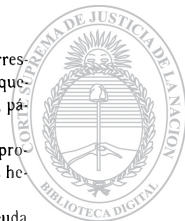
1. **Heredero poseedor**—El heredero poseedor de la herencia para ser completa y definitiva debe hacer cesar la indivisión completa y definitivamente entre los coherederos; y no existe verdadera y definitiva partición mientras la indivisión continúa subsistiendo de cualquier manera y sobre cualquier punto que sea.—Véase: tom. 15, § 614. —Si en vez de citar con toda malicia el párrafo trunco de la Ley de Part., la Cámara hubiese citado el que acabamos de transcribir, otra hubiese sido la suerte del pleito, pero no se ven sino las cosas que se quieren ver. El mismo demandado creyéndose vencido recurrió al argumento absurdo de la retroversión, la que está completamente desechada por nuestra legislación. Pero estaba escrito que debía triunfar y triunfó en contra de la ley espresa y de la doctrina sustentada por los publicistas más notables. El fallo está en abierta oposición con los artículos 2353, 2447, 2449, 2679, 2691 y 4019, inc. 3º del Cód. Civ.; Ley 5ª, tit. 15, lib. 4º, R. C.

8—Véase: verb. *División en especie*, núm. 1.

9—Véase: verb. *Condominio*, núm. 3.

10—Véase: verb. *Finca*, núm. 1.

1.—La regla establecida en la ley 4ª, tit. 14, Part. 6ª, es que el Juez al mandar que se entregue una herencia a aquel que debe haberla,



rencia, debe entregar á sus coherederos la parte correspondiente con sus frutos, desde que el derecho de aquellos fué reconocido judicialmente.—Jur. Civ., tom. 2, página 71, Ser. 3ª.

1. **Herederos**—Justificado el carácter hereditario, procede la declaratoria de universales pero no de únicos herederos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 252, Ser. 3ª.

2. **Herederos**—Para que el reconocimiento de un deuda por los representantes de los herederos obligue á la testamentaria, deben aquéllos tener facultad especial en el instrumento del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 259, Ser. 3ª.

3. **Herederos**—La compra á perpetuidad del terreno en que se encuentra la bóveda de familia, en venta particular y como heredero del anterior arrendatario, establece un condominio con los demás herederos, para cuya adquisición solo están obligados á abonar la parte que les corresponda en el precio de la compra.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 116, Ser. 3ª.

4. **Herederos**—O acreedores, solo pueden intervenir en... mandará también que se le entreguen los frutos de ella; pero si el anterior poseedor de la herencia, siéndolo de buena fe, hubiese gastado los frutos que hubiere percibido de la misma, no estará obligado á entregar su valor. Esta escepción establecida por la ley á favor del poseedor de buena fe, no puede beneficiar á aquellos que continúan en posesión de la herencia á pesar de haber sido reconocido judicialmente, á favor de otro, el derecho á esa herencia, pues la sentencia los constituye en poseedores de mala fe.

1—Los pretendientes á la herencia solo pidieron la declaratoria de *herederos universales* pero no de *únicos*, y fundándose la Cámara en esta circunstancia resolvió de conformidad.

2—El art. 1881 en su inc. 17, establece la necesidad de un poder especial para reconocer ó confesar obligaciones anteriores al mandato.

3—Véase: verb. *Compraventa*, núm. 4.

4—El Juez dijo que, desde el momento que el postulante no era

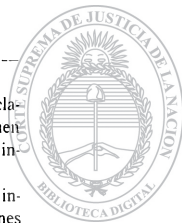


los autos testamentarios los herederos ó acreedores que hayan justificado su carácter.—Jur. Civ., tom. 1, página 159, Ser. 4^a.

5. **Herederos**—Los herederos no pueden reclamar de terceros, los bienes propios enajenados por los padres du-

acreedor reconocido contra la testamentaria, ni tampoco interesado, ni representante de alguno de los herederos, según resultaba de autos, no puede en manera alguna presentarse reclamando ninguna medida en dicha testamentaria. La Cámara confirmó el auto por sus fundamentos, y por no constar en autos comprobante alguno del carácter de acreedor invocado. El sumario no está bien, pues la parte que se relaciona con los herederos no fué materia de resolución en la Cámara.

5.—El antiguo derecho prohibía á los padres enajenar los bienes propios de sus hijos, quedando en su caso obligados los suyos y con la facultad reservada al heredero para perseguirlos de terceros. Pero este principio enunciado en la ley 24, tit. 13, Part. 5^a, no acordaba al heredero un derecho absoluto, hay en la misma un límite á su ejercicio. «E esto se entiende, dice. quando non quisiessen heredar nin auer parte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar en ellos, entonce non podrian demandar los sus bienes propios, a aquellos a quien los ouiesse el padre enagenado, segun que es dicho: porque todos los pleytos derechos que el padre ouiesse fechos, serian tenudos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuessen herederos.» Entre tanto, si el acto del causante era un acto válidamente celebrado en su forma como se ha visto, si él mismo no podría haberse alzado contra su firmeza estando por el contrario obligado á su cumplimiento, es fuera de duda, de acuerdo con las disposiciones escritas bajo cuyo imperio fué otorgado, que sus sucesores carecen de derecho para accionar en los términos de que instruye la demanda. *Quod ipsis qui contraxerunt, obstat, et successoribus eorum obstat.* No puede argumentarse con la inaplicabilidad de la Ley 24 citada, porque en el caso ocurrente el padre no enajenó ni malmetió los bienes de los menores, pues si para una situación semejante es inconcuso el principio, menos podría decirse contra su eficiencia cuando los actos del padre no lesionan tan gravemente los intereses de los hijos. El heredero sucede á su autor en todos sus derechos y obligaciones; siendo jurídicamente considerados como una sola persona.—Ley 13, tit. 9^o, Part. 6^a.—El sumario está de acuerdo con dos casos resueltos por la S. C. N.—tom. 8^o, pág. 492, Ser. 1^a, y tom. 13, pág. 267, Ser. 2^a.



rante su menor edad, si hubiesen aceptado la herencia.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 56, Ser. 4ª.

6. **Herederos**—Los parientes no pueden solicitar declaración á su favor si existe esposa, mientras no justifiquen en juicio contradictorio la falsedad del título que se invoca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 18, Ser. 4ª.

7. **Herederos**—La oposición á incluir un bien en el inventario, obliga á las herederos á deducir sus acciones contra el opositor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 4ª.

8. **Herederos**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aun después de aprobada la venta, hecha la oblación del precio y dada posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Serie 4ª.

Herederos— Véase: *Apoderado único*, núm. 1—*Administrador*, núm. 2—*Albacea*, núms. 1 y 7—*Bienes*, número 1—*Costas*, núms. 5 y 40—*Colación*, núm. 1—*Crédito líquido*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 2—*Cuidador*, núms. 1 y 6—*Documentos de depósito*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 18—*Herencia*, núm. 3—*Jurisdicción*, núm. 1—*Litispendencia*, núm. 1—*Prescripción contra*

6—La esposa se había presentado ejercitando los derechos que le correspondía en su carácter de tal sobre los bienes del marido. Con esta presentación quedan excluidos los parientes colaterales, pues éstos solo pueden suceder al hermano cuando no ha dejado ascendientes ni descendientes legítimos ó naturales ni esposa. A no ser que en juicio contradictorio se declare que esta última ha perdido el derecho á la herencia, por inacción ó por otra causa legal—art. 3424 del Cód. Civ.

7—La oposición sobre inclusión ó exclusión de bienes inventariados, debe sustanciarse por cuerda separada en el competente juicio ordinario—art. 66 del Cód. de Proc.

8—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.



menores, núm. 1—*Nulidad*, núms. 3 y 6—*Reivindicación*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núms. 1 y 15.

Herederos del esposo—Véase: *De oficio*, núm. 1.

1. **Herederos forzosos**—La mayor ó menor parte de la

1—Se trata de la nulidad de una partición estrajudicial hecha por escritura pública entre coherederos mayores de edad, en ejercicio del derecho que les acuerda el art. 3462 del Cód. Civ. Para que este acto sea nulo, es necesario demostrar que él es contrario á la esencia misma de la partición, ó que adolece de vicios de error, dolo, violación ó fraude—arts. 954 y 3462.—En el caso que nos ocupa, el acto no era contrario á la esencia misma de la partición. Con efecto, los que atacaban el acto, fundados en esta circunstancia decían, que ese atentado consistía en que debiendo la partición verificarse en partes iguales entre los herederos, se había adjudicado á uno de ellos una porción mucho mayor de la que le correspondía. Pero es fácil comprender desde luego, que la esencia misma de la partición á que se refiere la última parte del art. 3462, no puede constituir la perfecta igualdad de los lotes ó porciones adjudicados á los coparticipes. La esencia de la partición de bienes, consiste en que éstos se repartan efectivamente, haciendo cesar el estado de indivisión. Así resulta de los ejemplos que el Codificador pone en la nota explicativa del art. 3462, y también de los tratadistas que cita, como Demolombe, que dice: «La división para ser completa y definitiva debe hacer cesar la indivisión completa y definitivamente entre los coherederos; y no existe verdadera y definitiva partición mientras la indivisión continúa de cualquiera manera y sobre cualquier punto»—tom. 15, § 614.—Debe tenerse también en cuenta que la disposición del art. 3462 se refiere, en términos generales, á los herederos testamentarios y ab-intestato, á los herederos forzosos y á los que no lo son; y es bien sabido que no siempre los herederos tienen derecho á una porción igual en los bienes de la herencia, como sucede entre los mismos descendientes, cuando los nietos concurren con los hijos del causante de la sucesión. Luego, pues, la partición privada que autoriza el referido art. 3462, no ha sido sometida para su subsistencia y validez á la igualdad de los lotes y porciones. La partición atacada, adjudicaba á cada coheredero ó coparticipes porciones perfectamente deslindadas, y definitivamente: no podía atentar entonces á la esencia misma de la partición en el sentido jurídico y legal de las palabras. Siendo todos los herederos capaces para disponer de sus bienes, pueden válida y legalmente dividir la herencia en la fo-



herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en una partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Serie 3ª.

1. **Herederos mayores**—No procede la nulidad de la partición hecha, entre todos los herederos mayores por escritura pública, fundada en la diferencia de las adjudicaciones.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

2. **Herederos mayores**—El reconocimiento de la deuda por los herederos mayores, hace procedente su abono en la parte que á éstos corresponda, pero debe justificarse ampliamente para obligar á los menores.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 127, Ser. 4ª.

3. **Herederos mayores**—Verificada la división por sorteo entre éstos, corresponde se les dé posesión de los lotes respectivos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 39, Ser. 4ª.

Herederos mayores—Véase: *Cuenta particionaria*, número 1—*Legatario*, núm. 1.

Herederos menores—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 6—*Bienes testamentarios*, núm. 1.

Herederos reconocidos—Véase: *Término*, núm. 1.

ma y con las bases que mejor les parece. Pueden adjudicarse lotes de mayor ó menor valor respectivamente, y aún adjudicar toda la herencia en cuestión á un solo heredero, usando del derecho que tienen de disponer libremente de sus bienes, sin violar ningún precepto legal, y por consiguiente, válidamente.

1—Véase: *Herederos forzosos*, núm. 1.

2—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Crédito*, núm. 1; tom. 3º, verb. *Deudas*, núm. 1. La confesión de los herederos mayores puede servir como principio de prueba por escrito que haga procedente la de testigos. Tomo 2º, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1.



1. **Herencia**.—Aprobada la cuenta particionaria, los herederos mayores tienen derecho á retirar su parte de herencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 41, Ser. 3ª.

2. **Herencia**.—Los que aceptan la herencia, continúan la persona del causante y en consecuencia sus obligaciones; y carecen de personería para pedir la nulidad de las declaraciones de aquél, que reconozcan á la esposa derechos á bienes determinados.—Jur. Civ., tom. 4, página 363, Ser. 3ª.

3. **Herencia**.—La inacción de los herederos designados por testamento ó la falta de justificación de que invisten ese carácter, hace procedente se declara vacante la herencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 104, Ser. 3ª.

4. **Herencia**.—El reparto que el testador haga del re-

1—Véase: verb. *Cuenta particionaria*, núm. 1.

3—El testador por una cláusula de su disposición testamentaria, instituyó por herederos del remanente de sus bienes á todos sus sobrinos «cuyos nombres no espresa en ese momento por no recordarlos.» Después de una larga tramitación, el Juez de 1ª Inst. á petición fiscal, intimó á todos los que se habían presentado pretendiendo derechos á la herencia justificasen su carácter hereditario dentro del término improrrogable de cuarenta días, bajo apercibimiento de declarar vacante la herencia. Apelada esta resolución fué confirmada y notificada personalmente á los que intervenían en autos, y por edictos á todos los que se consideren con derecho á los bienes del causante. No habiendo justificado el título ninguno de los pretendidos herederos, se hizo efectivo el apercibimiento declarando vacante la herencia. De esta providencia se interpuso apelación, siendo confirmada por la Cámara, pues esta segunda resolución no es sino el cumplimiento de la primera.

4—La cláusula del testamento decía: «Si después de cumplidas estas adjudicaciones quedase algún sobrante del quinto, es su voluntad que se incorpore al cuerpo general de bienes, para que sea dividido entre sus cinco hijos legítimos, los dos naturales y el espúreo». Toda la cuestión consiste en resolver cómo debe entenderse esa cláusula. Su redacción es clara y no ofrece duda de que el espúreo debe recibir del remanente del quinto una parte igual á la de los hijos legítimos y naturales; el hijo espúreo no es un heredero sino un legatario, y no hay razón para



manente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia, si entre los favorecidos existen extraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3ª.

5. **Herencia** —La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la participación estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

Herencia—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2—*Litis pendencia*, núm. 1—*Derechos hereditarios*, núms. 2, 3 y 4—*Nombramiento*, núm. 1—*Heredero*, núms. 4, 5 y 6—*Heredero poseedor*, núm. 1—*Herederos*, núms. 2 y 3—*Poseción judicial*, núm. 7—*Abogado*, núm. 1—*Bienes propios*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 11.

1. **Herencia en efectivo**—La que corresponde á los hijos, debe ser entregada á los padres para su administración.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 216, Ser. 4ª.

que se le equipare en la división. La espresión *incorporar al cuerpo general de bienes* es vaga y no puede aplicarse al pié de la letra, porque de hacerse así no podría recibir nada el espúreo, que no es heredero, y la voluntad del testador que quiere espresamente que reciba, sería violada. ¿En virtud de qué principio ó ley, al incorporar ese remanente al cuerpo general de bienes, se le dirá al espúreo: se le dá tanto como á hijo natural, y se reserva cuánto para los hijos legítimos? El testador quiere que el remanente del quinto se reparta entre sus hijos, legítimos, naturales y espúreo. Debe entenderse que es por partes iguales.

5—Véase: *Herederos forzosos*, núm. 1.

1—El Juez Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la entrega fundándose en que la madre no había dado razón sobre la inversión que á los fondos quería dar. La Cámara revocó el auto fundándose en la jurisprudencia constante. Véase: Inst., tom. 3ª, verb. *Menores*, núm. 2.



1^a. **Herencia materna**—La colación solo es aplicable á los herederos ó legatarios: las deudas del padre no pueden afectar á los derechos hereditarios de los hijos en la herencia materna.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a

1^b. **Herencia vacante**—La propiedad de los bienes que por herencia vacante son declarados fiscales, corresponde al Consejo Nacional de Educación.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 109, Ser. 3^a.

2. **Herencia vacante**—El Consejo Nacional de Educación no es parte en los juicios de herencia vacante sino después de hecha la declaratoria á favor del Fisco.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 360, Ser. 4^a.

Herencia vacante—Véase: *Herencia*, núm. 3.

1^c. **Herencias transversales**—La inconstitucionalidad de

1^a—Véase: *Colación*, núm. 1.

1^b—Véase: *Bienes fiscales*, núm. 1.

2.—Según el art. 691 del Cód. de Proc., el curador ejerce activa y pasivamente los derechos del heredero, y sus facultades y deberes son los que corresponden al heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario. Y según se desprende de lo prescripto por el art. 693, el curador debe intervenir en el juicio hasta tanto se declare vacante la herencia y se vendan los bienes que la constituyen para poner su importe á disposición del Fisco ó de quien corresponda. Por otra parte, no hay disposición legal alguna que dé intervención en el juicio al Consejo de Educación.

1^c—Habiéndose ordenado por el Juez de 1^a Instancia que antes de darse la posesión de la herencia se abonara previamente el impuesto correspondiente al Consejo de Educación, la parte interpuso simplemente el recurso de apelación. La Cámara dijo, que no habiendo sido sometida á juicio la cuestión en 1^a Inst., no podía ese Tribunal entrar á conocer de ella. Era además necesario tramitarla en forma, proponiéndola en 1^a Inst., dando la intervención al Consejo de Educación á quien afecta directamente. De no ser así, vendría á destruirse el orden establecido para toda contienda judicial por el Cód. de Proc. y por la ley de organización de los Tribunales, prescribiendo los trámites que deben observarse y las atribuciones y facultades que corresponden á



la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 3ª.

2. **Herencias transversales**—La inconstitucionalidad de la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda Instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 285, Ser. 3ª.

3. **Herencias transversales**—La inconstitucionalidad de la ley que grava los legados y herencias transversales con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3ª.

4. **Herencias transversales**—La resolución que declara

la Cámara para conocer en última instancia de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de 1ª Inst. y en los demás casos que la última ley establece en su art. 71. La resolución reclamada puede decirse, era una mera providencia y tiene á su favor una ley en completa vigencia cual es, la de 8 de Julio de 1884, que establece el impuesto destinado al fomento de la educación común en la Capital. Por consiguiente, al ordenar el Inferior que se abone el impuesto correspondiente antes de estraerse los fondos depositados en el Banco, procedentes de la fundación de la capellanía ordenada por la causante de esta testamentaria, se ha ajustado á una prescripción legal, cuya vigencia ó inconstitucionalidad no aparece que se haya opuesto ante el mismo, como sería necesario para fundar su recurso contra esa providencia y para traerlo á conocimiento de esta Cámara después de resuelto por el mismo Juez con la intervención del representante del Consejo de Educación, como he dicho y del Ministerio Fiscal, que no aparece tampoco haber sido oído.»

2.—Véase nota precedente.

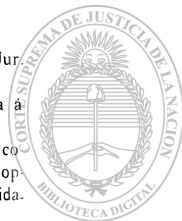
3.—Véase el núm. 1.

4.—Una legataria instituida tal en virtud de disposición testamentaria, se presentó en la testamentaria del causante pidiendo se librara oficio



haber ó nó lugar al pago del impuesto sobre legados ó herencias transversales, debe recaer después de amplia

al Banco Nacional á fin de que se le entregara el importe de su legado; el Juzgado confirió traslado de la petición al representante del Consejo Nacional de Educación, el que se dió por evacuado en su rebeldía, ordenándose que corrieran los autos según su estado. En seguida se dictó resolución, por la cual se declaró, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44, incs. 11 y 12 de la ley de Educación, el legado no se hallaba sujeto á impuesto alguno. De esta resolución se interpuso el recurso de apelación. La Cámara declaró nulo todo lo obrado: esta resolución se dictó por mayoría de votos, fundándose ésta en que aquélla no pudo pronunciarse sin la previa discusión que la ley prescribe para cuestiones como la decidida, observándose las formalidades que ellas señalan y de las que se prescindió por completo. La petición tendente á obtener una declaración del Inferior, de que su legado no estaba sujeto á impuesto alguno, entrañando como en efecto entraña, una cuestión de derecho, ha debido sustanciarse con arreglo al procedimiento estatuido para las de este género, y entonces, el representante del Consejo Nacional de Educación habría tenido la oportunidad legal de sostener cuál es el impuesto que en su concepto grava á dicho legado, y el Juez el medio de juzgar, al resolver, las acciones y escepciones de que las partes hubiesen respectivamente hecho uso. Y si esto se hubiera hecho, no se encontraría inhabilidad en el Tribunal para el caso de pedirse la revocatoria, para declarar, como sería de su deber hacerlo, cuál es el impuesto aplicable, desde que no existe acción sobre ese punto, deducida en tiempo, ya que es de estricto derecho que la sentencia debe contener espresa decisión con arreglo á las acciones deducidas en juicio, no procediendo otras declaraciones de los jueces que las que pronuncian resolviendo con sujeción á las formalidades del proceso, cuando, como acontece con la resolución apelada, no se trata de una mera providencia en la secuela del mismo, sino de una sentencia definitiva sobre el punto en cuestión, de lo que es una prueba la forma en que el recurso ha sido concedido. Además, en esa sentencia no se han observado las formas y solemnidades prescriptas en el art. 217 del Cód. de Proc., y por consiguiente la nulidad se impone, no solo en virtud de los vicios de procedimiento antes indicados, sino también por la forma de la sentencia misma. La minoría dijo, que no existía vicio de nulidad en el procedimiento observado por el Inferior, ni con respecto de la resolución que ha pronunciado y de la cual se ha interpuesto tan solo el recurso de apelación por el representante del Consejo Nacio-



discusión, pues tiene fuerza de sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

1^a. **Hermanos unilaterales** —Escluyen de la herencia a los tios.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 78, Ser. 3^a.

1^b. **Hija legítima** —A la madre que niega la filiación, corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada y que la posesión de estado de hija legítima debida-

nal de Educación, por considerarla agravante de sus derechos; pues dada la naturaleza de esa resolución no se encuentra que adolezca de vicio alguno de nulidad, ni que se haya faltado al procedimiento que correspondía observarse. Por el contrario, en el estado del juicio y dada la petición formulada por la parte interesada, el Inferior ha podido pronunciarse, haciendo la declaración solicitada, sin que importe reconocer por mi parte, si es ó nó justa esa resolución, en cuanto exonera al legado mencionado del pago del impuesto establecido por la ley á favor del fondo escolar, por cuanto ésta es una cuestión que corresponde al fondo del asunto. Menos debe entenderse que el Tribunal pudiera encontrarse inhabilitado para conocer de la justicia de ese pronunciamiento, confirmando ó revocando lo resuelto por el Inferior, desde que hecha la declaración que en él se contiene, fundada en lo dispuesto en el art. 44, incs. 11 y 12 de la ley citada, sería el caso de resolver si efectivamente el legado de que se trata no está comprendido entre los gravados por la ley, como lo sostiene la interesada, ó si por el contrario, debe pagar el impuesto que aquélla establece, según se alega por el Consejo Nacional de Educación. Finalmente, la forma en que se ha concedido el recurso, no es tampoco á mi juicio, un argumento del que pueda deducirse que no se trata de una resolución meramente interlocutoria, sino de una sentencia definitiva, la que en este caso debe ajustarse á las formas y solemnidades prescriptas por el Código de Procedimientos en su art. 217 y para demostrarlo, bastará tener presente las mismas constancias de autos, de las que resulta que es un simple incidente del juicio testamentario, lo que ha motivado la resolución del Inferior, debiendo agregar que así aparece reconocerlo también la parte del Consejo Nacional de Educación, que ha limitado su recurso tan solo al de apelación.»

1^a.—Art. 3587 del Cód. Civ.

1^b.—Véase: *Filiación legítima*, núm. 2.



mente justificada, solo respondía á un propósito caritativo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 3^a.

Hijo— Véase: *Ilegitimidad*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 105—*Fondos*, núm. 1—*Agravio moral*, número 1

Hijo legítimo—Véase: *Partida de bautismo*, núm. 2—*Tutor especial*, núms. 2 y 3.

1. Hijo natural—La prueba de los impedimentos existentes en la época de la concepción, que convertirían al hijo natural en adulterino, incestuoso ó sacrilego, como escepción, corresponde al que afirme su existencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 358, Ser. 3^a.

2. Hijo natural—No basta que el que se dice hijo natural lleve el apellido del pretendido padre para que este hecho acredite la filiación; es necesario que sea él mismo quien haya autorizado su uso.—Jur. Civ., tom. 3, página 358, Ser. 3^a.

3. Hijo natural—Los hijos naturales carecen del dere-

1—Véase: *Filiación natural*, núm. 4.

2—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

3—La parte actora se presentó pretendiendo tomar intervención en la testamentaria de su abuela, madre legítima de su padre, del que ella es hija natural. Los herederos de la abuela que no lo eran del hijo de ésta, declararon que ellos no eran quienes debían entenderse con la actora sino los herederos del padre de ésta. Igual cosa pensó el Ministerio de Menores y el Juez lo declaró así. Los herederos del padre de la actora, al que llamaremos H, se opusieron á que la hija natural de éste, á quien llamaremos N, interviniera en la sucesión de su abuela, á quien llamaremos A, porque no tenía el derecho de representación. El Ministerio Pupilar también combatió las pretensiones de la actora, y el Juez falló la causa ordenando que N no tomara participación en los autos testamentarios de A, su abuela, porque no le competía el derecho de representación por ser hija natural. Apelada la sentencia, fué confirmada por unanimidad en todas sus partes por la Cámara. Es este uno de los puntos más controvertidos en nuestro derecho civil, y ha dividido á los autores en tres grupos bien caracterizados: 1º Que nunca se heredera á los abuelos naturales y en ninguna forma. 2º Que los nietos

cho de representación para intervenir en la sucesión

naturales siempre heredan á los abuelos naturales por derecho de representación. 3° Que los hijos legítimos de otros hijos naturales heredan á sus abuelos naturales; pero no heredan los hijos naturales de otros hijos legítimos ó naturales. Los que sostienen el primer sistema hacen hincapié en el artículo 3582 del Cód. Civ. en cuanto dice que los hijos naturales *nunca heredan á sus abuelos naturales*. Relacionan esta disposición con la del art. 3548 que dice que se *hereda* por derecho propio y por derecho de *representación*; y siguen argumentando en esta forma: Si el representante es colocado por el derecho de representación en el lugar que su padre ó su madre tenía en la *familia* de su abuelo, según el art. 3549; y si el hijo natural no forma parte de la *familia* de su padre, —arts. 365 y 366, Cód. Civ.—el hijo de este hijo natural, sea ó no legítimo, no puede heredar á su abuelo, por derecho propio porque los nietos heredan siempre por derecho de representación—art. 3566—y por derecho de representación tampoco, porque donde su padre ó madre no está incluido—la familia del abuelo—no puede él ser colocado. En cuanto á los hijos naturales de hijos legítimos, tampoco heredan á los abuelos naturales por la disposición espresa del art. 3582 ya citado; y acepta este artículo y no el siguiente porque guarda perfecta armonía y concordancia con los otros arriba mencionados; en tanto que el artículo 3583 queda solo, en medio del Código, como un escollo solitario en medio de las aguas del mar. Podría armonizarse con su anterior, es cierto, pero ello importaría un desconocimiento de los principios repetidas veces sostenidos ya en el mismo Código.—2° grupo. Los partidarios de la segunda tesis empiezan por sostener como base, que los hijos naturales son herederos forzosos de sus padres, y que la representación ha sido ideada á fin de reparar el mal que causó á los hijos la muerte de sus padres, lo que por otra parte es indiscutible en nuestro derecho. Por el hecho de ser los hijos naturales herederos forzosos de sus padres, sacan la consecuencia de que les transmiten todos sus derechos presentes y eventuales, y por tanto el derecho de heredar á sus ascendientes; y como á los abuelos no se hereda sino por derecho de representación, nace el derecho de representar á sus padres á este efecto. Así lo dispone el art. 3583 de una manera perentoria, y ese artículo, dicen, establece un principio mucho más lato: lo que consagra es el derecho de representación aún en toda la descendencia, natural siempre, sin que ninguno de los grados sea legítimo. Esta teoría no puede combatirse en nuestro derecho como lo hace Demolombe en el derecho francés, por que allí parten de la base de que el hijo natural no es heredero, y el





de sus abuelos —Jur. Civ., tom. 3, pág. 110, Ser. 3ª

art. 759 de aquel Código es una escepción que como tal debe interpretarse restrictivamente. En el sistema de nuestro Código pasa todo lo contrario: ese sistema lo combate el legislador en la nota del art. 3579, y equipara los derechos sucesorios del hijo natural á los del hijo legítimo, salvo la cantidad. Por eso ha querido reformar el precepto, que en derecho francés es regla y en el nuestro la escepción del art. 756, dejando solo, como tal escepción la última parte de aquel artículo que dice así: «Ella—la ley—no les acuerda ningún derecho sobre los bienes de los parientes de su padre ó madre: y queriendo especificar cada clase de parientes empezó por aquellos, cuya mente era escluirlos de esa misma enumeración, porque era contrario á su apreciación; fué una inadvertencia. Solo así se explica la presencia de ese artículo que es el 3582 que choca con el siguiente, y con todo el sistema del Código: la escepción resultó regla, y la regla espúrea choca con la regla natural del sistema: la intrusa no puede subsistir, á lo menos como regla, esto es con toda la estensión que tiene. Queda de manifiesto esta «singular inadvertencia» cuando se examina el art. 778 del Cód. Español comentado por Goyena, y se compara con el art. 3583 del nuestro, dice así: Art. 778 español: «Los derechos hereditarios *concedidos* al hijo natural *en los dos artículos anteriores*, se trasmiten por su muerte á su descendencia, á virtud del derecho de representación.» Art. 3583 argentino: «Los derechos hereditarios del hijo natural se trasmiten por su muerte á sus descendientes por el derecho de representación.» Como se vé, está copiado casi á la letra del artículo español; no tiene más diferencia sensible que la falta en el nuestro, de la incidental que empieza en el español con la palabra *concedidos*; y es que allí solo á los dos casos se refiere la representación de los hijos naturales y no se extiende al de los alimentos, materia del art. 775. El codificador argentino habría podido dejar la frase incidental diciendo *los seis artículos anteriores, ó los cinco primeros de este capítulo*; pero no era esa su mente: quería que el derecho de representación de los hijos naturales fuera tan extenso como el de los legítimos; quería que esa representación rigiera en los casos de sucesión entre colaterales á que se refiere el capítulo VI, con la única escepción de los parientes legítimos de sus padres, que no sean los ascendientes; lo que queda perfectamente encuadrado dentro del sistema del Código. En efecto: dos principios informan este sistema; el 1º es que los descendientes naturales no forman parte de la familia de los parientes legítimos; y el 2º, que los derechos sucesorios del hijo natural son de la misma naturaleza que los de los hijos legítimos. Estos dos



4. Hijo natural—El concubinato es una fuerte presun-

principios no pueden ser destruidos, el uno por el otro, porque son la base del sistema, y como son en parte contradictorios, hay que poner un límite entre ambos y dejarlos subsistir el uno relativamente al otro. Los parientes colaterales, cuando unos son legítimos y otros ilegítimos casi nunca se miran con buenos ojos, á éstos se les considera como intrusos que vienen á compartir la fortuna y muchas veces el nombre de sus mayores; y los naturales, á su vez, se sienten heridos por ese desprecio y malquerencia, y los retribuyen en la misma forma. Los ascendentes, por el contrario, viejos ya y débiles cuando son abuelos, no anhelan esa lucha constante por la vida, más cerca de la tumba que del mundo, cavilosos y reflexivos, sienten que los descendientes naturales de sus hijos son sus nietos, que llevan en su venas sangre de su sangre, que esos seres no son sino la transformación y multiplicación de una célula viva de su propio organismo reproducidos en su principio vital; los ve lastimados por una sociedad exigente, por faltas que nunca cometieron. Los abuelos, dicen, entonces los quieren con un cariño mezclado de lástima, y aún los quieren más que á sus nietos legítimos que hacen sombra sobre sus propios hermanos muchas veces. El codificador que establece la sucesión legítima sobre la base del cariño presunto del causante, ha tenido que ser lógico en estos dos casos, resolviéndolos de opuesta manera; á los primeros no se les hereda por que el cariño en los causantes se presume negativo; pero á los segundos sí, porque se presume que ese cariño existe: pero como para heredarlos es menester el derecho de representación, esos nietos—naturales—lo tienen. Ese es el afecto que todas las legislaciones han encontrado forzosamente en los ascendientes naturales, desde la romana, la española, la francesa hasta la nuestra: por eso heredan á los padres, y si no en igual cantidad que los hijos legítimos, no es porque el afecto se presume menor, sino por consideraciones de orden moral, que no es del caso discutirlos. Y ese afecto á la prole la tienen los otros ascendientes, y la tienen, queda dicho, con una mezcla de compasión que lo hace más profundo y estable todavía. Es ahora menester estudiar el derecho de representación, única vía legal para llegar á la sucesión de los abuelos. ¿Qué es el derecho de representación? se preguntan, y se responden con el art. 3549: «La representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre ó su madre en la familia del difunto, á fin de suceder juntos en su lugar á la misma parte de la herencia á la cual el padre ó la madre habría su-

Continúa en la pág. 497.



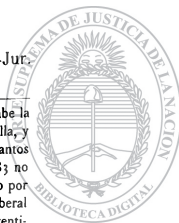
ción de que los hijos de la concubina, habidos durante la

cedido.» Esta es ante la ley el derecho de representación. No se puede heredar, se ha dicho, sin estar dentro de la familia, la que la ley organiza de acuerdo con los principios fundamentales de su sistema sucesorio. Esto es falso en nuestro derecho; pero, los partidarios de este grupo aún quieren aceptar el principio por vía de hipótesis. El padre natural, dicen, y sus hijos naturales, forman familia, pues el art. 365, ni explicita ni implícitamente lo prohíbe, y *a contrario sensu* implícitamente así lo estatuye. Los sostenedores de las otras tesis también lo aceptan. Ahora, si los hijos naturales forman familia con sus padres, y éstos, sean legítimos ó no, también la forman con los suyos, no es concebible siquiera que esos hijos no vayan á la familia con su propia familia—con sus hijos—sería lo mismo que decir que las ramas forman el árbol con el tronco, pero que las hojas no son parte de ese mismo árbol, porque su forma ó generación difiere de la forma y la generación de las ramas. Todo lo que el art. 365 quiere decir, es que las hojas de una rama no son parte de las otras ramas; es decir, que el abuelo—el tronco—tiene una familia general que la forman todos sus descendientes legítimos—las ramas—y tantas familias particulares como familias naturales haya en su descendencia—las hojas de cada rama—esta es la interpretación lógica y natural del citado artículo. Según esta interpretación, podrían, pues, los hijos naturales representar á sus abuelos naturales porque forman familia con él, y el parentesco consanguíneo, sobre todo en la línea recta, nunca se rompe por la muerte de los intermediarios. Pero en derecho argentino hay una escepción á esta regla de la familia en la sucesión. El art. 3545 dice que las sucesiones intestadas corresponden á los descendientes legítimos y *naturales*, y la representación se encargará de hacer efectivo ese precepto legal. Por ese artículo ya el hijo es hábil para heredar si otras inhabilidades personales no vienen á obstruir la habilidad establecida en él. Por otra parte, el derecho de representación no viene á continuar el sistema real y regular del Código; nó, el codificador acepta con Molina á quien cita en primer término, que la representación es una ficción de la ley—Molina, comentarios á las leyes de Toro, ley 8ª, núm. 4—y cuando se entra en el campo de la ficción, por cierto el peor en derecho, ya no se guarda vinculación y armonía con lo que se tiene por verdadero y real: la verdad no es ya bastante y se recurre entonces á la ficción para llegar al fin propuesto. Por eso no es ni siquiera menester que el representado ni el representante estén en la familia del causante para poderle heredar por representación; nó, la ley lo pone en la familia de su ascendiente por una ficción suya, sin preguntar si realmente está ó no

(Continúa en la pág. 498)

vida en común, son hijos naturales del querido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 24, Ser. 3ª.

en esa familia; y es lógico que así sea, porque aún en la ficción cabe la lógica, pues de lo contrario no tendría necesidad de recurrir á ella, y el *familiar ipso facto, ipso jure* heredaría al causante sin necesidad de tantos rodeos como trae la ley. Y concluyen: que la fuente del art. 3583 no es el art. 759 del Cód. francés, sino el 778 del español comentado por Goyena, y amplificado dentro del sistema de nuestro Código, más liberal que aquellos; que el artículo es conforme con toda la legislación argentina y que solo choca con una parte del art. 3582, que al revés de aquel no encuadra en el sistema del Código, que queda aislado y que por tanto no puede prevalecer; que los descendientes naturales forman familia con sus ascendientes, aunque no con los parientes legítimos de ellos; que para heredar tienen el afecto presunto de sus abuelos naturales; que el derecho de representación no requiere que el representado ni el representante estén en la familia del causante, porque los coloca allí por ficción de la ley, de todo lo que resulta que el nieto natural hereda siempre al abuelo natural, sea su ascendencia siempre ilegítima ó haya algún vínculo legítimo en alguno de sus grados.—3er grupo: Los sostenedores del tercer sistema no vienen á armonizar el sistema del Código con los dos artículos 3582 y 3583, sino que vienen á armonizar á estos entre sí porque se chocan directamente uno con otro, y están tan juntos que solo entre sí se les compara sin acordarse casi del resto del Código. Arguyen en esta forma: Los abuelos naturales son los padres naturales de otros padres naturales; así: A es hijo natural de B, y éste es hijo natural de C, el abuelo natural de A es C. Este nieto natural no puede heredar á su abuelo por la prohibición del art. 3582. El art. 3583 se refiere á los descendientes legítimos, y el art. 3549 da el derecho de representación á los que están en la familia del representado; luego, si el nieto A fuera hijo legítimo del hijo natural B puede representar á su padre, y ser colocado en el lugar que su padre tenía en la familia del que fué su padre natural C. De igual manera se resolvió esta misma cuestión en el derecho francés: allí los testos de los artículos correlativos á los nuestros no tienen la antinomia saltante que tienen los de los nuestros; de modo que con mayor razón deberá resolverse en igual sentido entre nosotros, pues él es el único medio de armonizar estas dos disposiciones. Esta es casi testualmente la manera de interpretar estos dos artículos, que trae el Dr. Llerena en su obra «Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino», y la tomamos de él por ser el que con más claridad la ha espuesto, al mismo tiempo que su nombre





5. Hijo natural—La legitimación del hijo natural por

es autoridad en materia civil entre nosotros. De estas tres doctrinas la primera ya no tiene sostenedores, más aún, casi ni los ha tenido; la segunda se debate todavía, por prevalecer como la más conforme al derecho natural, al sistema del Código y á los principios que lo informan; la segunda es casi ley para los Jueces, porque es la interpretación que se da en nuestra facultad desde donde ha pasado al foro y á la magistratura. ¿Cuál de ellas queda mejor encuadrada dentro de nuestro derecho positivo, y de su sistema? ¿Cuál es la más justa? De desear es que los dos caracteres se encuentren reunidos en la misma. Del método empleado por cada uno de los tres grupos en la dilucidación de este punto, diremos que los del 1º y 3º son defectuosos, pues aquél empieza por apoyarse en uno de los artículos que precisamente está en discusión y partiendo de tal principio forzosamente se tiene que llegar á la anulación del que resulta contradictorio. El 3º sigue otro: la interpretación de los dos artículos en discusión, el uno por el otro, como si estuvieran completamente fuera del Código; solo después de considerarlos armonizados se les relaciona con artículos sueltos sin atender al sistema, interpretando también los textos concordantes con el alcance que á aquellos se les da. El defecto común de estos dos sistemas es el haber subordinado el Código á uno ó dos artículos; es decir, á lo principal se le ha hecho seguir la condición de lo accesorio. Hay que confesar que el 2º grupo ha empleado un método más racional; pues ha empezado por hacer un estudio del sistema que entraña el Código mismo con prescindencia del punto que se discute para hacer encuadrar en ese sistema todo lo que pueda caber de los dos artículos; es el orden lógico: subordinar lo menos á lo que es más, la hoja al árbol y no el árbol á la hoja. No es nuestra mente decir cuál de los grupos ha empleado mejor su método, aunque tengamos nuestra convicción sólidamente formada: nos basta exponer el resultado á que cada uno llega. Respecto de la justicia que cada uno de los grupos encierra, allí están las palabras del camarista Dr. Gimenez, por quien dió comienzo la votación, que al examinar la sentencia de 1ª Instancia dice: «Y aún cuando el Código se opusiera, *debía ser* como él lo pretende», este *él* es el actor, es decir N, nieto natural de A, á quien pretende heredar representando á H, su padre natural. Esta sentencia, que negaba á N el derecho de representación para heredar á A fué confirmada por unanimidad, pues los vocales restantes se adhirieron al voto del Dr. Gimenez. Este es el primer caso que se presenta en nuestros tribunales desde la vigencia del

(Continúa en la pág. 500)

el subsiguiente matrimonio de los padres no requiere forma espresa; se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3^a.

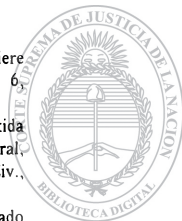
6. **Hijo natural**—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter de hijo natural, no puede fundar una escepción dilatoria. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 33, Ser. 4^a.

7. **Hijo natural**—Para justificar la posesión de estado de hijo natural después de la muerte del padre, es admi-

Código Civil, y la Cámara ha sentado jurisprudencia sin la más leve divergencia entre sus cinco miembros.

6—Véase: verb. *Escepción dilatoria*, núm. 6.

7—Lo que se requiere para que exista la posesión de estado es la prueba de hechos y actos que importen un reconocimiento indudable de la filiación. Ninguna disposición legal determina cuáles son los actos constitutivos de la posesión de estado de los hijos naturales. Los jurisconsultos han establecido y concretado los actos constitutivos de la filiación legítima, desde que ella reposa en una presunción de derecho basada en el matrimonio, y desde que por otra parte los hijos nacidos de una vinculación legítima y que cumplen con las exigencias legales, no son objeto de medidas precaucionales para ocultar una falta. No habría razón ni equidad en aplicar a los hijos naturales ese criterio, que parte de distinta situación jurídica: tratándose de éstos se buscará que concurren actos que demuestren la posesión de estado de hijos naturales, pero no con los caracteres y peculiaridades de los hijos legítimos. En el caso del sumario se comprobó el trato íntimo entre los padres é hijos, la comunidad de vida, el reconocimiento que aquéllos hacían de sus hijos ante las personas conocedoras de ese trato é intimidad y la regularidad de la vida de la madre. Estos hechos son suficientes para comprobar la posesión de estado en toda su amplitud. La jurisprudencia de los tribunales ha sido siempre uniforme en este punto; salvo rarísimas escepciones como el de Leloir, en el que probada la posesión de estado en una forma completamente amplia y que no dejaba lugar á dudas, la Cámara sinembargo declaró improbadá la filiación. Puede verse en el sentido del sumario: verb. *Filiación natural*, núms. 3, 14 y 17; tom. 3, verb. *Poseción de estado*, núm. 1; *Hijo natural*, núm. 1; tom. 2, verb. *Filiación natural*, núms. 2 y 3; tom. 1, verb. *Poseción de estado*, núm. 2066.





sible la prueba por todos los medios que la ley permite para probar los hechos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 374, Ser. 4ª.

8. **Hijo natural**—Justificados los extremos que la ley prescribe, procede la fijación de alimentos a los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4ª.

9. **Hijo natural**—La legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, se produce

8—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 11. ¿Cuáles son esos extremos que la ley exige? La opinión de la Cámara ha variado en algunos casos. Alguna vez ha dicho que es necesario que sea previamente reconocido por medio de la confesión expresa ó ficta del alimentario. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Alimentos*, núm. 1. Pero después de resuelto este caso, no ha exigido sino los extremos de los arts. 331 del Cód. Civ. y 602 del Cód. de Proc. La resolución citada en contra de estas disposiciones puede considerarse como un lunar en la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara: indudablemente así lo resolvió este Tribunal por no abandonar la costumbre de contradecirse hasta en las cuestiones más inconcusas del derecho.

9—Es el mismo caso resuelto en el verb. *De oficio*, núm. 3, pueden verse asimismo los núms. 1 y 2. El Juez de 1º Inst. dijo, que resultando de la partida de bautismo que el apellido de la madre era distinto del de la viuda del causante, y teniendo en cuenta además que el nacimiento tuvo lugar antes de la celebración del matrimonio de los padres sin que en dicha partida aparezca la nota de que habla el artículo 317 del Cód. Civ., el solo matrimonio de los padres no era bastante para dejar establecida la legitimidad del hijo, pues no se había llenado ninguno de los requisitos del art. 318 del Cód. Civ. La Cámara revocó el auto diciendo: que si bien el nacimiento era posterior al matrimonio de los padres, la prescripción del art. 318 queda cumplida por el hecho de la inscripción del hijo en los libros parroquiales después del matrimonio, pues este artículo no exige cláusula alguna especial para ello. Además, en el caso que nos ocupa, se trataba de obtener la declaratoria de herederos, reconociéndose al hijo como sucesor legítimo por todos los interesados en la sucesión. La Cámara tiene resuelto, que la legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de sus padres, no está sujeto a forma alguna especial. Véase el núm. 5.



cualquiera que sea la forma auténtica en que éstos reconocan la filiación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 382, Ser. 4^a.

10. **Hijo natural**—No puede espedirse testimonio de la escritura de reconocimiento de hijos naturales sin citación del otorgante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 358, Ser. 4^a.

11. **Hijo natural**—El reconocimiento de un hijo natural, no requiere ser acompañado de prueba alguna.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 20, Ser. 4^a.

12. **Hijo natural**—La legislación anterior al Código Ci-

10—Cuando se ignora el domicilio, la citación debe hacerse en la forma prescripta por el art. 80 del Cód. de Proc. Consideramos que el hijo natural que pide testimonio de la escritura de reconocimiento de su estado civil, no tiene por que esperar el consentimiento del padre para que se le espida el testimonio; y para así pensar, nos fundamos en los mismos argumentos aducidos en la nota al verb. *Escritura pública*, núm. 16.

11—Así se desprende de lo dispuesto por los arts. 50 y 53 de la Ley de Registro Civil, y 332 del Cód. Civ.

12—La cuestión á resolver fué la de si una hija concebida en adulterio, cuando aún vivía el esposo de la madre, y nacida cuando ésta era ya viuda, quedó legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres. Ante todo, debe observarse que el caso está regido por legislación anterior á nuestro Código Civil, cuyas disposiciones carecen de aplicación, puesto que según su propio art. 3^o, las leyes disponen para lo futuro, y no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. El estado civil de las personas es un derecho que nace de la ley, sin que las convenciones particulares ni otras leyes posteriores puedan modificarlo ni cambiarlo. El que es hijo legítimo ó legitimado por las leyes en vigencia á la época del nacimiento de la legitimación, seguirá siéndolo siempre aunque otras leyes posteriores modifiquen ó alteren los requisitos necesarios para serlo. Así vemos, que aún tratándose de la adopción, que ha sido suprimida por nuestro Código, el art. 4050 dispone que las adopciones y los derechos de los hijos adoptados, son regidos por las leyes del tiempo en que pasaron los actos jurídicos. La cuestión presente debe, pues, ser resuelta de acuerdo con las leyes vigentes en la época del nacimiento y del matrimonio de cuyos efectos legales se trata. Es verdad que la Ley 2^a, tit. 15, Part. 3^a, disponía que el hijo adulterino, procedente de padre casado y de mujer soltera,



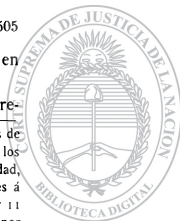
vil reconocía como hijos naturales á los nacidos cuando los padres podían contraer matrimonio aun cuando por

no podía ser legitimado por subsiguiente matrimonio y que lo mismo debe entenderse cuando la madre es casada y soltero el padre; que no se trata de la legitimación de un hijo adulterino, sino de si un hijo natural concebido en adulterio, puede ser legitimado. El derecho común Español era que solo podían ser legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres, los hijos naturales. Según las leyes de Partida solo se consideraban hijos naturales los que un hombre tenía en su barragana—Ley 1^a, tit. 15, Part. 4^a.—Solo los hombres solteros podían tener barragana—Ley 1^a, tit. 14, Part. 4^a—de manera que solo los hijos de personas que podían casarse al tiempo de la concepción y al tiempo del nacimiento, eran hijos naturales. Pero vino después la Ley 11 de Toro á modificar la legislación de partida en esta materia, y dispuso: «E por que no se puede dudar cuales son hijos naturales, ordenemos e mandamos que entonces se digan ser hijos naturales, *cuando al tiempo que nacieren ó fueren concebidos*, sus padres podían casar con sus madres, justamente sin dispensación, en tanto que el padre lo reconozca por su hijo, puesto que no haya tenido la mujer de quien lo tuvo en su casa, ni sea una sola, concurriendo en el hijo las calidades susodichas, mandamos que sea hijo natural.» Después de esta ley, ya no solo eran hijos naturales los habidos en barragana, sino todos los que procedían de personas que pudieran casarse al tiempo de la concepción ó al tiempo del nacimiento. De acuerdo con lo que disponía la Ley 11 de Toro, la persona concebida en adulterio era hija natural, puesto que sus padres pudieron casarse en la época en que ella nació, desde que la madre había ya enviudado. La hija natural concebida en adulterio, en dañado y punible ayuntamiento, según la frase de los espositores del derecho antiguo español, fué legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres. Los civilistas españoles están divididos, los que sostienen que los hijos concebidos en adulterio, pero que nacieron cuando sus padres podían casarse libremente, no pueden ser legitimados por el subsiguiente matrimonio, se ven en la necesidad de principiar negando que sean hijos naturales, á pesar de los términos claros é indiscutibles de la ley. Sus opiniones se fundan en principios de derecho abstracto, que solo pueden servir para demostrar la injusticia ó la inmoralidad de la ley, pero sin destruirla, y los jueces deben limitarse á aplicar la ley sin entrar á examinar de su bondad. García Goyena, en su obra «Concordancias, motivos y comentarios» del Código Civil Español, tomo 1^o, apéndice 2^o, examinando esta cuestión, dice: «La letra de la ley de

la época de la concepción resultaran adulterinos, y en

Toro se resiste á que se tome su disjuntiva por conjuntiva, como pretenden algunos, aunque alguna vez *conjuncta pro dijuncti pro conjunctis accipiuntur*, es preciso admitir todo antes que el escándalo. A pesar de tan repetable opinión y precisamente por el motivo fundamental de la misma, los jueces deben limitarse á la aplicación de la ley buena ó mala, antes que sustituirla por la opinión individual. Para el célebre glosador de las Partidas, más respeto merecía la ley que los principios generales, la moralidad y la justicia, cuando solo se trataba de la aplicación de aquélla, y así vemos que en la glosa diez y seis á la Ley 1^a, tit. 13, Partida 4^a, dice: y en tanto procede lo que acaba de decirse, como que bastará también, con tal que se haya subseguido el matrimonio, que la aptitud de los padres para contraerlo haya existido al tiempo de la concepción. De la misma opinión son los señores Samponts, Barba, Eixala, Ferré y Subirana, comentadores y adicionadores de las glosas de Gregorio Lopez, y finalmente, dicen, basta que los padres fuesen solteros, no impedidos de casarse al tiempo *de la concepción ó del nacimiento*, y en nada obstante el que la concubina no fuese única ni cohabitase con el padre; dicha Ley 11 de Toro, adición á la glosa 1^a de la Ley 1^a, tit. 15, Part. 4^a. Y para no citar otras opiniones bastará recordar la de Gutierrez y Fernandez, que en sus estudios fundamentales sobre el derecho Civil Español se espresa así: «El nacido de una viuda, la cual por su estado es libre, no se halla en el mismo caso que el hijo de una mujer casada, ¿por qué se le lia de privar de un beneficio que debe á la Providencia, pues cabe en el lenguaje cristiano hablar de casualidad? El derecho siempre supone lo mejor y propende á lo que es favorable; un momento de libertad durante el estado del embarazo, bastaba en Roma para que fuese libre el hijo de la esclava; pues bien, la moralidad pública gana en ocultar, no en que se descubran ciertas debilidades; ¿por qué la libertad de la madre viuda no ha de servir para hacer al hijo natural en vez de adulterino? el hijo lo es desde que nace: *conceptus prohibito reputatur*. Repugna al buen sentido, continúa, una interpretación que autoriza un absurdo jurídico; pero los espositores menos favorables á la ley, no pueden menos que reconocer su fuerza. Llamas, perdido en un mar de erudición, divaga y se contradice. Mucho más práctico el Sr. Escriche, dice: no deja de parecer á primera vista bastante ridícula esta doctrina, y aún, hay autores que la han calificado de tal; pero no por eso es menos cierta, ni está por eso menos claramente contenida en las leyes 9, 10 y 11 de Toro, á las cuales, como se hallan vigentes en el día, tienen que arreglar los jueces sus decisiones,



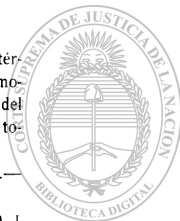


consecuencia, el subsiguiente matrimonio los convertía en legítimos.—Jur. Civ., tom. 9 pág. 388, Ser. 4.^a

1. Hijo póstumo—El desconocimiento del carácter here-

cualquiera que sean las contradicciones, inconsecuencias ó faltas de principios, si es que las hay, en que incurrieron los redactores de los acuerdos de aquellas Cortes.—Dic., hijo adulterino.—Así es la verdad, agrega, está declarado que las leyes en lo que pueden ser referentes á las cuestiones de filiación natural, se hallan modificadas por la Ley 11 de Toro ó sea 1.^a, tit. 15, lib. 10, Novísima Recopilación, que es por la que deben resolverse las cuestiones de esta clase—Sentencias del 10 de Mayo de 1860—tanto por lo terminante de su letra como por la interpretación que de ella hacen los tribunales y contra la cual no existe jurisprudencia consignada por el Tribunal Supremo de Justicia—Sentencia del 26 de Setiembre de 1867, tom. 1.^o, lib. 1.^o, cap. 4.^o, Sec. 2.^a, art. 3.^o.—Como queda dicho, y según las disposiciones legales y opiniones citadas, la hija natural queda legitimada por el subsiguiente matrimonio de sus padres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1.^a, tit. 13, Part. 4.^a. Es verdad que esta ley, en su letra, solo dice que el hijo que nace de barragana queda legitimado por el subsiguiente matrimonio de sus padres, pero al referirse al hijo de barragana ha querido y entendido referirse en general á los hijos naturales, pues entonces solo tenían este carácter los hijos de barragana. Pero la ley Toro citada, amplió la significación de hijo natural, quedando subsistentes las de Partida en cuanto á la legitimación de los mismos. La razón de la legitimación, según la Ley de Partida no fué ni pudo ser modificada por la de Toro, como que ésta no tuvo por objeto ni se refirió á la legitimación, sino únicamente al carácter de la filiación natural. Y así resulta de las propias palabras de la Ley 1.^a de Partida, citada, cuando da la razón de su disposición diciendo: «Ca mugüer estos hijos atales non son legitimos quando nascen, tan grand fuerça ha el matrimonio que luego que el padre e la madre son casados, se fazen por ende los fijos legitimos.» La legitimación es así un resultado inmediato y propio del matrimonio, sin requerirse nada más que su celebración para que los hijos naturales queden convertidos en legítimos: tan grand fuerza, ha el matrimonio. Por regla general, el matrimonio en estos casos se realiza por consideración á los hijos, para legitimarlos lavando en cuanto es posible las manchas de su origen: y los hijos que nacen después de celebrado el matrimonio, son deudores de su existencia legítima á los nacidos con anterioridad.

1.—Véase: verb. *De oficio*, núm. 1.



ditario del hijo póstumo por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio: solo los herederos del esposo tienen derecho para solicitarlo.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 397, Ser. 3^a.

Hijo natural—Véase: *Filiación natural*, núms. 3 y 4—*Concubinato*, núm. 1.—*Alimentos*, núm. 1.

Hijos—Véase: *Concubinato*, núm. 1—*Colación*, núm. 1—*Divorcio*, núms. 1 y 2—*Emancipación*, núm. 2—*Herencia en efectivo*, núm. 1—*Separación de hecho*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 1—*Padrastró*, núm. 1.

1^a. **Hijos legítimos**—Los Jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos después del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 3^a.

1^b. **Hijos menores**—La responsabilidad del padre por los daños que causen sus hijos menores, procede aun respecto de aquellos que no habiten con él, siempre que no se encuentren bajo la vigilancia ó á cargo de otra persona.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 9, Ser. 3^a.

2. **Hijos menores**—Mientras no exista contra la esposa pena de reclusión ó de destierro, los hijos menores de cinco años deben estar en su poder.—Jur. Civ., tom. 1, página 45, Ser. 4^a.

3. **Hijos menores**—Decretado el divorcio, los hijos menores de cinco años deben quedar en poder de la madre, designando el Juez cual de los cónyuges debe tener los

1^a—Véase: verb. *De oficio*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 5.

2—El art. 214 del Cód. Civ. establece, que en los casos en que alguno de los esposos deba sufrir condenación ó prisión, reclusión ó destierro, ninguno de los hijos de cualquiera edad que sea deberá ir con el que deba sufrir la condena.

3—Véase: verb. *Divorcio*, núm. 12.



mayores, sin que ninguno de los esposos pueda alegar preferencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 184, Ser. 4^a.

1^a. **Hijuela**.—El hecho de no estar incluido un bien en la hijuela del que produce la información, no forma prueba en contra de la posesión que pudieron tener éste y su causante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3^a.

1^b. **Hijuela de deudas**.—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas aumentan el haber del heredero encargado de su pago y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender que se dividan las rentas por partes iguales sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

1^c. **Hipoteca**.—La prórroga constante de instrumento privado del plazo fijado en la escritura pública de hipoteca.

1^a.—La herencia es el conjunto de los derechos activos y pasivos que componen el haber hereditario de una persona muerta. Esos derechos, como su adquisición, no están sometidos á que sean ó no manifestados en los autos testamentarios: ellos subsisten independientemente de dicha manifestación, como asimismo de su inclusión ó exclusión de la cuenta particionaria ó de la hijuela. El derecho de posesión no mejora ni se perjudica por estar ó no comprendido en la hijuela. Desde que la posesión es independiente de esta fórmula, ella se transfiere con todas sus ventajas y sus vicios—art. 3418, Cód. Civ.—y las dos posesiones pueden unirse, la del causante á la de su sucesor.

1^b.—Véase: verb. *Condómino*, núm. 3.

1^c.—Prorrogar una obligación no es entretanto novarla. La novación exige alteraciones fundamentales capaces de extinguir ó de transformar la obligación primitiva. Además, no se presume siendo indispensable que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, ó que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva—art. 812, Cód. Civ.—La reducción ó aumento del interés estipulado originariamente, el aumento ó disminución de la deuda, no afectan sustancialmente su carácter jurídico ni producen de consiguiente novación. Estos principios son de doctrina universal: los enseñan entre otros autores, Toullier, Aubre y Rau, tom. 4; Marcadé, § 765, Mour

aun cuando se modifique el interés estipulado no importa una novación de la obligación primitiva.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 139, Ser. 4ª.

Hipoteca—Véase: *Menores*, núm. 1 — *Acreeedor hipotecario*, núms. 1 y 2.

Homónimo—Véase: *Escribano*, núm. 2.

Honestidad—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

1. **Honorarios**—No procede la regulación de los del perito mientras no sea aprobada la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 85, Ser. 3ª.

2. **Honorarios**—La transacción ó desistimiento de las partes, no hace caducar la jurisdicción del Juez para entender en los incidentes sobre honorarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3ª.

3. **Honorarios**—Del apoderado, se prescriben á los dos años de liquidados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 163, Ser. 3ª.

4. **Honorarios**—De abogados, se prescriben á los dos años de terminado el juicio, y el término corre aún cuando con posterioridad se haya patrocinado á la misma persona en otros asuntos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 169, Serie 3ª.

5. **Honorarios**—Consentida la providencia de autos no

lon § 1461, Segovia y Llerena sobre el art. 812 ya citado. Este último comentador recuerda en nuestra jurisprudencia y la francesa, que no se producirá novación ni aún en el caso en que el acreedor dispense los intereses devengados ó á devengarse, ni cuando las partes convengan en que se pagarán intereses que antes no habían convenido en la deuda primitiva.

1—La Cámara dijo simplemente que la regulación era estemporánea.

2—Porque se trata de diligencias ulteriores que correspondían ser resueltas por el Juez de lo principal.

3—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Abogado*, núm. 1.

5—Porque consentida la providencia se reconoce implícitamente la jurisdicción del juzgado.

J





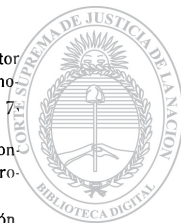
procede la nulidad de la regulación de honorarios del agremensor, por incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 205, Ser. 3ª.

6. **Honorarios**—La parte está obligada al pago de los honorarios, sin perjuicio de su derecho contra el condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 3ª.

7. **Honorarios**—Antes de fijar su monto, debe resolverse quién está obligado a pagarlos.—Jur. Civ., tom. 7, página 95, Ser. 3ª.

6—Véase: verb. *Costas*, núm. 25.

7—El abogado patrocinante de un heredero pidió se le regulasen sus honorarios y que el Juez declarara cuáles eran los que debían ser abonados por la masa por haber sido devengados en beneficio común, y cuáles por el heredero. El Juez no hizo lugar, porque según él, no era posible resolver esa cuestión en el juicio sumario de regulación de honorarios, como lo tiene resuelto la Cámara en los casos publicados en el tom. 7, pág. 454, y tom. 8, pág. 49 de la 1ª Serie de la Jur. Civ. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Honorarios*, núms. 13 y 14. Estas dos resoluciones declaran que el procedimiento sumario solo es aplicable tratándose de su monto pero no cuando se trata de quién debe pagarlos. Sin embargo la Cámara revocó el auto diciendo que el punto en cuestión es indudablemente de resolución previa desde que no puede exigirse conformidad ó disconformidad á quien aún no se ha declarado deudor, y que el Juez debe pronunciarse sobre este punto con los elementos que arrojen los autos, fijando en seguida el *quantum* de los honorarios, pues este procedimiento en nada perjudica los derechos de las partes, desde que en la oportunidad debida podrán hacer valer las escepciones que crean convenientes á la defensa de su derecho. El principio sentado en el sumario se adapta mejor al procedimiento y á los antecedentes que es necesario tener en cuenta para proceder á la regulación. Así en el juicio testamentario, un heredero puede presentar escritos de interés común y que benefician á la testamentaria, los que son á cargo de la masa—Inst., tom. 1, verb. *Honorarios*, núm. 1354—y tener escritos presentados en su interés particular: para proceder á la regulación debe saberse quién debe abonarlos, porque si los debe abonar la masa se regularán más altos, pues la estimación debe hacerse con arreglo al monto de la causa, y es evidente que el acervo total de la sucesión tiene necesariamente que ser mayor que el de un heredero éstos cuando son varios.



8. **Honorarios**—No procede el nombramiento de tutor especial al menor, en el incidente sobre regulación de honorarios á cargo de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 3ª.

9. **Honorarios**—Al que alega la escepción de pago contra la ejecución por honorarios, corresponde su comprobación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 165, Ser. 3ª.

10. **Honorarios**—Terminado el juicio por transacción, la regulación de honorarios contra una de las partes, es improcedente si no resulta de su conformidad, la obligación de abonarlos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 154, Serie 4ª.

11. **Honorarios**—Los de los peritos, deben ser regula-

El sumario, pues, consagra la buena doctrina, la que ha sido sustentada en otros casos por la misma Cámara.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Regulación de honorarios*, núms. 1 y 4. En contra además de los citados más arriba.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Honorarios*, núm. 13.

8.—El art. 69 del Apéndice al Cód. de Proc. dispone, que cuando hubieren menores interesados, la fijación de honorarios debe ser hecha sin sustanciación alguna, y dictado el auto de regulación solo procede el recurso de apelación, el que lo puede interponer el Asesor de Menores en caso de no estar conforme con la estimación hecha por el Juzgado: no vale la pena de nombrar para esto un tutor especial, cuya única misión se reduciría á la interposición del recurso.

9.—Véase: verb. *Escepción de pago*, núm. 1.

10.—En un juicio terminado amigablemente por transacción, el demandado pidió que el contrario manifestara su conformidad con la cuenta presentada: éste dijo, que no reconocía la obligación de abonarlos, pues no se había comprometido á ello: no podía el Juez regular los honorarios en este caso en que se pedía contra la parte que no estaba obligada á abonarlos, desde que no había condenación en costas. Esta resolución está en abierta oposición con otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Honorarios*, núm. 13. Estos dos casos se contradicen tan claramente que al compararlos nos parece ver representada en la justicia de la Cámara al dios Jano con sus dos caras, sentado en el Janículo.

11.—En el caso ocurrente se trataba de una simple operación de di-



dos por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 357, Ser. 4^a.

12. **Honorarios**—Para su regulación, el Juzgado debe tener á la vista todos los expedientes que forman el litigio, aún los de otros Juzgados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 67, Ser. 3^a.

13. **Honorarios**—El procedimiento sumario solo es aplicable á los honorarios devengados judicialmente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 365, Ser. 4^a.

14. **Honorarios**—La estimación de los honorarios que visión de un terreno en lotes para adjudicar á cada heredero su parte hereditaria. Esta operación no está regida por las disposiciones relativas al juicio de mensura—Cap. XXI del Cód. de Proc.—sino por el apéndice—art. 58 y siguientes.

12—El Juez de 1^a Inst. dijo, que él debía limitarse á regular los trabajos profesionales del abogado que consten de autos, independientemente de los devengados y regulados en otros juicios. La Cámara revocó el auto, alegando la conveniencia, la necesidad de tener á la vista los otros expedientes para la más acertada apreciación de los trabajos practicados. Nos parece que tanto la resolución del Juez, como la de la Cámara pueden ser procedentes según los casos. Así cuando el monto de lo litigado conste en otro expediente del cual aquél en que va á regularse es un incidente, es conveniente tenerlo á la vista para tener en cuenta el valor del litigio al proceder á la regulación. Pero si los expedientes no tienen conexión los unos con los otros, y aún teniéndolo no aportara ningún antecedente necesario para la apreciación, el sumario no sería aceptable.

13—Así se desprende claramente de lo dispuesto por los arts. 57 y 65 del Apéndice al Cód. de Proc. El primero dice: «En toda clase de juicio el actuario formará la correspondiente planilla», y el segundo que: «Siempre que ocurra cuestión entre un abogado y el litigante á quien defiende.» Para el cobro de los honorarios devengados fuera de juicio, se sigue el procedimiento ordinario.

14—Las sentencias solo tienen efecto entre las partes litigantes, es decir, entre los dueños del pleito. El abogado patrocinante y el procurador no son dueños del pleito. Además, las relaciones entre el abogado y procurador con su cliente están regidas especialmente por las disposiciones del Apéndice al Cód. de Proc.

el Juzgado hace al condenar en costas al vencido, no afecta los derechos de los que los han devengado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 377, Ser. 4ª.

15. Honorarios—Para que el abogado pueda exigir de

15.—Se dedujo una demanda tendente á obtener el pago de honorarios prestados como abogado, alegando no haber sido ellos comprendidos en la regulación que se practicó en el juicio en que se devengaron. Se dijo que solo habían sido regulados los escritos presentados, pero no las demás diligencias practicadas en gran número entre otros como 30 conferencias que duraron todas ellas casi todo el día. El demandado opuso la escepción de pago, diciendo que los honorarios que se cobraban habían sido satisfechos en virtud de la regulación hecha por el Juez de la causa. Al presentar el abogado su cuenta en el espediente dijo, que al hacer la estimación tenía en consideración la importancia del asunto, la naturaleza de los trabajos profesionales y el éxito obtenido, así como también que esos trabajos no solo comprendían los escritos presentados sino como se ha dicho ya, en más de treinta conferencias con distintas personas, entre las que la mitad habían absorbido casi todo el día, lo que para el efecto de la regulación debía tenerse presente, y al efecto debía ordenarse que el patrocinado manifestara si dicha aseveración era ó no exacta en cuanto á las conferencias celebradas con motivo del mismo juicio. El demandado al hacer esta manifestación rechaza como inexacto lo aseverado por su letrado, procediéndose después á la regulación. Después de esta regulación deduce el abogado su acción ordinaria por cobro de esas conferencias y trabajos que no constaban en autos. La Cámara dijo, que los honorarios habían quedado satisfechos en la primera regulación, pues se había ejercitado el derecho acordado por el art. 1627 del Cód. Civ. Que la regulación no hace distinción entre los honorarios devengados y constantes del espediente y los que no constaban, ni contenía ninguna salvedad por la que debía entenderse que se reservaba el derecho para gestionar en otro juicio el cobro de los honorarios no reconocidos por el patrocinado. Se dijo asimismo que la prueba rendida era insuficiente para dejar probados los servicios estrajudiciales. Un abogado puede en ejercicio de su profesión, prestar á su cliente servicios, que si bien no constan especialmente en el proceso que dirige ó patrocina bajo su firma se tienen siempre en consideración al hacerse la regulación, pero cuando, así no sucede y cuando fueran negados por el que se dice haberlos causado, y á quien se demanda especialmente su pago, como ocurre en el





su patrocinado otros honorarios que los regulados por el Juez del litigio, debe justificar plenamente su existencia.

—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 4.^a

16. Honorarios—Reconocida la asistencia médica, de

presente caso, no sería justo ni de derecho una condenación sin las pruebas que justifiquen la existencia de esos trabajos extraordinarios, prueba que debió el actor producir, y que repito, no encuentro bastante en las que se han analizado por el Inferior. Parece que los fundamentos aducidos por la Cámara no son muy poderosos. Ella cree que los honorarios regulados en un juicio, comprenden no solo el valor de los escritos sino también el de las consultas, conferencias, etc., que se celebren en el mismo juicio, porque según ella, esas conferencias son necesarias y hasta puede decirse anexas al patrocinio del abogado, siendo así que esas conferencias son indispensables para ponerse al corriente del asunto que se le encomienda. Está bien esto, cuando se trata de conferencias celebradas tan solo con el cliente: pero cuando el abogado concurre á conferencias celebradas con el abogado contrario para arribar á una transacción, por ejemplo, ese honorario no puede quedar comprendido en la regulación. Si la transacción se lleva á cabo, y si el Juez tiene en cuenta el resultado final del pleito, entonces sí puede considerarse como comprendida en la regulación: mas si el arreglo no se llevó á buen término, es claro que esos trabajos no pueden considerarse comprendidos en la regulación. En el caso que nos ocupa, el patrocinado negó la celebración de las conferencias, luego el Juez no podía tomarlas en consideración, porque la forma sumaria de la estimación de honorarios está establecida en el Apéndice al Cód. de Proc., mientras que la forma ordinaria tiene su tramitación general que es la de todo juicio. Mal puede el Juez regular trabajos que fueron negados. Por consiguiente, la regulación hecha en la forma sumaria comprendía tan solo los trabajos confesados, pero jamás pudieron quedar comprendidos los que fueron negados. No tenta pues el Juez, por qué hacer la salvedad de que nos habla la Cámara, diciendo que debió espresarse que quedaba á salvo el derecho del abogado, para exigir el cobro del honorario negado, por la vía ordinaria. Es, á todas luces injusta la resolución de la Cámara, porque es contraria á las leyes que rigen el caso.

16—La demanda se dió por contestada en rebeldía, produciéndose la confesión ficta de los hechos en que se funda—art. 100 del Cód. de Proc.—La demandada fué una sucesión, y la viuda del causante presentó una cuenta que por asistencia médica le había sido pasada. Sus



ben los honorarios ser regulados por el Consejo de Higiene, aún cuando no resulte plenamente justificado el número de visitas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 164, Ser. 4^a.

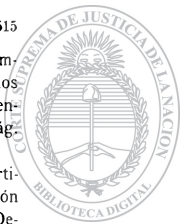
17. **Honorarios**—En el incidente sobre obligación de pagar honorarios, debe oírse á todos los que puedan ser afectados por la regulación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 215, Ser. 4^a.

18. **Honorarios**—El abogado patrocinante de un heredero, solo puede exigir de su patrocinado el pago de sus honorarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 247, Ser. 4^a.

términos revelaban que el médico no cobraba toda la asistencia. El actor también exhibió otra por la cual la viuda solicitaba la suspensión del juicio, sin desconocerse el derecho que asistía al médico para cobrar sus honorarios. También se comprobó la asistencia por medio de testigos. Pero de todo este cúmulo de pruebas, no resultaba el número de visitas, siendo así que el actor cobraba hasta el número de 103. No es de extrañarse la falta de comprobación del número de visitas, porque es punto menos que imposible que un médico pueda justificar el número de visitas ó curaciones que hace á sus enfermos, por la naturaleza misma de los hechos, bastando se acredite la asistencia durante un término proporcional. De aquí resulta que el art. 1627 del Cód. Civ. es de perfecta aplicación.

17—Cuando hay pretensiones encontradas respecto á quién debe pagar honorarios, hay que resolverlas primero, y después fijar el monto de dichos honorarios; y por consiguiente es necesario oír á todo aquel que pueda tener interés en contestar esa regulación, ya sea oponiéndose á ella ó recurriendo para ante la Cámara cuando considere elevado la estimación.

18—De acuerdo con la jurisprudencia establecida en ciertos casos. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núm. 5; tom. 1^o, mismo verbo, núm. 1357; y verb. *Testamentaria*, núm. 2596. En contra puede verse, Inst., tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núm. 4; tom. 2^o, *Regulación de honorarios*, núm. 1, y tom. 1^o, verb. *Honorarios*, núm. 1354. Nos parece difícil establecer reglas fijas para estos casos, y los Jueces deben resolverlos en la forma que mejor consulte los antecedentes de la cuestión. El abogado patrocinante de un heredero, no puede ejecutar á la testamentaria por el importe de sus honorarios devengados en ella. Este es el principio general: pero si los escritos han beneficiado á la masa, se



19. **Honorarios**—La regulación judicial de ellos, comprende no solo los que constan en los escritos presentados sino también las conferencias necesarias para la presentación de los espresados escritos—Jur. Civ., tom. 4, págs. 5, Ser. 4^a.

20. **Honorarios**—Los del agrimensor nombrado particularmente, deben ser fijados por peritos: la disposición del Cód. de Proc. que ordena su regulación por el Departamento de Ingenieros, solo es aplicable cuando su nombramiento ha sido judicial.—Jur. Civ., tom. 6, página 58, Ser. 4^a.

21. **Honorarios**—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidas en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 6, págs. 419, Ser. 4^a.

22. **Honorarios**—Procede la escepción de inhabilidad de titulo contra la regulación de honorarios si la ejecución se sigue contra los que no tienen vínculo alguno de derecho con el abogado ó procurador ejecutantes.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 292, Ser. 4^a.

23. **Honorarios**—Los honorarios solo pueden ser exigidos al cliente cuya representación se ha ejercido.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 314, Ser. 4^a.

debe pedir que el Juez declare que está obligado á abonarlos la testamentaria y entoncces procede la vía ejecutiva, por tratarse de un negocio conducido útilmente, como lo tiene resuelto en algunos casos la jurisprudencia. Véase: Inst. tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núms. 4, 5 y 6; tomo 2^o, mismo verbo, núms. 5, 20 y 22.

19—Véase la nota al núm. 15.

20—Véase: verb. *Agrimensor*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Costas*, núm. 50.

22—Véase: *Escepción de inhabilidad de titulo*, núm. 14.

23—Es jurisprudencia constante que el abogado ó procurador solo tiene derecho á exigir sus honorarios del cliente á quien presta sus servicios.



24. **Honorarios**—El acreedor hipotecario de segunda hipoteca, tiene derecho de apelar de las regulaciones de honorarios recaídas en la sentencia dictada en la ejecución del primer hipotecante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 4^a.

25. **Honorarios**—Justificado el contrato de locación de servicios sin estipulación de precio determinado, los honorarios deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 244, Ser. 4^a.

26. **Honorarios**—El acreedor por honorarios cuyo privilegio general ha sido reconocido en la graduación de créditos, no está obligado á esperar la terminación del concurso para su cobro.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 333, Serie 4^a.

27. **Honorarios**—Del agrimensor, deben ser fijados por

24—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 2.

25—Art. 1627 del Cód. Civ.

26—El Cód. de Proc. al tratar del concurso civil, dispone que los acreedores hipotecarios y aquellos que tengan privilegio especial respecto de los cuales no haya habido oposición, ó que hayan obtenido sentencia que haya pasado á autoridad de cosa juzgada, no estarán obligados á esperar el resultado del concurso general, y deben ser pagados con el producto de los bienes afectados al privilegio ó hipoteca, sin perjuicio de obligarlos á dar caución para el caso que aparecieren acreedores de mejor derecho—artículo 738 del Cód. Civ.—En este caso se encuentran los honorarios del abogado del síndico de un concurso que son regulados con intervención del Síndico. Consentida la regulación, el abogado no está obligado á esperar la terminación del concurso. Además que el honorario en este caso tiene por la ley un privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles ó inmuebles.

27—La Cámara dijo, que los trabajos debían ser fijados por árbitros, de acuerdo con el art. 1627 del Cód. Civ., «no pudiendo sin embargo el Tribunal cometer esa regulación al Dep. de Ingenieros de la Provincia como se ha pedido, por tratarse de una repartición fiscal del orden provincial que no tiene relación jurisdiccional con los Tribunales de la Capital.» Este caso está de acuerdo con otro resuelto. Véase: verb. *Agrimensor*, núm. 1.



peritos si el contrato de locación ha sido privado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 400, Ser. 4^a.

28. **Honorarios**—Solo deben ser á cargo de la testamentaria los honorarios causados en interés común de los herederos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21, Ser. 4^a.

29. **Honorarios**—La viuda del causante, nombrada judicialmente administradora de los bienes, tiene derecho á cobrar honorarios—Jur. Civ., tom. 8, pág. 21, Ser. 4^a.

30. **Honorarios**—No existiendo condenación en costas, los honorarios de los peritos nombrados de oficio deben ser satisfechos proporcionalmente.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 46 Ser. 4^a.

31. **Honorarios**—Para que sea obligatorio para un tercero el pago de los honorarios por asistencia médica, debe justificarse no solo la prestación sino que fueron prestados por su orden.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 426, Ser. 4^a.

32. **Honorarios**—La condenación en costas al Juez, no enerva el derecho del abogado para exigir el pago de sus honorarios á la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Serie 4^a.

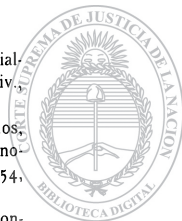
28—Entre otros escritos que se dijo por el Juez de 1^a Inst. que no correspondía á la sucesión abonar, estaba uno en que se pedía la partida de defunción del causante; la Cámara dijo, que era evidente que esa petición era formulada en beneficio de la masa hereditaria, y que por consiguiente á ella correspondía abonarlo. De acuerdo con el sumario, véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Honorarios*, núms. 4 y 5; tom. 2^o, mismo verb. núms. 5, 10, 20 y 22; *Regulación de honorarios*, núm. 1, y tom. 1^o *Honorarios*, núm. 1354. En estos casos la acción nace de la locación de servicios ó del mandato que son contratos, y como tales no pueden oponerse á terceros—art. 1199 del Cód. Civ.

29—Véase: *Administrador judicial*, núm. 1.

30—Véase: verb. *Costas*, núm. 53.

31—Véase: *Asistencia médica*, núm. 1.

32—Véase: verb. *Abogado*, núm. 6.



33. **Honorarios**—De abogado, devengados estrajudicialmente, deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 169, Ser. 4^a.

34. **Honorarios**—La manifestación sobre honorarios, debe hacerla el interesado sin que esto importe reconocerse obligado á su pago.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 254, Ser. 4^a.

35. **Honorarios**—El abogado defensor de los que se consideran con derecho al patronato de una capellanía, carece de derecho para cobrar sus honorarios de la finca gravada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

36. **Honorarios**—Los abogados y procuradores carecen de personería para reclamar de sus honorarios en los casos de condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, página 81, Ser. 4^a.

33—Véase: verb. *Abogado*, núm. 8.

34—Presentada su cuenta de honorarios por un apoderado, el principal se negó á hacer manifestación alguna diciendo, que no tenía obligación de hacerlo. El Juez dijo, que por el momento solo se trataba de hacer una manifestación para con su resultado practicar la regulación: que la discusión sobre si está ó nó obligado al pago, solo puede hacerse en la oportunidad del artículo 485 del Cód. de Proc., y que por consiguiente esa manifestación debía hacerse sin perjuicio de hacer valer sus derechos en oportunidad. La Cámara confirmó esta resolución por sus fundamentos. Es evidente que esta resolución no se ajusta á la ley. El art. 65 del apéndice al Cód. de Proc. legisla para el caso en que entre el abogado ó procurador y su cliente no medie contrato sobre honorarios, como lo establece espresamente el art. 67, cuando dice: «no habiendo convenio escrito.» Si al patrocinado se le ordena que haga la manifestación pedida, y alega que existe convenio escrito, es evidente que no habria derecho á obligarlo á hacer la manifestación, porque sus relaciones de derecho no están regidas entonces por las disposiciones del apéndice sino por el convenio escrito. El sumario pues, no podria aplicarse en este caso y la regla allí sentada fallaria por su base. De acuerdo con el sumario, véase: tom. 3º, verb. *Honorarios*, núm. 13. En contra, véase el núm. 7.

35—Véase: verb. *Abogado*, núm. 10.

36—Véase: verb. *Abogado*, núm. 15.



37. **Honorarios**—El abogado del peticionante de herencia, cuya acción ha sido rechazada, carece de derecho para cobrar honorarios á la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 84, Ser. 4^a.

38. **Honorarios**—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente á su patrocinado, con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

39. **Honorarios**—Los devengados en espedientes, deben ser regulados por el Juez que en ellos tenga jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 318, Ser. 4^a.

Honorarios—Véase: *Litispensas*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núms. 6 y 7—*Escribano público*, núm. 1—*Costas*, núm. 45.

Honorarios médicos—Véase: *Honorarios*, núm. 16—*Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

Hora—Véase: *Posiciones*, núms. 12, 17, 24 y 31—*Rebeldía*, núm. 5.

37—Véase: verb. *Abogado*, núm. 11.

38—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.

39—Véase: verb. *Espediente*, núm. 6.



INSTITUTA
DE LA
JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR EL

DR. J. J. HALL

(ABOGADO)

Comprende los tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 3ª Serie de la Jurisprudencia Civil
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 4ª Serie de la misma

TOMO V—SEGUNDA PARTE

BUENOS AIRES

IMPRENTA EUROPEA, MORENO Y DEFENSA

1895







1ª. **Identidad**—Justificada la identidad de la persona, por instrumento público, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellidado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3ª.

2ª. **Identidad**—La afirmación del escribano autorizante de una escritura pública, sobre la existencia é identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder á un homónimo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4ª.

Identificación—Véase: *Causante*, núm. 1.

Idoneidad—Véase: *Tutela*, núms. 1 y 2.

Ignorancia de derecho—Véase: *Acto lícito*, núm. 1—*Costas*, núm. 49.

1ª. **Ilegitimidad**—Ni la confesión ni aun el reconocimiento espreso, hecho por la esposa, de la verdad de los hechos alegados por el marido, forman prueba para la declaración de ilegitimidad del menor—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3ª.

2ª. **Ilegitimidad**—Del hijo no desconocido por el esposo,

1ª—Véase: *Apellido*, núm. 1.

2ª—Véase: *Escribano*, núm. 2.

1ª—Art. 255 del Cód. Civ.

2ª—Véase: verb. *De oficio*, núm. 2.



no puede ser discutida ni invocada por terceros, y los jueces deben de oficio evitar los litigios que á ese objeto se produzcan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 4^a.

1^a. **Impedimentos**—La prueba de los impedimentos existentes á la época de la concepción, que convertirían al hijo natural en adulterino, incestuoso ó sacrilego, como escepción, corresponde al que afirme su existencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 358, Ser. 3^a.

1^b. **Impedimentos dirimentes**—La prueba plena de los impedimentos dirimentes, no dispensables, que cambiarían el carácter de la filiación y obligarían á los jueces á rechazar la demanda, corresponde al que invoque su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4^a.

Imposibilidad física—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 1.—*Daños y perjuicios*, núm. 9.

Imprescriptible—Véase: *Petición de herencia*, núm. 3.

1^a—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

1^b—Entablada demanda de filiación natural contra el padre, éste dijo, que la mujer era casada cuando tuvo el hijo y que por consiguiente éste era adulterino y no natural. La Cámara resolvió de acuerdo con el caso registrado en el verb. *Filiación natural*, núm. 4; que la prueba de un hecho incumbía al demandado en virtud de los conocidos principios de procedimientos que establecen que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio. Por otra parte, la madre se encontraría imposibilitada de comprobar el hecho negativo de no haberse casado nunca. El Dr. Cortés en una de sus Vistas publicada en el tom. 3^o, pág. 28, decía: Es pues constante, por las consideraciones espuestas que en la demanda para el reconocimiento de la filiación natural contra uno solo de los padres no es esencial designar el otro; y que si bien es cierto que apareciendo haber existido entre ambos un impedimento dirimente no dispensable, tal demanda caducaría, *esa prueba, en todo caso, sería á cargo del demandado, el cual alegaría un hecho excepcional; y o del demandante que en esta parte negando simplemente tendría además en su favor la presunción que en duda, induce á admitir lo que sucede las más de las veces, y sobre todo, á rechazar la existencia de un delito no justificado.*



Imprudencia—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10 y 16.

1. **Impuesto**—Solo puede calificarse de tal, aquel cuyo producido ingresa en el tesoro público ó municipal, por estar incluido en el cálculo de recursos.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 76, Ser. 4^a.

2. **Impuesto**—Las cartas privadas, aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están sujetas al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 353, Ser. 4^a.

3. **Impuesto**—De sellos, debe pagarse por el total de los bienes aun cuando estén situados fuera de la República.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 4^a.

4. **Impuesto**—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 38, Ser. 4^a.

5. **Impuesto**—La resolución que declara haber ó no lugar al pago del impuesto sobre legados ó herencias transversales, debe recaer después de amplia discusión, pues tiene fuerza de sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

Impuesto—Véase: *Acción*, núm. 3—*Papel sellado*, números 1, 5 y 6—*Cuenta corriente*, núms. 1, 2 y 3—*Ado-*

1—Véase: verb. *Adoquinado*, núms. 1 y 2.

2—Véase: *Cartas privadas*, núm. 1.

3—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley de Papel sellado de 1891. Se trata de un impuesto de sellos por actos de justicia sin consideración á bienes determinados sino á un todo igual como es una sucesión. Si los actos de trasmisión de dominio celebrados en el país para cumplirse en el extranjero, en los que hay individualización de las cosas sobre que recaen, están sujetos a la ley de sellos según el art. 5^o, no habría razón atendible para exonerar de dicho impuesto á los que están comprendidos en una sucesión.

4—Véase: *Cuenta corriente*, núm. 2.

5—Véase: *Herencias transversales*, núm. 4.



quinado, núms. 1 y 2—*Depósito gratuito*, núm. 1—*Tesoro público*, núm. 1—*Empedrados*, núm. 3—*Posesión judicial*, núm. 7.

1°. **Impuestos nacionales**—Las gestiones para su cobro, deben ser deducidas ante los Jueces Federales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 65, Ser. 4ª.

Inacción—Véase: *Herencia*, núm. 3—*Derechos hereditarios*, núm. 4—*Derecho de petición*, núm. 2—*Cuenta particionaria*, núm. 5—*Prescripción liberatoria*, núm. 1.

Inadmisibilidad—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 15—*Excepción de falta de personería*, núm. 13—*Excepción de litispendencia*, núm. 6.

1°. **Inapelable**—La Cámara no puede conocer sobre un auto inapelable, aun cuando el Inferior haya concedido el recurso.—Jur. Civ., tom. 1 pág. 28, Ser. 3ª.

2. **Inapelable**—El auto que ordena el levantamiento de la inhibición por haberse presentado bienes á embargo, es inapelable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 4ª.

3. **Inapelable**—La condenación en costas contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4ª.

4. **Inapelable**—Las regulaciones contenidas en la sen-

1ª—De acuerdo con lo establecido espresamente en el art. 111, inc. 5ª de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.

1ª—La Cámara en estos casos debe declarar mal concedido el recurso. Pero la práctica observada por ella es no resolver espresamente si el recurso está ó no bien concedido, solo dice «devuélvase al Juzgado de su procedencia para que lleve adelante sus procedimientos.» De este modo evita fundar la resolución, lo que para ella implica ahorro de trabajo. Esto es bastante aunque no pueda aducir un solo fundamento para cohonestarla. Ella acepta todo lo que sea evitarse trabajo y estudio.

2—Véase: *Auto inapelable*, núm. 2.

3—Véase: *Costas*, núm. 60.

4—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 10.



tencia de remate, son inapelables si no se hubiesen opuesto excepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

5. **Inapelable**—El auto que ordena medidas para mejor proveer, es inapelable—Jur. Civ., tom. 9, págs. 81 y 143, Ser. 4^a.

6. **Inapelable**—Es la resolución del Juzgado en el juicio de disenso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 145, Ser. 4^a.

7. **Inapelable**—La resolución del Juez de primera instancia en los casos de disenso, es inapelable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 4^a.

8. **Inapelable**—El auto que confiere al demandante tras-

5—Véase: verb. *Auto inapelable*, núm. 1.

6—La ley y la jurisprudencia así lo establecen. Véase el núm. 7.

7—Véase: *Disenso*, núm. 1.

8—Porque según la Cámara ese auto no causa gravamen irreparable, ¿Qué entiende ese Tribunal por gravamen irreparable? La apelación procede siempre, de toda sentencia definitiva, pero no de todas las interlocutorias. Estas pueden ser de tres clases: 1^a Las que resuelvan un incidente; 2^a las que consentidas, causan un gravamen que no podrá ser reparado por la sentencia definitiva, es decir, que causan estado; 3^a las que como dicen Manresa y Reus—tom. 1^o, pág. 92—no tienen más objeto ni efecto que imprimir la marcha progresiva al juicio. Los autos que resuelven un incidente son definitivos respecto de él, y siempre son apelables. Las providencias interlocutorias que causan gravamen, son aquellas que por el punto sobre que versan sostienen una importancia vital en el juicio, como la recepción de una medida de prueba ó la denegación de ellas. Las de 3^a clase por sí mismas no pueden nunca agravar la condición de una de las partes en provecho de la otra; y nunca son apelables. El gravamen es el perjuicio que una sentencia interlocutoria trae para una de las partes en provecho de la otra; cuando la sentencia definitiva no puede neutralizar ó hacer desaparecer ese perjuicio, se dice que el gravamen es irreparable. Este puede surgir desde la resolución misma, como su consecuencia inmediata, ó puede estar contenida por ella en potencia para aparecer después. El gravamen tiene lugar siempre que se viole la ley, cuando la sentencia se funda en hechos falsos, ó no tiene en cuenta todos los hechos; y en materia de procedimientos, en aquella en que por ser la ley de orden público, cuando la sentencia dispone lo que la ley no manda ni

lado de la demanda, es inapelable.— Jur. Civ., tom. 4, página 228, Ser. 4ª.

ha previsto, y cuando va aunque no contra el texto de ella, al menos contra su espíritu, porque esa ley es la garantía de la imparcialidad del Juez, el que no puede apartarse de ella. Por otra parte, no es posible fijar de antemano las providencias que hayan de causar gravamen irreparable: todo dependerá, en muchos casos de las circunstancias. Pero volviendo á nuestro caso: la Cámara declara que no causa gravamen irreparable el auto que confiere traslado al demandante de la contestación á la demanda. Una providencia así, es la violación del espíritu de la ley, y aún si se quiere, de su letra, porque como ya se ha dicho antes, las leyes de procedimientos son de orden público; cuanto en el juicio se haga por el Juez, debe ajustarse á ella estrictamente sin poderse apartar de sus preceptos. Si esta garantía no existiera, el litigante preferiría abandonar sus derechos antes que esponerse á consecuencias desastrosas traídas al juicio por el procedimiento arbitrario del magistrado. Respecto de las interlocutorias que deciden algún artículo no se suscita jamás duda alguna en la práctica respecto de su apelabilidad. Es en lo referente á las interlocutorias que causan estado y que forman una de las tres clases á que antes se ha hecho referencia, donde reina la más completa confusión. ¿Cuáles son las providencias que causan estado? Son las que, como se ha dicho ya, recaen sobre puntos que ocasionan un perjuicio irreparable á las partes que las consienten, ó como decía la Ley de Partida, «que no se pueden después ligeramente enmendar, á menos de gran daño ó de gran vergüenza de aquel que se tuviese por agraviado de ella.» La ley no dice cuáles son esas providencias que causan estado; el derecho antiguo y los autores prácticos solo fijan algunos ejemplos de ellas. En la imposibilidad de presentarlas todas, bastará citar entre otras, las que de plano deniegan la admisión de una demanda, las que desechan algunas pruebas que se presenten, las que declaran por desierta una apelación, las que la admiten ó deniegan, las que desechan cualquier excepción perentoria, las que imponen una multa ó corrección disciplinaria á cualquiera de los que intervienen en el juicio, las que deniegan un término prorrogable y otras semejantes. Todas estas providencias causan estado, todas causan perjuicios irreparables, porque no se puede salvar en la sentencia definitiva y de todas ellas debe también concederse apelación. No son apelables todas las demás providencias no espresadas anteriormente, que no son otras que las de mera tramitación, las cuales solo sirven en el expediente para dirigir el orden del enjuiciamiento y preparar las series de





Inapelable—Véase: *Costas*, núm. 50—*Regulación de honorarios*, núm. 3—*Recurso de reposición*, núm. 3—*Autos inapelables*, núm. 1—*Caución*, núm. 1—*Alegato*, núm. 2.

Inasistencia—Véase: *Posiciones*, núms. 24, 25, 27, 31 y 32—*Testigos*, núm. 7.

1. **Incapacidad**—La capacidad ó incapacidad para adquirir derecho se rige única y exclusivamente por las leyes argentinas, siempre que las extranjeras que le dieron origen contengan disposiciones contrarias.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 3^a.

2. **Incapacidad**—La nulidad de una donación por escritura pública fundada en la incapacidad del donante,

actuaciones que se requieren para fallar en definitiva: estas providencias tal vez por no tener la importancia que las anteriores, no causan estado. Cuando el Juez confiere traslado de la contestación á la demanda, ordena un trámite que no está permitido por el Cód. de Procedimientos, y como estas leyes son de orden público, los jueces no pueden manejarlas á su antojo, y por consiguiente el traslado conferido viola esa ley, y confiere á la parte contraria un derecho en perjuicio de la otra parte, lo que constituye el gravamen de que nos habla la ley; y como ese perjuicio no puede subsanarse en la sentencia, resulta que es irreparable y por consiguiente apelable.

1—De este principio surge la consecuencia establecida en el verbo *Divorcio*, núm. 3; donde puede verse asimismo el fundamento del sumario.

2—El principio general que establece el art. 52 del Cód. Civ., es de rigurosa aplicación, mientras no exista una prueba concluyente que modifique la regla determinada por la ley. La presunción de capacidad en los agentes respecto de un acto jurídico, es, pues, siempre á favor del acto y es á la persona que lo impugna á quien le corresponde la prueba de los hechos que pueden dejarlo sin efecto. En el caso que nos ocupa se sostuvo que la donante por su edad, sus costumbres e ideas religiosas no se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales, y que la escritura de donación fué otorgada por lo tanto por una persona absolutamente incapaz para ello. Solo dos testigos afirmaron la incapacidad de la donante, es decir, aseveraron en sus decla-

no puede ser declarada en tanto no se justifique que á la fecha de su otorgamiento había sido declarada judicialmente la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Serie 3ª.

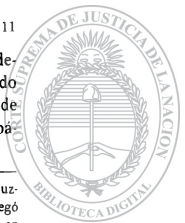
razones que aquella persona era incapaz de tener voluntad propia, pero estas afirmaciones reposaban única y exclusivamente en las ideas religiosas que les manifestó la donante. Estos testigos afirman en sus declaraciones que ignoran que la donante padeciera de manía y la creencia de la incapacidad tenía por origen lo que puede llamarse un sentimiento religioso exagerado por parte de ella. No es posible aceptar estas declaraciones como medio probatorio, con las cuales se pretende justificar la incapacidad de una persona por manifestaciones religiosas juzgadas por terceros que han podido ó no tener el mismo culto religioso y para cuyo análisis hay que tener en cuenta la edad y el medio social en que ha existido la persona que tales creencias profesa. Una persona puede vivir en un exagerado misticismo, pero esto no será jamás causa suficiente para declararla incapaz á los efectos de la ley si en los demás actos de su vida ha procedido con la sensatez ordinaria. Se presentaron por el actor varios testigos que estaban en aptitud de tener un conocimiento exacto de estos hechos, pero ninguno de ellos había afirmado la incapacidad como se pretendía justificar haciendo aparecer á la donante como una persona afectada de una manía tenaz, que la inhabilitara para los actos de la vida civil; ninguno de ellos declaró ser ciertos los hechos aseverados; por el contrario, todos los testigos presentados desconocieron que la donante hubiera padecido de manía ni tuviera la incapacidad que se le atribuía. La ley—art. 141 del Código Civil—declara dementes únicamente á los que se encuentran en estado habitual de manía, demencia ó imbecilidad y nada de esto se justificó, admitiendo hipotéticamente que la prueba de la incapacidad pudiera hacerse en otra forma que la determinada en el art. 142. La donante había fallecido cuando se dijo de nulidad de la escritura de donación. Después que una persona haya fallecido, dice el art. 474, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos por causa de incapacidad á no ser que ésta resulte de los mismos actos, ó que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad. La ley pues, al establecer esta doctrina, ha querido prohibir las investigaciones que pudieran hacerse respecto de la incapacidad de la persona al celebrar sus actos jurídicos, puesto que si la demencia ha existido en realidad los parientes han debido hacer uso de las facultades que la misma ley les acuerda en los arts. 144 y 470 del Cód. Civ. Si es cierto que la ca-



3. **Incapacidad**—El reconocimiento médico para la declaración de la incapacidad debe practicarse aun cuando carezca de personería el denunciante, si el Ministerio de Menores hace propia la denuncia.—Jur. Civ., tom. 6, página 387, Ser. 3^a.

pacidad del donante, según lo preceptuado en el art. 1809, debe ser juzgada respecto al momento en que la donación se prometió ó se entregó la cosa, esta disposición no modifica el principio general establecido en el art. 414, que no tiene más escepción que la que se indica en el artículo 3615, como puede verse por la nota del codificador puesta al pie del mismo.

3.—El art. 144 en su inc. 3^o faculta al Ministerio de Menores para pedir la declaración de demencia. Puede asimismo pedir el nombramiento de un curador cuando el presunto insano no se encuentre asistido de un representante necesario, como cuando se trata de la mujer ó del marido, en cuyo caso, con arreglo al art. 476, el marido ó la mujer respectivamente serán los curadores legítimos y necesarios, siendo ésta sin duda la razón fundamental que se tuvo en vista por la Cámara en el caso que se registra en el tom. 3^o, pág. 219, Ser. 1^o de la Jur. Civil, para considerar improcedente la declaratoria de demencia—Inst., tomo 2^o, verb. *Insania*, núms. 1 y 2.—En este caso la Cámara atendió especialmente á esta circunstancia, es decir, á que la insana tenía su representación legal y que era por ello innecesario gestionarla para quien la tenía por el ministerio de la ley. Pero en el caso del sumario concurren circunstancias muy diversas. Desde luego el hermano es el que pide la declaratoria, y éste no es como el esposo ó la esposa, un representante necesario del hermano, puesto que para ejercer la representación legal de su persona y bienes, necesita que el cargo respectivo de tutor ó curador en su caso, le sea discernido por la autoridad judicial competente y es sabido por otra parte, que está librado al arbitrio del Juez preferir á los parientes más idóneos para el ejercicio de la curatela, prescindiendo del orden que para el llamamiento á su desempeño establece la ley. Necesario es tener presente además, que según lo dispone el art. 58 del Cód. Civ., el que protege á los incapaces al efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que oportunamente determina, y que entonces el Ministerio de Menores puede solicitar el reconocimiento de la presunta insana para poder cumplir el deber que le impone el art. 491 del Cód. de Proc., de pedir el nombramiento de tutores ó curadores de los menores ó incapaces.





4. **Incapacidad**—La ratificación del capaz revalida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados personalmente ó por apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Ser. 4^a.

Incapacidad—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 17—*Mandatario*, núm. 15.

1^a. **Incapaz**—Si el incapaz demandado subsana su incapacidad, el Juez debe continuar entendiendo en el juicio, sin que el actor deba ocurrir ante otro á deducir nueva demanda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 77, Ser. 4^a.

Incapaz—Véase: *Nulidad de la ejecución*, núm. 6.

Incestuoso—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

1. **Incidente**—Cualquier incidente de sustanciación obligatoria, suscitado por una de las partes, suspende los términos para las demás.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Serie 4^a.

2. **Incidente**—Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca ena-

ces que no los tengan. No puede desconocerse que el ejercicio de tal facultad puede en algunos casos ser contrario á las consideraciones debidas á la familia, pero no se oculta tampoco que en muchos, tal facultad espresamente consagrada en la ley, evitará eficazmente que se cometan abusos con respecto á la persona y bienes de los incapaces.

4—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1^a—La incapaz era una mujer casada, la que según disposición del art. 54 de la ley de matrimonio civil, no puede estar en juicio sin la venia correspondiente. Dicha acción fué dirigida contra una mujer casada, y no pudiendo seguirse el juicio por ser ella incapaz, la demanda no podía prosperar, ni podía tampoco continuar. Si esa persona no puede contestar la demanda que se le promueve, está implícitamente comprendida en la disposición del art. 75 del Cód. de Proc., como que se demanda con violación de la ley, cuya trasgresión importa la nulidad de todos los actos. Pero como después se le concedió la venia para estar en juicio, vino á resultar que esa nulidad quedó subsanada por la confirmación tácita, puesto que la nulidad era relativa, y por consiguiente la causa debía continuar en su tramitación.



jenada con pacto de retroventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente por separado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Ser. 4^a.

3. **Incidente**—No puede conceptuarse incidente testatario la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4^a.

Incidente—Véase: *Recusación*, núm. 3—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 2 y 17—*Notificación*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 10 y 41—*Rendición de cuentas*, núm. 20—*Término de prueba*, núm. 4.

1^a. **Incidentes** — Los incidentes suspenden el término de prueba sin petición de parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4^a.

2. **Incidentes** —Consentida la competencia en lo principal, no puede declinarse en los incidentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 306, Ser. 4^a.

Incompatibilidad —Véase: *Padrastro*, núm. 1.

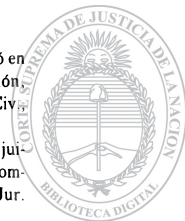
1^b. **Incompetencia** —La declaración de que el Juzgado carece de ella, hace procedente el levantamiento del embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 370, Ser. 3^a.

3—Véase: *Acción personal*, núm. 4.

1^a—Esto no lo resolvió espresamente la Cámara, pero resultaba de una manera explícita de la forma en que trató otra cuestión que le estaba íntimamente ligada.

2—Véase: verb. *Competencia*, núm. 6.

1^b—El art. 463 del Cód. de Proc. establece que el embargo preventivo dictado por Juez incompetente, es válido siempre que haya sido dictado con arreglo á las disposiciones del Cód. de Proc. En el caso que nos ocupa se decretó un embargo preventivo y el embargado pidió que se dedujera la acción dentro del término del art. 460: la acción se inició, pero ante Juez incompetente, en cuyo caso debe considerarse como no cumplida la disposición del art. 460 citado.



2^a. **Incompetencia**—Si resulta que el causante falleció en jurisdicción de la Provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3^a.

3. **Incompetencia**—Cualquier que sea el estado del juicio, si las partes consienten el auto que declara la incompetencia del Juzgado, debe archivar el expediente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 8, Ser. 4^a.

4. **Incompetencia**—Cuando la jurisdicción es potestativa del demandado, no procede la condenación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 8, Ser. 4^a.

Incompetencia—Véase: *Honorarios*, núm. 5 — *Acciones personales*, núm. 1 — *Cosa juzgada*, núm. 5 — *Escepción de incompetencia*, núms. 1 y siguientes — *Escepción de litispendencia*, núm. 7.

1. **Inconstitucionalidad** La inconstitucionalidad de la ley que afecta á las herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia, si no lo ha sido por el Inferior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 273, Ser. 3^a.

2^b. **Inconstitucionalidad**—De la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 285, Ser. 3^a.

3^b. **Inconstitucionalidad**—De la ley que grava á los legados y herencias transversales con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda ins-

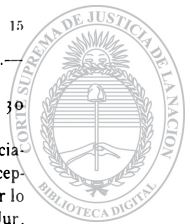
2^a—Véase: *Causante*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Costas*, núm. 18, y tom. 4^o, mismo verbo, núm. 12.

1—Véase: *Herencias transversales*, núm. 1.

2^b—Véase: *Herencias transversales*, núm. 2.

3^b—Véase: *Herencias transversales*, núm. 3.



tancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3^a.

Inculpabilidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 30 y 61.

1. **Indemnización**—Los jornales abonados á los oficiales durante la paralización de una obra, no pueden conceptuarse consecuencia inmediata de aquel hecho, y por lo tanto no pueden ser incluidos en la indemnización.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 81, Ser. 4^a.

2. **Indemnización**—La exajeración de la suma demandada como indemnización, justifica la resistencia del demandado y en consecuencia la exoneración del pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3^a.

3. **Indemnización**—Justificada la propiedad particular de los terrenos ocupados por una empresa de utilidad pública, debe ser obligada á indemnizar su valor —Jur. Civ., tom. 4, pág. 393, Ser. 3^a.

1—El art. 1069 establece que el daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fué privado el damnificado por el acto ilícito. Entre estos no puede conceptuarse comprendido el pago de jornales, por cuanto los peones pueden perfectamente trabajar y ocuparse en quehaceres análogos durante la suspensión de la obra. Ese perjuicio aunque existiera, no podría conceptuarse como una consecuencia inmediata y necesaria de la suspensión de la obra, según lo establece el art. 320 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Costas*, núm. 19.

3—El art. 17 de la Const. Nac. establece que la propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La espropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En presencia de este precepto claro y terminante de la Constitución, resulta que la propiedad no puede ser atropellada, despojándose á un dueño so pretexto de utilidad pública, y si la adquisición es necesaria é indispensable debe abonarse previamente su importe en la forma que determinen las leyes especiales que legislan para el caso.



4. Indemnización—Por la falta de cumplimiento a una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 220, Ser. 3ª.

5. Indemnización—El damnificado por la violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando él no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

6. Indemnización—La calificación de jugador de garito a una persona que además de comprobar su honorabilidad justifique la falsedad del hecho imputado, importa estra-limitación de facultades en el empleo y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 378, Ser. 4ª.

7. Indemnización—Para que proceda la que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificar previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, página 396, Ser. 3ª.

8. Indemnización—Pecuniaria, los padres, cualquiera que sea la edad de la víctima, tienen derecho a una indemnización pecuniaria en relación a los sacrificios que les haya costado el hijo, ó a la ayuda y sostén que de él pudieran esperar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4ª

4—Se determinó en la sentencia que la diferencia entre el precio de compra del inmueble y el que tiene el día de la demanda es lo que debía abonarse como indemnización. Por consiguiente el sumario está equivocado. Y se funda esta resolución en que á haber escriturado el vendedor en la época exigida, tendría el comprador una propiedad que valdría la suma que en ese tiempo se estimaba.

5—Véase: verb. *Damnificado*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.

7—Véase: *Delito*, núm. 2.

8—Véase: *Agravio moral*, núm. 1.



9. **Indemnización**—La culpa del coautor de un delito solo permite la división proporcional de la indemnización, pero no basta para declarar la irresponsabilidad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

10. **Indemnización**—El monto exagerado de la indemnización demandada, no basta para exonerar al demandado de las costas que forman parte del daño causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

11. **Indemnización**—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable del daño, aun cuando el hecho que motivó el incidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

12. **Indemnización**—Debe ser confirmada la suma fijada como indemnización por el agravio moral, si el Tribunal la juzga equitativa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 149, Serie 4^a.

13. **Indemnización**—La fijación del monto de la indemnización que el autor de un acto ilícito adeuda al damnificado, debe ser hecha por los Tribunales con arreglo á los antecedentes que suministre el litigio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 337, Ser. 4^a.

9—Los daños y perjuicios eran procedentes de la muerte, de una persona, ocasionada en un choque habido entre la empresa de un ferrocarril y la de un tramway. Hubo concurrencia de culpa de parte de ambas empresas y se determinó el monto de la indemnización, por «la parte de responsabilidad que correspondía á la empresa demandada.» Estando comprobada plenamente la responsabilidad de ambas compañías, quedaba siempre á salvo el derecho al actor para gestionar la indemnización correspondiente de la otra empresa.

10—Véase: *Costas*, núm. 35.

11—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 105.

12—Véase: verb. *Agravio moral*, núm. 2.

13—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11.



Indemnización—Véase: *Condición*, núm. 3—*Juramento estimatorio*, núm. 6—*Funcionarios públicos*, núm. 4—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Calumnia*, número 1—*Daños y perjuicios*, núms. 43, 49, 54, 73, 74, 91, 92 y 101—*Jurisdicción*, núm. 3.

Indivisible—Véase: *Confesión*, núm. 3—*Documento privado*, núm. 7.

Individualización— Véase: *Documentos*, núm. 10.

1. Indivisión -- No importa posesión en comunidad de

1—Los que vendieron ó cedieron sus derechos al poseedor actual en la época de la demanda, habían sido declarados únicos y universales herederos del causante que fué el propietario del inmueble materia de la acción reivindicatoria, de manera que la sucesión de este comprador entendió poseer y poseyó efectivamente *animo domini*, como sucesora de los únicos herederos de los causantes declarados tales. Ese adquirente fué concursado: de manera que la posesión la tuvo antes del concurso el albacea que había sido instituido en el testamento y el Síndico del concurso después que fué concursada la testamentaria. De donde resulta que tanto la posesión del albacea como la del síndico era á nombre del adquirente y sus herederos, porque ellos no poseen nunca á nombre propio sino en el de aquellos que representan. Ahora bien, como los herederos cedieron sus derechos ó los vendieron en su carácter de únicos y universales herederos, es fuera de duda que la posesión tenida por el albacea y después por el síndico aprov.cha á su dueño y después á su sucesión, en virtud de sus derechos legítimamente adquiridos. De donde resulta que si para la adquisición del dominio por posesión de más de 30 años no se requiere ni justo título ni buena fe—arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ., y Ley 21, tit. 29, Part. 3ª—justificándose que se ha poseído la cosa durante ese término, debe declararse adquirido el dominio por prescripción. Si la posesión de la cosa la tiene una sola persona sin dividir el inmueble, esa posesión del todo no implica comunidad con otros que no eran tenidos como coherederos, porque la posesión del total de la cosa no es tenida á nombre de todos los herederos declarados y no declarados y por consiguiente los no declarados no tienen derecho á la cosa una vez que el cesionario de los declarados ha poseído á su nombre el inmueble durante el tiempo requerido por la ley para la prescripción. Esa posesión del cesionario no implica comunidad con los demás coherederos de los declarados tales, pero cuya existencia no constaba en el acto de la cesión.



los bienes testamentarios, siempre que los albaceas ó representantes de la testamentaria reconozcan poseer y obren á nombre del adquirente ó cesionarios de los herederos y no de los herederos.—Jur. Civ., tom. 4, página 342, Ser. 4^a.

2. Indivisión—Reconocida y declarada por sentencias ejecutoriadas la partición estrajudicial y consiguiente entrega de los bienes á los herederos, la parte dispositiva que ordena la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes entregados, equivale á una declaración espresa de haber cesado el estado de indivisión ó posesión en común de los bienes hereditarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser 4^a.

Indivisión—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

Inejecución—Véase: *Contrato rescindido*, núm. 2.

Inferior—Véase: *Cámara*, núm. 1—*Herencias transversales*, núms. 1, 2 y 3.

1. Información—Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción de fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3^a.

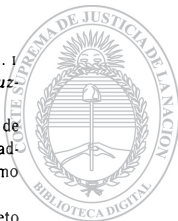
2^a. Información—Es improcedente para justificar la existencia de bienes dotales no reconocidos por contratos nupciales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 4^a.

3. Información—Existiendo en autos suficientes datos para identificar al causante de la testamentaria, no debe producirse información para subsanar un error de la partida de matrimonio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 190, Ser. 3^a.

1—Véase: *Edictos*, núm. 1.

2—Véase: *Bienes dotales*, núm. 1.

3—Véase: *Causante*, núm. 1.



Información—Véase: *Testigos*, núm. 3—*Hijuela*, núm. 1—*Información supletoria*, núm. 1 y siguientes—*Cosa juzgada*, núm. 4—*Fallecimiento*, núm. 4.

1^a. Información *ad perpetuam*—No procede el recurso de fuerza de la resolución de la Curia Eclesiástica que admite una información *ad perpetuam*.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 177, Ser. 4^a.

1^b. Información de pobreza—La producida con el objeto de hacer inútil el arraigo, debe producirse ante el Juez en turno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 94, Ser. 4^a.

1^c. Información sumaria—El derecho excluyente de los herederos más próximos de los más lejanos, puede justificarse por información sumaria: no es necesario esperar a la prueba plena en juicio contradictorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 24, Ser. 4^a.

2. Información sumaria—Si existen derechos contradictorios, no procede para la adquisición del dominio por haber poscido durante el término que la ley requiere para la prescripción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 4^a.

1^d. Información supletoria—La Municipalidad es parte legítima en toda información supletoria para la formación de un título de propiedad sobre terrenos situados en la Capital.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3^a.

1^a—Porque no causa gravamen irreparable.

1^b—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 3.

1^c—Véase: verb. *Heredero*, núm. 5.

2—La Cámara dijo, que dada la oposición de parte legítima, no procedía la aprobación de una información sumaria como la producida, y mucho menos en los términos solicitados y con las deficiencias anotadas.

1^d—La intervención de la Municipalidad procede porque es representante de los derechos que al Fisco corresponden sobre inmuebles situados dentro de su jurisdicción.



2. Información supletoria—En la información para bonificar títulos, no es parte el comprador del inmueble que la motiva, ni en consecuencia después de aprobada judicialmente, puede desconocer su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 3ª.

3. Información supletoria—Justificada la identidad de la persona, por instrumento público, procede la aprobación de la información que justifica la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3ª.

4. Información supletoria—Aun cuando la información supletoria se califique de juicio voluntario, es contencioso para los que en ella intervengan con intereses opuestos, y por tanto la sentencia aprobatoria de la información hace cosa juzgada para ellos.—Jur. Civ., tom. 2, página 234, Ser. 4ª.

5. Información supletoria—Para corregir un error de un

2—No es parte, porque para producir una información solo es parte el Ministerio Fiscal, debiendo el Juez aprobarla ó desecharla, siguiendo ó separándose del dictamen de aquél. Una información no es un juicio contradictorio: no hay demandante ni demandado. En todo caso el comprador puede llevar él mismo adelante la información, si tal es la voluntad de los contratantes, pero no puede jamás exigir una intervención que no se dá ni por el interesado ni por el Juez, porque la ley la prohíbe. En cuanto á que el comprador no pueda objetar la información, tal no fué la resolución de la causa, pues solo se dijo: «que en cuanto á las otras objeciones formuladas contra las demás diligencias de la información, pecan de la misma fragilidad, porque en el curso de este litigio no se ha demostrado por ningún argumento serio y jurídico, que aquéllas carezcan de eficacia.» Luego pues, si las informaciones carecen de eficacia, el comprador puede impugnarlas con perfecto derecho, pues la deficiencia en la información haría defectuoso el título, y el comprador no estaría obligado á escriturar hasta tanto no se subsanaran en forma.

3—Véase: *Apellido*, núm. 1.

4—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

5—Y si la información producida no es bastante, puede ampliarse para colocarla en condiciones legales.

instrumento público, debe formar prueba plena.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 369, Ser. 4ª.

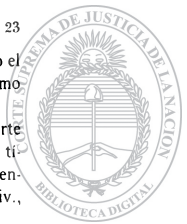
6. **Información supletoria**—Procede la aprobación de la información supletoria del título, siempre que hayan llenado las formalidades que la ley exige; la oposición municipal debe ser fundada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 398, Ser. 4ª

7. **Información supletoria**—Adolece de nulidad la sentencia aprobatoria de una información para probar la pro-

6—La Municipalidad fué oída como parte en la información, no produjo oposición alguna á la información. No podía resultar agravios para ella desde el momento en que la información se produjo en la más perfecta condición legal.

7—La información se mandó recibir con citación fiscal y practicadas las diversas diligencias que fueron solicitadas, el representante de la Municipalidad pidió se declarase cesante su intervención en el asunto y se citase al Presidente del Consejo Nacional de Educación para que asumiera su personería por ser á quien correspondía en razón de haberse declarado vacante la sucesión en cuyos autos existían los títulos de la propiedad, motivo del juicio. El Agente Fiscal por su parte, evacuando el traslado que le fué conferido, manifestó á su vez que no debió intervenir tampoco, por considerar innecesaria en la cuestión la doble representación del Ministerio Fiscal y del Procurador Municipal. En ese caso y sin resolver previamente lo pedido por el Procurador Municipal, se pronunció una resolución aprobando la información y mandándola protocolar. En estas informaciones, como lo dice Manresa y Reus en sus comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tom. V, página 371, el Juez debe oír previamente al Ministerio Fiscal, acerca de su procedencia y después de admitida, conforme á lo dictaminado por aquél, debe oírlo nuevamente como parte esencial en el juicio, y si bien pudiera decirse que el Ministerio Público se escusó fundado en la intervención que ya tenía el Procurador Municipal, es de tenerse presente que esta parte también se escusó pidiendo se citase al representante de Consejo Nacional de Educación, á quien correspondía intervenir por haberse declarado vacante la sucesión interesada en el juicio. De aquí se deduce entonces que no se debió pronunciar sentencia sin antes resolver la citación del Presidente del referido Consejo de Educación y oír las observaciones que podría deducir y que en tal caso tendrían que





piedad de un terreno por prescripción, si no ha sido oído el Ministerio Fiscal ó quien lo represente.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 427, Ser. 4^a.

8. Información supletoria.—La Municipalidad es parte legítima en las informaciones supletorias por falta de título, si se niega á intervenir, debe sustanciarse con audiencia de quien represente los intereses del Fisco.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 427, Ser. 4^a.

9. Información supletoria.—El denunciante de un fallecimiento que asevera datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 21, Ser. 4^a.

Información supletoria.—Véase: *Partidas*, núm. 1—*Poseción cuarentenaria*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 4.

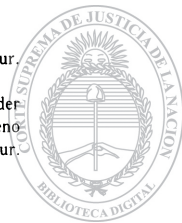
1. Informaciones.—La Municipalidad es parte en las in-

sustanciarse por la vía ordinaria, sin poder entre tanto aprobarse la información. De no ser así, tendría que resultar que una información destinada á formar un título supletorio de la propiedad de un bien raíz, se podría recibir sin la citación y audiencia de la parte á quien puede perjudicar y que tiene un derecho perfecto para observarla, como lo habrían tenido el Ministerio Fiscal y la Municipalidad que declinaron su participación en el juicio por las razones manifestadas. Se reconocía así también, al declararse que la intervención acordada á la Municipalidad en juicio de esta naturaleza, tiene por único objeto hacer valer los derechos que pudiera tener á la propiedad del inmueble sobre que versa y que siendo este puramente voluntario, solo pueden ser oídos en él las partes que intervienen. Por consiguiente y no siendo á la Municipalidad á quien correspondía ni á quien podía perjudicar sino al Consejo Nacional de Educación, no se pudo aprobar la información sin resolver previamente lo pedido por el Procurador Fiscal.

8—Véase nota precedente.

9^a—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1—Véase: verb. *Información supletoria*, núm. 7.



formaciones sobre subsanación ó carencia de título.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 259, Ser. 4^a

2. Informaciones—Es Juez competente para entender en todas las informaciones sobre propiedad de un terreno el que haya conocido en la primera que se inició,—Jur. Civ., tom. 5, pág. 101, Ser. 4^a.

Informe—Véase: *Testigos*, núm. 17— *Cotejo*, núm. 1.

Informe del Registro—Véase: *Embargo*, núm. 8.

1^a. Informe *in voce* — La Cámara puede dejar sin efecto la resolución interlocutoria dictada en un recurso, si se ha omitido sin culpa de la parte el informe *in voce* solicitado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 207, Ser. 4^a.

Informe pericial—Véase: *Perito*, núm. 2.

1. Informes—No estando prohibida la prueba por in-

2—Aplicando al caso el mismo procedimiento que rige cuando se promueven diversos juicios que tienen un mismo objeto, como cuando se inicia una testamentaria ante distintos jueces, con prioridad uno al otro, la gestión debe ventilarse ante el Juez que primero hubiese prevenido en el conocimiento de uno de los juicios informativos promovidos. No cabe otra manera de proceder que la acumulación de los autos, desde que de no hacerlo así, tendríamos que se dividiría la continencia de la causa.

1^a—El interesado había presentado en tiempo un escrito solicitando señalamiento de audiencia para informe *in voce*, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 268 del Cód. de Proc. Ese escrito no fué tomado en consideración por la Cámara, por haberlo retenido en su poder el empleado encargado de la mesa de entradas, resolviéndose sin dicho informe el fondo de la apelación. Se resolvió dejar sin efecto la resolución y señalar nuevo día para el informe, fundándose en que es deber de los Tribunales garantizar ampliamente el derecho de defensa que la ley acuerda, siendo ese derecho inudiscutible en todos los casos, lo que se hace más evidente en los recursos concedidos en relación, pues la única oportunidad que el litigante tiene para espresar los agravios que le infiere la resolución recurrida, es el informe *in voce* que le acuerda el art. 268, citado, del Cód. de Procedimientos.

1—Ante el silencio de la ley sobre este punto, debe acordarse el término extraordinario y aceptarse la prueba ofrecida, sin perjuicio de apre-



formes de oficinas extranjeras, debe acordarse el término extraordinario para producirla.—Jur. Civ., tom. 5, página 225, Ser. 3^a.

2. Informes.—Los de las oficinas públicas ya sean de la administración ó de los escribanos de Registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

3. Informes.—Presentados por los peritos contadores, no puede pedirse ampliación; solo el Juez puede ordenarla para mejor proveer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 259, Ser. 4^a.

4. Informes.—Médicos, sin las formalidades que la ley exige, siguen las reglas que rigen las declaraciones de testigos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 4^a.

Infracción.—Véase: *Acción*, núm. 3—*Contrato por escritura pública*, núm. 1.

1. Inhabilidad de título.—Solo puede resultar del instrumento en que se funda la ejecución, sin que pueda

ciar legalmente su importancia en la debida oportunidad por requerirlo así el principio de la amplitud de la defensa cuando no se contraria ninguna prescripción legal.

2.—Véase: *Administración*, núm. 1.

3.—Siempre que el término de prueba estuviere vencido, porque de lo contrario, las partes pueden pedir la ampliación de la prueba pericial, como cualquiera otra medida probatoria. La prueba concedida á las partes por la ley es amplia y sin cortapizas.

4.—El informe no fué espedido con arreglo á las prescripciones del Cód. de Proc., ni fué ordenado judicialmente, ni controlado por otro perito: circunstancias todas ellas que despojan al informe de toda fuerza probatoria.

1.—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núms. 3 y 12. La teoría sentada en el sumario tendrá que reformarse porque no consulta los verdaderos principios jurídicos que rigen el caso.

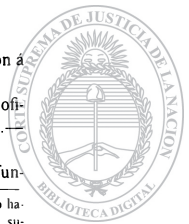
darle origen la falsedad de los hechos que precedieron a su formación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 4ª.

2. **Inhabilidad de título**—No puede ser declarada de oficio por el Juez al dictar sentencia de trance y remate.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 260, Ser. 4ª.

3. **Inhabilidad de título**—Opuesta a una ejecución fun-

2—Si bien el art. 471 del Cód. de Proc. faculta al Juez para no hacer lugar de oficio a la ejecución, cuando viese que el título no es suficiente: si no hace uso de ese derecho en esta oportunidad, menos puede declarar de oficio inhábil el título al dictar sentencia cuando el mismo ejecutado, citado de remate, no hace observación al respecto. Para que esta cuestión fuese materia de sentencia habría sido necesario que se sustentara en forma, oyendo a las dos partes, y recibiendo la prueba; es decir, es necesario que se tramite en la forma establecida por la ley.

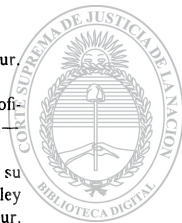
3—El ejecutado fundó la excepción de inhabilidad de título diciendo que «el título que sirve de base a la ejecución es un supuesto crédito por suma de dinero acreditado con la escritura acompañada, que tal título no habilita para ejecutar porque le falta la base esencial, *sine qua non*, le falta la existencia misma de la obligación, sin la cual el instrumento y el acto jurídico que contiene no son nada ante el derecho; que la obligación no existe, porque le falta la razón de ser en las obligaciones—art. 499 y 18, Cód. Civ.—Que jamás ha debido a los demandantes ni ha existido causa para deberles, y que la obligación cuyo pago se ejecutó es nula por falta de causa. Que la ley no ha circunscripto la excepción de inhabilidad, a solo el caso en que el instrumento sea nulo por defecto de forma, lo que sería una monstruosidad, por que habría dado mayor importancia a la forma que a la sustancia del acto. Que felizmente el Cód. de Proc. ha usado un término más amplio, como el de inhabilidad del título, y el ejecutado puede ejercitar esta excepción siempre que trate de la inhabilidad del título, ya por un vicio de forma, ya por vicio de fondo, sea relativo a la capacidad ó a la obligación en sí misma, está en su apoyo la causa que se registra en el tom. 7º, pág. 341, Ser. 1ª, fallos de la Cámara de lo Civil. Que si ha firmado la escritura ha sido debido al trabajo del mandatario, quien apareciendo siempre como apoderado de los demandantes, ha pretendido que debía entregarles una suma de dinero por una pretendida herencia que nunca ha existido. Que lo ha amenazado con un gran pleito que le haría perder sus bienes de fortuna, que su igaorancia, su enfermedad y el temor de verse envuelto



dada en escritura pública, es improcedente si se basa en

en pleito en los últimos años de su vida, lo hizo ceder hasta firmar la escritura pública, y que acompaña una carta que demuestra lo espuesto: funda la otra escepción diciendo: «Que siendo ésta falsa, la obligación es nula, porque no existe otra causa verdadera, como ya lo he manifestado y lo resuelve el art. 501 del Cód. Civ.», termina pidiendo que no se haga lugar con costas á la ejecución. Evacuando el traslado el ejecutado pide el rechazo de la ejecución, diciendo: «Que la causa de la obligación fué el deber en que se hallaba el ejecutado de entregar al actor la parte de una propiedad, y es debido á esto que por el documento se obliga aquél á entregar la suma demandada, como parte de precio obtenido en la venta. Que el ejecutado confunde la inhabilidad con la nulidad, cuando dice que el instrumento de la obligación revisten las formalidades externas necesarias para su validez, por eso no digo de nulidad de la escritura por sus formas. Pero la ley no ha circunscripto la escepción de inhabilidad á solo el caso de que el instrumento sea nulo por defecto de forma. Que el fallo citado no tiene aplicación en este asunto, porque no existe ninguna disposición de fondo que pueda invocarse en nuestro caso para desnaturalizar el juicio ejecutivo, citan en su apoyo los fallos, tom. 3º, págs. 212 y 257, Ser. 1ª, tom. 4º, pág. 551 y tom. 6º, pág. 525, Ser. 2ª. Que en cuanto á la escepción de falsedad, como ella se funda en que no es cierto que el actor sea coheredero, lo que viene á importar en sustancia una reproducción de la anterior, agregan únicamente que según los arts. 494 y 495 del Cód. Civ., los documentos públicos hacen plena fe de los reconocimientos contenidos en ellos». El Juzgado rechazó las escepciones diciendo, que es incuestionable que la inhabilidad del título no puede referirse á la sustancia del acto. El juicio ejecutivo es un procedimiento sumario, que no tiene por objeto declarar derechos dudosos sino hacer que se cumplieren los que se hayan reconocido por títulos que constituyen una fuerte presunción de que el derecho que se persigue es legítimo, la escepción de inhabilidad se refiere á las formas y solemnidades que debe revestir el título para que tenga carácter ejecutivo, pues de lo contrario se daría lugar á las controversias propias de los juicios declarativos, falseando así los propósitos de la ley, que con este procedimiento ha querido evitar las demoras y gastos de la vía ordinaria. Que la disposición contenida en el art. 500 del Cód. de Proc., es una nueva prueba de que las escepciones de inhabilidad se refieren solo á las formas del título, pues si dicha escepción pudiera oponerse también á la sustancia del acto, no tendría aplicación racional dicho artículo.—Véase Caravantes, Proce-





la falta de causa para la existencia de la obligación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 332, Ser. 4^a.

4. **Inhabilidad de título**—No puede ser declarada de oficio por el Juez al dictar sentencia de trance y remate.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 76, Ser. 4^a.

5. **Inhabilidad de título**—Ella solo puede afectar á su forma intrínseca; si ésta llena las disposiciones de la ley que le dió origen, la escepción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 4^a.

6. **Inhabilidad de título**—Procede la inhabilidad del título cuando la ejecución por honorarios se dirige contra la parte que no ha solicitado los servicios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 314, Ser. 4^a.

7. **Inhabilidad de título**—La conformidad con los honoramientos judiciales, núm. 1200.—Que el fallo de la Exma. Cámara que invoca el ejecutado—Ser. 1^o, tom. 7, pág. 341—es de un carácter especial y no puede tener aplicación al caso que nos ocupa. En el fallo citado, la Exma. Cámara aplicó una ley de fondo y en el caso *sub-judice* no existe la misma razón para desnaturalizar el juicio ejecutivo, siendo por otra parte de tenerse en cuenta, que ese fallo no establece jurisprudencia al respecto, pues posteriormente la Exma. Cámara ha dictado otros resolviendo la cuestión que actualmente se ventila, favorablemente á las pretensiones de los ejecutantes—tom. 3^o, pág. 212; tom. 9^o, pág. 257, Ser. 1^o; tom. 4^o, pág. 551 y tom. 6^o, pág. 525, Ser. 2^a.—Que en cuanto á la escepción de falsedad basta solo recordar que en el documento acompañado, el ejecutado reconoce como coherederos á sus hermanos en las sucesiones de sus padres y demás ascendientes, y que este mismo confiesa, contestando á una de las posiciones, que dió poder para iniciar la testamentaria de sus abuelos maternos, lo que demuestra que es falso que el actor no sea coheredero del ejecutado.

4—Véase el núm. 2.

5—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara, la que debe ser reformada porque no consulta la doctrina aceptada por la casi totalidad de los prácticos. Véase el núm. 3.

6—Véase: *Honorarios*, núm. 23.

7—Esa conformidad no puede oponerse á los herederos, es decir, á la testamentaria, porque el albacea no los representa, siendo evidente

rarios, prestada por el albacea, hace procedente la inhabilidad del título, si la ejecución se dirige contra la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 100, Ser. 4^a.

8. Inhabilidad de título—Es procedente contra la eje

que la testamentaria, no puede ser ejecutada en virtud de una cuenta que sus herederos no han aceptado, ni consentido, ni reconocido de otra manera. El art. 3862 y su nota explicativa consagra estos principios cuando dice el primero, que los albaceas no pueden intervenir en los pleitos que promuevan los acreedores de la sucesión u otros terceros, en los cuales solo son parte los herederos y legatarios. En el caso del sumario, la manifestación de conformidad la hizo el albacea, y también la ejecución se dirigió contra él como representante de la sucesión, lo que implica un doble error.

8—Condenado en juicio ordinario un litigante á hacer unas obras dentro del término de quince días, bajo apercibimiento de mandarlas hacer á su costa, dejó transcurrir el término sin cumplir con lo ordenado; el vencedor procedió á efectuarlas de acuerdo con lo establecido en el art. 554 del Cód. de Proc., á cuyo efecto se presentó al Juez de la causa haciendo presente que iba á proceder á efectuar las obras por no haberlas verificado el vencido, á lo que el Juez proveyó «tén gase presente.» Efectivamente el vencedor procedió, sin otros requisitos, á practicar las obras. Si, en la ejecución de los trabajos se procedió en esta forma, sin una resolución judicial que las hubiese autorizado declarando la legitimidad de sus partidas. Si se procedió por el vencedor á practicar los trabajos en la forma que queda indicada, si no existe una resolución judicial que las haya autorizado declarando la legitimidad de sus partidas ó de su importe, es incuestionable que el título de la ejecución es inhábil. Los términos de la ejecutoria no prestigiarían una conclusión distinta, pues al decir que se harán las obras por el vencedor y por cuenta del vencido, ello no implica que deba prescindirse de la autoridad del Juez, por cuyo intermedio, exclusivamente, podrían mandarse hacer, á menos de dejar librado al arbitrio del acreedor la forma y condiciones del cumplimiento de la ejecutoria, lo que sería contrario á toda regla de justicia y de equidad. El art. 554 ha sido tomado de la ley española, y al decir sus comentadores que el Juez hará que se ejecute el hecho á costa del deudor, empleando los medios necesarios al efecto y debiendo ser éstos los más á propósito, más breves y menos dispendiosos, —Manresa y Caravantes, Ejecución de Sentencia—consideran, según la inteligencia de



cución fundada en el importe de las obras ordenadas por sentencia, si se llevaron á cabo sin intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 378, Ser. 4.^a

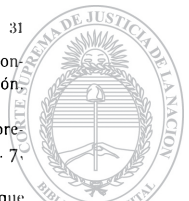
Inhabilidad de título—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 1 y siguientes.

1. **Inhibición**—No basta para privar la venta de un inmueble, puesto que el comprador responde de las obligaciones que sobre él pesaban—Jur Civ., tom. 2, página 250, Ser. 3.^a

sus exposiciones, ineludible la intervención del Juez, pues fuera de su autoridad legal, las garantías que comportan el empleo de los medios enunciados correrían grave peligro de hacerse frustráneas. Puede verse el comentario al tít. 27 de la Part. 3.^a, edición de Barcelona, 1844, donde se demuestra con razones concluyentes que el cumplimiento de la sentencia que manda hacer ó entregar alguna cosa, debe entenderse que es sin perjuicio de oír á la parte que ha sido condenada.

1—El actor se presentó solicitando se declarase nula la venta de un terreno situado en esta Capital, ordenada á petición de la sociedad de negros africanos «Lubolo». Fundaba su acción en que existiendo á su favor un contrato de locación cuyo término no estaba vencido, no podía la sociedad pedir la venta del inmueble desde que la misma se había inhibido de disponer de él hasta la espiración del término de la locación. La parte demandada sostuvo que tratándose de un contrato condicional, aun en el caso de ser exacto, lo que niega, podía ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3266 y 3267 del Cód. Civ. La venta fué realizada á solicitud de varios miembros de la sociedad, para proceder á la división del condominio que sobre dicho terreno existía. Teniendo cada ex-propietario la facultad de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692, Cód. Civ.—no puede considerarse limitado este derecho por la existencia de un contrato de locación que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad vendedora, según lo disponen los arts. 1498 y 3266 del recordado Código. Aunque en el contrato de locación, el representante de la sociedad «Lubolo» se inhiba de disponer del bien arrendado, esto tampoco puede considerarse como un impedimento para la realización de la venta desde que ésta es forzosa, y desde que cualquiera que sea adquirente del inmueble





2. **Inhibición**—Si los bienes dados á embargo responden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

3. **Inhibición**—Debe levantarse la inhibición si se presentan bienes suficientes á embargo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 3^a.

4. **Inhibición**—Si es indebida, responsabiliza á los que la solicitaron, por los daños y perjuicios que se causen al inhibido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 3^a.

5. **Inhibición**—General, procede el levantamiento de la inhibición si se deposita á embargo el importe del crédito líquido que resulte del contrato bilateral; los perjuicios por la falta de cumplimiento no bastan para decretarla ni mantenerla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 138, Ser. 4^a.

6. **Inhibición**—General, la sentencia que absuelve de la

responde con el mismo del cumplimiento de las obligaciones contraídas por su causante.

2—Véase: *Embargo*, núm. 2.

3—Véase: *Embargo*, núm. 3.

4—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 44.

5—En cuanto á la primera parte, véanse los núms. 2 y 3. En cuanto á los perjuicios que se condena á pagar á un litigante en virtud de sentencia, no puede dar lugar á embargo preventivo, sino cuando contiene suma líquida, puede verse el tom. 3^o de la Inst., verb. *Daños y perjuicios*, núm. 2. Para que el embargo preventivo sea procedente se requiere, según jurisprudencia de la Cámara, que haya cantidad líquida y de plazo vencido. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núms. 21, 23 y 31 de este tomo.

6—Al ordenarse el levantamiento del embargo, se procedió por haber sido resuelto el juicio en contra de las pretensiones del actor. El embargo se levantó sin estar consentida la sentencia, lo que no es irregular por cuanto el art. 448 del Cód. de Proc. establece que la parte que obtenga una sentencia favorable, puede pedir las diligencias de embargo, y éstas deben ser despachadas aunque la sentencia no se encuentre consentida—art. 222—cuyas disposiciones deben aplicarse por analogía. Estos fueron los argumentos aducidos por el Juez de 1^a



demanda, permite el levantamiento de la inhibición decretada contra el demandado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 42, Ser. 4^a.

7. Inhibición—General, ejecutoriada la inhibición general, es procedente el embargo de los fondos del deudor depositados en poder de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, página 125, Ser. 4^a.

8. Inhibición—General, siempre que del instrumento público resulte crédito líquido, procede el embargo preventivo ó la inhibición.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 138, Serie 4^a.

9. Inhibición—La responsabilidad del comprador por la diferencia de precio, no puede fundar la inhibición de sus bienes, si no existe cantidad líquida—Jur. Civ., tomo 3, pág. 368, Ser. 4^a.

10. Inhibición—El desconocimiento de bienes de propiedad del deudor hace procedente la inhibición en los casos que la ley concede el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4^a.

11. Inhibición—General, presentados á embargo bienes de la sociedad bastantes á responder al crédito, debe levan-

Inst. en su resolución, la que fué confirmada por sus fundamentos por la Cámara. Es indudable que el principio sustentado por la Cámara, no tiene fundamento legal alguno. La sentencia de 1^a Instancia que no está consentida, es considerada como inexistente á los efectos legales, y es por esto que la absolución del reo en el juicio criminal, no puede fundar su escarcelación. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Sentencia*, número 4; tom. 3^o, verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 8, y tom. 1^o, verb. *Resolución*, núm. 15, cuyos argumentos pueden aducirse por analogía en el caso que nos ocupa.

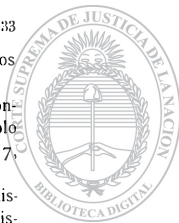
7—Véase: *Embargo*, núm. 4.

8—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 19.

9—Véase el núm. 5.

10—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 33.

11—Véase: *Bienes de la sociedad*, núm. 1.



tarse la inhibición general de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4ª.

12. **Inhibición**—General, no procede fundada en la confesión que resulta de las posiciones, pues su mérito solo puede apreciarse al dictarse sentencia.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 25, Ser. 4ª.

13. **Inhibición**—De bienes, no procede mientras no exista sentencia de divorcio ó se justifique la mala administración del mando.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 23, Ser. 4ª.

14. **Inhibición**—General, no procede, con carácter de embargo preventivo por la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, aun cuando se haya estipulado una pena para el caso de incumplimiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 37, Ser. 4ª.

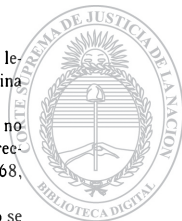
15. **Inhibición**—Es facultativo del Juzgado apreciar el

12—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 35. Cuando el absolvente concurre á la audiencia y confiesa el hecho, esa confesión puede dar lugar al embargo.

13—Así lo tiene resuelto la Cámara en otros casos. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 4.

14—Es jurisprudencia de la Cámara que las obligaciones de hacer no son eficaces para fundar un embargo preventivo, sino cuando se hubiese declarado en debida forma el importe de los daños y perjuicios que apareja la ejecución de los mismos. Esta situación no se modifica cuando se ha convenido en una cantidad determinada para el caso de incumplimiento, pues tal circunstancia no altera la naturaleza de la acción, ni el carácter de las obligaciones emergentes del contrato; y muy especialmente porque la efectividad del derecho solo resultaría después de discutivo y ventilado en el juicio correspondiente. El art. 443 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque la ejecutoria solo condenaría al cumplimiento de la obligación de hacer, siendo evidente que el espíritu de aquella disposición es limitar el derecho al caso en que la sentencia sea condenación de entregar ó pagar. Estos son los fundamentos que la Cámara de lo Civil aduce constantemente, con los que no estamos conformes nosotros, según puede verse en el verb. *Embargo preventivo*, número 3.

15—Véase: verb. *Embargo*, núm. 16.



valor de los bienes presentados á embargo para el levantamiento de la inhibición.—Jur. Civ., tom. 9, página 83, Ser. 4^a

16. Inhibición—El levantamiento de la inhibición no puede ser ordenado sin el consentimiento de los acreedores que la solicitaron.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 268, Ser. 4^a.

17. Inhibición—Preventiva, solo procede cuando no se conocen bienes para trabar embargo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 24, Ser. 4^a.

18. Inhibición—General, aun justificada la locación, no procede la inhibición general para garantir los alquileres.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4^a.

19. Inhibición—Preventiva, solo procede si existen los requisitos que la ley exige para el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 68, Ser. 4^a.

Inhibición—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 44 y 45 —*Auto inapelable*, núm. 2.

1. Inhibitoria—No es procedente en tanto que los dos juicios no tengan igual objeto.—Jur. Civ., tom. 5, página 186, Ser. 3^a.

2. Inhibitoria—La escepción de incompetencia debe resolverse por el Juez de cuya jurisdicción se declina, aun cuando se haya deducido inhibitoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 256, Ser. 4^a.

Inhibitoria—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

17—Art. 461 del Cód. de Proc.

18—Véase: verb. *Alquileres*, núm. 3.

19—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 46.

1—Se declaró que la incompetencia deducida por la vía inhibitoria no era procedente en el caso que se registra bajo el núm. 1, verb. *Escepción de incompetencia*.

2—Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 8.



Inicioación de un juicio—Véase: *Acción determinada*, número 1.

Injurias graves—Véase: *Divorcio*, núm. 10.

Inmueble—Véase: *Tradición*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 23—*Contrato por escritura pública*, número 18—*Jurisdicción civil*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 3—*Contrato*, núm. 6—*Embargo preventivo*, núm. 11—*Poseedor clandestino*, núm. 1—*Hijuela*, núm. 1—*Poseción*, núms. 10 y 11—*Mandatario*, núm. 5—*Condómino*, núms. 2 y 3—*Inscripción*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y 6—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1—*Simulación*, núm. 6—*Condominio*, núms. 1, 2 y 3—*Poseción judicial*, núm. 3—*Venta*, núms. 4 y 5—*Personería*, núm. 3—*Juez competente*, núm. 2—*Dominio público*, número 1—*Información supletoria*, núm. 2—*Venta en remate*, núm. 1.

Inmueble determinado—Véase: *Escritura de venta*, número 1—*Interdicto*, núm. 10—*Mandatario*, núm. 12.

Inmueble por accesión—Véase: *Sentencia*, núm. 10—*Interdicto de recobrar*, núm. 12.

1^a. Inmuebles—La existencia del mandato para la compra de inmuebles solo puede justificarse presentando la escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3^a.

Inmuebles—Véase: *Arrendamiento*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 13—*Escritura pública*, núm. 5.

Inoficiosa—Véase: *Bienes*, núm. 7.

1^b. Insania—Para su declaración, es indispensable el exámen facultativo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 385, Serie 4^a.

1^a—Véase: *Escritura pública*, núm. 5.

1^b—Art. 142 del Cód. Civ.



Insanía --Véase: *Demencia*, núm. 1.

1^a. **Insano**—La tenencia del insano debe ser acordada á los parientes en tanto el curador no justifique plenamente que esa tenencia es perjudicial á la salud é intereses de aquél.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 158, Ser. 4^a

Insano—Véase: *Curador*, núm. 2.

1^b. **Inscripción**—No es causa de nulidad de una escritura de venta de derechos á un inmueble, el otorgamiento en distinta jurisdicción de aquella en que están ubicados los bienes, ni aun su falta de inscripción en el registro de la propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4^a.

Inscripción—Véase: *Matrícula*, núm. 1—*Condominio*, núm. 4—*Contrato de arrendamiento*, núm. 11.

Insolvenia—Véase: *Fianza*, núm. 4.

Instituciones judiciales—Véase: *Depósitos judiciales*, número 1.

Instrucciones--Véase: *Mandato*, núm. 1.

1^c. **Instrumento privado**—Los actos del mandatario por

1^a—Se trataba tan solo de la tenencia provisoria del insano en tanto se resolvía el juicio de remoción del curador de cuya terminación dependía la tenencia definitiva de aquél. El curador no había demostrado la innecesidad de la traslación del incapaz. El curador había sido acusado de graves irregularidades cometidas por él, que á ser ciertas debían determinar su remoción, en cuyo caso la prudencia aconsejaba no innovar el estado de cosas, en beneficio del demente que siempre se encuentra bajo el amparo de la justicia. Tampoco se demostró la existencia de ningún peligro debido á la permanencia del insano en poder de sus parientes.

1^b—No hay ley que prohiba celebrar en un lugar el contrato para que produzca efecto en otro. Todo lo contrario, los arts. 1209 y 1211 del Cód. Civ. espresamente lo permiten. Debe tenerse asimismo en cuenta que esa causal de nulidad de la escritura, no fué alegado en la oportunidad debida del juicio, y por consiguiente, no podía ser tomada en consideración al dictarse sentencia.

1^c—El actor solo comprobó que el demandado firmó un documento autorizando á su mandatario para proceder á la venta de un inmueble;



instrumento privado practicados después de la cesación del mandato no obligan al mandante.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3ª.

2. **Instrumento privado**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188, Ser. 3ª.

3. **Instrumento privado**—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante en instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses —Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

4. **Instrumento privado**—El reconocimiento de la firma de un instrumento privado, importa el reconocimiento de todas las obligaciones que él contenga.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 204, Ser. 4ª.

5. **Instrumento privado**—La convención contenida en un boleto de compraventa no puede ser materia de decisión judicial, mientras no se convierta el instrumento en escritura pública—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Serie 4ª.

6. **Instrumento privado**—La verdadera causa de una

que esa autorización fué por un término dado; que la venta se hizo en instrumento privado en un solo ejemplar, pero que la celebración de la venta se la comunicó al mandante después de vencido ese término por el cual era válida la autorización. La Cámara dijo, que «era absolutamente necesario para hacer eficaz la demanda, comprobar que la demandada tuvo conocimiento de la venta antes de vencerse el plazo acordado en la autorización.»

2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1

3—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 12.

4—Art. 1028 del C'd. Civ.

5—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 10.

6—Porque en la demanda y contestación debe quedar trabado el cuasi-contrato de litiscontestación, no siéndoles permitido á los jueces apartarse de ese contrato que liga á los litigantes como la ley misma.

obligación, distinta de la que espresa el instrumento privado, debe ser alegada en la demanda: si se espresa en el curso del litigio no puede ser tomada en consideración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Instrumento privado—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 2—*Arrendamiento*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, números 13, 23 y 24—*Contrato consensual*, núm. 1—*Escritura pública*, núms. 5 y 8—*Boleto de compraventa*, números 8, 9, 23 y 31—*Condominio*, núm. 6—*Pacto de retroventa*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 1.

1. **Instrumento público**—Su nulidad fundada en la falsedad de los hechos, corresponde al que la alegue, siempre que se hayan llenado las formas que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 272, Ser. 3^a.

2. **Instrumento público**—Justificada la identidad de la persona por instrumentos públicos, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3^a.

3. **Instrumento público**—La firmeza que la ley concede al instrumento, no puede ser enervada por la omisión de trámites que afectan solamente sus formas esternas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4^a.

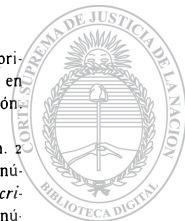
4. **Instrumento público**—La declaración del oficial pú-

El equilibrio de las contiendas judiciales exige que se articulen los hechos al entablar la demanda y al contestarla. El debate debe ser librado en condiciones de la más perfecta igualdad, de manera que todo hecho que sirva de base al proceso pueda ser materia de réplica y de prueba. Es por esto que el art. 216 del Cód. de Proc. establece que la sentencia debe contener decisión espresa y precisa de acuerdo con las acciones deducidas en juicio.

1—Art. 993 del Cód. Civ.

2—Véase: *Apellido*, núm. 1.

4—En escribano fué llamado por una persona que quería otorgar testamento, y después de otorgado falleció. Una hija del causante de-





blico sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4^a.

Instrumento público—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.—*Boleto de compraventa*, núms. 8, 9, 26 y 31.—*Condominio*, núm. 2.—*Contrato privado*, núm. 1.—*Dependientes*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núms. 18, 19, 20 y 21.—*Escritura*, núm. 2.—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 5 y 10.—*Filiación natural*, núm. 10.—*Información supletoria*, núm. 5.—*Inhabilidad de título*, núm. 1.—*Notificaciones*, núm. 2.—*Obligación de hacer*, núm. 6.—*Prescripción en segunda instancia*, núm. 1.—*Prueba por instrumento público*, núms. 1 y 2.—*Prueba preconstituida*, núm. 1.—*Simulación*, núm. 9.—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1.—*Tradición*, núm. 1.

Intención criminal—Véase: *Calumnia*, núm. 1.

1. *Intendencia municipal*—Las cuentas por afirmados aunque visadas por la Intendencia Municipal, solo tie-

dujo acción de filiación fundada en la posesión de estado de hija natural, y entre los testigos presentados se designaba al escribano que autorizó el testamento, quien declaró que el testador dijo, en momentos en que se encontraba presente, que no quería dejar nada á su hija porque no había ido á verle durante su enfermedad. Esta declaración fué impugnada fundándose en el art. 992 del Cód. Civ., el cual establece que el oficial público que estiene un documento no puede variar ni alterar el contenido de él. Es claro que aquí no se trataba de alterar ni de variar el documento que fué escrito y redactado como el testador lo quiso. Ninguna ley inhabilita a ese oficial público para declarar sobre hechos extraños á ese acto distintos al testamento. Lo que la ley prohíbe es que el oficial público pudiera decir que los hechos no pasaron como él dice en el instrumento público ó que las circunstancias exteriores ocurrieron de distinta manera.

1.—Véase: *Afirmado*, núm. 3.

nen fuerza ejecutiva cuando para su expedición se han llenado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 383, Ser. 4^a.

1. **Interdicto**—Es procedente la condenación en costas contra el actor, cuando el interdicto ha sido rechazado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 117, Ser. 3^a.

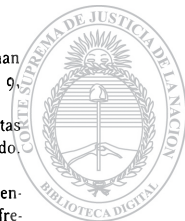
2. **Interdicto**—Debe declararse la nulidad de la sentencia dictada en el interdicto si se omite la prueba ofrecida y pedida por la parte en el acto del juicio verbal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 318, Ser. 3^a.

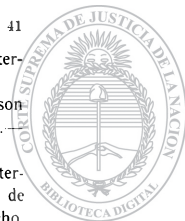
3. **Interdicto**—La citación de testigos puede pedirse en

1—En los interdictos como en el juicio ejecutivo, no es aplicable la disposición de la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc., que autoriza á los jueces para exonerar de las costas al vencido siempre que encuentre mérito para ello. La imposición de las costas en estos juicios es de precepto legal—arts. 578, 583 y 507 del Cód. de Procedimientos.

2—Convocadas las partes á juicio verbal de acuerdo con lo prevenido en el art. 585 del Cód. de Proc., el demandado contestando la acción deducida, solicitó como medida de prueba la agregación de los títulos de propiedad que estaban en el Banco Hipotecario Nacional, y la de un expediente existente en el Archivo General, donde constaba la mensura del terreno materia del interdicto. El Juez *a quo* recibió en el acto del comparendo la prueba de testigos que fué ofrecida, dictando después de los alegatos, el fallo correspondiente que fué recurrido por apelación y nulidad, fundándose este último en que el Juez había dictado sentencia sin ordenar la producción de la prueba ofrecida. La sentencia no pudo dictarse en la forma que lo fué, sin tener á la vista las probanzas ofrecidas y sin apreciar el mérito de ellas, pues siendo procedente esa prueba en los términos del art. 585, por haber sido solicitada en la oportunidad debida no pudo prescindirse de ella—arts. 72 y 100, inc. 4^o—no pudo prescindirse de ella sin incurrir en nulidad—art. 237 del Cód. de Proc.

3—La disposición de los arts. 571 y 577 del Cód. de Proc., no importa privar á las partes del derecho de solicitar del Juzgado los medios conducentes á la comparecencia de los testigos cuando éstos se negaren á concurrir voluntariamente.





el acto del juicio verbal decretado para el juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 213, Ser. 3ª.

4. **Interdicto**—En el juicio sumario de interdicto, son apelables los autos que deniegan diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

5. **Interdicto**—En el acto del juicio verbal del interdicto las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan á su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

6. **Interdicto**—Los testigos que no comparecen á la citación en el juicio sumario de interdicto, pueden ser nuevamente citados á solicitud de parte.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

7. **Interdicto**—Procede la citación de los testigos que se hayan negado á concurrir con la parte al juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 162, Ser. 3ª.

8. **Interdicto**—Las pruebas en el juicio de interdicto deben ser presentadas en la primera audiencia, aun cuando se reciban en las siguientes no pueden producirse nuevas pruebas que no hubieran sido ofrecidas en la primera.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 378, Ser. 4ª.

4—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 9.

5—Véase: *Documentos públicos*, núm. 2.

6—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. —Véase el núm. 3.

7—Véanse los núms. 3 y 6.

8—La audiencia designada para la sustanciación del juicio de interdicto fué suspendida por lo avanzado de la hora, después de haberse producido parte de la prueba ofrecida: debía continuar al día siguiente: en este segundo día se *ofreció* la prueba de testigos, la que no fué admitida por no haber sido ofrecida en el día de la primera convocatoria, que es á la que deben concurrir las partes á rendir todas aquellas probanzas que convengan á sus respectivos derechos—arts. 571 y 576 del Cód. de Proc.—Si bien la prueba puede no *producirse* en el mismo día de la convocatoria, ella debe *ofrecerse*, y si no se cumple con este requisito no es posible admitirla después.

9. Interdicto.—Si la prueba, en el interdicto, obliga a la división de la audiencia, las partes pueden presentar en

9.—Esta resolución está en abierta oposición con el número precedente: el Juez de 1ª Instancia no hizo lugar a la prueba ofrecida en el comparendo posterior al del día señalado por primera vez, fundándose testualmente en las mismas palabras empleadas al resolver el sumario precedente, pues los hechos y antecedentes eran exactamente iguales. Sin embargo, la Cámara confirmó el sumario contenido en el núm. 8 por los fundamentos aducidos por el señor Juez de 1ª Instancia, revocando la que nos ocupa fundado en las consideraciones siguientes: que decretado el comparendo que previene el art. 575 del Cód. de Procedimientos y oídas en él las partes, se procedió a recibir la prueba ofrecida por el actor, suspendiéndose el acto por la hora avanzada, después de haber absuelto posiciones el demandado y de prestar declaración dos testigos presentados por el primero.—Que señalado un nuevo día para la continuación del comparendo, se empleó todo él en practicar diligencias de prueba solicitadas por el actor, suspendiéndose también el acto por el mismo motivo antes expresado.—Que reabierta la audiencia, el demandado ofreció a su turno la declaración de dos testigos, a lo que se opuso el actor alegando que esos testigos no habían sido presentados el día que empezó el comparendo.—Que es de observarse que el acta que se labró en ese comparendo no se refiere a uno nuevo sino a la continuación del iniciado anteriormente y el que fué dos veces suspendido por el motivo ya enunciado.—Que de consiguiente, tratándose del mismo comparendo, el demandado ha cumplido con el deber que la ley le impone, teniendo lista su prueba para ser recibida una vez concluido el examen de la presentada por el actor. Estas dos resoluciones, tan abiertamente opuestas, fueron dictadas con un mes de intervalo entre una y otra, y por los mismos camaristas señores Bustos, González del Solar y Giménez. Sin embargo, no es de extrañarse esto tratándose de un juicio cuya índole ha sido desnaturalizada por la jurisprudencia de los tribunales, apesar de que el Cód. de Procedimientos ha querido que este juicio termine en una sola audiencia, debiendo en ella ofrecerse, admitirse y producirse la prueba. El procedimiento seguido en los interdictos varía según quien sea el Juez que entiende en su conocimiento, y según el giro que las partes litigantes les imprimen; pero es evidente que el orden de proceder debe ser el mismo que el del juicio ordinario, con escepción de que todo debe hacerse en una audiencia. Así, convocadas las partes a juicio verbal, una vez contestada la demanda, deben ellas *ofrecer* sus pruebas en esa au-





cualquiera de los comparendos testigos no solicitados en los anteriores.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 250, Ser. 4^a.

10. **Interdicto**—La jurisdicción civil es la única competente para entender en un interdicto sobre inmuebles, aunque la acción se dirija contra una sociedad mercantil.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 75, Ser. 4^a.

Interdicto—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6.

1. **Interdicto de adquirir**—No procede si el que acciona

diciencia, empezando por el actor y después el demandado. Ofrecida la prueba por ambos, se procederá á producirlas. Si para su diligenciamiento se hace necesario suspender la audiencia, señalándose nueva día, esa audiencia es al solo objeto de producir la prueba, pero no se podrá ofrecer ninguna. Por consiguiente, el sumario consagra un principio que no es posible aceptar sin atentar contra el espíritu que ha guiado al legislador al reglamentar este juicio. Si se admitiera el principio sentado en el sumario, el procedimiento no terminaría jamás: se haría eterno con evidente violación de la ley.

10—Los interdictos, cualquiera que sea su clase y dominación, son acciones civiles, como que tienden á adquirir, retener y recobrar la posesión, ó impedir una obra nueva, hechos todos del dominio del derecho común. Siendo esto así, no puede sostenerse que la jurisdicción comercial, privativa por su naturaleza, haya de ser la competente no obstante de llevarse la demanda contra el representante de una persona jurídica.

1—El actor se presentó al Juzgado de 1^a Instancia pidiendo se le acordara la posesión de una finca comprada al demandado y manifestó que solicitaba esa medida porque el inquilino ocupante de ella se negaba á reconocerlo en su calidad de propietario por no haberle sido acordada la posesión formal del inmueble comprado. El Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 570 del Cód. de Proc., convocó á las partes á juicio verbal; notificado de esta resolución, el vendedor y el inquilino se opusieron á la celebración del comparendo, deduciendo el vendedor la excepción de litispendencia por haber interpuesto demanda de nulidad de la escritura de compraventa acompañada por el demandante y alegando, por otra parte, que, pendiente el juicio petitorio, no podía tramitarse el posesorio, correspondiendo solamente al Juez del petitorio tomar medidas provisionales relativas á la guarda de la cosa litigiosa, según el art. 2483 del Cód. Civ. El inquilino se opuso tam-

no ha tenido jamás la posesión de la cosa—Jur. Civ. tom. 5, pág. 180, Ser. 3ª.

bién al comparendo, alegando que el objeto de la demanda respecto á él, era obtener el desalojo de la casa que ocupaba en calidad de locatario y en seguida adquirir la posesión, pero como acreedor de las mejoras que había hecho sobre el terreno, había promovido demanda de retener hasta que se le paguen esas mejoras, encontrándose pendiente el juicio de la resolución definitiva de la Cámara, por cuya razón invocaba también la litispendencia. Desechadas las pretensiones del demandante é inquilino y realizado el juicio verbal, el Juez pronunció sentencia rechazando el interdicto sin perjuicio de mejor derecho. Nuestro Código de Proc. exige—art. 564—como requisitos indispensables para la procedencia del interdicto que nos ocupa, los siguientes extremos: 1º que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho; y 2º, que nadie posea á título de dueño ó de usufructuario los bienes cuya posesión se pide. Este precepto concuerda con el artículo 326 de la Ley de Proc. de la Justicia Federal y con el 624 de la Ley de Enjuiciamiento española. Toda la cuestión se reduce, pues, en el presente caso, á averiguar si concurren los requisitos antes espuestos; si bien el actor había presentado un título bastante, el demandado poseía el inmueble á título de dominio y, por consiguiente faltaba el segundo requisito del art. 564 citado. Para demostrar la exactitud de esta conclusión, es bastante establecer la verdadera inteligencia que, resolviendo y ocupándose de casos análogos, han dado los tribunales y los autores á la disposición citada. La Suprema Corte de Justicia Nacional, en el caso que se registra al tomo 21, pág. 169, Serie 2, de sus fallos, adoptando la opinión de Manresa y Reus, tomo 3, pág. 590, y la de Caravantes, tomo 3, pág. 240, ha dicho: «No basta un título cualquiera que acredite el dominio sino que ha de ser suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho». Solo dos casos encontramos en que el Juez informado de la verdad, confiera la posesión al que tenga derecho á ella procediendo sumariamente. Hoy no basta presentar cualquier título traslativo de dominio; ha de ser precisamente el de heredero ó sucesor del finado para que se dé lugar á este interdicto. En las ventas, donaciones entre vivos, permutas, etc. el que transfiere el dominio, está obligado á entregar la cosa al que lo adquiere, y mientras esa entrega no se verifique, ya sea material, ya sea simbólicamente, no queda consumado el contrato. Hecha la entrega entra el adquirente en posesión de la cosa y de consiguiente es innecesario el interdicto de adquirir: y si el vendedor se resiste á la en-





2. Interdicto de adquirir—Procede este interdicto con

trega, que es precisamente lo que ocurría en el caso del sumario, podrá ser demandado por el comprador en juicio ordinario, para el cumplimiento de la obligación; pero nunca podrá este utilizar el interdicto que en tal caso se dirige contra el que posee á título de dueño, lo cual está prohibido por la ley. En igual sentido resolvió también la Suprema Corte el caso que se registra en el tomo 13, pág. 19, Ser. 2.^a. Llerena en su importante obra «Concordancias y Comentarios del Cód. Civ. Argentino», tomo 4, pág. 133, ocupándose del art. 2468 del Cód. Civ., según el cual el que no tiene sino un derecho á la posesión, no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa y debe demandarla por las vías legales, después de invocar los fallos que antes se han citado, manifiesta su opinión sobre el punto en los siguientes términos: «Tenemos entonces que el que sólo tiene un título á la posesión sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores». El sumario está equivocado, pues, para que el interdicto de adquirir sea procedente no se requiere que el que lo pida haya tenido la posesión de la cosa; precisamente el art. 564 del Cód. de Proc., ha establecido este interdicto para que el que no tiene la posesión la adquiera.

2—El interdicto versaba sobre un terreno en el cual el demandado había edificado una casita, pero reconociéndose en el actor la propiedad y el derecho de poseer, por medio de una carta de la que resultaba que aquel contra quien se dirigía el interdicto no poseía el inmueble á título de propietario ni de usufructuario, teniendo su posesión el carácter de precaria. En la mencionada carta se reconocía no solo que el terreno materia del litigio era de propiedad del actor, sino que se manifestaba también que estaba dispuesto á entregárselo al actor, pues se había ubicado en él por informes equivocados. La Cámara declaró procedente el interdicto por mayoría de votos. La minoría dijo: Que si bien resultaba de los antecedentes del juicio que el actor había justificado el primer extremo requerido por el art. 564 del Cód. de Proc., no había sin embargo justificado el segundo, es decir, que nadie posea á título de dueño ó usufructuario el bien reclamado. En un interdicto no se discute la propiedad sino la posesión, y por consiguiente la prueba debe versar tan solo sobre este último punto como lo tiene resuelto la Cámara y como lo sostienen los prácticos, entre otros Llerena, tom. 4.^o pág. 33; Caravantes, tom. 3.^o, pág. 240 y Manresa y Reus, tom. 3.^o pág. 590; y la Jurisprudencia de la Suprema Corte, tom. 2.^o, pág. 169,



tra el detentador que reconociendo la propiedad en el actor escusa su posesión con un error de hecho.— Jur. Civ., tom. 6, pág. 271, Ser. 4^a.

Ser. 2^a y tom. 13, pág. 19, Ser. 2^a. El que solo tiene un título á la posesión sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores. La mayoría resolvió en el sentido del sumario, fundándose en que la Suprema Corte de Justicia Nacional ha declarado en la causa CII que se registra en la pág. 32, tom. 2^a, Ser. 2^a de sus Fallos, que procede el interdicto de adquirir cuando contra los títulos de dominio no se alega excepción legítima por el detentador. Dice que «se trata de un caso análogo en el presente juicio y es por consecuencia de aplicación el mismo principio sobre que se basó aquel fallo.» El actor fundaba su acción en el dominio que tenía sobre el terreno ocupado por el demandado y una declaración de éste, reconociendo haberlo ocupado por error en vez de otro lindero, ofreciendo restituirlo en el momento que se lo pide. El demandado no había negado estos extremos de la demanda, pues si bien en el escrito que presentó, manifestó que la carta que había dirigido al actor reconociendo el dominio de su terreno y ofreciendo desocuparlo inmediatamente, no tenía ningún valor por pertenecer ese terreno á su señora madre, según las escrituras acompañadas, es de notar que no compareció á la audiencia decretada y que en ella se justificó por el actor la ocupación del terreno por parte del demandado. No se trata, por consiguiente, de un inmueble perteneciente á la madre del demandado, es decir, de una persona extraña en el juicio, ni de actos ejecutados por ésta. Por el contrario, resultaba que la demanda había sido dirigida única y exclusivamente contra el detentador del terreno á que ella se refería, lo que se había justificado cumplidamente. Ahora bien, requiriéndose por la ley que para que proceda el interdicto de adquirir son requisitos indispensables la presentación de un título suficiente para la posesión con arreglo á derecho y que nadie posea como dueño ó usufructuario los bienes cuya posesión se pide, no podía evidentemente ofrecer duda alguna la justicia de la sentencia pronunciada por el Inferior cuyos agravios no se habían demostrado en segunda instancia. Los extremos exigidos por el art. 564 del Código de Proc., se justificaron plenamente, resultando que es el demandado quien ocupaba el terreno cuestionado reconociendo en el actor su dominio y posesión y contra quien procedía el interdicto deducido.



3. **Interdicto de adquirir**—Para que el interdicto de adquirir los bienes de una sociedad, deducido por los que se dicen sus mandatarios, sea procedente, deben justificarse que el mandato ha sido conferido por quien tiene autoridad legal, en la forma y con las solemnidades que los estatutos sociales requieren.—Jur. Civ., tom. 8, página 341, Ser. 4^a.

4. **Interdicto de adquirir**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene, por sentencias ejecutoriadas, reconocido el derecho de retención, en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 140, Ser. 4^a.

1. **Interdicto de obra nueva** — Es procedente siempre, contra el que intenta la obra, aunque alegue obedecer

3—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

4—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1—El final de la nota ilustrativa del art. 2482, Cód. Civ., dice: «la acción posesoria es intentada válidamente contra el que ha cometido personalmente un acto de turbación, aunque él pretenda no haber obrado sino en el interés y por orden de un tercero.» Estas palabras son tomadas de la nota primera al parágrafo 290 de Zachariæ, cuyo texto, dice: la acción posesoria debe dirigirse contra el que turba la posesión por sí ó por otro. Enumerando Savigny: «De la posesión», pág. 404: las condiciones requeridas para poder invocar el interdicto de despojo, observa que como tercera condición, es indispensable que se ejerza la violencia por el demandado mismo; regla que sufre varias escepciones; siendo la primera, que aquel por cuya voluntad se ejerció la violencia, como por ejemplo, el que la encarga á otro, tiene la misma responsabilidad que este último Pothier, tom. 8^o, pág. 370, se espresa en estos términos: «Aun cuando el que ordena ó solamente aprueba lo que se hace en su nombre para despojar á alguno por violencia, es considerado como autor del despojo y responde por consiguiente de la acción del reintegro, esto no impide que los que han ejercido la violencia aunque en su nombre y por su orden, no se hallen igualmente obligados por la acción al reintegro solidariamente con él: por que si es responsable á consecuencia de la orden dada, los autores inmediatos son igualmente responsables de haberlo ejecutado.

órdenes de un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 96, Serie 3ª.

2. Interdicto de obra nueva.—Las modificaciones y transacciones que la Municipalidad lleve á cabo sobre una

2.—El interdicto tenía por base la existencia de una calle pública, á la que daba frente la propiedad del actor, y en la cual, el demandado hacía algunas construcciones encerrando aquella propiedad y dejándola sin frente á la vía pública que tenía en una extensión de diez varas próximamente. Alegaba, además, que dicha calle había sido ocupada considerándola el demandado como de su propiedad en virtud del arreglo que éste decía haber hecho con la Municipalidad, abriéndose otra nueva calle á continuación con frente á la propiedad del demandado; que ese arreglo no pudo celebrarse afectando derechos adquiridos por el demandante, como no pudo tampoco la Municipalidad enajenar el terreno ocupado por aquella calle en una forma contraria á las prescripciones de la ley, ni celebrar transacción sobre ella, por tratarse de un bien público. El demandado negando estos hechos dijo, que la calle designada como vieja no había existido, sino únicamente la que aparecía como nueva y que era propietario á título de compra en remate público de los terrenos sobre los cuales edificaba. Correspondía indudablemente al actor la justificación de los extremos alegados como base de su demanda y esta justificación no se produjo en condiciones de acreditar la procedencia del interdicto, conforme á lo dispuesto por el Código Civil en sus arts. 2498 y 2499 que invocaba en su favor el actor. Según resultaba de un informe espedido, la calle mencionada no había existido como vía pública abierta por la Municipalidad y ésta negó con tal motivo la línea pedida para construir un cerco en la misma, procediendo á la traza de la nueva calle previos algunos arreglos consistentes en la exoneración del pago del afirmado en cambio del terreno cedido para ella. El mismo informe decía existir constancias en la Municipalidad de que los terrenos del actor daban frente á la vía pública y que existían constancias de que los terrenos referidos daban frente á una calle contigua á la que se abrió últimamente, pero nó de que el trazado de aquella calle hubiera sido aprobado por la Municipalidad; agregando que cuando se trazó la nueva calle no se tuvo en cuenta la que existía al lado por no ser considerada como calle municipal. Estos antecedentes de autoridad irrecusable en cuanto emanaban de la Municipalidad, contradecían las afirmaciones de la demandada en cuanto á la existencia de una calle pública á la que decía daba frente la propiedad del actor. La mayoría de la Cámara dijo,





calle no reconocida oficialmente, no pueden fundar un interdicto de obra nueva contra el tercero contratante.

que aun admitido que esta calle hubiera existido como vía pública, y que la Municipalidad hubiera cambiado su traza, este hecho no podía servir de base para hacer prosperar el mismo interdicto, porque como lo decía la misma sentencia de 1ª Inst., la Municipalidad podría en uso de sus atribuciones que le son propias, cambiar la traza de esa calle, como puede abrirlas en donde no existan, en razón de un interés público, dando entonces lugar á otras acciones por parte de los que se considerasen damnificados cuando por esos actos se atentara contra su propiedad ó se desconociera derechos legítimamente adquiridos. Otro de los camaristas dijo, que la consideración que principalmente decidía su voto por la afirmativa y sin que ello importara en manera alguna aceptar las graves conclusiones precedentes en cuanto á las facultades de que juzga investida á la Corporación Municipal, es la falta de prueba de parte del actor en lo que se refiere á la posesión del terreno. Las acciones posesorias corresponden solamente al poseedor de inmuebles y tienen por único objeto, según la doctrina del art. 2487 y concordantes del Cód. Civ., obtener la restitución de la posesión ó la manutención de la misma en su plenitud y libertad. Si el demandado obstruyó una vía pública en perjuicio del derecho de otro y consiguientemente de la comunidad, sus gestiones ó reclamos han debido encaminarse por otros rumbos, pero bastaba, á su juicio, establecer el antecedente para hacer manifiesta la improcedencia de la acción interpuesta. Fundada la mayoría en estas consideraciones, declaró improcedente el interdicto. La minoría dijo: «como lo establecen los títulos con que se ha instruido la acción, el demandante es poseedor de un terreno que por uno de sus rumbos linda con el demandado, calle en medio. Tanto esa posesión como la existencia de la calle son incuestionables en presencia de las declaraciones, que dan razón satisfactoria de sus dichos y no dejan lugar á duda sobre la verdad de aquellos extremos. En orden á la existencia de la causa es concluyente también el informe de la Sección Municipal de Delineaciones. Con los mismos testigos se ha probado además que el demandado practicó obras que cerraban el terreno del demandante. Y como por otra parte el demandado no negó la existencia de las obras, defendiéndose con la inexistencia de la calle, y como además es de verdad notoria que privar á un propietario de las ventajas de lindar con una calle, importa inquietarlo en el goce de su posesión, nada obsta, á mi juicio, para que, declarando cumplidos los requisitos del art. 574 del Cód. de Proc., se haga lugar al interdicto deducido. ¿Qué se opone,

mientras la edificación no afecte el cuerpo de la propiedad perjudicada por la desviación de la calle.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 385, Ser. 4ª.

entre tanto, á ese resultado, para decidir la opinión de la mayoría del Tribunal en contra de las peticiones de la demanda? Que la calle que motiva el juicio no era pública; que no había sido autorizada por la Municipalidad. Pero esto no autoriza á un propietario lindero para turbar la posesión de su vecino, principalmente cuando él no ha demostrado ni su propiedad ni su posesión sobre el terreno convertido accidentalmente en calle. ¿Que el querellante no ha obtenido delineación para edificar sobre la calle en que ha levantado sus construcciones? Pero no es la acción de la autoridad administrativa para reprimir la infracción de los reclamantes municipales la que ejercita al presente. ¿Que el cambio de traza de una calle ordenado por la Municipalidad no puede dar lugar á un interdicto? Lo contrario ha resuelto la Cámara varias veces declarando con nuestro codificador en cuanto al art. 44 que «el poseedor de un inmueble desposeído violentamente á nombre de una Municipalidad obtiene contra ella el interdicto *de vi* si ella obtiene el todo ó parte de un inmueble.» Por lo demás, bueno es observar que ni el interdicto se dirige contra la Municipalidad ni consta en manera alguna que las construcciones que causan la turbación de la posesión hayan sido ordenadas por la Municipalidad ni directa ni indirectamente, pues el hecho de abrir una calle nueva, ni implícitamente importa, el de que se hayan cerrado otras, que por lo mismo que se dice no ser públicas, no deben dar lugar á ingerencia municipal y si al respeto y discusión, ante los jueces comunes, de los derechos privados que la clausura arbitraria puede afectar. Se opone, por último, que no se ha probado la posesión del terreno en que se levantaban las construcciones y que los interdictos son acordados para obtener la restitución de la posesión ó la manutención de la misma. Lo primero se contesta, observando que no se ha invocado ni pretendido que el terreno en que se levantan las construcciones sea poseído por el actor; no se trata de recuperar la posesión sino de hacer cesar los motivos de perturbación en la posesión causados por ese fundo *no poseído por el demandante*. Y precisamente procede el interdicto, porque este se da no solo para recuperar sino también para la manutención de la posesión en su plenitud y libertad. Ahora bien, que exista turbación en la posesión y que proceda el interdicto de retener en un caso como el presente, en que se molesta al poseedor desde un fundo vecino, lo *proclama* terminantemente el art. 2499 del Cód. Civ., que dice: «Habrà turbación de la





3. Interdicto de obra nueva.—Para que el interdicto de obra nueva ó despojo pueda prosperar, el despojado debe justificar que ha tenido la posesión por lo menos de un año antes de la obra.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 336, Serie 4ª.

4. Interdicto de obra nueva.—La competencia del Juez posesión cuando por una obra nueva que se comenzara á hacer en inmuebles que no fuesen del *poseedor*, sean de la clase que fuesen, la posesión de éste sufre un menoscabo que cediese en beneficio del que ejecuta la obra nueva.» En contestación al argumento de que es otra la acción que debía haberse intentado para impedir la obstrucción de una vía pública, también es muy claro nuestro Codificador en cuanto al art. 2482, cuando dice: «La acción posesoria es intentada válidamente contra el que ha cometido personalmente un acto de turbación.... El demandado no puede librarse del juicio esceptionándose con el mandato que hubiese recibido. En todo caso la acción deducida no se ha dirigido á remover un obstáculo de la vía pública perjudicial para la comunidad sinó, dañoso para el goce tranquilo de la posesión privada, que la ley garante en tanto que no perjudique á nadie.»

3.—Para que la posesión merezca la protección de la justicia, se requiere que sea anual—art. 2473 del Cód. Civ.—que sea adquirida sin violencia—2478 *ibid*—que sea pública, á título de propietario, continua y no interrumpida—arts. 2479 á 2481 *ibid*—porque solo reuniendo estas condiciones reviste un carácter que la hacen respetable.

4.—En manera alguna podemos aceptar como correcto el principio sentado en el sumario. La competencia se establece por el precio que el actor fija á la cosa materia de la acción, como lo establece el art. 14 de la Ley Org. de los Trib. de 1886. Cuando la cosa demandada no sea una cantidad de dinero. dice el art. 14 citado, el actor deberá manifestar su valor bajo juramento al entablar la demanda. No puede por consiguiente aceptarse como base el precio de adquisición del inmueble, pues éste puede sufrir variaciones tan sensibles que llevaría los asuntos más valiosos á una jurisdicción abiertamente incompetente. Así un inmueble adquirido en dos mil pesos, puede valer en la época de la demanda veinte mil, lo que haría incompetente á la justicia de Paz que entiende hasta dos mil pesos, para conocer en el juicio. La Cámara dijo, que debía además tenerse presente para establecer la competencia, el art. 14 citado, lo que demuestra por otra parte el error contenido en el principio sentado en el sumario.



en un interdicto de obra nueva, se rige por el precio de la escritura de compraventa del terreno y no por el de la obra á construir.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 4^a.

1. Interdicto de recobrar—Es procedente siempre que clandestinamente se pierde la posesión.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 52, Ser. 3^a

2. Interdicto de recobrar—Es procedente, siempre que el poseedor actual reconoce la posesión anterior del demandante y que clandestinamente procedió á tomarla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 58, Ser. 3^a.

3. Interdicto de recobrar—Para que éste ó el de retener puedan prosperar, debe justificarse la posesión civil de la cosa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 93, Ser. 3^a.

4. Interdicto de recobrar—Los Tribunales son compe-

1—Art. 581, inc. 2º del Cód. de Proc.

2—Véase nota precedente.

3—Convocadas las partes al juicio verbal de que nos habla el artículo 575 del Cód. de Proc., la parte demandada espuso que el actor nunca tuvo la posesión del inmueble y que solo era un simple agregado á otro señor que á su vez se titulaba inquilino. Si bien es cierto que en los interdictos de retener y recobrar no es necesario justificar el título posesorio en virtud del cual se deducen, no lo es menos que para que ellos procedan, debe acreditarse el hecho y la existencia de esa posesión por parte de quien asegura tenerla—art. 2494 del Cód. Civ.—aplicable á este caso. Si esa posesión no se comprueba, carece de base el Juzgado para apreciar el mérito de ella y por consiguiente tampoco puede apreciar el derecho que puede asistírles para instaurar su acción. Además el demandado lejos de rechazar la aseveración que se hizo de que era un simple agregado ó inquilino, solo se limitó á esprestar que aun en el supuesto de que poseyera á nombre de un tercero, siempre tendría derecho á deducir el interdicto. Ese silencio acerca de un hecho capital debe considerarse como un reconocimiento tácito del hecho aseverado. El que es mero tenedor de la cosa carece de derecho para deducir interdictos, porque no tiene la posesión civil de la cosa, como lo tiene resuelto la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Interdicto de retener*, núm. 2.

4—El presidente interino de la sociedad «Unión y Benevolencia» se



tentes para entender en un interdicto de recobrar dedu-

presentó judicialmente quejándose de que varios individuos miembros y extraños de la referida sociedad, mediante una elección fraudulenta de empleados, en que no se habían guardado las reglas prevenidas en los estatutos se habían posesionado violentamente de la casa en que aquella tenía sus reuniones y que le pertenece en propiedad y posesión, impidiéndole después la entrada, por lo que venía en deducir el interdicto de despojo para que se restablezca á la sociedad que representa en la posesión que le corresponde. El Juez de lo Civil, considerando que que estas cuestiones corresponden á la decisión de la misma sociedad «Unión é Benevolencia» reunida en asamblea general, se declaró incompetente para entender en el asunto, la cual resolución fué apelada. Esta resolución es equivocada porque dados los términos de la demanda resulta que dicha sociedad ha sido efectivamente despojada de una finca de su propiedad y que de consiguiente el interdicto de que se trata sería procedente aun contra los mismos miembros de la asociación, que asumiendo indebidamente su representación se hubiesen apoderado con violencia de aquella. De las diversas diligencias que constaban en autos, resultó debidamente constatado que el demandante se encontraba investido del cargo de presidente de la referida sociedad, correspondiéndole en consecuencia su representación con arreglo á sus estatutos, y que en este cargo había sido sustituido por el demandado. No es el caso, ni de oportunidad, la averiguación de los hechos que han motivado el cambio de esa representación y si ella ha importado ó no el ejercicio de un derecho legítimo y con arreglo á lo que los mismos estatutos confieren á la Asamblea de la sociedad para establecer la competencia de los Tribunales, pues dada la legítima representación que correspondía al demandante para que pueda resolverse si ella ha cesado, es forzoso dejar establecido en el juicio la procedencia ó improcedencia del interdicto y en consecuencia la incompetencia de la autoridad pública á la que se ha recurrido en garantía de los mismos derechos por la falta de aquella representación. Si bien es verdad que los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica, como es la de que se trata, son regidos por el contrato, por su objeto ó por la disposición de sus estatutos, según lo establece espresamente el Cód. Civ., en su art. 40, no lo es menos que tratándose del desconocimiento de esos derechos cuando se dicen usurpados por personas extrañas, puede demandarse el auxilio de la autoridad pública para mediante su acción, obtener su mantenimiento y libre ejercicio, sin que por esto puedan entenderse vulneradas las atribuc-

cido por el presidente de una sociedad ilegalmente despojada del local social.—Jur. Civ., tom. 6. pág. 234, Ser. 3ª.

5. **Interdicto de recobrar**—Procede siempre que se justifique la posesión y el despojo violento.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 426, Ser 3ª.

6. **Interdicto de recobrar**—Procede contra la Municipalidad si toma para vía pública un terreno de propiedad particular sin previo juicio de espropiación.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4ª.

7. **Interdicto de recobrar**—Es procedente, siempre que justificada la posesión lo sean, los actos en que aquel se funda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 328, Ser. 4ª.

8. **Interdicto de recobrar**—Reconocida la posesión anual

ciones que aquellos reglamentos acuerdan á la Asamblea de la sociedad. De no ser así, además de que de hecho vendría á crearse una soberanía estraña dentro la soberanía misma de la Nación, resultaría también que aun en el caso de una usurpación ó despojo de los derechos ó bienes de una persona jurídica por parte de sus miembros ó de estraños, que hubieran asumido su representación indebidamente, la autoridad pública no podría intervenir para reparar el atentado, hacer respetar el ejercicio de los derechos de sus miembros y mantener á sus legítimos representantes en el ejercicio de sus funciones. Además, sería de todo punto ilusorio é ineficiente, el recurso que indicaba el Juez de 1ª Inst. para repararse el atentado de que se queja el presidente provisorio, porque ni la sociedad podría reunirse quizá, ni mucho menos funcionar con regularidad en asamblea general, mientras impere en ella la violencia, y sus legítimas autoridades no sean repuestas en el ejercicio de sus funciones, lo cual nadie podría hacer, ni la autoridad pública, sino tomando judicialmente conocimiento del asunto y decidiendo quiénes son los legítimos representantes de la sociedad á los cuales en su caso correspondería presidir dicha asamblea general.

5—Véase: *Despojo*, núm. 1.

6—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia sentada por los Tribunales. Véase: *Inst.*, tom. 4º, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1.

7—Art. 581 del Cód. de Proc.

8—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2456 y 4038 del Código Civ.





del demandado. el interdicto de despojo es improcedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4^a.

9. Interdicto de recobrar—O de despojo, es improcedente cuando el desposeído lo ha sido en virtud de una sentencia de desalojo dictada en juicio en que ha sido parte.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 102, Ser. 4^a.

9.—Según disposición del art. 581 del Cód. de Proc., para que pueda tener lugar el interdicto de recobrar ó de despojo, es indispensable no solo que el que lo intente haya estado en posesión ó tenencia de la cosa que se demanda, sino también que haya sido despojado con violencia ó clandestinamente de esa posesión. En el caso del sumario el interdicto se fundaba en el hecho de haber sido desalojado de la propiedad en cuestión por mandato de un Juez de Paz y á pedido de parte, según el actor manifestaba en su escrito de demanda. Siendo esto así carece de fundamento la acción deducida desde que no concurren para ello los requisitos que la ley exige, ó sea el despojo alegado; pues siendo cierto, como lo reconocía el actor, que el lanzamiento llevado á cabo lo había sido por orden judicial, la violencia á que alude no ha existido entonces de parte de aquel á quien demanda, el que solo se había limitado á pedir el desalojo ejercitando un derecho que ha creído tener, derecho que le fué reconocido en juicio. Siendo evidente que el desalojo decretado en juicio, no puede ser considerado como despojo, pues la violencia ó clandestinidad no existe en las resoluciones judiciales, desde que la misión de la justicia es dar á cada uno lo que le corresponde: el interdicto deducido es improcedente por no ajustarse los hechos que lo fundan á lo prescripto en el artículo citado—art. 581—cualquiera que sea la prueba rendida para acreditar la posesión de que los actores se dicen privados, la que podrá servir para fundar otra acción que no sea la deducida. La teoría sustentada por la Cámara en el caso que nos ocupa, de que las medidas judiciales no pueden dar lugar á los interdictos, por cuanto ellas, sean cuales fueren, no pueden constituir despojo por carecer del carácter de violencia ó clandestinidad que la ley exige, no está de acuerdo con los principios sentados hoy por ese Tribunal. Es cierto que se pueden citar resoluciones que consagran aquel principio, pero también hay sentencias que han sentado una teoría contraria. Pueden verse los casos resueltos en pro y en contra del sumario, la nota al verb. *Interdicto de retener*, núm. 11. El presente sumario está en abierta oposición con lo resuelto por la Cámara en este último caso citado.

10. Interdicto de recobrar.—Deducido por un sublocatario contra el propietario, es improcedente si éste no

10.—Es una doctrina perfectamente establecida que las acciones posesorias corresponden tan solo á los poseedores de inmuebles, y que ellas tienen por único objeto la restitución de la posesión ó la manutención de la misma en su plenitud y libertad—art. 2487, Cód. Civ.—Además el art. 2480 establece que una de las condiciones requeridas para que la posesión dé lugar á las acciones posesorias, no debe ser precaria sino á título de propietaria. La Cámara por mayoría resolvió que el interdicto no podía prosperar, no porque el locatario no pudiese deducir acciones posesorias, como lo sostuvo la minoría, sino porque el sublocatario que ha adquirido sus derechos por cesión sin consentimiento del locador principal, carece de vinculaciones directas con el propietario del inmueble. Reus sostiene que el inquilino tiene el derecho de ser amparado en su posesión cuando se le despoja de ella, y por consiguiente le corresponde el interdicto de recobrar.—Tom. 3º, págs. 593 y 594.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Interdicto de retener*, número 2. El Dr. Molina Arrotea, sostuvo en el caso que corre publicado en el tomo 7º, pág. 314, Ser. 4ª, que el interdicto de despojo se acuerda no solo al que tiene la posesión de la cosa sino también al mero tenedor de la misma. El Dr. Rivarola, estudiando el art. 196 del Cód. Pen. dice: «Nuestro art. 196 castiga al que empleando violencia *despoje* á otro de una casa raíz, ó del uso, usufructo, habitación ó servidumbre que en ella goce, y castiga con pena inferior el despojo que se cometiere por fraude ó astucia. Estas disposiciones del Código contienen, pues, la penalidad que, además de las indemnizaciones civiles, podrá imponerse por la autoridad respectiva en los casos en que procede el interdicto de recobrar ó de *despojo*, de las leyes de procedimientos. Según ellas, la acción se dá mediante estas condiciones: 1ª que el que lo intente ó su causante haya estado en posesión ó tenencia de la cosa demandada; 2ª que haya sido despojado con violencia ó clandestinamente de esa posesión. Si se considera que los términos de la disposición penal guardan la más completa analogía con los de la definición civil y que el interdicto puede darse aun contra el propietario que hubiera tomado violentamente la cosa poseída por otro, parece encontrarse en este delito, antes que un atentado contra la propiedad, un atentado contra el orden público ó la administración de justicia. Por eso, respecto del interdicto, dice con razón Caravantes—Procedimientos judiciales, lib. 3º, núms. 1045 y 1049—que se funda en el principio de eterna razón de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sino





hubiese intervenido ni consentido la cesión del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 169, Ser. 4.^a.

11. **Interdicto de recobrar**—Este interdicto es improcedente en tanto el actor no justifique haber tenido la posesión, la propiedad aún justificada no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 403, Ser. 4.^a.

12. **Interdicto de recobrar**—Debiendo considerarse una vía de tramway inmueble por accesión, procede el inter-

recurriendo á las autoridades judiciales instituidas para administrarla á cada uno, y que su objeto es evitar las luchas y vías de hecho á que recurriría el despojado para recuperar su posesión. El interdicto de despojo se dá no solamente al que se halla en posesión de la cosa de que se le despojó, sino aún al que se halla en la tenencia ó mera ocupación de la misma, que no constituye la posesión legal, como los depositarios, prendarios, comodatarios, y en consecuencia, aunque no sea señor de la cosa; y asimismo, aun cuando la posesión ó tenencia fuere viciosa ó se hubiere adquirido, *vi, clam, vel precario*, ó por fuerza ó clandestinamente, ó por encargo del dueño, como la de los colonos ó inquilinos del despojado. Pienso que en, las mismas condiciones en que se dá el interdicto procede la acción penal de usurpación. Aunque en la disposición legal se hayan enumerado los derechos reales de uso, usufructo, habitación ó servidumbre, no debe entenderse que la ley protege solo el derecho real que se tenga en la cosa sino también el derecho personal. Si la ley quisiera proteger solamente los derechos reales, no usaría los términos *el que despoje* á otro de un bien raíz, lo que da simplemente la idea de separarle de la tenencia actual, cualquiera que sea el título de la tenencia. Así el Código Español usa en su artículo los términos *el que ocupare una cosa inmueble* ó usurpare un derecho real de ajena pertenencia, etc., en cuyos primeros términos la ocupación de la cosa inmueble se refiere simplemente al acto material.» Véase Exposición y Crítica del Cód. Penal vigente.

11—A este respecto la jurisprudencia es constante. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 2.

12—El actor comprobó y la Municipalidad reconoció la existencia de un contrato celebrado por la empresa con el P. E. de la provincia de Buenos Aires, antecesor, en la jurisdicción que corresponde actualmente en el municipio de la Capital, á aquella corporación, que en virtud del contrato, la empresa estaba facultada á establecer los rieles para la esplo-



terdicto de recobrar ó de despojo contra la Municipalidad que haya llevado á cabo el levantamiento de los rieles —Jur. Civ., tom. 7, pág. 314, Ser. 4^a.

13. **Interdicto de recobrar**—La posesión, no procede si se ha perdido en virtud de auto judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 285, Ser. 4^a.

14. **Interdicto de recobrar**—Justificada la posesión y su pérdida clandestina, el interdicto de recobrar la posesión debe prosperar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 217, Ser. 4^a.

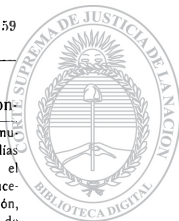
tación del tramway: que esos rieles habían sido colocados desde muchos años, utilizándolos la empresa para llenar los fines de su contrato, y finalmente que hacía algún tiempo habían sido levantados por orden de la Intendencia y so pretexto de dar cumplimiento á una ordenanza. ¿Ha podido la Municipalidad, mediando el contrato á que se ha hecho referencia, por su sola voluntad, proceder de la manera que reconoce haber procedido? La negativa no es dudosa. La Municipalidad cuando obra como persona jurídica, si bien adquiere derechos, contrae á la vez obligaciones y no puede de ninguna manera cambiar por sí sola la situación legal creada por los contratos ó convenciones que celebra: debe como cualquier particular acudir á los tribunales, á fin de que estos, si consideran justas sus pretensiones, así lo declaren, previa la controversia y comprobaciones necesarias para asegurar un pronunciamiento que sea el resultado de un debate en el cual las partes hayan discutido ampliamente su derecho. Es en el juicio que con tal motivo se siga que será oportuno estudiar el alcance de las cláusulas del contrato celebrado entre las partes, y el de los preceptos legales que rijan el caso, pues son puntos que hacen al fondo del derecho discutido, y ajenos por lo mismo á los procedimientos breves y sumarios que caracterizan los interdictos. Tratándose de un juicio de naturaleza sumaria, no se requiere otra cosa que justificar los extremos exigidos en el art. 581 del Cód. de Proc., pudiendo agregarse que concurriesen las circunstancias exigidas en el art. 2473 del Cód. Civ. y también que aparezca llenado el requisito del art. 2487, pues según lo ha declarado la Cámara en el tom. 1^o, pág. 100, ser. 1^a de sus fallos, la vía de un tramway es inmueble por accesión, por hallarse comprendida en la definición del art. 2315 del mismo Código.

13.—Véase: *Auto judicial*, núm. 1, donde se sostiene esta teoría. Hoy la Cámara ha reformado esta jurisprudencia, estableciendo que el interdicto procede aún contra las resoluciones judiciales. Véase el núm. 7.

Interdicto de recobrar.—Véase: *Sentencia*, núm. 10—*Interdicto de retener*, núm. 2.

1. Interdicto de retener.—La posesión, procede aún con:

1.—El poseedor de un inmueble se presentó diciendo que hacía muchos años estaba en posesión de la propiedad y que hacía pocos días es presentó un oficial de justicia acompañado de un escribano con el objeto de poner en posesión de dicha finca al representante de una sucesión. Que no hallándose él presente en el acto de darse la posesión, la notificación fué hecha á sus inquilinos, habiéndosele dejado aviso de aquella diligencia por medio de cédula: fundado en los arts. 574 y 578 del Cód. de Proc., pide se le admita el interdicto de retener. Convocadas las partes á juicio verbal, el actor reprodujo su demanda, contestando el demandado, que por su parte negaba el hecho de la posesión invocada por el actor, fundándose para ello en el certificado de la posesión dada anteriormente por el oficial de justicia á que se ha hecho referencia y que esa posesión judicial hacia improcedente la iniciación de cualquier interdicto. El Ministerio de Menores tomó intervención por haber incapaces interesados en el juicio, y dijo que el interdicto de retener no era procedente, porque requería como condición esencial que el que lo intente se halle en actual posesión de la cosa materia de la acción, y que en virtud del acto de posesión se evidenciaba que el actor carecía de dicha posesión. El Juez al resolver dijo, que invocándose por una y otra parte la posesión de la finca, era necesario averiguar cuál de los dos la tiene en realidad, desde que dos posesiones iguales no pueden concurrir sobre la misma cosa—art. 2401, Cód. Civ.—Y si bien la testamentaria tomó posesión judicial de la cosa, el actor continuó ocupándola, por cuya causa aquella demandó á éste como intruso. Desde el momento en que el actor continuó en su posesión, es indudable que él debía ser considerado como poseedor exclusivo, y aún cuando la testamentaria pudiese considerarse también como poseedora, debe aplicarse lo dispuesto por el art. 2471 del Cód. Civ., que favorece al actor, pues el mismo demandado confiesa que aquél poseía la cosa cuando se le puso en posesión judicial de ella. Esta posesión judicial no produce el efecto de escluir al poseedor de la posesión que tenía, pues el ocupante conserva la posesión, porque aun cuando el acto judicial practicado por la testamentaria fuese un acto de posesión, este acto no bastará para dar por perdida la que tenía el actor desde que él á su vez ejerce otro acto de posesión, ocupando *animo domine* la misma finca—arts. 2384 y 2456 del Cód. Civ.—Dijo además el Juez, que la posesión de la testamentaria era ilegal y clandestina. Ilegal, porque no se ob-



tra un auto judicial siempre que aquel se haya dictado sin audiencia del poseedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 3^a.

2. **Interdicto de retener**—Para la procedencia del interdicto, ya sea de retener ó de recobrar, es indispensable justificar que el que deduce la acción tiene ó ha tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 175, Ser. 3^a.

servó ni una sola de las formalidades determinadas por el Cód. de Proc. en el tit. 17, sección 1^a; y clandestina porque se tomó en ausencia del poseedor—art. 2369—Entonces se desprende, de lo espuesto que la pretendida posesión de la testamentaria, solo queda reducida á patentizar su intención de adquirir la posesión é inquietar en ella á su actual poseedor, y en tal caso este ejercita un perfecto derecho al deducir el interdicto que la ley le acuerda—arts. 2487, 2495 del Cód. Civ., y 574 del Cód. de Proc.—La Cámara confirmó esta bien fundada sentencia, diciendo que el hecho de haber tomado posesión la testamentaria es un acto material con que se ha tratado de inquietar al poseedor en la actual posesión de la cosa. Si esa toma de posesión ha sido por orden judicial, no por eso deja de tener el carácter de acto de perturbación material contra la posesión. Esa orden no ha sido dada en virtud de la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino que ha sido un simple mandamiento dictado en un juicio testamentario en el que no se le dió audiencia al poseedor. De acuerdo con esta resolución, puede verse: verb. *Interdicto de retener*, núm. 5, tomo 2, de la Instit., en contra: *Auto judicial*, núm. 1 de este tomo y el mismo verb. del tom. 3; tom. 2, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1 y tomo 1^o, *Interdicto de recobrar*, núm. 1479. Sinembargo este último caso no puede considerarse contrario al sumario por cuanto en él se trató de ejecutar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, circunstancia que cambia por completo la faz de la cuestión. Cuando en el caso como el del sumario, la posesión se toma en ausencia del poseedor, la posesión se considera clandestina, como lo tiene resuelto también la Cámara en otro caso. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Posesión*, núm. 2. También se ha resuelto que la posesión dada judicialmente, basta para justificar que la cosa se tenía como propia, aun cuando no se haya protestado inmediatamente por el despojo; tom. 2, verb. *Posesión*, núm. 3.

2—Arts. 574 y 581 del Cód. de Proc.





3. **Interdicto de retener**—Es procedente contra el auto judicial que ordena la posesión á favor de un tercero sin la audiencia del poseedor que no ha sido parte en el juicio. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 314, Ser. 4^a.

4. **Interdicto de retener**—La falta de comparecencia del demandante al juicio verbal, hace procedente el rechazo del interdicto de retener. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 296, Ser. 4^a.

5. **Interdicto de retener**—Es requisito ineludible para que proceda el interdicto de retener, que el que lo in-

3—Este caso consagró el mismo principio del núm. 1. En un expediente seguido entre dos litigantes se mandó poner en posesión del inmueble á uno de ellos: el poseedor pidió reposición del auto; pero no se le hizo lugar por no ser parte. Entonces el turbado en su posesión se presentó deduciendo interdicto de retener. El juez declaró procedente el interdicto, fundándose en que al decretarse la posesión y al cumplirse esta orden, no puede haber sido la mente del Juzgado el privar de la posesión al actual poseedor sin que sea oído ni vencido en juicio, como lo dispone el art. 565 del Cód. de Proc. Ese hecho no constituye la privación de la posesión, siempre que el interesado no solicite, las medidas tendentes á que el juez, con conocimiento de causa, proceda en la forma prescripta por la ley. En el caso del sumario, no se mandó poner en posesión de la cosa al interesado; sino que se ordenó el desalojo en virtud de documentos exhibidos que comprobaban la posesión. La sentencia de desalojo no puede entenderse con el inquilino del poseedor, sino con éste personalmente. Y si la ejecución se estiende con el inquilino, ese acto no puede perjudicar al poseedor ni para despojarlo.

4—El art. 574 del Cód. de Proc. determina los requisitos que debe comprobar el que deduce el interdicto—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—Citado para el comparendo, el actor no concurrió; citado nuevamente bajo apercibimiento se obtuvo el mismo resultado. Los demandados pidieron el rechazo de la acción, á lo que se hizo lugar por no haber producido prueba alguna el actor.

5—Es una de las condiciones indispensables requeridas por el artículo 574 del Cód. de Proc. para que el interdicto de retener sea procedente.

tenta tenga la posesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 295, Ser. 4^a.

Interdicto de retener—Véase: *Interdicto de recobrar*, número 3.

Interés común—Véase: *Honorarios*, núm. 28.

Interés directo—Véase: *Posiciones*, núm. 29.

Interés estipulado—Véase: *Hipoteca*, núm. 1.

1. Intereses—El mandatario solo debe intereses por el saldo desde que las cuentas se exijan judicialmente, mientras no se justifique que invirtió los fondos en provecho propio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3^a.

2. Intereses—Los intereses sobre el capital invertido

1—Art. 1913 del Cód. Civ.—La Cámara dijo, que no sería posible y si de todo punto injusto, obligar al mandatario á abonar cantidad alguna, no conociéndose como no se conocía el importe de los ingresos y el de los egresos verificados.

2—Celebrado un contrato de compraventa se convino en que el precio á abonarse sería el de costo. Después de firmada la escritura de enajenación y recibido el precio de venta por el vendedor, éste se presentó demandando como parte del precio de venta los intereses corridos desde el día en que al vendedor adquirió del anterior propietario el inmueble hasta el día de la enajenación últimamente consumada; y se fundaba en que siendo el precio convenido el de costo, al estenderse la escritura para determinarlo no se tomó en cuenta, por error, los intereses del capital empleado desde la fecha en que se compró el inmueble y se pagó su precio hasta la de la venta hecha al demandado. Todo se reducía á saber si en el precio de costo deben incluirse los intereses del precio pagado por el primer comprador al vendedor. El que vende una cosa por el precio de costo nada gana y nada pierde. El vendedor decía que si el comprador no le abonase los intereses del dinero empleado en la adquisición, el precio no sería el de costo sino menor, porque el vendedor perdería el monto de los intereses. Pero esto no es exacto porque el monto del interés no ha sido desembolsado por el adquirente en la compra del terreno y por consiguiente no puede incluirse en el precio de costo. Si la parte pierde los intereses de su dinero, no quiere decir, que pierde parte del precio que el pagó, sino que pierde únicamente las ganancias que podría haber adquirido con su dinero, si no lo hu-





en una operación, no pueden conceptuarse precio de costo sino utilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 281, Ser. 3^a.

3. **Intereses**—Sobre un capital determinado que disminuye periódicamente, deben liquidarse en cada período que sufra disminución.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Serie 4^a.

4. **Intereses**—En los casos de liquidación judicial de una deuda deben cargarse con arreglo a lo que cobra el Banco Nacional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4^a.

5. **Intereses**—Al practicarse la liquidación, deben cargarse desde la fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4^a.

6. **Intereses**—Su capitalización solo procede cuando biese empleado en esa compra. El vendedor no pierde sino que deja de ganar.

3—El tutor de un menor había recibido en administración una suma de dinero, pero no se le había entregado cantidad alguna para alimento y vestido. Al rendir cuenta de su administración descuenta del capital la suma mensual destinada a alimentos, mes á mes, y carga el interés sobre el saldo que resulta, deducido del capital las entregas parciales hechas. Así resuelve la Cámara que debe hacerse la liquidación.

4—Se quería que la liquidación se practicara teniendo en cuenta el interés que el Banco paga y no el que cobra. El art. 622 del Cód. Civil establece, que el deudor moroso debe el interés legal que las leyes especiales determinen. Esa ley especial á que alude el Cód. Civ. es por hoy el Cód. de Com. el que en su art. 565 dice, que mediando estipulación de intereses sin declaración de su tipo, se presume que las partes se sujetaron al interés que cobran los bancos públicos. Y más adelante agrega: «Siempre que en la convención ó en la ley se habla de intereses de plaza ó á estilo de Banco, se entiende *los que cobra el Banco Nacional*» que es precisamente lo que consagra el sumario.

5—Cuando al iniciar la acción se hubiese pedido así. Los intereses se adeudan desde que el deudor incurre en mora por demanda ó interposición judicial hasta que el acreedor recibe el importe de lo que se le adeuda, porque es entonces cuando se constituye en mora.

6—O cuando practicada una liquidación de intereses el Juez la mandase pagar y el deudor fuese moroso en hacerlo—art. 623 del Cód. Civ.



existe convención espresa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Ser. 4^a.

7. **Intereses**—No procede el pago de intereses si en la sentencia no existe condenación espresa—Jur. Civ., tomo 5, pág. 368, Ser. 4^a.

8. **Intereses**—El pago de intereses por el comprador solo procede si existe mora en la oblación del precio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 4^a.

9. **Intereses**—No pueden liquidarse intereses por la cantidad adeudada si la sentencia espresamente no lo determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 242, Ser. 4^a.

Intereses—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Emancipación*, número 2—*Tutor especial*, núms. 2 y 3—*Contrato de compraventa*, núm. 8—*Comprador*, núm. 4.

Intereses opuestos—Véase: *Información supletoria*, número 4—*Cosa juzgada*, núm. 4.

Interlocutoria—Véase: *Informe in voce*, núm. 1.

1. **Intermediario**—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente de su patrocinado con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

Interpelación judicial—Véase: *Obligación de hacer*, números 2 y 3.

Interpretación—Véase: *Posiciones*, núm. 8—*Contrato*, núm. 20.

Intervención—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1—

7—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 4^o, verb. *Intereses*, núm. 1; tom. 3^o, verb. *Sentencia*, núms. 6 y 16. Si al entablar la demanda no se pidieron, tampoco se puede pedir durante la secuela del juicio. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Intereses*, núm. 4.

9—Véase el núm. 7.

1—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.



Bienes testamentarios, núm. 3 — *Nulidad del procedimiento*, núm. 4 — *Notificación*, núm. 9.

Intervención individual—Véase: *Representación*, núm. 1.

Intervención judicial—Véase: *Bienes de menores*, número 1.

1^a. Interrogatorio—Los testigos que han comparecido a la audiencia y que no declararon por falta de interrogatorio, no pueden ser presentados nuevamente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

Interrogatorio—Véase: *Testigos*, núm. 17.

Interrupción—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 41.

Intima amistad—Véase: *Tacha*, núm. 1.

Intimación—Véase: *Remate judicial*, núm. 14—*Obligación de hacer*, núm. 15.

Intruso—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b. Inventario—La oposición a incluir un bien en el inventario, obliga a los herederos a deducir sus acciones contra el opositor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 4^a.

Inventario—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 2.

Inversión—Véase: *Tutor*, núm. 12.

Irrespetuosos—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2.

Irresponsabilidad—Véase: *Indemnización*, núm. 9.

1^a—La falta de interrogatorio constituye desidia de la parte, y por consiguiente cae bajo la sanción de lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Procedimientos.

1^b—Véase: *Herederos*, núm. 7.



1. **Jactancia**—Hecha la manifestación afirmativa en el juicio de jactancia, la fijación del plazo para deducir acciones es procedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Serie 3ª.

2. **Jactancia**—Justificada la falta de posesión del demandado por jactancia, procede la fijación del término que la ley establece para que deduzca las acciones que convengan á su derecho, bajo apercibimiento—Jur Civ., tom. 4, pág. 261, Ser. 3ª.

3. **Jactancia**—La acción de jactancia puede ser dedu-

1—Art. 428 del Cód. de Proc.

2—El actor se presentó diciendo que había alquilado al demandado un terreno y que últimamente tuvo conocimiento que el arrendatario había seguido un juicio con un tercero, linderero del terreno, sobre construcción de una pared, en el que se decía dueño del mismo, habiendo llegado hasta presentar títulos de propiedad. El demandado negó que la actora se encontrase en posesión del terreno, y dijo que el terreno sobre que se atribuía el derecho de propiedad, no era el que tenía en arrendamiento, sino otro, con distinta ubicación. El actor comprobó acabadamente los extremos de su demanda mientras que el demandado no. Se resolvió como lo establece el sumario, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 427 y 428 del Cód. de Proc.

3—Basta leer el tit. 11 del Cód. de Proc. para adquirir el convencimiento de que en el juicio de jactancia no puede discutirse sobre el dominio que respectivamente se atribuyen el demandante y el demandado



cida por el poseedor, sin que sea condición indispensable que justifique el dominio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368. Ser. 4^a.

4. Jactancia—Deducida demanda de jactancia, la pres-

sobre el terreno que se cuestione. El juicio de jactancia á la manera de las acciones posesorias ó de los interdictos, se propone salvaguardar los derechos inherentes á la posesión, no permitiendo que nadie se haga justicia por sí mismo y pueda hacer perder al poseedor las ventajas de su situación de derecho por medio de ardidés que lo colocan en la posición desfavorable de demandante, cuando como poseedor tiene derecho de ampararse en su posesión, y exigir que el que intenta alguna acción contra él haya de asumir forzosamente el carácter de actor. Por eso dispone el art. 428 del Cód. de Proc. que, si aquel contra quien se dirige la jactancia reconociera la verdad de lo espuesto, ó se negase á hacer manifestación, ó la hiciere ambiguamente, el Juez le ordenará que dentro de diez días entable la acción que surge de los hechos espuestos. Bien se comprende que sería obligar al poseedor á asumir el rol de actor si se le exigiera desde luego la prueba de su dominio cuando esa exigencia no tuviera más fundamento que el de atribuirse cualquiera, fuera de juicio, derechos á la misma propiedad de que aquél disfruta. Si el que ha perdido la posesión solo puede recuperarla por medio de la reivindicación; y si el que goza de posesión tiene los interdictos para conservarse ante todo en ella, cualquiera que sea el derecho de dominio del que pretende turbarla, el que por actos estrajudiciales se ve molestado en su derecho, puede obligar al perturbador por medio de una acción de jactancia á retractarse, ó á deducir las acciones que le competan sobre los bienes que pretende ser suyos, para que la justicia se pronuncie sobre esas pretensiones. Y basta poner de manifiesto este propósito de la acción de jactancia para no insistir en la demostración de la verdadera anomalía en que se incurriría si para hacer uso del derecho de no ser molestado en la posesión de que goza, fuera necesario empezar por probar el dominio. Lo contrario nos llevaría al absurdo de que en manos de cualquiera estaría obligar á los poseedores por medio del procedimiento antes invocado á descubrir el origen y el título de su posesión sin estar sometido á una necesidad jurídica de hacerlo, y contra el precepto del art. 2363 del Cód. Civ.

4.—La jactancia se dedujo contra un martillero que había anunciado el remate de la cosa sin decir por cuenta de quién. Una vez que supo el actor el nombre de la persona por cuya orden había procedido el martillero, dirigió su acción contra dicha persona. El demandado opuso la esce-



cripción se interrumpe aun cuando ella se haya dirigido contra el que pretendía tener originariamente el derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368. Ser. 4^a.

5. Jactancia—La acción de jactancia solo procede si el reo se atribuye derechos á bienes determinados de propiedad del actor.—Jur. Civ., tom. 10, págs. 114 y 295, Ser. 4^a.

1^a. Jornales—Los abonados á los oficiales durante la paralización de una obra, no pueden conceptuarse consecuencia inmediata de aquel hecho, y por lo tanto no pueden ser incluidos en la indemnización.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 81, Ser. 3^a.

Judicialmente—Véase: *Mora*, núm. 3.

Jueces de Paz letrados—Véase: *Espedientes*, núms. 2, 3 y 4.

1^b. Jueces de turno—Señalando el turno de los jueces de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 334, Ser. 4^a.

Juez—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Acción*, núm. 2—*Acciones personales*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 6—*Amistad*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 4—*Arraigo*, núm. 3—*Cotejo*, núm. 1—*Cuestiones*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núme-

ción de prescripción alegando que entre el día del remate y el de la notificación de la demanda habían transcurrido los seis meses de que nos habla el art. 425 del Cód. de Proc. El Juez rechazó la escepción: 1^o Porque la demanda, aunque no fué notificada al demandado dentro de los seis meses, fué entablada antes de vencerse ese término; siendo así que la prescripción se interrumpe por demanda y no por la notificación que de ella se hace—art. 3986 del Cód. Civ.—2^o Porque la demanda fué entablada inmediatamente de anunciado el remate por el martillero, no siendo imputable al actor si la acción no se entendió en primer término con la persona que ordenó la venta, desde que no sabia ni estaba obligado á saber por cuenta de quién obraba el martillero.

5—Véase: *Bienes determinados*, núm. 1.

1^a—Véase: *Indemnización*, núm. 1.

1^b Con fecha 28 de Abril de 1892 se estableció el siguiente turno: doctores Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro y Posse.



ros 14. 42 y 91—*Denuncia*, núm. 1—*De oficio*, núm. 3—*Desacato*, núms. 1 y 2—*Dictamen pericial*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 40—*Excepción de incompetencia*, núm. 8—*Excepciones perentorias*, núm. 1—*Escusación*, núms. 1 y 2—*Espedientes*, número 6—*Evicción*, núm. 4—*Información*, núm. 2—*Informes*, núm. 3—*Juicio reivindicatorio*, núm. 1—*Notificación*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, núm. 1—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Padrastro*, núm. 1—*Personería*, núm. 13—*Posesión judicial*, núm. 1—*Recusación*, núms. 2, 3 y 4—*Sentencia*, núms. 5 y 7—*Simulación*, núm. 13—*Transacción*, núms. 1 y 9—*Venia*, núm. 1—*Venta en remate*, núm. 1.

1. **Juez competente**—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

2. **Juez competente**—Lo es para demandar la posesión

1—Véase: *Allanamiento*, núm. 1.

2—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Inst., donde se resolvió que el Juez competente para esta clase de acciones es el del lugar en que la cosa está situada. Así lo resolvió también la S. C. N. en un caso que aun no se ha publicado y al que más adelante haremos referencia. El Juez de 1^a Inst. resolvió la cuestión en un sentido contrario al del sumario, fundándose en que, según lo dispone el art. 4º del Cód. de Proc., cuando se ejercitan acciones personales, el Juez competente para conocer de ellas es el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Cuando se vende un inmueble el anajenante se obliga á cumplir las obligaciones que contrae como vendedor en el lugar donde está situada la cosa vendida, sin que sea necesario que así se haga constar espresamente en el contrato desde que es evidente que el vendedor de un inmueble no puede cumplir sus obligaciones de entregarlo al comprador en otro lugar que el en que está situado. Si la ley atribuye el conocimiento de las acciones personales



de un inmueble en el domicilio del demandado, aun cuando

al Juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, con mucha mayor razón debe atribuirlo al Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse necesaria y forzosamente por la naturaleza misma de las cosas. Si al vendedor le es absolutamente imposible cumplir fuera del lugar en que la cosa está situada, forzosamente tendría que cumplirla en el lugar donde se encuentra el inmueble vendido, es allí solamente donde se le puede demandar por su cumplimiento. La ley de Enjuiciamiento Civil de España, inc. 3º del art. 5º, con más exactitud que nuestro Cód. de Proc. establece, que es Juez competente para conocer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales *el del lugar en que deba cumplirse la obligación*. A esto contestó la Cámara diciendo, que cuando se pide la entrega de la cosa vendida se ejercita una acción personal. El art. 4º del Cód. de Proc. dice: que cuando se ejerciten acciones personales, será Juez competente el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente. Pero cuando del contrato no resulta que se haya convenido el lugar para el cumplimiento de la obligación y cuando el demandado está domiciliado fuera del lugar en que la cosa está situada, es claro que los jueces del domicilio son los competentes para conocer en el asunto. Esta fué la opinión del Fiscal de la Cámara, revocándose por los fundamentos de este dictamen el auto del Juez de 1ª Inst. Una cuestión tan debatida y que tiene en pro de la solución contraria, dada por la Cámara, la opinión del más alto Tribunal de la República, debió merecer mayor estudio de parte de los señores Camaristas; pero esto no valía indudablemente la pena para ellos: era demasiado pedirles cuando podían revocar una resolución por *los fundamentos* aducidos por el Fiscal. La Cámara leyó indudablemente los fundamentos de una y otra opinión, y como quien se decide por un traje que más condice con sus gustos aceptó la opinión fiscal sin agregarle un solo fundamento. Hemos dicho, que la S. C. N. había resuelto esta cuestión en un sentido contrario al del sumario en el caso de Guastavino, el Dr. D. José M., con Denegri, D. Bartolomé, sobre incompetencia de jurisdicción. Esa sentencia de la Corte fué dictada en virtud de una cuestión de competencia formulada entre el Juez Federal de esta Capital y el de igual clase de Corrientes, habiendo ambos declarádose competentes para entender en el juicio. El Dr. Tedin que desempeñaba el cargo de Juez en la Capital dijo, que el único Juez competente para entender en el juicio era él. La obligación que



el bien se encuentre en distinta jurisdicción.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 127, Ser. 4^a.

Juez competente— Véase: *Transacción*, núm. 4—*Demanda*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 2—*Pago por consignación*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 41—*Competencia*, núm. 5.

1. **Juez de feria**—Es competente para entender en los juicios promovidos durante ella, cualquiera que sea la

contrae un individuo cuando firma una escritura de enajenación es la de entregar la cosa después de dicha escrituración, es decir, efectuar la tradición de la cosa vendida. Esa obligación es puramente personal. Así lo tiene resuelto la Cámara en el caso que corre publicado en el tom. 1^o, pág. 316, Ser. 1^a, pues cuando se entabla una demanda de esta naturaleza no es porque se le prive al demandante de su derecho de propiedad en todo ó en parte, ni porque se le turbe en manera alguna en el dominio, posesión, goce, ó tenencia de la cosa; pues esa propiedad, dominio ó tenencia jamás le fué transferida, ni la tuvo, y por el contrario su acción se dirige á obtenerla. Se demanda la entrega del inmueble, de manera que jamás le ha sido entregado ni se le ha hecho tradición, circunstancia que lo inhabilita para adquirir el dominio, según prescripción terminante del art. 2609 del Cód. Civ. Por otra parte, el contrato de compraventa no da sino derecho á acciones personales según resulta de los arts. 377 y 3265 del Cód. Civ. que requieren la tradición para que el adquirente tenga un derecho real sobre la cosa comprada. El art. 100 corrobora la procedencia de lo resuelto en el sumario, cuando dice: que el domicilio de derecho y el domicilio real determinan la competencia de las autoridades públicas para el conocimiento de las obligaciones y el cumplimiento de los derechos. La S. C. N. ha consagrado en otros casos el mismo principio del sumario, de que cuando se ejercitan acciones personales, es Juez competente el del domicilio del demandado—tom. 3^o, pág. 425; tom. 9^o, pág. 415, y tom. 16, pág. 282, Ser. 2^a.

1—Se trataba de un cobro ejecutivo procedente de pensiones alimenticias, iniciado durante la feria, desempeñando el Juzgado de feria un Juez de Com. Se opuso la escepción de incompetencia, que fué rechazada, porque el feriado había sido previamente habilitado y porque el Juez de feria está siempre investido de la jurisdicción civil aunque solo sea titular de Comercio. La oportunidad de declarar si un asunto es de feria ó nó queda siempre librada al criterio judicial.

jurisdicción á que correspondan.—Jur. Civ., tom. 4, página 152, Ser. 4^a.

Juez de la sucesión—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Acciones personales*, núm. 1.

1^a. Juez de turno—Corresponden á éste las demandas de la testamentaria contra terceros.—Jur. Civ., tom. 5, página 249, Ser. 3^a.

Juez de turno—Véase: *Espediente*, núm. 4.

Juez del crimen—Véase: *Albacea*, núm. 4—*Acto ilícito*, núm. 10—*De oficio*, núm. 4.

Juez del domicilio—Véase: *Domicilio*, núm. 12.

Juez exhortado—Véase: *Exhorto*, núm. 1.

Juez federal—Véase: *Impuestos nacionales*, núm. 1.

Juez incompetente—Véase: *Posiciones*, núm. 41.

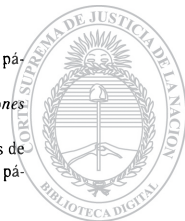
Juez recusado—Véase: *Recusación*, núm. 1.

1^b. Jugador de garito—La calificación de jugador de garito hecha de una persona que, además de comprobar su honorabilidad, justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación en las facultades del empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, página 379, Ser. 3^a.

Juicio—Véase: *Amistad*, núm. 1—*Albacea*, núm. 7—*Alimentos*, núm. 6—*Apoderado*, núm. 4—*Agente Fiscal*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 32—*Costas*, números 21 y 45—*Consignación*, núm. 1—*Contrato de Arrendamiento*, núms. 5 y 6—*Daños y perjuicios*, núm. 42—*Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1—*Escritura*, número 3—*Evicción*, núm. 4—*Embargo preventivo*, núm. 27—*Municipalidad*, núm. 11—*Martillero*, núm. 3—*Nuli-*

1^a—Véase: verb. *Demanda*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.





dad, núm. 3 — *Nulidad del procedimiento*, núm. 1 — *Poseción judicial*, núms. 3 y 6 — *Patria potestad*, núm. 2 — *Prueba preparatoria*, núm. 1 — *Reivindicante*, núm. 1 — *Tutor*, núm. 9.

Juicio civil—Véase: *Calumnia*, núms. 1 y 2 — *Daños y perjuicios*, núm. 17 — *Acto ilícito*, núm. 10 — *Escritura pública*, núm. 32.

1^a. Juicio contencioso-administrativo —No procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre espropiación de terrenos ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3^a.

2. Juicio contencioso-administrativo—Los actos y resoluciones de la Municipalidad ejerciendo derechos de persona jurídica, no pueden fundar un juicio contencioso-administrativo; son de competencia exclusiva de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 336, Ser. 3^a.

Juicio contencioso-administrativo—Véase: *Contrato*, números 1 y 2.

Juicio contra terceros—Véase: *Personería*, núm. 12.

Juicio contradictorio—Véase: *Heredero*, núm. 5 — *Herederos*, núm. 6 — *Locación de servicios*, núm. 2.

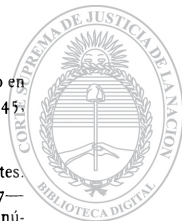
1^b. Juicio criminal—La absolución ó declaración de inculpabilidad hecha en el juicio criminal, no importa enervar el derecho del damnificado por los daños y perjuicios procedentes del cuasi-delito que legisla la acción civil.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3^a.

Juicio criminal—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 12, 13 y 17 — *Acusación calumniosa*, núm. 1.

1^a—Véase: *Demolición*, núm. 1.

2—Véase el número precedente, y verb. *Contencioso-administrativo*, número 1; *Contrato*, núm. 19; *Inst.*, tom. 2^a; verb. *Contencioso-administrativo*, núm. 2; *Contratos*, núm. 1 y *Obligaciones*, núm. 2.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 30.



Juicio de concurso—Véase: *Recusación*, núm. 16.

1ª. Juicio de disenso—Las resoluciones del Juzgado en este juicio, son inapelables.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 145; Ser. 4ª.

Juicio de disenso—Véase: *Disenso*, núm. 1.

Juicio de divorcio—Véase: *Divorcio*, núm. 1 y siguientes.

Juicio de interdicto—Véase: *Interdicto*, núms. 3 y 7—*Interdicto de retener*, núm. 3—*Interdicto de despojo*, número 9.

Juicio de rendición de cuentas—Véase: *Libros de comercio*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núm. 1 y siguientes—*Tutor especial*, núm. 5.

Juicio ejecutivo—Véase: *Acción Ejecutiva*, núm. 3—*Apelables*, núm. 1—*Autos inapelables*, núm. 1—*Término extraordinario*, núms. 2 y 4—*Excepción de falsedad*, número 1—*Excepción de litispendencia*, núms. 2, 3 y 8—*Nulidad*, núm. 5—*Nulidad de la ejecución*, núms. 1 y 3—*Alquileres*, núm. 2—*Costas*, núm. 42—*Nulidad de la ejecución*, núm. 2—*Afirmados*, núm. 2—*Prescripción como excepción*, núm. 2—*Prescripción de inhabilidad de título*, núm. 12.

Juicio nulo—Véase: *Nulidad de juicio testamentario*, núms. 1 y 2—*Nulidad de la ejecución*, núm. 1 siguientes—*Testamentaria*, núm. 6—*Notificación*, núm. 9—*Nulidad del procedimiento*, núm. 4.

1. Juicio ordinario—Si al dejarse sin efecto la venta ju-

1ª—Véase: *Inapelable*, núm. 6.

1—En una venta de bienes testamentarios se dejó sin efecto la compra quedando á salvo los derechos de la sucesión para reclamar del comprador los daños y perjuicios que hubiese ocasionado. Esta acción solo puede sustanciarse por la competente vía ordinaria, porque el art. 519 del Cód. de Proc. es una disposición especial para el juicio ejecutivo, la que suele aplicarse por analogía al juicio sucesorio: pero como los



dicial no se condena al comprador al pago de la diferencia, solo puede hacerse efectivo el pago de ésta en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 387, Ser. 4^a.

2. Juicio ordinario—Es tal el juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4^a.

3. Juicio ordinario—La tercera de mejor derecho procede aun deducida contra un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 32, Ser. 4^a.

Juicio ordinario—Véase: *Poseedor clandestino*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 5—*Excepción de litispendencia*, núms. 3 y 8—*Afirmados*, núm. 2—*Alimentos provisorios*, núm. 3—*Contrato*, núm. 20—*Embargo*, núm. 11—*Escritura pública*, núm. 23.

Juicio petitorio—Véase: *Sentencia*, núm. 10.

Juicio previo—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 15.

1. Juicio reivindicatorio—La posesión ordenada en el juicio reivindicatorio, debe darse por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 132, Ser. 3^a.

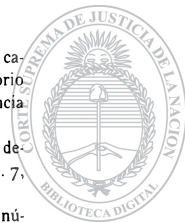
Juicio reivindicatorio—Véase: *Costas*, núm. 36.

créditos solo revisten aparejada ejecución por disposición expresa de la ley y nunca por razones de semejanza ó analogía, es claro que tampoco procede otra vía, en el caso del sumario, sino la ordinaria.

2—El crédito reclamado no tenía término para el vencimiento de la obligación. Si no tiene término una obligación y si tampoco tiene una tramitación especial marcada por la ley, debe exigirse por la vía ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el art. 66 del Cód. de Procedimientos.

3—Así lo enseñan todos los prácticos.

1—Se trata de la entrega de un inmueble ordenada en virtud de sentencia dictada en un juicio reivindicatorio. La entrega es una consecuencia de la sentencia; es su ejecución y es sabido que es competente para entender es la ejecución de una sentencia el Juez que la dictó. El art. 2794 también resuelve la cuestión en el sentido del sumario.



1. Juicio sucesorio—Los Tribunales de la República carecen de jurisdicción para entender en el juicio sucesorio de una persona fallecida en el extranjero con residencia fija.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 337, Ser. 3ª.

2. Juicio sucesorio—El auto que no hace lugar á la declaratoria de herederos, es apelable.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 131, Ser. 3ª.

Juicio sucesorio—Véase: *Derecho á la herencia*, número 1.—*Posesión judicial*, núm. 1.—*Declaratoria de herederos*, núm. 5.—*Recusación*, núms. 12 y 16.—*Jurisdicción testamentaria*, núm. 1.—*Bienes de la sucesión*, núm. 4.

1—El caso es el siguiente: un heredero se presentó esponiendo que una persona había fallecido en esta Capital sin dejar descendientes, correspondiendo la herencia al padre del causante, pues la madre había fallecido; que posteriormente falleció el padre en Italia donde tenía su domicilio fijo, instituyendo como herederos á sus hijos. Con estos antecedentes se presentó iniciando las dos testamentarias. Es evidente que en el presente caso se confunden dos juicios sucesorios completamente distintos y que deben proseguirse ante distinta jurisdicción. Estando domiciliado uno de los causantes, al tiempo de su fallecimiento, en esta Capital, correspondía á estos Tribunales el conocimiento del juicio sucesorio—art. 3284 del Cód. Civ.—los que deben declarar como único y universal heredero á su padre—art. 3567.—El conocimiento del juicio sucesorio del fallecido fuera de la República corresponde á los jueces del último domicilio del causante, debiendo deferirse allí la herencia con arreglo á las leyes locales, siendo aquellos jueces los únicos que pueden declarar quiénes son los herederos del causante—art. 3283.—Lo único que puede ser permitido en el caso presente es entregar los bienes aquí existentes, de la sucesión del padre, al representante de los herederos instituidos en el testamento, desde que ese acto se presente como otorgado con todas las formalidades legales y munido de todos los recaudos exigidos.

2—Este sumario ha sido omitido en los fallos. Es apelable porque trae gravamen irreparable, puesto que los mismos recaudos invocados para pedir la declaratoria no pueden solicitarse después; sería necesario



1^a. Juicio sumario—El consentimiento de la sentencia recaída en el juicio sumario sobre alimentos provisorios, no enerva el derecho de pedir su aumento ó disminución en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 289, Ser. 3^a.

Juicio sumario—Véase: *Alimentos*, núm. 10—*Alimentos provisorios*, núm. 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 14—*Diligencias de prueba*, núm. 9—*Interdicto*, núms. 6 y 7—*Cosa juzgada*, núm. 6.

Juicio terminado—Véase: *Abogado*, núm. 1.

1^b. Juicio verbal—El contador, aun después de aprobada la cuenta particionaria, no puede negarse á concurrir al juicio verbal decretado para subsanar los errores que ella contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 191, Ser. 3^a.

2. Juicio verbal—En el acto del juicio verbal del interdicto las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan á su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3^a.

ampliario, lo que puede no ser necesario y sin embargo el Juez exijirlo sin derecho.

1^a—El juicio ordinario puede fundarse en haber mejorado de fortuna el alimentario; en tener el alimentado mayores necesidades de las que tenía cuando se fijó la cuota alimenticia, ó en la circunstancia de no haber sido posible en el juicio sumario demostrar con precisión el monto del caudal del que debe prestarlos debido á la brevedad del juicio y á la premura de las necesidades á satisfacer. La fijación provisoria de alimentos no hace cosa juzgada ni para el que los presta ni para el que los recibe. Es por esto que el art. 602 del Cód. de Proc. solo exige la justificación de dos extremos para que se decrete la pensión alimenticia, á saber: que se justifique el título para percibirlos y caudal aproximado del alimentario. No es de extrañarse que la persona que debe recibir los alimentos se conforme con la suma que se fija en el juicio sumario, pues en ese momento puede carecer de los medios necesarios para comprobar el monto del caudal, y carecer asimismo del tiempo requerido para establecer esa prueba.

1^b—Véase: verb. *Contador*, núm. 1.

2.—Véase: verb. *Documentos públicos*, núm. 2.



Juicio verbal—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 4—*Interdicto*, núm. 2.

Juicio voluntario—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

1. Juicios—El conocimiento y resolución de los juicios sobre aplicación de leyes dictadas por el Congreso Nacional que se refiera única y exclusivamente al territorio de la Capital Federal, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales de la misma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4^a.

Juicios—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 2—*Competencia*, núm. 3—*Inhibitoria*, núm. 1.

1^a. Juicios voluntarios—En juicios voluntarios, el consentimiento de un auto no enerva el derecho para cambiar la forma del pedido denegado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 131, Ser. 3^a.

Junta—Véase: *Nombramiento*, núm. 1.

Jurado—Véase: *Consejo de Higiene*, núm. 2.

Juramento—Véase: *Abogados*, núm. 2—*Documentos*, núm. 5.

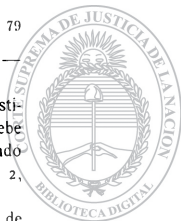
1^b. Juramento estimatorio—Justificada la existencia de daños y perjuicios, pero no el *quantum*, corresponde el juramento estimatorio dentro de la cantidad que fije el juzgado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 4^a.

2. Juramento estimatorio—Declarada procedente la acción de daños y perjuicios, pero no justificada la suma

1^a—Se solicitó primero la admisión de una información para acreditar la filiación legítima de una heredera, y después sin producirse la información ofrecida se pidió la declaratoria de herederos por considerar el interesado que en autos existían suficientes constancias para hacerse dicha declaratoria. Es evidente que importando esto último un nuevo pedido, el auto recaído en el anterior, no podía enervarlo en manera alguna y el Juez debía pronunciarse sobre el particular.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 66.

2—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 69.



perdida, es improcedente el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 116, Ser. 4^a.

3. **Juramento estimatorio**—Para que el juramento estimatorio de los daños y perjuicios sean procedentes, debe justificarse al menos que ellos existieron, aun cuando no pueda comprobarse el monto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 158, Ser. 4^a.

4. **Juramento estimatorio**—Reconocida la existencia de daños y perjuicios y el derecho á su indemnización, procede el juramento estimatorio, y no la fijación por árbitros, dentro de la cantidad que fije el juzgado, si el damnificado no ha producido prueba de los que se le han causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

5. **Juramento estimatorio**—Probada la existencia de los daños pero no el monto de los perjuicios, procede el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

6. **Juramento estimatorio**—Reconocido el derecho á una indemnización por daños y perjuicios, como también la existencia de estos, pero no justificado su monto, corresponde el juramento estimatorio dentro de la suma que fije el juez en vista de los antecedentes que constan en autos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 172, Ser. 4^a.

7. **Juramento estimatorio**—La suma dentro de la cual el damnificado por un acto ilícito ó cuasi-delito debe prestar el juramento estimatorio, debe ser fijado según el prudente criterio del juez, teniendo en cuenta las constan-

3.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 72.

4.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 74.

5.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 64.

6.—Esta cuestión ha sido resuelta contradictoriamente por la Cámara; pero la jurisprudencia tiende á resolver la cuestión en el sentido del sumario. Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 72.

7.—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 9.



cias de autos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4^a.

8. **Juramento estimatorio**—Reconocido el derecho a cobrar daños y perjuicios, y su existencia, pero no justificado su monto, procede su fijación por juramento estimatorio dentro de la suma que fije el juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4^a.

9. **Juramento estimatorio**—Para fijar la suma dentro la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio, los jueces deben tener presente, además de la pérdida justificada, la ganancia dejada de percibir.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 228, Ser. 4^a.

Juramento estimatorio—Véase: *Daños y perjuicios*, números 3 y 83—*Costas*, núm. 45—*Rendición de cuentas*, núm. 8.

1. **Jurisdicción**—Las cuestiones sobre locación de nichos para el depósito de restos humanos, corresponde á la jurisdicción competente por razón del precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 4^a.

2. **Jurisdicción**—El demandante por acción personal, puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado. —Jur. Civ., tom. 7, página 117, Ser. 3^a.

3. **Jurisdicción**—Carece el juzgado de competencia sobre el demandado, por acción personal, que no reside en su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 128, Ser. 3^a.

4. **Jurisdicción**—Si resulta que el causante falleció en

8—Véase la nota precedente y verb. *Daños y perjuicios*, núm. 112.

9—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 35.

1—El monto de la demanda determina la jurisdicción que debe intervenir en la prosecución del juicio.

2—Véase: *Acción personal*, núm. 1.

3—Véase: *Acción personal*, núm. 2.

4—Véase: *Causante*, núm. 2.



jurisdicción de la provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3ª.

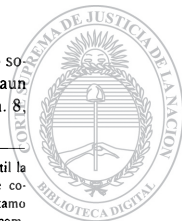
5. **Jurisdicción**—Aun cuando las partes la prorroguen los Tribunales no pueden entender en la testamentaria de los domiciliados fuera de la Capital.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Jurisdicción**—Justificada la residencia del demandante fuera de la jurisdicción del juzgado, procede la excepción de arraigo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Ser. 4ª.

Jurisdicción—Véase: *Arraigo*, núm. 2—*Fiadores*, número 1—*Juicio sucesorio*, núm. 1—*Espediente*, núms. 2 y 6—*Honorarios*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 10—*Excepción de arraigo*, núms. 1, 2 y 6—*Excepción de incompetencia*, núm. 1 y siguientes—*Posesión judicial*, núm. 6—*Sentencia*, núm. 4—*Recusación*, núm. 18—*Sociedad*, núm. 3—*Poderes locales*, núm. 1—*Posición es*, núm. 19—*Juez de feria*, núm. 1—*Competencia*, núm. 4—*Testigos*, núm. 25—*Contrato*, núm. 19—*Juicios*, número 1—*Inscripción*, núm. 1—*Juez competente*, núm. 2.

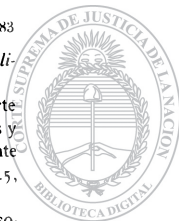
5—El juez competente para conocer en el juicio de testamentaria es el del último domicilio del difunto, según lo dispone el art. 634 del Cód. de Proc. La jurisdicción conferida a los Tribunales ordinarios de la Capital es improrrogable como lo dispone la primera parte del art. 1º de dicho Código, y si bien la segunda parte establece que la jurisdicción territorial puede ser prorrogada de conformidad de partes, esto debe entenderse para los jueces que ejercen igual jurisdicción, aunque en distinto territorio, como lo son los jueces de la provincia de Buenos Aires en los diferentes departamentos judiciales en que la misma está dividida. Pero los juzgados de la Capital Federal ejercen jurisdicción nacional y los de la Provincia ejercen jurisdicción provincial, de manera que la prórroga de jurisdicción es inadmisibles porque no solo se trata de la territorial, sino también de diferentes jurisdicciones.

6—Véase: *Excepción de arraigo*, núm. 7.



1. Jurisdicción civil—La ejecución de un préstamo sobre un inmueble corresponde a la jurisdicción civil aun cuando sea hecho por un comerciante.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 40, Ser. 4ª.

1—El inc. 1º del art. 8º del Cód. de Com. declara acto mercantil la adquisición de un derecho sobre un mueble y no sobre un inmueble como en el caso del sumario. La obligación que nace de un préstamo hipotecario es puramente civil, pues la operación no se encuentra comprendida en el inc. 4º del artículo citado. Además para que el préstamo esté sujeto a las leyes mercantiles, no basta tan solo que la cosa prestada pueda ser considerada género mercantil ó destinada á uso comercial, sino que se requiere que sea entre comerciantes ó por lo menos el deudor tenga esa calidad—art. 558, Cód. de Com.—y el ejecutado no es comerciante. Estas fueron las consideraciones aducidas por el Juez de 1ª Inst. en su resolución, la que fué confirmada por sus fundamentos. Lo resuelto en el sumario sienta la buena doctrina cuando el deudor no es comerciante; pero cuando está investido de ese carácter, el préstamo debe ser considerado comercial, porque la hipoteca con que se garantiza un préstamo no es sino un accesorio de éste, es decir una garantía de él. Como garantía sigue la naturaleza de lo principal. Así como cuando en un préstamo hecho á un comerciante, de una suma de dinero, se garante el cumplimiento de la obligación con la garantía personal de una persona no comerciante, y esta circunstancia no cambia la naturaleza de préstamo, es decir, no la convierte en civil, del propio modo la garantía hipotecaria no desnaturaliza la obligación principal. Por consiguiente, la circunstancia de que en el caso del sumario haya estado garantido el préstamo con una hipoteca, no implica que la obligación sea civil. Los primeros fundamentos de la resolución son inconsistentes. La razón legal que hace verdadero peso en el caso es la que se refiere al art. 558 del Cód. de Com. Este artículo requiere para establecer la comercialidad del préstamo, la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1ª Que la cosa prestada pueda ser considerada género comercial, ó destinada á uso comercial; 2ª que tenga lugar entre comerciantes ó por lo menos que el deudor tenga esa calidad. Esta disposición es una escepción al art. 7º que solo requiere el carácter de comerciante de una sola de las partes para que surta el fuero comercial. Si en el préstamo hipotecario concurren los requisitos del art. 558, la operación será mercantil, no obstante de estar la obligación afianzada con un inmueble.



Jurisdicción civil—Véase: *Interdicto*, núm. 10—*Obligaciones comerciales*, núm. 1.

1ª. Jurisdicción comercial—La demanda por una parte de comisión de venta de un inmueble entre corredores y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 245, Ser. 3ª.

2ª. Jurisdicción comercial—El conocimiento del juicio sobre actos comerciales de una sociedad anónima, corresponde a la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 19, Ser. 4ª.

Jurisdicción comercial—Véase: *Daños y perjuicios*, número 59—*Quiebra*, núm. 1.

Jurisdicción criminal—Véase: *Acto ilícito*, núm. 8.

Jurisdicción disciplinaria—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1ª. Jurisdicción federal—Demandada una sociedad colectiva, los socios extranjeros no pueden ampararse de la jurisdicción federal si existe un socio argentino.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 226, Ser. 3ª.

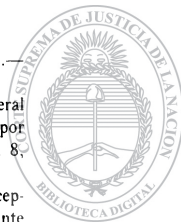
2ª. Jurisdicción federal—Corresponde a ésta el conocimiento de un litigio entre vecinos de distintas provincias,

1ª—Véase: verb. *Comisión*, núm. 2.

2ª—Se trataba de una acción de daños y perjuicios procedentes de contratos que versaban sobre actos de comercio, celebrados por una sociedad anónima que era la demandada. Su conocimiento corresponde a la jurisdicción mercantil porque la persona demandada cuyo fuero debe seguir el actor es una sociedad anónima y por lo tanto comercial—artículo 8º, inc. 6º del Cód. de Com.—Además el art. 7º del mismo Código establece que si un acto es comercial para una de las partes, todos los contrayentes quedan sujetos a la jurisdicción mercantil.

1ª—Art. 10 de la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales.

2ª—En el caso presente concurría la doble circunstancia de que los litigantes eran vecinos de distintas provincias, y uno extranjero y otro argentino: el demandado era extranjero. Correspondía el conocimiento de



uno de los cuales es extranjero y el otro argentino.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 347, Ser. 4^a.

3. **Jurisdicción federal**—Siendo la jurisdicción federal potestativa del extranjero, no puede ser invocada por el ciudadano argentino demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4^a.

1^a. **Jurisdicción incompetente**—No puede fundar la excepción de incompetencia el hecho de residir el demandante fuera de la jurisdicción del Juez competente por ser el del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 369, Ser. 4^a.

1^b. **Jurisdicción ordinaria**—Cualquiera que sea la autoridad que haya ordenado la obra, la jurisdicción ordinaria es siempre competente para entender en el interdicto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 96, Ser. 3^a.

Jurisdicción ordinaria—Véase *Contrato*, núm. 2.

1^c. **Jurisdicción por cantidad**—Se fija por la manifestación de la parte y no por las constancias de la escritura de compraventa.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 60, Ser. 3^a.

2. **Jurisdicción por cantidad**—El juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, corresponde á la

la causa al fuero federal, de acuerdo con el art. 2º, inc. 2º de la ley de 14 de Set. de 1863.

3—Véase: verb. *Excepción de incompetencia*, núm. 3.

1^a—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 4º, inc. 3º del Cód. de Procedimientos.

1^b—Sin embargo, cuando la acción deducida trae su origen de actos administrativos del Gobierno, la jurisdicción competente es la federal: no sucede lo propio cuando la causa del pleito tiene un origen particular independiente de sus actos.

1^c—El art. 14 de la Ley Org. de los Trib. dice que el actor debe expresar bajo juramento el valor que asigna á la cosa demandada, á fin de establecer la competencia del Juez.

2—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 6.



jurisdicción competente para entender en la suma que resulte de todas las mensualidades.—Jur. Civ., tom. 5, página 186, Ser. 3ª.

3. **Jurisdicción por cantidad**—Para que los restos que fueron materia de una locación de un nicho, formen jurisdicción, es necesario que por su pérdida ó extravío se exija una indemnización.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 4ª.

4. **Jurisdicción por cantidad**—Cualquiera que sea el monto de la deuda, la jurisdicción debe fijarse por la suma exigible al entablar la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 62, Ser. 4ª.

3—El propietario de una bóveda alquiló á otra persona el derecho de depositar dos féretros en ella, debiendo la locación durar cinco años á razón de 10 y 13 pesos respectivamente cada año. Este convenio importaba de parte del locador la obligación de tener los féretros durante ese tiempo en su bóveda y para el locatario la de pagar el precio de la locación, y terminada ésta sacarlos del panteón. El locatario sostenía que antes del vencimiento exigió del locador que le hiciera entrega de los cajones á fin de trasladarlos á una bóveda que había adquirido, y que con evasivas, no lo había hecho, con cuyo motivo se cercioró de que los había sacado y arrojádoslos al osario. El locador negaba el hecho y aseguraba que estaban en la bóveda. El locatario no insistió respecto de la existencia de los restos en la bóveda, pero continuó el juicio por divergencias sobre el carácter de la acción instaurada, por discrepancia sobre la naturaleza del acto jurídico y por competencia del Juzgado. Se declaró la incompetencia del Juzgado de 1ª Inst. porque el arrendamiento no alcanzaba á la suma que fija la ley como de su competencia. Los objetos destinados á ocupar el local arrendado no pueden ejercer influencia sobre la naturaleza del juicio desde que no se entabla una acción fundada en su positivo extravío y dirigida á obtener una indemnización de daños y perjuicios. Bien pudo ser éste el objeto oculto de la demanda, pero en ella no se hablaba de indemnización ni se fijaba la suma á que podía ascender. Por consiguiente no podía concluirse sino que se trataba por entonces del cumplimiento de un contrato de locación que se decía incumplido, y cuyo monto no alcanzaba á la competencia del Juzgado.

Jurisdicción potestativa—Véase: *Costas*, núm. 18.

Jurisdicción territorial—Véase: *Escepción de litispendencia*, núm. 5.

1. Jurisdicción testamentaria—Corresponde á los Tribunales de la Provincia el conocimiento en la testamentaria si el causante falleció en aquella jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 75, Ser. 3^a.

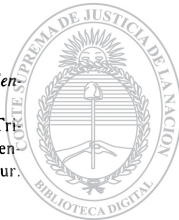
Justa causa—Véase: *Posiciones*, núms. 14, 17 y 26.

Justificativos—Véase: *Escepción de defecto legal*, número 7.

Justo título—Véase: *Prescripción de diez años*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 12.

Juzgado—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2—*Transacción*, núm. 5—*Acción personal*, núm. 2—*Correcciones disciplinarias*, núm. 1—*Escrito*, núm. 9—*De oficio*, número 5—*Escepción de arraigo*, núm. 7.

1 — Por las mismas razones que se esponen en la nota al verb. *Juicio sucesorio*, núm. 1.





1^a. **Laudo arbitral**—La escepción de cosa juzgada fundada en un laudo arbitral consentido y cuya ejecución se sigue judicialmente, procede siempre que la acción tenga por base la misma cosa que dió origen al arbitraje y entre las mismas personas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 318, Ser. 4^a.

2. **Laudo arbitral**—La escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral; siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la escepción de falsedad de la ejecutoria es procedente, aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo—Jur. Civ., tom 10, página 160, Ser. 4^a.

Lectura—Véase: *Testamento*, núm. 3.

1^b. **Legados** — La inconstitucionalidad de la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 285, Ser 3^a.

1^a—Véase: *Escepción de cosa juzgada*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1^b—Véase: *Herencias transversales*, núm. 2.



1. **Legado**—La existencia de un legado prohibido por la ley, no anula el testamento.—Jur. Civ., tom. 3, página 218, Ser. 3^a.

2. **Legado**—La inconstitucionalidad de la ley que grava los legados y herencias transversales, con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3^a.

1—Otorgado un testamento con todas las formalidades legales, se dijo de nulidad porque contenía en una de sus cláusulas un legado á favor del cuñado del Escribano. Se declaró la nulidad de la cláusula, pero se resolvió por la validez del testamento. La disposición que rige actualmente el caso es la del art. 3664 del Cód. Civ. que dice: «El escribano y testigos en un testamento por acto público, sus esposas y parientes ó afines, dentro del cuarto grado, no podrán aprovecharse de lo que en él se disponga á su favor». Si el precepto no fuera suficientemente explicito en el sentido de que es el legado y no el testamento mismo es el que halla viciado de nulidad, cualquiera duda desapa- recería en presencia de la nota ilustrativa del artículo. El codificador, después de recordar que en el derecho francés no solo no tienen efecto las disposiciones del testador en provecho del Escribano, de los testigos ni de los parientes dentro del cuarto grado, sino que es nulo todo el testamento, agrega lo siguiente: «Nosotros decimos con Goyena, que un testamento es una cosa muy grave para declararlo absolutamente nulo por solo la sospecha de un interés personal que puede recaer en algunos de las mandas sin afectar en nada, por lo demás, la veracidad ó idoneidad del Escribano ó testigos. Coin Deliste, citado también por el Dr. Velez en el mismo pasaje, se espresa en estos términos: «Si el legado hecho», dice, «al notario es nulo como contrario á las buenas costumbres, y al principio que *nemo potest esse actor in re sua* es á consecuencia de la naturaleza de las cosas; hay pues, vicio de la disposición, vicio de fondo, pero parcial.» No puede haber vicio de forma cuando ninguna ley sobre la forma ha establecido ni el principio ni la nulidad. Es ciertamente el caso de la regla *utile per inutile*. Si nada indica que el notario haya abusado de su influencia para violentar al moribundo en el resto del testamento; si el mismo notario no ha escrito la disposición sino por que está obligado á escribir todas las disposiciones que le son dictadas, ¿por qué ha de destruirse el resto del testamento?

2—Véase: *Herencias transversales*, núms. 1 y siguientes.



3. **Legado**—La prohibición de entregar un legado ó parte de él, subsiste mientras judicialmente no quede sin efecto.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 18, Ser. 4^a.

4. **Legado**—Siempre que existan bienes suficientes para cubrir las deudas, debe hacerse entrega de los legados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 382, Ser. 4^a.

5. **Legado**—El reparto que el testador haga del remanente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia si entre los favorecidos existen estraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3^a.

Legado—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.

1^a. **Legatario**—No puede tener lugar la partición privada entre herederos mayores si afecta derechos de los legatarios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 4^a.

2. **Legatario**—Las alhajas y objetos de poco valor sobre los que el causante no haya determinado espresamente, corresponden al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4^a.

3^a. **Legatario**—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó rentas de los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4^a.

4^a. **Legatario**—El de parte alicuota, puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de

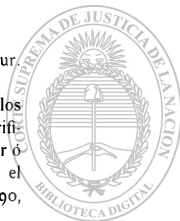
5—Véase: verb. *Herencia*, núm. 4.

1^a—El legatario era un menor, y es sabido que las particiones en que hayan menores, deben ser hechas judicialmente—art. 626, inc. 1^o del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Alhajas*, núm. 1.

3^a—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

4^a—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 4.



los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

5. **Legatario**—Carece de valor legal, con respecto á los legatarios, la tasación de los bienes testamentarios verificada sin su intervención, y en consecuencia, el mayor ó menor valor fijado no enerva su derecho á exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

Legatarios—Véase: *Colación*, núm. 1.—*Cuenta particionaria*, núm. 2.

Legislación anterior—Véase: *Hijo natural*, núm. 2.

1^a. **Legitimación**—Del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, no requiere forma espresa, se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3^a.

2. **Legitimación**—Del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, se produce cualquiera que sea la forma auténtica en que éstos reconozcan su filiación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 382, Ser. 4^a.

1^b. **Legitimidad**—Los jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos después del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 3^a.

1. **Lesión enorme**—O enormísima, no es causa de nulidad de un contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Serie. 3^a.

Letra de cambio—Véase: *Excepción de falta de persona*, núm. 12.

Letrado—Véase: *Desacato*, núm. 2.

Ley—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Bienes testamentarios*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Hijo natural*, núm. 5.

2—Véase: *Hijo natural*, núm. 9.

1^b—Véase: verb. *De oficio*, núm. 3.



Ley civil—Véase: *Actos ilícitos*, núm. 1.

Ley de monedas—Véase: *Moneda especial*, núm. 2.

Ley especial—Véase: *Acciones civiles*, núm. 1.

Ley espresa—Véase: *Servicios*, núm. 10.

Ley orgánica—Véase: *Municipalidad*, núm. 7.

Leyes argentinas—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.

Leyes comerciales—Véase: *Obligaciones comerciales*, número 1.

Leyes del Congreso—Véase: *Juicios*, núm. 1—*Competencia*, núm. 3.

1^a. *Leyes posteriores*—El estado civil de las personas no puede conceptuarse un derecho en expectativa, y las leyes posteriores al nacimiento no pueden modificar el derecho adquirido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

Libro—Véase: *Notificación*, núm. 6.

1^b. *Libros de comercio*—La prueba que resulta de ellos solo es pertinente entre comerciantes y por acto de su comercio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 155, Ser. 3^a.

2. *Libros de comercio*—Los asientos de los libros de

1^a—Véase: verb. *Derecho en expectativa*, núm. 1.

1^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida—art. 76 del Cód. de Com. ant., igual al 63 del vigente.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Libros de comercio*, núm. 2.

2—El actor manifestó en su escrito de demanda que había autorizado al demandado para solicitar en compra del Gobierno Nacional unas tierras, y que despachada la petición favorable por los poderes públicos, el demandado abonó su importe con fondos del actor que aquél tenía en su poder. Abonado el precio, el actor otorgó un poder á éste para aceptar y firmar la escritura de adquisición lo que no efectuó, viéndose obligado á servirse de otra persona. Dijo además, que estendida la escritura no pudo obtener su testimonio sin devolver los recibos otorgados por la oficina de crédito público en cambio del precio: que pedidos al demandado, se había resistido á la entrega, y lo demandaba para que verificara esa entrega. El demandado negó los hechos, diciendo que había sido entendido entre ambos, que la compra se hi-

comercio del obligado á probar, no tienen el carácter de principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3ª.

3. Libros de comercio.—El mandante tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 30, Ser. 4ª.

ciera en sociedad á cuyo efecto había cargado en la cuenta del actor la mitad del precio de adquisición, aunque por un error del tenedor de libros se había cargado todo á la cuenta del actor. No se exhibió en autos la escritura pública que debiera constatar el hecho del condominio, y el hecho de la sociedad. El demandado invocó como prueba sus libros de comercio, pues aunque el pago se había imputado á la cuenta del actor, constaba allí que una parte del precio había sido pagado por el demandado. No podía invocarse el art. 1192 del Cód. Civ. para suplir la falta de instrumento público en que debió hacerse constar la sociedad alegada—art. 1184, inc. 3º, Cód. Civ.—porque no se presentó escritura privada, ni podía estimarse como principio de prueba por escrito, la que resultaba de los libros del demandado, pues, como dice la ley, es principio de prueba por escrito todo documento público ó privado que emane del *adversario* ó de su causante ó de parte interesada en el asunto ó que tendría interés si viviera, y que haga verosímil el hecho litigioso. Los libros no pueden ser principio de prueba por escrito, por que ellos constituyen una prueba escepcional y privilegiada, cuyo alcance probatorio se limita al que estrictamente le asigna la ley mercantil. Ellos sirven para constatar operaciones comerciales, llevadas á cabo entre comerciantes y que se relacionan con su giro comercial, siendo evidente que la operación que nos ocupa no tiene este carácter. Además, los libros que se aducían como principio de prueba por escrito pertenecían al mismo que quería fundar su derecho en ellos.

3.—Se trataba de un juicio de rendición de cuentas. El demandado se opuso á su exhibición, la Cámara ordenó se llevara á cabo fundándose en que el mandante puede siempre exigir que el mandatario exhiba sus libros para comprobar el hecho de la administración del cual resultaría la obligación de rendir cuentas. Que no podía el Juzgado apreciar la prueba sinó al dictar sentencia definitiva—art. 108, Cód. de Procedimientos.—La exhibición debe hacerse en el lugar donde se encuentren los libros.





4^a. Libros de comercio—Procede el embargo preventivo si de los libros de comercio llevados en forma consta la deuda que se reclama.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 138 y 235, Ser. 4^a.

Libros de comercio—Véase: *Compulsa de libros*, número 2.

Licitación—Véase: *Bienes municipales*, núm. 1.

Límites determinados—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Lindero—Véase: *Reivindicación*, núm. 18—*Dimensión*, núm. 1.

Línea de edificación—Véase: *Construcciones*, núm. 1.

Línea imaginaria—Véase: *Pared divisoria*, núm. 1.

1^a. Liquidación—De los intereses, al practicar la liquidación deben cargarse desde la fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4^a.

2. Liquidación—Las observaciones á una liquidación, deben recibirse á prueba siempre que se funden en hechos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 47, Ser. 4^a.

3. Liquidación—La escepción de inhabilidad de título puesta á una liquidación no aprobada es procedente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 381, Ser. 4^a.

4^b. Liquidación—De honorarios; para que sea ejecutiva debe haberse hecho saber por tres días y encontrarse consentida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 210, Ser. 4^a.

5. Liquidación—Es nula la sentencia aprobatoria de

4^a—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 43.

1^a—Véase: *Intereses*, núm. 5.

2—Se trataba de la ejecución de una sentencia, en cuyo caso la apertura de la causa ó incidente á prueba está prevista y ordenada por el art. 545 del Cód. de Proc.

3—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 9.

4^b—Art. 59 del Apéndice al Cód. de Proc.

5—Art. 545 del Cód. de Proc.



una liquidación si el auto en que se niega la ampliación del término para observarla no se encuentra ejecutoriada—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 4^a.

6. Liquidación—La liquidación como consecuencia de una sentencia, debe ser practicada por contador público—Jur. Civ., tom. 10, pág. 115, Ser. 4^a.

Liquidación—Véase: *Sociedad*, núm. 5—*Intereses*, números 3, 4 y 5—*Acreedores del viudo*, núm. 1.

Liquidación testamentaria—Véase: *Poder especial*, número 1.

1^a. Lista—La prueba testimonial debe pedirse en tiempo habil para la fijación de la lista en secretaría—Jur. Civ., tom. 9, pág. 32, Ser. 4^a.

Lista—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1.

Litigante—Véase: *Correcciones disciplinarias*, núm. 1.

Litiscontestación—Véase: *Cuestiones*, núm. 1.

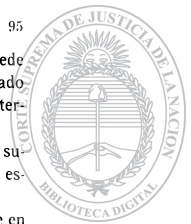
Litigio—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11—*Domicilio*, número 1—*Sentencia nula*, núm. 1—*Embargo*, núm. 17—*Excepción de cosa juzgada*, núm. 1—*Honorarios*, número 12—*Mandato especial*, núm. 1—*Jurisdicción federal*, núm. 2—*De oficio*, núms. 1, 2 y 3—*Posiciones*, número 29—*Personería*, núm. 3—*Escrito*, núm. 9—*Poseción*, núm. 17—*Convenio*, núm. 1.

1^b. Litisexpensas—Siendo la suma fijada para litises-

6—Véase: verb. *Contador*, núm. 2.

1^a—La lista de testigos debe estar en secretaría durante tres días, de manera que para poderse recibir las declaraciones de testigos deben éstos ser presentados por lo menos cuatro días antes de vencerse el término probatorio. El art. 118 exige que la prueba se pida, se ordene y se produzca dentro del término. Si la lista se presenta con menor intervalo de cuatro días, no podría producirse dentro del término y por consiguiente estaría fuera de las condiciones establecidas en el art. 118 citado.

1^b—La sentencia condenaba al esposo á abonar la suma de 535 pe-



pensas destinada á gastos generales, el esposo no puede resistir su pago, escepcionándose con haber efectuado el de los honorarios y costas de un espediente determinado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 64, Ser. 3^a.

2. **Litisespensas**—Para la fijación de la cantidad á suplir por litisespensas, debe justificarse el capital del esposo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

3. **Litisespensas**—El Ministerio Fiscal solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero nó en los incidentes sobre alimentos y litisespensas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3^a.

1. **Litispendencia**—Entre el espediente seguido contra un heredero, por haberse apoderado de los bienes que forman la herencia, invocando su carácter de único y universal, y la testamentaria de los causantes, no existen

...s, cuya suma se descomponia así: Por vía de alimentos anticipados 120, para litisespensas 300, por honorarios de abogado y procurador 115. En este juicio el ejecutado opuso la escepción de pago, fundándose en que él había abonado los honorarios y las costas causadas en el juicio de divorcio. Se comprobó que el esposo había abonado las costas del juicio de divorcio, pero esta justificación no demuestra la procedencia de la escepción desde que esta sentencia al fijar la suma de 300 pesos para litisespensas, no menciona para nada el juicio de divorcio, por lo que es lógico suponer que el Juez destinó esa suma para los gastos más indispensables de los varios espedientes—pues no fueron solo dos—los que se relacionaban en la demanda. Por otra parte, dada la exigüidad de la suma fijada para espensas, no pudo ser la intención del Juez que con ella se abonaran todos los honorarios y costas causadas en todos los espedientes. Se comprobó además por el ejecutante, que solo en el juicio de divorcio, se habían abonado por costas más de 600 pesos.

2—Véase: verb. *Cantidad*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 6.

1—Porque no concurren los requisitos exigidos por la ley para que haya litispendencia, entre los cuales se requiere que se trate de las mismas acciones y entre las mismas personas. En el caso del sumario, uno de los espedientes versaba sobre la acción deducida contra uno de

los requisitos que la ley exige para que proceda la litispendencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 193, Ser. 3ª.

2ª. **Litispendencia**—La escepción de litispendencia opuesta en juicio ejecutivo, es improcedente si se funda en un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 188, Ser. 4ª.

Litispendencia.—Véase: *Acción*, núm. 2.

1. **Locación**—Los preliminares necesarios para la locación y aun la entrega de las llaves del predio, no bastan para dar por establecida la existencia del contrato, si no se justifica su terminación de conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3ª.

2ª. **Locación**—La estipulación en el contrato de locación de que el locatario no podrá hacer innovaciones en el edificio, importa que tampoco puede hacerle agregaciones que puedan afectar su solidez y seguridad, aun cuando resulte intacto el existente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 168, Ser. 3ª.

3. **Locación**—La fijación de un término para la locación, mayor que el permitido por la ley, cualquiera que sea la forma que se pretenda adoptar, debe juzgarse prohibida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 92, Ser. 4ª.

4. **Locación**—Justificada la mora en el pago del alqui-

los herederos, mientras que en el otro se trataba de obtener la declaratoria de herederos á favor de todos ellos. No se trata por consiguiente de una acción deducida entre las mismas personas.

2ª—Véase: verb. *Escepción de litispendencia*, núm. 8.

1.—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

2ª—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 13.

4.—El contrato decía que si no se efectuaba el pago de dos periodos quedaría rescindido el contrato, lo que por otra parte es de precepto legal—art. 1579 del Cód. Civ.—El actor probó que había interpelado al inquilino requiriéndole el pago en el domicilio de éste—art. 509.—Comprobados estos extremos procede la rescisión del contrato.





ler estipulado, procede la rescisión del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 191, Ser. 4^a.

5. **Locación**—El contrato de locación obliga igualmente por el término estipulado, al locador y locatario, salvo convenio expreso que permita la rescisión antes del vencimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4^a.

6. **Locación**—Los daños y perjuicios, en caso de faltar al contrato, deben ser fijados por el precio estipulado como alquiler ó por la diferencia, en caso de nuevo alquiler por menor suma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4^a.

7. **Locación**—Procede la resolución del contrato de locación si el locatario infringió prohibiciones del locador espresamente estipuladas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

8. **Locación**—La existencia de un contrato de locación obliga á las partes al cumplimiento, sin perjuicio de las acciones que crean necesarias para fundar su rescisión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 11, Ser. 4^a.

9. **Locación**—El propietario causante de la rescisión del contrato de locación no inscripto, es responsable de los daños y perjuicios que tal hecho ocasione al locatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104, Ser. 4^a.

10. **Locación**—No es potestativo del locador el aumento

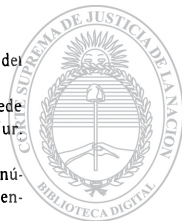
5—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 21.

6—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 89.

7—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 22.

9—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 108.

10—Si ese aumento fuese posible, el locatario quedaría frecuentemente librado al capricho del locador quien no siempre encontraría límites á sus exigencias cuando así viesse convenirle. Por otra parte, el aumento del precio de la locación importa una modificación al contrato primitivo, y es sabido que éstos no pueden modificarse sino en virtud de concurrencia de voluntades. Un contrato es el concurso de dos ó más voluntades sobre un objeto de interés jurídico.



del precio de la locación, debe existir la conformidad del locatario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 107, Ser. 4ª

11. Locación—Aun justificada la locación, no procede la inhibición general para garantizar los alquileres.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4ª.

Locación—Véase: *Arrendamiento*, núm. 2—*Fianza*, número 2—*Contrato de arrendamiento*, núm. 1 y siguientes—*Posesión*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núm. 95.

Locación de nichos—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 3.

1. Locación de servicios—Para dar por existente este contrato basta la aceptación tácita de los servicios sin que se requiera prueba plena del acuerdo de voluntades que la ley exige en otros contratos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408, Ser. 3ª.

2. Locación de servicios—Solo procede la fijación por

11—Véase: ver. *Alquileres*, núm. 3.

1—Según el art. 1623 del Cód. Civ., la prestación de servicios constituye un contrato consensual, lo que vale decir que es de aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento, ó como lo dice el artículo 114 de los que quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento. Si bien el consentimiento debe manifestarse por ofertas ó propuestas de una de las partes y aceptarse por la otra, según el art. 1144 del Cód. Civ., la legislación moderna haciendo á un lado el formulismo de los romanos, ha consagrado la doctrina de que no hay fórmulas sacramentales para encadenar el consentimiento. Así el artículo 1145 de nuestro Código, preceptúa que el consentimiento puede ser espreso ó tácito, siendo espreso cuando se manifiesta verbalmente por escrito ó por signos inequívocos; y resultando el consentimiento tácito, de hechos, ó actos que lo presupongan ó que autoricen á presumirlo. Para mayor evidencia de la exactitud de esta conclusión, puede recordarse el texto espreso del art. 1145, el que establece que se presume el consentimiento tácito, siempre que una de las partes hiciere lo que no hubiera hecho si su intención fuese no aceptar la propuesta.

2—El actor cobraba trabajos prestados fuera de juicio y solicitó la



peritos del valor de los servicios prestados, si existe conformidad de partes sobre su importancia si han sido determinados en juicio contradictorio ante juez competente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 277, Ser. 3ª.

3. Locación de servicios—Reconocido y justificado el precio mensual, el locador debe ser condenado al pago del saldo adeudado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 411, Ser. 3ª.

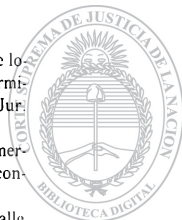
4. Locación de servicios—El reconocimiento condicional de la locación de servicios, no basta para demandar al beneficiado, mientras no se justifiquen que fueron ejecutados por su orden y que se aprovechó de ellos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4ª.

5. Locación de servicios—Reconocida la locación de servicios sin precio estipulado, debe abonarse el que determinen los peritos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 163, Ser. 4ª.

constitución de un tribunal arbitral de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1627 del Cód. Civ. El demandado se opuso á la constitución de ese Tribunal fundándose en que se trataba de un asunto de la exclusiva competencia del Juzgado y desconociendo la importancia atribuida por el actor á sus trabajos. Esto importaba una disconformidad sobre una parte capital, que debe ser materia de controversia antes de que la fijación del monto de los honorarios sea hecha. El art. 1627 dice, que cuando ningún precio se hubiese estipulado por los servicios, será determinado por árbitros: de manera que los servicios deben justificarse en primer término, así como su importancia, lo que debe hacerse ante el Juez ordinario, para luego constituir el Tribunal arbitral encargado de fijar el precio. Resulta que el nombramiento de árbitros supone, ó que existe conformidad de partes en cuanto á la naturaleza é importancia de los servicios cuya remuneración deben fijar los árbitros, ó que no habiendo conformidad, haya el Juez determinado en la sentencia cuáles son esos servicios y su importancia.

4—Porque según la opinión de uno de los Camaristas cuyo voto sirvió de fundamento al fallo del Tribunal, no es lícito dividir la confesión de la parte. Este principio que tan antojadisamente se quiere sentar está en contra de la sana doctrina. Véase: verb. *Confesión*, núm. 3.

5—Art. 1627 del Cód. Civ.



6. **Locación de servicios**—Justificado el contrato de locación de servicios sin estipulación de precio determinado, los honorarios deben ser fijados por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 244, Ser. 4^a.

7. **Locación de servicios**—Los prestados á un comerciante en otro carácter que el de dependiente, es un contrato civil.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 4^a.

8. **Locación de servicios**—Si no se acompaña el detalle de los trabajos, la excepción de defecto legal de la demanda por locación de servicios, es procedente—Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4^a.

Locación de servicios—Véase: *Comisión*, núm. 1—*Servicios*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1 y siguientes—*Honorarios*, núm. 17.

1. **Locador**—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario solo pueden ser reclamadas, si se verifica el desalojo, el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 165, Ser. 3^a.

2. **Locador**—Directo, el sublocatario no puede por su voluntad cambiar la forma del contrato convirtiéndose en locador directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

Locador—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 4, 12, 16 y 17—*Daños y perjuicios*, núms. 95, 96 y 50—*Excepción de litispendencia*, núm. 1 y siguientes—*Locación*, núm. 10—*Locatario*, núm. 5—*Locación de servicios*, núm. 3—*Precio*, núms. 6 y 13—*Condominio*, núm. 10.

Local social—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

5—Véase: *Honorarios*, núm. 25.

7—Véase: *Contrato de locación de servicios*, núm. 5.

8—Véase: verb. *Detalle*, núm. 1.

1—Véase: *Desalojo*, núm. 4.

2—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.



1. **Locatario**—El carácter de locatario, que importa tenencia á nombre de otro, no puede modificarse por la sola voluntad, y por tanto, se conserva aún en el caso de que por hechos sobrevinientes pudiera ser cambiado por el de heredero, mientras judicialmente no fuese reconocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 3^a.

2. **Locatario**—La cláusula que permite al locatario transferir el contrato á sus sucesores, no puede entenderse prohibitiva de sublocar el fundo á terceros que llenen las mismas condiciones que el principal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 294, Ser. 3^a.

3. **Locatario**—Justificado el consentimiento del locatario para la construcción de las obras ordenadas por el locador, procede el rechazo de la acción de daños y perjuicios, fundada en ese solo hecho.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 208, Ser. 3^a.

4. **Locatario**—El que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de la propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe por ac-

1—Véase: verb. *Heredero*, núm. 2.

2—El contrato establecía que los locatarios podían transferir el contrato á sus sucesores para negocios del mismo ramo, y de aquí deducía el locador que los arrendatarios solo podían transferir el contrato á sus sucesores y no á otros que no lo fueran. Es evidente que esta consecuencia no es acertada, porque no existiendo una prohibición expresa de cederlo á otros, aun cuando la cláusula pudiera considerarse redundante, no es menos cierto que ello no puede importar una prohibición. El art. 1597 establece que la prohibición de ceder el arrendamiento importa la de subarrendar, no puede decirse que la facultad de ceder á determinada persona importe la de prohibir que esa cesión se haga á otra cualquiera. El locatario, en caso de no existir una prohibición expresa, puede hacer uso del derecho que le acuerda el art. 1583 del Código Civ.

3—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 19.

4—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 11.



ciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, página 122, Ser. 3ª.

5. **Locatario**—El locatario procede por el propietario, y reconocida la existencia de aquél en el predio se reconoce la posesión del locador.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3ª.

6. **Locatario**—El culpable de la rescisión del contrato carece de derecho para cobrar mejoras hechas en el predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 22, Ser. 3ª.

7. **Locatario**—Abandona la cosa locada aun cuando existan sublocatarios, siempre que no deje persona que lo represente legalmente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 4ª.

Locatario—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núme-

5—La posesión puede tenerse por medio de otros—arts. 2351 y 2352 del Cód. Civ.

6—Art. 1550, inc. 1º del Cód. Civ. Este artículo establece que resolviéndose la locación sin culpa del locador, no incumbe á éste pagar las mejoras necesarias ó útiles, si se estipuló que esas mejoras cederían á beneficio de la cosa arrendada. En el caso que nos ocupa se convino en que dichas mejoras quedarían á beneficio de la persona propietaria á la época del contrato: fundándose en esta circunstancia, el locatario sostuvo que no le correspondía pagarlas porque la cosa había cambiado de dueño. Se resolvió que siempre quedaban á beneficio del dueño actual de la cosa, porque por la naturaleza de las mejoras ú obras, éstas debían ser consideradas como accesorias del suelo y porque el beneficio era para el dueño anterior en su carácter de propietario del inmueble: ese derecho era inherente á esta calidad y pasaba con la cosa al nuevo propietario.

7—El sumario tiene su fundamento en el art. 1564 del Cód. Civil. Pero en el caso que nos ocupa el arrendatario sublocó la cosa dejándola en poder del subarrendatario: se dijo por la Cámara que esto no impedía el ejercicio del derecho acordado por dicho artículo, por cuanto el sublocador no puede ser considerado como representante del locatario haciendo sus veces ó tomando sobre sí las responsabilidades que pueden resultar del contrato de locación.

ros 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24 y 25—*Daños y perjuicios*,
núms. 18, 19, 95 y 108—*Desalojo*, núm. 3—*Alquileres*,
núms. 1 y 2.

Lotes—Véase: *Herederos mayores*, núm. 3.

Lugar—Véase: *Posiciones*, núm. 28.

Llave—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

Lluvias—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1.





1^a. **Madre**—En ejercicio de la patria potestad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 232, Ser. 4^a.

Madre—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5—*Alimentos*, núm. 2—*Divorcio*, núms. 3 y 5—*Filiación legítima*, núms. 2 y 3—*Filiación natural*, núms. 8 y 12—*Cu-radora*, núm. 1.

1^b. **Madre natural**—La presunción de la ley de que la madre natural es soltera, solo cede ante la prueba, la que corresponde al que niegue ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3^a.

2. **Madre natural**—La madre natural tiene personería para gestionar y percibir la cuota alimenticia, sin que

1^a—Véase: verb. *Fondos*, núm. 1. A este respecto hay jurisprudencia uniforme.

1^b—El Cód. Civ. al permitir á cualquiera de los padres naturales reconocer al hijo, prohíbe al mismo tiempo designar la persona con quien lo tuvo, si ésta no lo hubiese reconocido ya, y no pudiendo en este caso conocerse la calidad de esta persona, quiere decir, que se presume soltera mientras no conste lo contrario; pues de otra suerte no debería tenerse por legal dicho reconocimiento, ni este comprobaría la calidad de natural en el hijo reconocido, ni aún respecto del padre que hubiese verificado el reconocimiento.

2—Véase: *Cuota alimenticia*, núm. 1.



sea necesario el nombramiento de tutor especial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4^a.

Madre natural—Véase: *Filiación natural*, núms. 8 y 12 — *Personería*, núm. 8.

Madrastra—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

Mala administración—Véase: *Inhibición*, núm. 13.

Mala construcción—Véase: *Contrato de locación*, núm. 4.

Malicia—Véase: *Costas*, núm. 10.

1 Mandamiento—Es nula la ejecución en que no se haya librado mandamiento contra el deudor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 153, Ser. 4^a.

1—El requerimiento de pago es una formalidad esencial, en el juicio ejecutivo, que debe hacerse al deudor, pues sin ella no puede verificarse el embargo, desde que este solo procede cuando el demandado no lo verifica oportunamente como lo establece el art. 471 del Cód. de Proc. En el caso del sumario se había librado tan solo mandamiento de embargo preventivo, y considerando la parte que este trámite era suficiente para fundar la ejecución, pidió la citación de remate, y hecho esto, el ejecutado opuso la excepción de nulidad de la ejecución, la que se declaró procedente, teniendo en cuenta que a pesar de ser verdad que las formas apremiantes y los términos breves del juicio han sido establecidos en favor del demandante, para evitar que el deudor presuntamente dilate el cumplimiento de sus obligaciones, así es igualmente cierto que el ejecutado está interesado en que se llenen todas las formalidades prescriptas por la ley, en tanto cuanto su omisión puede serle perjudicial. Así, no se concibe que el ejecutante sin requerir el pago al deudor lo inhiba y cite de remate, cuando éste bien pudo evitar las molestias y gastos del juicio, haciendo efectivo el pago en el acto de ser requerido. Por otra parte hay créditos que pueden motivar un embargo preventivo y que sin embargo no pueden fundar una acción ejecutiva. Con la omisión del mandamiento de ejecución y solo con un embargo preventivo ó una inhibición, sería lo bastante para seguir un juicio ejecutivo, desnaturalizando su carácter y contrariando su objeto. La nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ella establece la ley, que autoriza el art. 489 y que en el caso ocurreniente hacía valer la parte ejecutada, no es propiamente una excepción del juicio ejecutivo, puesto que esta solo afecta á la ejecución ó al crédito que se cobra, mientras que la nulidad afecta á la validez de todo lo actuado desde que ella se pro-



2^a. **Mandamiento**—No es es requisito esencial para la validez de la ejecución que el mandamiento sea diligenciado en persona.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4^a.

Mandamiento—Véase: *Obligación condicional*, núm. 4.—*Embargo preventivo*, núm. 26.

1. **Mandante**—Tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4^a.

2^b. **Mandante**—Al apoderado corresponde justificar el fallecimiento de su mandante si no negase el hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 4^a.

duce; que el requerimiento hecho al deudor para el pago es un trámite esencial en el juicio ejecutivo, no solo resulta de estas consideraciones, sino que así también lo enseñan los tratadistas de procedimientos. Ha lugar á la nulidad por defecto de los trámites esenciales del juicio dice Caravantes, cuando no se requiriese al deudor para el pago ó no se le citase de remate.... ó por omisión de cualquier otro trámite que la ley espresa producir nulidad—tom. 3, parágrafo 1198—Los señores Manresa y Reus en su Ley de enjuiciamiento civil opinan de igual modo comentando los arts. 970 y 971—tom. 4^o—No habiéndose librado mandamiento de embargo, aunque se haya decretado una inhibición general como medida preventiva, no hay propiamente juicio ejecutivo, por haberse prescindido de la formalidad esencial espresada.

2^a—De la diligencia practicada por el oficial de justicia constaba que el deudor fué requerido en su domicilio por tres veces sin lograr encontrarlo. Con estas diligencias se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 471 del Cód. de Proc. No es necesario que el deudor sea personalmente requerido para el pago, porque de otro modo el ejecutado podría impedir la prosecución del juicio con solo negarse ó ausentarse de su domicilio. Los términos del art. 471 revelan también que no es necesario el requerimiento personal cuando dice que no verificando el pago en el acto, se procederá á embargar bienes suficientes, y que el embargo se practicará aunque el deudor no se halle presente. Si el rechazo debe practicarse aunque el deudor no esté presente, cuando no verifique el pago en el acto, es porque no es necesario el requerimiento personal.

1—Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

2^b—Véase: *Fallecimiento*, núm. 6.



3ª. **Mandante**—La ratificación del acto por el mandante con fecha posterior, tiene igual valor que la existencia espresa de autorización para llevarlo á cabo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 337, Ser. 4ª.

Mandante—Véase: *Contrato*, núm. 8—*Mandato*, núm. 9—*Mandatario*, núms. 3 y 9—*Costas*, núm. 21—*Apoderado*, núms. 3 y 4—*Apoderado único*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, núm. 1—*Asuntos judiciales*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 36 y 37—*Obligación de hacer*, núm. 15.

1. **Mandatario**—El administrador es un mandatario cuyos actos obligan á su principal en la misma forma y en la misma estensión de derecho que obligan los del último á su mandante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

2. **Mandatario**—Siendo el rematador mandatario del vendedor, la firma de aquél en el boleto no modifica la regla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 103, Ser. 3ª.

3. **Mandatario**—La cláusula que impone la ratificación del mandante importa el reconocimiento espreso por el tercero de la carencia de facultades del mandatario para dar por terminado el contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 350, Ser. 3ª.

4. **Mandatario**—La declaración del supuesto mandata-

3ª.—Porque la ratificación equivale al mandato. Véase: *Mandato*, números 12 y 16.

1.—Una persona fué nombrada para administrar un establecimiento de campo con facultad de recabar fondos para usarlos en el establecimiento. Siendo administrador y estando autorizado para contraer deudas, es claro que las contraídas en este carácter deben ser abonadas por el mandante, pues éste responde de los actos de su mandatario siempre que obre en los límites del mandato—art. 1946 del Código Civil.

4.—El demandado negó la existencia del mandato, y no habiéndose presentado en autos la escritura, se quiso comprobar su existencia por medio de la prueba testimonial, presentándolo á este efecto al preterido apoderado. Su declaración carece de valor probatorio, porque



rio no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Serie 3ª.

5. **Mandatario**—El rematador que vende un inmueble por cuenta y á nombre del propietario no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3ª.

6. **Mandatario**—Aun careciendo el mandatario de facultad para el acto, el tercero puede justificar por medio de prueba testimonial la existencia del mandato verbal—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

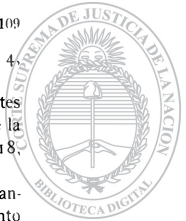
7. **Mandatario**—La rendición de cuentas presentada por el mandatario y no observada por el mandante im-

falta necesariamente la imparcialidad de su dicho, desde que sosteniendo que procedía como mandatario y por cuenta y orden del mandante, es evidente que tiene interés en que se declare la existencia del mandato, siendo aplicable lo dispuesto en el art. 207, inc. 3º del Cód. de Procedimientos.

5—Se trata de la venta de un inmueble hecha en remate público por cuenta de su dueño. Esta operación no puede ser considerada como comercial—art. 452, inc. 1º, Cód. de Com. vig.—en cuyo caso no puede aplicarse la disposición del art. 122 del Cód. de Com. ant., igual al 121 del vig. Además, para que haya comisión es necesario que la operación se concluya á nombre del comisionista—art. 335 del Cód. de Comercio ant. y 222 del vigente—lo que no sucedía en el caso que nos ocupa, no pudiendo invocarse por consiguiente, la disposición del artículo 1929 del Cód. Civ. La Cámara ha resuelto en repetidas veces que los martilleros en este caso son verdaderos mandatarios y no comisionistas. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Martilleros*, núm. 1 y *Rematadores*, núm. 1.

6—El art. 1873 del Cód. Civ., autoriza la constitución del mandato verbal. El Codificador en la nota á este artículo dice: «los terceros pueden siempre probar por testigos el mandato, porque siendo un negocio entre otros, les es casi imposible procurarse una prueba escrita.» Esta doctrina está fundada en la opinión de Zachariæ, § 751, nota 4ª y Troplong, núm. 145.

7—El mandante exigió rendición de cuentas de su mandatario: éste contestó diciendo que ya había rendido cuentas, las que se encontraban



porta su aprobación ó conformidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 120, Ser. 3ª.

8. **Mandatario**—El mandatario que excede los límites del mandato, carece de derecho para exigir el pago de la compensación estipulada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3ª.

9. **Mandatario**—Está obligado á presentar á su mandante la rendición de cuentas de administración en tanto no justifique haberla verificado.—Jur. Civ., tom. 5, página 293, Ser. 3ª.

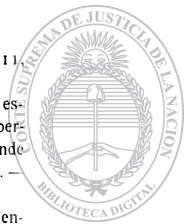
10. **Mandatario**—Si el mandatario estiene el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irroque al tercero, aun cuando se justifique que éste conocia su carácter de mandatario. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 33, Ser. 3ª.

11. **Mandatario**—La facultad conferida al mandatario para vender los bienes que correspondan por herencia al mandante, no importa la de ceder los derechos hereditarios en poder del actor, quien á su vez replicó diciendo, que esas cuentas habían sido objetadas: no comprobó el mandante este último extremo por cuya causa fué absuelto el demandado.

9—Art. 1909 del Cód. Civ.

10—Véase: verb. *Contrato*, núm. 15.

11—El poder en virtud del cual el mandatario procedió á la venta decía: «Se otorga poder para proceder á la división de dicha herencia y á la venta y enajenación de todo lo que correspondiera á los mandantes, por el precio que creyere más conveniente, otorgando las respectivas escrituras, y al efecto confieren al apoderado nombrado todas las facultades y plenos poderes necesarios para el cumplimiento de la división y venta antes espresadas». Del texto de este poder resulta, de estricta aplicación la disposición del art. 1187 del Cód. Civ. Debe tenerse presente por otra parte, que la cesión fué hecha por documento privado siendo su valor mayor de mil pesos, lo que coloca al contrato fuera de las condiciones legales del art. 1184, correlativo del 1154 y 1155 del mismo Código.



tarios antes de recibirla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 411, Ser. 4ª.

12. **Mandatario**—El poder especial para otorgar escritura de venta, sin determinar especialmente á la persona á la cual debe transferirse el inmueble se entiende conferido para otorgarla á voluntad del mandatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4ª.

13. **Mandatario**—El mandatario debe al mandante cuenta de lo que haya recibido en virtud del mandato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 179, Ser. 4ª.

14. **Mandatario**—La recepción de un documento de crédito firmado por un tercero, para su descuento obliga al mandatario á la devolución, cualesquiera que hayan

12—En este caso el mandatario obra dentro de los límites de su poder y debe el acto ser respetado por el mandante—arts. 1095 y 1031 del Cód. Civ.

13—Arts. 1904 y 1909 del Cód. Civ.

14—La demanda decía que venía á exigir del demandado un documento que le entregó para ser descontado, si no hubiese éste efectuado el descuento, y si lo hubiese hecho, que entregara la suma importe del documento. El demandado dijo que había recibido un pagaré suscrito por una persona y endosado por otra, el que tuvo que devolver á uno de éstos por haberse rescindido el negocio que le dió origen y por haber sido él otorgado en garantía de dicha negociación; que además los otorgantes habían caído en insolvencia y sus firmas nada valían en plaza. El demandado no probó ninguna de estas defensas, y no habiéndose probado, la demanda debía prosperar de acuerdo con lo preceptuado en la ley 1ª, tit. 14, Part. 3. Y aun dado el caso de que esos extremos se hubiesen comprobado, no habría mejorado en nada la situación del demandado, porque habiendo reconocido él que el pagaré le fué entregado para ser descontado en plaza, y si ese descuento le fué imposible por insolvencia de los firmantes, esa circunstancia no lo autorizaba á entregarlo á un tercero sin intervención y consentimiento del actor, desde que éste era verdadero dueño del pagaré. Aun comprobado el hecho, no sería bastante para exonerar al demandado del cumplimiento de su obligación—art. 628 del Cód. Civ.

sido las circunstancias que hubiesen impedido su cobro. Jur. Civ., tom. 6, pág. 187, Ser. 4^a.

15. **Mandatario**—Consentido el auto en que se tiene por parte á una mujer como mandatario ó procurador.

15—Porque una vez consentida la providencia no se puede volver sobre lo resuelto, por haber ella pasado en autoridad de cosa juzgada. Y aun cuando esto no hubiese sucedido, tampoco habria derecho á oponerse á que ejerza la procuración una muger, porque no siendo la Ley 5^a, tit. 5^o, Part. 3^a, según la cual, la mujer no puede representar á otra persona, ni puede asumir mandato judicial sino por sus ascendientes y descendientes, y esto en casos especialmente determinados, pues no estando en vigencia entre nosotros y habiendo sido derogada por disposiciones espresas de la legislación que nos rige y por ser contraria á su espíritu. El inc. 6^o del art. 1870 del Cód. Civ. establece que las disposiciones del título del mandato son aplicables á las procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan á las del Cód. de Proc.; y el art. 1896 dice que pueden ser mandatarias todas las personas capaces de contratar, excepto para aquellos actos para los cuales la ley ha conferido atribuciones especiales á determinada clase de personas. ¿A qué leyes se refiere esta última parte del art. 1896? ¿A las antiguas españolas? No; porque la capacidad civil de las personas es regida por las nuevas leyes, aunque abroguen ó modifiquen las cualidades establecidas por las leyes anteriores—art. 4046.—No, porque lo que no está dicho esplicita ó implícitamente en ningún artículo del Cód., no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial—art. 22.—La última parte del art. 1896, concordante con el inciso 6^o del art. 1870, se vé claramente que ha querido referirse y se ha referido á las atribuciones especiales á determinada clase de personas que haya conferido el Cód. de Proc. en lo relativo á las procuraciones judiciales. El art. 9 de este Cód. establece, que todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualesquiera jueces ó tribunales, ó hacerse representar por cualquiera persona hábil, mayor de edad, sea ó no procurador. El art. 10 emplea las mismas palabras, toda persona que litigue, etc., dice, y el art. 11 repite la misma locución «la persona que se presente en juicio» etc. Según el Cód. de Proc. puede, pues, ser mandatario judicial toda persona hábil mayor de edad. La capacidad de las personas está esclusivamente regida por el Cód. Civ.—art. 6^o—y ante él la mujer no casada, mayor de edad, es hábil para ejercer todos los derechos y contraer todas las obligaciones que no le





de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil del apoderado. —Jur. Civ., tomo 9, pág. 18, Ser. 4^a.

16. **Mandatario**—Estipulada como comisión de venta de un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición. —Jur. Civ., tom. 9, página 90, Ser. 4^a.

17. **Mandatario**—Debe rechazarse la rendición de cuentas contra el mandatario, si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que investía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato. — Jur. Civ., tomo 10, pág. 125, Ser. 4^a.

Mandatario—Véase *Libros de comercio*, núm. 3—*Rendición de cuentas*, núm. 21—*Estatutos sociales*, núm. 1
 sean espresamente prohibidas—arts. 52 y 53.—Las mujeres que son personas hábiles cuando no están casadas, pueden ser mandatarias en juicio, según resulta de las disposiciones combinadas de los Códigos Civ. y de Proc. Y la Ley 5^a, tit. 5^a, Part. 3^a ha sido derogada por el art. 814 del Cód. de Proc. cuando establece que quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al enjuiciamiento civil y comercial, en todo lo que sean contrarias; como lo sería la incapacidad de la mujer para ejercer la representación de otra persona en juicio. Si el Cód. de Proc. hubiera querido reproducir la prohibición consignada en la Ley de Part. que importa una verdadera incapacidad relativa de la mujer, la habría consignado espresa y claramente, y no se habría valido de los términos generales y ámplios que emplea en el artículo 9^o cuando dice cualquiera persona hábil. Esta forma de interpretación de nuestros Cód. vigentes, no sólo armoniza sus disposiciones sobre la materia, sino que también responde á los principios de justicia compatibles con la libertad individual, á no ser que ellos estén enteramente prescriptos por la ley.

16—Véase: *Comisión*, núm. 6.

17—Porque la confesión de la parte hace que el carácter de mandatario invocado después no tenga ningún valor. Como socio tiene el derecho de tal y en ese carácter puede deducir su acción, pero no como mandatario.



—*Intereses*, núm. 1 — *Apoderado*, núm. 1 y siguientes — *Contrato*, núm. 15 — *Daños y perjuicios*, núms. 42 y 85 — *Excepción de defecto legal*, núm. 7 — *Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2 — *Posiciones*, núms. 3, 36 y 37 — *Simulación*, núm. 6 — *Mandato*, núm. 15 — *Contradocumento*, núm. 2.

1. **Mandato**—El mandato sujeto á instrucciones según el mismo instrumento, no queda perfecto mientras el mandante no las otorgue; y el tercero que no las hubiese exigido al contratar, carece de acción para pedir el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 45. Ser. 3^a.

1—El mandato se confirió para que se efectuara la compra de ciertos derechos con arreglo á instrucciones que le comunicaría el otorgante, lo que se consignó espresamente en la escritura de mandato. Un mandato sujeto á instrucciones no queda perfecto sin el otorgamiento de éstas, porque lo contrario importaría atribuirse al mandatario facultades amplias que el mandante espresamente ha entendido negarle. Si de acuerdo con el art. 307 del Cód. de Com., concordante con el 1905 y el 1938 del Cód. Civ., las instrucciones forman parte integrante del mandato, se concibe sin esfuerzo que éste no quede perfeccionado cuando del instrumento mismo resulte, no ya que tales instrucciones fueron otorgadas, sino que aún no estaban establecidas. Y para llegar á estas conclusiones, no es necesario ponerse en el caso de abusos del mandatario, que no siendo de presumirse, debe probar el que los imputa. Una cosa es, que conferido un mandato con arreglo á instrucciones reservadas, el tercero contrate con el mandatario, en cuyo caso debe protegerse su buena fe, si él ignoraba que el mandatario se excedía, y otra es que tales instrucciones no hayan sido dadas y conste así del propio instrumento de la procuración, como en el caso que nos ocupa. En la primera hipótesis hay mandato, hay facultades determinadas, y entonces puede decirse que el mandatario obra en los términos de la procuración, aun cuando hubiese en realidad excedido el límite de sus poderes, y el acto se reputa ejecutado en los límites del mandato—Cód. Civ., artículo 1934.—En el segundo supuesto, que constituye el caso presente, el mandatario no puede sostener que obrara en los términos de su procuración, desde que sus facultades quedaban subordinadas al cumplimiento



2. **Mandato**—Reconocido el hecho de la administración por un condómino, debe rendir cuentas á los otros condóminos, aun cuando no haya existido mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3^a.

3. **Mandato**—Para exigir el cumplimiento del contrato al que se dice mandante, es indispensable la justificación de la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Ser. 3^a.

4. **Mandato**—Los actos del mandatario constituido por instrumento privado, practicados después de la cesación del mandato, no obligan al mandante.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3^a.

5. **Mandato**—Las declaraciones ó modificaciones al mandato que haga el mandante despues de firmado el contrato, no son aplicables ni obligan al tercero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3^a.

6. **Mandato**—La escepción de falta de personería es improcedente si el poder individualiza el objeto del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 229, Ser. 3^a.

7. **Mandato**—La existencia del mandato para la compra de inmuebles, solo puede justificarse presentando la

de una condición, siempre que él no pruebe haberse realizado. Se comprende que el mandante estuviera obligado á la prueba, en el caso de que habiéndose otorgado las instrucciones, él pretendiera que éstas no fueron cumplidas, tal hecho importaría una escepción, ó cuando menos un hecho nuevo en el pleito, que echaría sobre él el *onus probandi*. Pero es que en el caso que nos ocupa no hay ni escepción ni hecho nuevo, ni modo de echar el peso de la prueba sobre el mandante que era el demandado en el caso del sumario.

2—Véase: verb. *Condominio*, núm. 1.

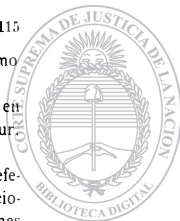
3—Véase: verb. *Contrato*, núm. 8.

4—Véase: *Instrumento privado*, núm. 1.

5—Véase: *Contrato*, núm. 6.

6—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 1.

7—Véase: *Escritura pública*, núm. 5.



escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3ª.

8. **Mandato**—No procede la rendición de cuentas en tanto no se justifique la existencia del mandato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3ª.

9. **Mandato**—Las disposiciones del Código Civil referentes al mandato, solo son aplicables a las procuraciones judiciales en cuanto no se opongan a las disposiciones del Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4ª.

10. **Mandato**—La revocación del mandato en asuntos judiciales debe ser espresa, la simple presentación personal del mandante, no basta para dar por caducado el poder.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4ª.

11. **Mandato**—Las sentencias ejecutoriadas que declaran la existencia del mandato, bastan para llenar la exigencia del tercero que contrató con el mandatario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 89, Ser. 4ª.

12. **Mandato**—Justificada la autenticidad del mandato, el mandante está obligado a cumplir los contratos llevados a cabo por el mandatario, aun cuando éste se hubiera estralimitado, siempre que se justifique su ratificación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 141, Ser. 4ª.

8—El mandato hace nacer la obligación de rendir cuentas: si no existe el mandato no nace la obligación de rendir cuentas. Además la demanda debe probar los hechos en que funde su acción: el hecho fundamental en el juicio de rendición de cuentas es el mandato. Si no se comprueba su existencia, la demanda no puede prosperar, de acuerdo con el principio sentado en la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

9—Véase la última parte de la nota al verbo *Asuntos judiciales*.

10—Véase: verb. *Asuntos judiciales*.

11—Porque las sentencias ejecutoriadas son instrumentos públicos, como lo son las escrituras públicas que constatan el mandato—art. 979, incs. 1 y 4.

12—Arts. 1931 y 1936 del Cód. Civ.



13. **Mandato**—Los actos del mandatario, llevados a efecto después de la revocación tácita ó expresa del mandato, no obligan al mandante si el tercero tenía pleno conocimiento de la cesación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 186, Ser. 4^a.

14. **Mandato**—Procede la caución de *rato et grato* para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un término para la prestación de mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

15. **Mandato**—El mandatario puede sustituirlo sin autorización del mandante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90, Ser. 4^a.

16. **Mandato**—La ratificación equivale al mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 3^a.

Mandato—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 13—*Posiciones*, núm. 3—*Costas*, núm. 14—*Instrumento privado*, núm. 1—*Contrato*, núm. 6—*Mandatario*, núms. 8, 13 y 17—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1—*Herederos*, núm. 2—*Rematador*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núms. 16 y 20—*Sindicato*, núm. 1—*Estatutos sociales*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 5.

13—El Dr. Llerena comentando el art. 1965 del Cód. Civ. dice: «El conocimiento que los terceros hayan tenido de la cesación del mandato, no es necesario que sea una notificación formal por parte del mandante; basta que de cualquier modo hayan tenido conocimiento, sea directa sea indirectamente de la cesación del mandato, para que el acto no obligue al mandante.» La misma doctrina sostienen: Paul Pont, tom. 8^o, pág. 679; Duranton, tom. 18, pág. 272; Zachariae, tom. 5^o, pág. 55, nota 7; Dalloz, Mandat, § 449, y finalmente Troplong sobre el art. 2009 del Cód. de Napoleón, quien sostiene que la ley no se preocupa de los medios por los cuales los terceros han podido instruirse del estado de las cosas.

14—Véase: verb. *Caución*, núm. 2.

15—Pero responde de la persona en quien sustituye el mandato—art. 1924 del Cód. Civ.

16—Véase el núm. 12.



1°. **Mandato especial**—Para ciertos actos, no basta para intervenir en litigios de fecha anterior no determinados en el instrumento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3^a.

2°. **Mandato especial**—El mandato especial termina conjuntamente con el asunto para que fué conferido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 362, Ser. 4^a.

Manifestación afirmativa—Véase: *Jactancia*, núm. 1.

Mandato verbal—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 5.

Marca de fábrica—Véase: *Prescripción de marca de fábrica*, núm. 1.

1. **Marido**—Durante la menor edad de la esposa, debe justificarse plenamente la necesidad ó conveniencia para la estracción de fondo que pretenda el marido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 349, Ser. 4^a.

2^b. **Marido**—El marido, además de los alimentos debe pagar los muebles que la esposa necesita para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

Marido—Véase: *Acreeedores del viudo*, núms. 1 y 2—*Albacea*, núm. 7—*Inhibición*, núm. 13—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núm. 3—*Ilegitimidad*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 1—*Venia*, núm. 1—*Administrador*, núm. 4—*Bienes del esposo*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 7—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1.

1^b. **Martillero**—La comisión del martillero en la venta de bienes raíces es de dos por ciento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 105, Ser. 4^a.

1^a—Art. 1884 del Cód. Civ.

2^a—El juicio había terminado por transacción, celebrada entre el mandante y la parte contraria.

2^b—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 14.

1^b—Véase: *Remate judicial*, núm. 9, y *Comisión*, núm. 4.



2. **Martillero**—El martillero tiene derecho al cobro de media comisión si el remate judicial se suspende á petición de partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

3. **Martillero**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio, solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento del matillero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4^a.

Martillero—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 33—*Simulación*, núm. 6.

Materia del litigio—Véase: *Sentencia*, núm. 5.

1. **Materiales**—El propietario no es responsable res-

2—La Cámara confirmó por sus fundamentos la resolución del Juez de 1^a Inst. que decía: «teniendo derecho á la mitad de la comisión cuando el remate no se realiza, según la jurisprudencia establecida por la Cámara en casos análogos.» Hemos buscado esta jurisprudencia establecida en casos análogos y no hemos podido encontrarlos. Para demostrar que esos casos no existen, vamos á citar las diversas resoluciones dictadas y que tienen relación con el caso que nos ocupa. En el verb. *Comisión*, número 7 de este tomo se lee: «El Juez debe fijar una comisión equitativa una vez suspendido el remate sin culpa del martillero.» En el tomo 2^o de la Inst., verb. *Remate*, núm. 1, se lee que: «Suspendido el remate sin culpa del martillero, éste tiene derecho á una comisión equitativa que el Juez deberá fijar.» En el tom. 1^o, verb. *Martilleros*, núm. 1729, se registra una resolución que dice: «Los martilleros que suspenden una venta por voluntad de las partes, tienen derecho á cobrar una retribución por los trabajos practicados.» Estos son los casos resueltos hasta hoy, no hay uno solo que cohoneste la resolución del sumario la que se funda en numerosos casos y en la jurisprudencia establecida por la Cámara. Por consiguiente el fundamento invocado por este Tribunal es falso. Solo la Cámara de lo Com. tiene resuelto un caso en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Martilleros*, número 4. Falta la nota 3, art. 3224 del Cód. Civ.

1—Se entabló demanda diciendo el actor que vendieron é hicieron colocar mosaicos en una casa que el demandado hacía construir: éste contestó diciendo, que no había celebrado con el actor contrato alguno, ni comprado material alguno para la obra, pues había contratado con un empresario la construcción de su casa por un tanto, agregando que si éste adeudaba el mosaico, sería él el deudor del actor y no él.



pecto á los terceros que proveyeron al constructor de materiales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 284, Ser. 4^a.

1. Matrimonio—Los matrimonios, aún entre protes-

Resulta de aquí que la obligación cuyo vínculo de derecho pesaría sobre el demandado, tiene que emanar del supuesto contrato ajustado entre actor y demandado. El contrato, fuente natural de obligaciones, y no la colocación del mosaico, hecho accidental que no es negado, que ha podido existir sin traer aparejado el *vinculum juris* para el demandado —Cód. Civ., art. 1629—y que como simple hecho no puede enjendrar obligaciones á menos de importar un *cuasi-delito*; es ese el hecho generador del juicio que los demandantes, debiendo no probaron. No es el caso de que el demandado se haya enriquecido con lo ajeno. Si él ajustó toda su obra por un tanto y pagó el importe de los materiales que el empresario de la construcción adquirió por su propia cuenta, no hay provecho alguno para aquél, y podría haber por el contrario perjuicio grande si se le obligara á pagar dos veces los mosaicos colocados en su casa, una al constructor y otra á los actores, que tienen su derecho á salvo contra quien los compró. Es lo mismo que si el demandado hubiera comprado de segunda mano, como se dice en el comercio. ¿Quién sostendría la obligación, del que compra al menudeo, de pagar al mayorista si éste no es pagado por el minorista de la mercadería consumida por el primero? Por eso el art. 1645 del Cód. Civ. preceptúa que los que ponen su trabajo ó materiales en una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste adeuda al empresario. Y no fué esa la acción que ha deducido el demandante.

1—Los esposos, ambos de nacionalidad alemana, se casaron en esta ciudad en 1884, ante el pastor y según los ritos de la iglesia metodista episcopal. El marido ocurrió á los tribunales pidiendo el divorcio. Convocadas las partes á juicio verbal se suspendió la audiencia diciendo que encontrarían quizá una solución más conveniente y más satisfactoria para los interesados. Y con efecto, luego presentaron un escrito en el que reconociendo la nulidad del matrimonio por no haberse observado en él las formalidades establecidas por el Cód. Civ., pedían al juez se sirviera declarar dicha nulidad y aprobar al mismo tiempo el arreglo que hacían sobre los intereses, renunciando recíprocamente á todas las acciones que pudieran corresponderles. El vicio de forma que atribuían

tantes, celebrados ante un pastor de distinta secta de

á su casamiento consistía en no haber intervenido en su celebración, según lo prescribían las leyes vigentes, los ministros de las comuniones á que pertenecían los contrayentes; porque siendo el esposo católico y perteneciendo la esposa á la iglesia evangélica, se habían casado bajo el rito y con la intervención del pastor metodista episcopal. Se acreditaba que la esposa pertenecía á la iglesia Evangélica, por las correspondientes partidas de bautismo y de confirmación, que se habían exhibido en autos, autenticadas en debida forma, espedidas en Berlín y firmadas por el pastor de la iglesia de San Marcos de la espresada comunión. El escrito presentado al Juez, de común acuerdo de partes, ¿debía ser considerado como una transacción, un reconocimiento, ó una demanda? Esta cuestión es importante, pero en realidad no ofrece dudas ni dificultades; los esposos reconocen como nulo su matrimonio, y demandan de común acuerdo, la declaración de la nulidad, arreglando al mismo tiempo y transigiendo en las cuestiones civiles que podrían suscitarse en consecuencia de esa declaración. Esto puede hacerse legalmente, pues aunque no sea permitido transigir sobre el estado de las personas, es lícito sinembargo, hacerlo sobre los intereses que de él dependan; y en cuanto al reconocimiento de la existencia de causales de nulidad en el matrimonio, si bien no se justificarían con él, tampoco perjudicaría el derecho de acreditarlas por otros medios legales. Siendo indisoluble el vínculo matrimonial, el casamiento no puede disolverse de común consentimiento, sino por las causas determinadas por la ley, ni éstas podrían acreditarse tampoco por el solo reconocimiento de los cónyuges, aunque si realmente existiesen y se probasen por otros medios la declaración de nulidad sería procedente, de conformidad al deseo y á la petición de las partes. Entonces, pues, en el caso presente, con absoluta prescindencia del reconocimiento de la nulidad de su matrimonio que hacen los demandantes, se debe contraer toda la atención á examinar la suficiencia ó insuficiencia legal de las causales en que la fundan, como también á averiguar la eficacia ó fuerza de los medios probatorios que se deducen. Y hemos visto que esas causales consistían en que los contrayentes no pertenecían al rito de la iglesia en que se casaron, y cuyo pastor, por tanto, no se hallaba habilitado para autorizar esa unión; el esposo, según parece, era católico, la novia de la comunión Evangélica y el sacerdote, en fin, de la metodista Episcopal. Con respecto á la regilión del esposo que no resultaba bien justificada, porque el documento que se aducía al respecto, aunque parecía sincero y no infundía sospecha alguna, era un instrumento privado, que no había sido debidamente





aquella á que pertenecen los contrayentes, son nulos y los

autenticado, y por consiguiente no podia merecer fe en juicio, ni admitirse por prueba legal. El hecho de pertenecer una persona al protestantismo, no implica que pertenezca á determinada secta, porque consistiendo principalmente aquella religión en sustraerse de la obediencia del Pontífice Romano, conservando más ó menos íntegras las doctrinas del cristianismo, declararse protestante equivale sin duda alguna á separarse del catolicismo y desconocer la autoridad de la iglesia universal. Pero estando dividido el protestantismo en innumerables sectas; por el hecho de declararse protestante un católico, como lo habia hecho el esposo en el caso que nos ocupa, esto no podia importar en manera alguna adoptar la fe ó ingresar á la iglesia Metodista Episcopal, bajo cuyos principios religiosos contrajeron matrimonios las partes, pues igualmente seria protestante haciéndose Presbiteriano, Anabaptista ó Luterano. Por consiguiente, debiendo para la validez del matrimonio intervenir el pastor de la comunión de los contrayentes, la declaración vaga y genérica de protestante, de ninguna manera habilitaria á un pastor Metodista Episcopal para proceder á autorizar la unión que se trataba de celebrar. No puede admitirse en modo alguno que las personas que se presenten á casarse ante el cura, pastor ó sacerdote de una religión, por el mismo hecho declaren pertenecer á esa comunión, á la cual por lo menos ingresan entonces así, y que eso basta para que el matrimonio sea válido. De admitirse semejante teoría, habria sido completamente inútil que el Código exigiese como condición esencial á la validez del matrimonio, según lo requiere sinembargo, el que sea autorizado por un sacerdote de la comunión á que pertenezcan los esposos; pues esto nunca podria dejar de suceder si por el hecho de intentar casarse y de celebrar matrimonio ante algún sacerdote, de cualquiera religión que fuere, debiera suponerse que los esposos ingresaban y se incorporaban á ésta. Tratándose de religiones positivas, entre los cuales deben enumerarse las diversas sectas del protestantismo, todas ellas se encuentran constituidas en iglesias, tienen un símbolo ó doctrina que las caracteriza, distinguiéndolas de las demás, usan un culto especial, sus miembros se reconocen entre sí, y en fin, emplean ciertas ceremonias para la incorporación á su seno de nuevos neófitos, además de la profesión de fe, y á ninguna se ingresa por solo el matrimonio. Acaso porque un judío ó mahometano, ocultando su religión, se presentara á casarse ante un cura católico; ¿deberia desde luego ser tenido por tal y su matrimonio se habia de considerar válido aún cuando no fuese bautizado, ni mucho menos aceptar la doctrina del cristianismo y las enseñanzas de la iglesia

tribunales pueden así declararlos á solicitud de parte.—
Jur. Civ., tom. 2, pág. 160, Ser. 3ª.

católica? No, ciertamente; el enunciar esa proposición es incurrir en un error manifiesto. Otro tanto debe decirse con respecto á los miembros de las diversas iglesias protestantes. No es admisible que por casarse dos personas ante un sacerdote de cualquiera de ellas, queden incorporados de hecho á esa iglesia, aún cuando no conozcan sus principios y tengan fe en sus creencias; antes bien, ese acto en tales condiciones importaría una profanación; y si á pesar de esto, se hubiera de considerar válido semejante matrimonio, habiendo querido el Código que éste llevase carácter religioso, no habría hecho más que convertir el culto en una gran farsa. Resulta, pues de lo espuesto que en el caso que nos ocupa no basta seguramente que el esposo al casarse se declare protestante, aun cuando su ánimo sea efectivamente el abandonar el catolicismo para incorporarse á determinada iglesia disidente y conferir jurisdicción al pastor de la comunión metodista á la que no parece haber pertenecido jamás, á fin de habilitarlo legalmente á autorizar su matrimonio. Además el matrimonio era nulo por razón de la comunión á que pertenecía la esposa, pues se había justificado legalmente que ella pertenecía á la iglesia Evangélica; y no puede sostenerse, teniendo en cuenta las prescripciones terminantes del Código Civil, que un pastor protestante pueda casar á todos los disidentes, aun cuando sean de diversa comunión. Se dijo por las partes que ellas, ni pertenecían á la iglesia Metodista, ni mucho se preponían ingresar á su comunión, y que si se casaron ante el pastor de este culto fué en la equivocada inteligencia de que esto era indiferente. De este hecho se deducía el argumento, diciendo que la ignorancia de las leyes ó el error del derecho jamás puede servir de excusa para impedir los efectos legales de los actos lícitos, ni evadir la responsabilidad por los ilícitos. La doctrina que se invoca es cierta, pero esta vez se la aplica inconvenientemente, pues cuando se habla de actos lícitos se les supone válidos, porque estos son los únicos que pueden producir efectos legales, como se explica en la nota al artículo aludido, en la cual se dice: «el sentido de la máxima *error juris nocet*, es bien claro: perjudica al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico, regular y válido. Efectivamente, si por ignorancia ó error de derecho se hubiera omitido la forma esencial de un acto jurídico como el matrimonio entre disidentes por ejemplo, no por eso sus agentes resultarían obligados, antes bien siendo nulo el acto, no podría producir efecto alguno, ni originar obligaciones, según el principio bien conocido: *quo de jure nullum est, nullum sortitum effectum*. Entonces pues





2. **Matrimonio**—Si con arreglo á las disposiciones de la ley argentina el divorcio no disuelve el vínculo, la madrestra, existiendo la madre, es un extraño para la causante de la sucesión cualquiera que fuesen las leyes que hayan autorizado el doble matrimonio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 5, Ser. 3^a.

3. **Matrimonio**—La legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres no requiere forma expresa; se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3^a.

4. **Matrimonio**—Solo emancipa á los menores cuando se ha verificado con el consentimiento de los padres.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 97, Ser. 3^a.

5. **Matrimonio**—Los jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos despues del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 115, Ser. 3^a.

6. **Matrimonio**—Su justificación es esencial para la declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 62, Serie 4^a.

nada importa en el caso, ni es capaz de variar de especie, el que el error que indujo á los contrayentes á hacer intervenir en su matrimonio á un pastor de diversa comunión, sea un error de derecho, porque esta circunstancia no sería suficiente á validarlo, afectaría siempre su forma esencial, y debe ser tenido y declarado por nulo. En contra de lo resuelto en 1^a Instancia.

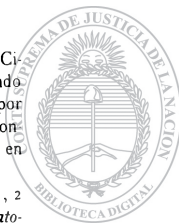
2—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Legitimación*, núm. 1.

4—Véase: *Emancipación*, núm. 1.

5—Véase: *De oficio*, núm. 3.

6—La esposa era quien pretendía la herencia y aparecía según la partida de casamiento agregada en autos, que estaba casada con otra persona distinta de aquella de cuya sucesión se trataba. Era indispensable justificar el matrimonio.



7. **Matrimonio**—La legislación anterior al Código Civil reconocía como hijos naturales á los nacidos cuando los padres podían contraer matrimonio, aun cuando por la época de la concepción resultaran adulterinos; y en consecuencia, el subsiguiente matrimonio los convertía en legítimos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

Matrimonio—Véase: *Separación de bienes*, núms. 1, 2 y 3—*Padrastro*, núm. 1—*De oficio*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 3—*Hijo natural*, núm. 9.

Mayor cuantía—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 8—*Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Contrato verbal*, números 4 y 8.

Mayor edad—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1—*Emancipación*, núm. 2.

Mayor término—Véase: *Prescripción de una obligación*, núm. 2.

Mayor valor—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.

Medía comisión—Véase: *Martillero*, núm. 2.

Medicina—Véase: *Acciones civiles*, núm. 1.

Medición—Véase: *Precio*, núm. 2—*División en especie*, núm. 1.

Medida—Véase: *Venta ad corpus*, núm. 1.

1^a. **Medidas**—Las cartas misivas no están obligadas á espresar las medidas con arreglo al sistema métrico decimal, y en consecuencia no puede aplicárseles multa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

Medidas conservatorias—Véase: *Sentencia*, núm. 4.

1^b. **Medidas precaucionales**—La omisión de ellas, importa la culpa ó negligencia que la ley exige para hacer respon-

7—Véase: *Hijo natural*, núm. 12.

1^a—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 71.



sable daños y perjuicios al autor de un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

Medidas precaucionales—Véase *Sentencia*, núm. 4.

Mejor derecho—Véase: *Capellanía*, núm. 2—*Posesión*, núm. 5—*Prelación*, núm. 1—*Juicio ordinario*, núm. 3.

1^a. **Mejor proveer**—Es facultativo del Juzgado dictar las medidas que crea necesarias para mejor proveer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 143, Ser. 4^a.

Mejor proveer Véase: *Diligencias para mejor proveer*, núm. 1.

1^b. **Mejoras**—El locatario culpable de la rescisión del contrato, carece de derecho para cobrar las mejoras hechas en el predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 22, Serie 3^a.

2. **Mejoras**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas, reconocido el derecho de retención en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, página 140, Ser. 4^a.

Mejoras—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 17.

1. **Memoria**—De la Exma. Cámara de lo Civil correspondiente al año 1890.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 72, Serie 4^a. Correspondiente al año 1889.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 374, Ser. 3^a. Correspondiente al año 1891.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 410, Ser. 4^a.

1. **Memoria pía**—El capital destinado á una memoria

1^a—Es la jurisprudencia que la Cámara quiere establecer como uniforme, después de haber vacilado á este respecto en algunas de sus resoluciones. El sumario tiene su fundamento en los arts. 57 y 215 del Cód. de Proc. Nos hemos pronunciado siempre en contra de esta jurisprudencia. Véase: verb. *Diligencias para mejor proveer*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Locatario*, núm. 6.

2—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1^c—Al patrono no puede corresponder más derecho que el de per-



pía, aunque sea de simple conciencia no puede ser entregado á los patronos, puesto que los venideros tienen sobre el capital iguales derechos y obligaciones.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 35, Ser. 3ª.

Menor cuantía—Véase: *Excepción de incompetencia*, número 1—*Contrato verbal*, núm. 8.

Menor valor—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núms. 23 y 24—*Cesión de derechos*, núm. 5.

1. **Menores**—Los bienes de menores no pueden ser hipotecados con renuncia de los trámites que la ley fija para su venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 185, Ser. 4ª.

2. **Menores**—La testamentaria no está obligada al pago de la asistencia médica de los menores extraños á la familia, aun cuando como agregados viviesen en el mismo domicilio del causante y llevasen su apellido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 426, Ser. 4ª.

3. **Menores**—La madre en ejercicio de la patria potes-

cibir los réditos ó intereses durante su vida, despues de lo cual ese mismo derecho con el patronato, pasa á la persona designada en el testamento.

1—Se trataba de gravar inmuebles de menores en el Banco Hipotecario Nacional, á lo que el Juez no hizo lugar, porque la venta de inmuebles de menores está sujeta á un procedimiento especial tendente á garantizar eficazmente los derechos de aquéllos. Para poder contratar con el Establecimiento mencionado, es necesario la renuncia de ese procedimiento, pues es sabido que el Banco no hace préstamos sin que se le acuerde la facultad de realizar los bienes afectados sin forma de juicio, caso de no cumplirse lo estipulado, siendo así que esa renuncia no puede autorizarse judicialmente porque las leyes que protejen los intereses de menores son de orden público.

2—En este caso los menores son extraños á la testamentaria. Solo habría derecho á cobrar los honorarios si se comprobase que los servicios fueron prestados por orden del causante. Véase: *Asistencia médica*, núm. 1.

3—Véase: *Fondos*, núm. 1.



dad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 232, Ser. 4^a.

4. **Menores**—La tutela de los menores corresponde á la abuela, y solo por causas graves á juicio de los Tribunales, puede ser privada de ese derecho.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Menores—Véase: *Alimentos*, núms. 2 y 3—*Bienes*, número 6—*Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 1 y siguientes—*Bienes propios*, núm. 2—*Derechos y acciones*, núm. 1—*Enemistad*, núm. 1—*Esposa*, núm. 4—*Gastos*, núm. 1—*Herederos mayores*, núm. 2—*Padre*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 2—*Personería*, núms. 8 y 12—*Prejuzgamiento*, núm. 2—*Prescripción contra menores*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 7—*Rendición de cuentas*, núms. 7, 8 y 25—*Testamentaria*, núm. 3—*Tutor*, núm. 1 y siguientes—*Tutor especial*, núm. 1 y siguientes—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

Mensualidad—Véase: *Contrato de arrendamiento*, números 6 y 25.

1. **Mensura**—No puede ser aprobada la mensura y ubicación si se opone parte legítima que justifica que la operación lesiona derechos adquiridos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 187, Ser. 3^a.

2. **Mensura**—No procede la citación de evicción en el juicio de mensura.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 106, Ser. 3^a.

Mercaderías—Véase: *Retención*, núm. 1.

Miedo—Véase: *Declaraciones*, núm. 1.

Miembros—Véase: *Personería*, núm. 9—*Sociedad anónima*, núm. 2.

4—¹ Véase: *Abuela*, núm. 1.

2—Véase: *Evicción*, núm. 4.



1°. **Ministerio de menores**—Está obligado á reconocer y sostener como válidos los actos llevados á cabo con su intervención, cualquiera que sea la persona que desempeñe el puesto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 3ª.

2. **Ministerio de menores**—El reconocimiento médico para la declaración de incapacidad, debe practicarse aun cuando carezca de personería el denunciante, si el Ministerio de menores hace propia la denuncia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 387, Ser. 3ª.

1°. **Ministerio fiscal**—Solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes sobre alimentos y litisexpensas.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 152, Ser. 3ª.

Ministerio fiscal—Véase: *Concurso civil*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 32.

Misión—Véase: *Notificación*, núm. 8.

Misiva—Véase: *Costa*, núms. 1 y 2.

Modificaciones—Véase: *Contrato*, núms. 3, 6, 9 y 20—*Diligencias de prueba*, núm. 27—*Prueba de un contrato*, núm. 1—*Instrumento público*, núm. 4—*Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Contrato por escritura pública*, núm. 1—*Forma*, núm. 2—*Obligación*, núm. 1.

Modo de vivir—Véase: *Servicios*, núms. 6 y 8.

Moneda—Véase: *Capellanía*, núm. 3.

1. **Moneda de oro**—La conversión de la moneda de oro

1ª—Véase: *Actos*, núm. 1.

2—Véase: *Incapacidad*, núm. 3.

1ª—Véase: *Alimentos*, núm. 6.

1—El sumario no espresa con fidelidad la mente de la resolución recaída. El caso es el siguiente: una persona se comprometió á remitir una suma de dinero para levantar una inhibición: la remisión se hizo en moneda de oro, y se resolvió «que si se tiene presente que el deudor con arreglo á lo prescripto en el art. 619 del Cód. Civ., cumple la



entregada para el pago de moneda nacional, debe hacerse al tipo de Bolsa del día de la entrega.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 101, Ser. 4^a.

1. Moneda especial—La designación de pesos fuertes en una obligación cuando éstos eran la moneda usual, no

obligación, entregando la especie designada ú otra en moneda nacional al cambio corriente en el día del vencimiento de la obligación, habiendo el demandado hecho la entrega del oro en una fecha dada sin que se haya observado por las partes que tal día no fnera el del vencimiento de la entrega, el Juzgado debe tenerlo por tal y en su virtud resolver que la suma de que se trata sea convertida á moneda nacional con arreglo al tipo en que se haya cotizado el oro en la Bolsa en la indicada fecha, que fué la de la entrega la que coincidía con la fecha implícita del vencimiento de la obligación.» En su consecuencia se ordenó que el cómputo se hiciera de acuerdo con la fecha del vencimiento y de la entrega. Pero resulta por otra parte, que la mente de la resolución es que el cómputo debe hacerse de acuerdo con el tipo corriente el día del vencimiento y no con la de la entrega ó pago. Esta interpretación está de acuerdo con la ley—art. 619 del Cód. Civ. y art. 3^o de la ley de 15 de Octubre de 1885.—Sin embargo la Cámara resolvió, en el caso de Mabragaña con O'Connor, lo contrario.

2.—El Juez de 1^a Inst. dijo, que estudiando el convenio y en especial el artículo que se relaciona con el pago «se ve que existe estipulación espresa que hace conocer la intención de las partes de establecer el pago en pesos oro, pues aunque se ha empleado la palabra pesos fuertes, era la denominación dada á la moneda antes de regir la ley sobre curso forzoso. Que este pago debía hacerse en dicha moneda, no solo porque así fué convenido sino también porque está resuelto por la Suprema Corte nacional en la interpretación dada á la ley sobre moneda de curso legal de fecha 15 de Octubre de 1885 en su fallo de 6 de Febrero de 1866; causa 12, tom. 20, Ser. 2^a.» Esta resolución fué revocada por la Cámara fundiéndose en que ni la cláusula pertinente del convenio inserto en la escritura, ni los demás antecedentes que la misma escritura suministraba, como también la de cesión, autorizan la conclusión de que deba solventarse la deuda en oro. La cláusula segunda del convenio, que era la relativa á la venta, determinaba el precio lisa y llanamente en pesos fuertes, y los antecedentes de donde se derivaban los derechos del cesionario, demuestran acabadamente que el valor de tales derechos siempre se entendió expresado á papel ó en moneda

importa que el pago deba ser hecho en moneda especial ú oro sellado, sino en la moneda usual que haya sustituido á aquélla en la circulación.—Jur. Civ., tom. 5, página 50, Ser. 3ª.

2. Moneda especial—El pago por consignación de una

de curso legal. Esta resolución de la Cámara está en abierta oposición con otro caso resuelto.—Véase el número siguiente.—A este respecto la jurisprudencia varia al infinito y constituye un verdadero mosaico que abona muy poco en pro de la seriedad de ese Tribunal y mucho contra su competencia jurídica. En algunos casos va hasta el prevaricato, como puede verse en el verb. *Moneda de oro*.

2—La obligación estaba concebida á pesos moneda corriente de los antiguos de la Prov. de B. Aires. Si la obligación hubiese sido contraída á pesos fuertes, otra habría sido la resolución, pues las concebidas en esos términos deben solventarse en oro sellado. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Obligaciones*, núm. 3, en contra véase el número precedente. Estos dos casos no son análogos á los del sumario, porque allí la obligación se contrajo á pesos papel moneda corriente de los antiguos de B. Aires, mientras que estos últimos citados fueron á pesos fuertes. Véase asimismo, verb. *Oro sellado*, núms. 1 y 2, Inst. tom. 2º. Para resolver la cuestión en el sentido del sumario se dijo, que la ley de Noviembre de 1881 que estableció la unidad monetaria, dispuso por su art. 13 que los Bancos de emisión existentes procederían dentro del término allí establecido, á renovar toda su emisión de billetes, sustituyéndolos por moneda nacional. Que tal sustitución se verificó entregando moneda nacional en la equivalencia del valor de esta moneda con relación el peso fuerte, y respecto del papel moneda, en la proporción que establece la ley de la Provincia, de 1864; es decir, computándose la relación de valor á razón de un peso fuerte por cada veinticinco pesos papel moneda, que por consiguiente las obligaciones de entregar cantidades de pesos moneda corriente quedaron necesariamente sustituidas por la de entregar moneda nacional en la equivalencia del peso fuerte atendiendo únicamente á la diferencia entre el peso de ambas unidades monetarias; que como se vé la moneda estipulada no solo no constituye una obligación á moneda especial, no obstante la relación de valor que le fijó la ley con el peso fuerte, sino que además aquella moneda desapareció de la circulación y fué sustituida por moneda nacional, y en tal caso el crédito no podía considerarse amparado por la escepción contenida en la segunda parte del art. 3º de la ley de curso forzoso, que solo





suma en moneda nacional por su equivalencia, es procedente siempre que la obligación hubiese sido contraída a moneda corriente, que no puede ser calificada como la

comprende las obligaciones contraídas con designación de moneda especial, en cuyo caso como se ha dicho, no se encuentra la obligación que se cobra—arts. 759 y 760, Cód. Civ.—Por otra parte, la obligación que resulta de un préstamo de dinero nunca es mayor que la suma numérica anunciada en el contrato, dice el art. 702 del Cód. de Comercio, agregando, que si hay alza ó baja de la moneda antes del pago, el deudor cumple, no mediando estipulación contraria, con entregar la suma numérica prestada en la moneda corriente al tiempo de verificarse el pago. El art. 619 del Cód. Civ., concordante con la anterior disposición, prescribe á su vez, que cuando la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie ó calidad de moneda nacional, cumple la obligación dando la especie designada ú otra especie de moneda nacional al cambio que corre en el lugar el día del vencimiento de la obligación. Ahora bien, retirada de la circulación la moneda nacional existente cuando se contrajo la obligación y retirada asimismo la de pesos fuertes, creadas por la ley de 22 de Setiembre de 1875, en virtud de lo dispuesto por la ley del 5 de Noviembre de 1881, que estableció el peso de oro ó plata como la unidad monetaria de la República, prescribiendo además, que los Bancos de emisión existentes deberían renovarlas en billetes á moneda nacional, es incuestionable al parecer, que los deudores no pudiendo entregar la misma especie de moneda recibida ni en pesos fuertes en que ella fué convertida por estar proscripta de la circulación, tienen el derecho de hacerlo en la moneda nacional establecida por la ley y á la que como se ha dicho, fué convertida aquélla con la diferencia correspondiente al tipo fijado en las relaciones de esas monedas. Pero se observa que el pago hecho en billetes declarados de curso legal sin la diferencia que corresponde al metal ú oro sellado en que debe satisfacerse la obligación contraída á moneda especial y resulta que hay en esto también un error. La ley que declaró la inconvención del actual billete de Banco, considerado de curso legal, si bien es cierto que en su art. 3° exceptúa expresamente las obligaciones contraídas con designación de moneda especial, no puede por esto decirse que esté comprendido en esa excepción una moneda que habia desaparecido y mandábase retirar de la circulación. Esa excepción se refiere por el contrario, á las monedas extranjeras de circulación legal en la República, hasta tanto no se haya acuñado la

moneda especial de oro que prevé la ley general de monedas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 176, Ser. 4^a.

Moneda especial— Véase: *Competencia*, núm. 4.

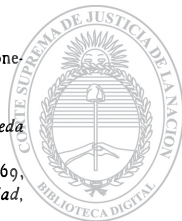
Moneda nacional— Véase: *Capellanía*, núm. 3—*Moneda especial*, núm. 2.

Monto—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 2, 64, 67, 69, 72 y 74.—*Costas*, núm. 35—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 4.

1. **Mora**—Siendo el lugar del pago, á falta de convenio expreso, el domicilio del deudor, para que exista mora, el precio de la locación debe exigirse en aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 3^a.

2. **Mora**—Justificada la del comprador en cumplir el contrato de compraventa constante de documento privado, procede se declare su rescisión.—Jur. Civ., tom. 6, página 408, Ser. 3^a.

3. **Mora**—Solo existe desde la fecha en que se demande judicialmente el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 402, Ser. 4^a.



cantidad de oro y plata determinada por el art. 7º de la citada ley del 5 de Noviembre de 1881 y dado por el P. E. el decreto á que la misma se refiere. Por consiguiente, no pudiendo decirse comprendida en la excepción mencionada la antigua moneda corriente y el peso fuerte á que ella fué convertida, resulta que no puede tampoco ampararse de esa excepción el acreedor para exigir del deudor el pago de la obligación en oro sellado ó el de la diferencia correspondiente á la moneda en que debe hacerse el pago según el tipo en que se estimaba en aquella época con relación al oro sellado. Favor. cia también esta resolución la circunstancia de no aparecer de autos acreditado que la obligación de que se trataba, hubiera dejado de cumplirse á su vencimiento por parte de los deudores.

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase. verb. *Alquiler*, núm. 1.

2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 10.



4. **Mora**—Para que exista mora en el pago del alquiler, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial o extrajudicial en el domicilio del deudor, siempre que no exista lugar designado para el pago.—Jur. Civ., tom. 8, página 349, Ser. 4^a.

Mora—Véase: *Desistimiento*, núm. 6—*Locación*, núm. 4—*Obligación*, núm. 14—*Escritura pública*, núm. 27—*Daños y perjuicios*, núms. 57 y 98—*Obligación de hacer*, núms. 11 y 14—*Contrato de arrendamiento*, núm. 25—*Intereses*, núm. 8.

1^a. **Moratorias**—Esta ley solo es aplicable á las obligaciones comerciales sin que pueda fundar la excepción de espera opuesta á la ejecución de una hipoteca.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 96, Ser. 4^a.

1^b. **Muebles**—El marido, además de los alimentos, debe pagar los muebles que la esposa necesite para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

Muebles—Véase: *Alhajas*, núm. 1—*Depósito de muebles*, núm. 1—*Comisión*, núm. 4—*Reivindicación*, núm. 9—*Bienes testamentarios*, núm. 2.

1^c. **Muebles embargados**—Si el tercerista no justifica el dominio de los muebles embargados, su acción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 402, Ser. 4^a.

Muebles embargados—Véase: *Tercería*, núms. 2 y 6.

4—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 1.

1^a—Véase: *Excepción de espera*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 14.

1^c—Si él no está en posesión de ellos: porque en caso afirmativo la posesión basta para acreditar el dominio, y entonces la prueba incumbiría al que alega que los bienes no son del que los posee. Pero si los bienes no están en poder del tercerista entonces el *onus probandi* gravita sobre él—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.



Muerte—Véase: *Agravio moral*, núm. 1.

1^a. **Mujer**—Consentido el auto en que se tiene por parte á una mujer como mandataria ó procuradora de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil de la apoderada.—Jur. Civ., tom. 9, página 18, Ser. 4^a.

Mujer casada—Véase: *Posiciones*, núm. 1—*Venia*, número 1.

1^b. **Multa**—Las cartas misivas no están obligadas á expresar las medidas con arreglo al sistema métrico decimal y en consecuencia no puede aplicárseles multa.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 253, Ser. 4^a.

2^a. **Multa**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes obligados solidarios de la pena.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4^a.

Multa—Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, número 1.

1^c. **Municipalidad**—Aun después de la promulgación del Cód. Civil, para que los terrenos formados por aluvión correspondan en propiedad á la Municipalidad, debe existir perfectamente deslinada la extensión de ribera que aquél fija á los ríos navegables.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

2^b. **Municipalidad**—Justificado por títulos preexistentes que el terreno comprendido entre límites determinados ha salido del dominio público, la Municipalidad que pre-

1^a—Véase: *Mandatario*, núm. 15.

1^b—Véase: verb. *Carta misiva*, núm. 1.

2^a—Véase: *Acción*, núm. 3.

1^c—Véase: *Aluvión*, núm. 1.

2^b—Véase la nota al verb. *Aluvión*, núm. 1, donde está estudiado el punto.



tenda reivindicar un sobrante, debe justificar su derecho por otro título que el de soberanía que las leyes le acuerdan, cuando el poseedor carece de ellos.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 263, Ser. 3^a.

3. **Municipalidad**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen á un juicio contencioso-administrativo.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 432, Ser. 3^a.

4. **Municipalidad**—El conocimiento del juicio sobre falta de cumplimiento, por parte de la Municipalidad, de un contrato celebrado con particulares, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 432, Ser. 3^a.

5. **Municipalidad**—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre espropiación de terrenos ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 64, Ser. 3^a.

6. **Municipalidad**—Reconocido el hecho de haber salido el bien del dominio público, la Municipalidad carece de acción para oponerse á los derechos que terceros invoquen sobre él en tanto no presenten nuevo título que lo haya revertido al dominio municipal.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 263, Ser. 3^a.

7. **Municipalidad**—La propiedad que la ley orgánica

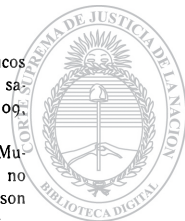
3—Véase: verb. *Contrato*, núm. 1.

4—Véase: *Contrato*, núm. 2.

5—Véase: *Demolición*, núm. 1.

6—Véase: *Dominio público*, núm. 1.

7—La cuestión se trabó entre la Municipalidad y el Consejo Nacional de Educación respecto á quién correspondían los bienes inmuebles de una herencia declarada vacante. El Fisco fué declarado heredero en el año 1873. Esta sucesión debe estudiarse bajo el punto de vista de las leyes anteriores á ese año, por consiguiente las de 1875 y 1884 no



atribuye a la Municipalidad sobre los terrenos públicos de la Capital solo se refiere a aquellos que no hayan salido del dominio público.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3ª.

8. **Municipalidad**—Los actos y resoluciones de la Municipalidad ejerciendo derechos de persona jurídica, no pueden fundar un juicio contencioso-administrativo; son de competencia exclusiva de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 336, Ser. 3ª.

pueden aplicársele. Esas leyes anteriores son la Ley Org. Mun. de 2 de Noviembre de 1865 y la Ley de Educación del 31 de Agosto de 1858, que creó fondos para la edificación de escuelas. La Ley Org. Municipal de 1865 en su art. 19 establece como de pertenencia de la Municipalidad los terrenos públicos comprendidos en el municipio, pero tal artículo no parece admisible en el caso presente, por cuanto se trata de terrenos públicos, es decir, que no hayan sido de propiedad particular, sino de terrenos que forman una herencia que ha sido declarada vacante, y a los que esa ley no se ha referido ni podido referir; pues si bien es cierto que estos terrenos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3588 y 3589 del Cód. Civ. pertenecen al Fisco, no lo es menos que el legislador ha designado la repartición a que deben adjudicarse en la ley de 31 de Agosto de 1858 que creó fondos para la edificación de escuelas y cuyo art. 1º, inc. 5º, establece: «que serán destinados exclusivamente para la creación de escuelas de varones y mujeres, el valor de los bienes que por muerte *ab intestato* fuesen, conforme a las leyes, declarados de propiedad del Fisco. Ante esta disposición legal la duda desaparece y resulta evidenciado el derecho del Consejo Nacional de Educación, tanto más si se considera que las leyes de educación de la Provincia de Buenos Aires de 26 de Setiembre de 1875 y Nacional del 8 de Julio de 1884, en el art. 62, inc. 3º y en el art. 44, inc. 10, respectivamente, dan a las herencias vacantes el mismo destino, y que si bien estas leyes no rigen el caso que nos ocupa, porque la declaratoria a favor del Fisco fue anterior, ellas sin embargo sirven para robustecer los derechos del Consejo, demostrando que la intención del legislador ha permanecido la misma en diferentes épocas en que se ha ocupado de la Educación.

8—Véase: *Juicio contencioso-administrativo*, núm. 2.



9. **Municipalidad**—En expedientes contenciosos, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

10. **Municipalidad**—Las modificaciones y transacciones que la Municipalidad lleve á cabo respecto de una calle no reconocida oficialmente, no pueden fundar un interdicto de obra nueva contra el tercer contratante, mientras la edificación no afecte al cuerpo de la propiedad perjudicada por la desviación de la calle.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 385, Ser. 4ª.

11. **Municipalidad**—Los Tribunales de la Capital son

9—Véase: *Apelación*, núm. 1.

10—Véase: verb. *Interdicto de obra nueva*, núm. 2.

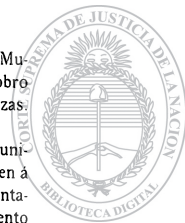
11—Si bien es cierto que el art. 8 de la ley de 18 de Setiembre de 1872 atribuye á los Tribunales federales el conocimiento de los juicios sobre infracción de esta misma ley para la aplicación de las penas de multa ó de prisión que impone, ello nada obsta á la jurisdicción y competencia de los juzgados de la Capital cuando no se trata de la aplicación de la referida ley nacional. Tampoco puede aplicarse con éxito lo dispuesto por el art. 2º de la Ley de 21 de Julio de 1888 que faculta al P. E. de la Nación para imponer multas administrativamente á los ferrocarriles. Las facultades de los poderes administrativos no son excluyentes de la jurisdicción y competencia de los tribunales de justicia; aquí no se trataba de la interpretación ó aplicación de una resolución administrativa del Gobierno Nacional sobre ferrocarriles para cuya efectividad habría que recurrir á los tribunales federales, sino únicamente, del cobro de una multa impuesta por la Municipalidad cuya jurisdicción compete á los tribunales comunes ú ordinarios. Tanto la ley de 18 de Setiembre como la de 21 de Julio son leyes de carácter general tendentes á reglamentar la administración de ferrocarriles en concepto de garantizar los intereses de la empresa así como los de las personas que con ellas contratan el transporte y seguridad de las mismas; pero esto no impide que la Municipalidad pueda dictar ordenanzas obligatorias también para los ferrocarriles dentro del municipio en cumplimiento de uno de sus primordiales deberes de velar por la seguridad personal y por los intereses públicos, en cuanto pudiera ser afectada por la existencia de los ferrocarriles y el movimiento de sus trenes. No solamente está comprendida im-

competentes para entender en el juicio seguido por la Municipalidad contra las empresas de ferrocarriles por cobro de multas impuestas por transgresión á sus ordenanzas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 410, Ser. 4^a.

12. **Municipalidad**—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios, si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el Reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 100, Ser. 4^a.

plícitamente esa facultad en las atribuciones del Poder Municipal por la naturaleza misma de sus funciones, sino que le está conferida explícitamente en la Ley Orgánica de la Municipalidad de 23 de Octubre de 1882, en el art. 47, inc. 4^a, cuando dispone que corresponde al C. Deliberante, en lo relativo á la seguridad, dictar ordenanzas sobre la dirección, pendiente y cruzamiento de ferrocarriles y tranvías, y adoptar las medidas necesarias para evitar los peligros que ellos ofrecieran, comprendiéndose entre éstas la colocación de enrejados en las calles al nivel de la vía, y guardas en los pasos á nivel, como también la construcción de alcantarillas y demás obras necesarias para el desagüe. Por consiguiente, la Municipalidad obra dentro de sus facultades legales al dictar las ordenanzas como la de 27 de Diciembre de 1888, la que en su art. 6^o impone á todas las empresas de ferrocarriles que corran dentro del municipio la obligación de colocar y mantener en todas las horas del tráfico peones guardianes en toda bocacalle, y á cada costado de los que atraviere la línea férrea á fin de prevenir á los transeúntes la proximidad del tren, bajo pena de multa de 500 pesos por cada infracción. La demanda ejecutiva de la Municipalidad es para hacer efectivas las multas impuestas á la empresa demandada por infracción del art. 6^o citado. El art. 64 de la Ley de 23 de Octubre de 1882 dispone que el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales se hará efectivo por vía de apremio judicial sirviendo de título suficiente para la ejecución la boleta respectiva con el visto bueno del Intendente Municipal; y el art. 65, inc. 15 declara, que son impuestos y rentas municipales el producto de los derechos de oficina y el de las multas establecidas por las ordenanzas municipales, circunstancias que se encontraban cumplidas en el título con que se inició la ejecución que motivó este pleito.

12—Véase: verb. *Construcciones*, núm. 1.





13. **Municipalidad**—La Municipalidad de la Capital no puede ser obligada al cumplimiento de contratos violatorios de su ley orgánica.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Serie 4^a.

14. **Municipalidad**—El Concejo Deliberante carece de facultades para enajenar bienes municipales sin llenar la condición esencial de licitación que requiere la ley Orgánica de la Municipalidad— Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 4^a.

15. **Municipalidad**— Las demandas tendentes al cumplimiento de una ordenanza municipal corresponden a la jurisdicción de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, página 305, Ser. 4^a.

Municipalidad —Véase: *Adoquinado*, núm. 1 — *Apelación de hecho*, núm. 2 — *Contrato*, núm. 20 — *Contencioso-administrativo*, núm. 1 — *Daños y perjuicios*, núm. 97 — *Interdicto de recobrar*, núm. 12 — *Embargo preventivo*, número 1 — *Empedrados*, núms. 1, 3 y 4 -- *Excepción de pago parcial*, núm. 1 — *Información supletoria*, núms. 1, 2 y 6 — *Informaciones*, núm. 1.

Municipio—Véase: *Poderes locales*, núm. 1.

Muro—Véase: *Reivindicación*, núm. 18.

13.—Véase: verb. *Contrato*, núm. 4.

14.—Véase: *Bienes Municipales*, núm. 1.

15.—Véase: *Demanda*, núm. 4.



Nacionalidad—Véase: *Excepción de incompetencia*, números 3, 4 y 5.

Nacimiento—Véase: *De oficio*, núm. 1—*Derecho en expectativa*, núm. 1.

1^a. **Necesidades**—Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta el género de necesidades que la indemnización debe llenar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4^a.

Necesidades sociales—Véase: *Pensión alimenticia*, número 1.

Negativa—Véase: *Posiciones*, núm. 2—*Espediente*, número 5—*Firma*, núm. 4.

Negligencia—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2, 8 y 10—*Daños y perjuicios*, núms. 10, 71, 79, 101, 111 y 113—*Testigos*, núms. 8 y 10—*Diligencias de prueba*, núms. 12 y 24—*Declaraciones*, núm. 6.

Negocio determinado—Véase: *Cesión*, núm. 2—*Contrato de sociedad*, núm. 3.

1^b. **Negocios**—La cancelación de cuenta sin salvedad

1^a—Véase: verb. *Condición*, núm. 3.

1^b—Véase: *Cancelación*, núm. 2.



importa que ella fué total y no parcial y que comprendía todos los negocios anteriores á su fecha.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 358, Ser. 3^a.

Nichos—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1.

1^a. Nieta.—Procede el rechazo de la acción de filiación natural ejercida por la nieta en virtud del derecho de representación, en tanto no justifique el reconocimiento hecho en vida por la madre natural—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 3^a.

1. **Nombramiento**—Para el nombramiento de un encargado del cobro de alquileres, en junta, deben ser citados todos los que tengan interés en la herencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 24, Ser. 3^a.

2.—**Nombramiento**—Consentido el nombramiento de oficio, las partes no pueden exigir que quede sin efecto, aun cuando el nombrado no llene las condiciones requeridas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 26, Ser. 4^a.

Nombramiento—Véase: *Perito*, núm. 2.—*Apoderado único*, núm. 1 y siguientes—*Arbitros*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 8—*Agrimensor*, núm. 1—*Administrador judicial*, núm. 3—*Tutor*, núms. 6 y 11—*Tutor especial*, núms. 2, 3 y 4—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

Nombre—Véase: *Filiación natural*, núms. 3 y 4—*Remate judicial*, núm. 23.

Nota—Véase: *Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1.

1^b. **Notificación**—La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario, debe hacerse

1^a.—Véase: *Filiación natural*, núm. 12.

2.—Porque cualquier defecto en que se incurra, queda subsanado una vez ejecutoriado el nombramiento. Es principio sentado y admitido, que no se puede volver sobre los autos pasados en autoridad de cosa juzgada.

1^b.—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 1.



por edictos si no se conoce el domicilio.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 207, Ser. 3^a.

2. **Notificación**—El Secretario que ha verificado la notificación no puede declarar en el incidente sobre nulidad de la misma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 219, Ser. 3^a.

3. **Notificación**—El término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 243, Ser. 3^a.

4. **Notificación**—La prórroga de un término corre desde la notificación de la concesión y no á continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 124, Ser. 3^a.

5. **Notificación**—Las notificaciones hechas en el domi-

2—Porque la notificación como parte integrante de un espediente es un instrumento público y como tal los que en él intervienen no pueden ser admitidos á declarar—art. 952 del Cód. Civ.

3—Las providencias que se dictan con motivo de la recusación solo tienen por objeto aceptarla y hacer cesar la intervención del Juez recusado como asimismo hacer saber el nuevo Juez que va á entrar á conocer para que en este último caso las partes puedan hacer nuevamente uso del derecho de recusación que les acuerda la ley; siendo evidente que todos estos trámites y providencias no impiden al demandado el contestar la demanda dentro del término legal.

4—La Cámara fundó su resolución diciendo, que es jurisprudencia de nuestros Tribunales que toda petición reputada pertinente, hecha en el trascurso de un término judicial, lo deja interrumpido á los efectos para que corre. Desde entonces el nuevo término ó prórroga acordada debe contarse desde la fecha de la notificación del respectivo decreto, de acuerdo con el art. 41 del Cód. de Proc. A no ser así, si el nuevo término hubiera de correr desde la fecha del prorrogado, podría aquél ser ilusorio si el despacho de la prórroga por cualquier motivo fuese demorado por el Juez. Por otra parte, tampoco podría hacerse uso de ese término ó prórroga sin conocerse por el interesado el resultado de la gestión hecha al respecto. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Términos judiciales*, núm. 2.

5—El art. 12 del Cód. de de Proc. establece que el domicilio una



cilio constituido, son válidas aun cuando el domicilio haya sido cambiado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 167, Ser. 4^a.

6. Notificación—Por nota, es válida en tanto la parte no justifique su asistencia personal á la oficina por medio de la firma en el libro respectivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4^a.

7. Notificación—El término para contestar directamente después del rechazo de las excepciones, corre desde la notificación personal de la parte.—Jur. Civ., tom. 3, página 67, Ser. 4^a.

8. Notificación—Personal, revalida cualquiera comisión

vez constituido, se reputa subsistente para todos los efectos legales mientras los interesados no designen otro. Cuando el sumario habla de domicilio cambiado, se refiere al cambio de hecho y llevado á cabo por la parte, pero no denunciado en autos ni constituido nuevamente.

6—Las notificaciones por nota surten el mismo efecto que si fuesen hechas en persona, pues las partes tienen obligación de concurrir diariamente á secretaría á fin de notificarse. Cuando se afirma por un litigante haber concurrido á secretaría con regularidad, esa afirmación no puede prosperar ante la aseveración del oficial público que afirma lo contrario. Para resguardarse contra olvidos involuntarios ó voluntarios de los empleados subalternos, es conveniente firmar en el libro del que nos habla el art. 31 del Cód. de Proc.

7—Esta resolución no podrá invocarse como precedente para la resolución de casos análogos, pues la Cámara confirmó *por sus fundamentos* un auto en que el Juez de 1^a Inst. había dicho: «el término del traslado de la demanda una vez consentido el auto que rechace las excepciones opuestas, ó lo que es lo mismo, notificada personalmente la parte que debe contestarla, de la providencia *de por devueltos cúmplase* que causa ejecutoria al respecto.» La resolución es evidentemente equivocada, pues el artículo 33 del Cód. de Proc. no enumera este caso entre los que deben notificarse personalmente ó por cédula. La Cámara con sus resoluciones arbitrarias introduce el caos en nuestra legislación adjetiva, que á no ser por esta circunstancia sería muy buena, pues sus preceptos son bien claros, y solo la cavilosidad de la justicia la hace oscura é incierta.

8—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 12.



que por defecto de procedimiento exista en el expediente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 63, Ser. 4ª.

9. **Notificación**—El término para deducir la nulidad del juicio por defecto del procedimiento corre desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4ª.

10. **Notificación**—Deben recibirse los testigos aun después de vencido el término si es imputable al actuario las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4ª.

11. **Notificación**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio; solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 116, Ser. 4ª.

12. **Notificación**—La nulidad por defecto del procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4ª.

13. **Notificación**—El término para oponerse al auto de de pruebas corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4ª.

14. **Notificación**—Debe declararse nula la sentencia recaída si el demandado fué notificado del traslado de la

9—Así resulta de la disposición del art. 240, inc. 2º del Cód. de Procedimientos.

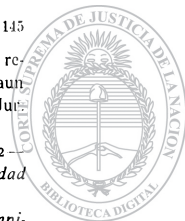
10—De autos no resultaba que los testigos habían sido citados para la audiencia señalada, ni el actuario había puesto nota alguna que aclarara la razón de no haberse hecho esa notificación.

11—Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

12—Véase: verb. *Escepción de nulidad*, núm. 2.

13—Porque este término no es común y por consiguiente empieza á correr separadamente para cada parte, desde el día siguiente al de la notificación.

14—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 11.



demanda en un domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero, aun cuando ese pronunciamiento le fuera favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4^a.

Notificación—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 22—*Demanda*, núm. 4—*Nulidad del juicio*, núm. 2—*Nulidad de la citación*, núm. 2—*Domicilio*, núm. 9.

Notificación personal—Véase: *Prescripción interrumpida*, núm. 1—*Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núms. 12 y 17.

Notificación por nota—Véase: *Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1.

1. **Notificaciones**—Practicadas las notificaciones en un domicilio que no es el del demandado, producen la nulidad de lo actuado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 10, Ser. 4^a.

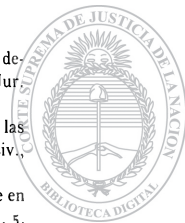
2. **Notificaciones**—Las notificaciones, como instrumentos públicos hacen prueba plena de las aserciones del oficial público mientras no se justifique su falsedad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 383, Ser. 4^a.

3. **Notificaciones**—Las notificaciones de la demanda deben hacerse en el domicilio de la persona demandada, si resulta falso, los procedimientos ulteriores adolecen de nulidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 72, Ser. 4^a.

1—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 7.

2—Las notificaciones fueron hechas de acuerdo con lo establecido por el art. 38 del Cód. de Proc. Las actuaciones practicadas en los expedientes son instrumentos públicos—art. 979, inc. 4° del Cód. Civ.—Es sabido que el instrumento público hace plena fe de las aseveraciones que contenga, mientras no sea argüido de falso, siendo en este caso la prueba a cargo de quien aduce la nulidad—arts. 963, 994 y 995 del Cód. Civ.—Puede verse, de acuerdo con el sumario, el verb. *Notificación*, núm. 2 y su nota.

3—Art. 77 del Cód. de Proc.



4. **Notificaciones**—Son válidas las notificaciones que debiendo hacerse por cédula lo sean personalmente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 213, Ser. 4^a.

5. **Notificaciones**—Las notificaciones practicadas sin las formalidades que la ley prescribe, son nulas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 302, Ser. 4^a.

7. **Notificaciones**—Las notificaciones deben hacerse en los términos espresos que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 374, Ser. 4^a.

1. **Novación**—Al deudor que invoca la novación de la obligación, corresponde la prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 83, Ser. 4^a.

4—Si bien es cierto que el art. 33 del Cód. de Proc. establece que las notificaciones de las providencias allí enumeradas deben ser hechas en el domicilio de la parte, esto no quita ni quiere decir que no se pueda notificar en secretaría á las personas que comparezcan con tal objeto, teniendo por lo tanto igual, sino mayor fuerza que la notificación por cédula. Debe tenerse presente que las diversas actuaciones de un expediente son instrumentos públicos—art. 979, incs. 2 y 4 del Cód. Civ.—y por consiguiente hacen plena fe en cuanto á las enunciaciones que contienen—arts. 963 y siguientes.—El que pretenda atacar esas actuaciones de nulidad, debe probar los hechos en que la funda.—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

5—La nulidad fué declarada en virtud de que en la cédula de emplazamiento, al notificarse la demanda, no se hizo constar la hora y el lugar en que se practicó la diligencia, y en que al dejarse no se hubiera dado lectura de ella, como lo prescribe el art. 38 del Cód. de Proc. También fué declarada la nulidad porque habiéndose dado por evacuado el traslado de la demanda en rebeldía del reo, ese auto no le fué notificado á éste en ninguna forma, lo que es bastante para declarar la nulidad por infracción á la disposición del art. 433 del Cód. de Proc., de acuerdo con lo prescripto en el art. 40.

1—La novación alegada importa en este caso una verdadera defensa, una excepción, un hecho nuevo que se aduce en juicio: su prueba incumbe al que la formula, en virtud del conocido aforismo: *Reus in excipiendo fit actor*: y *onus probandi incumbit actori*.—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.



2^a. **Novación**—La prórroga por instrumento privado, del plazo fijado en la escritura pública de hipoteca, aun cuando se modifique el interés estipulado, no importa una novación de la obligación primitiva.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 139, Ser. 4^a.

Nuevo día—Véase: *Testigos*, núms. 12 y 14—*Interdicto*, núm. 6—*Posiciones*, núms. 17 y 20—*Certificado médico*, núm. 1.

Nula—Véase: *Posesión judicial*, núm. 2.

1. **Nulidad**—Como acción, debe ser interpuesta en el perentorio término que la ley fija para la interposición del recurso.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 193, Ser. 3^a.

2^b. **Nulidad**—El recurso de nulidad solo es procedente cuando lo es el de apelación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3^a.

3. **Nulidad**—Debe conocer de la nulidad de la institución de heredero el Juez de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 222, Ser. 3^a.

4. **Nulidad**—La mala fe del tercero es indispensable

2^a—Véase: verb. *Hipoteca*, núm. 1.

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Nulidad*, núms. 1818 y 1832.

2^b—Art. 238 del Cód. de Proc. Se entiende que esto sucede cuando se dice de nulidad *contra un auto ó sentencia*, pero no cuando se dice de nulidad del procedimiento, puesto que no puede deducirse el recurso de apelación contra el procedimiento seguido.

3—Porque es un incidente del juicio sucesorio, y así lo prescribe el art. 634 del Cód. de Proc.

4—Es necesario no dar al art. 1051 del Cód. Civ. un alcance que no tiene. Deben tenerse en cuenta las disposiciones de los arts. 968 y 970, los que con referencia á la acción pauliana, exigen en el tercer adquirente por título oneroso, complicidad en el fraude para que ella pueda prosperar. La estabilidad de los contratos, sin la cual las transacciones se harían imposibles, requiere indefectiblemente el amparo en sus derechos, del tercero que contrata de buena fe. Los antiguos decían:

para que la nulidad declarada por los Jueces vuelva las

«*error communis fecit ius*» y son múltiples los casos consagrados por la ley y la jurisprudencia de nuestros tribunales, con los que se demuestra que antes y ahora la ley y la doctrina han salvaguardado el error invencible y han puesto fuera de todo reproche el derecho del que celebra sus convenciones de buena fe, presumiendo la propiedad en el que se la trasmite por título hábil, siquiera por sus formas esternas. Para no estenderse demasiado, y dejando de lado los casos de doctrina y jurisprudencia para citar solo los de la ley, y aun estos con referencia á los contratos, basta recordar estos ejemplos: son válidos y á cubierto de las acciones del verdadero heredero las enajenaciones del pariente en grado sucesible que de buena ó mala fe se apodera de la herencia y la posee pacífica y públicamente—Cód. Civ., art. 343a—Si una persona entrega á otra una cosa mueble en depósito ó con cualquier otro objeto y el depositario la vende, el propietario no tiene acción alguna contra el comprador de buena fe—art. 2767—El contenido de un instrumento público puede ser modificado por un contradocumento, pero este no produce efecto contra los sucesores á título singular, si su contenido no está anotado en la matriz y en la copia por el cual hubiese obrado el tercero—art. 996—Otro ejemplo más elocuente aún nos proporciona el art. 1967, cuando establece que en relación al mandatario y á los terceros con quienes éste ha contratado, es necesario que ellos hayan sabido ó podido saber la cesación del mandato para que aquél quede sin efecto; de modo que, aun cuando el mandante revocase su poder, los terceros que contrataran con el mandatario ignorando aquella circunstancia no se perjudicarían y el contrato sería obligatorio para el mandante. Basta pues esto, para demostrar que de acuerdo con el Código mismo, que no puede suponerse contradictorio en sus disposiciones, es necesario dar al art. 1051 su genuino significado. Anulable es el acto del mandatario que contrate con un poder revocado: anulable también el del depositario que vende lo ajeno, como el del heredero aparente que vende un inmueble que luego resulta no ser suyo, cuando se presenta el heredero verdadero. Y sin embargo ¿cómo es que la ley salvaguarda especialmente los derechos de un tercero de buena fe?—¿Cómo es que para la procedencia de la acción pauliana en relación al tercer adquirente á título oneroso, es necesaria la prueba de la complicidad de de este? ¿no los comprende á todos el art. 1051? No, incuestionablemente, aunque á primera vista parezca lo contrario.—Este artículo no puede establecer lo contrario que aquellos diseminados en todo el Código que concurren de consuno á determinar claramente la voluntad





cosas al estado en que se hallaban antes del acto anulado; la ley supone que siendo ella relativa aquel ha ce-

del legislador. El mismo art. 1057 que le sigue tan de cerca, presupone ya el caso de que no sea posible demandar al tercer poseedor, no obstante ese pretendido derecho del propietario en virtud del acto anulado, de poder reclamar del poseedor actual. No hay duda. Nuestro Codificador en su art. 1051 ha usado el término *anulado* por el vocablo *nulo* que debió emplear para espresar su concepto con más precisión, ó ha hecho uso de él en su acepción amplia, acaso para seguir á Goyena en su crítica del tecnicismo de la legislación francesa, cuando esclama: «Como si no fuera necesaria declaración en toda causa de nulidad, habiendo de haber alegación de un hecho y contradicción respecto de él ó del derecho.»—Concordancia sobre el art. 1163—Así queda resuelta la dificultad. Es sabido que hay nulidad absoluta y nulidad relativa—nulidad manifiesta—en que se producen sus efectos propios sin necesidad de declaratoria alguna; y nulidad que no es tal, hasta tanto los jueces la declaren en uso de su ministerio. En el primer caso se encuentra la nulidad declarada por la ley—art. 1018—En el segundo la que requiere sentencia, declarando espresamente la ley que los actos anulables que son aquellos en que el agente obra con incapacidad accidental, se reputan válidos mientras no sean anulados. Si el codificador en su art. 1051 se refiere solo á los actos nulos, nada habría que extrañar. No siendo excusable el error de derecho, no hay dificultad en aceptar que los derechos reales ó personales transmitidos á terceros sobre un inmueble por una persona que haya llegado á ser propietaria en virtud del acto *nulo*, queden sin ningún valor y puedan ser reclamados directamente del poseedor actual. Pero, ¿cómo llegar á esa misma consecuencia para con el acto *anulado* cuando precisamente ya antes el codificador dejaba establecido en el art. 1046 que el acto anulable se reputa válido, y solo se tendrá por nulo desde el día en que la sentencia lo anulase?—¿Cómo puede ser nula la compra del tercerista cuando ha obrado en virtud de un título, que aunque fuera anulable no era nulo y la nulidad no se había declarado?—¿Cómo puede serlo cuando la simulación en principio no es ilícita y la ley solo la repudia cuando por medio de ella se trata de inferir perjuicio?—No se diga que nadie puede dar más derechos que los que tiene, pues queda demostrado con ejemplos tomados del Código mismo que ese principio no llega hasta los terceros que contratan de buena fe. Nuestro comentador Segovia en su nota al art. 2157 reconoce también que los efectos de la nulidad solo se estienden hasta los terceros, cuando éstos son autores ó cómplices de ella; y en otra parte

dido á un error invencible.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5 Ser. 4^a.

5. Nulidad—La acción de nulidad deducida en juicio

—nota á su art. 2132—nos suministra un nuevo ejemplo, de que la enajenación á título oneroso salvaguarda el derecho del tercero que ha comprado á quien no podía venderle. No está demás robustecer la tesis que se viene sosteniendo, con los arts. 559 y 972 del Cód. Civ. Del primero resulta que, cuando el tercer poseedor es de buena fe, el acreedor solo puede demandar á la parte obligada para el pago del equivalente y la indemnización de pérdidas é intereses. El segundo, tratando de los efectos de la acción pauliana en relación al tercer adquirente de buena fe, prescribe categóricamente dicho artículo que el que hubiera adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar á éstos de los daños y perjuicios cuando la cosa hubiese pasado á un adquirente de buena fe, lo que no puede ser más claro en orden á la irresponsabilidad de ese adquirente de buena fe. No sería difícil demostrar con las mismas autoridades de la ciencia, citadas por nuestro codificador en su nota al art. 1651, que también esos jurisconsultos, á lo menos respecto de la acción pauliana y esceptuando á Zachariæ, solo han entendido dar á la nulidad alcance hasta el tercer poseedor de mala fe cuando se trata efectivamente de la adquisición por título nulo y no meramente anulable, como equivocadamente se supone que lo haya establecido nuestro Código.—Véase Marcadé, págs. 368 y 420, tom. 4^o, y Aubry y Rau, tom. 4, pág. 134. Por otra parte, no ejercitándose en el caso presente una acción de nulidad propiamente dicha, como lo observan Segovia en la nota al art. 971 y Aubry y Rau en el lugar citado, tampoco podría aplicarse á este litigio que versa sobre la acción pauliana, el art. 1051 del Código, origen de toda dificultad, sino el 968 y 970, espresos para aquella acción revocatoria y que exigen en el tercer adquirente, á título oneroso, complicidad en el fraude para que le alcancen los efectos aparejados á la misma en protección del acreedor perjudicado en sus derechos. Desde entonces la responsabilidad del adquirente, libre del alcance del art. 1051 del Código, solo puede dimanar de su complicidad en el fraude. ¿Existe pues, esa complicidad? El fraude no se presume, debe probarlo el que lo imputa sobre todo cuando el adquirente funda su derecho en un documento público que es válido y produce sus efectos propios hasta que sea anulado.

5—La suspensión del juicio ejecutivo solo tiene lugar en los casos de tercería—arts. 530 y 531 del Cód. de Proc.—y esto mismo no obsta





ordinario no basta para paralizar el juicio ejecutivo en que se funda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 114, Ser. 4ª.

6. Nulidad—La falta de intervención de un heredero que ha renunciado á la herencia, no es causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 131, Ser. 4ª.

7. Nulidad—La escepción de inhabilidad de título, cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de ésta pero no á su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 215, Ser. 4ª.

8. Nulidad—La escepción de inhabilidad del título fundada en la nulidad de la ordenanza municipal ó en su falta de equidad, es improcedente si el título llena los requisitos que la ley exige para su ejecución.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 200, Ser. 4ª.

á que se prosiga la ejecución ampliando el embargo sobre otros bienes —art. 533—El único derecho que la ley acuerda al deudor vencido en el juicio ejecutivo, es el determinado en los arts. 500 y 525, Cód. de Proc. Por otra parte, el juicio ordinario es una incidencia del ejecutivo, y por consiguiente no puede paralizar lo principal, porque importaría ordenarizar el juicio ejecutivo con perjuicio de los derechos del ejecutante haciendo frustáneo el objeto de la ley que se propone y desea que el acreedor sea pagado brevemente. Puede invocarse por analogía algunos casos resueltos. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Litispendencia*, núm. 1677; tom. 2º, mismo verb. núms. 3, 4, 5 y 6.

6—Solo tienen derecho á intervenir en un juicio los que tienen interés en el pleito, ya le compete este interés por derecho propio ó por representación. El interés es la medida de toda acción. Si no se tiene interés no se tiene derecho á intervenir. Y como el heredero que ha renunciado á la herencia se aparta de todo derecho, es evidente que carece de acción y de derecho para decir de nulidad, pues una vez renunciada la herencia es como si jamás hubiera sido heredero; ha dejado de ser parte interesada.

7—Véase el número siguiente.

8—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12, en cuya nota se impugna la doctrina sentada en el sumario.



9. Nulidad—Consentido el auto en que se tiene por parte á una mujer como mandatario ó procurador de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil del mandatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 18, Ser. 4^a.

10. Nulidad—Es nula la resolución dictada sin la debida sustanciación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Serie 4^a.

Nulidad—Véase: *Dominio*, núm. 1 —*Transacción*, número 5—*Recurso de nulidad*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 23.

1^a. Nulidad absoluta—La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Serie 4^a.

Nulidad absoluta—Véase: *Nulidad de un título*, núm. 3.

1^b. Nulidad como acción—La nulidad como acción debe ser interpuesta en el perentorio término que la ley fija para la interposición del recurso.—Jur. Civ., tom. 4, página 193, Ser 3^a.

Nulidad como acción—Véase: *Nulidad*, núm. 5

1^c. Nulidad de un acto jurídico—Al que pretende la nuli-

9—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 15.

10—Art. 237 del Cód. de Proc.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 18 y especialmente el núm. 23.

1^b—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Nulidad*, núms. 1818 y 1832.

1^c—Se trataba del caso que se registra en el verb. *Escritura pública*, núm. 1. Se comprobó que el mandato había sido constituido verbalmente—art. 1873 del Cód. Civ.—Se trataba de la prueba que un tercero quería producir para comprobar la existencia de un mandato, en cuyo caso con especialidad la ley autoriza la prueba de testigos. Con efecto, el Código dice en la nota puesta al pie del citado artículo que «los terceros pueden siempre probar por testigos el mandato, porque siendo un negocio entre otros, les es casi imposible procurarse una prueba es-



dad de un acto jurídico, por carencia de facultades en el mandatario, corresponde la presentación del instrumento público del mandato, pues la ley presume que el Juez que lo aprobó tuvo en vista la existencia de la facultad requerida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

2. Nulidad de un acto jurídico—La nulidad de un acto jurídico por existir dolo y fraude, puede ser declarada por presunciones siempre que ellas revistan los caracteres de precisos y concordantes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3ª.

3. Nulidad de un acto jurídico—El término para la prescripción del derecho á solicitar la declaración de nulidad de un acto jurídico por ser falso, solo empieza á correr desde la fecha en que el que pide la nulidad tuvo conocimiento de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3ª.

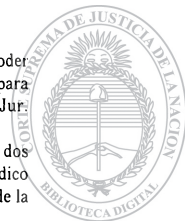
4. Nulidad de un acto jurídico—La acción de nulidad de un acto jurídico no exime á las partes de ser compelidas al cumplimiento, bajo la responsabilidad de la que la solicita.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 90, Ser. 3ª.

crita.» Se comprobó en autos la existencia del mandato, pero habiéndose denegado la estensión de sus cláusulas, es evidente que incumbía la prueba al que aducía un hecho nuevo en el juicio—Ley 1ª, tit. 14, Par. 3ª.—Este principio se hacía doblemente aplicable en el caso del sumario, en el que se trataba de la nulidad de un acto que independientemente del carácter especial que revestía en el pleito por la confianza que supone el mandato y la que infunde á tercero, tiene en su favor la presunción de validez que la ley acuerda á todo acto aun en caso de duda.

2—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2º, verbo *Simulación*, núm. 2 y su nota que trata especialmente el caso del sumario, y mismo verbo, tom. 1º, núms. 2464, 2466, 2469 y 2470.

3—De acuerdo con la ley—art. 4030, Cód. Civ.—y con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Prescripción*, núm. 11.

4—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 1.



5. Nulidad de un acto jurídico—Es bastante el poder conferido para pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo pleito los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3^a.

6. Nulidad de un acto jurídico—Se prescribe á los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

7. Nulidad de un acto jurídico—La acción de nulidad de un acto jurídico por dolo, error ó falsa causa, se prescribe por dos años desde que fué conocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 97, Ser. 4^a.

8. Nulidad de un acto jurídico—La nulidad de un acto jurídico fundada en el error de hecho ó de derecho, debe ser probada por el que la demanda.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4^a.

9. Nulidad de un acto jurídico—El que coadyuva á la nulidad del acto, no puede invocarla á su favor.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 57, Ser. 3^a.

Nulidad de un acto jurídico—Véase: *Acción pauliana*, número 1.

1^a. Nulidad un acto lícito—La ignorancia del derecho, no puede en ningún caso fundar la nulidad de un acto lícito, pero tampoco puede dar validez á un acto nulo.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 160, Ser. 3^a.

1^b—Nulidad de una citación—La citación para absolver

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 42.

6—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

7—Véanse los núms. 3 y 6.

8—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Simulación*, núms. 2462 y 2467.

9—Puede verse la nota al verb. *Nulidad de una venta*, núm. 1—art. 1049 Cód. Civ.

1^a—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b—Art. 125 del Cód. de Proc.



posiciones debe ser hecha personalmente, bajo pena de nulidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 3^a.

2^a. Nulidad de una citación—Es nula la citación por edictos y todas las actuaciones que en ella se funden si el demandante conocía ó tenía medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Serie 4^a.

3. Nulidad de una citación—Procede la recepción á prueba del incidente sobre nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de un contrato—La lesión enorme ó enormísima, no es causa de nulidad de un contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3^a.

2^b. Nulidad de un contrato—Siempre que se justifique que el contrato tuvo un principio de ejecución, no procede la nulidad del contrato bilateral por haberse omitido el número de ejemplares que la ley exige para su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

Nulidad de un contrato—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 1.

1^b. Nulidad de una convención—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compra-venta el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

1^c. Nulidad de declaraciones—Los que aceptan la heren-

2^a—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 13.

3^a—Véase: verb. *Citación*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Lesión enorme*, núm. 1.

2^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 13.

1^b—Véase: *Boleto de compra-venta*, núm. 7.

1^c—Véase: verb. *Herencia*, núm. 2.



cia, continúan la persona del causante y en consecuencia sus obligaciones, y carece de personería para pedir la nulidad de las declaraciones de aquél por las que reconoce á la esposa derechos á bienes determinados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3^a.

1^a. Nulidad de un desistimiento—Para que proceda la nulidad del desistimiento de una acción judicial, debe justificarse previamente que fué el resultado de un convenio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 168, Ser. 4^a.

1^b. Nulidad de una donación—La nulidad de una donación por escritura pública fundada en la incapacidad del do-

1^a—Obtenida una sentencia favorable, la parte vencedora se presentó á la Cámara desistiendo de su demanda y pidiendo se devolvieran los autos para ser archivados. Poco después de producido este desistimiento, se presenta nuevamente á la justicia ordinaria demandando la nulidad del escrito y pidiendo el restablecimiento de la causa al estado que tenía á la fecha de su presentación. Explica su actitud diciendo, que el desistimiento le había sido sugerido por promesas que creía verídicas y las cuales consistían, á cambio de su renuncia á todas las ventajas de una sentencia favorable, en darle una finca y pasarle una mensualidad. Como fundamentos legales de su acción la parte recuerda los arts. 1044 y 1045 del Cód. Civ., en cuanto legislan sobre nulidad de los actos jurídicos producidos con fraude ó simulación y ausencia de la forma ordenada, y 835 y 757 del mismo Código en cuanto fulminan la misma nulidad sobre transacción de derechos litigiosos que no se hubiera exhibido al Juez de la causa firmada por los interesados, y cuando median error, dolo, miedo, etc. Desde luego debe observarse que la nulidad del escrito no podía demandarla por defecto de forma, en razón de que las peticiones judiciales no revisten el carácter de actos jurídicos en el sentido y significación que le dá nuestro Código, en la omisión de las formalidades porque el derecho procesal trae aparejada su validez: ni se desprendía finalmente de autos que hubiese sido la mente del desistente atribuirle esta inteligencia. Se hubiese necesario inquirir si los extremos invocados han tenido en juicio la debida comprobación: si no se comprueban, la demanda de nulidad falla por su base, y si se comprueban, la nulidad procede y debe declararse.

1^b—Véase: verb. *Incapacidad*, núm. 2.



nante, no puede ser declarada en tanto no se justifique que á la fecha de su otorgamiento había sido declarada judicialmente la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3^a.

1. Nulidad de una escritura pública—Fundada en la falsedad de los hechos, corresponde al que la alega, siempre que se hayan llenado las formas que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 272, Ser. 3^a.

2. Nulidad de una escritura pública—La prueba de las causas de nulidad de una escritura pública que no resulten de su forma, corresponde al que la alega y no al que sostiene su validez.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3^a.

3. Nulidad de una escritura pública—La prueba del error, dolo ó fraude, á fin de declarar la nulidad de la escritura, corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

4. Nulidad de una escritura pública—Es improcedente la nulidad de la escritura pública fundada en la falta de firma de una de las partes, si el contrato es uniteral y está firmado por el obligado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Serie 4^a.

5. Nulidad de una escritura pública—No es causa de nulidad de una escritura de venta de derechos á un inmueble, su otorgamiento en distinta jurisdicción de aquella en que están ubicados los bienes ni aun su falta de inscripción en el Registro de propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, página 121, Ser. 4^a.

1—Véase: verb. *Instrumento público*, núm. 1, y *Escritura*, núm. 2.

2—De acuerdo con los fundamentos aducidos en el verb. *Escritura*, núm. 2. Véase el número precedente.

3—Véanse los números precedentes.

4—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 22.

5—Véase: verb. *Inscripción*, núm. 1.



6. Nulidad de una escritura pública—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escritura pública, no es causa de nulidad del instrumento: la ley fulmina esa pena si los firmantes son dependientes autorizados para otorgarlas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 198, Ser. 4^a.

7. Nulidad de una escritura pública—Los blancos que pueden existir en una escritura pública, en partes no esenciales sobre el acto, no afectan su validez, pues la ley deja al criterio de los jueces resolver si ellos pueden dar lugar a la declaración de nulidad del título, pero no a la del acto que le dió origen y que puede ser probado por otros.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de una institución—Debe conocer en el juicio sobre la nulidad de la institución de los herederos, el Juez de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 222, Ser. 3^a.

1^b. Nulidad del juicio—El Albacea carece de personería para representar á los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testamentaria; el mandamiento de pago debe librarse contra éstos; la omisión de dicho trámite hace procedente la nulidad del juicio —Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

2. Nulidad del juicio—Testamentario, es improcedente la nulidad de este juicio si se funda en la falta de intervención en las diligencias previas.—Jur. Civ., tom. 9, página 6, Ser. 4^a.

1^c. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad que puede

6—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 29.

7—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1^a—Véase: verb. *Nulidad*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Albacea*, núm. 7.

1^c—De acuerdo con los principios sostenidos por la Cámara en el



oponerse en juicio ejecutivo debe fundarse en la falta de las formalidades que la ley fija para el procedimiento, pero no en la de la obligación que se ejecuta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 408, Ser. 4^a.

2. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad del juicio ejecutivo deducida después de dictada la sentencia de remate, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 260, Serie 4^a.

3. Nulidad del juicio ejecutivo—Procede la nulidad del juicio ejecutivo si no se hubiese hecho el requiremento de pago al deudor ó á quien legalmente lo represente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

4. Nulidad del juicio ejecutivo—Es nula la ejecución en que no se haya librado mandamiento contra el deudor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 153, Ser. 4^a.

5. Nulidad del juicio ejecutivo—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la eje-

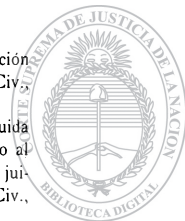
verb. *Inhabilidad de título*, núms. 1 y 3. En el caso del sumario la excepción de nulidad se dijo consistía en una simulación fraudulenta, la que no está comprendida, según opinión de la Cámara, entre las excepciones enumeradas en el art. 488 del Cód. de Proc., y se sostuvo que solo es procedente en el juicio ejecutivo la nulidad por vicios del procedimiento, lo que es muy diferente de la nulidad de la obligación cuyo cumplimiento se persigue.

2—La excepción de nulidad se opuso después de dictada la sentencia de trance y remate, pero cuando no se habia producido ninguna actuación posterior á la sentencia, y la nulidad se hacia consistir en defectos anteriores á la sentencia. Es evidente que esa nulidad es á la que se refiere el art. 489 del Cód. de Proc., y que como excepción debe interponerse en el perentorio término de tres días—arts. 485 y 486.

3—Véase: verb. *Mandamiento*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Mandamiento*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.



cución, aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada la posesión al comprador—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

6. Nulidad del juicio ejecutivo—La ejecución seguida contra la esposa aun cuando el pago se haya intimado al esposo, es nula por ser ésta incapaz de comparecer al juicio sin la venia marital ó supletoria del Juez.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 116, Ser. 4^a.

7. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad de la ejecución puede ser declarada á solicitud de la esposa, aun cuando comparezca sin venia marital ni supletoria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 116, Ser. 4^a.

8. Nulidad del juicio ejecutivo—El albacea carece de personería para representar á los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testamentaria; el mandamiento de pago debe librarse contra éstos; la omisión de dicho trámite hace procedente la nulidad del juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

1. Nulidad de una notificación—El Secretario que ha verificado la notificación, no puede declarar en el incidente sobre nulidad de la misma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 219, Ser. 3^a.

2. Nulidad de una notificación—Las notificaciones prac-

6—Se libró mandamiento contra el marido y después se citó de remate á la esposa. Se opuso la escepción de falta de personería por ser mujer casada la ejecutada, y que por consiguiente no podía estar en juicio sin la venia del marido. El Juez declaró nulo todo lo obrado, fundándose en los arts. 55, 188, 1041, 1042 del Cód. Civ., y 471 y 489 del Cód. de Proc.

7—Art. 192 del Cód. Civ.

8—Véase: verb. *Albacea*, núm. 7.

1—Véase: verb. *Notificación*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Notificaciones*, núm. 5.



ticadas sin las formalidades que la ley prescribe, son nulas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 302, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de una partición—No procede la nulidad de la partición hecha entre todos los herederos mayores y por escritura pública, fundada en la diferencia de las adjudicaciones.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

1^b. Nulidad del procedimiento—El apoderado, á nombre del mandante, puede pedir la nulidad de lo actuado con su intervención, si carecía de facultad para representarlo en el juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3^a.

2. Nulidad del procedimiento—La nulidad del procedimiento, solo puede ser deducida por la parte á quien perjudiquen las diligencias nulas.—Jur. Civ., tom. 1, página 137, Ser. 4^a.

3. Nulidad del procedimiento—La nulidad por defectos del procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

4. Nulidad del procedimiento—La nulidad del procedimiento puede oponerse por el interesado desde que tome intervención en el juicio y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

5. Nulidad del procedimiento—El término para deducir la nulidad del juicio por defectos del procedimiento corre

1^a—Véase: verb. *Herederos mayores*, núm. 1.

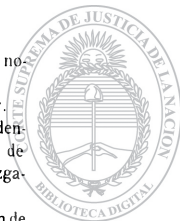
1^b—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 4.

2—Porque el interés es la medida de toda acción. El que no tiene interés, no puede deducir recurso ni formular acción alguna que pueda prosperar.

3—Véase: *Excepción de nulidad*, núm. 2.

4—Así resulta de la disposición del art. 240 del Cód. de Proc. Véase: verb. *Notificación*, núm. 9.

5—Véase: nota precedente.



desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4^a.

Nulidad del procedimiento—Véase: *Domicilio*, núm. 7.

1^a. Nulidad de una regulación—Consentida la providencia de autos, no procede la nulidad de la regulación de honorarios del Agrimensor por incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 205, Ser. 3^a.

1^b. Nulidad del remate judicial—La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justifique que la publicación se ha hecho por un término mayor aunque sea en otros diarios.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 187, Ser. 4^a.

2. Nulidad de un remate judicial—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial, debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 47, Serie 4^a.

1^c. Nulidad de una sentencia—El padre que no pidió el nombramiento de tutor especial para menor cuya paternidad desconoce, carece de personería para pedir la nu-

1^a—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 5.

1^b—Véase: verb. *Edictos*, núm. 5.

2 —De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 19.

1^c —Porque aun cuando el juicio fuera nulo por la causal espresada, quedaría siempre purgada esa nulidad si no se reclamase en 1^a Inst.; y porque ese vicio no perjudicaría al menor en el caso presente en que la sentencia le fué favorable; ni favorecería al vencido, ni podría invocarla de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 11, tit. 2^a, Part. 3^a y art. 1645 del Cód. Civ. Y en el caso especial que nos ocupa el recurso de nulidad no se interpuso juntamente ni en el mismo término que el de apelación, como lo exige el art. 239 del Cód. de Procedimientos.



lidad de la sentencia que no hace lugar á sus pretensiones, fundado en esa omisión—Jur. Civ., tom. 1, página 165, Ser. 3^a.

2. Nulidad de una sentencia—La rebeldía de la parte no permite su condena sin más sustanciación; debe abrirse la causa á prueba; la omisión de ese trámite esencial vicia de nulidad la sentencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 262, Ser. 3^a.

2—El sumario no expresa con claridad lo resuelto. Se trata de un juicio de rendición de cuentas, en el que una vez presentada la cuenta por un albacea fué objetada por la parte contraria, procediéndose al nombramiento de un Contador sin la concurrencia de la parte disconforme con la cuenta. Presentada por el Contador la operación pericial se dió traslado de ella á la otra parte, la que no lo evacuó, acusándosele rebeldía y dándose por evacuado el traslado en ese carácter. El Juez en seguida procedió á dictar sentencia, la que fué anulada por el Superior. Es indudable que la rebeldía de un litigante puede dar mérito á su condenación en los casos en que se determina por el Cód. de Proc. en su art. 434, pero esto no tiene aplicación al caso que nos ocupa, y que por el contrario existiendo en autos una oposición claramente manifestada contra el resultado de aquella operación, como es la que se contenía en el escrito presentado, era el caso de abrirse la causa á prueba. El juicio debía considerarse trabado con la oposición de los herederos del demandante á las cuentas presentadas por el albacea. El nombramiento de contador pudo poner término al pleito cuando se hubiera hecho de común acuerdo de partes, pero habiendo el albacea manifestado su oposición á una y otra cosa, su rebeldía al dejar vencer el término sin evacuar el traslado que le fué corrido de esa operación, no ha podido tener otro efecto que el de declararle decaído de su derecho para usar de aquel traslado. Por otra parte, la simple rebeldía de un litigante no basta para establecer contra él una condenación, sino en el caso de encontrarse la causa en estado y mérito bastante que acredite ser justo lo pedido contra él. En el caso que nos ocupa el juicio no se había seguido en rebeldía y se trataba tan solo de una diligencia del mismo, de un traslado que el albacea había dejado de contestar, y sea cual fuese la causa de esa omisión, declarado decaído su derecho, no ha podido estimarse su rebeldía como una renuncia á los trámites ulteriores del juicio y mucho menos, como un reconocimiento tácito de aquellas cuentas, desde que había ya manifestado su oposición.

3. Nulidad de una sentencia—Debe declararse la nulidad de la sentencia dictada en el interdicto si se omite la prueba, ofrecida y pedida por la parte en el acto del juicio verbal—Jur. Civ., tom. 4, pág. 318, Ser. 3ª.

4. Nulidad de una sentencia—Es nula la sentencia en

3—Véase: *Interdicto*, núm. 2.

4—El actor se presentó pidiendo el pago de una comisión de venta de un inmueble. El demandado dijo que no tenía el actor derecho á cobrar comisión por haberse efectuado la venta excediendo el mandato que para ello tenía. Como el convenio le confería el 5 % de comisión, demanda el pago de ella, y como fundamento de su demanda, cita el art. 1627 del Cód. Civ., el que determina que el precio debe fijarse por árbitros. Esta cita fué bastante para considerar el Juez de 1ª Inst., que el actor entendió deducir una demanda alternativa amparándose en sus disposiciones. El Inferior rechazó la demanda, pero convocó á las partes á juicio verbal para la constitución del Tribunal arbitral á efecto de la fijación del monto de la remuneración. La Cámara declaró nula la sentencia por mayoría de votos, sosteniendo la minoría que, según la demanda se juzgó con razón que el actor entendía demandar el pago de la comisión estipulada ó la que fijaran los árbitros. En efecto, el actor invocaba en apoyo de la acción que dedujo, los arts. 1623 y 1627 del Cód. Civ., lo que demuestra que se ponía en el caso de que la comisión cuyo pago gestionaba, pueda ser fijada por árbitros. Si su intención hubiera sido únicamente demandar el abono de lo convenido, se habría limitado á invocar el art. 1623, que es el aplicable al caso. La cita del art. 1627 del Cód. Civ. que el actor invocaba al deducir la demanda, no podía considerarse hecho sino con el propósito de ampararse de sus disposiciones, y en tal caso el Juez al resolver el punto en cuestión, se ajustó estrictamente á lo prescrito en los arts. 216 y 217 del Cód. de Procedimientos. La mayoría opinó lo contrario diciendo, que el art. 216 del Código de Proc. impone á los jueces el deber primordial de ajustar sus resoluciones á las acciones deducidas en juicio y el 71 obliga á los litigantes á que expresen en sus escritos respectivos la cosa demandada, designándola con toda exactitud y á que formulen sus peticiones en términos claros y positivos—incs. 3º. y 6º—y la razón de esta exigencia del art. 71 es bien perentoria. Como observa Manresa—tom. 2º, pág. 38—«Si el que demanda no determinase la clase de obligación, su entidad y condiciones, á fin de que se sepa la clase de prestación que se exige al demandado, no solo se encontraría éste embarazado para conocer el origen, objeto y esten-





cuanto resuelve sobre puntos no deducidos en la demanda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3ª.

sión de las obligaciones del actor, y por consiguiente imposibilitado de poder preparar sus excepciones y pruebas para combatirlas, sino que el mismo Juez no podría calificar con justicia las solicitudes aducidas por las partes, ni sería posible que la sentencia pudiera ser conforme con la demanda.» Mas en el caso ocurrente el actor significó con precisión la cosa demandada, y con igual precisión ha determinado sus peticiones, sin que entienda, empero, que con el mismo alcance que el Juez y un vocal de la Cámara les atribuían. Se demandó el cobro de la suma de seis mil seiscientos pesos moneda nacional, importe líquido de la comisión reclamada al demandado, y habiendo desconocido éste categóricamente las pretensiones del actor, quedando así formado el cuasi-contrato de la litiscontestación, el pronunciamiento del Inferior debió concretarse a dilucidar y resolver ese punto claramente sometido a su decisión. El hecho de que el actor hubiera citado un precepto legal de todo punto impertinente á la cuestión litigiosa concretada en términos claros y positivos, no puede importar en manera alguna, ni ser considerado como una petición alternativa para que se condene al reo al pago de la comisión espresamente demandada, ó la que determinen los árbitros, conforme á lo preceptuado en el art. 1627 del Cód. Civ., pues si esa hubiese sido la mente del demandado, debió observar las reglas fijadas en el art. 71 del Cód. de Proc, á fin de evitar al demandado y al Juez mismo los inconvenientes que acertadamente apunta el autor antes citado. Resuelta entonces, como lo fué, desfavorablemente para el actor, la única petición deducida en la demanda, y siendo la sentencia congruente con ésta en esa parte, desde que contenía decisión expresa, positiva y precisa, no haciendo lugar al reclamo de seis mil trescientos pesos nacionales que era lo demandado, la sentencia es válida en esa parte. Pero en cuanto á lo demás, debía dejarse sin efecto, pues habiendo versado la defensa del demandado, solamente sobre los hechos espuestos en la demanda, si se condenase á lo que en ella no se había pedido, sería condenarlo sin haber sido oído ni vencido. Es bien conocido el principio espresamente consagrado en derecho, de que la sentencia debe ajustarse en un todo á la acción deducida. Gregorio López, en la glosa 1ª de la ley 16, tit. 22, Part. 3ª, dice: «*Sententia debet esse conformis libello in tribus, in re, causa, et actione. Et si iudex pronuntiat ultra petitum, sententia est ipso jure nulla.*» El Cód. de Proc. aceptando los mismos principios de la ley de Partida á la que se refiere la glosa de Gregorio López, citada, dispone á su vez que la sentencia definitiva debe contener decisión es-

5, Nulidad de una sentencia.—La sentencia que no hace lugar á la aprobación de la cuenta particionaria, debe ser fundada con arreglo á la ley, si no llena ese requisito es nula.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 262, Ser. 4ª.

presa, positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando ó absolviendo de la demanda en todo ó en parte. Con arreglo á estos principios, la sentencia pronunciada en esta causa carecía de valor legal en cuanto mandaba proceder al nombramiento de árbitros para determinar el precio que corresponde al demandante como mandatario del demandado después de declarar no haber lugar á la acción instaurada en cuanto se refería al cobro de la comisión del 5 %. Basta para esto tener presente que la demanda se fundaba en el convenio celebrado entre el actor y el demandado respecto á la remuneración ó precio de los servicios que el último encomendaba al primero, cuyo pago era lo único que se demandaba espresamente, según resultaba de los propios términos empleados por el demandante al terminar su escrito con las palabras: «Vengo pues, en uso del derecho que estas prescripciones legales me acuerdan, á deducir demanda por el cobro de la suma de seis mil trescientos pesos moneda nacional que es el importe líquido de la comisión, etc.» Las prescripciones del art. 1627 del Cód. Civ. no pueden favorecer en manera alguna la validez de la sentencia en la parte espresada. Esas prescripciones se invocaron en la demanda del mismo modo que la del art. 1623 para demostrar su legitimidad en cuanto se refiere al cobro del precio ajustado y es por esto sin duda, que se concluye por pedir la suma de seis mil trescientos pesos como importe de la liquidación del cinco por ciento ofrecido en comisión. Por esto la sentencia de 1ª Inst. debió limitarse á declarar si el actor tenía ó no derecho para cobrar al demandado la comisión estipulada que es lo que formaba el objeto de la demanda, desde que esa era la única cuestión sometida á su resolución y por lo mismo debe considerarse *ultra petita* la parte de ese fallo en que después de no hacer lugar á la demanda instaurada, ordenaba el nombramiento de árbitros para que determinasen lo que debía pagarse, lo que está en armonía con la jurisprudencia de la Cámara en casos análogos.

5.—Esta sentencia debe ser considerada como definitiva. El Juez por un mero decreto no hizo lugar á la aprobación de la cuenta particionaria, siendo anulada la resolución, porque ella debe contener los fundamentos á mérito de los cuales niega la aprobación.



6. Nulidad de una sentencia —Adolece de nulidad la sentencia que no resuelve todos los puntos sometidos á la

6.—Iniciada una acción reivindicatoria por nulidad del acto jurídico de enajenación hecha por el Banco Hipotecario, se dictó sentencia definitiva, la que fué declarada nula. La demanda se funda en: a) que la época en que el Banco mandó vender las propiedades era anormal; b) que la venta se hizo contraviniendo el art. 114 del Cód. de Procedimientos; c) que quien compró fué la esposa de uno de los rematadores é hija política de otro—pues era una sociedad;—d) que la compradora era mujer casada, sin haber obtenido la venia del marido; e) que el verdadero comprador fué el marido. Como fundamento de derecho aducía el actor lo dispuesto en los arts. 1001, 1004, 1043 y 1044 del Código Civ. Ahora bien, según disposiciones del Cód. de Procedimientos, el Juez al sentenciar, debe hacerlo de acuerdo con las acciones deducidas, haciendo mérito de cada una de las acciones pertinentes fijadas en la discusión, y debe espeditse separadamente respecto de los diversos puntos litigiosos, cuando éstos hayan sido varios—arts. 216, 217 y 218 del Código citado.—En el caso que nos ocupa, el Inferior citaba en la sentencia los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ., pero omitió considerar y resolver sobre la causal de nulidad invocada por el actor al fundarse en los otros artículos mencionados. Siendo cierto que esa cuestión fué sometida á la decisión del Inferior y por consiguiente, si hubiera de revocarse la sentencia por la apelación, la Cámara no estaría habilitada para pronunciarse sobre una cuestión que no ha sido resuelta en 1ª Inst., según se ha establecido por este Tribunal en un caso análogo. Véase: Jur. Civ., tom. 9, Ser. 1ª, pág. 63. El Juez *a quo* no se pronunció respecto de uno de los puntos sometidos á su decisión, y es evidente que la sentencia apelada, adolecía de un vicio de forma que la invalidaba. Aun admitido por vía de hipótesis que por el hecho de fundar el actor una de las causales de nulidad en los arts. 1001 y 1004 del Código Civil, sin determinar á cuál de los casos enumerados en esos artículos era su propósito referirse, adoleciera la demanda del defecto apuntado en el art. 72, incs. 4º y 5º del Cód. de Proc., tal circunstancia en manera alguna autorizaba al Inferior para guardar completo silencio sobre ese capítulo de la demanda, que pudo ser considerado del punto de vista de la disposición del Cód. de Proc. citado, en el caso de haberse encontrado que la falta de precisión en los hechos hubiera colocado al demandado en la imposibilidad de defenderse sobre esa causal de nulidad, y al Juez mismo en la de juzgarla con arreglo á derecho por no haber sido debidamente determinada. Esta fué la opinión de la mayo-



decisión del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 233, Serie 4ª.

7. Nulidad de una sentencia—La sentencia dictada sin recibirse la causa á prueba es nula siempre que se afir-

ria formada de tres votos contra dos. La minoría sostuvo que la sentencia no era nula, aduciendo como fundamento que la referencia á los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ. en el escrito de demanda, era incidental, y se hace bien ó mal al deducirla en apoyo de la conclusión sobre nulidad de la trasmisión de la propiedad á que se llega en el capítulo, como lo demuestra el hecho de no hallarse separada ni aún por una coma de la palabra que le precede. El art. 71 del Cód. de Proc. ordena que la demanda debe contener los hechos en que *se funde explicados claramente*, el derecho espuesto *suscintamente* y la petición en términos claros y positivos. En el escrito de demanda no solo no se explicaban los hechos en que se fundaba la nulidad de la escritura ni el derecho que la rije, sino que tampoco se volvió sobre ello al formularse la petición final, limitándose á deducir la acción reivindicatoria. Demandas de este género pueden ser desechadas de oficio y si no lo son, es porque estando claramente explicada y fundada en cuanto á la nulidad de la trasmisión de la propiedad, solo pudo considerarse la cita de los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ. en el sentido indicado. Admitiendo que fuera de darse una interpretación tan lata á la cita mencionada, resultaría una desigualdad chocante entre las partes para producir la prueba, desde que enumerando esos artículos, tantos y tan diversos hechos, y el demandado ignorase sobre cuál de ellos había de recaer la suya á la del contrario. Con una apreciación semejante, se dificultaría la contienda y se traería la confusión á los juicios, haciendo imposible su terminación. La atinencia que tenga con la nulidad de la escritura lo que se espresa en el curso de la demanda después de trabado el juicio por demanda y contestación, no es sino una simple indicación más ó menos acertada, pero no una conclusión precisa para fundar un fallo. La nulidad de la escritura no fué alegada oportunamente en la forma requerida por la ley ni discutida por las partes, ni sometida á prueba y por consiguiente, debía ser desestimada. El hecho de no haberse especificado en la demanda los vicios de nulidad de la escritura sino limitándose á citar los artículos del Código Civil, contra lo dispuesto por el art. 71, inc. 4º de la Ley de Enjuiciamiento, no implica nulidad de la sentencia que no es tomada en consideración por separado.

7—Véase el núm. 2.





men hechos contradictorios. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 279, Ser. 4^a.

8. Nulidad de una sentencia —La conformidad de las partes sobre los hechos alegados hace improcedente la recepción de la prueba; la nulidad de la sentencia fundada en ese hecho debe ser desechada.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 17, Ser. 4^a.

9. Nulidad de una sentencia—Debe declararse la nulidad de la sentencia que no llena las prescripciones que exige la ley para su pronunciamiento.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 23, Ser. 4^a.

10. Nulidad de una sentencia—Reconocido el derecho de indemnización sobre daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito, corresponde la recepción de prueba sobre el monto, y adolece de nulidad la sentencia que sin más trámite fija la suma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 301, Ser. 4^a.

11. Nulidad de una sentencia—Adolece de nulidad la

8—La nulidad se hacía consistir en que la causa no había sido abierta á prueba. Esta causal es improcedente porque el trámite de la prueba solo es procedente cuando hay hechos controvertidos ó cuando no hay conformidad acerca de los hechos alegados—art. 104 del Cód. de Proc.

9—En la sentencia no se cumplió el precepto del art. 217 del Cód. de Proc., pues no se hizo relación de la causa ni mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión; tampoco se dió cumplimiento á lo que dispone el art. 218, pues que siendo varios los puntos litigiosos, no se hizo el pronunciamiento correspondiente á cada uno de ellos. Estas infracciones vician de nulidad la sentencia —art. 217 del Cód. de Proc. No pronunciándose el Inferior sino sobre uno de los puntos en litigio, podría ocurrir que siendo contraria la opinión de la Cámara á la del Juez en ese punto, se resolvería el pleito por lo que resultara de la decisión sobre los demás, tomada por la Cámara en única instancia contra el propósito espreso de la ley que exige que este tribunal dicte sus sentencias en revisi6n.

10—Véase: vrb. *Daños y perjuicios*, núm. 92.

11—Véase: *Información supletoria*, núm. 7.

sentencia aprobatoria de una información para probar la propiedad de un terreno por prescripción, si no ha sido oído el Ministerio Fiscal ó quien lo represente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 427, Ser. 4ª.

12. Nulidad de una sentencia.—La intervención del interesado hace improcedente la nulidad de la sentencia

12.—Se presume que el litigante que se notifica de una providencia posterior á otras, las conoce todas, y en consecuencia es de aplicación el art. 40 del Cód. de Proc. Esta presunción no la establece la ley, y es solo una interpretación equivocada y que acusa escaso conocimiento del procedimiento observado prácticamente en los juzgados inferiores. Si todos los escritos estuviesen agregados al expediente de la referencia, podría argumentarse diciendo que los interesados deben necesariamente tener conocimiento de las providencias anteriores á la que se notifica; pero no sucede así, pues los escritos no se agregan á los expedientes, sino después de notificadas todas las partes personalmente ó por nota, y casi siempre en esta última forma, porque cuando un litigante concurre á Secretaría á preguntar si hay despacho, se le contesta que «no hay nada»; mientras que quizá tiene media docena de notificaciones: no bien se le ha contestado así cuando empiezan los cadetes,—porque si se quiere es el oficial primero, ni el secretario,—á poner nota de no haber comparecido á notificarse. Esas fojas casi siempre andan completamente separadas del expediente. De manera que viene un litigante á notificarse de la última providencia; se notifica, pregunta si hay otras, y se le contesta negativamente. Después aparecen consentidas providencias de las que jamás tuvo conocimiento por habérsele notificado por nota de no haber comparecido. No es posible pues aceptar el temperamento adoptado por la Cámara, cuando dice que la notificación de autos posteriores subsana la falta de notificación ó los defectos de procedimientos anteriores. Se arguye asimismo con el art. 240 del Cód. de Proc. el que establece que la nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada siempre que no se reclame la reparación de aquellos en la misma instancia en que se hayan cometido. La palabra *instancia* la toma la Cámara en un sentido que no es acertado. Hemos espuesto nuestro modo de pensar al respecto en el tom. 3, verb. *Defectos de Procedimientos*, núm. 2. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase: Inst., tom. 3, mismo verb. núms. 1 y 2, donde se citan los casos resueltos en el mismo sentido.





por defectos de las notificaciones anteriores á su interposición.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 252, Ser. 4^a.

13. **Nulidad de una sentencia**—Adolece de este defecto la sentencia que no contiene decisión espresa sobre la acción deducida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 370, Ser. 4^a.

14. **Nulidad de una sentencia**—Adolece de nulidad la sentencia dictada sin las formalidades que la ley prescribe para la suela del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 4^a.

15. **Nulidad de una sentencia**—La omisión del segundo traslado, antes de resolver las escepciones, no es causa de nulidad de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4^a.

16. **Nulidad de una sentencia**—Es nula la sentencia aporatoria de una liquidación si el auto en que se niega ampliación del término para observarla no se encuentra ejecutoriado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 4^a.

17. **Nulidad de una sentencia**— Es nula la sentencia dic-

13—Arts. 216, 217, 218 y 237 del Cód. de Proc.; Ley 16, tit. 22, Part. 3^a; Leyes 9 y 10; tit. 17, lib. 4, R. C.; y ley 2, tit. 16, lib. 11, Nov. R.

14—En un juicio ejecutivo se dictó sentencia de remate sin abrir la causa á prueba, como lo prescribe el art. 490 en su inc. 3^a, Cód. de Proc. La sentencia es nula porque hay violación de las formas sustanciales marcadas para el procedimiento ejecutivo.

15—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 8.

16—Véase: verb. *Liquidación*, núm. 5.

17—Entablada una demanda por daños y perjuicios contra el «El Diario», no se espresó en ella el nombre de la persona á quien se atribuía la representación del demandado, contraviendo, según decia la Cámara, la disposición del art. 72 del Cód. de Proc., y la Ley 40, tit. 2^o, Part. 3^a. No se cumple con estas prescripciones con solo designar el nombre de la entidad que se demanda, que puede tener según los casos, diversas representaciones. Según ésto, la sustanciación dada al juicio fué viciosa desde su origen, pues el emplazamiento que como



tada y debe reponerse la causa al estado de demanda si ésta no ha sido notificada á persona determinada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Ser. 4^a.

18. Nulidad de una sentencia.—Es nula la sentencia dictada sin la debida sustanciación, y el Superior debe declarar la nulidad aun cuando la parte haya omitido el recurso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

19. Nulidad de una sentencia.—Debe declararse la nuli-

dice el proemio del tít. 7º, Part. 3ª es raiz ó comienzo de todo pleito, no aparece hecho en la forma que prescribe el Cód. de Proc. Y no se diga que la omisión contenida en la demanda ha podido quedar subsanada por la notificación dirigida al demandado, cuando éste no aparece notificado directamente, ni su notificación sería procedente una vez que en la demanda no se le hace figurar como representante de la Empresa demandada. Ahora bien, si el emplazamiento que ha pretendido hacerse por medio de cédula es nulo por vicio de forma, es evidentemente nulo el procedimiento ulterior y consiguientemente es nula también la sentencia—art. 237, Cód. de Proc. y Ley 5ª; tít. 26, Part. 3ª. Por otra parte, en la diligencia de emplazamiento de la demanda se hacía constar por el actuario haberse constituido en el domicilio de la empresa demandada, á efecto de notificar á su director, sin espresar ó designar el nombre de la persona emplazada, como así debió verificarse para la validez de la diligencia. La cédula fué dejada por no hallarse el Director, á un individuo que dijo ser empleado de la casa y que se negó á firmar y á dar su nombre. Además la sentencia de 1ª Inst. fué notificada á una persona que no solo no se designaba en la demanda, sino que á estar á los trámites de la diligencia, no era el director de la empresa demandada, fuera de que según los impresos que se acompañaron por la misma parte demandante, quien figuraba como tal era una persona determinada.

18—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en casos análogos. Véase el núm. 23. Puede verse verb. *Nulidad absoluta*, núm. 1.

19—Un comprador en remate judicial se presentó alegando la nulidad del acto. No habían hechos controvertidos, y la nulidad tenía como único fundamento, antecedentes que constaban del mismo proceso. Pero estas circunstancias no autorizan á prescindir de las formalidades prescriptas por la ley adjetiva, cuando no existe mérito para la aper-



dad de la sentencia definitiva para cuyo pronunciamiento no se hayan llenado las formalidades que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4^a.

20. Nulidad de una sentencia—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4^a.

21. Nulidad de una sentencia—La falta de pronunciamiento del Juzgado, sobre la escepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia, alegada por la parte contra quien fué opuesta.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

22. Nulidad de una sentencia—Debe declararse nula la sentencia dictada si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero,

tura de la causa á prueba, esto no autoriza á sentenciar la causa en definitiva, porque á ello se opone terminantemente el art. 103 del Cód. de Proc. El Juez de 1^a Inst., en el caso que nos ocupa, una vez evacuado el traslado conferido de la nulidad deducida, procedió á dictar sentencia definitiva sin guardar por otra parte las formas prescriptas por los arts. 216 y 217 del Cód. de Proc. La sentencia era en sí evidentemente nula, y era nula también por haber sido dictada sin la sustanciación marcada por la ley. Cuando hay hechos controvertidos debe abrirse la causa á prueba, y cuando no los hay debe correrse nuevo traslado por su orden—última parte del art. 103.—Estas reglas no pueden infringirse porque las que rigen los procedimientos son de riguroso derecho y deben guardarse indistintamente por las partes y por los jueces, pues su observancia es para las primeras, garantía recíproca de igualdad en el debate y para los segundos de mejor acierto para la resolución de las causas. El art. 237 del Cód. de Proc. declara nula una sentencia dictada en las condiciones de la que nos ocupa.

20—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.

21—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 4.

22—Véase: verb. *Notificación*, núm. 14.



aun cuando ese pronunciamiento le fuera favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4^a.

23. **Nulidad de una sentencia**—El Tribunal debe declarar de oficio la nulidad de una sentencia que no reúne los requisitos que para su validez exige el Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 107, Ser. 4^a.

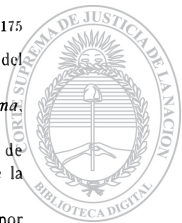
24. **Nulidad de una sentencia**—El recurso de nulidad de una sentencia porque afecta derechos de terceros, que no han sido parte en el juicio, es improcedente si lo deduce cualquiera de los que han intervenido.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 5, Ser. 4^a.

25. **Nulidad de una sentencia**—Es nula la sentencia que

23—Sustanciada una cuestión como de puro derecho, el Juez procede á dictar sentencia omitiendo en ella el nombre de las partes sin hacer relación de la causa sometida a su fallo, sin establecer el objeto del pleito y sin consignar separadamente los hechos alegados. La nulidad en este caso procede de acuerdo con lo preceptuado en el art. 217 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Nulidad*, números 1 y 13; *Sentencia*, núms. 3 y 4. El verb. *Nulidad*, núms. 6 y 17 del tom. 2^o, Inst., tratan especialmente el caso del sumario; puede verse asimismo los núms. 8, 9, 10, 13, 20 y 24; F. S. C. P. tom. 1^o, págs. 213, 221, 339 y 346, tom. 9^o, págs. 208 y 214, Ser. 2^a, y tom. 1^o, pág. 408, tom. 6^o, pág. 173, Ser. 1^a.

24—El recurso se fundaba en vicios de procedimiento y en que la sentencia afectaba derechos de terceros que no habían intervenido en el pleito. En cuanto al primer fundamento debe decirse que no procede porque es doctrina corrientemente aceptada por la Cámara que esta clase de defectos quedan subsanados si no se reclaman en la misma instancia en que se producen. En cuanto al segundo punto, las personas que han sido parte, si no tienen la representación de las perjudicadas por la sentencia, carecen de personería para formular á nombre de éstas petición alguna que implique la necesidad de un mandato. Carecen de personería al efecto.

25—Esta nulidad fué declarada en el caso que se registra en el verbo *Excepción perentoria*, núm. 3, donde puede verse el fundamento del sumario que nos ocupa.



resuelve sobre el fondo de la demanda sin audiencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 5, página 416, Ser. 3ª.

Nulidad de una sentencia—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 2.—*Recurso de nulidad*, núm. 1 y siguientes.

1. **Nulidad de un testamento**—Las causas de nulidad de un testamento deben ser probadas por el que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

2. **Nulidad de un testamento**—La atestación, hecha por el escribano en el cuerpo del testamento, de un hecho que impide al testador firmar el acto, es válida y no puede fundar la nulidad, siempre que el hecho sea cierto, aunque no sea el mismo que cause el impedimento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

3. **Nulidad de un testamento**—Aun cuando alguno de los testigos no conozca al Escribano autorizante, no es causal para declarar la nulidad del testamento, pues basta

1—De acuerdo con los fundamentos legales aducidos en el ver. *Instrumento público*, núm. 1 y *Escritura*, núm. 2.

2—El escribano dijo en el testamento que la testadora no firmada «por estar físicamente impedida de la vista», pero resultó que la testadora no sabía firmar. Fundándose en esta causal se dijo de nulidad del testamento, á lo que no se hizo lugar, porque la atestación del Escribano fué cierta, no obstante no haber sido esa la única causa por la cual la testadora no firmó. El art. 3663 dice, que el Escribano debe espresar la causa por que no pueda firmar el testamento en caso de saberlo hacer. La causa verdadera fué el hecho de *no saber*. Pero como lo sostienen varios tratadistas, no es necesario por nuestro Código que se enuncie esta causa cuando existe y basta que se llenen las formalidades de ley.

3—El art. 3699 del Cód. Civ. dice que «los testigos deben ser conocidos del Escribano. Si éste no los conociese, puede exigir antes de otorgar el testamento que dos individuos aseguren la identidad de sus personas y la residencia de ellas.» Siendo esto claro, no debe eludirse su tenor literal so pretexto de interpretación. El hecho de no conocer el testigo al Escribano es circunstancia suficiente para determinar la nulidad en atención á que en tal caso la atestación de éste respecto á la



para su validez que el Escribano lo conozca.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de un título—Al reivindicante corresponde la prueba de la nulidad del título que justifica la propiedad del poseedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3^a.

2. Nulidad de un título—Los blancos que puedan existir en una escritura pública, en partes no esenciales sobre el acto, no afectan en validez, pues la ley deja al criterio de los jueces resolver si ellos pueden dar lugar a la declaración de nulidad del título, pero no a la del acto que le dio origen y que puede ser probado por otros medios.— Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

3. Nulidad de un título—La acción de reivindicación es procedente, si el título que presenta el demandado adolece de insanable nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Ser. 4^a.

Nulidad de una transacción—Véase: *Transacción*, número 7.

1. Nulidad de una venta—La nulidad de la venta no

capacidad de aquél no puede dar fe? La interpretación legal y auténtica deriva del mismo art. 3699. Siempre que se dé fe por el Escribano de conocer al testigo, esa atestación debe tenerse por verdadera mientras no se pruebe lo contrario.

1^a—Art. 995 del Cód. de Proc.

2—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1—Una mujer casada en segundas nupcias, vendió un inmueble de su propiedad sin la venia de su esposo, y después se presentó diciendo de nulidad de la venta, siendo rechazada la demanda y declarándose la validez de la operación. La vendedora ocultó su estado de casada y el Escribano autorizante dió fe de su estado de viuda. Si bien es cierto que el art. 192 del Cód. Civ. faculta al marido, a la mujer y a los herederos de ambos para pedir la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de licencia del marido, es necesario tener en cuenta que según resultaba de la escritura de venta que en testimonio se agregó a los autos, la vendedora no solo prescindió de la venia de su esposo, sino



puede ser demandada por el causante único del vicio que

que también hizo ocultación de su estado civil, manifestando que era viuda, y entonces, según el precepto terminante del art. 1047 del Código Civil, no puede pedirse la nulidad del acto por haberlo ejecutado el vendedor, sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba, por cuanto sería no solo injusto sino también hasta inhumano permitir que solicite la anulación de un acto contrario á la ley la misma persona que á sabiendas la ha violado, pues importaría ampararla con una nulidad causada por su propio hecho. *Quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire*, dice una conocida regla de derecho. Las palabras con que Marcadé, en su conocida obra—tom. 1º, pág. 602, núm. 751—ocupándose de resolver una cuestión que se propone, perfectamente análoga á la que nos ocupa, resuelve el punto, no dejan en el ánimo la más mínima duda. Se pregunta este distinguido autor: «¿Qué decirse si en el acto desprovisto de la autorización del marido se hubiera hecho pasar la mujer por no casada? ¿Deberíase, á pesar de la buena fe del tercero, anular por falta de tal autorización? Cuando se trata de un menor, el solo aspecto de su figura debe darme al menos sospecha de su incapacidad; desde entonces puedo pedir su acta de nacimiento, y si me presenta un acta falsa en apoyo de su mentira, no me encontraré ya en el caso de una simple declaración de mayor edad, habrá un delito de cuyas consecuencias no le garantizará su menor edad. Si me he contentado con su aserción cuando era natural y tan fácil pedir el acta de nacimiento, es á mí á quien debo culpar; se concibe, pues, que en estas circunstancias, cuando se trata, por otra parte, de un individuo cuya misma menor edad, su inesperienza le impidieron calcular las consecuencias de su mentira, el art. 1037 permite la anulación en su provecho. Pero cuando se trata de una mujer de treinta años, no puedo leer en su cara que está casada, y no puedo pedirle el acta que haga constar que no lo es; en fin, ella por su lado comprende la gravedad de la mentira que ha dicho en el acto. Para ella esta mentira es un delito, del cual ella debe responder como aparece del artículo 1310. *La anulación no deberá ser pues pronunciada.*» Por otra parte, me he acreditó en autos la existencia de ninguna circunstancia que pudiera demostrar que el comprador de la finca conociera la incapacidad de la enajenante. Se trata, pues, de un comprador de buena fe, que ha ignorado por completo los antecedentes que después se quisieron invocar para invalidar el contrato, buena fe que resultaba de la misma escritura. El escribano da seguridades sobre el conocimiento de las partes que concurren á su otorgamiento, afirmando en el caso que nos

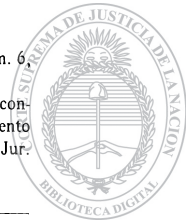
alega como fundamento de su acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 3ª.

2. Nulidad de una venta—La venta hecha por un condómino de una parte determinada, sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 3ª.

Número—Véase: *Notificación*, núm. 5.

ocupa que era viuda, y en la parte de esa escritura en que se espresaba como hubieron los vendedores el terreno objeto del contrato, consignó un dato que sin duda contribuyó á robustecer la manifestación de la vendedora con respecto á su estado civil, á saber: que lo hubo de su esposo como su única y universal heredera, declarada así judicialmente según el auto que allí se transcribe, y si á todo esto se agrega que el demandado no compró la finca directamente de la vendedora, se adquiere sin esfuerzos el convencimiento de que aquél no ha tenido motivo alguno para poner en duda la capacidad de la cedente para efectuar la venta cuya nulidad se pretende. El art. 929 del Código Civil, resuelve también la cuestión en favor del demandado. El error de hecho, dice, no perjudica cuando ha habido razón para errar. El codificador para explicar el espíritu de esta disposición, cita á Savigny, quien enseña que el favor concedido al error de hecho se debe á que comunmente es difícil y aun imposible el evitarlo. Por consiguiente, no debe concederse este favor al que es culpable de una gran negligencia. Para hacer la aplicación de esta disposición restrictiva, es necesario tener en consideración las circunstancias particulares de cada caso, y como se ha visto los que concurrían en el que nos ocupa favorecerían indiscutiblemente al demandado—Laurent, tom. 3º, núm. 161 y Duranton sobre el art. 225 del Cód. de Nap.—La Suprema Corte de la Nación ha dictado también un fallo estableciendo el principio de que la nulidad de un acto no puede ser invocada sino por las personas que ignoraban el vicio que lo invalidaba y que no fuesen causantes de ella—tom. 12, pág. 159, Ser. 2ª.—Finalmente, no debe olvidarse tampoco que aun cuando el caso fuera de solución dudosa, lo que no sucede aquí, deben los Tribunales decidirse siempre por la subsistencia del acto y no por su nulidad.

2—Véase: verb. *Condominio*, núm. 1.





Objeto—Véase: *Sociedad*, núm. 1.

1^a. Objeto de poco valor—Las alhajas y objetos de poco valor que el causante no haya determinado espresamente, corresponden al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4^a.

Objetos retenidos—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 94.

Oblación—Véase: *Avisos*, núm. 1—*Comprador judicial*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 6—*Intereses*, número 8.

1^b. Obligación—Reconocida la autenticidad de la obligación, al escepcionante corresponde la prueba de las modificaciones ó condiciones á que hubiese sido subordinado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4^a.

2. Obligación—Reconocida su existencia, la prueba de que el pago es á cargo de un tercero, corresponde al que afirma el hecho—Jur. Civ., tom. 7, pág. 383, Ser. 4^a.

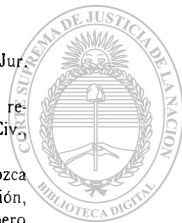
3. Obligación—El reconocimiento de la autenticidad del contrato no importa el del cumplimiento de aquellas

1^a—Véase: verb. *Alhajas*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Condición*, núm. 2.

2—De acuerdo con los principios legales sentados en la nota al verbo *Obras*, núms. 1 y 3.

3—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 3.



estipulaciones que den origen á una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 87, Ser. 4^a.

4. Obligación—Solo puede exigirse al firmante, el reconocimiento de la firma de una obligación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 81, Ser. 4^a.

5. Obligación—El heredero aun cuando no desconozca la validez del documento en que se funda la obligación, puede invocar la falsedad de la causa que él espresa, pero como escepcionante carga con la prueba—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

6. Obligación—Probada la falsedad de la causa que espresa la obligación, procede la absolución del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

7. Obligación—Solo puede iniciar acción ejecutiva el que justifica su derecho á exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 4^a.

Obligación—Véase: *Agravio moral*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 3—*Cartas privadas*, núm. 1—*Apoderado único*, núm. 6—*Sindicato*, núm. 1—*Consejo de Higiene*, núm. 1—*Contrato*, núms. 1, 17 y 18—*Cuenta corriente*, núm. 5—*Documento privado*, núm. 4—*Prescripción de la obligación*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 54 y 96—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 10—*Mora*, núm. 3—*Novación*, núm. 1—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 3—*Término*, núm. 4—*Diligencias de prueba*, núm. 23.

Obligación á oro—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Monea especial*, núms. 1 y 2.

1. Obligación á plazo—La obligación á plazo fijo, no

4—Véase: verb. *Firma*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 6.

6—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 7.

1—De acuerdo con el espíritu de los arts. 571 y 572 del Cód. de Procedimientos.



puede ser exigida ejecutivamente antes del vencimiento del plazo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 409, Ser. 4^o.

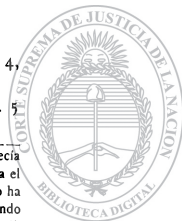
2. Obligación á plazo—El pago al contado de una obligación á plazo no permite la repetición contra el acreedor por la diferencia ó descuento, pues se supone la

2—Una compañía de tramways pagó á un empresario cuentas por afirmados, al contado, y sin el descuento del 8% que autorizan las Ord. de 1^o y 12 de Oct. de 1888. Dijo que había pagado por error y pedía la devolución de la suma que debió descontar, fundándose en los arts. 784 y 788 del Cód. Civ. La compañía fué vencida, porque no hay ley alguna que la autorice para exigir esa devolución. El artículo 784 del Cód. Civ. en que el actor apoyaba su demanda, se refiere á un caso muy diverso y es inaplicable al presente ni aun por analogía. El art. 784 dispone: que el que por error de hecho ó de derecho se creyere deudor y entregase alguna cosa ó cantidad en pago, tiene derecho á repetirla del que la recibió; y es muy natural y justo que así sea porque el que efectúa un pago se propone cumplir una obligación y extinguirla. Si la obligación no existe en realidad, no puede haber pago en la acepción jurídica y legal de la palabra; la entrega de la cosa ó de la cantidad hecha por el que se creyó deudor no surte el efecto legal de pago y por consiguiente puede ser repetida contra el que la recibió. En el caso presente el actor no se había creído deudor por un error de hecho ó de derecho, puesto que era realmente deudor, si bien la deuda era á plazos, en doce mensualidades iguales. No es entonces el caso previsto por el art. 784. El que debe una cantidad cuyo pago no es exigible sino después de un tiempo determinado, es deudor á plazo, porque su obligación es á plazo. No habrá error esencial dice el art. 791, ni se puede repetir lo que se hubiese pagado en los casos siguientes: primero, cuando la obligación es á plazo y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo; y finalmente, el demandante no decía si el error en virtud del cual hizo el pago sin el descuento del ocho por ciento, fué un error de hecho ó un error de derecho. Seguramente que no ha sido un error de derecho, puesto que en su mismo escrito de demanda afirmaba que en otras ocasiones había exigido el descuento y le había sido acordado por los demandados. Se trata también de leyes especiales que afectan directamente los intereses de las compañías de tramways como la demandante y debe suponerse por lo mismo, que ésta las conocía. El error invocado en la demanda, es entonces de hecho. ¿En qué consistía? ¿Qué motivos dieron lugar á él? ¿Qué

renuncia tácita del derecho acordado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 392, Ser. 4^a.

Obligación anterior—Véase: *Excepción de pago*, núm. 5.
—*Sociedad comercial*, núm. 1.

causa razonable ó siquiera excusable hubo para errar? No lo decía absolutamente la parte actora á pesar de ser ello indispensable para el buen éxito de la demanda. El error de hecho no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse, dice el art. 929, cuando la ignorancia del verdadero estado de la cosa proviene de una negligencia culpable. Esa negligencia culpable debe atribuirse al actor, si como lo afirma pagó efectivamente sin exigir el descuento, por error, porque en una operación de esta naturaleza, tan sencilla, que necesariamente debe haberla efectuado el actor varias veces, no se concibe un error semejante, repetido en diferentes fechas como son aquellas en que se verificó el pago, pues se hicieron en varios pagos parciales. Es por demás evidente el principio de equidad sobre que se basa el artículo 784 del Cód. Civ., pero no tiene la interpretación y el alcance que se le quería atribuir por la parte actora. Esta prescripción que tiene por base, como se ha dicho un principio de equidad que no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma ó con una cosa que no se le debía ó que no se la debía el que la entrega, se encuentra incorporada á todos los Códigos y tiene por origen el derecho romano el primero que acertó á dar forma á las obligaciones nacidas sin convención, como lo dice Gutierrez Fernandez en su tratado de derecho civil español. Las leyes 28 y siguientes del título 14, Part. 5^a citada por el Dr. Velez en la nota de dicho artículo, consagran el mismo derecho estableciendo los diversos casos en que puede tener lugar. Entre estas leyes, una de ellas, la ley 30, establece que cuando alguno paga á sabiendas lo que no debiese, no lo puede demandar, «porque aquel que pagó lo que sabía que no debía, entiéndese que lo hace con intención de lo dar... fueras ende, agrega, si el que fuese tal pago fuese menor de 25 años»—menor de edad entonces. —Reconocido el pago en la forma espresada, no puede suponerse que ha habido un error por parte de los deudores en las condiciones exigidas por la ley para poder repetir lo pagado. Los actores sabían y estaban obligados á saberlo como deudores, el beneficio de que podían usar como un derecho legítimo al verificar el pago y no puede decirse entonces que hubo error, y si más bien omisión ó negligencia culpable al dejar de ejercitar ese derecho en la oportunidad debida. Es por lo tanto el caso de la ley 30, Partida recordada.





1^a. Obligación comercial—Aun cuando por la universalidad del juicio deba ser exigida ante la jurisdicción civil, debe ser juzgada única y exclusivamente por las leyes comerciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 235, Ser. 4^a.

Obligación comercial—Véase: *Daños y perjuicios*, número 59—*Excepción de espera*, núm. 1.

1^b. Obligación condicional—Para exigir judicialmente el cumplimiento de una obligación condicional, el actor debe justificar que la condición ha sido cumplida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3^a.

2. Obligación condicional—Solo puede pedirse el cumplimiento de una obligación condicional justificando que la condición que la hace exigible se ha llenado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 4^a.

3. Obligación condicional—Procede la fijación por los

1^a—Se trataba del cobro de una letra de cambio dirigido con una testamentaria. Todas las negociaciones sobre letras de cambio y de plaza se consideran actos de comercio, están regidas por el Código de Comercio y deben ser sometidas a la jurisdicción comercial las cuestiones que con motivo de ellas se susciten. Si la ejecución se promovió en el caso del sumario ante un Juez civil, fué en razón de la universalidad del juicio testamentario, pero no por ello deben dejar de aplicarse en primer término las disposiciones del Cód. de Com. que legislan en todo lo relativo a la letra de cambio.

1^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase: verb. *Condición*, núm. 2.

2—Véase: nota precedente.

3—Se trataba de un contrato de compraventa en el que se hacía constar que el comprador había adquirido del vendedor una propiedad ubicada frente a la plaza de Monserrat. Se había estipulado que en la escrituración a favor del comprador, apareciera que había sido entregado el precio, lo que no era exacto, ni que tampoco fuese el estipulado, sino la suma de cien pesos moneda nacional la vara cuadrada, quedando en consecuencia obligado a la entrega de este último precio, tan pronto como, el comprador enajenase la propiedad a la Municipalidad con la cual estaba en negociación. Quedó igualmente entendido y convenido que si por cualquier evento esa negociación no se realizaba, quedaría sin

tribunales del plazo para el cumplimiento de una obli-

efecto la escritura, anulándose ante el mismo escribano que debería entenderla. Como hubieran pasado diez meses sin que la operación se llevase á término por el comprador, los vendedores lo interpellaron judicialmente á fin de que fijase un breve plazo para ese efecto y bajo el apercibimiento declarado en la forma de la referencia. El demandado reconoció la verdad de estos hechos, que servían de fundamento á la acción, cuya improcedencia sostenía, alegando que el demandante no había cumplido con las obligaciones que el convenio le imponía de justificar con los otros vendedores su carácter de únicos y universales herederos del primitivo dueño del terreno vendido; que no procedía el señalamiento de plazo por tratarse de una venta hecha bajo condición resolutoria debiendo el actor esperar su cumplimiento. El primer extremo de oposición del demandado fué desestimado por el Juez de 1ª Instancia y como solamente se alzó de su pronunciamiento la parte actora, consintiéndolo el demandado, quedaba como cuestión única á resolver, la comprendida en el segundo medio de defensa. El Juez de 1ª Instancia consideraba arreglada esta defensa por cuanto no tratándose de una obligación pura sino condicional, el señalamiento de plazo por parte del Juzgado sería improcedente, pues no hay disposición alguna de la ley que lo autorice para ello. No son aplicables, decía, las disposiciones de los arts. 618, 725 y 751 del Cód. Civ. invocados por la parte demandante en razón de referirse á obligaciones puras sin plazo para su cumplimiento; ni lo es el 545, pues tampoco autoriza la fijación de un término, dentro del cual debía cumplirse la condición, cuando no hay tiempo fijado. Sin desconocer la exactitud de esa doctrina, en cuanto se refiere á la inaplicabilidad de los artículos primeramente mencionados, en orden á las obligaciones de carácter condicional, se reputa no obstante errónea en cuanto á la interpretación de las demás disposiciones que se citaban por el Juzgado de 1ª Instancia. La solución del punto en debate no se encontraría rastreando en su espíritu la proximidad ó analogía de los preceptos de los arts. 618 y 751, con los que rigen especialmente las obligaciones sugetas á condición, sino que es en el conjunto de estos últimos, en su letra, en su alcance, en el sistema que ha seguido el codificador, donde se halla esa solución, distinta seguramente, de la de la sentencia de 1ª Instancia. Según el art. 533, las condiciones deben cumplirse en la manera en que las partes verosimilmente quisieran y entendieran que habían de cumplirse, espresando á su vez el art. 541, concordante con aquel, que cuando no hubiese tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes en-



gación condicional.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 134, Ser 4^a

tendieron que debía cumplirse. El codificador argentino ha seguido en este pasaje las opiniones de Pothier, según el cual, si bien las condiciones deben ordinariamente cumplirse *en forma específica*, pueden, no obstante ser cumplidas por *equipollens* cuando *pro subjecto materia*, se desprende que esa ha sido verosimilmente la intención de las partes, principio que según el mismo espositor, ha resuelto la cuestión que al respecto dividía á los autores. El Código de Napoleón ha reproducido este principio en su art. 1175, análogo al 533 del nuestro, Savigny, más radical que el viejo tratadista francés, enseña en los párrafos 118 y 119, tom. 3^o, que las condiciones deben interpretarse ámplia y equitativamente y que así cuando se busca el sentido de ellas, esto es, la manera cómo deben cumplirse, es necesario, en general, consultar antes la intención de las partes, que los términos empleados. Podría objetarse que estos razonamientos no son conducentes en cuanto no se ha demostrado la resolución del contrato por el incumplimiento de la obligación impuesta, pero debe observarse que si se hace mérito de ellos, es con el propósito de poner de manifiesto la tendencia de nuestra legislación vigente sobre la materia y consiguientemente el error jurídico en que incurrió el Juez al declarar la improcedencia del señalamiento del plazo por no existir ley que lo autorice á hacerlo. La fijación de un término prudencial, á falta de interpretación expresa, no desnaturaliza las obligaciones condicionales, ni es contraria á su índole jurídica. La opinión de Marcadé no es una opinión aislada, ni seguramente antagónica á la del codificador patrio, quien la hace valer, no á los fines expresados en la sentencia del inferior, sino para fijar la verdadera inteligencia del artículo y doctrina que lo ha inspirado. Debe tenerse desde luego en cuenta que el Dr. Velez ha adoptado, en esta materia el sistema que más se conforma á los principios de equidad—arts. 533 y 541—y que es una manera idéntica de interpretar el cumplimiento de las obligaciones lo que funda la doctrina de Marcadé, como se deduce del comentario que ilustra el pasaje, en el cual, después de establecer que una de las escuelas de los juristas romanos era de opinión contradictoria, discurre que no cabe sobre el punto duda alguna en virtud de las disposiciones que declaran que la condición debe cumplirse de la manera que las partes entendieron verosimilmente que ella lo fuese.—Véase la nota del art. 541.—La obligación debe contraerse bajo la condición de que un acontecimiento sucedería ó no sucedería en un tiempo fijo, caducando si fenese el término sin realizarse ó desde que es indudable que la condición no pueda cumplirse, quedando en ese caso cumplida si pasa el tiempo sin





4. Obligación condicional—La obligación condicional aun reconocida, no es ejecutiva ni basta para librar mandamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 63, Ser. 4^a.

1. Obligación de dar—Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la

verificarse—arts. 339 y 340 del Cód. Civ.—Supone aquí la ley que las partes, ya se trate de condiciones positivas ó negativas, han fijado un plazo dentro del cual deben éstas realizarse ó no, siendo evidente que á falta de cláusula expresa sobre el particular, el principio que debe necesariamente regir sus relaciones comunes, en conformidad al sistema de interpretación seguido por nuestro derecho, es que la condición deberá cumplirse en el tiempo que verosimilmente lo entendieron las partes. Pero pueden producirse diferencias, con relación á este tiempo, diferencias tanto más posibles y más hondas, cuanto que no había otro término de salvación, que la intención presunta de los interesados, y en tal emergencia no se explica, á menos de pasar por principios de universal aplicación, que puede desconocerse la intención legítima de los Jueces, ni menos que para dirimirla pudiera acudirse á otra que no fuera la de ellos. Hablando los anotadores de Zachariæ sobre las condiciones potestativas, estipuladas sin fijación de tiempo, dicen: que es evidente que cuando la condición no anula por su naturaleza la obligación, puede suponerse que la intervención de las partes haya sido someterse indispensablemente á sus efectos naturales. Debe admitirse entonces que el deudor tiene el derecho de interpelar judicialmente á la persona á quien se ha obligado, á efecto de hacer fijar un plazo dentro del cual deberá cumplir la condición, quedando exonerado el deudor si no lo verificase—tom. 3^o, pág. 377, nota 22—Llerena, sobre el art. 341, expresa, que el Juez atendiendo la naturaleza de la obligación, determinará el tiempo en que la condición deberá cumplirse, siempre que una de las partes lo solicite, aunque la otra no esté de acuerdo. Como concordantes recuerda oportunamente el mismo comentador el art. 361 que preceptúa, que no habiéndose estipulado plazo para cumplir los cargos impuestos para la adquisición ó resolución de los derechos, deberá cumplirse en el plazo que el Juez señale.

4—No puede librarse mandamiento porque no trac aparejada ejecución.

1—Nuestra ley vigente, apartándose en este pasaje de la ley francesa y demás Códigos, que se han inspirado en sus fuentes, ha consagrado el principio de que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no



cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta por ambas partes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 252, Serie 3ª.

2. Obligación de dar—El juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar, es ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4ª.

3. Obligación de dar—El mandamiento de embargo preventivo, tratándose de obligaciones de dar, solo puede librarse por cantidad líquida.—Jur. Civ., tom. 3, página 389, Ser. 4ª.

4. Obligación de dar—Procede el embargo preventivo si existe justificada la obligación de dar.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 310, Ser. 4ª.

Obligación de dar—Véase: *Condición*, núm. 2.—*Embargo preventivo*, núm. 21.—*Honorarios*, núm. 17.

1. Obligación de hacer—Reconocida por el obligado su falta de cumplimiento á una obligación de hacer, aunque se alegue imposibilidad material debe ser condenado á

adquirir sobre ella ningún derecho real, derivando como consecuencia del mismo, que los derechos que una persona trasmite por contrato á otra, solo pasan al adquirente por la tradición, y que antes de verificarse ésta, los peligros de la cosa son de cuenta del deudor de la obligación —arts. 577 y 3265, Código citado.—Entre otras aplicaciones positivas de este principio, debe recordarse la contenida en el art. 578, aplicable por analogía, según el cual, si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta por ambas partes. Nuestro artículo, dice la nota ilustrativa, libra también al deudor de cosa cierta, de la obligación de entregarla si perece sin su culpa, pero lo libra disolviendo la obligación y no dejando obligado al acreedor.

2.—Este juicio no tiene una tramitación especial en el Cód. de Procedimientos, por cuya causa y de acuerdo con lo preceptuado en el art. 66 debe tramitarse por la vía ordinaria.

3.—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 26.

4.—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 49.

1.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 9.



cumplirla, ó en su defecto al pago de daños é intereses y las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 142, Ser. 3^a.

2. Obligación de hacer—La prueba de la cesión de una obligación de hacer como asimismo la de su aceptación por el acreedor, es á cargo exclusivo del deudor que la invoca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 392, Ser. 3^a.

3. Obligación de hacer—La indemnización por falta de cumplimiento de una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de la venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

4. Obligación de hacer—La acción pidiendo el cumplimiento de una obligación de hacer, no puede ser sustentada y resuelta conjuntamente con los daños y perjuicios por su falta de cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 83, Ser. 4^a.

5. Obligación de hacer—La pena estipulada para el que falte al cumplimiento de una obligación de hacer en plazo determinado, no queda tácitamente sin efecto por la

2—Véase verb. *Cesión*, núm. 3.

3—Véase verb. *Indemnización*, núm. 4.

4—Véase verb. *Daños y perjuicios*, núm. 58.

5—Se trata de un boleto de compraventa de un inmueble, por el cual se obliga al vendedor á pagar por la cosa una suma determinada, que debía abonarse en el acto de otorgarse la escritura de enagenación, estableciéndose que el comprador entregaría en señal la suma de cuarenta mil pesos moneda legal, los que perdería en caso de no otorgarse la escritura por su culpa en todo el mes de Octubre, y que esta suma sería devuelta y la compra quedaría sin efecto si el vendedor no pudiera venir de Europa á firmar la misma escritura por caso fortuito ó de fuerza mayor. Fundado en el boleto privado, pedía se condenara al comprador á oblar el precio convenido y á firmar la escritura bajo apercibimiento de tenerlo por desistido con pérdida de la suma dada en señal. El demandado negó que la escritura hubiese dejado de otorgarse por su culpa dentro del plazo convenido y afirmaba, por el contrario, que fué el demandante quien hizo imposible que aquella pudiera otor-



prórroga del término dentro del cual debió cumplirse; debe resultar de convención expresa.—Jur. Civ., tom. 1, página 214, Ser. 4^a.

6. Obligación de hacer.—Al ordenarse el cumplimiento de una obligación de hacer escritura pública de compra-venta, no puede ordenarse la oblación judicial del precio en el Banco, pues solo debe abonarse al firmarse el ins-

garse dentro de ese plazo, por lo cual, decía, no tardaría en promover la acción correspondiente por la devolución de la suma entregada en calidad de seña y por la indemnización de los perjuicios que se le hubieren ocasionado. Colocada la cuestión en este terreno, la sentencia de 1^a Instancia mandaba reducir á escritura pública el contrato que espresaba el boleto, bajo la pena de resolverse la obligación con pérdida de la seña. El demandado no justificó en manera alguna las escepciones alegadas al imputar al vendedor la falta de escrituración del contrato en el plazo convenido, resultando lo contrario de los antecedentes consignados en autos. Se comprobó en el juicio plenamente, que el vendedor vino de Europa á objeto de otorgar la escritura, como asimismo que instó al comprador para que se realizase ese hecho, y se comprobó que no obstante la deficiencia que se decía tener los títulos, el comprador dió órdenes al Escribano para que procediera á estenderla. De donde resultaba que la obligación no dejó de cumplirse por culpa del vendedor, procediendo la condenación del demandado con arreglo á lo dispuesto por el Cód. Civ. en sus arts. 1185 y 1202. Mas, únicamente á exigir el derecho consagrado en esos artículos han debido limitarse las pretensiones del actor, puesto que dado el objeto del contrato, la escritura pública era ineludible y por lo tanto, á falta de ella, no ha quedado concluido como tal contrato, sino para el solo efecto de exigir la escrituración. Era, por consiguiente, improcedente la petición formulada en la demanda, para que se obligase al comprador á depositar el precio de la compra en el Banco Nacional. El pago del precio es una obligación emergente del contrato concluido y estendido en la escritura pública que bajo pena de nulidad exige el art. 1184, inc. 1^o, del Cód. Civ., y por lo tanto, no hay derecho para obligar al comprador á la entrega del precio con anterioridad á la escritura, pues ello importaría ser exijibles las prestaciones de un contrato que no existe á ese efecto, que no se encuentra legalmente concluido y por el que se convino el pago del precio al firmarse la escritura.

6—Véase la última parte de la nota precedente.

trumento traslativo del dominio.—Jur. Civ., tom. 1, página 214, Ser. 4ª.

7. Obligación de hacer—El cesionario de una obligación de hacer carece de acción contra el obligado, si la cesión ha sido hecha sin su consentimiento.—Jur. Civ., tomo 1, págs. 281, Ser. 4ª.

8. Obligación de hacer—Para que proceda contra el propietario la exigencia del cumplimiento de la obli-

7—Una persona celebró un contrato de compraventa de un inmueble por medio de un boleto privado. El comprador vendió á su vez el mismo terreno á un tercero. Con este recaudo, el cesionario se presentó demandando judicialmente al primitivo vendedor por la escrituración del inmueble. El demandado sostuvo que el actor carecía de acción para demandarlo, resolviéndose de conformidad por la Cámara. Desde luego, el demandado no ha tenido la mínima intervención en el acuerdo celebrado entre el segundo y tercer poseedor, en cuyo caso y cualquiera que fuera la filiación jurídica del acto, su irresponsabilidad respecto del segundo es incontestable, en cuanto no existe vínculo alguno de derecho creado expresa ni virtualmente por razón de consentimiento, de contrato, ó de disposición alguna de ley. El juez de 1ª Instancia procedió, pues en justicia, desestimando las pretensiones de la demanda. Si en conformidad á nuestro derecho actual el primitivo vendedor no estaba obligado á hacer entrega de la cosa objeto de lo convención, sino solo á reducir á escritura pública el instrumento simple, y si es evidente que esta obligación es esencialmente personal—artículos 1185 y 1187, Cód. Civ.—parece fuera de toda controversia que ni el cedente tenía facultad legal para enagenar la cosa, ni menos para crear derechos á favor de un tercero, por medio de un acto de posesión respecto de su legítimo propietario para quien los acuerdos pasados entre él y el tercer poseedor son *res inter allos*. Es, por otra parte, regla de derecho que los terceros no pueden invocar la existencia de un contrato sino en casos ó situaciones determinadamente prescritos por la ley—art. 1199, Cód. citado—en ninguno de los cuales se halla comprendido el caso que nos ocupa.

8—Un comprador se presentó demandando la escrituración del boleto privado que acreditaba el contrato de compraventa de un inmueble, el que había sido vendido al actor por un tercero que era, dijo, comisionado al efecto, y sin intervención del propietario. Este negó categó-





gación de hacer, es requisito indispensable justificar que autorizó al comisionista para efectuar la venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

9. Obligación de hacer—Demandada la obligación de hacer escritura de un boleto de compraventa, no procede la resolución del punto sobre imposibilidad del cumplimiento del contrato que resultará de la escritura.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

10. Obligación de hacer—Si en las diligencias previas del remate ó en el acto de firmarse el boleto de compraventa el martillero no hace constar que obra á nombre de un tercero, el comprador tiene acción directa contra él para el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 82, Ser. 4^a.

11. Obligación de hacer—Para que un boleto de compraventa pueda considerarse como obligación de hacer escritura, debe primero ser reducido á escritura pública el contrato privado que de él resulte.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 351, Ser. 4^a.

12. Obligación de hacer—Justificada la autenticidad del

ricamente al contestar la demanda, que hubiese autorizado al intermediario para vender el inmueble. Si el actor no produce la prueba que corresponde á su derecho—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a—dejando establecida la existencia del mandato, la demanda debe ser rechazada.

9—De acuerdo con los fundamentos aducidos en la nota del verbo *Boleto de compraventa*, núm. 32.

10—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 33.

11—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente establecida por la mayoría de la Cámara.—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 34.

12—Así lo tiene establecido la opinión de la mayoría de la Cámara contra la minoría, que la forma siempre el doctor González del Solar: éste opina que el boleto privado de compraventa da derecho á la escrituración del inmueble sin que se requiera previamente la escrituración del boleto.—Véase entre los numerosos casos resueltos el verbo *Boleto de compraventa*, núm. 11.



documento privado que contiene la obligación de hacer, debe reducirse á escritura el boleto de compraventa, pero no el contrato que él contiene.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 177, Ser. 4^a.

13. Obligación de hacer—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, página 218, Ser. 4^a.

14. Obligación de hacer—No procede el pago de pérdidas é intereses mientras no se justifique la mora en el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 402, Ser. 4^a.

15. Obligación de hacer—La intimación al cumplimiento de la obligación de hacer hecha al apoderado ó representante es legal y válida, aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4^a.

16. Obligación de hacer—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 363, Serie 4^a.

13—Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Cámara, equivocadamente según nuestro modo de pensar.—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 3.

14—Y la mora solo se produce cuando judicialmente se demanda el cumplimiento de la obligación de hacer. Véase: verb. *Mora*, núm. 3.

15—Dictada una sentencia condenando á la parte á escriturar dentro de un término dado, fué la sentencia notificada al apoderado. Vencido el término acordado sin darse cumplimiento á lo ordenado en la sentencia, el vencedor dedujo la demanda que esa falta de cumplimiento autoriza. El condenado dijo, que el término acordado en la sentencia no solo no había vencido sino que ni siquiera había empezado á correr, pues no le había sido notificado á él, y que la notificación hecha al apoderado no tenía ningún valor. Esto no es exacto atento lo dispuesto en el art. 16 del Cód. de Proc.

16—Véase el núm. 13.



17. Obligación de hacer—En las obligaciones de hacer sin plazo determinado, solo existe mora desde la fecha de la interpelación judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 242, Ser. 4^a.

18. Obligación de hacer—En estas obligaciones, el pago de daños y perjuicios solo procede cuando hubiere resistencia de parte de alguno de los obligados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 72, Ser. 4^a.

Obligación de hacer—Véase: *Boleto de compraventa*, números 1 y 30—*Embargo preventivo*, núms. 3, 7, 16, 17 y 42—*Daños y perjuicios*, núms. 9, 43, 45, 57, 58 y 98—*Inhibición*, núm. 14—*Prueba plena*, núm. 1—*Condominio*, núm. 6—*Contrato verbal*, núm. 7—*Escritura pública*, núm. 15.

Obligación del padre—Véase: *Alimentos*, núms. 2 y 3.

Obligación ejecutiva—Véase: *Escepción de pago*, número 5.

Obligación personal—Véase: *Boleto de compraventa*, número 13—*Sindicato*, núm. 1—*Viudo*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 16.

1^a. Obligación por carta—La carta reconociendo expresamente la obligación y ordenando el pago por un tercero, no se encuentra comprendida entre aquellas que la ley rechaza por tener solo referencias incidentales.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4^a.

1^b. Obligación por instrumento privado—La verdadera causa de una obligación, distinta de la que espresa el instrumento privado, debe ser alegada en la demanda; si

17—Véase: verb. *Mora*, núm. 3.

18—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 65.

1^a—Véase: verb. *Carta*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Instrumento privado*, núm. 6.



se espresa en el curso del litigio no debe ser tomada en consideración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

2^a. Obligación por instrumento privado—La obligación por instrumento privado atribuido al causante de la sucesión, debe ser autenticada para que tenga fuerza ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 384, Ser. 4^a.

Obligación primitiva—Véase: *Hipoteca*, núm. 1.

1. Obligación sin plazo—El término dentro del cual debe cumplir el deudor una obligación sin plazo, debe fijarlo el Juez con arreglo á los usos y costumbres establecidos para cada clase de obligación.—Jur. Civ., tom. 3, página 174, Ser. 3^a.

2^b. Obligación sin plazo—La fijación del término para el cumplimiento de una obligación sin plazo determinado, debe hacerse con audiencia del obligado.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 406, Ser. 4^a.

3. Obligación sin plazo—No procede el reconocimiento de la firma de una obligación sin plazo por no ser ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3^a.

Obligación solidaria—Véase: *Sindicato*, núm. 1.

Obligaciones—Véase: *Condición resolutoria*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 6—*Inhibición*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 23—*Fianza*, núm. 2—*Instrumento privado*, núm. 4—*Sociedad*, núm. 3.

2^a—El instrumento privado para que traiga aparejada ejecución, según precepto del art. 465, inc. 2º del Cód. de Proc., requiere ser reconocido en juicio. Y el art. 466 prescribe el reconocimiento previo del documento privado para que quede preparada la vía ejecutiva. Según jurisprudencia de la Cámara, ese reconocimiento no puede pedirse á los herederos sino cuando ellos voluntariamente quieran reconocer la firma del causante.

1—Arts. 618 y 751 del Cód. Civ.

2^b—Véase: verb. *Término*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Firma*, núm. 7.



Obligaciones del causante—Véase: *Costas*, núms. 5 y 40.—*Testamento*, núm. 4.—*Documento privado*, núm.

Obra—Véase: *Indemnización*, núm. 1.—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1 y siguientes.—*Jornales*, núm. 1.—*Jurisdicción ordinaria*, núm. 1.—*Competencia*, núm. 2.—*Construcciones*, núm. 2.—*Daños y perjuicios*, núm. 101.

1. *Obras*—El propietario es el obligado por las obras construidas en la propiedad mientras no justifique que la obligación ha sido á cargo de un tercero por contrato anterior á las obras, no modificado con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 4^a.

1—El demandante decía haber ejecutado obras de yesería en cuatro casas de propiedad del demandado; que esas obras fueron ejecutadas con la condición espresa de que una vez terminadas se practicaría su medición con intervención del arquitecto encargado de la construcción, quien en prueba de conformidad suscribiría las cuentas respectivas, con cuyo requisito se obligaba al propietario á efectuar el pago, todo lo que constituía el contrato de locación de servicios á que se refiere el art. 1623 del Cód. Civ., fundamento de la demanda que deducía, invocando para esto también la prescripción de los arts. 1627 y 1636 del mismo Código. Contestando la acción entablada, se negó adeudar la cuenta cuyo importe se demandaba y afirmando haber celebrado un contrato con un empresario, quien se obligó á hacer construir cuatro casas por una cantidad determinada cada una, siendo de la exclusiva cuenta del constructor el pago de los materiales y obreros. Negaba el demandado haber pactado nada absolutamente con el demandante y agregaba que éste carecía de acción para cobrar lo que no le debía, no pudiendo perjudicarle los arreglos que existían entre el demandante y el empresario, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1199 del Cód. Civil. Ahora bien, con la prueba de testigos producida se comprobó la verdad de los trabajos que constituían el crédito del actor; para que la defensa del demandado hubiera prevalecido era necesaria la prueba de su escepción. Defenderse del cobro de una suma echando sobre un tercero la obligación de pagarla, importa indudablemente escepcionarse, y el que se escepciona debe probar de acuerdo con la conocida regla de derecho *reus in excipiendo fit actor*.



2. Obras—Las obras ordenadas por una sentencia ejecutoriada, no pueden ser cumplidas por el acreedor, aun despues de vencido el término fijado, sin audiencia del obligado y por orden judicial.—Jur. Civ., tom. 7, página 378, Ser. 4^a.

3. Obras—La afirmación del propietario que reconociendo la verdad de las obras alega haberlas contratado con un tercero, importa una escepción cuya prueba le corresponde.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 356, Ser. 4^a.

Obras—Véase: *Cesionario*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 24—*Perito*, núm. 3—*Inhabilidad de título*, número 8.

Obras públicas—Véase: *Remuneración profesional*, número 1—*Adoquinado*, núms. 1 y 2—*Empedrados*, número 3.

Observaciones—Véase: *Comprador judicial*, núm. 3—*Rendición de cuentas*, núm. 29.

Ocupanté—Véase: *Acto ilícito*, núm. 3—*Violencia*, número 1.

1^a. Ofensa ilícita—La calificación de jugador de garito, hecha á una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, quien debe ser indemnizado según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, página 379, Ser. 3^a.

1^b. Oferta—La modificación á una oferta, importa la proposición de un nuevo contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3^a.

2—Véase la nota del verb. *Inhabilidad de título*, núm. 8.

3—Véase: verb. *Escepción*, núm. 2.

1^a—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 9.



1ª. Oficial público—La declaración del oficial público sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público, forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado, aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4ª.

Oficial público—Véase: *Notificaciones*, núm. 2—*Contradocumento*, núm. 2.

Oficinas extranjeras --Véase: *Informes*, núm. 1.

Oficinas municipales—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 10.

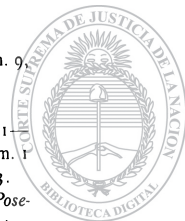
1ª. Oficinas públicas—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 220, Serie 3ª.

2. Oficinas públicas—No procede la fijación de término á la parte para la presentación de pruebas cuyo diligencia-

1ª—Véase: verb. *Instrumento público*, núm. 4.

1ª—Véase: verb. *Administración*, núm. 1.

2—El Juez de 1ª Inst. consideró que el temperamento adoptado en el sumario importaba una paralización indefinida del asunto, y fijó diez días para la prueba. La Cámara revocó el auto diciendo, que no dependía de la parte el diligenciamiento de la prueba pendiente, sino de la repartición pública á la que se dirige el oficio, en cuyo caso es clara el derecho de la parte para exigir que se practiquen antes de los alegatos, «sin la fijación de un término que podría hacer ilusorio ese derecho.» Parece que este último fundamento implicara establecer que el término acordado por el Juez—diez días—podría hacer ilusoria la producción de la prueba, por ser muy breve: pero si ésta hubiese sido la mente de la Cámara no habría revocado el auto del Inferior, sino que simplemente lo habría reformado ampliándolo según su criterio. Pero esto no se hizo, sino que se revocó la providencia, dejando establecido que antes de los alegatos debía practicarse la prueba pendiente.



ciamiento pende de oficinas públicas—Jur. Civ., tom. 9, pág. 15, Ser. 4^a.

Oficio—Véase: *Declaraciones*, núm. 7.

Omisión—Véase: *Escepción de defecto legal*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 1—*Culpa ó negligencia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 70, 71, 100, 101 y 103.

Oposición—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2—*Poseción*, núm. 5—*Posiciones*, núm. 30—*Curador*, núm. 4—*Apoderado único*, núm. 5—*Tutor especial*, núms. 2, 4 y 8—*Tercería*, núm. 6.

Orden público—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 2.

1^a. Orden verbal—La aprobación superior, y aun la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

Ordenes—Véase: *Comisario*, núm. 2.

1^b. Ordenanza municipal—La escepción de inhabilidad de título, cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de ésta pero no á su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 215, Ser. 4^a.

2. Ordenanza municipal—Las demandas tendentes al cumplimiento de una ordenanza municipal, corresponden á la jurisdicción de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 305, Ser. 4^a.

Creemos que no es justo señalar un término tan breve, especialmente cuando el diligenciamiento no depende de la parte que lo solicita, como tampoco es justo dejar paralizado un pleito indefinidamente. Tanto el fallo de 1^a Inst. como el de la Cámara pecan por extremos. La fijación de un término prudencial colocaría la cuestión en su justo lugar. El espíritu del art. 118 del Cód. de Proc. autoriza este temperamento.

1^a—Véase: verb. *Facultades legales*, núm. 2.

1^b—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12.

2—Véase: verb. *Demanda*, núm. 5.



Ordenanza municipal— Véase: *Adoquinado*, núm. 3—*Nulidad*, núm. 8—*Municipalidad*, núm. 11—*Poderes locales*, núm. 1.

1. Ordenanzas militares—No son aplicables á los pro-

1.—Por la importancia de la cuestión damos los fundamentos aducidos por el Juez de 1ª Inst. al resolverla, cuyo fallo fué confirmado por la Cámara *por sus fundamentos*. El fallo dice así: «Según el inc. 4º del art. 1870 del Cód. Civ., son aplicables las disposiciones del título del mandato á las representaciones por personas dependientes, como el militar en relación á su superior. Siendo aplicables estas disposiciones y resultando del testo mismo del documento en que se fundaba la demanda que el demandado lo había suscrito á nombre del batallón y como jefe del mismo, forzoso es decidir que no era personalmente responsable de la obligación que resultaba del mismo documento, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1930 y 1947 del Código. Prescindiendo del citado documento, que es en el caso y como lo reconocía la parte actora, la ley de las partes se atenía el Juzgado á los principios generales que dominan esta materia; forzoso le será decidir también que el demandado no es ni puede ser personalmente responsable del pago de la obligación. Se trataba, en efecto, de una deuda por suministros hechos á un cuerpo del Ejército nacional, y basta enunciar la causa de la obligación para convencerse de que el jefe de ese cuerpo no puede ser responsable con el tercero que efectuó tales suministros. Es el cuerpo, el Ejército, es la Nación en definitiva, la que adeuda y quien debe abonar el importe de esos suministros, sin que sea parte para escusarla de sus obligaciones para con el tercero que las afecta, la circunstancia de haber entregado los fondos necesarios para su pago al habilitado de su batallón, de que era jefe el demandado. Así lo reconoció el actor al gestionar primero del Gobierno mismo el pago de su crédito, y aun después de entablada la demanda, al asegurar que es el Gobierno Nacional el obligado al pago del crédito que comprobaba el citado documento, decía en efecto: «El documento de fs. 2, es dado por el jefe del batallón 5º de línea y procede del rancho de los soldados y como el Gobierno no puede pagarse á sí mismo el importe de sellos, mal podría exigírsele ese impuesto en la documentación del alimento de las fuerzas.» No puede pues, dudarse, en presencia de estas frases, que en la opinión misma del demandante era el gobierno el obligado y no el demandado, cuya personalidad desaparece ante su carácter de jefe del batallón 5º de línea. Siendo el Gobierno y no el demandado el responsable para el pago de



veedores los que en sus relaciones comerciales se rigen

la obligación, el Juzgado no podía tomar en cuenta el resultado del expediente administrativo iniciado por el actor. El Poder Ejecutivo incurrió en error, á juicio del Juez, al declarar que el actor debía recabar ante Juez competente y del jefe que lo suscribió, el cobro del mencionado documento, en razón de haber contraído dicho jefe un compromiso meramente privado, y al cual es completamente ajeno el Gobierno. Ya se ha visto en efecto, que el demandante no tenía acción para exigir del demandado el pago de una obligación que éste ha contraído para su mandante. No se trata, por otra parte, como lo asegura el Poder Ejecutivo, de un compromiso meramente privado entre el demandado y demandante: se trata de un compromiso celebrado entre este último y el jefe de un cuerpo del Ejército Nacional, respecto del cual el P. E. no puede considerarse completamente ajeno, porque no es ni puede ser ajeno á los contratos que tienen por objeto la alimentación y subsistencia de los soldados de la Nación. El error del P. E. al hacer tales declaraciones, proviene sin duda alguna de una mala interpretación dada al art. 14, tít. 9º, tratado 1º de las ordenanzas del Ejército, del cual no resulta seguramente ni de su texto ni de su espíritu, que en caso de quiebra del habilitado de un batallón quede exonerado de toda obligación para con el tercero que contrató con el jefe del mismo batallón; ni menos que el tercero solo tenga acción contra el jefe. El artículo establece que si quiebra el habilitado, sufrirá las penas que espresa y se le confiscarán además todos los bienes raíces y castrenses, y agrega: que si unos y otros no alcanzaran á subsanar la quiebra, se satisfará el resto que no cubra, de este modo: *la tercera parte el coronel, teniente coronel y sargento mayor á proporción de sueldos, y los dos tercios restantes á correspondencia de los suyos, los capitanes y oficiales subalternos, comprendido ayudante y abanderado.* Desde luego el P. E. no ha podido fundar sus declaraciones, antes referidas, en el texto de esa disposición de las Ordenanzas, y tampoco ha podido fundarla en su espíritu, porque se comprende bien que es el mismo Gobierno quien debe sufrir inmediatamente los efectos de la quiebra sin perjuicio de resarcirse de lo perdido en la forma indicada. No podría ser de otro modo. La alimentación de los soldados de un batallón del Ejército no puede depender de la buena fe del habilitado que reciba los fondos con tal objeto. Si el habilitado de un batallón quiebra, el Gobierno debe proveer inmediatamente á la subsistencia de los soldados, que no pueden esperar la ejecución del moroso procedimiento—embargo de bienes y de sueldo—que establece la disposición de que se trata; para cubrir

única y exclusivamente por las disposiciones del derecho común.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 3ª.

el desfalcó ocasionado por la quiebra y si el jefe del batallón, como en el caso, ha contratado con un tercero la provisión del mismo, bajo la base de abonarla con los fondos que recibió y desfalcó el habilitado, es evidente que el Gobierno no podrá escusarse de pagar su importe bajo pretexto de haber ya entregado los fondos al habilitado y de tratarse de un compromiso privado entre el jefe y el proveedor, porque si éste ha contratado con el jefe, lo ha hecho entendiendo obligar á la nación y confiado en su buen crédito. El Gobierno debe, pues, abonar la provisión y repetir luego su importe del habilitado, haciéndole embargar sus bienes, ó del jefe y oficiales del batallón, reteniéndoles ó descontándoles sus sueldos, si los bienes no alcanzasen. No puede interpretarse de otra manera el artículo de que se trata, sin ponerse en contradicción con la ley civil, y sin incurrir en la irritante insistencia de hacer pesar los efectos de la quiebra del habilitado sobre el tercero, sobre el proveedor, que, confiado en el crédito de la nación, ha alimentado á sus soldados. De todas maneras y aun cuando el artículo de las Ordenanzas de que se trata, autorizara las declaraciones del Gobierno y la solución que ha dado al asunto, ese artículo no puede ni ha podido ser opuesto al demandante que está amparado por la ley común y no sujeta á dichas Ordenanzas, las cuales reglan solamente las relaciones del Gobierno con sus mandatarios, jefes y oficiales que de él dependan. El Gobierno no ha podido, pues, ni aun en ese caso, escusarse de pagar el crédito del demandante, que no tenía acción contra el demandado, como queda establecido en las consideraciones anteriores. Por último, aun cuando la resolución dictada por el Gobierno en el expediente administrativo, hubiera sido dictada de acuerdo con el citado artículo de las Ordenanzas del Ejército, y aun cuando este artículo fuera el que debiera aplicarse en el caso para resolver la acción deducida por el actor, en ningún caso podría el Juzgado, en virtud de la disposición que comporta en sus términos, condenar al demandado, al pago total de toda la suma reclamada, porque según esa disposición el demandado solo será personalmente responsable de la novena parte de la suma que restare después de haberse hecho escusión en los bienes del habilitado. La obligación de los jefes y oficiales, según dicho artículo, es en efecto, simplemente mancomunada y en manera alguna solidaria como el Gobierno lo afirma en la recordada resolución; obligación simplemente mancomunada porque la prestación que forma su objeto



Oro sellado—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Moneda especial*, núm. 1 y siguientes.

es espresamente dividida en partes determinadas, entre todos los jefes y oficiales—art. 621 del Cód. Civ.—y en manera alguna solidaria porque para que revista tal carácter sería necesario que la solidaridad fuera espresada por términos inequívocos ó que espresamente la ley, el artículo de las Ordenanzas en el caso, la hubiera declarado solidaria—art. 701 y siguiente.





1. Pacto comisorio—En los contratos debe estipularse clara y explícitamente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Serie 3ª.

2. Pacto comisorio—La fijación de un término para la

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase: verb. *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

2—Verificada la venta de un inmueble en remate público pero no judicial se firmó el correspondiente boleto, estableciéndose que la propiedad debía escriturarse dentro de 20 días, y que «si el término no fuese suficiente se convendrán los que sean necesarios entre los interesados.» Vencidos los 20 días se pide la escrituración por el vendedor. El comprador se opone alegando, entre otras razones, que la compra había quedado sin efecto alguno, por no haberse procedido a la escrituración dentro del plazo establecido en el boleto. Es de advertirse que esa cláusula estaba impresa en el boleto espedido por el martillero al firmarse el contrato; se comprende perfectamente que se trataría en todo caso de una condición impuesta por el vendedor, la que el comprador no podría hacer ilusoria sin responsabilidad para él y mucho menos empleando su propia resistencia. El art. 1203 del Cód. Civ. resuelve el caso con toda claridad. Si bien es cierto que en los contratos bilaterales la regla general es que ninguna de las partes puede pedir su cumplimiento, sino cuando compruebe que ella misma lo ha cumplido, cuando se ofrece a cumplirlo, ó cuando su obligación fuese a plazo—art. 1201—debe sin embargo tenerse presente que esta regla general sufre excepción en el contrato de compraventa, pues cuando el vendedor no entrega la cosa en el tiempo fijado en el contrato, el comprador puede pedir la resolución de la venta ó la entrega de la cosa—art. 1412.—Se comprobó en



escrituración de un boleto impreso, de remate, no importa un pacto comisorio y solo confiere al comprador o al vendedor el derecho de exigir judicialmente el cumplimiento de un contrato, si no fuera de común acuerdo prorrogado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

3^a. Pacto comisorio—Debe encontrarse explícitamente consignado para que proceda la resolución del contrato; la ley obliga a las partes a exigir judicialmente el cumplimiento de éste.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 61, Ser. 3^a.

3^b. Pacto comisorio—No existiendo pacto comisorio expreso, no puede dejarse sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes.—Jur. Civ., tom. 6, página 188, Ser. 3^a.

4^a. Pacto comisorio—Siendo principio fundamental de nuestro derecho civil que los contratos se forman para cumplirse, su resolución solo es procedente si existe pacto comisorio espresamente estipulado.—Jur. Civ., tom. 5, página 350, Ser. 3^a.

4^b. Pacto comisorio—Reconocida la existencia de un convenio privado, no puede darse por disuelta la convención mientras no se pruebe también la existencia de un pacto comisorio establecido de común consentimiento de partes.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Ser. 4^a.

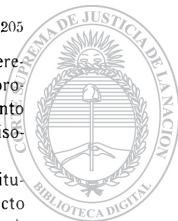
el caso presente que el vendedor instó la escrituración dentro de los 20 días, y que el comprador se negó a escriturar fundándose en la deficiencia de los títulos—deficiencias que fueron declaradas infundadas—y no pidió el nuevo plazo que le acordaba el boleto quedando consiguientemente exigible la obligación contraída, de acuerdo con los principios espuestos más arriba.

3^a—Véanse los números precedentes.

3^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida en los números precedentes. Véase asimismo, verb. *Contrato*, núm. 14.

4^a—Véase: *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

4^b—Véase: verb. *Convenio privado*, núm. 1.



5. **Pacto comisorio**—Siendo principio espreso en derecho que los contratos se forman para cumplirse, no procede la demanda de resolución, sino la del cumplimiento de la convención, salvo la existencia de un pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

6. **Pacto comisorio**—El término fijado para la escrituración, en el boleto de compraventa, no importa un pacto comisorio sino un término dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 109, Serie 4^a.

7. **Pacto comisorio**—Establecido en favor de una de las partes, no permite á la otra invocarlo á su favor para la rescisión del contrato de compraventa, solo puede exigir su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 307, Ser. 4^a.

8. **Pacto comisorio**—El pacto comisorio estatuido solo

5—Véanse los números precedentes, y verb. *Contrato*, núm. 3.

6—Véase: verb. *Escritura*, núm. 4.

7—Arts. 1197 y 1204 del Cód. Civ. El pacto comisorio es una escepción al principio general de que los contratos se forman para cumplirse; y como escepción debe interpretarse restrictivamente tan solo en favor de la persona favorecida con ella.

8—En el boleto se espresaba que el comprador habia entregado en garantía del cumplimiento de la compra la cantidad de 1850 pesos nacionales, que perdería si dentro del término estipulado, no se presentase á escriturar, así como también quedaria el vendedor desligado de todo compromiso de venta, sin perjuicio de dejar á salvo sus derechos y acciones para proceder contra el comprador. Leyendo detenidamente esta cláusula del contrato, se comprende fácilmente que la cantidad entregada por el comprador en garantía del cumplimiento de la convención, lo ha sido, no para responder á todas las consecuencias de su inexecución, en absoluto, sino para garantizar que haría efectiva su obligación de escriturar dentro del término convenido al efecto, y por eso es que los contratantes convinieron en que el comprador perdería esa cantidad si no se presentase á escriturar dentro de dicho término, sin perjuicio de dejar á salvo los derechos y acciones del vendedor para proceder contra él. Si así no fuere, carecería de objeto esta última



en favor del vendedor, le permite exigir del comprador el cumplimiento del contrato no obstante la pérdida de la

parte del contrato; siendo inaceptable la explicación que de ella hace el demandado cuando dice que esos derechos y esas acciones que se dejan á salvo son para que el vendedor pueda pedir la pérdida de la cantidad entregada en garantía, y resolución del contrato, porque suprimiendo esas palabras siempre podría el vendedor pedir la resolución del contrato y la pérdida de la cantidad entregada en garantía por el comprador. La intención de los contratantes era bien clara entonces, así como que el pacto comisorio fué establecido en favor del vendedor para el caso de que el comprador no se presentase á escriturar en el término convenido, desde que en la misma cláusula del boleto se decía, que el vendedor quedaría desligado de todo compromiso de venta si el comprador no se presentase á escriturar dentro de ese término. Si un comprador quisiera llevar á efecto la escrituración del contrato y el vendedor se conformase, renunciando al pacto comisorio, aquel no podría exigir la devolución de la cantidad entregada en garantía, ni que se le descontase del precio que debería pagar, porque la tiene perdida por el solo hecho de no haberse presentado á escriturar dentro del término convenido. Si esto es así, si el comprador tuviese ya perdida la cantidad que entregó para garantizar que concurriría á escriturar dentro del término señalado, cuando se le demandase el cumplimiento del contrato, en virtud de los derechos y acciones que espresamente, y para hacerlo, se hubiese reservado el vendedor, no podría ampararse en los arts. 1189 y 1202 del Cód. Civ. para eximirse de ejecutar dicho contrato, ofreciendo perder una cantidad que tendría ya perdida. Propiamente, la cantidad que hubiere entregado el comprador, no importaría la constitución de arras sino una cláusula penal para el caso ocurrido de que no se presentase á escriturar dentro de un término fijado. Si el demandado argüa que desde el vencimiento del término convenido para escriturar, el comprador había perdido la cantidad entregada en garantía y que el vendedor había quedado desligado de todo compromiso de venta, de donde deducía que el contrato quedaba rescindido, puede decirse que esto era exacto respecto al vendedor, porque el pacto comisorio fué establecido en su favor, pero ello en nada se oponía á la subsistencia del contrato, respecto al comprador, ni es contrario á la naturaleza de los contratos en los que es muy frecuente el pacto comisorio á favor de uno solo de los contratantes y está autorizado por el art. 1204 del Código. Esto solo demostraba que el comprador, por el boleto firmado quedaba más obligado que el vendedor.



cantidad entregada como seña.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 91, Ser. 4^a.

9. Pacto comisorio—No procede la rescisión del contrato de compraventa de inmuebles constante de instrumento privado si no existe pacto comisorio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

Pacto comisorio.—Véase: *Boleto de compraventa*, número 22.

1^a. Pacto de retroventa.—Al que alega la simulación de la venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 209, Ser. 3^a.

2. Pacto de retroventa.—El pacto de retroventa contenido en la escritura de venta puede ser modificado por instrumento privado, probada su autenticidad ó por los hechos de las partes posteriores al vencimiento, que demuestren de que aquel quede sin efecto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 55, Ser. 4^a.

Pacto de retroventa.—Véase: *Retroventa*, núms. 1 y 2—*Propiedad*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 21.

1^b. Padrastró.—No existiendo incompatibilidad en el pa-

9.—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 23.

1^a—Véase: verb. *Contrato de mutuo*, núm. 1.

2.—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 21.

1^b—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Inst.: el Inferior dijo, que el padrastró no podía ser tutor de sus entenados porque siendo facultativo del Juzgado la provisión de la tutela dativa y teniendo también en consideración que, si bien la ley no ha establecido espresamente la incompatibilidad para que el padrastró pueda ser tutor de sus hijos políticos, de hecho existe, desde que el tutor que se nombra en el caso de que se trata, tenía que principiar el desempeño de su cargo pidiendo á la madre de sus pupilos, representada legalmente por su esposo, la entrega de bienes y cuenta de la administración de los mismos; y finalmente, que si la ley espresamente ha privado á la viuda

drastro para desempeñar la tutela dativa de los hijos de su esposa, habidos en el primer matrimonio, los jueces

que contrae segundas nupcias, de los derechos de la patria potestad, ha sido para sustraer á los menores hijos del anterior matrimonio de la potestad ó dependencia del segundo esposo, lo que demuestra que la ley en su espíritu es contraria al desempeño de la tutela por el segundo ó ulterior esposo. La Cámara revocó esta providencia diciendo: «La sentencia niega á los padrastos el derecho de ser tutores de sus hijos políticos, á virtud de los inconvenientes que para los menores resultarían, quedando bajo la dependencia del segundo esposo de su madre, cuando es esta situación la que precisamente ha entendido evitar la ley, haciéndole incurrir en pérdida de la patria potestad á la madre que contrae segundas nupcias. Sin desconocer que en algunos casos la tutela conferida á los padrastos pueda traer inconvenientes que estarían al alcance del arbitrio judicial separándose prudentemente de la propuesta que se le hiciera parece en cambio, que estrictamente, en el terreno del derecho, no pueden crearse por los jueces exclusiones no establecidas por las leyes. Como la sentencia de 1.^a Inst. lo reconocía, nuestro Código Civil no ha estatuido incompatibilidad para el nombramiento que se solicitaba en esta cuestión. Desde entonces, pues, no habiendo ofrecido en la práctica la tutela conferida á los padrastos, resultados perniciosos que pudieran dar la voz de alarma á los jueces que deben discernir las tutelas, y siendo, por el contrario, muchos los casos que se podrían citar, con nombres propios de tutelas conferidas á los padrastos y ejercidas con gran provecho para los menores, es preferible que se siga confiando en la prudencia de los jueces, y que ya que no hay antecedentes de hecho ni de derecho que á ello se opongan, se siga aplicando la jurisprudencia establecida en el año 1873 por los Tribunales de la Prov. de Buenos Aires.—Fallos de los Tribunales de Buenos Aires, por Pérez Gomar, pág. 250—que es la primera sentencia que se conoce al respecto, y que fué dictada á poco de ponerse en vigencia el actual Código. Si, pues, el Juez de 1.^a Inst. que mandó producir pruebas sobre la idoneidad del tutor propuesto, y que luego por el motivo indicado no hizo el nombramiento, no hubiera tenido razones de otro orden para negar el cargo que se le pedía, parece que á mérito de las repetidas manifestaciones hechas por ese Tribunal, Juez conjunto de la tutela en el sentido de no introducir extraños á la familia en la provisión de tutelas y curatelas, debía acceder al nombramiento pedido en favor del padrastro como tutor de sus menores hijos políticos.





pueden discernirle el cargo siempre que no exista causa justificada que lo inhabilite.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 3ª.

1ª. Padre—El haber de un menor que se encuentra sujeto á la patria potestad, debe ser entregado al padre.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 81, Ser. 3ª.

Padre—Véase: *Agravio moral*, núm. 1—*Alimentos*, número 2—*Alimentos provisorios*, núm. 2—*Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 6—*Bienes propios*, núm. 2—*Bienes testamentarios*, núm. 1—*Colación*, núm. 1—*Costas*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 5—*Emancipación*, núms. 1 y 2—*Filiación legítima*, núm. 2—*Filiación natural*, núms. 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 17—*Fondos*, núm. 1—*Gastos*, núm. 1—*Herencia en efectivo*, núm. 1—*Hijo natural*, núms. 5 y 9—*Legitimación*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1—*Partida de bautismo*, núm. 2—*Patria potestad*, núms. 2 y 3—*Prejuzgamiento*, núm. 2—*Separación de hecho*, núm. 1—*Tutela*, núm. 2—*Tutor*, núm. 10—*Tutor especial*, núms. 2, 3 y 4.

Padre natural—Véase: *Filiación natural*, núm. 18.

1º. Padres—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable civilmente del daño, aun cuando el hecho que motivó el accidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4ª.

Padres—Véase: *Fondos*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 105.

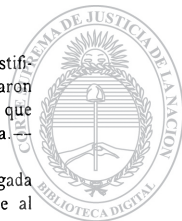
Pagador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1º. Pago—Para que proceda la repetición por el pago

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente sentada por la Cámara. Véase: verb. *Fondos*, núm. 1.

1—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 105.

1—Arts. 773, 774, 778 y 792 del Cód. Civ.



verificado dos veces indebidamente, es necesario justificar que no existían otras causas que las que motivaron uno de los pagos, si resulta que existían otras á las que pudo ser imputado, la repetición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 345, Ser. 3ª.

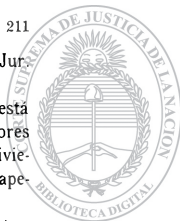
2. Pago—La conversión de la moneda de oro entregada para el pago de la moneda nacional, debe hacerse al tipo de bolsa en el día de la entrega.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 101, Ser. 4ª.

Pago—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Afirmado*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 7—*Alimentos provisorios*, núm. 2—*Alquiler*, núms. 1 y 2—*Alquileres*, núm. 1—*Asistencia médica*, núm. 1—*Bienes*, núms. 1 y 2—*Carta*, núms. 1 y 2—*Cesionario*, núm. 1—*Comprador*, núm. 1—*Condición*, núm. 2—*Condominio*, núm. 3—*Consejo de Higiene*, número 1—*Construcciones*, núm. 2—*Contrato de arrendamiento*, núms. 1 y 29—*Contrato de locación*, núms. 1, 3 y 4—*Contradocumento*, núm. 2—*Costas*, núms. 19, 25, 27, 55 y 58—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Empedrados*, núms. 2 y 3—*Escepción de pago*, núm. 1 y siguientes—*Impuesto*, núm. 3—*Intereses*, núms. 7 y 8—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Litisespensas*, núm. 1—*Locación*, núm. 4—*Mandatario*, núm. 8—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núms. 3 y 6—*Obligación*, núm. 2—*Peritos*, número 2—*Poseción judicial*, núm. 7—*Remate judicial*, número 20—*Rendición de cuentas*, núm. 17—*Servicios*, números 1, 2, 6, 7 y 10—*Servicios médicos*, núms. 1 y 2.

1. Pago de alquiler—Para que exista mora en el pago del alquiler, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial ó extrajudicial en el domicilio del deudor siem-

2—Véase: verb. *Moneda de oro*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 1.



pre que no exista lugar designado para el pago.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 349, Ser. 4^a.

1^a. Pago de asistencia médica—La testamentaria no está obligada al pago de la asistencia médica de los menores extraños á la familia, aun cuando como agregados viviesen en el mismo domicilio del causante y llevasen su apellido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 426, Ser. 4^a.

1^b. Pago de una carta orden—La carta dirigida á un tercero ordenándole un pago, es carta-orden y no misiva, y en consecuencia autenticada, es prueba de la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4^a.

Pago al contado—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^c. Pago por consignación—El depósito particular á la orden del acreedor, no puede en ningún caso, tener los efectos del pago por consignación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Ser. 3^a.

1^d. Pago por consignación—De una suma en moneda nacional por su equivalencia, es procedente siempre que la obligación hubiese sido contraída á moneda corriente que no puede ser calificada como la moneda especial de oro que prevé la ley general de monedas.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 176, Ser. 4^a.

2. Pago por consignación—El Juez competente para en-

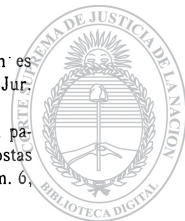
1^a—Véase verb. *Menores*, núm. 2.

1^b—Véase verb. *Carta*, núm. 1.

1^c—Véase verb. *Depósito particular*, núm. 1.

1^d—Véase: verb. *Moneda especial*, núm. 2.

2—Se entabló demanda por cobro de pesos y antes de ser notificada al demandado, éste pagó por consignación. Se resolvió en el sentido del sumario fundándose en que el Juez que primero entendió en la demanda de cobro de pesos era el competente para entender en la de consignación porque al Juez originario corresponde entender en todo lo que se relaciona con el asunto.



tender en la procedencia del pago por consignación es el que entiende en la demanda que le da origen.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 350, Ser. 4^a.

3. Pago por consignación—Declarado procedente el pago por consignación, procede la condenación en costas contra el acreedor que lo impugnó.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 64, Ser. 4^a.

1^a. Pago por cuotas—Facultando la ley el pago por cuotas, los empresarios de adoquinados no pueden ejecutar por el total de la deuda ni aun por las cuotas mientras no se fije y haga saber la fecha desde que los propietarios deben empezar á pagarlas.—Jur. Civ., tom. 5, página 305, Ser. 4^a.

Pago de daños y perjuicios—Véase: *Contratos*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 9, 16, 45, 65, 86, 93 y 95—*Obligación de hacer*, núm. 14—*Rendición de cuentas*, núm. 18.

1^b. Papel sellado—Los presupuestos para la construcción de obras no están sujetos al impuesto de papel sellado aun cuando hayan sido aceptados—Jur. Civ., tomo 1, pág. 362, Ser. 3^a.

3—El art. 760 del Cód. Civ. establece que las costas y gastos serán á cargo del vencido en el juicio de consignación, y por consiguiente los jueces no pueden hacer uso de la facultad que les acuerda el art. 221 del Cód. de Proc.

1^a—Véase: verb. *Adoquinado*, núm. 3.

1^b—Porque el contenido del documento no importa un contrato ni obligación alguna, ni tampoco puede ser considerado como un título que hubiera de servir de prueba en un convenio, siendo más bien una simple propuesta, basada en un cálculo ó presupuesto, que podía ó no ser aceptada y que de consiguiente no perfeccionaba obligación alguna convencional, y cuando más vendría á ser un antecedente, bastando por tanto, que al presentarse en juicio se repusiera el papel, pues no se había incurrido en multa de ninguna clase.



2. **Papel sellado**—El documento en que conste un depósito gratuito, está sujeto al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 385, Ser. 4^a.

3. **Papel sellado**—El presupuesto de obras á ejecutarse, no está comprendido en el impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 46, Ser. 4^a.

4. **Papel sellado**—La falta de papel sellado para notificar á los testigos, es imputable á la parte que solicita la diligencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 241, Ser. 4^a.

5. **Papel sellado**—Las cartas privadas, aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están su-

2—Véase: verb. *Depósito gratuito*, núm. 1.

3—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 1.

4—La Cámara confirmó por sus fundamentos el auto de 1^a Inst., que decía: «Si bien por la práctica constante de nuestros Tribunales se ha establecido que las cédulas á los testigos, se dejen impresas en papel simple dada su extensión y con el fin de facilitar el diligenciamiento de las notificaciones, ello no faculta á los secretarios para efectuarlas sin que se les entregue el papel sellado correspondiente con el fin de reponer la foja *ipso facto*, por cuanto el art. 41 de la Ley de papel sellado solo autoriza á los jueces y funcionarios públicos de la Nación para actuar en papel sellado común con cargo de reposición. Son argumentos éstos que no merecen los honores de una réplica y sin embargo la Cámara los consideró arreglados á derecho, al decir que la *práctica constante de nuestros Tribunales* ha establecido que se dejen las cédulas impresas, con esto se incurre en un error de concepto; no es la práctica la que ha establecido esta forma de notificación, es la ley—art. 182 del Cód. de Proc.—Este artículo dice espresamente que los testigos «serán citados por cédula en papel común». ¿Puede la Ley de papel sellado derogar esta disposición del Cód. de Proc.? Evidentemente que no. El artículo 41 de la Ley de papel sellado vigente en la época en que se dictó esta resolución—1891—al autorizar solo á los jueces y funcionarios públicos de la nación, para actuar en papel común con cargo de reposición no ha derogado aquella disposición de la ley de forma establecida consultando altos intereses de orden público. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 29.

5—Véase: verb. *Cartas privadas*, núm. 1.



jetas al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, página 353, Ser. 4ª.

6. Papel sellado—La conformidad con la cuenta presentada por un tercero, que no es el obligado ni su representante legal, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 71, Ser. 4ª.

7. Papel sellado—La conformidad puesta al pié de una cuenta corriente ó balance entre particulares está sujeta al impuesto de papel sellado siempre que importe una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 12, Ser. 4ª.

8. Papel sellado—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 38, Ser. 4ª.

9. Papel sellado—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios de la pena.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4ª.

Papel sellado—Véase: *Cédulas*, núm. 2—*Posesión judicial*, núm. 7—*Diligencias de prueba*, núm. 29.

Papeles—Véase: *Depositario judicial*, núm. 1.

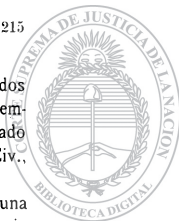
Papeles de crédito—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85.

6—Tanto el fiscal y el Juez de 1ª Inst. como el Fiscal de las Cámaras dijeron que el documento estaba sujeto al impuesto de sellos, fundándose en que el conforme puesto al pié de una cuenta, la convierte en un documento de obligación de los designados en el art. 2º de la Ley de papel sellado de 1891. La Cámara resolvió lo contrario diciendo que el conforme puesto al pié del documento no importa reconocimiento de deuda, sino simplemente la conformidad de las partidas que la cuenta espresa, para ser pagadas como en el caso presente, por un tercero.

7—Véase: verb. *Cuenta corriente*, núms. 1 y 2 que están en abierta contradicción.

8—Véase: nota precedente.

9—Véase: verb. *Acción*, núm. 3.



Para mejor proveer—Véase: *Traslado*, núm. 9.

1^a. Pared divisoria.—La línea imaginaria que divide dos propiedades debe fijarse en el centro de la pared, siempre que por convenio expreso no se haya estipulado cuál de los frentes de la pared era divisorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 303, Ser. 3^a.

1^b. Pared medianera.—La demolición regular de una pared medianera, previo aviso al propietario y locatario de la finca contigua, no puede fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 156, Ser. 4^a.

1^c. Parentesco.—Entre el Juez y la parte, debe ser justificado por el que afirma su existencia.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 224, Ser. 3^a.

Parentesco—Véase: *Tacha*, núm. 1.

1^d. Parientes.—El derecho que la ley concede al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios, por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser usado si el último aceptando la herencia hizo uso de su derecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Serie 3^a.

Parientes—Véase: *Esposo*, núm. 1—*Curador*, núm. 2—*Divorcio*, núm. 9—*Herederos*, núm. 6—*Insano*, núm. 1.

Parte activa—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

Parte alicuota—Véase: *Bienes de la sucesión*, números 3 y 4.

1^a—En virtud de lo dispuesto por el art. 2725 del Cód. Civ.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

1^c—Se dijo de nulidad de una sentencia fundándose en el parentesco existente entre Juez y demandado. Esa afirmación importa aducir un hecho nuevo en juicio y por consiguiente su prueba incumbe al que la aduce, de acuerdo con los conocidos principios de procedimientos y con lo dispuesto en la ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a.

1^d—Véase: verb. *Derechos hereditarios*, núm. 4.



Parte dispositiva—Véase: *Sentencia*, núm. 6.

Parte legítima—Véase: *Mensura*, núm. 1—*Información supletoria*, núm. 2.

Parte proporcional—Véase: *Crédito líquido*, núm. 1.

Partes—Véase: *Contrato*, núm. 14.

Partes cuadyuvantes—Véase: *Rebeldía*, núm. 11.

Partición—Véase: *Bienes*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 9—*Bienes de la sucesión*, núms. 1 y 2—*Cuenta particionaria*, núm. 5.

1. Partición estrajudicial—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, página 188, Ser. 3^a.

2. Partición estrajudicial—No puede tener lugar la partición estrajudicial entre herederos mayores, si afecta derechos de los legatarios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 4^a.

3. Partición estrajudicial—Reconocida y declarada por sentencias ejecutoriadas la partición estrajudicial y consiguiente entrega de bienes á los herederos, la parte dispositiva que ordena la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes entregados equivale á una declaración espresa de haber cesado el estado de indivisión ó posesión en común de los bienes hereditarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

Participación—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

1—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Legatario*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Indivisión*, núm. 2.



1ª. Partidas.—Siempre que la presentación de las partidas de estado civil sea difícil aunque imposible, es procedente la información.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Serie 4ª.

Partidas.—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 2—*Bautismo*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Escribano*, núm. 2.

1ª. Partida de bautismo.—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter del hijo natural, no puede fundar una excepción dilatoria.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 33, Ser. 4ª.

2. Partida de bautismo.—Las aseveraciones de las partidas de bautismo sin la firma del padre, aun cuando afir-

1ª—El Juez Dr. Mendez Paz dijo, que no habiéndose justificado en forma el fallecimiento de los padres del causante, no procedía por entonces la declaratoria de herederos. La Cámara revocó la resolución diciendo que «según manifestación de las partes no les es posible comprobar por medio de las respectivas partidas el fallecimiento de los padres del causante, pues no las habían podido conseguir por hallarse en registros distantes de la jurisdicción de nuestros Tribunales, siendo en este caso de estricta aplicación lo dispuesto en el art. 108 del Código Civil.» Esta es la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara y contra la que el Dr. Mendez Paz se pronuncia con una tenacidad digna de mejor causa, pues su actitud contraría a la ley y causa graves perjuicios a los litigantes.

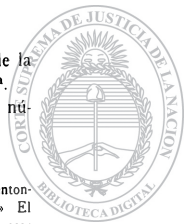
1ª—Véase: verb. *Hijo natural*, núm. 6.

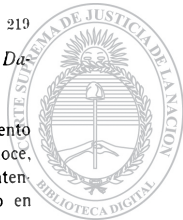
2—Esta resolución fué revocatoria de una bien meditada sentencia del Sr. Juez Dr. Pizarro, quien al sostener el principio contrario al sustentado en el sumario dijo: «que viviendo aun en concubinato el pretendido padre con la madre de los niños, permitió que éstos fueran bautizados y consintió que en la partida se espresara que eran hijos suyos. ¿No importa esto reconocerles tácitamente, que es la clase de reconocimiento, que funda la posesión de estado, a la vez que es el resultado de la misma? Es verdad que esas partidas no están firmadas por el pretendido padre, pero si lo estuvieran, el reconocimiento no sería tácito sino espreso. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el bautismo de esos niños tuvo lugar en la primera época del concubinato del pretendido padre con la madre de los mismos, de manera que no podría

men el carácter de hijo legítimo, no son prueba de la filiación natural.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4^a.

Partidas objetadas—Véase: *Rendición de cuentas*, número 16.

creerse que el acto tuviese lugar ignorándolo aquél. Lo supo, entonces, y consintió en que se asentasen las partidas como hijos suyos.» El Fiscal de las Cámaras manifestó á este respecto que: se decía que esas partidas bautismales deberían contener el reconocimiento hecho por el pretendido padre de esos hijos, para producir efectos legales. Indudablemente que para producir buena prueba, ese requisito era indispensable; á haberlo hecho así no habría existido pleito; pero se puede tomar como un dato, como un antecedente concomitante con los demás hechos de la causa. Sin embargo no ha de perderse de vista que si el pretendido padre haciendo vida marital con la madre de los niños, trataba de hacerse pasar como casado, habría destruido todo el efecto de su ficción si se hubiera presentado en el curato donde recibían el agua bautismal sus hijos, reconociéndolos como naturales. Las partidas de bautismo, sin darles una importancia exagerada y no obstante su falta de ratificación, no habiendo sido tachadas de falsas y teniendo en favor de su autenticidad el sello de los curatos respectivos, en el caso en cuestión tenían una importancia innegable, como elemento concurrente de convicción. El principio sentado en el sumario lo fué por mayoría de un voto: la minoría, de acuerdo con el Juez de 1^a Ins. dijo: Las partidas de bautismo en las que aparecía que los menores fueron bautizados como hijos legítimos del pretendido padre, si bien podría decirse contra ellas que les faltaba su reconocimiento espreso, su firma ó ratificación, que en el caso en cuestión habría bastado para justificar por sí sola la demanda, era sin embargo de tenerse presente, que su autenticidad no fué puesta en duda y que tenía además á su favor la autoridad que les daban el sello de los curatos y de los ministros de la Iglesia por quienes fueron extendidas cuando se bautizó á esos niños, pudiendo suponerse que el pretendido padre no hizo observación alguna, ya por ser entonces un hombre joven ó porque fuera su intención casarse más tarde con la madre de sus hijos. La mayoría, que rechazó la acción de filiación natural no dijo una palabra sobre el principio sentado en el sumario; fundó su resolución tan solo en la circunstancia de que la prueba de testigos no podía considerarse suficiente para dar por comprobada la posesión de estado.





Pasajeros—Véase: *Culpa ó negligencia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 107.

Pastor protestante—Véase: *Matrimonio*, núm. 1.

1ª. **Paternidad**—El padre que no pidió el nombramiento de tutor especial al menor cuya paternidad desconoce, carece de personería para pedir la nulidad de la sentencia que no hace lugar á sus pretensiones fundado en esa omisión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3ª.

Paternidad—Véase: *Filiación natural*, núms. 6 y 7.

1ª. **Paternidad legítima**—El desconocimiento de la pa-

1ª—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

1ª—Art. 252 del Cód. Civ.; Ley 39, tit. 2, part. 3ª—El art. 246 al establecer la presunción de legitimidad en favor de los hijos concebidos durante el matrimonio y dentro de los términos que señala, agrega: que «solo regirá si no se probase que había sido imposible al marido tener acceso con su mujer en los ciento veinte días, de los trescientos que han precedido al nacimiento.»—Como esta demostración sería lo que se llama prueba de evidencia; justificada por el marido la absoluta imposibilidad de ser el padre del hijo habido por su esposa, no necesitaría acreditar directamente y por separado el adulterio de aquella, ni sería necesario, en fin, comprobar que el parto le había sido ocultado, pues esta circunstancia no influiría en la resolución del caso en cuestión.—El previsto por el art. 253 es muy diverso; y así como en él no se requiere la demostración evidente de haber sido imposible la paternidad, bastando las circunstancias que á juicio de los jueces la hagan inverosímil, es indispensable que se acredite por una parte el adulterio de una esposa y por otra la ocultación del parto. El principio tutelar en el orden social, como indispensable para determinar el estado de las personas, de que debe ser considerado padre legítimo aquel á quien indica el nacimiento, se funda á su vez en la presunción de la fidelidad de la esposa. No basta sin embargo á desvirtuarlo y destruirlo de todo punto el adulterio de la mujer; porque podía ser muy bien que habiendo continuado sus relaciones con el marido, á pesar de ser esta adúltera, el niño que hubiera concebido, fuese con todo, legítimo. *Cum possit et illa adultera esse, et impubes defunctum patrem habuisse.* Pero si al adulterio se reúne la circunstancia de habersele ocultado al marido, por la mujer, su parto, que denota la persuasión de parte de ésta de que el hijo que da á luz no pertenece á su



ternidad legítima, solo es procedente cuando el marido justifica su imposibilidad física ó el adulterio de la es-

marido, la ley ha considerado entonces estos antecedentes, suficientes á neutralizar la presunción de legitimidad que protege á los hijos nacidos durante el matrimonio, y ha creído que haciéndola cesar, debía permitir al marido aducir y á los jueces apreciar libremente los demás datos que pudieran hacer formar el concepto de la verdad. No es necesaria, entonces, una prueba de evidencia; y supuesto el adulterio y la ocultación del parto, creeríamos suficiente cualquiera que demostrase ser lo más probable, que el niño no pertenecía al marido. «El marido—dice el art. 253—no puede desconocer al hijo, dando por causa el adulterio de la mujer, ó su impotencia anterior al matrimonio. Pero si á más del adulterio de la mujer, el parto le fuese ocultado, el marido podrá probar todos los hechos que justifiquen el desconocimiento de su hijo.» Como puede notarse por el texto de este artículo, la justificación en el caso de que se trata, podrá venir á la vez de diversos hechos administrativos, aunque quizás ninguno de ellos fuese concluyente por sí solo, cual lo sería, sin duda, la demostración de la imposibilidad física del acceso con la mujer. Así lo entiende y espone el doctor Segovia explicando el artículo que nos ocupa. «Los hechos, dice, que justifiquen el desconocimiento del hijo por el marido, á más de la impotencia posterior al matrimonio, podrían ser, entre otros, la decrepitud, la salud valetudinaria, la distancia que existía entre las residencias del marido y de la mujer, durante el período de la concepción, la desinteligencia que en esa época reinaba entre los esposos. «Como la suficiencia de las pruebas suministradas por el marido para justificar el desconocimiento del hijo, no sería siempre irrefragable y de aquellas que quiten todo motivo de duda; habrá de quedar, muchas veces, abandonada á la apreciación prudente de los jueces.»—Explicación y crítica del Código Civil, tom. 1º, pág. 67, nota 6ª.—Nada más razonado y fundado, por otra parte, que esta doctrina. Supongamos que se trate de un hombre anciano, decadente y valetudinario, que ha dejado, hace ya mucho tiempo, de tener hijos, á pesar de conservarse su mujer relativamente joven. Supongamos también que á las circunstancias del adulterio y ocultación del parto, se reuna la de haber tenido lugar aquel con un hombre joven y vigoroso. ¿Quién dudaría ser este el que había fecundado á la mujer? Nadie, seguramente; sería por cierto, de todo punto injusto atribuir este hijo al marido y sin embargo, en realidad, no existiría prueba evidente de que no le pertenecía. Marcadé, ocupándose de los artículos 312 y 313 del Código de

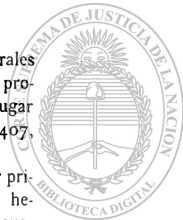


posa y la ocultación del parto.—Jur. Civ., tom. 1, página 165, Ser. 3^a.

2. Paternidad legítima.—Si bien en los juicios sobre desconocimiento de la paternidad legítima el menor debe ser provisto de tutor especial, la falta de este requisito no anula la sentencia de primera instancia si ella era favorable al menor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3^a.

Napoleón, del cual han sido tomados los del nuestro de que ahora se trata, y explicando la acción que corresponde al marido para desconocer su paternidad respecto á los hijos habidos por la esposa durante el matrimonio, los cuales por derecho se presumen suyos, dice que la espresada acción tiene tener lugar en tres casos diferentes. Estos son: 1º Demostrando la absoluta imposibilidad para haber tenido acceso con aquélla, por la época en que debió hacerse embarazada; sobre lo que es obligado á producir prueba completa; 2º Cuando han habido adulterio y ocultación del parto; produciendo datos suficientes que hagan presumir que en efecto el niño no le pertenece. 3º En fin, cuando la mujer ha tenido al hijo, estando divorciada de su marido, debiendo producir la misma justificación que en el anterior, cuya apreciación queda librada al prudente criterio del juez; pero sin requerirse una demostración concluyente.—Especiación del Código Civil, lib. 1, tit. 7º—Haciendo ahora aplicación de estos principios al caso del sumario, supuestos el adulterio y la ocultación del parto, es indudable que si el marido residiendo en la campaña á larga distancia, no venía al domicilio de su esposa sino muy rara vez, y ésta, entre tanto, había establecido otras relaciones permanentes, el hijo que concibió y dió á luz debe suponerse con mayor probabilidad que perteneciera á su amante y no á su marido, aun en el supuesto de que éste no hubiese cortado de todo punto sus relaciones con ella.

2.—Según prescripción de los arts. 61 y 397 del Cód. Civ., los menores solo pueden estar en juicio asistidos de tutor. Aun cuando ese juicio fuera nulo por no haberseles nombrado tutor á los menores, esa nulidad no les favorecería sino cuando la sentencia le hubiese sido adversa: la nulidad declarada no le favorecería ni podría invocarla el vencido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1049 del Cód. Civ. y en la ley 1ª, tit. 2, Part. 3ª. Además en el caso que nos ocupa el recurso de nulidad no se dedujo en 1ª Instancia, y según el art. 239 del Código, este recurso debe interponerse conjuntamente con el de apelación.



1. **Patria potestad**—Para que los hechos inmorales produzcan la pérdida de la patria potestad, no basta probar su existencia, debe justificarse que ellos tenían lugar en presencia de los hijos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407, Ser. 3^a.

2. **Patria potestad**—Si bien el padre no puede ser privado de la patria potestad sin forma de juicio, los hechos graves que denuncie el menor, permiten su suspensión temporal.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 156, Ser. 4^a.

3. **Patria potestad**—Su ejercicio no admite limitaciones

1—Cuando el art. 309 del Cód. Civ. habla de los casos en que los Jueces pueden privar á los padres del ejercicio de la patria potestad, designa el caso en que den *ejemplos inmorales*, para que este ejemplo exista, es necesario probar que los hechos que los constituyen se producen en presencia de los hijos, ó que lleguen á su conocimiento por otros medios, de tal manera que ellos constituyan un ejemplo que determine á los hijos á proceder en el mismo sentido. Las relaciones ilícitas que los padres mantengan con otras mujeres no bastan para contener en sí mismos un ejemplo inhumano cuando no se han ultrapasado los límites de la vida privada, y cuando el hecho no es público y notorio, y se toman las reservas del caso pero que no lleguen hasta los hijos.

2—Cuando se denuncian hechos que á ser ciertos autorizarían la aplicación del art. 309 del Cód. Civ., la prudencia aconseja siempre á tomar medidas precaucionales de carácter conservatorio y debe nombrarse un tutor especial que represente al menor.

3—Un padre legítimo, invocando su carácter de tal, se presentó demandando á un tercero para que le entregase su hijo retenido indebidamente y contra su voluntad. El demandado resistió la entrega de la menor alegando que no era hija del pretendido padre legítimo, sino el fruto de la irreflexión de un hijo suyo, habido con la mujer que más tarde fué esposa del actor, quien no ignoraba al contraer matrimonio que su mujer se hallaba en cinta y quién era el autor del embarazo. En presencia de estos hechos, la Cámara dijo que no había razón para la prosecución del juicio cuyas actuaciones debían archivarse, ordenando la entrega de la menor á su padre legítimo. No puede decirse que en el presente caso no se trata de una demanda de reconocimiento ni de desconocimiento de la filiación, sino únicamente de decidir si constaba que el demandante era el padre legítimo de la incapaz, pues siendo corre-



ni puede ser discutido por terceros, en tanto el padre no sea privado de ella por Juez competente.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 133, Ser. 4^a.

lativas en derecho las ideas de filiación y de paternidad, la ejecución privaría, aunque fuese momentáneamente, á aquélla de su estado civil de hija legítima. Se argumentaba bajo el concepto de que la presunción legal de la paternidad no concurría en el caso en cuestión, porque la criatura había nacido antes de los 180 días posteriores al matrimonio ¿pero las nacidas en esas condiciones no son consideradas legítimas cuando el marido supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa ó cuando hubiera reconocido tácita ó espresamente por suyo el hijo de su mujer? ¿Es posible ignorar que el demandante ignorase el embarazo de su prometida? ¿Su silencio durante largos años después del alumbramiento, no equivalía á un reconocimiento implícito de la paternidad á los fines previstos por la ley? ¿No existían de otro lado, actos manifiestos y positivos de voluntad? Segun Goyena—art. 104—la presunción que crea el conocimiento del embarazo es *juris et de jure* porque supone en este caso que el padre contrajo matrimonio para reparar la debilidad ó falta anterior, y que no habría consentido en él sin estar persuadido de que la mujer llevaba en su vientre el fruto de sus amores recíprocos. Puede verse á este respecto la jurisprudencia sentada por la Cámara. Nada importa que las presunciones de derecho no tengan la misma firmeza respecto de los hijos nacidos antes de los 180 días después del matrimonio, como para los concebidos después de su celebración, porque en el primer caso le basta á la ley la inacción del padre para determinar ó establecer la legitimidad del hijo. Obsérvase que quien articulaba contra la paternidad legítima del actor, era persona extraña á él y á la incapaz, sin vinculaciones de sangre, de parentesco ó de interés subordinado al estado civil de la misma. ¿Tendría personería para ello á título de secuestrador de la incapaz? ¿La tendrá por la simple afirmación de ser su propio hijo el seductor de la novia del demandante y la hija de ésta el producto ilegítimo de esta seducción? «La ley, decía el Dr. Cortés en un caso análogo, procediendo con mucha prudencia y sabiduría, ha querido resguardar la armonía en los matrimonios, la tranquilidad del hogar, impidiendo que cualquiera pudiese turbarla é introducir en ella la confusión, suscitando temerariamente cuestiones delicadas sobre legitimidad de los miembros que la componen, las que á veces vendrían á manchar también la memoria de personas ya fallecidas.» Y es regla elemental en derecho que sin parte legítima no hay ni puede haber juicio válido. Una falsa apreciación sobre personería no pue-



4. Patria potestad.—Las cuestiones sobre pérdida ó res-tricción de la patria potestad, no pueden ser deducidas

crear ni extinguir derechos, máxime cuando se ventilan intereses permanentes de familia á los cuales la ley dispensa todo su favor, y que la justicia social está en el deber de amparar, sin más reserva ó limitación que el derecho de tercero. El ejercicio de la patria potestad no podía limitarse fundándose en la aseveración de un extraño que impugnaba un carácter espresamente atribuido por la ley y que no admite prueba de contrario.

4.—Una persona se presentó al Juez diciendo que hacía próximamente 5 años tenía á una menor que fué dejada en su poder, habiéndola atendido desde esa fecha en todas sus necesidades; manifestando además ser hija adulterina según se acreditaba por la partida de bautismo que no acompañó por habersele extraviado. Con este motivo se presentaron los padres de la menor diciendo que eran padres naturales de la niña y pidiendo su entrega. Acompañaron la partida de bautismo de la que resultaba que la habían reconocido en el acto de la inscripción como hija legítima aunque en realidad cumplan con declarar que es natural. La Cámara ordenó la entrega de la niña á los padres naturales, fundándose en que el padre y madre natural tienen sobre sus hijos los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos, los que únicamente pueden ser restringidos ó suspendidos por los jueces cuando así conviene al interés de los incapaces—artículos 328 y 329, Cód. Civ.—mientras no se produzca esta intervención judicial en el gobierno de los menores por alguna de las causas enumeradas en la ley, son sus padres legítimos ó naturales los únicos que tienen poder sobre los mismos, con la obligación y el derecho de criarlos, elegir la profesión que han de tener, alimentarlos y educarlos, conforme á su condición y fortuna—art. 265, Cód. citado. En presencia de estas disposiciones legales y siendo el actor persona extraña á la familia de la menor, era manifiesta su falta de personería para instaurar el juicio sobre provisión de tutela y asimismo para intervenir en los procedimientos que pudieran provocarse por parte legítima sobre pérdida ó suspensión de la patria potestad. No basta para conferirle esa personalidad, la crianza ó cuidado prestado á la menor, pues ellos no crean ningún derecho sobre la persona de ésta, ni tampoco se lo confería la misma calidad de hija adulterina que le atribuye, cuando se tiene un reconocimiento espreso hecho por los padres, que es irrevocable á los ojos de la ley y el cual solo puede ser contestado por los propios hijos y por los que tengan interés en hacerlo. Esta situación no la modifica la afirmación del mismo actor, posterior á la demanda, de que la



por extraños que reclamen la tutela.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 70, Ser. 4^a.

Patria potestad—Véase: *Costas*, núm. 4—*Cuota alimenticia*, núm. 8—*Padre*, núm. 1—*Fondos*, núm. 1.

Patrimonio—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2.

1^a. **Patronato**—La prescripción del derecho al patronato de una capellanía, solo empieza á correr desde la fecha de su fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4^a.

Patronato—Véase: *Capellanía*, núm. 2—*Abogado*, número 10.

1. **Patrono**—Para que tenga derecho al remanente del capital capellánico, debe justificar su derecho á la herencia del fundador.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 422, Ser. 3^a.

2. **Patrono**—Solo éste tiene derecho á intervenir en las diligencias necesarias para fundar la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

3. **Patrono**—Al patrono corresponde la posesión de la finca capellanica, aun cuando no se haya fundado la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

Patrono—Véase: *Capellanía*, núm. 1—*Memoria pía*, número 1—*Censo capellánico*, núm. 1.

Peligro—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 38.

1^b. **Pena**—La falta de cumplimiento del contrato, permite á aquel á cuyo favor se estipule la pena, demandar

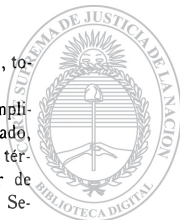
madre de la menor observaba mala conducta, pues producida la denuncia y según fuese la gravedad de los hechos denunciados, correspondería al ministerio pupilar y al juez dictar las medidas oportunas, proveyendo á la menor, de un tutor especial á los efectos previstos en el art. 309 ya recordado.

1^a—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 6.

3—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 7.

1^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 5.



su entrega sin justificar perjuicio alguno.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 335, Ser. 3^a.

2^a. Pena—La estipulada para el que falte al cumplimiento de una obligación de hacer en plazo determinado, no queda tácitamente sin efecto por la prórroga del término dentro del cual debió cumplirse, debe resultar de convención expresa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Serie 4^a.

3. Pena—Estipulada para el caso de mora en el cumplimiento del contrato, solo puede ser exigida por el acreedor despues de reducido á escritura pública el boleto simple de compraventa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4^a.

Pena — Véase: *Acción*, núm. 3 — *Contrato de compraventa*, núm. 12 y 20 — *Poderes locales*, número 1 — *Contrato por escritura pública*, núm. 1 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 30 — *Inhibición*, núm. 14 — *Dependientes*, núm. 1 — *Escritura pública*, núms. 27 y 29.

1. *Pensión alimenticia*—Justificado el cambio de posición social y pecuniaria del alimentario, procede el aumento de la pensión alimenticia.—Jur. Civ., tom. 1, página 289, Ser. 3^a.

2. *Pensión alimenticia*—La facultad discrecional que al Juez confiere la ley para fijar la pensión á los menores,

2^a—Véase: verb. *Obligación de hacer*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 27.

1—A una esposa se le fijó en el juicio sumario de alimentos la suma de 120 pesos, y habiendo mejorado de fortuna el esposo pidió aumento de la cuota, el que le fué acordado porque el esposo había mejorado notablemente de fortuna, debiendo además tenerse presente que esa suma no es en manera alguna bastante para atender ni aun modestamente el objeto á que es destinada.



no infliere agravio al tutor siempre que tenga en cuenta los vínculos de parentesco que unen á éste con sus pupilos, sus necesidades sociales y el monto de su fortuna, aun cuando sea indiscutible su modicidad.—Jur. Civ. tom. 1, pág. 305, Ser. 3ª.

3. Pensión alimenticia—La pensión alimenticia de la viuda debe ser proporcionada al caudal testamentario.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 418, Ser. 4ª.

4. Pensión alimenticia—El padre debe proveer de la suma necesaria para los gastos de instalación de los menores, además de la pensión alimenticia fijada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 419, Ser. 4ª.

5. Pensión alimenticia—Debe continuar aun después de vencido el término de la separación provisoria entre los esposos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 7, Ser. 4ª.

Pensión alimenticia — Véase: *Alimentos*, núm. 1 y siguientes.

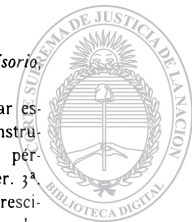
Percibir — Véase: *Poder*, núm. 4—*Cuota alimenticia*, núm. 1.

Pérdida de la cosa — Véase: *Contrato de compraventa*,

3—Se fijó la cuota alimenticia en 400 pesos, incluyéndose en esta suma el importe de lo que debía abonar por alquiler.

4—Véase: verb. *Gastos*, núm. 1.

5—Se decretó la separación, fijándose la suma de 120 pesos mensuales como cuota alimenticia para la esposa y sus hijos, y se ordenó por el mismo decreto que la esposa justificase los extremos legales necesarios para asignársele la cuota definitiva. Vencido el término no los justificó y el esposo pidió que dejara sin efecto la cuota provisoria á lo que no hizo lugar la Cámara porque de las actuaciones del primer juicio resultaba justificado el derecho de la esposa á los alimentos fijados, sin que en el juicio ordinario se hubiese demostrado que hubiesen cambiado las condiciones de los esposos después de fijarse la cuota provisoria. Además debe tenerse presente que los alimentos no pueden ser materia de transacción—art. 374 del Cód. Civ.



núm. 15—*Seña*, núm. 1 y siguientes—*Pacto comisorio*, núm. 8.

1ª. *Pérdidas é intereses*—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante de instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª

2. *Pérdida é intereses*—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa, corresponde la prueba de la excepción; si no la justifica debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 7, página 371, Ser. 3ª.

Pérdida é intereses—Véase: *Contratos*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 11—*Obligación de hacer*, núm. 14—*Condición*, núm. 3.

Perentorio—Véase: *Excepción perentoria*, núm. 2—*Términos perentorios*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 5.

Periodos determinados—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 23.

1ª. *Perito*—Propuesto un perito dentro del término,

1ª—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 12.

2—Véase *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1—Cuando solo faltaban cinco días para el vencimiento del término de prueba se presentó una de las partes litigantes proponiendo perito y solicitando que la contraria manifestara si estaba ó no conforme con el propuesto. La parte, sin hacer la manifestación ordenada se opuso á la prueba pericial porque según ella no había tiempo suficiente para su producción, siendo así que la prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término—art. 118 del Cód. de Proc.—La Cámara dijo, que el término de cinco días era bastante para la producción de la prueba, y consiguientemente la admitió sin perjuicio de que esa prueba no pudiese interrumpir la secuela del juicio. Vuelto al Inferior el espediente, la parte propuso nuevo perito porque el primero se había ausentado: faltaban siempre los cinco días por cuanto el término de prueba había quedado suspendido á causa del incidente de oposi-

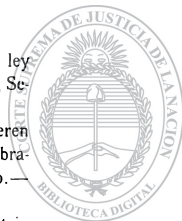


la tardía manifestación de disconformidad de la contraparte no hace perder el derecho á esa prueba, aun después de vencido aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 12, Ser. 3ª.

2. Perito—Los informes de un perito para cuyo nom-

bramiento suscitado. El juez mandó nuevamente que la parte contraria hiciese la manifestación ordenada; pero esa manifestación solo se hizo después de vencido el término de prueba. Hecha la manifestación, el juez no hizo lugar al nombramiento del perito porque el hecho de que no se hubiera podido producir la prueba pericial dentro del término ordinario, era una omisión sola y exclusivamente imputable á la parte: 1º, Porque la solicitó en los últimos días de aquel período; 2º, Porque no requirió dentro del plazo á que se refiere el art. 114 el término extraordinario necesario, pues no basta la simple petición de diligencias fuera de la capital para que se conceda, sino que es indispensable se solicite explícitamente; 3º, Porque el perito que se propuso primero, no fué nombrado por haberse ausentado, viniendo así por su culpa á demorarse varios días esa prueba, no obstante haber el Juzgado proveído en el día á la petición que hizo presentando otro perito; Que durante el término deben ser practicadas todas las diligencias de prueba—art. 118 citado—y siendo término de prueba, en general *para probar y haber probado y presentar la probanza*, según la expresión de la primera parte de la ley 1ª, tit. 6º, lib. 4º. R. C., la parte no debe quejarse de perjuicios que le son exclusivamente imputables. La Cámara revocó esta resolución diciendo, que la parte podía proponer perito, aunque solo faltaran cinco días para la espiración del término de prueba, y proponiendo otro en reemplazo del primero por haberse éste ausentado, no hacía esa parte otra cosa sino usar del derecho que se le había reconocido, puesto que lo mismo es para el caso de que se trata, una ú otra persona; sobre todo si se tiene en cuenta que la conformidad que el Juzgado mandaba manifestar, no había sido prestada todavía. Que la propuesta del segundo perito había sido hecha el primero de los cinco días que debían empezar á contarse de nuevo desde la notificación de la misma, ordenándose que la parte manifestase su conformidad ó disconformidad con el perito nuevamente propuesto, en cuyo caso la manifestación hecha cuando los cinco días habían ya transcurrido, no podía perjudicar á la parte contraria.

2—Se nombró un solo perito sin que las partes se hubiesen puesto de acuerdo para el nombramiento de ese perito único. Las conclusiones á que éste llegase no podían tener la fuerza de prueba legal de que



bramiento no se han llenado los requisitos que la ley exige no forman prueba.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 71, Serie 3ª.

3. Perito—Director, tratándose de obras que requieren conocimientos especiales para su construcción, el nombramiento de perito director es facultativo del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 426, Ser. 4ª.

4. Perito—El nombramiento de peritos para el cotejo de un documento arguido de falso, puede hacerse después de vencido el término, siempre que haya sido pedido antes de su vencimiento.—Jur. Civ., tom. 1, página 351, Ser. 4ª.

1. Peritos—Si al presentar la cuenta el actor manifiesta que por la disconformidad del demandado se fije el importe por peritos, la diferencia de precio fijada por aquél, no importa *plus petitio* que le haga pasible de las costas—Jur. Civ., tom. 1, pág. 239, Ser. 3ª.

2. Peritos—Reconocida la prestación de servicios, procede su pago con arreglo a lo que fijan peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408, Ser. 3ª.

nos habla el art. 178 del Cód. de Proc., porque no se observaron las prescripciones del Cap. III del mismo Código. Para que la prueba pericial tenga fuerza de prueba legal, debe en su producción observarse todas las formas prescritas, pues solo de esta manera se la puede considerar como rodeada de todas las garantías que la hacen digna de fe.

4—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 11.

1—Porque esta actitud aleja desde luego todo propósito malicioso. Habiendo habido disconformidad en cuanto al monto antes de entablarse la demanda, el actor optó por el único camino legal marcado por el art. 1627 del Cód. Civ. Este principio está de acuerdo con otro análogo resuelto por la Cámara. Véase: verb. *Costas*, núm. 35, en cuya nota se pueden examinar algunos casos resueltos en contra.

2—Art. 1627 del Cód. Civ.



3. Peritos—Solo procede la fijación por peritos, del valor de los servicios prestados, si existe conformidad de partes sobre su importancia, ó si han sido determinados en juicio contradictorio ante juez competente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 277, Ser. 3ª.

5. Peritos—Las afirmaciones terminantemente asertivas de los peritos, forman prueba plena del hecho sometido á su juicio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 4ª.

6. Peritos.—Ante la divergencia de opiniones entre los peritos nombrados por las partes y el nombrado de oficio, la del último debe aceptarse con preferencia á los primeros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 163, Ser. 4ª.

7. Peritos—Los honorarios de abogado devengados es-
trajudicialmente, deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

8. Peritos—Si la prueba requiere el nombramiento de peritos, las partes están obligadas á verificarlo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4ª.

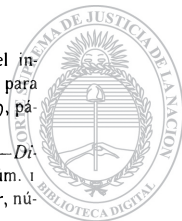
3—Véase: *Locación de servicios*, núm. 2.

5—A este respecto hay jurisprudencia contradictoria, pero ella tiende á fijarse en el sentido del sumario, lo que implica un triunfo para la razón y el criterio jurídico sobre los errores de algunos magistrados. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Informe*, núm. 1; tom. 4º, verb. *Peritos*, núm. 1 y *Prueba plena*, núms. 2 y 3.

6—Los tres peritos nombrados se espidieron por separado difiriendo en sus apreciaciones, pero con el auxilio de éstos y demás constancias de autos pudo resolverse satisfactoriamente la cuestión sometida á juicio. Respecto del dictamen del perito nombrado de oficio, la Cámara dijo: que «lo razonable y justo es suponer que quien está en la verdad es el perito nombrado por el Juzgado, tanto porque ha podido proceder con toda imparcialidad, extraño como era á una y otra parte, cuanto porque su informe está fijado en un término medio entre los otros dos.»

7—Véase: verb. *Abogado*, núm. 8.

8—Arts. 161 y 162 del Cód. de Proc.



9. **Peritos**—Contadores, presentados por éstos el informe, no puede pedirse ampliación; solo el Juez para mejor proveer puede ordenarla.—Jur. Civ., tom. 9, página 259, Ser. 4^a.

Peritos—Véase: *Honorarios*, núms. 1, 11, 25 y 27—*Diligencias de prueba*, núm. 7—*Prueba por peritos*, núm. 1—*Locación de servicios*, núms. 5 y 6—*Agrimensor*, número 1—*Costas*, núm. 55—*Avaluación*, núm. 1.

1^a. **Peritos calígrafos**—El dictamen de los peritos que la ley estatuye para la declaración de la autenticidad de documentos argüidos de falso, solo es ilustrativo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 4^a.

2. **Peritos calígrafos**—Su informe no forma prueba plena, el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desear el dictamen pericial—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. **Perjuicios**—El comprador que acepta el bien con los gravámenes que sobre él pesan, es el único responsable de los perjuicios que la falta de servicios de intereses le irroque.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 348, Ser. 4^a.

Perjuicios—Véase: *Inhibición*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núm. 1 y siguientes—*Funcionarios públicos*, núms. 4 y 5—*Condición*, núm. 3.

Permiso municipal—Véase: *Acto ilícito*, núm. 6.

Perpetuidad—Véase: *Compraventa*, núm. 4.

1^c. **Persona determinada**—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compraventa el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse

7—Véase: *Informes*, núm. 3.

1^a—Véase: *Dictamen pericial*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Cotejo*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Comprador*, núm. 4.

1^c—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 7.



la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, página 157, Ser. 3ª.

Persona determinada — Véase: *Edictos*, núm. 4—*Nulidad de una sentencia*, núm. 17.

Persona jurídica—Véase: *Contrato*, núms. 1 y 20—*Poder*, núm. 2—*Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 36—*Juicio contencioso-administrativo*, número 2.

Personalmente—Véase: *Notificaciones*, núm. 4.

1. Personería—La del rematador como representante del vendedor, cesa después de verificada la almoneda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3ª.

2. Personería—El albacea carece de personería para entablar demandas contra terceros á nombre de la testamentaria, cualquier que haya sido el origen de la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 312, Ser. 3ª.

3. Personería—Cesa la del apoderado, transferida que sea la propiedad del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 206, Ser. 3ª.

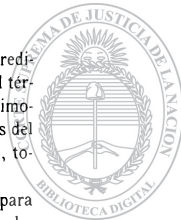
4. Personería — El heredero de grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

1—Los martilleros en las ventas judiciales son mandatarios: el mandato es especial para vender. Celebrada la venta termina el mandato de acuerdo con lo establecido en el art. 1960 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Albacea*, núm. 2.

3—Cuando el litigio pendiente tiene por objeto inmediato la propiedad del inmueble.

4—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2.



5. **Personería**—El desconocimiento del carácter hereditario del hijo póstumo, por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio; solo los herederos del esposo tienen personería para solicitarlo.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 397, Ser. 3^a.

6. **Personería**—Los albaceas carecen de personería para entablar demandas á nombre de la testamentaria y deben ser condenados personalmente al pago de las costas de las que promuevan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Serie 3^a.

7. **Personería** —El damnificado por la violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

8.—La madre natural en ejercicio de la patria potestad, tiene personería para gestionar y recibir la cuota alimenticia fijada para los menores.—Jur. Civ., tom. 1, página 311, Ser. 4^a.

9. **Personería** -- Para que un miembro de una sociedad pueda representarla judicialmente en todo ó en parte, su personería debe resultar de actas ó reglamentos anteriores al acto que invoca como fuente de su derecho.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4^a.

10. **Personería**—El director general de una construcción está obligado á asumir judicialmente la personería de

5—Véase: verb. *De oficio*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Albacea*, núm. 5.

7—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 5.

8—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Madre natural*, núm. 2.

10—Una empresa fué demandada por daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito: el administrador dijo que él no era el representante de la sociedad sino el que atendía á los servicios, pagos y demás actos



la empresa que representa mientras no justifique que existe otro representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79; Ser. 4^a.

11. **Personería**—El abogado ó procurador carecen de personería para apelar personalmente de la reguación de sus honorarios contenida en una sentencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 377, Ser. 4^a.

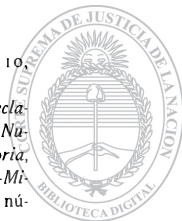
12. **Personería**—El tutor de los menores que por representación forma parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la sociedad tiene su representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 394, Ser. 4^a.

13. **Personería**—El Juez recusado no puede resolver de administración. Cuando se contesta una demanda de esta naturaleza se ejecuta un acto de administración. Por otra parte, resultaba que la empresa no tenía en la República otro representante, lo que hacía más factible la intervención del director de la obra. Véase: *Acto de administración*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Abogado*, núm. 3.

12—En virtud de una resolución anterior había quedado establecido que el tutor no era parte porque sus pupilos estaban representados por el representante de la sociedad promiscuamente con el Ministerio de menores. Después falleció ese representante legal y denunciado el hecho se confirió traslado á todos los que formaban parte de la sociedad inclusive al tutor, porque el nombramiento debía hacerse por la mayoría de los socios sobrevivientes. Pendiente el traslado, la mayoría presentó un escrito nombrando el nuevo representante, quedando así de hecho sin razón de ser el traslado, pues su único objeto se había llenado. El tutor se presentó mucho tiempo después diciendo de nulidad de ese nombramiento y de todo lo actuado con posterioridad, alegando no haber concurrido al nombramiento por haber estado ausente del asiento del Juzgado. Esta circunstancia no puede servirle de argumento, porque en primer lugar la ausencia prolongada constituye una negligencia de su parte, y porque además el nombramiento se había hecho de acuerdo con las estipulaciones del contrato, esto es, por la mayoría de los socios, tanto en cuanto al número de ellos como en cuanto á capitales.

13—De acuerdo con lo resuelto en otro caso. Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. *Juz. recusado*, núm. 1548.



sobre la personería del recusante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4ª.

Personería—Véase: *Abogado*, núms. 14 y 15—*Declaratoria de herederos*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1—*Escepción perentoria*, núm. 2—*Herencia*, núm. 2—*Incapacidad*, núm. 3—*Ministerio de menores*, núm. 2—*Acreedores hipotecarios*, número 1—*Acción pauliana*, núm. 1—*Albacea*, núm. 7—*Cuota alimenticia*, núm. 1—*Fallecimiento*, núm. 5.

Pesos fuertes—Véase: *Capellanía*, núm. 3—*Moneda especial*, núm. 1.

Pesos plata—Véase: *Capellanía*, núm. 3.

1. **Petición de herencia**—Al demandante por petición corresponde la prueba de la existencia de los bienes reclamados y la posesión que de ellos haya tomado el demandado.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 210, Ser. 3ª.

2. **Petición de herencia**—La promoción de una demanda sobre petición de herencia, no paraliza la secuela de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 3ª.

3. **Petición de herencia**—Para que el derecho de petición de herencia sea imprescriptible, el poseedor debe carecer de título de adjudicación á nombre propio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 111, Ser. 4ª.

Petición de herencia—Véase: *Embargo preventivo*, número 29.

Petición judicial—Véase: *Costas*, núm. 29.

Petitorio—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6.

Planos—Véase: *Construcciones*, núm. 1.

1—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª.

3—Este es uno de los fallos más contrarios á la ley, á la justicia y á la equidad, que registran los anales judiciales. Véase: verb. *Heredero*, núm. 7.



1^a. Plazo—El estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 72, Ser. 3^a.

2. Plazo—El juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar, es ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4^a.

3. Plazo—Suspensivo, la fijación de un término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deja sin efecto el contrato, sino un plazo suspendido dentro del cual no puede exigirse judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

4. Plazo—El embargado á las resultas del juicio puede exigir la fijación judicial del plazo dentro del cual debe deducirse la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 362, Serie 4^a.

Plazo—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 2—*Hipoteca*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núm. 21—*Obligación de hacer*, núm. 5—*Obligación condicional*, núm. 3—*Obligación sin plazo*, núms. 1 y 2—*Obligación de hacer*, núm. 17—*Retroventa*, núm. 2.

Plus petitio—Véase: *Peritos*, núm. 1.

1^b. Poder—La escepción de falta de personería por carecer del poder necesario para deducir la acción, puede

1^a—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

2—Véase: *Obligación de dar*, núm. 2.

3—Véase: verb. *Condición resolutoria*, núm. 1.

4—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 27.

1^b—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 2.



ser opuesta contestando á la demanda.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 68, Ser. 3^a.

2^a. Poder—Es bastante el conferido para pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo juicio de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3^a.

2^b. Poder—El conferido por el representante de una persona jurídica, no caduca por el cambio legal de la persona que otorgó el mandato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 59, Ser. 4^a.

3. Poder—La facultad contenida en el poder para pedir

2^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 42.

2^b—Toda persona jurídica debe tener de acuerdo con la ley un representante legal. Sería contrario á derecho suponer que un mandato conferido por un representante saliente tuviera que ser ratificado por el entrante para sus efectos legales, pues esto importaría desconocer la validez del nombramiento anterior y perjudicaría las defensas que hiciera en pro de la institución. Los actos celebrados por un representante anterior surten todos sus efectos legales mientras no sean espresamente anulados ó revocados por la persona jurídica. Cuando un representante de una persona jurídica otorga un poder, no es ese representante quien lo otorga sino la persona jurídica por intermedio de éste, y por consiguiente la duración del poder conferido no depende de la voluntad del representante sino de la misma persona jurídica en cuyo nombre se procede. Las personas jurídicas son personas enteramente distintas de sus miembros—art. 39 del Cód. Civ.—y por consiguiente el cambio de representante de esa sociedad no innova en manera alguna el estado de la sociedad.

3—El auto de 1^a Inst. que fué revocado por la Cámara, decía que para que procediera la interpretación que se pretende sería menester que en el poder en cuestión se hubiese *consignado espresamente* la facultad de pedir que el deudor fuese compelido á *hacer cesión de bienes ó concurso civil* de acreedores; á lo que debe agregarse que las espresiones *quiebra ó concurso*—que tenían el poder, son sinónimas;—pues el concurso no es sino la consecuencia de la declaratoria de quiebra. Que además, según la disposición contenida en el art. 1884, Cód. Civ., las facultades de un poder, deben interpretarse en sentido restrictivo, limitando su al-



la quiebra ó concurso del deudor, implica la de compelerlo á hacer cesión de bienes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 217, Ser. 4^a.

4^a. Poder—Para exigir la rendición de cuentas, con facultad de percibir, comprende virtualmente la de demandar por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 157, Serie 4^a.

4^b. Poder—El poder para cobrar del deudor no importa la de demandarlo judicialmente y en consecuencia procede la escepción de falta de personería—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

Poder.—Véase: *Escepción de falta de personería*, número 1—*Asuntos judiciales*, núm. 1—*Mandato*, núm. 9—*Procuraciones judiciales*, núm. 2—*Venia*, núm. 2.

Poder administrador—Véase: *Contencioso-administrativo*, núm. 1.

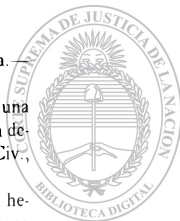
1. Poder bastante—Procede la caución de *rato et grato* para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un

cance á lo que *espresamente* hubiese consignado el mandante. La Cámara revocó este auto diciendo, que con arreglo á los términos del poder el mandante estaba facultado para pedir el concurso del deudor. Nos parece que la distinción que hacía el Juez de 1^a Inst. era equivocada, porque la palabra concurso comprende, tanto á los concursos civiles como á las quiebras. Así Escribá lo define diciendo, que es el juicio promovido, bien por el deudor ó bien por los acreedores sobre pago de deudas. Y más adelante agrega: «cuando el procedimiento verse sobre deudas de quien tenga la calidad de comerciante, se califica con el nombre de quiebra.» Véase verb. *Concurso de acreedores*—Edición de cuatro tomos.

4^a—Porque lógicamente la facultad para demandar por rendición de cuentas y la de percibir su importe implica la de demandar por el cobro de lo percibido en virtud del mandato que da nacimiento á dichas acciones.

4^b—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 8.

1—Véase: verb. *Caución*, núm. 2.



término para la presentación del mandato en forma.—
Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

1. Poder especial.—Para el arreglo y liquidación de una testamentaria y sus incidentes, no es bastante para demandar á un tercero por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68, Ser. 3^a.

2. Poder especial.—Para el arreglo y división de la herencia; no basta para intervenir en las demandas que se inicien contra la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 4, página 255, Ser. 4^a.

3. Poder especial.—El poder especial para otorgar escritura de venta, sin determinar especialmente la persona á la cual debe transferirse el inmueble, se entiende conferido para otorgarla á voluntad del mandatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4^a.

1.—El apoderado se presentó demandando por rendición de cuentas á nombre de los herederos, en virtud de un poder conferido para proceder al arreglo y liquidación de la testamentaria. El poder especial para ciertos actos debe limitarse á los mismos; y no puede estenderse á otros análogos aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los encargados por el mandante —art. 1884 del Cód. Civ.—Por otra parte, el poder especial para cobrar deudas no autoriza para demanda á los deudores —art. 1888.—De manera que aplicando el criterio restrictivo que ha inspirado al legislador al limitar las facultades de los mandatarios especiales, y teniendo en consideración que el juicio de rendición de cuentas no puede considerarse como un incidente del juicio principal, resulta que el sumario interpreta correctamente la ley.

2.—En 1^a Inst. se dijo que el poder era bastante, porque siendo el mandato conferido para iniciar y liquidar hasta su final terminación la testamentaria, y siendo la demanda entablada por un pretendido acreedor por arrendamiento, debía ser considerada como un incidente del juicio sucesorio. La Cámara revocó esta providencia fundándose en que el poder estaba limitado al arreglo y liquidación de la testamentaria y consiguientemente caía bajo la sanción del art. 1884 del Código Civil.

3.—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 12.



4. Poder especial—El poder especial para intervenir en determinado asunto, no basta para iniciar contrademanda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

5. Poder especial—El mandato por poder especial termina con el asunto para que fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 41, Ser. 4^a.

6. Poder especial—Para formar una testamentaria, no basta para iniciar la de un heredero del causante fallecido con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 7, Serie 4^a.

7. Poder especial—Para liquidar una testamentaria con facultad de demandar á terceros, basta para exigir rendición de cuentas á los que en ella han intervenido con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 33, Ser. 4^a.

4—El espíritu del art. 1884 del Cód. Civ., según la jurisprudencia establecida por la Cámara—tom. 2º, pág. 62, Ser. 1ª—es que el poder para un asunto determinado autoriza al mandatario á hacer todos los actos jurídicos que por la naturaleza del asunto se encuentren virtualmente comprendidos en él como medio de ejecución ó como consecuencia necesaria del mandato. Pero la interpretación ó alcance que la resolución citada da al art. 1884 del Cód. Civ., es inaplicable porque la reconvencción no es una escepción ni un acto que pueda considerarse virtualmente comprendido en el asunto que motiva un juicio. Se trata de una acción nueva, y para ejercitarla, debe exhibirse poder en forma, desde que el presentado era especial para intervenir en la demanda instaurada. Por consiguiente, en el caso presente rige el principio general establecido en el art. 1884 del Cód. Civ.

5—Terminado un juicio de interdicto por sentencia definitiva se presentó el apoderado de una de las partes solicitando se le diese testimonio en forma de documentos constantes en autos. No se le hizo lugar porque el apoderado había cesado en el mandato conferido, por fenecimiento del asunto para el que le fué otorgado—art. 1960 del Código Civil—y porque «aun en el supuesto de que continuase en el ejercicio del poder, los documentos cuyo testimonio se solicitan, no pertenecen á su mandante sino á la contraparte que los exhibió para inscribir con ellos su demanda.»



1. Poder judicial—Tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya civiles ó criminales, que

1—La responsabilidad civil del empleado que causa perjuicio ultrapasando sus facultades, es una conquista de nuestras leyes, que no puede ser amenguada á pretexto de intromisión de un poder en los actos de otro. El poder es uno, independientemente en su esfera de acción demarcada por nuestras leyes fundamentales, y el abuso de las facultades es el hecho del hombre que lo hace pasible de responsabilidad. Ni hay estralimitación cuando la justicia, á efectos relacionados únicamente con el interés privado, encuentra que el funcionario público se ha excedido, ni una torcida interpretación del alcance de la independencia de los poderes, puede dejar confiados á su propia suerte la vida, el honor y la fortuna de los habitantes de nuestro suelo. Y menos motivos existen de temer avances respecto del poder judicial, que circunsripto á dictar resoluciones que solo son aplicables al caso sometido, sería difícil que pudiera obstaculizar la acción de los demás poderes. Por lo demás, el poder judicial es el poder moderador en nuestro mecanismo de Gobierno, y desde entonces, nada más aceptable que él sea el encargado de dirimir las contiendas entre los demás poderes y los habitantes del estado. Dice nuestro Código, en su art. 1112: «Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, quedan comprendidos en las disposiciones de este título», es decir, de aquel que trata «de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.» Con estas consideraciones se contesta al argumento que se hace diciendo que la responsabilidad del funcionario ha de provenir solamente del delito cometido por él, cuando se ocupa para imponer las responsabilidades respectivas, hasta de las obligaciones derivadas de los hechos ilícitos que no son delitos, y cuando el art. 1109 que declara obligado á reparar perjuicios al que los cause por haber ejecutado un hecho que ocasione daño por culpa ó negligencia, está comprendido precisamente en este título. Las órdenes superiores no pueden llegar hasta la violación de los preceptos constitucionales. Esto es felizmente un axioma en un pueblo libre como el nuestro, y el mismo demandado, en las posiciones, preguntado que si es cierto que como empleado de Policía sabe que no deben obediencia á su superior, sino cuando éste ordena dentro del límite de sus atribuciones propias, y en ningún caso cuando el acto ordenado ó entraña un crimen ó un delito calificado por la ley, ha consentido que es cierto.



se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Poder judicial.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 15.

1ª. Poderes locales— Tienen jurisdicción para reglamentar el tránsito de los ferrocarriles en la parte recorrida dentro del Municipio, no obstante depender aquellos del Poder Federal, imponiéndoles las penas de que sean pasibles por la inobservancia de ordenanzas municipales ó edictos policiales.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 410, Ser. 4ª.

Poderante—Véase: *Actos judiciales*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 4—*Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2.

Policia—Véase: *Acto ilícito*, núm. 5.

1ª. Porción—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

Poseedor—Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 3—*Aluvión*, núm. 1—*Nulidad de un título*, núm. 1—*Poseción*, núm. 5, 8 y 15—*Reivindicación*, núms. 4 y 9—*Costas*, núm. 34—*Evicción*, núm. 2—*Escepción de defecto legal*, núm. 12—*Petición de herencia*, núm. 3—*Poseción cuarentenaria*, núm. 1.

1ª. Poseedor clandestino—Los derechos de dominio que

1ª.—Pueden verse los fundamentos de la nota al verb. *Municipalidad*, núm. 11.

1ª.—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

1ª.—El actor se presentó diciendo que se hallaba en quieta y pacífica posesión de su casa por haberla heredado, y se había introducido el



el poseedor clandestino pueda invocar sobre el inmueble, debe hacerlos valer en juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 58, Ser. 3ª.

1. Posesión—Para que el interdicto prospere, basta

demandado violentamente sin permiso suyo y contra su voluntad ocupándola diciéndose dueño, que la casa la había tenido alquilada a un tercero quien tuvo que desocuparla por tener que edificar, y habiendo ido a verla el actor hacía como un mes la encontró habitada por el demandado. Este espuso, en el comparendo, que desconocía por completo en el actor el carácter de propietario que invocaba, y que su madre había otorgado testamento á favor del actor, el que carecía de valor, pues le desconocía el carácter de hijo que tenía, como lo había comprobado ante Juez competente. Dijo además que desconocía la posesión invocada por el actor, pues si había ocupado la casa fué en calidad de mandatario, mandato que ella le había conferido verbalmente cuando tuvo que ausentarse para el campo, y que finalmente, si había ocupado la casa lo hizo en su carácter de propietario. El actor dijo que estos hechos eran inexactos. El interdicto deducido era el de recobrar la posesión. Para que este sea procedente se requiere la comprobación de los extremos establecidos por el art. 581 del Cód. de Proc. En esta clase de juicios se trata tan solo de discutir la *tenencia* de la cosa, no el *dominio*, cuestión puramente de hecho, pues la de derecho debe ventilarse en una forma que no puede ser la del juicio sumarísimo del interdicto. El demandado reconoció que el actor había ocupado la casa, alegando que lo había hecho en su calidad de mandatario. Confesada esta posesión, la escepción alegada que esa ocupación era á título de mandatario, debió justificarse por el que la aducía, de acuerdo con el antiguo aforismo *reus in expiendi fit actor*. No habiendo el demandado comprobado este extremo, y habiendo el actor comprobado su posesión, se hizo lugar al interdicto de recobrar. Se alegó además, que el actor no podía intentar el interdicto porque habiendo heredado el inmueble por testamento debió pedir la posesión de la herencia—art. 3363—lo que no había hecho. A esto se contesta diciendo que como se ha dicho ya en un interdicto, no se discute el dominio de la cosa sino la tenencia, pues como lo enseñan Manresa y Reus, tom. 3º, pág. 617, corresponde el interdicto de recobrar á todo el que se halla en posesión ó tenencia de la cosa, lo mismo al legítimo poseedor que al mero detentador, y agrega: «siendo el despojo un atentado contra el orden público, debe suprimirse instantáneamente sin atender al título con que poseía el despojado.»

1.—Véase la nota del verb. *Poseedor clandestino*, núm. 1.



que se justifique la posesión; el derecho á poseer no puede ser juzgado en este juicio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 70, Ser. 3^a.

2. Posesión—El hecho de no estar incluido un bien en la hijuela del que produce la información, no forma prueba en contra de la posesión que pudo tener éste y su causante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3^a.

3. Posesión—La escritura pública como título trasla-

2—Véase: verb. *Hijuela*, núm. 1.

3—El actor se presentó al Juzgado acompañando los títulos de propiedad correspondientes á una casa de su pertenencia pidiendo se le pusiera en su posesión, pues el ocupante de ella se negaba á reconocerle en su calidad de propietario por no haberle sido acordada la posesión formal del inmueble. La demanda se entabló contra el ocupante y contra el vendedor. Convocadas las partes á juicio verbal y notificadas de esta resolución, el vendedor y el ocupante, se opusieron á la celebración del comparendo, deduciendo el vendedor la escepción de litispendencia, por haber interpuesto demanda de nulidad de la escritura de compra-venta acompañada por el demandante y alegando por otra parte, que pendiente el juicio petitorio, no podía tramitarse el posesorio, correspondiendo solamente al Juez del petitorio tomar medidas provisionales relativas á la guarda de la cosa litigiosa, según el art. 2483. El ocupante se opuso también al comparendo alegando, que el objeto de la demanda, con respecto á él, era obtener el desalojo de la casa que ocupaba como locatario, y en seguida adquirir la posesión, pero como acreedor de las mejoras que había hecho sobre el terreno había promovido demanda de retener hasta que se le pagasen esas mejoras; por cuyo motivo invocaba también la litispendencia. Desechadas estas pretensiones y realizado el juicio verbal, el Juez pronunció sentencia, rechazando el interdicto sin perjuicio de mejor derecho. Ahora bien, exige nuestro Código de Proc., art. 564, como requisitos indispensables para la procedencia del interdicto que nos ocupa, los siguientes estremos: 1º que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho, y 2º que nadie posea á título de dueño ó usufructuario los bienes cuya posesión se pide. Este precepto concuerda con el art. 326 de la ley de Procedimientos de la Justicia Federal y con el 624 de la ley de Enjuiciamiento Española. Toda la cuestión se reducía, pues, á averiguar si concurrían los dos requisitos antes espuestos. Si bien el actor pre-



tivo del dominio no basta para exigirla: debe gestionarse previamente la entrega de la cosa por medio de la tradición.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 180, Ser. 3^a.

sentó un título bastante, resultaba de autos que el demandado poseía el inmueble á título de dominio y que, por consiguiente, faltaba el segundo requisito del art. 564 citado. Para demostrar la exactitud de esta conclusión, basta establecer la verdadera inteligencia que, resolviendo y ocupándose de casos análogos, han dado los Tribunales y los autores á la disposición citada. La Suprema Corte de Justicia Nacional en el caso que se registra al tom. 21, pág. 169, Ser. 2^a de sus fallos, adoptando la opinión de Manresa y Reus, tom. 3^o, pág. 590 y la de Caravantes, tom. 3^o, pág. 240, ha dicho: «no basta un título cualquiera que acredite el dominio, sino que ha de ser suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho.» Solo dos casos encontramos, en que el Juez, informado de la verdad confiera la posesión al que tenga derecho á ella sumariamente. Hoy no basta presentar cualquier título traslativo de dominio; ha de ser precisamente el de heredero ó sucesor del finado para que se de lugar á este interdicto. En las ventas, donaciones entre vivos, permutas, etc., el que transfiere el dominio está obligado á entregar la cosa al que lo adquiere, y mientras esa entrega no se verifique ya sea natural, ya simbólicamente, no queda consumado el contrato. Hecha la entrega entra el adquirente en posesión de la cosa, y de consiguiente es innecesario el interdicto de adquirir. Y si el vendedor se resiste á la entrega, que es precisamente lo que ocurría en el caso que nos ocupa, podrá ser demandado por el comprador en juicio ordinario, para el cumplimiento de la obligación, pero nunca podrá éste utilizar el interdicto, que en tal caso se dirige contra el que posee á título de dueño, lo cual está prohibido por la ley. En igual sentido resolvió también la Suprema Corte el caso que se registra en el tomo 13, pág. 19, Ser. 2^a. Llerena, en su importante obra «Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino», tom. 4^o, pág. 133, ocupándose del art. 2468 del Cód. Civ., según el cual no tiene sino un derecho á la posesión, no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa; debe demandarla por las vías legales. Despues de invocar los fallos antes citados, manifiesta su opinión sobre el punto en los siguientes términos: «Tenemos entonces que el que solo tiene un título á la posesión, sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho la tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores.» En el presente caso concu-



4. **Poseción**—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3ª.

5ª. **Poseción**—La oposición á una posesión invocando mejor derecho, importa una tercería excluyente, y es de competencia del Juzgado que conoce en el principal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 240, Ser. 3ª.

5º. **Poseción**—El locador está obligado á dar al locatario la posesión del predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 146, Ser. 4ª.

6. **Poseción**—Justificada la falta de posesión del demandado por jactancia, procede la fijación del término que la ley establece para que deduzca las acciones que convengan á su derecho bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 261, Ser. 3ª.

7. **Poseción**—Si bien el comprador que no ha tenido la

rren todas las circunstancias que hacen de estricta aplicación la doctrina de los Tribunales y de los autores, debiendo tenerse además en cuenta, que mientras el vendedor no hace entrega de la cosa, conserva sobre ella el dominio.

4—Art. 2791 del Cód. Civ.

5ª—Después de fallado un pleito sobre una capellanía, al tiempo de ejecutarse la sentencia y dársele la posesión de la finca capellánica al comprador se presentó un tercero alegando mejor derecho y oponiéndose á que la posesión se otorgara. Según la opinión del ilustrado Dr. Cor. tés, Fiscal de la Cámara, esa oposición fundada en un derecho diverso del que podía corresponder á la parte que había salido triunfante, importa una verdadera tercería excluyente que debe ventilarse en los mismos autos, por encontrarse allí todos los antecedentes del asunto, y porque no es permitido dividir el conocimiento de una causa.

5º—Art. 1514 del Cód. Civ.

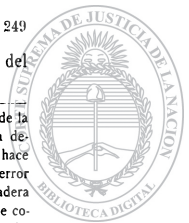
6—Véase: verb. *Jactancia*, núm. 2.

7—El actor se presentó diciendo que según lo establecía la escritura pública que acompañaba, había comprado la cosa que allí se determinaba, habiendo la persona que se la vendió á él adquiridola por compra



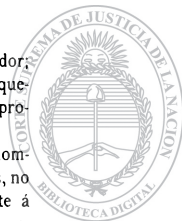
posesión, no puede ejercer derechos reivindicatorios, la

que hizo á su vez á una testamentaria, y que habiendo querido ejercer actos de dominio sobre la casa, el ocupante se había opuesto alegando derechos de dueño. Decía además el actor, que venía á entablar demanda reivindicatoria fundado en el art. 2758 del Cód. Civ., haciendo presente que no habiendo tomado posesión de aquélla no obstante habersele escriturado, con el objeto de evitar una discusión á que podría esto dar lugar, prolongando el juicio en beneficio exclusivo de la demanda, ha obtenido de la sucesión vendedora una cesión de su derecho para reivindicar cuya constancia acompaña. La demanda se contestó pidiendo el rechazo y esponiendo á su vez: que si bien la testamentaria vendedora otorgó la escritura de venta, á favor del comprador, invocando por único título una información tendente á establecer que desde muchos años atrás los herederos de aquél habían estado en posesión de la finca de que se trata, tal hecho nada podrá probar en favor de la testamentaria porque los herederos que han poseído siempre fueron la madre de la demandante y ella misma, que á pesar de ser herederos en dicha sucesión jamás poseyeron á su nombre sino á nombre propio y que la finca jamás fué de la testamentaria vendedora ni de sus antecesores. Concluye diciendo, que como según los términos del art. 2758 del Cód. Civ. la acción reivindicatoria nace del dominio y corresponde al propietario que ha perdido la posesión, en ningún caso podrá admitirse ni al actor ni á la testamentaria porque ni aquél ni ésta tuvieron jamás la posesión de la finca. El art. 2758 del Cód. Civ. establece que la acción de reivindicación es una acción real que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Tal es, bien caracterizada la acción promovida. El demandante temeroso, según lo espresó, de que la demanda, fundada en la circunstancia de no haber tenido nunca la posesión, promoviese cuestiones que alargasen la contienda indefinidamente, ocurrió á la sucesión vendedora que la había tenido por haber sido dueña de la cosa en cuestión, con el objeto de que le cediese el derecho de que él carecía por no habersele hecho la tradición que preceptúa la ley. Esta cesión que la obtuvo fué impugnada por la demanda y como en ella se fundaba el actor para demandar, es conveniente dejar establecido si las objeciones formuladas son procedentes y si la invalidan ó no. Desde luego, puede afirmarse que toda argumentación sobre este punto, tiene por base un error evidente sufrido al expedirse la copia á que ya se ha aludido. Del contesto de ella se desprende, sin



acción es precedente como cesionario de los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Ser. 3ª.

que un asomo de duda pueda presentarse, que los representantes de la sucesión han cedido los derechos que ella tuvo para entablar la demanda de reivindicación, y si bien en cierta parte de la copia se hace uso del vocablo vendidos, ello, como queda dicho, se debe á un error manifiesto, pues á renglón seguido se demuestra cuál fué la verdadera intención de las partes, y tan es así que el mismo Secretario que cometió el error, el doctor Gamboa, lo salva al final de su certificado, manifestando que se convino por los representantes de la sucesión en ceder el derecho de reivindicar la cosa contra la ocupante, no habiéndose hablado absolutamente de venta de derechos. La demandada sostuvo, sin embargo, que no había tal cesión, que es un convenio de venta y considerándolo así ataca á ésta fundada en las causas ya enumeradas en los fundamentos espuestos y ahí está su falsa posición. Podría acordársele que las causas por que ataca lo que cree convenio de venta, sean aducibles también en contra de la cesión, por aquello de que en ciertos casos la cesión se rige por el título de compraventa, aunque en el presente no sucede así, porque no habiéndose estipulado precio en la cesión debe considerarse gratuita y entonces es el título de la donación el que debe tenerse presente. Pero de todas maneras nunca cambiaría la situación de la ocupante dado que dichas causas en realidad de verdad no existen ó no puede dárseles la importancia que se les atribuye. Y ello porque la cesión tal como se ha llevado á efecto, constituye una escritura pública en su valor legal inmovible en tanto no sea anulada, pues los actos anulables se reputan válidos mientras su nulidad no haya sido declarada—art. 1046 del Cód. Civ.—y no puede desconocerse que en esa categoría se encontraría en todo caso el de que se trata. Se decía que los representantes no tenían facultad para enagenar—léase para ceder;—se decía que no pudieron vender privadamente los bienes de un juicio en que hay menores y en que los mayores no han podido elegir sus representantes etc., pero todo esto era exigir una comprobación que no se ha producido y debe suponerse que las formalidades se han cumplido, tanto más cuando que existe una resolución judicial que la sanciona. Pero sea de ello lo que fuere y dado que el demandado tuviera personería para atacar el convenio celebrado entre primer comprador y sus cedentes, lo que no puede negarse es que aun en el supuesto de que existan herederos mayores y aun menores sin representación en el juicio testamentario que no hayan concurrido á la cesión; lo que no puede sostenerse, es que ésta no produce



8. **Posesión**.—La presentación de los títulos de poseedor, supone que la posesión arranca desde la fecha de aquellos sin solución de continuidad entre los diferentes propietarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Ser. 3ª.

9. **Posesión**.—El reconocimiento de la posesión á nombre del causante, hecho en los autos testamentarios, no puede ser invalidado por prueba testimonial tendente á justificar que era á nombre propio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Ser. 3ª.

10. **Posesión**.—Para la procedencia del interdicto, ya sea de retener ó de recobrar, es indispensable justificar que el que deduce la acción tiene ó ha tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 175, Ser. 3ª.

11. **Posesión**.—Procede el interdicto de recobrar siempre que se justifica la posesión y el despojo violento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3ª.

el efecto que el adquirente tuvo en vista, porque importaría desconocer la disposición del art. 3450 del Cód. Civ., según la cual cada heredero puede reivindicar contra los terceros detentadores los inmuebles de la herencia, y como el comprador no hacía sino ésto desembarazando á la testamentaria de este deber, es consecuencia lógica que no es necesaria la concurrencia de todos los herederos al acto. Y si á esto se agrega que los que concurrieron invocando poderes bastantes los tenían realmente, puesto que fueron aceptados y lo contrario no se ha probado, forzoso es convenir en que aun cuando declara el mandante que no ha tenido la posesión de la casa que trata de reivindicar, está habilitado para deducir la acción instaurada en virtud de la cesión de que se ha hablado.

8—Arts. 4003 y 4005 del Cód. Civ.

9—La prueba testimonial es la más deleznable y la más desautorizada, por ser la más peligrosa y la que mayores dudas entraña, y no puede contrarrestar la que resulta de la mejor de las pruebas que reconoce el derecho; la prueba de las pruebas, la *probatio probatissimo* de que nos habla la ley romana.

10—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 2.

11—Véase verb. *Despojo*, núm. 1.



12. **Poseción**—La demanda sobre la entrega de la posesión solo puede entenderse con el poseedor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 36, Ser. 4^a.

13. **Poseción**—Procede el interdicto de adquirir contra el detentador que reconociendo la propiedad en el actor, escusa su posesión en un error de hecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 271, Ser. 4^a.

14^a. **Poseción**—El propietario puede tomar la de la cosa locada si el locatario hace de ella abandono.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 4^a.

14^b. **Poseción**—La demanda sobre propiedad á título de heredero, reconociendo en el contrario la posesión, hace prueba plena para rechazar la división de un condominio que no se invocó por el causante en la primera acción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

15. **Poseción**—Al que reconoce en el demandado la posesión cualquiera que sea el título que invoque le corresponde la prueba; al poseedor le basta con ese reconocimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

16. **Poseción**—Es Juez competente para demandar la posesión de un inmueble el del domicilio del demandado, aun cuando el bien se encuentre en distinta jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 127, Ser. 4^a.

17. **Poseción**—Es requisito indispensable para la procedencia de la reivindicación que el que acciona haya te-

12—Se entalló la demanda contra el poseedor sin designar el nombre de éste. Tratándose de obtener la posesión debe entenderse que es contra el que actualmente posee.

13—Véase: verb. *Interdicto de adquirir*, núm. 2.

14^a—Art. 1564 del Cód. Civ.

14^b—Véase verb. *Condominio*, núm. 9.

16—Véase: *Juez competente*, núm. 2.

17—Véase el núm. 23 y *Acción reivindicatoria*, núm. 2.



nido la posesión del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 214, Ser. 4^a.

18. **Posesión**—Es improcedente la acción reivindicatoria si el demandante no justifica haber tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

19.—**Posesión**—El título de fecha anterior, prima sobre los posteriores si se fija que la posesión empezó en la misma fecha.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

20. **Posesión**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas reconocido el derecho de retención, en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 140, Ser. 4^a.

21. **Posesión**—Justificada la posesión y su pérdida clandestina, el interdicto de recobrar la posesión debe prosperar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 217, Ser. 4^a.

22. **Posesión**—Es requisito ineludible para que proceda el interdicto de retener que el que lo intenta tenga la posesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 259, Ser. 4^a.

23. **Posesión**—Procede la reivindicación siempre que se justifica haber tenido título y posesión anterior á la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Posesión—Véase: *Administrador*, núm. 3—*Albacea*, número 1—*Aluvión*, núm. 2—*Arrendamiento*, núm. 2—*Auto judicial*, núm. 1—*Bienes embargados*, núm. 2—*Capellanía*, núm. 6—*Cesión de derechos hereditarios*, número 1—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Derecho de retención*, núms. 1 y siguientes—*Edificación*, núm. 1—*Escepción de*

18—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 3.

20—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 4.

21—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 14.

22—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 5.

23—Arts. 2758 y 2772 del Cód. Civ.



prescripción, núm. 3—*Herederos mayores*, núm. 3—*Interdicto de adquirir*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de despojo*, núm. 1—*Interdicto de obra nueva*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de recobrar*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de retener*, núms. 1 y siguientes—*Petición de herencia*, núm. 1—*Prescripción de diez años*, núm. 1—*Reivindicación*, núms. 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 20 y 21.

Posesión á nombre de otro—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 3.

Posesión á nombre propio—Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 1 y 2—*Prescripción treintenaria*, núm. 2—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1—*Administrador*, núm. 3.

Posesión civil—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 3.

1^a. Posesión al comprador—El vendedor está obligado á dar al comprador la posesión del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 40, § Ser. 4^a.

1^b. Posesión en comunidad—La indivisión no importa posesión en comunidad de los bienes testamentarios, siempre que los albaceas ó representantes de la testamentaria reconozcan poseer y obren á nombre del adquirente ó cesionario de los herederos y no de éstos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 342, Ser. 4^a.

Posesión común—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

1^c. Posesión cuarentenaria—Justificada la posesión cuarentenaria á título propio, debe declararse que el poseedor ha adquirido la propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, página 398, Ser. 4^a.

1^d. Posesión cuarentenaria—Justificada, debe aprobarse

1^a—Art. 1409 del Cód. Civ.

1^b—Véase: *Indivisión*, núm. 1.

1^c—Art. 4015 del Cód. Civ.

1^d—Véase nota precedente.



la información supletoria del título.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3ª.

Posesión del deudor—Véase: *Embargo*, núm. 6.

1. Posesión de estado—A la madre que niega la filiación, corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada y que la posesión de estado de hija legítima, debidamente justificada, solo respondía á un propósito caritativo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 79, Ser. 3ª.

2. Posesión de estado—Justificada la posesión de estado, procede la declaración de filiación natural.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3ª.

3. Posesión de estado—Tratándose de probar la posesión de estado, para declarar la filiación natural, no basta que los testigos declaren el reconocimiento hecho en su presencia, se requiere que determinen los hechos en virtud de los cuales se produjo, las personas presentes, y todos los detalles ó circunstancias que puedan demostrar al Juzgado la ciencia y conciencia de la declaración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4ª.

4. Posesión de estado—Justificada, debe declararse la filiación aun cuando el padre natural haya omitido hacer tal reconocimiento en el testamento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4ª.

5. Posesión de estado—La prueba de la posesión de estado, para declarar la filiación natural, despues de la muerte del padre, debe ser clara y concluyente; no basta la sola confesión estrajudicial del causante si fué hecha

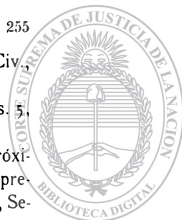
1—Véase: verb. *Filiación legítima*, núm. 3.

2—Véase: *Filiación natural*, núm. 11.

3—Véase: *Filiación natural*, núm. 14.

4—Véase: *Filiación natural*, núm. 18.

5—Véase: *Filiación natural*, núm. 17.



incidentalmente y sin propósito determinado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4^a.

Posesión de estado—Véase: *Filiación natural*, núms. 5, 6, 7 y 13.

1^a. **Posesión de la herencia**—Los herederos más próximos, deben obtener la posesión de la herencia con preferencia á los lejanos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 24, Serie 4^a.

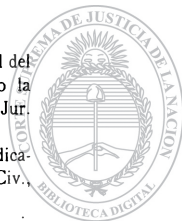
1^b. **Posesión judicial**—Corresponde al Juez que ha ordenado la posesión y que entiende en el juicio testamentario, conocer en la acción que inicie el que se considere agraviado por esa orden.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 62, Serie 3^a.

2. **Posesión judicial**—No debe hacerse lugar á la fundada en una escritura declarada nula.—Jur. Civ., tom. 5, página 71, Ser. 3^a.

1^a—Véase: *Heredero*, núm. 5.

1^b—Porque la oposición en este caso es una consecuencia del auto del Juez que manda dar la posesión.

2—El autor se presentó diciendo que despues de haber vencido á su contrario en un juicio sobre jactancia por haberse dicho éste propietario de un terreno que á él le pertenecía, y después de reconocérsele sus derechos posesorios y de dominio, valiéndose de una escritura cuyo desglose se había pedido indebidamente, había comparecido al Juzgado y ocultando los antecedentes del asunto, había obtenido que se le pusiera en posesión del mismo terreno, por lo que venia á solicitar se dejara sin efecto esta orden. El Juez así lo resolvió, apelando el demandado sin haber espuesto las razones que demostraran que la resolución recurrida no era arreglada á derecho. Ahora bien, en un segundo expediente agregado constaba efectivamente haberse declarado caducado el derecho pretendido por el demandado sobre el terreno en cuestión, siendo confirmada esta sentencia por la Cámara. En ese mismo expediente y en una sentencia ejecutoriada se demostró que el actual actor había probado concluyentemente su posesión sobre el terreno objeto del juicio. El título del pretendido dueño no tiene valor por cuanto no dedujo en tiempo su acción cuando fué demandado de jactancia.



3. **Posesión judicial**—Justificada la posesión judicial del inmueble no puede considerarse perdida porque otro la haya tomado por su sola voluntad y sin juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3ª.

4. **Posesión judicial**—Ordenada en el juicio reivindicatorio debe darse por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 132, Ser. 3ª.

5. **Posesión judicial**—Justificado el dominio por escritura pública, corresponde se decrete la posesión judicial sin perjuicio de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 347, Ser. 4ª.

6. **Posesión judicial**—Al ordenarse la posesión de bie-

3ª—Solo se dijo que el proeeder tenía en su favor la diligencia judicial que acreditaba haber sido puesto en posesión de la cosa, sin que la parte contraria hubiese presentado otro signo análogo tan inequívoco como enérgico en prueba de su posesión. Así el poseedor debe ser tenido como tal, mientras su contraparte no comprueba que esa posesión judicial no está contrarrestada por otras pruebas concluyentes como aquella.

4—Véase: verb. *Juicio reivindicatorio*, núm. 1.

5—Un comprador con pacto de retroventa se presentó diciendo que había adquirido un inmueble sometido á ese pacto por el término de un año según lo acreditaban las escrituras que acompañaba; y habiendo vencido el plazo sin que se le devolviese el precio, venía á pedir se le diera la posesión de la cosa, declarando al mismo tiempo que los terrenos le correspondían en absoluta propiedad y dominio. El demandado no contestó, y recibida la causa á prueba no se produjo ninguna. Se resolvió que el actor usaba de un derecho perfecto al pedir la posesión, porque no habiéndose alegado ni probado que el pacto á que se hallaba sujeta la escritura hubiese sido modificado ni ampliado por las partes, debía tenerse como firme y subsistente. Las convenciones forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197 del Cód.—Y no habiendo el vendedor cumplido con la obligación que le impone el art. 1409, el comprador está en su perfecto derecho al pedir la posesión judicial.

6—La parte solicitó se ampliara un exhorto anteriormente librado, ordenando se hiciese efectiva la diligencia de posesión que se había

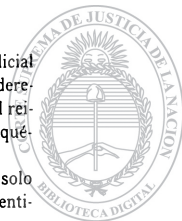


nes raíces, fuera de la jurisdicción del Juzgado, no puede hacerse en forma que se desconozcan derechos de terceros que no fueron parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. I, pág. 186, Ser. 4^a.

7. Posesión judicial—No procede la de la herencia, aunque exista testamento, sin el pago previo del impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 15, Ser. 4^a.

encomendado, aún cuando hubiese oposición de terceros, sea cual fuese el derecho que alegaren, salvando el derecho que ellos pretendieran para que lo ejercitasen como vieren convenirles, pues lo contrario importaría revisión de sentencias de los tribunales que fallaron ese asunto, declarando el área de que se trataba, del dominio privado. El Juez proveyó de conformidad, y la Cámara revocó el auto fundándose en que la ampliación había sido reclamada en mira de la resistencia que pudiese producirse por la corporación municipal de la capital de la Provincia al cumplimiento de la diligencia en cuestión. Que la Municipalidad de La Plata no era parte en el juicio ni había intervenido en ninguna de las actuaciones. Que bastaba consignar este antecedente para hacer palpable la improcedencia de la orden reclamada. La Municipalidad de La Plata era un tercero cuyos derechos posesorios, si hubiera de oponerlos, no habían sido materia de controversia en ese juicio, en cuyo caso sus resultantes, aún cuando revistieran el carácter de ejecutorias, no podían perjudicarla directa ni implícitamente en razón de que sería para ellas *res inter alios*. Que fundándose por otra, parte la ampliación de la referencia, únicamente en los propósitos que de contrario se atribuían á la susodicha corporación y de las cuales no existía constancia positiva en autos, hiciase por ello incontestable que la resolución apelada carecía de base legal.

7—La ley de sellos es terminante al respecto cuando dice que se usará el sello correspondiente según la escala, en toda adjudicación de bienes sucesorios sea judicial ó estrajudicial, por testamento ó ab intestato. En el caso del sumario se trataba de una adjudicación por testamento, y por consiguiente no podría escapar del impuesto—art. 25 de la ley de sellos de 1891—Es cierto que la posesión de la herencia no comprende bienes materiales, ó derechos hereditarios determinados, sino la posesión de la universalidad que constituye la herencia. Pero en la imposibilidad de fijar el *quantum* de los derechos ó acciones que la posesión pueda abarcar, se hace efectivo el impuesto en los bienes denunciados, materiales ó hereditarios. El art. 33 de la misma ley corrobora esta



8. **Posesión judicial**—Justificada la posesión judicial corresponde al que sin título invoca en favor de su derecho la escepción de prescripción, la prueba de que el reivindicante la perdió con posterioridad á la fecha de aquélla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 176, Ser. 4^a.

9. **Posesión judicial**—La ordenada por sentencia, solo puede ser otorgada al designado; ni aún con su consentimiento puede acordarse á terceros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 36, Ser. 4^a.

10. **Posesión judicial**— La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aún despues de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

11. **Posesión judicial**—Entre dos títulos sobre una mis-

interpretación al decir que los jueces no harán declaratoria de herederos ni adjudicación de bienes hereditarios sin que previamente se abone el impuesto ó se dé fianza al efecto. Esta fué la opinión del señor Agente fiscal Dr. Rodríguez Bustamante, con el que no estuvo de acuerdo el Juez de 1^a Instancia, quien resolvió dar la posesión sin el previo pago del impuesto fiscal. Pero la Cámara de acuerdo con el Ministerio público y por los fundamentos aducidos por éste revocó la resolución, teniendo en cuenta además la jurisprudencia establecida.—Véase: Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 2^a; Inst., tom. 3, verb. *Bienes hereditarios*, núm. 1. En contra Inst., tom. 2, verb. *Papel sellado*, núm. 1. Debe tenerse en cuenta además, que la procedencia del impuesto no se halla subordinada al hecho material de la división de los bienes, determinándose su aplicación en todos los casos en que hubiese adjudicación de los mismos, cualquiera que sea su forma sin incluir los que se hiciesen por disposición de última voluntad, como lo prescribe el art. 28 de la citada ley.

10—Véase *Avisos*, núm. 1.

11—La sentencia no dió á la posesión judicial el alcance que le dá el sumario. Solo colocó entre las muchas razones que tenía para ad-



ma propiedad que tengan el mismo origen, el que justifique haber tenido la posesión judicial prima sobre el que carezca de tal requisito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

12. Posesión judicial—De un bien determinado, debe darse con citación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 70, Ser. 4^a.

1^a. Posesión del locador—El locatario posee por el propietario, y reconocida la existencia de aquél en el predio, se reconoce la posesión del locador.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3^a.

1^b. Posesión treintenaria—Quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la escepción de prescripción sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3^a.

1^c. Posesión material—El anuncio en venta del inmueble y aún el remate público, no son prueba de tener la posesión material de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4^a.

2. Posesión treintenaria—La prescripción treintenaria,

mitir como probada la acción reivindicatoria, la constancia de haberse dado previamente la posesión de la cosa.

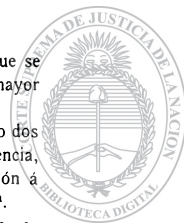
12—Un heredero invocando su carácter de tal y fundado en el artículo 3412, se presentó pidiendo la posesión judicial de un bien determinado, no se le hizo lugar porque este artículo se refiere á la posesión de la herencia como un todo ideal, pero no á la posesión de un bien determinado, el que está regido por el art. 564 del Cód. de Proc., que legisla para el interdicto de adquirir la posesión. Esta posesión debe darse llenando los requisitos del tit. 17, sección 1^a del Cód. de Proc., citando por edictos á los que se consideren con derechos al inmueble materia del interdicto.

1^a—Véase verb. *Locatario*, núm. 5.

1^b—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 1.

1^c—Arts. 577, 2379 y 2384 del Cód. Civ.

2—Véase nota precedente—art. 4015 del Cód. Civ.



es procedente aún sin título ni buena fe, siempre que se justifica la posesión quieta y pacífica por igual ó mayor término.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 249, Ser. 4^a.

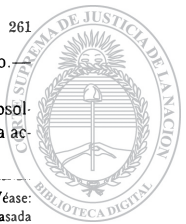
1^a. Posesiones—No pudiendo coexistir en derecho dos posesiones, la judicial prima sobre la simple tenencia, que aún cuando continúe se convierte en posesión a nombre de otro.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 3^a.

Posición social—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1.

1^b. Posiciones—La mujer casada, no puede ser obli-

1^a—El acta que acreditaba la posesión judicial estaba firmada por el mismo demandado que reclamó de esa posesión y después se conformó con ella, pidiendo se le diera el tiempo necesario para mudarse, pero después se negó á entregar el inmueble alegando ser dueño del mismo. El acta del juicio verbal hace plena fe de las enunciaciones que contenga—art. 979, núms. 2 y 4, y art. 993 Cód. Civ.—Resulta que la posesión judicial dada con intervención del oficial de justicia y acatada después por la parte que tenía la posesión de la cosa, no pueda ésta oponerse á la entrega del inmueble porque su pretendida posesión carece de base legal.

1^b—Es jurisprudencia establecida por la Cámara. Puede verse el caso que corre publicado en el tom. 4, pág. 9, Ser. 1^a, Jur. Civ., el que fué resuelto en el sentido del sumario y que la Cámara invoca como fundamento de su decisión. Se aduce como argumento para resolver así esta cuestión jurídica, que la absolución de posiciones solo puede proponerse á la parte que legalmente puede comparecer en juicio y obligarse válidamente. La mujer casada no se halla en este caso, aún cuando se litiguen bienes propios de ella, porque siendo casada es incapaz y no puede, según precepto legal, estar en juicio, ni obligarse válidamente sin la venia del marido ó la del Juez en su defecto, *la que puede ser otorgada* cuando se demuestre la necesidad jurídica que existe para que el Juez supla la venia del marido.—Véase: Inst., tom. 1. verb. *Esposa*, núm. 1147. En el tom. 4, pág. 6, Ser. 2^a, Jur. Civ., corre publicada otra resolución que consagra el mismo principio, pero que trae otros argumentos en el sentido del sumario. Allí se dice: Que el representante necesario de la esposa es el marido, y consiguientemente no le es dado obligarse ni respecto de sus bienes propios ni de los gananciales, si la esposa concurre á otorgar poder con la venia del marido, y ese poder contiene la facultad conferida al apoderado para que absuelva posiciones, eso no quiere decir sino que el marido consintió en que al acto de



gada á absolver posiciones sin la venia del marido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 10, Ser. 3^a.

2. Posiciones.—El demandado no está obligado á absolver posiciones antes de que el actor haya iniciado la acción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 110, Ser. 4^a.

las posiciones concurriese el apoderado pero no la esposa.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Esposa*, núm. 1. La incapacidad de la mujer casada está establecida por el art. 57, inc. 4º del Cód. Civ., cuando resuelve que el marido es el representante de ella, como asimismo por el 188 que le es correlativo, prescribe que ella no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido. García Goyena al fundar este principio sentado en su proyecto de código, dice: que el marido jefe y director de la familia, administrador responsable de todos los bienes del matrimonio es á quien compete demandarlos y defenderlos en juicio. Lo contrario sería una perturbación del orden doméstico en lo moral y en lo civil: un contraprinzipio en buena legislación. Estos fundamentos se pueden aducir en pro de la tesis sentada en el sumario. Una jurisprudencia contraria á la de la Cámara, ha sido establecida por la Suprema C. N., fundándose en que la ley civil protege la incapacidad relativa de la mujer al solo efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándole la representación necesaria, pero sin concederle privilegios de ningún género, cual sería el de negarse infundadamente á cumplir un acto legal del juicio en que es parte como lo establece el art. 58 del Cód. Civ. La intervención del esposo en el juicio, importa la autorización necesaria para la comparecencia de la esposa en todos aquellos actos en que sea exigida con derecho, pues de otra manera dependería de la voluntad de aquél hacer ilusorio un precepto de ley con perjuicio de tercero—tom. 2, pág. 315, Ser. 3—Esta doctrina ha sido consagrada en un fallo reciente de la Cámara dictado en un juicio seguido por Bova con Arci. El Dr. Posse resolvió que la mujer casada estaba obligada á absolver posiciones aún sin la venia del marido cuando se litigaban intereses propios de ella: con ó sin la venia del marido la Cámara confirmó esa bien fundada resolución, la que viene á reformar la jurisprudencia anteriormente establecida en el sentido del sumario.

1^b.—Se presentó el interrogatorio al que debía someterse á la parte y de él resultaba que las preguntas no se referían á la personalidad del demandado, á que se refiere el art. 67, inc. 1º del Cód; de Proc. sino al derecho de éste á ciertos bienes, en cuyo caso no es procedente la



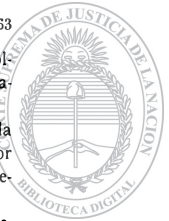
2ª. Posiciones—El demandado no puede exigir que absolva posiciones aquel que tiene igual carácter en el litigio y puede considerarse coadyuvante de su derecho.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 23, Ser. 3ª.

2ª. Posiciones—Ante la negativa espresa contenida en la contestación de la demanda y la confesión ficta que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, los Tribunales deben optar por la primera.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 332, Ser. 4ª.

absolución de posiciones como lo establece el art. 70 del mismo Código.

2ª—Se trataba de dos demandados conjuntos: uno de ellos pidió que el otro absolviera posiciones. No procede esta medida probatoria por que las posiciones se dan á favor de la parte que es contraria en el juicio—art. 125 del Cód. de Proc.—Un codemandado no es parte contraria sino coadyuvante.

2ª—El Juez de 1ª Inst. dijo, que la presunción de confesión que resultaría por no haber comparecido la parte á absolverlas el día y hora señalados, no sería bastante para destruir la negativa espresa y terminante contenida en el escrito de contestación á la demanda. Además el representante de la absolvente manifestó que ésta no residía en el asiento del Juzgado en la época de la citación para la absolución de posiciones, manifestación que estaba de acuerdo con una afirmación hecha por una sirviente que recibió la cédula de citación, donde se dijo que la parte se había ausentado para su estancia, todo lo que inhabilita la citación para que pueda darse por absuelto el pliego de posiciones, no procediendo hacerse efectivo el apercibimiento. La Cámara confirmó este auto diciendo que «si bien aparecía agregado un pliego de posiciones presentado con el propósito de que á su tenor fueran absueltas las preguntas que contenía por la parte demandada y con él se pretendía destruir las afirmaciones contenidas en la contestación á la demanda, haciéndose efectivo el apercibimiento contenido en el art. 133 del Cód. de Proc., la confesión ficta que de su absolución en rebeldía pudiera resultar, aun siendo procedente, no sería en manera alguna bastante á destruir la negativa espresa y categórica que contenía la contestación á la demanda de no haber autorizado al rematador para el ejercicio del mandato en cuestión, tanto más cuanto que podría discutirse esa rebeldía por existir la presunción de que la parte deman-



3. Posiciones—El apoderado no está obligado á absolver posiciones, aun cuando el mandato contenga la facultad de hacerlo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 23, Ser. 3ª.

4. Posiciones—La parte tiene derecho de exigir que la contraria absuelva posiciones personalmente y no por medio de apoderado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 344, Serie 3ª.

5. Posiciones—El apercibimiento, para que surta efecto, debe especificar lo que sucederá al apercibido; la cláusula «en cuanto ha lugar por derecho», no basta para dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 368, Ser. 3ª.

6. Posiciones—Las posiciones puestas al representante de una sucesión absueltas en rebeldía, solo forman prueba contra los herederos mayores, sin que puedan en ningún caso afectar los intereses de los menores.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 155, Ser. 3ª.

7. Posiciones—La falta de contestación á la demanda

dada no residía en esta Capital en la época en que fué citada para absolver las posiciones.

3—Tratándose de una diligencia de prueba tan importante, la ley ha querido rodear al acto de las mayores solemnidades y garantías. Así se desprende de las disposiciones del Cód. de Proc., y especialmente de lo establecido en el art. 136. Las posiciones son una medida probatoria personalísima del dueño del pleito.

4—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 136 del Cód. de Procedimientos, cuando dice «las posiciones serán absueltas por el apoderado si estuviese facultado para ello y *consintiese la parte contraria*».

5—Véase: verb. *Apercibimiento*, núm. 1.

6—La confesión no puede perjudicar sino al que es hábil para prestarla. Los menores no pueden ser tenidos por confesos por que el representante de la sucesión haya dejado de comparecer al acto. Además la confesión ficta no puede perjudicar á los menores.

7—Este sumario está completamente equivocado: no expresa ni remotamente lo que la Cámara resolvió. Conferido el traslado de ley y vencido el término sin que la parte demandada lo evacuase, se le dió

y aun al reconocimiento ficto que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, no bastan para condenar al demandado; se requiere que el demandante justifique los extremos de su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Serie 3ª.

por decaído el derecho de hacerlo. Abierta la causa á prueba y citado en forma el demandado, tampoco compareció á absolver posiciones, por lo que se mandó agregar el pliego. Invocando la disposición del artículo 433 del Cód. de Proc., el actor pide se declare rebelde al demandado y se trabe embargo en sus bienes. Así se hizo, sin que la providencia recaída fuera notificada en manera alguna al demandado. Había, pues, una demanda incontestada que no importaba otra cosa que perder el derecho á contestarla. Más tarde una notificación de rebeldía que no ha podido sentir los efectos legales por su falta de notificación de acuerdo con lo establecido en el art. 433 del Cód. de Proc.; pero que aun suponiendo que la produjera, no implicaba la pérdida del pleito por parte del demandado, dada la reserva del art. 434 del mismo Código. En efecto, es doctrina constante, consagrada por nuestros Tribunales, que la demanda dada por contestada en rebeldía del demandado, no produce la confesión ficta de la verdad de los hechos en que ella se funda, de un modo tal que exima al actor de la obligación de probar todos y cada uno de los hechos en que fundó su querrela.—Véase, entre otros, fallos de la Cámara, en el tom. 2º, pág. 99, Ser. 1ª; tom. 5º, pág. 598, idem; tom. 6º, pág. 471, idem. —Toca á la ciencia y conciencia del Juez el resolver si es ó no justo el pedido del actor, como bien claramente lo determina el art. 434 del Cód. de Proc. La Cámara dijo testualmente: «Las posiciones dadas por absueltas, son eficaces para probar el extremo necesario á la prosperidad de la demanda; en efecto, por ellas se demuestra que efectivamente se dió la autorización, contenida en documento de autos; que la demandada tuvo conocimiento de la venta á N. en la fecha y forma que se indica en la carta agregada en el acto de las posiciones y que se atribuye á la señora X. Pero justamente esta carta no prueba lo que era absolutamente necesario para hacer eficaz la demanda, á saber: que la demandada tuviera conocimiento de la venta hecha á N., dentro del plazo que fija la autorización de la carta. Por el contrario, de esta carta se desprende que siendo la autorización conferida á Z., solo válida por 90 días á contar desde el 18 de Febrero de 1889 y apareciendo la venta hecha por éste á N. el 4 de Marzo, recién en Junio le comunica dicha venta, á pesar de estar vencida su





8. Posiciones—Para que las contestaciones á las posiciones puedan aceptarse como confesión de un hecho, éste debe resultar claro de la pregunta; los que no admitan una interpretación clara, deben serlo en sentido favorable al absolvente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Serie 3ª.

9. Posiciones—Las posiciones deben ser absueltas en el domicilio del absolvente, aunque la traslación se haya verificado después de trabado el litigio.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 235, Ser. 3ª.

10. Posiciones—La citación para absolver posiciones, debe ser hecha personalmente baja pena de nulidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 3ª.

11. Posiciones—El pedido de absolución de posiciones, no suspende el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 193, Ser. 3ª.

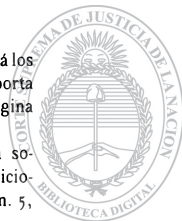
autorización desde el 18 de Mayo. Nada prueban, pues, las posiciones absueltas en rebeldía de la demandada.»

8—Esa prueba por excelencia no puede depender de la habilidad en redactar las posiciones, porque si el Juez abraza dudas de que la confesión haya sido consciente, la sana crítica á que debe obedecer su criterio, le impediría dar por existente una prueba donde no hubiera sino una hábil estratagema, á que no todo el mundo sabe sustraerse. Por eso establecían las leyes y prácticas antiguas que cada posición no pueda comprender más que una proposición. De otro modo, herida la imaginación con el concepto principal reinante en una oración de varios periodos, no es extraño que la contestación, dejando de lado las proposiciones de frase incidente, se dirija sola á lo que constituye el acuerdo recabado. No todos tienen la práctica de la contestación sobre cada una de ellas. Por eso el que contesta está habilitado á hacer dividir cada posición, y si la pregunta se le dirige englobando diversos conceptos contra ley y doctrina, la contestación debe entenderse siempre congruente con el concepto dominante de la oración.

9—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 2.

10—Véase: *Nulidad de una citación*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Alegato*, núm. 1.



12. Posiciones—Siempre que se fija la misma hora, á los demandados, para la absolución de posiciones, importa que debe ser conjunto el acto.—Jur. Civ., tom. 5, página 195, Ser. 3^a.

13. Posiciones—Consentida la admisión de prueba sobre la causa que impide la no comparecencia á las posiciones, procede la fijación de un término.—Jur. Civ., tom. 5, página 242, Ser. 3^a.

14^a. Posiciones—La justa causa para no comparecer al acto de las posiciones, debe ser alegada antes de la hora designada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 381, Ser. 4^a.

14^b. Posiciones—Si la ausencia involuntaria del absolvente está comprobada en autos, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de las posiciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 208, Ser. 4^a.

15. Posiciones—Para darlas por absueltas en rebeldía, el apercibimiento debe constar espresamente en la cédula.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

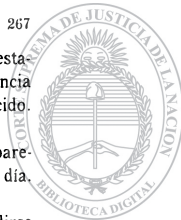
12—La parte pidió que dos demandados conjuntos fuesen citados para absolver posiciones simultáneamente: el Juez señaló la audiencia para que comparecieran al acto sin decir que debía la absolución ser conjunta y en la misma audiencia. Se resolvió que el Juzgado al proveer al escrito, de conformidad, fijando una misma hora establecía implícitamente que se proveía de acuerdo con lo solicitado, pues á no ser así se habría dispuesto lo contrario desde que es una regla de derecho que la negativa debe ser espresa.

13—De otra manera y dejándose al arbitrio de la parte la prueba ordenada, se haría el juicio interminable. La apertura á prueba de cualquier incidente presupone la facultad de fijar un término á su producción.

14^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida.

14^b—De la diligencia de notificación resultaba que el absolvente se encontraba ese día en el campo: la parte contraria no negó el hecho sino que lo reconoció como exacto. Tampoco se comprobó que el absolvente hubiese tenido conocimiento de la citación en ninguna otra forma.

15—Art. 127 del Cód. de Proc.



16. Posiciones—Para que puedan darse por contestadas en rebeldía, la parte debe presentarlas en la audiencia fijada, aun cuando el absolvente no haya comparecido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

17. Posiciones—Alegada justa causa para no comparecer á la absolución de posiciones, debe fijarse nuevo día.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

18. Posiciones—La absolución de ellas puede pedirse aun después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4^a.

19. Posiciones—Aun cuando el que debe absolver posi-

16—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verbo *Audiencia*, núms. 1 y 2.

17—Esto no fué materia de resolución en la Cámara. Solo se dejó sin efecto una providencia que mandaba agregar un pliego de posiciones, pero sin decir que debía fijarse nuevo día. Es claro que si la parte lo solicita debe señalarse nuevo día.

18—Así lo establece espresamente el art. 125 del Cód. de Proc. cuando dice: «Después de la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia, podrá cada parte pedir que la contraria absuelva posiciones».

19—A este respecto hay jurisprudencia contradictoria. El sumario se funda en que el art. 125 señala como término para pedir la absolución de posiciones desde la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia. El término abarcado por este artículo va más allá que el término ordinario y extraordinario de prueba. No es posible hacer extensiva la disposición del art. 113 del Cód. de Proc. á la prueba de posiciones, por cuanto ésta se halla especialmente regida, en cuanto á su producción, por los términos del art. 125 citado. Pretender que el art. 113 rije en el caso del art. 125, importaría establecer que las posiciones no pueden ponerse á la parte que tiene su residencia fuera del asiento del Juzgado, sino dentro del término ordinario ó extraordinario de prueba, siendo así que la disposición del art. 125 no distingue, y por el contrario determina que puede producirse hasta la citación para sentencia, lo que supone su admisión fuera de todo término probatorio. Además si se aceptase aquella pretensión para todos los casos, resultaría que en muchos de ellos el litigante de mala fe, que quisiera burlar los derechos de su contrario, imposibilitándole el más eficaz de los elementos de prueba, po-



ciones se encuentre ausente de la jurisdicción del Juzgado, no es necesario la petición del término extraordinario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4ª.

20. Posiciones—Si las preguntas de las posiciones no están en forma, puede señalarse nuevo día.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 21, Ser. 4ª.

21. Posiciones—Los documentos reconocidos al absolver posiciones, y consentida en aquel acto la agregación, no deben ser desglosados por oposición ulterior.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 96, Ser. 4ª.

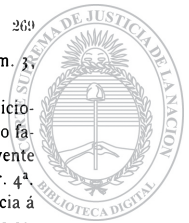
22. Posiciones—Consentida la providencia de autos, no

dría esquivar su presencia y rehuir esa diligencia con solo ausentarse del territorio de la jurisdicción del Juzgado, una vez que el término probatorio estuviese vencido. Que la liberalidad de la ley respecto á este medio probatorio, es tal que lo admite en términos extraordinarios y hasta dos veces en cada juicio, lo que autoriza á presumir que el espíritu de nuestro Código ha sido no limitarlo, como hace con los otros medios de prueba, dentro del término para producirla, sino por el contrario de permitirlo ampliamente durante la secuela del juicio. De acuerdo con el sumario. Véase: *Posiciones*, núm. 2079, Inst., tom. 1º. En contra, tom. 4º, mismo verbo, núm. 4; tom. 3º, mismo verbo, núm. 5.—Aquí espresamos nuestra opinión en favor de la teoría resuelta en el sumario,—y tom. 2º, mismo verb., núm. 14. Es indudable que el principio sentado en el sumario consagra la buena doctrina.

20—Abierta la audiencia para la absolución de posiciones el ponente presentó el pliego, pero las preguntas no estaban concebidas de manera que pudiesen contestarse afirmativa ó negativamente como lo prescribe el art. 130 del Cód de Proc., disposición que no podría cumplirse si las preguntas tomaran una forma indagatoria. Es sabido que el absolvente debe confesar ó negar de un modo asertivo con la fórmula precisa de «como es cierto ó incierto»; doctrina aceptada por los prácticos. Véase: Escriche, verb. *Posiciones*, y Caravantes, págs. 70, 388 y 389, tom. 4º. Si las posiciones no vienen en la forma prescripa, debe señalarse nuevo día si es que la parte no prefiere formularlas en el acto verbalmente.

21—Véase: verb. *Documentos*, núm. 6.

22—No procede la absolución de posiciones en ese estado del juicio —art. 125 del Cód. de Proc.



procede la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 61, Ser. 4^a.

23. Posiciones—La confesión por medio de las posiciones es indivisible, de manera que no puede admitirse lo favorable sino con las mismas restricciones que el absolvente haya hecho valer.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4^a.

24. Posiciones—El escrito escusando la inasistencia á las posiciones, debe ser presentado antes de la hora señalada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 106, Ser. 4^a.

25. Posiciones—La absolución en rebeldía de las posiciones, no basta para decretar embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 325, Ser. 4^a.

26. Posiciones—Justificada la justa causa para no comparecer, debe señalarse nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 359, Ser. 4^a.

23—Véase: verb. *Confesión*, núm. 3.

24—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Cámara establecida en numerosos casos: pero este Tribunal para no perder su costumbre de ofrecer á los litigantes casos que puedan favorecer sus pretensiones en el sentido que más les convenga, resolvió últimamente un caso por el cual estableció que no puede darse por absueltas las posiciones aunque el citado alegue causal legítima después de la hora señalada, si se presenta la excusa antes de abrirse la audiencia pidiendo que se agregue el pliego de posiciones. Pero como esa audiencia no puede abrirse hasta última hora, antes de cerrarse el Juzgado, resulta que la causal puede alegarse aun después de la hora fijada para la audiencia. Puede verse el caso de Casmelli de Arzeno. Esto es lo que introduce el caso en materia de procedimientos, y de tal que los litigantes andan en los Tribunales sin brújula y sin poder fijar su rumbo á causa de este mar de contradicciones.

25—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 35.

26—Alegada justa causa para no concurrir á la audiencia se señaló nuevo día, debiendo justificarse dicha causal. Después del día señalado fué justificada por medio de certificado médico, dejándose cumplido lo ordenado por el Juzgado; de donde resulta que la causal debe alegarse antes de la hora, pero su justificación puede hacerse después.



27. **Posiciones**—La falta de comparecencia del que pidió las posiciones, hace procedente se declare decaído el derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 374, Ser. 4^a.

28. **Posiciones**—Deben ser absueltas en el lugar donde se encuentre el absolvente, aun cuando no sea su domicilio permanente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 13, Ser. 4^a.

29. **Posiciones**—Solo pueden absolverlas, las partes con interés directo en el litigio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 26, Ser. 4^a.

30. **Posiciones**—Aceptada sin oposición la cesión de derechos, no procede la absolución de posiciones por el

27—Art. 128 del Cód. de Proc., aparte 3º.

28—No existe disposición legal por la cual se obligue á una de las partes del litigio á permanecer durante la sustanciación en el lugar donde está ventilándose. Ya sea que la parte que debe absolver posiciones esté domiciliada en el lugar del juicio ó que su residencia sea alternativa, el art. 136 del Cód. de Proc. dispone que si por cualquier circunstancia no se encontrase en el lugar del juicio, deberá darse comisión al Juez del pueblo ó lugar *donde se encuentre*. Si bien el domicilio de las personas se determina al tiempo de la promoción de la litis, y en el caso presente, resultaba de autos que en esta ciudad se le citó al demandado al entablarse la acción, y se extendió el poder que obraba en autos, estas circunstancias no influían para que se obligase á la parte á venir al lugar del juicio por cuanto del texto espreso de la prescripción recordada, se infiere que las posiciones deben ser absueltas en el lugar donde se encuentre la persona que debe absolverlas, y mucho más no desconociéndose categóricamente que en la época de la absolución se encuentre ausente.

29—Se pidió que un socio del litigante absolviera posiciones en un litigio que no era contra la sociedad. En esto el socio no es parte, y no siéndolo no puede ser llamado á absolver posiciones, porque esta medida probatoria solo se acuerda contra los que son parte en el juicio —art 125, Cód. de Proc.

30—Este caso está en contra del que corre publicado en el tom. 4º de la Inst. verb. *Posiciones*, núm. 7, resolución que allí combatimos. Hoy con el sumario se modifica esa jurisprudencia en el sentido de nuestra opinión.



cedente, solo puede exigirse la del cesionario.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 45, Ser. 4^a.

31. Posiciones—La presentación de la parte que debía absolver las posiciones escusando su inasistencia, aun después de la hora señalada, no permite darlas por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 60, Ser. 4^a.

32. Posiciones—Si el Juez admite como legítima la causa de inasistencia, no procede la absolución de las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 17, Serie 4^a.

31—El hecho de presentarse, pasada la hora designada para la audiencia, no es causa suficiente para dar por absueltas las posiciones en su rebeldía, desde que según los propios términos del art. 133 del Cód. de Proc., solo es posible dar por confesa á la parte cuando no comparece á declarar, lo que no sucedió en el presente caso. Interpretando lógicamente el artículo citado, no podía pretenderse que existiera confesión ficta en caso como el presente, so pena de sancionar una restricción á sus términos, contraria al principio inconcuso, según el cual debe darse á la prueba toda la amplitud compatible con las reglas que el Cód. de Proc. prescribe para los juicios. Como lo ha declarado la Cámara de lo Civil en casos análogos, la fijación de una hora para que las partes concurran á la audiencia señalada, solo significa eximir las de asistir á toda ella, sin que esto importe, sin embargo, libertarlas, desde la hora que se fije hasta la terminación de la audiencia.

32—Decretado el comparendo para la absolución de posiciones, la parte concurrió el día designado y dijo que el acto no podía tener lugar porque su abogado se encontraba enfermo. La Cámara dijo, que si bien esta causa no es de las admitidas por la ley, el Juez de 1^a Instancia la tuvo en cuenta, señalando nuevo día. Esta circunstancia favorece el derecho de la parte, pues si el Juzgado no hubiese hecho lugar á la pretensión de postergar el acto, la parte hubiera absuelto las posiciones, y si no las hubiese querido absolver á pesar de la orden del Juez, habría sido necesario el apercibimiento de ley. El Inferior después de haber admitido como legítima la causal invocada, señalando en consecuencia nueva audiencia para el acto, revocó esa providencia por contrario imperio, y ordenó la agregación del pliego para tenerlo presente en la oportunidad debida. La Cámara revocó la providencia como se ha visto.



33. Posiciones—Las posiciones y la rebeldía deben presentarse en la audiencia señalada, no procede su agregación con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 18, Serie 4ª.

34. Posiciones—Justificada la ausencia del absolvente no procede dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 31, Ser. 4ª.

35. Posiciones—No procede el señalamiento de nuevo día para absolver posiciones después de consentido el auto que las da por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 34, Ser. 4ª.

36. Posiciones—Los representantes de una persona jurídica, están obligados á absolverlas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Ser. 4ª.

37. Posiciones—El mandatario está obligado á absolver

33—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase el núm. 16. Dice la Cámara que no es con posterioridad al día y hora señalado para la audiencia, que la parte puede venir presentando pliego de posiciones y documentos, sino que, dada la naturaleza del juicio, si la contraparte no había asistido á él, debió el actor solicitar entrar á la audiencia y en ella hacer las peticiones que creyere conveniente ó presentar las pruebas, si ellas hubieran sido admitidas por el Juzgado y no venir con posterioridad, pretendiendo que se admitan pruebas estemporáneamente.

34—Véase el núm. 9, cuyos fundamentos pueden aplicarse al caso presente, por analogía.

35—Debe tenerse presente que en el caso actual, cuando el que debía absolver las posiciones se presentó, ya ellas habían sido tenidas por absueltas. Deferir á la reconsideración de dicha resolución importaría retrotraer la estación del juicio desde que de hecho se daría por nulo el auto que las dió por absueltas debido á una causa injusta ó inexacta tendría que ser materia de un proveído, cuando ni siquiera se había pedido reconsideración á pesar de haber estado la parte en tiempo de pedirla.

36—De acuerdo con la jurisprudencia hoy establecida. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Posiciones*, núm. 10; tom. 3º, verb. *Representante*, núm. 2. En contra, véase: verb. *Personas jurídicas*, núm. 2 del tom. 4º.

37—Parece que este sumario estuviere en contra del núm. 5 pero no



verlas por su mandante.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Serie 4^a.

38. Posiciones—Si la absolución de posiciones no tiene lugar sin culpa del absolvente, no procede la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 126, Ser. 4^a.

39. Posiciones—La prueba de éstas no se encuentra entre las que deben pedirse y evacuarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 131, Ser. 4^a.

40. Posiciones—La imposibilidad de concurrir el abogado director, es causal para fijar nuevo día para la presentación de posiciones.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 230, Serie 4^a.

41. Posiciones—No pueden darse por absueltas las posiciones en rebeldía si la citación se pidió ante juez incompetente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4^a.

es así porque en el caso presente no se trataba de un simple apoderado sino que se trataba del representante ó apoderado de una persona jurídica, que se encuentra en distintas condiciones, pues si el apoderado ó representante no las absuelve, tampoco lo puede hacer la persona representada porque ésta carece de existencia real, lo que colocaría á las partes en un pié de perfecta desigualdad, lo que es repugnante y contrario al principio tutelar de la igualdad de la defensa en juicio.

38—El absolvente concurrió pero la audiencia no pudo celebrarse porque el intérprete nombrado para la absolución había renunciado.

39—En este caso dijo la Cámara que «no hallándose comprendida la prueba de posiciones en la disposición del art. 118, como lo comprueba el art. 125 del mismo», pueden las posiciones producirse fuera del término. Véase el núm. 18.

40—Véase: verb. *Abogado*, núm. 9.

41—Un litigante tenía su domicilio en Carcarañá, Provincia de Santa Fe. El Juez de la Capital Federal se dirigió al Juez del Rosario, creyendo que esa autoridad fuese la única con jurisdicción sobre aquella localidad, lo que no era así: y como el art. 136 del Cód. de Proc. preceptúa que las posiciones deben ser absueltas ante el Juez del pueblo ó lugar donde se encuentre la parte resulta que la citación hecha por el Juez del Rosario, no podía surtir ningún efecto legal por cuanto no era el Juez del pueblo ó lugar donde se encontraba el absolvente.



42. Posiciones—Deben ser absueltas ante el juez del domicilio del absolvente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4^a.

43. Posiciones—No siendo negada la autenticidad del certificado médico, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 10, página 78, Ser. 4^a.

44. Posiciones—Solo pueden darse por absueltas las posiciones en rebeldía si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 98, Serie 4^a.

45. Posiciones—La absolución de posiciones no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 10, página 103, Ser. 4^a.

46. Posiciones—Para dar por absueltas las posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 303, Serie 4^a.

Posiciones—Véase: *Domicilio*, núm. 1 —*Inhibición*, número 12.

Precauciones—Véase: *Culpa ó negligencia*, núm. 1.

1^a. Precio—Al deudor que se escepciona con la exajera-

42—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 12.

43—Véase: *Certificado médico*, núm. 1.

44—Véase: *Audiencia*, núm. 1.

45—Véase: verb. *Allegato*, núm. 4.

46—Véase: verb. *Audiencia*, núms. 1 y 2.

1^a—Una persona recibió encargo de otra para que le hiciera traer algunos artículos de Europa. Los encargos fueron llenados pasándosele la cuenta correspondiente. El demandado confesó el encargo hecho y el recibo de los artículos, pero dijo que los precios eran fabulosos, y que muchos de los artículos no le habían sido entregados. El demandado escepcionándose con esa defensa se convertía en actor. Además esa circunstancia era un hecho nuevo aducido en juicio, cuya prueba incumbe al que lo aduce.



ción del precio de los artículos, corresponde la prueba de la verdad de su aserto.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 3^a.

1^b. Precio—Agregados los comprobantes cuya falta fundaba la oposición del comprador, debe efectuarse la oblación del precio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 3^a.

2^a. Precio—Justificada la imposibilidad de cumplir el contrato de compraventa, el vendedor está obligado á la devolución de la parte de precio recibido con sus intereses á estilo de banco desde le fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 318, Ser. 3^a.

2^b. Precio—Reconocida la disminución del área, el comprador no está obligado á oblar el precio mientras no se practique nueva *medición*.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

3^a. Precio—Justificada la imposibilidad de cumplirse el contrato de compraventa, procede la devolución del precio, aun cuando el comprador hubiese tomado posesión del bien materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3^a.

3^b. Precio—Al ordenarse el cumplimiento de una obligación de hacer escritura pública de compraventa, no puede ordenarse la oblación judicial en el banco del precio que solo debe abonarse al firmar el instrumento trasla-

1^b—Porque desaparece el fundamento de la oposición, y una vez desaparecida la causa desaparece el efecto.

2^a—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 8.

2^b—El comprador dijo que al terreno comprado le faltaba más de una quinta parte del área vendida y que fundado en el art. 1345 desistía de la compra. No se hizo lugar al desistimiento mientras no se comprobara ese extremo, facultándosele al mismo tiempo á no oblar en el interin el precio.

3^a—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 13.

3^b—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 6.



tivo del dominio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 4^a.

4. **Precio**—De venta, la indemnización por la falta de cumplimiento de una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

5. **Precio**—Estipulado, reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista á quien correspondía la demasia, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de sumá alguna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 201, Ser. 3^a.

6. **Precio**—Mensual, reconocida la locación de servicios y justificado el precio mensual, el locador debe ser condenado al pago del saldo adeudado.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 411, Ser. 3^a.

7. **Precio**—Los informes de las oficinas públicas, ya sea de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

8. **Precio**—Determinado, el propietario no es responsable respecto á los terceros que proveyeran al constructor de materiales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 284, Ser. 4^a.

9. **Precio**—Aun pedida la rescisión del contrato, el locatario está obligado al pago del precio de la locación

4—Véase: *Indemnización*, núm. 4.

5—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 1.

6—Véase: *Locación de servicios*, núm. 3.

7—Véase verb. *Administración*, núm. 1.

8—Véase: verb. *Materiales*, núm. 1.

9—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 95.



y si por su falta se declara la resolución, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 163, Ser. 4^a.

10. **Precio**—De venta, para la fijación de los daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento de un contrato de compraventa, debe tenerse en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el que tenía en la fecha en que se entabló la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, página 137, Ser. 4^a.

11. **Precio**—Estipulado como comisión de venta de un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90. Ser. 4^a.

12. **Precio**—La falta de intervención de algunos herederos como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310. Ser. 4^a.

13. **Precio**—No es potestativo del locador el aumento del precio de la locación, debe existir la conformidad del locatario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 107. Ser. 4^a.

Precio—Véase: *Alquileres*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 3—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y 16—*Cesión*, núm. 1—*Comisión*, núm. 3—*Competencia*, núm. 2—*Comprador*, núm. 1—*Compraventa*, núm. 4—*Contrato bilateral*, número 5—*Contrato de arrendamiento*, núms. 17 y 29—

10—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 104.

11—Véase: verb. *Comisión*, núm. 6.

12—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.

13—Véase: verb. *Locación*, núm. 10.



Contrato de compraventa, núm. 7—*Daños y perjuicios*, núms. 23, 43 y 56—*Depósito judicial*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 9—*Interdicto de obra nueva*, núm. 4—*Intereses*, núms. 2 y 8—*Jurisdicción*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 5—*Mora*, núm. 1—*Peritos*, núm. 1—*Prueba plena*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 2, 3 y 14—*Rendición de cuentas*, núm. 19—*Separación de bienes*, núm. 2—*Servicios*, núm. 10.

Precio determinado—Véase: *Venta ad-corpus*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 25—*Costas*, núm. 46—*Daños y perjuicios*, núm. 90—*Sello*, núm. 2.

Predio—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 4, 5, 20 y 24—*Locatario*, núms. 5 y 6—*Alquileres*, núm. 2—*Posesión*, núm. 5.

Preferencia—Véase: *Divorcio*, núm. 5.

Pregunta—Véase: *Posiciones*, núms. 8 y 20.

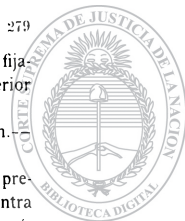
1. Prejuzgamiento—El haber emitido opinión en un incidente de un juicio, no importa un prejuzgamiento que anule la sentencia—*Jur. Civ.*, tom. 1, pág. 224, Ser. 3^a.

2. Prejuzgamiento—La fijación de días determinados para que el menor vea á sus padres, no importa un prejuzgamiento en el juicio sobre tenencia definitiva.—*Jur. Civ.*, tom. 3, pág. 71, Ser. 4^a.

3. Prejuzgamiento—El rechazo de la acción de daños y

1—En un juicio de filiación natural el Juez que falló la causa había emitido opinión siendo Asesor de Menores, á cerca de la personería de la madre natural. Se dijo de nulidad de la sentencia definitiva por haber el Juez prejuzgado en la causa. No hay ley que inhabilite á un Juez para pronunciar fallo definitivo sobre el fondo de un asunto por haber emitido opinión como funcionario en un incidente que no está íntimamente relacionado con aquél. La inhabilitación viene del hecho de haber emitido opinión ó dictamen en lo que es objeto del fallo, y no en un punto que precisamente por estar ya resuelto y terminado no tiene importancia en el litigio.

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 106.



perjuicios, no importa un prejuzgamiento para la fijación del monto en caso de ser revocada por el Superior la sentencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Prejuzgamiento**—Hace procedente la recusación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 159, Ser. 3^a.

1^a. **Prelación**—El acreedor de mejor derecho tiene prelación sobre el de grado inferior y puede repetir contra él por el importe de su crédito.—Jur. Civ., tom. 8, página 394, Ser. 4^a.

1^b. **Prenda**—En la ejecución de una prenda debe ejecutarse ésta con preferencia á los demás bienes del deudor, que solo responde subsidiariamente del saldo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

2^a. **Prenda**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio; solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4^a.

Preparatoria—Véase: *Prueba preparatoria*, núm. 1.

1^a. **Prescripción**—Corresponde al que la alegue justificar la fecha desde la cual empieza á correr el término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Ser. 3^a.

2^b. **Prescripción**—La prescripción es procedente en cual-

1^a—Art. 3938 del Cód. Civ.

1^b—Art. 479 del Cód. de Proc.

2^a—Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

1^a—Se trataba de la nulidad de un acto jurídico. El derecho para alegarla se prescribe desde la fecha en que la existencia del acto llega á conocimiento de la parte. El que alega que el derecho para pedir esa nulidad está prescripto, debe comprobar que el hecho de la celebración del acto nulo llegó á conocimiento del que alega la nulidad; como asimismo debe comprobar la fecha, para que la prescripción empiese á contarse desde entonces.

2^b—Art. 3962 del Cód. Civ. No se dijo que la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado del juicio cuando de autos resulta justificada, solo se declaró procedente fundándose en el artículo citado.



quier estado del juicio si de autos resulta justificada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 201, Ser. 3ª.

3. **Prescripción**—Deducida demanda de jactancia, la prescripción se interrumpe aun cuando ella se haya dirigido contra el que pretendía tener originariamente el derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368, Ser. 4ª.

Prescripción.—Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1—*Abogado*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 1—*Excepción de prescripción*, núms. 1 y siguientes—*Costas*, núm. 30—*Daños y perjuicios*, núm. 60—*Información supletoria*, núm. 7.

1. **Prescripción adquisitiva**.—Para que las declaraciones de testigos se puedan considerar bastantes para justificar la prescripción adquisitiva, deben ser precisas, claras y concordantes, en cuanto á los hechos sobre que deponen y á su pleno conocimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 205, Ser. 3ª.

2. **Prescripción adquisitiva**.—Si existen derechos contradictorios, no procede la información sumaria para probar la adquisición del dominio por haber poseído durante

3.—Véase: verb. *Jactancia*, núm. 4.

1.—Una prueba por la que se propone la constitución de un título de dominio, para suplir el traslativo que puede ó no haber existido, debe revestir apariencias tales que lleven al ánimo el convencimiento, de que el testigo mismo se ha penetrado del alcance de su declaración. La razón del dicho del testigo ha de referirse á los hechos de los cuales pueda deducirse al mérito de la atestación, pues que de lo contrario dos testigos contestes sobre el hecho que se quiere demostrar dando razón genérica y vaga del dicho, como la vecindad, la amistad etc., que no presuponen un conocimiento forzoso de aquellos, encadenarían de tal modo la conciencia del Juez, que el fallo quedaría en realidad constituido por los testigos y no por el magistrado á quien se ha delegado la facultad de administrar justicia discerniendo á cada cual su derecho. Al testigo corresponde dar cuenta de los hechos, al Juez correlacionarlos, deducir las consecuencias que de ellos se desprenden, y establecer claramente el derecho.

2.—Véase: *Información sumaria*, núm. 2.



el término que la ley requiere para la prescripción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 4^a.

1^a. **Prescripción de un delito**—La absolución del acusado, por prescripción del delito, no puede fundar una acción de daños y perjuicios contra el demandante que no fue parte activa en el juicio criminal—Jur. Civ., tom. 3, página 232, Ser. 3^a.

1^b. **Prescripción de una deuda**—Contra la deuda proveniente de una carta de crédito solo procede la prescripción de diez ó veinte años; la escepción fundada en menor término debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3^a.

1^c. **Prescripción de diez años**—Procede la escepción de prescripción de diez años entre presentes, siempre que se justifique la buena fe y el justo título.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13, Ser. 4^a.

1^d. **Prescripción como escepción**—El rechazo de la escepción de prescripción opuesta como artículo de previo pronunciamiento y discutida como cuestión de puro derecho, no hace cosa juzgada ni inhibe á la parte para oponerla en cualquier estado del juicio después de contestada la demanda siempre que la prueba de su procedencia resulte justificada en autos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

2. **Prescripción como escepción**—En juicio ejecutivo solo

1^a—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

1^b—Véase: *Carta de crédito*, núm. 1.

1^c—Art. 3999 del Cód. Civ.

1^d—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 7.

2—Iniciado un juicio ejecutivo y sentenciado de trance y remate mandando llevar adelante la ejecución por no haberse deducido escepción alguna en la estación oportuna del juicio, y después de practicada la liquidación del crédito, intereses y costas, se presenta el ejecutado y dice que fundado en el art. 4032 del Cód. Civ. se encuentra prescripto



puede oponerse en la estación oportuna que la ley señala.

—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 4^a.

3. Prescripción como excepción—La falta de pronunciamiento del Juzgado sobre la excepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte á quien fué opuesta.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

1^a. Prescripción de una fianza—El término para la prescripción de la fianza empieza desde que sea notoria la insolvencia del deudor, aun cuando el fiador no haya renunciado al beneficio de escusión.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

2. Prescripción de una fianza—La prescripción de una fianza constituida antes de la vigencia del Código Civil, se rige única y exclusivamente por las antiguas leyes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

1^b. Prescripción de una indemnización—La acción para demandar la indemnización civil procedente de un delito ó cuasi-delito, se prescribe al año de haber tenido lugar el hecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 3^a.

1^c. Prescripción interrumpida—La protesta que no ha sido el crédito—se trataba de honorarios de abogado—y que debe así declararse, á lo que no se hizo lugar por la naturaleza del juicio y teniendo en cuenta que la sentencia se hallaba consentida y ejecutoriada, no era procedente ni pudo admitirse la defensa opuesta teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 487 del Cód de Proc., el que establece terminantemente que no se admitirán al ejecutado otras defensas que las que entonces hubiese manifestado. Si no manifestó el ejecutado la excepción de prescripción al ser citado de remate, no puede admitirse después; le queda á salvo su derecho para hacerlo valer por la vía ordinaria.

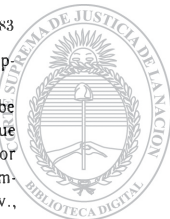
3—Véase: verb. *Excepción de prescripción*, núm. 4.

1^a—Véase: verb. *Fianza*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Fianza*, núm. 5.

1^b—Art. 4037 del Cód. Civ.

1^c—La protesta no notificada se considera inexistente.



do notificada personalmente, no interrumpe la prescripción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 44, Ser. 4^a.

2. **Prescripción interrumpida**—El heredero que recibe como de su causante el bien hereditario, se supone que posee para sí, y los que se consideren con derecho por condominio anterior, deben ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir la prescripción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 111, Ser. 4^a.

3. **Prescripción interrumpida**—La iniciación de un juicio sin deducir acción determinada, no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 180, Ser. 4^a.

1^a. **Prescripción liberatoria**—La inacción por mayor término del que la ley fija para la prescripción liberatoria de la cuenta corriente, hace procedente la escepción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 335, Ser. 4^a.

1^b. **Prescripción de una marca de fábrica**—El derecho para reclamar el título de una casa de comercio como marca de fábrica, aun cuando ese título consista en el apellido de la familia, se prescribe por la inacción de un año.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 44, Ser. 4^a.

1^c. **Prescripción contra menores**—La prescripción comenzada contra un heredero mayor continúa sin interrup-

2—Véase: verb. *Heredero*, núm. 7.

3—Véase: *Acción determinada*, núm. 1.

1^a—Art. 1003, inc. 3^o del Cód. de Com. ant. Por el Código vigente esta prescripción es de cinco años—art. 790.

1^b—Art. 36 de la Ley de marcas de Fábrica.

1^c—El caso cae bajo la sanción de las leyes anteriores á la vigencia del Cód. Civ.—art. 4051.—Segun la ley 9^a, tit. 19, Part. 6^a, la prescripción de 20 ó más años no corre contra menores cuando empieza á prescribirse contra ellos, mas no sucede lo propio cuando la prescripción ha empezado contra personas mayores á quienes han heredado los menores, pues en tal caso la prescripción ya comenzada continúa contra éstos.



ción contra los menores y puede ser opuesta con éxito en caso de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Serie 3ª.

1. **Prescripción á nombre propio**—Para que se verifique á favor del poseedor, la posesión debe tenerse á nombre propio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3ª.

2. **Prescripción á nombre propio**—La esposa que renuncia á sus derechos hereditarios en la sucesión del esposo, no puede invocar á su favor la posesión tenida á nombre de éste, para prescribir á su nombre personal los bienes poseídos durante la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 321, Ser. 3ª.

1—Es elemental en derecho que para adquirir el dominio por prescripción, es necesaria la posesión *inimo domini*—art. 2351 del Código Civil—exigiéndose esa circunstancia aun en la posesión continua de treinta años, que no requiere justo título ni buena fe—Cód. Civ., art. 4015—y lo es también, como lo estatuye categóricamente el art. 2353, que nadie puede cambiar por sí ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. «El que ha comenzado á poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario.»

2—Al deducir su demanda la actora decía haber poseído el inmueble quieta y pacíficamente á título de dueña, aseverando que no solo la había ocupado con ánimo de ser propietaria sino que también había ejercitado públicamente y sin interrupción alguna por más de 40 años todos los actos que son consiguientes al dominio privado; y terminaba pidiendo se la declarase *dueña exclusiva* del inmueble. Al absolver posiciones confesó que había vivido la mayor parte del tiempo en que se decía operada la prescripción, al lado de su esposo, al amparo y bajo la protección de éste, y confesó asimismo que ella no había tenido más derechos sobre la propiedad que los que pudo transmitirle su esposo á título sucesorio, y que el título de éste provenía de sus ascendientes. No pudo por consiguiente, ser ella poseedora única y á título de propietaria del terreno, puesto que fué poseído por su esposo en el carácter expresado, y que renunció á la herencia dejada por éste, renuncia que fué aceptada según se comprobó en autos.



1ª. **Prescripción de la nulidad**—El término para la prescripción del derecho á solicitar la declaración de nulidad de un acto jurídico por ser falso, solo empieza á correr desde la fecha en que el que pide la nulidad tuvo conocimiento de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3ª.

2ª. **Prescripción de la nulidad**—Se prescribe á los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

1ª. **Prescripción de una obligación**—Para que la prescripción sea procedente, el que la invoca debe justificar que la obligación ha sido fechada con posterioridad á la época en que fué firmada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3ª.

2ª. **Prescripción de una obligación**—La prescripción anterior á la ley que fija un término corto, se rige por la ley de la fecha en que fué firmada si fuera de mayor término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4ª.

1ª. **Prescripción del patronato**—La del derecho al patronato de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha de la fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4ª.

1ª. **Prescripción en segunda instancia**—Para que la pres-

1ª—Véase: verb. *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3.

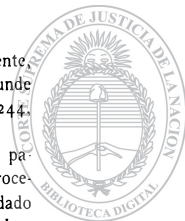
2ª—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

1ª—Porque reconocida la firma del documento, queda reconocido su contenido—art. 1028 del Cód. Civ.—y su prueba es indivisible—artículo 1029.—Para destruir lo dispuesto en estos artículos, debe producirse prueba, la que incumbe á aquel que se levanta contra la presunción legal.

2ª—Art. 4051 del Cód. Civ.

1ª—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 4.

1ª—Si bien el art. 3962 del Cód. Civ. autoriza á oponer la prescripción en cualquiera instancia y en todo estado del juicio anterior al tiempo en que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, sin-



cripción opuesta en segunda instancia sea procedente, es necesario que resulte justificada de autos, ó se funde en instrumento público.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 244, Ser. 3^a.

1^a. Prescripción treintenaria—La posesión quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la escepción de prescripción sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3^a.

1^b. Prescripción treintenaria—Es procedente aun sin título ni buena fe, siempre que se justifique la posesión quieta y pacífica por igual ó mayor término.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 249, Ser. 4^a.

2. Prescripción treintenaria—Procede la escepción de prescripción treintenaria siempre que se justifica la posesión á nombre propio por un término igual ó mayor de treinta años.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 342, Ser. 4^a.

3. Prescripción treintenaria—El derecho de los coherederos para exigir la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes recibidos por partición estrajudicial, se prescribe por la inacción durante treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

4. Prescripción treintenaria—Importando la cosa juzgada una novación del derecho que motivó la sentencia, la demanda sobre su cumplimiento es una acción personal

embargo prohibe que se deduzca ante los Tribunales superiores siempre que no resulte probada por instrumentos presentados ó testigos recibidos en primera instancia.

1^a.—*Escepción de prescripción*, núm. 1.

1^b. Véase: *Posesión treintenaria*, núm. 2.

2.—Arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ., concordantes con la Ley 21, tit. 29, Part. 3^a.

3.—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 5.

4.—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 8.



prescriptible en el término de treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

5. Prescripción treintenaria—Opuesta y justificada ésta, la acción reivindicatoria debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 309, Ser. 4^a.

1^a. Prescripción de veinte años—La acción de rendición de cuentas como personal, se prescribe por el término de veinte años.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 180, Ser. 4^a.

Prescripciones legales—Véase: *Daños y perjuicios*, número 63.

Presentación — Véase: *Alegato*, núm. 3—*Documento*, núm. 10.

Presentación personal—Véase: *Asuntos judiciales*, número 1.

Presidente—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

1^b. Prestaciones—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

1^c. Préstamo—Es procedente la escepción de inhabilidad de título, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3^a.

1^d. Préstamo—La ejecución de un préstamo sobre un inmueble, corresponde á la jurisdicción civil aun cuando

5—Porque el reivindicante habría perdido su derecho al dominio de la cosa materia de la acción en virtud de su inacción durante dicho término.

1^a—El caso estaba regido por las antiguas leyes, las que señalan el término de veinte años para la prescripción de las acciones personales—Ley 6^a, tit. 15, lib. 4^o, R. C.

1^b—Véase: verb. *Desalojo*, núm. 4.

1^c—Véase: *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1^d—Véase: *Jurisdicción Civil*, núm. 1.



sea hecho por un comerciante. —Jur. Civ., tom. 8, página 40, Ser. 4ª.

Presunción legal—Véase: *Servicios*, núms. 7 y 8.

Presunciones—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, número 2—*Simulación*, núm. 13—*Prueba de presunciones*, núm. 1.

Presupuesto—Véase: *Papel sellado*, núms. 1 y 3—*Remuneración profesional*, núm. 1.

Principio de prueba—Véase: *Prueba escrita*, núm. 3—*Prueba testimonial*, núm. 8.

Principios generales—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 2.

Prisión—Véase: *Autoridad*, núm. 2.

Privilegio general—Véase: *Honorarios*, núm. 26.

Procedimiento—Véase: *Fallecimiento*, núm. 2—*Nulidad del procedimiento*, núms. 1 y 2—*Excepción de nulidad*, núm. 1—*Testigos*, núm. 25—*Demanda*, núm. 4—*Notificación*, núm. 8.

Procedimiento sumario—Véase: *Honorarios*, núm. 13.

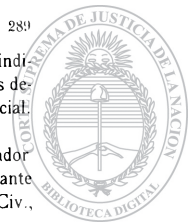
Proceso criminal—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 12, 13 y 17.

1. **Procuraciones judiciales**—Las disposiciones del Código Civil referentes al mandato, solo son aplicables a las procuraciones judiciales, en cuanto no se opongan a las disposiciones del Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4ª.

2. **Procuraciones judiciales**—La presentación personal del demandante no importa la revocación tácita del poder conferido al mandatario para procuraciones judiciales.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 189, Ser. 4ª.

1—Véase: verb. *Mandato*, núm. 9.

2—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase el número precedente.



1^a. Procurador—Aun cuando el procurador pueda individualizar las defensas, si son varios los demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3^a.

2. Procurador—Judicial, el apoderado ó procurador judicial puede representar ó acompañar á su poderdante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 127, Ser. 3^a.

3. Procurador—La enemistad del juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4^a.

4. Procurador—El abogado y procurador carecen de personería para reclamar de sus honorarios en los casos de condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 4^a.

Procurador—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 14—*Apelable*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 15.

Profesión—Véase: *Servicios*, núms. 2, 6 y 10—*Abogado*, núm. 7.

Prófugo—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

Prohibiciones—Véase: *Contrato de arrendamiento*, número 22—*Locación*, núm. 3—*Legado*, núm. 3.

Promesa—Véase: *Contrato verbal*, núm. 4—*Boleto de compraventa*, núm. 5—*Compraventa*, núm. 2.

Pronunciamiento—Véase: *Nulidad de una sentencia*, número 9.

1^b. Propiedad—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al

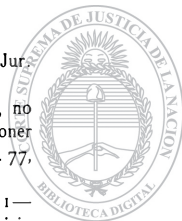
1^a—Véase: verb. *Demandados*, núm. 1.

2—Véase: *Actos judiciales*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Abogado*, núm. 12.

4—Véase: verb. *Abogado*, núm. 15.

1^b—Véase: verb. *Poseción*, núm. 11.



que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3^a.

2. **Propiedad**—Afectada con pacto de retroventa, no puede ser vendida por el deudor, solo puede disponer del derecho de retrotraerla.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 77, Ser. 4^a.

Propiedad— Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 2—*Finca*, núm. 1—*Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 11—*Remate judicial*, núm. 12—*Escritura*, núm. 4—*Nulidad de un título*, núm. 1—*Bienes raíces*, núm. 2—*Personería*, núm. 3—*Posesión judicial*, núm. 11—*Releventa*, núm. 2—*Venta*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Informaciones*, núm. 2—*Información supletoria*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núms. 1 y siguientes—*Condominio*, —núm. 9.

Propiedad indivisa—Véase: *Depositorio judicial*, núm. 1.

1^a. **Propiedades**—La línea imaginaria que divide dos propiedades debe fijarse en el centro de la pared, siempre que por convenio expreso no se haya estipulado cuál de los frentes de la pared era el divisorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 303, Ser. 3^a.

1^b. **Propietario**—El propietario no es responsable respecto de los terceros que proveyeran al constructor de ma-

2.—El art. 1384 establece que el vendedor con pacto de retroventa no puede entrar en posesión de la cosa vendida, sino después de haber pagado el precio de venta. Resulta entonces que la propiedad no puede venderse porque el vendedor está obligado a entregar la cosa libre de toda otra posesión y sin contradictor que se oponga—art. 1409 del Cód. Civ.—Si el vendedor no tiene la posesión de la cosa no puede enajenarla, porque no puede cumplir con los deberes que su carácter de vendedor le impone.

1^a—Véase: verb. *Pared divisoria*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Materiales*, núm. 1.



teriales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tom. 5, página 284, Ser. 4^a.

Propietario—Véase: *Adoquinado*, núms. 3 y 4—*Allanamiento*, núm. 1—*Afirmados*, núms. 1 y 2—*Acto ilícito*, núms. 3 y 6—*Boleto de compraventa*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 18, 24, 25, 55, 78, 108 y 111—*Locatario*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Contrato de locación*, núm. 4—*Posesión*, núms. 8 y 14—*Obligación de hacer*, núm. 8—*Rematador*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 18—*Simulación*, núm. 6—*Violencia*, núm. 1—*Damnificado*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 5—*Obras*, núm. 1—*Excepción*, núm. 2—*Derecho de retención*, núm. 4.

1^a. Propietario riverense—Para que el terreno acrecentado por aluvión sea del dominio público, debe justificarse plenamente que su formación es posterior a la promulgación del Código Civil, pues por las antiguas leyes correspondía al propietario ribereño.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

1^b. Prórroga—De un término, corre desde la notificación de la concesión y no a continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 124, Ser. 3^a.

Prórroga—Véase: *Hipoteca*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núms. 12 y 15—*Escrito*, núm. 7—*Pruebas*, núm. 3.

Protesta—Véase: *Prescripción interrumpida*, núm. 1.

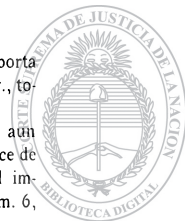
Protestantes—Véase: *Matrimonios*, núm. 1.

1^c. Protocolización—La sentencia que manda reducir a

1^a—Véase: verb. *Aluvión*, núms. 1 y 3.

1^b—Véase: verb. *Notificación*, núm. 4.

1^c—Véase: *Escritura pública*, núm. 25.



escritura pública el boleto de compraventa, solo importa su protocolización en un Registro público.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 229, Ser. 4^a.

1^a. **Proveedor**—De un cuerpo del ejército nacional, aun cuando haya recibido órdenes directas del jefe, carece de derecho para hacerlo personalmente responsable del importe de los víveres suministrados.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 3^a.

1^b. **Proveedores**—Las ordenanzas militares no son aplicables á los proveedores, que en sus relaciones comerciales se rigen única y exclusivamente por las disposiciones del derecho común.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Serie 3^a.

Providencia—Véase: *Costas*, núm. 2—*Como se pide*, número 1—*Testigos*, núm. 16—*Posiciones*, núm. 22.

Proyecto—Véase: *Contrato*, núm. 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

1^c. **Prueba**—La existencia de hechos contradictorios, hace ineludible la recepción de la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 228, Ser. 3^a.

2. **Prueba**—Basta la afirmación del escribano sobre conocimiento de las partes para no exigir testigos, la negativa de alguna de éstas no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

3. **Prueba**—La agregación de un expediente como parte de prueba es improcedente, debe pedirse testimonio de

1^a—De acuerdo con los principios expresados en la nota del verb. *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^b—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^c—Art. 104 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Conocimiento*, núm. 1.

3—La jurisprudencia de la Cámara ha variado á cerca de este punto de procedimiento, pero parece que hoy se inclina en el sentido del sumario.



las piezas pertinentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 46, Serie 4ª.

4. Prueba—Las diligencias de prueba no cumplidas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 57, Ser. 4ª.

5. Prueba—El término de prueba, notificado por edictos, empieza a correr desde el vencimiento del término fijado en ellos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 382, Ser. 4ª.

6. Prueba—Siempre que exista disconformidad sobre algún hecho, debe recibirse la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 91, Ser. 4ª.

7. Prueba—La conformidad de las partes sobre los hechos alegados hace improcedente la recepción de la prueba; la nulidad de la sentencia fundada en ese hecho, debe ser desechada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Ser. 4ª.

8. Prueba—La negligencia de la parte al no dar los sellos necesarios para el exhorto, hace improcedente su libramiento después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 94, Ser. 4ª.

9. Prueba—Vencido el término debe agregarse la producida, salvo el derecho de las partes para exigir la producción de la pedida antes de los alegatos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 138, Ser. 4ª.

Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Espediente determinado*, núm. 1. Pero cuando el expediente se pide por referencias generales, procede su agregación. Véase: tom. 4º, verb. *Espedientes*, núm. 2.

4—Art. 118 del Cód. de Proc.

6—Art. 104 del Cód. de Proc.

7—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 8.

8—La Cámara dice que en este caso hay negligencia, siendo de estricta aplicación el art. 118 del Cód. de Proc.

9—Arts. 118 y 213 del Cód. de Proc.



10. **Prueba**—Vencido el término de prueba debe agregarse, sin perjuicio del derecho de la parte para pedir antes de alegar la producción de las omitidas sin culpa suya.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 251, Ser. 4^a.

11. **Prueba**—Procede la recepción á prueba del incidente sobre la nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4^a.

12. **Prueba**—La negativa de la agregación de un espediente, no basta para fundar la petición de testimonio de sus piezas, después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4^a.

13. **Prueba**—La sentencia que no hace lugar á las excepciones opuestas á la ejecución de una sentencia es apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

14^a. **Prueba**—El término para oponerse al auto de prueba, corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4^a.

14^b. **Prueba**—La falta de prueba y la confesión contradictoria con la esposición de la demanda, hacen ineludible el rechazo de la acción con especial condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 242, Ser. 4^a.

15^a. **Prueba**—Procede la recepción de la causa á prueba

10—Véase nota precedente.

11—Véase: verb. *Citación*, núm. 2.

12—Véase: verb. *Espediente*, núm. 5.

13—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 12.

14^a—Véase: verb. *Notificación*, núm. 13.

14^b—La prueba incumbe al actor y su omisión implica pérdida del pleito—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—La confesión contradictoria con la demanda implica temeridad, malicia y mala fe, siendo consecuencia de esto la imposición de las costas.

15^a—Es el caso del art. 104 del Cód. de Proc.



si varios invocan derechos sobre una misma cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 326, Ser. 4^a.

15^b. Prueba—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda se derecho.—Jur. Civ., tom. 8, página 87, Ser. 4^a.

Prueba—Véase: *Acto ilícito*, núm. 10—*Alquiler*, número 2—*Autenticidad*, núm. 2—*Carta*, núm. 1—*Cláusulas*, núm. 1—*Consejo de Higiene*, núm. 1—*Contradocumento*, núms. 2 y 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 4—*Contrato por escritura pública*, núm. 2—*Contrato verbal*, núms. 1 y 3—*Cosa juzgada*, núm. 7—*Costas*, números 1, 49 y 59—*Daños y perjuicios*, núms. 3, 45, 73, 74 y 92—*Declaraciones*, núms. 1 y 6—*Declaratoria de herederos*, núm. 5—*Dictamen pericial*, núm. 1—*Diligencia de prueba*, núms. 1 y siguientes—*Divorcio*, número 8—*Documento privado*, núms. 1 y 6—*Documentos*, núms. 1, 3, 7 y 9—*Documento de descargo*, núm. 1—*Donación*, núm. 1—*Edictos*, núm. 1—*Escritura pública*, número 17—*Escepción*, núm. 2—*Escepción de compensación*, núm. 1—*Escepciones*, núm. 7—*Filiación legítima*, números 1 y 2—*Filiación natural*, núms. 1, 2, 3, 4, 6 y 17—*Hijo natural*, núms. 1 y 11—*Hijuela*, núm. 1—*Illegitimidad*, núm. 1—*Interdicto*, núms. 2, 8 y 9—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Informes*, núm. 1—*Libros de comercio*, núms. 1 y 2—*Liquidación*, núm. 2—*Mandatario*, nú-

15^b—De acuerdo con la jurisprudencia sentada de una manera uniforme. Hemos combatido esta interpretación de la ley como equivocada, y creemos que el error procede de la confusión que se hace de las palabras *procedencia* ó *pertinencia*. Véase verb. *Diligencias de prueba*, núm. 18; como asimismo el tom. 4^o, Inst., verb. *Diligencias de prueba*, núm. 10 y *Término extraordinario*, núm. 2; y tom. 3^o, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 14, y *Prueba*, núm. 10.



mero 4.—*Novación*, núm. 1.—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2.—*Nulidad de una sentencia*, núms. 2, 3 y 8.—*Nulidad de un título*, núm. 1.—*Nulidad de testamento*, núms. 1 y 7.—*Obligación*, núms. 1 y 2.—*Oficinas públicas*, núm. 2.—*Perito*, núms. 1 y 2.—*Peritos*, número 8.—*Petición de herencia*, núm. 1.—*Posesión*, núms. 4 y 15.—*Posesión judicial*, núm. 8.—*Posiciones*, núm. 6 y 39.—*Precio*, núm. 1.—*Servicios*, núm. 7.—*Sentencia*, números 10.—*Simulación*, núm. 13.—*Tacha*, núm. 3.—*Término de prueba*, núms. 1 y siguientes.—*Término extraordinario*, núms. 2, 6 y 7.—*Testamento*, núm. 1.—*Testigos*, números 115, 20 y 27.—*Testimonio*, núm. 1.—*Títulos de propiedad*, núm. 16.—*Escepción dilatoria*, núm. 4.

1^a. Prueba de la acción.—Al demandante corresponde la prueba de la acción: si no la justifica debe ser condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. Prueba del actor.—La falta de prueba del actor, hace procedente la absolución del demandado.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 201, Ser. 3^a.

2. Prueba del actor.—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 87, Ser. 4^a.

Prueba por confesión ficta.—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1

1^c. Prueba de un contrato.—La prueba de las modificacio-

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 33.

1^b—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

2—De conformidad con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst. tomo 3^o, verb. *Rebeldía*, núms. 9 y 10.

1^c—Las modificaciones introducidas en un contrato y alegadas por la parte son hechos nuevos que se traen á tela de juicio; son verdaderas escepciones. En este carácter corresponde su prueba al que las alega, en virtud del conocido principio consagrado en el antiguo derecho—Ley 8^a, tit. 3^o, Part. 3^a.—*Reus in excipiendo fit actor*.



nes de un contrato, corresponde al que las alega.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 293, Ser. 4^a.

1^a. Prueba documental—La referencia en la demanda a documentos que no se acompañan, no permite su agregación después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

2^a. Prueba documental—El heredero aun cuando no desconozca la validez del documento en que se funda la obligación, puede invocar la falsedad de la causa que él espresa, pero como escepcionante carga con la prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. Prueba del dolo—Al que alega el dolo corresponde la prueba de su existencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4^a.

Prueba del error—Véase: *Escritura*, núm. 2—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 3.

1^c. Prueba escrita—Para que proceda la prueba testimonial sobre modificaciones a un proyecto de contrato, el principio de prueba escrita debe referirse terminantemente a las modificaciones, no basta el proyecto para hacerla procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Ser. 3^a.

2^b. Prueba escrita—Aun cuando no se requiere que el principio de prueba por escrito se refiera directamente al contrato, es necesario que de sus términos resulte vero-

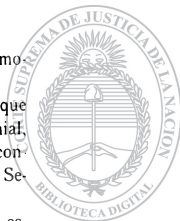
1^a—Siempre que se encuentre en las condiciones espresadas en la nota del verb. *Documentos*, núm. 9 cuando se presentan dentro del término, pero si dicho término ha vencido hay negligencia de parte del interesado—art. 118 del Cód. de Proc.

2^a—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 6.

1^b—De acuerdo con la terminante disposición de la Ley 2^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^c—Véase: verb. *Contrato*, núm. 3.

2^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 11.



simil su existencia para que proceda la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3ª.

3. Prueba escrita—El principio de prueba escrita que la ley exige, para hacer procedente la prueba testimonial, en contratos de mayor cuantía, puede resultar de la constatación á la demanda.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Serie 4ª.

4. Prueba escrita—Para que el principio de prueba escrita haga procedente la testimonial, es necesario que el documento exhibido arroje por sí solo fuertes presunciones de la verdad de la acción instaurada ó que contenga indicaciones precisas sobre el objeto de la convención.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4ª.

5. Prueba escrita—El reconocimiento de una deuda en el testamento importa un principio de prueba escrita que hace procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, página 330, Ser. 4ª.

6. Prueba escrita—Cualquier que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital exceda del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 172, Serie 4ª.

Prueba escrita—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1—*Contrato bilateral*,

3—Las manifestaciones hechas en juicio constituyen un documento en el sentido del art. 1191 del Cód. Civ., que hace perfectamente verosímil el hecho, y por consiguiente admisible la prueba testimonial desde que existe el principio de prueba exigido por la ley.

4—Véase: verb. *Documento*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Confesión*, núm. 2.

6—Véase: verb. *Contrato escrito*, núm. 1.



núm. 2.—*Contrato*, núm. 11.—*Contrato verbal*, núm. 8.

1^a. Prueba por instrumentos públicos—No procede recepción de prueba si la única pertinente consiste en instrumentos públicos presentados por las partes: debe declararse la cuestión de puro derecho.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 58, Ser. 3^a.

1^b. Prueba pericial—Siempre que sea posible el reconocimiento de firma por peritos, no procede la prueba por testigos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 164, Ser. 4^a.

Prueba pericial—Véase: *Administración*, núm. 1.—*Peritos*, núm. 5.

1^c. Prueba plena—Si no existe prueba plena sobre el precio del terreno que motivó la obligación de hacer, convertida en la de indemnizar daños y perjuicios, los jueces deben fijarla equitativamente.—Jur. Civ., tom. 7, página 220, Ser. 3^a.

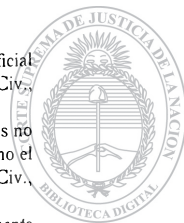
1^d. Prueba plena—Las notificaciones como instrumentos

1^a—La cuestión versaba sobre entrega de una menor. El padre legítimo acompañó la partida de bautismo correspondiente: el demandado, que tenía en su poder á la menor dijo, que si bien era cierto que la menor reclamada era hija de la esposa del actor, no era hija legítima de ella por haber nacido dos meses después de celebrarse el matrimonio, ni tampoco era hija legítima del actor por no haber sido legitimada en el tiempo y forma que la ley prescribe. En comprobación de ello se acompañaron algunas partidas. Como se ve, tanto los hechos en que el actor fundaba su acción como los aducidos por el demandado, y los únicos sobre los cuales la prueba sería pertinente, constaban de instrumentos públicos como son las partidas de que se hicieron mérito. Por otra parte, los interesados estaban de acuerdo sobre lo fundamental de la acción entablada.

1^b—No puede admitirse la prueba por testigos como única y con exclusión de la pericial, pero debe ser admitida como concurrente de esta. Así lo tiene resuelto la Cámara. Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7.

1^c—Véase verb. *Daños y perjuicios*, núm. 43.

1^d—Véase: verb. *Notificaciones*, núm. 2.



públicos, hacen prueba plena de las aserciones del oficial público, mientras no se justifique su falsedad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 383, Ser. 4^a.

2. Prueba plena—El informe de peritos calígrafos no forma prueba plena; el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desechar el dictamen pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Prueba plena—Véase: *Testigos*, núm. 3—*Documento privado*, núms. 5 y 7—*Locación de servicios*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 33 y 43—*Información supletoria*, núm. 5—*Herederos*, núm. 5—*Impedimentos dirimientes*, núm. 1—*Recusación*, núm. 10—*Contradocumento*, núm. 2—*Condominio*, núm. 9.

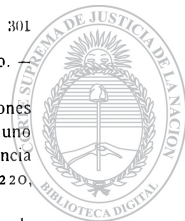
1^a. Prueba preconstituida—La prueba preconstituida ó constante de instrumentos públicos de fecha anterior á la demanda, permite á los jueces fundar en ella su sentencia, aun cuando durante el término no se haya producido prueba para justificar la acción.—Jur. Civ., tom. 6, página 434, Ser. 3^a.

1^b. Prueba preparatoria—Sobre el derecho del deman-

2—Véase: verb. *Cotejo*, núm. 1.

1^a—Se trataba de una demanda sobre filiación natural; al iniciarla se acompañó la partida de bautismo expedida por el cura párroco en la que el padre reconocía al hijo como suyo y firmaba el asiento. Se dijo que ni había necesidad de demanda porque la filiación constaba en una forma debidamente autorizada por la ley, que reviste la misma fuerza que la sentencia que se descaba obtener. Como los comprobantes de la filiación estaban á la vista y tenían tal carácter que en su presencia el reconocimiento judicial no es sino la ratificación del reconocimiento extrajudicial hecho por el padre. Poco importaba que esa demostración no se hubiese producido durante el término probatorio, cuando el documento fehaciente que obraba en autos importaba una prueba preconstituida cuya eficacia no puede depender de que ella sea agregada durante el término de prueba.

1^b—El interrogatorio presentado para acreditar previamente ciertos



dado, no es procedente como preparatoria del juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 110, Ser. 4^a.

1^a. **Prueba de presunciones**—La prueba de presunciones no basta si la acción de simulación se deduce por uno de los autores, es requisito indispensable la existencia de un contradocumento.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 220, Ser. 4^a.

1^b. **Prueba procedente**—El Juzgado no puede apreciar la procedencia de la prueba hasta dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 360, Ser. 4^a.

2. **Prueba procedente**—El Juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia de la prueba antes de dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 377, Serie 4^a.

1^c. **Prueba de la rescisión**—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa corresponde la prueba de la excepción, si no la justifica debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 371, Ser. 3^a.

1^d. **Prueba en segunda instancia**—No procede la recepción de prueba en segunda instancia sobre hechos que de-

hechos, versaba sobre el derecho de la parte á ciertos bienes, lo que no procede como medida previa—arts. 67 y 70 del Cód. de Procedimientos.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia y con la ley. Véase: verbo *Contradocumento*, núm. 1.

1^b—Lo contrario importaría un prejuzgamiento. Es necesario no confundir la procedencia de la prueba con la pertinencia de ella. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 18 y especialmente su nota.

2—Véase nota precedente.

1—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1^d—Según disposición terminante del art. 247 del Cód. de Proc.



bieron probarse en la estación oportuna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 105, Ser. 3^a.

1^a. Prueba de soltura—La presunción de la ley de que la madre natural es soltera, solo cede ante la prueba que corresponde al que le niega ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3^a.

1^b. Prueba supletoria—Para justificar el bautismo procede siempre que no existe la partida en el lugar en que se tenga seguridad que tuvo lugar el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 236, Ser. 3^a.

1^c. Prueba testimonial—Es procedente aun cuando existan menores interesados, siempre que los mayores reconozcan la deuda, pues ese reconocimiento importa el principio de prueba escrita que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 73, Ser. 3^a.

1^d. Prueba testimonial—Para que la prueba testimonial pueda ser aceptada, debe presentarse la lista de los testigos tres días antes del vencimiento del término.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 170, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Madre natural*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Bautismo*, núm. 1.

1^c—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1. La confesión de los herederos sin que sea robustecida por la prueba de testigos solo obliga á los herederos mayores. Véase: verb. *Herederos mayores*, núm. 2.

1^d—La lista se presentó el 17 y el término vencía el 19. Es fuera de duda que los testigos no podían examinarse dentro del término de prueba como lo preceptúa el art. 118 del Cód. de Proc., pues el artículo 184 ordena que la lista se ponga de manifiesto en Secretaría por el término de tres días antes del designado para la audiencia. Se dijo además, que el día de la presentación no podía contarse porque el escrito se presentó á las dos p. m., siendo evidente que solo podía salir despachado á última hora cuando ya no había posibilidad de notificar á las partes.



2. **Prueba testimonial**—Es procedente siempre que las diferentes partidas de una cuenta corriente, originadas en distintas épocas, no alcancen separadamente al máximo que la ley fija, aun cuando en su conjunto excedan de él.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 73, Ser. 3^a.

3. **Prueba testimonial**—Es improcedente para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato en tanto no existe contradocumento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

4^a. **Prueba testimonial**—Es improcedente para justificar la existencia de una promesa de contrato verbal por mayor valor del que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 5, página 387, Ser. 3^a.

4^b. **Prueba testimonial**—No puede destruir las constancias de una escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 208, Ser. 4^a.

5^a. **Prueba testimonial**—Aun careciendo el mandatario de facultad especial para el acto, el tercero puede jus-

2 — Porque en este caso hay tantos contratos cuantas partidas correspondientes á distintas épocas se cobren y entonces no rige la prohibiciones del art. 180 del Cód. de Proc. y 1191 del Cód. Civ., que exigen que el contrato no exceda de 200 pesos. Además en el caso que nos ocupa, no se trataba precisamente de contratos sino de hechos realizados, los que están regidos por la última parte del art. 1191 citado, que admite toda clase de prueba para su constatación.

3 — Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

4^a — Véase: *Contrato verbal*, núm. 4.

4^b — En el caso del sumario, no se resolvió tal cosa. Solo se dijo que «estos testimonios», —se refiere á los presentados en el expediente — «fallan sobre el punto capital, lo que era precisamente el monto que arrojaban los testimonios otorgados por el Escribano, están lejos de servir de base á una declaración de falsedad de la escritura pública.» Se ve por los párrafos transcritos que lo resuelto fué todo lo contrario de lo sentado en el sumario.

5^a — Véase verb. *Mandatario*, núm. 6.



tificar por medio de prueba testimonial la existencia del mandato verbal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

5^b. **Prueba testimonial**—Si bien las afirmaciones del testador no pueden aceptarse como una verdad incontrovertible, la prueba testimonial para destruirlas, debe revestir caracteres especiales que permitan calificarla de plena y absoluta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4^a.

6. **Prueba testimonial**—Las declaraciones de testigos que no dan razón de sus dichos, no forman la prueba que se exige como fundamento de una sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3^a.

7. **Prueba testimonial**—Negada la existencia del contrato verbal de compraventa, no procede la prueba testimonial para justificarla si no existe principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3^a.

8. **Prueba testimonial**—Para hacerla procedente en contratos de mayor cuantía, basta que el principio de prueba por escrito resulte del mismo expediente por confesión de la parte que niega la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 365, Ser. 4^a.

9. **Prueba testimonial**—La prueba testimonial es improcedente para justificar un contrato verbal de compraventa por mayor valor del que la ley fija si no existe principio de prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4^a.

10. **Prueba testimonial**—Debe pedirse en tiempo habil

6—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 3.

7—Véase: verb. *Contrato verbal*, núm. 5.

8—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: *Prueba escrita*, núm. 3.

9—Véase: verb. *Contrato verbal*, núm. 8.

10—De conformidad con la ley —arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.— La jurisprudencia ha exigido que los testigos sean presentados cuatro días antes: tres para estar la lista de manifiesto en Secretaría y el cuarto para su examen.



para la fijación de la lista en Secretaría.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 32, Ser. 4^a.

11. Prueba testimonial—La prueba de la conformidad de un condómino con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino; la testimonial no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Ser. 4^a.

Prueba testimonial—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2—*Contrato*, núm. 3—*Confesión*, núm. 1—*Declaraciones*, núms. 1 y 5—*Documento privado*, núm. 5—*Autenticidad*, núm. 1—*Posesión*, núm. 8—*Prueba pericial*, núm. 1—*Prueba escrita*, núm. 3—*Escepción de pago*, núm. 2—*Contrato verbal*, núm. 8—*Contrato de locación*, núm. 2—*Confesión*, núm. 2.

1. Pruebas—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

2. Pruebas—Deben ser pedidas en tiempo hábil para que puedan ser producidas dentro del término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 331, Ser. 4^a.

3. Pruebas—Procede la recepción de las pruebas pedidas después de vencido el término, si en tiempo oportuno se pidió y era procedente la prórroga, aun cuando no hubiese sido decretada en tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 297, Ser. 4^a.

Publicación—Véase: *Edictos*, núms. 1, 4 y 5—*Avisos*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 3.

1—Véase: verb. *Administración*, núm. 1.

2—Art. 118 del Cód. de Proc.

Pupilo—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 2—*Tutor*, núms. 1, 5 y 8—*Rendición de cuentas*, núms. 7 y 8.

1. Puro derecho—No procede la recepción de la causa a prueba si la única pertinente consiste en instrumentos públicos presentados por las partes; debe declararse la cuestión de puro derecho.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 58, Ser. 3ª.

Puro derecho—Véase: *Sentencia*, núm. 9—*Cosa juzgada*, núm. 7.

1—Véase: *Prueba por instrumento público*, núm. 1.





Querrela—Véase: *Absolución*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 9.

Querido—Véase: *Concubinato*, núm. 1.

1. Quiebra—Después de la declaración, corresponde a

1—La mujer al pedir separación de bienes, es considerada por la ley acreedora del marido como resulta claramente del texto del art. 1298 del Cód. Civ. La circunstancia de que el marido conserve la administración de los bienes de la mujer y de los hijos—art. 1406 del Cód. de Com.—no obsta á que sean los Tribunales de Comercio quienes conozcan de la demanda de separación de bienes, cuando aquél estuviere concursado, porque la demanda de separación de bienes no comprende solamente los bienes propios de la mujer, sino los gananciales, en cuya división podrían ser afectados los derechos de los acreedores del marido. Con arreglo al art. 1402 del Cód. de Com. las únicas acciones que después de la declaración de quiebra puede ejercitar el fallido sin la intervención del síndico del concurso, son aquellas inherentes á su persona ó meramente conservatorias de sus bienes y derechos, tales como las que prescriben los arts. 1405, 1406, 1463, etc., del mismo Cód. Que esa facultad, que no implica sino una escepción que como tal debe interpretarse restrictivamente, no puede hacerse estensiva al juicio de separación de bienes por cuanto en éste el concurrente no ejercita una acción individual de mera conservación, sino por el contrario entra á discutir con su esposa la propiedad de todos los bienes del matrimonio cuya separación forzosamente tiene que afectar los intereses de los acreedores del concurso, desde que al salir esos bienes de la masa, el haber de ésta disminuye. No es correcto ante los preceptos de la sana crítica deducir las consecuencias que algun pretenden, fundándose en

la jurisdicción comercial conocer en el juicio que sobre separación de bienes pretenda iniciar la esposa.—Jur. Civ., tom. 7, página 54, Ser. 4ª.

Quiebra—Véase: *Poder*, núm. 3.

el hecho de que conservando el marido la administración de los bienes de su mujer é hijos tenga también derecho á intervenir en el juicio de que se trata, con absoluta prescindencia de los representantes del concurso, si se recuerda que el fallido dada su incapacidad legal carece de personería para reconocer y desprenderse de bienes que desde el momento de la quiebra caen bajo la jurisdicción comercial para ser oportunamente clasificados como sucede precisamente con los de la mujer, pues con arreglo al art. 1497, inc. 5º del ya citado Código, pertenecen á la categoría de acreedores de dominio, siempre que compruebe en juicio ordinario que sus bienes entraron en poder del marido, lo que viene á demostrar aun más si cabe, que esa justificación debe hacerse con audiencia del síndico del concurso y ante el Tribunal de Comercio. Por otra parte, es de observar que al fallido ni siquiera le es dado hacer uso del derecho que le confiere el mencionado art. 1406, sin que previamente recabe la venia del Juez que dicta la declaración, que trayendo ésta en términos generales aparejada la inmediata suspensión de las facultades administrativas de aquél, así como la ocupación de los bienes que le pertenecen sin distinción de ningún género, es claro y lógico que para recuperar ese derecho tiene necesariamente que reclamarlo con los comprobantes del caso al mismo Juez que lo hace. El argumento que puede hacerse de que en atención á la naturaleza eminentemente civil del juicio de separación de bienes, no debe ser sometido á los Tribunales de Comercio, se contesta con solo tener en cuenta que los arts. 1408 y 1410 del Cód. de Com., reputan actos con relación á la masa. sean ó no sean comerciales, los ejecutados por el fallido después de la cesación de pagos, siendo de agregar que no por la circunstancia especial, de que dicho Tribunal esté llamado á conocer en estos autos, deje de sustanciarlo y resolver sin aplicar las leyes civiles que rijen la materia—art. 720 del Cód. de Proc. y 1387 del Cód. de Comercio.





1. **Ratificación**—La cláusula que impone la ratificación del mandante, importa el reconocimiento expreso por el tercero, de la carencia de facultad del mandatario para dar por terminado el contrato.—Jur. Civ., tom. 2, página 350, Ser. 3^a.

2. **Ratificación**—La exigida por cláusula del contrato escrito, debe llenar las mismas formas que el principal, no siendo bastante la forma tácita.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 350, Ser. 3^a.

3^a. **Ratificación**—Ordenada por los jueces, solo importa el reconocimiento de la autenticidad de las firmas que suscriben el acto; si éste ha sido firmado ante el juez ó actuario, esa diligencia no es necesaria para exigir su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 191, Ser. 4^a.

3^b. **Ratificación**—del capaz, revalida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados personalmente ó por apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Serie 4^a.

4. **Ratificación**—Del acto, hecha por el mandante con fecha posterior, tiene igual valor que la existencia es-

1—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 3.

3^b—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 5.

4—Véase: *Mandante*, núm. 3.



presa de autorización para llevarlo á cabo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 337, Ser. 4^a.

Ratificación—Véase: *Mandatario*, núm. 3—*Mandato*, núm. 12—*Sindicato*, núm. 1—*Firma*, núm. 4.

1^a. **Rebeldé**—Las distintas rebeldías en que incurra el demandado después de contestada la demanda, no lo hacen pasible de la condenación en costas que la ley fulmina contra el declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 6, página 201, Ser. 4^a.

Rebeldé—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b. **Rebeldía**—No puede darse por contestado en rebeldía un traslado para el cual no se han acompañado las respectivas copias.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 21, Ser. 3^a.

2. **Rebeldía**—Aun cuando se haya admitido y proveído el escrito de contestación á la demanda, debe ordenarse su devolución si fué presentado fuera del término y existía rebeldía acusada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 3^a.

3. **Rebeldía**—Acusada rebeldía, procede la devolución del escrito presentado después del vencimiento del término que la ley concede para evacuar el traslado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 97, Ser. 3^a.

4. **Rebeldía**—La de la parte, no permite su condenación sin más sustanciación; debe abrirse la causa á prueba; la omisión de este trámite esencial vicia de nulidad la sentencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 263, Ser. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 48.

1^b—El art. 21 del del Cód. de Proc. ordena que de todo escrito de que deba darse traslado, debe acompañarse copia. Estas copias se entregarán á la otra parte al notificársele el traslado. Si la parte no cumple con este deber impuesto por la ley, tampoco puede acusarle rebeldía á la otra parte porque el término no le corre.

2—Véase: verb. *Escrito*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Escrito*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 2.



5. Rebeldía—Procede si el escrito fué presentado después de acusada, según cargo de hora.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 218, Ser. 3^a.

6. Rebeldía—El escrito presentado después de acusada debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 221, Ser. 3^a.

7. Rebeldía—Consentida la declaración de rebelde, su tardía presentación no permite dejar sin efecto aquel auto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 237, Ser. 3^a.

8. Rebeldía—Justificada la imposibilidad de contestar la demanda por hechos ajenos a la voluntad de la parte, la rebeldía es improcedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 4^a.

9. Rebeldía—La contestación en rebeldía del traslado de la demanda, no basta para dictar embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 35, Ser. 4^a.

10. Rebeldía—No procede ésta si dentro del término prorrogado se opusieron y sustanciaron excepciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 4^a.

11. Rebeldía—Existiendo parte coadyuvantes, la re-

5—El escrito acusando la rebeldía fué presentado en el mismo día, pero horas antes de que se presentare el otro escrito cuya falta de presentación motivaba la acusación de rebeldía. Se declaró procedente la rebeldía acusada—art. 45, Cód. de Proc.

6—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Escrito*, núm. 3.

7—El art. 438 del Cód. de Proc. establece, que la sustanciación del juicio, no puede retrogradar aunque el rebelde comparezca.

8—El demandado alegó haber estado preso como causal para no contestar la demanda. El contrario no desconoció ese hecho; se dió por exacta la causal alegada, y siendo ésta bastante para excusar la rebeldía, se declaró improcedente la acusación.

9—De acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 13.

10—De acuerdo con lo que dispone el art. 98 del Cód. de Proc., en su última parte.



beldía acusada á una de ellas no afecta los derechos de la otra, aun cuando sea uno solo el representante de ambos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 4^a.

12. **Rebeldía**—Vencido el término para contestar la demanda, procede la devolución del escrito presentado después de acusada la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 95, Ser. 4^a.

13. **Rebeldía**—El abandono del juicio después de haber tomado intervención, hace procedente la declaratoria de rebeldía.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 390, Ser. 4^a.

14. **Rebeldía**—El defensor de ausentes debe intervenir en los juicios en representación del ausente pero del declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 390, Ser. 4^a.

15. **Rebeldía**—El escrito evacuando el traslado, presentado después de vencido el término y acusada la rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4^a.

16. **Rebeldía**—No procede el señalamiento de nuevo día para absolver posiciones después de consentido el auto

12—Véase: verb. *Escrito*, núm. 6.

13—El art. 433 del Cód. de Proc. dice que se seguirá el juicio en rebeldía cuando el demandado no comparezca ó cuando abandone el juicio después de haber comparecido.

14—Es necesario no confundir la disposición del art. 433 del Cód. de Proc. con la del 80 del mismo Código. La disposición de este artículo se refiere á la citación y emplazamiento de personas inciertas ó cuyo domicilio se ignore y que no hubieran hasta entonces comparecido á estar á derecho en el juicio, explicándose así el nombramiento de un defensor de oficio para que los represente y defienda. Pero no sucede lo mismo cuando la citación del demandado se ha hecho en persona, cuando ha comparecido al juicio y constituido su representación abandonándolo y cambiando de domicilio después, sin comparecer á pesar de las citaciones que se le han hecho, siendo en este caso, procedente la rebeldía y la continuación del juicio en la forma que establece el artículo 433 citado.

15—Véanse los núms. 3, 5, 6 y 12.

16—Véase verb. *Posiciones*, núm. 35.



que las da por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 34, Ser. 4ª.

17. **Rebeldía**—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 8, página 87, Ser. 4ª.

18. **Rebeldía**—Procede si el demandado no ha contestado el traslado de la demanda después de terminado el artículo previo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 14, Ser. 4ª.

19. **Rebeldía**—Si la absolución de posiciones no tiene lugar sin culpa del absolvente, no procede la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 126, Ser. 4ª.

20. **Rebeldía**—Solo puede darse por absueltas las posiciones en rebeldía, si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Ser. 4ª.

21. **Rebeldía**—Para resolver si procede la absolución de posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, página 303, Ser. 4ª.

22. **Rebeldía**—El escrito presentado después de acusada rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 10, página 330, Ser. 4ª.

Rebeldía— Véase: *Apercibimiento*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 2, 6, 7, 16, 31, 32, 33, 34, 35 y 38—*Términos perentorios*, núm. 1—*Costas*, núm. 48—*Embargo preventivo*, núms. 18 y 35.

17—Véase: *Prueba del actor*, núm. 2.

18—El art. 98 del Cód. de Proc. establece que el traslado de la demanda debe evacuarse dentro de nueve días después de resueltas las excepciones y terminado el artículo previo.

19—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 38.

20—Véase: verb. *Audiencia*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Audiencia*, núm. 2.

22—Véase: verb. *Escrito*, núm. 12, y *Rebeldía*, núms. 2, 5, 6, 12 y 15.



1ª. **Recaudos**—El Juzgado no puede de oficio exigir que la parte presente los recaudos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 316, Ser. 4ª.

Recaudos—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 2, 29 y 36.

Recepción—Véase: *Cuenta*, núm. 1.

1ª. **Recibo**—El recibo de descargo, cualquier que sea el valor, y documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 70, Ser. 4ª.

Recibo—Véase: *Estampilla*, núm. 2—*Escepción de pago*, núm. 5.

Reclamación—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 25—*Adoquinado*, núm. 4—*Demanda ordinaria*, núm. 1.

Reclusion—Véase: *Hijos menores*, núm. 2.

Recomendantes—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 59.

1ª. **Reconocimiento**—La falta de contestación y aun el reconocimiento ficto que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, no bastan para condenar el demandado; se requiere que el demandante justifique los extremos de su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3ª.

2. **Reconocimiento**—Procede el reconocimiento por la esposa, de un documento firmado por ella á ruego del esposo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 79, Ser. 4ª.

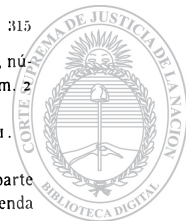
Reconocimiento—Véase: *Autenticidad*, núm. 3—*Domnio público*, núm. 1—*Filición natural*, núms. 7, 10, 12 y 18—*Firma*, núm. 7—*Herederos*, núm. 2—*Herederos mayores*, núm. 2—*Cláusulas*, núm. 1—*Escritura*, núm. 14—*Incapacidad*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núms. 14 y

1ª—Véase: verb. *De oficio*, núm. 5.

1ª—Véase: verb. *Estampilla*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 7.

2—Véase: *Documento*, núm. 4.



47—*Locación de servicios*, núm. 4—*Cartas privadas*, número 1—*Hijo natural*, núms. 9 y 11—*Confesión*, núm. 2—*Administrador judicial*, núm. 3.

Reconocimiento expreso—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1.

Recuperar—Véase *Venta*, núm. 5.

1. Recurso—La escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral, siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la excepción de falsedad de la ejecutoria es procedente, aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 160, Ser. 4^a.

Recurso—Véase: *Inapelable*, núm. 1.

1^a. Recurso de apelación—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 3^a.

1^b. Recurso de apelación—El recurso de apelación de las resoluciones municipales, debe interponerse dentro del término de cinco días y ante la autoridad municipal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 49, Ser. 4^a.

1^c. Recurso de apelación—Los recursos de nulidad y apelación pueden interponerse conjunta ó separadamente

1—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Apelación*, núm. 2.

1^b—La Cámara ha declarado en reiteradas decisiones que hasta tanto no se dicte la ley de procedimientos en lo contencioso administrativo, debe aplicarse el procedimiento ordinario ó común. De acuerdo con esta jurisprudencia, los recursos contra las resoluciones municipales, deben ser interpuestas ante la misma Corporación y dentro del plazo fijado por el Cód. de Proc.

1^c—El Dr. Mendez Paz dijo, que no habiéndose deducido el recurso de nulidad juntamente con el de apelación como lo dispone el art. 239 del Cód. de Proc., no procedía aquel recurso. La Cámara revocó el auto diciendo, que el recurso de nulidad fué deducido tres horas



dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 4, página 257, Ser. 4^a.

Recurso de apelación—Véase: *Apelación*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 10—*Recurso de reposición*, número 2—*Apelación de hecho*, núms. 1 y 2—*Término para apelar*, núm. 1—*Notificación*, núm. 12 y 13.

1^a. **Recurso directo**—Ante la Cámara, en los asuntos contencioso-administrativos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

1^b. **Recurso de fuerza**—No procede el recurso de fuerza en tanto no se hayan agotado todos los recursos ante el Eclesiástico.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Serie 3^a.

2. **Recurso de fuerza**—No procede el de la Curia Eclesiástica que admite una información *ad-perpetuam*.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 177, Ser. 4^a.

1^c. **Recurso de nulidad**—La Cámara puede declarar de oficio la nulidad de la sentencia aunque la parte no interponga el recurso, siempre que en su pronunciamiento se hubiese violado el art. 217 del Cód. de Proc.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 107, Ser. 4^a.

después que el de apelación, é implicando los términos empleados en el art. 239 del Cód. de Proc., establecer que dentro del mismo término para la apelación debe deducirse el de nulidad, aunque se deduzcan en escritos distintos, procedía la revocación de la resolución del Inferior

1^a—Véase: verb. *Apelación de hecho*, núm. 2.

1^b—De acuerdo con las leyes procesales que rijen el caso, y también de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Recurso de fuerza*, núms. 1, 2 y 7.

2—Véase: *Información «ad-perpetuam»*.

1—Esta resolución ha sido omitido en el sumario del fallo respectivo. El principio sentado en este caso ha sido consagrado por la jurisprudencia de la Cámara. Véase: *Nulidad de una sentencia*, núms. 18 y 2; *Nulidad absoluta*, núm. 1.



Recurso de nulidad—Véase: *Nulidad*, núms. 2 y 3—*Nulidad de una sentencia*, núms. 18 y 24—*Nulidad de una ejecución*, núm. 5—*Escepción de nulidad*, núm. 2—*Notificación*, núm. 13—*Término para deducir la nulidad*, número 1.

1^a. **Recurso de reposición**—Las resoluciones de la Cámara de Apelaciones, no son susceptibles del recurso de revocatoria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 3^a.

2. **Recurso de reposición**—Interpuestos los recursos de revocatoria y apelación, fuera de término el primero, y dentro de él el segundo, debe concederse la apelación sin sustanciación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 47, Ser. 4^a.

3. **Recurso de reposición**—Interpuesto solo y sustanciado y rechazado éste, el auto que no hace lugar es inapelable.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 48, Ser. 4^a.

4. **Recurso de reposición**—El que desiste del recurso de revocatoria, debe pagar las costas.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 62, Ser. 4^a.

Recurso de reposición—Véase: *Informe in voce*, núm. 1.

1^b. **Recusación**—El comprador en remate judicial solo

1^a—Se trataba de una sentencia definitiva, en cuyo caso no procede el recurso de reposición—art. 81 de la Ley Org. de 1881.—Contra las providencias de mera sustanciación procede este recurso de reposición según el art. 73 de la ley de 1881 y de la vigente.

2—Consideramos que para evitar abusos, sería conveniente en estos casos, no hacer lugar a la reposición y conceder la apelación; pero como el escrito de reposición debe necesariamente ir fundado, y como esto importaría fundar la apelación, debe devolverse el escrito poniendo nota de la interposición del recurso de apelación y de su otorgamiento, como lo preceptúa el art. 227 del Cód. de Proc. De otra manera sería muy fácil infringir esta regla deduciendo siempre el recurso de reposición fuera de término y el de apelación dentro de él.

3—Art. 225 del Cód. de Proc.

4—Véase: verb. *Costas*, núm. 63.

1^b—La parte se presentó recusando al Juez después de consentir nu-



tiene derecho de recusar al Juez al presentar su primer escrito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200, Ser. 3ª.

2. **Recusación**—Consentida la providencia en que se hace saber el Juez que va á conocer, no puede declararse improcedente la recusación del anterior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 208, Ser. 3ª.

3. **Recusación**—El comprador en remate judicial puede recusar sin causa al Juez que conozca en el incidente sobre escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 220, Ser. 3ª.

4. **Recusación**—El demandado puede recusar al Juez antes ó al contestar la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 227, Ser. 3ª.

5. **Recusación**—El término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 243, Ser. 3ª.

6. **Recusación**—Los acreedores pueden recusar al Juez en sus resoluciones. La Cámara ha interpretado en el sentido del sumario el art. 366 del Cód. de Proc.

2—Si la recusación es indebidamente admitida, el juez á quien pasase el escrito si se considerase indebidamente gravado, podría reclamar y observar su admisión. Si admite la recusación y entra á conocer en la causa, el auto por el cual se hace saber el Juez que va á conocer pasa en autoridad de cosa juzgada, y las partes no pueden volver sobre él.

3—El Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la recusación—cosa extraña por cierto, en este señor Juez—por no ser, según su opinión, el caso del art. 366 del Cód. de Proc. La Cámara revocó la resolución diciendo que el comprador como parte en el incidente de escrituración puede hacer uso del derecho que le acuerda el citado artículo.

4—El Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la recusación deducida contra él. La Cámara revocó el auto fundándose en la disposición del art. 366 del Cód. de Proc. que autoriza á hacer uso del derecho de recusación antes ó al tiempo de contestar la demanda.

5—Véase: verb. *Notificación*, núm. 3.

6—El art. 717 del Cód. de Proc. no excluye el derecho de los acree-



del concurso en el incidente sobre verificación de crédito.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 357, Ser. 4ª.

7. **Recusación**—Sin causa, procede al contestar la demanda aun cuando se haya aceptado el Juez para las excepciones dilatorias opuestas.—Jur. Civ., tom. 3, página 359, Ser. 4ª.

8. **Recusación**—El derecho de recusación es personal del litigante, no puede hacerse extensivo al abogado patrocinante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 421, Ser. 4ª.

9. **Recusación**—El Juez que ha conocido en el litigio, no puede ser recusado sin causa al pedirse la ejecución de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 4ª.

10. **Recusación**—Para que sea procedente la recusación, la prueba debe ser plena, los testigos de oídas no pueden darle ese carácter.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 4ª.

11. **Recusación**—El recusante con causa debe justificar plenamente los motivos en que la funda.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 8, Ser. 4ª.

12. **Recusación**—El representante de varios herederos

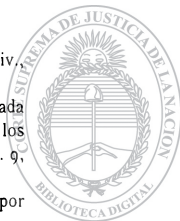
dores para verificar sus créditos ante el Juez ordinario como lo demuestra el art. 756; en tal caso la presentación del acreedor sea que importe ó nó una demanda en forma, faculta el ejercicio del derecho acordado por el art. 366.

7—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 4. Las excepciones dilatorias se oponen antes de contestar la demanda. Una vez sustanciadas éstas, puede al contestar la acción hacerse uso del derecho acordado por el art. 366 del Cód. de Proc.

8—Véase: verb. *Abogado*, núm. 5.

9—La ejecución de una sentencia es la continuación del mismo juicio no es un asunto nuevo, no siendo por consiguiente aplicable el art. 366 del Cód. de Proc.

12—El representante único de varios interesados, debe ser considerado como un solo litigante, porque de lo contrario se alteraría la perfecta igualdad que debe reinar en los juicios.



solo puede recusar sin causa á un camarista.—Jur. Civ. tom. 9. pág. 12, Ser. 4^a.

13. **Recusación**—Con causa, debe presentarse en cada uno de los litigios, no basta un escrito para todos los que existan pendientes del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 133, Ser. 4^a.

14. **Recusación**—El Agente Fiscal no es recusable por intervenir como parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 228, Ser. 4^a.

15. **Recusación**—Cualquiera que sea el carácter en que se haya intervenido, no procede la recusación sin causa al ser investido el representante de nueva personería.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 260, Ser. 4^a.

16. **Recusación**—Es causa de recusación en el juicio de concurso del viudo, que el padre del Juez patrocine al concursado en el juicio testamentario de la esposa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 4^a.

17. **Recusación**—Sin causa, solo procede al presentarse el primer escrito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 134, Ser. 4^a.

18. **Recusación**—El Juez recusado no puede resolver

13—Véase: verb. *Escrito*, núm. 9.

14—Véase: verb. *Agente Fiscal*, núm. 1.

16—Se dijo en el caso presente que ambos juicios estaban íntimamente ligados por razones que concurrían en ese caso determinado.

17—Siempre que con ese escrito se conteste la demanda, porque el art. 366 acuerda este derecho antes ó al tiempo de contestarla. Si no es juicio contencioso la recusación debe formularse en el primer escrito.

18—Esta resolución se funda en los arts. 52 y 53 del Cód. de Proc., y 75 de la Ley Org. de los Trib. La Cámara, decía al sentar el principio contenido en el sumario, que la recusación es un arbitrio legal para separar á un juez, del conocimiento de un asunto —art. 366 del Cód. de Proc.—Se trataba de un incidente de desacato. Admitir la recusación en este incidente mismo importaría el absurdo legal de



sobre la personería del recusante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

19. Recusación.—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4^a.

20. Recusación.—Solo procede en los casos que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 106, Ser. 4^a.

que pueda intentarse contra el respeto debido á los jueces, quienes están salvaguardados por el art. 75 de la Ley Org. Estos fundamentos son completamente fútiles, pues ni los artículos citados del Cód. de Proc. ni el de la Ley Org. facultan á un juez recusado para entender en un juicio en que ha sido recusado. Por el contrario, el art. 366 al hablar de la recusación sin causa dice, que la recusación producirá el efecto de atribuir el conocimiento del asunto al juez que corresponda en el orden del turno, y el art. 379 establece que cuando el recusado con causa fuese un Juez de 1^a Instancia elevará los autos á la Cámara. Siempre en cada una de sus disposiciones, el Cód. de Proc. separa del conocimiento de la causa al juez del litigio. La razón es obvia: no es justo, equitativo ni moral, convertir á los jueces recusados en jueces y parte en el litigio. Las recusaciones son siempre mal miradas por los jueces y por los litigantes, pues implica falta de garantías en el magistrado recusado. Es una medida odiosa para el juez porque acusa el grado de confianza que inspira su proceder. A un juez no se le recusa; á un juez que cumple con su deber no hay necesidad de recordarle que no puede entender en un pleito, pues su rectitud le señala el camino, y en el acto se escusa de conocer cuando existe una causa que lo inhiba. Aquí en la Capital es notorio, todo el mundo lo sabe que hay jueces cuyo turno es necesario dejar pasar porque la tramitación de los juicios no lleva el curso que la ley les marca, que son una rémora en la administración de justicia. Estos jueces se irritan cuando un litigante hace uso de ese derecho que la ley le acuerda. ¿Y puede ponerse en manos de tales magistrados el arma podesosa que espresa el sumario? ¿No sería más moral dejar el castigo de una falta cometida contra un juez á otra juez que conozca en el asunto? Esto es el espíritu de la ley.

19—Véase: verb. *Abogado*, núm. 12.

20.—La causal alegada fué la enemistad del abogado con el juez. Esta causal no está enumerada en el art. 368 del Cód. de Proc. y por consi-



21. Recusación—La enemistad del Juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4^a.

22. Recusación—El Juez recusado con causa tiene jurisdicción para castigar el desacato cometido en el escrito de recusación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Ser. 4^a.

23. Recusación—El prejuizamiento la hace procedente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 159, Ser. 3^a.

Referencias incidentales—Véase: *Carta*, núm. 2.

Registro—Véase. *Títulos de propiedad*, núm. 19.

1^a. Registro Civil—El denunciante de un fallecimiento que suministra datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 21, Ser. 4^a.

Registro de la propiedad—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 11—*Embargo*, núm. 8—*Inscripción*, número 1.

Registro público—Véase: *Boleto de compraventa*, número 28.

Reglamentos—Véase: *Personería*, núm. 9—*Construcciones*, núm. 1.

1^b. Regulación de honorarios—Para la regulación de honorarios. El Juzgado debe tener á la vista los expedientes que formen el litigio, aun de otros juzgados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 67, Ser. 4^a.

guiente no puede ser aceptada. Sin embargo el juez puede excusarse de entender en este caso como lo tiene establecido la Cámara en numerosas resoluciones. Véase verb. *Excusación*, núm. 2.

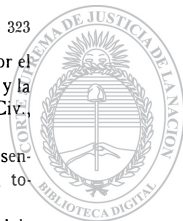
21—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.

22—Véase: verb. *Personería*, núm. 13.

23—Véase: verb. *Prejuizamiento*, núm. 4.

1^a—Véase: verb. *Fallecimiento*, núm. 5.

1^b—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 12.



2. Regulación de honorarios—Para que proceda por el Juzgado, debe existir la estimación del interesado y la conformidad ó disconformidad de las partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 388, Ser. 4ª.

3. Regulación de honorarios—La contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 377, Ser. 4ª.

4. Regulación de honorarios—La regulación judicial de honorarios comprende no solo los que constan en los escritos presentados sino también las conferencias necesarias para la presentación de los espresados escritos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 4ª.

5. Regulación de honorarios—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate son inapelables si no se hubiesen opuesto escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, página 224, Ser. 4ª.

Regulación de honorarios—Véase: *Honorarios*, núms. 1, 5, 10 y 11—*Agrimensor*, núm. 1—*Costas*, núm. 50.

Reiteración—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 6—*Acreedor hipotecario*, núm. 2—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 14.

1. Reivindicación—Justificado por títulos preexistentes que el terreno comprendido en límites determinados, ha salido del dominio público, la Municipalidad que pre-

2—Arts. 65, 67 y 70 del Apéndice al Cód. de Proc.

3—De acuerdo con la jurisprudencia sentada casi uniformemente por la Cámara de lo Civil, jurisprudencia que la hemos impugnado constantemente. Véase: verb. *Costas*, núms. 30 y 60. Ultimamente la Cámara ha vuelto sobre sus pasos reformando su jurisprudencia de acuerdo con los principios sostenidos por nosotros, suprimiendo así una de las más grandes iniquidades por ella consagrada.

4—Véase la nota al verb. *Honorarios*, núm. 15.

5—Véase el número 3.

1—Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 2.



tende reivindicar un sobrante, debe justificar su derecho por otro título que el de soberanía que las leyes le acuerdan cuando el poseedor carece de ellos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3ª.

2. Reivindicación.—La prescripción comensada contra un heredero mayor continúa sin interrupción contra los menores y puede ser opuesta con éxito en caso de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3ª.

3. Reivindicación.—La reivindicación solo procede justificada la existencia de la posesión y su pérdida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Ser. 3ª.

4. Reivindicación.—Al reivindicante corresponde la prueba de la nulidad del título que justifica la propiedad del poseedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3ª.

5. Reivindicación.—Si bien el comprador que no ha tenido la posesión, no puede ejercer derechos reivindicatorios, la acción es procedente como cesionario de los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Serie 3ª.

6. Reivindicación.—La falta de derecho para reivindicar, hace inadmisibles la acción de daños y perjuicios que la ley concede como subsidiaria.—Jur. Civ., tom. 6, página 346, Ser. 3ª.

7. Reivindicación.—Es improcedente si los herederos menores han sido debidamente representados aun cuando no existiera declaratoria á su favor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13, Ser. 4ª.

8. Reivindicación.—No procede la condenación en cos-

2—Véase: *Prescripción contra menores*, núm. 1.

4—Véase: *Nulidad de un título*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Posesión*, núm. 7.

6—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 32.

8—Véase: verb. *Costas*, núm. 34.



tas al poseedor con título vencido por resultar procedente la reivindicación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

9. Reivindicación—La de muebles, solo procede contra el poseedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 124, Ser. 4^a.

10. Reivindicación—Justificada la posesión y dominio, la acción reivindicatoria es procedente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

11. Reivindicación—El condómino carece de derecho para reivindicar del tercero detentador una parte materialmente determinada de la cosa común, sin el consentimiento de sus condóminos ó sin haberse verificado antes la división.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 210, Ser. 4^a.

12. Reivindicación—Justificada la posesión y el dominio, la acción de reivindicación es procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 290, Ser. 4^a.

13. Reivindicación—La acción de reivindicación es procedente si el título que presenta el demandado adolece de insanable nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Serie 4^a.

14. Reivindicación—Deben intervenir conjuntamente en el juicio de reivindicación el comprador y vendedor, si ambos son demandados, aun cuando el segundo inter venga también en virtud de la citación de evicción solidaria por el primero.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Serie 4^a.

9—La acción reivindicatoria es procedente cuando concurren los requisitos de los arts. 2758 y 2778 del Cód. Civ.

10—De acuerdo con lo dispuesto en los artículos citados en la nota precedente.

11—Véase: verb. *Condómino*, núm. 4.

12—Arts. 2758 y 2778 del Cód. Civ.

13—Véase: verb. *Nulidad de un título*, núm. 3.

14—Véase: verb. *Evicción*, núm. 1.



15. **Reivindicación**—Si la reivindicación se dirige contra el poseedor y el vendedor, la excepción de defecto legal es improcedente, pues la unidad de acción no permite la división del juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Serie 4^a.

16. **Reivindicación**—Para que la demanda de reivindicación haga procedente el embargo preventivo, debe ser acompañada de recaudos suficientes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 393, Ser. 4^a.

17. **Reivindicación**—Esta acción procede, si acreditado el dominio por escrituras públicas se justifica por testigos la posesión y su pérdida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120, Ser. 4.^a

18. **Reivindicación**—El propietario que por su mala ubicación toma terreno del lindero, hace procedente la reivindicación aun cuando no posea entre muros mayor extensión que la que arrojan sus títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 178, Ser. 4^a.

19. **Reivindicación**—Procede aun cuando no haya teni-

15—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 12.

16—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 36.

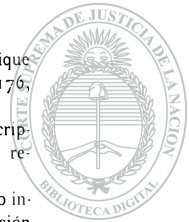
17—Art. 2758 del Cód. Civ.

19—No es necesario para la procedencia de la acción reivindicatoria que los «stremos enunciados en el art. 2758 del Cód. Civ., se hayan cumplido en la persona misma del reivindicante actual, pues basta que lo hayan sido en sus autores, de cuyos derechos y acciones puede usar en el juicio. Los arts. 2789 y 2790 del mismo Código y la fuente de que han sido tomados, constituyen una prueba evidencial de la exactitud de aquella conclusión. «Si el título del reivindicante que probase su derecho á poseer la cosa, dice el primero de dichos artículos, fuera posterior á la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda.» «Si el reivindicante, dice el art. 2790, presentase títulos de propiedad anterior á la posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la here-



do lugar la tradición si el demandado reconoce que el vendedor ha tenido la posesión. —Jur. Civ., tom. 7, página 298, Ser. 4.^a

dad que se reivindica.» El alcance de estas disposiciones está claramente marcado en Pothier, de donde han sido tomados. «Cuando el poseedor contra quien se dirige la demanda establece que su posesión es anterior al título que yo produzco para fundar mi demanda, esa reivindicación, aun cuando por lo demás él por su parte no presente título alguno, este título que yo produzco, no es por sí solo suficiente para fundar mi demanda; pero cuando el título que el reivindicante produce es anterior á la posesión ejercida por el demandado y éste por su parte no exhibe título alguno, el título que presenta el primero es suficiente para fundar la demanda. Aquel que según título ha vendido ó donado al demandante ó á su causante el inmueble que se trata de reivindicar, tiene en su favor la presunción de haber sido el poseedor y propietario, y se presume asimismo que ha transmitido la posesión y la propiedad»—núm. 324, tom. 8.^o de la publicación de Dupin.—Aubry y Rau, en su notable obra, dice: «Si el actor produce un título de propiedad y el demandado no presenta, el reivindicante debe ser considerado como habiendo suficientemente justificado su derecho, con tal que su título sea anterior á la posesión.» El doctor Llerena comentando los artículos transcriptos, dice: «Pero cuando el demandante presenta con sus títulos los de su enagenante ó los de los enagenantes anteriores á la posesión del demandado, puede entonces obrar en representación de esos enagenantes»—tom. 4.^o, pág. 426—y agrega en otro lugar: «La posesión del demandante cuando no presenta título alguno, ó cuando el presentado es anulado y aquel presenta uno que no es arguido de falso ó nulo es más ventajosa que la del mismo poseedor, ventaja que la ley ha venido á crear, únicamente fundada en una presunción—Pothier. núms. 324 y 325—presunción que la mayoría de los Códigos, incluso el Francés, no la han establecido, dejando un vacío dentro del cual discuten estensamente los jurisconsultos»—Laurent, tom. 6.^o, núm. 170.—«¿Quién debe probar la fecha en que se empezó á poseer? ó lo que es lo mismo, ¿el demandante está obligado á probar que su título es anterior á la posesión, y se supone que no lo es, si no se prueba? ¿Es el demandado quien debe probar que su posesión es anterior al título?»—Es un principio de derecho aceptado por nuestra legislación que el que posee no está obligado á producir su título á la posesión; posee porque posee. De aquí se sigue que nadie puede tur-



20. **Reivindicación**—Procede siempre que se justifique el dominio y la posesión.—Jur. Civ., tom. 8, pag. 176, Ser. 4^a.

21. **Reivindicación**—Opuesta y justificada la prescripción treintenaria, la acción reivindicatoria debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 8, pag. 309, Ser. 4^a.

22. **Reivindicación**—Para que proceda es requisito indispensable que el que acciona haya tenido la posesión del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 9, pag. 214, Ser. 4^a.

23. **Reivindicación**—Es improcedente si el demandado justifica hechos concurrentes que prueben la transmisión legal del dominio á su favor.—Jur. Civ., tom. 10, página 262, Ser. 4^a.

24. **Reivindicación**—Procede siempre que se justifica haber tenido título ó posesión anterior á la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pag. 370, Ser. 4^a.

Reivindicación—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 11 y 39—*Excepción de prescripción*, núm. 3—*Sentencia*, número 10—*Prescripción treintenaria*, núm. 5.

1. **Reivindicante**—Que ha intervenido en la formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las cos-

barle en su propiedad fundándose solo en que no tiene título á esa posesión. Pero esta presunción de propiedad solo existe á condición de que otro no presente un título verdadero, entonces la presunción de la ley cede á la realidad. De manera, que producido por el demandante un título, el demandado tendrá que defender su posesión atacando el título como nulo ó insuficiente para transmitir ó restablecer la presunción, probando que su posesión es anterior al título del reivindicante.

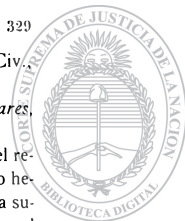
20—Véanse los núms. 10, 12, 13 y 17.

21—Véase: *Prescripción treintenaria*, núm. 5.

22—Véase: verb. *Poseción*, núm. 7.

24—Véase: verb. *Poseción*, núm. 23.

1—Véase: verb. *Costas*, núm. 36.



tas del juicio por ser evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4^a.

Relaciones comerciales—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^a. **Remanente**—El reparto que el testador haga del remanente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia, si entre los favorecidos existen estraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3^a.

Remanente —Véase: *Patrono*, núm. 1.

1^b. **Rematador**—La personería del rematador como representante del vendedor, cesa después de verificada la almoneda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

2. **Rematador**—Las estipulaciones impuestas por el rematador obligan al propietario que ordenó la venta, puesto que sus relaciones se rijan por las disposiciones del mandato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 228, Ser. 4^a.

Rematador—Véase: *Mandatario*, núm. 2 y 5.

1^c. **Remate**—El rematador que vende un inmueble por cuenta y á nombre del propietario, no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3^a.

2^a. **Remate**—Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca enajenada con pacto de retroventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Herencia*, núm. 4.

1^b—Véase: *Personería*, núm. 1.

1^c—Véase: verb. *Mandatarios*, núm. 5.

2^a—Véase: verb. *Incidente*, núm. 2.



Remate—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núm. 33.

1. **Remate judicial**—En las ventas en remate judicial procede la pérdida de la seña si el comprador consiente el apercibimiento de dársele por desistido de la compra y por perdida la suma entregada.—Jur. Civ., tom. 4, página 40, Ser. 3^a.

2. **Remate judicial**—Ejecutado el comprador en remate judicial por el precio de la compra, no procede la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 325, Ser. 3^a.

3. **Remate judicial**—La suma entregada en el acto del

1—Vendido un bien testamentario, después de algunos incidentes entre la sucesión y el comprador, este último se obligó a oblar inmediatamente el precio de compra. No habiéndose cumplido con lo prometido la sucesión pidió se intimara al comprador la oblación dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenersele por desistido de la compra y hacerse efectivo lo dispuesto en el art. 1202 del Cód. Civ., dejándose por perdida la seña. El juez proveyó de conformidad. Vencido el término sin hacerse la oblación se dejó sin efecto el remate, corriéndose traslado en cuanto a la pérdida de la seña. El comprador dijo que no debía hacerse lugar a ella, porque la cantidad entregada no había sido dada en calidad de seña sino a cuenta de precio, y por no haber estipulado las partes su pérdida por falta de cumplimiento en el contrato. Se declaró perdida la seña, porque cuando el comprador se notificó del auto en que se le mandaba oblar bajo apercibimiento de la pérdida de la seña y la rescisión del contrato, no reclamó de la resolución, consintiéndola por el contrario. Desde entonces un nuevo acuerdo de voluntades vino a estatuir esta nueva responsabilidad para el comprador, la de perder la seña si no escrituraba en el plazo acordado. Si este término venció sin que el comprador llenara su obligación, la sucesión estuvo en su perfecto derecho de pedir se hiciera efectivo el apercibimiento, declarándose perdida la seña, y el juez pudo así proveer de plano sin dar lugar a un nuevo juicio sobre lo que no era sino la consecuencia forzosa sobre la inexecución de lo convenido.

2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 7.

3—Vendido en remate público un inmueble perteneciente a una sucesión, en la suma de cien mil nacionales, se dió por el comprador en



remate judicial no puede conceptuarse como seña, sino como parte del precio entregado en garantía del cumplimiento de la operación la suma de cinco mil pesos. Intimada la oblación del precio dentro de tercero día, bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar por derecho, no se cumplió la intimación, y entonces el juez tuvo por rescindida la compra y ordenó se sacara nuevamente el inmueble á remate, siendo por cuenta del comprador la diferencia de precio, intereses y costas. El comprador se alzó de la resolución diciendo que, se sentía agraviado en cuanto se les imponía responsabilidades positivas por la disminución de precio, pues éstas no podrían de acuerdo con nuestras leyes vigentes, ir más allá de la pérdida de la suma depositada en garantía de la ejecución del contrato. El art. 516 del Cód. de Proc., resuelve sin mayores dificultades el derecho de la testamentaria vendedora. «Si por culpa del postor, dice el artículo, á quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá á un nuevo remate, en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de todo lo cual será compelido ejecutivamente á petición de parte.» Aquí se trata de una venta judicial, directamente regida en sus formalidades y en sus efectos por la ley adjetiva, cuyas disposiciones no autorizan el arrepentimiento del comprador ni su desistimiento del contrato sino en el caso único de que los títulos de la propiedad vendida tuviesen vicios insubsanables en breve tiempo. La sanción de la ley de forma por el incumplimiento del contrato es de consiguiente bien espresa. Ciertamente que en las ventas privadas el derecho autoriza la dación de una señal para asegurar el cumplimiento del contrato; pero esta señal es necesariamente el resultado de un acuerdo que puede ó no formalizarse á voluntad de las partes, y como su efecto se halla de antemano declarado por la misma ley, se explica que perdiéndola pueda dejar de cumplirse la convención. En las ventas por mandato judicial no caben convenciones de esta especie y es precisamente por ello y en la necesidad ineludible de establecer una sanción para el que resista sin causa justificada el cumplimiento de la obligación, que se ha consagrado el precepto establecido en el sumario. Es de observarse que según la ley de fondo, tanto el que dá como el que recibe la señal, puede arrepentirse de la convención debiendo, si lo fuere el segundo, devolverla con otro tanto de su valor. Esta situación en ningún caso podría producirse respecto del vendedor en las ventas decretadas por el mandato de los jueces por cuanto importaría una verdadera reserva de facultades extraña al orden y á la firmeza de



miento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3ª.

4. **Remate judicial**—El comprador en remate judicial solo tiene derecho de recusar al Juez al presentar su primer escrito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200, Ser. 3ª.

5. **Remate judicial**—El comprador en remate judicial puede recusar sin causa al Juez que conozca en el incidente sobre escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 220, Ser. 3ª.

6. **Remate judicial**—El comprador en remate judicial no puede obligar al vendedor á la bonificación de los títulos. Su derecho se circunscribe á optar por su aceptación ó por el desistimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 247, Ser. 3ª.

7. **Remate judicial**—El derecho del comprador en remate judicial que conceptúa defectuosos los títulos, se limita al desistimiento, si los vendedores se niegan á practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 93, Ser. 3ª.

8. **Remate judicial**—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial, después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 3ª.

los procedimientos judiciales. Determinaríase de esta manera, una situación de manifiesta desigualdad entre vendedor y comprador, como que este último quedaría convertido en árbitro del contrato y subordinada á su sola voluntad la realización del mismo, resultando de aquí entre otras consecuencias repugnantes á los principios de equidad y de justicia, que los anticipos exigidos por mandato judicial no lo eran en alcance de la seriedad de las ofertas sino en provecho exclusivo de los postores.

4—Véase: verb. *Recusación*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Recusación*, núm. 3.

6—Véase: verb. *Desistimiento*, núm. 2.

7—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 2.

8—Véase: *Comprador judicial*, núm. 3.



9. Remate judicial—La comisión de venta en remate judicial es de cuatro por ciento en los muebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 176, Ser. 4^a.

9—Esta comisión se cobra de conformidad con el acuerdo dictado con fecha 2 de Junio de 1860 y que dice testualmente así: «Acuerdo: En Buenos Aires, á 2 de Junio de 1860, reunidos los señores Prior don Juan Pedro Esnaola, consul primero, D. Mariano Felix Fragueiro y segundo D. Ignacio de las Carreras, disponen: Que debiendo procederse en cumplimiento del art. 123 del Cód. de Comercio, á la formación del arancel que ha de determinar la comisión que se haya de cobrar por los rematadores en las ventas públicas que celebren; el tribunal ha tomado en consideración detenidamente el proyecto presentado por la comisión misma de comerciantes y rematadores que nombró al efecto, y hallándose razonadamente fundado en la conveniencia de armonizar las prescripciones de justicia y equidad con los usos de la plaza, el tribunal, de conformidad á dicho proyecto, acuerda como arancel para rematadores públicos, lo siguiente: La comisión de ventas de todas mercaderías, frutos, ganados, bienes raíces en general, dos por ciento. La de muebles usados y objetos de ajuar doméstico, alhajas y buques, el tres por ciento. La garantía del rematador por el importe de la venta se sobreentiende siempre, á menos que espresamente no se le exonere de ella, y se retribuirá con un dos por ciento en las ventas á plazo. En las ventas al contado que el uso de la plaza hace que se satisfaga en los dos próximos sábados al día de la venta, se sobreentiende igualmente la garantía del rematador que se retribuirá con el uno por ciento. No podrá cargarse comisión de garantía por toda venta de que por la ley deba otorgarse escritura pública. Y disponiendo que se saque copia del presente acuerdo que autorizará el Secretario, mandándose que se publique por los periódicos, y firmaron, de que doy fe.—JUAN P. ESNAOLA—MARIANO FELIX FRAGUEIRO—IGNACIO DE LAS CARRERAS—Ante mí: *Guillermo G. Dumbley*, Escribano público y Secretario del Tribunal.»—El arancel para corredores es el siguiente: «En vista de lo espresado en el art. 58 del reglamento actual de la Bolsa por su Cámara Sindical, ha reproducido como su propuesta en cumplimiento del citado art. 112, y consultados los reglamentos y tarifas anteriores de la misma Bolsa, acordaban como arancel para los corredores lo siguiente: Uno por ciento por venta de mercaderías, frutos, ganados, bienes raíces, plata en barras ó en piña y buques. Dos por mil en todo descuento de obligaciones de plaza y venta de letras de cambio sobre el extranjero, fondos públicos, acciones de sociedades



10. **Remate judicial**—La comisión de dos por ciento es la que corresponde en remate judicial de bienes inmuebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 177, Ser. 4^a.

11. **Remate judicial**—En el remate judicial no basta la pérdida de la seña para rescindir el contrato; el comprador responde por las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

12. **Remate judicial**—La ley supone buena fe y justo título al comprador en remate judicial, á quien judicialmente se otorga escritura de propiedad.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 13, Ser. 4^a.

13. **Remate judicial**—Para que el comprador en remate judicial manifieste su conformidad con los títulos, no debe entregársele copia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 43, Ser. 4^a.

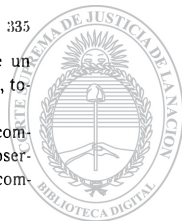
14. **Remate judicial**—Consentida la intimación de oblar anónimas, cualquier otro papel negociable y toda clase de seguro. Uno por ciento, por colocaciones de dinero en hipoteca, si el plazo excediese de seis meses inclusive, y medio por ciento si el plazo fuese menor, y dos por mil, por toda prórroga ó renovación de estas obligaciones. Un peso moneda corriente por cada onza de oro. Un medio por ciento en la venta de plata acuñada. Uno por ciento en los contratos de arriendo sobre su total importe calculado el término en su duración, pero si este término excediese de tres años, se tendrá este período como el máximo á que se limitará el pago de esta comisión. Las comisiones asignadas serán satisfechas por mitad por ambos contratantes, no mediando estipulación en contrario, según así lo dispone el mencionado art. 112. Cuando el negocio se efectuase entre dos corredores, cada uno cobrará de su comitente la mitad de la cuota asignada.» Este acuerdo lleva la misma fecha que el anterior.

10—Véase nota precedente.

11—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 3.

13—Porque el art. 521 del Cód. de Proc. determina espresamente la forma en que el comprador debe hacer uso de ese derecho. El Juez debe mandar que los títulos se pongan de manifiesto en la escribanía por tres días, dice el citado artículo.

14—Si la intimación se hace bajo apercibimiento de rescisión y eje-



el precio de la compra en remate judicial dentro de un término perentorio, procede la ejecución.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 387, Ser. 4ª.

15. Remate judicial—Objetados los títulos por el comprador en remate judicial, el Juez debe juzgar las observaciones, antes de declarar el derecho á rescindir la compra.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 87, Ser. 4ª.

16. Remate judicial—Las deficiencias de fácil subsanación en los títulos, no permiten al comprador desistir de la compra en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 258, Ser. 4ª.

17. Remate judicial—El comprador en remate judicial

cución por el precio de compra, y si no se cumple con dicha intimación, consentida la providencia, puede llevarse adelante la ejecución, pues entonces este trámite no es sino una consecuencia lógica de dicha intimación. Pero si el auto ordena la oblación bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho, no procede la ejecución una vez que se hubiese dejado de cumplir con lo ordenado, pues el apercibimiento de derecho se encuentra establecido con precisión en el art. 519 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3. La Cámara al resolver la cuestión en el sentido del sumario dijo que un auto consentido trae aparejada ejecución—art. 465, inc. 1º del Cód. de Proc.—no siendo aplicable el artículo 519 del mismo Código.

15—En el boleto se estableció que los títulos serían *à satisfacción* de los compradores, lo que hace aplicable la disposición de los artículos 1365 y 1377 del Cód. Civ.

16—Art. 522 del Cód. de Proc. Las deficiencias apuntadas consistieron en las diferencias que se decía existir entre las partidas de nacimiento de algunos herederos, la declaratoria de herederos y el poder para representarlos, como asimismo en la diferencia con que el causante aparecía firmando varios actos, figurando unas veces con el nombre de Juan y otras con el nombre de Juan B. Estas diferencias, según la Cámara, en ningún caso pueden constituir vicios no subsanables en breve tiempo.

17—El art. 1202, es estraño á las ventas judiciales, por cuanto aquel artículo rije única y exclusivamente para las convenciones privadas que las partes contratantes celebren de acuerdo con las leyes de fondo. La



no puede ampararse de la disposición del art. 1202 del Cód. Civ. que permite el desistimiento perdiendo la seña entregada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 4^a.

18. **Remate judicial**—Sin la conformidad del comprador en remate judicial, no se puede disponer del precio oblado antes de la escrituración, los fondos estraidos indebidamente de un depósito judicial deben ser reintegrados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 348, Ser. 4^a.

19. **Remate judicial**—Convenida con el comprador en remate judicial, la subsanación de los defectos del título, no procede el desistimiento de la compra, sin previa fijación de un término para llevarla á cabo bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 355, Ser. 4^a.

20. **Remate judicial**—La suspensión de pagos del esta-

compra judicial cae bajo el imperio de la ley de forma, distinta en sus efectos y en su sanción, de aquellos—art. 519 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3.

18—Véase: verb. *Depósito judicial*, núm. 1, en cuya nota espresamos el alcance que debe dársele á la resolución.

19—En el convenio celebrado para la subsanación de los defectos, no se señaló plazo dentro del cual debían estos subsanarse. En esta situación, si bien el comprador no puede esperar indefinidamente el cumplimiento del convenio, su derecho se circunscribe á pedir que el juez de la causa fije un término para la subsanación, bajo apercibimiento de hacerse efectivo lo dispuesto por el art. 522 del Cód. de Procedimientos.

20—Verificada una compra el adquirente manifestó que no podía oblar el precio, porque el dinero que tenía destinado al pago lo había depositado en el Banco de la Provincia, del que no podía exigir el pago del depósito, en virtud de razones que eran de pública notoriedad. Cuando se hizo la adquisición no se hizo presente que el precio se abonaría con tales ó cuales fondos, y por lo tanto no podía después eludir el cumplimiento de la obligación alegando que el dinero que tenía depositado en el Banco de la Provincia era el destinado para aquel fin, pues es el caso de la aplicación del art. 604. Cód. Civ., extensivo á las obligaciones de dar una suma de dinero, en virtud de lo dispuesto en el ar-



blecimiento bancario en que el comprador en remate judicial tenía sus fondos, no es motivo para dejar sin efecto la venta.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 4ª.

21. **Remate judicial**—En las ventas en remate judicial, no procede la rescisión del contrato con la pérdida de la seña entregada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 68, Ser. 4ª.

22. **Remate judicial**—El retardo en la escrituración de un bien comprado en remate judicial; no puede fundar el desistimiento si la mora es imputable al comprador.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 377, Ser. 4ª.

23. **Remate judicial**—El error sobre el nombre de la calle en que está ubicado el bien rematado judicialmente, no es causal de la nulidad del acto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4ª.

24. **Remate judicial**—No procede la rescisión de la venta

título 416 del mismo Código. Aun suponiendo que el comprador pudiera alegar en su favor el caso fortuito, el que nos ocupa no tiene el carácter de tal, pues el Cód. Civ. al definirlo en el art. 514 ha dicho que es caso fortuito el que no ha podido preverse ó que previsto no ha podido evitarse, y es evidente que la suspensión de pagos de un establecimiento bancario es susceptible de preverse, pues está en el orden natural de los negocios espuestos tanto á un feliz como á un mal resultado. Por otra parte, es de notarse que los depósitos no se han extinguido sino que han sufrido una depreciación, y aun descontada esta pérdida resultaba que tenía el comprador un excedente sobre la cantidad que necesitaba para el pago de la compra que hizo.

21.—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase el núm. 3.

22.—Véase: verb *Desistimiento*, núm. 6.

23.—Se hizo consistir el defecto apuntado, en que el terreno vendido se decía en los avisos, estar ubicado en la calle Las Flores, mientras que los títulos ubicaban el terreno en la calle Anchorena. Se dijo que la calle era siempre la misma, pues solo se le había cambiado el nombre. Si esto era exacto, no había pues error en el nombre, siendo en ambos casos las calles la misma, lo que podía comprobarse con un informe de la Municipalidad.

24.—El defecto se hizo consistir en el error del nombre de la calle, como



en remate judicial si los defectos del título en que se funda son de fácil subsanación. —Jur. Civ., tom. 8, página 187, Ser. 4^a.

25. **Remate judicial** — La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justifique que la publicación se ha hecho por un término mayor, aunque en otros diarios. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4^a.

26. **Remate judicial** — Si el comprador persiste en el cumplimiento del contrato de compraventa en remate judicial, aun reconocida la imposibilidad de la escrituración en breve término, no procede la resolución del contrato. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 414, Ser. 4^a.

27. **Remate judicial** — Suspendido sin culpa del martillese espresa en el número precedente; siendo ese error fácilmente subsanable como se ha visto.

25 — El juez había designado «La Nación», donde no se publicaron los edictos por todo el término de ley, pero la publicación se hizo por todo ese término en el «Boletín Judicial» y «El Nacional». El Camarista Dr. Bustos, dijo: «no lo conceptúo aceptable porque si bien es exacto que no se han publicado los avisos por el término requerido, esa publicación se ha efectuado por treinta días en el «Boletín Judicial» con arreglo á lo dispuesto en el art. 323 de la Ley Org. de los Tribunales. La publicación se ha hecho además por igual término en el diario «El Nacional», de manera que sin contar la de «La Nación» y «La Prensa», la finca ha estado en almoneda mayor término del exigido por la ley. El Dr. Gimenez aceptó estas consideraciones y dijo, que el remate era válido no obstante los defectos apuntados, como ser que el precio obtenido excedía en mucho al del fijado en la tasación, y que todos los interesados en la testamentaria solicitaron la aprobación del acto, que no había objeto en declararlo nulo, puesto que según el resultado obtenido, el mandato se había llevado á cabo llenándose de una manera satisfactoria los propósitos de la ley. Véase: verb. *Edictos*, núm. 5.

26 — Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 22.

27 — Véase: verb. *Comisión*, núm. 7 y *Martillero*, núm. 2.



ro, el juez debe fijar una comisión equitativa. ---Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4^a.

28. **Remate judicial**—Los bienes de menores deben ser vendidos en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 231, Ser. 4^a.

29. **Remate judicial**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos de remate judicial por menos días que los fijados por el juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada la posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

30. **Remate judicial**—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4^a.

31. **Remate judicial**—El martillero tiene derecho al cobro de media comisión si el remate judicial se suspende á petición de partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Serie 4^a.

32. **Remate judicial**—El comprador en remate judicial solo puede observar los títulos dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 90, Ser. 4^a.

33. **Remate judicial**—El desistimiento de compras hechas en remate judicial, solo es pertinente cuando los tí-

28—Véase: verb. *Bienes de menores*, núm. 5.

29—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.

30—Véase: *Nulidad de un remate judicial*, núm. 2.

31—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara. Véase: verb. *Martillero*, núm. 2.

32—Que es de tres días desde que han sido puestos de manifiesto en la oficina.—art. 521 del Cód. de Proc.

33—Art. 522 del Cód. de Proc.



tilos adolezcan de algún vicio insubsanable en breve tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 293, Ser. 4^a.

34. **Remate judicial**—Al comprador que desiste de las objeciones hechas á los títulos corresponde el pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 4^a.

Remate judicial—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 23 y 56—*Desistimiento*, núm. 2—*Acreedor hipotecario*, número 1—*Condominio*, núm. 7—*Socios*, núm. 1—*Tercería*, núm. 3—*Bienes de la sucesión*, núm. 2.

1^a. **Remate público**—El anuncio en venta del inmueble y aun el remate público, no es prueba de tener la posesión material de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4^a.

1^b. **Remisión de una deuda**—La remisión de una deuda es un derecho adquirido desde la fecha en que tuvo lugar, y en consecuencia las leyes que puedan modificar ese hecho no tienen efecto retroactivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

2. **Remisión de una deuda**—La remisión de una deuda antes de la ley de correcciones al Código Civil, no importaba donación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

Remoción—Véase: *Bienes de la esposa*, núm. 1.

Remuneración—Véase: *Habilitado*, núm. 1—*Servicios*, núm. 11.

1. **Remuneración profesional**—Para la facción de planos y presupuestos para obras públicas, mientras no se justifique orden expresa, se supone subordinada á la realización de la obra.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4^a.

1^a. **Rendición de cuentas**—No procede la acción ejecu-

1^a—Véase: verb. *Posesión material*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Efecto retroactivo*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Donación*, núm. 2.

1^c—Véase: verb. *Acción ejecutiva*, núm. 1.



tiva contra el administrador de la testamentaria, sin previo juicio de rendición de cuentas. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 3ª.

2. **Rendición de cuentas**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3ª.

3. **Rendición de cuentas**—El albacea está obligado a rendir cuenta de su administración, y debe ser condenado en las costas del juicio si judicialmente debe exigírsele dicha rendición. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 3ª.

4. **Rendición de cuentas**—Aun cuando el mandatario reconozca su obligación de rendir cuentas, debe ser condenado en las costas si no lo verifica inmediatamente de exigírsele. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

5. **Rendición de cuentas**—El mandatario está obligado a rendir cuenta del mandato dentro del término que discrecionalmente fije el Juzgado. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

6. **Rendición de cuentas**—La rendición de cuentas presentada por el mandatario y no observada por el mandante importa su aprobación ó conformidad. — Jur. Civ., tom. 4, pág. 120, Ser. 3ª.

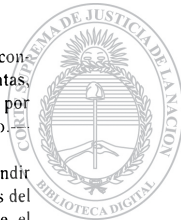
2—El marido no era el dueño del pleito, sino parte como representante legal de su pupilo, no siendo en este caso de aplicación el art. 188 del Cód. de Proc. Cuando el artículo citado habla de *parte*, se refiere al dueño del pleito, no al que tiene intervención por un derecho que no es propio, personal de él.

3—Véase: verb. *Albacea*, núm. 3.

4—Véase: verb. *Costas*, núm. 14.

5—Se trata de una obligación sin plazo determinado por la ley, y por consiguiente su fijación corresponde al juez con arreglo á su criterio.

6—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 7.



7. **Rendición de cuentas**— La acción de los menores contra el curador se circunscribe á la rendición de cuentas, sin que en ningún caso puedan ejercer acción directa por las sumas que justifiquen que aquél hubiera recibido.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

8. **Rendición de cuentas**— El tutor está obligado á rendir cuenta documentada de la administración de los bienes del pupilo y en caso de no verificarlo, debe abonar á éste el saldo dentro de la suma que para el juramento estimatorio fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 54, Ser. 3ª.

9. **Rendición de cuentas**— El mandante ó sus sucesores legales no pueden ser condenados en las costas del juicio seguido contra el mandatario sobre rendición de cuentas, mientras no se justifique que habían sido rendidas y aprobadas con anterioridad al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 124, Ser. 3ª.

10. **Rendición de cuentas**— El mandatario está obligado á presentar á su mandante la rendición de cuentas de su administración en tanto no justifique haberlo verificado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 293, Ser. 3ª.

11. **Rendición de cuentas**— El poder especial para el

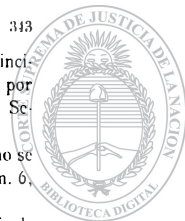
7—La rendición de cuentas establece el saldo deudor ó acreedor. El mero hecho de haber el mandatario recibido una suma en su carácter de tal, no implica su condición de deudor, porque el mandatario se ve casi siempre obligado á hacer desembolsos en virtud del mandato, y así como recibe sumas de dinero también las puede emplear, resultando entonces que lo recibido por él no se lo debe al mandatario, pues se compensaría una partida con otra. La liquidación de cuentas es la única forma de saber si se debe ó nó.

8—Debe rendir cuenta justificada, dice el art. 460 del Cód. Civ., y en cuanto al juramento estimatorio lo preceptúa expresamente el artículo 461.

9— Véase: verb. *Costas*, núm. 21.

10— Véase: verb. *Mandatario*, núm. 9.

11—Véase: verb. *Poder especial*, núm. 1.



arreglo y liquidación de una testamentaria y sus incidentes, no es bastante para demandar á un tercero por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68. Serie 3ª.

12. Rendición de cuentas—No procede en tanto no se justifique la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 199, Ser. 3ª.

13. Rendición de cuentas—Reconocida la existencia de participación en las utilidades de un negocio determinado, el que lo llevó á cabo debe rendir cuenta de la negociación aun cuando no exista contrato de sociedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 240, Ser. 3ª.

14. Rendición de cuentas—No observada parcialmente, y cuya oposición general no se comprueba, debe ser aprobada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 358. Serie 3ª.

15. Rendición de cuentas—El albacea debe depositar el saldo que reconozca adeudar en la rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4ª.

16. Rendición de cuentas—El mandatario debe al man-

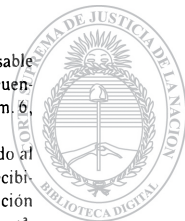
12—Véase: verb. *Mandato*, núm. 8.

13—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

14—El demandado no impugnó las cuentas en una forma precisa; no afirmó que su mandatario hubiese recibido mayor cantidad de la que resultaba de la rendición de cuentas, ni tampoco desconoció las entregas que éste le había hecho en diversas fechas y formas. El mandante se limitó á pedir que se abriera la causa á prueba, pero sin desconocer ni objetar el debe y el haber de la cuenta. Ese silencio ó esa actitud evasiva, debe considerarse como un reconocimiento de la verdad de las partidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 100, inc. 1º del Cód. de Proc., salvo que se produzca una prueba contraria y bastante para destruir esa presunción de la ley.

15—Véase: verb. *Albacea*, núm. 6.

16—El mandante se presentó pidiendo que se le rindiera cuenta de la suma de seis mil pesos en que el mandatario había vendido una de sus



dante cuenta justificada del mandato y es responsable de aquellas partidas que objetadas en la rendición de cuentas no fueren debidamente justificadas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4ª.

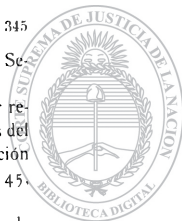
17. Rendición de cuentas—Vencido el término fijado al albacea para la rendición de cuentas de los fondos recibidos sin que lo haya verificado, procede la condenación al pago con costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 25, Ser. 4ª.

18. Rendición de cuentas—El mandatario está obligado á rendir cuenta al mandante de los papeles de crédito entregados para su cobro, en caso de no verificarlo, deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados pero no su valor íntegro en tanto no se justifique plenamente

propiedades. El demandado pidió el rechazo de la demanda alegando que él no recibió esa suma sino cuatro mil quinientos, de cuya inversión presentó su cuenta. El demandado además negó que el mandato se hubiese constituido tan solo para firmar la escritura de venta y para que percibiese el precio. La escritura se limitaba á establecer cuál fué ese precio. De la escritura de enajenación resultaba que el precio fué de seis mil pesos; confiesa el mandatario haber recibido en el acto de la escrituración dos mil quinientos, y tres mil quinientos antes del acto. Pero el mandatario pretendía que ese precio era simulado y que solo fué de cuatro mil quinientos. Esta afirmación debía él probarla, porque se trataba de un hecho nuevo aducido en juicio cuya prueba incumbe al que lo establece; no la comprobó y por el contrario el contenido de la escritura est blecía en una forma fehaciente todo lo contrario, no solo para las partes que en ella intervinieron sino también para los terceros—arts. 994 y 995 del Cód. Civ. —Habiendo sido mandatario el demandado y habiéndose comprobado la suma recibida en virtud del mandato, la obligación de dar cuenta de los fondos recibidos era evidente—art. 1909.

17—Iniciada la demanda de rendición de cuentas, el juez señaló el término de quince días; no habiendo cumplido, le señaló seis días más bajo apercibimiento; vencido también este plazo fué condenado á abonar lo pedido en la demanda, haciendo de esa manera efectivo el apercibimiento decretado.

18—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85.



que recibió su importe.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Serie 4^a.

19. **Rendición de cuentas**—Si el mandante se da por recibido del precio de la cosa objeto del contrato antes del otorgamiento del mandato, no puede exigir la rendición de cuentas del mandatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4^a.

20. **Rendición de cuentas**—Ordenada la rendición de cuentas por sentencia ejecutoriada, no procede la formación de incidentes para cada operación, deben rendirse conjuntamente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 380, Ser. 4^a.

21. **Rendición de cuentas**—El mandatario debe rendir cuenta al mandante de las sumas que confiese haber recibido y en el término que fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 385, Ser. 4^a.

22. **Rendición de cuentas**—El mandante tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4^a.

23. **Rendición de cuentas**—El tutor puede durante el ejercicio de la tutela presentar rendición de cuentas por períodos determinados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 28, Serie 4^a.

24. **Rendición de cuentas**—El poder especial para liquidar una testamentaria con facultad de demandar á terceros, basta para exigir la rendición de cuentas á los que en ella han intervenido con anterioridad.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 33, Ser. 4^a.

25. **Rendición de cuentas**—En este juicio debe nombrarse tutor especial del menor que tenga interés como heredero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 143, Ser. 4^a.

22—Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

24—Véase: verb. *Poder especial*, núm. 7.



26. **Rendición de cuentas**—La acción de rendición de cuentas como personal se prescribe por el término de veinte años.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 180, Ser. 4ª.

27. **Rendición de cuentas**—El reconocimiento de la obligación de rendir cuentas hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 83, Ser. 4ª.

28. **Rendición de cuentas**—Debe rechazarse la acción de rendición de cuentas contra el mandatario si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que investía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 125, Ser. 4ª.

29. **Rendición de cuentas**—Debe aprobarse la rendición de cuentas de la tutela después de discutidas y resueltas las observaciones opuestas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

30. **Rendición de cuentas**—El legatario de parte alicuota puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4ª.

Rendición de cuentas Véase: *Costas*, núm. 6—*Condóminio*, núm. 1—*Excepción de defecto legal*, núm. 7—*Poder*, núm. 4—*Tutor*, núms. 5 y 12.

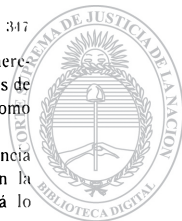
1. **Rentas**—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas, aumentan el haber del heredero encargado de ese pago y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender se dividan las rentas por partes iguales sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

27—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 47.

28—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 17.

30—Véase: verb. *Bienes de menores*, núm. 4.

1—Véase verb. *Condómino*, núm. 3.



2^a. **Rentas**—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó rentas de los bienes de la sucesión mientras dure la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4^a.

1^a. **Renuncia**—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición extrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 188, Ser. 3^a.

2. **Renuncia**—A la tutela legítima, puede ser retractada.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Renuncia—Véase: *Fianza*, núm. 4 — *Apoderado*, núm. 2 — *Notificación*, núm. 1 — *Derechos hereditarios*, núm. 4 — *Contrato por escritura pública*, núm. 1 — *Arbitro*, núm. 1.

1^b. **Renuncia tácita**—El conocimiento por parte del comprador, antes de la adquisición, de los vicios de que adolecía el contrato, importa una renuncia tácita á la evicción fundada en los mismos.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 21, Ser. 3^a.

2^b. **Renuncia tácita**—El pago al contado de una obligación á plazo, no permite la repetición contra el acreedor por la diferencia ó descuento, pues se supone la renuncia tácita del derecho acordado.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 392, Ser. 4^a.

Reparto—Véase: *Herencia*, núms. 4 y 5.

1^a. **Repetición**—Para que proceda la repetición por el pago verificado dos veces indebidamente, es necesario

2^a—Véase: verb. *Bienes de la herencia*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

1^b—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

2^b—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^c Arts. 773, 774, 778 y 792 del Cód. Civ.



justificar que no existían otras causas que las que motivaron uno de los pagos; si resulta que existían otras a las que pudo ser imputado, la repetición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 345, Ser. 3^a.

Repetición—Véase: *Prelación*, núm. 1.

1^a. **Representación**—Demandada la sociedad, no procede la intervención individual de los socios, la representación debe ser conjunta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 37, Ser. 4^a.

1^b. **Representante**—Aun cuando el procurador pueda individualizar las defensas, si son varios los demandados, deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3^a.

2. **Representante**—La intimación al cumplimiento de una obligación de hacer, hecha al apoderado ó representante, es legal y válida aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4^a.

Representante—Véase: *Apoderado único*, núm. 3—*Apoderado*, núm. 3—*Personería*, núms. 1, 10 y 12—*Herederos*, núm. 2—*Actos judiciales*, núm. 1—*Recusación*, número 12—*Damnificado*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 5—*Posiciones*, núms. 36 y 37—*Curadora*, núm. 1—*Indivisión*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 6—*Seña*, núm. 8—*Poder*, núm. 2.

Requisito esencial—Véase: *Escritura de venta*, núm. 1—*Testamento*, núm. 3.

Rescisión—Véase: *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

1^a—Según el art. 1711 del Cód. Civ. los socios individualmente considerados se reputan terceros respecto de la sociedad cuando no derivasen sus relaciones de su calidad de socios ó de administradores de la sociedad. Un tercero no puede tener la representación de la sociedad sino en virtud de mandato.

1^b—Véase: verb. *Demandados*, núm. 1.

2—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 13.



—*Contrato de compraventa*, núms. 2 y 3—*Contrato*, números 4, 10 y 14—*Compraventa*, núms. 1 y 10—*Contrato bilateral*, núm. 6—*Confesión*, núm. 1—*Contrato rescindido*, núms. 1 y 2—*Remate judicial*, núms. 7, 20, 21, 24 y 26—*Consignación*, núm. 1—*Pacto comisorio*, núms. 3, 4 y 7—*Locación*, núm. 7—*Contrato de arrendamiento*, núms. 21, 22 y 23—*Contrato por escritura pública*, número 1—*Boleto de compraventa*, núms. 20 y 23—*Locación*, núm. 4—*Contrato de arrendamiento*, núms. 23, 24, 29 y 30—*Daños y perjuicios*, núms. 95 y 108.

Residencia—Véase: *Juicio sucesorio*, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núms. 1 y siguientes—*Testigo*, núms. 2 y 4—*Arraigo*, núm. 2.

Resolución—Véase: *Recurso de reposición*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núms. 2 y 5—*Acción criminal*, núm. 1—*Cámara*, núm. 1—*Herencias transversales*, núm. 1, 2 y 3—*Acciones civiles*, núm. 1—*Disenso*, núm. 1—*Ejecutoria*, núm. 1—*Inapelable*, núm. 8—*Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 25—*Derechos hereditarios*, núm. 5—*Contratos*, núm. 3—*Pacto comisorio*, núms. 5 y 6—*Cámara*, núm. 2.

1^a. **Resolución interlocutoria**—La Cámara puede anular la resolución interlocutoria dictada en un recurso si se ha omitido sin culpa de la parte el informe *in voce* solicitado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 207, Ser. 4^a.

1^b. **Resoluciones municipales**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen a un juicio contencioso-administrativo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Informe in voce*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 1.



Resoluciones municipales —Véase: *Demolición*, núm. 1.
Recurso de apelación, núm. 1.

Responsabilidad Véase: *Fiador*, núm. 3.

Responsabilidad civil—Véase: *Acto ilícito*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 23— *Culpa ó negligencia*, núm. 1.
Funcionarios públicos, núm. 5.

Restos humanos —Véase: *Jurisdicción incompetente*, número 1. —*Jurisdicción por cantidad*, núm. 1.

1°. **Retención** —De mercaderías, la retención de mercaderías por orden de autoridad competente, no puede fundar una acción por daños y perjuicios procedentes de la falta de entrega.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 3ª.

2. **Retención** —Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas reconocido el derecho de retención en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 140, Ser. 4ª.

Retención —Véase: *Excepción de pago parcial*, núm. 1.
—Escribano, núm. 1.

Retractación —Véase: *Embargo preventivo*, núm. 8.

1^b. **Retrotraer** —El plazo estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3ª.

Retrotraer— Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 2.

1°. **Retroventa**—El pacto de retroventa contenido en la escritura de venta puede ser modificado por instrumento privado probada su autenticidad, ó por los hechos de

1ª—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 40.

2—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1^b—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

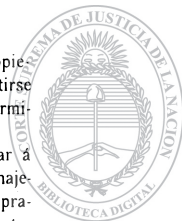
1^c—Véase: *Pacto de retroventa*, núm. 2.



las partes posteriores al vencimiento, que demuestren la voluntad de que aquel quede sin efecto. —Jur. Civ., tomo 5, pág. 55. Ser. 4^a.

2. **Retroventa**.—Siendo un término fatal el que la ley

2.—Fué un hecho constatado que el vendedor dejó trascurrir el plazo sin ejercitar el derecho que le acordaba el acto jurídico, quedando en su mérito el comprador propietario irrevocable del inmueble, en conformidad al texto de nuestra ley vigente —art. 1382, Cód. Civ.—Pero es el caso entretanto que la retroventa fué estendida como garantía de la cuenta corriente que existía entre el comprador y vendedor, lo que importa que hasta tanto ésta no se determinara y liquidara, de conformidad de partes ó por decisión judicial, los derechos y obligaciones emergentes de la misma no podían legítimamente ejercitarse. Se reconoció esta particularidad del contrato, aunque no en los términos declarados por el vendedor por cuanto quejó convenido, decía el actor, que la cuenta corriente se liquidaría hasta el vencimiento del plazo fijado de común acuerdo. Ocurren entretanto, observaciones de diverso orden que favorecen la situación de derecho del comprador, y que dan por resultado que la fecha de la escritura debe considerarse firme. En efecto. Si el término para recuperar la cosa, no era en realidad el establecido en la escritura pública, tendríamos que habría en ella una enunciación falsa, falsedad que no había sido entretanto alegada por el vendedor y la que sería ineludible declarar previamente para despojar al acto de su firmeza jurídica y á sus convenciones de la fe que les dá la ley. La retroventa tiene una duración limitada, no puede exceder de tres años, como lo previene el art. 1381 del Cód. Civ. ya citado. Ahora bien, según la inteligencia que el vendedor daba á la convención, á la que estaba subordinada la obligación accesorio, no existiría en realidad plazo ó sería indefinido. Una retroventa en estas condiciones no se halla autorizada por nuestra legislación ni por la doctrina en que manifiestamente se ha inspirado. No debe suponerse, exhibiéndose convenciones lícitas, que las partes que en ellas intervienen han tenido el propósito de violar la ley, como no puede suponerse que ignoren sus preceptos, ignorancia que de otro lado no les serviría de excusa. Las salvedades del vendedor tuvieron además en alcance de su exactitud y verdad, un antecedente de indubitable importancia en las propias declaraciones producidas por su adversario, en una carta agregada y operaciones de finiquito de que instruí su contenido. —Me declaro conforme, dice en ella, con su cuenta corriente de fecha 27 de Mayo de 1888, que arroja un saldo á su favor de pesos 9797.90.» Por el saldo



fija para hacer uso del derecho de recuperar la propiedad vendida con pacto del retroventa, no puede admitirse en derecho la existencia y validez de un plazo indeterminado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 4.^a

3. **Retroventa**— Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca enajenada con pacto de retroventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente.—Jur. Civ. tomo 10, pág. 110, Ser. 4.^a.

Retroventa—Véase: *Venta*, núm. 5—*Propiedad*, número 2.

1. **Revocación**—Para que proceda la revocación de los actos á título oneroso, llevados á efecto por el marido con perjuicio de los intereses de la esposa, es requisito indispensable justificar la complicidad del tercer poseedor, no basta probar la simulación de las primeras enajenaciones ni aún el conocimiento que del fraude tenían

susodicho, agrega, «más 735.10 pesos por intereses hasta el 23 de Noviembre de 1888, renuevo el pacto de retroventa.» En presencia de esta carta y demás elementos de que se hizo mérito en autos pudo decirse, con exacto criterio que al vencimiento del plazo señalado en la escritura de venta, estaba ya liquidada la cuenta corriente. Las operaciones comerciales que con ulterioridad á dicho término hayan realizado demandante y demandado, la continuación misma de relaciones de «debe y haber» entre ellos, no impedian ciertamente la adquisición del derecho subordinado al vencimiento de la retroventa, pues para llegar á ese resultado habría sido ineludible probar la existencia de acuerdos comunes sobre prórroga del contrato, posteriores al vencimiento, comprobación que no se produjo en el juicio.—No había sobre este extremo adminículos bastantes en autos.—Una carta exhibida en autos no puede considerarse como elemento decisivo, pues espresar al demandado el deseo de que vuelva á ser propietario de la casa es significarle que ha perdido ese carácter, pero en manera alguna acordarle prórroga, que era el punto conducente al derecho del apelante.

3—Véase: verb. *Incidente*, núm. 2.

los anteriores adquirentes.—Jur. Civ. tom. 1º, pág. 53.
Ser. 3ª.

Revocación—Véase: *Costas*, núm. 2—*Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2—*Venia*, núm. 4—*Acto simulado*, núm. 1—*Simulación*, núm. 14—*Mandato*, núm. 13.

Revocatoria—Véase: *Término*, núm. 1—*Recurso de reposición*, núms. 1 y 2.

Ribera—Véase: *Aluvión*, núms. 1, 2 y 3..

Ríos navegables—Véase: *Aluvión*, núm. 2.

Ropas de uso—Véase: *Alhajas*, núm. 1.





Sacrilegio—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

Saldo—Véase: *Albacea*, núm. 6—*Intereses*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Locación de sesrvicios*, número 3—*Prenda*, núm. 8—*Cuenta corriente*, núm. 2.

Secretaria—Véase: *Escribano*, núm. 2.

Secretario—Véase: *Notificación*, núm. 2—*Espedientes*, núm. 2—*Desacato*, núm. 2—*Escrito*, núms. 3, 4 y 5—*Documento*, núm. 5.

Secta protestante—Véase: *Esposos*, núm. 1—*Matrimonio*, núm. 1.

Segunda instancia—Véase: *Prescripción en 2ª instancia*, núm. 1—*Herencias transversales*, núms. 1, 2 y 3.

1. **Sello**—El contrato de locación en que se estipula que las mejoras quedan á favor del locador, debe estenderse en el sello que la ley fija para el valor de las mejoras y no por el precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 67, Ser. 4ª.

2. **Sello**—La cesión de derechos por un precio determinado, solo debe abonar el correspondiente al precio.

1—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 17.

2—La cesión no importa una obligación sujeta á plazos, sino simplemente la transmisión de un derecho sobre un crédito que ha sido efectuada por precio determinado y sobre el cual, con arreglo á la escala



y por omisión, la multa respectiva.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 34, Ser. 4^a.

1.^a Sellos—El recibo de descargo, cualquiera que sea el valor ó documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la Ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 70, Ser. 4^a.

2. Sellos—A la transacción por cantidad indeterminada, debe agregársele un sello de diez pesos por cada foja.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 30, Ser. 4^a.

3. Sellos—El impuesto de sellos debe pagarse por el total de los bienes, aun cuando estén situados fuera de la República. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 4^a.

4. Sellos.—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 38, Ser. 4^a.

Sellos—Véase: *Poseción judicial*, núm. 1 —*Prueba*, número 8 —*Cuenta corriente*, núm. 1.

Semovientes—Véase: *Venta*, núm. 6.

1. Sentencia—La relación y esposición de los antecedentes de la sentencia, no son indispensables, tratándose de incidentes, siempre que para evitar repeticiones

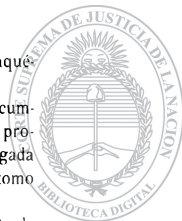
de valores que contiene el art. 1º de la Ley de sellos de 1891, ha debido computarse el sello que á dicho documento corresponde; desde luego se hace inaplicable al caso la disposición que menciona la tercera parte del art. 2º de la misma ley, pues ella únicamente puede referirse á las obligaciones, que aunque por su naturaleza se prestan á ser cumplidas dentro de un plazo, no lo tienen, como puede dar lugar á ello un pagaré, una letra de cambio, etc.

1^a—Véase: verb. *Estampilla*, núm. 2.

2—De acuerdo con lo establecido en la parte final art. 2º de la Ley de sellos de 1891.

3—Véase: verb. *Impuesto*, núm. 3.

4—Véase: verb. *Cuenta corriente*, núm. 2.



se haga referencia á un escrito determinado en que aquellas existan. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 422. Ser. 3^a.

2. **Sentencia**—La sentencia obligando al esposo al cumplimiento del contrato de arrendamiento de bienes propios de la esposa, declarado nulo, no hace cosa juzgada para ésta, que no fué parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 239. Ser. 3^a.

3. **Sentencia**—La prueba preconstituida ó constante de instrumentos públicos de fecha anterior á la demanda, permite á los jueces fundar su sentencia, aun cuando durante el término no se haya producido prueba para justificar la acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 434. Ser. 3^a.

4. **Sentencia**—El Juzgado, aun cuando haya dictado sentencia, no se desprende de su jurisdicción y puede dictar medidas preventivas ó conservatorias.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 4^a.

5. **Sentencia**—Los jueces están obligados á dictar sentencia sobre el punto materia del litigio, cualquiera que sea la forma que haya adoptado la defensa.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 371. Ser. 4^a.

6. **Sentencia**—La parte dispositiva de la sentencia que deja á salvo derechos á deducir en otro juicio, no causa agravio á ninguno de los que han intervenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117. Ser. 4^a.

7. **Sentencia**—En toda acción tendente al cumplimiento de la sentencia, debe conocer el juez que la dictó.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 55. Ser. 4^a.

2—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 1.

3—Véase: *Prueba preconstituida*, núm. 1.

4—Última parte del art. 222 del Cód. de Proc.

6—La salvedad hecha por los jueces inferiores no puede causar agravio, desde que la parte á cuyo favor se hace, podría con ó sin ella ejercitar siempre su derecho.



8. **Sentencia**.—Las defensas opuestas con posterioridad á la contestación de la demanda, no deben ser tenidas en cuenta al dictar sentencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 172. Ser. 4^a.

9. **Sentencia**.—La providencia de autos para sentencia en las cuestiones de puro derecho, solo pueden dictarse después del doble traslado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 391. Ser. 4^a.

10. **Sentencia**.—Recaída en el juicio de interdicto de recobrar, no hace cosa juzgada ni forma prueba en el petitório ó de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120. Ser. 4^a.

8.—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc.

9.—Art. 103 del Cód. de Proc.

10.—Es constante en jurisprudencia. Los juicios sobre interdicto son por su naturaleza breves y sumarios, como lo indica su propio nombre y el objeto mismo á que se dirijen. Son propiamente un recurso extraordinario autorizado por la ley desde el derecho de los romanos, para fijar la persona del poseedor y evitar los disturbios que produciría la inclinación que tienen los hombres de hacerse justicia por sí mismos en materia de posesión. Por razón de las ventajas que esta produce en los litigios sobre la propiedad, como lo dice Escriche, de acuerdo con la doctrina aceptada siempre en derecho. Se comprende por lo mismo, cómo las sentencias que se pronuncian en estos juicios tienen tan solo el carácter de interlocutorias ó de providencias interinas, en cuanto deciden el hecho de la posesión actual ó momentánea que corresponde, ó debe gozar el que la pide, y porque se sustentan brevemente sin los trámites y las solemnidades del juicio ordinario, librándose al pleuario ó petitório las cuestiones relativas á la propiedad. Son, pues, dos juicios de naturaleza muy distinta el posesorio y el petitório, por tratarse en el primero tan solo de la posesión actual que corresponde á una de las partes y en el segundo de la acción real ó derecho de propiedad que tiene el que reclama como suyo el inmueble poseído por otro, estando este juicio espresamente autorizado por la ley civil,—arts. 2482 y 2484— en favor de quien fuese vencido en el primero, es lógico que no le perjudique la resolución pronunciada en ese juicio ni produzca la autoridad de cosa juzgada por no tratarse de la misma cosa como no la produce



11. **Sentencia**—Que manda reducir á escritura pública el boleto de compraventa, solo importa su protocolización en el Registro Público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 4ª.

12. **Sentencia**—La liquidación como consecuencia, debe ser practicada por contador público.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 115, Ser. 4ª.

13. **Sentencia**—Solo pueden liquidarse intereses sobre la cantidad adeudada si la sentencia espresamente lo determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 242, Ser. 4ª.

14. **Sentencia**—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial, debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4ª.

15. **Sentencia**—La intimación al cumplimiento de la obligación de hacer, hecha al apoderado ó representante, es legal y válida, aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4ª.

Sentencia—Véase: *Termino*, núm. 4—*Documentos*, número 1—*Acreeedor privilegiado*, núm. 1—*Juicio sumario*, núm. 1—*Costas*, núm. 45 y 62—*Nulidad de una sentencia*, números 1 y siguientes—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Rebel-
dia*, núm. 4—*Posesión judicial*, núm. 9—*Interdicto*, nú-
mero 2—*Acreeedor hipotecario*, núm. 2—*Daños y perjui-
cios*, núms. 92 y 106—*Alimentos*, núms. 3, 7, 12 y 15—
Declaraciones, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 23—*Ali-*

la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo, ni la que fija alimentos en juicio sumario, según lo ha establecido la Cámara en las causas que se registran en el tom. 1º, págs. 214 y 432, Ser. 1ª.

11—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 28.

12—Véase: verb. *Contador*, núm. 2.

13—Véase: verb. *Intereses*, núm. 9.

14—Véase: *Nulidad de un remate judicial*, núm. 2.

15—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 15.



mentos provisionarios, núms. 1 y 2—*Embargo preventivo*, núm. 17—*Embargo*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, número 8—*Inhibición*, núms. 6 y 13—*Prueba procedente*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núms. 6 y 8—*Interdicto de despojo*, núm. 9—*Ejecución de sentencia*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 4—*Obligación de hacer*, núm. 13—*Escepciones*, núm. 8—*Escepción de falta de personería*, núm. 13—*Escepción de litispendencia*, núm. 6—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 15—*Escepción de pago*, núm. 6.

Sentencia absolutoria—Véase: *Acción civil*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 30 y 34.

Sentencia aprobatoria—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4—*Información supletoria*, núm. 7—*Liquidación*, núm. 5.

Sentencia condenatoria—Véase: *Embargo preventivo*, números 30 y 31—*Intereses*, núm. 7.

Sentencia definitiva—Véase: *Embargo preventivo*, números 6 y 7—*Diligencias de prueba*, núm. 18—*Heren-
cias transversales*, núm. 4.

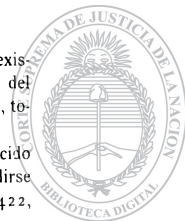
1^a. *Sentencia de desalojo*—La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de locación deduzca el locatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3^a.

Sentencia de divorcio—Véase: *Inhibición*, núm. 13.

1.^b *Sentencias ejecutoriadas*—Resuelto por sentencias ejecutoriadas que el inferior debe fijar el monto de la indemnización por daños y perjuicios, no procede la recepción de pruebas para fijarlos.—Jur. Civ., tom. 2, página 314, Ser. 4^a.

1^a—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.

1.^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 73.



2. **Sentencias ejecutoriadas**—Las que declaran la existencia del mandato, bastan para llenar la exigencia del tercero que contrató con el mandatario.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 80, Ser. 4^a.

3^a. **Sentencias ejecutoriadas**—El juez que ha conocido del litigio, no puede ser recusado sin causa al pedirse la ejecución de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 4^a.

Sentencias ejecutoriadas—Véase: *Daños y perjuicios*, número 8—*Boleto de compraventa*, núm. 12—*Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 7—*Excepción de nulidad*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 5—*Obras*, núm. 2—*Indivisión*, núm. 2.

1^a. **Sentencia inapelable**—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidos en una sentencia inapelable, son inapelables también.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 419, Ser. 4^a.

2^a. **Sentencia inapelable**—La condenación en costas contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

Sentencia inapelable—Véase: *Abogado*, núm. 3—*Costas*, núm. 60.

1^b. **Sentencia nula**—Es nula la sentencia en cuanto resuelve sobre puntos no deducidos en la demanda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3^a.

2^b. **Sentencia nula**—Es nula la sentencia que resuelve

2—Véase: verb. *Mandato*, núm. 11.

3^a—Véase: verb. *Recusación*, núm. 9.

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 50.

2^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 60.

1^b—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 4.

2^b—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 5.



sobre el fondo de la demanda sin audiencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 416, Ser. 3ª.

3. **Sentencia nula**—Adolece de nulidad la sentencia que no resuelve todos los puntos sometidos á la decisión del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 233, Ser. 4ª.

4. **Sentencia nula**—La sentencia dictada sin recibirse la causa á prueba, es nula siempre que se afirmen hechos contradictorios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 279, Serie 4ª.

5. **Sentencia nula**—Adolece de nulidad la sentencia dictada sin las formalidades que la ley prescribe para la escuela del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Sentencia nula**—Es nula la dictada, y debe reponerse la causa al estado de demanda, si ésta no ha sido notificada á persona determinada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Ser. 4ª.

7. **Sentencia nula**—Es nula la dictada sin la debida sustanciación, y el Superior debe declarar la nulidad aun cuando la parte haya omitido el recurso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4ª.

8. **Sentencia nula**—Debe declararse la nulidad de la sentencia definitiva para cuyo pronunciamiento no se hayan llenado las formalidades que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4ª.

9. **Sentencia nula**—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia, de nulidad de la

3—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 6.

4—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 7.

5—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 14.

6—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 17.

7—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 18.

8—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 19,

9—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.



sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4^a.

10. **Sentencia nula**—La falta de pronunciamiento del Juzgado sobre la escepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte á quien fué opuesta.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 370, Ser. 4^a.

11. **Sentencia nula**—Debe declararse nula la sentencia recaída, si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero, aun cuando ese pronunciamiento le sea favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4^a.

1. **Sentencia de remate**—Consentida la sentencia de trance y remate, solo procede contra ella las escepciones que la ley determina, las que se refieren al derecho que ella resuelve son improcedentes.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 194, Ser. 4^a.

2. **Sentencia de remate**—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate, son inapelables si no se hubiese opuesto escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, página 124, Ser. 4^a.

3. **Sentencia de remate**—La sentencia que no hace lugar á las escepciones opuestas á la ejecución de la sentencia es apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

Sentencia de remate—Véase: *Inhabilidad de título*, números 2 y 4.

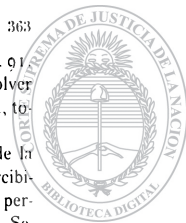
10—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 4.

11—Véase: verb. *Notificación*, núm. 14.

1—Véase: *Escepciones*, núm. 11.

2—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 10.

3—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 12.



Sentencia revocada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 91.

1. Seña—El vendedor puede arrepentirse y resolver el contrato, devolviendo doblada la seña.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 103, Ser. 3ª.

2. Seña—En las ventas en remate judicial procede la pérdida de la seña si el comprador consiente el apercibimiento de dársele por desistido de la compra y por perdida la suma entregada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 40, Serie 3ª.

3. Seña—El vendedor que no cumple el contrato, solo está obligado á devolver la seña recibida, en tanto no se haya estipulado otra pena.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3ª.

4. Seña—La suma entregada en el acto del remate judicial no puede conceptuarse como seña, sino como parte del precio entregado en garantía del cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3ª.

5. Seña—La inejecución del contrato por culpa del comprador trae aparejada *ipso facto* la pérdida de la seña si se hubiere estipulado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 403, Ser. 4ª.

6. Seña—El Juzgado no puede resolver la pérdida de

1—Art. 1202 del Cód. Civ.

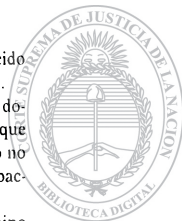
2—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 1.

3—Véase *Contrato de compraventa*, núm. 6.

4—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 3.

5—Art. 1202 del Cód. Civ.

6—La escrituración de unos terrenos comprados, según lo expresaba el boleto de compraventa, debió llevarse á cabo dentro de los treinta días siguientes á la fecha del mismo, bajo la condición de que el convenio quedaría nulo y sin ningún valor legal si dentro de ese término el comprador no aceptaba la escritura de transferencia. Siendo este convenio ley para las partes contratantes, por él están regidos sus derechos y obligaciones respectivas por lo que aquella convención im-



la seña, si al contestar la demanda no se ha deducido acción en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4^a.

7. **Seña**—La pérdida de la seña ó su devolución doblada, solo procede en virtud del arrepentimiento que permite resolver el contrato con esta condición, pero no como acción por la falta de cumplimiento en la forma pactada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

8. **Seña**—No procede la pérdida de la seña si el término fijado para el cumplimiento del contrato no se encuentra vencido por interrupción imputable al vendedor ó su representante legal.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 29, Ser. 4^a.

9. **Seña**—El pacto comisorio, estatuido solo en favor del vendedor, le permite exigir del comprador el cumplimiento del contrato, no obstante la pérdida de la cantidad

porta—art. 1197 del Cód. Civ.—El comprador sosteniendo que el título referente á uno de los lotes del terreno de que se trataba era deficiente, se presentó el último día del plazo fijado para la escrituración, entablado demanda para que se obligase á los vendedores á presentar títulos en forma á fin de que pudiese otorgarse la correspondiente escritura de traspaso, sin que entretanto le corriese término ni causase perjuicio la no escrituración ya que ella no había podido llevarse á cabo conforme á lo convenido, por causas que no le eran imputables. El hecho entonces que sirve de fundamento á la demanda y que el actor invoca para justificar su falta de cumplimiento al compromiso de escriturar dentro del plazo estipulado y librarse de las consecuencias que tal falta pudiera traer aparejadas, es la diferencia que se atribuye al título de propiedad de uno de los lotes, materia del contrato. Negado ese hecho espresa y categóricamente por los demandados, quienes sostuvieron que el título era perfecto, de primer orden, el actor ha debido suministrar la prueba de su afirmación, base única de su demanda. La prueba rendida por el actor no dió resultado alguno. El pedido hecho por el demandado para que se declarase perdida la seña dada por el comprador no fué formulada como contrademanda, ni se sustentó en la forma que la ley prescribe, no estando entonces el Juzgado habilitado para pronunciarse sobre ese punto.

9—Véase: verb. *Pacto comisorio*, núm. 8.



entregada como seña.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 91, Serie 4^a.

10. Seña—En las ventas en remate judicial, no procede la rescisión del contrato con la pérdida de la seña entregada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 68, Ser. 4^a.

Seña—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 6 y 15—*Daños y perjuicios*, núm. 56—*Remate judicial*, núms. 11 y 17.

Señalamiento—Véase: *Posiciones*, núm. 35.

1^a. Separación de bienes—Después de la declaración de quiebra corresponde á la jurisdicción comercial conocer en el juicio que sobre separación de bienes pretenda iniciar la esposa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 54, Serie 4^a.

2. Separación de bienes—A los efectos de la separación de bienes soio debe establecerse claramente cuáles son los existentes en la época de la disolución de la sociedad conyugal separando los que se justifique existían con anterioridad al matrimonio ó el precio en que hubiesen sido enajenados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 4^a.

3. Separación de bienes—La segunda esposa del bigamo tiene derecho á la separación de bienes, sea según las reglas que fija el contrato de matrimonio, ó según las de la comunidad legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 385, Serie 4^a.

Separación de bienes—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3 —*Esposa*, núm. 3—*Embargo preventivo*, número 38.

1^b. Separación de hecho—Entre los esposos, no importa

10.—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 21.

14.—Véase: verb. *Quiebra*, núm. 1.

16.—La esposa se presentó deduciendo demanda contra el padre de



abandono de los hijos por parte del padre, si la madre los tenía á su cargo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407. Ser. 3^a.

sus hijos solicitando la declaración de que éste había perdido la patria potestad á consecuencia de haber abandonado á sus hijos. El demandado no evacuó el traslado, que le confirió de la acción instaurada. La causa real de la demanda fué que el padre negó la venia para casarse á una de sus hijas: se quería privar al padre de la patria potestad para que el matrimonio pudiese celebrarse. De la prueba resultó que el esposo mantenía relaciones ilícitas con otra mujer; pero esta causal no se consideró suficiente para implicar la pérdida de la patria potestad; habría sido necesario que el ejemplo inmoral que importaba el hecho de tener el padre una concubina se ejecutase en el hogar marital ó en una forma pública. Véase: verb. *Patria potestad*. Se comprobó también que la Curia Eclesiástica había separado temporalmente á los esposos á causa de la imposibilidad de llevarse la vida en común. Terminado el plazo de la separación ésta continuó de hecho indefinidamente bajo la acción de las mismas causas. Esta separación, se dijo, que no podía constituir el abandono que la ley exige en el art. 307 del Código Civil. La falta de alimentos por parte del padre, si bien podría considerarse comprendida en el abandono, en el presente caso no podía ser tomada en consideración en tal carácter, teniendo presente que la demandante no probó, que su esposo tuviese los medios necesarios, ni su negligencia para obtenerlos. Y por el contrario, resultaba de las declaraciones de los testigos, que ganaba un escaso jornal con el cual no podría atender á las necesidades de su familia. Independientemente de estas consideraciones, debe tenerse presente, como principio fundamental, el objeto determinante de la demanda; la negativa del esposo á dar su venia para el matrimonio de una hija, venia á ser la causa principal, que la madre empeñada en el enlace de su hija, tuvo en vista para pedir la privación de la patria potestad de aquél, haciendo concurrir al logro de su objeto las otras causales que invocó. Aun en el caso de que estas causales pudieran considerarse probadas, aquella circunstancia es de tal naturaleza, que por sí sola bastaría para determinar el rechazo de la demanda. No es ese por cierto el abandono á que se refiere nuestro Código, puesto que no queda en realidad abandonado un menor cuando el padre lo deja en poder de alguna persona que cuida de él, y cuando esa persona es nada menos que la madre. ¿Qué abandono era ese en que la madre no tuvo de que quejarse hasta que se negó venia á su hija? ¿Existe abandono porque ella sola los alimentara? ¿Pero no se presencia dia-



2. **Separación de hecho**—Justificada la del cónyuge sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 366, Ser. 3ª.

Separación de hecho—Véase: *Administrador*, núm. 4.

Separación provisoria—Véase: *Pensión alimenticia*, número 5.

1ª. **Sepulcro**—Existe condominio sobre un sepulcro, siempre que se permite la inscripción á nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado á nombre de uno solo de sus condóminos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Serie 3ª.

1ª. **Servicios**—Para el pago de servicios, es condición indispensable, se justifique que ellos fueron requeridos,

riamente que el anhelo de las madres ó de los padres, apenas producida una escisión en su hogar, es guardar consigo á los hijos sin preocuparse de la carga de los alimentos, á condición de poderlos retener? El precio de la tranquilidad del hogar del padre no habrá sido la entrega de sus hijos á las madres? ¿No se habrá conformado él con esa situación, convencido que la no carencia de recursos hiciera mejor la vida para sus hijos al lado de la madre?

2—Véase: *Bienes del esposo*, núm. 1.

1ª.—Véase: verb. *Condominio*, núm. 4.

1ª—Del estudio de la causa, no resulta que la Cámara hubiera establecido en su fallo la necesidad de comprobar que los servicios fueron prestados con el consentimiento de la parte, pues todo lo contrario se dijo por el Camarista en cuyo voto se fundó la sentencia, que dice así: «Negados los hechos fundamentales, es decir los servicios profesionales que se dicen prestados, al actor encumbra la prueba.» Por consiguiente no es el caso de aplicación de lo dispuesto en el artículo 1627 del Cód. Civ. El que hiciere algún trabajo ó prestare algún servicio á otro, dice este artículo, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio sea de su profesión ó modo de vivir; pero como es fácil comprenderlo, la ley dá



ó por lo menos que fueron prestados con consentimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 299, Ser. 3ª.

como existente el trabajo ó servicio prestado, que en el presente caso ha sido negado y no consta de autos, como lo observa muy bien el Ministerio de Menores en su escrito de f. 108. Es indudable que el servicio prestado en el ejercicio de una profesión, arte ú oficio, no se supone gratuito, y que impone la obligación de remunerarlo por parte del que lo recibe, á menos que aparezca la intención de beneficiar con él ó prestarlo gratuitamente; pero no es menos cierto que no podría reclamarse el pago y mucho menos una condenación judicial, cuando fueran negados y no se ofreciese al juez la prueba sobre la cual tiene forzosamente que basarse. Pero todos estos argumentos caen de su propio peso cuando se lee que al contestar la acción el demandado, dice: «Niego los hechos en que se funda el actor, declarando, que ni mi esposo ni sus herederos solicitaron los servicios profesionales ni lo eligieron médico de cabecera; que si alguna vez recetó y asistió en alguna consulta no fué por habérsele requerido, sino como actos espontáneos de su parte; naturales, dada su amistad con el causante al que visitaba muchas veces á la par que otras personas de su relación, y aunque si bien estas visitas molestaban alguna vez á la familia, no era decoroso impedir lo que decia ser y se consideraba como demostración de aprecio al enfermo: que otros médicos llamados para asistir al enfermo nunca cobraron sus servicios por tratarse de un colega, pero que no obstante ser ésta la práctica no habría tenido inconveniente en abonar los servicios que se reclaman si ellos hubieran sido solicitados». Aquí existe la confesión clara y terminante de la parte que reconoce que los servicios médicos fueron practicados. Es cierto que esa confesión no es lisa y llana sino calificada: á saber que los servicios fueron gratuitos. Esta calificación está á cargo de quien la formula, teniendo presente que la gratuidad de los servicios profesionales no se presume, y por el contrario la ley presume que son onerosos,—art. 1628 del Código Civil.— Si los médicos tuviesen que comprobar que sus servicios fueron solicitados, quizá nunca cobrarían un centavo y se morirían de hambre. Cuando un médico hace visitas á un paciente, es de presumirse que sus servicios fueron solicitados y la parte que alega que no lo fueron debe comprobar este extremo. Los hombres profesionales se verían constantemente burlados por sus clientes si tuviesen que comprobar que sus servicios fueron solicitados, para poder cobrar sus honorarios. ¿Qué se diría, si á un abogado que se presenta cobrando sus honorarios constantes en los expedientes, se le dijese pruebe que sus servicios le fueron



2. Servicios—El pago de los servicios es ineludible

solicitados? ¿Tendría él que probar que no los prestó gratuitamente? Esto sería un absurdo como lo es el fallo de la Cámara. Así lo tiene resuelto en otros casos este mismo Tribunal. Véase: verb. *Servicios*, núms. 2 y 3.

2.—Un enfermero demandó á la sucesión del causante diciendo que lo había atendido en tal carácter. Los servicios no fueron negados categóricamente por los herederos de aquélla. Los facultativos que asistieron al causante declararon que el actor asistió efectivamente en calidad de enfermero, y que en efecto, ésto lo vieron ellos durante la asistencia que hicieron en su calidad de médicos. La sucesión se escepccionó, no obstante contra las gestiones del actor, alegando que nunca se le ofreció remuneración por sus servicios, los que fueron prestados espontáneamente y por impulso de gratitud, pues siendo pensionista del causante no pagaba por falta de recursos el importe de la pensión agregando además, en alcance de su defensa, que aquellos servicios no constituían la ocupación ó modo de vivir del actor. No es desde luego dudoso, que la comprobación de estos extremos pesaba sobre los herederos, ya porque reconocieron la efectividad del servicio, amparándose de las excepciones escritas en la ley—art. 1628—con el propósito manifiesto de evitar la sanción que surge de aquel reconocimiento, ya porque es de doctrina que la prueba incumbe al que trae un hecho nuevo al debate, como lo dice apropiadamente Bonnier, al que pretende invocar ó alega un hecho nuevo contrario á la posición que adquirió su adversario. No sería de presumirse dentro del orden natural de las cosas que aquellas prestaciones revistieran el carácter que se les atribuye si se considera que el demandante era una persona falta de recursos y sin hábitos de trabajo, según así lo dijo su misma contraparte, y por el contrario el causante una persona de holgada posición según resultaba de su propio testamento. Otro elemento presuntivo de intención benéfica es que el que prestó el servicio habitase en casa de la otra parte—art. 1628 citado.—Fácilmente se descubre que la presunción legal puede solo referirse, y de consiguiente solo perjudicar, cuando hubiese contradicción, á aquellas personas que viven bajo un mismo techo por un acto de complacencia del dueño ó jefe de la casa ó por motivo de amistad ó por cualquier otro móvil ó impulso afectivo. No habiéndose demostrado la intención atribuida al demandante ni fluyendo ésta de los recaudos del proceso, el hecho de que el servicio reclamado no fuese de su profesión ó modo de vivir no es por sí solo causal bastante para impedir el progreso de la acción, siendo como es aquél exigible,

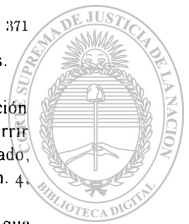


aunque no sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó, siempre que no se justifique que fueron gratuitos. —Jur. Civ., tom. 4º, pág. 79, Ser. 3ª.

3. **Servicios.**—La gratuidad de los servicios como excepción corresponde al que pretenda ampararse de ella.

cuando por las circunstancias no se presumiese la voluntad ó el propósito de beneficiar á la persona para quien se hacía el trabajo ó á quien se prestaba el servicio. Esta cuestión fué resuelta en el sentido del sumario por mayoría de tres votos contrarios. La minoría dijo, que los servicios que motivaban la gestión del actor se encuentran debidamente justificados por medio de la prueba producida y conviene estudiarse la apreciación de un punto, que es de capital importancia, para decidir si ellas son o no remunerables en los términos del art. 1627 del Cód. Civ. El *onus probandi*, para demostrar si efectivamente se solicitaron del actor aquellos servicios ¿á quién incumbe? Establecido, como incuestionablemente ha quedado, que tales servicios no eran relativos á la profesión ó modo de vivir del que los prestó, solo podría aplicarse el precepto del art. 1627 del Cód. Civ., si por las circunstancias no se presumiese la intención de beneficiar á aquél á quien el servicio se hacía; y según el art. 1628, esta intención se presume cuando el servicio no fué solicitado. Ahora bien: sosteniendo el actor en la demanda, que fué llamado por el causante para que lo atendiese en su larga enfermedad y negado este hecho por los herederos, al actor en su calidad de tal y con arreglo á la ley 7, tit. 14, part. 3ª, correspondía acreditar su afirmación, y no á los demandados la negativa, desde que ésta es meramente de hecho y no entraña una afirmación que haga procedente la regla *reus in excipiendo fit actor*. Tan cierto es esto, que el actor, comprendiendo que la presunción del art. 1628 favorece las pretensiones de los demandados ha tratado durante el término de la prueba de establecer que existe en el caso la excepción á la regla, de que en el sentido de la gratuidad de los servicios aquél consagra, procurando acreditar que éstos le fueron solicitados, lo que sin embargo no consiguió pues los testigos examinados con ese objeto, nada sabían al respecto. No habiendo, pues, demostrado el actor que sus servicios fueron solicitados, faltaba uno de los requisitos esenciales para la prosperidad de su acción. Teniendo en cuenta estos argumentos y las disposiciones concordantes del Cód. Civ., la cuestión debía resolverse en contra del sumario.

3.—Véase el número precedente, y en contra el núm. 1.



reconociendo que fueron efectivamente prestados.
Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser 3ª.

4. **Servicios**—Para que pueda aplicarse la presunción de la ley sobre gratitud de los servicios debe concurrir necesariamente en su prestación, ó la falta de llamado, ó el hecho de vivir en la misma casa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser. 3ª.

5. **Servicios**—La habitación bajo el mismo techo, que la ley requiere para suponer gratuitos los servicios, debe ser como amigo ó allegado, si reviste otros caracteres no basta para presumirla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser. 3ª.

6. **Servicios**—El pago de los servicios es ineludible aunque no sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó siempre que no se justifique que fueron gratuitos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 3ª.

7. **Servicios**—La gratuidad de los servicios como escepción corresponde al que pretende ampararse de ella, reconociendo que fueron efectivamente prestados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 3ª.

8. **Servicios**—Para que pueda aplicarse la presunción de la ley, de que los servicios han sido gratuitos, debe concurrir necesariamente, la falta de llamado ó el hecho

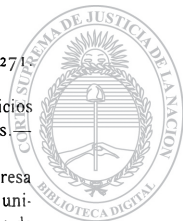
4—Cuando la ley supone la gratuidad de los servicios prestados, por cuanto el que los prestó vive en la misma casa—art. 1627 del Cód. Civil—entiende por tal, á aquellas personas que viven bajo un mismo techo por un acto de complacencia del dueño ó jefe de la casa ó por motivos de amistad ó cualquier otro móvil ó impulso efectivo.

5—Véase el número precedente.

6—También este caso fué resuelto por mayoría de los votos de la Cámara, como en el núm. 2. Allí están ya consignados los fundamentos de este sumario.

7—De acuerdo con el núm. 3, y en contra del núm. 1.

8—Véase el núm. 4.



de vivir en la misma casa.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 3ª.

9. **Servicios**—Reconocida la prestación de servicios procede su pago con arreglo á lo que fijen los peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408, Ser. 3ª.

10. **Servicios**—Prestados, no existiendo ley expresa que impida el ejercicio de una profesión sin título universitario, la carencia de este no enerva el derecho de exigir el pago del precio de los servicios prestados, siempre que sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 158, Ser. 4ª.

11. **Servicios**—Justificada la prestación de servicios sin determinar previamente el monto de la remuneración, debe ésta ser fijada por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 158, Ser. 4ª.

12. **Servicios**—La gratuidad de los servicios no se presume, la prueba corresponde al que la invoca.—Jur. Civil, tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

9.—Véase: verb. *Peritos*, núm. 2.

10.—Se trataba de honorarios devengados en la confección de planos y presupuestos para la construcción de una obra. No hay ley alguna que prohíba prestar este género de servicios á los que carecen de título académico; y por el contrario, el 1627 del Cód. Civ., establece que el que presta servicios puede no tener título universitario y solo exige que el servicio ó trabajo cuya remuneración se demanda sea de la profesión ó modo de vivir del que los presta.

11.—Última parte del art. 1627 del Cód. Civ.

12.—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en los núms. 2, 6 y 7. En contra el núm. 1. Este caso fué resuelto por unanimidad de votos pero se trataba de honorarios de abogados. El beneficiado con los servicios que fué demandado dijo, que el actor no procedió como árbitro ni como letrado, siendo su misión puramente amistosa y motivada por el laudable deseo de hacer desaparecer desavenencias entre dos personas que le merecían estima. Ha ejercitado de esta manera el abogado un mandato civil esencialmente gratuito, puesto que no se refiere la demanda á trabajos propios de la profesión lucrativa ó modo de vivir



Servicios—Véase: *Contrato de locación*, núm. 5.

Servicios extrajudiciales—Véase: *Abogado*, núms. 7 y 8.

1^a. **Servicios médicos**—El pago de los servicios médicos, solo procede justificada la existencia de la locación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3^a.

2. **Servicios médicos**—La falta de prueba sobre la importancia de los servicios médicos prestados, no permite su avalúo por el Consejo de Higiene, pero debe condenarse al pago de lo que el obligado reconozca adeudar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3^a.

Servicios médicos—Véase: *Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

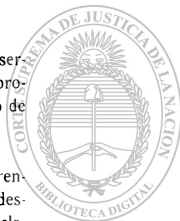
1^b. **Servicios profesionales**—La aceptación de servicios profesionales cuando su rechazo depende solo de la voluntad, importa una locación y el que los ha aceptado se encuentra obligado á remunerarlos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 365, Ser. 4^a.

del mandatario. La intención de gratuidad atribuida por el demandado no ha sido demostrada ni llegan hasta ella las presunciones de ley—artículo 1628, *in fine*—Esa demostración pesaba sobre el reo según el argumento de la ley 8^a, tit. 3^o, part. 3^a. Esta excepción, cuya prueba incumbe al que con ella se defiende, es á la que hacíamos referencia en el núm. 1; excepción que la minoría de la Cámara consideró á cargo del actor en los casos espuestos en los núms. 2, 6 y 7. Esta minoría estaba compuesta de los doctores Gimenez y Barra en el caso del núm. 2; el doctor Gimenez solo en el caso de los núms. 6 y 7, desapareció en el resolución del sumario y declaró que la excepción de gratuidad alegada por el que recibió los servicios debe ser probada por él. ¿Cuál fué el fundamento legal aducido por este camarista para volver sobre sus pasos sacrificando su opinión anterior? Ninguna: se adhirió simplemente al voto del camarista que emitió primero su opinión.

1^a—La prestación de los servicios es la base de la acción. Con arreglo á lo dispuesto en la Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a, la prueba incumbe al actor.

2 --Véase: verb. *Consejo de Higiene*, núm. 1.

1^b—Es una reproducción del caso comprendido en el núm. 10 y resuelto en el mismo sentido, admitiéndose iguales fundamentos.



2^a. Servicios profesionales—Tratándose del cobro de servicios profesionales, la excepción de defecto legal es procedente si no han sido individualizados en el escrito de demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 424, Ser. 4^a.

Simple tenencia—Véase: *Posesiones*, núm. 1.

1. Simulación—Se reputa simulado el contrato de arrendamiento de bienes de la esposa hecho por el esposo después de iniciada la separación de bienes, y debe declararse la nulidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3^a.

2^b. Simulación—Es improcedente la simulación de un acto jurídico siempre que se reconoce su verdad y su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

3. Simulación—Es improcedente la prueba testimonial para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato, en tanto no exista contradocumento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

4. Simulación—Al que alega la de la venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, página 299, Ser. 3^a.

5. Simulación—Para que proceda la revocación de los actos á título oneroso, llevados á efecto por el marido con perjuicio de los intereses de la esposa, es requisito indispensable justificar la complicidad del tercer poseedor; no

2^a—Se demandaban servicios de naturaleza distinta que dieron margen á la acción, en cuyo caso debieron individualizarse haciéndose la apreciación de cada uno de ellos para que el demandado pudiese ejercitar su defensa en la forma que viere convenirle.

1—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3.

2^b—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 4^o, verbo *Escritura pública*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

4—Véase: *Contrato de mutuo*, núm. 1.

5—Véase verb. *Revocación*, núm. 1.

basta probar la simulación de las primeras enajenaciones ni aun el conocimiento que del fraude tenían los primeros adquirentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Scr. 4.^a

6. Simulación—La llevada á cabo por el martillero.

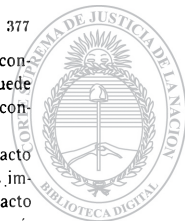
6—El actor se presentó diciendo, que había vendido en remate unos terrenos, por intermedio de unos martilleros públicos, al demandado, y que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1185 y 1186 pedía la correspondiente escrituración. El demandado dijo, que era falso que hubiese contraído el compromiso cuyo cumplimiento se exigía. Y que si es cierto que puso su nombre al pie de los boletos que sirven de recaudo á la acción, es cierto también que ese nombre puesto con lápiz y sin rúbrica no constituía su firma, siendo igualmente exacto que al escribirlo no ha tenido la intención de asumir una obligación seria, sino la de mostrar, como otras veces, su amistad y condescendencia hacia el martillero, quien le había pedido que hiciera para ayudarlo, el papel de comprador sin serlo en realidad, en prueba de lo cual acompañaba un memorandum que demuestra la simulación del acto. Además, el art. 1021 del Cód. Civ. establece como indispensable para la validez de los actos que se formalicen en instrumento privado y que contengan convenciones bilaterales, que ellos se redacten en tantos originales como partes concurren al acto, lo que no se ha verificado en el presente caso. Como se ve en el cuasi-contrato de litiscontestación quedó fijado en términos claros y concretos, habilitando la solución del pleito. En autos existían elementos suficientes para concluir que el contrato de que instruyen los boletos fué simulado, demostrándose que las partes no tuvieron la intención de realizar un acto serio. La prueba producida al respecto por el demandado es concluyente, y los testigos presentados, declaran contestes que saben, por haberlo presenciado, que el actor dijo al demandado que no extrañara si se le adjudicaban algunos de los lotes que se remataban, aunque no hiciera postura alguna, y dicen también los mismos testigos que saben por haber estado presentes, que el demandado no hizo posturas, ni ofertas en este remate; estas declaraciones están corroboradas por el memorandum fijado, reconocido por el actor, lo que demuestra que ya era costumbre entre estos señores valerse de tales manejos, para obtener precios más ventajosos en las ventas, por la parte. Otra prueba de la simulación la tenemos en el tiempo que dejaron trascurrir los rematadores sin pasar la nota respectiva á los demandantes, declaraciones constantes en autos y muy principalmente de que en el libro de ventas no apa-



equiparado al mandatario, no puede ser desconocida por el propietario que ordenó la venta del inmueble base del acto simulado.— Jur. Civ., tom. 2, pág. 185, Serie 4ª.

rezca como comprador el demandado, como lo acredita un certificado expedido. Para destruir lo que alegaba el actor pretendiendo que nada tenía que ver, ni en nada afecta sus derechos la simulación, basta solo tener en cuenta, que sus mandatarios, los martilleros, no entendieron ni tuvieron la intención de celebrar un verdadero contrato al adjudicar al comprador los terrenos que se espresan en los boletos, y que el acto simulado no se hacía en fraude de ellos, sino por el contrario, tratando de favorecer sus intereses. Por otra parte, tratándose de un contrato de compraventa, que contiene convenciones perfectamente bilaterales, el acto debió redactarse en tantos originales como partes concurrieron al mismo—art. 1021 del Cód. Civ.—La infracción á esta ley invalida la convención y la hace ineficaz para producir efectos legales — artículo 18 del mismo Código.—La prueba de la redacción del acta en los ejemplares necesarios debe constar de cada original; tal es la práctica constante y así lo enseña Goyena—art. 1207.—La razón es clara, la prueba sería casi imposible para el que pretendiese demostrar que la convención no se redactó en los ejemplares necesarios, mientras que la prueba opuesta se hace por demás fácil con solo espresar en cada original el número de los ejemplares expedidos. A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que siendo el martillero quien efectuó el remate de los terrenos objeto del pleito, el mismo declara espresamente, contestando á la décima pregunta del interrogatorio presentado que ignora si se entregó al comprador el doble ejemplar del convenio. Justificada esa simulación en términos de no dar lugar á dudas y resultando además que ella ha sido absoluta, es decir, que se trata de actos que nada tienen de real y verdadero, falta la base exigida por la ley para que pudiera compelerse al demandado á la escrituración, conforme á lo dispuesto en las prescripciones de los arts. 1185 y 1187. No es del caso averiguar la responsabilidad que pudiera corresponder al martillero ni el grado de moralidad de los actos que llevó á cabo. Baste saber que se trata de una simulación concertada directamente entre el vendedor y comprador; que el primero, si bien al anunciar en venta los terrenos de que se trata, procedía por cuenta de los demandantes y como su mandatario en esa negociación, es reputado por la ley verdadero consignatario en el caso de ejercer su oficio no estando aquellos presentes, según lo dis-





7. Simulación—Reconocida la simulación de la convención que consta del boleto de compraventa, no puede obligarse al supuesto comprador al cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 185, Ser. 4^a.

8. Simulación—La acción de simulación de un acto público entre las partes que la llevaron á cabo, es impropio siempre que se justifique la existencia de un acto ilícito, en perjuicio de terceros.—Jur. Civ., tom. 3, página 220, Ser. 4^a.

9. Simulación—La de un instrumento público, si el que deduce la acción intervino en su formación ó tuvo conocimiento, solo puede probarse por contradocumento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 268, Ser. 4^a.

10. Simulación—Para que el acreedor tenga personería para deducir acción pauliana ó de simulación de los actos del deudor, es requisito indispensable que su crédito sea de fecha anterior al acto que se pretende anular.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 285, Ser. 4^a.

11. Simulación—Las atestaciones de una escritura pública forman prueba plena de los actos que se dicen pasados ante el oficial público, y no procede la prueba de las partes que en ella intervinieron sobre simulación

pone el art. 122 del Cód. de Com.; y por consiguiente que así como procedería contra él la excepción, que el supuesto comprador tendría derecho á oponer en el caso de demandarle el cumplimiento del contrato, en el mismo caso sus comitentes no pueden tampoco ejercitar las acciones que nacen de ese contrato, con prescindencia de la simulación para obligar al demandado como si se tratara de un acto verdadero.

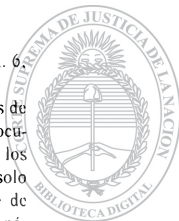
7—Véase la nota precedente.

8—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 7.

9—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

10—Véase: verb. *Acción pauliana*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 2; é Inst., tom. 4^o, verb. *Escritura pública*, núm. 3.



del pago que se haya hecho constar.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4^a.

12. **Simulación**—La simulación de las atestaciones de una escritura pública puede justificarse por contradocumento, en tanto se relacione con actos personales de los que han intervenido, de los cuales el oficial público solo afirma que se hizo manifestación, pero que no da fe de su existencia por ciencia propia.—Jur. Civ., tom. 6, página 179, Ser. 4^a.

13. **Simulación**—La simulación de los actos jurídicos puede probarse por los tesceros á quienes perjudique, por todos los medios legales de prueba, y los jueces deben declararla siempre que resulte justificada por un conjunto de presunciones y circunstancias que lleven al ánimo la convicción de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, página 5, Ser. 4^a.

14. **Simulación**—Opuesta y juzgada por el Inferior la simulación de la escritura pública presentada para justificar la tercería de dominio, no puede solicitarse ante el Superior la revocación de la sentencia por ser contraria á los derechos de los acreedores.—Jur. Civ., tom. 8, página 121, Ser. 4^a.

15. **Simulación**—El reconocimiento judicial de que la escritura de propiedad de una finca era simulada, solo puede ser revocada por la existencia de los vicios que la ley estatuye para la revocación de los actos jurídicos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4^a.

12—De acuerdo con la jurisprudencia uniformemente establecida Véase: el número precedente.

13—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Escritura pública*, núm. 3, y *Prueba testimonial*, núm. 1; tom. 3^o, ver. *Simulación*, núm. 2, y tom. 2, mismo verbo, núms. 1, 7 y 11.

15 Véase: verb. *Escritura*, núm. 4.



Simulación—Véase: *Prueba de presunciones*, núm. 1—*Acto simulado*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 32.

1. Sindicato—Los miembros de un sindicato no consi-

1—Según los boletos con que se instruyó la demanda y la contestación, el actor vendió á dos compradores conjuntos varios terrenos de su propiedad. Esta negociación, ó mejor dicho esta promesa de compra venta, suscitó dificultades entre sus otorgantes, que no salvadas amistosamente dieron motivo á la demanda interpuesta por el vendedor en la cual reclama el cumplimiento de la obligación ó en su defecto daños y perjuicios. La dificultad mayor y en la que en realidad está la solución jurídica del pleito, fluye de que los compradores, sostienen no haber celebrado el acto personal ó individualmente, sino como meros representantes de un sindicato, según así reza, y resulta de los términos inequívocos de la convención. La frase en «representación de un sindicato» no fué agregada incidentalmente, según la defensa, ni como una simple deferencia, sino que respondía á los verdaderos antecedentes del caso, viniendo consignada de puño y letra del mismo representante del vendedor y así, al reconocerse la existencia de ese sindicato, como único interesado en el negocio, quedaban *ipso facto et ipso jure* deslindadas las situaciones respectivas y las responsabilidades jurídicas. Se desestimó esta observación y las demás concordantes de que hizo mérito la contestación por cuanto á estar á los términos propios del boleto fueron los demandados quienes personalmente compraron al actor el terreno en cuestión, siendo consiguientemente los únicos obligados, espresando que las palabras agregadas en el documento, carecen de la importancia que le dan los compradores, pues de lo contrario resultaría que el actor se obligaba hacia personas ó entidades desconocidas, que podrían, según las circunstancias, compelerlo al cumplimiento de la convención, sin que á su vez le fuese dado ejercitar igual derecho ó hacerse éste completamente ilusorio por las personas que los firmantes del boleto podían presentar como obligadas. Estas conclusiones son exactas. El sindicato en cuya representación procedieron los compradores, como así lo afirman, dadas las condiciones de existencia en que lo presentan las constancias de autos, esto es, sin especificación de personas, sin determinación alguna referente á su objeto, á su constitución, á sus fines, no es una entidad jurídica, una sociedad civil, un sujeto del derecho sobre el cual legisle directa ni implícitamente nuestro Código ni ninguna otra disposición anterior ó posterior á él. Denominación usada impropriamente para significar el allegamiento de capitales ó de personas, con aportes reales ó ficticios, en miras de determinadas

tituido ni inscripto como sociedad anónima son personal y solidariamente responsables para con los terceros,

especulaciones, los enunciados sindicatos no se gobiernan por la ley de su instituto porque carecen de él ni por la ley del contrato, porque no existe ó no se hace manifiesto, ni finalmente por los preceptos que reglan á las corporaciones creadas con un interés público, porque no reviste este carácter, resultando forzosamente de aquí, que los actos y procedimientos de quienes se presentan como sus representantes ó mandatarios quedan de hecho y de derecho subordinados á los principios de la ley común. Estos prinripios son claros y no son difíciles de consiguiente fijar con su espíritu y su letra el alcance de las obligaciones contraídas por los demandados. Tenemos desde luego que el acto jurídico ha sido celebrado por los demandados, sin que haya constancia de que hubieran exhibido el instrumento respectivo de poder, ni mencionado siquiera su existencia ni dado á conocer los nombres de las personas que formaban el sindicato cuya representación se atribuyen. Sus responsabilidades son entonces insalvables, ya por razón de la forma en que han ejercitado su intervención en el acto, ya por razón de los principios generales que dominan la materia. Para lo primero basta referirse al testo de los boletos de compraventa; para lo segundo recordar con el argumento de los arts. 1929 y 1930 del Cód. Civ., que cuando el mandatario en desempeño de su cargo contrata, no á nombre de su mandante sino en su propio nombre, queda él y no su instituyente obligado respecto de terceros; doctrina que ha sido incorporada á la jurisprudencia de la Cámara, entre otras causas, en la de Constela con la sucesión Fonseca, análoga en sus caracteres jurídicos á la presente. No podía hacerse valer una carta que se exhibió por cuanto de sus términos no se desprendía la voluntad por parte del vendedor de aceptar ó reconocer la sustitución de las personas obligadas, ni menos de renunciar á su derecho con respecto á los adquirentes directos de la cosa, resultado á que sería necesario llegar para que prosperase llevado hasta el superior. Nuestras leyes solo autorizan la sustitución de acreedores de la obligación, cuando hubiere consentimiento espreso de uno y otro para desligarse del vínculo jurídico. Es incuestionablemente el sistema que mejor consulta la libertad de contratar y el respeto á las transacciones humanas. De esta manera para que el sindicato se hubiese sustituido en los derechos y obligaciones de los firmantes del documento, habría sido indispensable el consentimiento del demandante, producido por actos inequívocos, que seguramente no resultan del proceso. Y es de notarse, que la carta presen-





de los contratos ú obligaciones que á nombre del sindicato lleven á efecto mandatarios debidamente autori-

tada estaba suscrita por el apoderado del actor no habiéndose insinuado siquiera en el curso del debate que tuviera poderes especiales para hacer novación, requisito espresamente exigido por la ley,—art 806, Código citado.—Razonando sobre esta materia, observa Mercadé, tomo 4, pág 622, que para que haya novación por delegación, no basta como en los otros casos, que la voluntad evidente de las partes se manifieste por una causa cualquiera, es necesario que el acreedor espresé su consentimiento de aceptar el nuevo deudor. Por lo demás, ni la novación ni lo renuncia de un derecho se presume: en uno y otro caso la voluntad de las partes debe manifestarse claramente siendo de interpretación restrictiva los actos que induzcan á probarlas—arts. 815 y 874, Cód. Civ.—Se ha atacado también la validez de la promesa, por ser discordes los ejemplares respectivos, alegándose que á juzgarlas como válidas lo será exclusivamente el de los demandados. Esa discordancia no existe ni con referencia al objeto del acto jurídico ni á ninguna de sus cláusulas sustanciales. El agregado relativo al sindicato que se notaba en el boleto, y cuya inteligencia ha sido ya apreciada, no importa una implicancia, ni de ninguna manera aparejaría la nulidad del contrato, pues no constituye ninguno de los vicios ó defectos señalados por ley. Además, son de estricta aplicación los preceptos legales en que se consagra el principio de que la ratificación, á pesar de que la venta se formalizó con el sindicato, la demanda fué bien dirigida contra las señores compradores personalmente. Los términos en que están concebidos los artículos del antiguo como los del vigente Código, no dan lugar á la menor duda; responsabilizan personal y solidariamente para con los terceros, á los administradores y directores de una compañía anónima, por los contratos que celebran á nombre de la sociedad, hasta el momento en que se verifique la inscripción del instrumento ó título de su institución. Por responsabilidad solidaria se entiende la obligación impuesta á cada uno de los deudores de pagar uno solo por todos, la cosa que deben en común—art. 690 del Cód. Civ., y 262 del de Comercio antiguo.—Ahora bien: desconocido el cumplimiento, por parte del sindicato, de las formalidades prevenidas en el art. 408 del Cód. de Comercio antiguo, vigente cuando se concertó la compra-venta, para exonerar á los demandados, como miembros del directorio, de la obligación solidaria y personal, éstos debían acreditar que tales formalidades se habían llenado en oportunidad. No lo hicieron, empero y resultaba por el contrario de los documentos acompañados á la con-

zados, siempre que conste de un modo fehaciente la ratificación del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207. Ser. 4ª.

Síndico—Véase; *Acreeedores*, núm. 1.

1. Sistema métrico decimal—Las cartas misivas no están obligadas á expresar las medidas con arreglo al siste-

testación, que recién después de un mes de la fecha en que se firmaron los boletos, se acordó recabar del Gobierno Nacional la aprobación de los estatutos, sin que conste de autos que ésa aprobación se haya prestado, ni tampoco que se haya verificado la inscripción exigida en el art. 408 citado. No pueden por consiguiente, excusarse los demandados, de la obligación solidaria que el mismo art. 408 les impone, y está igualmente consignada en otras legislaciones concordantes con la nuestra. Comentando el distinguido tratadista Sampaio, tomo 2, pág. 240 el artículo del Cód. de Portugal, análogo al nuestro, se expresa en los siguientes terminos: «Mientras no se encuentre organizada la compañía, aprobados los estatutos en los términos del artículo 546, elegidos los directores y publicada en el Registro de Comercio, en tanto esto no se haga, la compañía no tiene vida pública. Las condiciones de su institución, como en las sociedades no registradas, son letra muerta y las transacciones con los terceros tienen un carácter puramente particular.» «Ellos, por tanto, y no la compañía, son responsables por estos actos, únicamente solo responden solidariamente del mismo modo que en las sociedades no registradas que representan para ante el público una sola persona moral.» En el mismo sentido se expresa Dalloz, verb. Sociedad, núm. 1464 y Ronsseau, tom. 1, pág. 632 de su obra comentando la ley francesa de 1867, sobre sociedades de responsabilidad limitada. Este autor en el lugar citado inserta una, sentencia de la Corte de París de 18 de Mayo de 1869, en la que se declara que la responsabilidad puede hacerse efectiva aun cuando los terceros hubieran tenido conocimiento que la sociedad en la época del contrato no se había constituido definitivamente; esto sin duda, porque según la opinión de la Delaison, tom. 1, pág. 129. «Sociedades Comerciales,» las reglas que la ley fija para la constitución de las sociedades anónimas deben considerarse de orden público, no pudiendo por ello sus fundadores eximirse de las penas y responsabilidades que por su inobservancia les están impuestas, aun cuando aleguen en su defensa el conocimiento de los terceros que con ello hubiesen contratado.

1—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.





ma métrico decimal, y en consecuencia no puede aplicarse multa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

Sobranse.—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

1^a. **Sobresimiento provisional**.—No hace cosa juzgada, y en consecuencia no basta para fundar una acción de daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querrela.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

1^b. **Sociedad**.—La desaparición del objeto que se tuvo en vista para la formación de una sociedad, importa su disolución sin necesidad de convenio expreso.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 177, Ser. 3^a.

2. **Sociedad**.—Los Tribunales son competentes para entender en un interdicto de recobrar deducido por el presidente de una sociedad ilegalmente despojada del local social.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 234, Ser. 3^a.

3^a. **Sociedad**.—Aun cuando el contrato cree una comunidad de intereses, no basta para calificarlo como constitución de sociedad, y en consecuencia, es improcedente la acción de disolución.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 343, Ser. 3^a.

3^b. **Sociedad**.—Tratándose de exigir el cumplimiento de obligaciones á favor de una sociedad cuyos socios no sean solidarios, pueden demandarse ante la jurisdicción que á cada uno de ellos corresponde. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 379, Ser. 4^a.

4. **Sociedad**.—El tutor de los menores que por representación forma parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la

1^a.—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 9.

1^b.—Arts. 1772, y 1774 del Cód. Civ.

2.—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

3^a.—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1.

4.—Véase: verb. *Personería*, núm. 12.



sociedad tiene un representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 395, Ser. 4^a.

5^a. *Sociedad*—Demandada la sociedad, no procede la intervención individual de los socios; la representación debe ser conjunta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 37, Ser. 4^a.

5. *Sociedad*—La sucesión de uno de los socios, que se encarga de la liquidación de la sociedad es la responsable de las deudas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 172, Serie 4^a.

6. *Sociedad*—Cualquiera que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital exceda del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 172, Serie 4^a.

7. *Sociedad*—Debe rechazarse la acción de rendición de cuentas contra el mandatario, si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que invertía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 125, Ser. 4^a.

Sociedad—Véase: *Estatos sociales*, núm. 1—*Persone-ría*, núm. 9—*Daños y perjuicios*, núm. 77.

1. *Sociedad anónima*—Los miembros de un sindicato, no constituido ni inscripto como sociedad anónima son personal y solidariamente responsables para con los terceros, de los contratos ú obligaciones que á nombre del sindicato lleven á efecto mandatarios debidamente autorizados, siempre que conste de un modo fehaciente la ratificación del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Serie 4^a.

5^a—Véase: verb. *Representación*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Contrato escrito* núm. 1.

7—Véase: verb. *Mandatario* núm. 17.

1—Véase: verb. *Sindicato*, núm. 1.



2ª. Sociedad anónima—Los miembros de una sociedad se rigen única y exclusivamente por sus estatutos, en tanto éstos no se opongan á los principios generales ó de orden público.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4ª.

Sociedad anónima—Véase: *Actos comerciales*, núm. 1.

1ª. Sociedad civil—Es improcedente la acción de daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento de un contrato de sociedad civil si no existe escritura pública siendo por un capital mayor de mil pesos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3ª.

1ª. Sociedad colectiva—Demandada una sociedad, los socios extranjeros no pueden ampararse á la jurisdicción federal, si existe un socio argentino.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 226, Ser. 3ª.

1. Sociedad comercial—La duración de una sociedad comercial no puede ser alegada por los terceros para eludir obligaciones que con anterioridad á su formación habían reconocido á su favor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 4ª.

Sociedad comercial—Véase: *Interdicto*, núm. 10.

1ª. Sociedad conyugal—El importe de los bienes propios del viudo, solo debe ser incluido en el haber de la testamentaria de la esposa, en la parte que ellos hayan sido objeto de mejoras durante la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

2ª. Sociedad conyugal—El contrato de compraventa de bienes, celebrado entre la madre y el hijo, es válido en tanto no se justifique, que tuvo por objeto defraudar los

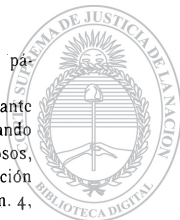
2ª—De acuerdo con la nota contenida en el verb. *Personería*, núm. 9.

1ª—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 26.

1ª—Véase: verb. *Jurisdicción federal*, núm. 1.

1ª—Véase: *Bienes propios*, núm. 1.

2ª—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5.



bienes de la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, página 417, Ser. 3ª.

3. **Sociedad conyugal**—Los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal se suponen gananciales, aun cuando hayan sido comprados á nombre de uno de los esposos, mientras no se justifique plenamente que la adquisición tuvo lugar con fondos particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 378, Ser. 3ª.

Sociedad conyugal—Véase: *Separación de bienes*, números 1 y siguientes—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 16—*Embargo preventivo*, núm. 12—*Prescripción á nombre propio*, núm. 2.

1ª. **Sociedad sobre inmuebles**—La existencia de sociedad sobre inmuebles, cuyo valor sea de más de doscientos pesos moneda nacional, requiere prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3ª.

1ª. **Sociedad verbal**—Reconocida la existencia de una sociedad verbal, procede el nombramiento de administrador judicial si no existe acuerdo entre los socios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 4ª.

1. **Socios**—O cesionarios del comprador en remate judicial, no son parte en el juicio mientras no haya sido judicialmente aceptada la cesión.—Jur. Civ., tom. 3, página 68, Ser. 4ª.

Socios—Véase: *Cesión*, núm. 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 7—*Bienes de la sociedad*, núm. 1—*Administrador judicial*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 17—*Sociedad*, núm. 5—*Representación*, núm. 1.

3ª—Véase: verb. *Bienes*, núm. 5.

1ª—Art. 1184, inc. 3º del Cód. Civ. Cuando no existe esta prueba pueden admitirse los principios de prueba escrita aceptados por la ley—art. 1192 del mismo Código.

1ª—Véase: *Administrador judicial*, núm. 1.



Solemnidades—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

Solidaridad—Véase: *Fiador*, núm. 2.

Soltera—Véase: *Madre natural*, núm. 1.

Subalternos —Véase: *Comisario*, núm. 2.

Sublocación—Véase: *Locatario*, núm. 2.

1^a. Sublocador—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario, solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre el locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

1^b. Sublocatario—El sublocatario no puede por su sola voluntad cambiar la forma del contrato convirtiéndose en locador directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

Sublocatario—Véase: *Locatario*, núm. 7—*Desalojo*, número 3—*Interdicto de adquirir*, núm. 10.

1^c. Subrogación—El heredero que paga deudas de la sucesión, reconocidas como auténticas por los demás coherederos, se subroga á los acreedores y tiene derecho á exigir su reembolso de los fondos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117, Ser. 4^a.

Subsanación—Véase: *Informaciones*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Contador*, núm. 1—*Término para la subsanación*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núm. 3.

Sucesión—Véase: *Acreedores del viudo*, núms. 1 y 2—*Divorcio*, núm. 3—*Heredero*, núm. 4—*Hijo natural*, número 3—*Bienes de la sucesión*, núm. 3—*Legatario*, número 4—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Posiciones*, número 6—*Prescripción á nombre propio*, núm. 2.

Sucesores—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Costas*, núm. 21—*Locatario*, núm. 2.

1^a—Véase: verb. *Desalojo*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.

1^c—Véase: verb. *Heredero*, núm. 4.



Suma—Véase: *Agravio moral*, núms. 2 y 13—*Alimentos*, núm. 1—*Tutor*, núm. 12—*Indemnización*, núm. —*Boleto de compraventa*, núm. 1—*Litisespensas*, núm. 1—*Costas*, núm. 56—*Daños y perjuicios*, núms. 35, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 103 y 112—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 4—*Contrato rescindido*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 3.

1^a. **Suma demandada**—La competencia del tribunal se rije por la suma demandada, aun cuando por ser á oro, después de su conversión, correspondería á distinta jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4^a.

1^b. **Suspensión**—La suspensión en el ejercicio de la profesión durante un término dado, siendo la más grave de las correcciones que puede aplicarse al abogado, solo puede serlo por circunstancias muy graves.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 326, Ser. 4^a.

Suspensión—Véase: *Alegato*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 2—*Término suspendido*, núm. 1.

Suspensión de un juicio—Véase: *Escepción*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 3—*Apoderado*, núm. 2—*Término suspendido*, núms. 1 y 2.

Sustanciación—Véase: *Nulidad de una sentencia*, número 2—*Recurso*, núm. 2—*Incidente*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 4—*Término suspendido*, núm. 2.

Sustitución—Véase: *Mandato*, núm. 15.

1^a—Véase: verb. *Competencia*, núm. 4.

1^b—Véase: verb. *Abogado*, núm. 4.



1. Tacha—El parentesco y la íntima amistad, no son tacha absoluta.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 150, Ser. 3ª.

2. Tacha—legal, el hecho de proteger a una persona

1—Se trataba de una cuestión de filiación natural y de su prueba. Las tachas relativas no deben tener fuerza en esta clase de juicios, porque tratándose de hechos domésticos ó de familia, como sucede en lo referente á la edad, parentesco ó estado, no debe ni puede en manera alguna prescindirse de todo punto de las declaraciones de los parientes y personas más allegadas, pues por lo general son los únicos que conocen estas cosas; y de consiguiente, admitir dicha exclusión valdría tanto como imposibilitar la prueba toda vez que no pudiera producirse por escrito. El parentesco y la amistad son tachas consagradas en la ley por razones de justicia y de moral, que hacen inútil toda demostración, pero ni una ni otra es causal de exclusión absoluta del testimonio, primando sobre ambas la sana apreciación judicial. El parentesco consanguíneo ó afin, la amistad íntima, solo aparecen escritos en la ley como vicios relativos—art. 207 del Cód. de Proc.—Y esta clase de testimonios sospechosos ó nulos en gestiones de otra naturaleza, no lo son de derecho en contradicciones relativas al parentesco ó á la filiación natural, en la que ni la publicidad ni el ruido se hacen por lo común al redor de los hechos que la inducen ó la caracterizan. Véase la causa CCVI, tom. 3º, Ser. 1ª, Fallos citados.

2—Este punto no fué materia de resolución, tan solo forma parte del dictamen fiscal que emitió esa opinión. Pero aun descartada esa declaración tachada por esa causa, la prueba subsistente en autos era siempre la misma. De manera que el principio sentado en el sumario no puede tomarse como precedente.



sin amparo, no importa ser acreedor, y en consecuencia no es tacha legal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 374, Ser. 4^a.

3^a. Tacha.—La tacha del testigo deducida después del término, no debe recibirse á prueba en primera ni segunda instancia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 428, Ser. 4^a.

1^a. Tasación.—No procede la regulación de honorarios mientras no sea aprobada la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 85, Ser. 3^a.

1^b. Tasación.—De bienes, no puede procederse á ella si se oponen terceros poseedores á título de dominio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 77, Ser. 4^a.

2. Tasación.—Para la de campos, no es necesario que la persona tenga título especial, ni aun que resida en el paraje en que ellos están situados.—Jur. Civ., tom. 3, página 65, Ser. 4^a.

3^b. Tasación.—Si los bienes hereditarios admiten cómoda división en especie, no puede procederse á la tasación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 372, Ser. 4^a.

4. Tasación.—Carece de valor legal, con respecto á los

3^a—La tacha fué deducida después de vencido el término para lo principal, siendo consiguientemente estemporánea de acuerdo con lo dispuesto por el art. 208 del Cód. de Proc.

1^a—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 1.

1^b—Si la persona que pide la tasación de los bienes se cree con derecho á ellos, debe en primer lugar, deducir la acción que crea corriendo contra los ocupantes ó poseedores, puesto que no puede ser materia de tasación, en un juicio, sino aquellas cosas con cuya disponibilidad se cuenta.

3^b—Se solicitó la división proporcional de un campo entre los herederos, con arreglo á la cuenta particionaria practicada en una testamentaria. El mayor ó menor valor que puede tener el bien en estos casos, no perjudicaría á los coherederos, por cuanto aquí especialmente se convino en que la adjudicación se haría sorteando los lotes entre aquellos. El valor de cada lote no puede de esta manera tener influencia alguna en el sorteo que debe hacerse.

4—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.



legatarios, la tasación de los bienes testamentarios verificada sin su intervención y en consecuencia el mayor o menor valor fijado, no enerva su derecho á exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Serie 4^a.

Tasación—Véase: *Bienes de menores*, núms. 2 y 4—*Avaluación*, núm. 1—*División en especie*, núm. 1.

Temeridad—Véase: *Costas*, núms. 3, 10, 17, 24, 29, 36, 40, 44, 54 y 57—*Reivindicante*, núm. 5.

1^a. Tenedor—El derecho de retención puede ser ejercido por el tenedor de la cosa, aun cuando no exista crédito líquido ni convenio sobre el monto de lo adeudado por razón de la misma.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Tenedor—Véase: *Espediente*, núm. 2.

1^b. Tenencia—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa, debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención, y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Tenencia—Véase: *Insano*, núm. 1—*Heredero*, núm. 2.

Tenencia definitiva—Véase: *Prejuzgamiente*, núm. 2.

Tenencia provisoria—Véase: *Divorcio*, núm. 2.

1^c. Tercería—Aun cuando se declare procedente la tercera, el ejecutante no es pasible de daños y perjuicios si los bienes embargados se encontraban á cargo del ejecutado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 3^a.

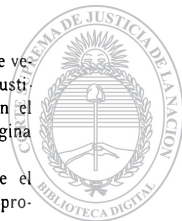
2. Tercería—La tercera sobre muebles, aun fundada

1^a—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 38.

1^c—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

2—Todos estos antecedentes determinan la presunción de la simulación absoluta y fraudulenta del contrato por no tener nada de real y



en escritura pública, es improcedente, si el embargo se verificó antes de la fecha que aquélla expresa, y no se justifica la tradición y si el tercerista no hizo oposición en el acto, encontrándose presente.—Jur. Civ., tom. 2, página 45, Ser. 3^a.

3. Tercería—La tercería debe ser deducida ante el juez de la ejecución en que existan los fondos, no procede el embargo pedido ante otro juez.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 99, Ser. 3^a.

4. Tercería—Escluyente, la oposición á una posesión invocando mejor derecho, importa una tercería escluyente y es de competencia del juzgado que conoce en el principal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 240, Ser. 3^a.

5^a. Tercería—El remate ordenado por sentencia ejecutoriada, solo puede suspenderse en virtud de tercería en forma.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 94, Ser. 4^a.

5^b. Tercería—De mejor derecho, procede aun deducida contra un juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 32, Ser. 4^a.

6. Tercería—La oposición al embargo solo puede aducirla el que posea los muebles embargados, si este hecho no resulta justificado debe deducir tercería.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 52, Ser. 4^a.

7. Tercería—De dominio, opuesta y juzgada por el Inferior, la simulación de la escritura pública presentada encontrarse el otorgante al tiempo de su otorgamiento completamente insolvente.

3—Véase: verb. *Embargo*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Posesión*, núm. 3.

5^b—Véase: *Juicio ordinario*, núm. 3.

6—Una oposición de esta naturaleza, solo puede sustanciarse en juicio ordinario como lo prescribe el art. 529 del Cód. de Proc., y en expediente separado.

7—Véase: verb. *Simulación*, núm. 14.



para justificar la tercera de dominio, no puede solicitarse ante el Superior la revocación de la sentencia por ser contraria á los derechos de los acreedores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4^a.

8. Tercería.—Trabado el embargo sin oposición, no procede su levantamiento sin tercera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 42, Ser. 4^a.

9. Tercería.—De dominio, terminado por convenio entre el ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, éste debe ser levantado declarándose procedente la tercera de dominio á que hubiese dado lugar—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

Tercería.—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2.

1^a. Tercerista.—Si no justifica el dominio de los muebles embargados, su acción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 402, Ser. 4^a.

Tercerista.—Véase: *Acciones criminales*, núm. 1.

1^b. Tercero.—Para que el boleto de compraventa importe una cesión de derechos y acciones, debe existir el endoso, al tercero, del boleto otorgado por el propietario que promete vender.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Serie 3^a.

2. Tercero.—Comprador, el locatario que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de Propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe, por acciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 122, Ser. 3^a.

3. Tercero.—La acción deducida á nombre personal, no

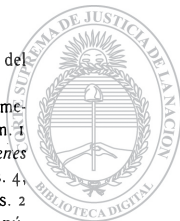
9.—Véase: verb. *Convenio*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Muebles embargados*, núm. 1.

1^b—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.

2.—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 11.

3.—Véase: *Acción personal*, núm. 3.



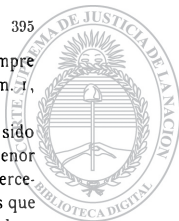
puede ser transferida á un tercero sin aquiescencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 266, Ser. 4.^a

Tercero—Véase: *Albacea*, núm. 2—*Acto ilícito*, números 4, 6 y 7—*Administración*, núm. 1—*Agravio*, núm. 1—*Asistencia médica*, núm. 1—*Amistad*, núm. 1—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 4, 13, y 33—*Bienes propios*, núm. 2—*Comprador*, núms. 2 y 3—*Cesión*, núm. 2—*Competencia*, núm. 2—*Carta*, números 1 y 2—*Contradocumento*, núm. 3—*Contrato*, números 6 y 15—*Compraventa*, núm. 2—*Costas*, núm. 4—*Condominio*, núm. 4—*Domicilio*, núm. 8—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 70 y 101—*Dinero propio*, núm. 1—*Dominio*, núm. 1—*Dominio público*, núm. 1—*Embargo indebido*, núm. 1—*Embargo*, núm. 4—*Esepección*, núm. 2—*Ilegitimidad*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núms. 1 y 2—*Locatario*, núm. 2—*Mandatario*, núms. 3, 12 y 14—*Mandato*, núm. 13—*Materiales*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 24—*Obras*, núms. 1 y 3—*Obligación*, núm. 2—*Papel sellado*, núm. 6—*Personería*, núm. 12—*Patria potestad*, núm. 3—*Poder especial*, núm. 1—*Poseción judicial*, núms. 6 y 9—*Simulación*, núm. 13—*Sindicato*, núm. 1—*Sociedad comercial*, núm. 1—*Tasación*, núms. 1.^a y 1.^a—*Venta en remate*, núm. 1.

Tercer poseedor—Véase: *Revocación*, núm. 1.

1. Terceros—El reconocimiento del carácter heredita-

1—De seis herederos todos mayores, cuatro acreditaron su carácter hereditario, no pudiéndolo hacer los otros dos por no haberse encontrado las partidas de bautismo. Los cuatro que acreditaron su carácter pidieron que se incluyera en la declaratoria á los otros dos, á lo que el Juez Mendez Paz no hizo lugar, porque el carácter hereditario debe justificarse en autos en la forma que la ley determina, y no siendo suficiente el reconocimiento hecho por los coherederos, no podía accederse á lo solicitado. La Cámara revocó el auto fundándose en que los únicos perjudicados por la inclusión de los dos coherederos serían los de-



rio por los coherederos, es prueba suficiente siempre que no afecte intereses de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 357, Ser. 3ª.

1ª. Terceros adquirentes—Cualesquiera que hayan sido las omisiones en que haya incurrido el tutor, el menor solo tiene acción contra él, pero no contra los terceros adquirentes de los bienes con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 3ª.

1. Término—El Juzgado, á solicitud de los herederos reeconcidos, puede fijar un término prudencial para que justifiquen sus derechos los que pretendan igual carácter.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 26, Ser. 3ª.

2. Término—El término para deducir oposición al estado de graduación de créditos, vence el día fijado en los edictos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 3ª.

3. Término—La fijación del término para el cumplimiento de una obligación sin plazo determinado, debe hacerse con audiencia del obligado.—Jur. Civ., tom. 3, página 406, Ser. 4ª.

4. Término—Las peticiones sobre fijación de término

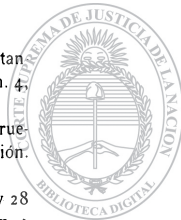
más que comprobaron su carácter hereditario; y no perjudicando á terceros ese reconocimiento, el Tribunal no tenía por que oponerse á ello.

1ª —Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

2.—Véase: *Graduación de créditos*, núm. 1.

3—De acuerdo con el caso resuelto por la Cámara en el tom. 6, página 473, Ser. 1ª, Jur. Civ.—art. 618 del Cód. Civ., concordante con los arts. 509, 747, 756, 1204 y 1212 del mismo Cód.

4—La Cámara no resolvió tal cosa. Declarado de legítimo abono un crédito contra una testamentaria, el acreedor se presentó pidiendo que se señalara plazo para el pago, porque la sentencia que declaró el crédito como de legítimo abono no contenía plazo. El Juez decretó simplemente, «no ha lugar». Apelada la resolución, la Cámara dijo, «que la petición debió sustanciarse, dejándose sin efecto el auto, devolviéndolo».



para el cumplimiento de una sentencia, deben sustentarse con audiencia de los obligados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 231, Ser. 4^a.

5. **Término**—El término para oponerse al auto de prueba corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4^a.

Término—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 5 y 28—*Perito*, núm. 1—*Locación*, núm. 3—*Domicilio*, núm. 1—*Abogado*, núm. 4—*Cuenta*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 2—*Edictos*, núms. 1 y 5—*Fallecimiento*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 4—*Remate judicial*, núm. 19—*Rendición de cuentas*, núms. 5 y 21—*Desistimiento*, núm. 1—*Cláusula penal*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 2—*Posesión*, núm. 6—*Nulidad de un remate judicial*, núm. 1—*Recurso*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núms. 12, 22 y 24—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*De oficio*, núm. 1—*Recurso de apelación*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núms. 12, 21 y 22—*Daños y perjuicios*, núm. 50—*Desistimiento*, núm. 4—*Notificación*, núms. 7 y 13—*Títulos de propiedad*, núms. 15, 18 y 28—*Contrato privado*, núm. 3—*Condición resolutoria*, núm. 1.

1. **Término para alegar**—El término para alegar, solo empieza á correr desde la fecha en que se pueden extraer los autos de la Secretaría.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 242, Ser. 3^a.

2. **Término para alegar**—El término para alegar de bien

se al Inferior para que llenada esta formalidad dicte la resolución que corresponda con arreglo á derecho.» Cuál es la resolución que corresponde? La Cámara no lo dijo.

5—Véase: verb. *Notificación*, núm. 13.

1—Véase: verb. *Alegar*, núm. 1.

2—No está comprendido entre los términos declarados perentorios por el art. 43 del Cód. de Proc.



probado, no es perentorio y el Juzgado, con causa justificada, puede prorrogarlo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 133, Ser. 4^a.

3. Término para alegar—Siempre que resulte fehaciente la presentación del alegato á un Escribano público, antes del vencimiento del término, debe agregarse al expediente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 4^a.

1^a. Término para apelar—Aun cuando no se haya hecho saber al deudor el embargo preventivo, el término para apelar corre desde que la parte haya tenido conocimiento de él.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 58, Ser. 4^a.

1^b. Término para arraigar—Aun consentida la orden de arraigar el juicio, el demandante no tiene término perentorio para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, página 105, Ser. 4^a.

1^c. Término para contestar—El término para contestar directamente después del rechazo de las excepciones, corre desde la notificación personal de la parte.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 3^a.

2. Término para contestar—La demanda, el término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 243, Ser. 3^a.

Término para contestar—Véase: *Escrito*, núm. 1—*Notificación*, núms. 3 y 7—*Recusación*, núm. 5—*Rebeldía*, núm. 12.

1^d. Término para la escrituración—La fijación de un término para la escrituración en un boleto impreso de re-

3—Véase: verb. *Alegato*, núm. 9.

1^a—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 45.

1^b—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 4.

1^c—Véase: verb. *Notificación*, núm. 3.

1^d—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 2.



mate, no importa un pacto comisorio; y solo confiere al comprador ó al vendedor el derecho de exigir judicialmente el cumplimiento del contrato si no fuere de común acuerdo prorrogado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

1. **Término extraordinario**—No estando prohibida la prueba por informes de oficinas extranjeras, debe acordarse el término extraordinario para producirla.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 225, Ser. 3^a.

2^a. **Término extraordinario**—No procede el de prueba en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 3^a.

2^b. **Término extraordinario**—Aun cuando el que debe absolver posiciones se encuentre ausente de la jurisdicción del juzgado, no es necesaria la petición de término extraordinario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4^a.

3. **Término extraordinario**—De prueba, es común, aun cuando no haya solicitado una sola parte.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 162, Ser. 4^a.

4. **Término extraordinario**—No procede el término extraordinario de prueba en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 354, Ser. 4^a.

5. **Término extraordinario**—Pedido estemporáneamente,

1—Véase: verb. *Informes*, núm. 1.

2^a—Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Término extraordinario*, núm. 3.

2^b—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 19.

3—Dice la Cámara que así resulta de la disposición del art. 116 del Cód. de Proc. cuando dice, que el término extraordinario correrá juntamente con el ordinario, no pudiendo suspenderse ni uno ni otro, sino mediando causa que imposibilite la producción de la prueba. De acuerdo con este caso, puede verse Inst., tom. 4^o, verb. *Término extraordinario*, núm. 1.

4—Véase el núm. 2.

5—De conformidad con lo prevenido en el art. 114 del Cód. de Procedimientos.



no procede su concesión.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 52, Ser. 4^a.

6. Término extraordinario—El término extraordinario de prueba, no debe ser concedido después de la oportunidad que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Serie 4^a.

7. Término extraordinario—Para evacuar diligencias en el extranjero, es potestativo de las partes.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 96, Ser. 4^a.

Término extraordinario—Véase: *Posiciones*, núm. 19.—*Término de prueba*, núm. 4.

1^a. Término fatal—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa, corresponde la prueba de la excepción; si no la justifica debe ser condenado al cumplimiento, en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas e intereses.—Jur. Civ., tom. 7, página 371, Ser. 3^a.

1^b. Término fatal—Siendo un término fatal el que la ley fija para hacer uso del derecho de recuperar la propiedad vendida con pacto de retroventa, no puede admitirse en derecho la existencia y validez de un plazo indeterminado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Serie 4^a.

2. Término fatal—El que la ley fija al que ha conseguido un embargo preventivo, para deducir demanda es fatal, sin que por ningún incidente se considere interrumpido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 108, Ser. 4^a.

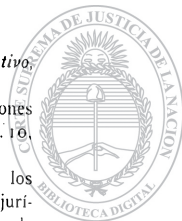
3—Véase el número precedente.

7—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 26.

1^a—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1^b—Véase: verb. *Retroventa*, núm. 2.

2—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 41.



Término improrogable— Véase: *Embargo preventivo*, núm. 22.

1. **Término interrumpido**—La absolución de posiciones no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 4^a.

1^a. **Término para pedir la nulidad**—Se prescribe á los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

1^b. **Término para pedir la nulidad**—El término para deducir la nulidad del juicio por defectos del procedimiento, corre desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó notificaciones.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4^a.

2. **Término para pedir la nulidad**—La nulidad por defecto de procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

Término perentorio—Véase: *Nulidad*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 14.

Término para prescribir—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 8—*Carta de crédito*, núm. 1—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3—*Fianza*, núm. 4—*Prescripción de una deuda*, número 1—*Prescripción de la nulidad*, núm. 1—*Información sumaria*, núm. 2—*Abogado*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 3—*Apoderado*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, número 26—*Posesión treintenaria*, núm. 2—*Prescripción treintenaria*, núm. 2—*Prescripción liberatoria*, núm. 1.

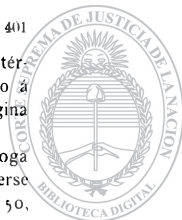
1— Véase: verb. *Alegato*, núm. 4.

1^a—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Notificación*, núm. 9.

2—Véase: verb. *Notificación*, núm. 12.

1—Véase: verb. *Notificación*, núm. 5.



1ª. **Término de la prórroga**—La prórroga de un término corre desde la notificación de la concesión y no á continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, página 124, Ser. 3ª.

2ª. **Término de la prórroga**—En el término de prórroga concedida para contestar la demanda, no pueden oponerse excepciones sin contestarla.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 3ª.

Término prorrogado—Véase: *Obligación de hacer*, número 5—*Rebeldía*, núm. 10—*Liquidación*, núm. 5.

1ª. **Término de prueba**—Después de vencido el término de prueba, no procede la ampliación de una compulsa de libros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 63, Ser. 3ª.

2ª. **Término de prueba**—La diligencia aclaratoria de una compulsa de libros, debe practicarse dentro del término de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 4ª.

3. **Término de prueba**—La suspensión del término de prueba es común á las partes, cualquiera de ellas que la haya motivado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 4ª.

4. **Término de prueba**—La manifestación de hechos nuevos suspende el término de prueba y en consecuencia la petición del término extraordinario puede formularse después de resuelto el incidente.—Jur. Civ., tom. 5, página 98, Ser. 4ª.

5. **Término de prueba**—Los documentos que no justifican hechos alegados en la demanda, pueden ser agre-

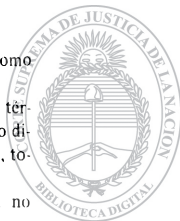
1ª—Véase: verb. *Notificación*, núm. 4.

2ª—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 2.

1ª—Véase: *Compulsa de libros*, núm. 1.

2ª—Véase: *Compulsa de libros*, núm. 2.

5—Se trataba de documentos que no eran de los que sirven de fundamento á la demanda, los que pueden ser agregados, aunque no hubiesen sido enumerados en la demanda. Véase: verb. *Documentos*, núms. 3, 5 y 7.



gados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 389, Ser. 4^a.

6. **Término de prueba**—No procede la fijación de término a la parte para la presentación de pruebas cuyo diligenciamiento pende de oficinas públicas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 125, Ser. 4^a.

7. **Término de prueba**—Las diligencias de prueba no practicadas por ocupaciones del Juzgado, deben cumplirse aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 129, Ser. 4^a.

8. **Término de prueba**—La prueba de posiciones, no se encuentra entre las que deben pedirse y evacuar dentro del término.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 131, Ser. 4^a.

9. **Término de prueba**—Las diligencias de prueba producidas después del vencimiento del término, sin culpa de la parte, deben ser agregadas.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 86, Ser. 4^a.

10. **Término de prueba**—No procede la reiteración de diligencias de prueba pedidas cuando no existe término hábil para su cumplimiento.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 79, Ser. 4^a.

Término de prueba—Véase: *Diligencias de prueba*, números 1 y siguientes—*Documentos*, núms. 1 y 2—*Testigos*, núms. 1, 8, 10, 26 y 27—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Prueba*, núms. 4, 5 y 8—*Declaraciones*, núm. 5—*Posiciones*, núm. 18—*Tacha*, núm. 3.

1. **Término de la revocatoria**—Para evacuar el traslado de la revocatoria es de seis días.—Jur. Civ., tomo 1, página 343, Ser. 3^a.

6—Véase: verb. *Oficinas públicas*, núm. 1.

7—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 25.

8—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 39.

9—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 28.

10—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 27.



1. **Término para la subsanación**—Vencido el término acordado para la subsanación de los defectos del título, es procedente la autorización á la parte contraria para que practique las diligencias conducentes á ese objeto á costa del obligado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 62, Ser. 4^a.

1. **Término suspendido**—Todo término se considera suspendido desde la presentación del escrito en que se pide la suspensión.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 396, Ser. 4^a.

2^a. **Término suspendido**—Los incidentes suspenden el término de prueba, sin petición de parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4^a.

2^b. **Término suspendido**—Cualquier incidente de sustanciación obligatoria, suscitado por una de las partes, suspende los términos para los demás.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 4^a.

Término suspendido—Véase: *Alegato*, núms. 1 y 11—*Alegar*, núm. 2—*Escrito*, núm. 7—*Acción determinada*, núm. 1.

1^a. **Término del traslado**—El término para evacuar el traslado en las cuestiones de puro derecho, solo empieza á correr desde que el espediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4^a.

2^b. **Término vencido**—Consentido el decreto en que se da por contestado el traslado en rebeldía, no puede discutirse si estaba ó no vencido el término.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 365, Ser. 4^a.

3. **Término vencido**—Vencido el término debe agre-

2^a—Véase: verb. *Incidentes*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 3.

2^b—Porque la cuestión sobre el vencimiento del término pasa la categoría de cosa juzgada, sobre la que no se puede volver sin violar los principios fundamentales que la rigen.

3—Véase verb. *Prueba*, núm. 9.



garse la prueba producida, salvo el derecho de las partes para exigir la pedida antes de los alegatos.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 138, Ser. 4^a.

4. **Término vencido**—Vencido el término debe agregarse la prueba, sin perjuicio del derecho de la parte para pedir antes de alegar que se diligencien las omitidas sin culpa suya.—Jur. Civ., tom. 9, página 251, Ser. 4^a.

5. **Término vencido**—Las declaraciones de testigos que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

6. **Término vencido**—Procede la recepción de las pruebas pedidas, después de vencido el término, si en tiempo oportuno se pidió y era procedente la prórroga, aun cuando no fuese decretada.—Jur. Civ., tom. 10, página 297, Ser. 4^a.

7. **Término vencido**—Deben recibirse los testigos aun después de vencido el término, si el actuario no ha hecho constar las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4^a.

Término vencido—Véase: *Escrito*, núms. 2 y 6 —*Excepción de incompetencia*, núm. 7 —*Contrato de compraventa*, núm. 21 —*Espediente*, núm. 5 —*Venta*, núms. 4 y 5 —*Contrato de arrendamiento*, núm. 20 —*Seña*, núm. 8 —*Pensión alimenticia*, núm. 5 —*Rendición de cuentas*, número 17 —*Tacha*, núm. 3 —*Obras*, núm. 2 —*Rebeldía*, núm. 15.

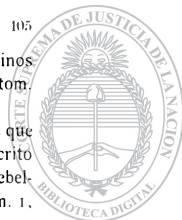
Términos de un escrito —Véase: *Apercibimiento*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Prueba*, núm. 10.

5—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 6.

6—Véase: *Prueba*, núm. 3.

7—Véase: verb. *Notificación*, núm. 10.



2ª. **Términos**—Judiciales, suspensión de estos términos en los expedientes de la Justicia de Paz.-- Jur. Civ., tom. 9, pág. 271, Ser. 4ª.

1ª. **Términos perentorios**—Tratándose de términos que la ley no declara perentorios, la presentación del escrito después de vencido, pero antes de la acusación de rebeldía, hace procedente su agregación.-- Jur. Civ., tom. 1, pág. 66, Ser. 4ª.

1ª. **Terreno**—El propietario de un terreno puede hacer en él las obras que crea necesarias, y los propietarios de los fundos adyacentes carecen de derecho para reclamar daños y perjuicios por el menor valor que ellas hayan ocasionado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

2ª. **Terreno**—Ante dos títulos que tienen por origen un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior si en él se espresa que no le queda más terreno y señala linderos existentes, aun cuando se haya fijado la dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 404, Serie 4ª.

Terreno—Véase: *Avaluación*, núm. 1 --*Aluvión*, números 1, 2 y 3 --*Condominio*, núm. 10 --*Contrato de compraventa*, núm. 4 --*Espedientes informativos*, núm. 1 --*Municipalidad*, núm. 2 --*Informaciones*, núm. 2 --*Calles*, núm. 1 --*Dimensión*, núm. 1 --*Información supletoria*, números 1 y 7 --*Demolición*, núm. 1 --*Compraventa*, núm. 4 --*Contrato de arrendamiento*, núms. 12 y 26 --*Daños y perjuicios*, núms. 43 y 50 --*Administración*, núm. 1 --*Indem-*

2ª—Véase: verb. *Espedientes*, núm. 4.

1ª—El escrito fué presentado el día siguiente al del vencimiento del término, y la rebeldía acusada dos horas y media después de presentado aquél. Se declaró que no había lugar á la rebeldía acusada.

1ª—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 24.

2ª—Véase: verb. *Dimensión*, núm. 1.



nización, núm. 4— *Edificación*, núm. 1— *Interdicto de obra nueva*, núm. 4— *Reivindicación*, núm. 18.

1^a. *Terrenos públicos*—La propiedad que la Ley orgánica atribuye á la Municipalidad sobre los terrenos públicos de la Capital, solo se refiere á aquellos que no hayan salido del dominio público.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3^a.

1^b. *Tesoro público*—Solo puede calificarse de impuesto aquel cuyo producto ingresa en el tesoro público ó Municipal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 260, Ser. 4^a.

Tesoro público—Véase: *Adoquinado*, núms. 1 y 2.

Testador—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Herencia*, número 4—*Nulidad de un testamento*, núm. 2.

1^c. *Testamentaria*—Corresponde á los Tribunales de la Provincia conocer en la testamentaria, si el causante falleció en aquella jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 3, página 75, Ser. 3^a.

2^b. *Testamentaria*—Comprobado que el causante no era vecino de la Capital, debe remitirse la testamentaria á los jueces de su domicilio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 230, Ser. 3^a.

3. *Testamentaria*—Los créditos contra una testamen-

1^a—Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 7.

1^b—Véase la nota del verb. *Adoquinado*, núm. 1.

1^c—Véase: *Jurisdicción testamentaria*, núm. 1.

2^b—Arts. 3284 y 3567 del Cód. Civ.

3—Entablada demanda por cobro de pesos contra una testamentaria. El representante del albacea reconoció el crédito; y el de la madre de los hijos naturales dijo, que según los datos suministrados, el crédito era efectivo. El actor no produjo prueba alguna, siendo la demanda rechazada porque en los poderes de los apoderados no se registraba la facultad expresa é indispensable exigida por el art. 1881 en su inc. 17; no conteniendo la facultad de reconocer deudas anteriores al mandato el reconocimiento hecho carece de eficacia.



taria en que existen menores, deben ser justificados por el demandante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 259, Ser. 3ª.

4. **Testamentaria**—Cuando la ejecución se dirige contra una testamentaria por crédito líquido, el actor no está obligado á ejecutar á cada heredero por la parte proporcional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4ª.

5. **Testamentaria**—Aun cuando las partes prorroguen jurisdicción, los tribunales no pueden entender en la testamentaria de los domiciliados fuera de la Capital.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Testamentaria**—Es improcedente la nulidad del juicio testamentario, fundada en la falta de intervención en las diligencias previas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 6, Ser. 4ª.

7. **Testamentaria**—El poder especial para formarla, no basta para iniciar la de un heredero del causante fallecido con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 7, Serie 4ª.

8. **Testamentaria**—Debe ser condenada en las costas cuando los herederos niegan los hechos en que se funda la demanda, y se comprueba que tenían conocimiento de ellos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 164, Ser. 4ª.

Testamentaria — Véase: *Abogado*, núm. 11 — *Albacea*, núms. 2, 5 y 7 — *Derechos hereditarios*, núm. 1 — *Poder especial*, núms. 1 y 2 — *Alimentos*, núm. 2 — *Acción ejecutiva*, núm. 1 — *Petición de herencia*, núm. 2 — *Demanda*, núm. 1 — *Filiación legítima*, núm. 2 — *Herederos*, núm. 2 — *Causante*, núm. 1 — *Nulidad*, núm. 3 — *Honorarios*, números 8 y 26 — *Acreedores*, núm. 1 — *Curador*, núm. 5 — *Inhabilidad de título*, núm. 7 — *Menores*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Crédito líquido*, núm. 1.

5—Véase: *Jurisdicción*, núm. 5.

6—Véase: *Nulidad de un juicio*, núm. 2.

7—Véase: verb. *Poder especial*, núm. 6.



1. **Testamento**—Las aseveraciones de un testamento, solo forman prueba en cuanto reconocen obligaciones en contra del causante, pero no á su favor.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 133, Ser. 3ª.

2. **Testamento**—Las declaraciones de los testigos del testamento, contrarias á lo que de su contenido resulta, no forman prueba mientras no se justifiquen haber procedido inducidos por miedo, dolo, error, etc.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

3. **Testamento**—No es requisito esencial á la validez del testamento por acto público, que sea escrito ante los testigos, basta que éstos se encuentren presentes durante la lectura y firma del testador y del escribano. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

4. **Testamento**—El del padre es prueba bastante de la filiación en la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 214, Ser. 3ª.

5. **Testamento**—Las causas de nulidad de un testamento, deben ser probadas por el que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

6. **Testamento**—La atestación hecha por el Escribano, en el cuerpo del testamento, de un hecho que impide al testador firmar el acto, es válida y no puede fundar la nulidad, siempre que el hecho sea cierto, aunque no sea el mismo que cause el impedimento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

7. **Testamento**—Es procedente la declaratoria de here-

1—Solo sirven como principio de prueba, se ha dicho en otro caso. Véase el núm. 8.

2—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 1.

4—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

5—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 1.

6 Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 2.

7—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 7.



deros, aun cuando exista testamento, si alguno de los instituidos hubiese fallecido antes que el causante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 4^a.

8. **Testamento**—El reconocimiento de una deuda en el testamento, importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 330, Ser. 4^a.

9. **Testamento**—El legatario de parte alicuota, puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

Testamento—Véase: *Administración*, núm. 3—*Legado*, núm. 1—*Filiación legítima*, núm. 2—*Filiación natural*, núm. 18—*Herencia*, núm. 3—*Testigos*, núm. 24—*Poseción judicial*, núm. 7—*Tutela*, núm. 2—*Bienes del heredero*, núm. 1.

1. **Testigo**—El cambio de domicilio de un testigo, no hace perder el derecho de presentarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3^a.

2. **Testigo**—Debe ser citado en el domicilio que indica

8.—Véase: *Confesión*, núm. 2.

9.—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 4.

1.—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 3.

2.—Denunciado el domicilio de un testigo fué citado en él, al diligenciarse la citación informaron que estaba establecido en La Plata: en presencia de esta manifestación y habiéndose pedido que fuese citado nuevamente en el mismo domicilio, el Juez no hizo lugar, en virtud del resultado del informe: la Cámara revocó la providencia teniendo en cuenta que el art. 118 impone á la parte que presenta un testigo, el deber de denunciar el domicilio, y teniendo en cuenta además, que la manifestación que se había hecho no podía considerarse como suficiente prueba de que el testigo no tuviese su domicilio en el lugar indicado por quien lo presentó.



la parte que lo presenta, cualquiera que sea su residencia habitual.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 115, Ser. 4ª.

3. **Testigo**—Si el testigo ha comparecido y no ha declarado, sin culpa de la parte, debe señalársele nuevo día.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 153, Ser. 4ª.

4. **Testigo**—Residente en el extranjero cuya declaración se pide en la estación oportuna, puede declarar ante el Juzgado si cambia de domicilio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4ª.

5. **Testigo**—La parte que lo presenta, puede desistir de su declaración.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 6, Ser. 4ª.

6. **Testigo**—Si después del libramiento del eshorto, el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para la declaración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Serie 4ª.

1. **Testigos**—Los presentados dentro del término de prueba, pueden declarar aun después de vencido, si la falta no fuere imputable á la parte.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 330, Ser. 3ª.

2. **Testigos**—La presentación hecha por una parte, de

3—El testigo compareció á la citación pero se retiró sin declarar; la parte pidió señalamiento de nuevo día á lo que se proveyó de conformidad, porque la no declaración no podía en manera alguna imputarse á desidia de la parte.

4—Presentado un testigo domiciliado en el extranjero, se libró el correspondiente exhorto: en el interin se trasladó á esta Capital, pidiéndose que la declaración se tomase aquí; así se ordenó, porque el que un testigo cambie ó no de domicilio, no puede jamás depender de la voluntad de la parte, pudiendo consiguientemente aplicarse la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

5—Es facultivo de las partes desistir de las pruebas por ellas ofrecidas.

6—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 7.

1—De acuerdo con la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

2—Como la parte que presenta sus testigos tiene el derecho de re-



testigos que han sido presentados por la contraria, importa únicamente la de aquellos que hayan declarado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 346, Ser. 3ª.

3. **Testigos**—Para que los de una información, formen prueba plena, deben dar razón de sus afirmaciones.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3ª.

4. **Testigos**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3ª.

5. **Testigos**—Los testigos, firmantes del documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulte obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3ª.

6. **Testigos**—No es requisito esencial á la validez del testamento por acto público, que sea escrito ante los testigos, basta que éstos se encuentren presentes durante la lectura y firma del testador y del Escribano.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

7. **Testigos**—Si la inasistencia de los testigos no es imputable á la parte, debe señalarse nueva audiencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 43, Ser. 3ª.

8. **Testigos**—No debe admitirse declaración á éstos

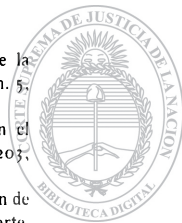
tirarlos: si pide que no declaren son tenidos como no presentados, y como la parte contraria pedía que se tuvieran como testigos suyos los presentados por la otra, resulta que los retirados no pueden declarar por que son tenidos como no presentados.

4 --Véase: verb. *Rendición de cuentas*, núm. 2.

5--Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 1.

7—La no producción de la prueba, no es imputable á la parte, debiendo aplicarse en este caso la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

8 De conformidad con la jurisprudencia uniformemente sentada por la Cámara fundada en el art. 118 del Cód. de Proc.



después de vencido el término si por negligencia de la parte no la prestaron el día señalado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 198, Ser. 3^a.

9. **Testigos**—La citación de éstos puede pedirse en el acto del juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 203, Ser. 3^a.

10. **Testigos**—No pedida en oportunidad la fijación de nuevo día á los testigos, se tiene por desistida, á la parte, de su presentación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 215, Ser. 3^a.

11. **Testigos**—Las declaraciones de testigos en que no se hubiesen observado las prescripciones de la ley, carecen de fuerza probatoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16. Ser. 3^a.

12. **Testigos**—La parte debe urgir el señalamiento de nuevo día para los testigos, aun cuando no hayan declarado por ocupaciones del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3^a.

13. **Testigos**—Los que no comparezcan á la citación en el juicio sumario de interdicto, pueden ser nuevamente citados á solicitud de la parte. Jur. Civ., tom. 7, página 160, Ser. 3^a.

9—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 3.

10—Se dijo que el testigo no podía concurrir porque se hallaba en término. En este caso la parte debe hacer uso dentro de un breve término, del derecho que le acuerda el art. 199 del Cód. de Proc., pues de lo contrario no se encontraría dentro de la excepción del art. 118 del mismo Código.

11—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 2.

12—El testigo fué citado para el 31 de Diciembre, y habiendo comparecido después de la hora, el Juzgado no le tomó declaración. La parte pidió señalamiento de nueva audiencia recién el 5 de Oct. La Cámara consideró que en esto había desidia de la parte en la producción de su prueba y por consiguiente no hizo lugar al señalamiento de nuevo día.

13—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 6.



14. **Testigos** —Procede la citación de los testigos que se hayan negado á concurrir con la parte al juicio del interdicto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 162, Ser. 3ª.

15. **Testigos**—Auriculares, solo forman prueba de hechos de difícil constatación por su antigüedad y por ser de fama pública.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Ser. 4ª.

16. **Testigos**—Consentida por la parte la providencia que dispone que la declaración de testigos sea conjunta, aun cuando la ley no lo disponga, toda ulterior oposición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 60, Ser. 4ª.

17. **Testigos**—Las partes no tienen derecho á conocer antes del acto el interrogatorio presentado para los testigos, aunque éstos deben prestar declaración por medio de informe.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 373, Ser. 4ª.

18. **Testigos**—Aun ordenadas las declaraciones, si los testigos no son citados por negligencia de la parte, no pueden declarar después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 405, Ser. 4ª.

19. **Testigos** La existencia de testigos que deponen contradictoriamente sobre los mismos hechos, permite al Juez calificar las declaraciones, teniendo en cuenta la

14—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 7.

15—Leyes 28 y 29, tit. 16, Part. 3ª.

16—Consentida una providencia, pasa en autoridad de cosa juzgada, y no es posible ir contra lo en ella resuelto.

17—El art. 181 del Cód. de Proc. faculta á la parte para reservarse el interrogatorio hasta la audiencia en que debe tener lugar el examen de los testigos. Este derecho no puede ser modificado cuando el pliego se encuentra en Secretaría, pues la ley no impone la obligación de entregarlo abierto, y todo lo contrario se desprende del espíritu y letra del artículo citado. La circunstancia de que las declaraciones deban tomarse por medio de informes, no obsta á que las partes dirijan las preguntas que estimen conducentes á su derecho en la forma autorizada por el art. 201, aplicable por analogía.

18—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 5.



mayor credibilidad que ellos merezcan, aunque sean los menos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 4^a.

20. **Testigos**—Para que las declaraciones de testigos formen prueba de los hechos sobre que deponen, deben ser contestes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 263, Ser. 4^a.

21. **Testigos**—Presentados el último día de prueba, no pueden ser admitidos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 245, Serie 4^a.

22. **Testigos**—La tacha del testigo, deducida después del término, no puede recibirse á prueba en primera ni en segunda instancia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 428, Serie 4^a.

23. **Testigos**—El domicilio de los testigos, solo puede resultar falso del acto de la notificación, las indicaciones de la parte, no pueden ser atendidas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 432, Ser. 4^a.

24. **Testigos**—Aun cuando alguno de los testigos no conozca al Escribano autorizante, no es causal para declarar la nulidad del testamento, pues basta para su validez que el Escribano los conozca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4^a.

25. **Testigos**—Las declaraciones de testigos por exhorto, se rijan por la ley de procedimientos vigente en

20—Ley 32, tit. 16, Part. 3^a.

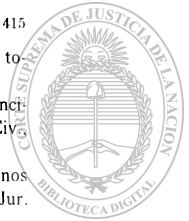
21—Arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.

22—Véase: verb. *Tacha*, núm. 3.

23—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 9.

24—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 3.

25—El juez que dirige un exhorto á otro magistrado de país extranjero, no puede imponer á éste las formas de procedimiento de su propio país. Cada magistrado acepta el exhorto bajo la inteligencia implícita de que se diligenciará de acuerdo con las leyes de su propio suelo. La parte que alega la nulidad debe comprobar que las leyes procesales han sido violadas, y solo así podrán invalidarse las pruebas objetadas.



la jurisdicción en que han sido prestadas.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 126, Ser. 4^a.

26. **Testigos**—Presentados tres días antes del vencimiento del término, no deben ser admitidos.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 21, Ser. 4^a.

27. **Testigos**—Deben ser presentados por lo menos tres días antes de vencerse el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 32, Ser. 4^a.

28. **Testigos**—El hecho de ser dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento; la ley fulmina esa pena si los firmantes como testigos son dependientes autorizados para otorgarla.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

29. **Testigos**—Las declaraciones de los testigos que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

30. **Testigos**—Deben recibirse los testigos, aun después de vencido el término, si el actuario no ha hecho constar las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4^a.

31. **Testigos**—Los que han comparecido a la audien-

26—Porque según el art. 184 del Cód. de Proc., la lista de testigos debe permanecer en la oficina durante tres días; de manera que recién al cuarto día de presentada dicha lista pueden los testigos ser examinados. La parte habría dejado de urgir la producción de la prueba—art. 118—y no podría recibirse después de vencido el término.

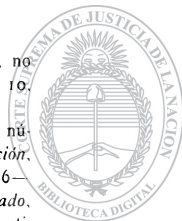
27—Los testigos fueron presentados el 1º de Julio y el término vencía el 4, faltaba pues, por lo menos un día—arts. 184 y 118 del Cód. de Proc.

28—Véase: *Escritura pública*, núm. 29.

29—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 6.

30—Véase: verb. *Notificación*, núm. 10.

31—Véase: verb. *Interrogatorio*, núm. 1.



cia y no han declarado por falta de interrogario, no pueden ser presentados nuevamente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

Testigos—Véase: *Cédula*, núm. 2—*Conocimiento*, número 1—*Declaraciones*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 2—*Filiación natural*, núm. 14—*Firma*, núm. 6—*Interdicto*, núm. 9—*Informes*, núm. 4—*Papel sellado*, núm. 4—*Prescripción adquisitiva*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 17—*Testamento*, núm. 3—*Venia*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 16.

1^a. **Testimonio**—Los expedientes terminados, no pueden ser agregados como parte de prueba, debe pedirse testimonio de la parte pertinente.—Jur. Civ., tom. 3, página 46, Ser. 3^a.

2. **Testimonio**—La negativa á la agregación de un expediente, no basta para fundar la petición de testimonio de sus piezas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4^a.

Testimonio—Véase: *Fuerza ejecutiva*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 10—*Documentos públicos*, núm. 2—*Cesión de derechos*, núm. 1.

1^b. **Testimonios**—No procede la agregación de autos, deben pedirse los testimonios pertinentes.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 365, Ser. 4^a.

Tiempo determinado—Véase: verb. núm. 2.

Tiempo hábil—Véase: *Prueba*, núm. 2—*Lista*, núm. 1.

Tiempo indeterminado—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 19.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Expediente*, núm. 5. Sin embargo, si el expediente contiene referencias generales relativas al pleito, puede ser agregada como prueba.

2—Véase: verb. *Expediente*, núm. 5.

1^b—De acuerdo con la jurisprudencia sentada.



Tiempo oportuno— Véase: *Contrato verbal*, núm. 3 —
Pruebas, núm. 3.

Tíos—Véase: *Hermanos unilaterales*, núm. 1.

Título—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 2 —*Inhabilidad de título*, núms. 1 y siguientes—*Herederos*, núm. 6.

Título de adjudicación—Véase: *Petición de herencia*, número 3.

Título de adquisición—Véase: *Dominio público*, núm. 1.

1^a. Título habilitante—No pueden conceptuarse en ningún caso como el título habilitante que la ley exige se transcriba en las escrituras públicas de venta, los títulos de adquisiciones anteriores. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 214. Ser. 4^a.

Título nulo—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

Título oneroso—Véase: *Revocación*, núm. 1.

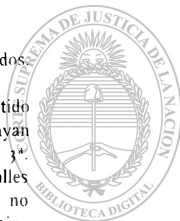
1. Título pericial—Para la avaluación de terrenos, no se requiere título pericial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84. Ser. 3^a.

Título profesional—Véase: *Tasación*, núm. 2 —*Contrato de locación*, núm. 3.

1^b. Título de propiedad—La devolución de un título de propiedad que puede afectar derechos de varios herederos

1^a—Buscando el alcance del art. 1003 del Cód. Civ., se llega sin esfuerzo al convencimiento de que solo se refiere, cuando habla de título habilitante de una escritura, a la transcripción del poder y demás documentos constitutivos del mandato, y esto en el caso de que un tercero concurre en representación de alguno de los otorgantes. La ley exige además, que bajo la fe que merece el oficial público autorizante, se hagan todas las citas y referencias necesarias en las escrituras para dejar así constatado el título en virtud del cual se transfiere la propiedad; con ello basta para su validez.

1^b—Debiendo además dejarse en autos copia legalizada de los títulos que se entreguen.



ros, solo debe hacerse con citación de los interesados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 350, Ser. 3ª.

2. **Título de propiedad**—No puede darse por desistido al comprador en remate, mientras los títulos no hayan sido presentados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 15, Ser. 3ª.

3. **Título de propiedad**—La falta de nombre a las calles en que estén ubicados los terrenos de los suburbios, no importan deficiencia de título.—Jur. Civ., tomo 1, página 333, Ser. 3ª.

4. **Título de propiedad**—La conformidad con los títulos estipulada como condición en un boleto de compraventa, obliga al comprador a justificar que la prestó en oportunidad, sin que pueda exigir la subsanación por el vendedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

5. **Título de propiedad**—Reconocida la deficiencia de los títulos, procede el desistimiento del comprador dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 4, página 229, Ser. 3ª.

6. **Título de propiedad**—La presentación de los títulos del poseedor, supone que la posesión arranca desde la fecha de aquéllos, sin solución de continuidad entre los diferentes propietarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Serie 3ª.

7. **Título de propiedad**—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3ª.

2—Arts. 521 y 522 del Cód. de Proc.

3—Véase: verb. *Calles*, núm. 1.

4—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Desistimiento*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Posesión*, núm. 8.

7—Véase: verb. *Posesión*, núm. 11.



8. **Título de propiedad**—El derecho del comprador en remate judicial que conceptúa defectuosos los títulos, se limita al desistimiento, si los vendedores se niegan a practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 93, Serie 3ª.

9. **Título de propiedad**—En la información para bonificar títulos, no es parte el comprador del inmueble que la motiva, ni en consecuencia después de aprobada judicialmente puede desconocer su validez.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 443, Ser. 3ª.

10. **Título de propiedad**—Existe condominio sobre un sepulcro, siempre que se permite la inscripción a nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado a nombre de uno solo de los condóminos.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 5, Ser. 3ª.

11. **Título de propiedad**—Para la procedencia de la acción reivindicatoria, es necesario justificar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva; no basta la presentación del título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 346, Ser. 3ª.

12. **Título de propiedad**—La posesión quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la escepción, sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

8—Véase: *Comprador judicial*, núm. 2.

9—Véase: *Información supletoria*, núm. 2.

10—Véase: verb. *Condominio*, núm. 4.

11—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 1.

12—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 1.



13. **Título de propiedad**—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial, después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 3^a.

14. **Título de propiedad**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero á quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3^a.

15. **Título de propiedad**—Si los títulos no pueden ser presentados por los herederos en un breve término, el comprador puede desistir sin responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 385, Ser. 4^a.

16. **Título de propiedad**—La prueba de las deficiencias de los títulos corresponde al que la alega; aun cuando el demandado no los presente, basta que indique donde se encuentran.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4^a.

17. **Título de propiedad** Para la reducción del boleto de compraventa á escritura pública, no es necesaria la presentación de los títulos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 423, Ser. 4^a.

18. **Título de propiedad**—El vendedor está obligado á subsanar en el término que fije el Juzgado los defectos de que adolezca el título de la propiedad vendida.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 254, Ser. 4^a.

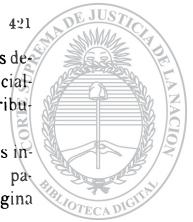
19. **Título de propiedad**—El que demanda el cumplimiento del contrato de compraventa está obligado á la presentación de los títulos de propiedad ó indicación del registro donde se encuentran si la otra parte lo exige.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 346, Ser. 4^a.

13—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 3.

14—Véase: verb. *Heredero*, núm. 10.

15—Es el caso del art. 522 del Cód. de Proc.

17—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 18.



20. **Título de propiedad**.—Cualesquiera que fuesen sus efectos, quedan subsanados si la venta se hace judicialmente por ejecución del Fisco para el cobro de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 409, Ser. 4^a.

21. **Título de propiedad**.—Los títulos de propiedades indivisas, deben estar en poder del depositario de los papeles, nombrado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 8, página 19, Ser. 4^a.

22. **Título de propiedad**.—Para la reducción á escritura pública del boleto de compraventa, no es obligatoria la presentación de los títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 36. Ser. 4^a.

23. **Título de propiedad**.—Solo pueden ser entregados al que los presentó, aunque no sea el propietario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 64, Ser. 4^a.

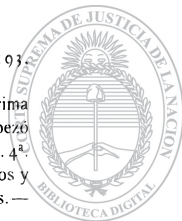
24. **Título de propiedad**.—Demandada la conversión á escritura pública, del boleto simple de compraventa, los tribunales deben fijar un término para que el demandado lo verifique sin que sea necesaria la presentación de los títulos, que solo es obligatoria cuando se exige el cum-

20—A los efectos de la bondad del título de transmisión del dominio, debe tenerse presente la naturaleza del derecho que la ley acuerda al Fisco sobre toda propiedad afectada al impuesto de Contribución Directa, y que á ese fin nada importa que la persona á quien la finca haya pertenecido ó pertenezca, esté presente, se encuentre ausente ó haya fallecido, si en el juicio respectivo se le dá la representación legal correspondiente. De otra manera, si se admitiera la teoría que se sostiene de contrario, el Fisco no podría en muchos casos, obtener el pago de los impuestos, lo que daría por resultado que el Gobierno, se viera con frecuencia en la imposibilidad de llenar la misión primordial de que está encargado, por no serle posible efectuar los servicios que en bien de la comunidad debe verificar.

21—Véase *Depositario judicial*, núm. 1.

22—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 25.

24—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 24.



plimiento de la convención.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 193, Ser. 4^a.

25. **Título de propiedad**—El de fecha anterior prima sobre los posteriores, si se fija que la posesión empezó en la misma fecha.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

26. **Título de propiedad**—No pueden ser desglosados y entregados si son varios los que pretenden tenerlos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 255, Ser. 4^a.

27. **Título de propiedad**—Procede la reivindicación, siempre que se justifica haber tenido título y posesión anterior á la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, página 370, Ser. 4^a.

28. **Título de propiedad**—El comprador en remate judicial, solo puede observar los títulos dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 90, Ser. 4^a.

29. **Título de propiedad**—Entre dos títulos sobre una misma propiedad que tengan el mismo origen, el que justifique haber tenido la posesión judicial, prima sobre el que carezca de tal requisito.—Jur. Civ., tom. 10, página 370, Ser. 4^a.

30. **Título de propiedad**—El desistimiento de compras

25—Véase: verb. *Posesión*, núm. 19.

26—Los títulos de propiedad son inmuebles por su carácter representativo—art. 2317 del Cód. Civ.—Los títulos que comprueben la adquisición de derechos reales en condominio, son inmuebles poseídos en común. Es sabido que el condómino no puede ejercer sobre él todo de la cosa, ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, sin el consentimiento de los demás, actos materiales, etc. Luego ningún condómino puede exigir la entrega del título de propiedad, sin el consentimiento de los demás—art. 2680, *ibid*.

27—Véase: verb. *Posesión*, núm. 23.

28—Véase: *Remate judicial*, núm. 32.

29—Véase: *Posesión judicial*, núm. 11.

30—Véase: *Remate judicial*, núm. 33.



hechas en remate judicial, solo es pertinente cuando los títulos adolezcan de algún vicio insubsanable en breve tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 293, Ser. 4^a.

31. **Título de propiedad**—Ante dos títulos que tienen por origen un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior, si en él espresa que no le queda más terreno y señala linderos existentes, aun cuando se haya fijado dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, página 404, Ser. 4^a.

Título de propiedad—Véase: *Comprador*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núms. 2 y 3—*Escritura*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 3—*Costas*, núm. 34—*Información supletoria*, núms. 1, 6 y 8—*Informaciones*, núm. 1—*Título habilitante*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Posesión*, núm. 4—*Posesión treintanaria*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 13, 16 y 19—*Nulidad de un título*, núms. 1 y siguientes—*Reivindicación*, núm. 18.

Título propio—Véase: *Posesión cuarentenaria*, núm. 1.

1^a. **Título supletorio**—El reivindicante que ha intervenido en la formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las costas del juicio, por ser evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4^a.

Título supletorio—Véase: *Costas*, núm. 36—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1.

Título traslativo—Véase: *Posesión*, núm. 3.

Título universitario—Véase: *Servicios*, núm. 10.

Tomador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

Trabajos—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1—*Detalle*, núm. 1.

31—Véase: *Dimensión*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Reivindicante*, núm. 3.



1ª. Tradición—La escritura pública, como título traslativo del dominio, no basta para exigir la posesión; debe gestionarse previamente la entrega de la cosa por medio de la tradición.—Jur. Civ., tom. 5, pag. 180, Ser. 3ª.

2. Tradición—Material, el vendedor está obligado a hacerla del inmueble vendido, sin que sea bastante que se declare desposeído en el instrumento de venta.—Jur. Civ., tom. 9, pag. 112, Serie 4ª.

Tradición—Véase: *Tercero*, núm. 2—*Acción reivindicatoria*, núm. 1.

1. Traductor—Inscripciones en la matrícula durante el mes de Mayo de 1890.—Jur. Civ., tom. 5, pag. 258, Serie 3ª; durante Abril de 1890, tom. 4, pag. 258, Ser. 3ª; durante Agosto de 1891, tom. 5, pag. 425, Ser. 4ª; durante Nov. del mismo año, tom. 9, pag. 48, Ser. 4ª; durante Enero de 1892, tom. 9, pag. 152, Ser. 4ª; durante Feb. del mismo año, tom. 9, pag. 275, Ser. 4ª.

Trámites—Véase: *Instrumento público*, núm. 1.

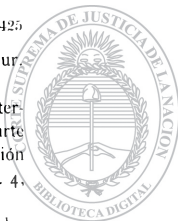
Tranways—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 63, 70 y 71—*Interdicto de recobrar*, núm. 12—*Sentencia*, número 10.

1ª. Transacción—Las transacciones sobre derechos no

1ª—Véase: verb. *Posesión*, núm. 3.

2—Art. 2609 del Cód. Civ. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Comprador*, núm. 6, cuya nota trata el caso con precisión.

1ª—La transacción no tiene por nuestro Cód. Civ. forma determinada, ni necesita tampoco la aprobación judicial sino cuando se refiere á derechos desde ya litigiosos por existir sobre ellos un juicio contencioso ó contradictorio; lo que no sucedía en el caso presente, porque cuando se verificó la transacción no se había deducido acción alguna, que por otra parte, que siendo resistida hiciese litigiosa la cuestión sometida á transacción. Dicha transacción, por tanto, no requiere en manera alguna para su validez, la aprobación del juez, ni éste tampoco está obligado á interponer su autoridad.



litigiosos, no deben ser aprobados por los jueces.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 51, Ser. 3^a.

2. **Transacción**—Cuando la ley requiere para determinados actos, la solemnidad de la escritura pública, surten los mismos efectos y tiene igual fuerza la presentación de la transacción al Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

3. **Transacción**—La transacción ó desistimiento de las partes, no hace caducar la jurisdicción del juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3^a.

4. **Transacción**—El juez que la aprobó es el único competente para entender en su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 231, Ser. 3^a.

5. **Transacción**—El Juzgado no puede negar medidas tendentes al cumplimiento de una transacción cuya aprobación no le ha sido pedida, por lo que está inhabilitado de declarar su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 5, página 234, Ser. 4^a.

6. **Transacción**—Sobre derechos litigiosos, que no es presentada al juez para su aprobación, no obliga á las partes que hasta el momento de ser presentada pueden negarse á su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 92. Serie 4^a.

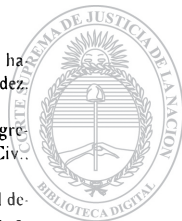
7. **Transacción**—Reconocida la existencia y autenticidad de la transacción, las partes están obligadas á su

2—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 2.

4—En derecho se equipara la sentencia con la transacción, siendo el juez que la dictó el único competente para hacerla cumplir. Si sobrevienen cuestiones en la ejecución de la transacción, es el juez que la aprobó el único competente para entender en ellas. De otra manera tendríamos que de un pleito podrían resultar muchos, lo que no conviene en manera alguna á la causa pública ni á los interesados.

6—Art. 838 del Cód. Civ.



cumplimiento y no procede la nulidad siempre que se hayan llenado los requisitos que la ley exige para su validez.

—Jur. Civ., tom. 4, pág. 191, Ser. 4^a.

8. **Transacción**—Por cantidad indeterminada, debe agregarse un sello de diez pesos por cada foja.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 30, Ser. 4^a.

9. **Transacción**—Presentada al juez, no procede el desistimiento de lo en ella estipulado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 82, Ser. 4^a.

10. **Transacción**—La negativa á ratificar la firma de una transacción, no impide su aprobación—Jur. Civ., tom. 9, pág. 82, Ser. 4^a.

11. **Transacción**—No es necesaria la ratificación personal del interesado, si el apoderado tiene facultad de firmar transacciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Serie 4^a.

12. **Transacción**—Los fondos depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 311, Ser. 4^a.

Transacción—Véase: *Honorarios*, núm. 10— *Excepción de pago*, núm. 2.

Transferencia—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 3.

Traslación—Véase: *Domicilio*, núm. 2.

1. **Traslado**—Debe ser notificado personalmente ó por

8—Véase: verb. *Sellos*, núm. 2.

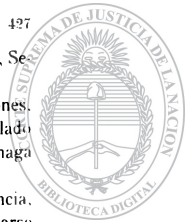
9—Art. 838 del Cód. Civ.

10—Véase: *Firma*, núm. 4.

11—Art. 1881, inc. 3^o del Cód. Civ.

12—Véase: verb. *Embargo*, núm. 20.

1—El Juez de 1^a Inst. dijo: «que en el caso actual no se trata de providencias cuya notificación debe hacerse por nota de Secretaría, pues un traslado importa reconocer un derecho en aquel á quien se confiere, del que no se puede privar sin saber si lo abandonaría ó no, para lo que



cédula, no basta la nota. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 21, Serie 3ª.

2. **Traslado** —El escrito en que se opone excepciones, no puede considerarse como contestación del traslado de la demanda, aun cuando explícitamente no se haga constar. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 4ª.

3. **Traslado** —La providencia de autos para sentencia, en las cuestiones de puro derecho, solo puede dictarse después del doble traslado. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 391, Ser. 4ª.

4. **Traslado** —El escrito evacuando el traslado, presentado después de vencido el término y acusada rebeldía, debe ser resuelto. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 20, Ser. 4ª.

5. **Traslado** —Procede la rebeldía si el demandado no ha contestado el traslado de la demanda después de terminado el artículo previo. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 14, Ser. 4ª.

6. **Traslado** —Debe correrse de todo documento acompañado. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 130, Ser. 4ª.

la notificación debe ser hecha por analogía, como lo establece el art. 33 del Cód. de Proc.» La Cámara confirmó el auto, fundándose en que «no resultando de autos, que el escrito haya sido presentado con las copias que determina la ley, y por sus fundamentos se confirma con costas el auto apelado». La confirmación del auto procedía, por cuanto el término del traslado no corre mientras no se acompañen las copias; pero que dicha providencia deba confirmarse en cuanto a sus fundamentos, es decir, porque «importa reconocer un derecho al que se confiere dicho traslado y porque debe aplicarse por analogía el art. 33 del Cód. de Proc.» es un absurdo, pues está la disposición terminante de dicho artículo, que enumera taxativamente las notificaciones que deben hacerse personalmente ó por cédula.

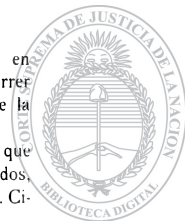
2.—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 3.

3.—Véase: verb. *Sentencia*, núm. 9.

4.—Véase: *Rebeldía*, núm. 15.

5.—Véase: verb. *Rebeldía*, núm. 18.

6.—Véase: verb. *Documento*, núm. 6.



7. **Traslado**—El término para evacuar el traslado en las cuestiones de puro derecho, solo empieza á correr desde que el expediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4ª.

8. **Traslado**—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado sobre los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos—Jur. Civil, tom. 10, pág. 296, Ser. 4ª.

9. **Traslado**—En el conferido con carácter de para mejor proveer, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 102, Ser. 4ª.

Traslado—Véase: *Término de la revocatoria*, núm. 1—*Término vencido*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 19—*Rebeldía*, núms. 1 y 9—*Escepciones*, núm. 8—*Inapelable*, núm. 8—*Escrito*, núm. 2.

1. **Trasmisión**—La reivindicación es improcedente si el demandado justifica hechos concurrentes que prueben la trasmisión legal del dominio á su favor.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 262, Ser. 4ª.

Trasmisión del dominio—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 27.

Tribunales—Véase: *Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Competencia*, núms. 3 y 4—*Condenación en costas*, número 1—*Contrato*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 5—*Expediente*, núm. 2—*Juicio sucesorio*, núm. 1—*Sociedad*, número 2—*Venta privada*, núm. 1—*Cesión de derechos*, número 3—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Juicio contencioso-administrativo*, núm. 2—*Jurisdicción testamentaria*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 14 y 15.

7—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 3.

8. Véase: verb. *Documento*, núm. 12.

1—Véase: verb. *Reivindicación*, núm. 23.



1ª. **Tribunal arbitral**—El demandado para la formación del Tribunal arbitral, debe contestar la demanda sin que previamente se establezcan las cuestiones que deben someterse á los árbitros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 44, Serie 4ª.

1ª. **Tribunales de la Capital**—Son competentes para entender en el juicio seguido por la Municipalidad contra las empresas de ferrocarriles por cobro de multas impuestas por transgresión á sus ordenanzas.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 410, Ser. 4ª.

2ª. **Tribunales de la Capital**—El conocimiento y resolución de los juicios sobre aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional, que se refieran única y exclusivamente al territorio de la Capital, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales de la misma.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 5, Ser. 4ª.

1ª. **Turno**—Fijando el de los Jueces de 1ª Instancia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 274, Ser. 4ª.

2ª. **Turno**—De los Jueces de 1ª Inst.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 334, Ser. 4ª.

1ª—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 11.

2ª—Véase: verb. *Juicios*, núm. 1.

1ª—En acuerdo extraordinario celebrado por la Cámara el 25 de Febrero de 1892 y con motivo de haberse aumentado el número de los jueces, se modificó el turno en la forma siguiente: Dres. Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro, Posse y Mendez Paz.

2ª—En Abril del mismo año 1892 se reformó el turno anterior, quedando éste establecido así: Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro y Posse y Mendez Paz. Como se ve, el único juez á quien se le cambió de ubicación fué al Dr. Mendez Paz, y de seguro que el Dr. Centeno que le sigue hoy en el turno, vería con placer un nuevo cambio, pues el Juez que sigue al Dr. Mendez Paz tiene un doble turno, á causa de las numerosas excusaciones y recusaciones de este magistrado, que ha convertido su Juzgado en un desierto.



1. **Tutela**—Corresponde a los parientes más próximos, justificar la idoneidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 97, Serie 4^a.

2. **Tutela**—Conferida por el padre en el testamento, debe ser confirmada por el Juez; la idoneidad del tutor solo debe justificarse si existe denuncia de incapacidad por parte legítima.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 71, Ser. 4^a.

3. **Tutela**—Legítima, la renuncia a la tutela legítima, puede ser retractada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 226, Serie 4^a.

4. **Tutela**—Las cuestiones sobre pérdida ó restricción de la patria potestad, no pueden ser deducidas por extraños que reclamen la tutela.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 70, Ser. 4^a.

1—Arts. 390 y 391 del Cód. Civ.

2—El art. 388 del Cód. Civ., prescribe que: la tutela dada por los padres, debe ser confirmada por el Juez si hubiese sido legalmente dada y entonces se discernirá el cargo de tutor nombrado. Esta disposición ha sido inspirada en nuestras antiguas leyes, que menos rigurosas que las actuales, no exigían la confirmación judicial respecto de la tutela dada por los padres legítimos sino solo respecto de la constituida por la madre natural.—Leyes 3^a, 6^a y 8^a, tít. 16, Part. 6^a.—Las palabras, «si hubiese sido legalmente dada», que usa el codificador, se refieren incuestionablemente a la forma de la institución y no a las calidades de la persona, no siendo caso de argumentar con el texto de la Part. 6^a, porque ella regía exclusivamente para la tutela de la madre y por cuanto la conferida por el padre legítimo, no requería el trámite previo de la confirmación. Teniendo por otra parte, la tutela testamentaria su fundamento en la patria potestad, la medida indicada por el juez aparecía tanto más improcedente cuanto que dejándose librada a la apreciación judicial las condiciones de idoneidad del tutor, podría con ello lesionarse la autoridad paterna ejercitada precisamente en uno de los actos más solemnes de la vida civil. Esta inquisición únicamente podría autorizarse cuando la incapacidad del guardador fuera notoria y llegase a conocimiento del juez de la tutela por gestiones del Ministerio Público ó de los parientes del incapaz.

4—Véase: verb. *Patria potestad*, núm. 4.



5. **Tutela**—Debe aprobarse la rendición de cuentas de la tutela después de discutidas y resueltas las observaciones opuestas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

6. **Tutela**—La de los menores, corresponde á la abuela y solo por causas graves á juicio de los Tribunales puede ser privada de ese derecho.—Jur. Civ., tom. 9, página 236, Ser. 4^a.

Tutela—Véase: *Enemistad*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 23—*Tutor*, núm. 13.

1^a. **Tutela dativa**—No existiendo incompatibilidad en el padrastro para desempeñar la tutela dativa de los hijos de su esposa, habidos en el primer matrimonio, los jueces pueden discernirle el cargo siempre que no exista causa justificada que lo inhabilite.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 3^a.

1^b. **Tutor**—Administrador, está facultado, sin autorización judicial, para hacer aquellos gastos urgentes de reparación, que sean necesarios para la conservación de los bienes de sus pupilos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 305, Serie 3^a.

2. **Tutor**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3^a.

3. **Tutor**—El tutor está obligado á rendir cuenta documentada de los bienes del pupilo y en caso no lo verifique, debe abonar á éste el saldo, dentro la suma que

5—Véase: verb. *Rendición de cuentas*, núm. 29.

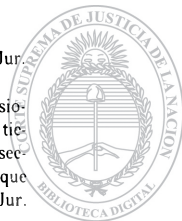
6—Véase: verb. *Abuela*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Padrastro*, núm. 1.

1^b—Art. 443, inc. 3^o del Cód. Civ.

2—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 2.

3—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 8.



para el juramento estimatorio le fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 54, Ser. 3^a.

4. **Tutor**—Cualesquiera que hayan sido las omisiones en que haya incurrido el tutor, el menor solo tiene acción contra él pero no contra los terceros poseedores de los bienes adquiridos con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 3^a.

5. **Tutor**—Está obligado á la rendición de cuentas, pero puede cobrar al pupilo los gastos verificados, que deberán ser fijados equitativamente por el Juzgado si no hubiesen sido autorizados con la debida antelación. Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Ser. 4^a.

6. **Tutor**—El auto que nombra tutor á los menores es irrecurrible para éstos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 391, Ser. 4^a.

7. **Tutor**—El tutor de los menores que por representación forman parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la sociedad tiene su representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 395, Ser. 4^a.

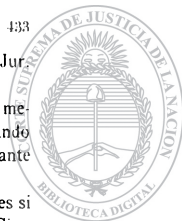
8. **Tutor**—Administrador, solo puede cobrar comisión

4—Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

6—Los menores de edad están impedidos de comparecer en juicio, por carecer de la capacidad necesaria, y por consiguiente, no pueden proponer el nombramiento de la persona que debe desempeñar la tutela. Esta resolución fué confirmada por la mayoría de la Cámara. La minoría consideró que esta providencia no puede menos que causar gravamen irreparable por cuanto deniega la facultad de observar el nombramiento de tutor. Esta resolución no consagra la buena doctrina ni está de acuerdo con la jurisprudencia, como se puede ver en otros casos resueltos por la Cámara.

7—Véase: verb. *Personería*, núm. 12.

8—El art. 451 del Cód. Civ. dice, que el tutor percibirá por sus cuidados y trabajos la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor.



sobre el haber líquido que corresponda al pupilo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 4^a.

9. Tutor—El juez que haya proveído de tutor al menor debe continuar conociendo en el juicio, aun cuando con anterioridad se haya solicitado el nombramiento ante otro Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 427, Ser. 4^a.

10. Tutor—Debe proveerse de tutor á los menores si existe oposición de intereses con el padre.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 351, Ser. 4^a.

11. Tutor—Su nombramiento es facultativo del Juzgado si no existe ninguna de las personas designadas por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 75, Ser. 4^a.

12. Tutor—Debe rendir cuenta de su administración, siendo responsable de las sumas cuya inversión no justificó.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 208, Ser. 4^a.

13. Tutor—Puede, durante el ejercicio de la tutela, presentar rendición de cuentas por periodos determinados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 28, Ser. 4^a.

Tutor—Véase: *Costas*, núm. 6—*Pensión alimenticia*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 23.

1. Tutor especial—No procede el nombramiento de tutor especial al menor, en el incidente sobre regulación de honorarios á cargo de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 3^a.

9—La petición de provisión de tutor se presentó con anterioridad á un juez, pero después se solicitó la misma medida por otra persona y ante otro juzgado. Este último proveyó primero al nombramiento y la Cámara declaró que la prioridad del nombramiento era título suficiente para conocer en el asunto con preferencia al otro.

10—Art. 397, inc. 1º del Cód. Civ.

11—Art. 392 del Cód. Civ.

12—Arts. 460 y 461 del Cód. Civ.

13—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 23.

1—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 8.



2. **Tutor especial** —Para que proceda el nombramiento de tutor especial, el Juzgado debe determinar expresamente en qué consiste la oposición de intereses entre padre é hijos. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 367, Ser. 4^a.

3. **Tutor especial** —Para que proceda el nombramiento de tutor especial, es indispensable que exista oposición de intereses entre padres é hijos. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 92, Ser. 4^a.

4. **Tutor especial** —El nombramiento de tutor especial, solo procede cuando existe manifiesta oposición de intereses entre el padre y los menores. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 366, Ser. 4^a.

5. **Tutor especial** —Debe nombrársele al menor que tenga interés como heredero en el juicio sobre rendición de cuentas. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 431, Ser. 4^a.

Tutor especial —Véase: *Paternidad*, núm. 1 —*Paternidad legítima*, núm. 2 —*Rendición de cuentas*, núm. 25 —*Cuenta particionaria*, núm. 3 —*Cuota alimenticia*, núm. 1.

Turno —Véase: *Espediente*, núm. 4.

2 —Muerto el padre de los menores, y practicada la cuenta particionaria entre los hijos y la esposa sobreviviente, el juez nombró tutor especial para que examinara la cuenta particionaria; la Cámara revocó el auto teniendo en cuenta la jurisprudencia por ella sentada.

3 —La Cámara dijo, que solo procedía el nombramiento de tutor especial, cuando conste algún hecho que demuestre la efectiva oposición de intereses entre padres é hijos, ya sea que conste de autos ó de denuncias formales.

4 —El nombramiento fué hecho por el Juez de 1^a Inst., en un juicio de rendición de cuentas de la viuda del causante, al solo efecto de que examinara dicha cuenta. La Cámara revocó el auto diciendo, que no procede sino en los casos en que expresamente se manifiesta la oposición de intereses entre los padres y sus hijos menores, y que este no era el caso en el presente.

5 —Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 25.



1ª. **Ubicación**—No puede ser aprobada la mensura y ubicación, si se opone parte legítima, que justifica que la operación lesiona derechos adquiridos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 187, Ser. 3ª.

Ubicación—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 4—*Reivindicación*, núm. 18—*Nulidad de una escritura*, número 5—*Remate judicial*, núm. 23.

Universalidad—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1.

Uso—Véase: *Fianza*, núm. 2.

2. **Uso regular**—Para que proceda la acción de daños y perjuicios del propietario contra el locatario por los deterioros, debe justificarse que son mayores que los que impone el uso regular de la cosa locada, é intencionales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 3ª.

Usufructo—Véase: *Donación*, núm. 1.

1ª. **Usufructuario**—El padre usufructuario de los bienes de los menores, no puede cargar á éstos los gastos de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Serie 4ª.

1ª—Véase: verb. *Mensura*, núm. 1.

2—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18.

1ª—Véase: *Bienes de menores*, núm. 6.

Utilidad — Véase: *Contrato rescindido*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 3—*Cesión*, núm. 2—*Intereses*, núm. 2—*Corredor*, núm. 2.

Utilidad pública—Véase: *Indemnización*, núm. 3.





Vacante—Véase: *Herencia*, núm. 3.

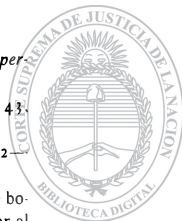
Validez—Véase: *Actos*, núm. 1—*Acto lícito*, núm. 1—*Escritura pública*, núms. 10, 12 y 13—*Contrato bilateral*, núm. 1—*Contrato privado*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núms. 2, 3 y 5—*Condición resolutoria*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 3 y 4—*Transacción*, número 5—*Documento privado*, núm. 1—*Donación*, núm. 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2—*Dominio*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 12—*Testamento*, núm. 3—*Testigos*, núm. 6—*Escritura de venta*, núm. 1—*Nulidad de un testamento*, núms. 2 y 3—

Valor—Véase: *Indemnización*, núms. 2 y 3—*Legatario*, núm. 2—*Embargo*, núm. 16—*Daños y perjuicios*, número 3—*Estampilla*, núm. 2.

Valor equivalente—Véase: *Capellanía*, núm. 3.

Valor íntegro—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85.

Valor legal—Véase: *Calumnia*, núm. 1—*Bienes testamentarios*, núm. 3—*Contrato bilateral*, núm. 1—*Acto simulado*, núm. 1.



Vecino—Véase: *Testamentaria*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 111.

Vencido—Véase: *Costas*, núms. 24, 28, 39, 40, 42, 43, 44, 56 y 57—*Acción reivindicatoria*, núm. 2.

Vencimiento de término—Véase: *Escrito*, núms. 1 y 2—*Contrato de arrendamiento*, núms. 20 y 21.

1. **Vendedor**—Cuyo título consiste en un simple boleto de compraventa, no puede obligar al comprador al cumplimiento del contrato, siempre que haya vendido como cosa propia perteneciendo el inmueble á un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 3ª.

2. **Vendedor**—Reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista á quien correspondía la demasía, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de suma alguna.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201, Ser. 3ª.

3. **Vendedor**—Está obligado á hacer tradición material del inmueble vendido, sin que sea bastante que se declare desposeído en el instrumento de venta.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 112, Ser. 4ª.

Vendedor—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 2, 3, 5, 9, 12, 14 y 20—*Boleto de compraventa*, núms. 1, 4, 5, 6, 32 y 34—*Cláusula penal*, núm. 1—*Comisión*, números 1 y 3—*Posesión*, núm. 7—*Comprador*, núms. 1 y 3—*Remate judicial*, núm. 1—*Comprador judicial*, núm. 2—*Acreedor hipotecario*, núm. 3—*Dimensión*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 2—*Pacto comisorio*, núms. 1 y 8—*Seña*, núm. 1—*Posesión al comprador*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núm. 12—*Evicción*, núm. 1.

1—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Precio*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Tradición*, núm. 2.



1. Venia— Los jueces pueden concederla á la mujer

1.—Una mujer casada se presentó solicitando ser autorizada para promover un pleito concerniente á sus derechos, al cual se opuso su marido y el Juzgado no hizo lugar á la solicitud, fundándose en que con arreglo á las disposiciones de la ley de matrimonio civil, carece de facultad para conceder la indicada autorización contra la voluntad del marido. El Fiscal de la Cámara Dr. Cortés pidió su confirmación diciendo que: efectivamente el estudio de las disposiciones de la indicada ley, concerniente al caso, viene á revelar una grave modificación introducida en la jurisprudencia en cuanto á las reglas que rigen las relaciones civiles entre los esposos. Tanto por la antigua legislación española, como por el Cód. Civ., si bien la mujer casada no podía presentarse en juicio ni contratar, sino con licencia de su marido, sin embargo, cuando éste se la negase injustamente, tratándose de una cosa necesaria ó útil á la mujer, acuerdan el recurso de ocurrir al juez, para que, tomando conocimiento del asunto, le concediese la autorización que el marido le negaba injustamente. Nada más bien fundada y razonable que esta disposición que, limitando el poder del marido, venia á evitar el que éste dejere en arbitrio y despótico, sin que jamás se hubiese hecho objeción de ningún género contra una disposición tal, arreglada á la equidad, al orden público y á las buenas costumbres. A pesar de todo, ella no subsiste, después de la citada Ley de Matrimonio Civil, que ha venido, como es fácil demostrarlo, comparando su texto en cuanto hace relación á la materia, con las prescripciones correlativas al Cód. Civ. En éste, el art. 188, declara: que «la mujer no puede estar en juicio por sí, ni por procurador sin licencia especial del marido, dada por escrito ó supliendo esta licencia el juez del domicilio, con escepción, etc.» Ahora bien, la cláusula trascripta y subrayada en que se equiparaba la venia supletoria del juez, en los actos que la mujer casada hubiese de celebrar, á la licencia que debía acordarle el marido, ha sido suprimida en el art. 54 de la Ley de matrimonio Civil correspondiente al precitado art. 188 del Código. Dicho art. 54 dice: «la mujer no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido dada por escrito, con escepción, etc.» donde se vé haber desaparecido, como lo deja notado el Fiscal, la facultad por virtud de la cual el juez podría suplir la autorización del marido, generalmente en los casos en que dicha licencia era necesaria. Esa supresión no puede atribuirse en manera alguna á descuido ó inadvertencia, porque encontramos la misma corrección al art. 194 del Código concerniente á la materia: este artículo establecía que «los Tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la falta de autorización del marido cuando éste se hallase ausente ó impedido para darla ó la



casada, para comparecer en juicio, no obstante la oposición, rehusase sin motivo fundado y ella fuese necesaria y útil á la mujer ó al matrimonio.» Entretanto en el art. 60 de la precitada Ley de Matrimonio Civil, correlativo del 194 del Cód., se suprime la parte en que se facultaba al juez para suplir con su autorización la licencia que el marido rehusase indebida é injustamente á la mujer. Dicho art. 60 de la indicada ley, se encuentra concebido en estos términos: «Los Tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido cuando éste se hallare ausente ó impedido para darla, y en los casos especiales previstos por este Cód.» Donde se nota también haberse suprimido la cláusula que en general facultaba al juez para conceder á la mujer la licencia que el marido le negase á pesar de serle necesaria ó útil. En lugar de la indicada cláusula suprimida en el art. 60, se agrega esta otra: «y en los casos especiales previstos por este Cód.,» con referencia, sin duda, á los del art. 135 sobre los actos que los menores casados no pueden ejecutar. Así, pues, por la Ley de Matrimonio Civil, á diferencia de lo establecido en el Cód., el juez solo puede autorizar á la mujer para presentarse en juicio ó para la celebración de un acto jurídico, en los casos de demencia ó ausencia del marido cuyo paradero se ignora, y en los demás en que especialmente se encuentre determinado así. Mas como en dicha Ley no se encuentra disposición alguna especial por la cual pueda también el juez suplir la licencia del marido cuando á pesar de haberla rehusado éste positivamente, ella resultase sinembargo útil y provechosa á la mujer, con razón puede un juez declarar no hallarse facultado para conceder la autorización que se le pide y que ha rehusado el marido, porque de las disposiciones mencionadas resulta que hoy los Tribunales no pueden conceder la autorización negada por el marido. Es verdad que en el art. 63 de la misma precitada Ley se habla de actos y contratos de la mujer autorizada por el juez contra la voluntad del marido, suponiéndosles válidos y determinándose sus efectos jurídicos, más esto no puede explicarse sino por descuido en la sanción de los arts. del Cód., que forman el título del matrimonio. Es evidente, que atendidas las reformas que se acaban de hacer notar, introducidas en artículos anteriores, debió modificarse igualmente y en sentido análogo el 197 del Cód.—y 60 de la Ley de Matrimonio Civil—puesto que según sus disposiciones ya no pueden existir legalmente ó considerarse válidos los contratos que celebre la mujer, autorizada solamente por el juez contra la voluntad del marido, desde que le quita al juez la facultad de conferir tal autorización. Por estas consideraciones, el Fiscal, encontrando arreglada la resolución de que se le dió vista y por la que el juez *a quo* había negado autorizar á la esposa



sición del marido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 34, Ser. 3.^a contra la voluntad del marido, para promover un juicio, opinó que debía confirmarse aquella. La Cámara revocó la resolución de 1.^a Inst. contra el dictamen del Dr. Cortés, fundándose en lo siguiente: Que el señor Fiscal, se ha pronunciado por la confirmación de la sentencia encontrando, como el inferior, que los arts. 54 y 60 de la Ley de Matrimonio Civil han suprimido la cláusula de sus correlativos 188 y 194 del Código Civil, en virtud de los cuales el juez era llamado espresamente a suplir la venia marital cuando el esposo la rehusase infundadamente, y que esa supresión importa tal modificación en las relaciones civiles de los esposos, que los jueces carecen ya de la facultad que le acordaban el Cód. y las antiguas leyes españolas de limitar el poder del marido, evitando que éste degenerase en arbitrario y despótico. Siento disenter del parecer del señor Fiscal, cuya opinión es tan autorizadora, pero creo que por esta vez no ha estado en lo justo ni en lo legal, y que aunque no nos acompañe con sus luces, el Tribunal tiene espedito el camino de obviar los inconvenientes que él mismo ha señalado evitando a la jurisprudencia un paso atrás, en lo que es hoy una verdadera conquista de la legislación moderna. ¿Cómo hacer descender á la mujer del grado en que la ha colocado el legislador en su hogar? Acaso un derecho que, como lo observa el mismo señor Fiscal, le viene acordado desde las leyes españolas, puede serle arrebatado sin un precepto espreso, pero ni siquiera con un antecedente de esos que suele suministrar la elaboración de una ley, en la presentación del proyecto ó en su discusión. ¿Se concibe, por otra parte, que la ley que debe ser congruente en sus disposiciones, hubiera estatuido, como lo hace la Ley de Matrimonio en su art. 63, sobre los efectos de los actos autorizados por el juez contra la voluntad del marido, si en tal caso de que el juez supla la venia marital por la negativa del esposo le estuviera vedado por derogación de los arts. 188 y 194 del Cód.? Y en medio de los progresos de nuestra legislación, de que nos vanagloriamos con razón, ante la expectativa diseñada por el Codificador Argentino, de que la madre de familia sea puesta en los países cultos á la par del padre en sus relaciones de derecho. ¿Cuándo vendríamos á sancionar que cuando el marido niega la venia á la mujer, por más que á ella le sea conveniente y aun necesaria, podrá negarla despóticamente, cometiendo un verdadero abuso de fuerza en presencia de la justicia impacible? Bastaría presentar esta cuestión bajo el lado del absurdo. Pero tampoco lo creo necesario como no tengo para que prevalecer tampoco de los antecedentes de la legislación española que tengo recordados, ni de la misma suposición del art. 63 de que pueda haber actos de la mujer practicados con autori-



2. **Venia**—La esposa puede otorgar, sin autorización judicial contra la voluntad del marido. La resolución estrictamente legal, la encuentro en otra parte, dada la conveniencia ó necesidad de tener que comparecer en juicio una mujer casada, el legislador ha debido encontrarse en presencia de dos casos: que el marido esté ausente ó impedido ó que esté presente; claro, es que en el primer caso, dada la necesidad de la audiencia del esposo, sea por el respeto debido al vínculo ó por ser él el administrador de los bienes, sería necesario un juicio en que la ausencia ó el impedimento tuviera subsanación para que el pronunciamiento del magistrado recayera en un expediente debidamente instruido; pero el legislador no lo quiso así, entendió que esto pudiera ser largo y dispendioso, y desde entonces, dando al juez facultades administrativas, diré así, la autorizó clara y categóricamente para que en los casos de la hipótesis pudiera suplir sin forma de juicio la venia marital; clara y categóricamente, digo, porque solo así por medio de un precepto, podía el juez verse investido de una facultad que de otro modo carecería. Pero en el segundo caso, estando presente el marido, la cuestión varía de aspecto. Pedida una venia y negada por el que puede oponerse á ella, que está presente, no se trata ya para el juez de facultades; él se encuentra, por el contrario, ante una solución de derechos que el orden público le exige dirimir, para que nadie se haga justicia por mano propia. Y así la autorización, que en el primer caso

Sigue en la pag. 443

2.—La mujer casada, en tesis general, no puede presentarse en juicio por sí ni por procurador, sin licencia especial del marido dada por escrito—art. 54 de la Ley de Matrimonio.—Pero la mujer casada, cuando el marido está ausente puede ser autorizada por los Tribunales para gestionar sus derechos, porque sería cosa sin razón que soportara perjuicios en sus intereses por la circunstancia eventual de la ausencia del marido. Los arts. 59 y 60 de la ley citada consagran ese derecho para la mujer. Ahora bien; si puede presentarse pidiendo venia supletoria, ¿hay algún fundamento jurídico ó racional para exigir que esa gestión la lleve a efecto personalmente? Evidentemente que nó, y si la representación en juicio es una facultad acordada á todos los que tienen que hacer valer un derecho, mal podía privarse de ella á la mujer, cuando se trata de actos para los cuales la ley la autoriza. La presentación en juicio por procurador no responde solo á proporcionar comodidad á los litigantes, tiene también en mira allanar dificultades que serían insuperables en ciertos casos.—Una enfermedad no debe obstar al ejercicio de un derecho y ella anularía el de la mujer para pedir venia si no se la admitiera á impetrarla por medio de un representante.



del esposo ni del juez, poder especial para presentarse era necesaria, en el segundo constituiría una redundancia si hubiera de exigirse respecto de su existencia un precepto del legislador. Si hubiera de apurar la argumentación recordaría que el proyecto de ley de Matrimonio presentado por el Poder Ejecutivo, después de establecer los casos y modos de suplir la venia marital, igual á la del proyecto mencionado, decía en el art. 72: «Los actos y contratos de la mujer casada no autorizados por el marido ni por el juez, obligan solamente,» etc.: en tanto que el art. 63 de la ley vigente, declara que «los actos y contratos de la mujer no autorizados por el marido y autorizados por el juez, contra la voluntad del marido obligan solamente». etc. La primera redacción se explicaría por lo escrito donde solo existiera la venia del marido ó la judicial en casos determinados, previstos por la ley, en ninguno de los cuales se encuentra el que motiva el pleito *sub-judice*, pero la 2ª, la definitiva, la constituye el texto de la ley actual, no legisla para los casos en que la venia del esposo existe, ni para aquellos en que por artículos anteriores el juez suple la autorización marital ya por ausencia ó impedimento, que son los únicos que quedaban detallados—art. 59 y á que refiere el art. 54 anterior—sino para la hipótesis de actos de la mujer autorizada por el juez contra la voluntad del marido, lo que presupone forzosamente la existencia, á menos de aceptar la existencia de una sanción legal, sin caso á que aplicarla, ó más claro, de penas sin delito. Y si se dijera que este precepto es debido al error de haberse copiado el art. 197 del Cód. sin advertir que quedaba eliminada de la ley la venia judicial contra la voluntad del marido, diría por mi parte que tal olvido no tiene cabida, habiéndose sancionado la Ley de Matrimonio bajo la base del proyecto del Poder Ejecutivo, cuyo art. 72, para ser congruente con los anteriores, había suprimido ya las palabras «contra la voluntad del marido». Si se insiste con el propósito del legislador, de suprimir la venia del juez en presencia de la negativa del marido por lo que resulta de la supresión del último inciso del art. 194 del Cód., recordaré á mi vez que entre nosotros las leyes son preceptos categóricos del Congreso, que no pueden ser suplidos por el silencio de las ramas en que se divide el Poder Ejecutivo, y precisando más de lo que se ha dicho, ni explicita ni implícitamente ningún artículo de nuestro Cód. puede tener fuerza de ley en derecho civil. De modo que si el juez tiene por regla general el derecho, ó más bien dicho, el deber de resolver las contiendas entre partes, no puede negarse la facultad para dar venia á la mujer casada si le es útil ó necesario á ella ó al matrimonio, y el esposo se la negara sin motivo fundado. Pero hay más, y es que abundando en

judicialmente pidiendo venia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 38 Ser. 4^a.

3. Venia—Supletoria, para justificar la ausencia de mis investigaciones, dada la gravedad del caso, encuentro que los antecedentes de la sanción de la ley de que me vengo ocupando, favorece completamente mis conclusiones, demostrándose con ellas no ya solo que no ha existido olvido, no ya solo que no se ha tenido bien presente el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que además que los arts. 69 y 72 fuesen reformados en la discusión ante el Senado, precisamente para que quedara comprendido en la venia supletoria del juez el caso en que el marido negara autorización á su mujer para estar en juicio; por dos veces aparece claro y terminante el propósito de la reforma del proyecto del Ejecutivo: primero á propósito del art. 69 y luego con motivo de la discusión sobre el 72, que son respectivamente el 60 y 63 actuales. Decía á este respecto el miembro informante de la Comisión, Dr. Derqui: «En este capítulo no proponemos, sino dos modificaciones, una referente á los casos en que los Tribunales puedan suplir la autorización que la mujer necesita del marido y otra respecto á los bienes que quedan obligados por actos ó contratos de la mujer no autorizada por el marido ó autorizada por el juez, contra la voluntad de aquél. La disposición del art. 69 del proyecto, limita la facultad de los Tribunales para suplir la autorización del marido en los casos de ausencia ó impedimento de éste, y pensando que debiendo los Tribunales proceder con conocimiento de causa al suplir la autorización, no hay razón bastante para no hacer extensiva esa facultad al caso en que el marido la rehusase sin motivo fundado y la autorización fuese necesaria ó útil á la mujer ó á la sociedad conyugal. El art. 72 del proyecto, consecuente con disposiciones anteriores, al determinar los bienes que quedan obligados por los actos y contratos de la mujer, solo se refiere á aquellos circunscritos sin autorización del marido ni del juez; pero como proponemos que éste puede suplir la autorización del marido en el caso de que él la rehusa sin motivo fundado, creemos, bajo que la base de este informe, quedó sancionada sin oposición la actual Ley de Matrimonio tal cual queda antedicho, sin privar á la mujer casada de una facultad de que solo pudo privarla un precepto de la ley. Permitásemse concluir diciendo con Proudhon, que el marido no es sino el delegado de la ley en el uso del poder de que ella se ha revestido; el poder público que absorbe todos los poderes particulares puede con mayor razón suplirlos.

3- El Fiscal dijo:—La ley no prescribe que haya de citarse por





esposo á los efectos de conceder venia supletoria basta la justificación por testigos, no es necesaria la publicación de edictos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 13, Ser. 4^a.

4. **Venia**—El esposo puede revocar la venia conferida á la mujer para administrar sus bienes particulares.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 49, Ser. 4^a.

Venia—Véase: *Posiciones*, núm. 1—*Jurisdicción federal*, núm. 2—*Nulidad de la ejecución*, núms. 6 y 7.

1. **Venta**—La inhibición no basta para privar la venta de un inmueble, puesto que el comprador responde de las obligaciones que sobre él pesaban.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 250, Ser. 3^a.

2. **Venta**—La nulidad de la venta no puede ser demandada por el causante exclusivo del vicio que alega como fundamento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 3^a.

edictos al marido cuando la mujer pide venia supletoria para presentarse en juicio á causa de la ausencia de aquél. Tan eficaz prueba de la ausencia en este caso, puede ser la declaración de testigos como el hecho negativo de la falta de comparecencia á la citación por edictos. El art. 60 de la Ley de Matrimonio, solo dispone que los Tribunales con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido cuando éste se hallase ausente.

4.—Nuestro Cód. Civ. tanto en su título «del Matrimonio» como en el «de la sociedad conyugal» ha acordado al marido, entre múltiples facultades, la de administrar todos los bienes del matrimonio, desde que este principia hasta que se disuelve, haciendo al mismo tiempo expresa determinación de los casos en que esa administración se da ó pasa á la mujer casada. También ha preceptuado categóricamente, sobre todo en el cap. 8º de la Ley de Matrimonio Civil vigente, que la esposa no puede estar en juicio sin la venia del marido, prescribiendo á la vez los casos en que no la necesita y estableciendo igualmente las circunstancias en que el juez puede ó debe suplirla. El art. 61 de la citada ley de Matrimonio preceptúa que el marido puede revocar á su árbitro la autorización que en el ejercicio de la administración de los bienes de la sociedad conyugal hubiera conferido á la mujer.

1.—Véase: verb. *Inhibición*, núm. 1.

2.—Véase: *Nulidad de una venta*, núm. 1.



3. **Venta** --La venta hecha por un condómino de una parte determinada sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.--Jur. Civ., tom. 7, página 419, Ser. 3^a.

4. **Venta** --La modificación del contrato de venta con pacto de retroventa, permitiendo que el vendedor lleve a cabo actos de propietario después del vencimiento del término, transforma el contrato y permite al deudor hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad—Jur. Civ., tom. 5, pág. 55, Ser. 4^a.

5^a. **Venta**—Aprobada judicialmente la venta, no puede admitirse el desistimiento del comprador—Jur. Civ., tomo 5, pág. 409, Ser. 4^a.

5^b. **Venta**--El vencimiento del término estipulado para que el vendedor haga uso del derecho de recuperar la propiedad, convierte la venta en irrevocable.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 4^a.

6. **Venta** --Procede la de los bienes muebles y semovientes del concurso, que el Síndico no puede vigilar ni administrar personalmente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 20, Ser. 4^a.

7. **Venta** --La suspensión de pagos del establecimiento bancario en que el comprador en remate judicial tenía sus fondos, no es motivo para dejar sin efecto la venta. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 4^a.

8. **Venta** El anuncio en venta del inmueble y aun el remate público, no es prueba de tener la posesión material de la cosa. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4^a.

3—Véase: *Nulidad de una venta*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 21.

7--Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 20.

8-- Véase: verb. *Posesión material*, núm. 1.



9.—**Venta**.—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio, solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4ª.

10. **Venta**.—No procede la venta de la cosa común si admite cómoda división en especie y no existe la conformidad de los herederos. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 4ª.

Venta.—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 1.—*Comprador*, núm. 2.—*Avisos*, núm. 1.—*Comisión*, núms. 3, 4, 5 y 6.—*Simulación*, núm. 6.—*Corredor*, núm. 3.—*Escritura pública*, núms. 12 y 13.—*Desistimiento*, núm. 4.—*Rematador*, núm. 2.—*Remate judicial*, núms. 1, 2, 21 y 28.—*Juicio ordinario*, núm. 1.—*Boleto de compraventa*, núm. 31.—*Bienes de menores*, núm. 5.—*Menores*, núm. 1.—*Tradición*, núm. 2.—*Título habilitante*, núm. 1.—*Contrato de compraventa*, núms. 19 y 21.—*Bienes del concurso*, núm. 1.—*Bienes raíces*, núm. 1.—*Escritura de venta*, núm. 1.—*Mandatario*, núm. 12.—*Título de propiedad*, núm. 18 y 20.—*Inscripción*, núm. 1.

1. **Venta ad corpus**.—Se conceptúa venta ad-corpus y no admensuram, la que se hace por un precio determinado por el conjunto, aun cuando se fije la medida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3ª.

Venta de específicos.—Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, núm. 1.

Venta estrajudicial.—Véase: *Bienes de menores*, núm. 4.

Venta forzosa.—Véase: *Condominio*, núm. 2.—*Contrato de arrendamiento*, núm. 2.

Venta judicial.—Véase: *Título de propiedad*, núm. 20.—*Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

9.—Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

10.—Véase: *División en especie*, núm. 1.



Venta con pacto de retroventa—Véase: *Contrato de mutuo*, núm. 1.

1ª. **Venta privada**—Siempre que á juicio de los Tribunales sea conveniente, debe permitirse la venta privada de bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 1º, página 366, Ser. 3ª.

2. **Venta privada**—Siempre que á juicio de los Tribunales sea conveniente, debe permitirse la venta privada de bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 1º, página 366, Ser. 3ª.

Venta privada—Véase: *Bienes de menores*, núm. 2 y 3 — *Compraventa*, núm. 4.

1. **Venta en remate**—Ordenada en remate la venta del bien embargado, los terceros que crean afectados sus derechos, deben concurrir ante el Juez de la ejecución á deducir sus acciones.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 87, Ser. 4ª.

Verbalmente—Véase: *Contratos*, núm. 1.

1ª. **Verificación de créditos**—Los acreedores pueden recusar al Juez del concurso en el incidente sobre verificación de su crédito.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 357, Ser. 4ª.

Via pública—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 6.

Via de tramway—Véase: *Interdicto de recobrar*, número 12.

Vicio insubsanable—Véase: *Remate judicial*, núm. 33.

Vicios—Véase: *Escritura*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núms. 1 y 3 — *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Nulidad de venta*, núm. 1.

1. **Victima**—La culpa de la víctima no exime á las

1ª—Art. 442 del Cód. Civ.

1ª—Véase verb. *Recusación*, núm. 6.

1—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 46.



empresas de la responsabilidad por los daños y perjuicios en que incurren por la omisión de aquellas medidas que pudieran haber evitado el accidente. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 289, Ser. 3ª.

2ª. Víctima—La omisión por parte de la víctima de aquellas medidas precaucionales que pudieran evitar el accidente, arrojan sobre ella la culpa y exime de responsabilidad á la empresa por los daños y perjuicios demandados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 3ª.

3. Víctima—Para que proceda la indemnización civil que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificarse previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3ª.

Víctima—Véase: *Agravio moral*, núm. 1. *Daños y perjuicios*, núms. 5, 33 y 79.

Vida en común—Véase: *Concubinato*, núm. 1.

Vida licenciosa —Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

Vigésimo—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 16 y 17.

Vigilancia—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 5.

Vínculo—Véase: *Divorcio*, núms. 3 y 8. *Pensión alimenticia* núm. 1.

1. Violación—Existe siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce al domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

2ª. Violación—El damnificado por la violación de domicilio, tiene personería para gestionar la indemniza-

2ª—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 51.

3—Véase verb. *Delito*, núm. 2.

1—Véase verb. *Allanamiento*, núm. 1.

2ª—Véase verb. *Domicilio*, núm. 3.



ción, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Violación Véase: *Declaraciones*, núm. 1 — *Depósito*, núm. 1.

1ª. **Violencia**—Importa violencia el desalojo por orden judicial sin audiencia ni sustanciación del ocupante ni del propietario. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 246, Ser. 3ª.

Visitas médicas Véase: *Honorarios*, núm. 16.

Viuda— Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 3.

1ª. **Viudo**—El Juez de la testamentaria no está obligado a entender en todos los juicios que sigan contra el viudo por obligaciones personales.—Jur. Civ., tom. 3, página 16, Ser. 4ª.

Viudo—Véase: *Recusación*, núm. 6— *Acreedores del viudo*, núms. 1 y 2 — *Bienes propios*, núm. 1 — *Sociedad conyugal*, núm. 1.

1ª. **Viveres**—El proveedor de un cuerpo del Ejército Nacional, aun cuando haya recibido órdenes directas de su jefe, carece de derecho para hacerlo personalmente responsable del importe de los viveres suministrados.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 3ª.

Voluntad—Véase: *Escritura pública*, núm. 2 — *Locación de servicios*, núm. 1 — *Posesión judicial*, núm. 3 — *Contrato*, núm. 4 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.

1ª. —De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Cámara en la mayoría de los casos resueltos. Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Despajo* núm. 4; tom. 5ª, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 9.

1ª. —Siendo la acción personal contra el viudo, el fallecimiento de la esposa no cambia la naturaleza de la obligación ni la de la acción deducida.

1ª. —Véase: verb. *Proveedor*, núm. 1.

[Handwritten signature]

